américa latina: historia de medio siglo



1- américa del sur

2ª edición

instituto de investigaciones sociales de la unam

historia

COLABORADORES:

VOLUMEN 1

ARGENTINA: MARCOS KAPLAN

BOLIVIA: RENÉ ZAVALETA MERCADO

BRASIL: VANIA BAMBIRRA Y THEOTONIO DOS SANTOS

COLOMBIA: ANTONIO GARCÍA

CHILE: BELARMINO ELGUETA B. Y ALEJANDRO CHELÉN R.

ECUADOR: AGUSTÍN CUEVA

PARAGUAY: OMAR DÍAZ DE ARCE

PERÚ: JULIO COTLER

URUGUAY: GERÓNIMO DE SIERRA

VENEZUELA: D. F. MAZA ZAVALA

VOLUMEN 2

COSTA RICA: JOSÉ LUIS VEGA CARBALLO

CUBA: JULIO LE RIVEREND

DOMINICANA: JOSÉ ISRAEL CUELLO, ROBERTO CASSÁ Y RUBÉN SILIÉ

EL SALVADOR: MARIO SALAZAR VALIENTE

GUATEMALA: EDELBERTO TORRES-RIVAS

HAITÍ: GÉRARD PIERRE-CHARLES

HONDURAS: GUILLERMO MOLINA CHOCANO

MÉXICO: JULIO LABASTIDA MARTÍN DEL CAMPO Y RICARDO POZAS HORCASITAS

NICARAGUA: AMARU BARAHONA PORTOCARRERO

PANAMÁ: RICAURTE SOLER MENDIZÁBAL

PUERTO RICO: MANUEL MALDONADO-DENIS

AMÉRICA LATINA: HISTORIA DE MEDIO SIGLO

*

1. AMÉRICA DEL SUR

coordinación:

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA





siglo veintiuno editores, sa
CERRO DEL AGUA 248, MEXICO 20, D.F.

siglo veintiuno de españa editores, sa
C/PLAZA 5, MADRID 33, ESPAÑA

siglo veintiuno argentina editores, sa

siglo veintiuno de colombia, ltda
AV. 3a. 17-73 PRIMER PISO, BOGOTA, D.E. COLOMBIA



edición al cuidado de carmen valcarce
portada de anhelo hernández

primera edición, 1977
segunda edición, 1979

ISBN 968-23-0279-X (obra completa)
ISBN 968-23-0280-3 (volumen 1)

la presente obra se publica por acuerdo especial
con el instituto de investigaciones sociales
de la universidad nacional autónoma de méxico

ÍNDICE

PALABRAS PRELIMINARES

Aunque América Latina tenga un pasado parecido y muchos rasgos comunes de lengua, religión, sistemas de dominación social y nacional, aunque todos los países que la integran hayan luchado contra enemigos comunes desde el colonialismo ibérico hasta el imperialismo norteamericano, la estructura de la sociedad y el estado en cada país presentan características y especificidades que justifican plenamente el análisis histórico de cada uno de ellos. Incluso en regiones relativamente más homogéneas como el "cono sur" o el "Caribe" se advierten, de un país a otro, diferencias significativas en la configuración del estado y la sociedad. Estas diferencias son las que precisamente dificultan la realización de un proyecto latinoamericano conjunto en la lucha por la liberación.

En todo caso, afinidades y diferencias exigen un estudio a la vez general y específico de las características de cada estado. Las variedades de América Latina no sólo cuentan para comprender y actuar en la escena política de cada país. Constituyen la base de una historia que siendo nacional conforme se desarrolle será, cada vez más, latinoamericana e internacional.

La obra que hoy publicamos parte de la necesidad de conocer la historia de cada país para actuar en cada país. Y une a todos los países en un esfuerzo conjunto con la certeza de que en medio de sus diferencias más significativas nuestros pueblos encontrarán los rasgos comunes que les permitan actuar en forma cada vez más unitaria. Como trabajo pionero sobre la historia actual, la obra contribuirá a alentar nuevos estudios históricos contemporáneos, nuevas monografías y síntesis acerca de las luchas de liberación en América Latina. Su carácter concreto, su sentido del tiempo y de la vida social, sin duda presionará por salir de ese torpe debate en que se busca definir el "ser" de América Latina, como mero modo de producción, o el "ser" de los latinoamericanos —personas y grupos— como entes y sustancias que escapando a las relaciones históricas concretas carecen de realidad y de memoria.

Los colaboradores de la obra tienen formaciones y posiciones ideológicas distintas. Algunos de ellos son historiadores, otros son politólogos y sociólogos. Todos han logrado escribir la primera historia de la América Latina actual que realiza un grupo de estudiosos. Por lo común los historiadores no se ocupan de la historia inmediata. Los sociólogos y los politólogos, tampoco. Unos se quedan tradicionalmente en el pasado lejano. Otros, consideran que su tarea no es la del historiador. El vacío ha quedado en parte cubierto. Y será cubierto cada vez más en los próximos años.

En cuanto a la ideología de los autores, cabe decir que todos practican o buscan practicar un análisis de clases. Al invitarlos a colaborar no pretendimos nunca que se ajustaran a una sola línea de pensamiento y lucha. Ni discutir si les era aplicable o no el calificativo de marxistas. Son hombres progresistas e intelectuales del más alto nivel, algunos con todos los títulos culturales y revolucionarios. Los invitamos

con un espíritu universitario muy característico de América Latina y de sus hombres progresistas. No aspirábamos a más ni podíamos pretenderlo.

El extraordinario trabajo ha sido posible por el entusiasmo, la preparación, la inteligencia y el desinterés de sus autores. Se hizo con recursos mínimos y bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A todos los autores, a muchos otros colaboradores y a Siglo XXI Editores, que ha hecho posible la publicación de este trabajo, les manifestamos nuestro agradecimiento.

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA

Ciudad Universitaria, 1977

50 AÑOS DE HISTORIA ARGENTINA (1925-1975): EL LABERINTO DE LA FRUSTRACIÓN

MARCOS KAPLAN

I. EL PROBLEMA Y LAS HIPÓTESIS

La interpretación del proceso histórico argentino en los últimos cincuenta años, de 1925 a 1975, ha constituido un desafío para investigadores y políticos, ideólogos y dirigentes sociales. Un interrogante sobre todo sigue en pie, ¿Por qué y cómo el logro relativamente temprano de niveles e indicadores considerables de crecimiento económico, avance social, madurez cultural, diversidad de actividades ideológicas y civicopartidistas, prestigio e influencia internacionales, se ha contrapuesto con la dificultad —la aparente imposibilidad incluso— de acceder a formas cada vez más progresivas de desarrollo político?

Desde 1930 hasta hoy, Argentina alterna —con algo así como la fatal regularidad de ciertos fenómenos naturales— las formas de autoritarismo y de regresión con breves interludios de democracia liberal restringida y de relativa apertura social y cultural. A ello se han ido agregando cada vez más las expresiones de algo muy parecido a una subterránea vocación por la entropía y la autodestrucción, sobre todo a través de la generalización y la intensificación de estilos y modalidades de violencia despiadada que expresan y refuerzan las tendencias regresivas prevalecientes en todos los aspectos de la vida nacional, y que internan ya al país en las convulsiones de la guerra civil. La gravedad de la crisis es tanto mayor cuanto menos se perciben los actores y los lineamientos de lo que pudiera llegar a ser una alternativa histórica superadora. Las tentativas de interpretación no han faltado, pero ninguna ha resultado satisfactoria, y tras todas ellas se perfila el trasfondo de una realidad oscura que se sustrae al esclarecimiento y deja vislumbrar incertidumbres y peligros de todo tipo.

El gran enigma permanece planteado y sin descifrar y el país, como un Edipo fallido, no halla respuestas al interrogante de la esfinge que amenaza sancionarlo con la muerte por su carencia. Lo que sigue es una primera tentativa de afrontar el interrogante, desde una perspectiva histórica y sociopolítica, a partir de algunas hipótesis centrales y a través de análisis todavía demasiado generales y provisorios.

El modelo tradicional de economía y crecimiento, de sociedad y de estado, de cuyo despliegue surge la Argentina contemporánea, crea los actores, las exigencias y los prerrequisitos de un progreso social y político cada vez más significativo. Sin embargo, en la propia trama del modelo y de sus modalidades de aplicación se generan y mantienen al mismo tiempo los desestímulos y los obstáculos, los bloqueos y las propensiones al fracaso de aquella posibilidad. En la sociedad argentina

y en sus principales actores se difunde y se mantiene la ilusión de un avance ilimitado —que cada uno define y busca a su manera—, y al mismo tiempo se perpetúan y se refuerzan los elementos y mecanismos de un trasfondo conservador que se instala y opera abierta o secretamente en el sistema y en todos sus componentes, en sus beneficiarios como en sus víctimas.

Los grandes desafíos para el diseño y la implementación de otros proyectos históricos, progresivos o radicalmente trasformadores, en parte no existen, en parte no son percibidos o admitidos por los actores potenciales de cambio, o bien son refractados y deformados por una falsa conciencia de aquéllos y se traducen en estrategias y formas de acción erróneas y fallidas.

Una diversidad de factores y circunstancias son responsables del optimismo generalizado y de la incapacidad final para realizarlo en términos concretamente históricos.

Argentina se inserta de modo fácil y rápido en el sistema internacional y en la órbita de las grandes potencias (Gran Bretaña y Europa occidental primero, Estados Unidos luego), y ello parece prometer la continuidad indefinida del crecimiento económico, la prosperidad nacional y el bienestar gradualmente generalizado, por estímulos y bajo controles fundamentalmente externos. La real dependencia hacia el exterior y sus consecuencias limitativas y negativas se imponen y aparecen bajo formas más disimuladas y menos irritativas que en otros países latinoamericanos. Prometen además generar ventajas, alternativas atrayentes, expectativas favorables, en parte actuales y en parte aparentes o de posible realización futura, para grupos considerables de población. El imperialismo no tiende a ser percibido como presencia dominante o puramente negativa, o llega incluso a ser aceptado como inevitable y eventualmente benéfico. De allí derivan durante largo tiempo la debilidad de la cuestión nacional, y la timidez y restricciones de las actitudes y tendencias antimperialistas. En un sentido similar operan la inexistencia o la escasa importancia de las competencias, las tensiones y los conflictos con países latinoamericanos limítrofes.

Desde su constitución definitiva como nación y estado, Argentina disfruta (y padece) las implicaciones y consecuencias de una *conjunción de circunstancias virtualmente favorables*. Tiene su sede en un vasto territorio con privilegiadas condiciones naturales y una infinitud aparente de recursos y posibilidades. La temprana estabilización del crecimiento poblacional y la falta de una perspectiva de explosión demográfica no amenazan las estructuras y marcos de la sociedad, que pueden crecer y modificarse de manera relativamente lenta y ordenada, sin peligros serios de tensiones violentas y conflictos destructivos.

No existen graves problemas étnicos, y se atenúan provisoriamente los de tipo regional. A ello contribuyen ante todo el exterminio sistemático de los remanentes indígenas en la segunda mitad del siglo XIX, la escasa importancia histórica de la esclavitud negra; la decisiva incidencia de la inmigración europea, rápidamente fusionada con el viejo tronco criollo. La tendencia creciente a la rápida urbanización determina la pérdida de la importancia relativa de la población y la sociedad rurales; la hegemonía de Buenos Aires como metrópoli interna, centro de la privilegiada región litoral pampeana y de una red de grandes y medianas ciudades, y polo de crecimiento de una modernización que irradia sobre el interior,

subordina y modifica a éste en función de sus intereses. El secular conflicto regional entre Buenos Aires y el resto del país se debilita parcial y provisoriamente pero durante un período histórico prolongado. La integración nacional cristaliza y prevalece sobre las tendencias y conflictos de tipo étnico, regional y social. La heterogeneidad estructural se reduce en grado relativamente alto si se compara Argentina con los otros países latinoamericanos. (En la misma etapa histórica sólo Uruguay y Chile se aproximan a la Argentina en este aspecto.)

Argentina disfruta además las ventajas de disponer de una población que va logrando altos niveles promedio en términos de potencial físico y mental; educación, información y desarrollo cultural; aptitud para el aprendizaje y el esfuerzo disciplinado y para las actividades artísticas, científicas y tecnológicas.

En comparación con otros países latinoamericanos, Argentina se va presentando cada vez más como una sociedad relativamente abierta, en función de una estratificación social flexible y de la existencia —en parte aparente y en parte real— de canales de movilidad social ascendente.

No es de extrañar entonces que a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX prevalezca en el país un clima colectivo de orgullo nacional y de optimismo histórico, de confiada expectativa en un futuro de país cada vez más desarrollado y hasta de gran potencia internacional, y de ascenso ininterrumpido para grupos e individuos bien dotados de talentos varios, de energía y de ambición. La confianza en el progreso colectivo e individual se presenta sin embargo, más como consecuencia de una predestinación (divina, natural o histórica) que de una aptitud general para el enfrentamiento de desafíos y el despliegue obstinado y eficaz de esfuerzos y sacrificios.

A partir de las mismas condiciones señaladas, la esperanza en el ascenso rápido y en el progreso sin límites coexiste con la existencia y la operación de limitaciones para la realización de aquéllos. El sistema crea y refuerza aspiraciones y expectativas, demandas y presiones participacionistas y redistributivas, y al mismo tiempo las restringe, las frustra y las conduce a fracasos parciales o totales. Estimula los descontentos y las exigencias movilizadoras, pero lleva unos y otras sólo de este lado del umbral más allá del cual podrían confluir en proyectos históricos de clara identidad, gran envergadura e indudable eficacia para la trasformación estructural del país y su paso a formas económicas y sociopolíticas radicalmente diferentes.

Cada etapa de crisis nacional y de progreso potencial o efectivo corresponde a la emergencia de uno o varios protagonistas colectivos (clases, fracciones, instituciones, y sus coaliciones), que entran en escena y asumen en ella un papel indiscutiblemente significativo, pero que no terminan de perfilar ni de asumir su propia personalidad social, ni logran formular e implementar su proyecto histórico específico, hacerlo adoptar por otras clases y grupos, imponer a éstas su hegemonía ni incorporarlas en alianzas operativas y eficaces. Cada una de estas etapas —a las que luego se vuelve específicamente— se traduce en el logro de algunos objetivos de los principales protagonistas; produce cambios importantes; deja huellas más o menos perdurables en el sistema y se proyecta en las fases siguientes; pero también desemboca en fracasos para los grupos más o menos identificados con el proyecto respectivo y para el país en su conjunto.

Cerrada cada experiencia, ya sea inmediatamente o tras un interludio más o me-

nos prolongado, nuevos actores entran en escena, y el proceso se reinicia, con sus nuevas modalidades y matices, sus virtualidades y perspectivas específicas, pero bajo el impacto de las limitaciones insuperadas y de los fracasos anteriores, para desembocar tarde o temprano en resultados *grosso modo* similares.

Mirado en perspectiva histórica, el proceso argentino de los últimos 50 años aparece como un drama de equívocos y desencuentros, un laberinto de la frustración donde se suceden flujos y reflujos, progresiones y regresiones, reformas insuficientes y restauraciones incompletas, que en conjunto rememoran las imágenes mitológicas de la roca de Sísifo y del eterno retorno.

Para las clases, grupos, instituciones e individuos que se incorporan e implican —en diferentes grados de compromiso— en las distintas experiencias, y para la Argentina toda, el costo (económico, social, cultural, psicológico, político, internacional), ha sido altísimo. El medio siglo bajo examen se presenta en el balance de hoy como un cementerio de tentativas frustradas y de ilusiones perdidas. En función de ello se crean y se acumulan sentimientos, actitudes y comportamientos de fracaso, desencanto, impotencia, escepticismo, apatía y cinismo. Se reducen también la propensión al logro y al ejercicio de las aptitudes colectivas e individuales para la lucidez y el rigor, la imaginación y el valor, la crítica y la autocrítica sin concesiones, la iniciativa y la creatividad. Se generan y se refuerzan las inclinaciones a la irracionalidad, al escapismo, a la inautenticidad, a las soluciones imaginarias o delirantes, a la destructividad y a la autodestrucción.

Finalmente, sin ánimo de incurrir en el optimismo compulsivo ni en el triunfalismo mitológico, con sus secuelas de ceguera y evasión ante los fracasos y los peligros, no puede ignorarse que Argentina ha tendido de todos modos a conservar y exhibir, aun en los peores momentos de su trayectoria contemporánea, una reserva de vitalidad, energía, perseverancia y capacidad regenerativa. La consideración de esta característica contribuye a enriquecer la perspectiva y el diagnóstico; impide caer en un pesimismo total; ayuda a preparar y a prepararse para una posible crisis de replanteo y de resurrección nacionales.

A partir de las hipótesis esbozadas se examinarán las principales etapas del desarrollo histórico argentino en el último medio siglo.

II. LOS DOS PRIMEROS GOBIERNOS RADICALES. (1916-1930)

Desde el último cuarto del siglo XIX se ha ido estructurando y consolidando en la Argentina el régimen oligárquico, alianza de intereses entre los grupos superiores de terratenientes, comerciantes, financistas, dirigentes políticos y militares, y el capital extranjero, primordialmente británico. La alianza controla los más importantes sectores y resortes de la economía nacional; confiere a ésta sus caracteres de subordinación y especialización deformante; detenta una situación de monopolio en la vida social, cultural y política; cierra el camino del poder a toda clase, grupo o partido que no se identifique con el juego oligárquico-imperialista.

Este proceso vulnera diversos intereses y multiplica los descontentos y las resis-

tencias de muy distintos orígenes, clasistas, sectoriales y regionales, sobre todo los siguientes:

i] Terratenientes y comerciantes grandes y medianos desplazados de los círculos oligárquicos centrales; grupos afectados por un descenso que determinan las vicisitudes económicas y políticas y su propia inadecuación a nuevas condiciones; grupos beneficiados por el crecimiento económico, pero marginados de las posiciones superiores de estatus, prestigio y poder.

ii] Nuevas capas medias, rurales y urbanas, creadas o expandidas por el crecimiento dependiente, en las que se funden el tronco criollo y el aporte inmigratorio: pequeños comerciantes, artesanos, empresarios de servicios; burguesía manufacturera (Buenos Aires, La Plata, Rosario y otras ciudades); profesionales liberales, intelectuales, estudiantes; empleados públicos y privados; militares.

iii] Pequeños y medianos estancieros, chacareros, arrendatarios y colonos.

iv] Trabajadores urbanos, peones de estancia y de chacra.

v] Hijos de inmigrantes, de primera y segunda generación argentina, que buscan su plena asimilación y su participación irrestricta en la vida nacional.

vi] Sectores y grupos regionales y provinciales, del litoral y de la zona pampeana (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos), y de centros urbanos del interior, recientemente incorporados al proceso de expansión y de modernización, con nuevo sentido de pertenencia y lealtad nacionales, y deseosos de una mayor ingerencia en las decisiones políticas y económicas.

Estos sectores en confluencia diferentes por su origen, su situación socioeconómica, sus motivaciones y perspectivas, presentan una doble coincidencia básica, negativa una y positiva la otra.

Desde el punto de vista negativo, el frente opositor a la oligarquía es heterogéneo, y los sectores y grupos que lo componen se benefician con la prosperidad determinada hasta entonces por el crecimiento dependiente, y sienten que el progreso económico es posible y probable. Coinciden por lo tanto en un consenso favorable hacia el sistema, y en una indiferencia ante todo lo que pueda implicar cambios estructurales. Sus aspiraciones tienden a las reformas moderadas, de sentido igualitario y redistribuidor, favorables al ascenso, al enriquecimiento y a la seguridad. Ello es obvio en los grupos terratenientes y mercantiles, y en la pequeña burguesía dependiente y burocrática. En cuanto a la burguesía manufacturera, es incipiente, débil, compuesta sobre todo por extranjeros no integrados, aislada y hostilizada por las clases altas, las capas medias y los trabajadores, incapaz de articularse orgánicamente, de formular un programa propio y alternativo de desarrollo, y de pretender un liderazgo sobre otros grupos. El proletariado es de formación reciente, minoritario, aislado, con fuerte predominio de extranjeros, carente de ideología coherente, de programa realista y de dirección unificada y eficaz. Su acción enfatiza más las reivindicaciones económicas que las políticas. Su agitación, sin embargo, tiende a intensificarse, y gana la simpatía de políticos e intelectuales de capas medias que solidarizan con aquélla y la convierten en elemento crítico de la oligarquía. El campesinado, sobre todo sus sectores de arrendatarios y colonos, pasa por períodos de agitación y lucha, reducidos empero a la satisfacción de aspiraciones vinculadas con la rebaja de arrendamientos y costos, la mejora de precios y su pago en oro, las mayores posibilidades de acceso a la tierra. El campesi-

nado acata la legalidad básica del sistema; su agitación no cristaliza en programas de reforma agraria, y desemboca en actitudes políticas de indiferencia y conservatismo.

Desde el punto de vista positivo, las clases y grupos que se analiza coinciden en exigir la liquidación de la marginalidad y la extensión de la participación política, en distinto grado según los grupos: como electores, por parte de las masas populares; como electores y como funcionarios gubernamentales, las capas medias; como titulares de altos cargos políticos y administrativos, y como usufructuarios de los resortes de poder económico y social, las capas altas desplazadas y postergadas. La exigencia de participación ampliada puede incorporar en su dinámica, con las limitaciones señaladas, algunas formulaciones críticas sobre la estructura y funcionamiento del sistema, y sobre sus deformaciones y corruptelas.

La Unión Cívica Radical expresa, aglutina y canaliza la protesta antioligárquica y antimperialista de todos los sectores y elementos vulnerados y desplazados por el régimen, y las tensiones y conflictos que no hallan salida a través de los mecanismos y canales tradicionales. De su carácter policlasista provienen las características fundamentales del radicalismo, su fuerza y sus limitaciones. Ante todo, la heterogénea composición social, que exige la percepción, la expresión y la satisfacción de las necesidades y tendencias de todos los grupos que pretende representar, y que impide y desaconseja por consiguiente las definiciones demasiado concretas y tajantes. Ello trae a su vez necesariamente aparejadas la ambigüedad ideológica y la indigencia programática.

La ideología del radicalismo se configura a la vez como expresión de sus bases sociales, y como reacción contra sus enemigos y competidores. Combina elementos políticos, místicos, metafísicos y morales. Enfatiza las nociones de la democracia política liberal, sobre todo la necesidad de volver vigente la soberanía popular; el nacionalismo; el papel predominante del estado. El nacionalismo radical refleja los avances en la integración y en la centralización del país y del sistema político-institucional; la presencia incrementada de diversas clases y grupos regionales; la reacción contra el espíritu dependiente y cosmopolita de la oligarquía y contra la penetración imperialista; la difusión en casi todos los estratos sociales de una xenofobia antinmigratoria. El estado es visualizado como encarnación del pueblo y de la nacionalidad, y como aparato autónomo de las clases, respecto de las cuales debe operar como árbitro superior. Por reacción contra la oligarquía conservadora, el radicalismo rechaza muchos de sus valores y de sus elementos programáticos. Valoriza la tradición y subestima la modernización. Se muestra indiferente a los problemas del crecimiento económico, actitud reforzada por la falta o la debilidad de agentes dinámicos de trasformación en el país y en el propio radicalismo. Reivindica el catolicismo, y es hostil a la laicización. Subvalora o rechaza todo lo foráneo, y los elementos y pautas que provienen del exterior. En competencia con las corrientes anarquistas y socialistas, desconfía del sindicalismo obrero; y se despreocupa relativamente de los problemas y derechos sociales.

El programa del radicalismo constituye la continuidad y propugna la realización efectiva del proceso democrático-burgués a la vez iniciado y limitado por la oligarquía. Se propone la democratización del estado, aunque sin modificaciones estructurales. El poder político debe expresar la voluntad popular. El sistema insti-

tucional debe ser respetado, a través del cumplimiento de la Constitución nacional, y de la instauración del sufragio universal, libre, secreto y puro. Las reivindicaciones democráticas del radicalismo incluyen también la honestidad administrativa y la moralidad pública, como repudio al materialismo y sensualismo de la oligarquía (corrupción, especulación, negociados, consumo conspicuo), y como legitimación de la propia pretensión al poder. Las autonomías provinciales y municipales deben ser respetadas y protegidas del centralismo impuesto por la oligarquía, satisfaciéndose con esta formulación, a la vez, las exigencias de los sectores regionales y populares, y los requisitos de una auténtica formulación de la voluntad popular en todos sus niveles.

El programa radical mantiene la indefinición ante los problemas del desarrollo nacional, carencia explicable de un partido que expresa a clases y grupos que otorgan su consenso al sistema vigente, y a las que la prosperidad lleva a destacar más la redistribución de la riqueza existente que la producción de riqueza nueva.

A falta de voluntad para atacar de raíz los problemas esenciales de la sociedad argentina, de ideología definida y de posturas y soluciones concretas, la mística partidaria y el personalismo caudillesco deben operar como aglutinantes de un movimiento perpetuamente amenazado por contradicciones y desgarramientos interiores. El radicalismo es presentado, no como un partido más, sino como un movimiento que conjuga a la mayoría de los grupos nacionales, pero situado por encima de clases e intereses particulares, encarnación y realización de la nacionalidad misma. Su acción política aparece como cruzada de la "Causa" contra el "Régimen", a cuyo frente se coloca Hipólito Irigoyen, apóstol de rasgos casi sobrenaturales. Dotado el radicalismo de virtudes inmanentes, su llegada al poder implicaría necesariamente el comienzo de la "Reparación", es decir, la superación total de la viciosa estructura creada y mantenida por la oligarquía.

De estas características se deduce necesariamente la imposibilidad de que el radicalismo cumpla una tarea de trasformación profunda. En su seno y en su dirección pesan demasiado sectores conservadores y vacilantes, sobre los cuales se ejercerán siempre las presiones reaccionarias, y que determinan algunos rasgos esenciales de su fisonomía y de su acción política: limitación estratégica; empirismo de corto alcance; temor y desconfianza hacia la movilización de masas populares; tendencia a la adaptación a las fuerzas y estructuras sociales dominantes, y a la reforma superficial.

Pese a sus contradicciones e insuficiencias —o quizá a causa de ellas—, durante varios lustros el radicalismo puja persistentemente hacia el poder, y finalmente lo alcanza. Partido clásico o movimiento de características especiales, se organiza sobre bases y con estructuras y alcances ampliamente populares y nacionales, aunque ello sufra las limitaciones provenientes del policlasismo, del predominio de grupos sociales superiores, y de las condiciones de clandestinidad y conspiración. Se va convirtiendo así en la fuerza política más representativa, poderosa e influyente. Relega a posición secundaria a otros partidos opositores, el Socialista y el Demócrata Progresista, limitados por su restringida base social y regional, por su carácter elitista, y por el sentido de modernización europeizante que impregna sus ideologías, programas y modos de actuación. El radicalismo proclama la intransigencia frente a las reglas del juego político creadas por la oligarquía, y recurre a la crítica per-

manente del régimen, al rechazo de todo acuerdo, a la abstención electoral y a la insurrección armada (1890, 1893, 1905).

La acción política del radicalismo surge del desarrollo capitalista dependiente, de sus progresos y de sus contradicciones, pero se trasforma en la expresión y en la afirmación de cambios y tendencias que capta y formula mejor que nadie. Resultado y parte de las trasformaciones cumplidas por el régimen oligárquico, agrega lo que éste no quiere ni puede cumplir, el objetivo de una participación popular ampliada que extienda y refuerce las bases sociales y políticas del propio régimen. El radicalismo va ganando así el apoyo, la simpatía o la neutralidad expectante de grupos superiores, de las capas medias, de sectores campesinos y obreros, de funcionarios públicos y militares. Congrega a la mayoría de las fuerzas sociales en un gran movimiento político que aísla a la oligarquía, la debilita y termina por forzarla al alejamiento del poder gubernamental.

El triunfo del radicalismo termina por parecer inevitable a sus propios enemigos, e incluso se llega a aceptar tal perspectiva como medio de encauzar dentro del orden tradicional una marea social y política en ascenso que, de otro modo, podría desencadenar convulsiones revolucionarias de imprevisibles consecuencias, posibilidad que el caso mexicano revela significativamente. La oligarquía comienza a sentirse cuestionada y aislada dentro del país, al tiempo que se descompone, se debilita y escinde interiormente, pierde confianza en sí misma. Su configuración y su actuación como élite aristocrática, su rigidez y soberbia frente a las reivindicaciones y presiones ascendentes de sus sectores desplazados y de las capas medias y populares, sus abusos y despliegues de inmoralidad y corrupción, minan su prestigio, su autoridad y el consenso relativo de que gozara hasta entonces. El crecimiento económico no sigue progresando con el mismo ritmo sostenido. Los grupos que controlan las relaciones económicas externas le otorgan condiciones menos favorables de comercialización. Los precios de exportación y los términos del intercambio se deterioran, y con ellos la renta de la tierra. Las actividades ganaderas caen bajo el creciente dominio de los frigoríficos extranjeros. Sectores de la oligarquía comienzan a manifestar su inquietud ante la relación de dependencia y sus efectos negativos, y ven en un mayor grado de nacionalismo el modo de negociar en mejores condiciones con el imperialismo. En el seno de la clase dominante aparecen conflictos internos que la debilitan y desprestigian, y en virtud de los cuales las facciones buscan no infrecuentemente el apoyo radical contra las rivales. El imperialismo inglés dominante en el país percibe el debilitamiento de la oligarquía, el ascenso del radicalismo, la necesidad de un gobierno consolidado sobre bases políticas más amplias, que preserve la continuidad legal y las estructuras básicas del sistema, frente a la creciente irrupción de los Estados Unidos, y que enfrente los problemas emergentes del ya previsible conflicto con Alemania.

Algunos grupos y representantes de la oligarquía, perceptivos y oportunistas, captan la esencia de la cuestión. La heterogénea composición social del radicalismo, la existencia en su seno de sectores afines a los grupos gobernantes y de capas medias proclives al conformismo y al compromiso, las exigencias puramente formales de los dirigentes partidarios, el abandono de la insurgencia desde 1905: todo ello convence a los dirigentes más lúcidos del patriciado (Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña) que una transacción política mutuamente provechosa con el

principal partido opositor es no sólo necesaria sino también posible. Un primer intento busca el acuerdo entre la oligarquía y el radicalismo, que divida y desgaste al segundo, y amplíe y refuerce las bases de la primera. La intensidad de la inquietud popular y la intransigencia de Hipólito Irigoyen hacen fracasar la política del acuerdo formal, y obligan a remplazarla por la retirada estratégica. La oligarquía abandona el gobierno político; conserva intactos sus privilegios y fuentes de poder socioeconómicos; somete al radicalismo al desgaste de la responsabilidad estatal; descarga sobre él las tareas de reajuste y de freno y represión de los grupos más inquietos y amenazantes; gana tiempo hasta que las circunstancias le permitan recuperar el terreno abandonado.

Este proceso culmina con la reforma electoral de 1912, a partir de la cual se inician los triunfos radicales, que, pasando por la conquista de bancas parlamentarias y municipales y de gobiernos provinciales, colocan en 1916 a Hipólito Irigoyen en la presidencia de la República.

La llegada del radicalismo al gobierno constituye un considerable progreso. Refleja el ascenso y el fortalecimiento de nuevos grupos sociales, especialmente las capas medias criollo-inmigratorias, apoyadas y presionadas por sectores populares y obreros a los que se utiliza políticamente. Extiende la participación política. (El porcentaje de la población masculina adulta con derechos electorales sube del 20 al 60% entre 1912 y 1916). En la misma medida constituye una derrota política de la oligarquía, y ello, unido a las dislocaciones provocadas por la guerra y sus secuelas, atenúa parcial y transitoriamente la eficacia de la dominación imperialista.

Por otra parte, desde el momento mismo de su llegada al poder, el radicalismo desnuda las limitaciones fundamentales que frustrarán su acción renovadora. La relación de fuerzas se ha ido modificando, en contra de la oligarquía, que ha perdido confianza en sí misma y en su derecho divino al poder, y se ha desacreditado ante la opinión pública y ante las masas populares. Una mayoría significativa vota al radicalismo y recibe su triunfo con entusiasmo delirante. Sectores importantes que no han sufragado por el nuevo gobierno, adoptan no obstante hacia él una actitud de neutralidad benevolente. La mayoría del pueblo argentino espera en 1916 la "Reparación" prometida en lustros de abstención e insurgencia, y hubiera aprobado y sostenido una depuración revolucionaria de los elementos oligárquicos atrincherados en el Congreso, la administración y la justicia, e implicados en los delitos y corrupciones del régimen.

El radicalismo se ve frenado en 1916 por sus escrúpulos constitucionalistas, por el temor a un contragolpe oligárquico, por la resistencia de los elementos radicales anteriormente incorporados a funciones parlamentarias y ejecutivas, y por el temor a la movilización popular. No cumple la revolución política que se espera y se justifica de antemano. Respeta los regímenes provinciales y las investiduras legislativas y judiciales nacionales que han surgido de la violencia y de la corrupción abiertas. Legaliza así a la oligarquía, pretendiendo combatirla y superarla en los marcos de un régimen que aquélla estructuró a su imagen y semejanza.

Las consecuencias de esta legalización del régimen oligárquico son múltiples y de gran trascendencia. El nuevo gobierno revela, desde el comienzo mismo, su carácter contradictorio y vacilante. El ascenso de grupos sociales que encarama al

radicalismo en el poder no halla una conducción política adecuada para un verdadero progreso democrático y social. La oligarquía, amenazada sin ser destruida, sigue encastillada en el Parlamento (especialmente el Senado), en el control de resortes fundamentales de la administración, la justicia, las fuerzas armadas, la diplomacia, además de los que posee en la economía, la prensa, la educación y la manipulación cultural-ideológica. Desde estas bases obstaculiza y sabotea durante tres lustros, con eficacia y legalidad, todos los intentos progresistas de los gobiernos radicales, los ridiculiza y difama, mientras espera condiciones favorables para la restauración conservadora. El radicalismo debe gobernar con los instrumentos heredados de un estado liberal que se estructuró en condiciones y para finalidades diferentes. Debe remplazar la lucha por el compromiso. No puede cumplir la reparación integral prometida. Al frenarse el impulso ascendente de las masas y al claudicarse ante la oligarquía, se debilita a los elementos progresistas del radicalismo, fortaleciéndose automáticamente a sus sectores reaccionarios, que constituyen la correa de trasmisión de la oligarquía desplazada y del imperialismo. El golpe de septiembre de 1930 que derribará al radicalismo del poder está ya ínsito en la frustración de 1916.

En paradoja sólo aparente, el triunfo replantea y acentúa la dialéctica de los conflictos que la composición policlasista y la organización movimientista del radicalismo, y la prolongada lucha por el poder, habían atenuado o enmascarado. Las contradicciones se refuerzan y entrelazan, a la vez, por las realizaciones y por los fracasos del radicalismo.

Los gobiernos radicales, que se suceden desde 1916 hasta 1930, implican el logro de una mayor democratización política, y cambios cuantitativos y cualitativos en el funcionamiento del estado. La voluntad popular, pese a las limitaciones derivadas de una estructura socioeconómica que se mantiene básicamente intacta, puede expresarse ahora con mayores garantías de autenticidad formal. El estado es concebido en teoría como un ente metafísico, encarnación suprema del pueblo y de la nación, realizador de la idea ética. Sus funciones y proyecciones son ampliadas en considerable medida.

Al estado se atribuye, ante todo, la función de mediador en los conflictos entre las clases y grupos nacionales, y entre éstos y el país con las grandes potencias y los inversores extranjeros. Opera además como instrumento para extender y consolidar la posición de las capas medias, y para arrancar a la oligarquía y a los intereses foráneos, sin lucha frontal, por la presión y el compromiso, una mayor participación en los beneficios de la economía, de la sociedad y del poder. Todo ello implica naturalmente un mayor intervencionismo gubernamental en el juego de los intereses privados.

El arbitraje entre los grupos sociales se enlaza con el cumplimiento de una política redistributiva, posibilitada por la relativa prosperidad del período bélico y de la posguerra. Se legaliza el sindicalismo y se satisfacen algunas demandas obreras. La ocupación es incrementada y mantenida a través del aparato burocrático. Son extendidos los servicios públicos a cargo del estado. El presupuesto fiscal sube en un 80% entre 1918 y 1923.

Se acentúa el sentido de defensa del patrimonio nacional, por lo menos en la parte ya comprendida dentro del sector público (petróleo, ferrocarriles), y se

pretende una cierta regulación de los monopolios. A esta orientación responden los proyectos de creación de una marina mercante nacional (1916), de expropiación de buques de ultramar con matrícula argentina (1918), y de intervención estatal en el comercio exterior de cereales; proyectos todos que no prosperan en el Parlamento.

La política exterior se vuelve más independiente, incrementa su sentido nacional y su libertad de maniobra en las relaciones y negociaciones con las grandes potencias, como resultado de la base política ampliada y de la creciente rivalidad entre Gran Bretaña y los Estados Unidos por el control del país. Hipólito Irigoyen consigue mantener la neutralidad durante la primera guerra mundial, a pesar de las fuertes presiones externas e internas para que Argentina intervenga en el conflicto. Ordena a los representantes diplomáticos el retiro de la Liga de las Naciones, por no admitirse a Alemania ni reconocerse la igualdad de todos los países en la conducción del nuevo organismo. Hace alejar al país del sistema panamericano, y se niega en 1928 a firmar el pacto Kellog. Despliega una firme actitud ante las imposiciones del imperialismo norteamericano, y cierta simpatía hacia los países latinoamericanos agredidos por aquél. Intenta establecer relaciones comerciales con la Unión Soviética.

Junto con estos aspectos positivos, los gobiernos radicales mantienen básicamente intactas las estructuras socioeconómicas vigentes en el momento de llegar al poder. El sistema oligárquico imperialista es respetado y perpetuado. El radicalismo, en cuya dirección y composición social los representantes de intereses agropecuarios tienen considerable peso, respeta la constelación configurada por la gran propiedad agraria, la producción ganadera y cerealera, el ferrocarril y el frigorífico dominados por capitales ingleses y norteamericanos. El presidente Irigoyen resiste la sanción y la aplicación de la Ley Contractual Agraria, que tiende a regular los contratos de arrendamientos rurales. Otros proyectos de legislación protectora de colonos y arrendatarios naufragan en el Senado. La resistencia a la penetración imperialista parece más dirigida contra los Estados Unidos, en vías de intensificar su penetración en la Argentina (petróleo, automotores, industrias agropecuarias, comercialización), que hacia una Gran Bretaña secularmente implantada en el país. Las inversiones británicas evolucionan, de 1 860.7 millones de dólares en 1913, a 1 900 millones en 1918, y a 2 100 millones en 1926; las norteamericanas, de 40 millones, a 100 y a 600 millones en iguales años, aumentando así dos veces y media en la guerra mundial y sextuplicándose en los ocho años siguientes. Ambas potencias, sus grupos inversores y su diplomacia, toleran a los gobiernos radicales en tanto éstos se presentan a la vez como expresión y como mecanismo de contención de las masas populares.

El respeto a la oligarquía y al imperialismo implica el mantenimiento de los factores tradicionales de subordinación, atraso y deformación, y la no creación de condiciones favorables para la acumulación nacional de capitales y su aplicación a una estrategia de desarrollo. El radicalismo adopta de hecho, junto con una acción política de sesgo populista y redistribucionista, una línea económica liberal que sigue dando importancia a la producción agroexportadora y cuenta con los impuestos aduaneros como el recurso fiscal decisivo. Hacia la industria, sus actitudes y decisiones parecen combinar la indiferencia y la hostilidad, reflejo de la

participación e influencia reducidas de la burguesía manufacturera en su liderazgo y en sus bases. Carece de política industrial. Terminada la guerra de 1914, el gobierno radical no intenta proteger las manufacturas expandidas como consecuencia del conflicto bélico, y presenta un proyecto de ley que reduce los derechos de importación para productos industriales (1918-1919). La economía nacional crece de modo lento e irregular, por acción de los factores determinantes y condicionantes de operación tradicional, externos e internos, sobre los que el gobierno radical no opera ni a los cuales pretende controlar.

El proceso de modernización cumplido bajo los gobiernos radicales se limita así a la extensión de la participación popular, sin que ésta resulte definitivamente posibilitada y reforzada por un crecimiento independiente y autosostenido. El aumento de la participación, acompañado por una actitud redistribucionista, en condiciones de reducido crecimiento económico, replantea y agrava las tensiones y los conflictos de grupos que el radicalismo ha pretendido ignorar o superar bajo el signo de su pretensión integradora y totalizante. El problema de la distribución de un ingreso nacional que no crece al mismo tiempo que las expectativas acrecentadas y divergentes de las clases y grupos, se manifiesta no sólo en el nivel social sino también en el político, y tanto en la vida nacional global como en el seno del radicalismo. Evidencia clara de los límites que ese partido y su gobierno hallan rápidamente en su acción social y política, es su actitud ante los movimientos reivindicativos del proletariado y del campesinado, estimulados por la crisis de posguerra. El arbitraje paternalista y las concesiones mínimas hacia esas clases coexisten con la represión terrorista (Semana Trágica, enero de 1919; matanzas de la Patagonia, 1919-1921).

La oligarquía se reagrupa después de la derrota de 1916, unificada y movilizada por una ideología coherente, por la pérdida de posiciones, por el daño a sus intereses y el odio a todo lo que el radicalismo representa; y no tarda en pasar a la acción. Ésta combina el ataque frontal y el sabotaje sistemático a la acción del gobierno, con una tarea de disgregación interna del partido oficial, facilitada por el proceso abierto en su seno. Los grupos políticos oligárquicos buscan a la vez unificar el frente opositor y atraerse a elementos afines del propio radicalismo. Los miembros de la clase superior que se ubican entre los dirigentes y afiliados del radicalismo han visto colmadas sus aspiraciones con el triunfo electoral y con el control de altas posiciones gubernativas y partidarias. La intransigencia de aquéllos se debilita con la retirada estratégica de la oligarquía y sus maniobras envolventes. Las amenazas del movimiento obrero y campesino y de las nuevas tendencias ideológicas de avanzada, fortalecen los lazos clasistas por encima de límites políticos que tienden a borrarse. El acuerdo entre las tendencias conservadoras de políticos oligárquicos y radicales se va creando de modo natural y casi imperceptible. Las capas medias radicales se satisfacen con el aumento de sus posibilidades de ingreso, prestigio y participación, y la conservación e incremento de lo ya logrado se vuelve su preocupación fundamental. Grupos altos y medios del radicalismo coinciden así en el deseo de mantener lo conquistado y las posiciones de preeminencia, frente a capas obreras y populares que se ubican en la maquinaria, las bases y las clientelas del radicalismo presionan por una continuidad de la redistribución en el ingreso y en el poder, y se ligan directamente a

la figura carismática de Irigoyen. La reacción de los grupos altos y medios del radicalismo contra la presión en parte potencial y en parte efectiva de las masas se focaliza en la hostilidad y la resistencia contra el caudillo. El partido termina por dividirse de hecho, con el surgimiento de la tendencia antipersonalista, encabezada por Marcelo T. de Alvear, que ocupa la segunda presidencia (1922-1928). Ésta adquiere un sesgo conservador liberal. Con un gabinete de hombres pertenecientes a la clase dominante tradicional o muy próximos a ella, Alvear trata de realizar un gobierno caracterizado por la administración ordenada y eficaz, la gestión honesta, la legalidad constitucional, el equilibrio social y político, la política económica liberal favorable a la oligarquía y a los capitales extranjeros. Una fase de prosperidad económica, en el plano mundial y en el nacional, favorece sus objetivos.

Al término del gobierno alvearista, Irigoyen vuelve a la presidencia, en base a una popularidad incrementada que se manifiesta en un formidable apoyo electoral de masas (1928). Su segundo período es efímero. El país se ha ido trasformando, al tiempo que nuevas situaciones críticas no tardan en hacer eclosión. Los volúmenes y los precios de las exportaciones argentinas se reducen, mientras aumentan los precios de las importaciones, reduciéndose la capacidad de compra del país. La contradicción entre la democratización política y las presiones distributivas, y el lento crecimiento económico, se acentúan más aún. La oligarquía no oculta ya su impaciencia ante esta situación, y su irritación se trasmite a las capas medias o es compartida espontáneamente por éstas.

En sentido contrario, ni el caudillo ni sus partidarios han aumentado su capacidad política para enfrentar nuevas y más críticas situaciones. Irigoyen ha envejecido y ha intensificado el sentido autoritario y exclusivista de su conducción. La incapacidad, la desorganización y la anarquía se generalizan en la administración pública y en el partido. La ideología radical no se ha modificado y su programa se ha renovado de modo harto insuficiente. Sigue siendo un partido que cree en su aptitud mágica de trasformación por la sola presencia en el gobierno, y que pretende acaudillar y movilizar limitadamente a las masas populares, dentro de los marcos de un sistema tradicional y de un estado liberal. Al tiempo que amenaza a los grupos dominantes, se gana su alarma y su odio, sin privarlos de poder para resistir y para contratacar. Las propias innovaciones progresistas que el radicalismo se propone introducir (nacionalización del petróleo y de otros recursos y servicios públicos; convenio comercial con la URSS), inquietan ya no sólo a la oligarquía sino también a los grupos de intereses británicos y norteamericanos. El golpe decisivo proviene de la crisis mundial que estalla en 1929. Ésta da fin a la fase de prosperidad posbélica; afecta duramente a la economía argentina; revela sus limitaciones y la falta de aptitud partidaria y de mecanismos estatales para enfrentarla y superarla; agudiza las contradicciones sociales preexistentes. La oposición engloba ahora a la oligarquía, los intereses extranjeros, las capas medias, los intelectuales y estudiantes, los restantes partidos, la gran prensa, las fuerzas armadas. La ofensiva opositora desgasta al gobierno y al partido radical, y termina por confundir y paralizar a las masas que aquéllos no se han preocupado de esclarecer, organizar ni movilizar. El 6 de septiembre de 1930, el golpe militar encabezado por el general José F. Uriburu termina casi sin lucha

con el experimento político de las capas medias radicales, y abre el segundo ciclo oligárquico que se prolonga hasta el advenimiento del régimen peronista.

III. EL SEGUNDO CICLO OLIGÁRQUICO (1930-1943): PRÓLOGO AL PERONISMO

El golpe encabezado por el general José Uriburu señala el retorno al poder de las fuerzas conservadoras desplazadas en 1916 y el restablecimiento de un gobierno de neto perfil oligárquico. Entre 1930 y 1943, período que un escritor nacionalista llamará la "década infame", una minoría privilegiada se mantiene en el estado y sobre la sociedad argentina, por una combinación de fraude electoral, corrupción descarada, y violencia desnuda a cargo del ejército y de la policía.

En una primera fase, el general Uriburu y un grupo de oficiales e ideólogos civiles, imbuidos de una ideología fascista, sueñan con la supresión de todo vestigio de democracia liberal, la liquidación de los aspectos progresistas de los gobiernos radicales, la instauración de un régimen corporativo, y el logro del monopolio y usufructo del poder para los fines particulares de los factores encaramados en el estado. Se imponen al principio las condiciones de una dictadura militar-policiaca reforzada por la movilización de milicias fascistas en la calle. Se persigue, encarcela, tortura y asesina a dirigentes y militantes de organizaciones sindicales y políticas que definen una actitud y una conducta opositoras.

La eficacia de este proyecto se ve cuestionada por las elecciones del 5 de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires que, pese a todas las suposiciones del gobierno y las fuerzas conservadoras, otorgan el triunfo a la Unión Cívica Radical. Sectores considerables de la oligarquía y del capital inglés y de los partidos y órganos de prensa identificados con aquélla, presionan en favor de una solución política que simultáneamente garantice a esta constelación de intereses el monopolio del poder por la violencia y el fraude y le otorgue cierta apariencia de normalidad institucional y de legitimidad formal.

Acosados por presiones múltiples, limitado por la falta de apoyos significativos y por el carácter delirante de su proyecto político, mortalmente enfermo, el general Uriburu cede y convoca a elecciones fraudulentas en que consagran presidente constitucional al general Agustín P. Justo. Antiguo ministro de Guerra del presidente radical Alvear, usufructuario de una fuerte influencia en el ejército, el general Justo comparte con su equipo de gobierno una filiación y una mentalidad conservadoras, pero también despliega las ventajas provenientes de su excepcional lucidez sobre el peso y la influencia de las fuerzas en juego y de los problemas a resolver, y de una notable habilidad para el manejo de los problemas políticos. Después del general Julio A. Roca, figura central del primer ciclo oligárquico, el general Justo integra una reducida serie de militares políticamente inteligentes y eficaces a la que luego se agregarán los generales Perón y Lanusse, todo ello como reflejo y parte del proceso de politización y de logro de un papel propio y autónomo de las fuerzas armadas. La combinación de violencia, fraude y manipulación se refleja en el hecho de que la oligarquía logra al mismo tiempo retener el control de los resortes fundamentales de poder, y legitimar su mono-

polio político con formas de participación restringida (legalidad para algunos partidos opositores no amenazantes para el sistema o implicados en su defensa).

Instalada en el poder la fracción de terratenientes, comerciantes y financieros que asume la hegemonía de la clase dominante y de la sociedad argentina y mantiene una estrecha alianza con el imperialismo inglés, comienza un proceso de restructuración y modernización relativas de la política económica y del estado. En aparente contradicción con la ideología económica liberal de la fracción hegemónica, ésta promueve desde el gobierno la primera gran fase de intervencionismo estatal en la Argentina.

El control oligárquico sobre el estado y la política económica opera inicialmente desde 1930 como mera reacción contra la crisis mundial y sus consecuencias, y en defensa de la estructura socioeconómica tradicional y de los intereses de los grupos nacionales dominantes y de sus alianzas con los inversores extranjeros. Tal política se ve sin embargo refractada y modificada, en sus intenciones y en sus resultados, por un proceso nacional e internacional que ningún grupo aislado puede prever ni controlar y que produce efectos no pensados ni deseados.

A partir de la crisis de 1929, el sistema multilateral de comercio y de pagos se quiebra. La demanda externa de productos agropecuarios, sus precios y su producción, se debilitan y caen, y más tarde se restablecen de modo lento e irregular. El flujo de capitales extranjeros se retrae primero, y luego apenas se recupera. Se debilitan los factores tradicionales de crecimiento económico en superficie, por estímulos externos y acción puramente privada. A ello se agrega una intensificación de la lucha entre los intereses y los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos por el control del mercado interno y de la política económica de la Argentina.

En reacción ante este cúmulo de nuevos problemas, el gobierno conservador intensifica el intervencionismo del estado. Restructura y moderniza la maquinaria administrativa, y la pone a cargo de gobernantes y administradores más modernos y sofisticados; la dota de un arsenal creciente de poderes, instrumentos y órganos, y de técnicas más refinadas y eficientes. Utiliza estos resortes para cumplir una política económica en defensa de los precios, rentas y ganancias de la oligarquía agroexportadora, importadora y financiera, y para obtener mayores ingresos fiscales que la crisis ha reducido.

El gobierno oligárquico toma medidas tendientes al sostén de una banca privada en dificultades, y a la devaluación de la moneda, (elevación de precios internos, estímulo de las exportaciones, rebaja de salarios reales). Instituye la compra de cosechas por el estado, a precios superiores a los del mercado mundial, el control de cambios, el refuerzo del proteccionismo aduanero. Para preservar el mercado tradicional de carnes frente a la amenaza representada por el tratado de Ottawa de 1932, por el cual el Imperio británico otorga condiciones especiales a sus dominios, se firma entre aquél y Argentina el tratado Roca-Ruciman de 1933 del que se deriva un trato preferencial a las empresas de capital británico (libre importación, cambio abundante en términos privilegiados, garantías para el pago de amortizaciones e intereses de las inversiones inglesas, entrega del trasporte urbano en Buenos Aires, compra de empresas británicas en dificultades). Se acentúa la influencia británica sobre la economía y la política argentinas. El gobierno argen-

tino restringe el acceso al mercado interno a los intereses norteamericanos, y despliega una acción diplomática destinada a defender las posiciones británicas en América Latina contra la creciente ingerencia de Estados Unidos (Conferencia Interamericana de 1936, guerra del Chaco). Al mismo tiempo, sin embargo, despunta en la fracción hegemónica y gobernante de la oligarquía una actitud más cautelosa y astuta hacia Gran Bretaña y sus grupos inversores, determinada por el propio impacto de la crisis mundial y por la experiencia de las relaciones con el imperialismo inglés durante las décadas precedentes, y concretada en la creencia que reservarse ciertos resortes económicos y políticos no obstaculiza la prosecución de una alianza fructuosa, mejora las posibilidades de maniobrar con tal fin, e independiza algo más a la economía nacional de presiones y exacciones externas y de las vicisitudes del sistema internacional. Esta circunstancia refuerza las tendencias al intervencionismo estatal y al reconocimiento y estímulo de una nueva fase de desarrollo industrial.

Simultáneamente, en efecto, se han ido dando los primeros pasos de una industrialización sustitutiva de importaciones y un salto cada vez más considerable en la urbanización. El crecimiento manufacturero es favorecido por la crisis externa (caída de exportaciones que impide seguir comprando en el exterior la mayoría de los bienes industriales); por el proteccionismo estatal (restricciones aduaneras y cambiarias de importaciones, mantenimiento del nivel de ingreso de las exportaciones y otras actividades, obras públicas, compra de cosechas, incremento de la ocupación en la maquinaria gubernamental); por el aflujo de capitales extranjeros, alejados de Europa por la crisis y el peligro de guerra, o provenientes de Estados Unidos cada vez más interesados en la inversión industrial y en la producción fabril para el mercado interno y con la oferta de mano de obra abundante y barata. La crisis agraria expele masas campesinas arruinadas del interior rural hacia Buenos Aires, las que engrosan las filas de la población urbana y del proletariado industrial y amplían el mercado de consumo.

Emergen y se consolidan así nuevos grupos sociales con impulso ascensional: clases medias (empresariales, profesionales, burocráticas), proletariado industrial, masas marginales de reciente e incompleta incorporación al mundo urbano. Se multiplican e intensifican las necesidades y demandas no satisfechas por las estructuras tradicionales. Se esbozan una mentalidad y un clima colectivo de tipo nacionalista y desarrollista. Surge una conciencia a la vez difusa e intensa sobre los inconvenientes de una economía unilateral, subordinada y sin defensa ante las fluctuaciones internacionales, y sobre las iniquidades de un sistema social basado en injusticias flagrantes de tipo socioeconómico y regional, en formas opresivas y corruptas de dominación política y en un alto grado de sometimiento al imperialismo. Se va proclamando la necesidad de una economía más autónoma y diversificada, y de una revalorización de los factores y estímulos internos de crecimiento, hasta entonces subestimados o derrochados: ahorro e inversión nacionales, de tipo público y privado, capacidades productivas y creativas de la población argentina, mercado interno, estado. Los grupos medios y populares presionan en favor de un mayor reconocimiento y de una participación ampliada en el ingreso nacional, las decisiones básicas, la distribución y el ejercicio del poder. El esquema del sistema político comienza a ser replanteado e impugnado. Las tensiones y con-

flictos de tipo interno se combinan con el impacto del proceso internacional: repercusiones y secuelas de la crisis, irradiación ideológica de las luchas entre las potencias (capitalistas-liberales, capitalistas-fascistas, Unión Soviética), estallido de un nuevo conflicto bélico.

La segunda guerra mundial, por una parte favorece los procesos prexistentes de industrialización, urbanización e intervencionismo estatal. El mercado exterior para la producción agropecuaria exportable se expande con la demanda bélica, primero británica y luego norteamericana, la acción del estado, la estabilización e incremento de los volúmenes y precios. Frente al gobierno británico convertido en comprador único, el estado argentino da un nuevo salto en su intervención, se convierte en vendedor único, asume el financiamiento de las ventas a crédito y recurre al emisionismo para costear esta cuantiosa carga y la redistribución estatal de flujos financieros e ingresos hacia el interior. La favorable balanza comercial y de pagos permiten aumentar la capacidad adquisitiva del mercado nacional, en favor sobre todo de las actividades industriales y de los servicios urbanos. La industrialización para el mercado interno se ve asimismo estimulada por la falta de competencia de las importaciones de los países en guerra, la trasferencia de capitales agrarios a las actividades industriales y órganos de distintos tipos, el aflujo de capital extranjero (europeo y norteamericano), la mayor ocupación laboral con bajos niveles salariales y escaso recurso a nuevas tecnologías, la posibilidad efectiva de altas tasas de ganancia.

Por otra parte, la guerra mundial replantea las condiciones de inserción de Argentina en el sistema internacional. A la lucha entre los dos grandes bloques militares, cuyo resultado es todavía incierto hacia 1943, se agrega la agudización de la competencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Gran parte del período exhibe un visible predominio de la influencia británica sobre la norteamericana en la economía, la vida social, la cultura y el proceso político del país, pero la situación tiende a modificarse desde mediados de la década.

La industrialización en marcha, en la cual los capitales de Estados Unidos desempeñan un papel cada vez más significativo, mejora la situación del imperialismo norteamericano, y estrecha sus lazos con nuevos sectores industriales en ascenso. Las necesidades de trasporte interno ya insatisfechas por la red de ferrocarriles británicos y la presión de la industria norteamericana del automóvil llevan a la sanción de la ley de vialidad de 1932, y, como contrataque de los intereses tradicionalmente dominantes, a la coordinación de los trasportes urbanos de Buenos Aires en beneficio del ferrocarril y el tranvía de capital británico y en desmedro de los automotores. En los convenios de 1937, suscritos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales con miembros del cártel del petróleo, que hacen perder al estado argentino el pleno y directo control sobre el mercado de combustibles líquidos, la presencia de la Standard Oil norteamericana es por lo menos tan importante como la de la Royal Dutch Shell anglo-holandesa. Al estallar la guerra en 1939, Gran Bretaña logra del gobierno argentino el mantenimiento de una neutralidad benevolente proinglesa que asegura simultáneamente a la metrópoli el distanciamiento argentino respecto a los proyectos hegemónicos de Estados Unidos en América

Latina y el aprovisionamiento de carnes y cereales sin restricciones y en condiciones privilegiadas de precios, crédito e interés. Desde 1941, sin embargo, Argentina comienza a incrementar sus exportaciones hacia Estados Unidos hasta que su balanza comercial con este país se vuelve favorable.

Un sector de la oligarquía solamente quiere mantener a todo precio la neutralidad argentina, como medio de impedir la expansión de Estados Unidos en el país, y de favorecer a Gran Bretaña por los mecanismos indicados. El neutralismo es favorecido asimismo por grupos progermánicos, tanto de la oligarquía como de sectores intelectuales y políticos de la clase media, en parte por un fuerte resentimiento reactivo contra la dominación británica, en parte como especulación sobre las ventajas a obtener de una eventual victoria del Eje nazifascista. Otro sector creciente de la oligarquía, vinculado a la industrialización, considera que Gran Bretaña, eventualmente derrotada o en todo caso debilitada por la guerra, ha entrado ya en una declinación irreversible que agota sus posibilidades como metrópoli tradicional. Se persuade cada vez más que el aporte de capitales, comercio y ayuda de Estados Unidos es indispensable para el progreso de las actividades manufactureras y de los servicios urbanos y ofrece atrayentes expectativas de coparticipación en su crecimiento.

La entrada en la guerra aparece al mismo tiempo como el precio a pagar por esta nueva alianza y el prerrequisito para lograr y expandir sus beneficios económicos y políticos durante el conflicto y en la futura posguerra. La orientación favorable al acercamiento con Estados Unidos es compartida por los sectores industriales nuevos, la clase media democrático-liberal, los partidos de centro y de izquierda (el Partido Comunista después de la invasión a la URSS).

La clase dirigente se escinde entre grupos probritánicos, pronorteamericanos y, en medida menor y menguante, también progermánicos.

Este proceso de transición de una a otra fase de crecimiento económico y cambio sociopolítico no es consecuencia de la acción deliberada de una clase, grupo o élite. Ningún sector social en particular promueve conscientemente los cambios, los aprovecha de modo sistemático, o tiene incluso clara idea de los que ocurren y de sus implicaciones. Los cambios indicados se producen sobre todo por efecto de factores accidentales, impersonales, externos a la Argentina y a sus centros de decisión (crisis económica, conflicto bélico, modificación de la relación de fuerzas entre las potencias), o bien como subproductos más o menos imprevistos e involuntarios de medidas tomadas en favor de los grupos de intereses tradicionales.

La oligarquía se ha venido debilitando y modificando bajo el impacto de las trasformaciones indicadas y sus consecuencias, sobre todo las de tipo internacional y las correspondientes a la emergencia y presión de nuevos grupos sociales. Su gestión política encuentra sus límites en su propia naturaleza de clase, en la índole aristocratizante del régimen que controla e instrumenta, en la consiguiente incapacidad para promover el desarrollo y la modernización y para incorporar e integrar en el sistema de modo relativamente amplio y satisfactorio a las nuevas clases medias, al proletariado industrial y a las masas marginales. La combinación de violencia desnuda, fraude electoral y corrupción general revelada en negociados escandalosos e ineficiencia creciente, contribuye a reducir la base política,

la legitimidad y el consenso del régimen oligárquico. La clase dominante se debilita; pierde confianza en sí misma, lucidez, adaptabilidad y flexibilidad operativa; se escinde y reagrupa en sectores divergentes que compiten por el logro y goce de la hegemonía; perdura solamente en la medida que las fuerzas armadas no le retiran su apoyo.

Los problemas del país tampoco pueden ser resueltos por los sectores correspondientes a lo que podría ser una burguesía industrial en sentido estricto. Lo que se acerca a este tipo aparece tardíamente, y está limitada por las estructuras socioeconómicas, cultural-ideológicas y políticas tradicionales y por el predominio casi intacto de grupos de poder vinculados a las mismas. Surge y vive a la sombra o en la constelación de grupos terratenientes y mercantil-financieros, tanto nacionales como extranjeros, con los cuales tiende a identificarse y subordinarse, perdiendo autonomía y capacidad innovadora. A ello contribuye también el temor a la rápida emergencia de un proletariado industrial, masivamente concentrado en Buenos Aires y sus suburbios, y en algunos otros centros urbanos del interior.

Este nuevo proletariado va aumentando su peso específico y su capacidad de presión y se perfila como factor potencial de desequilibrio e impugnación del orden existente, pero hacia 1943 parece no estar en condiciones de convertirse en clase en sí, apta para darse una conciencia propia de sus intereses y una organización autónoma, ni de aportar soluciones propias y un proyecto histórico que puedan ser compartidos por otras clases y grupos y operacionalizados de modo inmediato y eficaz. Todavía en proceso de estructuración, absorbido por la penosa adaptación a las nuevas condiciones de la metrópoli industrial y de la sociedad de masas, la clase trabajadora carece de conciencia clasista, de tradiciones sindicales y políticas, de métodos de organización y acción que le permitan influir o conducir el proceso argentino. Desaparecidas o debilitadas en el cambio estructural las viejas élites sindicales y políticas de militantes abnegados y no profesionalizados, ninguna otra élite u organización acompaña al nuevo proletariado en una fase de transición y en el ajuste a condiciones sociales inéditas. El Partido Radical, retrasado respecto a la evolución del país, adormecido en la ilusión de seguir siendo y de estar destinado a ser siempre el único gran partido popular, no alcanza a percibir la mutación que se va produciendo con la emergencia del nuevo proletariado industrial y del resto de las masas trabajadoras urbanas, o confía en todo caso en que uno y otras engrosarán sus bases y sus apéndices clientelísticos. Los partidos de izquierda, el socialista y el comunista, tienden a convertirse en élites intelectualizadas y burocráticas. Inspiradas por una concepción aristocratizante y sustitucionista de su propio papel, los jerarcas y militantes de ambos partidos se perciben a sí mismos y son percibidos por las bases y las masas como dirigentes exclusivos y excluyentes de aquéllas, destinados a redimirlas desde arriba y a gobernar en su nombre y representación pero con el menor grado posible de participación autónoma y directa. Los dos partidos despliegan así ante los trabajadores actitudes de paternalismo distante y despectivo, de mesianismo, de sectarismo y dogmatismo. Se hallan demasiado absorbidos por las preocupaciones de la política internacional (sobre todo la lucha internacional contra el fascismo), de la manipulación parlamentaria, de las tácticas de poder partidista y personal en todas las esferas sociales (sindicatos, partidos, instituciones culturales, elecciones),

como para preocuparse por la captación, la educación y la organización militante de los nuevos estratos laborales. El ascenso en organización, politización, y combatividad de los trabajadores urbanos que caracteriza gran parte de la década de 1930 tiende a ser remplazado por síntomas de decaimiento, pasividad y reflujo a fines de aquélla y principios de la siguiente. Los trabajadores urbanos quedan librados a sus propias fuerzas y a su destino, disponibles para el primer manipulador diestro y audaz que aparezca en escena.

En general, el agotamiento o la inmadurez de los diversos grupos sociales ante el viraje histórico que se perfila desde la crisis de 1929 hasta la segunda guerra mundial se manifiestan en la obsolescencia, la caducidad y la inoperancia de los partidos políticos tradicionales, desde la derecha oligárquica (en parte liberal-conservadora, en parte fascistizante), pasando por las clases medias de un Partido Radical adormecido en la ilusión de su pasado mejor, hasta una izquierda envejecida, desadaptada y de espaldas al nuevo país en gestación.

Las tareas de reajuste internacional, de crecimiento económico y de creación de un nuevo equilibrio relativo en lo social y lo político que las clases sociales fundamentales y sus diferentes expresiones partidistas demuestran ser incapaces de cumplir, terminan por ser asumidas por el sector más concentrado y poderoso del estado: las fuerzas armadas, sobre todo el ejército.

Durante toda la "década infame" las fuerzas armadas han terminado por ser mero y único sostén de la dominación oligárquica y de su gobierno. A comienzos de los años 1940, aquéllas perciben y temen cada vez más la crisis y el descrédito del régimen oligárquico, las implicaciones de la imposición eventual de un candidato presidencial acorde con la orientación pronorteamericana, las posibilidades de verse desbordadas por la dramática restructuración del sistema internacional y por los peligros de un eventual frente popular. Toman conciencia además de las ventajas de asumir por derecho propio, en plenitud y en su beneficio, un poder que hasta entonces ejercieron de manera semioculta, limitada y en favor de otros. Esta perspectiva es además estimulada por la acción psicológica, ideológica y política de los agentes del Eje nazifascista que operan sin dificultades en el país. La soberbia del presidente Ramón Castillo, que pretende relegar a las fuerzas armadas a un papel aún más subordinado e instrumental, precipita los acontecimientos. El 4 de junio de 1943 un golpe militar derriba al presidente, e instaura una dictadura militar que desembocará en un experimento político no previsto por los líderes iniciales del movimiento. El escenario y los actores están presentes, el telón se alza sobre el drama. El coronel Juan Domingo Perón no tardará en hacer su entrada en la escena.

IV. DE LA DICTADURA MILITAR AL BONAPARTISMO POPULISTA: EL PRIMER CICLO PERONISTA (1943-1955)

El golpe del 4 de junio de 1943, y el gobierno que surge del mismo, tienen inicialmente un sentido puramente militar, de reafirmación del poder de casta, con una inspiración ideológica de tipo nazifascista. El primer apoyo civil está propor-

cionado por elementos de orientación clerical y falangista cuyos excesos y torpezas aíslan rápidamente al gobierno civil y producen las primeras manifestaciones de oposición organizada. La resistencia a la dictadura militar va agrupando, por motivos y con grados variables, a la oligarquía conservadora desplazada, al gran empresario industrial ligado con aquélla y con intereses norteamericanos, a la clase media intelectual (especialmente los profesores y estudiantes universitarios), a los partidos políticos privados de legalidad, y a Estados Unidos que miran con desconfianza la neutralidad y las simpatías progermánicas del nuevo régimen.

La comprobación del aislamiento a que se ve reducida la dictadura, y la elaboración y cumplimiento de una estrategia que proporcione amplia base política a aquélla, son obra del coronel Juan D. Perón. Soldado profesional, identificado profundamente con las pautas básicas de la institución militar, pero dotado de talento para evaluar fría y realistamente las fuerzas en juego y los factores de poder político; personalidad autoritaria y ambiciosa, con condiciones excepcionales para la conducción y la organización, Perón no es un recién llegado a la acción. Ha participado activamente en la preparación del golpe militar de 1930. Ha estudiado de cerca los métodos y organismos del fascismo italiano. Tiene intervención directa en la actividad conspirativa que desemboca en el golpe del 4 de junio de 1943, y luego en la organización y funcionamiento de una logia, el GOU (Grupo Obra de Unificación, o Grupo Oficiales Unidos), que pretende regir el proceso revolucionario y la dictadura militar. El 2 de diciembre de 1943, se hace cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, base de lanzamiento de toda su estrategia política. La misma consistirá básicamente en utilizar como instrumentos el apoyo de las fuerzas armadas, de la iglesia, de la policía y la burocracia gubernamental, y la simpatía de los inversores y del gobierno de Gran Bretaña, para lograr la adhesión masiva de los obreros industriales y, en general, de las masas pobres de la ciudad y del campo. La posibilidad de esta captación está dada por el control del estado: la afluencia de recursos financieros; el aumento en número y en potencial dinámico de los sectores trabajadores y populares, y su carencia de experiencia sindical y política, de ideología propia y de dirección independiente y eficaz; la situación de reflujo prevaleciente en el movimiento obrero; el número e intensidad de las necesidades materiales y psicológicas a satisfacer. Estas condiciones predisponen a estas masas al conformismo, la apatía, y la aceptación de un paternalismo gubernamental que dispense beneficios desde las cimas del poder.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la que pronto agrega la función de vicepresidente de la República, el coronel Perón se lanza a la captación y organización de los sectores trabajadores de la ciudad y del campo, como premisa para su canalización social y su manipulación política. Las viejas burocracias sindicales, de orientación socialista y comunista, son desplazadas o subordinadas por la represión o el soborno. En su lugar surge un nuevo sindicalismo de masas, dependiente del estado, a través del otorgamiento de la legalidad gremial y de concesiones materiales y profesionales (mejoras de salarios y de condiciones de trabajo, arbitraje estatal favorable en los conflictos laborales, protección a dirigentes y delegados frente a la prepotencia patronal). El nuevo edificio sindical es coronado por la Confederación General del Trabajo única que, como los sin-

dicatos de base y las federaciones, es controlada por una nueva promoción de dirigentes caracterizados por el arribismo, la incondicionalidad y el burocratismo.

La política obrerista es complementada y justificada por un juego de equilibrio respecto a los grandes empresarios, a los cuales dicha política es presentada como garantía de control de las masas trabajadoras, orden y paz social, y posibilidad de apoyo estatal a las actividades industriales y comerciales de las grandes corporaciones de capital nacional y extranjero.

Una primera confrontación decisiva de fuerzas entre el peronismo en ascenso y la oposición se produce en octubre de 1945. Un golpe de fuerza, encabezado por oficiales de la marina y del ejército y apoyado abiertamente por el embajador norteamericano Spruille Braden, derroca momentáneamente a Perón. Su equipo político, en el que ya descuella su esposa, Eva Perón, monta una movilización de masas trabajadoras, promovida y controlada por la policía, la burocracia gubernamental y la nueva dirección sindical, en un despliegue sin precedentes que derrota la contraofensiva opositora y fuerza el regreso de Perón a sus funciones anteriores.

La segunda y decisiva confrontación se produce en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. Por una parte, la "Unión Democrática" agrupa a los partidos políticos tradicionales (incluso de izquierda), a los grupos oligárquicos y de grandes empresarios, a la clase media acomodada y los universitarios, a grupos obreros de antigua tradición gremial y mejores ingresos; y cuenta con el apoyo desembozado de Estados Unidos y de casi la totalidad de la prensa diaria. Sus consignas básicas son: la lucha contra el peronismo, calificado de movimiento nazi, cuyas mejoras sociales son rechazadas como demagógicas; y la exaltación abstracta de la democracia, la libertad, la Constitución Nacional. El frente peronista se articula por medio de los aparatos burocráticos, militares, policiales y de la Iglesia, la nueva dirección sindical, y dos partidos creados en ese momento: el Partido Laborista y la Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical. Cuenta con el apoyo de los intereses británicos (colectividad local y embajada). Logra la adhesión de la clase obrera y de las masas pobres de las ciudades y el agro. Con abierto pero efectivo despliegue demagógico, su propaganda enfatiza las mejoras sociales a lograr, la lucha contra la oligarquía y contra el imperialismo yanqui, junto con la promesa de mantener el orden social y erigir una eficaz barrera contra el peligro comunista.

El 24 de febrero de 1946, en las elecciones más irreprochables que conociera el país hasta entonces, el ex coronel, ahora general Perón, es elegido presidente de la República. Sus hombres de confianza controlan el Congreso nacional, las gobernaciones y parlamentos provinciales y los órganos municipales; en suma, el aparato estatal a todos sus niveles.

El peronismo logra el control del estado y ejerce sus poderes en condiciones iniciales muy favorables. Argentina dispone de un saldo positivo en el comercio exterior, y ha acumulado reservas de oro y divisas por 1 425 millones de dólares. La expansión simultánea del mercado mundial y del mercado interno asegura a los grandes productores y empresarios altos precios y enormes ganancias. Esta coyuntura excepcional, la vigencia de condiciones de plena ocupación, inflación y prosperidad, posibilitan una limitada política redistribucionista que no afecta sen-

siblemente a las grandes empresas. La influencia británica en la Argentina se ha debilitado, sin que se produzca la irrupción inmediata de la influencia norteamericana. La vieja oligarquía está debilitada, aunque no destruida. La burguesía industrial, las clases medias en general, el proletariado y las masas populares, han aumentado en peso e influencia, pero carecen de ideologías y políticas propias.

A consecuencia de todo ello, se produce un equilibrio fluctuante y precario entre los distintos grupos nacionales, y entre el país y las grandes potencias; y se crea una amplia base material y social de maniobra para el estado. En estas condiciones, el grupo encaramado en el gobierno, que encabeza Perón, adquiere cierta independencia relativa frente a los distintos grupos nacionales y frente al sistema internacional, y despliega los caracteres de un experimento bonapartista. Se convierte en una especie de árbitro necesario, que decide los conflictos entre los distintos sectores e intereses actuantes en la sociedad argentina, y mantiene un cierto equilibrio.

La estructura y la actuación del peronismo resultan, por lo mismo, fuertemente contradictorias. El peronismo surge y se desarrolla como representante del sistema social argentino, y de la burguesía argentina en general, y no de unos sectores exclusivamente. Esta representación se ejerce a través de una acción burocrática, que distancia e independiza parcial y momentáneamente el peronismo de los grupos dominantes en el país, y en virtud de lo cual aquél debe, en diversos momentos y ante distintos problemas, hacer una política nacional burguesa aparentemente contra la voluntad de la oligarquía y de la burguesía industrial.

De todas maneras, el gobierno peronista constituye la operación conservadora más refinada de la historia argentina hasta la fecha. La política peronista beneficia de diversos modos a los grupos superiores y élites económicas de la Argentina. Perón y su equipo operan durante los primeros años en un clima de euforia económica. El país ha acumulado enormes recursos financieros y se espera un incremento indefinido de los mismos, como resultado del "boom" de posguerra, de las posibilidades de abastecer a los países hambreados y destruidos por la segunda guerra mundial, y luego también por la esperanza de un plan Marshall para América Latina y de una tercera guerra en cuyo estallido Perón confía hasta el último momento de su gobierno.

A través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), el gobierno compra la producción agrícola a precios fijos, y la vende a precios más altos en el mercado internacional, destinando las elevadas ganancias resultantes para financiar sus planes económicos, dar apoyo económico a las empresas nacionales y extranjeras, y subsidiar el consumo. La disponibilidad inicial de recursos permite además cumplir una serie de nacionalizaciones, y expandir el sector público. Son nacionalizados el Banco Central, los ferrocarriles y gran parte de los servicios públicos. La deuda exterior se reduce considerablemente. La marina mercante y la aviación son desarrolladas. El sector público expandido asume tareas que las empresas privadas necesitan pero no quieren o no pueden asumir por sí mismas; y provee además al gobierno de resortes ampliados de poder y de recursos adicionales. El Banco de Crédito Industrial y otros entes financieros gubernamentales proveen de generoso apoyo a los grandes empresarios. La prosperidad general, la plena ocupación, el otorgamiento de altos salarios que, combinados con los sub-

sidios, no elevan demasiado los precios ni afectan las ganancias de las empresas, la manipulación de los sindicatos estatizados, la combinación de la simbología populista con las concesiones efectivas a sectores importantes de las masas, permiten crear y mantener un grado apreciable de paz social.

El gobierno peronista defiende así los intereses de la gran burguesía agroindustrial y financiera, pero limita su fuerza política y sus manifestaciones de independencia. Esta situación dual, la demagogia populista y el dirigismo del régimen, el costo excesivo de su mantenimiento, sus arbitrariedades y exacciones, impiden un pleno acuerdo entre los grupos sociales dominantes y el peronismo, mantienen un conflicto latente que se irá agudizando hasta estallar en la crisis final.

Por otra parte, el gobierno peronista debe tolerar o incluso estimular la irrupción de las masas trabajadoras en la vida social y política del país. El peronismo crea un poderoso aparato sindical y un plantel numeroso de dirigentes, cuadros medios y activistas. Impone el cumplimiento efectivo de una legislación laboral y previsional que se amplía de modo considerable en relación a la etapa anterior al triunfo del régimen. Son mejoradas las condiciones de ingreso, trabajo y vida de los trabajadores, sobre todo hasta 1949. Públicamente y bajo patrocinio estatal, se discuten los grandes problemas del país y del mundo. De modo demagógico se denuncia al imperialismo y a la oligarquía, y se exalta el papel del proletariado y del pueblo en general. Las masas trabajadoras toman una mayor conciencia de sus fuerzas, posibilidades y derechos, de su antagonismo con la clase empresarial, de la importancia de su propia organización como instrumento de lucha social y política. De manera vicaria y limitada, se sienten dueños del poder, protagonistas de una excitante aventura sin precedentes. La base popular es ampliada con el otorgamiento del voto femenino, el cual, combinado con manipulaciones y restricciones en las libertades públicas, otorga a Perón un triunfo aplastante en las elecciones de 1951, que abren su segundo período presidencial. Un papel decisivo es asumido por la esposa del presidente, Eva Perón que, dinamizada por un hondo resentimiento de clase y por una ambición y una energía ilimitadas, toma a su cargo la relación con la clase obrera, especialmente sus mujeres, la dirección de la política sindical, y el montaje de un aparato especial para el otorgamiento de concesiones y prebendas.

Como premisa y resultado a la vez de esta estrategia de arbitraje y equilibrio, el peronismo se encarama y se consolida en el poder. El triunfo y sobre todo la perduración requieren, sin embargo, un juego continuo de mecanismos e instrumentos, que se articulan finalmente en un aparato semitotalitario de captación, control y represión.

El peronismo presenta un perfil burocrático y contribuye a intensificar y acelerar la burocratización de la sociedad argentina. El equipo gobernante tiende a estructurarse y seleccionarse verticalmente, desde el líder hacia abajo. El sistema de reclutamiento aplica criterios, no de capacidad e integridad, sino según el grado de lealtad hacia Perón, el aparato y los demás jerarcas. Se establece un verdadero "culto de la personalidad" de Perón, traducido en adhesión irracional a su persona, su política, sus decisiones. El monopolio de los medios de comunicación de masas, la imposición del contenido que deben trasmitir los mismos, la restricción o la supresión de la prensa opositora, permiten desarrollar una propaganda tota-

litaria omnipresente. La misma se dedica simultáneamente a exaltar sin límites al líder y al régimen, y a difundir la "doctrina nacional justicialista". Bajo este nombre aparece un conglomerado ideológico incoherente, en el que se entrecruzan y colisionan elementos de filosofía tomista medioeval, falangismo español, principios del "Welfare State", seudomarxismo reinterpretado por apóstoles provenientes de la izquierda tradicional y convertidos a un nuevo evangelio nacional-populista. A ello se agrega la afirmación de una "tercera posición" en política internacional, en teoría hostil simultáneamente al capitalismo occidental y al comunismo soviético. Diversos grupos clericales y fuertemente conservadores o abiertamente fascistas reciben los puestos de control sobre el sistema educativo y la vida cultural, que caen así a bajísimos niveles, incongruentes con el grado de desarrollo social y de sofisticación intelectual de la Argentina.

Como expresión y fundamento del sistema, son reformadas la Constitución nacional y la legislación vigente. Ello busca sobre todo articular un formidable mecanismo represivo, que aplica un aparato policial y militar fuertemente reforzado, cuyos miembros reciben un trato privilegiado. La oposición política no es totalmente suprimida, pero su representación formal en órganos parlamentarios (nacionales, provinciales, municipales), es fuertemente restringida, lo que va acompañado de la indicada restricción a la libertad de expresión y de persecuciones, encarcelamientos y atropellos de todo tipo.

El aparato semitotalitario es pieza clave para la creciente estatización del movimiento obrero. Los sindicatos y la Confederación General del Trabajo llegan a ser controlados y manejados por una burocracia de dirigentes serviles, que se trasforman en estrato relativamente privilegiado de funcionarios estatales, a quienes se otorgan puestos y funciones en la administración pública, el Parlamento y los cuerpos deliberativos provinciales y locales, así como subsidios gubernamentales, concesiones y posibilidades de enriquecimiento personal. La presión estatal se combina con la de las grandes empresas, para favorecer este tipo de liderazgo sindical, y desplazar a los auténticos militantes obreros. La represión refuerza la tendencia al debilitamiento de la influencia de los partidos de izquierda en el movimiento obrero que se origina por las limitaciones y errores tradicionales de aquéllos. Los movimientos reivindicativos espontáneos (algunos de gran envergadura, como la huelga azucarera de 1949, y la huelga ferroviaria de 1951) son despiadadamente reprimidos. Toda veleidad de independencia por parte de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo es liquidada. Lo mismo ocurre con las pretensiones de autonomía por parte del Partido Laborista y de la Junta Reorganizadora de la Unión Cívica Radical, puntales políticos iniciales del peronismo, que son suprimidos y refundidos en el Partido Peronista Único. Todo confluye para fomentar en las bases obreras y populares una actividad pasiva y dependiente, que lo espera todo no de la propia acción consistente y autónoma, sino de la concesión paternalista desde arriba. Se promueve asimismo en dichos sectores la renuncia de toda posibilidad de ideología propia y de un papel protagónico independiente en la vida social y política del país.

El peronismo resulta ser en definitiva un movimiento esencialmente conservador que, como *el gatopardo* de Lampedusa, pretende que las cosas cambien lo mínimo para seguir siendo básicamente las mismas. El régimen despliega un respe-

to básico al orden social tradicional. El equipo gobernante se recluta en la gran burguesía y sobre todo en arribistas de origen medio y proletario que aspiran a integrarse en aquélla a través de sus funciones políticas y administrativas. Dirigentes y funcionarios resultan fácilmente corruptibles, complacientes hacia la oligarquía y la gran empresa nacional y extranjera, aunque cobrando el precio de esa buena voluntad en términos de privilegios, reciprocidad de favores y extorsiones ocasionales. El paternalismo autoritario, el manejo de la maquinaria cuasitotalitaria, independizan al equipo gobernante de toda forma efectiva de control social y político. Esta situación, y la ideología incoherente, se traducen en programas de gobierno erráticos y contradictorios, y en una gestión caracterizada por la corrupción, el despilfarro, la improvisación, el aventurerismo, la ineficiencia, el desaprovechamiento de las posibilidades excepcionales con que se contó en el punto de partida.

La euforia inicial disimula en parte las limitaciones del régimen y sus consecuencias negativas. El desarrollo de la crisis económica y social las desnuda y agrava, convirtiéndolas en factores decisivos de la descomposición y del derrumbe final.

El gobierno peronista no ha modificado sustancialmente la estructura socioeconómica tradicional de la Argentina. Carece de una estrategia deliberada y concreta de trasformaciones económicas y sociales. Dos planes quinquenales que adopta sucesivamente no pasan de ser recopilaciones de proyectos inconexos, más arma propagandística que instrumentos eficaces de modificaciones estructurales. La dependencia externa del país, en comercio e inversiones, respecto a Gran Bretaña y a Estados Unidos, es atenuada en aspectos laterales, mantenida y agravada en los niveles decisivos. El régimen agrario latifundista sigue intacto, salvo algunas restricciones en la comercialización exterior de los cereales (la de carnes sigue en manos de los frigoríficos extranjeros).

En materia de industrialización, desde 1946 a 1951 se da importancia a la manufactura liviana. Desde 1952 se intenta resolver los problemas derivados de la falta de industria pesada, y del atraso en energía y combustibles, pero esta tentativa no tiene éxito. El peronismo no logra superar la situación de descapitalización económica generalizada, heredada de la preguerra y del período bélico de autosuficiencia reforzada. Esta descapitalización se manifiesta en la insuficiencia y el desgaste del equipo industrial, agropecuario, energético y de trasporte. El déficit de equipos es suplido por el empleo de mano de obra a la que se otorgan mejoras en remuneraciones y beneficios sociales, lo cual encarece los costos, reduce la productividad y, en condiciones de menor oferta relativa para una demanda ampliada por la redistribución relativa del ingreso y el aumento de salarios nominales, agrava también la inflación.

La imposibilidad de capitalizarse surge de varios factores convergentes. El peronismo despilfarra locamente los recursos financieros y las divisas extranjeras. Los Estados Unidos venden a Argentina maquinaria a precios altos, y compran productos argentinos en reducidas cantidades y a bajos precios; ejercen un *dumping* contra la producción agropecuaria argentina, y una estrategia de bloqueo financiero. La inconvertibilidad de la libra esterlina impide a la Argentina compensar los saldos negativos con Estados Unidos mediante los saldos positivos obtenidos

en Gran Bretaña. Los convenios bilaterales anglo-argentinos descapitalizan también a la economía argentina, al mismo tiempo que frenan la penetración de los intereses norteamericanos en el país. Los ingresos comerciales excepcionales desaparecen con la recuperación de Europa. La superproducción consiguiente, con el intervalo de una sequía desastrosa, contribuye a una grave caída en la balanza comercial y de pagos. El mercado interno se contrae, el desarrollo industrial se ve frenado, las quiebras empresariales y los índices de desocupación aumentan peligrosamente. El ente estatal que monopoliza el comercio exterior de cereales obtiene primero menos ganancias y luego da pérdidas. Se ve obligado a comprar cosechas a un precio inferior al obtenible en el mercado internacional; no puede financiar otras actividades económicas, ni el presupuesto del estado, y tampoco puede seguir pagando subsidios al consumo que posibiliten a la vez altos salarios y mayores ganancias. La consiguiente inflación afecta a las clases medias y populares de la ciudad y del campo. Los salarios nominales de los trabajadores son congelados, y descienden sus salarios reales y su participación en el ingreso nacional. Los índices del producto bruto, de la producción industrial y del capital, en los tres casos por habitante, permanecen en 1955 al mismo nivel que en 1948. La coyuntura favorable creada por la guerra de Corea atenúa momentáneamente la crisis, pero ésta se agrava a partir de 1952.

Durante su segunda presidencia, inaugurada en 1951, Perón parece emprender cada vez más claramente la retirada, en comparación con sus audacias y éxitos iniciales. El signo más claro al respecto es el cambio de actitud respecto a la empresa privada nacional y al capital extranjero. La gran empresa nacional combina frente al peronismo una actitud de oposición y de captación desde adentro a través de sus organizaciones y hombres representativos. Entre la gran empresa y la jerarquía peronista se establece un esbozo de frente común contra las masas obreras y populares, manifestado en congelamiento de salarios y fuerte represión de los movimientos reivindicativos.

El gobierno peronista cambia también su actitud hacia las empresas extranjeras y las grandes potencias, evolución que coincide con un desplazamiento desde la órbita británica hacia la norteamericana. Ya en 1947, Argentina ha suscrito bajo presión de Estados Unidos el tratado de Río de Janeiro, que contiene compromisos traducidos de hecho en un sometimiento político-militar. En 1950, Argentina obtiene del Export and Import Bank un crédito de 125 millones de dólares, contra el otorgamiento de concesiones onerosas. En 1953, la misión norteamericana presidida por el doctor Milton Eisenhower fija las bases de un creciente entendimiento entre los gobiernos de la Argentina y de Estados Unidos. En el mismo año, una nueva ley de inversiones extranjeras legaliza las posibilidades de un trato favorable a las empresas no nacionales, prontamente seguido por concesiones a las empresas norteamericanas y europeas de automóviles y petróleo. La penetración de intereses norteamericanos en la economía argentina se vuelve cada vez más perceptible.

En aparente paradoja, hacia la misma época empieza a tener éxito, por primera vez desde 1945, la constitución de un gran frente antiperonista. Varias circunstancias confluyen en tal sentido.

El peronismo ha sido defensor del orden existente en la Argentina, y de los

intereses del gran capital nativo y foráneo. En esa dinámica, sin embargo, ha debido tomar frecuentemente medidas no gratas para tales sectores. El peronismo sigue así siendo apoyado y tolerado por los estratos superiores de la sociedad argentina y por intereses extranjeros mientras la situación económica sigue proporcionando recursos para cumplir una política de equilibrio y freno. La gradual desaparición de condiciones favorables multiplica y agrava las tensiones, los roces y los conflictos de todo tipo, rompe el equilibrio social y político, crea el peligro de un desborde de masas por encima de las estructuras defensivas del régimen. La acción del peronismo se vuelve así inútil y peligrosa, en la medida sobre todo en que, por sus compromisos sociales y políticos con sus propias bases, resiste volverse plenamente antipopular y demasiado abiertamente complaciente hacia las grandes empresas nacionales y extranjeras.

Esta coyuntura crítica es percibida y asumida de manera en parte coincidente y en parte diferente por diversos sectores en presencia. Los grupos británicos están alarmados por la veloz irrupción norteamericana. Los grupos y el gobierno de Estados Unidos desconfían de un liderazgo aventurero e irresponsable, y de un populismo de consecuencias imprevisibles, y preferirían un régimen no tan comprometido con una base de masas, y por lo tanto más débil y manejable. La gran burguesía agroindustrial y financiera se resiente por el peligro de masas y el alto costo financiero y político de la burocracia peronista. Las clases medias se sienten afectadas a la vez por la inflación y los altos impuestos, por la irrupción de masas populares que ha reducido correlativamente el propio estatus, por la política cultural medievalista-falangista, y por unas concesiones al capital extranjero que afectan sentimientos nacionalistas a la vez difusos e intensos. De manera general para todos los grupos, el aparato totalitario del peronismo golpea e irrita ciegamente en todas direcciones, multiplica los atropellos y abusos, combina el clima de inseguridad generalizada con una corrupción ya indisimulable. Finalmente, la personalidad del general Perón parece sufrir un eclipse momentáneo, que se evidencia en la pérdida de energía e iniciativa, en la confusión de las decisiones, y en una cuasisenil debilidad por las actitudes arbitrarias y por las diversiones de diversos tipos.

Las conspiraciones habían comenzado poco después del triunfo peronista en 1946, y la eclosión más importante se da con el frustrado levantamiento militar de 1951. El avance de la crisis económica y social les da nuevo impulso. El peronismo se mantiene todavía por el apoyo de las masas populares y del ejército, y por la falta de concreción de un sólido frente opositor. Las masas populares, sin embargo, han sido afectadas cada vez más por la crisis y la represión, se sienten vagamente desilusionadas respecto del régimen, mantienen una adhesión pasiva que resultará insuficiente en el momento del peligro. El ejército no ha podido menos que reflejar el impacto de las presiones provenientes de los distintos grupos sociales y políticos enrolados en la oposición. La división y lucha de facciones aparece en el seno del ejército y también de la marina y de la aeronáutica. El conflicto con la Iglesia, que estalla en 1954, actúa a la vez como detonante y como eje organizativo de la conspiración antiperonista.

La Iglesia se ha beneficiado notablemente con el peronismo, que le ha proporcionado privilegios materiales de todo tipo, control sobre la educación y la cul-

tura, influencia social y política. El malestar de la Iglesia hacia el régimen surge y se desarrolla por los aspectos populistas y demagógicos del peronismo, y por la competencia de idolatrías y lealtades que se establece inevitablemente entre ambas fuerzas. La organización de un pequeño partido demócrata cristiano bajo patrocinio de la Iglesia desencadena una colérica reacción de Perón, seguida de atropellos y humillaciones contra la jerarquía eclesiástica. La Iglesia asume el liderazgo ideológico y agitativo de la conspiración, vuelca la adhesión de las fuerzas armadas, prepara el camino para la insurrección.

El 16 de junio de 1955, fracasa una primera intentona, que alcanza a bombardear la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo de Buenos Aires con efectivos de aviación y causa un considerable número de muertos. El ejército salva momentáneamente a Perón, pero rompe el equilibrio en su propio favor, convierte al gobierno en su prisionero, obliga al presidente a debilitar los controles sobre la vida política. Una última tentativa de Perón por recuperar la iniciativa y el control, amenazante para sus opositores, desencadena el segundo intento. El 16 de septiembre de 1955 surge un foco revolucionario militar en la ciudad de Córdoba, pocos días después apoyado por la flota de guerra. Perón conserva todavía el control del aparato militar y represivo, pero renuncia a utilizarlo enérgicamente, así como a movilizar a sus propias bases obreras y populares. Se entrega sin lucha y marcha hacia un exilio tranquilo y fastuoso, otorgado sucesivamente por dictadores que gozan de la simpatía y apoyo de Estados Unidos: Stroessner, del Paraguay; Trujillo, de la República Dominicana; Franco, de España. Desde lejos, beneficiado por las limitaciones y fracasos de los gobiernos que lo suceden, sigue siendo un poderoso factor en la política de masas. Su movimiento, a través de vicisitudes y trasformaciones de diversos tipos, ha contribuido a mantener a la Argentina, hasta la fecha, en un estado de crisis política permanente que revertirá incluso sobre el gobierno peronista instaurado por el retorno al poder en 1973.

V. DOS DÉCADAS DE CRISIS PERMANENTE (1955-1975)

El período que va desde la caída del primer gobierno peronista en 1955 hasta la primera mitad del segundo (1975) se presenta como una fase de crisis virtualmente permanente y de emergencia de una encrucijada histórica en la cual la alternativa regresiva se perfila con claridad y probabilidad mayores que una alternativa eventualmente progresista. El número y la variabilidad de los conflictos sociopolíticos y la rápida sucesión de los gobiernos encubren la unidad y la continuidad profundas del proceso general cuyos comienzos pueden ser ubicados en la etapa final del primer gobierno peronista.

1. *Las tendencias estructurales*

Una posible clave general del proceso es la contradicción entre los intentos de implantar un neocapitalismo tardío y dependiente como modelo de economía,

de crecimiento y de sociedad, y la multiplicación de costos y conflictos sociopolíticos e ideológicos que surgen necesariamente de la creación de las premisas y de la implantación efectiva de tal proyecto. El proceso general, sus componentes y manifestaciones centrales, resultan del entrelazamiento e interacción de factores y elementos externos e internos.

Desde el *punto de vista externo,* termina de operacionalizarse un modo específico de reajuste de la Argentina al nuevo sistema mundial. Éste se caracteriza por la concentración extrema del poder y la preminencia de la bipolaridad —en términos de competencia-conflicto y de coexistencia-colaboración— entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A ello corresponde en el caso argentino el desplazamiento final de la hegemonía británica por la norteamericana, y los cambios consiguientes y concomitantes en las formas de la dependencia externa del país hacia el gobierno y las corporaciones multinacionales de los Estados Unidos. La penetración norteamericana se da como injerencia creciente en las grandes esferas de la vida nacional, y como ensamblamiento de los grupos foráneos de este origen con varios de los principales sectores y actividades, sobre todo en lo correspondiente a la industria y los servicios urbanos, el comercio y las finanzas, la trasferencia de tecnología, los aparatos políticos y cultural-ideológicos (medios masivos, educación, partidos). La constatación de esta tendencia general prevaleciente requiere, sin embargo, dos correctivos.

En primer lugar, la influencia británica se debilita pero no es totalmente eliminada, y se mantiene en todo lo vinculado con la continuidad del predominio de los sectores agroexportadores nativos en la economía, la sociedad, la ideología y los bloques en el poder.

En segundo lugar, Estados Unidos y sus corporaciones otorgan una evaluación relativamente secundaria a la Argentina en su estrategia y en sus proyectos. Presionan sistemáticamente en favor de la imposición de su hegemonía sobre el país, del desplazamiento total de la influencia británica, y del máximo aprovechamiento de viejas y nuevas posibilidades de dominio y explotación. Al mismo tiempo, no dejan nunca de sentir una desconfianza visceral sobre las posibilidades del país en términos de su predisposición para el sometimiento incondicional; el mantenimiento de una paz social favorable a la seguridad y lucrativa de las inversiones; la estabilidad política asegurada por la combinación de manipulación y autoritarismo; la continuidad de gobiernos confiables; la permanencia de políticas acordes con los requerimientos económicos, diplomáticos y militares de la potencia hegemónica. Esta actitud básica del estado y los monopolios norteamericanos se manifiesta en el monto relativamente reducido del flujo de inversiones, que se canalizan sobre todo a pocos sectores particularmente atractivos (petróleo, automotores y otros bienes de consumo duradero, operaciones especulativas de corto plazo); en el apoyo limitado y tibio que se da a los gobiernos argentinos claramente pronorteamericanos; en el tratamiento privilegiado que se otorga a Brasil como el aliado-eje de la política de Estados Unidos en Sudamérica.

De todas maneras, las nuevas formas de dependencia de Argentina hacia Estados Unidos contribuyen a explicar la continuidad y el refuerzo de las limitaciones tradicionales exhibidas por la política exterior del país: abdicación de todo intento de diplomacia independiente y ambiciosa; fácil sometimiento a las pre-

siones e imposiciones de la potencia hegemónica, incluso la adecuación espontánea a sus grandes líneas e intereses; desdén por las posibilidades de coincidencia y alianza con otros países de la región y del Tercer Mundo; inexistencia o debilidad de las relaciones con países socialistas; proclividad a las conductas internacionales de tipo neutro o reaccionario. Las debilidades y los eclipses de la política internacional de Argentina reducen más aún sus posibilidades de autonomía y refuerzan el desinterés de Estados Unidos por el otorgamiento de concesiones tendientes al acercamiento de gobiernos argentinos de todos modos predispuestos al sometimiento.

Internamente se da una fase peculiar de crecimiento irregular y desequilibrado en la economía y de cambios rápidos y conflictivos en la sociedad, sin desembocarse en algún tipo de desenlace traducido en un reordenamiento orgánico y perdurable del sistema. La producción primario-exportadora y la sociedad rural en parte pierden importancia relativa, en parte se trasforman y adaptan a nuevas condiciones. El latifundio y la producción agraria se modernizan relativamente; se entrelazan con actividades y sectores de tipo urbano y con intereses externos; logran conservar un predominio que no guarda correspondencia con la importancia social decreciente del agro y de la población rural en el país. El eje de la nación se desplaza cada vez más, desde muchos puntos de vista, hacia la constelación constituida por la hiperurbanización, la industrialización sustitutiva de importaciones y los servicios, el estado central.

La estructura socioeconómica crece y se diversifica, y sus principales áreas se modernizan, en el proceso de emergencia de una forma nacionalmente específica de *neocapitalismo tardío y dependiente*. Éste se configura a partir y a través de la unidad sin identidad entre la gran empresa nacional y la corporación multinacional que comparten el control de los sectores modernos y dinámicos de la economía y adquieren un creciente predominio en el sistema, sin dejar de coexistir con empresas semimodernas de productividad y rentabilidad más bajas y con una masa de unidades medianas, pequeñas y artesanales. La producción se restructura y opera en función de la especialización para la exportación de viejo y nuevo tipo y para el usufructo de un mercado interno constituido por los grupos sociales de un nivel alto y medio de mayor afluencia y las masas urbanas. La gran empresa requiere y aprovecha las condiciones favorables provenientes del proteccionismo estatal, y de la disponibilidad de mano de obra relativamente barata, normalmente conformista y predispuesta a la aceptación de las reglas del sistema cuya legitimidad y progreso vacila y tarda en cuestionar. La promesa del desarrollo integral encubre un proyecto real de mero crecimiento que no termina de producirse efectivamente. El modelo neocapitalista presupone y exige una distribución desigual del ingreso que tiende a volverse cada vez más regresiva, la restricción y la depresión de los niveles de remuneración, consumo y bienestar. Requiere también la imposición de un orden social y político que promueva y mantenga la falta de participación, la apatía y el sometimiento de las mayorías medias y populares. Este requisito central entra en contradicción con las características de la estratificación, del clima cultural-ideológico, y del proceso sociopolítico que se van perfilando desde la fase peronista.

La estructura social no deja de diversificarse y complejizarse, en conjunto y en

cuanto a las clases y grupos que la integran, unas y otros proclives a desplegar estrategias y tácticas tendientes a mantener e incrementar su participación en el poder y las decisiones, el ingreso y los beneficios de un crecimiento suficiente para generar expectativas y demandas pero insuficiente para satisfacerlas de modo razonablemente adecuado en lo que respecta a gran parte o a la totalidad de los componentes de la sociedad nacional. Las tensiones y conflictos consiguientes se dan de modo casi permanente entre clases y grupos fundamentales que se modifican en el propio proceso de cambio y lucha que al mismo tiempo contribuyen en conjunto a determinar.

Cuestionada y debilitada en su posición hegemónica y restringida en su pretensión de monopolio gubernamental, la *oligarquía* conserva casi intactas sus bases materiales, su poder económico, su influencia social e ideológica, su capacidad de controlar y manipular en mayor o menor grado a otras clases y grupos, a partidos e instituciones, al estado mismo. La oligarquía acepta y absorbe ciertos elementos del cambio y la modernización, pero priva a estos procesos de intensidad y profundidad y logra conservar lo esencial del sistema y de sus intereses de clase. Se adapta a las nuevas realidades y se autotrasforma en *nueva élite oligárquica.* Se restructura e integra con representantes y miembros del gran capital nativo (financiero, industrial, comercial, agrario), en alianza con las corporaciones multinacionales de la potencia hegemónica y de países capitalistas avanzados de segunda línea. A partir de este nuevo polo social, la nueva élite oligárquica establece coincidencias operativas y constituye coaliciones concretas —temporarias o duraderas— con las fuerzas armadas, la Iglesia, sectores de la clase media (intelectualidad tecnoburocrática y profesional, empresariado urbano y rural) e incluso de la burocracia sindical y de la aristocracia obrera. Si no recupera su posición dominante tradicional, si pierde y no llega a reconstruir una representación partidaria orgánica y eficaz, consigue que fuerzas políticas de otras clases actúen en favor de sus intereses y objetivos. Logra coparticipar con otros grupos aliados —en grado variable según los períodos y las coyunturas— en la hegemonía general y en las funciones gubernamentales. Todo partido importante que aspira al gobierno incluye en su dirección y en su seno emisarios, representantes y agentes de la élite oligárquica, y no se atreve a proyectar o ejecutar en el llano o desde el estado cualquier política general o parcial que pueda afectar los intereses de aquélla.

La preservación de mucho de lo esencial en la dominación oligárquica es a la vez causa y efecto de un fenómeno de importancia incalculable: la aparición tardía, la debilidad relativa, el apaciguamiento, la falta de autonomía y de proyecto propio de las clases y grupos que deberían haber tenido o en cierta medida tuvieron interés en el desarrollo general, el crecimiento, la modernización, la democratización, la autonomía internacional.

La *clase media* también se trasforma, abarcando e integrando en su seno a sectores de origen tradicional con otros nuevos que surgen o se refuerzan en función de la urbanización, la industrialización, la primacía de las grandes empresas modernas y dinámicas de capital nacional e internacional, la educación masiva, la creciente sofisticación cultural-ideológica y científico-técnica, el intervencionismo estatal, la expansión del terciario. En su conjunto, y sobre todo en lo que respecta a sus sectores más recientes, la clase media se caracteriza por su carácter hetero-

géneo, su falta de coherencia y de autonomía, su incapacidad para autorganizarse como clase, para darse una ideología propia y una expresión política unificada, para formular e imponer algún proyecto histórico específico y pujar para su aceptación por otras clases y grupos.

En su conjunto, y en sus principales grupos y tendencias, la clase media mantiene y refuerza su dependencia y su satelización respecto a la gran empresa nacional y extranjera, a la clase alta y al estado. No usa un poder social y político de todas maneras incrementado para lograr el acceso al estado y su control, ni menos aún para exigir e imponer trasformaciones significativas del sistema que por el contrario defiende y contribuye a consolidar. Presiona a partir de sus propias fuerzas y de la manipulación de sectores populares, para el logro de apoyos y favores de los aparatos políticos y del estado que permitan logros excepcionales y casi parasitarios de autoexpansión y automejoramiento, y un mayor grado de coparticipación siempre subordinada en el ingreso, el poder, las decisiones y el prestigio. Correlativamente, se desinteresan y oponen al aumento de la participación social y política y de las oportunidades y facilidades para los grupos trabajadores y populares de la ciudad y el campo, más allá del punto en que tales avances masivos amenacen los intereses y conquistas de la clase media y el equilibrio general del sistema. Esta actitud básica no excluye la aceptación verbal y la reivindicación demagógica de ciertos intereses y objetivos obreros y populares por parte de grupos políticos de la clase media que buscan el logro de influencia y la capacidad de manipulación de los trabajadores como medio de presión negociadora de sentido redistributivo sobre la clase dominante y el estado.

En el balance general, sólo sectores muy reducidos de la clase media conservan y mejoran su posición en este período, ascienden y se integran en el nivel superior, coparticipan en el poder y en el estado, de manera autónoma o como grupos tecnoburocráticos. La mayoría sufre un proceso de desplazamiento, retrogradación, ruina, sometimiento a la gran empresa y al estado. En conjunto, la clase media tiende al comportamiento conformista y busca el compromiso. Mantiene y refuerza el conservadorismo; la defensa del orden; el apoyo a las estructuras clasistas, elitistas y defensivas de la sociedad y el estado y represivas de las prácticas de los disidentes y las mayorías. Actúa como apoyo activo o pasivo de los regímenes autoritario-conservadores, aportándoles dirigentes, cuadros ideólogos, masa de sustentación y de maniobra, soportes y refuerzos del equilibrio.

A la inversa, una tendencia minoritaria pero significativa de la clase media va emergiendo a través de actitudes y prácticas de tipo crítico e impugnador. A partir de las capas de estudiantes, intelectuales, profesionales y elementos amenazados por el desclasamiento, la clase media aporta ideólogos, publicistas, dirigentes, cuadros y militantes a los movimientos y regímenes demoliberales, desarrollistas, nacional-populistas, y a los grupos revolucionarios y guerrilleros. Aun en estos últimos casos sin embargo, cabe sospechar que las formas de la rebeldía y el cuestionamiento revisten y disimulan contenidos y tendencias de una clase media cada vez más afectada por la frustración, la confusión y la desesperación. Ello se manifiesta en las actitudes y prácticas elitistas; en la postura mesiánica hacia las masas; en el trasfondo de desesperación, furia irracional y destructividad ciega que se perfila tras los proyectos y operaciones de muchos grupos; en las incon-

gruencias y contradicciones entre las posturas y los hechos; en los cambios vertiginosos de líneas políticas y conductas personales; en la propensión al uso de la ideología y de la acción para el aprovechamiento y el mejoramiento de las posibilidades individuales y de pequeños grupos. Es posible incluso que algunos rasgos significativos de la crisis política argentina de este período estén relacionados con la puja entre diferentes sectores de la clase media por la redistribución del poder, el ingreso y el prestigio, en su propio seno y en la sociedad global.

El proceso abierto desde 1955 revela como uno de sus caracteres centrales la conversión de la *clase trabajadora* en protagonista fundamental pero *sui generis* de la sociedad y la política argentinas, a la vez factor de conservación y de desequilibrio del sistema.

La *clase trabajadora* urbana sigue aumentando en número y en concentración social, geográfica y organizativa. Mantiene e incrementa sus necesidades, sus expectativas y sus demandas, su potencial de presión y movilización. Logra en general mejoras considerables en términos de ocupación estable, ingreso, condiciones de vida, educación e información. Desde muchos puntos de vista su situación parece privilegiada en comparación con sus equivalentes de clase en el interior rural y semiurbano y en la casi totalidad de los países latinoamericanos.

Al mismo tiempo, la clase trabajadora argentina de hoy exhibe una formación reciente y un carácter heterogéneo. Se presenta como conglomerado de capas y estratos diferentes y divergentes en estructura, situación, actitudes y tendencias. No ha logrado todavía en plenitud la unidad interna, la identidad social inequívoca, la conciencia orgánica y madura de clase, la definición propia de sus intereses y fines, el control exclusivo de instrumentos propios de praxis colectiva. No ha sido capaz de diseñar y operar un modelo específico de estrategia y de sociedad deseada que a la vez exprese y promueva sus intereses y le permita llegar a ser grupo hegemónico en una coalición de sectores víctimas de la dominación y la explotación. La irrupción y las presiones de la clase trabajadora se expresan, y son controladas, canalizadas y utilizadas, por una organización política y un sindicalismo de tipo nacional-populista, y por un estado que el peronismo defiende y refuerza desde el poder y fuera de él, como instrumento general de conservación y como medio de imposición congelante sobre el movimiento obrero.

Con la injerencia, la regulación y el apoyo del estado —que se ejercen de manera similar a este respecto por gobiernos peronistas y no peronistas— se sigue desarrollando y continúa en operación un *sindicalismo de masas* de gravitación decisiva en la vida nacional. El mismo se estructura como organización fuertemente burocratizada, compuesta por un núcleo de dirigentes y cuadros profesionalizados y por un aparato imponente de funciones, poderes, instrumentos y recursos. La maquinaria sindical expresa y organiza una amplia base de masas heterogéneas, diferentes por categorías y especializaciones, en las que la afiliación formal, la lealtad pasiva y el comportamiento clientelístico predominan sobre la adhesión intensa, la participación activa y el espíritu militante.

El aparato sindical es la expresión del grado de desarrollo y de conciencia de los trabajadores urbanos, y representa en ciertos aspectos un avance y un refuerzo del potencial de progreso del proletariado y de la sociedad nacional. Se constituye como mecanismo de expresión y de satisfacción de las reivindicaciones mínimas,

de la distribución de servicios y ventajas y de la solución de problemas, individuales y colectivos de los asalariados. Sus máximos logros están referidos a la mejora relativa de la capacidad de presión y negociación en el mercado de trabajo y servicios sociales y en el sistema político. Ello llega incluso a la participación de la clase trabajadora en el estado sobre todo durante los gobiernos peronistas pero también en otros que buscan atraerse la simpatía o la neutralidad benevolente de los trabajadores y de sus líderes. Esta participación no deja sin embargo de ser en gran parte simbólica, burocráticamente mediatizada y en posición subordinada y precaria.

Al mismo tiempo, la burocracia y la máquina sindicales encuadran a sus bases, las interpretan y representan para manipularlas e instrumentarlas, a través de métodos y procedimientos de tipo autoritario y mediatizador. El aparato sindical sirve y es usado para el encauce y la regulación de los dinamismos y presiones populares, para su freno y su integración en el sistema, y para la manipulación y beneficio de los líderes gremiales y políticos (elecciones y plebiscitos, refuerzo de la capacidad de negociación de los dirigentes y plataforma de su ascenso social y político, apoyo a los gobiernos peronistas).

Los éxitos y conquistas se han visto reducidos o desvirtuados por los propios caracteres y efectos de este sindicalismo; su contribución a la creación y refuerzo de una situación estructural general que induce la apatía y el conformismo; la incapacidad para la autonomía política e ideológica y el proyecto histórico propio, e incluso para contrarrestar y superar las incidencias negativas y regresivas del sistema.

Pese a estas limitaciones, la irrupción y las presiones de masas heterogéneas e insatisfechas van incidiendo sobre la economía, la sociedad, la cultura y la política. Se mantienen e intensifican, aunque de modo desnivelado y oscilante, en función de las tendencias al estancamiento y a la regresión en la economía y en la sociedad, y de los obstáculos consiguientes para la continuidad del proceso de integración limitada en el sistema, del debilitamiento o el agotamiento de las concepciones y organizaciones tradicionales, del fracaso de las experiencias nacional-populistas y desarrollistas. Tienden a surgir o a reforzarse y desplegarse la capacidad potencial y actual de presión, crítica e impugnación en sectores considerables de las masas, y su amenaza virtual o efectiva a la coherencia y estabilidad del sistema.

La concentración de este análisis en los trabajadores de la ciudad responde a una característica histórico-estructural de la Argentina, referida al grado creciente de concentración urbana; la baja participación cuantitativa y el reducido peso cualitativo de la población rural en la sociedad global; el aislamiento y desorganización de sus trabajadores y campesinos; el prolongado desinterés de los sectores sociales y políticos de las ciudades por tener en cuenta, apoyar y movilizar a las masas agrarias en función de alguna estrategia y proyecto de alcance nacional. La crisis argentina constituye *hasta hoy* un drama primordial o casi exclusivamente urbano.

Más aún que en las fases precedentes, en las dos últimas décadas se da un proceso de cambio de carácter sorpresivo, desigual y combinado. Ninguna clase, grupo o institución lo promueve deliberadamente, lo aprovecha de modo sistemá-

tico, tiene clara conciencia de lo que ocurre y de sus implicaciones. Las evoluciones y trasformaciones se van produciendo sobre todo como resultado de factores accidentales, impersonales y externos a la Argentina y sus centros de decisión; como subproductos involuntarios e imprevistos de medidas coyunturales adoptadas por los grupos dominantes o en beneficio de éstos; o como expresiones o desenlaces del entrechocar espontáneo de clases y sectores. En el proceso y en los resultados provisorios, se entrelazan elementos de progreso, de estancamiento y de regresión, sin desembocarse hasta la fecha en alguna forma de restructuración total que integre los diversos componentes y resultados bajo el signo de una racionalidad prevaleciente (regresiva, estática o progresista). Esta caracterización social condiciona y determina fenómenos similares en la cultura, la ideología y la política que a su vez retroactúan sobre la estructura y la dinámica de la sociedad, la influyen y modelan.

2. *El pandemonio ideológico*

La proliferación, la heterogeneidad y la confusión de *pautas y tendencias culturales e ideológicas,* en sus principales constelaciones y en sus componentes y relaciones recíprocas, se presenta ya como una de las características notables de este período. Algunos de los rasgos significativos deben ser sumariamente destacados.

La élite oligárquica refina y extiende su hegemonía en la esfera cultural-ideológica. La propia concepción del mundo que aquélla sigue imponiendo con un grado considerable de éxito combina elementos de liberalismo económico, conservadurismo social sofisticado y autoritarismo político, incluso la simpatía latente o encubierta por el fascismo. Propone el modelo paradigmático de una Argentina tradicional a modernizar parcial y superficialmente. Recusa todo elemento y proyecto de cambio que no coincida estrictamente con los rasgos y exigencias del neocapitalismo, lo contradiga o amenace. Define de modo altamente restrictivo los límites de vigencia y los alcances reales del sistema democrático. Rechaza el pluralismo y la libertad para las actividades y los actores de la literatura y el arte, la ciencia y la tecnología.

La eficacia de la élite oligárquica en esta esfera puede ser percibida y evaluada ante todo en relación a su capacidad de controlar directa o indirectamente, por sí o por intermediarios, los centros fundamentales de la instancia cultural-ideológica: medios de masas, educación, investigación científica e innovación tecnológica. Ello le permite asimismo influir e instrumentar otras corrientes ideológicas que no nacen de la propia élite oligárquica ni corresponden a su esencia; vertientes conservadoras en el socialismo tradicional y en el comunismo stalinista, en el desarrollismo, en el nacional-populismo, sin olvidar los gérmenes de un fascismo que declama demagógicamente su hostilidad a la oligarquía y al imperialismo para defender mejor a una y a otro y al orden existente.

En todo el ámbito de la sociedad nacional, pero especialmente en el nivel de las clases medias y populares, se difunden y coexisten, compiten y se entrelazan, las ideologías del populismo, el desarrollismo, y la izquierda en sus diferentes variedades.

El *populismo* privilegia la denuncia verbal y la hostilidad simbólica contra la dominación extranjera y la oligarquía tradicional. Asume y cumple la reivindicación organicista de una nación estructurada como bloque monolítico, la idealización de un pasado simplificado y mitificado, la promesa declaratoria de un destino manifiesto de potencia. Escamotea o repudia los grandes conflictos sociales e ideológico-políticos como amenaza de la unidad necesaria. Exalta demagógicamente las masas depuradas de contaminaciones clasistas como actor necesario y beneficiario legítimo de la justicia redistributiva. Enfatiza el autoritarismo vertical del líder carismático, sus servidores y herederos, y el encuadre riguroso de las bases populares que la retórica proclama sujeto de la historia y la práctica convierte en objeto pasivamente manipulable del caudillo y su aparato.

El *desarrollismo* es expresión y producto de una coalición de políticos tradicionales "modernizados", intelectuales y tecnoburócratas con vocación de poder, empresarios nacionales, oligarcas esclarecidos, aventureros y especuladores. Esta constelación abigarrada elabora y asume tal concepción como variante específica de un economicismo reduccionista, fortalecido con los aportes selectivamente recogidos y arbitrariamente reagrupados del liberalismo, el nacional-populismo, el marxismo de filiación stalinista, el pensamiento tecnoburocrático. El desarrollismo denuncia la dependencia externa y el atraso estructural, y para su superación propone un modelo de mero crecimiento encubierto con la imagen del desarrollo integral, que racionaliza y legitima los rasgos y los requerimientos del neocapitalismo tardío y dependiente. La instrumentación del modelo requiere una combinación de una sedicente alianza de clases con una dirección y una estructura autoritarias.

Como reflejo de un proceso de crisis y de atomización acelerada de la *izquierda tradicional* y de la *nueva izquierda emergente,* se produce en estos sectores una proliferación extrema de tendencias ideológicas (socialismo liberal, stalinismo, trotskismo, maoísmo, castro-guevarismo, neoanarquismo), cuyas subdivisiones y variantes tienden al infinito. La variabilidad coexiste sin embargo con la comunidad de ciertos rasgos y resultados limitantes de la potencial fertilidad del fenómeno: superficialidad, sobreideologización, énfasis discursivo, escolasticismo, dogmatismo, mitologización, fatalismo triunfalista, mimetización táctica y adaptación demagógica a otras ideologías de mayor influencia sobre las clases medias y populares.

Las fronteras y diferenciaciones entre estas corrientes son más tenues y menos significativas de lo que aparece en una apreciación superficial que se atenga a las explicitaciones formales. Los componentes y los adherentes de estas ideologías se acercan sin dejar de competir: comparten premisas, orientaciones y resultados; se influyen, se interpenetran y se interfertilizan. Esta convergencia surge ante todo de una comunidad de origen y de destino: reclutamiento predominante en la clase media; aspiraciones al mejoramiento de las posibilidades como grupos y como individuos; tendencia a la conversión en élite dirigente y al comportamiento como tal. Se revela además en fenómenos y consecuencias tales como: aceptación o reivindicación de elementos irracionales; autoritarismo suficiente en la pretensión de imponer la propia ortodoxia; sectarismo; desconfianza o rechazo del pensamiento crítico, de la pluralidad y la libre confrontación de ideas y prácticas, del conocimiento científicamente riguroso; concepción reduccionista de la sociedad, la

historia y la política; visión simplificada, fatalista y compulsivamente optimista del progreso nacional como algo lineal e ineluctable; adhesión a la mitología nacional-populista.

A partir y a través de intereses, premisas y procesos diferentes, las principales corrientes ideológicas que influyen en las clases medias y populares, convergen en la generación y el fortalecimiento de ciertos resultados negativos. Contribuyen al creciente empobrecimiento de las condiciones para la producción, la confrontación y la aplicación de conocimientos e ideas, valores y técnicas. Deterioran o destruyen los focos y las instituciones de creación e innovación. Imposibilitan la continuidad en el esfuerzo sistemático y en las realizaciones acumulativas que deberían dar lugar a saltos cualitativos en la praxis colectiva. Frustran y desalientan las personalidades críticas y creativas, y refuerzan la tendencia a su exilio interno y a su éxodo externo. Enrarecen, trivializan, promueven el estancamiento y la decadencia de la cultura, la ciencia y la técnica. Operan como instrumentos involuntarios o agentes inconscientes de la derecha. Las implicaciones políticas de este proceso son fácilmente perceptibles.

3. *Política y estado*

La sociedad argentina no ha dejado en estos últimos 20 años de diversificarse y complejizarse y de aumentar su heterogeneidad y la de sus clases fundamentales, cada una compuesta por fracciones, estratos y grupos con intereses no siempre coincidentes, diferente capacidad para reorientarse y reorganizarse (social, ideológica, políticamente), distinciones apreciables en la intensidad, el ritmo y el sentido de sus acciones. Se multiplican las trabas y las perturbaciones para la creación y el uso de formas racionales de acción política y para el logro de un consenso amplio sobre los grandes fines y tareas nacionales. Proliferan las divergencias; las situaciones de incoherencia, empate y parálisis. Se dificulta o se imposibilita la clara formulación de los problemas y de sus términos exactos, y el logro de decisiones resolutorias de los mismos, en todas las cuestiones básicas del desarrollo nacional.

Las instituciones sociales y los partidos políticos parecen incapaces de aglutinar y expresar congruentemente en términos de doctrina y de acción a las clases, fracciones y grupos, y menos aún demuestran su aptitud para la agregación y la articulación de aquéllas en estrategias de gran envergadura y tácticas significativas. Los *partidos políticos* sobre todo se rutinizan, se esclerosan, se desajustan en su interior y en su relación con las realidades nacionales. Se incapacitan para adaptarse a rápidos cambios y a desafíos inéditos. Reducen o pierden su representatividad y su capacidad operativa respecto a las clases y sus sectores y a la sociedad. Las clases, las fracciones y los grupos no se fusionan bajo direcciones unificadas y eficaces, ni se sienten totalmente representadas por las que existen. Tienden así a carecer de cohesión social, de conciencia unificada, de representación política eficaz, de aptitud para formular e imponer sus intereses y proyectos y para hacerlos aceptar por sectores mayoritarios, todo ello en su propio nombre y a través de sus propios órganos. Los partidos pierden importancia, credibi-

lidad, confianza en sí mismos, eficacia; se desgarran en conflictos internos, pujas por el control interno y la representatividad, escisiones.

Esta constelación de fenómenos políticos es a la vez efecto y causa de una situación histórica general de predominio creciente de las situaciones de equilibrio inestable entre clases, fracciones, grupos, órdenes institucionales, cada una de las cuales contribuye con su participación a generar crisis globales al mismo tiempo que sufre sus propias crisis internas. La clase dominante y sus fracciones se debilitan relativamente, declinan o ven discutida y restringida su capacidad actual o potencial de hegemonía, pero logran mantener en medida considerable su influencia y su control sobre la estructura social y de poder en parte tradicional y en parte modernizada y sobre los centros de decisión, formulación, y ejecución de políticas. Las clases medias y populares desarrollan sin tregua sus necesidades y expectativas; formulan sus demandas y ejercen sus presiones en favor de su satisfacción y de una mayor participación en el sistema; pasan de la pasividad y el sometimiento al descontento difuso o articulado, a la actividad, la crítica, la impugnación a veces; desafían de diversos modos la dominación tradicional sin ser capaces de superar los mecanismos estructurales de congelamiento de la participación ni de imponer su propia hegemonía. Una clase ha perdido en parte, otras no han ganado, la capacidad efectiva de regir a la nación.

De todas maneras, no ha dejado de producirse y de continuar la declinación relativa, la descomposición rápida de las estructuras y condiciones que dieron base y sentido a la oligarquía, a su dominación y hegemonía y al estado tradicional. El modelo neocapitalista privilegia a ciertas empresas y ramas económicas, y a ciertas clases y regiones, en desmedro de las restantes; genera y multiplica tensiones, conflictos y antagonismos. Los requerimientos de la inversión nacional y extranjera, de la acumulación y rentabilidad de la gran empresa, exigen un alto grado de concentración del poder y la imposición de un orden autoritario extremo para el logro de la sumisión de las mayorías. Al mismo tiempo, la élite oligárquica y sus aliados internos y externos encuentran dificultades cada vez mayores para asegurar la reproducción y la continuidad de las relaciones sociales básicas, el ajuste recíproco de estructuras y procesos. La tendencia a la entropía comienza a perfilarse de modo cada vez más claro y amenazante. Las formas organizativas y los mecanismos esenciales de la sociedad se desgastan y funcionan a un rendimiento decreciente. Se debilitan la adhesión de los actores sociales y el consenso colectivo hacia el sistema. Se abre cada vez más una brecha entre los intereses, los valores y las normas de la sociedad oficial, y los cálculos, las práctica y las estrategias de la mayoría de los actores. Se multiplican las tendencias y dinamismos sociales que generan cambios amenazantes, poco previsibles y difícilmente controlables a través de los resortes normales. El desorden y la incertidumbre cunden en y para grandes sectores, y a escala del conjunto.

Los últimos 20 años corresponden a una fase de crisis política a la vez orgánica y endémica. La legitimidad se agrieta, la brecha de consenso se abre, los recursos coercitivos se debilitan o resultan insuficientes, las coyunturas de vacío de poder se suceden. Todo ello dificulta e impide a la vez: el mantenimiento de la vieja hegemonía oligárquica; su renacimiento bajo nuevas formas y con nuevas

bases y diferentes instrumentos; el establecimiento y la continuidad de todo lo que se aproxime a una democracia liberal de participación ampliada.

La crisis de la dominación oligárquica —bajo formas tradicionales o modernizadas— y del sistema político se expresa en partidos y movimientos, ensayos y regímenes que aparecen a la vez como reflejo, continuidad e intento de superación de dicha crisis: democrático-liberales, desarrollistas, nacional-populistas, autoritarios o fascistizantes, de vieja o de nueva izquierda. Desde el llano o en el gobierno, estas tentativas políticas no destruyen las bases, los componentes ni los resortes de la dominación oligárquica. Afectan a ésta en mayor o menor grado, pero al mismo tiempo y de diferentes maneras la preservan y refuerzan.

La élite oligárquica acepta, y en algunos casos promueve y aprovecha estos experimentos que no ha suscitado, como imposición inevitable, mal menor o alternativa provisoria, pero nunca termina de aceptarlos ni de controlarlos totalmente. A sus ojos, y a los de la derecha nacional e internacional, estos movimientos y regímenes son, en diferente grado pero de manera finalmente similar, demasiado representativos o tolerantes respecto a las necesidades, demandas y presiones de las masas populares. Aparecen recelosos u hostiles hacia los intereses y exigencias de la élite oligárquica y sus aliados hacia el capital extranjero. No impiden o promueven modelos alternativos de desarrollo y sociedad que resultan poco compatibles u opuestos a los modelos conservadores y regresivos que la élite oligárquica propugna. La élite oligárquica comienza a preocuparse y a irritarse cada vez más por los riesgos actuales o potenciales del desborde de masas y del desencadenamiento de procesos finalmente revolucionarios, que percibe y evalúa a través de una combinación del realismo y del pánico distorsionante de la visión y del juicio. Tiende a desarrollar los prerrequisitos, los componentes y los instrumentos a través de los cuales intenta, en repetidas ocasiones y con éxito variable, impedir que las amenazas se actualicen como realizaciones irreversibles, y busca resolver de modo definitivo y en su beneficio el problema de la hegemonía mediante soluciones autoritarias que se acercan ya a los umbrales de un proyecto fascista.

A partir del régimen oligárquico de la "década infame" y del primer ciclo gubernamental del peronismo, el papel del *estado* y su incidencia en la sociedad no dejan de incrementarse hasta el presente. Aumentan sin cesar el número y la envergadura de sus intervenciones, agencias e instrumentos, y el grado de injerencia, regulación, promoción y participación directa en formas y actividades que se reputan de interés público. La importancia y el impacto del intervencionismo estatal se manifiestan en aspectos e indicadores diversos: gasto público; participación en la oferta y en la demanda de bienes y servicios; contribución directa a la inversión global, y estímulo a la inversión privada; actividades de infraestructura económica y social, de servicios públicos e industrias básicas; mantenimiento y expansión de la ocupación laboral y de la capacidad adquisitiva del mercado; multiplicación y entrelazamientos de resortes y mecanismos de acción (monetarios, cambiarios, crediticios, fiscales, arancelarios; regulación de precios y salarios; contratos públicos; empresas autónomas; agencias de diagnóstico, regulación, promoción y planeamiento). El ascenso del intervencionismo estatal presupone y exige la formación y el predominio de nuevos elencos político-administrativos; el sur-

gimiento de técnicas gubernativas más sofisticadas y eficientes; la ampliación del repertorio de facultades, poderes, instituciones e instrumentos; la expansión cuantitativa y cualitativa de la tecnoburocracia.

El estado, su aparato y su personal político y tecnoburocrático asumen la preservación de las bases del sistema, y la obtención de condiciones de estabilidad y crecimiento para el neocapitalismo tardío y dependiente. Ejercen una función supletoria para la atención de los problemas creados por nuevos procesos y desequilibrios internos y externos, y para la satisfacción de viejas necesidades incrementadas y de otras nuevas, que no la encuentran adecuadamente a través del mercado, de los grupos dominantes y de las grandes empresas. Promueven y regulan las condiciones y actividades indispensables para el funcionamiento del sistema; complementan los desfallecimientos, las insuficiencias y las ausencias de la iniciativa privada, y preparan sus avances, sin pretender remplazarla, subordinarla ni dirigirla. Despliegan políticas compensatorias, anticíclicas, de mero crecimiento y de modernización relativa y superficial. El estado asume así la defensa de la clase dominante; crea marcos y requisitos favorables para la consolidación y la expansión de su ingreso, su acumulación, su rentabilidad y su poder. Reconoce a la gran empresa privada como unidad fundamental de la sociedad. Su papel es particularmente relevante en la tarea de compatibilización e integración de intereses heterogéneos que coparticipan en el sistema de dominación y compiten por la primacía; negocia sus conflictos y logra compromisos para la constitución de coaliciones y de un bloque unificado de acción común; establece mecanismos para la obtención de soluciones permanentes al problema de la hegemonía. Al mismo tiempo, el estado regula y arbitra el ascenso parcial y la incorporación limitada al sistema de grupos subordinados; la competencia y el conflicto entre clases y grupos nacionales, y entre estos grupos extranjeros; la exclusión de las mayorías nacionales respecto de la participación autónoma en la vida social y política y en las decisiones sobre la creación, la distribución y el uso del ingreso y del poder. Finalmente, el estado asume las tareas de reajuste del país al sistema internacional en rápido cambio en función de los caracteres y exigencias del modelo neocapitalista (problemas de armonía y conflicto con la potencia hegemónica y las corporaciones multinacionales y con los demás países desarrollados; relaciones con otros países latinoamericanos).

El estado cada vez más intervencionista exhibe un alto grado de ambigüedad y de ineficiencia en su comportamiento. Funciona al servicio de fuerzas hegemónicas y dominantes y de estructuras en parte tradicionales y en parte modernizadas, pero al mismo tiempo debe dar consideración y satisfacción relativas a las necesidades y presiones de los restantes grupos sociales. Ha heredado y conservado una maquinaria y una tradición cultural ideológica que resultan anticuadas en las nuevas circunstancias, que no lo preparan ni capacitan para asumir un número creciente de nuevas y complejas tareas y le presentan su propia intervención como anormal y transitoria. Actúa dentro de marcos y en ambientes desfavorables u hostiles al desarrollo, al cambio a la modernización y a la racionalidad, y bajo la presión e influencia de grupos particulares y de signo enérgicamente privatista. Dentro del estado y sobre él pujan todas las clases, fracciones y estratos de la sociedad nacional, y los grupos extranjeros y grandes potencias, para lograr satisfacción a sus

demandas sectoriales. La acción de los diferentes gobiernos parece convertirse frecuentemente en una mera resultante inestable del juego de presiones múltiples, y se ve así refractada, modificada y desvirtuada en sus intervenciones y en las consecuencias previstas para las mismas.

El estado carece de precedentes válidos y de una filosofía unificada y actualizada que le permitan definir precisamente el carácter, el alcance y los métodos de sus intervenciones y controles. Unas y otros no se producen como expresión de una voluntad deliberada de trasformación planificada. Surgen y se mantienen por la improvisación, por la presión y el apremio de situaciones circunstanciales y de emergencia. Se cumplen con una especie de mala conciencia y con una ambigüedad de efectos paralizantes, en virtud de las cuales no se usan, o se usan mal, los instrumentos de política económico-social y las empresas públicas que, de todas maneras, han ido concentrándose en su seno. Las intervenciones no integran un plan; resultan inorgánicas y contradictorias; causan desorganizaciones y perturbaciones no previstas; chocan entre sí y con otros actos y objetivos del estado; ven además alimentada su irracionalidad y su anarquía por factores externos.

La capacidad del estado para operar como agente eficaz del desarrollo resulta así considerablemente limitada o desvirtuada. Las acciones valerosas, de gran impacto y a largo plazo, requeridas por una estrategia de auténtico desarrollo, suelen ser rechazadas o postergadas por gobiernos de representatividad limitada o discutida; no sustentados en una sólida trama de fuerzas sociales y políticas activamente comprometidas con una perspectiva de cambio progresivo; presionados por minorías hostiles a toda innovación social significativa; de precaria base política; afectados por frecuentes cambios en el equilibrio interno de poderes; absorbidos por dificultades inmediatas que impiden la visión clara y la decisión certera y rápida; carentes de políticas nacionales definidas y de un aparato administrativo modernizado. El estado tiende a desertar de las funciones y responsabilidades que le corresponde asumir; delega sus poderes e instrumentos a los verdaderos factores de poder. No proporciona una ideología, orientaciones valorativas, opciones definidas ante múltiples alternativas y planes que hagan posibles la existencia y la viabilidad de una estrategia general y de políticas concretas para el desarrollo interno y la política internacional independientes. La estrategia y las políticas del estado quedan libradas a la dinámica del mercado y de los intereses externos más organizados y dominantes, que se desinteresan de aquellos objetivos o bien les imprimen su signo particularista y limitativo.

Estas fallas y limitaciones del estado se refuerzan cada vez más a través de una nueva combinación de neoliberalismo económico, de conservatismo social y de autoritarismo político. El *neoliberalismo* no implica un debilitamiento del aparato del estado en cuanto constelación de poderes y mecanismos de intervención pública en la economía y la sociedad, sino su creciente utilización en favor de las "fuerzas del mercado", es decir, las corporaciones privadas dominantes, nacionales y extranjeras. La estructura tradicional es reforzada en el nuevo nivel de modernización epidérmica que se alcanzó en las décadas anteriores. Se mantienen abiertas las puertas a las nuevas formas de penetración neocolonialista y se consolidan las modalidades de crecimiento desigual y combinado que privilegia ciertas clases, ramas y regiones en desmedro del resto. Por otra parte, se privilegia el conserva-

tismo social y se afirma el *absolutismo político* a través de casi todos los gobiernos civiles y sobre todo de los regímenes militares que intensifican los métodos y aparatos represivos de tipo público, paraestatal y privado, a los que ninguna esfera de la vida social e individual escapa. El análisis del sistema político y del comportamiento del estado será siempre incompleto si no se tiene en cuenta dos factores: las fuerzas armadas, la tecnoburocracia.

4. *Militarismo tecnoburocrático y tecnoburocracia militarizada*

Desde el golpe militar de 1930, y a través de las etapas examinadas, las *fuerzas armadas* se van convirtiendo en corporación que define y promueve sus propios intereses y objetivos y se interna cada vez más en un proceso de politización permanente. La aventura ocasional de la institución armada que toma el gobierno en las crisis como interludio regulador entre dos regímenes civiles va siendo remplazada primero por la reivindicación de una función tutelar sobre la nación, y luego por el ejercicio de un poder autónomo fuera y por encima de la sociedad y del propio estado. Las fuerzas armadas se sienten y proclaman única agencia integradora y suprema conducción política de la nación. Como tales tienden a operar de modo abierto y total, sin intermediaciones, coberturas ni eufemismos, en una plenitud de poder que no admite restricciones ni plazos.

El advenimiento de esta situación ha sido preparado por las tendencias preexistentes de la sociedad argentina al autoritarismo y la tecnoburocratización, y en respuesta a las exigencias del modelo neocapitalista, a la crisis de hegemonía, a las brechas de consenso y a los vacíos de poder. En el mismo sentido han operado los elementos inherentes a la institución militar que determinan un tipo particular de personalidad, de relaciones humanas y de comportamientos (autoridad jerárquica y disciplina rígida; segregación del mundo civil; proclividad al uso de la violencia; definición militar de la realidad; sentido de superioridad respecto al resto de la sociedad). La importancia de las fuerzas armadas acrece además a través y en función de varias décadas de debilitamiento y desintegración de las instituciones políticas y de los grupos y partidos civiles. Éstos, para instrumentar a las fuerzas armadas en función de sus intereses y cálculos particularistas, las incitan a intervenir corporativamente como casta, a ejercer e imponer su arbitraje en los conflictos y en las funciones gubernamentales más o menos permanentes. En este proceso las fuerzas armadas van dejando de ser medios y adquieren intereses y fines propios para los cuales los civiles y sus instituciones son medios. Se vuelven partido político *sui generis,* integrado y liderado por un nuevo tipo de político armado o de militar político que ejemplifican los generales Justo, Perón y Lanusse.

A la vez como efecto y como causa de esta tendencia, las fuerzas armadas se convierten en objeto de presión y en canal de expresión mediatizada y refractada de todas las clases y de ciertos grupos nacionales e internacionales.

Ante todo, las fuerzas armadas sufren la presión y la influencia de las grandes potencias y de las corporaciones multinacionales, en cuyos conflictos y forcejeos se ven implicadas (bloque capitalista y bloque socialista; guerra fría; Estados Uni-

dos y Gran Bretaña; Pentágono-CIA y Departamento de Estado norteamericanos, etcétera). Son inducidas a la asunción de la cruzada en defensa de la "civilización cristiana y occidental", del *statu quo* y del proyecto de modernización neocapitalista. Las fuerzas armadas tienden a evaluar toda crítica al sistema, todo modelo alternativo y todo proyecto de cambio, como subversión instrumentada por una conspiración interna-externa en la cual convergen las inspiraciones de alguna diabólica metrópoli del caos (Moscú, Pekín, La Habana) y la actividad de los "marxistas apátridas" de origen nativo, y que recurre a todos los medios de la guerra revolucionaria. Se trata entonces de identificar las amenazas exteriores y sus prolongaciones internas, de contrarrestarlas y destruirlas a través de la estrategia de la contra-insurgencia. Ello lleva a la adopción de líneas antipopulares y antinacionales, y a la reafirmación y aplicación de métodos despóticos, que se justifican *a posteriori* por los propios efectos que causan (v. gr., la guerrilla rural y urbana, primero resultado y luego factor de la proscripción electoral del peronismo, de la represión contra la izquierda legal y de la aplicación de la política de contrainsurgencia). La salvación nacional justifica así la toma del poder y la instauración de una dictadura que fija por sí misma los objetivos y los modos y medios de lograrlos, y no reconoce límites ni plazos. Se pretende imponer una disciplina militar a la sociedad a través de gobiernos que se identifican con el estilo y las prácticas del autoritarismo vertical, la represión generalizada, el aumento de una disciplina militar a la sociedad a través de gobiernos que se identifican con el estilo y las prácticas del autoritarismo vertical, la represión generalizada, el aumento y la centralización de los medios de violencia, de control social y de coacción político-ideológica.

El origen social de los oficiales (clase alta y sobre todo clase media) se une al uso del poder militar-político para el logro y la conservación de privilegios y para el ascenso o el mantenimiento de aquéllos en los niveles superiores de la sociedad. Las grandes empresas por su parte actúan sistemáticamente para influir sobre los jefes militares que tienen poder decisorio en la administración y la política económica, y pueden así adoptar medidas favorables a la rentabilidad y la acumulación de los grupos privados más importantes. Se difunden la entrada de altos jefes en los directorios de las empresas públicas (reservorio de fondos y poderes, dispensadores de condiciones especiales) y de los consorcios privados, su papel de gestores uniformados, sus prácticas corruptas.

Este proceso se despliega sin embargo, a través de un juego de fuerzas y tendencias contradictorias. El sometimiento a las directivas externas implica una subordinación contradictoria con el nacionalismo profesional de los militares, y se proyecta como problema político general y como interrogante para las conciencias individuales. Integrantes de una institución que se dice puntal de la soberanía y de la democracia, los militares deben apoyar en los hechos una política colonizadora y represiva que los convierte frecuentemente en gendarmes de ocupación de una potencia extranjera y verdugos de su propio pueblo. Fascinados por el posible disfrute del poderío bélico que depende de máquinas, es decir, de la industrialización y de la ciencia y la tecnología autónomas, deben sin embargo aceptar políticas económicas, sociales y culturales de signo regresivo e incompatibles con el logro de aquellas premisas. Por otra parte, la asunción de responsabilidades

estatales exige una cantidad creciente de información general y específica y técnicas racionalizadas, todo lo cual resulta contradictorio con mentalidades y posturas demasiado primitivas y reaccionarias. La obsesión por la guerra revolucionaria, el consiguiente requerimiento de una mayor sofisticación en las tareas de inteligencia y de contrainsurgencia, obligan a entrar en los problemas del marxismo, a frecuentar sus textos, a interiorizarse de las experiencias del bloque socialista y del Tercer Mundo. Los militares se encuentran así con una concepción del mundo y un aparato teórico-práctico que emiten mensajes significantes para la problemática argentina y latinoamericana, y que han demostrado eficacia para liberar pueblos atrasados y sometidos y para la edificación o reconstrucción de poderosos estados. Esta experiencia contribuye en cierta medida a estimular el interés y a debilitar prejuicios y resistencias irracionales en buen número de oficiales y suboficiales. Sólo la debilidad y la incapacidad de la izquierda para reforzar el poder germinativo de estas semillas de cambio, la denuncia de las facciones más regresivas de las fuerzas armadas, la desconfianza que toda burocracia, sobre todo la militar, siente hacia los "teóricos" y los "ideólogos", los propios temores a llegar quién sabe a qué y a dónde, frenan la evolución ideológica radicalizante de un sector de la oficialidad, aunque no se sepa en qué grado y hasta cuándo.

Por añadidura, se acentúa la oposición entre las fuerzas armadas, convertidas con frecuencia en fuerza de ocupación y represión y en órgano instrumentado por los grupos privilegiados, por una parte, y sectores considerables de la clase media y de los trabajadores por la otra. A ello han contribuido la participación de las primeras en el derrocamiento del peronismo, las intervenciones y movilizaciones gremiales, la represión y proscripción de tendencias populistas y de izquierda, la implantación de políticas económico-sociales de tipo regresivo. La percepción del resentimiento y el odio populares y del abismo abierto entre las masas y las fuerzas armadas alarma a estas últimas. Muchos de sus miembros no han olvidado la enseñanza del peronismo sobre la fuente de poder político que reside en las masas, y entienden que para combatir el peligro revolucionario debe buscarse formas de entendimiento, canalización o manipulación de aquéllas a través del diálogo y la alianza con una burocracia sindical bien dispuesta al respecto.

Asimismo, las fuerzas armadas no llegan fácilmente a constituir una casta absolutamente cerrada y monolítica. Una parte considerable de sus miembros —oficiales y suboficiales— se recluta en la clase media y en sectores populares. La crisis va afectando a estas capas, y luego a la propia institución (inflación, déficit presupuestario, etc.). Las sucesivas purgas políticas han hecho perder a muchos oficiales y suboficiales la situación protegida, y los han lanzado a subsistir por sí mismos en medio de la calle, como todo el mundo civil. Surge por consiguiente una mayor sensibilización hacia los problemas sociales y políticos del país y de las masas.

La etapa histórica en la cual las fuerzas armadas ascienden cada vez más a la coparticipación o al monopolio del poder hegemónico es también aquella en la cual no pueden evitar el surgimiento y la agravación períodica de su crisis interna que se entrelaza con la crisis general de la sociedad. Incorporadas irreversiblemente a la política y al gobierno, sometidas a la presión de las clases y grupos que en ma-

yor o menor grado deben considerar y expresar, las fuerzas armadas y sus miembros bajan del pedestal y se acercan al nivel común; pierden misterio y se desacralizan; se someten a la crítica, al ataque, a la irrisión, al desgaste que traen la acción a la vista de todos y la necesidad de tomar decisiones que se valoran por sus resultados, generan conflictos y no pueden suscitar la conformidad generalizada.

Su carácter de única fuerza centralizada (y monopolista de los instrumentos de violencia física) da a las fuerzas armadas la posibilidad de asumir la hegemonía política. La acción de los factores señalados genera un proceso de disgregación y lucha faccional que afecta dicha clave de poder. Coexisten y se entrelazan las tensiones y conflictos entre: las tres armas; los militares cuarteleros y los militares tecnoburócratas; las logias basadas en líneas políticas y conexiones con grupos económicos civiles, nacionales y extranjeros; los nucleamientos generacionales; los oficiales y suboficiales. El propio ascenso de las fuerzas armadas en la pirámide del estado intensifica la lucha de facciones, que se libra por un poder incrementado y decisorio. Los mecanismos de obediencia automática son remplazados por hábitos anarquizantes de discusión, iniciativa y rebeldía. Se vuelven cada vez más difíciles la imposición de una autoridad central indiscutida en cada arma y la coordinación de las tres fuerzas.

La oficialidad y la suboficialidad perciben todos estos aspectos problemáticos con claridad variable, y extraen diversas conclusiones. No pueden ignorar que las condiciones históricas que generan el ascenso de la hegemonía militar van cambiando, aunque aquélla no se debilite ni desaparezca. El prestigio de las fuerzas armadas se desgasta en el ejercicio de gobiernos no demasiado exitosos o espectacularmente fallidos. Muchos jefes y oficiales sienten cansancio en el uso del poder directo, o bien temen ejercerlo por sí solos, en condiciones difíciles, sin equipos civiles eficaces y de confianza. Temen las repercusiones internacionales e internas de una dictadura abierta. También temen sin embargo, que la plena vigencia de un orden democrático en condiciones de crisis agravada pueda favorecer expresiones populares incontenibles (el retorno del peronismo al poder, el avance hacia los prolegómenos de una revolución social). Tienen además la oscura conciencia de que el orden social e institucional de tipo tradicional está quebrado en lo profundo y de manera irreversible y no ha sido adecuadamente remplazado. De allí que los jefes y cuerpos de oficiales rechacen y acepten al mismo tiempo todas estas evidencias, y no sepan bien cómo armonizar el nudo de contradicciones que enfrentan. De allí las ambigüedades, las marchas y contramarchas, el agravamiento de los conflictos internos, y la influencia que todo ello ha tenido en el proceso político de las dos últimas décadas.

Por todas las razones expuestas, las fuerzas armadas, algunos de sus sectores más técnicos y politizados sobre todo, se vuelven más sensibles y perceptivos respecto de los grandes problemas y conflictos de la Argentina, cualesquiera que sean las evaluaciones que hagan de ellos y las soluciones por las que opten. Incrementan y mejoran su formación y su información. Reciben una preparación cada vez más completa en asuntos no solo militares sino también científicos, técnicos, administrativos, políticos, económicos, sociales. Estrechan sus contactos y formas de colaboración con intelectuales, técnicos y científicos civiles, de los que reciben flujos de "saber qué" y "saber cómo" y a los cuales reclutan selectivamente para sus propios cursos de

capacitación y adoctrinamiento y para sus propios aparatos profesionales. Las vicisitudes políticas de las últimas décadas han permitido a los militares el desempeño de cargos estatales en todos los niveles y esferas. Ello les ha permitido enriquecer su experiencia y su capacidad en la toma y aplicación de decisiones; ha fortalecido su papel públicamente establecido de expertos y su influencia política. A través de los servicios de inteligencia y de los agregados militares a las embajadas, tienen acceso a una información total —nacional y mundial—, muchas veces reservada. Los objetivos combinados de hegemonía política, de seguridad internacional y de orden interno justifican que las fuerzas armadas desarrollen su propio aparato de relaciones públicas y de propaganda, y utilicen para iguales fines a otros órganos del estado, incluso la enseñanza, y a instituciones privadas que integran su red de vínculos y alianzas. Han podido así implantar con éxito considerable sus concepciones específicas en amplias capas de la población, proyectando en ellas las imágenes más atractivas de sí mismas y de su ideología. Ninguna fuerza civil dispone de poder equivalente, ni de libertad para responder.

Las fuerzas armadas se van convirtiendo en una élite profesional tecnoburocrática *sui generis,* capaz de combinar la sofisticación técnico-científica con el monopolio de los medios de violencia y de coerción (física, política, social, cultural, psicológica). Se vuelven cada vez más un fin en sí mismo, un aparato que sirve a quienes lo integran y que se conserva y promueve a sí mismo. Coparticipan con fuerte peso. en las coaliciones que adquieren y ejercen la hegemonía, y tienden a lograr el monopolio de ésta.

La constelación formada por la industrialización y la urbanización, la modernización y la primacía de la gran empresa, la expansión del terciario y el avance de la educación superior, el intervencionismo de estado, contribuye a crear la necesidad y la posibilidad de un *estrato tecnoburocrático* cuantitativamente considerable, de alta significación ideológica y política y en permanente expansión.

Reclutados sobre todo en la clase media —aunque el aporte de la élite oligárquica no sea desdeñable—, imbuidos de un espíritu de ascenso social acelerado, frustrados en esta expectativa por las características y efectos de un modelo neocapitalista que dificulta o cierra los caminos para su realización de clase, los componentes de la tecnoburocracia buscan los medios y los mecanismos aptos para superar las barreras y acceder a un estatus superior en términos de ocupación, ingreso, prestigio, influencia social y liderazgo político, y eventualmente para integrarse en el grupo gobernante y en la clase dominante.

A tales fines los tecnoburócratas parten de la pretensión de un monopolio de la ciencia y de la técnica y de una capacidad superior para su aplicación eficaz al tratamiento y solución de los problemas concretos de la economía, la sociedad y la política. El recurso a cualquiera de las ideologías disponibles (liberalismo, desarrollismo, populismo, fascismo, marxismo), o la proclamación de la neutralidad o la independencia respecto de las fuerzas y grupos en presencia, legitiman el reclamo de la representación del interés colectivo y del arbitraje racional por encima de los intereses particularistas. A través de la tecnoburocracia, la ciencia y la técnica anularían o remplazarían los conflictos sociales destructivos, los enfrentamientos ideológicos irrelevantes, los debates políticos anacrónicos.

El ascenso social y el ingreso en la élite de poder son buscados a través de la

inserción en posiciones institucionales que permitan ofrecer conocimientos, técnicas y soluciones a los que mandan; operar como influencias detrás del trono y consejeros de los príncipes; incrementar sin tregua la importancia de las funciones que se asume; convertirse si es posible en centros de poder por derecho propio.

Cualquiera que sea el discurso explícito (modernizante, reformista, revolucionario) que sus componentes emiten, la tecnoburocracia ofrece conocimientos y procedimientos, diagnósticos y opciones acordes con los intereses e ideologías de quienes controlan el estado y la gran empresa (pública o privada, nacional o internacional). Adoptan modelos de análisis y de soluciones que privilegian el equilibrio, la autorregulación, la coherencia organicista, la estructuración sistemática, el crecimiento lineal de la sociedad, en desmedro y con exclusión de todo lo que implique contradicción, conflicto, ruptura, saltos, trasformación, desarrollo integral. Proponen estrategias y proyectos tendientes a la implantación y el crecimiento del neocapitalismo tardío y dependiente. Acatan e idolatran el poder como un bien en sí mismo, y por lo tanto a quienes lo encarnan y usan. Despliegan actitudes de arrogancia y de amor al mando y a la coacción. Exhiben un espíritu desfavorable a la participación popular y a la democratización de la sociedad y del estado. Menosprecian y descartan todo lo que se identifique con posibilidades virtuales o efectivas de impugnación, resistencia, contradominación y trasformación radical y, más en general, todo lo que resulte sospechoso o inaceptable para la fracción hegemónica y la clase dominante. No ocultan su simpatía por los regímenes autoritarios, su paternalismo y su verticalidad.

La tecnoburocracia ha revelado inequívocamente su vocación de servir a todo grupo o partido que se identifique con el sistema y opere lealmente en su interior, y sus componentes han sobrevivido y operado con soltura y destreza a través de una variedad de experimentos políticos de diverso signo. Es sin embargo, en los regímenes militares donde parecen haber encontrado un clima más propicio.

Entre la tecnoburocracia civil y la tecnoburocracia militar se van produciendo la convergencia, el entendimiento y la alianza, a partir de los propios caracteres e intereses de ambas, y de una cierta comunidad de orígenes, carreras, ideologías y objetivos. Emerge así una situación de coincidencia y de división del trabajo entre tecnoburócratas militares que se civilizan y tecnoburócratas civiles que se militarizan. Este fenómeno alcanza sus formas más orgánicas y abiertas en los períodos de dictadura castrense, pero se manifiesta y opera también en las breves primaveras de gobierno civil. Los tecnoburócratas civiles ofrecen conocimientos, ideas, técnicas y racionalizaciones que la tecnoburocracia militar necesita para incrementar su capacidad decisoria y operativa y su legitimidad, y para posibilitar la viabilidad y el éxito del modelo neocapitalista que asumen. La tecnoburocracia militar recibe y usa este aporte de sus equivalentes civiles y, a cambio de ello, en ejercicio del poder que les da su monopolio de la violencia y la coerción, otorga a aquéllos un cierto grado de reconocimiento, de ascenso económico y social, y de participación en el manejo del aparato político-administrativo y en la toma e implementación de ciertas decisiones.

Los rasgos y efectos indicados han tenido una incidencia negativa en la actitud de la tecnoburocracia, en términos de empobrecimiento científico y técnico, divorcio y hostilidad de las víctimas del sistema y de los actores potenciales de cam-

bio, degradación moral y —sobre todo en lo que respecta a sus intereses y valores— carencia de éxitos pragmáticos de real significación. La nueva relación entre tecnoburocracia civil y élite de poder es de cooperación y de interdependencia asimétricas. La élite tecnoburòmilitar y la élite oligárquica mantienen la supremacía en las coaliciones y gobiernos, respecto a los tecnoburócratas civiles, y controlan los resortes y variables fundamentales. Reconocen y formulan los problemas y las alternativas, imponen las opciones, eligen entre las soluciones propuestas por los tecnoburócratas civiles. Éstos siguen siendo en la mejor hipótesis un grupo subordinado, de competencia restringida y sin poder propio para participar de modo significativo o decisivo en la política y en el estado.

La constelación de fuerzas y procesos que se analizó proporciona la trama y la clave de los gobiernos que se suceden en las dos décadas bajo examen, y que se intentará ubicar y caracterizar sumariamente.

5. *Revolución libertadora y gobiernos radicales*

La llamada *revolución libertadora* de 1955 es en esencia la expresión de una oposición gran-burguesa al peronismo que no se constituye ni se desarrolla a raíz del totalitarismo y la corrupción de ese régimen. Sus raíces están en el temor a la base de masas del peronismo, a las consecuencias incontrolables de su demagogia proletarizante y antimperialista, a su aventurerismo visceral y a su ineficiencia insuperable en el contexto de una crisis latente. La gran burguesía moviliza tras de sí a una clase media irritada por la pérdida de estatus, la inflación, la carga impositiva, los aspectos arbitrarios y opresivos del gobierno peronista. Se trata en definitiva de crear una nueva coalición de derecha y un régimen político con capacidad para liquidar la etapa bonapartista-populista.

Esta esperanza se irá frustrando en los 18 años siguientes. La dirección peronista cae sin lucha, abandona a su destino a sus bases confundidas y deprimidas por una catástrofe aparentemente inexplicable, y deja un balance más que equívoco de su gestión en el gobierno. La presencia de las masas peronistas y del movimiento que las expresa y lidera no se desvanece sin embargo de la sociedad y de la política como una fantasmagoría inquietante pero fugaz. Proscrito y perseguido, el peronismo sobrevive, se va recuperando de la derrota, conserva y usa una notable capacidad para retener la fascinación y la lealtad de las masas, y un alto potencial de maniobra, de bloqueo y disrupción de toda alternativa política y de todo gobierno que pretende sucederlo y remplazarlo.

Desde el inicio, el *gobierno provisional* de la "revolución libertadora" va desnudando el sentido profundo de su acción: restituir a la gran burguesía el pleno control de la vida nacional; salvar el sistema de la crisis emergente en favor de aquélla y a costa de las masas populares; destruir el movimiento obrero organizado y las alternativas de izquierda; consolidar y extender las bases del neocapitalismo. La herencia del peronismo —en términos de las expectativas creadas en las masas y de las secuelas críticas de su gestión—, la explosión de esperanzas y reivindicaciones que posibilita la eliminación provisoria y limitada de la represión instaurada por el régimen recién derribado, la inexistencia o la insufi-

ciencia de alternativas políticas dotadas de atractivo y viabilidad, impiden el cumplimiento inmediato y en plenitud del proyecto original de la "revolución libertadora". La coalición que llega al poder se escinde y reagrupa rápidamente en dos líneas.

La *primera* de ellas es de tipo *conservador-liberal*. Apoyada por sectores tradicionales de la oligarquía, por el imperialismo inglés —aunque sobre ella también se ejerce la acción norteamericana—, por la clase media de viejo tipo, y por la mayoría de los partidos conservador, radical y socialista, sus elementos de fuerza se concentran en la marina y en parte del ejército y de la aeronáutica. Se propone aplicar una estrategia oligárquica adaptada a las nuevas condiciones vigentes, una política vagamente liberal y hostil al clericalismo, al peronismo y al comunismo. Vacila entre la restauración inmediata de la democracia restringida (tendencia del general Pedro E. Aramburu), y el mantenimiento de una dictadura militar, con asesores esclarecidos, retórica democrática y elecciones controladas para un futuro indefinido (tendencia del contralmirante Isaac Rojas).

La *segunda línea* es tipo *falangista criollo,* nacionalista-clerical. Sus dirigentes y bases corresponden a sectores nuevos de la oligarquía, del empresariado industrial y de la clase media, y cuenta con el apoyo de parte del ejército y la aeronáutica y de sectores importantes del imperialismo norteamericano. Su ideología falangista contribuye a dar a esta línea gran coherencia, realismo y energía en la acción. Se propone una política de extrema derecha, más adecuada que la primera a los requerimientos del neocapitalismo en plena emergencia, pero a través de una demagogia nacional-sindicalista que busca capitalizar la herencia popular del peronismo y los errores y abusos del gobierno.

La línea falangista encabezada por el general Eduardo Lonardi —jefe del levantamiento de 1955 y primer presidente del gobierno provisional— es desplazada menos de dos meses después de su llegada al poder por la línea conservadora-liberal que impone al general Aramburu y al contralmirante Rojas como integrantes del poder ejecutivo.

Esta diferenciación en dos líneas, enraizadas en las corrientes centrales de la nueva realidad argentina, opera como factor de disgregación y debilitamiento del gobierno provisional que lo obliga finalmente a fijar límites a su gestión y a convocar a elecciones presidenciales. Trabaja también sobre y en las clases y los partidos políticos, que se escinden y reagrupan en función de ambos ejes. Ello se da sobre todo en la Unión Cívica Radical, dividida en dos nuevos partidos (Unión Cívica Radical del Pueblo, Unión Cívica Radical Intransigente), que proporcionan los términos de la opción fundamental en la elección presidencial de febrero de 1958: Ricardo Balbín o Arturo Frondizi.

La *Unión Cívica Radical del Pueblo* conserva tras la escisión la mayor parte del tronco partidista y engloba grupos y dirigentes de características y trayectorias dispares. Su integración está determinada por las bases sociales (sectores considerables de clase media urbana, grupos regionales de terratenientes y comerciantes rurales), la comunidad de tradiciones partidistas, el plegamiento a la línea conservadora-liberal, las secuelas de la escisión y la necesidad de enfrentar la ofensiva del otro partido radical.

Las posibilidades políticas de la UCRP se ven afectadas por el reaccionarismo

y la obsolescencia de muchos de sus dirigentes y cuadros; la falta de vigencia y de atractivo de su programa y de su praxis política; la vinculación con el gran capital nacional y extranjero; el compromiso de altos dirigentes en sonados escándalos de la vida pública; la identificación con la "revolución libertadora"; la crítica retrógrada al peronismo, que califica sumariamente como variante del totalitarismo colectivista y en cuyo seno no distingue entre jerarcas y bases; la lucha interna por las posiciones partidistas y públicas que amenaza la unidad de la organización.

La UCRP dispone a la inversa de elementos eficaces para su confrontación con la UCRI, y así lo demuestra al principio el resultado de las elecciones para el Congreso Constituyente de 1957. Convertida en instrumento para el continuismo de la "revolución libertadora", goza del favoritismo del gobierno provisional que le permite distribuir puestos y recursos públicos entre sus dirigentes y cuadros y su clientela, y para las campañas electorales. Cuenta con un aparato nacional de caudillos y activistas en las ciudades y en el campo. Recurre a prácticas demagógicas que compiten favorablemente con las de la UCRI. Junto a los planteos reaccionarios y el despliegue de una vacua retórica, la UCRP multiplica declaraciones contra el imperialismo y la oligarquía, la burguesía industrial y el clero, el ejército y el gobierno. Exige la defensa y la nacionalización de los recursos nacionales y la reforma agraria, la enseñanza laica y la democratización de las fuerzas armadas. Promete medidas favorables a los trabajadores y a las libertades públicas.

La *Unión Cívica Radical Intransigente* se constituye como un grupo relativamente minoritario y por añadidura heterogéneo de dirigentes, caudillos urbanos y provinciales y cuadros partidistas de la vieja UCR, en torno del cual comienza a constituirse y operar una constelación de intelectuales, profesionales y técnicos, antiguos militantes de izquierda, ex comunistas o sin partido, empresarios medianos y pequeños, y componentes marginales o desubicados de la élite oligárquica. Este conglomerado heteróclito se articula por la aspiración al uso del estado como instrumento de autopromoción individual y de grupo, de redistribución del poder, el ingreso y el prestigio, y de satisfacción de aspiraciones ideológicas y políticas confundidas e insatisfechas en los años recientes.

La UCRI pretende inicialmente asumir la representación y la continuidad del "radicalismo histórico" cuyo regreso al poder a través de aquélla cancelaría el interludio negativo de la "década infame" y del gobierno peronista y comenzaría a resolver los grandes problemas del país. De hecho se ofrece una nueva versión del "frente nacional" en la cual una parte del capital extranjero y la gran burguesía, las fuerzas armadas y la Iglesia, las clases medias y el proletariado, el campo y la ciudad, trabajarían en unión y armonía, para beneficio de la nación y sin sacrificio de sus intereses particulares. En las intenciones y en los actos, el partido tiende a ser sustituido por un movimiento integrador de todos los sectores e individuos que coincidan con el programa "nacional y popular" y por un gobierno que decide y administra para todos. El proyecto que se propone y la coalición en que se funda se presentan como la única alternativa con viabilidad y eficacia respecto a la amenaza subversiva que se atribuye al peronismo como movimiento de masas en sí mismo o a su eventual manipulación por la izquierda. Aparecen también como prerrequisito indispensable para el desencadenamiento

de un crecimiento neocapitalista dependiente que se encubra con la prestigiosa divisa del desarrollo.

Hostil por naturaleza a cualquier opción que se aproxime aun de lejos a una perspectiva revolucionaria, impregnado por sus orígenes de una ideología respetuosa del orden existente, temeroso de que el tiempo trabaje en su contra, el personal dirigente de la UCRI presiona enérgicamente en favor de elecciones rápidas. Se esfuerza por persuadir al gobierno provisional que la UCRI será su continuidad institucional y que respetará y consolidará su obra. Busca la tolerancia y la complacencia de la dictadura militar. Después de haber participado en la preparación del golpe militar de 1955, apoya y justifica la acción del gobierno provisional, incluso su política represiva (proscripción del peronismo, persecución a militantes sindicales y políticos del movimiento mayoritario y de la izquierda, intervención militar a los sindicatos). Impulsa o acepta la participación de una avalancha de dirigentes, afiliados y simpatizantes en todos los engranajes del gobierno militar.

Al mismo tiempo, la UCRI se afana por presentarse como garantía para los grandes grupos de intereses y de poder que operan en la sociedad argentina. Combina así el antimperialismo verbal con el proimperialismo de hecho. En consideración a los sentimientos antimperialistas en capas importantes de la sociedad, la UCRI necesita aparecer como avanzada progresista sobre todo ante la izquierda dentro y fuera de ella, y promover un nacionalismo unificador que atenúe o supere los conflictos de clases en el frente nacional propiciado y en el país. Se propone un impreciso control del estado sobre los monopolios, para restituir las condiciones de libre competencia y abrir posibilidades a una burguesía nacional cuya expansión es exaltada como premisa del progreso. Al mismo tiempo se juega entre las grandes potencias, apoyando alternativamente a unas contra otras y tratando de lograr la simpatía y el apoyo de todas. Si se ataca al imperialismo inglés en retirada, se silencia la acción del imperialismo norteamericano, se busca el apoyo de su gobierno y de sus inversiones sobre todo en la industria, se respeta los compromisos políticos y militares con Estados Unidos. Ello coexiste con el requerimiento de colaboración de los consorcios europeos, especialmente italianos y alemanes.

La gran empresa es respetada, se le ofrece garantías y posibilidades, se promete la supresión de las intervenciones entorpecedoras del futuro gobierno, y se rechaza la estatización en la economía. Se idealiza y defiende la burguesía industrial y la industrialización sustitutiva de importaciones con participación del capital extranjero.

La UCRI se preocupa particularmente por no irritar a los terratenientes y al mismo tiempo por obtener la simpatía de la pequeña y mediana burguesía de la ciudad y del campo. Escamotea la consideración del régimen vigente de tenencia y uso de la tierra. Remplaza la consigna programática de "reforma agraria inmediata y profunda" que es calificada como "vetusta formulación que nada tiene que ver con la realidad del campo argentino", por vaguedades sobre la incorporación de la ciencia y la tecnología al campo, como medio de elevar el nivel de producción y de vida en el agro para refuerzo de la industria y para crear riqueza antes de toda medida de redistribución que reparta la miseria.

La tolerancia y la ayuda de los factores de poder es sistemáticamente cortejada.

Se respeta y exalta a las fuerzas armadas, "custodios de la soberanía y de los principios democráticos de la República", "brazo armado de la revolución democrática" en el país y en América Latina, cuyos críticos responden a oscuras maquinaciones para desprestigiarlas, separarlas del pueblo y dificultar su misión. Los dirigentes de la UCRI se desviven por convencer a la Iglesia de su coincidencia de fines; la idealizan e ignoran sus aspectos retrógrados; le ofrecen garantías a sus intereses, a sus valores y a sus exigencias; se presentan como bastión anticomunista; declaran su hostilidad a la enseñanza laica y pública, al divorcio absoluto y a la separación de la Iglesia y el estado.

La preocupación por la aceptación del "establecimiento" se manifiesta en la coincidencia básica y en la convergencia creciente con el nacionalismo clerical de signo falangista, en la comunidad de intereses y bases, de ideología y de modos de operación.

Por otra parte, la UCRI se entrega a un tráfico sin restricciones en que combina las fórmulas progresistas con los compromisos reaccionarios. Se corteja los votos populares a través de viejos y nuevos caudillos y burócratas, y del reparto de futuros puestos y honores a posibles adherentes con alguna influencia en sectores de intereses y de poder. Sin dejar de participar en los órganos del gobierno provisional que ejecutan la ofensiva contra los trabajadores y sus organizaciones, los dirigentes y militantes de la UCRI se van viendo obligados a proclamar su defensa del movimiento obrero, y a identificarse con ciertas realizaciones del régimen peronista. Ello está determinado por las exigencias de la lucha política y de la competencia electoral, y por su coincidencia con algunos componentes de la ideología falangista, especialmente los de tipo nacional-sindicalista, y con sectores de la élite oligárquica que comienzan a comprender las ventajas de un movimiento obrero unificado bajo la égida y el control de la burocracia sindical y del estado.

La demagogia obrero-populista, nacionalista y desarrollista de la UCRI sirve también como señuelo para lograr la adhesión de sectores de la clase media (empresariales, intelectuales, profesionales, técnico-científicos y políticos), que ven en el nuevo partido la posibilidad de combinar la satisfacción de los anhelos de ascenso social y redistribución del ingreso y el poder con ciertas aspiraciones políticas progresistas (desarrollo independiente con libertades públicas, "revolución democrático-burguesa"). Gran parte de la izquierda argentina otorga a la UCRI su apoyo activo, un crédito de confianza o una expectativa benevolente.

El nuevo partido y su estrategia se estructuran y operan a través de un tipo particular de liderazgo y de equipo dirigente. La figura del jefe del partido y candidato presidencial, Arturo Frondizi, es creada y lanzada a través de un aparato y un estilo publicitarios de inspiración norteamericana. Se le inventa una personalidad excepcional y un papel providencial. Se le otorga una combinación de los rasgos del maquiavelismo implacable, la sabiduría omnicomprensiva y la eficiencia técnica y operacional. El líder se rodea y apoya de una constelación de individuos y equipos de políticos relativamente marginales y de poco peso electoral, intelectuales, profesionales, técnicos, empresarios, representantes secundarios de la élite oligárquica, advenedizos al asalto, especuladores y aventureros de diverso tipo, izquierdistas desilusionados o ingenuos. Esta constelación proporciona el estado mayor partidario, y los cuadros y activistas de confianza, la dogmática ideológica y la es-

trategia, los contactos con grupos e instituciones, la maquinaria propagandística y electoral, la elaboración y proyección de la imagen de una alternativa que pretende la seriedad científica, la eficiencia técnica, la operatividad política, la identificación con el destino histórico.

Hacia fines de 1957 la confrontación política se polariza entre el candidato de la UCRP, Ricardo Balbín, favorito de la derecha conservadora, el centro liberal y el gobierno provisional, y el candidato de la UCRI, Arturo Frondizi. La competencia electoral alcanza un alto grado de intensidad e incertidumbre. La ruptura del equilibrio inestable entre ambas fuerzas, el triunfo electoral de la UCRI en febrero de 1958, la entrega del poder por el gobierno provisional al candidato ganador Arturo Frondizi, se producen por la conjunción de dos circunstancias.

Por una parte, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi concluyen un pacto secreto. El primero aporta un caudal electoral de masas que no tiene uso inmediato a raíz de la proscripción de su movimiento y vuelca la balanza electoral. Frondizi se compromete a otorgar desde el gobierno concesiones al líder exiliado y a su burocracia política y sindical; a preparar gradualmente las condiciones del retorno a la legalidad para el peronismo; y a continuar en sus líneas fundamentales la política económica del gobierno depuesto en su última fase (combinación de populismo y neoliberalismo desarrollista, concesiones a los consorcios extranjeros en petróleo, automotores y otros rubros industriales). Por otra parte, Arturo Frondizi garantiza al gobierno provisional y a las fuerzas armadas el respeto y la continuidad de las líneas fundamentales de la "revolución libertadora", sobre todo en lo referente a la proscripción y freno del peronismo, la congelación de la izquierda, el neoliberalismo conservador-modernizado en política económica y social. En la contradicción de ambos compromisos reside *ab initio* parte de la clave de la fragilidad intrínseca que frustrará al gobierno frondizista.

La política del gobierno frondizista expresa y proyecta las características indicadas y la ideología desarrollista que los inspira. En sí mismo y en sus portavoces y ejecutores, el *desarrollismo* —fusión sincrética de pensamiento cepalino, nacional-populismo y vulgata stalinista— peca por la superficialidad, el mecanicismo, el abstraccionismo divorciado de la realidad, y la arrogancia triunfalista.

El desarrollismo asume la posibilidad de imitar fielmente, rasgo por rasgo y secuencia por secuencia, el modelo clásico de desarrollo capitalista occidental, con olvido de las diferencias de situación histórica y de contexto internacional. Se propone además una concepción parcializada y trivial del subdesarrollo y del desarrollo, en términos crudamente economicistas. El subdesarrollo es limitado a ciertos factores y rasgos: estrangulamiento externo, predominio de la producción agroexportadora, atraso industrial. La perspectiva y el proyecto del desarrollo privilegian lo puramente económico; escamotean los aspectos y niveles sociales, ideológicos, psicológicos, sus interacciones, el carácter complejo y global del proceso. Se trataría de promover la colaboración entre el gran capital extranjero y nacional para desencadenar el aumento de la inversión, el salto de la innovación tecnológica y de la productividad y el mero crecimiento que, actuando a su vez como agentes autónomos y exógenos, operarían sobre el resto de la sociedad, la trasformarían, modernizarían y racionalizarían, le aportarían el bienestar, la demo-

cratización y la independencia. Finalmente, se ignora otras fórmulas posibles de desarrollo, o se las relega al ámbito de lo utópico o lo irrisorio.

Para su éxito, el experimento frondizista hubiera requerido el logro rápido de un grado considerable de crecimiento neocapitalista que, satisfaciendo la masa de aspiraciones y atenuando los conflictos provenientes de la etapa anterior, permitiera reforzar a los aliados iniciales, decidir la adhesión de los vacilantes, aislar y debilitar a los enemigos irreconciliables. Ello hubiera posibilitado al gobierno frondizista la superación de las limitaciones de origen y el logro de fuerza propia, coherencia y estabilidad. Para desgracia de la UCRI y de su gobierno, estas premisas no llegan a darse.

El crecimiento neocapitalista no se produce con la envergadura y la rapidez que hubiera sido menester y, en la medida limitada que se logra, por su propia índole requiere costos, plantea problemas y genera conflictos que refuerzan las contradicciones y los límites del proyecto y del régimen. El gobierno frondizista, en efecto, busca la legitimidad y el consenso a partir de una ideología pluralista que no se armoniza con los resultados desequilibrantes y conflictivos del modelo a medio realizar, ni con la restricción de la participación electoral en detrimento del peronismo mayoritario y de la izquierda. En la coalición que compone y sustenta al gobierno coexisten representantes de la élite oligárquica y agentes del capital extranjero con expresiones directas o indirectas de la clase media y del sindicalismo burocrático de masas. Esta constelación de circunstancias impide al gobierno admitir la vigencia de una democracia ampliada y adoptar políticas coherentes de crecimiento. El entrechocar de intereses y fuerzas divergentes dentro y fuera del estado se manifiesta en la contraposición entre criterios particularistas, favorables al grupo en el poder, a la élite oligárquica y a sus aliados internos y externos, y resistencias masivas de los sectores afectados por los requisitos y efectos del modelo neocapitalista. Resulta cada vez más difícil y finalmente imposible conciliar la disyuntiva entre el logro del crecimiento a un alto costo social o el descontento de la élite oligárquica por la frustración de aquél. Se vuelve permanente la puja por la distribución del ingreso y del poder. El problema se ve agravado por los rasgos de corrupción e ineficiencia que se van acentuando en los grupos políticos y burocráticos del frondizismo, y por la incidencia de coyunturas internacionales desfavorables.

El régimen frondizista se somete a las presiones y exigencias de las potencias internacionales y sus corporaciones. Admite la tutela del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Club de París, que le imponen sus directivas de política económica y social en concordancia con el proyecto neocapitalista dependiente y con efectos restrictivos primero y recesivos luego. En flagrante contradicción con una retórica antimperialista de varias décadas a través de la cual había forjado su imagen de político progresista, el presidente Frondizi abre las puertas a la penetración del capital extranjero en el petróleo, los automotores y otras industrias, el comercio y las finanzas. La expansión y prosperidad del capital extranjero es compartida por la élite oligárquica, y por grupos acrecentados de la intelectualidad tecnoburocrática, pero no por la pequeña y mediana empresa, gran parte de la clase media y de la clase popular, que incrementan su desilusión, su frustración y su malestar. La sumisión al imperialismo norteameri-

cano y a los capitales europeos no garantiza al gobierno frondizista siquiera un apoyo sólido y confiable frente a las amenazas y embates que con creciente rapidez se van desplegando contra él. En plena fase de kennedismo y de Alianza para el Progreso, el presidente Frondizi irá siendo debilitado y caerá sin que el gobierno ni las corporaciones de Estados Unidos hagan ningún intento serio de sostenerlo. El gran capital nacional y la élite oligárquica están representados en el gobierno frondizista, y también aprovechan en plenitud las condiciones favorables a su rentabilidad y a su acumulación que el gobierno frondizista le proporciona, pero no lo sienten ni hacen suyo, desconfían de él, participan en su impugnación, contribuyen a su fracaso y caída.

El apoyo insuficiente, decreciente o nulo del imperialismo y de la élite oligárquica no es compensado por las fuerzas armadas. El grueso de éstas se identifica con la línea conservadora-liberal de la "revolución libertadora", y con la mentalidad y la estrategia de la "guerra fría" y de la contrainsurgencia. No se ha reconciliado nunca con el triunfo de Arturo Frondizi. Considera a éste y a su gobierno con sospecha y hostilidad, como un Kerenski involuntario o como un instrumento consciente y artero del peronismo y de la izquierda, ambos partes de la conspiración comunista internacional. Presiona al presidente y al gobierno para la aplicación de la política neocapitalista, de medidas desnacionalizadoras y antipopulares, recesivas y represivas. El gobierno ve limitada así su libertad de maniobra respecto a la burocracia y a las bases peronistas, a la clase media liberal-progresista y a la izquierda. La ampliación y la generalización del descontento y la protesta inducen y justifican nuevas medidas regresivas y represivas que aumentan la impopularidad del gobierno: concesiones al capital extranjero, a la élite oligárquica y a la Iglesia; mantenimiento de la proscripción del peronismo; ilegalización y aplastamiento de movimientos sindicales y políticos y de los grupos de izquierda; implantación de tribunales militares.

El sometimiento del presidente Frondizi a las presiones del sector conservador-liberal de las fuerzas armadas no impide que éstas, estimuladas por la UCRP y otros partidos del centro y la derecha, multipliquen las exigencias y las rebeldías. El gobierno frondizista debe soportar una treintena de movimientos militares de diferente envergadura durante menos de 4 años de permanencia en el estado. En los enfrentamientos, Frondizi cede siempre ante las facciones hostiles a su persona y a su gobierno, y sacrifica a los oficiales institucionales o falangistas que se arriesgan a sostener su investidura legal, debilitando así permanentemente su posición.

En el mismo proceso general, y con modalidades similares, el presidente Frondizi va perdiendo los apoyos sociales y políticos con que activa o pasivamente contó en su llegada al poder. La clase media y los trabajadores urbanos recusan la política económica y social del gobierno y sus efectos discriminatorios y recesivos, y muchos de sus sectores adoptan distintos grados de oposición política. Una parte de la propia UCRI se desilusiona, impugna dentro del propio gobierno o es marginada de éste. El general Perón y la burocracia sindical y política del peronismo, que soñó sacudir la tutela de su líder distante y utilizar la manipulación de sus bases obreras para el logro de una posición autónoma en la estructura de poder, gritan traición ante las fluctuaciones y concesiones del gobierno frondizista,

lo acosan y desgastan. La oposición de centro y de derecha, expresada a través de la UCRP y otros partidos liberales y conservadores y con influencia en las fuerzas armadas, se combina con la creciente hostilidad de los grupos de izquierda que se sienten defraudados por la acción del gobierno o confirmados en su rechazo original. A la oposición en las universidades, en la calle y en las fábricas se agrega hacia 1960 la emergencia de la primera tentativa guerrillera, inspirada por el ejemplo de la Revolución cubana.

Ante la multiplicación de sus dificultades, el presidente Frondizi y su equipo responden con las marchas y contramarchas, inspiradas en una noción particular del maquiavelismo que privilegia la maniobra y la manipulación como resortes esenciales de la acción política, subestiman los imponderables y rara vez logran los objetivos sin dejar de ampliar la brecha de credibilidad y de reforzar la desconfianza y la oposición de la mayoría.

El proceso de desgaste y debilitamiento del gobierno se acelera además cuando el presidente Frondizi intenta algunos tímidos gestos de mayor independencia en la política internacional (retórica tercerista, acercamiento al presidente Janio Quadros del Brasil, visita secreta de Ernesto Guevara) y en la política interna. La legalización de la participación del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y el triunfo de un candidato de esa tendencia dan lugar a un nuevo planteamiento de las fuerzas armadas que resulta ya excesivo para la fragilidad del gobierno. En marzo de 1962, el presidente Frondizi olvida anteriores jactancias; no lucha ni se suicida; renuncia y acepta el confinamiento que se le impone. Nadie sale a defender su investidura ni su gobierno, y pocos lamentan su derrumbe. Privada de los beneficios del poder, la UCRI no tardará en escindirse. Su sector frondizista terminará por convertirse, bajo la denominación de Movimiento de Integración y Desarrollo, en un grupo de interés y de presión que combinará funciones de acción político-ideológica, reclutamiento y ubicación de funcionarios para puestos clave en futuros gobiernos, intermediación financiera y distribución de posibilidades de acumulación privada.

La división de las fuerzas armadas impide la instauración inmediata de una dictadura militar abierta, y la confusión inicial es aprovechada por un grupo de juristas y políticos de la UCRI que no se resignan a la pérdida de toda participación en el poder, para imponer una semificción institucional. El Poder Ejecutivo es asumido por José María Guido, miembro de la UCRI y presidente del Senado, quien durante un año y medio ejercerá las funciones constitucionales de primer mandatario sin Congreso ni libertades públicas y bajo la celosa vigilancia de las fuerzas armadas.

El *gobierno del presidente Guido* se desarrolla en condiciones de inestabilidad permanente. A la recesión económica en parte heredada de su predecesor y en parte alimentada por su caída y por el clima de inseguridad generalizada que la crisis política crea o refuerza, se agregan las evidencias del agotamiento progresivo de las fuerzas y alternativas políticas tradicionales y del proceso de descomposición interna en las fuerzas armadas a raíz de su participación en los conflictos institucionales, sociales e ideológicos. La política del gobierno Guido zigzaguea entre opciones nunca bien definidas ni implementadas, crisis de gabinete y enfrentamientos militares.

Las fuerzas armadas terminan por dividirse en dos grandes facciones. La facción de los *colorados* agrupa gran parte de la línea conservadora-liberal que se muestra irreconciliablemente antiperonista y pretende aplicar el espíritu y la estrategia originales de la "revolución libertadora" hasta sus últimas consecuencias y sin preocupación por sus costos sociales y políticos. La fracción de los *azules* es un conjunto heterogéneo en que coexisten la parte actualizada y lúcida de la línea conservadora liberal, militares nacional-populistas, falangistas, o imbuidos de vagas intenciones progresistas, y profesionalistas-institucionalistas. Los azules se articulan en función de diferentes motivaciones que distan de una coincidencia total. La crisis política de tipo endémico que se prolonga desde la caída del peronismo debe ser superada a través de una salida institucional estable que impida derivaciones peligrosas para el sistema. Los conflictos y tendencias disgregantes en las fuerzas armadas requieren una superación a través del restablecimiento de la jerarquía vertical, el descarte de una politización incontrolada que agrava el faccionalismo y es realimentada por éste, el repliegue al profesionalismo institucionalizado, la recuperación de la unidad monolítica que permita el ejercicio de la función tutelar sobre la sociedad y la política y la implementación de una estrategia exitosa de crecimiento neocapitalista. Tras una serie de episodios menores y dos enfrentamientos armados que llevan al borde de la guerra civil, los azules triunfan sobre los colorados y los desplazan totalmente a través de una fuerte depuración de las fuerzas armadas. Éstas, bajo la égida del general Juan Carlos Onganía, se reorganizan para alcanzar el grado deseado de disciplina y cohesión, y se deciden a procesar una salida política a través de elecciones generales.

Tras una primera vacilación, las fuerzas armadas imponen al presidente Guido la prohibición de una alternativa de "frente nacional" que intenta canalizar el electorado de masas a través de una conjunción de fuerzas peronistas, nacionalistas-populistas de diferentes matices, desarrollistas frondizistas, y algunas almas perdidas de la izquierda. Esta restricción y la proliferación de fuerzas concurrentes a las elecciones permiten el triunfo del candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo H. Illia con un caudal de votos que equivale a un poco más de la quinta parte del total.

La *Unión Cívica Radical del Pueblo* obtiene y ejerce el gobierno en condiciones precarias. La crisis política endémica se atenúa momentáneamente pero no desaparece ni deja de operar en sus causas profundas y en alguna de sus principales manifestaciones, para resurgir tras un breve lapso de euforia democrática. La UCRP ha logrado el gobierno casi por azar, en usufructo de la proscripción del peronismo y de la fragmentación de opciones electorales, y obligada a negociar con otros partidos la salida institucional al incierto resultado de los comicios. Si por una parte se apoya en una base social y política que se caracteriza por la relativa cohesión y la permanencia a través del tiempo y las vicisitudes, su carácter minoritario le resta legitimidad y consenso.

Sin consideración a las limitaciones de origen, el presidente Illia y su equipo, inspirados por la vieja mística radical, pretenden gobernar al país por sí solos y sin otorgar una participación significativa a otras fuerzas políticas más o menos afines. La UCRP carece por añadidura de una élite política y tecnoburocrática de dimensión considerable, alta calidad y aptitud para desempeñarse con eficacia en

los niveles y áreas de mayor importancia. Para las principales funciones políticas y administrativas el personal del gobierno se recluta casi exclusivamente de acuerdo a la pertenencia a la UCRP o a su clientela electoral, a la lealtad a los dirigentes, a la capacidad de movilización electoral y a los servicios prestados. El gobierno radical se inspira además en un liberalismo progresista y bien intencionado pero de escasa sofisticación y corto alcance, que exhibe ya desde tiempo atrás un grave desajuste respecto de las realidades del país y de las tensiones y conflictos que lo afectan.

La gestión del gobierno radical exhibe méritos innegables. Las libertades democráticas y las normas de honestidad administrativa son respetadas, y el país vive por un corto tiempo un clima de seguridad y confianza que no ha conocido antes y no volverá a conocer después. Los intentos de injerencia militar en las decisiones del gobierno civil son rechazados. La preocupación por la defensa del interés y el patrimonio nacionales se manifiesta en la cancelación de los contratos petroleros del período frondizista, en la resistencia a facilitar la penetración de capitales extranjeros en sectores claves de la economía, en la dignidad y firmeza que se despliega ante las presiones imperialistas. La situación de la economía no mejora apreciablemente pero tampoco se deteriora y da esperanzas a las aspiraciones de crecimiento. Los conflictos sociales no desaparecen, pero no alcanzan una gravedad amenazante para el equilibrio del sistema.

Esta primavera liberal resulta, sin embargo, insuficiente y tardía. La gestión radical adolece de todas las virtudes y limitaciones de una prudente mediocridad. No proporciona estímulos enérgicos al avance del crecimiento neocapitalista ni abre la perspectiva de un proyecto alternativo de centro-izquierda o de sesgo socialista. El radicalismo no satisface totalmente a nadie ni suscita adhesiones sociales y políticas de envergadura considerable. Sí provoca en cambio la intranquilidad y el descontento de la élite oligárquica y del capital extranjero y la renovación de las veleidades hegemónicas de las fuerzas armadas. En la medida que defiende la continuidad del régimen demoliberal —sus atractivos no siempre evidentes y sus límites con frecuencia irritantes—, el gobierno radical se presenta como una amenaza para el general Perón y para los dirigentes del peronismo que pretenden una mayor participación en el poder, y al mismo tiempo no ofrece a las bases sociales de ese movimiento una perspectiva de continuidad y profundización de sus conquistas ni la realización de sus expectativas. En la mayoría de los sectores medios y populares se extiende un sentimiento difuso de insatisfacción, inquietud, apatía, y surge —hábilmente promovida por grupos interesados— la nostalgia del poder fuerte que instaure el orden y asegure un progreso sin conflictos ni sufrimientos. Una parte considerable de la izquierda, frustrada por el proceso de los años anteriores, en parte embriagada por el ejemplo de la Revolución cubana y en parte atraída por la fuerza gravitacional del peronismo, se autoconvence de que el enemigo principal es ese gobierno que por primera vez en muchos años no reprime la disidencia. La mayoría de las fuerzas y grupos de izquierda desencadena una crítica erosionante y una agitación minoritaria y sin proyección popular pero adecuada para acosar al régimen y contribuir a su pérdida de credibilidad. A la agitación meramente universitaria se agrega una nueva tentativa de acción guerrillera que fracasa y es aplastada por las fuerzas armadas.

6. *Un proyecto de militarismo desarrollista*

Una fracción de las fuerzas armadas, reducida pero bien ubicada en la jerarquía del mando, se decide a intervenir. En la preparación y en la ejecución cuenta con la simpatía y el apoyo de las corporaciones multinacionales y de la élite oligárquica nativa a las que fascina la perspectiva de una *brasilerización de la Argentina,* y también de la dirección política y sindical del peronismo y de los grupos falangistas y desarrollistas; y aprovecha el clima de resignación o esperanza pasiva que prevalece en la mayoría de la población. Un grupo de generales arrastra a las fuerzas armadas —confundidas pero habituadas nuevamente al autoritarismo vertical y a la disciplina automática— en el movimiento que a fines de junio de 1966 depone al presidente Illia. Se instaura una dictadura militar sin límites ni plazos que asegure definitivamente la primacía de la institución armada sobre la sociedad y la política y dé una solución final a la crisis nacional de varias décadas.

La junta de comandantes en jefe establece por sí y ante sí el nuevo orden jurídico-institucional que se coloca por encima de la Constitución y la relega a la simbología secundaria. Elige además al general Juan Carlos Onganía presidente de la República. Expresión individualizada del vacío de alternativas y figuras políticas que aqueja a la Argentina, el general Onganía es hombre de limitadas dotes. Está impregnado de una ideología falangista-desarrollista en la cual el catolicismo preconciliar y las preocupaciones de la guerra fría y la contrainsurgencia juegan un papel importante, e imbuido de una confianza mística en las virtudes del autoritarismo y la verticalidad. Su equipo de colaboradores se integra con miembros de las fuerzas armadas y de la élite oligárquica, representantes del capital extranjero, desechos y marginales de partidos tradicionales, ideólogos de sesgo fascistizante, tecnoburócratas que ven llegada su oportunidad.

El nuevo régimen cuenta con una conjunción de circunstancias excepcionalmente favorables. Estructura una coalición que comprende las fuerzas armadas, y el gran capital nacional y extranjero. Suscita esperanzas en el pequeño y mediano empresariado nacional y en una parte considerable de la clase media profesional y tecnoburocrática. Cuenta con la simpatía de la burocracia sindical y política del peronismo, a la espera de un nuevo caudillo militar-populista que remplace al líder permanente en la estructura del poder. Los grupos de la derecha falangista, del desarrollismo y del conservadorismo liberal modernizado, adhieren por primera vez en muchos años a un proyecto común, aunque sus contradicciones subsisten y resurgen más tarde en plenitud. El grueso de la población reacciona con una combinación de apatía resignada, predisposición benevolente y anhelo difuso de un gobierno de progreso en el orden. La abundancia de aliados y apoyos se complementa con la falta de enemigos dignos de consideración. Los partidos de centro sufren la conciencia de sus fracasos, de su disminución de representatividad y significado; carecen de alternativas atractivas que ofrecer y de capacidad para implementarlas; se repliegan en la inactividad o buscan un reacomodamiento dentro del nuevo régimen. Esta situación es compartida por las fuerzas de izquierda; se agrava para ellas por el estado de apatía y resignación que parece predominar en los sectores obreros y populares; se traduce en el repliegue, en la renovación de una perspectiva guerrillera que se nutre en gran medida de la desesperación, o en la resurrec-

ción de las esperanzas en un militarismo popular revolucionario (una especie de peruanismo *avant la lettre*).

El proyecto del *onganiato* se resume en la pretensión de estructurar un estado de tipo autoritario-tecnoburocrático-represivo para el logro de las bases y la plena realización del modelo neocapitalista de economía, crecimiento y sociedad. El estado es concebido como la encarnación suprema y el actor fundamental de la sociedad. Ésta debe convertirse en una comunidad a la vez homogénea y totalizada de individuos desiguales y jerarquizados pero solidarios en una finalidad única. Los peligros de la diversidad, del conflicto y del desorden, los proyectos de la conspiración interna-externa, deben ser enfrentados a través del logro de una férrea unidad social y política que se expresa y se realiza en el estado fuerte. El estado monopoliza los poderes supremos de evaluación, diagnóstico y decisión y dicta las normas que deben regir la sociedad. La élite militar, con la entusiasta colaboración de la tecnoburocracia civil, toma en consideración los intereses de la élite oligárquica y el capital extranjero, y las exigencias del crecimiento neocapitalista dependiente. En este contexto, la élite militar reconoce y formula los problemas y las alternativas, impone las opciones, elige por sí y ante sí entre las soluciones que le proponen sus aliados y los tecnoburócratas civiles. El estado asegura el orden político, la seguridad en lo interno y en lo externo, la unidad y la colaboración sociales, la independencia nacional, el respeto de las formas prevalecientes de organización, dominación y explotación. De esta manera posibilita el crecimiento neocapitalista presentado mistificatoriamente como desarrollo y como prerrequisito de la grandeza y el bienestar nacionales.

El régimen del onganiato busca eliminar todo lo que sea disrupción, conmoción, enfrentamiento, debate. Se propone suprimir las demandas y presiones de los grupos mayoritarios que se encarnan en organizaciones y movilizaciones autónomas. Niega el pluralismo político, y pretende extirpar la instancia política como orden institucional legítimo, a remplazar por el estado autoritario-tecnoburocrático, la represión selectiva y la representación corporativa de intereses, clases y regiones. Mira con sospecha y hostilidad todo acto y toda actividad sociales que entren en contradicción con sus premisas y objetivos o de algún modo los amenacen. El onganiato suprime el Parlamento y los partidos legales, restringe al mínimo la actividad política, somete al poder judicial y lo relega a un papel instrumental. Censura y acosa los medios de información y los centros de creación cultural y científica. Desata en julio de 1966 un ataque innecesariamente brutal contra las universidades, y les impone luego un régimen de severo control y de restricciones múltiples que se combina con el otorgamiento de una libertad vigilada a grupos de docentes y estudiantes de orientación falangista, desarrollista, conservadora liberal o de filiaciones izquierdistas coincidentes con aquéllas. Vigila y persigue a los actores sociales que expresan y difunden la diversidad y el inconformismo. Impone en el gobierno y en la sociedad un espíritu y un clima de medievalismo, de beatería y moralina, y los traduce en medidas que alcanzan los extremos del ridículo.

En muchos aspectos el onganiato se acerca a un tipo de régimen fascista y comparte con éste sus rasgos. No llega a serlo en plenitud porque la situación del país no lo exige, sobre todo en lo que se refiere al consenso pasivo y generalizado

que el gobierno usufructúa al principio, a la atenuación provisoria de los conflictos sociales, y a la inexistencia de enemigos políticos de consideración. Cuando estas circunstancias favorables desaparezcan, el onganiato ya no estará en condiciones de adoptar e imponer un estilo fascista de gobierno y de sociedad.

Durante los primeros años el éxito parece sonreír al gobierno militar. Mientras el país se adormece presumiblemente sin término en un gran pantano a escala nacional, un estado restructurado y racionalizado para el autoritarismo y el eficientismo adopta una política ortodoxa de crecimiento neocapitalista. La élite oligárquica y la gran empresa nacional y extranjera disfrutan condiciones inmejorables para su rentabilidad y su acumulación. La penetración imperialista se intensifica y acelera en al banca y las finanzas, la comercialización, y la industria, los servicios urbanos. El desequilibrio de la balanza comercial y de pagos, la inflación, las tendencias al estancamiento y la recesión, parecen controlables y superables. El general Onganía y su gobierno se instalan en la historia a largo plazo, con un sentido de omnipotencia e intemporalidad. Subdividen el futuro en fases predeterminadas que adquieren la pulcritud tranquilizante de los organigramas (primero un tiempo económico, luego un tiempo social, y finalmente en el porvenir brumoso un tiempo político).

Bajo la superficie, sin embargo, el tiempo y la entropía trabajan contra el régimen. El país acepta o tolera el autoritarismo tecnoburocrático, el fascismo larvado que no osa decir su nombre, la reducción a la minoridad política, la asfixia cultural, la beatería y el tedio, mientras conserva la esperanza de que todo ello sea el precio inevitable de un crecimiento económico y un mejoramiento social a lograr. Varios factores conspiran contra la realización de esta esperanza.

La oleada masiva de inversión extranjera que se esperara no se produce. La prosperidad de las empresas imperialistas y de la élite oligárquica no desencadena un crecimiento sostenido y armónico. El crecimiento neocapitalista presupone la preservación de los factores fundamentales de atraso y dependencia y los refuerza. Estimula la emergencia de desigualdades y desequilibrios que afectan a una serie de ramas económicas, de sectores sociales y de regiones. La inseguridad, la pérdida de posiciones, el malestar, alcanzan y se difunden en grupos de la clase alta que se ven postergados o marginalizados por la restructuración operante en la élite oligárquica, y afectan sobre todo a sectores considerables de las clases media y popular. La despolitización forzada, el congelamiento social, la asfixia cultural, la supresión por decreto del debate ideológico, comienzan a volverse irritativos y a obtener cada vez menos tolerancia y resignación. Reaparecen y se afirman diversas formas de protesta social, de crítica ideológica y de oposición política. Las clases y los grupos abandonan el conformismo y la apatía. Las instituciones y los partidos sacuden su letargo. La movilización popular y la insurgencia guerrillera marcan particularmente el cambio.

En mayo de 1969 se produce en Córdoba una explosión espontánea de agitación y protesta, encabezada por obreros industriales y con la simpatía y el apoyo de importantes sectores de la clase media. Confluencia de motivaciones de tipo económico, social y político, y de una rebeldía regional contra el centralismo de Buenos Aires que el onganiato agravó, este fenómeno se repite luego con variable intensidad en la propia Córdoba y en otras ciudades del interior.

Hacia la misma época, la guerrilla urbana y rural reaparece después de los años de hibernación que siguen a sus fracasos iniciales, y comienza a cobrar una envergadura insospechada. Se constituye ahora con un número de elementos de gran diversidad en su origen social; en la filiación ideológica, que recorre una amplia gama de alternativas, en las motivaciones individuales. La nueva acción guerrillera aumenta en número de elementos y de grupos, en disponibilidad de recursos y de aparatos organizativos, en la amplitud de las redes de apoyos. Incrementa la cantidad y la envergadura de las operaciones (acciones militares, asesinatos, secuestros con rescate, desvío de aviones, espectáculos propagandísticos). Va logrando una simpatía difusa en sectores no desdeñables de la población que la admiran por el heroísmo y proyectan en ella su protesta contra la dictadura y el deterioro social.

La falta de éxitos indiscutibles y permanentes, el aumento de las formas de protesta y resistencia, la reactivación de la actividad política organizada, desgastan y debilitan al general Onganía y a su equipo, en un proceso que se agrava por sus características de rigidez mental y de falta de flexibilidad operativa. Todo ello contribuye a reanimar o a llevar a la superficie las diferencias y los conflictos entre figuras y facciones de las fuerzas armadas, sobre todo entre la tendencia falangista ortodoxa del general Onganía y la tendencia conservadora-liberal modernizada que encarna el general Lanusse.

El general Onganía termina por ser depuesto sin que nadie, dentro y fuera de las fuerzas armadas, haga el más mínimo movimiento para defenderlo, y es remplazado en 1970 por el general Levingston. A partir de este momento, visibles ya la quiebra del monolitismo y la omnipotencia del gobierno militar y la eficacia de la impugnación, el proceso se acelera. El nuevo presidente, traído por la junta de comandantes desde sus funciones militares en Washington, goza de buena reputación en las fuerzas armadas como oficial de inteligencia. Imbuido de un nacionalismo desarrollista tan bien intencionado como difuso, sufre las consecuencias negativas de su propia rigidez ideológica y operativa, de la incoherencia de su proyecto político, de su falta de control directo sobre los mandos militares, de su carencia de apoyos sociales y políticos, y de la continuidad de los factores deteriorantes que derribaron a su predecesor. La revelación cada vez más clara de su voluntad de asumir un papel autónomo y de definir por sí y ante sí la política gubernamental genera conflictos con los generales y oficiales del grupo conservador-liberal que tiende a lograr la hegemonía en las fuerzas armadas, en el gobierno y en la política nacional. A principios de 1971 el general Levingston cae también sin lucha y es remplazado por el general Agustín Lanusse, a cuya presidencia corresponde la fase final de la dictadura militar que, planeada para varias décadas, no dura en su ciclo descendente más de 7 años.

El general Lanusse y su gestión política son expresión de la conciencia que los sectores más lúcidos de las fuerzas armadas, de la élite oligárquica y del capital extranjero van tomando sobre el callejón sin salida al que la dictadura y el país han llegado, y sobre la necesidad de hallar una solución acorde con sus intereses de casta y de clase para esta crisis y para el problema del peronismo como aspecto central de la misma. Dos comprobaciones se imponen al respecto. *En primer lugar,* las fuerzas armadas están fatigadas y desgastadas; deterioradas en su seno y en el país; amenazadas por la disgregación interna, por los ataques políticos y ar-

mados y por la posibilidad de una pérdida irreversible de su poder tutelar; espantadas por el espectro de la revolución que ahora se concreta en seres de carne y hueso y en operaciones cada vez más audaces e impactantes. Necesitan abandonar las responsabilidades gubernamentales y retirarse al abrigo de sus funciones específicas para restañar sus heridas y restaurar su imagen y su poder. Se vuelve indispensable una salida electoral que dé lugar a una alternativa política y a un gobierno de tipo civil, y que al mismo tiempo garantice la estabilidad del sistema y la continuidad del proyecto neocapitalista. Esta solución impone ineludiblemente la legalización del peronismo y de su derecho a competir por el gobierno. El proceso debe darse en condiciones que permitan a la vez acelerar la descomposición y la destrucción del peronismo e instrumentarlo mientras ello se produce como refuerzo del sistema.

En segundo lugar, la élite oligárquica y las corporaciones multinacionales también perciben la necesidad de una salida institucional que restablezca las reglas del juego democrático-liberal y ofrezca garantías para la estabilidad y permanencia del orden constituido y del proyecto neocapitalista. En las condiciones específicas de la Argentina y de la coyuntura histórica que se vive, ello requiere la canalización y el control de las masas obreras y populares y de la clase media, que impidan su desborde incontrolado y su eventual reorientación en un sentido fuertemente reformista o revolucionario. El general Perón y su burocracia política y sindical han ofrecido durante 18 años suficientes garantías que permiten descartar las sospechas delirantes sobre su participación en cualquier proyecto amenazante para el sistema. A ello se agrega también la demostración de la formidable capacidad aglutinante que puede desplegar o usufructuar el peronismo.

En efecto, mientras esta perspectiva política comienza a perfilarse, nuevas tendencias emergen en la sociedad y la política argentinas. Las masas trabajadoras, privadas durante 18 años a la vez del apoyo estatal y de toda alternativa autónoma y superadora del peronismo, recuerdan con nostalgia, embellecen o inventan las conquistas del período 1946-1955, revitalizan sus ilusiones y esperanzas, y se preparan para sostener el retorno del líder al país y al poder. Una parte considerable del empresariado nacional comienza a convencerse de la posibilidad y conveniencia de un gobierno peronista capaz de garantizar las condiciones de un crecimiento económico con paz social y orden político legitimado que le otorgue nuevas perspectivas de progreso y prosperidad. Sectores considerables de la clase media que tan importante papel jugó en la caída del peronismo, movidos ahora por el resentimiento y la desesperación que induce la evidencia de su retroceso económico y de los peligros de descenso social, expresan su protesta a través de un acercamiento confuso y contradictorio a las masas populares, y al movimiento y a la figura que las encarnan y encauzan. Esta tendencia se da sobre todo en los sectores intelectuales, profesionales y tecnoburocráticos de la clase media, y se ve legitimada por las contribuciones políticas e ideológicas más diversas: falangismo, nacional-populismo, desarrollismo, izquierdas. De esta manera, a partir de motivaciones y racionalizaciones muy diferentes, con alegría o con resignación, la mayoría del país acepta la idea del gobierno peronista como única alternativa adecuada para superar una crisis que de otro modo parece no tener salida y amenaza con desenlaces temibles.

Puede sospecharse que el general Perón haya sido no el único pero sí el gran escéptico en este clima prevaleciente de optimismo ciego y esperanza eufórica. Envejecido y fatigado, instalado en la paz y la comodidad del exilio y en las gratificaciones de un poder manipulatoriamente ejercido a la distancia, Perón mira con desconfianza e inquietud los peligros (personales, sociales, políticos) de la confrontación electoral y sobre todo de su propio retorno al gobierno. Tampoco termina de convencerse de que el gobierno militar tiene intenciones sinceras de permitir el retorno del peronismo al poder. No regresa al país en el lapso requerido para ser candidato e impone en su lugar a Héctor Cámpora, cuya vieja lealtad a toda prueba permitiría instrumentarlo y controlarlo sin sospechas, gobernar en su lugar, aprovechar sus eventuales éxitos y hacerlo cargar con los fracasos y culpas. En marzo de 1973, la fórmula del peronismo y de la coalición que se nuclea alrededor de él (Frente Justicialista de Liberación, FREJULI) triunfa de manera no aplastante pero sí convincente en las elecciones, y Héctor Cámpora es ungido presidente de la República.

7. *Del mito del retorno al retorno del mito: las ilusiones perdidas*

El malentendido colectivo que reinstala al peronismo en el poder es al mismo tiempo la clave para la inteligencia del proceso de descomposición interna de aquél y del nuevo gobierno, y de la intensificación y aceleración de la crisis nacional. Los principales sectores del país, cada cual a su manera, esperan todo del nuevo gobierno y ninguno de ellos encuentra satisfacción aproximada a sus expectativas e ilusiones.

El general Perón y la burocracia política y sindical de su movimiento y del gobierno han aprendido poco o nada de sus errores y fracasos y de las nuevas realidades del país y del mundo, y tampoco han olvidado sus agravios y apetitos. Desde el primer momento se evidencian y hacen sentir sus efectos las limitaciones insuperadas del peronismo, el incremento de su propia heterogeneidad, la vaguedad e incoherencia de su proyecto político, la composición abigarrada de la coalición de partidos y grupos de presión que se articula en el FREJULI, el número e intensidad de las demandas que se entrechocan en la sociedad, el impacto de la crisis nacional. Todo ello afecta y divide al peronismo y al gobierno. Uno y otro son desgarrados por las contradicciones y los conflictos. Se paralizan y se incapacitan para actuar con un mínimo de coherencia y eficacia. Revelan su naturaleza esencialmente conservadora, su obsolescencia y su desubicación en los problemas de un país y de un mundo en acelerado cambio. Reafirman el predominio en su dirección y en su seno de los grupos de intereses más reaccionarios, y de las personalidades más incompetentes y sospechosas.

La concepción que Perón intenta aplicar en el nuevo gobierno representa una continuidad de su proyecto y de su estrategia tradicionales, con los aditamentos inspirados por sus propias experiencias de los últimos 18 años, todo ello interpretado y traducido en la práctica a través de su peculiar psicología, su ideología y las exigencias pragmáticas de su actuación como jefe del movimiento y del estado. Se trata de un proyecto de desarrollismo neocapitalista con bases de masas

y con elementos de legitimación y consenso de tipo nacional-populista. El proyecto debe instrumentarse a partir de la autoridad suprema del líder carismático, que a través de una cadena descendente de mecanismos de poder, acuerdos de intereses sectoriales, redes de lealtades, y con el control del aparato estatal, pretende desempeñar un papel arbitral entre clases, facciones e instituciones que contrapone y juega unas contra otras para instrumentar y someter a todas.

La comunidad organizada en una red de instituciones y corporaciones, partidos y acuerdos, se identifica con la construcción de un frente nacional. Todo debe confluir en la dotación de soportes y marcos para el proyecto de crecimiento neocapitalista que satisfaga los intereses y exigencias de la élite oligárquica, el gran empresariado nacional y el capital extranjero (norteamericano pero también europeo), y logre éxitos suficientes para otorgar concesiones a la clase media y a los trabajadores urbanos que permitan su canalización y control y aseguren su conformismo.

Por las limitaciones de origen que antes se analizó, no tardan en evidenciarse los fracasos en la articulación del sistema político y en la realización del proyecto económico. Los presupuestos y límites del experimento son desvirtuados y desbordados rápidamente, pese a los esfuerzos más o menos bien intencionados de quienes ocupan al principio el gobierno, el presidente Cámpora y algunos de sus colaboradores inmediatos.

La lucha entre la diversidad de intereses y facciones que componen el gobierno peronista o quieren instrumentarlo para sus fines particulares, se desata desde la noche misma del 25 de mayo de 1973 en que Héctor Cámpora asume la presidencia. La juventud pequeñoburguesa que se expresa a través de la llamada "izquierda peronista", con el apoyo más o menos subordinado de gran parte de la vieja y nueva izquierda fuera del movimiento, siente que ha llegado su hora. La izquierda peronista asume y difunde una ideología abigarrada en que coexisten y se entrechocan elementos del nacional-populismo, el social-cristianismo, el tercermundismo, el desarrollismo, el falangismo, los breviarios de diversas versiones dogmáticas del marxismo. La izquierda peronista apoya a Perón y al nuevo gobierno como expresión fatal y necesaria de las masas, y considera a uno y a las otras como irrevocablemente comprometidos con un vago proyecto de "revolución socialista nacional" que a veces tiende a identificarse peligrosamente con una versión nativa de "nacional-socialismo". Supone que inexorablemente Perón se pondrá a la cabeza de las masas para cumplir la revolución o será rebasado por aquéllas. Se visualiza a sí misma como vanguardia revolucionaria de las masas, élite promotora y usufructuaria de su marcha hacia el poder.

La izquierda peronista y la no peronista, momentáneamente convergentes y coaligadas, imponen la liberación de los guerrilleros y otros presos políticos. Crean periódicos y revistas y actúan para la captación y organización de bases populares en los sindicatos, los barrios, las universidades. Se lanzan al asalto de posiciones superiores e intermedias en la administración pública del estado central y de los gobiernos provinciales y municipales. Esta forma de comportamiento, fuertemente impregnada de espontaneísmo e improvisación irreflexiva, combina, en sus motivaciones y objetivos, la acción ideológica y política con el deseo de satisfacer las

aspiraciones de poder, prestigio y ascenso social para los grupos e individuos de los sectores medios que la promueven o apoyan.

La agitación resultante altera el clima político e ideológico del país y difunde una sensación de incertidumbre e intranquilidad. Inquieta e irrita al gran capital extranjero y nacional, a los empresarios y a la clase media, a la burocracia sindical y política del peronismo. No logra la simpatía y el apoyo de la gran mayoría de trabajadores y otros sectores populares, que la perciben como obstáculo y amenaza para el éxito del gobierno peronista con el que siguen identificándose. Carece de estrategia coherente u operativa para aumentar su poder y controlar el gobierno. Resulta incapaz de neutralizar y destruir a sus enemigos dentro y fuera del peronismo, pero los atemoriza, enfurece e induce al contrataque.

La derecha peronista, con el apoyo o la bendición de la que no lo es, aprovecha el regreso de Perón al país, el 20 de junio de 1973, para ejecutar una masacre de militantes de la izquierda peronista en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza. Este episodio, que Perón nunca denuncia ni investiga, señala el comienzo de la lucha final por el control del líder y del gobierno, y el reagrupamiento creciente de la derecha en una tendencia fascistizante que cada vez logra más imponerse sobre sus opositores del polo opuesto. Como resultado de la creciente definición política en Perón y en su movimiento, el presidente Cámpora es obligado a renunciar, y tras él van cayendo luego ministros, altos funcionarios, gobernadores de provincia, autoridades universitarias, que se identifican con la izquierda peronista, simpatizan con ella, o no se muestran suficientemente veloces y ardientes en su repudio y en el apoyo a la derecha del gobierno y del movimiento.

La presidencia es ocupada provisionalmente por Raúl Lastiri, un hombre de la derecha peronista. En septiembre de 1973 la fórmula Juan Perón-María Estela Martínez de Perón es consagrada para la presidencia de la República por el más alto número de votos y el mayor grado de participación electoral que registra la historia argentina, y con el apoyo de la izquierda peronista todavía convencida de que la historia trabaja ineluctablemente en su favor.

Reinstalado en la presidencia sin intermediarios inseguros ni restricciones formales, Perón hace un esfuerzo enérgico por ordenar el gobierno y el país en función de su proyecto originario. Para ello se rodea de colaboradores reclutados en la derecha económica y política, las fuerzas armadas, la burocracia sindical. En su entorno Perón tiende además a incorporar cada vez más a los ejemplares de desclasados, aventureros, especuladores, todos de orientación fascista, por los que siempre sintió una peculiar predilección. Se apoya en ellos y les otorga un grado creciente de poder, les permite la gestión irresponsable, los abusos y los atropellos.

Perón primero, sus herederos luego, aprovechan las críticas y protestas de la izquierda peronista y la reanudación de las actividades guerrilleras para acelerar la depuración de todo elemento más o menos radicalizado, sospechoso, o dotado de un grado mínimo de espíritu crítico y honestidad, que sobreviva aún en los diversos niveles de la administración pública y las universidades. La depuración institucionalizada se combina con el despliegue de una campaña de represión física por la policía, las fuerzas armadas y un aparato paramilitar clandestino promovido y mantenido desde las cimas del gobierno. De esta operación perfectamente orquestada, y de los procedimientos cada vez más normales de intimidación,

secuestro, tortura y asesinato, resultan blanco un número creciente de dirigentes y militantes políticos y sindicales, intelectuales, abogados, periodistas, escritores, artistas, científicos, así como las víctimas de venganzas personales o de errores de identificación.

A la represión física se agrega la asfixia gradual o el cierre punitorio de publicaciones e instituciones de crítica y creación; la conclusión por equipos fascistas de la destrucción de las universidades que iniciaran la irresponsabilidad e incompetencia de la izquierda peronista; el desaprovechamiento y la persecución del talento nacional, forzado al exilio interior o al éxodo externo.

Esta estrategia tiene un carácter primordialmente preventivo. Trata de suprimir líderes y cuadros potenciales, y de crear un terror generalizado que induzca el conformismo y la parálisis ante la perspectiva del fracaso probable para el proyecto de crecimiento neocapitalista con bases y consenso de masas, a lo que se agrega la posibilidad cercana de la muerte de Perón y el consiguiente replanteo del liderazgo nacional.

Los éxitos de esta estrategia son considerables. La nueva derecha, en la cual la diferencia entre peronistas y no peronistas se atenúa y va siendo remplazada por un embrión de nueva coalición en el poder, se afirma, logra el control del gobierno y del estado, y lo consolida aún más después de la muerte de Perón en julio de 1974. La depuración de todo elemento hostil o tibio en el gobierno y en las principales instituciones sociales continúa sin pausa y sin piedad. Una parte de la izquierda peronista y no peronista que jurara morir por los intereses del pueblo y por las banderas de la "liberación nacional", abandona sus posiciones sin lucha; se refugia en el anonimato o la clandestinidad pasiva o busca los consuelos del exilio; deja en el desamparo y el peligro a los reducidos grupos de trabajadores y hombres del pueblo que confiaron en ella; o bien acepta la autoridad vertical y las exigencias de conformismo de Perón, y sus colaboradores y sucesores, y no vacila en volverse inquisidor y verdugo de sus antiguos compañeros. Otra parte de la izquierda peronista y no peronista continúa su lucha en la clandestinidad política o en la actividad guerrillera, en condiciones de relativo aislamiento de las masas.

Éxitos y fracasos se entrelazan, sin embargo, en el balance del gobierno peronista, y los segundos tienden cada vez más a prevalecer. La política económica es uno de los aspectos donde el fracaso se va volviendo más notorio. El acuerdo planteado entre el gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales, para la concreción de un "pacto social" que estabilice salarios, precios y ganancias y posibilite así la "reconstrucción nacional", nunca llega a cumplirse y demuestra su inoperancia para recuperar el equilibrio y desencadenar el crecimiento. La desconfianza engendrada por una larga serie de propuestas similares en el pasado y la incidencia de las expectativas promovidas por la demagogia populista, hacen que los trabajadores se resistan a congelar sus demandas y a incrementar su productividad. Los empresarios resienten la actitud de los trabajadores y el control de precios del gobierno, no creen en las promesas de estabilidad a largo plazo, persisten en el logro de beneficios fáciles e inmediatos. La productividad y la producción bajan, y se desencadenan los fenómenos de inflación incontrolada, especulación, acaparamiento y mercado negro. El desabastecimiento y la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios y otros ingresos fijos generan malestar social

y olas sucesivas de movimientos reivindicatorios. La disminución de la inversión interna no es compensada por el insignificante aflujo de capitales norteamericanos y europeos. El deterioro económico se ve agravado por las consecuencias de la inestabilidad política, la incoherencia e ineficiencia de la administración pública y la política económica, la corrupción generalizada y el saqueo de los recursos públicos, la normalización de la violencia. Todo ello contribuye a retraer las iniciativas y las inversiones, a reforzar las prácticas especulativas, a fomentar el atesoramiento en bienes-refugio (inmuebles, dólares, todo objeto de presumible valorización futura), la fuga hacia el exterior de capitales y de personas (empresarios, ejecutivos y cuadros superiores, técnicos y científicos, trabajadores calificados).

El deterioro económico va de la mano con el malestar social, el descontento sindical y la protesta política bajo formas legales y de clandestinidad subversiva. Afectado por la incompetencia, la corrupción y el reaccionarismo, e incapacitado para diseñar e implementar una estrategia eficaz de cualquier signo, el gobierno peronista combina la torpeza, la parálisis y la represión. El aplastamiento de la subversión es entregado al control exclusivo de las fuerzas armadas, que van reforzando así su poder tutelar y proyectan su acción represiva a las áreas de la ideología, la política y la administración pública, con la eficiente colaboración del aparato paramilitar. Operaciones bélicas de gran envergadura, amenazas y atentados, secuestros y asesinatos, sumen al país en el terror, el desánimo y la parálisis, ciegan todas las fuentes de iniciativa y creatividad. La represión afecta a los grupos clandestinos y guerrilleros, pero no los destruyen ni impiden la continuidad del apoyo activo y de la simpatía colaboradora por una parte de la juventud pequeñoburguesa a la que la crisis parece cerrar toda otra salida individual y social. Tampoco impide el gobierno la explosión del descontento en sus bases fundamentales, los trabajadores afectados por la recesión económica y una inflación desencadenada, y que amenazan con rebasar a sus dirigentes de la burocracia sindical y desencadenan conflictos de gran envergadura.

La crisis se acelera y profundiza. En marzo de 1976, el ministro de economía en turno, Emilio Mondelli, afirma que la economía argentina vive el apocalipsis y está al borde de la quiebra. La inversión desaparece prácticamente. La inversión bruta interna es en 1975 un 16% inferior a la de 1974 y a esta merma corresponde otra de la ocupación, lo que trae como resultado una caída del 2.6% en el producto bruto interno generado por cada trabajador. El producto nacional bruto baja un 2% entre 1974 y 1975. Mientras la producción agropecuaria e industrial desciende, el consumo crece en 3%. La inflación "ataca como un virus a todos los sectores sociales, el estado se halla muy próximo a declarar la cesación de pagos, el déficit fiscal se agiganta, los intermediarios especulan y acaparan productos, el balance de pagos con el exterior arrojó en 1975 un déficit de 1 095 millones de dólares, y, al caer las reservas internacionales de divisas, el gobierno enfrenta dificultades para atender a diario el mismo mercado de cambios... La entrada de capitales fue nula y el déficit... se reflejó en una fuerte declinación de las reservas argentinas de divisas." Éstas caen de 2 026 millones de dólares a 620 millones entre la asunción de la presidencia por María E. Martínez de Perón en julio de 1974 y diciembre de 1975. La alternativa que parece encarar hoy el

gobierno peronista se refiere a la aceptación de una política económica fuertemente recesiva que inspira el Fondo Monetario Internacional y cuyo costo social y político puede resultar fatal para la supervivencia del actual régimen.

Por motivos y con modalidades y proyecciones diferentes, todas las clases sociales, las instituciones y los partidos manifiestan su descontento y su frustración, retacean su apoyo al gobierno o lo critican e impugnan. El núcleo gobernante se divide, se reduce y se aísla. Se estructura cada vez más alrededor de la presidenta Perón, visiblemente incompetente para el desempeño de funciones pero aferrada al poder con tozudez y afirmando el 6 de marzo de 1976 "que cumpliré con los deberes que Dios y sus inescrutables designios me han impuesto". Dicho núcleo incluye cada vez más exclusivamente la constelación de desclasados y aventureros, al asalto del gobierno para su rápido usufructo personal mientras la coyuntura y el azar lo permitan y el diluvio no llega. Esta peculiar "guardia de corps" instrumenta a la presidencia, le da apoyo, consejo y consuelo, y recurre a todas las formas de la incompetencia, la corrupción, la arbitrariedad y la violencia. Por su naturaleza y por su comportamiento, la presidenta Perón y su grupo de confianza van produciendo la desconfianza, la hostilidad y el rechazo del gran capital y de la clase media, de los intelectuales y los trabajadores, de la burocracia sindical y los partidos políticos.

En el momento de concluir estas líneas (marzo de 1976), Argentina parece sufrir un proceso de *Weimarización* que asemeja curiosamente su perfil al de la Alemania de los años 1920. El gobierno parece suspendido en el aire, reducido al control formal del poder ejecutivo y la administración pública y a los vestigios de una legitimidad y un consenso que se esfuman velozmente. En aparente paradoja, es el propio vacío de poder lo que contribuye decisivamente a preservarle una existencia precaria. La mayoría de los grupos sociales y de los partidos políticos temen desencadenar la caída de esta ficción grotesca y trágica de gobierno, copartícipes del temor a un desenlace que puede resultar todavía peor que la crisis actual, e incapaces de constituir una coalición que dé base a un nuevo bloque de poder, proporcione una salida aceptable y preserve los intereses de los miembros.

Las fuerzas armadas recuerdan el grave deterioro que les causó la dictadura militar de 1966-1973, y vacilan por consiguiente en derribar al gobierno para repetir una experiencia similar. En evidencia del real aprendizaje político que han cumplido en las últimas décadas, sin dejar de acentuar su control sobre el estado, esperan que la crisis del país y la evidencia del fracaso peronista se vuelvan intolerables para la mayoría y ésta las convoque para asumir la plenitud del poder y ejercerlo sin límites ni contemplaciones para restaurar el orden y ofrecer alguna promesa de progreso.

La encrucijada más catastrófica de la historia argentina ha colocado ya un epitafio de escala nacional para el populismo peronista. Al mismo tiempo, arroja a todos los actores al escenario, e impone una confrontación decisiva entre aquéllos y entre las grandes opciones y los grandes modelos alternativos de desarrollo, de sociedad y de estado. Para crisis históricas de esta envergadura es útil recordar con

el capitán protestante de las guerras de religión que "no es necesaria la esperanza para emprender ni el éxito para perseverar".*

VI. BIBLIOGRAFÍA

Bagú, Sergio, *La realidad argentina en el siglo XX. III. Argentina en el mundo,* Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1973.

Botana, N. R., Braun, R., Floria, C. A., *El régimen militar 1966-1973,* Ediciones La Bastilla, Buenos Aires, 1973.

Braun, Óscar, compilador, *El capitalismo argentino en crisis,* Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1973.

Bunge, Alejandro, *Una nueva Argentina,* Buenos Aires, 1940.

Cantón, D., Moreno, J. L., Ciria, A., *Historia argentina, 6. La democracia constitucional y su crisis,* Editorial Paidós, 1972.

Comisión Económica para América Latina, *El desarrollo económico de la Argentina,* 1956.

Comisión Económica para América Latina, *El desarrollo económico y la distribución del ingreso en la Argentina,* Naciones Unidas, Nueva York, 1968.

Confederación General Económica (CGE), *Informe Económico,* Buenos Aires, 1964.

Cortés Conde, Roberto y Gallo, Ezequiel, *La formación de la Argentina moderna,* Editorial Paidós, Buenos Aires, 1967.

De Imaz, José Luis, *Los que mandan,* Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964.

Delich, Francisco J., *Crisis y protesta social. Córdoba, mayo de 1969,* Buenos Aires, Signos, 1970.

Del Mazo, Gabriel, *El radicalismo,* Raigal, Buenos Aires, 1951.

———, *El radicalismo (ensayo sobre su historia y su doctrina),* tomo II, Buenos Aires, 1959.

Del Río, Jorge, *Política energética argentina y los monopolios eléctricos,* Cátedra Lisandro de la Torre, Buenos Aires, s/f.

Di Tella, Torcuato, Germani, Gino, Graciarena, Jorge y colaboradores, *Argentina, sociedad de masas,* Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1965.

Dorfman, Adolfo, *Evolución industrial argentina,* Editorial Losada, Buenos Aires, 1942.

Escobar, Justo y Velázquez, Sebastián, *Examen de la violencia argentina,* Archivo del Fondo, Fondo de Cultura Económica, México, 1975.

Esteban, Juan Carlos, *Imperialismo y desarrollo económico,* Editorial Palestra, Buenos Aires, 1961.

Fayt, Carlos S. y otros, *La naturaleza del peronismo,* Viracocha Editores, Buenos Aires, 1967.

Fayt, Carlos S., *El político armado - Dinámica del proceso político argentino 1960-1971,* Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1971.

Ferns, H. S., *Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX,* Buenos Aires, Solar/Hachette, 1966.

Ferrer, Aldo, *La economía argentina,* Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1963.

* Este trabajo ha sido concluido antes de la instauración del actual gobierno militar, cuya evaluación requiere un tratamiento separado.

Frondizi, Arturo, *Petróleo y política*, Raigal, Buenos Aires, 1954.
Frondizi, Silvio, *La realidad argentina*, volumen I, Ediciones Praxis, Buenos Aires, 1955.
Galletti, Alfredo, *La realidad argentina en el siglo XX. I. La política y los partidos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1961.
Germani, Gino, *Estructura social de la Argentina*, Raigal, Buenos Aires, 1955.
———, *Política y sociedad en una época de transición - De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1962.
Giberti, Horacio, *Historia económica de la ganadería argentina*, Raigal, Buenos Aires, 1954.
———, *El desarrollo agrario argentino*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964.
Graciarena, Jorge, *Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1967.
Halperin Donghi, Tulio, *Argentina en el callejón*, Arca, Montevideo, 1964.
———, *Historia argentina. 7. La democracia de masas*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1972.
Henríquez Ureña, Pedro, *Historia de la cultura en la América hispánica*, Fondo de Cultura Económica, 3a. edición, 1955.
Hernández Arregui, J. J., *La formación de la conciencia nacional, 1930-1960*, Buenos Aires, 1960.
Ibarguren, Carlos, *La historia que he vivido*, 2a. edición, Buenos Aires, 1969.
Kaplan, Marcos, *Economía y política del petróleo argentino, 1939-1956*, Ediciones Praxis, Buenos Aires, 1957. Segunda edición: *Gobierno peronista y política del petróleo 1946-1955*, Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971.
———, *Petróleo, estado y empresas en la Argentina*. Síntesis Dosmil, Caracas, 1972.
———, *La crisis del radicalismo*, Ediciones Praxis, Buenos, Aires, 1958.
———, "Las fuerzas armadas en la crisis argentina", en *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, París, núm. 7, junio-julio de 1966.
———, *Problemas del desarrollo y de la integración de América Latina*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1968.
———, *El estado en el desarrollo y la integración de América Latina*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1969.
———, *Formación del estado nacional en América Latina*, primera edición, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970. 2a. edición, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976.
Kelly, sir David, *The ruling few*, Hollis and Carter, Londres, 1952.
Korn, Alejandro, *Influencias filosóficas en la evolución nacional*, Editorial Claridad, Buenos Aires, s/f.
Luna, Félix, *Yrigoyen*, Raigal, Buenos Aires, 1954.
———, *Argentina: de Perón a Lanusse, 1943-1973*, Editorial Planeta, Barcelona, 1972.
Martínez Estrada, Ezequiel, *Radiografía de la Pampa*, Editorial Losada, Buenos Aires, primera edición, 1942, sexta edición, 1968.
McGann, Thomas F., *Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano, 1880-1914*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1960.
Mercier Vega, Louis, *Autopsia de Perón - Balance del peronismo*, Tusquets Editor, Barcelona, 1975.
Murmis, Miguel, Portantiero, Juan Carlos, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1971.

Oddone, Jacinto, *Gremialismo proletario argentino*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1949.

———, *La burguesía terrateniente argentina*, Buenos Aires, 1963.

O'Donnell, G. A., *Modernización y autoritarismo*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1972.

Ortiz, Ricardo M., *Historia económica de la Argentina*, dos tomos, Raigal, Buenos Aires, 1955.

Palacio, Ernesto, *Historia de la Argentina*, Peña Lillo, Buenos Aires, 1965.

Peña, Milciades, *Antes de mayo*.

———, *El paraíso terrateniente*.

———, *La era de Mitre*.

———, *De Mitre a Roca*.

———, *Alberdi, Sarmiento, el 90*

———, *Masas, caudillos y élites*.

Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1971.

———, "Naturaleza de las relaciones entre las clases dominantes argentinas y las metrópolis", en *Fichas de investigación económica y social*, Buenos Aires, volumen I, núm. 4, diciembre de 1964.

Peralta Ramos, Mónica, *Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina 1930-1970*, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1972.

Pinedo, Federico, *En tiempos de la República*, volumen I, Buenos Aires, 1971.

Potash, Robert A., *El ejército y la política en la Argentina 1928-1945 - de Yrigoyen a Perón*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1971.

Puiggros, Rodolfo, *Las izquierdas y el problema nacional*, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1965.

———, *El yrigoyenismo*, Editorial Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1965.

———, *La democracia fraudulenta*, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968.

———, *El peronismo: sus causas*, Carlos Pérez Editor, Buenos Aires, 1971.

Ramos, Jorge A., *Revolución y contrarrevolución en la Argentina*, 2 volúmenes, Buenos Aires, 1965.

República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, *Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional*, diciembre, 1973.

Romero, José Luis, *Las ideas políticas en Argentina*, Fondo de Cultura Económica, 2a. edición, 1956.

Salera, Virgil, *Exchange control and the Argentina market*, Columbia University Press, Nueva York, 1941.

Silenzi de Stagni, Adolfo, *El petróleo argentino*, Problemas Nacionales, Buenos Aires, 1955.

Weil, Félix, *The Argentine Riddle*, The John Day Co., Nueva York, 1944.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA HISTORIA DE BOLIVIA (1932-1971)

RENÉ ZAVALETA MERCADO

El amor, el poder, la guerra. En eso consiste la verdad de la vida. Pues bien, fue en el Chaco, lugar sin vida, donde Bolivia fue a preguntar en qué consistía su vida. Aquí, donde el propio tuscal se retuerce tal si lo seco se hubiera convertido en dolor, es donde ocurrió la guerra, punto de partida del período que hemos de analizar pero también de toda la Bolivia moderna. Boquerón, Nanawa, Picuiba, Kilómetro 7, Cañada Strongest, dejan de ser topónimos inertes; ahora contienen sus propios muertos. Nombres vivos para todo el mundo. Es como si solamente allá la historia hubiese perdido su propia rutina y no hay duda de que entonces, sólo entonces, aprendieron los bolivianos que el poder es algo por lo que se debe matar y morir.

I. LA MEMORIA HISTÓRICA

La guerra, desde luego, era evitable. Cualquiera que fuese el grado de abigarramiento de los títulos enseñados por las partes, cualquiera el grado de gravedad de los incidentes previos a la guerra misma, en cualquier forma, parece evidente que habría sido posible convenir una solución arbitral. Es una mala política de estado pensar que la única salida para todo es la imposición total del principio que uno mismo sostiene. ¿Por qué, en efecto, los dos países más pobres de la zona tenían que lanzarse a una aventura tal? Era como si la sintieran una obligación hacia sí mismos, acaso porque suponían que lo único que les quedaba era su honor. La negociación era lo que pedía la lógica pero no eran lógicos los hombres que debían pensar la negociación. El arbitraje habría sido posible pero sólo si se hubiera tratado de países no sometidos a semejantes presiones emocionales, acumuladas y no racionalizadas jamás. En esto, que parece casi la voluntad de destruirse, algo nihilista y misterioso, quizá donde haya que tentar una explicación no sea en el razonamiento coetáneo a los sucesos sino en la carga que lo condicionaba, es decir, en el fondo histórico de los dos países. Después de todo ¿acaso no es verdad que había sido Asunción el centro de la colonización del Río de la Plata entero y después, en el tiempo republicano, ya el Paraguay, un país modesto pero también progresista y armónico, comparable en ello al Chile de entonces pero de una manera quizá más saludable? Hay en esto un desencuentro. Los historiadores ven a los países desde la perspectiva del presente y no yerran por fuerza en ello porque la cosa se conoce en su remate; pero cada país, en cambio,

se ve a sí mismo con los ojos de su memoria. Que el país como tal estanque su conocimiento en un momento de su pasado o que lo mistifique carece de importancia sustancial porque aquí lo que importa es qué es lo que cree que es. El componente de la memoria colectiva en la ideología es, sin duda, algo más importante de lo que se supone por lo común.

Otro tanto ocurre cuando se piensa en el virreinato del Río de la Plata, en teoría el marco de referencia al que debía remitirse Bolivia en cuanto a sus orígenes políticos. Suele darse por sentado que el centro del virreinato estuvo siempre en Buenos Aires. Lo cierto empero es que no fue Charcas que se constituyó con relación al virreinato sino el virreinato que se constituyó fundándose en Charcas. El virreinato de Perú estuvo formado por dos audiencias y la de Charcas reunía las actuales Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ya en el virreinato, cuando se crea otra audiencia en Buenos Aires, en la de Charcas permanecen la mitad de las provincias y la mayor parte de la población. La zona entera, por lo demás, vive de Potosí y se refiere a él.

II. DECADENCIA DE CHARCAS Y EL PARAGUAY

Se trata por tanto, en ambos casos, de países cuya importancia relativa en la zona no había hecho otra cosa que decrecer de continuo. En la sustitución de una economía de estanco, asentada en los centros interiores como derivación de la avidez por los metales preciosos, por una economía asentada en la periferia comercial de los puertos, al servicio de la fase expansiva del comercio inglés, ambos países resultaron perjudicados por el nuevo orden de colocación de la economía de la América del Sur.

Paraguay, por lo que se sabe, aunque con un conocimiento circuido por las exultaciones, era sin duda uno de los centros más interesantes entre los que giraron en torno a la economía de Potosí. Al separarse de las Provincias Unidas (o de la Confederación, como hubiese preferido decir Francia) era sin duda una provincia más poblada que las demás, consideradas de modo individual. Era un país construido bajo la modalidad de las misiones de los jesuitas y, por tanto, el peso de un sector terrateniente señorial era aquí insignificante en tanto que el dominio de principio sobre la tierra no tardó en corresponder al estado. Los dictadores —Francia y los López— ratificaron el estatuto que venía de los jesuitas y lo desarrollaron a su manera, con lo que dieron lugar a una república despótica y paternalista pero también más igualitaria. Las noticias que se tienen del país anterior a la guerra de la Triple Alianza hablan de un cierto bienestar en la vida de las gentes, de un analfabetismo en todo caso más bajo que en cualquier parte del subcontinente, y se sabe que el Paraguay estuvo entre los primeros países que tuvieron ferrocarril, el primero en tener sus propios astilleros y su propia industria militar. Todo ello tiene que reducirse, como es natural, a las proporciones de un país pequeño y aislado. Era, a la vez, un país que había sido clausurado por los dictadores no sólo para toda gente extraña sino también para el comercio inglés. Los avatares de la apertura del comercio paraguayo son los que dieron lugar a

que las nuevas capitales del comercio de los ingleses en la zona, Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo, organizaran la guerra de la Triple Alianza, saquearan el país y produjeran una suerte de catástrofe demográfica particular de la que el Paraguay no se repuso jamás.

La historia de Bolivia del siglo XIX es diferente pero sólo para llegar a un punto semejante. Como país mismo es resultado de dos hechos: de la crisis del azogue, que era resultado del bloqueo inglés de Bonaparte, y de la feroz guerra de las republiquetas o facciones (las guerrillas, que abarcaron todo el país), que duró quince años, entre 1809 y 1824. Con la crisis del azogue, la economía de Potosí, que ya estaba en descenso, acabó de arruinarse y el mismo virreinato, que se había organizado en torno a Potosí, perdió nexos concretos con las provincias llamadas altas, y la violencia de la guerra, en lo fundamental, se ocupó de que los gobernantes porteños, con Rivadavia a la cabeza (habida cuenta de que toda la historia de la Argentina en el siglo XIX y quizá algo más no es sino el desarrollo de las ideas europeístas y racistas de Rivadavia) vieran como algo indeseable su permanencia (de las llamadas Provincias Altas) como partes de la Confederación. Eran, por cierto, provincias que, con más población que las demás, no podían sino potenciar de un modo ostensible a las del norte que, por otra parte, no irían a ser reducidas al poderío de Buenos Aires sino en la segunda mitad del siglo.

Bolívar, como lo prueba su correspondencia con Sucre, no podía comprender que la misma capital —Buenos Aires— que había mostrado un tan grande desinterés en estas provincias que, sin embargo, eran las que guardaban la frontera independiente del resto del virreinato, enseñara a la vez un interés casi apasionado por su separación. En suma, Alvear, en nombre de Buenos Aires, negoció con Bolívar que lo que se llamó al fin de la colonia el Alto Perú (Charcas, en rigor) no fuera parte de las Provincias Unidas. Contrariaba esto el propósito del país que había recibido a Sucre con la bandera azul y blanca de Belgrano; pero Bolívar, dictador de Perú, es decir, de un lugar que nunca había perdido su olor filohispánico, sintió entonces acaso por primera vez su grancolombianismo y decretó (véase la correspondencia, otra vez) que era indeseable la formación de un enorme país fronterizo con la Gran Colombia como el que sería fruto de la unión del Alto y el Bajo Perú. Pero era algo que nadie quería y si Buenos Aires, que al fin y al cabo había sido un poderoso centro revolucionario, veía con recelo el genio desacatado de las facciones altoperuanas, Lima había sido ya con dinero, armas y sentimientos, el lugar desde el que se las perseguía. Lima era por tanto, en la práctica, una tierra independizada contra su voluntad y el Alto Perú, es decir, Charcas con la oligarquía de los azogueros arruinada y con cien republiquetas instaladas en la violencia de una geografía invencible, constituidas por una suerte de democracia directa de guerra y dotadas de logística autónoma, un conjunto político-territorial sin núcleo hegemónico, incapaz de resolver por sí mismo la cuestión de su poder político. Los mismos altoperuanos que con paz de conciencia habían levantado la bandera de Belgrano a la llegada del ejército de Bolívar, tuvieron que resignarse, no sin cierta perplejidad, a ser un país independiente.

III. DOBLE CARÁCTER DEL PAÍS

Aún así, los hechos mismos podrían haberles advertido (si hubieran sido hombres prudentes, pero la clase dominante sólo tiene hombres prudentes en el momento de su gloria, es decir, en su reciente dominación) que algo estaba cambiando en lo que ellos pensaban como la naturaleza de las cosas. Con esto quizá queremos justificar, pero *a contrarii,* el cierto engreimiento o injustificada seguridad de sí misma con que nacía esta república, sin embargo destinada a sufrir todas las inseguridades del mundo. Pero era una seguridad que no le venía de sí misma y en esto debemos ver una paranoia que se repetirá, después, si es verdad que la paranoia contiene una ruptura entre la inteligencia de las cosas y la sensibilidad de las cosas. Las facciones mismas o republiquetas (ellas se llamaban a sí mismos facción o montonera y en su grado más popular los "cuicos", es decir, escurridizos como un conejo silvestre; los españoles las llamaban republiquetas) estaban mostrando una inexplicable y a veces atroz capacidad de resistencia (puesto que no fueron vencidas jamás por nadie) pero también el carácter centrífugo del poder que preparaban (lo que explica el apelativo de republiquetas). Mucho después, Tamayo verá en esto la aplicación del carácter indígena a su condicionamiento ajeno.[1] Por otro concepto, pues allá el jefe era nominado por los combatientes y la logística está dada por los indios, puesto que la existencia misma de la facción significa, por la vía de facto (aunque no por su aceptación como legalidad), que los patrones no ingresan a la posesión de los patrones, se trata de una guerra de masas con todas las características de las guerras campesinas clásicas: gran resistencia, baja capacidad de victoria. Para los aficionados a las comparaciones, Toynbee digamos, las semejanzas entre la formación de la guerra tupamara y la de Münzer será siempre la de una aproximación inexplicable. Esto se heredará en la república y se hará una suerte de carácter de la nación. Será un país con una gran capacidad militar en sus masas, invencible siempre en lo que Tamayo llamará su "home" central, pero también, reproduciendo algunas de las limitaciones del poder político incaico, un estado incapaz de librar guerras exitosas fuera de dicho hábitat. Será, por otra parte, herencia de la facción, de los hábitos democráticos instalados en las masas, la patria de lo que Arguedas denominará los "caudillos bárbaros" y la "plebe en acción". Puede explicarse aquí la gran distancia que hay entre dos países sin embargo semejantes como el Perú y Bolivia. Es aquí donde se dan los sellos de la naturaleza social del país.

IV. ENGREIMIENTO DE CHARCAS

La catástrofe de la plata dará fin a la oligarquía de los azogueros y eso significaba que era un país que nacía aislado del mundo, de un mundo al que, por otra parte, había ocasionado. Será por consiguiente un débil estado que tendrá que vivir casi hasta el fin del siglo XIX (por lo menos hasta el cuarto final de ese siglo)

[1] Véase *La creación de la pedagogía nacional,* La Paz.

de las contribuciones indígenas, lo que significa que será un estado en guerra perpetua con su propia población.

Los doctores de Charcas, que fueron los recipientes de la independencia, no pensaban, empero, en nada de esto. Pensaban en las glorias de Potosí, en su esplendor; se sentían como un centro de las cosas, no se convencían por razón alguna de que habían quedado a un lado ni aun cuando los porteños se lo decían en la voz más alta posible por medio de Alvear o de Anchorena o de cuantos habían tratado la cuestión. La vanidad con que Charcas pensó en la independencia, su engolamiento y autoadoración sólo puede explicarse como la patología de una clase superior que no había trabajado jamás, que se había acostumbrado a ser un eje de las cosas porque sí. La plata de Potosí y la servidumbre de los indios enfermaron al país y lo que se podía pensar como su contraparte humana no tenía capacidad de concretarse como poder por parte alguna.

V. PROYECTO DE SANTA CRUZ

Tal infatuación, pues es una infatuación la conciencia postergada o creer lo que no es más, se manifiesta bastante bien en el primer poder político "boliviano" que existe, con Santa Cruz, una vez que se retiran los colombianos. En la conformación de su mito están la línea de su estirpe, que hablaba por sí misma de una reminiscencia del Imperio de los incas (pues era un Calahumana) en un momento en que, como lo prueba el monarquismo de Belgrano, eso tenía cierta convocatoria, su pertenencia a la casta clásica de la dominación local y los consiguientes hábitos naturales del mando pero sumados a una buena carrera militar y a un temprano genio administrativo. Pero una cosa es el mito *a posteriori* de Santa Cruz y otra lo que Santa Cruz pensaba como proyecto de sí mismo para la tierra suya. Aquí lo que se intentaba en lo fundamental era la reconstrucción oligárquica de "la zona clásica de los barullos", como la llamó Moreno, que se había hecho democrática y plebeísta en las emergencias bárbaras de una guerra que no parecía tener fin. Con un proyecto conservador en lo interno, para suprimir el hábito democrático de las masas, y restaurador en el principio, incluso de las modalidades comerciales del monopolio español, Santa Cruz toma desde dentro el Perú, dando un proyecto nacional a un país que no lo tenía, e intenta hacer lo mismo con las provincias del norte argentino. Hay en esto, sin duda, aunque se ha querido ver en ello un intento de restauración del Imperio de los incas, más bien la restauración de un eje perdido, la aplicación del centralismo de provincias —Charcas— que habían dejado de ser centrales. Portales y Rosas, cuyos propios proyectos nacionales se parecen en más de un aspecto al del propio Santa Cruz, destruyen esta tendencia fundada en una representación obsoleta de las cosas y por eso, en la derrota de Santa Cruz, hay que ver la imposición del nuevo eje económico, que pasaba por Valparaíso y Buenos Aires sobre el viejo centro de Charcas-Potosí; pero, además, aquí se inicia la política de clausura del país boliviano que no ha de tener conclusión geográfica llana sino con la guerra del Pacífico.

Es cierto que Santa Cruz mismo desertó de sus ilusiones proteccionistas y siguió una política proinglesa y librecambista en la segunda fase de su gobierno, en el Protectorado mismo; pero los ingleses, aunque Palmerston y casi todos los personajes de la época tenían un gran respeto por este hombre coherente en medio de un carnaval de libertos, no tenían por qué preferir a un gobierno que casi no tenía más que ofrecer que la personalidad misma de su jefe, frente a los nuevos mercados dados por el trigo de Chile y los cueros y cecinas del Río de la Plata. Los chilenos, en la guerra del Pacífico, que se llevó a cabo para compensar los descensos del comercio exterior de Chile con la entrega del guano y el salitre a John North, no hicieron más que proseguir las características de esta imposición dictada por la nueva manera del comercio del mundo, completando el encierro de Bolivia en sus altas montañas, que eran como el símbolo de su encierro histórico. Era el comercio capitalista en forma, imponiéndose de manera resuelta a una región precapitalista en su conjunto, incapaz del nuevo tiempo.

VI. ADMIRACIÓN DE PARAGUAY Y BOLIVIA A SUS VENCEDORES

Ni el modelo despótico-nacional de Paraguay de los grandes dictadores ni el jamás resuelto sistema de clases, castas, regiones y modos de producción desarticulados entre sí de Bolivia podían, con guerra de la Triple Alianza o sin ella, con Yungay y la guerra del Pacífico o sin ellos, avanzar hacia la constitución de países capitalistas modernos ni siquiera en los términos del Chile de entonces, que constituyó en efecto una democracia burguesa dentro de su dominación oligárquica, ni de Argentina, que resolvió los problemas de su unidad nacional bajo la hegemonía indisputable de Buenos Aires. Uno y otro, por lo demás, eran, para usar términos de nuestros días, verdaderos satélites privilegiados del Imperio británico. Por eso cuando se piensa en el proteccionismo de Francia o de los López o el de Santa Cruz y el de Belzu, vale la pena recordar siempre que no es tan importante el proteccionismo en abstracto sino qué es lo que protege el proteccionismo.

Los razonamientos de ambos países acerca de sus derrotas respectivas se limitaron a la admiración a quienes los habían vencido, al intento de repetir sus esquemas de desarrollo pero en condiciones mucho más dificultosas. Es difícil encontrar algo más aparatoso e inservible que las experiencias liberales de Paraguay y Bolivia en las tres primeras décadas de este siglo. En todo caso, Paraguay acabó convertido poco menos que en una hacienda de los Casado y, hasta hoy, un tercio de su territorio (ni siquiera de sus áreas cultivables) es propiedad de empresas inglesas, norteamericanas, argentinas y brasileñas. En Bolivia, a su turno, durante la era liberal, se llegó incluso a pensar —Montes mediante— en formar un solo país con Chile y con el descubrimiento de los grandes yacimientos de estaño, acabó por ser un país en manos de lo que se denominó el superestado minero para referirse a las tres empresas asociadas a capitales norteamericanos e ingleses.

Por qué dos países que habían surgido de un mismo proceso de balcanización, que debieron ser parte de un mismo estado nacional aun en el caso de que América no fuera una, víctimas ambos de la fase expansionista del imperialismo inglés,

mutilados y vejados de la misma terrible manera, se lanzaron el uno contra el otro por una cuestión de límites en la que ambas partes podían emitir argumentos jurídicos *ad infinitum*, en pos, en secreto, de hidrocarburos que sólo existían como hipótesis dentro de las hipótesis, es algo que demuestra tan sólo el grado de absurdo y enajenación que puede asumir la historia en manos de colectividades atrasadas y estupefactas.

En los hechos mismos, Bolivia reclamaba territorios cuya punta llegaba hasta Asunción. Era ello algo tan insostenible que, si en efecto las tropas bolivianas hubieran podido llegar hasta allá, no habrían podido impedirse a sí mismas tomar la capital del país e iniciar su conquista como tal. Es decir, puesto que el objetivo de la guerra era *d'après* Salamanca, "ganar la guerra", el Paraguay hubiera tenido que resultar anexado a Bolivia.

El Paraguay a su turno, en un verdadero desmán bélico, tomó el fortín de Laguna Chuquisaca y no se privó de pasar a degüello a su guarnición. Como era previsible dentro de un examen elemental de las posibilidades logísticas, la guerra se redujo a una ofensiva boliviana que llegó bastante lejos pero sólo para ser batida por los paraguayos, que aquí se movían con comodidad puesto que estaban más próximos a la zona; los paraguayos, por su parte, pasaron entonces también a la ofensiva para llegar hasta las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes, donde fueron batidos a su vez. Aquellos que han hablado de ésta como una guerra colonial intentada por las más tristes semicolonias dicen pues algo cruel y verdadero.[2]

VII. LOS OBJETIVOS FALACES

Hay una historia interior de las cosas que no siempre se correlaciona bien con la lógica del mundo. Por ejemplo, se ha querido ver en este duelo en el Chaco un efecto de las contradicciones *in crescendo* entre el imperialismo inglés, ya instalado, y el ascendente imperialismo norteamericano en la región. Es cierto que Argentina respaldó a Paraguay con armas y víveres en gran escala y que, en ese momento (que es el que se llama en Argentina la "década infame"), la ocupación inglesa del país es tan extensa que uno de sus vicepresidentes, el señor Roca, llegó a decir que Argentina era de hecho parte del Imperio británico. Es verdad, de otro lado, que el mercado argentino, ya para entonces bastante desarrollado, era una parte más que fundamental en la región para los intereses de la Royal Dutch Shell. Los yacimientos bolivianos estaban en manos de la Standard Oil; después se descubrió, empero, que esta compañía exportaba petróleo a Argentina por un oleoducto clandestino y que la gasolina iba a dar a manos, precisamente, del propio Paraguay, en guerra con Bolivia.[3] Ésta fue, como comprobación, la base de la nacionalización posterior de esos yacimientos (1937), de tal suerte que si la motivación imperialista hubiese sido la determinante se daba el caso de que la

[2] Véase Céspedes, *El dictador suicida*, Librería Juventud, La Paz.

[3] Véase Carlos Montenegro, *Los derechos de Bolivia contra el oro de la Standard.*

Standard estaba en favor del triunfo de sus enemigos. Parece más lógico suponer que la Standard Oil sabía la dimensión de los yacimientos y también su ubicación (lo que explica su falta de interés en la guerra) y que la Royal Dutch Shell, en cambio, no tenía sino una visión expectaticia del asunto como merodeadora de un triunfo que sobre todo podía afectar a los Casado. Son los Casado y no la Royal Dutch Shell o ésta sólo en término segundo lo que explica el interés desorbitado de Argentina en este pleito.

Nadie vivió el resultado de esta locura pura en Bolivia sino como una derrota sin atenuantes y era sin duda una derrota sin vuelta en cuanto el objeto de la guerra era, desde el punto de vista de los dirigentes bolivianos, la conquista de Paraguay, o sea a condición de suscribir esos fines metafísicos a cargo de estadistas alentados por impulsos irracionales. Pero no lo es por cuanto ambos países demostraron aquí no otra cosa que su alcance estatal real sobre un territorio vacío, sin obtener ninguno de ellos lo que buscaba o creía buscar. El petróleo no existía en las zonas verosímiles desde el punto estratégico, sino en cantidades muy inferiores a las pensadas y, para beneficiarse en grado importante con este producto, Paraguay hubiera tenido que conquistar casi la mitad de un inmenso país. Tal la demencia de los objetivos perseguidos por una parte y por la otra.

VIII. CRISIS ESTATAL POSBÉLICA

Es cierto que no toda guerra contiene una crisis social general. El carácter de tal fenómeno, la crisis nacional general o situación revolucionaria, exige la caducidad de la capacidad de dominación por parte de la clase a la que sirve el estado y a la vez cierta incapacidad coetánea por parte de los oprimidos en cuanto a la construcción de su propio poder, incapacidad siquiera momentánea. Nada de eso sucedió en el Chaco en un lado ni en el otro; la naturaleza de clase de ambos sistemas estatales se mantuvo intacta, por lo menos en la apariencia o en la hora inmediata. Por el contrario, la propia manera de racionalizar la guerra por parte de las dos poblaciones era diferente: mientras Paraguay, quizá a causa de su unidad cultural más compacta que hacía un contraste marcado con la manera abigarrada de Bolivia, vivió la guerra como una tensión nacional general (pues, en teoría, estaba en juego la existencia del país como país independiente), en Bolivia no ocurrió tal cosa. Es claro que de ninguna manera debe desdeñarse el papel de la guerra en la formación de los aspectos subjetivos de base del estado nacional y de la construcción de la propia nación. Con todo, nunca como aquí pudo verse tan claro hasta qué punto la sociedad civil boliviana no correspondía ni en su dimensión ni en ningún otro aspecto a su estado político sino de un modo relativo o circunscrito. Al final lo que había de estado nacional en Bolivia era el estado correspondiente al mercado interno generado en torno al área capitalista minera. En este sentido, aunque no deben absolutizarse las cosas, o no era un estado nacional porque no existía todavía la nación en su definición moderna o sólo lo era con relación a las áreas vinculadas al mer-

cado interno. Este razonamiento debe atenuarse, sin embargo, porque eran zonas que habían estado vinculadas de una manera primaria y habían dejado de estarlo; tampoco el país existía como un mero azar sin premisas. Incomunicado, empero, disperso y diverso, vivió la guerra como algo que ocurría en el Chaco, como se tiene la vivencia de una guerra colonial no referente al núcleo de existencia de la colectividad.

De cualquier forma, lo que había de estado nacional, como suele suceder en los países que viven esta fase, se manifestaba sobre todo en el ejército. El propio aparato militar cambia de carácter en cierto sentido al pasar de ser un mero sistema de represión desprendido de la colectividad a organismo de masas militarizadas. Esto tiene su repercusión sobre el mismo aparato estatal que lo convoca a tal masificación: una guerra, en efecto, comporta la hipertrofia, la sobreactuación de la fase represiva del estado que, en la normalidad, no tiene por qué actuar con tal extensión ni intensidad. Para mantener la "paz liberal" había sido suficiente hasta entonces el ejercicio de la retórica montista, que era la ideología de ese estado. Ahora, el aparato ideológico no era suficiente; la burocracia civil (encarnada de un modo inmejorable, hasta en lo físico, en Salamanca) había conducido, con sus concepciones geopolíticas imposibles, al desastre puro. Pero, en general, cualquiera que conozca de estas cosas sabe que no se puede apelar de continuo a la fase de emergencia de un estado sin que tal estado se debilite como conjunto.

IX. SALAMANCA

Ante la guerra, el estado oligárquico hubo de acudir a su fase más tensa y fundamental que era el ejército. Es así que se inaugura, por la lógica de los hechos que se producían unos a otros, lo que puede designarse como el primer ciclo militar en el poder político boliviano de este siglo. El poder político se concentra en el ejército pero eso no significa que las contradicciones desaparezcan sino que pasan a manifestarse allá donde se ha concentrado el poder. Era ya una prueba del atraso estatal el que no pudiera ratificarse la forma del poder en la emergencia de la guerra; pero el ejército lejos de suprimir a la política se convierte en el escenario de ella, hecho que se reproducirá casi en los mismos términos en el segundo ciclo militar, en la fase termidoriana de la revolución burguesa.

Hasta entonces, en efecto, las contradicciones se habían dado sólo entre un sector u otro de este bloque de poder oligárquico, porque no era un estado de masas; el hecho estatal no contemplaba la participación de la mayoría real. Los gobiernos respondían a un sector o al otro de la gran minería o, en el mejor de los casos, a los grupos de terratenientes ligados a la minería, como Salamanca. Éste era el heredero culminante de una cultura mórbida que era resultado de la servidumbre y el aislamiento, de la cultura de la clase superior del país, de gente que no había trabajado nunca por muchas generaciones y desde el principio; una cultura, en fin, provinciana, abigarrada, arrogante y ciega. Era él un hombre brillante en el modo de esa cultura pero, por lo mismo, no era un hombre realista. La realidad

era un dato ajeno a su razonamiento y el intento de incorporar el mundo objetivo a un silogismo que no tenía otra premisa que el supuesto del sujeto que lo formulaba, no podía sino volver contra el sujeto mismo para destruirlo. Si eso sirve para algo, hay que decir que amaba sin duda a Bolivia pero no tal como era sino a esta Bolivia en la que él pensaba; identificaba al país con su clase, con la clase que lo había hecho su dirigente y, por lo mismo, lo volvía tan poco viable como su clase. Mientras había paz, el país del sistema aquél podía alimentarse en su forma de poder de los discursos; a la primera convulsión, empero, apelaba de inmediato a la represión de los campesinos indios y de los mineros del modo más feroz, conforme a una rutina de siglos, porque estaba en la raíz cultural de esta clase la idea del castigo de los indios. Era Salamanca el fruto de los treinta años de la estabilidad liberal y por eso es tan ridículo atribuir a la inestabilidad política, que se piensa como el secreto del atraso boliviano, la derrota del Chaco. Por el contrario, el ejército lo mismo que Salamanca eran las consecuencias de treinta años de una estabilidad viciosa o falsa estabilidad. Un país que no ha resuelto sus problemas de integración nacional, que mantiene a la mayoría de su población en la opresión generalizada, el exilio político y la ignorancia, es un país muy vulnerable y lo es dos veces si, además, se muestra estable dentro de esta situación. La salud, en este caso, debe expresarse como descontento organizado, como inestabilidad.

La cultura racista de la oligarquía de este país de indios se exacerbó con la república, recibió un impulso con los éxitos de la política de importación de europeos de la Argentina y se consolidó con la reintegración al mercado mundial a causa de la economía del estaño. No era casual para nada, por tanto, que Arguedas escribiera su libro *Pueblo enfermo* en ese momento.[4] Los liberales, en la aplicación de esta mentalidad que desea huir de las cosas, organizan un ejército con oficiales prusianos al mando de soldados obligados a marchar con el paso del ganso y el compás de bandas exornadas con fanfarrias a la prusiana que nadie sabía para qué servían. La falta de fe en sí misma de esta clase se advierte de modo sorprendente cuando encomienda a Hans Kundt, un oficial alemán que había organizado el ejército liberal, la conducción de la guerra. La condujo, en efecto, no se sabe si con más desdén hacia los paraguayos, a quienes suponía que iba a vencer en pocas semanas, o hacia los bolivianos, a quienes hacía matar con la tranquilidad con la que se contempla el exterminio de las langostas.

Pues era un ejército que quiso constituirse con las mejores gentes del país, si su voluntad era el ser un ejército de casta, su oficialidad por tanto provenía en buen número de ese sector social. Pero el privilegio no crea buenos soldados. "La causa de la ruina de Italia —escribió Maquiavelo— no es otra sino el haber fiado su seguridad durante muchos años a ejércitos mercenarios que a veces prestaron servicios a algunos, y en luchas entre sí parecían valerosos, pero al llegar los extranjeros se mostraron tal cual eran." He aquí que la oligarquía boliviana confiaba en que los mercenarios al mando de la plebe le sacaran las castañas del fuego,

[4] Ni que dedicara su *Historia de Bolivia* a Patiño, que pagó la edición, en prueba de que esta ideología racista y precapitalista sin vueltas servía a la perfección al poder político generado por la gran minería.

al servicio de sus irreales objetivos y de la confirmación de su poder. El comportamiento de los hombres de la clase dominante era el que podía esperarse de una casta sin vitalidad y los soldados inventaron la palabra "emboscado" para designar a esta clase de hombres que usaban su privilegio para no llegar jamás a la verdad del frente. El vórtice de las cosas mismas sacó en cambio a la luz a una generación de oficiales que venían de los sectores medios pobres y a los que se sumaron los oficiales improvisados *ad hoc* y el vasto cuerpo de suboficiales y clases que compusieron el ejército que libró la guerra como tal. Este doble contenido del ejército no tardó en manifestarse.

La destitución de Salamanca en lo que la oligarquía llamó el "corralito" de Villamontes, o sea, su defenestración en el campo mismo de la batalla, es también la destitución de por lo menos el sector civil de aquel estado; pero estaba a la vez expresando el impulso inconsciente de destruir un estado que, en realidad, no desaparecerá como tal sino hacia 1952. El desdén con que tratan los oficiales que actúan en el hecho —Busch, el principal— a Salamanca presidente, está enseñando cómo la guerra había dado fin a las respetabilidades y a la ideología misma del estado oligárquico. A Busch no le importaban los recursos oratorios del doctor Salamanca; por el contrario, él, héroe sin discusión de la batalla, los detestaba y es el mismo acto mental, al fin y al cabo, con el que castiga físicamente a Arguedas, otro doctor de la oligarquía, en su propio despacho, siendo ya presidente, en un incidente que se hará famoso en Bolivia.

X. EL HOMBRE SÍMBOLO

Llegados a este punto, tenemos que retroceder un poco. Con Salamanca, en realidad cae moralmente un estado que sólo después será dispersado en su materialidad. Por eso se lo llamó "el hombre símbolo". En efecto, cuando Salamanca llegó al poder el país oficial creyó haber encontrado (quizá porque sabía que una clase dominante que no produce jefes no merece vivir) algo que este sector no había producido en mucho tiempo, o sea, un hombre de estado en forma. Era, sin duda, el personaje menos convencional entre todos los de su época: era sobrio en medio de una clase que no lo era; en la apariencia, penetrante como un cuchillo donde el juego era de cáscaras; parecía un representante triste y solemne de la historia misma; sólo su gran sarcasmo general contrapesaba un poco su melancolía. Sin duda este hombre, con el carisma endurecido que tenía para esa clase y para el alcance de esa clase, deseó la guerra. No importa con qué argumentos de estado disfrazara el asunto, pero él deseaba la guerra; era un requerimiento que venía desde su psicología y en esto hay una gran diferencia entre la salud que enfrenta la violencia que no puede evitar y la falta de salud que desea una violencia que se puede evitar. Importa poco si la deseó antes o después que sus equivalentes paraguayos y había en este *élan* algo de misterioso quizá porque, como Medinaceli había escrito, era de una raza que agonizaba en un paisaje que no era el suyo. ¿Por qué la deseó? Quizá esto no se podrá probar jamás, para compensar a Bolivia de una historia republicana de frustraciones.

Quería regalar a Bolivia una victoria, algo que devolviera a este país (a lo que él pensaba como este país, a ese grupo de hombres sensuales y desalentados en su esencia) su fe en sí mismo, lo cual era, en realidad, un eco distante de la guerra del Pacífico.

Este Savonarola de la tierra de adentro impuso sus criterios belicistas como un *diktat*. No se conocen, quizá con la excepción de Saavedra, que era un hombre mucho más natural, voces sustanciales que se opusieran a esta épica fúnebre a cargo de un lírico muerto antes de su muerte. Por tanto, aunque el proyecto era imposible, tenía con todo la exultación y el atractivo peligroso de cualquier guerra de conquista, y era, por otros conceptos, el único proyecto con cierta grandeza que había podido concebir esta clase agonizante por lo menos desde Santa Cruz, como si el verdadero objeto fuera el reconquistarse a sí misma.

Cuando se produce la debacle sin atenuantes, se hace necesario ofrecer explicaciones. Salamanca, de hecho, acusaba a los militares ("no les puedo dar cabeza"), lo cual era incongruente por cuanto el ejército era hijo del mismo poder que había engendrado a Salamanca y compuesto por oficiales de idénticos sangre y pelo de oligarcas. El ejército a su turno responsabilizaba a Salamanca, y era ello infundado asimismo porque no se podía inculpar en globo al mismo cuyas tesis se habían aceptado de manera tan encendida. Pero lo que se produce en fin de cuentas es la desorientación del poder oligárquico que ya no retomará su coherencia; es aquí donde comienza su decadencia, que no hará sino acentuarse cada vez más y más hasta 1952. Es, por cierto, normal que un ejército salga como el amo de las situaciones después de una guerra por más que haya sido incapaz de cumplir los fines externos que se le asignaron y quizá por ello mismo. Tal es la razón por la cual lo inmediato a la guerra fue una sucesión de gobiernos militares. Pero sería de una gran superficialidad pensar en esto como una linealidad; en realidad, cada gobierno militar representó ya una cosa distinta: a veces como saldos impotentes de un pasado irrescatable, gérmenes a veces de un futuro todavía impenetrable.

XI. DESPILFARRO DE TORO

La mentalidad de los primeros períodos militares (los de Toro y Busch) es similar en cuanto a que el objeto primero es la inculpación y el castigo de los culpables del fracaso, aunque no se supiera cuáles eran los culpables ni hubiese nadie jamás que pudiera concretar la descripción del fracaso que era, como se ha dicho, un sentimiento antes que nada, un paradigma desesperado e incolocable. Pero es como si la misma falta de captación de las cosas como un todo se revelara una vez como incongruencia y la segunda como tragedia. Los acentos nacionalistas y antioligárquicos venían de las trincheras de una manera tan densa como diluida. Diluida o no, empero, fueron ellos los que obligaron a Toro a nacionalizar el petróleo y a expulsar a la Standard Oil o a crear el primer ministerio de trabajo, que se encomendó además a un obrero. Toro en sí mismo y por sí mismo era, con todo, algo así como el despilfarro de una corriente verdadera; si había sido capaz de vivir con

frivolidad nada menos que acontecimientos como la retirada de Picuiba, en la que murieron de sed tres mil hombres y que a él no le indujo más que a redactar algunos telegramas ingeniosos, era evidente que era el hombre que no puede ir más lejos, que no sabe cómo ni quiere hacerlo. En realidad, era tan vano que era capaz de hacer chistes en el entierro de su madre y no podía ver las cosas sino como una ocasión de aplicar el gracejo de su lugar, con cierto escepticismo que hacía que lo que pudo haber en él de inteligencia no fuera sino algo entregado a los lugares comunes de la corriente imperante. En general, un individuo tan sensual como Toro no podía sino ser un ser sin convicciones y, por eso, incluso cuando acataba las de los demás, las convertía en un bulto, porque no creía en ellas. Busch no era eso, por ninguna razón.

XII. GERMÁN BUSCH

Aquí, por el contrario, el patriotismo es la característica central del individuo; es curioso cómo, por consecuencia, todos los demás acontecimientos de su vida resultan borrados por esta pasión fundamental, original, sostenida y mortal. Al revés de Toro, Busch, hombre salido de la pureza de la tierra, cuya fuerza política no era sino un accesorio de su vitalidad natural, hombre que no debía nada a nadie y cuya titularidad como héroe era el fruto de la verdad de la guerra, era en fin la convicción pura. Pureza de la convicción nacida sin duda de cierta elementalidad intelectual pero también, engendrando aquí ya un prototipo, las convicciones convertidas en peligrosidad. Era una sensación de temor físico la que sentían la oligarquía y el conjunto de la rutina del país oficial al mero encuentro con este oficial que pensaba que los culpables merecían sanción y que sus soldados —portadores de la patria— eran los acreedores de una reivindicación. En su instinto de guerrero acostumbrado a los patrullajes y los cuatrerajes, Busch engendró, por fin, una visión sombríamente patriótica de la política y comenzó a cultivar, con razón certera, una desconfianza esencial que abarcaba tanto a los doctores en general como a sus propios jefes. El dolor de la patria yacía en su corazón con la profundidad de una pasión total: si ella estaba acorralada, tampoco Busch quería vivir. Toro creía dominar a Busch pero no se daba cuenta de que, entre chiste y chiste, largando uno que otro aforismo explicativo en las jaranas, estaba generando una fuerza que al final el propio autor, Toro, no podía contener ni comprender. Para Busch está claro del todo que la oligarquía debe saldar cuentas con el país.

La historia de un país atrasado suele avanzar por la vía de sus héroes elementales. Busch, como es natural, no podía tener una conciencia del proceso que se estaba desatando y con él como uno de sus elementos patéticos. El hecho mismo de que fuera un oriental, es decir, nativo de una zona marginal a la comprendida por el mercado interno, y a la vez un oficial del ejército, es decir, de lo único centralizado en un país que no había cumplido la tarea de su centralización, y que, sin embargo, se convirtiera en el gran personaje surgido de la guerra, está ya hablando de ciertos aspectos que no pueden ser pasados por alto. Esto significa

en sana lógica que la guerra había creado las tendencias subjetivas para la construcción de la unidad nacional y del estado nacional. Cumplíase aquí, por lo demás, lo que es una norma clásica: los elementos subjetivos de la nacionalización preceden siempre a la formulación objetiva de tales tareas.

La violencia de los sentimientos nacionalistas de Busch no tenía, empero, nada que ver con su viabilidad. Era una operación comando realizada por sorpresa al estatuto oligárquico, que pudo organizar una respuesta todavía con soltura, en primer lugar rodeando y penetrando a la misma dictadura que no tenía otra consistencia que la personalidad del propio Busch, quien era una mezcla de producto superior de la naturaleza y de indefensión intelectual. El dictador murió poco después de un año de estar en el poder. El pueblo consideró que había sido asesinado a secas y descartó desde el principio la hipótesis oficial del suicidio. Es verdad, con todo, que había antecedentes acerca de inclinaciones suicidas en él. En realidad, la consecuencia es la misma: si se suicidó fue porque, en efecto, su dictadura no podía llegar más allá de donde llegó; si se le asesinó es porque todavía tenían sus enemigos la fuerza como para asesinarlo. Aun así, era el primer presidente que moría por causa violenta en el siglo y ello no era un mero azar: Busch mismo había planteado las cosas, en un estilo característico, como una cuestión de vida o muerte. Las luchas políticas estaban asumiendo una profundidad que no iban a abandonar en lo posterior. Nunca se pudo establecer con certeza si se trató de un suicidio o de un asesinato pero era expresivo el que no se permitiera una sucesión "buschista" de Busch. Los propios militares de la corriente oligárquica impidieron que Baldivieso, que era el vicepresidente de Busch, asumiera el poder.

XIII. CRISIS EN EL APARATO REPRESIVO DEL ESTADO OLIGÁRQUICO

El estado creado por la gran burguesía minera del estaño después de la revolución federal, a principios de siglo, comienza aquí a vivir el hundimiento de su legitimación ideológica. Pues la propia eficacia de la coerción o violencia estatal no es sino la prosecución de la ideología, en el resto de la década de los cuarenta se podrá comprobar también la pérdida de eficacia de su aparato represivo. Se está generando la revolución democrático-burguesa de 1952 y la secuela de acontecimientos de disolución de aquel estado es algo por demás aleccionante.

Quintanilla (presidente provisional, sucesor de Busch) hizo un interinato inmediato a la muerte de Busch y entregó el poder a Peñaranda, que venció en las elecciones bajo el voto calificado contra el candidato izquierdista José Antonio Arze. Ambos, Quintanilla y Peñaranda, eran generales de la oligarquía y respondían sin atenuantes a los intereses del bloque de poder de la gran minería y los terratenientes. Con ello, la oligarquía (a la que se llamó "minero-feudal", en la jerga local, de discutible exactitud) intentó volver a su fase más exitosa y estable, es decir, al ciclo democrático-formal que había practicado en las tres primeras décadas del siglo. La misma democracia formal, que servía para la legitimación eficiente de la gran minería en su fase de ascenso, sirvió aquí como elemento de

su disolución; en esto como en todo, el proceso boliviano ratifica ciertos principios de la teoría del estado como aquel que se refiere al doble papel de la democracia burguesa que funciona primero como asiento de un momento culminante de la superestructura capitalista y después como escenario de su disolución, aunque es obvio que aquí no se está gestando una revolución socialista sino una revolución democrática de corte particular porque el proletariado tendrá en ella ya un papel protagónico. El primer resultado de la crisis ideológica de la época es la eliminación de los partidos tradicionales y la aparición de los modernos partidos políticos, desde el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR) hasta el Partido Obrero Revolucionario (POR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB).

Una cuestión importante sin duda es la de indagar por qué el MNR canaliza hacia sí las derivaciones sociales de la decadencia del estado oligárquico y por qué congrega en su seno a las nuevas zonas clasistas que ingresarán en la política, es decir, a los obreros y a los campesinos. Es algo que sólo tiene en principio, una difícil explicación. En realidad, el PIR, con una definición marxista próxima a la III Internacional, disponía del más numeroso cuerpo de intelectuales; el POR, la corriente trotskista, se dirigía sin vacilaciones, lo mismo que el PIR, hacia la clase obrera, que iba a ser un factor preponderante en el devenir próximo de los hechos, y la propia Falange se presentaba con un *pathos* patriótico fervoroso, muy de la época, por lo menos tan intenso como el del propio MNR. Pero éste, el MNR, era un partido formado por ex combatientes de la guerra y, en consecuencia, podía lograr una fácil comunicación con los jóvenes oficiales nacionalistas, lo cual era más difícil para los partidos marxistas puesto que sus dirigentes, los más relevantes al menos, no habían concurrido a la campaña. La Falange, por su parte, tenía un obstáculo dentro de sí misma a partir de postulaciones hispanizantes de dudosa viabilidad en un país en el que la presencia indígena es tan rotunda y en el cual la política tendía sin reparos a convertirse en una política de masas.

El MNR, por lo demás, en su núcleo de origen pequeñoburgués de la manera más específica, estaba compuesto por jóvenes políticos que de un modo o de otro tenían que ver con la propia casta política a la que trataban de derrocar. En su mayoría hijos de ex presidentes o de gerentes de empresas quebradas, en fin, toda una gama de parientes pobres de la oligarquía que ya no creían en la propia oligarquía. Desdeñaban a la que en algún grado era su propia clase, quizá porque eran el final postergado de ella. Su propia postergación les hacía ver las cosas con mayor lucidez. Aquí opera, sin duda, un hecho singular. Las clases nuevas, aquí como en cualquier parte, se introducen en la política, es decir, en el juego del poder, por las puertas que les abre la división de la clase dominante que tiende a dividirse con mayor rapidez y facilidad mientras más atrasada es, precisamente, como clase dominante. Era la ignorancia de la gran burguesía minera la que la inducía a practicar sus modalidades oligárquicas, a tener, siendo un sector capitalista, una ideología precapitalista.[5] No importa si de manera consciente o inconsciente, el proletariado utilizó a los políticos del MNR para ingresar en la política de Bolivia: el MNR, a su turno, estaba interesado en orga-

[5] De lo cual es un indicio tan claro el auspicio de Patiño a la obra de Arguedas.

nizar a los mineros, el centro proletario, para disponer de un equilibrio (o, como Guevara dijo después, de un garrote) frente a sus aliados, los militares nacionalistas que creían en la patria pero no en las clases, a las que veían como una deformación de la patria.

Es necesario, en síntesis, tener en cuenta los siguientes hechos. Por un lado, división del aparato represivo del estado que, en su sector de oficiales jóvenes, deja de responder a la naturaleza de clase del estado. La manera de comunicarse con el descontento civil por parte de estos oficiales radicaba en los ex combatientes civiles, o sea, en el MNR, en lo esencial. Por el otro lado, pulverización de la ideología del estado oligárquico. Las propias consignas, programas, exposiciones y agitaciones de los otros partidos se canalizan en último término hacia aquel que tenía mejor viabilidad para el poder porque en la política las cosas aborrecen a la incertidumbre y tienden a capturar el poder o a recibirlo pero no a vacilar entre una cosa y la otra. El mayor acierto táctico del MNR se localiza, sin embargo, en su conexión con el proletariado minero que se precipita a causa de la masacre de Catavi (1942). Fue el único partido que denunció efectivamente el hecho y, por lo tanto, a través de la suma de esas condiciones, está capacitado para tomar el poder en alianza con los oficiales jóvenes encabezados por el mayor Gualberto Villarroel.

XIV. VILLARROEL Y RADEPA

Villarroel era también, como Busch, una figura nacida de la guerra pero de manera menos fulgurante. La diferencia que hay entre ambos personajes es la que se da en sus propias especialidades militares: es la que hay entre un oficial de artillería, que debe seguir las normas de la guerra regular, y un caudillo militar que, debido a las emergencias de la campaña, se ve obligado a librar una suerte de guerra irregular dentro de la misma guerra regular. Por tanto, Villarroel, un jefe desconocido, un organizádor paciente de la impaciencia militar, una figura relevante que no se proponía serlo.

Si se evalúa el gobierno de Villarroel desde el punto de vista de sus medidas administrativas resulta incomprensible el carácter que asumió en él la lucha de clases. En lo concreto, se limitó a imponer cierta modernización tributaria sobre la gran minería y actos casi simbólicos en favor de los campesinos, como la supresión del pongueaje (trabajo gratuito para el terrateniente). Era claro que estaba en disposición de convivir con la gran minería, pues no se le pedía más que admitir la existencia de un poder estatal no dependiente de manera directa de ella, y también con los propios gamonales [la clase de los terratenientes señoriales], pues no se les pedía sino que suprimieran las formas más abyectas de la servidumbre personal sobre los campesinos. Porque no tuvo tiempo o por cualquier razón, había hecho Busch mucho menos y le costó la vida. Ahora Villarroel se presentaba como un buschismo acrecentado. Con todo, la existencia de un estado independiente al mínimo con relación a la gran burguesía y los grandes terratenientes era algo que resultaba inadmisible para la clase dominante. Si hay

que caracterizar como algo al régimen de Villarroel, habría que hacerlo como el caso de un bonapartismo en esbozo, ya con ciertas ideas acerca del "deber estatal" o la independencia del estado pero ideas llevadas a la realidad con una gran timidez; por lo demás, en la vacilación entre las tareas nacionales y las democráticas, que estaban en el tapete desde el tiempo de Busch, no había duda de que la preponderancia seguía correspondiendo a las primeras. Los reformadores, en todo caso, no pueden ser moderados porque sus reformas, no importa si moderadas o no, son interpretadas siempre por la clase dominante como un reto total; por tanto, es mejor ir más lejos de dónde se quiera ir porque desde allá se puede retroceder hasta donde se quería llegar. En cambio, el planteamiento de la mera reforma no adquiere sino el contenido de una provocación sin posibilidades. El bloque dominante, a su turno, en particular si es uno con las características del boliviano de aquel tiempo (es decir, uno ya intranquilo, con el sosiego perdido y la lucidez quebrantada tanto como quebrado estaba aquello que pensó como su normalidad), precisamente porque comienza a resquebrajarse está menos dispuesto que nunca a los retrocesos parciales, a la recepción de las reformas o reivindicaciones parciales.

Pues bien, dentro de la campaña nacionalista que desmoronó la ideología oligárquica, la cuestión de los precios del estaño ocupó un lugar considerable. Era lo que los periodistas de *La Calle* llamaban los "precios de democracia" [6] merced a los cuales se obligaba a Bolivia a contribuir a la causa de los Aliados y a vender sus minerales a precios por debajo de los prevalecientes en el mercado mundial. Lo que decían, con eufemismos y directamente, era que la guerra mundial era un enfrentamiento que a Bolivia no tenía por qué interesarle como país, lo cual era un razonamiento muy propio de los que habían vivido la guerra del Chaco: el mundo no nos salvará; el mundo, cuando existe en Bolivia, existe contra Bolivia; una nación no tiene amigos, sólo se tiene a sí misma; en la verdad de su destino está sola para siempre. Pero también, de modo más resuelto, radepistas y movimientistas pensaban y decían, *sotto voce,* que mientras más gringos murieran en su magnífica guerra, tanto mejor para Bolivia. Aquí se estaba manifestando un rencor secular, muy propio del país; por su propia extracción, Bolivia no podía hacer la misma vivencia de la guerra mundial que el Uruguay, por ejemplo; Bolivia, ni en su corazón ni en su carne tenían razón alguna para sentirse próxima a lo que se llama la civilización occidental.

Villarroel, en realidad, vive ya las consecuencias de esta discusión que demostraba dos cosas: primero que en la postulación de las tareas nacionales hay un grado de endocentrismo que es inevitable; segundo, que esa misma autorreferencia, a la vez que da poderío a la consigna, la vuelve impotente en la práctica porque no hay duda que el propio interés nacional, cualquiera que sea el asunto en que se asiente, sólo se resuelve dentro de los conflictos del mundo. Es ya un vaticinio del futuro del nacionalismo boliviano: al tratar de negar al mundo, es decir, al negarse a racionalizar el mundo, lo que ocurrirá es que tendrá que aceptar el mundo no de acuerdo con el razonamiento que logre acerca de él sino como

[6] Una morosa descripción de estos hechos en Céspedes, *El presidente colgado,* Librería Juventud, La Paz.

un objeto de la fuerza del mundo. *La Calle,* es claro, expresaba la desobediencia de intelectuales que hablan cosas semejantes a las del sentimiento popular; era la guerra la que había formado este tipo de intelectuales de color popular así como el hábito de aceptación de los actos intelectuales por parte del pueblo. Lo de los "precios de democracia" [7] fue convertido, por los servicios de inteligencia norteamericanos e ingleses (la cosa ocurría en las vísperas del golpe que daría la presidencia a Villarroel, todavía en el gobierno de Peñaranda) en un complot proalemán. En las memorias de Braden se comprueba cómo se fraguó esto que se llamó el "putsch" nazi, según el cual el MNR, en complicidad con la embajada alemana, preparaba la toma del poder por el Eje. Lo único que podía tener el MNR en común con los nazis era su xenofobia pero en este caso una xenofobia que comprendía también a los propios alemanes. Pues la intriga aquélla no impidió el golpe que llevó al poder al MNR junto con la RADEPA, vino de inmediato la época del no reconocimiento al gobierno de Villarroel por parte de Estados Unidos. Fue una presión que, combinada con otras aún más canallescas y dentro de los propios países latinoamericanos (como el Comité Guani y la doctrina Rodríguez Larreta de la intervención colectiva, antecedentes de la cuarentena contra la Revolución cubana), doblegó los volátiles propósitos neutralistas del régimen, difusos propósitos como todos los suyos y demostró que tampoco en este caso Villarroel veía la necesidad de ir muy lejos en el enfrentamiento con el imperialismo. Sus metas, en suma, eran modestas como la humildad misma: se reducían a pedir que el país más pobre del continente no fuera obligado a perder nada menos que varias centenas de millones de dólares (que eran dólares mejores que los actuales) al servicio de una causa que no le importaba. Nadie había hecho nada en el mundo para que esa causa le importara.

XV. RADEPA - MNR

Confusos, débiles, transigentes, tales actos de contradicción al imperialismo eran de tal índole que se habrían negado si se les preguntaba si querían ser llamados antimperialistas. Tenían, sin embargo, su correlato más profundo en las ideas antioligárquicas que estaban agazapadas tanto en la RADEPA como en el MNR. RADEPA significa razón de patria, es decir, para ellos, la causa final, la razón en su justificación última. La patria está por encima de todo lo que se deba hacer y vuelve coherente a lo que se haga. Era como si Busch se hubiera reencarnado en un número más o menos grande de oficiales, ahora con la inclinación de pensar en la salida a las cosas como una solución militar. El primer objetivo era la liquidación del enemigo, si era necesario físicamente; el enemigo era la oligarquía o, como se decía entonces, la antipatria. En general, ha de decirse que entre las ideas de la RADEPA predominaba el concepto de que el MNR no era sino un aliado incómodo, un parásito imprescindible sólo en grado relativo

[7] A raíz de lo que, en burlas, se llamaron los "contratos inmejorables". Precios más bajos que los del mercado mundial como contribución boliviana a la guerra mundial.

dentro del poder de los jóvenes oficiales a quienes correspondía la carga de la historia.

Se combinaba en esta logia un cierto recelo, que a veces se hacía desprecio, hacia los políticos civiles con un rencor esencial contra la oligarquía, a la que se consideraba culpable de la historia del Chaco, de las pérdidas territoriales, de la muerte de Busch, de las matanzas de obreros y campesinos. La logia misma, como es natural, era ya la forma de organizarse de oficiales que negaban la lógica de autoridad del ejército formal, hecho por demás relevante porque, de algún modo, un ejército se está formando dentro del anterior; es obvio que aquí se dan los elementos de la reorganización militar después de 1952, que se verá en su momento.

Pero el solo hecho de reconocer un enemigo común no da unidad al aparato del poder y, mientras la RADEPA no intentaba otra cosa que una venganza nacional o la recomposición de la supremacía de la razón de patria, el MNR, como es obvio, tenía proyectos más concretos en cuanto a instituir un orden estatal de nuevo tipo. Un sector y el otro son, sin duda, los que forman los embriones de la futura burocracia del estado burgués de 1952 en su forma civil y militar. Ambos llegarán, en su remate, a puntos que jamás habrían imaginado. En todo caso el recelo militar que tenía fuerza por sí mismo y en sí mismo obligó al lado civil a buscar su propio respaldo. El MNR se dio cuenta pronto de que su posición dentro del pacto de gobierno era precaria y se apresuró a compensar el poder de RADEPA con la organización del movimiento obrero que, por lo demás, había sido iniciada antes por diversas formas de predecesores sindicales. Lenin dice que al proletariado la conciencia le viene de fuera. Aquí no se puede hablar de conciencia proletaria en rigor pues no estamos sino en los albores políticos de la clase. Pero la propia organización inicial de esta clase le viene de fuera; los sectores pequeñoburgueses, que son portadores de las ideas democrático-burguesas, necesitan, para imponerse sobre la vieja burguesía, del apoyo de la clase obrera. Tenemos entonces por un lado que la burguesía real no tiene una ideología burguesa sino una ideología preburguesa; que la pequeña burguesía actúa como una preburguesía porque, aunque no es todavía burguesía en lo objetivo, con todo, tiene una conciencia burguesa más cabal que la propia burguesía; a lo último, un proletariado que, para ingresar en la revelación superestructural (que como aparición misma implica un avance de las fuerzas productivas), debe sin embargo, por lo pronto, entregarse al programa pequeñoburgués o prestarse al programa de la pequeña burguesía porque jamás sería posible su integración al sistema político si lo hiciera en guerra con todas las demás clases como conjunto. Ése fue el sentido de la fundación de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), por ejemplo. Fue el MNR el que planteó y obtuvo, de otro lado, la designación de Lechín como subprefecto de Uncía, centro civil de la principal concentración minera. Lechín, que había sido minero, aunque por breve tiempo, citó a su despacho al gerente de la empresa (la Patiño Mines), dueña de las minas del distrito. Había en ello conciencia clara de que se estaba desafiando el orden concreto de la zona, el modo de funcionar específico del poder en el distrito; se proponía un vuelco insoportable que la empresa debía rechazar sin necesidad de consulta alguna a su centro administrativo. Negóse en

efecto aquel gerente a cumplir el emplazamiento de Lechín, y por el contrario, lo invitó a visitarlo en la gerencia. Todo es muy revelador de la relación estado-empresa. Al rechazar el gerente la invitación aquella, como era previsible sin margen de error, Lechín ordenó su arresto. Esto fue visto como un acto de victoria del estado sobre la empresa, del MNR sobre toda la vieja política, de Lechín sobre todo el sindicalismo anterior. Originará también la modalidad del sindicalismo lechinista, nunca muy alejado del estatus del poder pero tampoco tan conexo al poder como para alejarse del movimiento de las masas. Tal incidente, tan secundario en las apariencias, mostraba el nuevo carácter de la relación que el MNR pretendía con las grandes empresas: una relación que hubiera sido normal para cualquier estado que no fuera éste, dominado por la gran minería durante un siglo. El subprefecto de Uncía estaba demostrando, por primera vez, que era portador de algo más importante que la empresa allá donde las empresas habían demostrado cien veces que eran más poderosas que el país entero.

No eran, pues, las medidas de gobierno sino lo que había debajo de ellas como contenido de clase (o sea, como tendencia histórica) lo que preocupaba a la oligarquía y ahora también al propio imperialismo norteamericano. El sistema oligárquico estaba en decadencia pero no tanto como para no hacerse cargo de que la ideología de la RADEPA, con su acento irracionalista pero también irrenunciable, y la organización del movimiento obrero, sujeto nuevo aun más temible que la propia violencia del patriotismo militar, organización además propiciada desde el aparato del estado (en lo técnico, el bloque antioligárquico había capturado aquí el aparato del estado; pero el poder del estado o su naturaleza final seguía en manos del bloque oligárquico) hacían una combinación incompatible en absoluto con las modalidades rosqueras (rosca, apelativo boliviano de la oligarquía) de opresión política. Esto es lo que explica que, en lugar de luchar contra las modestas medidas de poder, se lanzara de hecho contra el régimen como tal, es decir, que en una suerte de *tour de force* supremo intentase el exterminio final del bloque RADEPA-MNR.

La conciencia de la clase agredida en su dominio es mucho más despierta que la de aquellos que encarnan tal agresión. Villarroel ni la RADEPA ni el MNR en ese momento pensaban en una aniquilación de aquel estado; lo que querían era, en verdad, su modernización. Pero en la historia casi nunca uno sabe de qué es portador. Los radepistas tenían, como es natural, su juramentada voluntad de sacrificio. Ésta era su fuerza. Pero la oligarquía tenía el hábito del poder, la costumbre de haber manejado un país desde siempre, la cicatería concreta de gentes que se movían entre algo que conocían: resolvieron matar a Villarroel; hay pruebas de que se tramó su asesinato y el de sus inmediatos. Era una clase demasiado experimentada empero como para matar sin preparar el clima ideológico de prejustificación del hecho. Montó, por eso, una campaña perfecta, quizá la última de su historia. La respuesta de los militares nacionalistas estuvo a tono con el carácter emocionado y patético de su ideología secreta nacida del rencor del Chaco. RADEPA, en reunión solemne y por votación regular seleccionó a una decena de políticos prominentes de la oligarquía, tratando de que apareciera por lo menos uno por región y que tuviera, en cuanto apellidos, rangos y figuraciones, la mayor connotación oligárquica posible y decidió su fusilamiento. Era una

inversión completa de la historia de Bolivia porque hasta entonces, si cabe decirlo, siempre se había matado al revés, en la dirección opuesta. Incluso en los momentos inmediatos a su muerte, según el testimonio de los ejecutores, los personajes estaban convencidos de que los radepistas no se atreverían. Sus cuerpos quedaron tirados en Chuspipata y Caracollo. Lacónico y terrible, un comunicado informó del asunto a la mañana siguiente: Por Razón de Patria, hasta el momento han sido fusilados los siguientes...

XVI. CAÍDA DE VILLARROEL

La izquierda, lo que entonces era la izquierda marxista, entendió mal este proceso. Es obvio que los nacionalistas colocaban los términos de la lucha política en el cuadro de un localismo casi cerril y era explicable, de otro lado, que los marxistas en cambio vivieran con tensión la lucha contra el fascismo en el mundo. Pero el lado del fracaso de la historia es tan aleccionante como el de su éxito. Definir a Villarroel como un régimen fascista demostraba una endeblez en el análisis marxista casi desesperante, a un extremo tal que es algo que hoy mismo no se puede plantear ni siquiera como discusión. El tono obsesivo con que se propuso la cuestión, incentivada por los enconos lugareños, fue una de las causas de que el movimiento obrero se convirtiera después en una suerte de coto cerrado del nacionalismo, sólo matizado por la presencia de los trotskistas. En todo caso el PIR, por ejemplo, entró en el llamado Frente Antifascista, que se convirtió a la fuerza en uno de los instrumentos políticos de la oligarquía, dando más importancia a las fortuitas veleidades neutralistas de los principios del régimen que a las contradicciones de clase que estaban ocurriendo por debajo de las inofensivas medidas de la administración. Ya aquí, desde luego, se advertían las grandes dificultades que hay para la subsunción de las luchas mundiales en las luchas locales, de la propia teoría frente a los casos específicos de poder.

La oligarquía, ahora con el apoyo de estos sectores izquierdistas, no tardó en obtener núcleos de respaldo dentro del propio ejército villarroelista. Militares como Pinto, Arenas, Mercado, que ocupaban los más altos cargos dentro del régimen, fueron los que dieron las bases para el derrocamiento del régimen en el que actuaron sectores estudiantiles y populares movidos por el PIR. La oligarquía pensó en esta acción como una vindicta definitiva y una restauración total; sólo así se explica el grado morboso hasta lo bárbaro de la conclusión del movimiento subversivo, que fue el colgamiento de Villarroel y sus colaboradores en la plaza Murillo. Villarroel, en una actitud que se parece mucho a la que adoptaría después en Chile Allende, no se defendió; esperó a sus victimadores en el Palacio Quemado, negóse a huir, con una suerte de dignidad acusatoria que configuró sin duda un acto de grandeza.

Era imposible que un episodio como éste dejara de tener consecuencias porque, además, el país como conjunto había puesto en movimiento el esquema de sus clases sociales de una manera que ya la derecha no podía racionalizar. Los mineros, por ejemplo, pretendieron de hecho, avanzar sobre La Paz. Pero las inves-

tigaciones que se han hecho después revelan que el acontecimiento tuvo un alcance inesperado, que comprendió incluso a los sectores que parecían más ajenos a la política tal como estaba todavía planteada. Tal lo que ocurrió, por ejemplo, con los campesinos de la zona de Independencia, en Cochabamba. En el momento mismo del colgamiento de Villarroel estaba realizándose el llamado Congreso Indigenal, que reunió a dirigentes más o menos improvisados de los campesinos de todo el país, en gran parte para avalar con su concurrencia la supresión del pongueaje. Un dirigente campesino de la zona de Independencia presenció el colgamiento de Villarroel. Pertenecía a la misma región en la que tenía sus propiedades el coronel José Mercado, uno de los miembros de la RADEPA que había pasado a formar parte de la conspiración oligárquica contra Villarroel. A pesar de eso, Mercado fue también perseguido por el nuevo régimen y se refugió en su hacienda, donde llegó casi al mismo tiempo que el mencionado dirigente campesino. Éste, según la reconstrucción que ha hecho Dandler,[8] reunió a los caciques del lugar y explicó los hechos de La Paz (empezó diciendo: "Ha muerto nuestro padre"). El resultado fue una rebelión campesina en toda la región y el asesinato de Mercado. Tal el grado que había alcanzado la comunicación entre las clases, hecho imposible en las etapas históricas anteriores.

Se suele situar en 1952 el momento de la destrucción del estado llamado minero-feudal. Es, en efecto, el momento de su caída concreta. Pero un estado agoniza durante un tiempo más bien prolongado antes de caer y trata una vez y otra de restablecer los momentos de su florecimiento. Con el colgamiento de Villarroel se abre el período de una lucha abierta entre un estado en decadencia y el movimiento democrático burgués en ascenso invencible. Con las armas y sin ellas, en todos los escenarios, se da un enfrentamiento destinado a concretar en el estado lo que, en el fondo, había ya ocurrido en la sociedad; después de todo, cuando se habla de las relaciones entre la sociedad civil y el estado político, se habla de la relación entre las clases como verdad, es decir, en sus relaciones productivas y la forma de su manifestación en la política.

Desde aquí vemos los hechos como una fatalidad, como un curso incoercible. Pero quizá no lo eran en ese momento. De todas maneras, que el MNR, como cabeza de esta tendencia, pudiera ver las cosas y la política oligárquica no pudiera hacerlo, enseña el primer carácter de un sujeto de poder caduco: el signo de su perdición está en su fracaso en la discriminación objetiva de la situación, en su enceguecimiento. Por consiguiente, lo que llamamos la lucidez de un movimiento o su beocia no son sino la aplicación de datos del individuo a capacidades que aquí nacen de una determinación material. Nadie es lúcido cuando su soporte clasista no le da los elementos para serlo.

La experiencia ha provisto para entonces a los hombres del MNR del conocimiento robusto de tres hechos simples, inconmovibles. Ellos sabían, por un lado, puesto que habían estado dentro del poder oligárquico (Paz Estenssoro había sido empleado de la Patiño, etc.) que la clase dominante era derrocable, que su poder era vulnerable. Eran demasiado próximos a esta clase como para creer en su superioridad. Sabían, por otra parte, que los militares, ni aun los más robes-

[8] En una investigación inédita.

pierrianos tenían la capacidad como para integrar a las nuevas clases de la política, (es decir, que ellas se integrarían, en su caso, contra los militares, pero en una marea revolucionaria que el MNR en su corazón no desea). Ni la fracción radepista del ejército ni la oligárquica tenían la posibilidad de pronóstico de la situación revolucionaria que, sin embargo, se preparaba a la vista. Sabían, por ejemplo, esto es lo capital, que el nuevo personaje central era la clase obrera. Esto es importante. No era un conocimiento de la clase obrera por la vía del marxismo sino por la práctica política; es decir, la conocían *no desde el punto de vista obrero sino desde el punto de vista del proyecto burgués que contenían;* como era un proyecto burgués mucho más avanzado que el prevaleciente en manos de la oligarquía, por tanto, se daban cuenta de que o se daba un papel a los obreros o ellos se lo tomarían tarde o temprano. Del intento de mantener al proletariado como grupo tan exiliado como los campesinos indios, que hacía la oligarquía, a este momento, hay una gran distancia, que muestra cómo la fuerza de las cosas —y no las lecturas— es lo que moderniza a las clases. Desde el principio, el MNR se constituye en un puente entre los militares y la clase obrera —y aquí están las raíces de la burocracia que intentará constituir en la hora de su pleno poder.

XVII. GUERRA CIVIL DE 1949

La guerra civil de 1949 indica la envergadura que había ido cobrando el movimiento a través de dos hechos. Primero, que el núcleo democrático-burgués está en el proletariado minero y no en el campesino; aquí una clase está llamada a liberar a la otra y que su corazón sea el movimiento obrero hace que sea una revolución democrático-burguesa que se sentirá frustrada cuando no pueda ir más allá de la revolución democrática. Segundo, que es una revolución nacional; se trata, por primera vez, de acontecimientos nacionales en su espacio, porque ya participan todas las regiones. Esto desmiente de modo cortante a los que creen que pueden definir los índices de participación a partir de los meros indicadores funcionales o económicos; la difusión ideológica, en especial si ella se ha hecho más fácil en casos como el dado por la guerra del Chaco, se vuelve un factor objetivo. Cuando todos tienden a la unificación, todo ocurre para todos.

En una acción relámpago, el MNR acabó por apoderarse de cinco de los nueve departamentos del país. Que ello pudiera suceder sin que en la práctica se dispusiera de armas demuestra el carácter abrumador —en cuanto a su número— del movimiento. Es cierto que el intento fracasa en La Paz y Oruro, o sea en la zona del poder central. Pero se apodera de los distritos mineros y de una gran extensión del país. Esto significa que era el centro político el único lugar donde todavía tenía superioridad el estado: al alejarse de su punto de eficacia o al encontrarse con concentraciones definidas, las cosas están perdidas para él. El modo mismo del planteamiento militar de la oligarquía demuestra entonces una psicología: sin armas, los obreros fueron rodeados en Catavi por el ejército y, en represalia, tomaron como rehenes a los gerentes y técnicos norteamericanos

de la empresa. Al atacar el ejército (nótese que se trata de un ejército del que han sido purgados los radepistas, que están combatiendo con el MNR, al que se han asimilado), los mineros ultimaron a sus rehenes.

Las dos principales batallas se libran en Potosí y en la quebrada de Incahuasi, dentro del departamento de Santa Cruz pero paso hacia Chuquisaca. Los mineros de Potosí hicieron una emboscada eficaz sobre el ejército que marchaba sobre ellos y le ocasionaron un número descomunal de bajas. Reforzado el ejército, los obligó a resistir en la propia ciudad de Potosí, donde el combate fue encarnizado en un grado increíble. Resucitando costumbres que no habían reaparecido desde la guerra de la Independencia, el ejército colgaba los cadáveres en los postes y árboles y fusiló a un gran número de resistentes mientras los demás se replegaron hacia Chuquisaca y lo harían finalmente hacia Santa Cruz (Incahuasi), donde se libraría la batalla final. Pero es todavía más elocuente que el movimiento triunfante en Santa Cruz y la batalla de Incahuasi se sostuvieran al mando de campesinos de una región desvinculada en absoluto del centro económico nacional. Por qué el MNR pudo movilizar entonces a la gente de la misma región donde después iba a intentar asentarse la guerrilla en 1967, está enseñando la diferencia que hay entre intentar un movimiento armado sin movilización nacional previa de masas y uno que sí disponía de eso en gran extensión. O sea, es la hegemonía de clase lo que hace posible plantear la cuestión del poder y sólo por excepción puede el poder, *a posteriori,* construir la hegemonía de clase. Aquí el frente democrático-burgués era la mayoría absoluta, tenía su núcleo eficacísimo de operaciones en el proletariado minero y aun su propia perspectiva de aparato estatal en el MNR. O sea, las masas crean a las armas; la guerra civil preexiste a la disposición de las armas, debe estar ya en el ánimo de las gentes. La adquisición de las armas es sólo un resultado de esta difusión. En lo subjetivo, la situación revolucionaria consiste en eso: en que se está dispuesto a arriesgar la vida por las cosas del poder. Como notación adicional, hay que observar que si el MNR debe plantear aquí como una guerra civil que aspiraba a avanzar desde la periferia hasta el centro, distribuyendo la tierra, lo que había planteado en 1943 como conspiración civil-militar, es también algo bien ilustrativo de la nueva situación. En 1943, esto era una innovación porque, hasta entonces, toda conspiración era militar. Explotaron entonces lo que tenían de superior, que era su capacidad de actuar dentro del aparato militar, capacidad que, como hemos visto, no tenía ningún otro sector. Purgado el ejército, el MNR explota en 1949 la pérdida que tuvo dentro de los militares compensándola con su influencia en las masas mismas y por eso tiene que plantear como una guerra civil lo que antes debió existir como conspiración.

Lo que viene enseguida es típico de un poder en disgregación. A pesar de que el sistema electoral era de voto calificado, con lo que se excluía a la mayor parte de los obreros y todos los campesinos, Paz Estenssoro, jefe del MNR, resultó vencedor en las elecciones de 1951. Si la oligarquía hubiese tenido confianza en el funcionamiento de su propia democracia y, en particular, en su control sobre el ejército, le habría resultado factible entregar el poder al vencedor y, sin embargo, bloquear legalmente su programa o condicionarlo e incluso, esto es ya una pura hipótesis, apoyar al MNR en sus relaciones con los aliados peligrosos, que

eran los mineros (como hizo la derecha en Chile, con Allende). Prefirió empero el camino más rutinario de desconocer las elecciones, encaramar en el poder a una nueva junta militar y, en fin, suprimir todas las alternativas democráticas. Con ello se completaron las condiciones subjetivas para que, menos de un año después, existiera la insurrección de masas del 9 de abril de 1952.

XVIII. INSURRECCIÓN POPULAR DE 1952

Éste es quizá el acontecimiento más extraordinario de toda la historia de la República.[9] El que, en su forma, se tratase de un golpe de estado trasformado en insurrección significa a la vez que el MNR, cuyos negociadores o conspiradores eran, en el caso, Lechín y Siles, planteaba como traspaso del mero aparato estatal lo que iba a ocurrir en la realidad en términos mucho mayores, como sustitución de un estado por otro, de un bloque de clases por otro, es decir, como una revolución en forma. Explotando las condiciones que venían del prolongado proceso de disolución del poder oligárquico, Lechín comprometió en la conspiración inicial nada menos que a Seleme, ministro del Interior y, sin duda, el segundo hombre del régimen. Trabado el combate, Seleme no pudo menos que entregar algunos centenares de fusiles que fueron a dar a manos de los fabriles de La Paz y los mineros de Milluni, que habían sido masacrados con crueldad en 1950. El ejército resistió, sobre todo por medio de sus tropas selectas, como el Colegio Militar, pero la táctica popular se fundó en dos pivotes de éxito: primero, en obligar al ejército a dividir el combate en infinidad de pequeños combates, con la que se le imponía entrar en contacto con la masa de la población; en esas condiciones, la deserción de soldados alcanzó una proporción enorme. Era la aplicación de la táctica de los "corralitos", usada por los paraguayos al ejército boliviano, pero aplicada a una insurrección urbana. En segundo término, obstruyendo la logística militar. En el combate en la ciudad el dilema se planteaba a los oficiales en términos crudelísimos: o arrasaban los barrios uno a uno, con la aviación y las armas pesadas o se tenían que resignar a luchar casi con los mismos elementos de guerra que usaba el pueblo, es decir, las armas ligeras, con el factor adicional de que el número de armas en manos civiles no hacía sino aumentar por la deserción de los soldados o su captura. La masa innominada era, por tanto, el escenario natural en el que se libraba esta guerra de tres días. Los oficiales no se atrevieron, sino a guisa ocasional, al uso de las armas pesadas. Por otra parte, mientras los combatientes populares recibían el caluroso apoyo del pueblo, en abrigo, alimentos y todo tipo de protección, el ejército debía abastecerse o saqueando al pueblo o afrontando el asedio de los tiradores repartidos por techos, callejones y rincones.

Tuvo una gran importancia sin duda la toma de Oruro que fue obra de los obreros de la mina de San José. Eso permitió que organizaran un sacrificado

[9] Copla popular: "Carajo denme un fusil / denme un fusil, compañeros, / Manuel ha muerto en abril." (Cueca con pañuelo negro para Manuel Sombrerero de Jorge Suárez.)

combate que impidió el paso de las tropas del sur sobre La Paz y favoreció en cambio la concentración en la ciudad de los obreros que venían de los distritos mineros. En esas condiciones, luego de que el avance de los mineros de Milluni colocó el regimiento Bolívar entre dos fuegos y lo aniquiló, el ejército no pudo resistir más de tres días de combate y comenzó a ser desarmado, primero en gran escala, con la toma del arsenal, y después parte por parte, en acciones a cargo del pueblo en general y sin mando centralizado alguno. El ejército había sido disuelto por la insurrección misma y el general Torres Ortiz, su comandante, tuvo que rendirse formalmente en Lajas, a unos 20 kilómetros de La Paz. Tal es, en un resumen que resulta frustrante, el contenido de aquellas extraordinarias jornadas.

En la cualidad de su remate, la insurrección tiene, sin lugar a dudas, un carácter espontáneo, porque nadie podía evaluar en lo previo el modo de concurrencia de las clases ni la (simbólica) dirección del acto masivo podía medir la dimensión del acontecimiento, que estaba signada por la liquidación material y concreta del estado oligárquico y la constitución de uno distinto. Los portadores de la nueva burguesía entraban al nuevo estado en las condiciones dadas por las masas. No habían pensado en ello; es verdad, sin embargo, que habían planeado introducir a esas masas a la política, a través del uso del viejo aparato estatal, esta vez en sus manos pero intacto en su carácter. Había, pues, una diferencia entre una cosa y la otra. Por otra parte, si aquí hablamos de masas es ya sólo un decir; son las masas —artesanos, lumpen, pequeña burguesía, estudiantes— *alrededor* del esqueleto combatiente, que era la clase obrera. Los obreros, en efecto, que habían jugado el papel central en el combate y que habían desbandado al ejército, se comportaron como lo que eran, es decir, como los amos de la situación. Había en el movimiento proletario, empero, una duplicación; se sentían, por una parte, integrantes del movimiento democrático considerado como generalidad y, por lo tanto, impusieron como algo natural el retorno de Paz Estenssoro y la reivindicación de su presidencia, como emergencia de su victoria en las elecciones de 1951. Pero, por otra parte, eran portadores semiconscientes de su propio programa, que era el que figuraba en la tesis de Pulacayo, aprobada en 1947. Lechín expresaba lo primero; lo segundo, demostró ser un germen imposible de desarrollarse en tanto cuanto no se diferenciara la clase del movimiento democrático general, es decir, ya como partido obrero.

XIX. EL CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN

Una cosa es que los grandes sentimientos y la propia grandeza se realicen en los individuos o en los grupos y otra cosa que asuman ellos un carácter de masa. Por eso, al nivel boliviano, se puede decir de la insurrección de 1952 lo mismo que escribió Hegel de la Revolución francesa: "Todos los seres pensantes han celebrado esta época. Una emoción sublime reinaba en aquel tiempo. El entusiasmo del espíritu estremeció al mundo, como si sólo entonces se hubiese llegado a la efectiva reconciliación de lo divino con el mundo."

La insurrección triunfante, en efecto, crea un momento de disponibilidad total del poder. La clave la dieron las masas, porque se sitúa en la destrucción del viejo aparato represivo. Si no hubiera ocurrido aquello, habríamos estado sólo ante un cambio dentro del viejo estado. Para eso hubo necesidad de dos condiciones: primero, la división del aparato represivo mismo, que no era sino un eco material de la disolución ideológica de aquel estado y segundo, la participación de las masas. Con todo ello se configura el carácter de una auténtica revolución democrático-burguesa; pero es algo que propone a la vez varios problemas consiguientes en el análisis.

Es cierto que el estado oligárquico tenía una cúpula efectivamente burguesa o capitalista. Nadie puede decir que Patiño, Aramayo u Hoschild (y no sólo ellos) no fueran burgueses. Su ideología, empero, no lo era y, si se habla de estado oligárquico es, precisamente, para fijar cierta connotación. Era una burguesía que no era burguesa sino en ciertos aspectos muy específicos de su acumulación o sea burguesa en su riqueza pero no en su proyecto; como alcance nacional, en cambio, fundaba su propio poder en una articulación no burguesa de las relaciones productivas existentes en el país y, en último término, era la burguesía la que impedía la ampliación de la burguesía, la generalización del proceso capitalista y, en general, la realización *in pleno* de las tareas burguesas. Es el propio Marx el que prevé en algunos de sus textos la necesidad de la revolución burguesa de luchar contra ciertos sectores de la burguesía ligados a la superestructura anterior, como la burguesía comercial respecto de la monarquía absoluta, etc. Se puede aducir también que en el frente democrático (era eso el MNR) no figuraban sino de modo esporádico elementos provenientes de la burguesía y que, por lo tanto, mal puede llamarse burguesa a una revolución a la que no concurre la burguesía efectiva y que, en cambio, derriba a la burguesía verdadera, la existente. Esto es verdad, pero he aquí que la pequeña burguesía, por su familiaridad tradicional con la clase dominante, funcionaba como una suerte de ejército de reserva de aquella clase dominante y que, en la circunstancia, pasó a comportarse como una suerte de preburguesía por cuanto tendía de manera ineluctable a crear burguesía y a convertirse en burguesía ella misma. He aquí que los mismos que no son todavía burgueses, tienen sin embargo, una conciencia actual mucho más profunda de las tareas burguesas que la burguesía que, en cambio, estaba resuelta a obstruir.

No hay muchas novedades en todo esto. La presencia de un sector capitalista, así sea uno tan angosto como el que había en Bolivia, crea incentivos de aburguesamiento. Pero si la burguesía origina a la vez modalidades no de expansión sino de restricción o encerramiento, es decir, si tiene un comportamiento oligárquico, los sectores que quieren aburguesarse acaban por actuar como verdaderas fracciones burguesas descontentas y aunque, en principio, no se proponen sino la ampliación de una clase, se ven obligadas a destruirla para reconstruirla de inmediato con mayor amplitud y autenticidad. El elemento de "sustitución de una clase por otra en la naturaleza de clase del poder político" se da aquí en este sentido. Primero el poder fue a dar a manos del frente de masas y, por un momento, se concentró en la clase obrera. Después, vista la impotencia de las masas ante sí mismas, el poder fue a dar a manos, en lo esencial, de la pequeña burguesía en su contenido preburgués. Pero, en todo caso, no hay duda de que

aquí una clase remplazó a otra, que un estado se erigió sobre la destrucción del anterior y que el papel decisivo lo jugaron las masas.

Ahora bien, en estos órdenes tan matizados del fondo clasista, tenemos que preguntarnos qué es lo que define el carácter de una revolución. Se presentan aspectos subjetivos y objetivos. Por lo primero, el objeto que se busca y también el sujeto clasista que juega el papel protagónico. No es raro el caso de algunos que definen las tareas por la vía de quien las realiza y, en este caso, por ejemplo, sería proletario todo lo que el proletariado hace. En tal sentido, puesto que la clase preponderante en el momento de clímax fue el proletariado, que oficiaba de organizador elemental y jefe de todos los demás sectores oprimidos, entonces tendríamos que hablar de 1952 como de una revolución proletaria. Es criterio no pertinente a todas luces. Tampoco es un punto fuerte de definición el objeto que busca el proceso. Aquí, dicho del modo más simple, se buscaban objetivos diferentes, según la clase y el sector de la clase, aunque todos ellos estuvieran dentro del pacto revolucionario. Por lo demás no estaba tan claro para cada uno de estos actores qué es lo que quería en efecto extraer de dicho proceso, salvo quizá para los campesinos. El proletariado, a su turno, no era todavía en realidad proletario; estaba plasmando su introducción material no ya en las disputas históricas en general sino en la cuestión del poder, que es su culminación. Pero no era un planteamiento consciente del tema del poder y, en general, puede decirse al mismo tiempo que era una clase tan victoriosa como impotente, todavía lejana con relación a su propia ideología, que es el marxismo. No se había dado en el proletariado la fusión entre su impulso democrático espontáneo y el socialismo como ciencia, o sea entre la masa pura y la conciencia. Lo que define por tanto a una revolución en general y a ésta en lo particular no es lo que se supone que se quiere en ella ni el carácter de los sujetos clasistas ejecutantes, aunque un aspecto y el otro tienen obvia trascendencia, sino el curso objetivo o las tareas que se ejecutan, que son lo comprobable dentro del proceso revolucionario, su resultante como suma de las coordenadas compuestas por las influencias clasistas.

XX. LECHÍN

Tal es lo que puede llamarse el acervo de clase de la revolución. Tenemos una situación revolucionaria típica: es la fiesta de la plebe. Ahora bien, cómo se resuelve una situación revolucionaria (porque, siendo una definición en sí misma, contiene no obstante su propia indefinición) es lo que determina el curso de las cosas por un largo período. Hoy, por ejemplo, lo que vivimos es resultado de la manera en que se concretó la situación revolucionaria de 1952. Aquí se producen hechos que se presentan como misteriosos pero que no lo son; dentro de la fuerza de las cosas está escondida la debilidad de las cosas. En este momento, los amos son los obreros, amos en harapos —o khestis—[10] pero amos verdaderos.

[10] Tiznados (aymará).

¿Por qué se detienen empero ante el fuerte histórico de la clase dominante como los comuneros ante las puertas del Banco de Francia? Cada clase atrasada tiene un Banco de Francia que no puede rebasar. No había aparato represivo capaz de resistirles (había sido disuelto, con sus manos y por ellos mismos); sin embargo, entregan su poder de buena o mala gana a la pequeña burguesía, dentro de la que había algunos jacobinos y otros que no lo eran tanto. ¿Por qué lo hacen? En principio porque, aunque aquí actuaban como el partido obrero (en el sentido del primer Marx), con todo, eso no significaba nada porque el partido obrero no se había desprendido del partido democrático en general. Cuando no se produce esta diferenciación no es el partido obrero el que impone su carácter al movimiento democrático sino el movimiento democrático que recibe carácter de la pequeña burguesía. Esta relación se concreta de un modo bien definido en Lechín, el caudillo indiscutible de la clase obrera. Tenemos aquí una personalidad tan seductora como entregada a la aventura histórica, tan combativa e insistente como no despojable de un hálito de insólita frivolidad. Como se dijera, la acción enamorada de la acción y sin otro fin que no fuera ella misma. Fue Lechín, por cierto, un instrumento de eficacia imprevista para la clase obrera en su necesidad de dialogar con la pequeña burguesía; pero no hay duda de que fue a la vez la clase obrera un instrumento de Lechín para existir ante la pequeña burguesía, que privilegiaba otro estilo: el paradigma de los pequeñoburgueses era Paz Estenssoro, es decir, aquel que tuviera las virtudes de un burócrata moderno. Ni Paz ni sus congéneres pudieron expresar la profundidad de la revolución —había mil razones para ello— pero tampoco Lechín, que aspiraba a triunfar entre los pequeñoburgueses y no a que la clase obrera, como clase para sí misma triunfara entre las clases de la revolución.[11] Cuando la relación marchó por el curso previsto parecía no haber un problema: se diría que entonces se daba por supuesto que los obreros debían poner el coraje y el sacrificio y los doctores su buen conocimiento de las cosas del estado. Pero cuando una cosa comenzó a molestar a la otra, Lechín mismo tuvo que cumplir su papel cada vez con mayor dificultad. Al final, porque tenía que seguir a la clase a la que representaba con cierta consecuencia, aun en medio de sus veleidades interminables, sus propias relaciones con la pequeña burguesía tuvieron que arruinarse. Era, sin duda, para la pequeña burguesía del MNR, cada vez más precisa en el servicio a su proyecto burgués, un personaje irritante, impositivo e indescifrable, por lo menos en el manejo de las formas; pero también, personaje necesario —como una venda— porque representaba al verdadero poder que no se atrevía a concretarse como poder o no sabía cómo hacerlo y, por último, sumiso en el fondo porque jamás dejó de admitir el programa histórico, de apariencia mucho más coherente, que le ofrecían los doctores del MNR. Ahora bien, el programa de aquella pequeña burguesía era la unidad nacional, la construcción del estado nacional y entendido todo eso como la reconstrucción de la burguesía pero esta vez en términos nacionales, es decir, globales. Querían un patiñismo mucho más numeroso, no localizado en una región y con un estado que lo

[11] El éxito del estilo entre austero y literal de Paz Estenssoro manifestaba la impaciencia de la pequeña burguesía por modernizar un país al que sentía provinciano y caótico.

administrara como poder; una burguesía fuera del aparato de estado, una burguesía dotada de su propia ideología nacional-burguesa. Ideas burguesas, sin duda, pero no absurdas, se fundaban en requerimientos por cierto reales de la estructura del país. La clase obrera tenía, en cambio, tesis furentes pero no un programa de clase; por consiguiente, Lechín no hacía otra cosa que apoyar el programa de la pequeña burguesía pero dándole un tono radical que no servía en último término sino para reforzarlo. "*Bolivia* —escribió un teórico de la reacción de entonces— *ha sido siempre un país extremista*".[12]

XXI. GRANDEZA Y MISERIA DE LA ÉPOCA

Ideas todas, de otro lado, correctas en su contexto pero irrealizables como no fuera de una manera mucho más reaccionaria que el punto en el que habían sido pensadas o de un modo mucho más radical de lo que aquel sector de bienpensantes podía aceptar. La enumeración misma de las medidas da el tono de las cosas pero aquí hay que tener en cuenta que una medida no se propone y ni siquiera se apoya; para existir en el terreno objetivo debe estar ya presente, de esa manera, en la cabeza de las gentes. Así ocurrió. La nacionalización de las minas, por ejemplo, significó la expropiación de casi todo el capital extranjero invertido en ese momento en el país. Pero el imperialismo, que seguía muy de cerca los hechos de Bolivia, no tardó en imponer indemnizaciones excesivas y, por lo demás, mantuvo el control de los sectores claves de la minería impidiendo la instalación de las fundiciones, monopolizando el transporte, etc. Es cierto que, en determinado momento, se puede retroceder o que la economía puede postergarse al servicio de la política; pero eso es válido sólo si la transigencia en la táctica sirve para asegurar la certeza de la estrategia. Aquí no hubo nada de eso y todo resultó un gran negocio a secas para los viejos dueños de las minas.

Guanto a la reforma agraria, tenemos ya, aquí, una obra de las masas mismas bajo el impulso de la clase obrera. En su realización, muy anterior a la ley y, después, dando la forma y aplicación que quería a la ley, actuaron centenares de agitadores sociales que surgieron de la entraña de las luchas sociales del país; el origen político de esta suerte de reformadores del campo rebasaba ampliamente al MNR o a cualquier grupo específico. Tratábase de una expresión en gran escala de cuanto había acumulado, con dificultades o sin ellas, la conciencia social sobre el problema. Por eso no resulta extraño que su resultado fuera la liquidación, total en la práctica, de la clase de los terratenientes señoriales como clase misma, su extinción material. Se trató, sin duda, de una desordenada tarea de distribución de parcelas y de una organización empírica del campesinado a imagen y semejanza del sindicato obrero; con eso, no podía sino quedar desorganizada la producción pero la explotación de la tierra era tan atrasada que, a pesar de todo, la producción aumentó bastante después de pocos años.

Se habló también mucho entonces de la reforma educativa pero ello se redujo

[12] Jorge Siles Salinas Vega, en *A propósito de la ejemplaridad.*

a la construcción de un número mayor de escuelas en el campo lo cual no era difícil puesto que casi no existía educación alguna en el campo antes de 1952. En cambio, dando coherencia a medidas que parecían no tenerla, la empresa estatal minera engendrada por la nacionalización de la Gran Minería, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) se convirtió en un centro de acumulación capitalista y es a partir de ella que se crea la nueva burguesía minera (la llamada minería mediana) que se convertirá en uno de los dos polos centrales de la burguesía post 1952. En esto se manifiesta el temprano carácter capitalista del estado de 1952: la minería nacionalizada es utilizada por el MNR, en efecto, como una propiedad de toda la clase burguesa en gestación o ya existente y es un campo de generación de burguesía desde el estado. Por el otro costado, los esfuerzos se concentran en la apertura del área de Santa Cruz, dentro del pensamiento de integración geográfica del estado nacional, donde, bajo una intensa promoción del proceso de acumulación desde el aparato estatal, se genera el otro polo burgués moderno, el de la burguesía capitalista agrícola.

Pues bien, así como Busch y Villarroel habían mostrado el momento heroico de la pequeña burguesía, el MNR demostrará aquí, por un lado, las dificultades objetivas para el surgimiento de un proceso burgués eficiente (las que son propias de un proyecto de burguesía tardía, en la fase del imperialismo) y también la pobreza de sus horizontes intelectuales. Podría culpárseles de no ser hombres grandes en medio de acontecimientos impregnados por la grandeza popular; por ser hombres al fin y al cabo vulgares en medio de los hechos supremos. Pero expresaban lo que el país había podido dar como racionalidad y ordenamiento. Después de todo, Paz Estenssoro es lo que hubiera querido ser Busch, aunque es evidente que Paz Estenssoro jamás habría podido ser Busch. El mismo hecho de que Paz Estenssoro hubiese resultado jefe del MNR era expresivo: era como la exacta medida; mientras hombres como Montenegro aturdían a la pequeña burguesía movimientista con la exuberancia de su talento y su cultura, por la opuesta, hombres como Siles Zuazo, que no ofrecían más que virtudes de otra época a cambio de una formación convencional, tampoco acababan por satisfacer un proyecto que, después de todo, no dejaba de tener sus aspiraciones. Eligieron a Paz Estenssoro, es decir, a un hombre capaz de hacer un buen presupuesto y que pretendía el bien de su país en términos de proyectos módicos y posibles. Deseaba algo así como un país bien alimentado, con escuelas suficientes y buenas costumbres personales. Ello, en un lugar donde todo había sido confrontación, desorden, traiciones monstruosas y grandezas inexplicables, resultaba, en verdad, un programa atractivo, apacible y constructivo.

Para realizar el plan económico de integración del país y de acumulación burguesa, en cualquier otro país, no habría sido necesario una revolución. Eran tareas que cumple cualquier estado burgués, aunque no sea sino una de las características de los latinoamericanos. La CORFO en Chile, a partir de Aguirre Cerda, o la política proteccionista de Perón habían ido bastante más lejos sin semejantes exageraciones en el proceso social. Sin embargo, aquí, para un plan tan modesto que ni siquiera implicaba todavía la aparición de una burguesía industrial, era ya necesario destruir todo el aparato estatal previo. Por eso, aunque es fácil detenerse en la anécdota burocrática de Paz o en el civismo deci-

monónico que exornaba la mediocridad de la visión del proceso que tenía Siles, es preciso tener en cuenta la otra cara de la medalla. La conciencia del atraso del país, de un atraso patente, insultante, agresivo, era tan tensa en Paz Estenssoro, que lo conducía a imaginar que no debía pensarse en grandes planes dudosos sino en realizar concretos planes posibles, no importaba si al precio de ciertas abdicaciones. Siles Zuazo, a su turno, en efecto, vivió la fase más ardua de la anarquía revolucionaria. Es evidente que se entregó a una salida conservadora en su lucha contra la anarquía pero lo es tanto como que la anarquía existía. El atraso escondía su bien paradojal porque, sin él, el viejo estado no habría sido destructible. La anarquía, por cierto, no era sólo desorden: dentro de ella estaba el movimiento del pueblo, la no pasividad. Pero ¿hay acaso algo más temible para una de estas pequeñas gentes que el atraso y la anarquía?

XXII. LO IRREVERSIBLE DE LAS MASAS Y DE SUS ENEMIGOS

¿Que hacían, entre tanto, sus rivales o los que pensamos ahora como sus rivales puesto que ellos mismos no se sentían tales en ese momento? Eran los obreros, en primer término, el puntal para frustrar los intentos contrarrevolucionarios de la oligarquía. Ésta, sin duda, no podía plantear una guerra civil porque no tenía, tras su derrumbe ideológico, el número de hombres necesarios, pero si los obreros no hubiesen actuado como efectivo brazo represivo del nuevo orden, el mismo ejército reorganizado no hubiera tardado en plantear una suerte de restauración. Ejecutaban, de otro lado, la reforma agraria, es cierto que con la complicidad consciente o inconsciente de multitud de hombres salidos de la pobreza de las capas intermedias. ¿De dónde venía, en efecto, el mayor poder de los obreros? De su colocación efectiva en el proceso de la producción, lo cual se derivaba de inmediato en una tendencia organizativa más compacta, aunque es claro que, por el momento, aquello no llegaba a expresarse más allá del universo del sindicato. Vemos aquí cómo incluso un gran poder relativo sirve de muy poco cuando los obreros no están en condiciones de utilizar el mayor fruto del proletariado en el capitalismo en general, que es el socialismo científico. Sin esto, eran como una fuerza ciega y deambulante. Estaban creando las condiciones de éxito para sus futuros enemigos; por un lado, venciendo todos los días con sus propios brazos a los enemigos de sus enemigos; por el otro, constituyendo la clase de los productores independientes del campo, sector que iba a ser, no mucho después, el principal soporte del nuevo estado para darle la paz social necesaria para que la burguesía completara su nueva acumulación y pudiera resistir el sostenido acoso obrero. Todo esto pertenece a la índole de las alternativas durísimas por las que tiene que atravesar una clase para formarse a sí misma.

Tal cosa tiene, como es natural, sus propios contenidos. El principal resultado del período fue la presencia global de las masas y su organización. Que los obreros no supieran explotar su poder no resta en absoluto importancia al hecho irreversible de que actuaran como clase de poder.[13] Por el contrario, no hay

[13] La palabra irreversible se usaba entonces con frecuencia extrema. Esto —el ser clase

nada más normal en el mundo que el que una clase nueva no sepa de las cosas del poder. Por otra parte, el que la organización de los campesinos acabara por vincularlos al estado (al nuevo estado burgués) y no a la clase obrera y que los convirtiera en la base social de la experiencia de aquél, tampoco suprime el desideratum de que una masa secularmente reducida a objeto inerte de la historia se convierte de pronto en un factor del poder político y, a veces, como se verá de inmediato, en factor de primer orden, aunque ese poder se utilizará contra la misma clase obrera que los había liberado. Estamos acostumbrados a una alianza obrero-campesina en la que los campesinos aseguran el porvenir del poder proletario, como ocurrió en el esquema soviético; pero aquí, fueron los obreros los que retrocedieron en su propia vida política como resultado de su honradez democrática hacia los campesinos. No todas las alianzas de clase conducen pues al mismo fin.

Cuando se piensa en estos problemas, si es que de veras se quiere comprender la importancia suprema del hecho que consiste en la presencia sin retorno de las masas dentro del nuevo estado, hay que enlazar la cuestión con la historia de la clase dominante como tal en Bolivia. En general, es discutible hablar de una clase dominante como continuidad, salvo por excepción.[14] En realidad, la historia es la sucesión de sus clases dominantes. Algunas veces, empero, lo que se produce es una mutación dentro de la mismidad de una dominación, una metamorfosis dentro del estatuto opresivo. Hemos visto, aunque quizá no con la necesaria claridad, cómo al fin y al cabo éstos que llamamos los activos pequeñoburgueses del MNR eran, en verdad, miembros desheredados de la vieja casta maldita dominante en el país, cuyos orígenes están en la propia Conquista. Es bastante explicable el que, ante el comportamiento excluyente y oligárquico del núcleo de esta casta, tanto más endogeneizante cuanto más arraigado en el enquistamiento de su ideología, el sector menos beneficiado y crecientemente despojado dentro de tal estatus, se expresara como grupo protestante, revisionista y jacobino. Era el que tenía una más directa visibilidad del hecho. Esto, en cuanto a la autodestrucción interna de la casta capaz, sin embargo, de atravesar la diversidad de sus formas clasistas.

XXIII. LOS INDIOS Y LA CASTA MALDITA

Por otro lado, la presencia de los campesinos indios (este grupo al que no se puede reducir a su diferenciación cultural, a causa de las mediaciones interminables del mestizaje, y tampoco a su mero rasgo clasista, a causa de sus poderosos contenidos culturales diferenciados) es, en la historia del país, siempre una presencia esporádica y por explosiones. Cuando entran en ella, en la historia del país, es como si entraran al movimiento viniendo desde la geografía, es decir,

de poder, clase que piensa en el poder como cosa suya— era, empero, lo único de veras irreversible.

[14] Pero una clase dominante puede, en efecto, atravesar, conservándose como dominante, a través de diferentes fases productivas.

como un malón. Catari prohibió el pan porque era español y mandó cortar la lengua de algunos que se atrevieron a expresarse en la lengua de Castilla en su delante; Belzu, metió a los indios contra los ballivianistas pero después se intimidó, de un modo tan parecido al de los movimientistas, con la barahúnda del ingreso de las masas indias; mataron los indios a la cauda acompañante de Melgarejo, "bestia borracha" como la llamó Neruda, que sólo se salvó por su sobrehumana fuerza maldita, pero no eran aptos más que para una venganza, sabiéndose que la venganza no constituye nada. Quizá lo más parecido al 52 fue lo de Willka, en la guerra federal; aquí, empero, otra vez, el poder indio se planteaba como el exterminio de lo no indio, en un país en el que nadie sabrá nunca dónde comienza el color de una piel. Los siglos enteros del país están marcados por los levantamientos o alzamientos; es como si Bolivia entera no fuera sino lo que se construyó intramuros de las defensas levantadas contra un territorio poblado por la indiada. Es por eso que Juan Francisco Bedregal se preguntaba si aquí era el indio un problema para el blanco o el blanco un problema para el indio. La cuestión del poder de este país acorralado en el flanco de su minoría era, por tanto, como en el tiempo de las guerras entre los Pizarro y los Almagro, la que se resolvía dentro de los límites de esta casta superior blancoide.

Ahora, el 52, sin embargo, los indios, ya considerablemente amestizados, que eran como blancos confusos que "reían en quechua" (según la feliz expresión de Carlos Medinaceli), se abocaron a comerse en las parrillas los reproductores que trajo Patiño para su finca de Pairumani y a zapatear con sus mulas en las canchas de tenis preparadas con polvo de ladrillo inglés por Aramayo, millonario inglés en sus preferencias pero de apellido quechua él mismo. Por tanto, la reaparición del malón cobra un carácter harto diferente. No es ya Martín Fierro luchando contra el indio sino el indio entrando por la puerta de Martín Fierro y con su complicidad. Es, en suma, una reaparición para quedarse. La propia reacción que había escrito *El pueblo enfermo*[15] se hará indigenista para defenderse del poder de los mineros. Es el acoso obrero lo que obliga a la vieja casta desgraciada a la tarea de abrir de puerta en puerta el ingreso de los indios para convertirlos, ahora tranquilos con sus cuatro conquistas a causa de su triste atraso, en sus aliados. A partir de acá, todo deberá resolverse teniendo en cuenta a los indios, que se vuelven, por vez primera y para siempre, en hombres interiores al marco humano del estado, hecho que implica una vasta democratización de la sociedad boliviana.

XXIV. RECONSTRUCCIÓN DE LA CASTA SECULAR

La movilización es tan extensa, sin embargo, que amenaza de hecho con dar fin material con la casta dominante secular. Esto es lo que produce un acto casi instintivo de la clase: los disidentes de la vieja casta dominante (el MNR y los

[15] Es una alusión al reaccionario libro racista de Alcides Arguedas, libro que fue como un evangelio de la ideología oligárquica.

demás impugnadores), que para vencer habían precipitado la movilización obrero-campesina, devienen, queriéndolo o no (aquí importa poco la profundidad de las convicciones) el conducto por el que se reconstruye la misma vieja casta, sólo que ahora dentro de los nuevos términos y esta vez como burguesía y no como mera oligarquía. Que el MNR en su cúspide dirigente fuera consciente de esto o no es poco relevante; en los hechos, su papel objetivo fue ése. Tal es el resultado principal de la revolución: la casta dominante se convierte de oligarquía en burguesía, aunque se las arregla para sobrevivir. El precio que debe pagar es la aceptación en la esfera estatal de la masa que había estado siempre fuera de ella. El quantum de esa masa eran los campesinos indios y son los propios obreros los que, merced a su atraso ideológico, crean las condiciones para que el campesinado se alíe con la nueva burguesía, que ahora tiene que abandonar sus sentimientos racistas, por lo menos en las palabras.

Hay aquí una correlación de objetivos de clase. La convocatoria al movimiento democrático-burgués había salido de la pequeña burguesía urbana que, no en balde, tenía una parte del monopolio ideológico,[16] la exclusividad en el uso de la oferta intelectual del país. Buscaba ella, la pequeña burguesía, la ampliación burguesa y el cumplimiento de las tareas nacional-burguesas. La propia expansión democrática del ámbito de alcance estatal es una conquista material de las masas y no parte del programa pequeñoburgués, aunque era aceptada por él. Pero cuando se hacen presentes los obreros (y en un primer momento también los campesinos) buscan ya la destrucción de la casta secular dominante como tal. En este momento, que es el del poder obrero, o de la supremacía obrera, la pequeña burguesía pasa a conducirse como su funcionario o delegado. Era seguidista con relación al poder proletario pero no creía en él ni mucho menos. Esto mismo contiene dos hechos: primero, que la clase obrera no sabía o no podía, por cualquier razón, ejercer su poder por sí misma; segundo, que carecía de un proyecto de concreción en el tiempo de la liquidación de la casta dominante como tal. Esta última comprobó en cambio un episodio que es frecuente en la historia del mundo, que es la capacidad de clases sociales o grupos determinados de atravesar por diferentes modos de producción, sobreviviendo y a la vez transformándose dentro de sí. Aquí la supervivencia se da, empero, no por la consistencia del sector (considerable de todas maneras, por lo menos en la terquedad de sus mitos) sino por la invertebración del movimiento revolucionario.

En su momento más revolucionario, la pequeña burguesía cree en el estado (pero no en el proyecto obrero, que no existió sino en la consistencia de las proclamas). Es ridículo pensar en ello como un complot desde el principio contra la clase obrera; pero la pequeña burguesía aquella creía en una abstracción —el estado— y esto era como creer en el esquema clasista tal como se reprodujera. Cuando se ve acorralada y arrinconada (por la propia ecuación clasista, por la eternidad aparente del instante estatal) utiliza al estado no sólo para convertirse ella misma en burguesía sino también para reconstituir a la clase dominante como tal, pensando que no había más remedio que hacer eso. Cuando

[16] Compartida con la oligarquía. Pero la suya, la ideología de la que era portadora la pequeña burguesía, se hizo hegemónica ante la ruina de la ideología oligárquica.

es burguesía, pues ha devenido a esa nueva entidad, se VUELVE TAN REACCIONARIA, INCLUSO DE UN MODO YA ANTIESTATAL, como la propia oligarquía trasfigurada en burguesía por medio de aquella pequeña burguesía.

Tenemos aquí un caso próximo, pero no idéntico para nada, a lo que Lenin llama la vía junker en la formación de la clase capitalista. La revolución democrática, entregada en su conducción a la pequeña burguesía que actúa como preburguesía, trasforma a la clase dominante de este estado de dos maneras: por un lado, destruyendo el sector que impedía la ampliación que era, por contraste, el único capitalista en su actualidad; por el otro, haciendo un verdadero trasiego del sector precapitalista, impidiéndole su sobrevivencia como sector precapitalista, a zonas de acumulación capitalista. Por lo demás, lo que en el principio no parecía sino un mero matiz o querella táctica, en la situación revolucionaria crece, en la medida en que tiene que manifestarse como formación económico-política, hasta convertirse en un carácter. Se ve el muy diferente matiz que adquieren aquellas que son las mismas tareas —las mismas en cuanto a la forma— según cuál sea el poder, es decir, la clase social que las ejecute. Ocurrió como con la revolución alemana de 1848: lo que no pudo hacer el pueblo, lo hizo Bismarck, pero desde arriba y el pueblo tuvo que pagar un elevado precio por no haber sido capaz de realizar en el debido momento las tareas debidas. No hay nada tan terrible como no ser dueño de la victoria que uno mismo ha obtenido.

Todos los intentos de restauración oligárquica resultan derrotados y son los obreros y ahora también los campesinos los que actúan, tal como se ha apuntado, como el brazo armado y aparato represivo del nuevo estado. El tiempo mismo, empero, irá atenuando las aspiraciones restauradoras de la oligarquía y esto, el apetito restaurador, se irá aproximando sin duda a los propios contornos, cada vez más conservadores, del nuevo estado. En el proyecto de reconstrucción del ejército, por ejemplo, se sabe que Ovando jugó desde el principio un rol bastante importante; tanto él como otros oficiales (digamos Sanjinés Goitia),[17] pensaban en la reconstrucción del viejo ejército oligárquico y no en cosa distinta. El que pudieran llevar a cabo su objetivo *dentro* de la revolución, es una señal bien clara de que este mismo proceso había creado sus tendencias conservadoras, similares a las de los sectores reaccionarios en lo previo.

XXV. PAVOR DE LAS CLASES MEDIAS

Una fase revolucionaria es, para las sociedades, lo mismo que un cataclismo para la geografía. Hay una fase de caos, de incertidumbre e indefinición que es inseparable de tal tipo de acontecimientos. Es difícil ver en otros casos, con la nitidez que ofrece éste, el papel del estado como atmósfera de las relaciones productivas, o sea, actuando en su función reproductiva a la vez que como una verdadera fuerza de producción. Al no saberse en la situación revolucionaria qué es lo que

[17] Joven oficial de la oligarquía. Hombre de confianza de los norteamericanos en la preparación del golpe que llevó al poder a Barrientos. Véase *infra*.

quiere el estado (habida cuenta de que el querer del estado es algo muy distinto del acto individual de voluntad) pero, sobre todo, si hay la duda acerca de la irresistibilidad de la voluntad del nuevo estado, las propias relaciones de producción intentan reacomodarse por sí mismas y es la economía la que primero siente la falta de existencia definida del orden de los conceptos de la sociedad. La conversión del siervo en productor independiente de tipo mercantil contiene un paréntesis en el que no es una cosa ni la otra: ha dejado de ser pongo, no es todavía lo que ya puede, sin embargo, ser, esto es, productor independiente que concurre al mercado. Los técnicos e ingenieros en las unidades capitalistas, como las minas, están mucho más vinculados por la ideología con los antiguos patrones que con el estado que ha tomado las empresas. La represión misma, en una situación tan fluida, no podía ejercitarse sino como un hecho clasista, desordenado y a menudo arbitrario. Los oprimidos de siempre no tenían por qué tratar con guantes de seda a los que habían sido los más crueles opresores. Pero los grupos intermedios no hacían la vivencia de esto sino como pura crueldad. Los descensos de la producción se sintieron primero en el sector agrícola; pero no tardaron en alcanzar a la minería, fuente única entonces del mercado exterior.

Es bien conocida la tendencia autoritaria propia de la pequeña burguesía. Por lo mismo que se trata de un sector que no puede encontrar la homogeneidad, la coherencia ni la ordenación dentro de sí mismo, es un anhelo grupal auténtico el de la autoridad que viene de fuera. No es necesario abundar demasiado sobre esta tendencia. En Bolivia, concernía ello sobre todo a la pequeña burguesía urbana, puesto que la nueva clase de los campesinos parcelarios era lo que se llama una *clase conforme,* por razones obvias. La inflación, que hizo pasar el tipo de cambio de 40 a 14 000 por unidad de dólar, era como el símbolo de esta situación poblada por el terror de los milicianos, la inexistencia del ejército, el control obrero con derecho a veto, la falta de alimentos y el empobrecimiento de todos los sectores con ingresos fijos. Si se tiene en cuenta, además, que, en el sistema del voto calificado, estas clases medias elegían en nombre de todos, como única gratificación a su pobreza, hay que ver lo que podían pensar de un mundo en el que los sindicatos habían sustituido al Parlamento, las milicias al ejército y el voto universal al voto calificado. La depredación a la clase media urbana era evidente.

Vivió ella la época, por tanto, como una pesadilla en la que, a sus ojos, se le destruía la nación misma; el peso de la ideología oligárquica hacía que ellas también unimismaran en el fondo de su ser a la nación con la supremacía de la vieja casta. Los prejuicios antindígenas no dejaban de jugar un papel considerable en estas posiciones. Pues era un partido hispanista y nacionalista, el descontento aquel adquirió un acento desesperado, en la Falange [18] y los grupos que en ella tenían a su militancia, los cuales como cumpliendo un deber ardiente se entregaron a los sucesivos levantamientos que, aunque financiados por la Gran Minería, no dejaban de manifestar el descontento verdadero de las capas medias.

[18] Falange Socialista Boliviana. Partido fundado y jefaturizado por Óscar Unzaga de la Vega. Nacionalista de derecha, fue el instrumento de las clases conservadoras durante el período revolucionario siguiente a 1952.

El último de ellos fue el del 19 de abril de 1959, en el que perdió la vida el jefe de ese movimiento, Óscar Unzaga de la Vega.

La propia pequeña burguesía del MNR, empero, convertida ahora en burocracia estatal, estaba lejos de no compartir en algo tal estado de ánimo, aunque con los debidos matices, como es natural. En el suicidio o la muerte de Unzaga estuvo presente un descontento clasista, que pretendía representar a la nación como conjunto pero también un cierto mesianismo personal, una apasionada ambición subjetiva de poder. Unzaga se sentía el titular viviente de una nación de la que pensaba que estaba siendo destruida. Pero la disensión de Guevara,[19] que lo condujo al final a separarse del poder del MNR y a luchar contra él, y la misma reorganización del ejército expresaban lo mismo: la idea de que la sobreactuación obrera estaba desorganizando a la Revolución y desvirtuándola, de que ningún plan coherente era compatible con esta presencia abrumadora. Intelectuales más relevantes por la mediocridad de su milieu que por su verdadera penetración en las cosas, puesto que el sector obrero era el más imperativo en la lucha por sus ingresos en la sucesión inflacionaria, concluyeron, como si fueran los más pedestres empresarios, en que la causa de la inflación eran los petitorios obreros. Pero lo mismo en esto como en lo que veremos enseguida, que es el momento del gobierno de Siles Zuazo, había un fondo de verdad en tales requerimientos: toda sociedad, incluso la menos vertebrada, detesta el desorden; si el sector revolucionario no es capaz de proponer, imponer y construir un orden, asumirá la tarea el sector conservador del poder. O sea que lo que de un modo reaccionario decía la derecha del MNR, era verdadero en cuanto que la clase obrera era productora de caos, no a causa de sus reivindicaciones, sino a causa de su incapacidad para imponer una suerte de paz obrera.

XXVI. COLONIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL POR EL IMPERIALISMO

El punto máximo de la crisis económica se produce hacia 1956, coincidiendo con el ascenso de Siles Zuazo al poder. Éste era un hombre valeroso, conciso y también opaco; construyó una carrera política a fuerza de carácter y no era, sin duda, el más dotado para imprimir una comprensión universal de la situación revolucionaria. Siles pensaba que el 9 de abril había ocurrido como consecuencia de su dirección (no daba vueltas en esto) y que el papel fundamental había sido jugado por las clases medias a las que identificaba con sus seguidores, o sea, que no se daba cuenta final de los mismos hechos que había vivido en el centro de las cosas. En ese momento, sin duda, la situación económica habíase hecho desesperante. El imperialismo norteamericano, que ya había obtenido un *modus vivendi* provisional con el MNR a partir de la ayuda en alimentos (lo que había influido sin lugar a dudas en la reorganización del ejército y en las primeras concesiones petrolíferas) pudo entonces imponer un plan económico global. El

[19] Walter Guevara Arze, autor del "Manifiesto a los Electores de Ayopaya", la figura más interesante del sector conservador del MNR.

enviado económico de Estados Unidos, George Jackson Eder actuó con plenos poderes y sus memorias son quizá el documento más humillante que existe para la soberanía de Bolivia. Actuó en todo como un enviado colonial; pero eso fue posible no sólo por las urgencias de la situación sino por la desmoralización del nacionalismo, que estaba más preocupado por la "destrucción" de la economía por los obreros que por la penetración imperialista. Impuso Eder un plan de estabilización monetaria que implicaba la imposibilidad de desarrollar la industrialización en torno a la minería y que condenaba a las empresas estatales a no ser otra cosa que simples centros de acumulación de la nueva burguesía. Se mostraba el enviado como un economista imperativo ante interlocutores que estaban dispuestos a la aceptación de lo que se les dijera pues convencidos estaban de que la inflación era una pesadilla terrible y la revolución, en cambio, nada más que una palabra, una reconstrucción amañada de los hechos. Pero si un economista tan elemental como Eder pudo tener éxito en el freno a la inflación se debió en primer término al ánimo de la pequeña burguesía urbana, que apoyaba resueltamente a Siles por lo menos en esto; pesó más que ello todavía la quietud campesina, que no resultaba afectada por la inflación y que daba un enorme margen político de maniobra, incluso para un plan tan torpe como el del estulto Eder. Las consecuencias de entregar la inteligencia económica a un extranjero eran las mismas que se habían vivido con la entrega de la conducción militar a Kundt, en el Chaco. La presencia del imperialismo norteamericano se hizo invencible en su crecimiento y no es sino una derivación de este momento el que todos los egresados del nuevo Colegio Militar pasaran a entrenarse en la Zona del Canal, el que a partir de cierto momento no hubiese un solo ministro de Interior que no acabase por trabajar con la inteligencia norteamericana o que los gerentes de las empresas norteamericanas, como la Grace, resultaran ser a la vez dirigentes de la empresa minera estatal. Uno podría preguntarse aquí de la manera más legítima cómo es que los mismos que habían vivido en la fundación de su movimiento emociones tan nacionalistas que lindaban con el chauvinismo, una desconfianza al extranjero que se convertía sin cesar en xenofobia, pudieran al paso de los años concluir haciendo todo aquello y entregando el mismo petróleo por cuya defensa se supone que habían luchado. En esto, sin duda, operó ya cierto terror a las masas; pensaron que tenían que elegir entre la supervivencia organizada del país o la supervivencia desorganizada de las masas y prefirieron lo primero. Por otra parte, es claro que el chauvinismo no produce conciencia, no una conciencia capaz de defenderse, en todo caso. Lo que produce es un bloqueo que se parece al aislamiento y, por eso, suprimir como acto psicológico al mundo, no significa todavía que el mundo desaparece. Cuando reapareció la necesidad del mundo resultó que los nacionalistas no tenían una visión lógica ni actual del mismo y por eso se entregaron a algo desconocido, pensando quizá, que lo podían controlar. El provincialismo tuvo aquí efectos desgarradores; eran efectos que no se diferenciaban del entreguismo.

XXVII. REFLUJO OBRERO

Así, el gobierno de Siles Suazo señala la decadencia o periclitación de la influencia obrera. En determinado momento intentó crear un "propio" movimiento obrero (los llamados reestructuradores), paralelo y sustitutivo del tradicional, lo que demuestra hasta qué punto Siles pensaba que el proletariado político era una consecuencia lateral del MNR, es decir, fruto de algo más grande y coherente a lo que debía acatar. Los rebasamientos obreros eran vistos, por tanto, como el resultado de la agitación comunista, impura con relación a la verdad del movimiento. Aunque Siles fracasó en su intento de hacer un sindicalismo "silista", no hay duda de que aquí el proletariado vivía un reflujo, que su éxito no consistía ahora más que en sobrevivir con un mínimo de autonomía y de que, por otra parte, el estado de 1952 ya tenía la fuerza como para acosarlo sin tener la necesidad de recibirlo. La fase bonapartista del proceso revolucionario, que había comenzado en la segunda parte del gobierno de Paz Estenssoro, llegó a su ápice. Jamás logró la burocracia un sindicalismo subordinado al poder (lo cual es decir que la burocracia civil no sometió a la sindical, mientras la militar aguardaba su hora) pero la época del poder subordinado al sindicalismo había concluido. Todavía los obreros salían a luchar cada vez que se daban intentos propiamente contrarrevolucionarios (como los de Unzaga o el levantamiento de los carabineros en 1960) pero ya estaban en contradicción con los lineamientos del poder, sobre todo, con el Plan de Estabilización Monetaria. La desorientación obrera era, con todo, algo muy evidente. Lechín mismo, cuyos cuerpo y vida estaban en el movimiento obrero pero cuya cabeza pertenecía sin duda a la pequeña burguesía, al servicio de sus ambiciones tan volátiles, aspiraba a lograr una convivencia con los norteamericanos. No se explica de otra manera el que, al mismo tiempo que se opusiera al Plan de Estabilización, sin embargo suscribiera el llamado Plan Triangular, que era su resultado en cuanto a la reorganización de la minería estatal. Aun así, la oposición obrera a Siles Suazo, tenía todavía la fuerza necesaria como para imponer la reelección de Paz Estenssoro para la sucesión y el nombre de Lechín como su vicepresidente (1960).

Era una ilusión no sólo de los obreros sino de toda la izquierda suponer que la imposición de este binomio implicaría el retorno a la fase revolucionaria. Esto es algo recurrente en la historia. La fijación sentimental en una hora del pasado suele ser una de las más ruinosas formas de alienación con relación a lo inmediato; en nombre del rescate del momento del pasado que se considera que fue el de la gloria o plenitud, se cometen las más costosas arbitrariedades en el análisis de las cosas tal como son en su actualidad. En efecto, así como el gobierno de Siles Suazo no fue sino el desarrollo de la parte final del período primero de Paz Estenssoro, el segundo gobierno de éste fue la prosecución de los lineamientos dados por los norteamericanos a la política de Siles Suazo. El país entero, su ejército, el propio proceso democrático-burgués, estaban ocupados por el imperialismo norteamericano. Eso no podía cambiar con Paz Estenssoro porque éste, acostumbrado a moverse según la fuerza de los hechos, con el mismo acto mental con que había aceptado como parte de la naturaleza de las cosas a las masas en acción en 1952, aceptaba ahora a los norteamericanos; lo que le interesaba era

canalizar la presencia norteamericana hacia los planes de desarrollo y así lo hizo. Se planteó un tipo de desarrollo económico dentro de lo aceptado o lo exigido por el imperialismo.[20]

Que el sucesor de Paz Estenssoro debía ser, en la nueva situación, Lechín era, por su parte, una suerte de sobrentendido y es verdad que el movimiento obrero estaba dispuesto a conceder bastante, en lo que pensaba una mera táctica, al servicio de este proyecto. El plan norteamericano, empero, había pasado entonces de la economía a la política y estaba lejos de restringirse solamente al freno de un asedio de masas; consistía, precisamente, en lo contrario del plan de Lechín o sea, en la ruptura concreta de todo lazo entre el MNR y el movimiento obrero y en la aniquilación política de éste.

Ya en las postrimerías del régimen de Siles, el ejército llegó a rodear Siglo XX-Catavi, la mayor concentración minera, como emergencia de un incidente huelguístico. Los obreros repitieron entonces lo que habían hecho en la guerra civil de 1949: tomaron como rehenes a ingenieros norteamericanos y amenazaron con ejecutarlos en el caso de que el ejército ingresase a las minas. La mediación de Lechín impidió que las cosas llegaran a ese punto pero era visible la descomposición de todo. La prueba de que se trataba de un plan previsto y no de una mera emergencia se dio cuando Henderson, embajador norteamericano a la sazón, planteó a Paz Estenssoro en 1964 una suerte de silogismo no tan diplomático, aunque es cierto que aquel yanqui por razón alguna estaba dotado por la naturaleza para saber lo que es un silogismo. El planteamiento, en todo caso, podía resumirse así:

Premisa primera: La segunda parte del Plan Triangular no puede concretarse si expertos norteamericanos no revisan *in situ* la ejecución de la primera.

Premisa segunda: Dicha revisión no es posible si no se otorgan garantías a los técnicos tales, para el cumplimiento de su misión y esas garantías no son posibles sin la presencia del ejército en los distritos mineros.

Ergo, intervención militar al punto. Intervención no pacífica, por lo demás, puesto que los mineros, ya en un tren de instinto receloso hacia los militares, de ninguna manera admitirían la presencia militar sin contraponerle su propio reparo armado. Todavía Paz Estenssoro evaluó las cosas con corrección, diose cuenta que la cosa contenía matanzas seguras y se negó con gesto airado al asunto. Henderson reculó entonces y acabó por aceptar a regañadientes aquella posición del Presidente; pero no fue sino una postergación. Un año después, derrocado Paz, el ejército ingresaría a sangre y fuego en todos los distritos mineros por medio de las que son conocidas como las grandes matanzas de 1965.

La historia del país comienza acá a moverse dentro de los perfiles dados por las modalidades norteamericanas de acción a través de sus servicios de inteligencia, sobre todo la CIA. La *entourage* de Lechín, como se supone, mezclaba a luchadores sociales verdaderos con una burocracia sindical que se había corrompido cada vez más en el trascurso del ejercicio del poder. Pues bien uno de estos

[20] Al revés de lo que hizo en el período 1952-55, cuando sí intentó un tipo de desarrollo sostenido por el ahorro interno. Esta experiencia, que pertenece a la fase del mayor compromiso revolucionario, fue el fundamento, por ejemplo, de todo el desarrollo posterior del área de Santa Cruz.

"hombres de confianza" del caudillo sindical invadió por azar una fábrica de cocaína en Cochabamba. No entregó a las autoridades la cantidad de droga que había capturado sino que la comercializó por cuenta propia, según él, con objeto de "adquirir armamento". En todo caso, con anuencia de Lechín o sin ella para la operación, el asunto fue detectado no por las autoridades sino por la CIA que tenía contactos estrechos con el entonces ministro del interior, José Antonio Arze Murillo. Éste, por tanto, tuvo un verdadero acceso de moralidad, planteó el asunto, pasando por alto al propio Paz Estenssoro, en términos de producir escándalo político y acusó de modo directo al vicepresidente, cuyo enjuiciamiento solicitó al Congreso. Lechín prefirió pensar que Arze Murillo había actuado aquí por encargo de Paz Estenssoro y no de los norteamericanos;[21] Paz Estenssoro, a su turno, tentado por la posibilidad de una reelección, optó por hacer mutis por el foro y, en fin, nadie hurgó la verdad de las cosas que consistía en que la CIA imponía con sus embrollos y complots las decisiones políticas. Una dudosa transacción que consistió en alejar a Lechín, dándole la embajada de Italia, y a la vez impedir el juicio frenó por el momento el asunto pero ya estaba claro que el MNR había roto con el movimiento obrero. Que éste, el movimiento obrero, rompiera con el MNR por un lío de drogas precipitado por la CIA demuestra hasta dónde había degenerado la política dentro de esto que ya sólo por inercia se seguía llamando la Revolución. El mundo ahora no venía a Bolivia con los empréstitos ni con las ideas traídas de París por gentes como Alcides Arguedas; ahora estaba aquí, con sus agentes mismos. En la costumbre del coloniaje, la clase política sólo aspiraba a acomodarse de la mejor manera con los agentes del imperialismo. Pocas decadencias han sido tan poco sensibles al interés nacional como la decadencia del nacionalismo. El nacionalismo había bajado desde el fervor de Busch hasta el alquiler que hacía Arze Murillo de sí mismo para recibir los dineros de Agee.

XXVIII. EL DÉSPOTA IDIOTA

La justificación que daba Paz Estenssoro para la aventura de la reelección era la búsqueda de un *status quo,* a objeto de dar contento a los norteamericanos (como si su solo objeto hubiese sido el impedimento de Lechín) y a la vez margen a la reconstrucción de una autonomía mínima al poder político. Los norteamericanos, empero, habían tomado ya la iniciativa de las cosas y campeaban como dueños del país. Esta gente, elemental y a la vez poderosa, tenía en esto —en la facilidad con que se tomaron todo— la clave de sus éxitos; pero también la de su indefectible perdición. Ningún sueño es tan absurdo como el del infinito poder, Tamayo con el gran poder de su espíritu había escrito sobre ellos: "no se es impunemente poderoso".

Aquí es donde aparece la figura de René Barrientos[22] Así como los liberales

[21] Philip Agee, empero, describe en su diario los contactos de Arze Murillo con la CIA. Véase Philip Agee, *CIA diary.*

[22] He aquí un retrato, que pertenece a otro trabajo mío, de Barrientos, haciendo notar

habían organizado el ejército de la oligarquía a la manera prusiana, marcando el *links-recht* y marchando con el paso del ganso, la revolución nacional reorganizó el ejército con las armas norteamericanas, los uniformes norteamericanos, los reglamentos norteamericanos y, obviamente, la doctrina norteamericana. Después de todo en las otras armas, sobrevivía algo del Chaco y su generación; en la Fuerza Aérea Boliviana, FAB, empero, puesto que casi no había existido antes, el ambiente era el de una norteamerización total. Barrientos mismo, que tenía la apariencia de un oficial yanqui, se ocupó en detalle en explotar sus entrenamientos. Ascen-

en ello el entrelazamiento entre los oficiales, la oligarquía tradicional y el imperialismo:
Barrientos era un hombre bien parecido, de piel tostada y de una estatura mediana, en el límite con la alta; se podría decir que era atlético, sin llegar a ser rudo y hasta el fin de sus días apareció siempre con el aire particular de un oficial respetuoso y bien educado. Esta primera impresión resultaba sin embargo decaída pronto, como consecuencia de una voz atiplada, en la que se había instalado una ganga de seminarista, que sólo era parte de un aura de indefensión que él había desarrollado acaso gracias a su astucia, que era considerable, intuitiva pero también eficaz. Entusiasta partidario de la ropa de estilo yanqui, se complacía en llevar el cabello cortado al rape como los aviadores de ese país, siendo aviador él mismo y además entrenado allá. Era flagrante la órbita angosta donde se habían refugiado sus ojos, que trasmitían una mirada mezquina y como aterrorizada, pero esta labilidad general, que él había aprendido a continuar con un tratamiento solicitante a los demás, era engañosa en absoluto. En el fondo era un hombre resuelto, la naturaleza lo sobredotó con una salvaje audacia que se contradecía con aquella aparente falta de medios y, temblándole las manos, acababa sin embargo por llevar a cabo empeños por lo menos insólitos, como la destitución de Ovando en el Palacio, que fue obra sólo suya, o su salto en paracaídas, después de que dos hombres habían muerto antes usando los de la misma serie. Es evidente que el aspecto de su coraje ha sido exagerado hasta el absurdo por quienes lo promovieron y en este orden de cosas tenía la conducta común de un hombre boliviano. Con todo, el fondo de su personalidad residía en una esencial falta de capacidad de captar las proporciones del mundo y de sí mismo: la realidad era un dato ajeno a él y, a partir de este quid compuso una personalidad patológica sin dudas. La cruel determinación con que usó del poder, más allá de lo que le pedían los yanquis ni nadie, recordaba por contraste el modo entre rastrero y abrumado, la tan poca dignidad con que en sus momentos adversos recibía, por ejemplo, las interpelaciones personales de Paz Estenssoro, en el período conspirador. La virilidad de su gesto realmente no era muy impresionante. Pero aquella doblez resultaba, al fin y al cabo, más o menos normal; no lo es en cambio el intento de reconstruir el propio pasado, contra toda evidencia, como cuando dijo que era doctor en economía, porque en ese momento aborrecía a Paz Estenssoro que era economista, o que había sido abanderado del Colegio Militar, porque estaba torturando a Vázquez Sempertegui, que lo había sido realmente, o cuando presentaba su diario de combatiente político, porque acababa de publicarse el de Che Guevara. No era una cándida megalomanía por la que pretendía ser muerto en el entierro o novia en la boda, como dijo en su chunga alguna vez Quiroga Santa Cruz. Era ya una personalidad que se veía a la vez desdoblada y aterrorizada, que reaccionaba ante el mundo, que le parecía, de continuo enemigo, con un odio, éste sí poderoso de un modo casi biológico, hacia quien le recordara un sector u otro de sus inferioridades. Que nombrara después ministros al mismo tiempo a su hermano y a sus dos cuñados, mientras uno de sus suegros era embajador en París y el otro Cónsul en Antofagasta o que oficialmente se mostrara, según fuera una u otra ciudad, con sus dos esposas, no parece sino broma truculenta que Valle Inclán olvidara del Tirano Banderas, pero lo mismo se dio ímpetu para bautizar a su helicóptero con el nombre del caballo de Melgarejo, porque en efecto no le importaba la opinión del país estupefacto. Holofernes se llamó, desde entonces, el helicóptero aquel, regalado por la Gulf, al que Barrientos amaba lo mismo que Melgarejo a su caballo. A cambio de este equino, acabó por ceder Ladario a los brasileños, que se lo habían donado, igual que la

dió en la Fuerza Aérea y hacia 1963, ya comandante del arma, en el mes de enero, se daban las condiciones para que, en una recepción que se llevó a cabo en Fort Myers, Virginia, el general Curtis Le May, comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, brindara por la futura inevitable presidencia de Bolivia del general Barrientos. Volvió Barrientos de este viaje en condiciones de utilizar una chequera en blanco que se le había dado al coronel Sanjinés Goitia. Este personaje, hijo de un general que se había apoderado de Pillapi despojando a los indios en el tiempo de Montes, se las había ingeniado como para ser a la vez empleado del Punto IV, es decir, de la embajada de Estados Unidos, pre-

Gulf el aparato aquel, un siglo después.

Su historia formal es menos interesante. Es cierto que tuvo un nacimiento desgraciado y que fue criado en un orfanato de Tarata, pueblo natal suyo y también de Melgarejo lo que quizá explica, junto con otras causas, la veneración de aquel caballo. La falta de vocaciones sacras hizo que sus protectores lo indujeran a hacerse cura y su paso por el seminario le dejó algunas huellas menores —como su voz— pero su destino no era ser obispo de Cochabamba sino dictador de Bolivia. Si la lógica tiene algún valor, tuvo que ser un estudiante muy modesto y ello debió confabularse con su pobreza para mudar su destino hacia el Colegio Militar, donde sus condiciones de buen deportista y un mínimo de espíritu militar fueron suficientes para hacer una carrera mucho mejor. Tuvo alguna confusa actuación en la guerra civil de 1949 y fue militante activo tanto del MNR como de FSB, pero lo que se sabe con certeza es que fue copiloto de Walter Lehm, en el avión que trajo a Paz Estenssoro de Buenos Aires, el 15 de abril de 1952. Parece que en efecto fue uno de los que entraron primero en el Palacio Quemado, tras la dispersión del ejército, en ese año. Una circunstancia excepcional cambió su vida entera. Después de la reorganización del ejército, Barrientos fue enviado, quizá por su militancia movimientista previa, primero a Italia y después a Estados Unidos, para entrenarse en el manejo de aviones de combate. Su instructor fue el entonces Liutenant Edward Fox, el mismo que reclutó a Arguedas como agente de la CIA, según el famoso testimonio, y sin duda uno de los más importantes integrantes de la inteligencia norteamericana en el 4 de noviembre. Fox tenía en lo oficial las funciones de Agregado de Fuerza Aérea a la embajada, desde 1963. Barrientos acabó también haciendo amistad, durante este entrenamiento, con el general Curtis Le May, que fue jefe de la fuerza aérea de Estados Unidos en el período al que nos referimos y después candidato a la vicepresidencia detrás de Wallace, en la fórmula fascistoide de 1968. Le May tenía opiniones tan jugosas como que los comunistas habían usado la fluorización del agua para disminuir la potencia sexual de los norteamericanos. Era por lo demás, partidario del uso inmediato de armas atómicas en Vietnam. Con tal oligofrénico auspicio, Barrientos fue cuidadoso en asimilarse al modo de vida americano, para lo cual lo favorecía su aspecto físico y se dice que una gringa, mujer de unos de los jefes del campo, dijo en una fiesta, para hablar bien de él, "que parecía americano", lo que motivó algunas sonrisas latinoamericanas.

Una inexplicable campaña de promoción de Barrientos se desató tanto en los periódicos locales como en la propia prensa norteamericana. Drew Pearson escribió largos artículos sobre su coraje y el *Time* lo llamó ya el "Steve Canyon de los Andes"; pero la clave de su súbita e incontenible aparición política fue el plan militar llamado de Acción Cívica, que fue financiado por el gobierno de Estados Unidos a partir de 1960. "En 1960, en una conferencia de jefes de fuerza aérea sostenida en Buenos Aires bajo los auspicios de la Fuerza Aéra de Estados Unidos, él (Barrientos) fue uno de los primeros jefes de las fuerzas aéreas latinoamericanas que respaldó la idea de una Acción Cívica", ha escrito Brill. Normalmente, los americanos usaban su ayuda o las derivaciones de su ayuda con un sentido imperialista: no sólo en lo grueso, como la estabilización monetaria, sobre la que queda poco por decir, pero también en lo específico, cuando con burdos préstamos atados, trataban de obligar al país a monopolizar su comercio en el sentido americano o cuando obligaban a la contratación de empresas americanas para los caminos o para la provisión de

sidente de la empresa editora *El Diario*, que expresaba la opinión oligárquica superstite y nada menos que oficial en servicio activo del ejército. Barrientos era un hombre intelectualmente insignificante y de una personalidad que sólo adquirió cierta relevancia brutal con el poder; en aquel momento hacía casi un culto de su propia indefensión psicológica y esto servía para gratificar a Paz, que se complacía en hacer sentir su superioridad sobre el oficial. Pero Barrientos estaba dotado de una salvaje audacia; su instinto lo llevaba a seguir de un modo elemental y sin dubitaciones a los norteamericanos y su propia insensibilidad frente a las cosas, que era fruto de su desgraciadísima vida personal, le hacía actuar

equipo, como en el Plan Triangular. Los fondos de contrapartida de la ayuda en alimentos, aunque sirvieron para una campaña contra el MNR, resultaron en verdad un considerable refuerzo de la burguesía comercial lugareña, pero el Plan de Acción Cívica, que ni siquiera se tomó el trabajo de cambiar el nombre cuando se lo usaba en uno u otro país, consistió ya en una penetración concreta en el ejército, lejos del asesoramiento militar, así como, a la vez, en una manera de penetrar *con* el ejército, al que Abril no le había dejado sino un vago oportunismo, en los sectores más atrasados y difusos de la Revolución, que eran los campesinos. Abandonado casi de inmediato a la toma del poder por los militares, el Plan de Acción Cívica sirvió sin embargo para construir quizá una decena de escuelas ínfimas, algunas canillas de agua en los pueblos mayores y la especie estruendosa del liderazgo campesino de Barrientos, que murió repartiendo sumas pequeñas de dinero a comarcas miserables y a quien bastó con comprar algunos dirigentes y prometer pequeñas obras públicas aldeanas para anunciarse como el emisario de las masas descaudilladas del campo, añagaza que fue otro de los grandes juegos de luces de aquella propaganda desatada.

El programa fue encomendado al coronel Julio Sanjinés Goitia, en su calidad de empleado de USAID (Punto IV), que se había refugiado en la burocracia de la embajada americana para protegerse de las persecuciones de la Revolución y que, en esa condición, llegó a disponer de fondos a sola firma. Sanjinés Goitia se parecía a Dios en que estaba en todas partes. Era director del Plan de Acción Cívica y, por eso, funcionario oficial de la embajada norteamericana. Aunque había sido dado de baja, aquella situación no le impidió ser reincorporado al ejército y gozar del estatus de oficial en servicio activo, por lo que tenía un cargo importante en la Escuela Militar de Ingeniería; finalmente, cuando el proceso maduró lo necesario, fue designado presidente del directorio de *El Diario*, el periódico más importante de Bolivia, que de pronto se acordó de que ambos eran familiarmente de origen liberal. Este Sanjinés Goitia era una suerte de *pure sang* de la oligarquia pero su posición superior dentro de la sociabilidad boliviana no se remontaba sino al tiempo de los grandes despojos de tierras a los indios, en tiempo de Montes, como por lo demás, toda la oligarquía, que sólo excepcionalmente retrocede en sus genealogías mucho antes de Melgarejo, que hizo lo mismo que Montes. Son famosas las instrucciones de Montes que hablaban de "que los disparos se harán siempre sobre blanco seguro" operación militar con la que acabó dueño de la península de Taraco y el general Sanjinés, padre de Julio, de un latifundio en Pillapi, muy cerca de la anterior. Naturalmente, Sanjinés Goitia perdió sus tierras con la reforma agraria de 1953. Despojado del uso de sus charreteras y convertido en algo así como réprobo no invitado a la gran fiesta de los pongos, Sanjinés, que compartía la pobreza cultural de toda aquella clase alta amancebada por la ideología del "Colegio Alemán", que hasta lo último, como prueba de su esprit, no atinaba a ofrecer otra cosa que tragos largos acompañando la bulla de las marchas prusianas, era sin embargo un hombre mejor avisado y, sin duda, una inteligencia mucho mejor organizada que la de Barrientos, que no valía plata. No en balde, según recuerda el clásico del golpe de estado, el político francés decía que no le gustaban las "bayonetas inteligentes". Así como *El Diario* recordaría urgentemente el liberalismo del tata, Sanjinés a la hora de su desventura general, privado a la vez de tierras y de uniforme, trajo a mientes el recuerdo de sus días en West Point. Un gamonal en busca de trabajo lo encontró —y también un destino— en la embajada norteamericana, para la que resultó un hombre invalorable.

con una especie de poderosa falta de escrúpulos frente a todo lo que sucediera. Sólo el grado de destrucción moral y de sistemática abolición de la memoria histórica en el ejército, sumadas a la mediatización del campesinado, la corrupción de la pequeña burguesía (que era la forma que tomó la acumulación capitalista) y la ruptura con la clase obrera, podían hacer posible la aparición de un tipo de personaje inferior como éste. Pero aquí también se ve cómo, en la historia, el trato con la grandeza —lo habían estado, con la Revolución— no inmuniza a los sujetos respecto a la acción posible de los individuos elementales. Fueron los servicios de inteligencia norteamericanos los que montaron las campañas políticas de Barrientos, primero como vicepresidente de Paz Estenssoro, después como jefe del golpe que derribó al MNR, luego como copresidente junto a Ovando, finalmente como dictador de Bolivia. Les costó poquísimo trabajo, en verdad, organizar manifestaciones con el lumpen de La Paz o utilizar el Plan de Acción Cívica para ir comprando uno a uno a los dirigentes campesinos, que ya estaban, por lo demás, comprados por quien quiera.

XXIX. MISERIA CAMPESINA

En todo caso, el régimen de Barrientos se fundó en lo que se bautizó como "pacto militar-campesino", es decir, entre el sector menos politizado del movimiento democrático y el sector de la burocracia estatal más penetrado por el imperialismo. Demuestra ello sin dudas hasta qué punto los campesinos se habían convertido en el núcleo conservador del país, en su calidad de productores independientes. Es cierto que Barrientos tuvo que dar un golpe de mano dentro del propio ejército para imponerse y que tuvo que sorprender, complotando, a la propia corriente ovandista, que contenía otras tradiciones. En todo caso, por la vía de la reforma agraria, veinte años después, cada sayaña se convirtió en una suerte de fortaleza donde se defendía la revolución tal como era, es decir, como revolución burguesa y no se puede negar que estos hombres defendían, de esa manera, lo principal de lo que había ocurrido, que consistía en que, lo que tenía que ocurrir debía hacerlo por primera vez con ellos dentro de la historia.

Venía a practicarse lo que había sucedido en tantas partes del mundo antes: la constitución de un vasto sector pequeñoburgués en el campo, es decir, de un sector de productores independientes y concurrentes al mercado resulta favorable al capitalismo. Pues el modo de producción que componen no es viable por sí mismo, sin embargo, proporcionan un sector industrial de reserva autosostenido, base social para un proyecto que no es el suyo y también, por último, lo que era fundamental entonces, estabilidad política. Pero eso no puede durar sino lo que la propia propiedad independiente; nadie puede evitar, en efecto, que, en su seno, se produzca un proceso de acumulación y de diferenciación de clases. La disolución de la propiedad independiente es lo que debe dar lugar a la alianza con los obreros y entonces el del campesinado se convierte otra vez en un papel revolucionario, porque aquí hablamos ya del explotado asalariado de la tierra, etc. Pero lo que vemos ahora, en el momento de Barrientos, es la miseria del ex-

plotado Es el explotado el que es la base del poder de los explotadores; la burguesía jamás habría podido realizar su acumulación en condiciones de paz política si no existía aquel amplio sector de los pequeños productores que, aunque explotados por la vía del mercado, sin embargo se sentían contentos con lo que tenían. Esta casta, la de la clase dominante resurrecta en su forma burguesa, que los había maldecido mil veces, que los maldecía ahora con los ojos y con las manos, tenía que prestarse no obstante —a falta de vitalidades propias— un hombre nacido de la resaca de la vida del pueblo, como Barrientos, para personificar su nuevo poder formado en lucha contra los obreros y se veía obligada a adular a los mismos que aborrecía con su ser entero. La composición de la psicología de Barrientos, que era sin duda la de un rencor general contra la vida, Henderson, presionando para el ingreso de los militares a los distritos mineros, Barrientos, el elegido de Le May, vistiendo uniforme de paratrooper para la "expedición" contra los mineros, todo, en fin, está hablando por sí mismo de quién es la nación en esta hora.

XXX. LA CORRUPCIÓN CONSIDERADA COMO MEDIACIÓN ESTATAL

En su momento, el imperialismo norteamericano había tenido —con Paz Estenssoro, con Siles Zuazo— que trabajar con el nacionalismo en su fase claudicante. Pero ahora tenía a un agente propio en el poder. Pues bien, con el fundamento dado por el pacto militar-campesino cuya *conditio sine qua non* era el arrasamiento del movimiento obrero, el imperialismo realiza, mediante Barrientos, su plan, que consistía en la ocupación de todos los sectores estratégicos de la economía y en acelerar, ya sin obstáculo alguno, la acumulación burguesa en los sectores no centrales, en especial, en el área de Santa Cruz y la minería mediana. Sin embargo, esto mismo va acompañado de ciertos cambios cualitativos en el manejo del estado. Al mismo tiempo que se intenta, con las matanzas, la disolución política de la clase obrera (hecho posible, por el momento, porque había quedado aislada, a causa de la conformidad campesina y porque la pequeña burguesía urbana se había hecho conservadora), Barrientos implica el desplazamiento de los sectores que podemos llamar estatalistas tanto de la burocracia civil como de la militar. Al principio, se podía decir que, con Barrientos, simplemente el aparato estatal pasaba de manos de la burocracia civil (el MNR) a la militar y eso es, en efecto, lo que representó la difusa fase del cogobierno Ovando-Barrientos. Pero donde primero penetró la ideología del imperialismo y su sistema de seguridad fue en el ejército. Por eso, aunque en las apariencias ambos personajes contenían lo mismo, con todo, el tiempo iba a dar a cada uno un diferente perfil. Mientras Barrientos vive y muere como un puro agente de penetración norteamericana y jamás hace algo que contradiga a los planes norteamericanos en el país, Ovando compone ya la manera de lo que Hegel llamaba una conciencia desdichada. Vamos a ver en su momento por qué. En todo caso, parece evidente que el proyecto norteamericano para Bolivia consistía en suprimir sus focos de independencia clasista o democracia política, como los mineros y la izquierda como tal, y

construir una dictadura a la manera de las de Trujillo, Somoza o Stroessner. Barrientos, en efecto, comprometió, en gran escala al ejército y sus aláteres en actos de corrrupción en lo que no podía interpretarse sino como el uso consciente de la corrupción constituida en una forma de mediación estatal. Bien puede uno preguntarse cuándo es eficaz la corrupción y cuándo no lo es. En principio, se diría que la corrupción es eficaz en la medida en que no contraría la tendencia estructural del proceso histórico sino que la completa. Es como la demagogia o como la misma represión; son válidas en la medida en que no violan las leyes tendenciales de la historia. Esto es lo que puede explicar por qué la tortura, por ejemplo, puede tener ciertos éxitos por lo menos temporales en algunos países del continente y no los tuvo en Vietnam o Angola. Es decir, que lo que importa en último término es el cuadro o contorno social de la corrupción, de la demagogia o de la tortura. Los norteamericanos, empero, en lo que es una verdadera concepción estatal, suelen dar un carácter de universalidad relativa a la cuestión del método (represivo o ideológico) y es lo que intentaron hacer también en Bolivia. Su razonamiento era sencillo: es un pequeño y atrasado país en el que nunca ha existido nadie capaz de utilizar con eficiencia la función estatal. Esto es resultado del atraso y de la estructura, que conduce sólo a profundidades que no interesan; se debe trabajar con la funcionalidad de las cosas y no con su causalidad estructural. Es un esquema que tratarán de repetir con Bánzer. El aparato de control e inteligencia se modernizó, en efecto, y pasó a manos de agentes directos de los organismos norteamericanos, agentes bien entrenados, no importa si bolivianos o no. Por medio de Barrientos, agente él mismo, se tendió la celada a los altos oficiales y también à todos cuantos tuvieran alguna significación de la corrupción, que aquí ya no funcionaba como una mera jarana de país subdesrrollado. La gravedad de los actos de corrupción es lo que condujo a la serie de asesinatos de encubrimiento que se prosiguieron en tiempo de Ovando hasta acorralarlo, como recordando un compromiso de poder que sólo hubiera podido ser disuelto por la convocatoria a las masas, que Ovando no estaba interesado en realizar. En esas condiciones, Barrientos estaba habilitado para dar su propio golpe de mano a fin de concentrar el poder en torno suyo y, por eso, hacia 1966 digamos, el país parecía estar en sus manos. Es la misma época en la que se prepara la guerrilla de Ñancahuasu.

XXXI. ÑANCAHUASU

Las incidencias mismas de este episodio son demasiado conocidas para que valga la pena repetirlas acá. Si el movimiento obrero, no importa si lechinista todavía o no, último baluarte de las conquistas de 1952, había sido arrasado con las matanzas de 1965; si el partido populista (el MNR) se veía condenado a la dispersión que era natural luego del derroche que había hecho de su poder; si el campesinado se mostraba receptivo a la mediación reaccionaria que hacía sobre él Barrientos; por consiguiente, parecía lógico intentar romper por la fuerza un encierro que se había establecido por la fuerza. Se podía pensar que había lle-

gado el momento de sintetizar la corriente revolucionaria continental, generada por la Revolución cubana, y la tradición revolucionaria local, factores que, a primera vista por lo menos, debían ser coincidentes. A pesar del tiempo trascurrido desde entonces no se conoce cuál era la visión de las cosas que tenía el movimiento guerrillero ni cuál era la estrategia que se fijaba. En principio, como se ha dicho, se trataba de un proyecto continental pero esto mismo no puede haber sido pensado en términos tan simples que implicarían ya la omisión del proceso de intensa diferenciación que habían vivido los países, su ritmo desigual. Es mucho más factible suponer que se partía de la idea de que el proceso revolucionario estaba subjetivamente intacto en las masas aunque traicionado en grueso en su fruto político desde el poder. Eso significaba que, si el MNR, movimiento inorgánico y difuso, había podido enfrentar con éxito al ejército —en la guerra civil de 1949, en la insurrección de 1952— no había razón alguna para que no pudiera hacerlo, con muchas más posibilidades, una guerrilla, superior al MNR en lo militar y en lo ideológico.

Lenin gustaba recordar un aforismo de Napoleón; aquel que dice: "On s'engage et puis on voit", sin duda, para recordar que la táctica es un arte, en cuanto es una síntesis que no admite comprobación ex ante. Pero lo hacía después de haber escrito *El desarrollo del capitalismo en Rusia,* con un partido que era la efectiva vanguardia de la clase obrera y que tenía un programa no sólo para su propia clase sino para todas las demás.

La definición del objetivo militar de la guerrilla queda siempre borrosa. Si nos atenemos, por ejemplo, al testimonio de Debray, quien, después de todo, estuvo allá, no avanzamos demasiado. "*Che* —escribe— no pensaba en Bolivia sino como una plataforma de partida para el Perú"; "La estrategia del Che no tenía a Bolivia como blanco. Ni siquiera como objetivo primero"; "no tenía como objetivo inmediato la toma del poder, sino la construcción previa de un poder popular materializado por su instrumento de acción, una fuerza militar autónoma y móvil"; "el foco boliviano funcionaría entonces como un centro de adiestramiento militar y de coordinación política de las diversas organizaciones revolucionarias nacionales de América Latina"; "trasformar ulteriormente a Bolivia en una vasta base de retaguardia"; "La proximidad (o la apariencia geográfica de proximidad) de la frontera argentina era, es cierto, un atractivo poderoso para el Che, ventaja que las otras zonas consideradas no ofrecían"; por el otro lado, "Bolivia es un país donde se dan favorables condiciones objetivas y subjetivas, el único país de América del Sur donde la revolución socialista está a la orden del día".[23]

La suma de estas aserciones es incoherente. Si la estrategia no contempla a Bolivia ni siquiera "como objeto primero" no se sabe qué se hacía allá; es obvio que es el país peor colocado para servir de retaguardia a nadie y, si se pensaba en lo dicho por Debray, se habría tratado del campo de adiestramiento más peligroso del mundo. Por otra parte, ni el Perú, ni la Argentina estaban tan cerca como para llegar a ellos sin vencer a una geografía brutal y al ejército entero

[23] Debray, *La guerrilla del Che,* México, Siglo XXI, 1975, pp. 38, 69-70, 75, 82, 84 y 39. Un libro sin duda más útil para conocer los recovecos de la cabeza de Debray que para saber de la guerrilla del Che.

ni, por último, se puede entender por qué no había interés en tomar el poder puesto que todas las condiciones objetivas y subjetivas estaban dadas para la revolución socialista. Esto es absurdo. El análisis del país como tal, del estado construido en 1952, de las clases sociales en su momento específico y del propio aparato represivo era sin duda falso desde el principio, sea que nos atengamos a lo que dice Debray o a la misma práctica política de la guerrilla. Bolivia, desde luego, no tenía condiciones objetivas ni subjetivas para encarar en ese momento la revolución socialista; todo lo contrario: vivía las consecuencias de su revolución burguesa. En lo que es aparente, la guerrilla esperaba un apoyo espontáneo de las masas, sea por las tradiciones espontaneístas de las masas bolivianas o porque, en un acto de supresión que es casi psicológico, pensaba que la defección del MNR implicaba a la vez que la revolución democrático-burguesa no había existido jamás. Suponer, por otra parte, que el estado boliviano era en lo objetivo lo que Barrientos era en lo subjetivo era una locura. En los hechos, la clase obrera (aunque llegó a dar su apoyo relativo a la guerrilla, como acto de lucha contra la dictadura) pugnaba por salir del sindicalismo hacia el partido obrero y del espontaneísmo hacia la lucha organizada de masas; el campesinado no sólo era una clase tranquila, es decir, aquella en la que se reunían sus aspiraciones y sus conquistas, sino que era también, a su modo, una clase organizada, aunque su organización la colocara en conexión directa con el estado y a sus dirigentes como funcionarios o mediadores, hecho posible sólo por su conformidad esencial; el rechazo del estatus político generado por el 52 por parte de la pequeña burguesía, por último, no sólo no era un antecedente de la guerrilla sino que iba a ser sólo su consecuencia posterior y sólo en ciertos sectores. El ejército, de otro lado, no era el ejército de la oligarquía; era un ejército modernizado en su cualidad y hasta en su eficiencia, en tanto que el anterior, el que había sido vencido por el MNR, lo fue sólo después de la destrucción ideológica del estado al que correspondía. Esto es lo que explica por qué las deserciones son tan ocasionales, por qué funciona en general con tanto éxito la línea de su autoridad, ahora lo mismo que en la batalla del 21 de agosto de 1971.

Con todo, la historia posterior ha demostrado que los factores pudieron no haber sido tan negativos en tanto cuanto la guerrilla hubiese logrado sobrevivir. Si se relaciona la historia de Ñancahuasu, por ejemplo, con la crisis de 1971 se advierte el papel de la guerrilla en cuanto a la elaboración subjetiva de esa crisis y también en su rebote objetivo, es decir, logrando aspectos que no había pretendido. Si se conviene, por lo demás (aunque esto es objeto de otra discusión) en que el propio estado de 1952 tiende a una crisis estructural, es indudable que el papel de la guerrilla pudo haber sido mucho mayor. Los sectores progresistas del ejército, por ejemplo, que después salieron a la luz con los gobiernos de Ovando y Torres estaban allá, al menos en potencia; la pequeña burguesía demostró en lo posterior su tendencia a la radicalización, aunque una radicalización deformada por la propia guerrilla, absolutizada por ellos como método; la clase obrera tuvo un despertar poderoso que se tradujo en la Asamblea Popular, en 1971. Pero la guerrilla, sin una base social previamente constituida, con la omisión de todos los principios marxistas sobre la clase y el partido, sin canales de comunicación con la población real, es decir, canales que fueran eficientes para

la política, tuvo que lanzarse de manera precoz a una ofensiva que se convirtió de inmediato en una desesperada defensiva sin margen de repliegue. Los mismos que quisieron construir una retaguardia continental, no disponían aquí de la retaguardia más elemental. Auténticos héroes de la lucha social, su sacrificio, sin duda lleno de grandeza, abrió las puertas al sujeto verdadero de la revolución, que es la clase obrera; en este sentido, puede decirse que la experiencia pertenece a ese tipo de fracasos tácticos que, sin embargo, son decisivos para habilitar la construcción de una estrategia correcta de la clase.

XXXII. EL SISTEMA DE MAYO

Aparecía entonces Barrientos como un vencedor indiscutible. El imperialismo norteamericano, en la prosecución de su plan, intentó construir una leyenda en torno a su figura. La revista *Time* lo llamó el Steve Canyon de los Andes y Barrientos, ya en un tren de euforia total, bautizó al helicóptero que le regaló la Gulf con el nombre del caballo de Melgarejo, el tirano que asesinó a Belzu;[24] no contento con presentar a una de sus esposas legales en La Paz y a otra en Cochabamba, acabó por casarse con una tercera. Son las propias investigaciones del Senado norteamericano, las que han demostrado el papel de Barrientos en esta época, en cuanto a las donaciones de las empresas norteamericanas.

La destrucción del proyecto de Barrientos empezó, empero, con la discusión acerca de las materias primas, en una táctica que fue propuesta a la izquierda por Sergio Almaraz, que había sido fundador del PCB y después militante de la izquierda del MNR. El debate se localizó en torno a la cuestión del gas. Barrientos, tras los sobornos de la Gulf, había reinterpretado el Código del Petróleo aprobado por el MNR en sentido de que también comprendía al gas, aparte de los hidrocarburos líquidos. A partir del gas, empero, se controvirtió todo aquello que Almaraz llamó el "sistema de mayo" o sea, el conjunto de entregas de los recursos naturales del país y escribió su magnífico libro, sólo impreso después de su muerte, *Réquiem para una república.* Esto penetró profundamente en el ejército, que había quedado desconcertado con su propio triunfo sobre las guerrillas y que no podía sino vivir con sufrimiento la hostilidad colectiva consiguiente a las matanzas de mineros y guerrilleros. La figura central de esta recomposición de fuerzas fue el general Alfredo Ovando.

Ovando mismo estaba amenazado por la expansión de la figura de Barrientos, tan premeditada por el imperialismo. Era sin duda un jefe mucho más natural de los oficiales y había logrado combinar un cierto institucionalismo prerrevolucionario con su primacía dentro del nuevo ejército. Barrientos organizó grupos paramilitares (que se reproducirían después en el continente) y preparó un San Bartolomé antiizquierdista. Con el pretexto de un atentado contra él, se aprestaba al asesinato de unos 300 dirigentes populares, que debía llevarse a cabo el 1º de mayo de 1969. Congruente era ello, sin duda, con el plan de la construcción de la dictadura de Barrientos. Con todo, existiera o no el proyecto (hay pruebas de que

[24] El mayor caudillo popular del siglo XIX boliviano.

existió), el régimen terminó de modo abrupto —por la caída de su helicóptero— con la muerte de Barrientos, unos días antes de aquella fecha. La discusión acerca de si se trató de un complot o de un accidente es interminable. Resulta extraño que no se hiciera autopsia del cadáver ni que los jueces levantaran en el sitio las circunstancias del accidente presunto. Pero es evidente que ello coincidió con la concentración del poder en manos de Barrientos en su grado más alto y que la macabra lista aquella empezaba con los oficiales a los que consideraba sus rivales reales o potenciales, Ovando entre otros.

XXXIII. OVANDO, EL BONAPARTISTA

Era Ovando un militar inteligente, débil y astuto. Su historia misma es contradictoria: participó en lo que era una verdadera conspiración para la reorganización del ejército pero, al mismo tiempo, fue la cabeza del sector militar interior al poder del MNR; fue parte de la represión antiobrera y antiguerrillera del tiempo de Barrientos, incluso de aquel acto atroz que fue la masacre de San Juan y, sin duda, aceptó o fue parte de la corrupción como sistema de estado, pero, junto con todo ello, hizo una conspiración nacionalista. El golpe de estado que llevó a cabo con la complicidad de un sector de intelectuales de la pequeña burguesía nacionalista fue un ejemplo de la certeza con que Ovando se movía dentro de la nueva situación. El secreto y la manera expeditiva con que llevó a cabo la nacionalización de la Gulf se parece a la manera en que Nasser condujo la nacionalización del Canal de Suez y muestra el temperamento y raciocinio de un buen militar. Ovando burló a los norteamericanos a las mismas horas en que ellos habían penetrado hasta el último intersticio del país. Como todo, Ovando pensaba que la nacionalización de la Gulf, que sin duda contó con el respaldo unánime del país, le daba ya la base política para la constitución de un régimen de corte bonapartista que, bajo su mando, contuviera una alianza entre los oficiales e intelectuales racionalistas sin admitir la autonomía de las masas. Era una verdadera reivindicación de la fase culminante del poder del MNR y es lo que explica el que se apresara a Lechín casi al mismo tiempo que se nacionalizaba la Gulf. La clase obrera empero no pidió permiso a Ovando para imponer su legalidad y, por el contrario, lo obligó a optar entre reprimirla o aceptarla. Ovando, que jamás desmontó el aparato barrientista ni la presencia norteamericana en el control de la inteligencia del país, dejó hacer a las masas; pero los sectores reaccionarios dentro del propio ejército lo fueron acorralando, en gran parte porque el pasado de Ovando tenía demasiado que ver con ellos y ellos sabían demasiado sobre Ovando como para que aquél no los temiera. Es por eso que su gobierno asume un carácter tan contradictorio, a la vez de actos antimperialistas como la nacionalización del petróleo, de apertura política y de socapamiento de una larga serie de asesinatos vinculados a la historia de la corrupción en tiempo de Barrientos, así como de una matanza premeditada de los guerrilleros que habían iniciado acciones en la región de Teoponte.

Estas presiones se concretaron en la conspiración que intentó poner en el poder

al general Miranda, al mando de un triunvirato de posiciones ultrarreaccionarias. Pero el conato mismo demostró a dónde habían llegado las cosas en cuanto a la acumulación de conciencia en el seno de la clase obrera. Ovando se asiló a secas en la embajada argentina, en lo que se configuraba casi como un acto la complicidad con el golpe. Los obreros, empero, convocaron a la huelga general y Juan José Torres, el principal de los oficiales progresistas, se presentó en la base aérea de El Alto desde donde anunció su decisión de resistir a Miranda. La combinación entre ambos factores resultó decisiva y Torres devino presidente de Bolivia. Llamó a los obreros a participar en el gabinete en la misma forma en que lo habían hecho en tiempo del MNR, es decir, con parte de los ministros. La clase obrera, empero, al mismo tiempo que hizo posible el triunfo de la fracción progresista del ejército, prefirió organizarse con autonomía en el llamado Comando Político de la Clase Obrera, que poco después se convirtió en la Asamblea Popular, bajo su hegemonía. Cualquiera que fuera el grado de coincidencias ocasionales con los sectores democráticos del estado burgués, la clase obrera era ahora consciente de que su deber era organizar su propia autonomía de clase y de que la única democracia verdadera en la nueva situación debía consistir en darle el derecho de organizar sus propios órganos de poder. La capacidad de posibilitar el triunfo de un contragolpe sin participar en el golpismo, es decir, de asumir el modo local del cambio político y a la vez de desarrollar sus propias formas de lucha, pero ahora mucho más allá de todo modelo espontaneísta, estaba demostrando una fase superior en la formación del proletariado. Es en esas condiciones que se llegó a la crisis estatal de 1971.

XXXIV. BIBLIOGRAFÍA

Almaraz Paz, Sergio, *El poder y la caída; el estaño en la historia de Bolivia*. Cochabamba, Ed. Los Amigos del libro, 1967.

———. *Petróleo en Bolivia*, La Paz, Ed. Juventud, 1958.

———, *Requiem para una República*, La Paz, Bolivia, Ed. UMSA, 1969.

Antezana, Luis, *Historia de los sindicatos campesinos en Bolivia, 1936-1960*, La Paz, mimeo., 1973.

Ávila, Federico, *El problema de la unidad nacional, del caudillismo bárbaro a la restauración nacionalista*, La Paz, Ed. Universo, 1939.

———, *El drama de la sangre*, La Paz, Impresora Artística, 1944.

Ayala, Alfredo, *Historia de Bolivia*, La Paz, Ed. Gisbert, 1969.

Ayala Mercado, Ernesto, *Defensa de la revolución de abril*, La Paz, Ediciones Nueva Era, 1961.

———, *¿Qué es la revolución boliviana?*, La Paz, Ed. Burillo, 1956.

Barcelli, Agustín, *Medio siglo de luchas sindicales en Bolivia, 1905-1955*, La Paz, Ed. del Estado, 1957.

Bedregal, Guillermo, *La revolución boliviana. Sus realidades y perspectivas dentro del ciclo de liberación de los pueblos latinoamericanos*, La Paz, Dirección General de Informaciones de la Presidencia de la República, 1962.

———, *Los militares en Bolivia*, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1964.

———, *Monopolios contra países pobres. La crisis mundial del estaño*, México, Siglo XXI, 1967.
Burke, Melvis, *Estudios críticos sobre la economía boliviana*, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1973.
Camacho, José María, *Compendio de la historia de Bolivia*, La Paz, Lakermance Hermanos, Editorial, 1917.
Canelas, Amado, *Historia de una frustración: la nacionalización de las minas en Bolivia*, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1963.
———, *Radiografía de la alianza para el atraso*, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1963.
Céspedes, Augusto, *El dictador suicida. Cuarenta años de historia de Bolivia*, La Paz, Editorial Juventud, 1968.
———, *El presidente colgado. Historia boliviana*, Buenos Aires, Ed. Jorge Álvarez, 1966.
Cornejo, Alfredo, *et al.*, *Programas políticos*, Cochabamba, s/e, 1955.
Dandler, Jorge, *El sindicalismo campesino en Bolivia: cambios estructurales en Ucureña, 1935-1952*, México, Instituto Indigenista Interamericano, 1969.
Eguino Zaballa, Félix, *Sinopsis de la historia de Bolivia*, La Paz, edición privada del autor, s/f.
Fellman Velarde, José, *Historia de Bolivia*, Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro, 1970, 3 vols.
Finot, Enrique, *Nueva historia de Bolivia, ensayos de interpretación sociológica*, La Paz, Ed. Gibert, 1954.
García Antonio, "La reforma agraria y el desarrollo social de Bolivia", en *Trimestre Económico*, México, vol. xxxi, núm. 123, 1964.
———, *El sindicalismo en la experiencia boliviana de nacionalización y desarrollo*, Santiago de Chile, Ed. Jura, 1969.
Galeano, Eduardo, *Siete ensayos sobre Bolivia*, Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza, 1971.
Gisbert, T. y Meza, J. de, *Manual de historia de Bolivia*, La Paz, Ed. Gisbert, 1958.
Guzmán Galarza, Mario V., "La lucha por la liberación nacional en Bolivia. Ensayo de interpretación", *Cuadernos Americanos*, México, núm. 6, 1968.
Jackson Eder, Jorge, *Inflation and development in Latin America: A case history of inflation and stabilization in Bolivia*, Michigan, Michigan University Press, 1968.
Klein, Herbert S., *Parties and political change in Bolivia*, Estados Unidos, Cambridge University Press, 1969.
Lora, Guillermo, *Documentos políticos de Bolivia*, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1970.
———, *Historia del movimiento obrero boliviano*, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1967, 3 vols.
———, *La revolución boliviana*, La Paz, Ed. Difusión, 1963.
———, *De la Asamblea Popular al golpe del 21 de agosto*, Santiago de Chile, Ed. OMR, 1972.
Malloy, James, *The incompleted revolution*, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 1970.
Marín, Carlos, *Bolivia: una revolución traicionada*, La Paz, mimeo, 1972.
Mendoza, Jaime, *El ideal pacifista. Líneas adicionales al libro "La tragedia del Chaco"*, Sucre, Imprenta La Glorieta, 1933.
Ministerio de Planificación, "Estrategia socioeconómica del desarrollo nacional", en James Petras (compilador), *América Latina: economía y política*, Buenos Aires, Ed. Periferia, 1972.

Montenegro, Carlos, *Nacionalismo y coloniaje. Su expresión histórica en la prensa boliviana*, La Paz, Ediciones Autonomía, 1945.

———, *Proceso y sentencia contra la oligarquía*, Buenos Aires, mimeo., 1948.

Morales, José Agustín, *Los primeros cien años de la República boliviana*, La Paz, Editora Neglia & Edelman, 1925.

Navarro, Gustavo Adolfo, *La tragedia del Altiplano*, Buenos Aires, Ed. Claridad, 1925.

Pando Monje, Mario, *Los movimientistas en el poder: la revolución boliviana, sus grandezas y frustraciones*, La Paz, Ed. El Siglo, 1969.

Paz Estenssoro, Víctor, *Bolivia. El pensamiento económico latinoamericano*, México, FCE, 1945.

Peñaloza, Luis, *Historia del movimiento nacionalista revolucionario*, La Paz, Editorial Juventud, 1952.

———, *Historia económica de Bolivia*, La Paz, Ed. Fénix, 1954, 2 vols.

Querejazu, Roberto, *Masamaclay: historia política, diplomática y militar de la guerra del Chaco*, La Paz, Editorial Burillo, 1965.

Rolón Anaya, Mario, *Política y partidos en Bolivia*, La Paz, Editorial Juventud, 1966.

Ruiz González, Raúl, *Bolivia: el Prometeo de los Andes*, Buenos Aires, Editorial Platina, 1961.

Urquidi, Arturo, *El feudalismo en América y la reforma agraria en Bolivia*, Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro, 1966.

Vázquez Machicado, Humberto, *La leyenda negra boliviana, la calumnia de la borradura del mapa*, La Paz, Ed. UMSA, 1955.

———, *Manual de historia de Bolivia*, La Paz, Ed. Gisbert, 1958.

Vidaurre, Enrique, *Potosí, cuartel general de los guerrilleros de la Independencia*, La Paz, Ed. UMSA, 1953.

Whitelead, Lawrence, *The United States and Bolivia: a case of neocolonialism*, Londres, 1969.

Zavaleta Mercado, René, *Bolivia: el desarrollo de la conciencia nacional*, Montevideo, Ed. Estrategia, 1970.

———, "Por qué cayó Bolivia en manos del fascismo", *Revista Punto Final*, Santiago, 1970.

———, *La revolución boliviana y la cuestión del poder*, La Paz, Dirección General de Informaciones, 1961.

———, *El poder dual*, México, Siglo XXI, 1974.

BRASIL: NACIONALISMO, POPULISMO Y DICTADURA 50 AÑOS DE CRISIS SOCIAL

VANIA BAMBIRRA
THEOTONIO DOS SANTOS

I. NOTA PREVIA

Es difícil sintetizar los últimos cincuenta años de la historia de las luchas de clases en Brasil. Éste ha sido un período colmado de enfrentamientos cuya interpretación sin duda ha suscitado varias controversias. No es posible hacer aquí un análisis exhaustivo de los múltiples aspectos de la evolución de la sociedad brasileña. Nos limitaremos, por lo tanto, a destacar en grandes líneas solamente aquellos hechos que nos parecen cruciales para explicar las características básicas del capitalismo dependiente en nuestro país y de las vicisitudes del movimiento popular y revolucionario. Con ello desearíamos lograr una aproximación de las perspectivas que se abren y se proyectan hacia el destino del pueblo brasileño.

Después de un ligero análisis introductorio destinado a aclarar algunos de los antecedentes históricos que son claves para entender el sentido del desarrollo que define los grandes marcos en los cuales se configuran las principales clases sociales del presente siglo, trataremos de enfocar la etapa de las cinco décadas que nos corresponde analizar dividiéndola en dos grandes fases.

a] La primera, la fase del proceso revolucionario democrático-burgués, que alcanza su plenitud en los años treinta y que se extiende hasta el comienzo de la década de los cincuenta. Es el período aureo del desarrollo del nacionalismo populista, de la afirmación del poder hegemónico de la burguesía industrial, de la decadencia del viejo poder burgués-oligárquico, de la consolidación de la clase obrera, de la expansión de las clases medias y de la frustración y marginación política y económica del campesinado.

b] La segunda es la fase que empieza a gestarse desde la posguerra y que se caracteriza por un cambio de calidad en el funcionamiento de la estructura del sistema de dominación dependiente. La penetración masiva del capital extranjero, especialmente en la industria manufacturera, produce la desnacionalización de los principales medios de producción, profundiza la dependencia y frustra en definitiva cualquier aspiración hacia un desarrollo nacional independiente. Es la trágica culminación de la revolución burguesa en un país periférico. Es el final grotesco del nacionalismo populista frente a la rearticulación de un nuevo pacto de poder de la burguesía criolla con el imperialismo. El golpe militar de marzo-abril de 1964 fue el último golpe de gracia en el viejo esquema de dominación populista a partir del cual se ha tratado de consolidar en el país un régimen dictatorial, que no oculta sus características neofascistas, destinadas a mantener el capitalismo dependiente.

Durante el curso de estas dos grandes fases, trataremos de destacar cómo el movimiento obrero busca su afirmación à través de un tortuoso recorrido, plagado de dificultades que provienen de sus debilidades orgánicas y políticas. Y cómo emerge un movimiento popular más amplio, que incorpora difusos sectores urbanos pequeñoburgueses, ya como a estudiantes, profesionales, burócratas, subempleados, o como el campesino que despunta en la oleada de ascenso del movimiento de masas que recorre el país en los inicios de los años sesenta. En esta época crucial de la historia brasileña ocurren fenómenos de muy profundo significado social. No solo la burguesía alcanza la plenitud de su madurez como clase explotadora al completar su comprensión práctica de que su supervivencia estaba íntimamente ligada a la asociación estrecha con el imperialismo y a la adopción de un régimen de terror; sino los sectores populares empiezan a entender que es necesario superar las ilusiones del populismo burgués. Por entonces empieza un cuestionamiento generalizado del reformismo. Y sin duda, el mayor estímulo proviene del ejemplo fascinante de la Revolución cubana.

Esta etapa se caracterizó por la circunstancia de que mientras la burguesía era ya una clase madura y veterana en lo suyo, el movimiento popular y la clase obrera en especial recién empezaban por esta época a adquirir conciencia crítica de sus errores, de su papel y sobre todo de su tremenda fuerza. Los acontecimientos se precipitaron, la represión fue implacable y lo que era promesa pasó a ser un sueño. Sueño profundo en las más recónditas entrañas de este enorme país. De repente, hacía los años 1967-1968 el movimiento popular de nuevo despertó; ya había acumulado más experiencias, pero no todas las necesarias para empezar el viraje de la historia. Y, de nuevo, la misma implacable respuesta: represión y terror pero ahora combinado con la fanfarrona ostentación de un desarrollo que en síntesis puede ser definido así: excluyente y superexplotador. El pueblo brasileño no tuvo conocimiento en su vida de sufrimientos cotidianos, de los beneficios de ese desarrollo para los ricos.

Vino la depresión del capitalismo en el nivel internacional. En los años 1974 y 1975 todos los países capitalistas se vieron afectados de manera más o menos intensa por la crisis. La sociedad brasileña, permeable de punta a punta a los infortunios del capitalismo metropolitano, se vio harto afectada. Y el pueblo brasileño, marginal a los frutos de la época del desarrollo, durante la crisis vuelve a representar la amenaza que resurge, que reivindica su papel protagónico no sólo por detrás de los bastidores, sino en el centro del escenario.

Nosotros entendemos que los análisis de las sociedades sólo adquieren una importancia sustantiva si logran por lo menos indicar —y no sólo en función de nuestros deseos, sino en base a la investigación científica— las perspectivas que se vislumbran hacia el porvenir de los pueblos.

En la medida que sea posible, en el limitado ámbito de este ensayo, trataremos de orientarnos en este sentido, y buscaremos hacer al final del trabajo, breves referencias críticas respecto a algunos de los recientes planteamientos que se han efectuado en Brasil a propósito del "modelo brasileño" por parte de los teóricos burgueses.

Lamentablemente, debido a que este ensayo tiene limitaciones de espacio, no

será posible desarrollar un análisis de los puntos de vista de la oposición socialdemócrata, como tampoco del proceso de superación de la izquierda en la estrategia y la táctica. De la misma manera, muchos otros temas tendrán que ser tratados superficialmente y, desde luego, nos excusamos por ello ante nuestros lectores.

II. INTRODUCCIÓN

Una de las características más notorias del estado brasileño desde su formación en el siglo XIX ha sido su carácter autoritario. Durante el Imperio, forma de gobierno que se constituyó al ser lograda la independencia de Portugal, el poder moderador del emperador representaba una autoridad máxima que se superponía a la dominación oligárquica, no para aminorar sus efectos opresivos sobre la nueva nación que se gestaba, sino más bien para imponerse sobre cualquier eventual rebeldía liberalizante, contraria al capitalismo dependiente que se gestaba en el país en base al trabajo de los esclavos. La esclavitud sobrevivió más de medio siglo a la colonia y su abolición en 1888, por parte de la hija del emperador, correspondió más bien a los intereses que engendraba la nueva etapa del expansionismo inglés (necesidad de estimular la expansión de mercados para los productos manufacturados del Imperio británico), que a las veleidades libertarias de los oligarcas criollos, pese al hecho de que habiéndose establecido ya el monopolio de la tierra en manos de unos pocos terratenientes, hacíase más económico contratar asalariados, o explotar la mano de obra a través de una amplia gama de relaciones de producción semiserviles, que seguir manteniendo la fuerza de trabajo esclava.

La proclamación de la República en 1889, que correspondía a las nuevas aspiraciones modernizadoras y liberalizantes de las diversas facciones de la oligarquía, marca la primera intervención militar en el destino de la nación. Por la historia de los gobiernos de la joven República habrán de desfilar varios personajes militares.

La vocación opresora se manifestó temprano y sobrepasó los límites nacionales. Como un preludio de las tendencias expansionistas, Brasil integró la Triple Alianza junto a Uruguay y Argentina y se lanzó en una feroz guerra en contra de Paraguay, que culminó con el genocidio de cinco sextos de su población.

Las clases dominantes brasileñas, que sin duda detentan la hegemonía del poder político y económico hasta los finales de los años veinte, son las oligarquías que están vinculadas, directa o indirectamente, con el sector primario exportador y la posesión monopólica de la propiedad de la tierra. De allí proviene su paradójico eclecticismo en cuanto a sus concepciones ideológicas; son conservadoras en tanto beneficiarias del sistema agroexportador que tratan de preservar a la vez que instrumentalizan toda una concepción liberal y librecambista que obstaculiza el proteccionismo de la industria nacional. Son modernizantes, en la medida en que introducen en el sector agroexportador toda una serie de innovaciones tecnológicas para hacer más eficiente el sistema productivo y para permitir inten-

sificar el comercio con las metrópolis; estimulan la formación y expansión de un mercado libre de la fuerza de trabajo, condición para que florezcan las relaciones de producción típicamente capitalistas;[1] promueven un relativo e intenso proceso de modernización de nuevos servicios y locales públicos, y tratan de reproducir en la periferia el ambiente moderno que caracteriza la vida de las grandes ciudades de las metrópolis. Pero, toda esta modernización que de hecho promueve la burguesía agroexplotadora está intrínsecamente limitada por la propia estructura productiva que la acciona y la paraliza: la economía primario-exportadora.

La economía brasileña, en la medida en que se encuentra centrada en la producción para la exportación de productos agrícolas, particularmente el café, es capaz de asimilar, dentro de ciertos límites, una tecnología moderna (y los límites están dados por la abundancia de mano de obra barata), pero no tiene capacidad para producir esta tecnología. En ello reside la razón de fondo del porqué es la oligarquía agrario-exportadora una clase esencialmente conservadora pues sólo puede relacionarse con el mundo moderno, capitalista, desde la perspectiva del vendedor o del consumidor, jamás desde la del productor de los instrumentos científicos y tecnológicos del desarrollo. De allí proviene su necesidad de aferrarse al *statu quo,* de ponerse en una actitud reacia a los cambios verdaderamente modernizadores, de frustrar la emergencia de nuevos sectores productivos, de nuevas clases sociales. Sólo de esa manera puede mantener intacto e incuestionable su poder hegemónico.

Sin embargo, su conservadorismo es una vana ilusión. Pues es del propio seno del sistema oligárquico de donde empieza a gestarse un lento pero paulatino proceso de industrialización, y a configurarse las nuevas clases que pasarán a ser las protagonistas de los siguientes capítulos de la historia.

III. LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS CLASES SOCIALES

Ya a fines del siglo XIX se registran los primeros síntomas significativos de un proceso de industrialización. Varios artículos manufacturados de consumo popular (textiles, calzados, alimentos en tajos, etc.) son producidos por una incipiente industria nacional.

¿Qué factores han posibilitado el surgimiento y la expansión de este brote industrial? Sin duda el factor explicativo fundamental reside en la conformación y articulación de un mercado interno, producto de la generalización —más intensa en unas regiones que en otras— de las relaciones capitalistas de producción que, poco a poco, van obteniendo el predominio del sector clave de la economía, es decir, el cafetalero, base de la exportación.

La producción en alta escala del café, especialmente en la región de São Paulo, si bien coexiste con relaciones de producción precapitalistas (semiserviles) confi-

[1] Una de las originalidades del desarrollo del modo de producción capitalista en América Latina es el hecho de que sus relaciones de producción típicas se desenvuelven primero en el sector primario.

gura ya, en lo fundamental, un modo de producción capitalista típico, pues se articula en base a la separación entre los propietarios privados de los medios de producción, por una parte, y, por otra, de la oferta *libre* de la fuerza de trabajo.

La proliferación de las relaciones capitalistas típicas se explica en última instancia como resultante de un profundo proceso de modernización del sector primario-exportador (lo que también ocurre en varios otros países latinoamericanos),[2] consecuencia de la nueva etapa de expansión del capitalismo mundial, en especial en Inglaterra. Esta nueva etapa, que se ha dado en llamar segunda revolución industrial, y que se ha caracterizado por la producción mecánica de las máquinas de hacer máquinas, entraña efectos sustanciales en la reorganización del sistema productivo dependiente, que debe hacerse más eficiente para poder suprimir las necesidades crecientes de productos agrícolas y materias primas de las metrópolis. Éstas necesitan estimular en la periferia del sistema capitalista, la expansión de mercados aptos para consumir la producción en serie de sus artículos industriales. Como ya hemos mencionado, es en este contexto que se inserta la abolición de la esclavitud en Brasil.

Obviamente, la dinámica modernizadora del aparato productivo exportador extiende sus efectos hacia el conjunto de la sociedad dependiente, tendiendo a generalizar las consecuencias de la formación del mercado libre de trabajo. Así, "es el mismo proceso que genera la división internacional del trabajo, el que, a su vez, crea las condiciones para la expansión de los mercados nacionales y, por lo tanto engendra los elementos de superación de las economías fundamentalmente exportadoras".[3]

En Brasil, el fenómeno ocurre de manera muy típica: la expansión de la producción agrícola en alta escala destinada a la exportación amplía el monopolio de la tierra, tiende a restringir progresivamente las áreas de la economía de subsistencia, a proletarizar una parte significativa del campesinado,[4] y también a expulsar hacia los núcleos urbanos otros contingentes de campesinos, que allí se van a ofrecer como trabajadores a cambio de exiguos salarios. Se tiende a reproducir pues, en la periferia del sistema, si bien de manera caricaturesca, el proceso que caracterizó la expansión del capitalismo metropolitano y que fue descrito por Marx como la acumulación capitalista originaria. El capitalismo desarrollado proyecta así su imagen hacia el país dependiente, que trata de asimilarla a través de un espejo que la distorsiona burdamente.

La distorsión del modelo clásico de desarrollo capitalista proviene del hecho de que el proceso de acumulación de capitales se realiza en el exterior utilizando las divisas generadas por las exportaciones.

Ia industrialización surge como actividad complementaria de las necesidades de consumo engendradas por la expansión del sector primario que, por su parte, está volcado hacia la satisfacción de los requisitos expansionistas del nuevo auge industrialista metropolitano. Los mecanismos básicos del funcionamiento del ca-

[2] Véase a este respecto Vania Bambirra, *El capitalismo dependiente latinoamericano*, México, Siglo XXI, 1974, capítulo IV, pp. 32 *ss.*

[3] *Op. cit.*, p. 35.

[4] Aunque la cafeicultura absorbe también una fracción importante de la mano de obra de los inmigrantes europeos y de los esclavos libertos.

pitalismo en América Latina, desde su cuna, revelan su carácter intrínsecamente dependiente y subyugado a los interesès dominantes del capitalismo en las potencias más desarrolladas. Y revela también cómo esta dependencia sobrepasa los límites de las relaciones meramente comerciales, al enmarcar dentro de determinados parámetros las posibilidades y el carácter del desarrollo de las fuerzas productivas a un nivel nacional.

Sin embargo, en la medida en que se va articulando y expandiendo el mercado interno, la proliferación de la base industrial tiende a adquirir un dinamismo propio, especialmente en función de su aporte a la expansión de este mercado. En otras palabras, al emplear mano de obra asalariada para atender una demanda preexistente de productos manufacturados, la industria estimula a la vez la expansión de la demanda. La intensificación del proceso, en el curso de las primeras décadas del siglo, sin cuestionar la supervivencia del sector agrícola exportador, tiende a poner en el orden del día la necesidad de redefinir las prioridades del desarrollo en cuanto a metas, estímulos, protección estatal, en suma, control hegemónico del poder. En la medida en que se va afirmando, el desarrollo industrial reivindica ser el articulador central del proceso de acumulación capitalista. Un gran impulso en esta dirección ocurre durante el período de la guerra europea que se extiende de 1914 a 1918. La situación de conflictos bélicos crea condiciones favorables a la expansión de la industria, pues disminuye el flujo de productos manufacturados metropolitanos hacia Brasil a la vez que intensifica la demanda de materias primas y productos agrícolas. Esto genera una mayor demanda insatisfecha de artículos industriales, impulsa el proceso que se ha dado en llamar sustituciones de importaciones, esto es, el cambio de importación de bienes de consumo final por las compras de maquinarias y equipos para ampliar la base industrial del país. Tal situación se da en la misma época en varios países de Latinoamérica, como en México, Argentina, Chile y Uruguay y ya ha sido descrita de manera exhaustiva por historiadores, economistas y sociólogos. Sin embargo, por lo general los analistas explican el proceso de industrialización a partir de las condiciones favorables generadas por la guerra y la crisis económica de 1929 como si se hubieran de repente producido las condiciones para que funcionasen automáticamente estos mecanismos de sustitución de importaciones. No se trata aquí de desmerecer el impacto desarrollista de la industrialización sobre las sociedades dependientes y en particular sobre la brasileña; pero consideramos que es de importancia crucial para explicar en toda su amplitud y rigor las condiciones que permitieron la industrialización no sólo en Brasil sino en los otros países mencionados, no perder de vista los factores esenciales que la han hecho posible: a] la estructuración de un mercado interno y b] la organización de un sistema productivo industrial en base a relaciones capitalistas. Ambos empiezan a gestarse, como caras de la misma moneda, ya a fines del siglo XIX; prosiguen su expansión durante los primeros años del siglo XX y son la condición *sine qua non* para que se pueda aprovechar la favorable coyuntura generada por el conflicto bélico, en el sentido de impulsar el remplazo de exportaciones suntuarias por importaciones de máquinas y equipos industriales. Es muy importante tener presente estos requisitos básicos prexistentes al nuevo auge industrializador, pues sólo de esta manera es posible comprender por qué esta especial situación internacional

(y posteriormente otras, como la gran depresión del capitalismo mundial que empieza en 1929 y la guerra mundial de 1939-45) estimula la industrialización en algunos países latinoamericanos mientras los demás atraviesan un período de crisis y estancamiento, sin ninguna posibilidad de promover mecanismos sustitutivistas de importaciones y de crear una base industrial significativa, como ha sido el caso de los países centroamericanos, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, etc.

Son pues estos factores claves los que posibilitan que el eje del sistema de dominación dependiente se vaya reorientando en función del nuevo polo dinámico del sistema, vale decir, la industrialización. Es natural que en el proceso despunten nuevas clases sociales que aspiran a ocupar el principal escenario de la vida económica, política y social del país. Y surgen y van acumulando fuerzas una burguesía y un proletariado industriales. La joven y aún débil burguesía industrial brasileña se encuentra desde sus orígenes ante una aguda contradicción: por un lado necesita afirmar sus intereses particulares que son proteccionistas y reformistas a través del cuestionamiento del poder oligárquico vinculado a la propiedad de la tierra y al sistema exportador; pero, por otro, necesita de las divisas generadas por el mismo sector para seguir promoviendo la expansión industrial. Ahora bien, además de esta contradicción básica, la aproximación hacia un nivel más concreto de análisis, revela otra contradicción que la dilacera y limita sustancialmente sus particulares intereses de clase: la simbiosis existente entre los propietarios de tierras, los sectores agroexportadores y los empresarios industriales. Es cierto que muchos de éstos son inmigrantes europeos o sus hijos, o provienen originalmente de la categoría artesanal pero, sin duda, muchos encuentran su origen en la clase terrateniente, o entre las fracciones de clase vinculadas de una u otra manera al sectór exportador.

Estos complejos mecanismos de simbiosis de las fracciones de las clases dominantes brasileñas, desde los comienzos del proceso de industrialización, entregan los marcos para la comprensión de las limitaciones de la "revolución" democrático-burguesa que impulsará la burguesía industrial en su momento de auge. El auge coincidirá con el primer gobierno de Vargas.

También el proletariado brasileño tuvo desde sus orígenes que recorrer un penoso camino para disociar sus intereses de clase de las fracciones de la clase dominante (burguesía industrial sobre todo), que paralizaban el desarrollo de su conciencia de clase.

El proletariado industrial encuentra sus orígenes en dos grandes sectores sociales: por un lado, procede del campo. Es el campesino que fue desplazado hacia las ciudades, a raíz de la expansión y especialización del sector exportador quien, como mencionamos antes, liquidó amplias áreas de la economía doméstica de subsistencia. Por otro, proviene del auge de la inmigración originada principalmente de países europeos —particularmente de Italia— inmigración que fue especialmente intensa a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Siendo el origen del proletariado industrial campesino y artesanal, uno y otro moldearon en las tres primeras décadas del siglo una mentalidad paternalista, por una parte e individualista por la otra. Nada de extraño por lo tanto que el proletariado brasileño fuese una presa fácil de las ideas anarquistas primero y posteriormente de las populistas, que aunque se sucedieron en el tiempo (la decadencia del anarquismo

en Brasil coincide aproximadamente con el desarrollo del populismo en el medio obrero pasando por una corta mediación de una relativa preponderancia comunista entre 1924-1935), en verdad ambos encuentran en el origen de clase pequeñoburgués del proletariado brasileño el terreno abonado para su proliferación. De esa manera, en las primeras luchas de la clase obrera en Brasil, a principios del siglo xx, la ideología que la moviliza es la anarquista. El liderazgo sindical recién constituido [5] se inspira en el bakuninismo y en el proudhonismo, concibiendo un sindicalismo libre, que oriente el descontento de la clase hacia la destrucción del sistema de dominación política en general.

Desde el año 1917 hasta 1920 se registra el auge de las luchas obreras bajo la orientación anarquista. El impacto de la revolución bolchevique fue acogido con entusiasmo por los anarquistas en Brasil. La interpretaron, en un primer momento, como una revolución libertaria, sin comprender su profundo contenido ni las enseñanzas marxistas-leninistas. En el país esta época era de una aguda crisis política y económica, de baja en los niveles de expansión industrial que habían existido en los años de la guerra. Esto se reflejaba en el aumento vertiginoso del costo de la vida, junto a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la amenaza del desempleo.

En el año 1917 ocurre la gran huelga general en la ciudad de São Paulo que se extendió también hacia el interior de esta provincia así como hacia Río de Janeiro, llegando a presentar algunas manifestaciones insurreccionales. Se reivindicaba la jornada de ocho horas de trabajo diario y aumento salarial. La ciudad de São Paulo estuvo durante varios días controlada por los obreros. En este clima, los patrones aceptan conceder las reivindicaciones pero, una vez terminada la huelga, la acción implacable del aparato represivo del estado se hizo sentir inmediatamente, a través de la expulsión de los dirigentes extranjeros y del ase sinato de los nacionales.

El sindicalismo anarquista estaba convencido que podría derrumbar al estado opresor por medio de una huelga general revolucionaria. Ésta fue preparada para el año 1918 y empezó en Río de Janeiro y en Niterói, pero fracasó frente a una intensa represión. En el año 1919 vuelven a estallar nuevas huelgas en São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Niterói y Río, que tratan desesperadamente de derrumbar el estado brasileño y culminan en el desgaste del movimiento, aplastado por una cruel represión. En su auge, el anarquismo revela su impotencia, resultado de su incapacidad de elaborar una estrategia y táctica adecuadas a las condiciones objetivas, de constituir alianzas, de orientar efectivamente a la clase obrera para acumular fuerzas, para lograr conquistas parciales pero sig-

[5] En 1906, se realiza en Río de Janeiro el I Congreso Obrero Brasileño, que reúne 43 delegados representantes de 25 organizaciones sindicales, anarquistas, y de 4 diarios y se funda la Confederación Obrera Brasileña (COB). En 1908 la COB dirigió la campaña contra la guerra y la conscripción militar obligatoria, promoviendo grandes manifestaciones de protesta. En 1913 se realizó el II Congreso de la COB y se empezó la lucha en contra de la ley Adolpho Gardo que facultaba la expulsión de los obreros extranjeros bajo el pretexto de que eran criminales comunes, con el objeto de descabezar el movimiento. En esta época "el Congreso aconsejó al proletariado de Brasil en caso de guerra externa a declararse en huelga general revolucionaria". Es interesante tener presente que en esta ocasión el proletariado brasileño alcanzaba la cifra de 300 000 personas.

nificativas, y se pone al desnudo su incapacidad teórica, política y orgánica. Así se generan las condiciones para su superación.

Las clases dominantes, asustadas por el impacto del movimiento obrero, utilizan no sólo la represión sino que tratan de hacer algunas concesiones que se expresan en las primeras leyes obreras: 1921, casas populares; 1923, caja de jubilación y pensión para los ferroviarios, y 1925, ley que reglamentaba los feriados.

Durante los años veinte el movimiento obrero atraviesa un período de autocrítica de esta primera etapa, sin ninguna duda grandiosa y heroica aunque utópica en sus objetivos.[6] La manifestación más trascendental de esta autocrítica fue la organización de los primeros grupos comunistas constituidos por miembros de los sindicatos obreros en el año 1921 y la constitución en febrero de 1922 del Partido Comunista de Brasil.

El PCB surge como una escisión del anarquismo y con una base fundamentalmente proletaria. Por esa época la cifra del proletariado brasileño ascendía a cerca de un millón. En julio de 1922 el partido fue ilegalizado, condición en la cual pasará casi toda su existencia, con la excepción de un corto período durante los años cuarenta. La historia del PCB, a la cual nos referiremos de alguna manera en las páginas siguientes, estuvo plagada de equivocaciones de carácter estratégico y táctico que los propios dirigentes han reconocido en varias oportunidades, pero siempre fue sobre todo llena de dificultades motivadas por la necesidad de luchar desde las adversas condiciones de la clandestinidad, teniendo que enfrentarse a una dura represión que siempre ha caracterizado el funcionamiento del aparato estatal brasileño. El PCB durante los años veinte fue un partido compuesto esencialmente por elementos provenientes de la clase obrera; en los años treinta el partido se abrió a la pequeña burguesía que lo hegemonizó y pasó a asumir su control orgánico y a influir en su línea política. El representante más destacado de la hegemonía de las clases medias en el interior del partido fue sin duda Luis Carlos Prestes, quien se trasformó en su líder indiscutido aunque sólo hasta los años cuarenta pasó a ocupar el puesto de secretario general. Nos referiremos posteriormente a la dirección prestista. Es importante sin embargo destacar que el predominio de la pequeña burguesía sobre el PCB no fue un fenómeno aleatorio. Correspondió a un momento histórico crucial, no sólo para la historia del partido, sino que de manera muy notable para la vida de la sociedad brasileña como tal. Ha sido llamado por diversos analistas el período de la emergencia de las clases medias.[7]

Las clases medias se venían formando paulatinamente, vinculadas a actividades complementarias a la expansión del sector agroexportador, que se concentraban en los núcleos urbanos. Entre estas actividades destacan las burocrático-administrativas, los servicios en general, las organizaciones de defensa —militares y ci-

[6] Un análisis de este período se encuentra en Everardo Díaz, *As lutas sociais no Brasil*, Edicao L. B., São Paulo, 1962.

[7] La literatura política y sociológica ha utilizado muchas veces de manera indiscriminada el término pequeña burguesía para designar tanto a los pequeños propietarios de sus medios de producción como a profesionales, estudiantes, empleados en servicios, burócratas, etc... Estos últimos sectores son asalariados que pueden ser designados tanto por pequeña burguesía asalariada como por clase media.

viles—, las profesionales, técnicas y culturales. En la medida en que se va expandiendo la industrialización se amplía el campo de actividades de estas clases, y en la medida que la industria tiende a afirmarse como el eje principal del sistema productivo con miras hacia el control del sistema de dominación en su conjunto, era natural que las clases medias tendieran hacia la identificación de sus perspectivas con las del proyecto modernizante e industrialista.

No es necesario repetir en detalles aquí el análisis, ya por demás conocido, de las características específicas de estas clases, de la ausencia de un proyecto propio coherente para la sociedad en su conjunto. Nos limitaremos a señalar que por su propia condición de intermediarias en el proceso productivo, las clases medias por lo general tienden a adoptar la perspectiva de las clases dominantes o de aquellas clases que aspiran a la dominación ostentando un proyecto que las beneficia mayormente. Por supuesto hay sectores de las clases medias que adoptan la perspectiva de clase distinta por idealismo o por una postura científica. Pero esto ocurre en mayor escala en situaciones prerrevolucionarias o revolucionarias, cuando el poder existente se encuentra profundamente cuestionado. En Brasil, importantes sectores de las clases medias evolucionaron desde un proyecto oligárquico-liberal que, como hemos destacado, era esencialmente conservador, hacia el proyecto democrático-burgués que era sobre todo proteccionista, nacionalista y revolucionario, dentro de los límites bien precisos en los cuales era posible que ocurrieran trasformaciones en la estructura productiva y en el sistema político del país dependiente. Naturalmente que la opción por este último proyecto satisfacía de manera mucho más amplia las reivindicaciones específicas de estas clases pues ellas serían beneficiadas en la medida en que se ampliasen las posibilidades de nuevos empleos, de mayor participación política y social, condiciones que sólo podrían ser cumplidas por una reorganización cualitativa del sistema de poder con miras a estimular y proteger el desarrollo económico. Son estas razones de fondo las que explican la precipitación en el escenario político de líderes provenientes de las clases medias que sostienen la bandera de las trasformaciones democrático-burguesas.

IV. DE LA REVOLUCIÓN DE 1930 AL ALZAMIENTO DE 1935

El impulso industrializador de los años de la guerra ponía en el orden del día la necesidad de impulsarlo más allá de donde había llegado, y las arcaicas instituciones políticas, jurídicas, culturales eran un freno para su desarrollo. Había pues que cuestionarlas en sus raíces. El movimiento obrero a quien cabría la tarea histórica de emprender esta labor estaba en una etapa de claro descenso, que correspondía al desgaste de la orientación anarquista. La orientación marxista recién empezaba a esbozarse a través de la formación del PCB, que no había logrado siquiera asimilar sus más rudimentarias enseñanzas [8] y cuya base social era muy reducida. Existía pues, en el escenario político del país, un amplio espacio para

[8] Es muy sintomático el hecho de que la Comintern rechazó la primera solicitud de ingreso del PCB por su insuficiencia teórica.

ser ocupado por el liderazgo de las clases medias quienes lo empezaron a llenar. Primero, a través de manifestaciones y levantamientos aislados, que luego fueron asumiendo la forma de una contestación más continua y articulada hasta culminar, en 1930, con la revolución.

Los líderes provenientes de las clases medias van creciendo y conquistando la adhesión popular, arrastrando bajo su conducción sectores de origen campesino y obrero. Desde el levantamiento del Fuerte de Copacabana en 1922, que fue una manifestación restringida y aislada de las masas, pasando por la revuelta de los oficiales en São Paulo, dirigida por el general Isidoro Díaz López, hasta la legendaria Columna Prestes, que se forma en 1924, adoptando el nombre de su líder el capitán Luis Carlos Prestes, y que recorrió el país durante dos años y medio, combatiendo las fuerzas represivas que los persiguieron sin lograr jamás inflingirle una derrota siquiera, se fue afirmando en el país un clima revolucionario que ponía en cuestión los aspectos más retrógrados de la dominación oligárquico-burguesa tradicional.

La oposición al régimen trata de institucionalizarse a través de la formación de la Alianza Liberal durante el gobierno de Arthur da Silva Bernardes, que se extiende del año 1922 a 1925. El presidente tiene que recurrir al estado de sitio para mantener el orden. El gobierno que le sucede, de Washington Luis, tiene que enfrentarse a una oleada creciente de descontento y agitaciones. Todo esto culmina, en el año 1930, cuando Julio Prestes es declarado vencedor en elecciones por cierto fraudulentas, en detrimento de Getúlio Vargas, quien había sido gobernador de Río Grande do Sul y candidato presidencial por la Alianza Liberal. En octubre empieza la rebelión en Río Grande do Sul, Minas Gerais y Paraíba. Las tropas gauchas marchan hacia el centro comandadas por el propio Vargas y por el teniente Góis Monteiro. Juárez Tavora, compañero de Carlos Prestes en la Columna, toma con sus tropas a Bahía y Recife. El país se convulsiona de norte a sur y el proceso revolucionario culmina con la victoria.

No es posible emprender aquí una descripción pormenorizada de los acontecimientos que, por lo demás, ya han sido expuestos por varios autores. Queremos sin embargo destacar dos hechos: primero, que si bien la movilización social que culminó con la victoria revolucionaria fue emprendida en el curso de los años veinte por el liderazgo de clase media, notoriamente por militares, en especial tenientes, a esa movilización se sumaron no sólo los sectores populares, sino también sectores provenientes de la propia oligarquía. El mismo Getúlio Vargas era un próspero latifundista y, sin embargo asumió el liderazgo de la lucha cuyo blanco fundamental era el poder oligárquico y desarrolló, durante sus dos períodos gubernamentales, una política que correspondía esencialmente a los intereses industriales, aunque hizo varias "concesiones" sustanciales a la vieja oligarquía. Esto se explica en parte por la mencionada simbiosis de intereses pero, sobre todo, por la conciencia de sectores de las clases dominantes de la necesidad de impulsar los intereses fundamentales del sistema de dominación en su conjunto, para tratar de crear las condiciones indispensables al desarrollo del núcleo central de la acumulación capitalista: la base industrial. Es por eso que Vargas, siendo originario de la oligarquía terrateniente, se trasforma en el gobernante que re-

presenta en la historia de Brasil, la expresión más fidedigna del poder burgués-industrial que se conquista por la victoria de la revolución de 1930.

Es importante destacar que ésta es una hegemonía comprometida, pues no liquida definitivamente a la oligarquía, al contrario, mantiene sus privilegios, aunque abre paso en el sistema de dominación a la burguesía industrial. Este sistema se vuelve pues más complejo e impuro y, si bien es cierto que la burguesía industrial impone sus metas y sus reivindicaciones específicas, tiene que coexistir y pactar con la vieja oligarquía, resultando de este pacto una dominación que bien puede ser definida como burguesa-oligárquica. Esta hegemonía-comprometida revela el carácter y el modo de funcionamiento del capitalismo dependiente brasileño. Es por esto que sólo se puede considerar a esta "revolución burguesa" como tal en la medida en que no se pierda de vista su especificidad básica que consiste en su imposibilidad de golpear profunda y decisivamente a sus "enemigos" y provocar una trasformación definitiva y radical de la situación de dependencia y en el sentido de la independencia económica nacional, la integración del mercado interno y de la población a la economía y a la sociedad capitalista. A pesar de los nuevos niveles en que se situarán estos problemas en consecuencia de la industrialización del país quedarán como irresueltos y clamarán por nuevas soluciones en nuevos contextos.

La crisis del capitalismo mundial que empieza en 1929 sin duda ayudó a acelerar el proceso revolucionario pues golpeó a los intereses cafetaleros en especial y puso en el orden del día la necesidad de una alteración sustancial del poder oligárquico que se fundamentaba en la vieja "política de los gobernadores". Esta política estaba asentada en el control de las "clientelas" electorales, es decir, en el dominio paternalista de los electores por los caudillos locales. Con la victoria de la revolución, este fenómeno no desaparece pero pasa a ser mediatizado por el gobierno de Vargas quien es la expresión del nuevo pacto de poder. De esta manera, la figura del gran cacique se sobrepone a los sistemas caciquistas locales y, si bien coexiste con ellos, los redefine en función de los nuevos intereses hegemónicos. La burguesía industrial se aprovecha así de las pautas de funcionamiento del sistema oligárquico en el nivel político como se aprovechará también más intensamente de su aparato económico. Ejemplo muy claro de esto se encuentra en el llamado "confisco cambial" (confiscación cambiaria) que permitía al estado subvencionar a los cafeticultores a cambio de obtener el control del grueso de las divisas obtenidas con la exportación. El financiamiento estatal del café mantenía su producción, favorecía por un lado a la oligarquía pero, por otro, y esto era lo fundamental, sus ingresos se utilizaban para costear la compra de materias primas y maquinarias para la industria. A este fenómeno lo hemos llamado la "acumulación externa de capitales", vale decir, la necesidad de que el capitalismo dependiente incluya en la reproducción del sistema al sector externo. Esto significa que el sector de bienes de producción —sector I, como lo ha llamado Marx— se encuentra en el exterior, en los países capitalistas desarrollados.

La revolución de 1930 satisface ampliamente las relativamente modestas reivindicaciones específicas de las clases medias: al estimular el desarrollo industrial, Vargas implanta toda una política ampliamente proteccionista de la industria nacional y la sustitución de importaciones, favorecida por la gran depresión del

capitalismo mundial. Se crean nuevas oportunidades de empleo; se trata de "moralizar", ampliar y racionalizar la admisión al servicio público; se elabora una nueva Constitución en 1934 que busca democratizar el sistema político,[9] se expanden las obras públicas, se modernizan las ciudades y se absorbe más mano de obra profesional, técnica, etc. Los tenientes son promovidos en la jerarquía militar y, poco a poco, van ocupando importantes funciones en las empresas públicas y privadas.

El gobierno de Vargas destaca también por su capacidad de hacer algunas concesiones a la clase obrera (previsión social, estabilidad en el empleo, derecho de sindicalización) por ejercer sobre ella un amplio control paternalista-populista.

Volveremos en seguida a referirnos a las relaciones del populismo varguista con la clase obrera. Resta por mencionar aquí que si hubo una clase absolutamente menospreciada por la revolución burguesa en el Brasil —tanto por Vargas como por los gobernantes que lo han sucedido— fue sin duda el campesinado. Su situación permaneció tal cual era en el pasado: despojado progresivamente de sus tierras, analfabeto, enfermo y hambriento. El carácter intocable de la cuestión agraria revelaba de manera contundente el pacto oligárquico-burgués que hizo que la burguesía industrial abdicara de promover una reforma agraria, aunque ésta fuese una condición de suma importancia para la ampliación del mercado y para promover un intenso desarrollo de las fuerzas productivas.

En segundo lugar, es relevante destacar la actitud del PCB y. de su entonces aliado, Luis Carlos Prestes, frente a la revolución de 1930. El hecho es importante porque Prestes, a raíz de la epopeya de la Columna, se trasformó en el gran héroe nacional y por lo tanto, a él le correspondía liderar el proceso revolucionario. Esta situación era tan clara que el propio liderazgo burgués y pequeñoburgués, en sus preparativos previos al alzamiento, se dirigió a Prestes ofreciéndole la dirección del movimiento porque comprendía la enorme importancia de su arrastre de masas. Sin embargo, Prestes que ya por entonces se estaba convirtiendo al comunismo, en contacto con la dirección latinoamericana de la Comintern y con el PCB, no asimiló correctamente la concepción leninista de que el partido proletario debe conducir a la clase trabajadora para dirigir la revolución democrático-burguesa. Volvió la espalda al movimiento revolucionario en gestación y lanzó un manifiesto cuyos puntos centrales eran: la denuncia de la "farsa electoral" de los politiqueros, de la falsa democracia, que "en el fondo, no era más que una lucha entre intereses contrarios de dos corrientes oligárquicas, apoyadas y estimuladas por los dos grandes imperialismos que nos esclavizan y a los cuales los politiqueros brasileños entregan, atada de pies y manos a toda la nación". Denunció también el latifundio y convocó a la "insurrección generalizada" declarando que "sólo un gobierno de todos los trabajadores, basado en un consejo de trabajadores de la ciudad y del campo, soldados, marineros, podrá cumplir tal programa".[10]

Esta equivocada concepción estratégico-táctica que consiste en tratar de saltar

[9] Posteriormente. se instituye la Constitución del estado nuevo, en 1937, que suplanta las aspiraciones democráticas apoyándose en principios dictatoriales a través de su carácter corporativista.

[10] Estos textos son citados por Abguar Bastos, *Prestes e a revoluçao social,* Ed. Calvino, 1946.

por encima de la etapa democrático-burguesa del proceso revolucionario, representaba una reproducción mecánica en Brasil, de la línea trazada por la Comintern, llamada por Molotov la línea del "tercer período", es decir, la orientación de una ofensiva generalizada de los PC, en plano mundial, para la toma del poder con base a la organización de un poder al estilo soviético, como respuesta a la crisis económica de carácter revolucionario que se esperaba y que de hecho ocurrió a partir de 1929. Esta línea incluía un enfrentamiento con la socialdemocracia, considerada como la enemiga principal dentro del movimiento obrero por su política reformista que objetivamente servía al fascismo. Los movimientos socialdemócratas y sus expresiones en los países coloniales en movimientos democráticos de liberación nacional quedaban definidos como un "social-fascismo". Por supuesto tal orientación tenía que fracasar en Brasil, como fracasó en todas partes. La sociedad y el proletariado brasileño, en especial, no estaban aún maduros para proponerse la realización de una revolución socialista. Tal línea política revelaba una desviación típicamente izquierdista y sin duda engendró el aislamiento del PCB de las amplias masas.

Poco tiempo después el PCB, a través de Prestes, hizo una autocrítica de esta posición, pero tampoco comprendió que la oportunidad histórica de la revolución democrático-burguesa había ya pasado e intentó restablecer una alianza democrática antimperialista por medio de la formación de la Alianza Nacional Libertadora, que se lanzó tardíamente al asalto al poder, y que contaba con el apoyo de una burguesía nacional que para ese entonces ya se había incorporado al estado.

Así expresó su nueva posición:

"Marchemos, pues, rápidamente, a la implantación de un gobierno revolucionario popular en todo el Brasil, un gobierno del pueblo contra el imperialismo y el feudalismo que demostrará en la práctica a las masas trabajadoras del país, lo que es la democracia y la libertad. (...) Corresponde a las propias masas la iniciativa de organizar la defensa de sus reuniones, de garantizar la vida de sus jefes y de prepararse activamente para el *momento del asalto*. La idea del asalto ya maduró en la conciencia de las grandes masas. A su jefe le corresponde organizarlas y dirigirlas." Al final el PCB definió el carácter de la Alianza Nacional Libertadora: es "una amplia y vasta organización del frente único nacional".

En líneas generales, el programa que preconizaba la ALN era el siguiente: golpear al imperialismo a través de la suspensión de las deudas imperialistas, nacionalizar sus empresas, proteger a la industria nacional, distribuir las tierras, determinar las libertades democráticas, etc. Tal programa hubiera consistido, en 1930, en la radicalización del programa revolucionario burgués. Sin embargo, en 1935, cuando ya se había establecido la alianza de la burguesía industrial con la oligarquía, cuando los intereses imperialistas ya habían sido resguardados a través del nuevo pacto del poder, la nueva oleada revolucionaria, articulada extemporáneamente, tenía que fracasar. El gobierno de Vargas, expresión de la hegemonía burguesa comprometida con los intereses oligárquico-imperialistas, tenía en sus manos el firme control de la situación política y económica. En consecuencia, cercó a la ALN así como a la Confederación Unitaria de Brasil, que manejaba los sindicatos comunistas e independientes.

El alzamiento se produjo en puntos dispersos del país pero fue prontamente

sofocado. La revolución burguesa ya se había consumado en lo fundamental, la economía ya empezaba a robustecerse, la burguesía no tenía pues ninguna razón de lanzarse en una nueva aventura junto a aliados tan incómodos.

El levantamiento de 1935, pese a su heroísmo, fue sin duda un rencuentro de los tenientes convertidos al socialismo, bajo la orientación stalinista, con sus orígenes pequeñoburgueses, con su aventurerismo y falta de sentido político-táctico. El poder burgués tenía ahora todas las excusas para acrecentar su represión en contra del Partido Comunista y para empezar a disputar en mejores condiciones el control ideológico y orgánico de la clase obrera por medio del populismo varguista.

En 1938 Vargas reprimió también una intentona de carácter fascista, dirigida por Plinio Salgado, y aprovechó esta oportunidad para reforzar el denominado estado nuevo que había instaurado en noviembre de 1937, bajo el pretexto de prevenir una insurrección comunista.

V. DEL ESTADO NUEVO A LA DEMOCRACIA LIBERAL

El estado nuevo representaba en la práctica una dictadura bonapartista que trataba de presentarse como un "estado amalgama" de los intereses de todas las clases (excluido el campesinado), pero que representaba en la práctica la imposición sobre el conjunto de la sociedad de los intereses de la burguesía industrial.

La organización de tipo corporativo bajo la cual Vargas articuló la representación frente al estado de las distintas clases, estaba inspirada en los moldes nazifascistas vigentes en la época, que sin duda despertaban la admiración del dictador criollo.

Vargas concedió a la clase obrera una legislación laboral y una previsión social. Creó también un nuevo sindicalismo "amarillo" a través del cual pasó a ejercer el control estatal sobre el movimiento obrero. Instrumentó una intensa propaganda que lo presentaba como "el padre de los pobres" y que encontró en los orígenes campesinos del obrero un terreno abonado.

El varguismo creó por lo tanto la tradición política del populismo en Brasil: un liderazgo personal que era ejercido en nombre de los intereses del pueblo, un programa amplio de desarrollo industrial con aspectos muy limitados de "justicia social". La implantación de la política burguesa industrialista se hacía a través de una burocracia y tecnocracia civil y militar proveniente de las clases medias y de un eficiente liderazgo de la propia clase burguesa que, utilizando el control populista del varguismo sobre el movimiento obrero, mediatizado por el liderazgo sindical "amarillo" frustraba la autoorganización e independencia de esta clase, a la vez que manipulaba los intereses de los sectores más atrasados como el subproletariado.

Al ser derrocado en 1945 por un golpe de estado que establece un régimen democrático, Vargas crea dos partidos que proyectaron en la nueva democracia un proyecto político: como su brazo izquierdo el Partido Laborista Brasileño (PTB), hacia donde convergen la clase obrera y los sectores populares en general, y cuya

dirección es controlada directamente por Vargas, por una de sus hijas y por sus hombres de confianza en el movimiento sindical; como su brazo derecho, el Partido Social Democrático (PSD), dirigido por su yerno y por otra de sus hijas, que representaba sin subterfugios los intereses burgueses oligárquicos.

En el escenario político brasileño coexistirán otros partidos políticos. El principal, la Unión Democrática Nacional (UDN) congregaba las fuerzas de oposición al estado nuevo, apoyándose en las clases medias liberales, en el liberalismo económico de la oligarquía agroexportadora y contaba con un fuerte apoyo del capital internacional. El PCB había subsistido clandestinamente con su dirigente Luis Carlos Prestes prisionero, y había establecido una alianza con Vargas a partir de 1941 cuando éste abandonó sus coqueteos fascistas y se integró a los Aliados en contra del Eje. Entre 1941 y 1945 Vargas acentuó su política populista y contó con el apoyo del PCB para consolidar su base obrera. Al caer Vargas el PCB recuperó sin embargo su legalidad y se presentó a las elecciones alcanzando una amplia votación. Dos años después, el PCB tuvo que luchar otra vez en la clandestinidad a consecuencia de la política de guerra fría.

La hábil política de Vargas de crear dos partidos democráticos le permite al antiguo dictador llevar al poder en 1946 a su antiguo ministro de la guerra, el mariscal Eurico Gaspar Dutra, del PSD; el esquema varguista de fuerzas permanece incólume y, en 1950, a través del masivo voto popular, canalizado por el PTB, Vargas vuelve de nuevo al gobierno.

El gobierno del mariscal Dutra se desarrolló en una coyuntura marcada por la política imperialista de la posguerra. En lo económico, las grandes reservas financieras, acumuladas durante la guerra por las exportaciones de productos agrícolas y materias primas, fueron gastadas en buena parte en ampliar el consumo de bienes durables y de lujo importados de Estados Unidos. Otra parte de las deudas norteamericanas y europeas fueron consumidas en la compra de empresas extranjeras decadentes, como los ferrocarriles. Solamente una tercera parte fue utilizada para la importación de bienes de capital y materias primas destinados a proseguir la sustitución de importaciones.

En la misma época, el imperialismo envió misiones técnicas que se encargaron de levantar los recursos económicos locales y de sugerir medidas de creación de una infraestructura para realizar las nuevas inversiones industriales que le interesaban. El liberalismo cambiario, un plan de desarrollo infraestructural, el comienzo de la "ayuda" del punto IV, y la colocación en forma de *dumping* de los excedentes agrícolas norteamericanos, conformaban un conjunto de medidas antipopulares que acentuaban la inflación, la baja de los superávit del comercio exterior. En todo resultaban favorecidos los sectores de altos ingresos en detrimento de las masas.

En el plan político, el imperialismo inicia la política de guerra fría y exige medidas de represión a los partidos comunistas. Dutra sigue religiosamente todas las recomendaciones de los aliados. Muy hábilmente Vargas se distancia del gobierno Dutra y en 1950 se presenta como candidato por el PTB mientras el PSD presentaba un candidato continuista para perder, el señor Cristiano Machado, cuya "perfomance" política tan marcadamente artificiosa dio origen al término "cristianizar", es decir, presentar a un candidato al que no se apoya de hecho.

¿Cómo se comportó el Partido Comunista en una coyuntura tan compleja? Durante la guerra había entrado en vigencia, en el movimiento comunista internacional, la línea de los frentes patrióticos, que propugnaba una alianza de todos los sectores progresistas en contra del nazifascismo. El PCB, en su segunda conferencia nacional de Mantiqueira, realizada en 1942, adoptó la línea de Unión Nacional que preconizaba el respaldo a Vargas y la unidad con la burguesía para luchar en contra del fascismo. Prestes estaba entonces en la cárcel y fue electo secretario general del PCB. Al fin de la guerra el PCB volvió a una efímera situación de legalidad que perduró sólo hasta 1947.

En 1945 Prestes, recién salido de la cárcel, disfrutaba aún de un gran prestigio, acrecentado por la victoria militar de la URSS y por la decidida oposición de los comunistas al Eje. Fue entonces cuando sostuvo: "la democracia burguesa se vuelve hacia la izquierda, la clase obrera tiene la posibilidad de aliarse con la pequeña burguesía del campo y de la ciudad y con la parte demócrata y progresista de la burguesía nacional, contra la minoría reaccionaria del capital extranjero colonizador". Llamó así a restablecer "la confianza del pueblo en los políticos" insistiendo en "la unión de todas las clases en la realización de una tarea común".[11]

E insistía que "de inmediato, lo que conviene a patrones y obreros es resolver directamente, de un modo *franco, leal, armonioso,* por intermedio de comisiones mixtas en los lugares de trabajo o por acuerdo mutuo entre los sindicatos de clase, las divergencias *creadas por la propia vida*". Proseguía: "Es por intermedio de sus organizaciones que la clase obrera podrá *ayudar al gobierno y a los patrones* a encontrar soluciones prácticas, rápidas y eficientes para los graves problemas económicos del día." Llegó incluso a afirmar: "Estamos convencidos que dentro de un parlamento democrático, del que *participen* genuinos representantes del pueblo, es posible y *relativamente fácil* encontrar la solución progresista de *todos* nuestros problemas." Hasta el capital extranjero podría ser "uno de los *colaboradores más eficientes* del progreso y de la prosperidad de los pueblos más atrasados".[12]

De esta manera, se daba la impresión de que la atenuación de la lucha de clases y la consolidación de la democracia burguesa garantizaban la liquidación definitiva del fascismo, el progreso, la paz y la salvación nacional.

El PCB creció de manera muy significativa durante el período de la legalidad: el número de sus militantes aumentó de cuatro mil a doscientos mil. En las elecciones obtuvo varios diputados y senadores y su poco conocido candidato a presidente, pese a una intensa campaña anticomunista que desplegó Carlos Lacerda —un periodista de derecha vinculado a la UDN—, obtuvo quinientos mil votos.

Sin embargo, la burguesía, a través del gobierno de Dutra, sufrió las presiones del imperialismo y empezó a tomar una serie de medidas anticomunistas como la ilegalización del PCB y la ruptura de relaciones con la URSS. El PCB, confinado otra vez a la clandestinidad, hizo una nueva autocrítica de su inmediata actuación previa y pasó a denunciar al gobierno Dutra como fascista y a exigir su renuncia... Entre 1947 y 1949 el movimiento comunista mundial pasó a una posición

[11] Luis Carlos Prestes, *Uniao nacional para la democracia e o progreso,* Ediçoes Horizonte, Río, 1945, p. 13.

[12] Ibidem, pp. 19, 21 y 25. Subrayados nuestros.

ofensiva que consolidó los regímenes de Europa oriental y buscó adaptarse a los golpes recibidos como consecuencia de la guerra fría.

En 1950, a raíz del triunfo de la Revolución china y del creciente conflicto en Corea, la nueva orientación del movimiento comunista mundial se fue radicalizando y afectó la línea del PCB en el sentido de lanzarlo a una nueva ofensiva insurreccional. Ésta se expresó en el famoso manifiesto de agosto de 1950, que, en base a una errónea apreciación de la situación internacional y nacional (se diagnosticaba equivocadamente la existencia de una crisis del capitalismo mundial y del brasileño de manera absolutamente subjetiva, pues este período se caracterizaba precisamente por una gran recuperación económica...) llamó a la formación de un Frente Democrático de Liberación Nacional, muy calcado en el "modelo" de la Revolución china. Este manifiesto llamó a la "organización de lucha y a una acción en defensa del pueblo, con raíces en las fábricas y en las haciendas, en las escuelas y oficinas públicas, en los cuarteles y en los navíos, en todos los locales de trabajo, en los barrios y en las grandes ciudades, en las aldeas y poblados".[13]

Convocaba a "todos, demócratas y patriotas, por encima de cualquier diferencia de creencias religiosas, de puntos de vista filosóficos (...)". Una vez más, el PCB se lanzaba inoportunamente al insurreccionalismo y trataba al mismo tiempo de sobreponerse a las distinciones de clases... Preconizaba el derrumbe de la "dictadura feudal-burguesa al servicio del imperialismo" y proponía un "gobierno revolucionario, emanado directamente del pueblo y legítimo representante del bloque de *todas las clases* y estratos sociales, de todos los sectores de la población del país que participasen efectivamente en la lucha revolucionaria por la liberación nacional del yugo imperialista, *bajo la dirección del proletariado*".[14]

Se proponía la confiscación de las empresas imperialistas y de la gran propiedad de la tierra. La implementación de medidas nacionalistas que conducirían hacia un desarrollo nacional independiente, a la democracia y a mejores condiciones de vida para el pueblo.

En el año 1950 Getúlio Vargas volvió al gobierno. El PCB no vio en su gobierno una aproximación al programa de revolución de liberación nacional pues éste exigía la dirección de la clase obrera. Desarrolló así una fuerte política de oposición a Vargas, a pesar de que el segundo período de gobierno de Vargas fue marcado por medidas nacionalistas y por una amplia agitación popular realizada por su ministro del Trabajo, João Goulart, trasformado en el heredero político del varguismo. El mayor logro del segundo gobierno Vargas fue la constitución del monopolio estatal del petróleo, a través de la creación de la Petrobrás, compañía que pasaba a tener el derecho exclusivo de la prospección y extracción del petróleo (no así de la distribución y comercialización del producto, actividad muy lucrativa que quedaba en manos del capital privado y extranjero). La lucha por la nacionalización del petróleo, de amplio respaldo popular y en las fuerzas armadas, fue impulsada por los comunistas y representó sin duda un hito importante de la lucha antimperialista en Brasil.

[13] Luis Carlos Prestes, *Manifesto de agosto de 1950*, Ed. Horizonte, p. 20.
[14] Ibidem. Subrayados nuestros.

La política antimperialista de Vargas amenazaba extenderse a otros sectores. La agitación de masas, promovida por su propio ministro de Trabajo, provocó la reacción de los militares que llevó a su dimisión. El imperialismo instrumentó una fuerte campaña en contra de la corrupción del gobierno Vargas. Esa campaña contó con el apoyo de amplios sectores de las clases medias, de la oficialidad liberal y del Partido Comunista en una línea de oposición insurreccionalista.

La campaña asumió un nítido carácter golpista. Carlos Lacerda, su principal líder, exigió abiertamente la deposición del caudillo. Una comisión de investigación, con poderes indefinidos, se instaló en las oficinas de la fuerza aérea. Los aliados burgueses de Vargas, particularmente el PSD, buscaron distanciarse de su antiguo inspirador. A Vargas sólo le quedaban las masas obreras que confiaban en una acción ofensiva. Vargas no se sentía capaz de dirigir un movimiento nítidamente popular. Concibió entonces el plan de entregar el liderazgo de la nueva etapa a su hijo político João Goulart, cuyo apodo de "Jango" indicaba su nítido perfil populista en una época en que Evita Perón y el MNR boliviano daban el tono al liderazgo político latinoamericano.

En 1954, en el auge de la campaña moralista que parecía entregar el poder a sus adversarios, Vargas se suicidó y dejó con Goulart una carta-testamento en la cual denunciaba el complot de la oligarquía y del imperialismo en contra de las medidas populares de su gobierno: "Yo sigo el destino que me es impuesto, dice la carta. Después de años de dominación y saqueo por los grupos económicos y financieros internacionales, yo me hice jefe de una revolución incontenible. Inicié una obra de liberación e instituí un régimen de libertad social. Fui obligado a renunciar."

La carta de Vargas marca una radicalización inevitable del populismo. Su recurso al suicidio revelaba el miedo de su líder y su impreparación personal para dar los pasos políticos revolucionarios que la situación exigía. El impacto del acto supremo y de su mensaje fue avasallador. Las masas se tiraron a la calle. Carlos Lacerda huyó a Estados Unidos y el gobierno de Café Filho, vicepresidente de Vargas, aliado de la conspiración, se mantuvo bajo constante presión popular.

Las elecciones convocadas para 1955 dieron la victoria otra vez al esquema de fuerzas varguistas. Juscelino Kubitschek fue candidato por el PSD a la presidencia. Para garantizar su apoyo popular llevaba de compañero de lista, como candidato a la vicepresidencia, al heredero de Vargas, João Goulart. La oposición presentó su mejor cuadro, el viejo teniente, brigadier del aire, Eduardo Gomes. Para dividir las fuerzas varguistas se postuló con fuertes recursos financieros el líder populista Ademar de Barros, interventor del estado de São Paulo bajo la dictadura de Vargas, y que había sido gobernador del Estado con el apoyo del caudillo.

La victoria de Kubitschek no fue por mayoría absoluta debido a la división de los votos varguistas, y Lacerda, ya de vuelta al país, inició una fuerte agitación en contra de la toma de posesión de Kubitschek y Goulart. El mariscal Teixeira Lott, entonces ministro de la Guerra, tuvo que intervenir militarmente para garantizar la toma de posesión de Kubitschek y Goulart. Los conspiradores habían sido derrotados pero sólo momentáneamente. El gobierno Kubitschek fue perturbado por intentos golpistas y el gobierno posterior de Quadros dimitió bajo la

presión de esas mismas fuerzas que llegaron definitivamente al poder con el golpe de estado de 1964.

La agitación desarrollada entre 1954 y 1955 demostró los límites de un nacionalismo que para ejercerse tenía que enfrentarse a una oposición internacional y nacional muy fuerte y activa, y tenía que apoyarse abiertamente en los obreros organizados y las masas populares.

El gobierno Kubitschek representó el primer paso atrás. El esquema varguista continuó en el gobierno pero su programa entró en un compromiso tácito con el capital internacional. La "instrucción 113", dictada en el gobierno de Carlos Luz, daba todas las facilidades a la inversión extranjera: exención de impuestos de importación y de impuestos sobre el primer año de ventas, facilidades en terrenos y en créditos. Kubitschek mantuvo todas estas regalías para el capital extranjero y sólo reivindicó el que esas inversiones se destinaran a los sectores de la industria de base (autos, química y electrónica fundamentalmente), apuntalados en su Programa de Metas.

VI. LA NUEVA DEPENDENCIA Y EL CAPÍTULO FINAL DEL POPULISMO

Lo más trascendental de este nuevo período es que empieza el ocaso del nacionalismo populista y la apertura de una nueva época en la cual el capitalismo dependiente brasileño, como todos los demás capitalismos dependientes latinoamericanos, descartará su vieja máscara popular y asumirá una nueva faz que resulta del nuevo carácter del sistema dependiente. Éste se definirá por una masiva inversión directa de capitales monopólicos extranjeros en los sectores básicos de la economía brasileña, particularmente en el manufacturero. Tal hecho tiene profundas consecuencias económicas, políticas y sociales, pues tiende progresivamente a desnacionalizar la propiedad de los medios de producción ya existentes y a extender el dominio extranjero, a través de nuevas empresas que se crean, como un gran pulpo que abarca con sus tentáculos las piezas fundamentales del sistema productivo. A la burguesía nacional no le queda más alternativa que aceptar la situación de socio menor de las empresas extranjeras o intentar sobrevivir en una posición absolutamente marginal en el sistema. Obviamente, sus sectores más lúcidos optan por la primera solución y, de esta manera, abdican de su independencia, de sus proyectos propios de un desarrollo nacional autónomo. Se frustra pues, sin glorias, la revolución democrático-burguesa que la burguesía nacional había impulsado en los años treinta. El sistema de dominación, que desde sus principios estaba permeado por la dominación colonial e imperialista, empieza a abrirse completamente y en su eje central de acumulación capitalista —en su infraestructura industrial— coloca a un nuevo agente: la gran empresa monopólica multinacional.

La burguesía brasileña no tenía cómo reaccionar, en tanto clase explotadora, a esta situación. Fueron los propios mecanismos generados por ella para proteger la industria nacional de la competencia externa e impedir la entrada de productos

extranjeros, los que terminaron por hacer atractiva para las empresas extranjeras la instalación de sus sucursales en territorio nacional.

El imperialismo tenía recursos múltiples para lograr penetrar y controlar la economía brasileña, como son por ejemplo, el control de la tecnología por medio de las patentes, los sistemas de financiamiento condicionado, el control de los mercados de materias primas industrializadas, el aprovisionamiento de equipo y máquinas. Como la acumulación de capitales en los países dependientes como Brasil se procesaba a través del exterior, el imperialismo tenía también bajo su control el mecanismo básico del funcionamiento de la reproducción dependiente. Fue, por lo tanto, tarea fácil para él alterar en lo sustancial las relaciones que inicialmente se daban a un nivel comercial —de venta de maquinarias-mercancías— para trasformarlas en un nuevo tipo de relaciones de dependencia: inversión directa de maquinarias-capital.

La reproducción del sistema capitalista dependiente sufre así una redefinición estructural. La dependencia pasa a ser cada vez más profunda y a permear el propio sistema productivo industrial, eje de la acumulación del capital y fuente de poder de una posible burguesía nacional.

Ahora bien, cabe preguntar: ¿No había de veras ninguna posibilidad de que la burguesía criolla reaccionara? La contestación a esta interrogante entrega la clave para la comprensión del abandono, por parte de ésta, de la postura ideológica nacionalista-populista. Obviamente, para oponer al nuevo carácter que tenía que asumir la dependencia la burguesía debía enfrentarse al imperialismo. Para esto, era necesario acudir en demanda de un respaldo popular, es decir, movilizar a las masas obreras, campesinas, pequeñoburguesas para una lucha contra la dominación imperialista. El desarrollo nacional independiente tenía pues que procesarse en una estrecha alianza con las clases dominadas que, por cierto, tratarían de imponer sus intereses y garantizarlos por medio de un gobierno que fuera la expresión de éstos. ¿Convendría a la burguesía esta solución? ¡Por supuesto que no! Por esto, ésta nunca llegó a ser una alternativa real. Sus intereses de clase dominante están naturalmente unidos de manera inexorable a la supervivencia del modo de producción capitalista. Por tal razón, la burguesía brasileña prefiere ser la socia menor del imperialismo que arriesgarse a una confrontación con éste y a caer prisionera de un programa comprometido con las clases populares que tiende, inevitablemente, hacia un cuestionamiento de su propia supervivencia como clase.

El nuevo carácter de la dependencia no fue comprendido de inmediato por el liderazgo del movimiento obrero y popular, particularmente por el PCB. Ésta es la única explicación para la nueva línea política que adoptó este partido a mediados de la década de los cincuenta y en base a la cual se orientó hasta fines de la década de los sesenta. Durante el último gobierno Vargas, que representaba el último aliento nacionalista de la burguesía brasileña, el PCB se había lanzado en una campaña en contra de éste, en nombre de la moralización de la vida pública, exigiendo el término de su mandato. En seguida de su suicidio el PCB se percató una vez más de sus errores y se unió al movimiento espontáneo de protestas antimperialistas que el suicidio políticamente encauzado de Vargas engendró. Pero, no se percató de que ése era exactamente el momento histórico en que la burguesía

empezaba a abdicar de su nacionalismo, asustada por el movimiento de masas en ascenso y presionada por el imperialismo. De acuerdo con la nueva línea política oficializada en la conferencia de 1958, el PCB trató, desesperadamente, hasta el golpe de 1964 e incluso después de éste, de arrastrarla a un frente único antimperialista y antilatifundista. El PCB se dispuso a hacer concesiones sustanciales a la burguesía y a centrar su ataque solamente en el imperialismo y en el latifundio creyendo posible separar de éstos a la burguesía "nacionalista y progresista". Por supuesto que existían elementos aislados de esta clase que bien podrían ser encuadrados al interior de estas categorías. Sin embargo, la burguesía industrial como clase ya había comprendido muy bien en dónde residían sus intereses específicos y esenciales. Pero el PCB, incapacitado para comprender los cambios de calidad que ocurrían en el capitalismo brasileño, preconizaba, desde el gobierno reaccionario de Café Filho, quien sucedió a Getúlio, pasando por el de Juscelino Kubitschek, que selló en definitiva el nuevo pacto oligárquico-burgués-imperialista, asimismo durante el efímero período de Janio Quadros y hasta el fin del gobierno de João Goulart, un gobierno nacionalista y democrático, a través de un frente único con la burguesía nacional y progresista, en el interior de cuyo frente el proletariado debería disputar la hegemonía...

Durante el gobierno de Kubitschek el capital extranjero penetró masivamente en el país aprovechándose de una infraestructura energética y de caminos que había sido desarrollada de manera significativa por el estado, bajo la gestión de Vargas. Fundamentalmente el capital de empresas norteamericanas —pero también de Japón y Europa cuyas economías estaban en franca recuperación— se orientó hacia la industria automotriz, química, mecánica, metalúrgica pesada y liviana, expandiéndose hacia la producción de bienes de consumo duraderos en general e incluso hacia sectores de los bienes de consumo livianos. Se difundió la concepción de que era necesario "atraer al capital extranjero" y para esto se crearon amplios mecanismos de estímulo a su penetración a través de una serie de instrucciones de órganos económicos del gobierno, cuya pionera fue la célebre "instrucción 113" de la Superintendencia de la Moneda y el Crédito (SUMOC).[15]

Juscelino Kubitschek implementó también un vasto plan de desarrollo centrado en el binomio "energía y trasporte". Buscaba expandir la infraestructura para completar las condiciones indispensables a un nuevo "boom" de desarrollo dependiente. El "Programa de Metas" elaborado en su gobierno trataba de sistematizar la concepción desarrollista que encontró su eje aglutinador en la trasferencia de la capital federal a la nueva ciudad de Brasilia. El plan contenía también ambiciosas metas relacionadas con la industrialización. Lo que no contemplaba, y en ello seguía la postura tradicional de la burguesía brasileña, era la cuestión agraria. La ampliación del mercado se buscaba más bien a través de la incorporación de mano de obra mediante la expansión de las obras públicas y, en particular la construcción de un amplio sistema de carreteras, que a la vez estimulaba el mercado de la industria automotriz y articulaba nacionalmente el mercado local de regiones dispersas.

[15] La instrucción 113 acordaba, entre otras facilidades, exención de pago de impuestos y prioridad crediticia a las empresas extranjeras.

Naturalmente el proyecto desarrollista implementado por Kubitschek estaba financiado sobre todo por medio de una política de "déficit" presupuestarios y de préstamos extranjeros, ambos factores altamente inflacionarios. Esa política se complementaba con otra de bajos salarios. La mano de obra atraída masivamente del campo aceptaba bajos salarios con lo que provocaba una caída del poder de compra de los salarios en general. En el período de Kubitschek ocurren importantes luchas salariales para compensar las bajas provocadas por las perturbaciones del mercado de trabajo y la inflación creciente.

Tal situación continuó en los posteriores gobiernos hasta el golpe militar. En ellos surgió intensa oleada de movimientos de protestas contra el aumento del costo de la vida; los trabajadores organizaron importantes huelgas —como la huelga general que ocurrió en el estado de São Paulo, en Río de Janeiro y en Minas Gerais en los años 1957-58— por aumentos de sueldos, a ellos se añadieron múltiples agitaciones estudiantiles que empezaron a profundizarse y a extender la lucha a un terreno nacionalista y antimperialista.

Bajo el impacto de la radicalización de la vieja ideología nacionalista-populista que, abandonada por la burguesía, caía en manos de la pequeña burguesía y del proletariado, Kubitschek se preocupó de que se elaborara toda una ideología del desarrollo nacional. Para esto creó el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB) hacia el cual convergieron varios teóricos pequeñoburgueses. El ISEB trabajó bajo la influencia del pensamiento elaborado por la CEPAL, y desarrolló una concepción que preconizaba un desarrollo del capitalismo nacional autónomo. Esto motivó en 1957 el abandono de la institución por uno de sus fundadores, y su primer director, Helio Jaguaribe, lúcido teórico de la burguesía brasileña que no estaba dispuesto a ser, según él, cómplice del utópico "nacionalismo sectario", como lo intitulaba, es decir, del nacionalismo que no comprendía la importancia crucial del capital extranjero...

Debido a la pequeña tradición de pensamiento marxista en el país, el ISEB ejerció una significativa influencia en la generación de científicos sociales de los años cincuenta, así como el liderazgo estudiantil y en el propio PCB. Este instituto, en la medida en que se fue consolidando la tendencia hacia la subyugación del capitalismo brasileño por el imperialismo, fue cayendo poco a poco en un radicalismo político que lo hizo uno de los principales objetos de represión de la derecha a consecuencia del golpe militar de 1964.

El gobierno Kubitschek, que había sido elegido por la coalición PSD-PTB, fue sucedido por el de Janio Quadros, quien había sido apoyado como candidato presidencial por la conservadora UDN. La elección de Quadros con mayoría absoluta de los votos representó el primer cuestionamiento del esquema tradicional de las fuerzas varguistas, aunque el vicepresidente electo fue João Goulart, heredero político de Vargas. Quadros había llevado el estilo populista a un nuevo nivel. Utilizaba técnicas de publicidad refinadas, presentaba una imagen personal que oscilaba violentamente del frágil hombre del pueblo mal vestido y perseguido hacia el violento autoritarismo moralista del ciudadano respetable y enfurecido. Se presentaba como un candidato de los obreros y campesinos y prometía radicales reformas estructurales y una definitiva moralización de la vida pública. Marcaba una absoluta independencia de los políticos tradicionales y su viaje a Cuba buscaba

asociarlo a los factores revolucionarios del continente. A pesar de sus evidentes vínculos con el capital internacional —que financiaba su campaña— Quadros buscaba destacar su participación en la lucha por la Petrobrás para señalar su pasado nacionalista.

Los resultados de las elecciones revelaban una fuerte aspiración antimperialista y por reformas estructurales. A falta de un partido propio, los trabajadores apoyaban masivamente las personalidades aparentemente radicales de Quadros y Goulart. La victoria de Quadros no lo era del partido oligárquico, liberal económicamente y proimperialista. La de Goulart no era la de la vieja alianza PSD-PTB. El país aspiraba a implantar algún esquema político nuevo de contenido más radicalmente reformista y popular.

El efímero gobierno de Quadros fue sin embargo una decepción. No llegó a implantar ninguna medida de carácter verdaderamente popular, realizó algunos actos demogógicos —como la condecoración al comandante Che Guevara— y en general, el aspirante a Bonaparte más bien trató de reprimir cualquier manifestación popular.

En el año 1961, bajo la presión de una situación económica muy grave, de una creciente falta de popularidad de su gobierno y de una constante presión de sus aliados derechistas hacia medidas económicas y políticas que acentuaban su desgaste político, Quadros renunció intempestivamente. Su renuncia ha sido considerada por varios analistas como un intento de provocar un movimiento nacional en su favor para poder asumir poderes excepcionales. Pero la grotesca farsa se frustró. El Parlamento aceptó su renuncia e, inmediatamente, los jefes militares trataron de apoderarse del gobierno para impedir la natural toma de posesión del vicepresidente Goulart, que se encontraba en China Popular en ese momento. El intento golpista provocó pronto una fuerte reacción popular de los sindicatos, del movimiento estudiantil —a través de la Unión Nacional de Estudiantes—, de los sectores liberales y de amplios sectores militares, particularmente de los suboficiales, que iniciaron su aparición pública en la vida política nacional.

El país estuvo a las puertas de la guerra civil. Leonel Brizola, gobernador de Río Grande del Sur, y Mauro Borges, gobernador de Goiás, empezaron a formar milicias populares, para defender la legalidad, disponiendo también del apoyo de las guarniciones militares y policiales ubicadas en sus respectivos estados. Este intento golpista se mostró prematuro. Fue necesario aceptar una solución conciliatoria. El Parlamento votó una reforma constitucional que establecía el parlamentarismo. Jango asumió el gobierno con los poderes restringidos. La burguesía ya comprendía muy bien que la hora del varguismo, expresión máxima del nacionalismo populista, había pasado y aceptó de mala gana el liderazgo de Jango como representante directo de la envejecida corriente. Por eso, si bien no pudo de inmediato reaccionar en contra de su ascenso, le impuso un régimen parlamentarista que reducía sus atribuciones presidenciales. Pero Jango, que había llegado al gobierno como beneficiario de un amplio movimiento popular, se sentía con fuerzas suficientes para poder ejercerlo sin restricciones. Empezó una compleja operación política para restablecer sus poderes. Después de varios ministerios parlamentaristas fracasados, convocó a un plebiscito y, a través del voto popular, reconquistó sus poderes de presidente. Su gobierno elaboró un plan trienal de desarrollo bajo

la dirección del economista Celso Furtado. En esta época la crisis económica que asolaba el país era por demás profunda. El movimiento inflacionario alcanzaba sus más altos niveles históricos, y, para contenerlo, en los marcos del capitalismo dependiente, la única política económica viable era sin duda una estabilización monetaria, tal cual venía preconizando desde 1956 el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el gobierno de Goulart no podía aplicar ortodoxamente esta solución burguesa pues entendía que ella lo enfrentaría a la reacción obrera, su principal base de apoyo. Por esto, se trató de buscar una solución ecléctica que estaba contemplada en el plan trienal. Éste preconizaba a la vez estabilización y desarrollo, lo que sin duda era inviable. Así, el gobierno de Jango no podía satisfacer a los trabajadores a los que se pedía aceptar una contención salarial, ni tampoco tranquilizar la inquietud burguesa e imperialista frente a la crisis económica, al contrario, la agudizaba por no tener suficiente autoridad para contener el ascenso generalizado del movimiento popular que explotaba por todas partes, en todos los sectores, a partir del fallido intento golpista de 1961. La burguesía y el imperialismo aspiraban a un clima de tranquilidad y sobre todo de seguridad para seguir disfrutando de sus ganancias y esto no les podía ofrecer, en tal situación, el hijo político de Vargas.

El ascenso del movimiento popular era tan intenso que el campesinado pobre, que se había mantenido hasta finales de los años cincuenta fuera del escenario nacional —aunque en el curso de esta década había intensificado sus luchas a un nivel regional, particularmente en el nordeste—, se lanzó a la lucha en el plano político nacional, a través de las ligas campesinas y de otras formas de asociación. Las huelgas obreras seguían estallando por todos lados, y surgió la figura revolucionaria de la huelga general repetida 3 veces para lograr al final el plebiscito que exigía Goulart con el objetivo de restituir sus plenos poderes presidenciales. Los estudiantes en sus constantes manifestaciones de rebeldía habían desarrollado una poderosa organización nacional en alianza abierta con los trabajadores. Se formó un Frente parlamentario nacionalista, que desde el legislativo empezó a presionar al gobierno para que realizara "reformas de base". En las fuerzas armadas surgió el Comando nacional de los sargentos y el Comando de los militares nacionalistas.

Esta oleada de masas que recorrió no sólo Brasil en esta época, sino a todo el continente, se enmarcaba dentro del cuadro político resultante de la espectacular victoria de la Revolución cubana, que ejerció una gran influencia en el movimiento popular y, con su ejemplo, contribuyó significativamente para la radicalización del antimperialismo, para el cuestionamiento del reformismo y para poner la alternativa socialista al orden del día. Producto de este nuevo clima generado por la Revolución cubana fue una nueva izquierda revolucionaria marxista en Brasil, que encontró su primera expresión en la Política Obrera (POLOP). Inspiradas también en esa revolución, las ligas campesinas buscaron convertirse en una organización política dando origen al Movimiento Radical Tiradentes. La influencia cubana se ejerció asimismo sobre los jóvenes cristianos de izquierda que fundaron Acción Popular (AP). Por otro lado, el debate entre China y la URSS repercutió en el PCB y dio origen a una escisión que formó el Partido Comunista de Brasil que se inspiraba en las críticas chinas al "revisionismo soviético". Este tipo de organizaciones revolucionarias surgidas al margen del Partido Comunista, que

seguía preconizando una política de alianza con la burguesía, en los comienzos de los años sesenta, fue un fenómeno común prácticamente en toda América Latina.

Este clima general de luchas antimperialistas tendía hacia un difuso cuestionamiento del sistema de dominación en cuanto tal, alcanzando también a los sectores sociales llamados "marginales", subempleados, habitantes de las "favelas" que circundan las grandes ciudades. La radicalización de estos sectores se expresó por medio de la toma de terrenos, de su organización a través de la creación de asociaciones propias, que encontraban un fuerte respaldo en el movimiento estudiantil y obrero.

Se empezaron a formar los "grupos de once" con el objeto de conformar una vasta organización de base para luchar por las reformas sociales. Estos grupos se formaron especialmente en el sur del país, acudiendo a un llamado de Leonel Brizola, senador, nacionalista radical, cuñado de Jango y ex gobernador de Río Grande do Sul, quien había resistido a la primera intentona golpista y tenía por lo tanto un gran prestigio nacional.

Pero una de las demostraciones más sintomáticas del ambiente contestatario que existía en el país fue cuando la sublevación llegó al interior del propio aparato represivo, estallando primero, en 1963, en el ejército a través del levantamiento de los sargentos de Brasilia y, en el año 1964, en la marina, con la creación de una asociación de marinos que no pudo ser reprimida por la oficialidad al pasarse los marinos represores al lado de los "insubordinados" reunidos en la sede de la Federación Nacional de los Trabajadores Metalúrgicos. La concesión de Goulart a las demandas de los marinos de constituir su asociación de clase y la dimisión del ministro de la Marina que se había opuesto a las mismas fueron la chispa que encendió el golpe militar. La situación era insoportable para los intereses burgueses-imperialistas. Había que detener violentamente la "insubordinación" y la "subversión". El golpe de abril de 1964 fue pues, en palabras de uno de sus líderes, "una contrarrevolución preventiva". El golpe culminó con el contexto de una intensa movilización promovida para lograr la unificación de las clases dominantes y atraer hacia el golpismo a significativos sectores de las clases medias, asustadas por el ascenso generalizado del movimiento popular. Su antesala fue la histérica marcha "de la familia, con Dios y por la propiedad" que se realizó en São Paulo, con la participación de aproximadamente quinientas mil personas, en su mayor parte provenientes de las clases medias. Si bien con menor impacto, otras movilizaciones similares fueron realizadas en otras ciudades del país. Estas marchas contenían características indiscutiblemente fascistas.

Frente al golpe, Jango, el líder máximo del nacionalismo-populista, no reaccionó. Él, latifundista de hecho, burgués "progresista" de corazón, entendió muy bien que la legalidad sólo podría ser mantenida apelando al respaldo, ahora, a través del combate, de los sectores populares, de la clase obrera en particular. Esto significaría lanzar el país en la guerra civil. Por cierto, había una fuerte posibilidad de que el pueblo saliera victorioso —pese a los navíos de guerra norteamericanos que navegaban por las costas de Río de Janeiro por si fuera necesario intervenir... Pero, ¿cuál sería el resultado de un eventual triunfo de una guerra popular? La Revolución cubana había indicado el camino. El populista Goulart no

era el hombre para esto. Prefirió capitular sin resistencia abandonando el país y dejando perplejo al liderazgo sindical —controlado por él y por el PCB—, a su cuñado Brizola que había asumido el poder en Río Grande do Sul, a los militares nacionalistas y a los sargentos con los que se había reunido pocos días antes del golpe en una demostración de fuerza impresionante, quienes estaban impreparados para asumir por sí mismos la responsabilidad de la lucha. Se intentó una huelga general sin convicción, sin consignas, sin liderazgo. Al mismo tiempo las manifestaciones aisladas y espontáneas de resistencia y protesta fueron pronto liquidadas por una represión implacable de una burguesía que sí estaba dispuesta a jugar el todo por el todo para triunfar. Frente a la represión por una parte y a la capitulación del liderazgo, por otra, el potencial combativo de las clases dominadas fue paralizado. La rebeldía que existía en el interior del propio aparato represivo no fue canalizada; ni siquiera llegó a manifestarse de manera significativa. Esto era natural pues la división de las fuerzas armadas sólo se consuma cuando las clases revolucionarias, especialmente el proletariado, se lanzan con decisión a la ofensiva.

El desarrollo de los acontecimientos en 1964 demostraba que la clase obrera brasileña no había alcanzado una conciencia revolucionaria y una independencia organizativa que le permitiesen canalizar la inquietud popular que había llegado a niveles de movilización muy importantes. Ella continuaba sojuzgada en lo fundamental a una ideología, a una organización política y a un liderazgo populistas.

Así, como una ironía trágica de la historia, en el día 1 de abril —que tradicionalmente era conmemorado por el pueblo brasileño como el día chistoso, de la mentira, el "día de los inocentes"— ya estaba consumada lo que las clases dominantes denominaron la "revolución libertadora". Empezaba otro capítulo de la misma historia de dependencia y explotación, el capítulo más oscuro y siniestro de la vida del país.

VII. LA DICTADURA MILITAR

Las primeras medidas del régimen dictatorial fueron, como no podían dejar de serlo, de carácter represivo. A la represión política que iba desde la anulación del mandato de parlamentarios, la suspensión de derechos políticos, la disolución de los partidos políticos, la persecución de las organizaciones y partidos de izquierda, la censura de la prensa, hasta el encarcelamiento y tortura del liderazgo popular, se yuxtapuso una represión social, como la destrucción de las organizaciones populares en general y en particular de las asociaciones obreras, campesinas, estudiantiles, la intervención en los sindicatos, la censura a las obras artísticas y culturales —de canciones, teatro, cine— y, sobre todo, se pasó a instrumentar la represión económica a través de una ortodoxa política de estabilización monetaria, tal cual preconizaba el Fondo Monetario Internacional, organismo económico máximo del imperialismo, con el objeto de contener la inflación y crear las condiciones para un nuevo ciclo de expansión de la economía capitalista, en base a la contención de los salarios y de la restricción de créditos a la pequeña

empresa. Se liquidó asimismo el programa de reformismo agrario con el cual Jango había coqueteado en los estertores de su gobierno. Se trató también de equilibrar la balanza de pagos a través de la contención de las importaciones, la liberalización cambiaria y el abandono de los subsidios al precio del trigo y del papel de prensa importados. Estas metas estaban contenidas en un plan de emergencia del gobierno (PAEG).

De esta manera, en los primeros años del régimen militar se trató de "sanear" la política, la sociedad y sobre todo la economía brasileñas, con la finalidad de hacerla más atractiva para los inversionistas, especialmente extranjeros.

Después de 3 años de depresión económica que generó una gran inquietud en los trabajadores y en la pequeña y mediana burguesía, a partir de 1967 se empezaron a notar los frutos de esta política a través de la obtención de tasas más significativas de crecimiento de la economía. La burguesía ya había cumplido las condiciones básicas de estabilidad política y económica que hacían de nuevo la economía brasileña un suelo fértil para las inversiones foráneas.

Durante los primeros 3 años de dictadura militar se había acentuado el proceso de concentración y monopolización pues las empresas más débiles no pudieron sobrevivir ante la política de restricción de créditos. El capital extranjero volvió a penetrar, desde entonces, de manera masiva en el país.

Es importante hacer algunas consideraciones sobre quiénes, es decir, qué clases sociales, detentan el poder en Brasil. La aclaración de este aspecto es de suma importancia no sólo para definir el carácter del régimen brasileño sino para vislumbrar la estrategia y la táctica de su superación; éste debe ser, a nuestro juicio, el objetivo central hacia el cual debe apuntar el análisis de los científicos sociales que están comprometidos con la alternativa popular y revolucionaria.

Es verdaderamente peregrino considerar que "el poder efectivo" se encuentra a secas en manos de los militares y que éstos son quienes lo implementan, en alianza con burócratas y académicos, que aportan "informaciones, estudios y planes".[10] Vayamos por partes. Naturalmente, la jefatura del ejecutivo central ha sido desde el golpe ejercida por militares. Éstos han ocupado también varios cargos de importancia clave, sea en los ministerios, sea en grandes empresas estatales o en organismos de gobierno. Son pues, sin duda, piezas destacadas del régimen dictatorial. Aún más, el régimen militar brasileño es el precursor de una nueva etapa política en América Latina: las fuerzas armadas, como institución, asumen la responsabilidad de la gestión del estado. Ahora bien, ¿en interés de qué clases se concibe y se implanta la política de la dictadura brasileña? Obvia y prioritariamente en interés de la gran burguesía monopólica nacional y extranjera, es decir, de las burguesías industrial, financiera y comercial integradas en una unidad económica nacional a través de sus socios mayores: el gran capital internacional. Los intereses de las viejas oligarquías, fundamentalmente de los latifundistas, son también satisfechos en la medida en que se mantienen intactas sus bases de dominación, vale decir, por el hecho de que se les respeta el derecho de su propiedad monopólica de la tierra. El estatuto de la tierra votado en seguida del golpe de 1964 y el

[10] Mario Henrique Simonson y Roberto de Oliveira Campos, *A nova economia brasileira*, José Olympio Editora, Río de Janeiro, 1964, p. 41.

catastro rural realizado en 1964 por la dictadura buscan, sin embargo, modernizar el latifundio y obligarlo a asumir un carácter más productivo.

Naturalmente, y esto es meridianamente claro en el caso brasileño, la gran burguesía no delega completamente a los militares la función de defensores de sus intereses, aunque existan varios casos de militares de alta graduación que son hombres provenientes de las clases dominantes y que están vinculados directamente con la gran empresa privada nacional o extranjera. La gran burguesía participa *directamente* y de manera incontrovertible en el ejercicio del poder detentando su hegemonía.[17]

El economista soviético S. S. Michin se ha preocupado en destacar cómo la "unión personal de los monopolios con el gobierno y el aparato de estado es ampliamente practicada en Brasil".[18] Michin registra una larga lista de nombres de individuos que han ocupado y que ocupan cargos claves de dirección en el gobierno brasileño, antes y después del golpe militar (aunque es importante que destaquemos que la presencia de la gran burguesía en el gobierno se acentúa notoriamente a partir de éste), y que son de las mejores expresiones de la gran burguesía industrial, financiera y comercial, así como de su asociación directa o indirecta al capital extranjero. Es importante citar algunos de los casos más ilustrativos:

Walter Moreira Salles, dirigente del conglomerado Unión de Bancos Brasileños, embajador de Brasil en Estados Unidos; H. Láfer, fundador y socio del grupo monopolista de la industria del papel y celulosa Klabin-Láfer, ministro de Hacienda durante el gobierno Dutra; Roberto de Oliveira Campos, ideólogo y colaborador de todos los gobiernos burgueses: colaboró en el segundo gobierno Vargas, fue jefe del Banco de Desarrollo en el período de Kubitschek y uno de los autores del programa de metas, fue asesor de Janio Quadros, ministro de Planeamiento de Castelo Branco y actualmente es embajador en Inglaterra, director-presidente del Investbanco, cuyos principales accionistas son el Chase Manhattan Bank y el First National City Bank; también durante el gobierno de Castelo Branco se destaca la

[17] Roberto Campos, uno de los más distinguidos teóricos del desarrollo dependiente, ha analizado cómo se han cumplido los prerrequisitos para el nuevo auge desarrollista así como quiénes detentan el poder en Brasil:

"El primero de los ingredientes que hacían falta era un satisfactorio grado de *estabilidad política* que permitiera: a] una suficiente continuidad administrativa en la ejecución de los planes y programas y en la implantación de políticas económicas; b] una razonable estabilidad en las 'reglas del juego' capaz de permitir un adecuado planeamiento empresarial y facilitar la absorción de capitales externos.

"A partir de 1964, hemos logrado alcanzar una razonable estabilidad política, bajo un régimen al que algunos científicos políticos (*¡sic!*) describen como 'autoritarismo modernizante' (...)"

El mismo teórico enfatiza en seguida cómo sedimentó la doctrina del "desarrollo con seguridad", producto de una "alianza táctica entre militares y tecnócratas". Los últimos, "reclutados desde la burocracia o de la vida académica, disponían de un estoque de informaciones, estudios y planes, que no lograban que fueran implementados, sino de manera fragmentaria y discontinua, por carecer de apoyo político". Vale destacar que pese a que menciona esta alianza el autor dice que el "poder efectivo" fue asumido por los militares. *Op. cit.*, p. 41.

[18] S. S. Michin, *Proceso de concentración de capital no Brasil*, Ed. Civilização Brasileira, Río de Janeiro, 1973, pp. 185, 187, 253 y 254.

presencia en puestos gubernamentales de las siguientes expresiones directas de los intereses burgueses imperialistas: Vasco Leitao de Cunha, ministro de Relaciones Exteriores, director-presidente de la filial de la Siemens germano-occidental, presidente de la Standard Electric, presidente de la sociedad anónima de hoteles Sheraton, representante del grupo Morgan en Brasil; Juracy Magalhaes, ex gobernador de Bahía, ex embajador en Estados Unidos, ministro de Relaciones Exteriores, presidente de la empresa telefónica sueca Ericson y de muchas otras compañías como la Dinalube Mordolin, S. A., la Deltec, ligada al Chase Manhattan Bank; Mario Tibau, ministro de Minas y Energía, presidente de la compañía americana Seltec que actúa en mineración perteneciente al grupo monopolista Sanderson and Porter; D. Nogueira, director del Banco Central de Brasil, presidente del holding del Banco Rothschild en Brasil; Octavio Gouvea de Bulhões, ministro de Hacienda, hijo de banquero y socio de Roberto Campos en la Consultec, antes del golpe había sido director de la SUMOC; P. E. Martins, ministro de Industria y Comercio, director de la filial brasileña de la Alcan (Aluminium of Canada) y presidente de la filial brasileña Unión Carbide. Durante el gobierno de Costa e Silva es interesante resaltar la presencia de Helio Beltrao, ministro de Planeamiento, director comercial de la Mesbla y en seguida, vicepresidente de la misma; Edmundo Macedo Soares, general en retiro, ministro de Industria y Comercio, director de fábricas del sector de defensa, director de la Usiminas, director presidente permanente de la Mercedes Benz en Brasil y presidente de la Confederación Nacional de la Industria, entidad de la burguesía nacional.

Hay muchos otros casos como el de Ademar de Queiroz, quien fue presidente de la Petrobrás y ocupó también el cargo de presidente de la filial brasileña Bakol, del trust Dow Chemical; Rocca Diegues Junior, director comercial de la Petrobrás y, en seguida presidente de la Unibar, holding de la compañía petroquímica Unión del monopolio americano Philips Petroleun; Mario Behring, presidente de la Eletrobrás y John Catherine, director de la compañía estatal de Furnas, hacen parte de la dirección del grupo Sanderson and Porter en Brasil; José Garrido Torres, director del Banco del Brasil, ocupó también el cargo de director-presidente del Banco Lowndes cuyos accionistas son bancos americanos, ingleses e italianos; E. Geisel, director presidente de la Petrobrás durante el gobierno de Médici, es pariente de J. Geisel, director permanente de la filial brasileña de la Royal Dutch Shell-Sell del Brasil.

Sería excesivo seguir enumerando todos los componentes de esta lista. El autor saca de ella la conclusión de que "gracias a su influencia financiera y a las ligazones que tienen en los medios gubernamentales los grupos monopolistas extranjeros en Brasil influyen en la vida económica y política del país".[19] Más que influir, sin duda el imperialismo, a través de sus socios-menores, condiciona en función de sus intereses, que se entremezclan con los de éstos, la orientación de la política y de la economía brasileña.

Es muy clara la participación *directa* en el poder de representantes de los intereses burgueses e imperialistas. Éstos ocupan, por lo general, y prioritariamente

[19] *Ibidem*, p. 187.

los cargos directivos de la economía, así como los que están relacionados con la política externa.

El mismo autor que hemos citado destaca la misma "influencia a través del Parlamento, en donde, además, hay muchos diputados y senadores que son representantes directos de los intereses del capital privado brasileño y extranjero, así como de los grandes hacendados; influencia que es ejercida (también) a través de las entidades nacionales y regionales de empresarios (confederaciones y federaciones) de la industria, comercio, agricultura y en las cámaras de comercio".[20] Resalta igualmente el control ejercido sobre los "órganos estatales de planeamiento, programación y consultas; a través de los llamados grupos ejecutivos de sectores, adjuntos al Ministerio de Industria y Comercio; a través de organizaciones económicas regionales (Sudene, Sudan, Suframa, DNOS, etc.) a través de las comisiones nacionales de desenvolvimiento de la región centro-oeste, de desenvolvimiento industrial, de energía atómica, de desenvolvimiento de la marina mercante, del carbón, etc.; a través de los consejos nacionales de recursos minerales y energía eléctrica, investigaciones científicas, petróleo, telecomunicaciones, caucho, comercio exterior, minas y metalurgia, etc.; a través de los consejos de comercio exterior, política aduanal, colaboración técnica en los límites de la Alianza para el Progreso", etcétera.[21]

Ahora bien, por supuesto que el grueso de la ejecución de la política trazada por la gran burguesía (industrial, financiera, comercial) —que detenta el "poder efectivo"— en alianza estrecha con el imperialismo y con la vieja oligarquía es implementada por una burocracia y tecnocracia civil y militar proveniente de los sectores de las clases medias. Éstos son los asalariados encargados de ejecutar una política dibujada arriba. Éstos son los intermediarios entre la cúspide del sistema de dominación y el conjunto de las clases oprimidas. Por supuesto, los sectores que implantan la política de dominación participan también como agentes del sistema, y se benefician de él, a través de sus altos sueldos, del prestigio que les otorgan sus cargos, etc., pero siempre como fuerzas subalternas del capitalismo dependiente brasileño.

El golpe militar de 1964 no alteró sustancialmente la composición de clases del estado brasileño. Mantuvo en el poder a los mismos personajes del sistema de dominación, aunque reforzó la preeminencia de la gran burguesía asociada al imperialismo al hacer aún más permeable la penetración extranjera en la vida económica y al aumentar su peso político y social en los destinos de la nación. Y, si bien fueron excluidos algunos miembros burgueses de la vida política pública

[20] *Ibidem*, p. 245.

[21] *Ibidem*, p. 245. Después de revisar estos tan significativos indicadores, de conocimiento público, es verdaderamente grotesco, sobre todo de parte de uno de los más destacados exponentes del ejercicio del poder burgués en Brasil, como Roberto Campos, considerar que el "poder efectivo" está en manos de los militares aliados con los tecnócratas entendidos como burócratas y académicos. Él mismo es una expresión de las múltiples facetas de tales "tecnócratas": ministro, director de un grupo financiero, importante accionista de varias empresas, asesor de varios gobiernos y grupos económicos, embajador, profesor universitario e ideólogo. Si no todos los tecnócratas pueden presentar un currículum tan multifacético se puede ver a través del propio Roberto Campos los profundos vínculos de los grupos económicos con el estado.

por un plazo determinado, a través de la anulación de los derechos políticos —los Kubitschek, los Quadros, los Goulart, etc.— se respetó sus propiedades privadas, sus negocios, sus derechos a seguir acrecentando sus ganancias en el país. Los sectores de las clases medias que son servidores directos del régimen dictatorial, vieron acrecentadas sus "propinas" por medio de una serie de ventajas en función de su ubicación estratégica en el interior del sistema. Las más altas jerarquías militares, así como los técnicos y profesionales civiles de más alto nivel (o con mayor subserviencia y oportunismo) han sido recompensadas con honores, fama y, sobre todo, con altas remuneraciones... Estos individuos, si bien provenientes de las clases medias, en la medida en que pasan a actuar en función del sistema de dominación y a disfrutar de sus favores objetivamente identifican sus intereses con el mismo y pasan a defenderlo hasta con más convicción que las propias clases dominantes. Ésta es una historia demasiado antigua en la lucha de clases...

VIII. EL "MILAGRO" ECONÓMICO Y LA FASCISTIZACIÓN

Desde 1968 hasta 1973 se registraron índices progresivos de desarrollo industrial y (menos acentuados) de crecimiento de la producción agropecuaria. Esto era producto de la cómoda situación que fue creada para las inversiones, debido a la mezcla de bajos salarios, las especiales condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo, la existencia de mano de obra calificada para responder a las necesidades de una industria tecnológicamente adelantada, el clima de "tranquilidad" política conseguido a costa de una represión implacable, los estímulos (financiamientos, exenciones fiscales, etc.) al capital privado nacional y extranjero para diversificar sus inversiones en nuevas ramas y en nuevas regiones económicas y sobre todo para aumentar la exportación. Todo esto se coronaba con la adopción de una ideología estatal de plena libertad a la iniciativa privada internacional y nacional.

Entre 1967 y 1968, durante el período gubernamental de Costa e Silva, cuando empezaban las señales de una posible recuperación de la economía, hubo en Brasil un renacimiento del movimiento popular. Este nuevo ascenso de las masas alcanzó su apogeo con importantes huelgas en São Paulo —especialmente en la ciudad de Osasco, en donde el movimiento huelguista adquirió un carácter político de cuestionamiento del régimen—, Río de Janeiro y en Minas Gerais. El movimiento fue aplastado a hierro y fuego y varios de sus líderes tuvieron que refugiarse en la clandestinidad, siendo posteriormente muertos o detenidos. El ascenso se manifestó también de manera impresionante en el medio estudiantil. Los estudiantes promovieron varias manifestaciones de protesta entre las cuales vale destacar la marcha, realizada en Río, de repudio por el asesinato de un estudiante por las fuerzas represivas. Contó con la participación de cerca de cien mil personas que encontraron así una manera de expresar su repudio a la dictadura. También sobre el movimiento estudiantil la represión se ejerció de manera implacable, sobre todo a partir de noviembre de 1968 cuando la dictadura promulgó el Acta institucional número cinco que daba plena libertad de actuación al aparato re-

presivo. En consecuencia de la represión generalizada que se desencadenó sobre las organizaciones de masa y la prensa, la lucha de masas pasó a un segundo plano y el escenario político quedó dominado por el enfrentamiento de la dictadura con las varias agrupaciones revolucionarias que se habían formado a partir de 1967. La característica común de todas esas nuevas organizaciones de izquierda revolucionaria era el rechazo a las tesis del PCB y el planteamiento de la necesidad de prepararse para la lucha armada insurreccional.

Según las tesis de 1966, el PCB se autocriticaba de haber incurrido en una desviación izquierdista durante el gobierno de Goulart exigiéndole trasformaciones revolucionarias más avanzadas y negándose a apoyarlo en momentos decisivos como en el pedido de estado de sitio en ocasión del levantamiento de los sargentos en 1963. En consecuencia, el PCB pasaba a propugnar la formación de un "frente amplio" en contra de la dictadura actual que sumase a todas las fuerzas de oposición al gobierno. De hecho el PCB se abocó a la tarea de articular la oposición burguesa en el país, incluyendo los líderes golpistas desplazados por el grupo en el poder, como Carlos Lacerda y Ademar de Barros.

En función de estas tesis el propio PCB se había dividido verticalmente dando origen a varias organizaciones proinsurreccionales. En 1967 surgieron la Alianza de Liberación Nacional (ALN), dirigida por Mariguela, quien había sido uno de los más destacados dirigentes del PCB; el Partido Comunista Brasileño Revolucionario (PCBR) dirigido por los ex dirigentes del PCB Mario Alves y Jacob Gorender, y el MR-8, escisión de la Juventud Comunista en Río. La Política Obrera se dividió también y dio origen a dos nuevas organizaciones: el Comando de Liberación Nacional (COLINA) y la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) las cuales posteriormente se funden y dan origen a la Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR Palmares), que en seguida se divide de nuevo originando otra VPR. También de la unión de los remanentes de la POLOP y de un sector disidente del PCB surgió el Partido Obrero Comunista (POC); la Acción Popular se declaró marxista y asumió una orientación "pro-china" dando origen a una escisión, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); el Partido Comunista do Brasil, escisión del PCB en el comienzo de la década de los sesenta, con una orientación "pro-china", de un lado recibió un contingente de la disidencia del PCB y de otro sufrió una escisión guerrillera, el Ala Roja.

Pero, pese a la impresionante cantidad de siglas de organizaciones revolucionarias, éstas estaban compuestas fundamentalmente por elementos provenientes de las clases medias, sobre todo por estudiantes, profesionales y ex militares. Entre éstos, la figura de mayor realce por su heroísmo fue la de Carlos Lamarca, quien abandonó en este período las filas del ejército para sumarse a la lucha clandestina de la VPR y fue muerto en combate cuando trataba de organizar la lucha guerrillera.

La cárcel, el exilio o el asesinato fue el destino de prácticamente todos los miembros de la izquierda revolucionaria brasileña. Esto se debió fundamentalmente al hecho de que ninguna de estas organizaciones logró vincularse efectivamente con las masas oprimidas, pese a las simpatías que despertaban en ellas. La represión intensa y sistemática pudo golpear profundamente, una por una, a través de un método que se explotó con toda crueldad: la tortura.

La izquierda revolucionaria no logró penetrar profundamente en las masas populares, particularmente en la clase obrera, por graves errores estratégico-tácticos. No es posible realizar aquí un análisis detenido de las razones que posibilitan explicar las causas de estos errores. Pero vale mencionar, aunque sea de paso, que éstos deben ser buscados en el intento de aplicación mecánica de pretendidos "modelos" de otras revoluciones aplicadas a la situación brasileña. Por ejemplo, el folleto de Regis Debray *¿Revolución en la Revolución?*, pese a que presentaba una interpretación deformada de la Revolución cubana —o quizá por esto mismo, por presentarla como una sencilla empresa desprovista de sus particularidades y complejidades...— se trasformó en un guía-para-la-acción de los jóvenes revolucionarios, siendo un manual burdo de la llamada "teoría del foco". Esta concepción, profundamente elitista, entregaba los elementos básicos que justificaban y que ofuscaban la conciencia crítica de la izquierda por su situación de desvinculación orgánica y política de las masas populares. De la misma manera, la concepción de Mao Tse-tung sobre la guerra popular y campesina era mal interpretada por una de las corrientes pro-chinas que se trasladó al campo, olvidándose que el eje central del capitalismo brasileño se encontraba en su infraestructura industrial y que el proletariado urbano es la fuerza motriz por excelencia de la revolución brasileña. Por otro lado, la influencia de la revolución cultural dio origen a una corriente que defendía la ida hacia las masas y al democratismo asambleístico como único camino revolucionario, dando origen a lo que se llamó el "masismo".

Los serios errores analítico-explicativos del carácter de la revolución así como la incapacidad de implantar una línea táctica que captara la adhesión popular, hizo que la izquierda fuese una presa fácil de la represión burguesa. De todos modos, la dictadura se asustó frente a la amenaza de que el movimiento insurreccional —que se lanzó de lleno en espectaculares acciones de guerrilla urbana— llegase a provocar una adhesión de la clase obrera o del campesinado, así como estimulase un movimiento liberal que se había lanzado hacia la oposición abierta al régimen entre 1967 y 1968. Es así que, cuando el Congreso votó en contra del desafuero del diputado Marcio Moreira Alves para ser procesado por la justicia militar por declaraciones políticas consideradas subversivas, la fracción más derechista y profascista del régimen militar tomó la ofensiva. En diciembre de 1968 se promulgó el Acta institucional número 5, que suspendía la aplicación de la propia Constitución autoritaria que el régimen se había dado en el año 1967. Esta Acta representaba la institucionalización de una serie de medidas de carácter fascista. Ponía en receso el Parlamento; llevaba hasta las últimas consecuencias la censura sobre la prensa, las casas editoriales y los medios de comunicación de masas; suspendía completamente los derechos individuales, como el recurso del *habeas corpus;* legitimaba la represión sobre el movimiento popular y se arrogaba la prerrogativa de intervenir en sus asociaciones; establecía las condiciones para la masacre de los revolucionarios por medio de su asesinato en calles y prisiones, al negar cualquier poder a la justicia civil para intervenir en tales actos. Tales preceptos institucionales se complementaban con la elevación a un nivel superior del aparato de contrainsurgencia por medio de la creación de una Comisión nacional de seguridad, la formación de un superaparato policial que

unificaba los organismos represivos de las fuerzas armadas y los grupos derechistas, otorgándoles plena libertad de movimientos, suspendía las garantías de la magistratura, suspendía las elecciones directas para gobiernos estatales y definía un gran número de municipios que, por ser considerados claves para la seguridad nacional, no podrían realizar elecciones. Se establecía también la anulación de los derechos políticos de quienes determinase el dictador, sin precisar el tiempo de duración de la medida. Por último, se dejaba como indefinido el tiempo de "estado de arbitrio". Por supuesto, todo esto sigue vigente en 1975.

Es importante volver a insistir aquí sobre algunas consideraciones que hemos hecho en otras oportunidades sobre las características fascistas de la dictadura brasileña, pues siempre han existido intentos de cuestionar esta caracterización, tanto por parte de los ideólogos burgueses —que como hemos citado anteriormente tratan de utilizar el concepto muy general de autoritarismo— como también por parte de respetables científicos sociales de izquierda.

Nosotros creemos que, como lo hemos planteado en otras oportunidades, no se puede perder de vista los *aspectos esenciales* que especifican un régimen fascista. Sólo teniéndolos en consideración este concepto puede ser utilizado para definir situaciones históricas concretas. Es la explicitación de estos *aspectos esenciales* lo que nos permite encontrar denominadores comunes en experiencias distintas y particulares. Por ejemplo, el análisis comparativo de los casos típicos de fascismo en Europa nos revela caracteres comunes de funcionamiento del régimen, sea en la Alemania de Hitler como en la Italia de Mussolini, o en el Portugal de Salazar y Caetano, bien como en la España de Franco. Sin embargo, cada una de estas experiencias propias del fascismo presenta una serie de particularidades nacionales que no pueden ser encontradas en los demás países. Alemania fue sin duda el país en donde este tipo de régimen llegó hasta sus últimas consecuencias. Si esto fue posible allá y en parte en Italia, no lo fue en España ni en Portugal. El carácter despejado y consecuente del fascismo alemán, que lo condujo a desafiar al mundo liderando una guerra imperialista, se explica, en última instancia, por el intenso desarrollo de sus fuerzas productivas que acentuaba el carácter monopólico de su economía cuyo inmenso potencial económico, bélico y de dominación en general se encontraba frustrado por su situación desmejorada respecto al dominio colonial efectivo que podría ejercer. Por otro lado, al asumir el poder después de un largo desgaste de las fuerzas proletarias divididas y debilitadas por una guerra civil disfrazada en enfrentamientos parciales de milicias opuestas, el nazismo logró liquidar las organizaciones revolucionarias del proletariado. Estos factores generaron las óptimas condiciones para que el país se embarcase en la trágica aventura bélica racionalizada por el mito de la superioridad de la raza. Ahora bien, estas condiciones que posibilitaron que el fascismo alemán fuera llevado a desarrollar al máximo su potencial de dominación no existieron en las demás experiencias concretas de fascismo en Europa, especialmente en España y Portugal, países económicamente retrasados y pobres. Trataremos pues de precisar brevemente cuáles son los aspectos esenciales del fascismo.

En primer lugar, destacamos su aspecto más general que reside en la necesidad de defender desesperadamente el sistema capitalista contra la "subversión del orden" por parte de las clases dominadas. Esta necesidad existe, por supuesto, er

todo capitalismo, pero en situaciones históricas particulares, cuando el sistema ha sufrido o sufre una amenaza efectiva a su supervivencia, se genera, en sectores que representan los intereses dominantes una reacción histérica y temerosa en contra de un eventual nuevo ascenso revolucionario, independientemente de que sobrevivan o no las condiciones objetivas para su gestación. Obviamente, para que el fascismo triunfe es necesario que la lucha de la clase obrera haya fracasado momentáneamente. Esto ha ocurrido en todos los casos de fascismo europeo, quizá, con menor intensidad en Portugal. De allí que el fascismo surja siempre como régimen de salvación nacional, contra el "caos" y el "desorden". Esta fórmula oculta siempre la necesidad de crearse las condiciones de estabilidad y seguridad para que el proceso de acumulación capitalista pueda proseguir sin trabas. Por esto el fascismo tiende a triunfar en los períodos de inicio de una recuperación económica. Para esto se hace necesario también, un fuerte proteccionismo estatal que lleva al fortalecimiento del capitalismo de estado, el que crea las bases infraestructurales para el desarrollo de la gran empresa privada monopólica.

De allí proviene también su segundo aspecto: la necesidad de reprimir sistemática e implacablemente al movimiento popular, de destruir las organizaciones revolucionarias, particularmente las de la clase obrera, que se trasforman en el enemigo principal. La represión se hace inescrupulosa, sin dejarse intimidar por veleidades democráticas. De todos modos, para consolidarse como tal, el régimen necesita generar su propia institucionalidad de la represión, de allí adviene su tercera característica: una constitucionalidad totalitaria basada en la prerrogativa, por parte del estado, para el ejercicio de la represión en contra de todo lo que se califica como subversión del orden. Desaparece el concepto de ciudadanía y de la sociedad civil separada del estado. Para hacer más operativo el control del aparato estatal represivo sobre el conjunto de las clases potencialmente contestatarias se las organiza en forma corporativa. De su carácter esencialmente represivo proviene el corolario necesario: la militarización de la vida social en su conjunto, es decir, la implantación de una fuerte disciplina tanto en las actividades productivas —con el objeto de aumentar la productividad para acrecentar las ganancias— como en la vida política para imposibilitar la rebeldía de los trabajadores, y también en los más diversos tipos de actividades culturales y hasta en la vida familiar. Desde este punto de vista, el fascismo permea hasta los recónditos más reservados de la vida privada. No se soporta ninguna forma de oposición, ni siquiera de divergencia. Se trata, pues, de militarizar bajo una ideología irracionalista de afirmación nacional o racial el conjunto de la nación. Se trata de internalizar los valores del estado, del partido o movimiento que lo sostiene superando aparentemente el individualismo liberal por la predominancia del cuerpo social depurado y purificado del comunismo y otras tendencias "disgregadoras" de la vida social.

Por esto la política fascista se preocupa muy particularmente con la formación, de acuerdo con sus principios, de las nuevas generaciones. La militarización de la enseñanza es un fenómeno típico del fascismo.

Un cuarto aspecto se relaciona con su base social. El fascismo se origina en la pequeña burguesía y la tiene como su principal base social. Él también utiliza a los sectores marginales, al lumpenproletariado. Sin embargo el fascismo sólo puede con-

vertirse en una fuerza nacional cuando recibe el apoyo y pasa a ser instrumentalizado por el gran capital monopolista, como fórmula final de salvación del capitalismo. Es por esto que el fascismo sólo se desarrolló de manera coherente en la etapa de decadencia final del capitalismo cuando el gran capital se ve obligado a abandonar sus concepciones liberales para aceptar el desagradable espectáculo de las bandas fascistas ocupando los puestos de los políticos conservadores y sustituyendo la elegancia formal de la democracia liberal por el fanatismo demagógico que trituró incluso a muchos burgueses tradicionales. No es sin razón, pues, que la gran burguesía, sus cuadros políticos y militares recurren al fascismo de mala gana y con las narices tapadas.

Partiendo de esta caracterización muy general del régimen fascista podemos aproximarnos a una explicitación del carácter del régimen brasileño con todas sus tintas y matices. Éste contiene una serie de elementos que sin duda indican características básicas fascistas pese al hecho de que son muchas sus especificidades. Naturalmente, el fascismo brasileño se aproxima mucho más al español y al portugués de la época salazarista. De todas maneras, en la búsqueda de un mayor rigor conceptual, utilizaremos la expresión neofascismo con el objeto de precisar que se trata de un régimen de tipo fascista que se constituye en una época en que sus expresiones más elaboradas ya han sido derrotadas o están en decadencia, y que contiene además ciertos caracteres nacionales propios que advienen de su condición de un país capitalista dependiente, cuyo sistema de dominación está permeado y mediatizado por el dominio imperialista. Es, pues, un caso típico de fascismo en una situación básica de dependencia. Destaquemos cuáles son los *elementos esenciales* que nos permiten conceptualizar el régimen brasileño como una dictadura de corte neofascista:

Primero, el golpe militar del 64 dio origen a un régimen de gobierno de excepción que suspendió la antigua constitución de 1945 y que se basaba en actas institucionales. En 1967 fue promulgada una nueva Constitución que incorporó estas actas institucionales; en seguida el Acta institucional núm. 5 dictada en 1968, contenía características típicas de un régimen totalitario.

Este régimen fue la expresión de la necesidad histórica de las clases dominantes de paralizar el ascenso del movimiento de masas, de liquidar las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, profesionales, con el fin de garantizar la sobrevivencia del sistema. Hasta el momento del surgimiento del movimiento de masas en el año 1968, el régimen brasileño aún no extremaba su carácter represivo —aunque lo ostentaba claramente— ni buscaba constituir un nuevo tipo de estado, aspirando retornar a los cauces liberales. El ala fascista del régimen, a pesar de poseer una fuerza considerable, no determinaba el conjunto de la política y de la ideología del estado. Por el peso de la institución militar en el gobierno y en el aparato del estado, el régimen podía ser definido como una dictadura militar de tendencias fascistizantes. A partir de 1968 la represión tuvo que sufrir un cambio de calidad, al profundizarse ya sea para controlar una opinión pública que le había hostilizado, ya sea para combatir centralizadamente la abierta oposición armada. A partir de 1968 se ensayó un sistema de vigilancia directa en las fábricas, en las escuelas y en los locales de vivienda. A falta de un apoyo organizado de la pequeña burguesía que se había apartado del régimen al sufrir los

efectos negativos de la política económica, éste tenía que apoyarse básicamente en el aparato policial-militar. Algunos grupos fascistas que se habían desarrollado en contraposición al avance del movimiento popular, fueron asimilados al aparato represivo como colaboradores, otros fueron integrados al aparato ideológico, particularmente a la educación.

Se trató de implementar una fuerte mística de la unidad nacional, de la "patria-grande", del "Brasil gran-potencia", del "milagro brasileño", que se apoyaba básicamente en la recuperación económica que al fin parecía abrir una era de "progreso" al país. Se empezó a desarrollar una intensa campaña de "educación cívica" tratando de rescatar los "valores" nacionales e inculcando especialmente en la juventud los ideales de un patriotismo chauvinista. (A falta de mejor bandera, se aprovechó para esto, grotescamente, los éxitos del fútbol brasileño). A la vez, se trató de liquidar la más auténtica cultura popular a través de la persecución y censura de las obras teatrales, de las canciones, del cine, tratando de hacer de cada individuo un policía, un delator, o un cobarde, temeroso de sus propias ideas.

Entre 1969 y 1973 la ofensiva fascistizante llegó a un punto culminante. En lo internacional, el intento de trasformar el país en una gran potencia llevó a la intervención encubierta en Bolivia, Uruguay y Chile. La idea de exportar el "modelo brasileño" de "seguridad y desarrollo" encontró adeptos en varios países latinoamericanos. Se inició una ofensiva en África buscando sustituir el fallido imperio portugués, estableciéndose acuerdos con Sudáfrica y buscando una base de apoyo en los demás regímenes reaccionarios del continente. La ambición de convertirse en potencia atómica y militar hizo establecer un ambicioso plan de negociar con sus reservas de uranio para obtener el apoyo de Israel y de Alemania Federal a la política atómica de la nueva potencia del Sur.

La entrada masiva de dólares parecía inagotable y el crecimiento económico sostenido por cinco años empezó a entusiasmar a una capa importante de sectores de altos ingresos en el proyecto del "Brasil gigante" expresado en el eslogan "Brasil —ámalo o déjalo". Se intentaron campañas de movilización para la alfabetización de adultos (el hoy desmoralizado MOBRAL) así como obras grandiosas como la hoy día abandonada Transamazónica. Los viejos militares integralistas fueron estimulados a reactivar su movimiento realizando congresos y conferencias. Las cátedras de "moral y civismo" fueron introducidas en las escuelas secundarias y de "problemas brasileños" en las universidades "depuradas" de los profesores subversivos por segunda vez después de 1964. La imposición de estas materias buscaba formar una nueva generación fascista.

Pero esta movilización carecía de una base real firme. Su único apoyo era el crecimiento económico mantenido artificialmente a través de un endeudamiento gigantesco. Los teóricos del régimen llamaban la atención sobre la falta de un "modelo político" correspondiente al "modelo económico". El partido oficial, la ARENA, había alcanzado en 1972 resultados electorales favorables sobre la golpeada y temerosa oposición consentida, el MDB, pero los votos en blanco y nulos recomendados por la izquierda constituían la mayoría. El debate iniciado en 1972 por Roberto Campos sobre el "modelo político" reflejaba la preocupación del régimen

por encontrar una "legitimidad" y una institucionalidad que le asegurase su supervivencia histórica.

El gobierno hegemonizado por los sectores fascistas se lanza en una política de fantásticos estímulos a las exportaciones de productos del sector primario y secundario. Tal política era absolutamente necesaria —y fue expresada en el eslogan "la exportación es la salvación"— por la imposibilidad de una amplia expansión del mercado interno. Naturalmente, hubo un cierto crecimiento del mercado interno, pero éste era limitado, pues se debía especialmente al aumento del poder adquisitivo de sectores de las clases medias urbanas (aunque se debe destacar que este aumento fue en buena medida estimulado artificialmente por la expansión del sistema de crédito). Es verdad que hubo una cierta expansión de los empleos entre las clases de ingresos muy bajos, pero esto sirvió malamente para compensar la increíble reducción relativa de los sueldos de los obreros. De esta manera, más miembros de las familias pobres obtuvieron trabajo, sin que esto representase un sustancial estímulo a la expansión del mercado.

Por cierto, la política exportadora tenía también como objetivo la obtención de divisas para remunerar el capital extranjero y para cubrir las amortizaciones de la colosal deuda externa. El reconocimiento de este hecho ha servido de panacea, por parte de algunos analistas, para cuestionar el carácter subimperialista del régimen brasileño. No es el caso de entrar aquí de nuevo en una discusión acerca de las tendencias subimperialistas de la dictadura neofascista. Ya ha sido aclarado, en varias oportunidades y por distintos autores, los elementos esenciales que permiten lamentablemente caracterizar de esta manera a nuestro país. Sin embargo, nunca es demasiado insistir, como lo ha hecho Ruy Mauro Marini [22] —quien utilizó por vez primera este concepto—, que según el análisis clásico del imperialismo realizado por Lenin, lo que caracteriza a éste no es meramente la exportación de capitales o manufacturas, sino también su carácter monopólico y el intenso desarrollo del capital financiero que vincula el capital bancario al industrial. El desarrollo de la economía en Brasil y otros países dependientes que alcanzaron un importante desarrollo industrial no puede configurar una economía y una sociedad imperialista porque el sistema de explotación y dominación internos están penetrados y mediatizados por la dominación del imperialismo. De ahí que su lucha por la expansión internacional asuma un sello subimperialista, es decir, la implementación de una política de dominio compartido con otras naciones, dentro de las reglas del juego de la gran potencia imperial, lo que por cierto limita las posibilidades de maniobrar de la burguesía brasileña y define su papel subyugado de clase dominante-dominada. Por esto nos parece peregrino fijarse sólo en uno de los objetivos de la política exportadora, como la necesidad de divisas, que aunque naturalmente no define el paso a una fase imperialista, sin embargo cuando la búsqueda de divisas se dirige a la conquista de mercados para sus mercancías e inversiones en los países de menor desarrollo, ella se trasforma en una de las razones del subimperialismo, aunque no lo agota... El otro argumento que se ha utilizado es la restricta magnitud de las exportaciones de bienes

[22] Ruy Mauro Marini, *Subdesarrollo y revolución*, México, Siglo XXI, 1974, prefacio a la quinta edición.

industriales y sobre todo de capitales. Por supuesto la fase subimperialista está apenas en su comienzo y tiene un largo recorrido por realizar para convertirse en realidad histórica. Pero creemos que no se puede descartar la posibilidad de la afirmación parcial de esa tendencia a corto plazo. Sus síntomas son muy reveladores en muchos aspectos que desnudan la injerencia de Brasil en la economía de países fronterizos. Grandes empresas brasileñas comercian e invierten, con ventajas relativas y sin mayores limitaciones, en territorio paraguayo. A su vez, se intensifica progresivamente la migración tanto de campesinos pobres como de agricultores acomodados brasileños hacia Paraguay y también hacia Uruguay. Los primeros van en busca de mejores oportunidades de supervivencia, los segundos van en búsqueda de mayores ganancias, manteniendo sus vínculos de dependencia con la economía brasileña. Este fenómeno es tan significativo que todo un importante territorio fronterizo de Brasil con ambos países ya se ha dado en llamar el "Brasilguay": "Decenas de millares de campesinos brasileños fueron empujados hasta el margen derecho del río Paraná, en esta década. Dicen que hay 150 mil en un margen de mil kilómetros que se extiende desde Bella Vista a Carlos A. López; llegan a razón de 200 por día a estas tierras absolutamente similares a las que trabajan en su patria".[23] Estos campesinos van creando un mercado brasileño en Paraguay y forman un caldo de cultivo para la penetración de capitales brasileños.

Este estilo de expansión fronteriza se parece en muchos aspectos a la expansión norteamericana hacia el norte de México en el siglo XIX. Una presión demográfica que va abriendo camino a una penetración económica progresiva. Por otro lado, las empresas brasileñas estatales abren camino a acuerdos comerciales y de inversión para el capital brasileño, o extranjero radicado en Brasil, en otros países como Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Movimientos fronterizos de presión demográfica y económica se presentan en otras regiones, particulamente en la Guyana. Las inversiones de brasileños en países africanos completan un cuadro general de una incipiente penetración económica internacional que se mete por zonas marginales del sistema imperialista internacional.

Crecimiento económico acelerado con fuerte concentración del capital nacional

[23] Hamilton Almeida Filho, *EX* núm. 14, São Paulo, 1975. En el mismo reportaje se dice que: "Por ejemplo, uno de cada cinco brasileños sería representante directo de los grandes empresarios. La Unión de Empresas Brasileñas, con sede en Asunción, presidida por el general brasileño Sá Tavares, quien es al mismo tiempo general del ejército de Paraguay (*¡sic!*). —compró casi 200 mil hectáreas al Instituto Paraguayo de Bienestar Rural". Para facilitar el comercio Brasil-Paraguay, el encuentro Geisel-Stroessner en marzo-abril de 1975 acordó la construcción de la carretera Puerto Stroessner-Encarnación, financiada por Brasil. Brasil garantiza de esta manera "la salida, hasta Paranaguá, de la producción del área paraguaya más dinámica...".

"El Uruguay no tiene posibilidad alguna de hacer frente a la marea demográfica y agrícola sur-brasileña. Serán poco útiles, incluso, los frenos jurídicos referentes a límites para que extranjeros puedan comprar tierras en estas áreas fronterizas. Si la actual 'integración' continúa al ritmo que va, será difícil clasificar de extranjeros los buenos socios capitalistas."

De esta manera, se va implementando, bajo el liderazgo económico brasileño, una serie de proyectos de carácter continental. Brasil trata también de expandirse hacia Bolivia. En este sentido es muy significativo el convenio para la realización de la carretera Santa Cruz-Corumbá-São Paulo-Santos, que busca promover el comercio con el este boliviano creando también las condiciones para inversiones brasileñas.

e internacional, intento de movilización de las clases medias en torno de una gran campaña chauvinista, aumento de la represión política y cultural, política externa agresiva de exportación del modelo de "seguridad y desarrollo" y creación de condiciones para la penetración de bienes e inversiones desde Brasil en el Atlántico sur, formaron un conjunto de medidas fascistizantes que parecían llevar el estado brasileño a una nueva etapa, desde una dictadura militar hacia un estado fascista. Para coronar este esquema se intentó configurar en torno del general de turno, Garrastazú Médici, una áurea carismática que permitiese su permanencia en el poder y su consagración como el gran jefe nacional.

Sin embargo, las contradicciones que generaba esta experiencia fascista empezaban a manifestarse de manera brutal. Preocupados con la evolución de la situación económica y política empezó a gestarse un movimiento dentro del sistema de poder en el sentido de revisar los aspectos económicos y políticos más críticos que presentaba el régimen. Roberto Campos, el más autorizado portavoz del gran capital internacional, y la Escuela Superior de Guerra, centro ideológico del régimen, habían lanzado en 1972 el debate sobre la necesidad de un modelo político para el régimen. El mismo teórico y ejecutivo publicó en 1974 un libro en coautoría con su discípulo y ministro de Hacienda, Mario Henrique Simonsen, que al mismo tiempo que defendía la vigencia del modelo económico brasileño dejaba entrever las preocupaciones que llevarían a una nueva etapa política de "descompresión gradual y revisión de algunos aspectos de la política económica". Veamos sus argumentos: Mario Henrique Simonsen decía: "Ningún país se desarrolla sin enfrentar una serie de desafíos coyunturales y estructurales. En realidad, la experiencia económica brasileña desde 1964 constituye un bello ejemplo de cómo una buena imaginación técnica, rellenada de suficiente pragmatismo y lastreada en un régimen político estable, puede responder brillantemente a estos desafíos." [24]

En seguida el autor pasa a enumerar los problemas que, a su juicio, necesitan ser solucionados en los próximos años. Se refiere a "la extensión de los beneficios del desarrollo a las capas más pobres de la población"; al problema de "cómo financiar un crecimiento del producto real del orden del 10% anuales manteniendo el equilibrio de la balanza de pagos" pues reconoce que la condición del desarrollo ha sido el "endeudamiento externo creciente"; y, por último, destaca "el problema de las microunidades de producción, la empresa privada nacional, la empresa estatal y la compañía extranjera" reconociendo que "en este tríptico (...) la parte más débil parece residir en la empresa privada nacional", y admite que "las alternativas son obviamente poco confortables para un país que pretenda desenvolverse bajo un régimen capitalista: la estatización o la desnacionalización".[25]

En cuanto al primer problema (que sin duda preocupa a este y a todos los teóricos burgueses, no propiamente por su espíritu filantrópico sino por su temor de la rebelión popular) después de enunciar algunos datos sobre el desempleo en Brasil, que se basan en cifras que reducen radicalmente el fenómeno, y de mencionar falsas soluciones como el tener que bajar la productividad en el agro para ocupar más mano de obra; reconoce que en Brasil aumenta la concentración de

[24] *Op. cit.*, p. 175.
[25] *Ibidem*, pp. 175 y 176.

la renta en manos de sectores minoritarios pero que constituye una "liviandad analítica" considerar, *a priori*, que esto es culpa de la actual política económica (*¡sic!*). Según nuestro teórico la causa de la concentración del ingreso es la baja calificación de la mano de obra que lleva a aceptar salarios bajos y la explosión demográfica que aumenta la presión sobre el empleo que no puede ser absorbida generando marginalidad económica. ¡Y éstos son seguramente factores aleatorios al régimen! Pero nada le impide sacar su cínica conclusión, demostrando que si los hechos no concuerdan con ella, peor para ellos: "En suma, los ricos quedaron cada vez más ricos, aunque no prevalezca la contrapartida marxista de que los pobres se vuelven cada vez más pobres." [26] Finalmente, critica el distributivismo y no apunta ninguna solución para resolver el problema pues comprende muy bien que "el gran problema no es solamente lograr la mejoría de la distribución de la renta, sino conciliar este objetivo con la mantención de altas tasas de crecimiento del producto real".[27] Sólo de esta manera se podrían crear nuevos empleos... Es decir, que los ricos sigan cada vez más ricos, que los sueldos obreros sigan en los niveles más bajos, pues el distributivismo es inflacionario y perjudica la acumulación, y que las fuerzas espontáneas de la economía vayan incorporando nuevos asalariados... Ahora bien, si no se logra un crecimiento del 10% al año no hay ninguna posibilidad, según Simonsen, de generar los empleos que "compensen" la baja remuneración de los salarios.

En cuanto al problema de la balanza de pagos, la solución que los teóricos-empresarios preconizan es aumentar prioritariamente las exportaciones, pues esto permite una "sana" absorción del capital extranjero. Para ellos es "natural" el crecimiento de la deuda externa. Quizá, en la época tan próxima en que se editó esta obra —1974— el ministro aún no podía prever que la deuda externa llegaría a finales de 1975 por vuelta de 22 mil millones de dólares, lo que significa que el país debe hoy 25% de su producto interno bruto, y que a partir de 1974, el déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente subió de 600 a 6 800 millones de dólares, mientras que entre 1973 y 1974 la disminución de las reservas fue de 6 415 millones a 5 207 millones de dólares (es decir, menos 17%) y desde diciembre de 1974 hasta el primer semestre de 1975 cayó a 4 100 millones de dólares (menos 22%).[28] A fines de 1975 las reservas habían caído a cerca de 3 000 millones de dólares y en 1976 la perspectiva es de aumentar el "déficit" de la balanza de pagos y bajar aún más las reservas.

[26] *Ibidem*, p. 185.

[27] *Ibidem*, p. 187. Helio Jaguaribe, ideólogo del nacionalismo burgués, reconoce que "el grado de concentración de la renta que resulta de la política económica en curso, lejos de conducir, gradualmente, a una redistribución más equitativa de la riqueza y de las oportunidades económicas, produce, al contrario, una fuerte acentuación de su concentración. Mientras las grandes masas, representando 70% de la población, percibían en 1960, cerca de 35% de la renta, pasaron, en 1970, a cerca de 28%. Opuestamente, la élite económica, representando los 10% más elevados de la población, que percibía cerca de 65% de la renta, pasa a percibir cerca de 72% de ésta". *Brasil: crise y alternativas*, Zahar Ed. Río, 1974, p. 65. El mismo autor calcula que "56% de la población se encuentra en la marginalidad absoluta (capacidad de consumo restricta a la alimentación básica) y 75% de la población en la marginalidad relativa (capacidad de consumo no superior al estricto atendimiento de las primeras necesidades)". *Ibidem*, p. 55.

[28] Véase M. de Carvalho, *Opiniao*, 28 de agosto de 1975.

Al lado de estos planteamientos económicos, el otro ex ministro y ejecutivo, Roberto Campos, reclamaba la necesidad de crear las bases para la institución de una "democracia participante con un ejecutivo fuerte", que preconizaba una "reconciliación popular" para lograr una "institucionalización política", pero ni siquiera ésta pudo tener cabida. Naturalmente el propio Roberto Campos ya tenía bastante conciencia de que había que precaverse "contra fórmulas fáciles y perversas, a largo plazo contraproducente de 'popularidad del régimen' ".[29] Él advertía contra los riesgos del "populismo distributivista" y la "hiperexcitación nacionalista" pues pueden conducir al aumento de la presión inflacionaria y al "expropiacionismo". Roberto Campos, como un lúcido burgués, es sobre todo un defensor del imperialismo... Como tal, él siempre ha insitido en la asociación accionaria entre el "capitalismo de estado, la empresa extranjera, la empresa nacional y también organizaciones internacionales, como la 'International Finance Corporation' "[30] y también insiste en sugerir la reorganización política que combine una democracia autoritaria a nivel medio con una cúspide corporativa, vale decir, democracia con tintes fascistas.[31]

Ésta era en grandes líneas la receta de Campos para una "descompresión controlada" que debería realizar paulatinamente el gobierno de Ernesto Geisel. Por cierto su estrategia estaba en parte inspirada por lo preconizado por Wanderley Guilherme dos Santos, otrora izquierdista, hoy, "realista" asesor de la dictadura. Se suponía que esta "descompresión", es decir, desfascistización, se podría procesar espasmódicamente y Campos citaba a este ideólogo "regenerado" quien decía que "urge implantar procedimientos compensatorios, de modo que simultáneamente al abandono gradativo de los instrumentos de coerción sean deflagrados procesos de movilización de lealtad vía persuasión".[32]

En el fondo, toda esta ideología de la "descompresión" no deja de ser ingenua, porque de hecho el régimen tiene muy poco margen para hacer concesiones de carácter popular. Era muy difícil que la receta del señor Wanderley Guilherme de combinar coerción con persuasión pudiese ser viable. La dictadura no tiene posibilidades significativas de "movilización de la lealtad" del pueblo brasileño. Al contrario, las tendencias estrúcturales del desarrollo capitalista dependiente brasileño tenderán a acentuar, cada vez más, como necesidad de supervivencia intrínseca al sistema, la exclusión de las inmensas mayorías de los frutos de este desarrollo; a intensificar progresivamente la ya estrecha vinculación de las clases dominantes criollas con el imperialismo a través de la desnacionalización creciente de la economía brasileña; de proseguir la superexplotación de la clase obrera a través de la mantención de niveles salariales regresivos o cuando mucho estancados. Todo esto, en un contexto de una sociedad que se encuentra en crisis y cuya posibilidad de retomar el eufórico ritmo de crecimiento económico alcanzado en el último período de expansión es problemática. Dado este carácter centralizador y excluyente del capitalismo dependiente, no existe la posibilidad de que ocurra en sus marcos una redemocratización sustantiva ni a corto, ni a medio ni a largo plazo.

[29] *Op. cit.*, p. 233.
[30] *Ibidem*, pp. 236, 237.
[31] Véase p. 256.
[32] *Ibidem*, p. 254.

Y estamos en desacuerdo con Fernando Henrique Cardoso en el sentido de que "es una exageración suponer, mientras tanto, que existan razones de orden internacional, intereses de seguridad nacional o razones privadas (como la necesidad de acumulación y de crecimiento) en función de las cuales el estado debe impedir las trasformaciones políticas necesarias".[33]

Nosotros hemos tratado de demostrar, no sólo en el presente ensayo sino también en otros trabajos anteriores, que estas razones sí existen. Por esto, estamos convencidos de que no pueden ocurrir en el país intentos de redemocratización, sino transitorios y efímeros, que, en definitiva, el pueblo brasileño sólo conocerá la democracia y la libertad como resultado de una lucha ardua y tenaz en contra del sistema capitalista dependiente y su expresión política, el régimen dictatorial. Brasil tiene, pues, y volvemos a insistir en lo mismo, sólo la alternativa entre el fascismo o el socialismo. O dictadura fascista, o democracia socialista, es decir, democracia para el pueblo y dictadura del proletariado ejercida en contra de la minoría explotadora. Esto no significa descartar formas de gobierno de transición, sea de derecha en la cual las tendencias fascistas se imponen en un proceso dialéctico de marchas y contramarchas, como la actual dictadura militar, sea hacia la izquierda como gobiernos de coalición que crean una democracia avanzada, en la cual el movimiento popular encuentra condiciones para organizar su ofensiva final hacia el poder.

Por esto, el proceso de "descompresión gradativa" intentado por el gobierno Geisel reveló en apenas dos años de aplicación sus fuertes y definitivas debilidades. No sólo contó con una gran oposición dentro del aparato del estado, particularmente el sector represivo policial-militar y amplias capas de la burguesía enriquecida con la especulación económica generada por la política irresponsable del "milagro" a toda costa, sino que los intentos de permitir una mayor manifestación política en el país se expresaron en la aplastante derrota electoral del partido del gobierno frente al partido de oposición consentido que se llevó cerca del 70% de los votos en elecciones para renovación parcial de senadores en todo el país.

Los resultados electorales y el creciente clima de movilización sindical y estudiantil, así como explosiones de masas urbanas y campesinas de carácter espontáneo, llevaron al gobierno a precisar los límites de cualquier "abertura" posible y a iniciar, desde fines de 1974, una represión violenta sobre el Partido Comunista Brasileño, sectores del MDB, el movimiento sindical y estudiantil, la prensa y hasta la policía militar. No faltaron amenazas al MDB de que debería moderar su política oposicionista estimulada por su éxito electoral para impedir una radicalización de las medidas represivas del régimen que podrían llevar a un nuevo golpe militar.

En el 9 de octubre de 1975, el dictador en turno, Ernesto Geisel, tuvo que reconocer frente al país la gravedad de la crisis económica expresada particularmente en su balanza de pagos. Pretendidamente para contener los factores de la crisis rompió el monopolio estatal del petróleo (último bastión del movimiento nacionalista) permitiendo contratos "de riesgo" con empresas extranjeras para la prospección del petróleo y dejando confusa y abierta la puerta para su par-

[33] F. H. Cardoso, *Autoritarismo y democratizacao,* Paz e Terra, Río de Janeiro, 1975, p. 237.

ticipación en la producción del mismo. Al mismo tiempo tomaba fuertes medidas restrictivas de la importación de bienes de lujo y maquinarias con posible sustituto nacional. Dejaba, sin embargo, intacto el movimiento de capitales y la capacidad de especulación de las empresas multinacionales, principales responsables del "déficit" de la balanza de pagos. A la vez se aumentaba en 25% el precio del petróleo y se buscaba minimizar los evidentes efectos inflacionarios de esta medida.

El discurso y las medidas del 9 de octubre lanzan al régimen de la "revolución gloriosa" en un abismo creciente frente a las masas brasileñas. Consciente de la ira popular que provocarían tales medidas, el gobierno inició una nueva etapa de represión sobre la prensa de oposición en el país prohibiéndole simplemente "referirse" a los contratos de riesgo y a las medidas anunciadas el 9 de octubre. El MDB, obligado a luchar por su supervivencia como partido político de oposición a pesar de ser claramente mayoritario, denunció con rara firmeza los contratos de riesgo y el contenido continuista del discurso presidencial que en vez de enfrentar la crisis reconocida insiste en la misma política suicida. Sobre el MDB cayó una lluvia de improperios, amenazas y represiones indirectas. El régimen, presionado por sus compromisos internacionales con regímenes socialdemócratas y liberales como Alemania Federal, Inglaterra y Francia, por su dependencia del petróleo árabe y de los mercados de países como México y Colombia, tiene miedo de adoptar una cara claramente inconstitucional disolviendo otra vez el Parlamento o cesando mandatos masivamente, o simplemente suspendiendo las elecciones. El ejemplo reciente de Chile no hace alentador un segundo golpe de estado dentro del golpe de estado, similar al de 1968, aún vigente. Pero por otro lado, la nítida impopularidad del régimen, el fracaso evidente del "milagro económico" y su dependencia del crédito internacional no le permite enfrentarse a un período de agitación política creciente y aplicar un liberalismo electoral que llevaría a su inevitable derrota en las elecciones.

Los próximos años y meses estarán marcados por esta disyuntiva implacable: o continuar el proceso de liberalización que llevaría inevitablemente a la pérdida de control del aparato del estado por los golpistas de 1964 e inauguraría una fase política de gran agitación social, política e ideológica, o recurrir clara y abiertamente a la excepcionalidad de poderes asumiendo integralmente el proceso fascista iniciado tímidamente en 1964, retomado más firmemente en 1968, atenuado en 1974 hasta fines de este año y emergente otra vez en actos y movimientos conspirativos en proceso en el momento actual. Pensar que un equilibrio entre estas dos tendencias sea posible y que el país marcha para una "redemocratización progresiva" es el más utópico sueño pequeñoburgués, abrigado cada vez menos por algunos teóricos ideólogos bien intencionados pero profundamente equivocados.

Por otro lado, es claro que la historia del actual régimen no se decidirá en los pasillos de los palacios gubernamentales ni en las mansiones de los políticos burgueses. Los trabajadores brasileños serán los que, en última instancia, decidirán la suerte del régimen militar. Serán ellos quienes, con su organización y conciencia, obligarán a profundizarse en un sentido radical las frases demagógicas por la liberación. Los ideólogos del régimen han demostrado en varias oportunidades su temor por esas masas explotadas y oprimidas cuyo apoyo pasivo se busca conquistar de alguna forma. Las pequeñas medidas de abertura tomadas por el actual

gobierno y las evidentes contradicciones en el seno del poder fueron suficientes para revelar la existencia de un descontento generalizado y anunciar un progresivo renacimiento del movimiento de masas. Las huelgas obreras y estudiantiles, las tomas de tierra por los campesinos, las manifestaciones democráticas por la amnistía, por la derogación de las actas institucionales y otras medidas represivas, van conformando un nuevo ambiente de agitación política y social cuya intensificación es inevitable. A cualquier brecha de sus enemigos, este pueblo desgarrado entre sus enormes potencialidades y la represión de sus explotadores se introduce en búsqueda de convertirse en el personaje principal de una historia dramática que él deberá convertir en epopeya.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Alarcón, Rodrigo, *Brasil: represión y tortura,* Santiago, Ed. Orbe, 1970.

Amaral, Azevedo, *O Estado autoritario e a realidade nacional,* Río de Janeiro, José Olympio Editora, 1938.

Arroyo, Raimundo, "Pauperización absoluta y relativa de la clase obrera en Brasil", *Cuadernos Políticos,* México, 1976.

Baer, Werner, *A industrialização e o desenvolvimento económico do Brasil,* Río de Janerio, Fundação Getúlio Vargas, 1966.

Bandeira, Moniz, *Cartéis e desnacionalização,* Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1975.

———, *O governo de João Goulart,* Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1977.

Basbaum, Leoncio, *Historia sincera da República,* Río de Janeiro, Ed. Zahar.

Bastos, Abguar, *Prestes e a revolução social,* Río de Janeiro, Ed. Calvino, 1946.

Brandão López, Juárez, *Desenvolvimento e mudança social no Brasil,* São Paulo, Difusão Européia do Livro.

Brasil, Boletín del Ministerio del Trabajo, Industria y Comercio. Publicado entre 1930 y 1945. Importante documentación empírica y teórica sobre el período del Estado Nuevo.

Brasil en dados, 1975, Río de Janeiro, Ed. Índice, 1975.

Buarque de Holanda, Sergio, *Historia general da civilização brasileira,* São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1960-71.

Cardoso, Fernando Henrique, *Autoritarismo e democratização,* Río de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1975.

———, *Empresario industrial e desenvolvimento económico no Brasil,* São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1964.

Carone, Edgard, *A Primeira República,* São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1969.

———, *A Segunda República: 1930-1937,* São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1973.

———, *Revoluções do Brasil contemporáneo,* São Paulo, DESA, 1965.

Carvalho Pereira, José Eduardo de, *Financiamiento externo e crescimento económico no Brasil: 1966-1973,* IPEA, 1974.

Cohn, Gabriel, *Petróleo e nacionalismo,* São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1969.

Díaz, Everardo, *As lutas sociais no Brasil,* São Paulo, Edição L. B., 1962.

D'Incao e Mello, Maria Conceição, *O boia fria: acumulação e miséria,* Ed. Vozes, 1975.

Do Couto e Silva, Golbery, *Geopolítica do Brasil,* Río de Janeiro, José Olympio Editora, 1966.

Dos Santos, Theotonio, *Brasil: la evolución histórica y la crisis del milagro económico,* México, Ed. Nueva Imagen, 1978.

———, *Socialismo o fascismo: el nuevo carácter de la dependencia, y el dilema latinoamericano,* México, Edicol, 1978.

Einaudi, Luigi R. y Stephan III, Alfred C., "Latin American institutional development", *Changing military perspectives in Peru and Brazil,* Santa Monica, The Rand Corporation, R-586-DOS, abril de 1971.

Fausto, Boris, *A revolução de 1930: historiografia e historia,* São Paulo, Ed. Brasiliense, 1970.

Fernandes, Florestan, *A revolução burguesa no Brasil,* Río de Janerio, Ed. Zahar, 1974.

Frank, André G., *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina,* Buenos Aires, Siglo XXI.

Furtado, Celso, *Formação económica do Brasil,* Río de Janeiro, Fundo de Cultura, 1964.

———, *O mito do desenvolvimento económico,* Río de Janerio, Ed. Paz e Terra, 1974.

Gouvea Vieira, José Maria, *O capital estrangeiro no desenvolvimento do Brasil,* São Paulo, Difel, 1975.

Guilherme, Wanderley, *Introdução ao estudo das contradições sociais no Brasil,* Río de Janeiro, ISEB, 1963.

Guimaraes Passos, Alberto, *Quatro séculos de latifundio,* Río de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1968.

Harding, T., *The political history of organized labor in Brazil,* Michigan, Xerox University Microfilms, Ann Arbor, 1975..

Ianni, Octavio, *Estado e capitalismo,* Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1965.

———, *Industrialização e desenvolvimento económico no Brasil,* Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1963.

Ianni, Octavio, *et al., Política e revolução social no Brasil,* Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1966.

Jaguaribe, Helio, *Brasil: crise e alternativas,* Río de Janeiro, Ed. Zahar, 1974.

———, *Desenvolvimento económico e desenvolvimento político,* Río de Janeiro, Ed. Fundo de Cultura, 1962.

———, *Nacionalismo e desenvolvimento económico,* Río de Janerio, ISEB, 1958.

Julião, Francisco, *Cambão as Ligas Componesas,* Coimbra, Ed. Centelha, 1975.

Kovariek, Lucio, *Estrategias de planejamento social,* São Paulo, Cuadernos Cebrap, 1971.

Krischke, Paulo, *A ingreja e os crises políticas no Brasil,* Ed. Vozes, 1978.

Langoni, Carlos Geraldo, *As causas do crescimento económico no Brasil,* APEC, 1974.

Leal, Víctor Nunes, *Coronelismo, enxada e voto,* Río de Janeiro, Ed. Revista Forense, 1948.

Marini, Ruy Mauro, *El subimperialismo brasileño,* Santiago, CESO, 1971.

———, "La izquierda brasileña y las nuevas condiciones de la lucha de clases", en *Diez años de insurrección en América Latina,* organizado por Vania Bambirra, Santiago, PLA, 1971.

———, *Subdesarrollo y revolución,* México, Siglo XXI, 1970.

Martins, Luciano, *Industrialização, burguesia nacional e desenvolvimento,* Río de Janeiro, Ed. Saga, 1968.

———, *Nação e corporação multinacional,* Río de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1975.

Michin, S. S., *Processo de concentração do capital no Brasil,* Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1973.

Moises, José Álvaro, "Current problems of the labor movement in Brazil, *Latin American Perspectives* (en prensa).

Normando, J. B., *Brazil: a study of economic types*, 1935.
———, *Evolução económica do Brasil* (Comp.), São Paulo, Ed. Nacional, 1945.
Oliveira Vianna, F. J. de, *As instituções políticas brasileiras*, Río de Janeiro, José Olympio Editora, 1949.
———, *Evolução do povo brasileiro*, Río de Janeiro, José Olympio Editora, 1956.
Paim, Gilberto, *Industrialização e economia natural*, Río de Janeiro, ISEB, 1957.
Pereira, J. C. B., *Desenvolvimento e crise no Brasil*, Río de Janeiro, Ed. Zahar, 1968.
Pereira, Luis, *Trabalho e desenvolvimento no Brasil*, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1965.
Pereira, Osny Duarte, *Multinacionais no Brasil*, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1974.
Pinheiro, Paulo Sergio, *Política e trabalho no Brasil*, Río de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1975.
Prado Junior, Caio, *A revolução brasileira*, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1966.
———, *Evolução política do Brasil e outros estudos*, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1961.
———, *Formação do Brasil contemporáneo*, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1945.
———, *Historia económica do Brasil*, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1963.
Prestes, Luis Carlos, *Manifesto de agosto de 1950*, Río de Janeiro, Ed. Horizonte, 1950.
——— *Uniao nacional para a democracia e o progresso*, Río de Janeiro, Edições Horizonte, 1945.
Rabello, Genival, *Brasil país das oportunidades perdidas*, (s. i.).
———, *Cartilha do dólar*, Río de Janeiro, Edições Gernosa, 1968.
Ramos, Guerrero, *A crise do poder no Brasil*, Río de Janeiro, Ed. Zahar, 1961.
———, *A redução sociológica*, Río de Janeiro, ISEB, 1961.
Rangel, Ignacio, *Introdução ao estudo do desenvolvimento económico brasileiro*, Salvador, Livr. Progresso Ed., 1957.
Rodrigues, José Albertino, *Sindicato e desenvolvimento no Brasil*, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968.
Saes, Dacio, *Industrialização, populismo e classe media no Brasil*, Unicamp, IFCH, núm. 9, 1976.
Santa Rosa, Virginio, *O sentido do tenentismo*, Río de Janeiro, Schmid Editor, 1933.
Silva, Hélio, *1922: Sanque na areia de Copacabana*, vol. I: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1964.
———, *1926: A grande marcha*, vol. II: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1965.
———, *1930: A revolução traida*, vol. III: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1966.
———, *1931: Os tenentes no poder*, vol. IV: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1966.
———, *1932: A guerra paulista*, vol. V: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1967.
———, *1933: A crise do tenentismo*, vol. VI: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1968.
———, *1934: A constuinte*, vol. VII: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1969.
———, *1935: A revolta vermelha*, vol. VIII: O Ciclo de Vargas, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1969.
Simao, Aziz, *Sindicato e Estado*, São Paulo, Dominus Editorial, 1966.
Simonsen, Mario Henrique y Oliveira Campos, Roberto de, *A nova economía brasileira*, Río de Janeiro, José Olympio Editora, 1974.

Simonsen, Roberto C., *Evolução industrial do Brasil,* São Paulo, Esc. Livre de Sociología, 1939.
Singer, Paulo, *Força de trabalho e emprego,* São Paulo, Cuadernos Cebrap, 1971.
———, *Urbanização e desenvolvimento,* São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968.
Skidmore, Thomas E., *Politics in Brazil, 1930-1964,* Londres, Oxford University Press, 1967.
Sodre, Nelson Werneck, *Formação da sociedade brasileira,* Río de Janeiro, José Olympio Editora, 1946.
———, *Formação histórica do Brasil,* São Paulo, Ed. Brasiliense, 1962.
———, *O que se deve ler para conhecer o Brasil,* Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1967.
Souza, Hebert José de y Afonso, Car'os, *Estado e desenvolvimento capitalista no Brasil,* Río de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1977.
Souza, Hebert José de y Arruda, Marcos, *Multinationals and Brazil,* Toronto, Laru, 1976.
Suzigan, Wilson, Carvalho Pereira, J. Eduardo de, Guimaraes de Almeida, Ruy A., *Financiamento de projetos industriais no Brasil,* IPEA, 1972.
Tavares, Maria Conceição, "Auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones en el Brasil", *Boletín Económico de América Latina,* 9, 1, Santiago, 1964, pp. 1-62.
Tavares, Maria Conceição y Serra, José, "El modelo económico brasileño", *Boletín de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,* Santiago, 1971.
Trindade, Hélio, *Integralismo, (o fascismo brasileiro na decada de 30),* São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1974.
Vargas, Getúlio, *A nova política do Brasil,* Río de Janeiro, José Olympio Editora, 1938, 7 vols.
Vieira do Cunha, Mario Wagner, *O sistema administrativo brasileiro,* Ministerio de Educação, 1973.
Vinhas de Queiroz, Mauricio, "Os grupos multimilionarios", *Revista Instituto Ciencias Sociais,* núms. 1, vol. 2, Río de Janeiro, 1965.
Weffort, Francisco, "Populismo na política brasileira", *Brazil: Tempos Modernos,* Río de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1968.
Writh, John D., *The politics of brasilian development: 1930-1954,* California, Stanfort University, 1970.

COLOMBIA: MEDIO SIGLO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

ANTONIO GARCÍA

I. APERTURA CAPITALISTA Y CRISIS DE LA REPÚBLICA SEÑORIAL

La historia contemporánea de Colombia se inicia con los profundos cambios ocurridos en la coyuntura de la primera posguerra en el sistema capitalista de mercado mundial —cuyo centro dinámico se desplaza de Inglaterra a Estados Unidos— así como en las trasformaciones internas originadas en la fulminante crisis de la república señorial y en la configuración de un nuevo modelo de capitalismo subdesarrollado y dependiente. Nunca antes, en la historia de la sociedad colombiana, se habían producido, en tan corto tiempo, tan complejos, profundos y acelerados cambios. Ni siquiera las guerras de Independencia lograron provocar un semejante reacomodo espacial y económico de la sociedad colombiana, por lo mismo que las aristocracias latifundistas y mineras conservaron el control de la riqueza, la cultura y el poder del estado, logrando desviar los objetivos revolucionarios y preservar las estructuras agrarias, sociales y económicas de la época hispanocolonial. De otra parte, la devastadora explotación inglesa de las minas de oro y plata, las depredatorias formas coloniales de la economía extractiva —gomas, quinas, palos tintóreos, etc.— el reducido ámbito de operación de la economía tabacalera, los modos de control de los mecanismos de manipulación financiera y comercial, no tenían la capacidad de propagar un modelo general de organización capitalista en la sociedad colombiana del siglo XIX, ni de propiciar un desquiciamiento de las estructuras hispanocoloniales en que se apoyaban la hegemonía de las aristocracias latifundistas y los nuevos andamiajes del imperialismo inglés. Las formas capitalistas instauradas en la minería de metales preciosos, en los tramos ferrocarrileros articulados al sistema trasportador río Magdalena-Atlántico o en la concentrada agricultura del tabaco, funcionaron como enclaves, sin irradiación en el contorno económico-social y nunca llegaron, en consecuencia, a desencadenar fuerzas que hubiesen cuestionado la estructura latifundista, las relaciones sociales fundamentales en el colonato y en las aparcerías serviles, el arcaico y hermético sistema de mercados locales. La agricultura tabacalera no alcanzó a operar como una fuerza motora del reacomodo espacial e histórico de la sociedad colombiana, por cuanto el cultivo se circunscribió a tres áreas agrícolas ya explotadas y valorizadas comercialmente y por cuanto se conservaron los patrones tradicionales de distribución del ingreso agrícola en favor de los propietarios latifundistas de las tierras aluviales y de los comerciantes ingleses: ésta fue la forma histórica de producción y exportación del tabaco desde 1858 hasta la formación de la agricultura nacional del café. El acontecimiento fundamental en las últimas décadas del siglo XIX fue la colonización antioqueña de la hoya del Cauca por

medio de la plantación cafetalera, la pequeña finca familiar y la ocupación progresiva de las vertientes andinas por una enérgica movilización de campesinos sin tierra. A diferencia de lo ocurrido con la agricultura tabacalera, la plantación de café se desarrolló en las tierras baldías y boscosas de las vertientes, esto es, en el vasto cinturón subtropical que conservó en el siglo XIX la incomunicación casi absoluta entre las regiones de altura —valle, altiplanos, páramos— y los valles bajos, las despobladas llanuras del oriente, el inexplorado bosque amazónico y los abandonados litorales del Atlántico y del Pacífico. Una característica generalizada de la república señorial —en Colombia, en Bolivia o en otros países andinos— ha sido su constitución como un archipiélago de regiones incomunicadas e inconexas, el desconocimiento de la vida marítima, la concentración de la actividad social y política en ciertos islotes de tierra adentro y la conformación de un sistema de trasporte ligado exclusivamente al mercado de la nación hegemónica. Las tierras de vertiente —habiendo sido adjudicadas las regiones baldías en los valles, litorales y altiplanos, dentro de los mismos patrones característicos del latifundismo señorial— no eran aptas para reproducir en ellas el sistema tradicional de fincas extensivas y con desproporcionado acaparamiento de recursos físicos, ya que el nuevo régimen de tenencia y explotación debió fundamentarse en el trabajo directo de la familia campesina, tanto en el proceso de desbosque como en el de creación de nuevas unidades productivas. Desde el punto de vista de los procesos de colonización ocurridos en las regiones nórdicas de la cuenca del río Cauca —casi simultáneamente con las guerras civiles que asolaron el extenso y rico escenario de los Andes orientales—, cuatro fueron los elementos más significativos que hicieron posible la asociación de la economía cafetalera con las nuevas formas sociales de asentamiento: el de que el café suave exige técnicas de cultivo y beneficio altamente selectivas y abundante mano de obra familiar; el de que la plantación puede asociarse —aun en la etapa de su formación— con un variado complejo de cultivos de autoabastecimiento (frijol, maíz, plátano) y con una ganadería familiar de vacunos y cerdos; el de que la plantación cafetalera —a diferencia de los cultivos tradicionales— posee una elevada densidad de valor por hectárea; y el de que —antes de efectuarse el acaparamiento de la comercialización por medio de compañías extranjeras— los modos de distribución del ingreso agrícola existentes produjeron una verdadera explosión de los consumos, una densificación de las corrientes migratorias y una proliferación del sistema de poblados. Sin este proceso de formación de una nueva estructura agraria —integrada a la dinámica del mercado externo y fundamentada en el empleo gratuito de la abundante mano de obra familiar— serían incomprensibles los hechos más significativos en las primeras fases de la modernización capitalista de la sociedad colombiana: la emergencia de unas clases medias rurales, la formación original de una primera red de centros urbanos, la dinamización de la organización municipal —en contraste con la indigencia del municipio en las regiones latifundistas— y la nucleación de los grandes centros metropolitanos de Occidente: primero Medellín, vinculado al auge de la industria textilera y a la comercialización y procesamiento del café originado en el integrado escenario de la colonización antioqueña; y más tarde Cali, una vez que la apertura del Canal de Panamá hizo viable la terminación del ferrocarril del Pacífico, la expansión de la frontera agrícola

en las zonas de vertiente de la cordillera central —siguiendo las mismas líneas de la colonización antioqueña— y la definición de una nueva vía exportadora. Quedaron así articulados en este corto ciclo histórico los sistemas trasportadores del Atlántico y del Pacífico, los que en decenios posteriores determinarían la orientación de la infraestructura física de integración de la sociedad colombiana. En estas condiciones históricas, lo que requería la economía cafetalera para trasformarse en la fuerza motora de una nueva estructura agraria y de un sistema nacional de mercado era una coyuntura excepcional de expansión dinámica de las exportaciones y de modificación cualitativa de las corrientes importadoras, tal como ocurrió en el decenio de los años veinte. El nuevo proceso se inició en la posguerra mundial, a partir de la notable apertura del mercado norteamericano y del incremento sostenido de los precios del café. El auge cafetalero de 1923 a 1928 determinó la inmediata expansión de la frontera agrícola, duplicándose prácticamente el área sembrada desde 183 445 hectáreas, hasta cerca de 360 000. La posición colombiana en la producción mundial sirvió para establecer un nuevo rango económico —ascendiendo de 5.7% en 1909 a cerca del 9% en 1925-1926— y también para definir el esquema de división internacional de trabajo en el que los países productores se limitaban a exportar —por medio de corporaciones trasnacionales especializadas en la comercialización de productos del trópico— materia prima destinada a la industria norteamericana de procesamiento y comercialización del grano tostado, molido o soluble. El valor anual del comercio pasó de 61 millones de dólares en 1913, a más de 200 millones de dólares en 1929, incluyendo las exportaciones desnacionalizadas correspondientes al enclave colonial (petróleo, bananos y platino). La nueva estructura exportadora descansó sobre dos piezas maestras: la creciente participación norteamericana en el comercio exterior de Colombia, la que ascendió desde el 37% en 1913 hasta el 67% al final de la década; y el sistema de enclave colonial organizado sobre economías de singular dinamismo como las del petróleo y el banano. Esta estructura de dependencia explica por qué el país no estaba en capacidad de financiar la infraestructura física con recursos originados en las ventas externas y por qué el estado debió recurrir a la inversión privada directa y al endeudamiento público externo. La inversión directa norteamericana —registrada— pasó de 4 millones de dólares en 1913, a 30 en 1920 y a cerca de 280 en 1929: la producción y exportación de petróleo se incrementó vertiginosamente, desde cerca de 200 000 barriles netos en 1922, a 6.5 millones en 1926 y a más de 20 millones entre 1928 y 1929, llegando a representar cerca del 2% de la producción mundial. La refinación interna de gasolina corriente por las filiales de la Standard Oil y de la Shell, ascendió de 25 000 barriles netos en 1922 a 334 500 en 1929 y a un millón de barriles de fuel oil, articulándose al desarrollo del mercado de vehículos automotores y constituyéndose en el método de financiamiento de las operaciones internas. Se definieron así los rasgos de la exportación desnacionalizada y del enclave colonial, en cuanto el valor de las ventas externas del petróleo crudo no regresó al circuito de la economía nacional, financiándose el pago de salarios, impuestos y regalías (costos locales) por medio de la refinación y venta en el mercado interno de gasolinas y lubricantes a los precios de Nueva York. Otro tanto ocurrió con la economía bananera, organizada como una moderna agricultura en una de las áreas más prote-

gidas del mar Caribe y dentro de las reglas coloniales del sistema de *plantation:* en el período 1925-1929, la exportación bananera representó el 6% de las exportaciones totales.

Entre 1920 y 1930 el país exportó en total 1 100 millones de dólares, mientras que en el decenio 1909-1919 apenas había llegado al nivel de los 360 millones de dólares: la capacidad importadora generada en esta corriente de exportaciones físicas fue en la década de más de 1 000 millones de dólares, correspondiendo cerca de las tres cuartas partes a las compras en Estados Unidos y el 28% a la importación de maquinaria y equipo en la década de los años veinte. La incidencia de esta dinámica comercial generó uno de los cambios más revolucionarios en la conformación de un sistema nacional de mercado, en el desbordamiento de las economías locales y en la superación de las formas comerciales características de la república señorial: la integración física del país por medio de ferrocarriles y de carreteras, primero siguiendo las líneas impuestas por la *integración hacia afuera* —hacia el mercado del centro hegemónico— y luego, a partir de los años treinta —en pleno auge de la industrialización sustitutiva y de la república liberal y burguesa— en desarrollo de una deliberada política de *integración hacia dentro.*

Quedaba demostrada así la ambivalencia de este tipo de procesos, en cuanto han modificado su naturaleza y han cambiado de significación histórica. De acuerdo con esta experiencia, el mercado interno, como condición y fuerza motora del crecimiento capitalista, no se formó por generación espontánea y como efecto mecánico de una súbita apertura del sector agrario exportador, sino que fue el producto de un largo proceso de articulación, de superación y desplazamiento de las formas, límites y métodos de operación del sistema de mercados locales: tipos y calidades, sistemas de cuenta y medida, formas de acumulación y de formación de los precios, condiciones espaciales de confrontación de la oferta y la demanda. De otra parte, no eran suficientes las obras de integración física: fueron necesarias las más intensas presiones de la burguesía comercial y manufacturera, así como de las corrientes políticas adversas a la hacienda pública consuntiva y arbitrista —a lo largo del conmocionado ciclo de la república liberal— para que fuese demolido uno de los obstáculos políticos institucionales que bloqueaban el proceso de integración económica: el sistema de *aduanillas interiores* que resguardaban los monopolios fiscales operados por las haciendas públicas de los departamentos. Las fases de trasformación histórica del mercado interno han expresado, dialécticamente, los grados y formas de desarrollo del capitalismo en la sociedad colombiana, en los diversos ciclos que comprenden su historia contemporánea.

Por 1924, los ferrocarriles movilizaban 1.7 millones de toneladas de carga, correspondiendo a las regiones cafetaleras más de 800 000 toneladas: en este mismo año, las seis líneas ferrocarrileras vinculadas a la economía del café acarreaban 93 millones de toneladas-kilómetros y se registraba el más rápido crecimiento de la red ferroviaria. Sin embargo, la nueva dinámica del sistema vial y trasportador estuvo más estrechamente vinculada con la construcción de carreteras, entre otras cosas porque éstas constituían el soporte material de un nuevo tipo de mercado: el del vehículo automotor, asociado tanto al aparato industrial con mayor dinamismo y más avanzada tecnología de la nación metropolitana, como a las

corporaciones trasnacionales productoras y distribuidoras de gasolina y lubricantes. La apertura de este mercado estuvo vinculada, en consecuencia, con la política de los prestamistas norteamericanos orientada hacia el financiamiento de la construcción de carreteras, iniciándose históricamente una nueva fase de la actividad económica del estado: la de construcción de una infraestructura física y la de prestación directa de servicios. Ésta fue la razón de que el grueso de los 200 millones de dólares llegados al país entre 1923 y 1928 —a más de la ignominiosa *indemnización* de 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó por su participación político-militar en la separación de Panamá— se hubiese canalizado hacia carreteras, ferrocarriles y obras portuarias. En 1930, la inversión pública en carreteras ascendía a 23 millones de dólares registrándose una red de carreteras en servicio de 5 743 kilómetros y concentrándose la tercera parte de ellas en las tres regiones con mayor acumulación de recursos (Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca). En los años siguientes, la red carreteable aumentó en 53%, desempeñando un papel sustancial en la expansión y densificación del sistema nacional de mercado, así como en la aceleración de los procesos, simultáneos, de urbanización y de metropolización. Se reproducía así, en el ámbito de la economía colombiana, la ley del desarrollo desigual, característica del capitalismo en todos los niveles. El primer efecto directo de la formación de esta nueva infraestructura física fue el espectacular incremento en la demanda de automotores y accesorios, de procedencia norteamericana, registrándose un coeficiente de 1 593% entre 1922 y 1928; y el segundo, la progresiva demanda de gasolinas y lubricantes producidos y distribuidos internamente por las C. T. El régimen colonial de adjudicación de áreas petrolíferas garantizaba a las compañías extranjeras la propiedad privada sobre el subsuelo de ciertos territorios, la constitución incontrolada de reservas, los bajísimos niveles de regalías e impuestos, la libertad cambiaria absoluta —incluyendo la libertad para exportar petróleo crudo y para operar en el mercado interno en condiciones monopólicas—, así como la no intervención del estado en las relaciones obrero-patronales en las áreas del enclave. El hecho de que una de las fuerzas hegemónicas de la república señorial hubiese sido la aristocracia latifundista, de que se hubiese conservado la política de adjudicación ilimitada e irrestricta de tierras baldías y de que se hubiese propagado la imagen de un imperialismo altruista, misional e interesado en la introducción de las formas más modernas de la cultura capitalista, definió el carácter de la política de concesiones y precipitó la formación de un sistema colonial de latifundios petrolíferos que en la primera época de la república liberal tenía ya una extensión superior a los dos millones de hectáreas.

Pese a la dinámica de la agricultura vinculada a la corriente innovadora del mercado externo —o más exactamente, del mercado de la nación hegemónica— se conservó casi intacta la estructura del latifundismo señorial en el antiguo Cauca, en Huila, en Tolima, en Nariño, en los Andes occidentales, en Boyacá y en Cundinamarca en los Andes orientales, así como en el inmenso desierto verde de los llanos de la Orinoquia y del Meta, con prevalencia de las relaciones serviles de colonato, peonaje y aparcería. La colonización de las laderas andinas completó el proceso de ocupación de las *tierras interiores de reserva,* adjudicadas por méritos de guerra o por compra de títulos de deuda pública. A principios del siglo,

la adjudicación de baldíos estuvo cerca de los diez millones de hectáreas, operando más en el sentido de sustentación y reproducción de la estructura latifundista que en el de expansión de la frontera agrícola o en el de propagación de nuevas formas de poblamiento. Al iniciarse la franca descomposición de la economía señorial, ésta podía caracterizarse por el siguiente repertorio de elementos: tenencia de la tierra altamente polarizada, prevalencia del esquema global de asignación de los recursos físicos existente en la colonia española y fundamentado en la destinación de las mejores tierras a la pradera natural y a la ganadería extensiva —tal como fue característico de los ciclos clásicos de estancieros y encomenderos— y las peores tierras, localizadas en las laderas erosionables de la cordillera andina, a la agricultura de azada, altamente intensiva en las superpobladas áreas de minifundio y comunidad indígena; relaciones sociales fundamentadas en el colonato, el arraigo a la tierra, la ética de las lealtades a la familia señorial, las obligaciones personales o serviles de la población campesina inmersa en la constelación latifundista; comercialización de la producción originada en haciendas, comunidades indígenas y minifundios en los mercados locales (en 1925, de cerca de un millón y medio de hectáreas incorporadas al sistema de fincas, cerca de un millón se destinaban al *consumo rural,* 152 000 al *consumo urbano* y las restantes a la exportación); estructura de poder concentrada en un patriciado latifundista —hacendados del Cauca Grande, del Tolima Grande, de Bolívar y Magdalena, de Boyacá y Cundinamarca— cuya hegemonía fue absoluta durante casi todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Los fenómenos del *gamonalismo,* de las clientelas y lealtades políticas, de la trasmisión dinástica del poder entre las grandes familias, formaron parte de la organización y del sistema de valores de la república señorial, cuya crisis se precipitó en la medida en que se formó el sistema capitalista de mercado y en que emergieron las nuevas fuerzas sociales: la burguesía industrial y financiera, el proletariado urbano y rural, las clases medias, el nuevo peonaje. El drenaje y trasformación de la mano de obra campesina se inició por medio de mecanismos de salariado en las obras públicas y en los primeros intentos de industrialización primaria. La industria textilera aparecía asociada a dos fenómenos: el de su concentración en el área metropolitana de Medellín y el de su constitución como la espina dorsal no sólo de la industria antioqueña sino de la colombiana. Por 1925 funcionaba en Medellín la mitad de los telares existentes en el país y se concentraba en sus fábricas textiles, en sus trilladoras y empacadoras, en las instalaciones vinculadas con la notable tradición minera y empresarial de Antioquia, una masa obrera de significación social y política. Es posible que Medellín haya sido, en este ciclo, el más enérgico centro urbano de condensación industrial y que el *grupo antioqueño* haya representado más de una cuarta parte de la población nacional cercana a los seis millones de habitantes. Éstas constituyeron las primeras fuerzas generadoras del moderno proceso de urbanización, en el que la ciudad ganó una propia jerarquía como centro de polarización de recursos poblacionales, económicos, fiscales, culturales y políticos. Sin embargo, el proceso histórico de urbanización estuvo lejos de seguir un movimiento coherente y lineal, estableciéndose una enorme distancia entre la altísima densidad de la red de ciudades en las áreas de colonización antioqueña y cultura cafetalera como Caldas y la extrema debilidad del proceso de urbanización en regiones latifundistas

y ganaderas como las sabanas de Bolívar o los llanos orientales. A grandes rasgos, en este ciclo se definieron tres procesos diferenciados de urbanización: el que condujo a la estructuración de las ciudades de Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, como centros no sólo político-administrativos, sino manufactureros, comerciales y conformados financieramente para operar como núcleos del nuevo sistema capitalista de mercado; el que se articuló a través de una red de ciudades portuarias vinculadas al sistema trasportador del río Magdalena y posteriormente al sistema ferroviario del Pacífico; y el que se desarrolló primero en la forma de caseríos residenciales y luego se trasformó en una densa constelación de ciudades en el cinturón andino y cafetalero. En este proceso se produjeron cambios cuantitativos y cualitativos de enorme importancia, pasando la población nacional de 5.86 millones a 7.43 millones, incrementándose la población urbana de un millón doscientos mil a cerca de dos millones —entre 1918 y 1930— y modificándose radicalmente los patrones hispanocoloniales de poblamiento.

A esta altura histórica de la formación del sistema nacional de mercado, se planteó la necesidad de una revisión profunda del aparato bancario, adecuándolo a las nuevas necesidades de la regulación monetaria, crediticia y financiera. Las características del *nuevo sistema* —diseñado prolijamente por la Misión Kemmerer en 1924— respondían al propósito de trasplantar el esquema norteamericano de banca central y de bancos comerciales orientados por las leyes del patrón oro, las garantías reales y la liquidez de cartera. Dentro de estas pautas ideológicas se organizó el Banco de la República como una sociedad anónima dirigida por los banqueros accionistas, con una participación enteramente marginal del gobierno no obstante la constelación de privilegios de emisión, regulación monetaria, intervención en los cambios internacionales y concesión directa de préstamos y descuentos. La reforma Kemmerer impulsó la sociedad anónima como forma específica de organización de los grandes bancos comerciales, precipitando la concentración bancaria y la vertiginosa desaparición de la banca local entre 1924 y 1928.

En este escenario y en este período de trasformaciones nació el proletariado en la industria manufacturera concentrada en las ciudades metropolitanas, en los enclaves neocoloniales del petróleo y de la minería, en las plantaciones del banano, en los sistemas trasportadores del río Magdalena y del ferrocarril del Pacífico, en los nudos del tránsito y en los puertos. El mercado capitalista del trabajo tomaba forma histórica, sometido a la ley de hierro de tres sistemas discriminatorios: el que diferenciaba entre salariado en la nación metropolitana —evaluado cuantitativa y cualitativamente y negociado entre organizaciones de patrones y trabajadores— y salariado en el país dependiente, evaluado sólo en términos cuantitativos de jornada de trabajo y de relación mecánica entre oferta y demanda de mano de obra; el que establecía la separación entre salarios urbanos y salarios rurales; y el que institucionalizaba la diferencia tradicional entre trabajo de los hombres y de las mujeres, de los adultos y de los niños. En este nuevo tipo de mercado capitalista de trabajo, se aplicó la política mercantilista de bajos salarios como condición de la acumulación originaria, definiendo los rasgos característicos de la política laboral en un estado absolutista: carencia de salarios mínimos fijados estatalmente, disociación entre productividad y remuneración del trabajo, inexistencia de prestaciones sociales o de formas mínimas de seguridad social, tratamiento po-

licial de los conflictos laborales y agresiva ilegalización de las luchas sociales y de las formas nuevas del sindicalismo. Frente a la burguesía que tempranamente fue asociándose en cerradas estructuras de poder y frente a un sistema tradicional de partidos políticos que proyectaba las luchas, ideologías y condiciones de la sociedad colombiana del siglo XIX, el movimiento obrero irrumpió como una fuerza revolucionaria y verticalmente enfrentada al absolutismo del estado señorial y a la ruda hegemonía de la nación imperialista. A diferencia de lo ocurrido en las naciones australes de inmigración europea, el proletariado colombiano nació bajo el signo de una práctica revolucionaria del sindicalismo y de una concepción del socialismo que veían en la revolución rusa de 1917 el comienzo de la revolución mundial. Dentro de este marco histórico apareció el marxismo en los años veinte, más como una expresión de voluntad de lucha de la clase obrera y de la pequeña burguesía de intelectuales y estudiantes, que como una forma superior de la ciencia social y del pensamiento crítico, dada la tradición absolutista y escolástica de la educación colombiana dentro de los patrones culturales de la república señorial. De todos modos, ésta fue la vigorosa fuerza de arrastre que desencadenó y polarizó los diversos movimientos opositores al arcaísmo del estado señorial: la insurgencia de una élite socialista de profesionales y estudiantes; la posición crítica de ciertos sectores renovados de la clase política o de los cuadros más perspicaces de la burguesía; y la irrupción del primer movimiento contrarrevolucionario de nuevo estilo e inspirado en los filósofos europeos que posteriormente participaron en el artillamiento ideológico del fascismo. En la universidad confesional de la época no se enseñaba ninguna doctrina herética o no ortodoxa, excluyéndose radicalmente no sólo el conocimiento de Marx, Engels, Fourier o Proudhon, sino el de Darwin, Descartes, Hegel o Kant: de allí que las juventudes rebeldes hubiesen tenido la capacidad de adherir a las consignas revolucionarias del nuevo evangelio, pero no de pensar teóricamente y de crear —de cara a los problemas concretos de su tiempo— una ideología revolucionaria. Pero lo esencial en este proceso de emergencia de las fuerzas sociales de cambio consistía en la creación de dos condiciones elementales: una, que ponía en evidencia la crisis y la incapacidad operativa de la república señorial, de su sistema de estado y de partidos políticos; y otra, de progresivo emulsionamiento de ese conjunto de fuerzas hasta trasformarlas —en el curso de la movilización política— en una opción revolucionaria de poder. Los epicentros de esa movilización fueron incipientes ciudades manufactureras y artesanales como Medellín —en la que saltaron a la escena política los líderes pequeñoburgueses y socialistas que mejor tipifican este ciclo histórico como María Cano, Ignacio Torres Giraldo y Tomás Uribe Márquez— y los centros obreros del enclave neocolonial como Barrancabermeja en el corazón del Magdalena medio o como Aracataca en la zona bananera del Caribe. La práctica de la lucha social —más que las concepciones teóricas —operaron como factores catalíticos en este proceso ascensional del movimiento obrero y en la toma de conciencia sobre el problema de la dependencia imperialista. En 1920 circulaban en el país cerca de sesenta periódicos socialistas y cinco años después pasaban de ochenta, desencadenándose, progresivamente, un movimiento huelguístico que empezó a paralizar fábricas, ferrocarriles, instalaciones portuarias, empresas de navegación fluvial, que llegó a su más alta tensión en las huelgas que inmovilizaron los

enclaves del petróleo y del banano entre 1927 y 1928. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena —organizada vertiginosamente por Raúl Eduardo Mahecha— había logrado trasformarse, con una afiliación de 32 146 obreros, en la más importante fuerza laboral y política de la costa atlántica. La huelga ponía en entredicho, no sólo unas relaciones de trabajo sino la estructura misma del enclave neocolonial. El gobierno decretó el estado de guerra y un ejército de ocupación comandado por el general Carlos Cortés Vargas acudió en defensa de la United Fruit, quebrando militarmente la huelga bananera por medio de una implacable represión que regó los campos de la *plantation* con miles de muertos. La movilización popular aparecía, cada vez más, como una amenaza revolucionaria, no sólo contra el estado señorial sino contra el ordenamiento mismo de la sociedad capitalista. La acción sindical y política de las masas obreras y campesinas, así como el pronunciamiento de las nuevas generaciones universitarias, demostraron al patriciado liberal y conservador que los mecanismos de manipulación tradicional estaban rotos, que el estado había perdido la legitimidad y la iniciativa y que la movilización social podía no sólo descoyuntar las estructuras venerables de la sociedad colombiana, sino desbordar y trasformar los andamiajes de un nuevo tipo de estado liberal. El punto vulnerable de semejante movilización —*la brecha histórica*— consistía en que podía desafiar el poder del estado pero carecía de organización y cohesión para tomarlo y administrarlo. De otra parte, la extrema radicalización del socialismo revolucionario lo condujo a idealizar las condiciones históricas, a desprenderse de sus matrices populares y a trasformarse en un pequeño y ortodoxo partido comunista afiliado a la Tercera Internacional: se completó así, por 1929, la fugaz parábola de un movimiento que habiendo tenido la capacidad de movilizar a los sectores más representativos de la clase obrera, del campesinado y de las élites intelectuales de la pequeña burguesía, cedió a la tentación de trasformarse en la más pura, exigua y ensimismada iglesia revolucionaria. Éstas fueron, precisamente, las brechas a través de las cuales operaron las dos líneas defensivas de una sociedad entre señorial y burguesa: una, de reforzamiento del aparato de fuerza y de progresiva ilegalización de las luchas sociales; otra, de diversión táctica al formarse una coalición de élites liberales y conservadoras que tomaron, en 1929, la iniciativa en el derrocamiento de la hegemonía señorial y en la apertura política hacia una revolución democrática burguesa con participación del sindicalismo y de las nuevas generaciones socialistas. La depresión iniciada en Estados Unidos a finales de 1929, con el derrumbe de los precios del café y con la desarticulación de la economía metropolitana, fue la coyuntura que hizo posible el cambio político en el gobierno y la posterior instauración de la república liberal. La división de la Iglesia católica y del partido de gobierno en relación con el problema de las candidaturas presidenciales y la rápida formación de la alianza bipartidista —en la que tomaron parte activa los representantes más audaces de la burguesía industrial de Bogotá y de Medellín— tomaron por sorpresa al estado señorial y lograron movilizar no sólo a las clases y grupos beneficiarios de la modernización capitalista, sino a las propias fuerzas recién llegadas al escenario político —obreros, campesinos, profesionales, artesanos, estudiantes— y cuya aspiración más inmediata era la organización de una democracia auténtica y de un estado representativo, abierto, capaz de sustituir la re-

presión por la negociación y la caridad privada por la organización asistencial. El bajo nivel de conciencia social, el efecto drástico de la depresión importada, la seducción de la burocracia pública y el señuelo de un campo abierto a las reformas sociales, trasformaron la coyuntura revolucionaria en una oportunidad de redefinir los contenidos ideológicos y las formas de operación de los partidos liberal y conservador, incorporando a la generación universitaria, a los intelectuales y a los mandos obreros que habían aparecido bajo el signo socialista de la época, en los cuadros intermedios o altos del estado como una de sus fuerzas de renovación social, administrativa y política. La maniobra táctica realizada alrededor de la candidatura presidencial de Enrique Olaya Herrera —embajador en Washington y personaje identificado con las líneas ideológicas del panamericanismo expuestas en la conferencia de 1928— había anulado radicalmente la operación estratégica representada en la movilización popular y había desviado la presión revolucionaria de las masas descontentas, creando las condiciones para el tránsito entre la república señorial absolutista y la república liberal reformista, pragmática y burguesa.

II. APOGEO Y CRISIS DE LA REPÚBLICA LIBERAL

La victoria de la alianza bipartidista propuesta por la inteligencia perspicaz y pragmática de Alfonso López Pumarejo y apoyada, simultáneamente, por las masas populares descontentas, por el sindicalismo clasista, por las compañías petroleras y por la burguesía conservadora de Antioquia, aparecía como un camino de tránsito hacia la república liberal. La depresión de 1930 era el comienzo de una nueva historia: la que resultaba como efecto de las nuevas relaciones de dependencia y de la importación de esa crisis cíclica que paralizaba la economía capitalista a través de los mecanismos de integración a la metrópoli. La drástica contracción de las exportaciones y la caída catastrófica de los precios del café a menos de diez centavos la libra, provocaron una reducción aún más drástica de las importaciones y el debilitamiento del modernizado sistema trasportador. Entre 1929 y 1932 las exportaciones se redujeron de 122 a 67 millones de pesos y las importaciones descendieron de 650 000 toneladas a 18 000, con valores de 142 y de 34 millones de pesos, respectivamente. El problema de la caída de la capacidad exportadora se hacía más complejo, en cuanto las corporaciones del enclave conservaron no sólo la capacidad de exportación sino el privilegio de no retornar al país el valor en dólares de las ventas externas. La depresión impuso la más severa reducción de los ingresos fiscales —descendiendo el presupuesto estatal de 75 millones en 1929 a 35 millones de pesos en 1932— y, simultáneamente, una intensificación de las presiones sobre el gasto público, ya que el estado —por sustracción de materia en esta fase del ciclo económico— se constituía en la única verdadera fuerza motora de la actividad económica y de la estabilidad social. La naturaleza de esta práctica histórica fue, entonces, la que quebró la ortodoxia librecambista e introdujo las formas pragmáticas del *intervencionismo de estado,* sin el cual no habría podido impulsarse el proceso de industrialización sustitutiva, ni habría logrado organizarse el mercado de cambios internacionales, ni se

habría planteado la posibilidad de una jerarquización de las importaciones, ni se habrían preservado los andamiajes de la organización bancaria y financiera. Sin embargo, semejante tránsito de la ortodoxia del liberalismo económico a ciertas formas pragmáticas del intervencionismo estatal, no se efectuó tan rápidamente como en la metrópoli, ya que exigió no sólo una profundización de la crisis y una generalización de las presiones internas entre 1930 y 1932, sino un cambio en las posiciones ideológicas del gobierno norteamericano. No obstante el bloqueamiento casi catastrófico de la economía de Estados Unidos, las corporaciones trasnacionales y la banca privada presionaron sobre el gobierno de Olaya para preservar el estatuto del liberalismo económico tal como había sido proyectado por la Misión Kemmerer. El banco central se negó a modificar, durante los años más duros de la crisis, sus normas sobre patrón oro, exigibilidad de las deudas, préstamos y descuentos y ortodoxa hegemonía de los banqueros. La política de moratoria de las deudas se diseñó y aprobó cuando un grupo de grandes accionistas de los bancos comerciales ya habían adquirido, en procesos de remate, las tierras agrícolas hipotecadas durante el período de la inflación.

El esquema económico del gobierno de Olaya se había sustentado, originalmente, en el criterio de que sólo por medio de financiamiento norteamericano, de empréstitos públicos y de inversión privada directa, podría rehabilitarse la economía en crisis, restablecerse la capacidad importadora e incrementarse la afluencia de ingresos tributarios del estado. Este sorprendente esquema —que parecía ignorar la naturaleza de la depresión y el estado de bloqueamiento de la economía norteamericana— guió la política del gobierno hasta 1932, observando estrictamente las reglas ortodoxas del patrón oro y las normas de extrema fidelidad que caracterizan la cultura de la dependencia. No obstante que la capacidad de pago al exterior se redujo a la mitad entre 1928 y 1931, el gobierno sólo suspendió el servicio financiero de la deuda externa a finales de 1932, con el objeto de conservar —ante el inversionista norteamericano— el ingenuo prestigio de deudor honorable. En los niveles más bajos de la crisis, cuando las potencias capitalistas habían decretado la moratoria de pagos, el gobierno de Olaya se vio obligado a establecer el control de cambios, la reglamentación de las importaciones y la venta obligatoria al banco central de los dólares originados en las exportaciones. Sin embargo, el presidente Olaya creó un sistema de proteccionismo invertido, liberando a las corporaciones del enclave —Tropical Oil, United Fruit, Chocó Pacífico— de la mencionada obligación de vender los dólares obtenidos en las ventas externas. Las exportaciones desnacionalizadas —que en el auge de la república liberal llegaron a representar el 37% de las exportaciones totales— quedaron amparadas por medio de la institución de un *mercado libre de cambios*. A estas condiciones de excepción se agregó el fenómeno de repatriación de capital norteamericano, ascendiendo a 65 millones de dólares en el período de 1932 a 1939: un promedio anual de 19 millones de dólares entre 1932 y 1934 y de 23.6 millones de dólares entre 1935 y 1939. En el período 1932-1934 el ingreso de capital fue de poco más de 7 millones de pesos, mientras la remesa de utilidades e intereses desbordaba el nivel de los 96 millones de pesos. En aplicación de las mismas líneas ideológicas del esquema de Olaya, desde 1931 se expidió la nueva ley de petróleos —con la natural asesoría de una misión norteamericana— fundamentada en el

concepto gubernamental acerca de la necesidad de extraer la inversión extranjera por medio de una política de privilegios y exenciones, contratos de concesión por 30 años prorrogables y magnitudes hasta de 50 000 hectáreas por concesionario. Bajo el imperio de esta ley —inspirada en el menosprecio absoluto por los recursos naturales no renovables— el territorio colombiano se trasformó en una reserva de las compañías extranjeras, llegando el área de solicitudes y contratos a 19.5 millones de hectáreas, si bien el área efectiva de exploración no ha pasado de 2.5 millones de hectáreas. Esta consideración del país como un *territorio de reserva* y no como un *campo activo de explotación e industrialización,* reveló desde los años veinte y treinta la insalvable limitación de una política del petróleo enunciada en términos provincianos, frente a corporaciones trasnacionales que operan en los niveles superiores de una estrategia hemisférica y mundial.

La desarticulación de la economía norteamericana, la extrema reducción de la capacidad importadora, el agotamiento de las reservas internacionales como efecto de la aplicación irrestricta de las reglas ortodoxas del patrón oro, la suspensión de las corrientes de crédito externo y el congelamiento del flujo ordinario de inversión extranjera, definieron las circunstancias históricas que desencadenaron fuerzas internas —en el propio ámbito de la burguesía— e indujeron a la industrialización sustitutiva. De otra parte, el desquiciamiento del mercado interno de manufacturas importadas desde la metrópoli determinó la orientación inicial del proceso de industrialización hacia el abastecimiento de ese mercado ya prexistente y hacia el inmediato mejoramiento de las condiciones nacionales de empleo. Dos factores económicos sirvieron para definir las condiciones de *viabilidad histórica* del proceso de industrialización sustitutiva: el primero consistía en que el proceso podía sustentarse en una capacidad ya instalada y en una infraestructura creada en el ciclo anterior; y el segundo en que la producción manufacturera se orientaba hacia una demanda prexistente. Desde luego, las condiciones político-sociales del proceso de industrialización en las líneas de las manufacturas textiles, de alimentos, de bebidas, del tabaco y del cemento, no sólo se relacionaban con la prexistencia de un mercado, sino con la prexistencia de una burguesía empresaria —tan audaz y cohesionada como la que en el decenio de los años veinte trasformó a Medellín en el centro textilero y comercial de la colonización antioqueña— y la garantía estatal de un control monopólico sobre el mercado interno por medio de un artillado sistema de tarifas proteccionistas. A diferencia de lo ocurrido en la segunda fase de la industrialización —cuando el auge de las corporaciones trasnacionales norteamericanas (CTN), en la segunda posguerra, las convirtió en el centro rector del proceso— la primera expansión industrial se efectuó, precisamente, en una coyuntura de bloqueamiento de la economía metropolitana y debió ser promovida y desarrollada por fuerzas sociales internas. En esta coyuntura histórica, la burguesía industrial y financiera de Antioquia reveló una excepcional capacidad para comprender la importancia de la industrialización en el nuevo esquema de modernización capitalista. La acumulación de privilegios de estado —preferencias cambiarias, aranceles, ventajas crediticias, exenciones tributarias, subvenciones directas— estimuló decisivamente la expansión industrial pero también creó en la burguesía beneficiaria una nueva concepción del poder político como requisito indispensable para ejercer presiones o para retener el control sobre

determinados circuitos del mercado interno. A través de este repertorio de elementos se configuró el nuevo modelo liberal de crecimiento capitalista, en cuya definición participaron los sectores más lúcidos y coherentes de la burguesía y las nuevas élites de los partidos liberal y conservador. Semejante proceso implicaba, desde luego, una redefinición del papel, de la composición social y de la trama ideológica de los partidos tradicionales —salvando transitoriamente la crisis originada en su antigua vinculación con la república señorial y con las luchas políticas del siglo XIX— readecuándolos para las nuevas funciones de control político del estado y de regulación de las relaciones laborales, pero preservando en ellos los hábitos del clientelismo, de las lealtades a las familias patricias y de la trasmisión dinástica del poder. Este cambio de condiciones político-sociales determinó, en última instancia, la *viabilidad histórica* de la industrialización en plena depresión capitalista y en plena bancarrota de la economía metropolitana, haciendo posible la aceleración de la tasa de incremento del producto industrial al 11% en el lapso 1933-1939 en contraste con el 1.4% anual que correspondió al período 1925-1930. Si bien en los períodos siguientes el producto industrial no volvió a crecer a un ritmo semejante, se estabilizó un proceso que ha sido característico del ciclo de industrialización sustitutiva en los países latinoamericanos: el de que la productividad industrial ha podido incrementarse a mayor velocidad que la productividad agrícola, en cuanto los movimientos de modernización capitalista de la agricultura no han podido resolver los problemas de ineficiencia global de la estructura latifundista.

Uno de los factores que mejor definió el papel progresista de la industrialización en este ciclo histórico fue la capacidad de movilización y empleo de la fuerza de trabajo, no sólo en cuanto promovió por todos los medios la emigración campesina y la proletarización del artesanado, sino en cuanto fue asentándola en ciudades con mayor posibilidad expansiva y en las que tempranamente entraron en vigencia las normas culturales de la sociedad de consumo. El nivel de empleo industrial que alcanzó a 69 000 personas en 1926 y que descendió a 42 400 en 1931, ascendió a 54 000 en 1934, a 98 300 en 1937 y a 111 000 trabajadores activos en 1939. Era evidente que la industrialización operaba como una de las fuerzas internas más decisivas en la superación de la depresión cíclica y en el desencadenamiento del proceso de modernización económica, política e institucional que llegó a su apogeo en el cuatrienio 1934-1938, contrariamente a lo que había supuesto el presidente Olaya. La depresión de los años treinta tuvo así una trascendencia insospechada —revaluando en la práctica las nociones catastróficas sobre la crisis trasmitidas por el comunismo stalinista o por las doctrinas liberales acerca del ciclo económico— en cuanto le enseñó al país que la llamada economía de libre empresa no resistía el impacto demoledor de la depresión, que el patrón oro no era intangible, que la industrialización se había promovido sin inversión extranjera y sin recursos de crédito externo, que el estado era algo más que ese estereotipo propagado oficialmente por el liberalismo económico —*el peor de los administradores*— y que el restablecimiento del mercado interno había correspondido al de mayor deterioro en la relación de precios de intercambio con la metrópoli. Sin embargo, las élites intelectuales-conservadoras, reformistas y revolucionarias carecían de esa formación científico-social indispensable para

analizar y comprender el significado histórico de semejante experiencia y para diferenciar la naturaleza dinámica y los alcances de la depresión en los centros hegemónicos del capitalismo y en los países subdesarrollados y dependientes.

La reactivación y ampliación del mercado interno —estimulado por el desencadenamiento de las fuerzas motoras de la urbanización y la metropolización— estimuló la lenta formación de una agricultura comercial orientada hacia dentro, en las áreas de valorización comercial más intensa y más expuestas a la influencia de la economía capitalista de mercado. Las tierras arroceras aumentaron seis veces entre 1929 y 1946-48 y entre 1925-1934 la producción de algodón aumentó a una tasa anual de 3.5% y la del cacao en 16%, si bien el azúcar no había ganado todavía una posición manufacturera relevante. Era evidente que si bien existía una intensa presión campesina sobre la tierra, la exigencia de materias primas y alimentos no había alcanzado aún esa magnitud global necesaria para poner en entredicho a la estructura latifundista. El gobierno de Olaya se negó a plantear el problema de la propiedad sobre la tierra —tal como lo hacían los intelectuales socialistas incorporados al partido liberal— pronunciándose por una política pragmática de intervención en los conflictos de trabajo rural, de preservación de las haciendas, de represión implacable de las invasiones campesinas y de parcelación de tierras baldías o de fincas compradas a los propietarios como efecto de la agudización de las luchas sociales en el campo. De 1.8 millones de hectáreas cultivadas en 1938, el 40% correspondía a cultivos destinados a la exportación o al consumo urbano.

Los cambios ocurridos en el mercado interno, en los patrones de asentamiento y en la misma estructura de la sociedad colombiana, exigían no sólo nuevos elementos de integración física sino nuevos factores de movilidad espacial. Éstas fueron las fuerzas que determinaron la formación de una nueva red de carreteras, ferrocarriles y caminos vecinales y que encontraron en el vehículo automotor el factor por excelencia de movilidad general.

De 1930 a 1935 la red carreteable aumentó en 53%, centrándose los vértices en las ciudades metropolitanas de Bogotá, Cali y Medellín, en el proceso final de integración y consolidación del sistema nacional de mercado. Los cambios ocurridos en la expansión del parque automotor determinaron que, entre 1935 y 1945, debió aumentarse la refinación de petróleo destinado al mercado interno de 1.6 a 5 millones de barriles netos.

Ninguna de las nuevas tareas habrían podido acometerse sin una concentración de poder en manos del nuevo gobierno: ni el enfrentamiento a las resistencias sociales y políticas internas, ni la modificación de la estructura político-militar de las fuerzas armadas, ni el implacable desmantelamiento de los bastiones campesinos de la república señorial. El gobierno encontró la coyuntura que buscaba en la declaración de la guerra con el Perú —que en realidad tuvo el carácter de una guerra de posiciones contra la selva amazónica— en cuanto concentró en sus manos la máxima cantidad de elementos de poder, estableciendo la legalidad marcial en todo el país, sometiendo a la mayoría conservadora en el Congreso, apaciguando los focos del sindicalismo revolucionario e ilegalizando el pequeño y agresivo partido comunista que en este instante creía que la depresión era la crisis general del capitalismo y que era necesario prepararse para la instauración de

soviets de obreros, campesinos y soldados. En esta coyuntura desfavorable para las disidencias políticas apareció la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) fundada por Jorge Eliécer Gaitán con una militancia de campesinos, obreros, artesanos, profesionales y estudiantes, y una ideología nacionalista popular. Si bien la UNIR logró expresar el ascenso político del campesinado inmerso en las haciendas, fue desbordado por la movilización de masas y por la presencia de la élite reformista que veían en la instauración de la república liberal una posibilidad de trasformación profunda, rápida y a corto plazo. Éstas fueron las condiciones históricas que determinaron, en 1934, la victoria electoral de Alfonso López Pumarejo con cerca de un millón de votos, casi el triple de los obtenidos por la coalición bipartidista de Olaya en un país que apenas llegaba a los ocho millones de habitantes. A diferencia de Olaya, López Pumarejo no llegaba a la presidencia como jefe de una alianza liberal-conservadora, sino como caudillo de un movimiento radicalizado de masas, con una decisiva gravitación del movimiento obrero y una intensa presión hegemónica del nuevo partido de gobierno. El impulso de masas, la emergencia de las clases medias y la participación de una élite intelectual emulsionada en el movimiento socialista, determinaron la orientación populista de las reformas liberales y el papel asignado al sindicalismo clasista en la *pequeña revolución democrático-burguesa.* Las líneas ideológicas del programa de reformas estaban lejos de perseguir o estimular un cambio profundo —dada su naturaleza burguesa y liberal— ya que precisamente se orientaban hacia la institucionalización del sindicalismo y de los movimientos políticos que anteriormente habían desbordado los cauces de la legalidad y adquirido una dinámica revolucionaria. La neutralización o captación de esas fuerzas sociales y políticas constituyó la operación táctica que hizo posible el proyecto de modernización capitalista de la economía, del estado, de las relaciones laborales, del aparato educacional, dentro de las reglas del estado liberal de derecho. La reforma constitucional de 1936 —hecha exclusivamente por el partido de gobierno— no tendió a remplazar la Constitución autoritaria de 1886 sino a insertar en ella algunos grandes y ambiguos principios, cuya vigencia práctica ha estado enteramente subordinada a la orientación de las fuerzas contraloras del estado. El proyecto liberal burgués de reformas se articuló por medio de una serie de líneas maestras: estabilización de las fuentes de financiamiento del presupuesto público, liberándolo de la irregularidad cíclica del impuesto de aduanas e introduciendo —como soporte del ingreso tributario del estado— el impuesto directo sobre el patrimonio y la renta; definición del estatus jurídico de las tierras baldías ocupadas por tenedores latifundistas y reconocimiento de las mejoras hechas en ellas —o en las tierras de hacienda— por colonos, aparceros y arrendatarios; regulación de las relaciones tradicionales de colonato y aparcería, en procura de obstaculizar la explotación indirecta de la tierra y de propagar las formas capitalistas del arrendamiento y el salariado; incorporación de la tierra agrícola al sistema capitalista de mercado y condicionamiento económico de la adjudicación de tierras baldías de propiedad fiscal; institucionalización del sindicalismo por medio del reconocimiento jurídico de la Central Única de Trabajadores (CTC) haciendo posible su participación en la negociación de los salarios y condiciones de vida pero a costa de renunciar a cualquier actividad política que el estado pudiese considerar como partidista o

revolucionaria; integración orgánica de la universidad nacional como estructura fundamental de la educación superior y aplicación de un régimen de libertades democráticas y de cogobierno; articulación de un sistema de cambios internacionales y de aranceles capaz de instrumentar la política de industrialización y de modernización capitalista de la agricultura; organización de las primeras formas de banca estatal de fomento, con el propósito de estimular la diversificación del aparato financiero; limitación y regulación de los privilegios y exenciones fiscales asignados a las sociedades extranjeras y a las empresas del enclave colonial; modernización de los mecanismos de identificación ciudadana y de representación político-electoral. Desde el punto de vista de sus grandes e inmediatos objetivos, este cuadro de reformas se orientaba hacia la tecnificación del aparato productivo, la ampliación y estabilización de la economía capitalista de mercado, la modernización fiscal y administrativa de los aparatos estatales y una redistribución del ingreso nacional que limitase la extrema polarización y mejorase la participación del estado y de las clases trabajadoras. Pese al carácter inequívoco de la pequeña revolución democrático-burguesa, el gobierno de López Pumarejo contó más con el apoyo del movimiento obrero —o más exactamente de la CTC— que con el respaldo de la burguesía industrial y agraria, posiblemente por tratarse de un grupo social no acostumbrado al pago de impuestos, ni a que el estado regulase las relaciones de trabajo. La burguesía industrial nació rodeada de una constelación de privilegios, y tanto la burguesía rural como la clase latifundista fundamentaban su actividad económica en el colonato, las aparcerías señoriales y el peonaje. Aún más: desde los albores de su formación histórica, se consagró el dogma mercantilista de los bajos salarios y de la desorganización obrera y campesina como condición esencial de la acumulación capitalista. El hecho de que el sindicalismo de la CTC hubiese logrado incrementar su militancia de 76 274 a más de 100 000 trabajadores entre 1939 y 1943 y de que esa fuerza laboral se concentrase, en cerca de las siete décimas partes, en las ciudades metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, explica tanto la gravitación política de esa masa organizada como la creciente reacción de los sectores más intolerantes de la burguesía y de las clases latifundistas. Desde 1936, se formó la primera organización antirreformista —la Asociación Patronal Económica Nacional, APEN— apoyada en la alianza política entre sectores de los partidos liberal y conservador. La ambivalencia del proceso histórico se expresaba en el hecho de que, en la primera fase de la república liberal, se incrementaba rápidamente la población trabajadora ocupada en la industria manufacturera y en los servicios y aumentaba su participación en el ingreso nacional; y en la segunda fase —conciliadora y decadente— se invertía la tendencia de los salarios con un sentido de participación decreciente. Entre 1938 y 1948 —un largo y conflictivo decenio— la mano de obra ocupada en la manufactura y en los servicios pasó de 783 000 a más de un millón y la relación entre remuneración del trabajo y producto bruto descendió del 54.5% al 47.8%. Desde luego, es necesario señalar la incoherencia del proceso de modernización capitalista, ya que al mismo tiempo que se hacía más integrado y dinámico el mercado interno y que se aceleraba la corriente de urbanización y metropolización se ampliaban también las bases de sustentación del sistema latifundista, al aplicarse una política de adjudicación en gran escala de tierras baldías

entre miembros de la élite política, en las zonas de reserva más inmediatamente valorizables: algunos valles del bajo Magdalena, el Piedemonte amazónico, las regiones húmedas de los llanos orientales. De otra parte, habiéndose consolidado la posición del café en la estructura exportadora y habiéndose asegurado la mayor participación de productores y comerciantes nacionales en el valor en dólares de las exportaciones —por intermedio de una asociación paraestatal como la Federación Nacional de Cafetaleros— el gobierno no consideraba indispensable la reforma agraria —pese a la presión campesina sobre la tierra— sino una política que combinase la ampliación de la frontera agrícola con la modernización tecnológica y social de la agricultura. El mayor ingreso cafetalero (que entre 1930 y 1940 pasó de 58.3 millones de pesos a cerca de 129 millones, sobre un valor total exportado de 89 y 175 millones de pesos respectivamente), ocultó la gravitación de las exportaciones desnacionalizadas de petróleo, banano y platino (más del 30% del valor total exportado en el período 1930-1939), así como la desfavorable relación de precios de intercambio. Mientras en 1920-1924 los valores promedio de una tonelada de exportación eran de 188 pesos y los de importación de 370, en el período 1940-1944 esa relación era de 66 y 464 pesos, respectivamente, demostrando la extrema vulnerabilidad de semejante estructura de relaciones internacionales de intercambio y la absoluta dependencia de los ingresos originados en el café: entre 1925 y 1935-1939, la exportación del grano representó entre el 89% y el 93% del ingreso real de divisas por exportaciones físicas. Sin embargo, ninguno de estos problemas estructurales se proyectó en el debate político de este período —revelando la permanencia de una visión plana y exclusivamente cuantitativa del comercio internacional— y el estado adoptó una política de creciente endeudamiento externo para cubrir el déficit en la balanza de pagos resultante del profundo cambio cualitativo ocurrido en la composición de las importaciones.

La elección de Eduardo Santos como presidente en 1938 —con cerca de 512 000 votos, esto es, el 27% de los ciudadanos cedulados— si bien sirvió para garantizar el clima de libertades y el funcionamiento del estado liberal de derecho, implicó un congelamiento de las reformas sociales y una apertura hacia la organización corporativa de las clases capitalistas. Tanto el proceso de concentración económica y de organización corporativa de industriales, comerciantes, banqueros, terratenientes, etc., como la gravitación ideológica de la guerra española y de la segunda guerra mundial, aceleraron la polarización de fuerzas sociales y proyectaron, dentro de la sociedad colombiana, la confrontación entre posiciones democráticas y fascistas. Pero mientras las corrientes democráticas congelaron sus aspiraciones y proyectos de cambio revolucionario, las tendencias antirreformistas se convirtieron, progresivamente, al evangelio contrarrevolucionario que se expresaba en el fascismo europeo, pero especialmente en las líneas corporativas de la España de Franco y el Portugal de Oliveira Salazar. Éste fue el elemento cualitativo y galvanizante que se introdujo en la *oposición conservadora* a la república liberal y que sirvió para emulsionar, alrededor de Laureano Gómez, no simplemente el descontento de la oligarquía burguesa y terrateniente, sino los destacamentos más agresivos del partido conservador.

La presencia de estas nuevas fuerzas y la polarización de la lucha social indujeron al sindicalismo y a los sectores más politizados del movimiento popular

a propiciar el regreso de López Pumarejo a la presidencia en 1942. El proceso electoral dio como resultado la reelección de López con 673 169 votos, frente a Carlos Arango Vélez —candidato de la oposición coaligada liberal-conservadora— con cerca de 475 000. La elección reveló dos hechos nuevos: la reducción de la abstención al 47% de la capacidad electora del país y la insospechada magnitud de la oposición. En esta hora en que López llegaba por segunda vez al gobierno, habían desaparecido el empuje, la dinámica interna y las condiciones triunfalistas que caracterizaron la instauración, en 1934, de la primera república liberal. La economía estaba aprisionada en la camisa de fuerza del pacto cafetalero y en los múltiples controles impuestos por la economía de guerra. De otra parte, el gobierno se encontraba frente a una ya articulada estructura oligárquica de poder, a una notable concentración de la riqueza, a una casi repentina desaparición de la moral patriarcalista que había caracterizado la administración pública, a una fractura interna del partido liberal y a una crisis de las instituciones propias del estado de derecho. El fenómeno de la moderna estructura oligárquica de poder no sólo consistía en el auge y gravitación de las nuevas formas organizativas adoptadas por las élites burguesas y terratenientes, sino en su entrelazamiento con el sistema de conducción política de la sociedad colombiana. En esto radicaba su ubicuidad, su capacidad de ejercer influencia decisiva sobre la actividad económica del estado y, desde luego, su omnímoda facultad de sustituir el sistema tradicional de valores por una moral de enriquecimiento fácil, inmediato y a cualquier costo. El ascenso de la moderna oligarquía implicaba el derrumbe de la moral administrativa y política de carácter patriarcalista, y la consagración de exigencias fundamentales de esa nueva élite del poder como la de preservación de las fuentes institucionales del privilegio o la de complicidad política dentro del sistema de conducción de los partidos y del estado. La vertiginosa propagación de la corrupción en los altos mandos del partido de gobierno precipitó su desgarramiento interno, la caída del presidente López y la crisis de la república liberal.

La participación decreciente de los trabajadores en el ingreso nacional y el desmejoramiento de sus condiciones de vida le plantearon al gobierno la necesidad de una política redistributiva más audaz y profunda que la aplicada durante el primer ciclo reformista, precisamente cuando el gobierno liberal había perdido el empuje y la iniciativa. La posguerra sorprendió al país sin ninguna preparación, sin ningún proyecto histórico, sin ningún plan de participación en un universo trasformado por la guerra, limitándose a dilapidar el ahorro forzoso de 128 millones de dólares (superávit acumulado) y permitiendo que entre 1947 y 1948 se produjese un déficit en la balanza de pagos por 92 millones de dólares. El país vivía, de nuevo, el desbordamiento de la posguerra. De 1942 a 1945 las rentas públicas habían pasado de 209 millones a 353 millones de pesos, pero en el manejo del presupuesto ya no imperaban los principios de la honestidad administrativa, de la parsimonia fiscal y de la renuencia a utilizar políticas de financiamiento inflacionario del déficit presupuestal. Sin planeación económica y sin controles democráticos, los órganos estatales de regulación y de control se habían trasformado en fuentes de corrupción administrativa y de fácil enriquecimiento. La élite política del partido de gobierno fue incorporándose, por la vía de la corrupción y del privilegio, al amurallado circuito de la oligarquía burguesa y terrateniente.

Era evidente que éstos constituían los primeros mecanismos de enlace entre sectores políticos y económicos de la *élite del poder*. Dentro de estas nuevas circunstancias, el presidente López ya no propiciaba ninguna política de redistribución del ingreso y del poder, moviéndose en la indecisión y en el vacío. Su posición era, más que conciliadora, vacilante y derrotista. Pese a la lealtad del sindicalismo y del partido comunista, el descontento popular fue tomando cuerpo, apoderándose de las ciudades y de los campos. El frustrado golpe militar en 1945, en Pasto, demostró que el presidente tampoco tenía el apoyo de las fuerzas armadas. En esta atmósfera, la oposición popular se trasformó en una vasta movilización de masas descontentas —bajo la dirección de Jorge Eliécer Gaitán— y la oposición contrarrevolucionaria encontró en Laureano Gómez un enérgico e inescrupuloso caudillo. La división política de la CTC y la progresiva trasformación del movimiento gaitanista en una poderosa movilización de masas liberales y conservadoras enfrentada a la nueva estructura oligárquica de poder fracturaron el esquema político del bipartidismo, produjeron un vacío de poder y condujeron a López a renunciar a la presidencia, en 1945. De nuevo había ocurrido dentro de la sociedad colombiana que a través de la brecha abierta por un movimiento populista en sus orígenes y en sus proyectos formales, las fuerzas populares se habían catalizado y trasformado en una amenaza revolucionaria. Alberto Lleras sucedió en la presidencia a López, ingresando al gobierno conspicuos representantes de la oligarquía burguesa y latifundista, así como intelectuales conservadores que en 1924 y en 1937 habían hecho profesión de fe contrarrevolucionaria. Lleras no sólo puso en práctica las ideas del gobierno bipartidista que había enunciado en su segunda presidencia López Pumarejo —partiendo del reconocimiento de que "se habían borrado las fronteras ideológicas entre los partidos liberal y conservador"— sino que utilizó el modelo de sindicalismo dependiente del estado para desencadenar un proceso de ilegalización de las luchas sociales y de desmantelamiento de las bases más combativas de la CTC. El fracasado intento de huelga general decretada en noviembre de 1945 —cuando la central obrera ya no contaba con ningún apoyo desde el estado y cuando se había constituido un gobierno de coalición liberal-conservadora— provocó la inscripción del gobierno de Lleras en el campo adverso al movimiento popular, al sindicalismo de clase y a las reformas sociales. La movilización gaitanista representaba una amenaza revolucionaria, pero exigía para desarrollarse —carente de una estructura de partido, de disciplina estricta, de estados mayores— una atmósfera de libertades y el funcionamiento de un estado de derecho: paradójicamente, se trataba de una movilización que sólo podía realizarse como un último acto de la república liberal y de la democratización del poder político. Ni Gaitán ni el sindicalismo ni el movimiento popular, habían tomado conciencia de que, con el gobierno de Lleras, la república liberal estaba muerta. Asegurada la división del liberalismo y el desgarramiento del movimiento sindical, fue proclamada la candidatura de Mariano Ospina Pérez —dos meses antes de las elecciones presidenciales de 1946— empleando la misma táctica sorpresiva de coalición bipartidista utilizada en 1930. Ospina no era un vocero exclusivo del partido conservador, sino auténtica expresión ideológica de una alianza auspiciada por las oligarquías liberales, amedrentadas con las demandas obreras y con el contenido revolucionario de la movilización popular. Ospina ganó la

presidencia con el 41% de los votos emitidos, ya que el 59% restante correspondía a los candidatos liberales Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay. El gobierno de Alberto Lleras había presidido el último acto de la república liberal.

III. CONTRARREVOLUCIÓN Y NUEVA DEPENDENCIA

Ospina Pérez inauguraba, en 1946, el ciclo de los gobiernos minoritarios y que, en consecuencia, ya no podían funcionar dentro de las reglas del estado liberal de derecho, obligándose a regularizar el estado de sitio, la suspensión de las garantías constitucionales y la llamada *legalidad marcial.* Tanto Ospina como López Pumarejo habían comprendido los cambios ocurridos en la estructura de poder, los riesgos de la extrema concentración de la riqueza y la necesidad de redefinir las líneas ideológicas y el sistema de relaciones entre los partidos liberal y conservador, no sólo en respuesta a la movilización gaitanista sino también a las formulaciones sobre hegemonía de partido y sobre orientación contrarrevolucionaria y corporativa del estado hechas por Laureano Gómez. En la votación había participado el 30% de la capacidad electora del país y la mayoría relativa obtenida por Ospina sólo representaba el 41% de los votos emitidos. A partir de la derrota electoral, la movilización gaitanista no sólo encarnaba las aspiraciones populares y el temor del movimiento obrero a un gobierno autoritario y represivo, sino también la esperanza de recuperación del poder de parte de la izquierda del liberalismo. Ospina tenía el gobierno, pero Gaitán controlaba las mayorías parlamentarias. Sin embargo, en este instante en que se había producido un rápido reagrupamiento de la oligarquía burguesa y terrateniente, de los jefes tribales de los partidos, de la élite del poder, alrededor del gobierno de Ospina, Gaitán creía en la trascendencia de su convocatoria a la restauración moral de la república y en la posibilidad de enfrentarse a semejante concentración de fuerzas utilizando los mismos métodos de la movilización populista y de la aplicación irrestricta de las normas complacientes del estado de derecho. Era la hora de la segunda posguerra y casi nadie en el país tenía conciencia de los cambios operados en la estructura del mundo, ni disponía de instrumentos críticos para comprender la naturaleza de la confrontación entre las dos superpotencias, los alcances de los Acuerdos de Yalta en 1945 y el bloqueamiento de los países de Asia, África y América Latina en el cerrado dilema de la bipolaridad. El gobierno de Ospina no era todavía una opción contrarrevolucionaria pero sí la puerta de entrada hacia ella, una vez desencadenada la guerra fría en el hemisferio y realizado el tránsito cruento entre la fase de la *violencia disuasiva* (destinada a eliminar en el liberalismo la convicción de partido mayoritario y a crear las condiciones para una *negociación política entre iguales*) y la fase de la *violencia de aniquilamiento,* al imponerse la concepción contrarrevolucionaria de Gómez e intensificarse la presión hegemónica de los grupos que aspiraban a la dictadura del partido único. Por una paradoja frecuente en la historia, las fuerzas victoriosas dentro del país eran, exactamente, las mismas que habían sido derrotadas política y militarmente en Alemania, Italia y Japón.

La sustitución del modelo de la república liberal —*intervencionismo económico y liberalismo político*— por el de *absolutismo político y liberalismo económico,* dejó en manos de las corporaciones trasnacionales la capacidad de decisión en materia de trasferencia de tecnología, importación de bienes intermedios y de capital, asistencia técnica, exportación de regalías y utilidades, relaciones con las casas matrices y operación en el mercado interno de manufacturas, capitales y servicios. La liberalización de las relaciones internacionales de intercambio, en la coyuntura de la posguerra, posibilitó la rápida penetración de las corporaciones trasnacionales y su estrecha vinculación con la segunda fase de la industrialización sustitutiva, orientada hacia la producción de bienes intermedios y de capital y hacia la operación en el mercado interno. El nuevo esquema de modernización capitalista exigía una radical y definitiva separación entre liberalismo político y liberalismo económico, condicionando el capitalismo de estado a las necesidades de acumulación y consolidación de la economía privada: ésta fue, precisamente, la tarea histórica realizada por los gobiernos de Ospina y de Gómez. El liberalismo político debía ser sustituido por una progresiva concentración del poder y por una sistemática desarticulación del estado liberal de derecho, definiéndose el ancho camino hacia el absolutismo político. Sin embargo, ese camino no podía ser recorrido sin la implacable y sistemática fractura del proceso de democratización del poder político desencadenado durante el efímero apogeo de la república liberal, requiriéndose la utilización de dos elementos: el *estado de sitio* como forma legal de desmantelamiento del estado de derecho y la violencia como categoría institucional. El análisis del fenómeno de la violencia en el proceso de modernización capitalista por una vía contrarrevolucionaria ha requerido una diferenciación fundamental, entre la violencia como expresión de una política disuasiva durante el gobierno de Ospina, la violencia como efecto de una política global de aniquilamiento durante el gobierno *franquista* de Gómez y, finalmente, la violencia como *expresión de la crisis de credibilidad del estado y de la descomposición de la sociedad colombiana,* característica de los gobiernos de Pastrana Borrero (1970-1974) y López Michelsen (1974-1978). Desde este punto de vista, la violencia ha sido un componente sustancial del esquema de absolutismo político y ha servido para crear esas condiciones de modernización que tipifican el modelo de capitalismo dependiente: la eliminación de las alternativas legales para las fuerzas de oposición, la ilegalización de las luchas sociales, la sustitución del sindicalismo clasista y autónomo por un sindicalismo pragmático y confesional, el desmantelamiento de las instituciones de representación popular, la *degradación* o el *congelamiento* de los salarios reales como mecanismo de maximización de la ganancia y de aceleración de las corrientes de concentración económica. En 1945, el índice de salarios reales en el área industrial de Bogotá era de 100.4 en relación con 1938, habiendo llegado a un nivel máximo de 114.2 en 1942. De 1949 a 1953 —mientras Gómez preparaba el proyecto de estado corporativo y la prohibición constitucional de la lucha de clases— el índice de salarios reales en la industria manufacturera descendió de 120 a 104.6.

Si bien la apertura capitalista en la segunda posguerra se apoyó nuevamente en la triplicación del valor de las exportaciones cafetaleras entre 1945 y 1950, eran muy altos los costos de operación externa, se había incrementado la participación

de las exportaciones desnacionalizadas y resultaba desproporcionada la relación entre el valor del tonelaje de exportación y el de importación. En la dinámica de posguerra, la exportación alcanzó en 1949 a 626 millones de pesos y en los años siguientes sobrepasó el nivel de los 1 000 millones: si a esta masa de ingresos se agregan los préstamos públicos y la inversión extranjera privada y directa, es posible estimar el volumen de recursos con que se financió la última fase de industrialización sustitutiva, el reacomodo del mercado interno de acuerdo con los patrones metropolitanos de sociedad de consumo y el proceso contrarrevolucionario. El nuevo tipo de industrialización se orientaba hacia la sustitución de bienes intermedios y de capital, no por medio de la movilización de fuerzas sociales internas —como ocurrió en el primer ciclo— sino de la instalación de corporaciones trasnacionales norteamericanas (CTN) que, por esta vía, se trasformaban en la vértebra del nuevo aparato manufacturero y de la moderna economía nacional de mercado. Este hecho determinaba un cambio sustancial en relación con las formas del imperialismo clásico, ya que la producción manufacturera se destinaba al mercado interno pero dependía, enteramente, de las importaciones de bienes intermedios y de capital, materias primas y tecnologías, desde la nación hegemónica. Entre 1930-38 y 1946-53, la importación de bienes de consumo descendió del 45.4% al 22.5% y la de bienes de producción (maquinaria y equipo productivo, materias primas, bienes intermedios) ascendió del 54.6% al 77.5%, lo que equivalía a modificar, cualitativamente, el esquema de relaciones internacionales de intercambio: mientras la exportación continuaba apoyándose en productos primarios sin valor agregado, la importación consistía, en sus ocho décimas partes, en manufacturas y tecnologías de elevada densidad de valor. Sin una adecuada comprensión de este cambio de estructura, no podría evaluarse críticamente la significación global de dos grandes tendencias en la economía latinoamericana de posguerra: la del déficit crónico y acumulativo en la balanza de pagos y la del endeudamiento externo para financiar el déficit y el crecimiento económico. Hacia finales de 1945, habían ingresado al país 10 corporaciones trasnacionales cuyas casas matrices se orientaban, fundamentalmente, hacia la producción manufacturera; entre 1946 y 1957 ingresaron 19 y 44 entre 1958 y 1967, ya consolidado el condominio oligárquico sobre la economía y el estado. Entre 1946 y 1957 se establecieron 29 subsidiarias manufactureras y 72 entre 1958 y 1967, apuntando hacia el control de la industrialización básica, del mercado interno de bienes intermedios y de capital y de ciertos mecanismos neurálgicos del aparato de financiamiento. Estas nuevas formas coexistieron con los tipos tradicionales de enclave colonial y fueron saludadas por la propia burguesía industrial como un método óptimo de incorporación de la moderna tecnología en la industria manufacturera, sin plantearse siquiera el problema de la naturaleza de esas trasferencias de tecnología por medio de corporaciones orientadas por una estrategia mundial y a través de un hermético sistema de patentes y marcas. De otra parte, la teoría *browderista* acerca de la trasformación cualitativa del capitalismo durante la guerra —teoría que inspiró la actividad política del partido comunista y del sindicalismo ortodoxo de la CTC— había desarmado ideológicamente a ciertas avanzadas del movimiento obrero, que veían en las corporaciones trasnacionales verdaderas vanguardias misionales de la modernización capitalista. Esta visión acrítica del problema de

las CTN sólo empezó a modificarse con el desencadenamiento de la guerra fría y con la propagación de los patrones norteamericanos del anticomunismo. Dentro de esta atmósfera de liberalización económica se produjo un rápido incremento de la inversión privada extranjera —de 440 a 654 millones de dólares entre 1945 y 1953— y una inflexible dependencia de las importaciones de bienes de capital, principalmente por la gravitación de las industrias sometidas a la hegemonía de las CTN: entre 1945 y 1953, las mencionadas importaciones pasaron de 43.2% al 72% de la inversión bruta interna, expresando la naturaleza del modelo tecnológico inserto en el nuevo proceso. Es significativo el hecho de que si bien la inversión total llegó a representar más del 20% del producto en el período 1950-1953 —según estimaciones de Cepal— la inversión con recursos internos descendió del 20% al 18.5% y el ingreso bruto de capital extranjero se incrementó del 1.71% al 2.25% del producto, en el mismo período. Se inició así la nueva tendencia histórica —interrumpida sólo durante el ciclo del gobierno militar populista— hacia el financiamiento de la inversión total por la vía preferente del progresivo endeudamiento externo: al finalizar el decenio de los años sesenta (1966-1968) la inversión con recursos internos apenas representaba el 11.9% del producto y el ingreso bruto de capital extranjero había llegado al nivel excepcional del 6.21% (Cepal, datos oficiales). En el período 1950-1968, y en relación con la América Latina, la inversión con recursos internos descendió del 16.30% al 14.43% y el ingreso bruto de capital extranjero sólo se incrementó del 1.52 al 3.80% del producto latinoamericano. La concentración de esfuerzos y recursos —estatales y privados—, así como las condiciones excepcionales de la acumulación capitalista en este ciclo histórico, provocaron tanto una aceleración de las tasas de crecimiento del producto industrial (la tasa media anual ascendió al 9.2% y la del producto agropecuario apenas alcanzó al 2.7% en el período señalado) como un cambio en el *peso relativo de los sectores* en el cuadro de la economía nacional: mientras el ingreso manufacturero se elevó del 13.4% al 17.2% del producto bruto entre 1945 y 1953, el ingreso del sector agropecuario descendió del 47% al 36.9%, no obstante que continuaba suministrando más del 90% de la moneda extranjera originada en las exportaciones físicas. Semejante ritmo de expansión no sólo era producto del incremento de la inversión —en cuanto la formación de capital se cuadruplicó en términos globales y se sextuplicó en el área de la industria manufacturera, entre 1939 y 1947— sino del mejor empleo de la capacidad industrial instalada.

Las políticas agrícolas del gobierno de Ospina se limitaban a procurar un mayor ingreso cafetalero —por medio de la mayor participación en el mercado interno de la Federación Nacional—, a estimular la introducción de insumos industriales en la agricultura y a promover una diversificación enderezada a sustituir las importaciones de materias primas como el algodón, el trigo, el cacao y las oleaginosas. El problema de la sustitución de importaciones agrícolas no fue, en realidad, una política deliberada de modernización capitalista en la forma de diversificación del aparato productivo y de expansión de la frontera cultivada, sino el efecto de una aguda escasez de dólares. Dada la nueva estructura de las importaciones, el país no estaba en condiciones de continuar importando unos productos sustituibles a corto plazo y por la vía de un mejor empleo de su activo de tierras agrícolas.

El volumen físico de las importaciones agropecuarias se había sextuplicado entre 1937 y 1950, especialmente las orientadas hacia la industria manufacturera de algodón, lanas, oleaginosas y caucho natural. De otra parte, el nuevo proceso de modernización capitalista de la agricultura —en áreas como las del azúcar, el arroz, las fibras y las oleaginosas— estuvo impulsado por dos circunstancias relacionadas con las nuevas condiciones de operación de la economía del café: la mayor participación nacional en el ingreso cafetalero, al organizarse el sistema de almacenes de depósito (si bien ese ingreso se concentró en el sector de exportadores y de productores en escala comercial: en 1952, de 10 principales casas exportadoras, 6 eran colombianas y comercializaban el 48% del grano); y la incapacidad de los minifundios cafetaleros de producir sus propios alimentos básicos, al reducirse drásticamente el tamaño de las unidades productivas y desaparecer los cultivos asociados de maíz, frijol, plátano, los animales domésticos y la ganadería familiar. En 1952, las explotaciones con promedios inferiores a tres hectáreas ascendían a 535 000 y representaban el 86% del total de propiedades, cuando veinte años antes sólo llegaban a 129 600. El proceso de minifundización era más agudo en el escenario geográfico de la colonización antioqueña, en el que resultaba más intolerable la desproporción entre el tamaño de las parcelas y la magnitud de la familia patriarcal y en el que el efecto de la presión sucesorial resultaba más fuerte y demoledora. Se clausuraba así la fase creadora y ascendente de la colonización antioqueña, acelerándose la descomposición de las economías campesinas en las regiones en las que fue más agresiva la escalada de la violencia y en las que ésta operó como una fuerza de expulsión del campesinado y de modificación del catastro rural. En esta coyuntura histórica, el país todavía conservaba una fisonomía campesina —con dos terceras partes de la población en el campo— si bien se había definido la imagen de la ciudad manufacturera y había ganado un rango propio la moderna agricultura de exportación. Otra cosa había ocurrido con la agricultura que abastecía el mercado interno, que conservaba las prácticas tradicionales de la república señorial, así como el régimen global de acaparamiento y uso de los recursos físicos, con absoluto desconocimiento de los fertilizantes químicos, de los insecticidas, de los equipos mecánicos o de las semillas genéticamente mejoradas. La ganadería operaba dentro de los patrones hispanocoloniales del pastoreo, la pradera natural, la ausencia de selección zootécnica y la exigencia de grandes espacios. El régimen de tenencia y uso de la tierra seguía las líneas generales del que fue característico de la república señorial. En 1948 —de acuerdo con los diagnósticos realizados por la misión del Banco Mundial— los cultivos ocupaban un poco más de dos millones de hectáreas, mientras 43 millones de hectáreas estaban destinadas a la ganadería. Éste era, a grandes rasgos, el mismo modelo hispanocolonial de distribución global de la tierra, que se preservó y amplió a lo largo de la república señorial. La sistematización de la violencia y la multiplicación de los focos de lucha armada —al aparecer la guerrilla campesina como contrapartida de la violencia institucional— hicieron desaparecer físicamente la ganadería de algunas regiones como los Llanos Orientales y el Valle medio del río Magdalena o estimularon la exportación masiva y clandestina del ganado en pie. Los índices de producción agropecuaria revelaron un descenso del 8% entre 1947-49 y 1953-55 y los índices de precios del ganado vacuno registra-

ron, en 1953, un incremento del 900% en relación con los niveles existentes en pleno auge de la República liberal.

Semejante desarticulación del aparato productivo agrícola estuvo acompañada por el desbordamiento de los medios de pago y por la impetuosa expansión del gasto público, dos elementos característicos del proceso de consolidación del estado absolutista. Mientras entre 1941 y 1945 los medios de pago aumentaron de $176 a $473 millones, en 1951 habían ascendido a 1 120 millones de pesos y en 1953 a 1 600 millones. Precisamente en el lapso de la mayor escalada de la violencia —entre 1950 y 1953— se hizo evidente la prevalencia de la *moneda bancaria* (originada en los depósitos movilizables por medio de cheques) sobre la *moneda estatal* (originada en emisiones por el banco central o en depósitos oficiales), en la composición de los medios de pago: mientras la primera pasó de 561 millones de pesos a 724, la segunda aumentó de 285 a 360 millones de pesos. En la dinámica de la circulación monetaria de posguerra, la fuerza impulsora y reguladora no estaba centrada en la banca central sino en los bancos comerciales: éstos eran, precisamente, los objetivos a que veinticinco años antes apuntaba la misión Kemmerer y que fueron plenamente reconocidos por los gobiernos que aplicaron la fórmula del nuevo ciclo histórico: la de *absolutismo político y liberalismo económico*. Esta dinámica expresaba el auge de la banca privada, así como la iniciación del proceso de diversificación del aparato financiero. Al mismo tiempo que se apresuraba la formación de sociedades de capitalización —como las de seguros— se multiplicaban los mecanismos bancarios de captación de ahorro interno: entre esas formas nuevas, es necesario asignar una categoría especial a los depósitos de ahorro, constituidos por las clases pobres en procura de un mínimo de seguridad personal en una sociedad altamente insegura y polarizada. Entre 1951 y 1953 aumentaron los depósitos de ahorro en la banca pública y privada, de 119 millones de pesos a 231, con una tasa de incremento anual que fluctuó entre cerca del 20% al 33%. Por medio de este sutilísimo mecanismo, las clases más pobres de la sociedad colombiana se trasformaban en financiadoras de las clases ricas, de la banca comercial y del estado. En lo que hace a expansión hipertrofiada del gasto público, éste se triplicó entre 1948, y 1953, pasando de 620 a 1 600 millones de pesos (del 14% al 18% del producto nacional bruto), especialmente como efecto de las crecientes exigencias de la maquinaria represiva y del rápido ensanche de los aparatos burocráticos del estado. De 1944 a 1949 se duplicó la masa de hombres enrolados en el ejército y el presupuesto del Ministerio de Defensa llegó a representar cerca de la quinta parte del presupuesto general de gastos. El ritmo de su expansión burocrática logró una celeridad que no podía equipararse siquiera con el de actividades de tanto dinamismo como la industria manufacturera, la construcción y el trasporte. En estas condiciones, la inflación no sólo era un producto de la desordenada expansión monetaria y de la hipertrofia del gasto público, sino el resultado de una política que compartían el estado y las corporaciones económicas en el sentido de forzar el ritmo de acumulación y de propiciar una mayor concentración social del ingreso. El manejo corporativo de los precios y de los salarios, no sólo exigió la ruptura de la CTC sino la fundación de una nueva central —la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC— patrocinada por la oligarquía textilera de Antioquia y por los ideólogos corporativistas de la Iglesia

católica. Semejante mecanismo de control del movimiento obrero hizo innecesaria la utilización del llamado *sindicalismo vertical* en el *esquema franquista,* al lograr que el salario no sólo estuviese muy atrás de los precios sino muy por debajo de la productividad por persona ocupada. Se despojó así al sindicalismo de sus contenidos clasistas y de sus objetivos a largo plazo, limitándolo, estrictamente, a las acciones destinadas a conservar un cierto nivel histórico de los salarios reales. Entre 1938 y 1948 —de acuerdo con el diagnóstico de la Cepal— la productividad por persona ocupada aumentó en 21% y los salarios reales en sólo 6.6%; y entre 1951 y 1953, el índice de salarios descendió de 142 a 133, mientras la productividad del trabajo se incrementó de 133 a 155. Dentro de los marcos de este ciclo histórico, pudo definirse una tendencia en que la productividad por persona ocupada aumentó a una tasa anual de 5.4% y los salarios reales disminuyeron a una tasa anual de 1.7%. Partiendo de esta experiencia histórica, podrían enunciarse las dos más importantes leyes que regulan la economía del salario dentro de un tipo de capitalismo subdesarrollado y dependiente: la de participación decreciente del trabajo en el ingreso nacional, en aquellas fases más críticas del absolutismo político; y la de operación de la inflación como uno de los más enérgicos limitantes de la capacidad de presión y negociación del sindicalismo, en su esfuerzo por traspasar un cierto nivel —o una frontera de hierro— de los salarios reales.

Desde el punto de vista de la conformación histórica del nuevo proceso contrarrevolucionario, la Conferencia Panamericana reunida en Bogotá en abril de 1948 tuvo una especial significación, ya que fue presidida por Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores y participó directamente en ella el general Jorge Marshall, secretario de estado del gobierno de Estados Unidos y arquitecto de la guerra fría. No obstante la calidad política de Gaitán —caudillo del movimiento popular y jefe de las mayorías liberales en el Congreso—, el presidente Ospina negó su participación en la Conferencia Panamericana. Es importante señalar que la iniciación de esta conferencia estuvo precedida por el asesinato de Gaitán el 9 de abril y que a partir de ella se produjo la inmediata adopción gubernamental de la doctrina norteamericana de las fronteras ideológicas y la ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas con la Unión Soviética y con los países socialistas. Éste era, en suma, el verdadero plan Marshall para la América Latina.

En el momento de realizarse el asesinato de Gaitán —no como un acto aislado sino como parte de un proceso de desencadenamiento de la violencia desde el estado— estaba en marcha la conspiración contrarrevolucionaria contra el Congreso y contra las instituciones vitales de la democracia liberal. En 1947 y 1949 se mantuvo precariamente la mayoría liberal en las dos cámaras, pero éstas dejaron de tener importancia política en la medida en que el estado de sitio concentró la totalidad de facultades estatales en la presidencia de la República y en que fue consolidándose el régimen de absolutismo político. En 1949 el gobierno de Ospina clausuró violentamente el Congreso y en 1950 no fue convocado a sesiones, perdiendo progresivamente toda capacidad de iniciativa y todo peso específico dentro de los aparatos del estado. El control absoluto ejercido por el gobierno sobre los mecanismos electorales sirvió para instrumentar uno de los propósitos de la violencia disuasiva: la *trasformación* del partido conservador en mayoría y la reducción del

liberalismo a una condición minoritaria, por medio de la aplicación de una política de intimidación y de terror. En las votaciones parlamentarias de 1947 los liberales obtuvieron 805 874 votos y los conservadores 653 986; y en las elecciones de 1949, se cerró aún más la brecha, con 890 000 votos liberales y 780 000 conservadores. En estado de sitio y suspendidas todas las garantías constitucionales —como en un país militarmente ocupado— fue *elegido* presidente Laureano Gómez con 1.14 millones de votos contra 14: en cuatro años de desmovilización popular se había trasformado el grupo contrarrevolucionario en un partido hegemónico de gobierno. La contrarrevolución *franquista* llegaba *legalmente* a la conquista del poder del estado y a partir de entonces podría aplicar, irrestrictamente, una estrategia del aniquilamiento. En esta estrategia de Gómez, no sólo jugaron decisivo papel los secuestros institucionalizados —encarcelamientos sin proceso y sin juez—, los fusilamientos masivos, la destrucción física de las bases electorales del liberalismo —su maquinaria burocrática y su clientela electoral—, sino la sustitución implacable de la antigua burocracia y la incontrolada expansión de los aparatos administrativos del estado. La regularización del estado de sitio y la progresiva concentración del poder del estado en la presidencia de la República trasformaron al gobierno en el centro omnímodo de los aparatos estatales, capaz de sustituir, en la práctica, a los órganos legislativos, jurisdiccionales y de control administrativo y fiscal. Por medio de decretos presidenciales se determinó un nuevo orden de sucesión presidencial, se modificó la composición y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de estado, se designó al contralor nacional, se facultó a gobernadores y alcaldes para nombrar autoridades antes elegidas por asambleas y concejos municipales y se constituyó un cuerpo político —remedo de las Cortes españolas— destinado a elaborar un proyecto de Constitución autoritaria y corporativa. El proyecto constitucional de Gómez tenía dos ejes ideológicos: de una parte, incorporaba ciertos principios del franquismo como la sustitución del voto universal por el voto calificado de familias y gremios, la abolición de los partidos políticos y la prohibición constitucional de la lucha de clases; y de otra, negaba radicalmente la tradición liberal de las constituciones republicanas. Quedaba así roto, abruptamente, el modelo liberal de democracia representativa, fundamentado en el voto universal, la separación de los órganos del poder público, la organización jurídica del estado para el reconocimiento de los derechos y libertades relacionados con la sociedad y con la persona humana. Desde luego, es necesario reflexionar sobre el hecho de que el absolutismo político nunca se ha presentado en la historia como *carencia absoluta de legalidad,* sino como un sistema de concentración incontrolada de poder que es capaz de crear, a su arbitrio, su propia legalidad.

La violencia de aniquilamiento se orientó en dos grandes direcciones: una de aplastamiento de la movilización popular y de instrumentación de una ideología anticomunista que resultó identificada con la nueva doctrina norteamericana de la guerra fría; y de otra la desarticulación del liberalismo como opción de gobierno, atacándolo no sólo en sus bases populares sino en sus caudillos, sus élites políticas, su patriciado. Gómez no advertía que, en la agresión a los jefes liberales como López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, estaba golpeando en el punto más crítico y sensible del sistema: el de la identificación ideológica de la oligarquía burguesa y terrateniente con el sistema político de bipartidismo. Mientras la

violencia se escapaba del control del gobierno y desataba su propia dinámica, Gómez fue quedando atrapado entre dos poderosos frentes opositores: el de las élites liberales y conservadoras —que entre 1951 y 1953 se identificaron en un proyecto de *hegemonía política compartida*— y el de la movilización campesina que en el lapso de tres años pasó de la simple resistencia a la lucha armada, de las formas primarias de autodefensa a la organización militar para la guerra de guerrillas. El hecho de que cerca de una décima parte de la población —y la tercera parte del campesinado— hubiese sufrido en carne propia el impacto de la violencia y hubiese contribuido con una enorme cuota de ciento cincuenta mil o doscientos mil muertos y ciento cincuenta mil exiliados a Venezuela, da una medida —si es que existen medidas cuantitativas válidas— de la magnitud, la naturaleza y los alcances de la contrarrevolución gomista. En esta coyuntura de desbordamiento, se puso en evidencia la incapacidad político-militar de las facciones dominantes en el gobierno para enfrentar con éxito el riesgo inminente de una revolución social incubada en la entraña del movimiento guerrillero, el que, por 1953, había creado sus propios caudillos militares en el alto y medio Magdalena, en el Tolima, en el Huila, en los Llanos de Casanare y del Meta (Guadalupe Salcedo, Franco Isaza, Rafael Rangel, Jacobo Prias Alape, etc.), tenían sobre las armas un contingente de 35 000 a 40 000 hombres, y si bien se encontraba aún disperso en más de doce frentes regionales, estaba ya en camino de conquistar la integración político-militar de las fuerzas campesinas insurrectas. De otra parte, las fuerzas armadas se habían modernizado a partir de la participación en la guerra de Corea, pero estaban formadas en el concepto de la guerra de posiciones y carecían aún de adiestramiento para la lucha militar antisubversiva. En la medida en que la movilización campesina entró en la etapa superior de la integración político-militar, el movimiento guerrillero no sólo aparecía como una amenaza revolucionaria en el sentido tradicional sino como una nueva opción de poder. López Pumarejo y Ospina tenían suficiente perspicacia y experiencia política para descubrir lo que aparecía en el trasfondo de la movilización guerrillera y en el asentamiento —confinadas en el miserable cinturón de las ciudades intermedias y metropolitanas— de las anárquicas y torrenciales migraciones campesinas, empujadas por la violencia rural.

Al generalizarse el conflicto social, militar y político, más allá del límite tolerable por el sistema, Gómez estaba conduciendo al país precisamente a las formas más agresivas y revolucionarias de la lucha de clases. El gobierno se encontró bloqueado entre las fuerzas campesinas insurrectas y las élites liberales y conservadoras que fueron radicalizando su posición hasta el límite de la oposición frontal y subversiva. Fue una coalición del patriciado de los dos partidos (López, Ospina, Lleras, Santos, Echandía, Alzate Avendaño) —con el apoyo de la oligarquía burguesa y terrateniente— la que tomó la iniciativa de propiciar el golpe militar de junio de 1953. Una a una, Gómez había perdido todas las fuerzas de apoyo: las corporaciones económicas, las élites liberalizantes del partido conservador, los caudillos de la juventud contrarrevolucionaria y, finalmente, las fuerzas armadas. Se produjo así el vacío de poder que llevó a la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953.

IV. POPULISMO MILITAR Y CONDOMINIO OLIGÁRQUICO SOBRE EL ESTADO

Había sido superada la fase crítica de la contrarrevolución y debelada la amenaza insurreccional de la movilización guerrillera, por medio del golpe militar que derrocó la dictadura de Gómez e instaló en el gobierno a un elenco de militares de clase media, en un momento histórico en que la doctrina de las fronteras ideológicas había agudizado las confrontaciones entre las dos superpotencias a nivel mundial pero en que tomaba cuerpo la movilización populista en Argentina y se iniciaba el ciclo ascendente de la revolución nacional-popular en Bolivia. Los mandos estratégicos del sistema —corporaciones económicas, patriciado, élites políticas, jerarquía eclesiástica —apoyaron de inmediato y sin reservas al gobierno militar, al que no solamente asignaban la enorme tarea de desmontar la explosiva maquinaria de la subversión social y de las guerrillas campesinas, sino la de pacificar el país, conciliar las clases y reajustar los distorsionados aparatos del estado con el objeto de restablecer las reglas de la institucionalidad burguesa y el sistema tradicional de hegemonías políticas.

De acuerdo con este proyecto político de los partidos, el gobierno militar debía constituirse con un sentido de *provisionalidad* y de precariedad y no con un alcance histórico de *alternativa política,* debiendo confirmar así las fuerzas armadas su naturaleza de cuerpo arbitral y renunciando a cualquier propósito de ejercicio autónomo del poder del estado. Dentro de las reglas institucionales de la República liberal, las fuerzas armadas se habían definido como *apolíticas,* por lo tanto incapaces de tomar iniciativas y de independizarse de las normas emanadas de la autoridad legítimamente constituida, esto es, de acuerdo con los patrones jurídicos establecidos por las fuerzas dominantes en los dos partidos. Desde luego, semejantes formulaciones partían del supuesto de que el control directo del estado, el ejercicio del poder, la inserción en el centro de las relaciones y de los conflictos entre las clases, no constituían actividades políticas y no podían generar una propia dinámica. De otra parte, el gobierno militar nacía inmerso en una serie de contradicciones, por su misma ambivalencia histórica: se había originado en una demanda política de las clases dominantes a la desmovilización campesina y al debelamiento de la amenaza revolucionaria, y al mismo tiempo, expresaba una entrañable aspiración popular a la paz, al restablecimiento de las libertades y a la quiebra del proceso contrarrevolucionario.

Las ciudades habían crecido hipertrofiadamente, alimentadas por una emigración torrencial y anárquica del campesinado, la que en la década de los años cincuenta comprendió a cerca de millón y medio de personas, el 17% de la población rural. La migración aluvional trasformó la estructura e imagen de la antigua ciudad comercial y burocrática y desató las más intensas presiones sobre la propiedad de la tierra, sobre el mercado de trabajo y sobre los servicios asistenciales del estado. Dentro de los marcos de este proceso acelerado de urbanización y de metropolización —con coeficientes de 5% y 7% en las ciudades de mayor dinamismo— reapareció un fenómeno vigente en el ciclo de la República liberal: la presencia de las masas en el recinto de las ciudades como una fuerza de presión política. A través de este hilo conductor, era posible reconocer el parentesco existente entre la movilización de masas urbanas en el corto ciclo del gaitanismo (1944-1948) y

el que configuró el ciclo —también extremadamente corto (1953-1957)— del populismo militar: el sentido caudillista y mesiánico de los campesinos recién asentados en los cinturones marginales de las ciudades, la fidelidad de las clases medias de provincia, el anhelo de justicia social propagado por el sindicalismo, la necesidad ineludible de una redistribución del ingreso y del poder. Fueron esos cambios en la estructura del poblamiento, de la ocupación del espacio y del empleo de la población colombiana, los que determinaron la línea populista del gobierno militar entre 1953 y 1955, enderezada a introducir las concepciones justicialistas de la economía de bienestar y a promover la expansión de los servicios asistenciales del estado. Esta línea política requirió, para profundizarse, el apoyo del sindicalismo y el desencadenamiento de un movimiento de masas por fuera de la capacidad de control político de los partidos tradicionales. Se restableció la CTC, se fundó una nueva central obrera (la CNT) y la movilización popular se articuló políticamente en el Movimiento de Acción Nacional (MAN). La formación de estas bases populares de apoyo a la línea autónoma y populista del gobierno militar tuvo un doble efecto: de una parte, asignar al gobierno una tarea política independiente de los partidos liberal y conservador; y de otra, clarificar unos grandes objetivos estratégicos relacionados con la necesidad de redefinir el tipo de capitalismo de estado y las políticas de redistribución social del ingreso por medio de la tributación, los salarios, los precios y los servicios asistenciales. Si bien la tendencia hacia el capitalismo de estado se había iniciado desde el ciclo de la República liberal y había sido impulsada por el gobierno de Ospina, fue durante el gobierno militar cuando adquirió mayor peso y coherencia, al articularse un sector de empresas estatales en las líneas del petróleo, la siderúrgica, la energía eléctrica, el trasporte ferrocarrilero o la comercialización de productos agropecuarios. En esta misma fase, se plantearon al gobierno militar exigencias como la de limitar el desmesurado poder de los bancos (los que por entonces aspiraban a organizar un sistema de corporaciones financieras bajo su absoluta hegemonía), la de neutralizar las presiones enderezadas a imponer la devaluación periódica de la moneda (relación peso-dólar), la de regular la operación de las corporaciones trasnacionales, la de promover el financiamiento de la inversión nacional por la vía preferente de la movilización de los recursos internos de ahorro y la de frenar la expansión de las economías especulativas como fuerzas motoras del mercado interno. Entre 1954 y 1956 el país no sólo alcanzó el más alto nivel de inversión de su historia contemporánea —el 25% del producto— sino el más elevado coeficiente de inversión financiada con recursos internos, llegando a representar cerca del 22% del producto. Por 1955, se habían establecido mecanismos de intervención estatal en la banca privada y se habían bloqueado los canales a través de los cuales aquélla controlaba la comercialización de ciertos productos en el mercado interno por medio de los almacenes de depósito, habiéndose planteado la creación de una corporación estatal capaz de canalizar y regular los recursos nacionales de financiamiento del desarrollo. Dos hechos se encargaron de abrir definitivamente la brecha entre el gobierno militar y las fuerzas sociales y políticas que dos años antes habían auspiciado el golpe de estado: la constitución del MAN como forma independiente de movilización política de las masas; y la renuencia del gobierno a convocar a elecciones y restablecer plenamente las normas tradicionales de las

hegemonías políticas. Se había producido, en este instante, la confrontación entre la mecánica vertical del sistema bipartidista y la dinámica del sistema populista de movilización social. En esta nueva coyuntura, el gobierno abandonaba los propósitos iniciales de transitoriedad y de ejercicio vicario del poder y adoptaba el objetivo político de independizarse de la tutela liberal-conservadora. Suponía, en consecuencia, el desencadenamiento de una nueva crisis de los partidos tradicionales, al producirse un vaciamiento de sus clientelas y un desmoronamiento de los mecanismos consuetudinarios de manipulación política del pueblo raso.

Por esta brecha histórica, habían regresado de nuevo las masas al escenario nacional —como en las épocas de María Cano, de López Pumarejo y de Gaitán— y de nuevo se replanteaba el problema de la confrontación entre el poder económico y el poder político. Pero en este instante en que las élites de los partidos, los viejos caudillos y la oligarquía burguesa tomaban conciencia del problema y de la necesidad de privar de todo apoyo político al gobierno militar, carecían de organización y poder suficientes para constituir un sistema coherente, abierto y eficaz de oposición. De ahí que la primera maniobra opositora tuvo un sentido de acción indirecta, empujando a la jerarquía católica a proscribir el MAN como contrario a la doctrina religiosa y a la moral cristiana. "Lo que más preocupa a la Iglesia —decía el cardenal arzobispo primado de Colombia— es ver en primera línea, como dirigentes de la tercera fuerza, a los dirigentes de movimientos condenados por la jerarquía eclesiástica como la CNT, la CTC, el socialismo, el comunismo y otros movimientos que no tienen la confianza de la Iglesia." El gobierno militar no tenía la sagacidad política para penetrar en el trasfondo de esta hábil maniobra de diversión y decidió replegarse, disolviendo el Movimiento de Acción Nacional y renunciando con ello a las posibilidades de realizar una política independiente de reformas. La oligarquía había logrado por este medio la más imprevista y decisiva victoria táctica, provocando la disociación entre gobierno militar y clases trabajadoras movilizadas. Desde luego, la desmovilización de la *tercera fuerza* no sólo expresaba la limitada visión política de quienes acaudillaban el gobierno militar, sino el bajo nivel de conciencia social de las masas incorporadas a la movilización populista. En adelante, el gobierno militar quedaría como un poder cautivo y en el aire, sin capacidad de iniciativa, sin otras bases de sustentación que las propias fuerzas armadas. El golpe final fue una justa expresión del grado de cohesión política y de capacidad de maniobra a que había llegado la élite del poder, dentro de las corporaciones económicas y dentro de los partidos: ya no estaban solos López Pumarejo y Ospina —sus líderes más perspicaces— quienes desde 1944 habían expuesto la doctrina de la identificación ideológica de los dos partidos y de la necesidad de articular un nuevo sistema de hegemonía compartida. Ésta fue, exactamente, la coyuntura del nuevo contrato social entre la totalidad de fuerzas dominantes, liberales y conservadoras: en ese nuevo pacto no sólo estaban presentes López y Ospina, Eduardo Santos y Alberto Lleras, Carlos Lleras Restrepo y Alzate Avendaño, Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero, sino también Laureano Gómez, el caudillo contrarrevolucionario que desde 1936 se había alzado contra las instituciones de la democracia liberal y desde 1950 había preconizado la exigencia de un sistema de partido único. Desde luego, también estaba presente el estado mayor de la Aso-

ciación Nacional de Industriales (ANDI) y la enérgica burguesía industrial y financiera de Antioquia, la misma que habia promovido la derrota política de Gaitán, la organización del sindicalismo contrarrevolucionario y el derrocamiento de Laureano Gómez.

En esta última hora —en mayo de 1953— el gobierno sólo tenía un camino de permanencia: la audaz aplicación de un programa de profundas reformas económicas y sociales que movilizase al pueblo y le mostrase la posibilidad de su participación en las nuevas estructuras del estado. Pero en esta última hora, el gobierno militar había perdido la iniciativa, se encontraba dividido internamente y había dejado de ser una fuerza arbitral. El derrocamiento de Rojas se produjo por medio de una acertada combinación de tres operaciones: la conminación de la jerarquía eclesiástica al presidente para que abandonase el poder; el paro patronal organizado por la ANDI y que paralizó a la totalidad de la industria manufacturera; y la división de los generales que aparecían como columnas sustentadoras del gobierno. La vanguardia en esta ofensiva final estaba constituida por el estudiantado y las clases medias, los estamentos más sensibles a las formulaciones retóricas de los partidos sobre *regreso a la constitucionalidad democrática,* al ejercicio pleno de las libertades y a la demolición de la dictadura militar. El presidente abandonó el poder, sin lucha, el 10 de mayo de 1957, constituyéndose una junta de generales destinada a presidir el plebiscito que no sólo entregaría la totalidad del poder a los dos partidos, sino que daría al sistema de *condominio oligárquico* sobre el estado la categoría de una norma constitucional. Se había llegado así a la última fase del proceso histórico contrarrevolucionario —el de la hegemonía compartida sobre todos los aparatos de la economía, de la sociedad y del estado— después de atravesar, en el brevísimo lapso de un decenio, tres fundamentales y trágicas etapas: la del reagrupamiento de fuerzas políticas de acuerdo con las exigencias del proceso de concentración económica y de la moderna estructura corporativa (gobierno de A. Lleras); la de la violencia disuasiva, en la que se trasformaron sustancialmente las relaciones electorales entre los dos partidos y se sentaron las bases para los gobiernos de coalición paritaria (gobierno de Ospina); y la de la violencia de aniquilamiento, en la que se demostró la imposibilidad histórica —en la moderna sociedad colombiana— de una hegemonía ejercida por un solo partido y por una sola fracción de la oligarquía burguesa y terrateniente. El Frente Nacional Bipartidista —negociado originalmente entre Laureano Gómez y Alberto Lleras— se constituía en la espina dorsal del nuevo sistema político consagrado por el plebiscito de 1958 y caracterizado por estos elementos: condominio compartido por los dos partidos oficiales sobre la totalidad de aparatos del estado, tanto los de carácter representativo como operacional, incluyendo la hipertrofiada constelación de institutos descentralizados; exclusión política de las fuerzas sociales no expresadas ni representadas por los dos partidos oficiales; centralización creciente del poder del estado en el presidente de la República (dentro de las reglas de la alternación de la presidencia entre los dos partidos del condominio), por medio del funcionamiento de un régimen jurídico de excepción (*estado de sitio, emergencia económica* y *facultades extraordinarias*); abdicación, por el congreso, de sus facultades fundamentales de iniciativa en materia económica, administrativa, fiscal y financiera; paridad burocrática y presu-

puestal como fundamento del condominio liberal-conservador y como medio de identificación práctica de los grupos sociales constituidos en el bloque de poder, estimulando la hipertrofia de los aparatos administrativos del estado y su distribución milimétrica entre las clientelas de los partidos; eliminación del concepto democrático de mayorías y minorías dentro de los órganos de representación popular; y bloqueamiento de los proyectos de reforma al establecer la exigencia, para su aprobación, de las dos terceras partes de los votos. La mayor parte de estos principios normativos se aprobaron globalmente y sin debate alguno en el plebiscito de 1958 y otros —como los relacionados con el Congreso— constituyeron la materia central en la reforma constitucional de 1968, promovida por Carlos Lleras y Alfonso López Michelsen. En la práctica del *sistema de hegemonía compartida*, quedaban abolidas todas las normas esenciales de la democracia liberal: la separación de los órganos del poder público, los controles democráticos sobre el ejercicio del presupuesto, el juego de mayorías y minorías dentro de la totalidad de órganos representativos del estado, la posibilidad de una oposición democrática y con garantías constitucionales. Desde luego, el soporte fundamental del sistema residía en el monopolio bipartidista sobre la representación popular y sobre los aparatos electorales: quedaban así marginadas o eliminadas tanto las fuerzas sociales revolucionarias como las reformistas, bloqueando todas las vías institucionales para el funcionamiento de la oposición, dentro o fuera de los partidos oficiales. En la reglamentación del plebiscito —hecha por el consejo de ministros de la junta de generales— quedó consagrada esta doctrina de la hegemonía compartida, de la paridad liberal-conservadora y de la negación rasa de los derechos electorales y políticos de los ciudadanos no afiliados a los partidos oficiales: "art. 1.: será nula la elección para miembro de las cámaras legislativas, de las asambleas departamentales y de los concejos municipales, de ciudadanos que no pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal". Ésta era el acta de defunción de la democracia liberal y el *fundamento legal* para que los *gobiernos de minoría* pudiesen tener la apariencia (dejando de votar el 65% o 75% de los ciudadanos con derecho teórico a voto) de gobiernos de mayoría. Era evidente que, por este camino, no sólo se había logrado la integración —en un sistema vertebrado— del poder económico y del poder político, sino la identificación ideológica del sistema de partidos a través del cual se ha ejercido el control sobre las masas electoras, sobre los órganos de representación y sobre el estado: en el condominio ejercido durante 16 años, lo que ha estado emergiendo es *un sistema de dos partidos políticamente conservadores y económicamente liberales.* Por este nuevo método de la hegemonía compartida, no sólo se ha redefinido el papel de los dos partidos políticos y se han eliminado las fuentes de confrontación y de conflicto entre partido y partido, sino se han extirpado también los factores de confrontación entre diversos órganos del estado. El fundamento de este sistema político era, entonces, un gobierno de minorías con un rango de constitucionalidad democrática y la forma legal de una mayoría, si dentro de este sistema exclusivista y cerrado la mayoría tenía que refugiarse en la *abstención electoral.* En 1960, en pleno auge del Frente Nacional y del gobierno de Alberto Lleras, no participó en las elecciones el 61% de los ciudadanos con derecho a voto; en 1964, ese coeficiente ascendió al 69%; en 1968 —reintegrado al sistema

de condominio una disidencia táctica tan importante como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL)— la abstención llegó al 70%; en 1970 el abstencionismo se redujo al 54% como efecto de la catalización de fuerzas sociales y políticas producida en esa elección presidencial; y en 1974 la abstención sólo fue del 50% de una masa electora de diez millones de ciudadanos, como efecto de la manera equívoca como se presentaron las candidaturas presidenciales de López Michelsen y A. Gómez Hurtado —hijos de Alfonso López Pumarejo y de Laureano Gómez— y de partidos de oposición como la Alianza Nacional Popular y el Partido Comunista.

Dentro de estos marcos institucionales y políticos se definieron los nuevos rasgos del modelo de capitalismo dependiente —en el orden económico, social, cultural y político— y se produjeron en la estructura poblacional esos cambios determinados por la exigencia de la industrialización y de la moderna economía de mercado. Semejantes cambios en los patrones de ocupación del espacio eran casi coincidentes con la aceleración de las tasas de crecimiento poblacional y con el paulatino predominio de los diversos tipos de asentamiento urbano. En la década de los años sesenta, el crecimiento demográfico llegó a sus más altos niveles —3.5% anual— así como el proceso de expansión del triángulo metropolitano Bogotá-Medellín-Cali. Del ciclo de la República liberal al del condominio oligárquico se había trasformado la imagen física de la sociedad colombiana, pasando la *población concentrada* del 29% en 1938 al 61% en 1973 y una tasa promedio de crecimiento del 4.2% y descendiendo la proporción de la *población dispersa* del 70.9% al 39%, en el mismo período. El reacomodo espacial y económico de la población —que fue expresándose en el proceso de urbanización y en la expansión hipertrofiada de las economías terciarias— implicaba un cambio profundo en las demandas de ocupación y de servicios asistenciales del estado: en la década de los años setenta, la población de las ciudades aumentó a una tasa anual de 200 000 personas, la población rural se incrementó a razón de 40 000 personas activas y la población infantil a una tasa de 700 000 niños con requerimientos de escuela. Los cambios radicales en la pirámide de edades y en la estructura ocupacional han determinado uno de los más drásticos desajustes de la sociedad colombiana contemporánea, por la incapacidad del estado y de las economías privadas de responder a las intensas y progresivas demandas de empleo, educación, salud y vivienda. De otra parte, el proceso de *concentración* y de *centralización* de la riqueza, los ingresos, la cultura y el poder político, ha desencadenado una aguda confrontación entre el *modelo norteamericano de modernización tecnológica* y los *patrones mercantilistas de salariado* que funcionan en aplicación de las reglas tradicionales de oferta y demanda de mano de obra en un mercado sin mayores exigencias de calificación y no de acuerdo con los niveles de productividad del trabajo y con las necesidades de expansión del mercado interno. No obstante la influencia de los patrones tecnológicos norteamericanos (taylorismo y fordismo, en el plano de la organización del trabajo), se han conservado las concepciones que consideran el *salario bajo* como el principal soporte de la capacidad competitiva de la empresa capitalista.

En el orden económico, la modernización capitalista se ha orientado en estas grandes direcciones: la de articulación de una estructura industrial productora

de bienes intermedios y de capital e introductora —a través de las corporaciones trasnacionales— de sofisticadas técnicas originadas en el aparato productivo de la metrópoli y sin relación alguna con el desarrollo nacional de la investigación científica y tecnológica; la de trasformación cualitativa de la estructura importadora, con el objeto de responder a las exigencias de la industria manufacturera, introduciendo para ella, desde la metrópoli, bienes de capital, semimanufacturas, patentes y marcas; la de intensificación y diversificación de la economía exportadora, tanto en función de las exigencias del esquema de división internacional del trabajo en que el país está inserto, como en respuesta a las demandas financieras del modelo de industrialización y de crecimiento económico; la de expansión y reorganización de la agricultura, mejorando —dentro de los singulares patrones de racionalidad del capitalismo dependiente— la distribución global de los recursos físicos y los niveles de productividad en las áreas más directamente relacionadas con las demandas del mercado externo e interno; la de ampliación y diversificación del aparato financiero, con el objeto de estabilizar un mercado interno de capitales articulado a las necesidades del nuevo aparato industrial y al sistema de relaciones con el mercado financiero de la metrópoli; y la de asignar a la industria de construcción el más alto rango como economía generadora de empleo, no sólo por su asociación con el fenómeno de la *explosión urbana* sino por la necesidad de dar alguna respuesta a la intensa demanda de vivienda en las ciudades y de canalizar el desbordado proceso de sobrevaluación comercial de la tierra.

No obstante la creciente diversificación del proceso económico y la sofisticación de las políticas de modernización capitalista —en parte producto de las misiones norteamericanas de asistencia técnica y en parte efecto de la incorporación a los cuadros del estado de una élite tecnocrática reclutada de las clases altas y formada profesionalmente en las escuelas de Boston, Harvard, Yale o Massachussets— el ritmo de crecimiento del producto interno bruto por habitante apenas alcanzó al 1.3% anual en el decenio de los años sesenta —el de la Alianza para el Progreso— mientras en el resto de la América Latina (sin Cuba) había llegado a la tasa, bastante mediocre, del 2.7% anual (Cepal, datos oficiales, 1976). Sin embargo, el problema esencial que se formula en este análisis no es el de la incapacidad absoluta del modelo de capitalismo subdesarrollado y dependiente de incrementar —así sea irregular y precariamente— la inversión o el producto por habitante. La experiencia histórica ha demostrado que en 16 años de hegemonía bipartidista compartida, el país no ha podido conquistar un *ritmo sostenido de crecimiento* —y menos autosostenido— pero sí ha estado en condiciones de lograr (en circunstancias como las creadas entre 1971-1973, al efectuarse una concentración excepcional de recursos nacionales en la industria de construcción en las grandes ciudades y en el estímulo a las exportaciones) una tasa de crecimiento del producto por habitante del 3.8%, si bien en los años siguientes descendió al 3% y al 1.6% no obstante la reducción de las tasas de incremento poblacional. (Cepal, datos oficiales, 1976.) Aun en condiciones de extrema concentración del poder económico y del poder político, de polarizada distribución del ingreso nacional y de congelamiento de los salarios reales, ha sido posible resolver el problema del crecimiento económico, en términos de incremento irregular y errático del producto por habitante: lo que ha desbordado y desborda, radicalmente, la capacidad del

sistema político-económico, es la posibilidad de que se enfrente y resuelva el *problema estratégico del desarrollo*, en cuanto proceso que expresa la *trasformación global de las condiciones históricas de vida* de una sociedad organizada políticamente. La concepción del desarrollo no puede limitarse a las nociones cuantitativas y equívocas de *crecimiento económico* y de *niveles de bienestar* —tal como lo ha propagado en América Latina la ideología desarrollista— ya que se relaciona con la manera como existe la sociedad en su conjunto, con la calidad de la vida, con la autenticidad de las instituciones que regulan el orden jurídico, con el rango de la cultura, con la composición y papel del estado, con el uso racional de los recursos humanos y naturales de que toda comunidad dispone y, desde luego también, con la capacidad de participar autónomamente en las grandes conquistas culturales del mundo contemporáneo. La perpetuación del condominio oligárquico implica, entonces, un bloqueamiento de las posibilidades de que la nación colombiana se desarrolle y logre una ubicación propia en el mundo. La última fase de la industrialización sustitutiva se inició en la segunda posguerra y se caracterizó por apoyarse en las CTN, en el modelo tecnológico norteamericano y en la trasformación tanto de la estructura de las importaciones como del mercado financiero interno. Si bien el sector manufacturero sólo ha alcanzado a participar en un poco más de la décima parte de las exportaciones —en la década de los años setenta— ha necesitado absorber cerca de las tres cuartas partes de la importación, precisamente las de mayor densidad de valor: las importaciones de insumos y bienes de capital destinados a la agricultura apenas han representado —a finales de los años sesenta— el 3.5%, como efecto de la sustitución industrial realizada por las CTN dentro del mercado interno. Las nuevas corrientes de inversión extranjera se orientarán a partir de la segunda posguerra hacia la industria manufacturera, las instituciones de financiamiento y ciertas áreas del sector terciario como las relacionadas con el aparato de publicidad que tan decisivo papel ha desempeñado en la orientación ideológica de los medios de comunicación social. En 1969, el 85% de la inversión extranjera se orientó en esa dirección: en ese mismo año, seis grandes bancos extranjeros disponían del 15% de los activos bancarios, si bien su importancia era más cualitativa que cuantitativa. La operación de las CTN, sobre la base de una trasferencia colonial de tecnologías desde la metrópoli, ha determinado una serie de trastornos en la economía colombiana: la rigidez de la nueva estructura importadora; la insuficiente capacidad de empleo del aparato industrial más moderno y dinámico, no obstante ocuparse en los establecimientos con inversión extranjera directa el 28% de los trabajadores empleados en la industria manufacturera; la formación de dos estructuras industriales superpuestas; la drástica reducción de los aportes reales de capital de las CTN, en cuanto éstas se han financiado con reinversiones y con créditos obtenidos en el mercado interno. Existe un aspecto —poco esclarecido— en relación con el papel de las corporaciones trasnacionales en la segunda fase de la industrialización sustitutiva: se relaciona con el hecho de que, en cuanto a las subsidiarias manufactureras establecidas en el país entre 1958 y 1967, sólo el 36% correspondía a *empresas nuevas;* un 29% estaba constituido por subsidiarias de subsidiarias ya existentes y un 18% por empresas instaladas con anterioridad. En este mismo período, las ventas hechas por aquellas empresas manufactureras ubicadas en el país pasaron

de 69 a 358 millones de dólares, correspondiendo el 90% a ventas locales, mientras en los cinco países del pacto Subregional Andino (antes del ingreso de Venezuela) esas ventas se incrementaron de 151 a 743 millones de dólares: lo que equivale a decir que, en un decenio clásico por la plena vigencia de la ALPRO y del condominio bipartidista, las ventas hechas por las corporaciones trasnacionales manufactureras en Colombia representaron cerca de la mitad de las efectuadas en la totalidad del área andina. Fueron estas condiciones históricas las que posibilitaron la trasformación de las CTN en el centro dinámico de las relaciones de dependencia y del sistema de mercado interno. En razón de la limitada magnitud de ese mercado y de la naturaleza de la nueva industria manufacturera —organizada de acuerdo con los patrones metropolitanos de las economías de escala— en el último ciclo se ha reforzado aún más el proceso histórico de concentración. A finales de los años sesenta (1966, Dane), se ha revelado que las pequeñas empresas constituían el 77% del total encuestado, con el 9% de la producción bruta y el 7% de los salarios pagados; y los grandes establecimientos —el 9% del total— concentraban casi las nueve décimas partes de la inversión neta, participaban en el 75% de la producción y pagaban el 82% de los salarios. Pese a las mistificadas hipótesis acerca de la democratización del capital por medio de la sociedad anónima, 16 empresas manufactureras disponían del 82% del capital total; y estimando un promedio de 7 miembros por junta directiva, resultaría que menos de cien personas estarían controlando la capacidad de decisión de semejante aparato económico. Otra expresión del proceso de concentración económica —relativamente más intenso y profundo en las sociedades latinoamericanas que en los países capitalistas desarrollados— ha sido la *centralización geográfica* de la manufactura y de los aparatos rectores del mercado interior: sin la gravitación de estos factores, no podría explicarse la dinámica de los procesos centralizadores en las órbitas del estado, de la vida política, de la cultura, de los medios de comunicación social.

En 1976, la industria manufacturera se encontraba centralizada en cuatro ciudades (Bogotá-Medellín-Cali-Barranquilla), en las que se han localizado cerca de las seis décimas partes de los establecimientos industriales, con más de las siete décimas partes del personal ocupado, con el 73% de los salarios pagados y con el 69% de la producción sectorial. Estas condiciones históricas de la industrialización han determinado una tasa de incremento del producto industrial bastante irregular y que ha fluctuado entre el 2.5 y el 6% anual, una casi nula capacidad de reducción del desempleo urbano, una participación en la generación del producto bruto que no ha pasado de la quinta de éste —mientras en Argentina y en México ha representado más de la tercera parte y se ha constituido en el centro principal de las relaciones sociales de producción de las respectivas economías nacionales— y una necesidad de apelar al redescuento en el banco central, por intermedio de las Corporaciones Financieras, cuando éstas no han podido competir en el mercado interno de capitales con los UPACS (valores de poder adquisitivo constante), con los certificados de depósito a término o con los valores cuya rentabilidad nominal ha fluctuado entre el 26% y el 35%.

La modernización del aparato de financiamiento se ha orientado con un sentido de ampliación y diversificación, con el objeto de hacer posible el funcionamien-

to de un mercado interno de capital y de que a través de él puedan canalizarse los recursos de ahorro interno o las corrientes de capital extranjero. Sin embargo, las tendencias especulativas, que han expresado la hipertrofia de las economías terciarias y las irrefrenables presiones hacia la maximización de la tasa de ganancia, desbordaron la capacidad de operación de las corporaciones financieras privadas, precisamente las que se crearon como primer acto del Condominio oligárquico al ser derrocado el gobierno militar-populista. Ésta es la razón de que aun sociedades de capitalización como las de seguros comerciales, se hayan encontrado insertas en una tendencia hacia la inversión en finca raíz o hacia la manipulación comercial y financiera. La elección de la industria de construcción como el sector clave del crecimiento económico y de la política estatal de empleo (1970-1974) estimuló aún más estas tendencias hacia la distorsión especulativa de la inversión, acelerando el proceso de sobrevaluación comercial de la tierra —urbana, suburbana y rural— y un progresivo encarecimiento de los materiales de construcción: la exportación de este tipo de bienes, especialmente a Venezuela y Ecuador, se incrementó a una tasa del 40% entre 1970 y 1975, aumentando en 165% el costo de su manufactura. El resultado de semejante *estrategia de crecimiento* fue un aumento anormal de la construcción de viviendas para clases de altos ingresos, el excesivo encarecimiento de los materiales de construcción —imponiendo mayores sacrificios económicos a las clases pobres— y la utilización gubernamental de un mecanismo inflacionario —el UPAC— para la captación de ahorro interno con destino al financiamiento de la construcción. De 1973 a 1976, el ahorro financiero captado por los UPACS pasó de 4 600 millones a 17 550 millones de pesos, o sea, el 20% del ahorro nacional en este último año. El desbordamiento de los UPACS y la desarticulación del mercado de capitales, han determinado una progresiva tendencia hacia el endeudamiento externo —privado y público— y hacia la captación en gran escala del ahorro originado en las clases pobres. La superintendencia de sociedades anónimas (1968) ha registrado esta tendencia hacia el endeudamiento externo de la empresa privada, señalando para casi todo el decenio un coeficiente del 75% sobre el total de fuentes internas y externas utilizadas. En 1975, de una deuda pública de 58 146 millones de pesos, el 70% correspondía a deuda externa, elevándose a $0.97 el coeficiente de endeudamiento público. En el plano de la economía de estado, tanto la República señorial como las nuevas formas de modernización capitalista tendieron siempre a financiarse con endeudamiento externo, inglés o norteamericano. Entre los ciclos del gobierno militar-populista y el de pleno auge del condominio oligárquico sobre el estado (1954-56 y 1966-68), se produjo un descenso casi vertical de la inversión colombiana del 25.2% al 18% y de la inversión financiada con recursos internos del 21.7% al 11.9% del producto, incrementándose el ingreso bruto de capital extranjero del 3.49% al 6.21%: se demostraba así que éste no era un fenómeno circunstancial sino que constituía una de las piezas maestras del modelo histórico de capitalismo dependiente (Cepal, datos oficiales). El ahorro de las clases pobres —depositado en bancos comerciales y públicos— se incrementó entre 1973 y 1975 desde cerca de 8 000 millones hasta 12 153 millones de pesos, revelando una extraordinaria capacidad de cubrir una parte del vacío creado en el mercado interno de capitales y de desviar las presiones tributarias por medio de las cuales

el estado podría aumentar la tasa nacional de ahorro gravando las rentas o comprimiendo los consumos suntuarios de las clases ricas. En 1975 (gobierno de López Michelsen) este tipo de ahorro llegó a representar el 32% del ahorro financiero neto del país, demostrando la envergadura y la eficacia de la política del condominio oligárquico, enderezada a trasformar a las clases pobres en financiadoras en gran escala de los banqueros comerciales y del estado: en 1975, las cuentas de ahorro ascendían a 7 400 millones de pesos en los bancos comerciales privados, y a cerca de 5 000 millones en la banca estatal.

La modernización capitalista de la agricultura se ha apoyado en diversas líneas operacionales: mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones de comercialización agropecuaria (sistema de almacenamiento, trasporte, empaques, tipificación de productos, cuenta y medida, etc.); creación de agencias comerciales del estado, destinadas a la regulación de ciertas condiciones de comercialización de granos y materias oleaginosas con exigencia de procesamiento industrial; estímulo estatal a la trasformación de latifundios ganaderos y agrícolas localizados en áreas de elevada valorización comercial —como el valle del Cauca o los llanos del Tolima— por medio de la trasferencia de sofisticadas tecnologías de fertilización, mecanización, etc.; apoyo estatal a la cartelización de grandes productores y vendedores —como en el caso de la Distribuidora de Azúcar, financiada con recursos del presupuesto público y dotada de facultades de regulación del mercado interno— o aplicación de un modelo marginal de reforma agraria y colonización, inspirada en las líneas ideológicas de la Alianza para el Progreso y fundamentada en la difusión de la economía parcelaria, en la consolidación del mercado capitalista de tierra agrícola, en la ampliación de las clases medias rurales y en la desviación de la presión campesina sobre la tierra por medio del estímulo a la ocupación de las tierras baldías de la periferia. La modernización tecnológica de los latifundios ubicados en las regiones estratégicas del crecimiento capitalista (valles del Cauca, del Magdalena bajo y medio, del Sinú, etc.) se orientó hacia el abastecimiento del mercado interno de azúcar, algodón, arroz, oleaginosas, sorgo, provocando en las décadas de los años cincuenta y sesenta un cambio sustancial en el patrón general de uso de los recursos físicos y una relocalización de la agricultura en las mejores tierras mecanizables del valle, litoral y altiplano. Éste fue el período histórico en que la agricultura descendió de las laderas y en que la ganadería empezó a vincularse con los cultivos forrajeros y con los alimentos concentrados producidos por las corporaciones trasnacionales. En este proceso se modificaron también las relaciones sociales en esas áreas modernizadas —sustituyéndose el colonato, el peonaje tradicional y las aparcerías serviles por el salariado—, se precipitó la descomposición de las economías campesinas y se modificó, en una cierta medida, el tipo de concentración de la tenencia agraria, especialmente en ciertas regiones de más intensa valorización comercial, como las del café, la caña de azúcar, el algodón, el arroz y las oleaginosas. El problema de la modernización debe abordarse no como un proceso global y a nivel de toda la estructura, sino más bien como un fenómeno circunscrito a ciertas áreas neurálgicas: en la órbita de las explotaciones cafetaleras de 20 a 50 hectáreas (la densidad económica de la plantación ha modificado el concepto tradicional de grande o mediana explotación agrícola), la productividad ha pasado de media tonelada a quince toneladas de

grano por hectárea, al efectuarse el tránsito —en ese tipo de plantación— del tipo *arabiga* al *caturra* y de las técnicas altamente selectivas a las de intensa fertilización y cultivo sin sombrío; y en los complejos agroindustriales azucareros del valle del Cauca, la productividad se ha incrementado desde 10 toneladas (productividad de la pequeña finca tradicional en el cinturón subtropical andino) hasta 100 toneladas de caña por hectárea. Esta imagen de la modernización tecnológica sólo puede interpretarse dentro de su contexto social, ya que, en términos globales, la mecanización se ha limitado al 1% de las medianas explotaciones y al 14% de las unidades menores de 1 000 hectáreas; y en lo que hace a las pequeñas explotaciones (con menos de 10 hectáreas) el 68% ha empleado, exclusivamente, fuerza humana. El uso de semilla genéticamente mejorada se ha circunscrito a los cultivos comerciales del algodón y la soya y en la agricultura de la papa —característica de *tierras frías* y de medianas o pequeñas explotaciones— apenas se la ha registrado en el 1% del área total cultivada (ICA 1971). La expansión de la fertilización química ha estado regulada por las condiciones monopólicas impuestas por las corporaciones manufactureras: entre 1958 y 1967, el índice de precios agrícolas se incrementó en 167% y el de fertilizantes en 218%, como efecto de la concentrada estructura productora de insumos para el sector agropecuario. En general, la productividad por trabajador ocupado ha sido más elevada en las grandes unidades latifundistas, y la productividad por hectárea —como efecto de la desproporcionada carga laboral que soporta— ha sido más elevada en los minifundios. De acuerdo con el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) las grandes explotaciones latifundistas de todo tipo representaban el 0.5% de las explotaciones, poseían el 45% de la tierra agrícola, empleaban apenas el 5% de la mano de obra rural y registraban una productividad por hectárea de tierra cultivada que era sólo el 80% de la obtenida en las explotaciones minifundistas. El minifundio —representando el 63% de las explotaciones— apenas disponía del 5% de la tierra, debía emplear en ella cerca de las seis décimas partes de la mano de obra rural y su productividad por trabajador agrícola era inferior en 895% a la correspondiente a las explotaciones latifundistas. El censo de 1970 no registró variaciones sustanciales en la distribución general de la tierra: los predios con menos de cinco hectáreas (promedios de 2.3 hectáreas) representaban el 70% del total de las explotaciones, con el 5.6% de la superficie; y las explotaciones superiores a 300 hectáreas —el 0.8% del total— podían disponer del 40% de la tierra agrícola, la de más intensa valorización comercial y más alto nivel de renta. En el estrato más bajo de las economías minifundistas, el 33% de los predios con menos de una hectárea, apenas ocupaba el 0.7% de la tierra.

Pese a los cambios operados en el proceso de modernización capitalista de la agricultura, tanto las necesidades globales del crecimiento económico como la presión interna ejercida por un millón y medio de familias campesinas sin tierra y por un incremento anual de la población rural en 40 000 familias (CIDA, 1960), pusieron en entredicho los patrones de tenencia y empleo de la estructura agraria y desencadenaron los más agudos conflictos políticos y sociales. Estos factores de conflicto social —unidos a los procesos de radicalización del movimiento obrero y de las élites intelectuales de la clase media conmocionada por las victorias político-militares de la Revolución cubana— condujeron a los propios grupos del

condominio oligárquico a promover y aplicar, a partir de 1962, un tipo de reforma agraria inspirado en el esquema tecnocrático auspiciado en la década de los años sesenta por la Alianza para el Progreso. La ley de reforma agraria fue el producto de una cuidadosa negociación entre los sectores políticos del condominio, con exclusión de las clases populares y, particularmente, del campesinado, orientándose hacia la *colonización de baldíos en regiones periféricas,* hacia la *parcelación de latifundios marginales* y hacia la *inversión estatal* en obras de readecuación física de tierras. En un decenio de ejecución de este tipo marginal de reforma agraria, más del 95% de las operaciones del Instituto Colombiano de Reforma Agraria consistieron en adjudicación de tierras baldías a colonos espontáneos, esto es, nada más que legitimación de posesiones. En el decenio, se expropiaron en total 33 predios —el 0.4% de las tierras adquiridas por el INCORA— asignándolas a 13 800 familias: o sea, que las operaciones de redistribución y reforma agraria no alcanzaron a afectar ni al 1% de un área agrícola aprovechable estimada en 15 millones de hectáreas, ni la masa de campesinos beneficiarios se ha aproximado al 1% de las familias campesinas necesitadas de tierra cercanas al millón y medio desde 1960 (CIDA). La mayor parte de las acciones del INCORA han sido, en consecuencia, adjudicación pura y simple de baldíos (2.6 millones de hectáreas para 81 181 beneficiarios) localizados en la periferia del país y sin obras de adecuación y saneamiento, no operaciones de redistribución de las tierras ya incorporadas a la estructura. Desde luego, es mucho más costoso para el estado la instalación de una familia campesina en las laderas boscosas del piedemonte amazónico —en términos simplemente económicos— que su asentamiento en una área de latifundio del Cauca o del Tolima: pero el problema no puede abordarse como una cuestión de *racionalidad económica* sino de *racionalidad política,* desde el punto de vista de los intereses y objetivos de los grupos contralores del estado. Es ésta la razón válida de que la reforma agraria —promovida y ejecutada por los socios políticos del condominio— no haya podido orientarse hacia la trasformación de la estructura latifundista y hacia la instrumentación de un *proyecto nacional de desarrollo,* sino hacia el logro de algunos limitados objetivos: la desviación de la presión campesina sobre la tierra, impulsándola hacia las apartadas regiones de colonización; la apertura de la frontera agrícola más allá de los límites del territorio ya incorporado a la explotación económica, desempeñando la colonización espontánea una función de mecanismo de *reproducción del sistema en los nuevos espacios* (áreas periféricas de los llanos orientales, zonas boscosas del Magdalena medio, piedemonte amazónico, etc.) o de fuerza de presión sobre el estado para que éste asuma la responsabilidad de construir las obras de integración física; y la realización de proyectos de readecuación de tierras —riegos y drenajes— que si bien han podido vincularse con objetivos de parcelación en áreas con requerimiento de agricultura intensiva, han gozado, en la esperanzada década de la ALPRO, de la facultad privilegiada de canalizar recursos internacionales de financiamiento, y han acudido en apoyo de los procesos de sobrevaloración comercial de la tierra. El problema central —con este *tipo marginal de reforma agraria*— ha consistido en que no ha podido cumplir sus limitados fines de incremento sustancial del producto agrícola por habitante, de disminución de los conflictos sociales en el campo, de definitivo dislocamiento de la presión campesina sobre la

tierra originada dentro o fuera de la frontera física de los latifundios o en la enorme polvareda de minifundios. La radical incapacidad de este tipo de reforma agraria para provocar una mínima redistribución de la tierra y del ingreso agrícola indujo al gobierno Lleras Restrepo a plantear, como nuevo objetivo de la modernización capitalista, la redistribución del crédito agrícola por medio de asociaciones de usuarios campesinos en las que debían integrarse beneficiarios de la reforma, minifundistas, colonos, aparceros y arrendatarios de tierras. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos fue creada en 1967; en 1970 se reunía un primer congreso en el que estaban representados 450 asociados municipales y 845 000 campesinos y en el año siguiente se expedía un documento en el que se expresaba, inequívocamente, el profundo cambio ideológico del campesinado. El primer mandato campesino proclamó, en 1971 (ANUC, reunión de Fúquene), la plena independencia política del campesinado y la necesidad de "sustituir el actual régimen de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, por el de *grandes unidades cooperativas de autogestión campesina,* sobre la base de la asociación voluntaria y el desarrollo tecnológico del campo". Se quebraba así, imprevistamente, ese *estado de desorganización campesina* que había sido propiciado por la República señorial y por la contrarrevolución gomista. El extremo celo de las clases latifundistas por bloquear aún las formas más inocuas de organización del campesinado se ha expresado en hechos como el de que, a finales de los años sesenta, de 1826 cooperativas registradas, sólo el 3% tenía carácter agrícola y apenas afiliaba al 1.3% de la población activa rural. La política del gobierno Pastrana Borrero (1970-1974) se orientó en el sentido de debelar esta amenaza política, destruyendo a la ANUC como organización independiente y procediendo a la legalización sistemática de las luchas del campesinado. La eliminación de los mecanismos legales creados durante el gobierno Lleras Restrepo para canalizar las presiones campesinas y posibilitar el manejo de los conflictos agrarios por el estado propagó —en los años setenta— las formas más subversivas de expresión de esos conflictos sociales: las incesantes, generalizadas y masivas invasiones de tierras.

Resultó así que un efecto insospechado e indirecto de la reforma agraria consistió en que, a través de las múltiples asociaciones de usuarios de servicios públicos, cooperativas, empresas comunitarias, sindicatos rurales, el campesinado fue trasformándose en una fuerza social y política independiente del condominio oligárquico, al tomar conciencia del problema de la tierra y al ver nuevamente frustradas sus expectativas. No obstante la concentración de esfuerzos y la movilización de recursos estatales en el fomento de la exportación de azúcar, algodón, tabaco y bananos —aun a costa de provocar su progresivo encarecimiento en el mercado interno— la tasa de crecimiento anual de estas exportaciones básicas logró pasar de 0.1%, 0.4% al 5.1% entre 1950-60 y 1966-73, pero el incremento del producto agropecuario apenas ha logrado acercarse a la tasa del crecimiento poblacional.

De otra parte, ni las políticas de modernización de la agricultura, ni la reforma agraria, han logrado sustituir importaciones que —computando sólo las originadas en Estados Unidos— han alcanzado entre 1973 y 1975 un nivel de 257 millones de dólares, esto es, cerca de la mitad o la tercera parte del valor anual de la exportación cafetalera.

El núcleo neurálgico del modelo colombiano de capitalismo dependiente ha radicado en la necesidad de apoyar el *crecimiento económico* (evaluado en términos de incremento de la tasa de acumulación, de inversión y de producto nacional por habitante) en el deterioro de las condiciones sociales, en la degradación o en el congelamiento del *salario real* y en la tendencia histórica hacia una participación decreciente o congelada del trabajo en el ingreso nacional, de acuerdo con la naturaleza de las relaciones sociales y políticas entre las clases en cada uno de los ciclos históricos. La experiencia de la sociedad colombiana ha demostrado que cualquier proyecto de fundamentación del crecimiento económico en una agudización de las formas de opresión social y en una degradación conjunta de las condiciones de vida de las clases trabajadoras (desempleo abierto y subempleo, expansión de la marginalidad social en las ciudades y en los campos, deterioro de los salarios reales como efecto de los procesos inflacionarios, menores posibilidades de acceso a las instituciones públicas de educación, salud, seguridad social) ha exigido un reforzamiento de los ajustados engranajes que conforman el *absolutismo político.* Sin estas exigencias vitales del sistema, no podrían explicarse las tendencias hacia una mayor concentración de las facultades del estado en la presidencia y un correlativo desmantelamiento de las instituciones características de la democracia liberal. La reforma constitucional de 1968 fue una respuesta política a estas necesidades de preservación del condominio oligárquico, apresurando la crisis de un parlamento despojado de sus funciones esenciales dentro del estado. En 1976 el presidente López Michelsen ha propuesto una nueva reforma constitucional, con el objeto de privar a los cuerpos representativos —asambleas y concejos municipales— de sus facultades de elección de gerentes y directivos de las empresas y servicios públicos en los niveles regional y local. Se completaría así —por intermedio de una constituyente paritaria— la parábola de la concentración absoluta de la capacidad de decisión en los diversos planos político-administrativos del estado.

Una de las más agudas expresiones de la degradación de las condiciones sociales ha sido el *desempleo abierto,* así como las variadas y complejas formas del subempleo urbano y rural. De acuerdo con recientes investigaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, la desocupación abierta ha llegado a comprender más de un millón de personas, cerca del 18% de la población activa. Diez años después de realizada la investigación, esas formas de desempleo han fluctuado entre el 12% y el 16% de la fuerza nacional de trabajo, sin que, por otra parte, se haya establecido en el país ninguna forma de subsidio para cubrir semejante riesgo que afrontan, exclusivamente, las clases trabajadoras. En el período 1965-1970 —uno de los coherentes en el ciclo histórico del Frente Nacional Bipartidista— la población activa crecía a una tasa del 3.6% anual y la capacidad real de empleo apenas se incrementaba a un ritmo del 2.2%. Fracasada la política de reducción del desempleo por medio de la concentración del esfuerzo inversionista en la industria de construcción urbana, así como el propósito de bloquear las torrenciales migraciones campesinas a las ciudades por medio de la reforma agraria, sólo han quedado en pie algunas tendencias como la de financiar el empleo por medio de una reducción conjunta de los salarios reales: de ahí que mientras en 1970, 940 000 trabajadores afiliados al Instituto Colombiano de Seguros Sociales devengan una

nómina mensual de 1 822 millones de pesos, en diciembre de 1974 se había incrementado la masa de trabajadores a 1.3 millones y estaba devengando una nómina de 1 340 millones de pesos en términos reales: o sea, que había aumentado el empleo en 35% pero el fondo de los salarios reales apenas se había incrementado en 1.8%. Otra de las expresiones fundamentales de este esquema de crecimiento económico a costa del desarrollo social, ha sido la política general de *bajos salarios*, no sólo por la vía de los niveles establecidos por las empresas patronales o fijados por el estado como *salarios mínimos* para largos períodos de dos a cinco años, sino a través del manejo de uno de los mecanismos condicionantes de la economía capitalista de mercado: el sistema de precios. En junio de 1976 el salario industrial era de 3 146 pesos mensuales, pero el valor de la *canasta familiar* para la clase obrera había ascendido a 4 456. En 1973 —a finales del gobierno de Pastrana Borrero que centró su política de crecimiento económico en la promoción del empleo a través de la industria de la construcción— los trabajadores que recibían ingresos inferiores a 1 000 pesos mensuales (cerca de 40 dólares) constituían el 92% de los jornaleros agrícolas, el 86% de los trabajadores de servicios y el 60% de los obreros.

Finalmente, la distribución social del ingreso (una de las más objetivas expresiones de la manera como funciona la estructura de una sociedad y no un simple producto de las políticas convencionales del estado) ha sido en Colombia bastante peor que la registrada en el grupo de países andinos (Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Chile), en el que la mitad de la población —en el momento de iniciarse el proceso de integración— recibía el 15% del ingreso (100 dólares anuales), el 40% obtenía un ingreso medio de 300 dólares y el 5% —en la cima de la pirámide— retenía entre el 36% y el 40% del ingreso nacional. A finales de la década del sesenta (misión Musgrave), la mitad de la población —repartida en ese ancho territorio que se extiende entre la miseria y la pobreza— recibía el 14% del ingreso, en tanto que el 10% ejercía el control sobre el 50% del ingreso total. Entre 1960 y 1968 —de acuerdo con las mismas fuentes— el ingreso recibido por el 50% de la población más pobre disminuyó del 17.5% al 10%, mientras los ingresos de la población más rica se incrementaron del 42% al 67%. Una investigación efectuada entre 44 países subdesarrollados de Asia, África, Europa y América Latina —publicada en 1971 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— ha revelado que Colombia es el país en el que la minoría más rica (el 5% de la población) controla una proporción del ingreso nacional superior al 40% y en el que las mayorías pobres y despojadas de todo poder (el 60% de la población) apenas dispone de una proporción inferior al 16% de ese ingreso. La institucionalización del poder oligárquico en los últimos veinte años, ha hecho posible el funcionamiento y la preservación de semejante estructura de distribución del ingreso nacional, anulando el efecto de las políticas liberales o populistas enderezadas a corregir —por métodos tributarios y keynesianos— esos patrones de distribución. Después de cuarenta años de reforma tributaria iniciada en la República liberal, la misión Musgrave (que ha mantenido la tradición de las periódicas misiones norteamericanas que diseñan los esquemas de modernización capitalista), ha llegado a la conclusión de que en Colombia "la distribución del ingreso, antes y después de pagar los impuestos, es prácticamente la mis-

ma" (1969). No sólo quedaba así anulado el sentido distribucionista de la reforma tributaria del primer López, sino radicalmente abandonada la antigua aspiración histórica del liberalismo colombiano a modificar los patrones de distribución social de la riqueza por medio del impuesto directo y del reconocimiento del derecho a los productos del trabajo: "Las reformas políticas no valen nada —proclamaba desde 1853 uno de los más influyentes ideólogos del liberalismo en el siglo XIX, Manuel Murillo Toro— si no han de acompañarse de una reconstitución radical del ordenamiento social por medio del impuesto directo y de la constitución de la propiedad sobre los frutos del trabajo". Desde luego, la característica fundamental del problema no sólo ha consistido en el hecho mismo de la distribución injusta y polarizada del ingreso, sino en la política general de desmantelamiento de las formas organizativas y populares y de ilegalización de las luchas sociales orientadas precisamente hacia la modificación de esos patrones y esas formas de distribución de la riqueza, o más exactamente, de los resultados y productos del modelo oficial de crecimiento económico: ése ha sido el papel asignado al absolutismo político.

Durante los veinte años de *hegemonía compartida* y alternación liberal-conservadora en la presidencia de la República (gobiernos de Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo. Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen) ha ido polarizándose la lucha social y expresándose —dentro de este cerrado esquema de absolutismo político— en la forma de *disidencias tácticas* dentro de los partidos oficiales (como en los casos del Movimiento Revolucionario Liberal y de la Alianza Nacional Popular en su primera fase histórica) o de movimientos independientes y enfrentados revolucionariamente al sistema de condominio, como en los casos del Frente Unido de Camilo Torres, de la Alianza Nacional Popular a partir de 1970 o del amplio espectro de organizaciones políticas y militares —con un común denominador socialista o comunista— que se han galvanizado en la oposición y han ido ensanchando su área social de influencia (MOIR en la línea ideológica pequinista, *Bloque Socialista* y Unión Socialista Revolucionaria en la línea trosquista, Partido Comunista Colombiano).

Nada más alejado de la realidad histórica que la imagen de unos años sesenta y setenta dominados por el conformismo social y por el tranquilo ejercicio de la hegemonía compartida. El análisis de los movimientos sociales y políticos correspondientes a este ciclo final de conformación del *modelo de capitalismo dependiente y democracia sin mayorías ni participación popular* ha demostrado tanto la reiterada sucesión de fuerzas de oposición y de resistencia política —MRL, Frente Unido, Alianza Nacional Popular— como la capacidad del *sistema de hegemonía compartida* de debelar esas amenazas revolucionarias, de neutralizar el efecto de demostración de las grandes trasformaciones ocurridas en América Latina y de asegurar, periódicamente, el cuidadoso desmantelamiento de las organizaciones con mayor capacidad catalítica y de movilización popular. Por medio de las disidencias *tácticas* liberales y conservadoras, de la fractura violenta o del control absoluto sobre la totalidad de eslabones del aparato electoral, el condominio bipartidista ha podido absorber las grandes oleadas que sucesivamente desataron la revolución socialista de Cuba, la constitución de un gobierno nacional-revolucionario en Perú, el acceso del socialismo chileno al poder del estado por una vía

electoral, así como el fracaso de una Alianza para el Progreso que le hizo perder a la América Latina un decenio de esfuerzos por aminorar el subdesarrollo o acercarse a las posibilidades del desarrollo. En la primera fase del ciclo histórico —decenio de los años sesenta— se produjeron algunos acontecimientos de significativa trascendencia en los *modos de expresión y funcionamiento* de la sociedad colombiana contemporánea: la formación de nuevas centrales como la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) capaces de romper progresivamente la hegemonía de las dos confederaciones oficiales (CTC y UTC) y de operar como vanguardias políticas del movimiento obrero; la movilización del campesinado y su trasformación en una fuerza independiente de los partidos oficiales y cuya dinámica antilatifundista se ha expresado en el constante flujo de las invasiones y la toma directa de la tierra; la organización sindical de las clases medias —incluyendo a los profesionales y trabajadores al servicio del estado— pese a la ilegalización de sus luchas y a la negación de sus derechos a la estabilidad laboral y a la contratación colectiva; la trasformación cualitativa del movimiento estudiantil, escapándose de la influencia tradicional del bipartidismo y conquistando sorpresivamente el rango de vanguardia ideológica —no siempre objetiva y crítica— de la sociedad colombiana; y, finalmente, el afloramiento y multiplicación de los *frentes guerrilleros,* no sólo como efecto de las *concepciones foquistas* que se propagaron en América Latina en los años sesenta, sino como consecuencia política de la eliminación de *alternativas legales de gobierno* en que se ha fundamentado el sistema de condominio.

Si bien todos los esfuerzos del sistema político se han orientado en el sentido de obstruir, impedir o desmantelar cualquier fuerza organizada de oposición —con capacidad de aparecer como una *opción de gobierno*— el descontento popular ha ido tomando diversas formas y expresándose en algunas grandes direcciones: la del MRL, disidencia táctica del liberalismo, enderezada a neutralizar el profundo impacto de la Revolución cubana en las nuevas generaciones universitarias y en amplios sectores del movimiento obrero y campesino; el Frente Unido de Camilo Torres, que diseñó una estrategia de *unidad popular* pero no logró crear —en un atropellado proceso de tres años— las bases organizativas capaces de dar forma coherente, eficaz y dinámica a esa unidad; la Alianza Nacional Popular de Rojas Pinilla que, después de 1966, fue trasformándose —por intensa presión de las masas urbanas descontentas y frustradas— de *disidencia táctica* de los dos partidos oficiales en una movilización política identificada en la actitud revolucionaria frente al sistema oligárquico del condominio; y los diversos *focos* en que se ha centrado la lucha político-militar; el del Ejército de Liberación Nacional, en el valle medio del Magdalena, comandado por Fabio Vásquez Castaño; el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las regiones sureñas del valle del Magdalena, comandado por el dirigente comunista Manuel Marulanda Vélez; y la del Ejército Popular de Liberación, en la cuenca del río Sinú, y en el noroeste de Antioquia, dirigido por el Partido Comunista M. L. (marxista-leninista). Estos *focos de acción guerrillera* han podido conservarse desigualmente, a lo largo de un decenio, si bien no han logrado ganar una capacidad de decisión militar y política, tanto por la imposibilidad de su integración en una estructura nacional de conducción estratégica y táctica, como por el hecho de que todavía las diversas organizaciones

de izquierda existentes en el país no han madurado políticamente hasta el punto de aceptar su integración en una estructura unitaria, independiente y nacional, capaz de señalar a la sociedad colombiana un nuevo rumbo histórico y un proyecto socialista de vida, identificando y movilizando a las fuerzas protagónicas de semejante trasformación revolucionaria: el movimiento obrero, el campesinado, las arenosas masas urbanas, las élites inconformistas de las clases medias, el artesanado insatisfecho, las vanguardias estudiantiles.

En este proceso histórico no sólo se han identificado ideológicamente los dos partidos oficiales, sino que se han definido los rasgos del modelo colombiano de capitalismo subdesarrollado y dependiente, en todas las esferas y circuitos de la sociedad colombiana: en su estructura de clases, en sus relaciones sociales, en su organización política, en su sistema de poder, en su aparato educacional, en su tipo de universidad, en su sistema de cultura y de valores. De ahí que lo fundamental en la caracterización de este modelo histórico consista en la posibilidad de definir sus leyes de operación y de sustentación, especialmente en relación con las posibilidades de funcionamiento y reproducción del sistema económico, con la vigencia de los patrones de distribución del ingreso nacional entre las clases sociales y entre la nación y el sector capitalista del mundo en que está inserta, con el manejo de los mecanismos que determinan en última instancia los salarios y los precios, con la operación de las instituciones públicas de captación y distribución de recursos asistenciales y de financiamiento, o con las formas de monopolización del poder del estado a través de los órganos de representación, de operación y de control. El tipo de absolutismo político que ha expresado el monopolio bipartidista sobre los aparatos del estado y la necesidad creciente de fundamentar la legalidad sobre el estado de sitio y la concentración del poder en una presidencia omnímoda y cesarista no sólo ha impedido a las fuerzas de oposición expresarse y participar en la conducción política, sino que ha utilizado los mecanismos de coerción y de corrupción del sistema —la paridad burocrática y presupuestal, el cuoteo de los órganos y servicios del estado entre la clientela de los partidos oficiales, la alternación en la presidencia, el estricto control sobre los aparatos electorales— para bloquear la posibilidad de que esas fuerzas puedan, legítimamente y por medios institucionales, aspirar a la modificación de semejante estructura. Pero ha sido evidente que el sistema de condominio oligárquico no sólo se ha fundamentado en el manejo discrecional de estos mecanismos, sino en la preservación de una *imagen republicana* y de una *apariencia democrática* que sólo exigen la presencia física de elecciones, parlamento, judicatura, alternación presidencial. La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar un sistema de legalidad. En realidad, el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es capaz de crear, *a su arbitrio,* su propia y acomodaticia legalidad. En algunos sectores de la opinión pública latinoamericana —si es que existe alguna— ha llegado a creerse que el *modelo colombiano* constituía un ejemplo de *responsabilidad compartida* para aminorar los factores de violencia y para movilizar los recursos nacionales hacia la instrumentación de un proyecto común de desarrollo. En el orden interno, la existencia de un mono-

polio sin fisuras sobre los medios de comunicación social —desempeñando un papel singularísimo el control que las *familias presidenciales* (Santos, Ospina Pérez, Gómez, López Michelsen) ejercen sobre la prensa escrita, la radio y la televisión— ha impedido, distorsionado o retardado la toma de conciencia de las clases populares acerca de la *manera como existe* la democracia y *como funciona* el estado de derecho, aun cuando también ha impedido la ubicación de la sociedad colombiana en el mundo contemporáneo. Ha sido éste uno de los elementos de mayor eficacia en la sustentación del sistema y si bien no ha podido bloquear u ocultar el descontento, la rebelión o la protesta, ha participado activamente en la desarticulación de las fuerzas sociales capaces de desmontar las estructuras que asocian la dominación social y la dependencia imperialista, así como de construir un estado auténticamente nacional, democrático, pluralista y abierto.

Dentro de este contexto histórico y social debe plantearse el problema de si los grupos, clases y partidos que ejercen mancomunadamente el condominio sobre el estado pueden y quieren desmontarlo voluntariamente, abdicando ingenuamente de sus privilegios y de una hegemonía que se inició con el plebiscito de 1958 pero que se diseñó políticamente con la crisis de la República liberal en 1945. Por un camino u otro, el sistema de *hegemonía compartida* se regula por la lógica del poder y en consecuencia no tiende a limitarse sino a perpetuarse. El examen crítico de la historia contemporánea ha demostrado que ni el condominio oligárquico ha propuesto su autoeliminación o su autodestrucción, ni siquiera ha aceptado la trasformación de fuerzas opositoras en *opciones legítimas de gobierno.* "Los partidos han sido sustituidos por los grupos de presión", decía el presidente López Michelsen cuando aún era jefe del MRL ("Postdata a la alternación, 1970"), agregando que "el grave problema de la democracia en América Latina ha sido la situación de la oposición como alternativa de gobierno. Lo que en Colombia se conoce como trasmisión pacífica del mando, ha sido un fenómeno excepcional. El opositor, el contradictor, ha sido considerado como un apátrida, como un enemigo público, que se veía obligado a recurrir a la fuerza para suplantar en el gobierno a los dueños de la verdad". También dentro de este contexto social debe analizarse la *viabilidad política* de las reformas, si éstas pueden alterar —en la práctica histórica— las reglas de poder, los intereses y las aspiraciones de los grupos conductores y beneficiarios del condominio: de ahí que la reforma agraria no podía provocar la redistribución de la tierra y del ingreso agrícola sino orientarse hacia las operaciones de reproducción de la estructura en los territorios baldíos de la periferia (colonización) o hacia la organización de un mercado capitalista de tierra agrícola (inversiones estatales en obras de infraestructura física y social, adquisición estatal de latifundios marginales, sustitución de la expropiación por la compraventa comercial de tierras, etc.) o hacia la incorporación de los campesinos al mercado de insumos industriales; o que la reforma tributaria no podía operar como un eficaz y justiciero mecanismo de redistribución social del ingreso y de disminución de las cargas fiscales que han pesado sobre las clases pobres —en aplicación de los principios keynesianos utilizados por el gobierno de la nación hegemónica— sino que debía cumplir la función arbitrista de aumentar en varios miles de millones de pesos los ingresos ordinarios del estado, con el objeto de financiar su expansión burocrática y la fidelidad de las clientelas electorales de los

partidos oficiales sin comprimir los consumos suntuarios de las clases ricas o sin gravar duramente las rentas del capital monopolista; o que la reforma electoral no podía abrir las compuertas de los aparatos electorales a las fuerzas de oposición al condominio, sino racionalizar la hegemonía por medio de la creación de tribunales de composición paritaria; o que la reforma educacional no podía inspirarse en el propósito de que los trece millones de jóvenes —menores de 21 años— pudiesen tener alguna vía de acceso a la cultura y a las instituciones de formación profesional, sino que debía limitarse a mejorar las condiciones cultura de la población, a crear ciertas escalas de ascenso social y a adecuar la universidad a las demandas cuantitativas y cualitativas del sistema capitalista de mercado.

Éste constituye el escenario y el núcleo de los problemas vitales de la sociedad colombiana contemporánea: en estos elementos se articulan el pasado y el presente, pero también se define la viabilidad histórica de la sociedad del mañana. De una parte, se integran los mecanismos del absolutismo político y el *desmantelamiento práctico* de la democracia liberal: pero de otra, se precipita la crisis de legitimidad democrática y de credibilidad de este tipo de estado, desencadenando un dramático proceso de desorganización y descomposición de la nación colombiana. Esa descomposición opera y se expande por todos los circuitos de las corporaciones, de los partidos, de las personas morales, del estado: está presente en las nuevas raíces de la violencia, en la inseguridad colectiva, en la rápida proliferación de la delincuencia, en el desmoronamiento de la moral pública y privada, en la penetración de las más poderosas mafias en los mandos del gobierno y de los partidos, en la impunidad que constituye la necesaria contrapartida de la corrupción de la judicatura, del Parlamento y de las propias instituciones de vigilancia y de control. La política del estado frente a la descomposición social se limita a la utilización pura y simple de la fuerza, a la ilegalización de la lucha social, a la represión implacable y sistemática de las huelgas, a la multiplicación de los consejos de guerra o al creciente fraccionamiento del sindicalismo. En última instancia, sustitución del estado liberal de derecho por treinta años de estado de sitio, de funcionamiento regularizado de la legalidad marcial, y de articulación del absolutismo político —no sólo a nivel nacional sino hemisférico— al acelerarse la victoria de los pueblos que en Europa, Asia, África y en la propia América Latina marchan hacia la construcción de una sociedad socialista. El nuevo ciclo histórico —cuyos gérmenes pueden ya descubrirse en la entraña más profunda de la sociedad presente— está íntima e indisolublemente relacionado con la posibilidad y la capacidad de que el pueblo organizado asuma, directamente, el pleno ejercicio de la soberanía económica, social y política y emplee su capacidad de decisión histórica en la enorme y alentadora tarea de crear una nueva sociedad colombiana. Éste será el comienzo de la nueva historia.

V. BIBLIOGRAFÍA

Adelman, I., y C. T. Morris, "An anatomy of income distribution patterns in developing countries", *Development Digest,* Oct. 1971; "La distribución del ingreso en

el análisis de los proyectos de desarrollo", *Finanzas y desarrollo,* Fondo Monetario Internacional, Washington, 1973.

Alameda, Raúl, Mendoza, Alberto, Pineda, Roberto, F. Guillén Martínez, *Temas colombianos,* Bogotá, Universidad Nacional-CID, 1973.

Anales de economía y estadística, Bogotá, Contraloría General de la República, 1949.

Arrubla, Mario, *Estudios sobre el subdesarrollo colombiano,* Medellín, Edic. Oveja Negra, 1969.

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, "La lucha de clases en el campo colombiano", *Ideología, Diseño y Sociedad,* 6, Bogotá, 1972.

Banco de la República, "Informes de gerencia", "Cuentas nacionales", *Revista del Banco de la República.*

Banco Mundial, *Bases de un programa de fomento para Colombia,* Bogotá, *Banco de* la República, 1951; *Desarrollo económico de Colombia, problemas y perspectivas,* Bogotá, Banco Popular, 1970.

Baquero, Rafael, *La economía nacional y la política de guerra,* Bogotá, Edit. Labor, 1951.

Bejarano, Jesús Antonio, "El fin de la economía exportadora y los orígenes del problema agrario", *Cuadernos Colombianos,* 8, Bogotá, 1975.

Caicedo, Edgar, *Historia de las luchas sindicales en Colombia,* Bogotá, Suramérica, 1974.

Cámara de representantes de Colombia, *Debate sobre la situación financiera y económica del país,* Bogotá, Imp. Nacional, 1937.

Cardona, Ramiro, *Las migraciones internas,* Bogotá, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, sin fecha.

Centro Estadístico Nacional de la Construcción, *El poder adquisitivo de los salarios en Colombia, 1958-1974,* Bogotá, CENAC, 1974.

CEPAL, *El desarrollo económico de Colombia,* Washington, 1955; "La política económica de Colombia en el período 1950-1966", *Boletín Económico de América Latina,* núm. 2, Nueva York, ONU, 1967.

CIDA, Misión FAO-OEA: *Colombia: tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agropecuario,* Washingtón, Panamerican Union, 1966.

Colmenares, Germán, *Partidos políticos y clases sociales,* Bogotá, Uniandes, 1968.

Costa Pinto, *Voto y cambio social' - El caso colombiano en el contexto latinoamericano,* Bogotá, Tercer Mundo, 1971.

Currie, Lauchlin, *Operación Colombia - Un programa nacional de desarrollo económico y social,* Bogotá, Dpto. Nacional de Estadística, 1961.

DANE, *Boletines Mensuales de Estadística,* Bogotá, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

De la Torre, Cristina, *Colombia camino al socialismo,* Bogotá, Alternativa, 1976.

Dix, Robert, *Colombia: The political dimensions of change,* Yale, University Press, 1967.

Fals Borda, O., *Campesinos de los Andes,* Bogotá, Edit. Iqueima, 1961; *Historia de la cuestión agraria en Colombia,* Bogotá, 1975; *La subversión en Colombia,* Bogotá, Edic. Universidad Nacional, 1967.

Felde, Peter, *La situación actual de la industria manufacturera fabril en Colombia,* Bogotá, Edic. Mim. Ministerio de Desarrollo, 1970.

Fluharty Vernon, *Dance of the millions, 1930-1956,* University of Pittsburgh, 1957.

Friede, Juan, *El indio en la lucha por la tierra,* Bogotá, Instituto Indigenista, 1944.

Gaitán, Jorge Eliecer, *Las ideas socialistas en Colombia,* Bogotá, Concejo Municipal.

1949; *Gaitán, antología de su pensamiento social y económico,* Bogotá, Edic. Suramérica, 1968.

Galindo, Aníbal, *Estudios económicos y fiscales,* Bogotá, Imp. H. Andrade, 1880.

García, Antonio, *Geografía económica de Caldas,* Bogotá, Edic. Contraloría Nacional, 1937; *Gaitán y el problema de la revolución colombiana,* Bogotá, Edic. Cooperativa Colombiana de Editores, 1954; *Planificación municipal,* Bogotá, Concejo Municipal, 1949; *Problemas de la nación colombiana,* Bogotá, Mundo Nuevo, 1952; *Dialéctica de la democracia,* Bogotá, Cruz del Sur, 1972; *Una vía socialista para Colombia,* Bogotá, Cruz del Sur, 1974.

García, José María, *Economía y política social en Colombia,* Bogotá, Contraloría Nacional, 1941.

Gómez, Laureano, *Interrogantes sobre el progreso de Colombia,* Bogotá, 1928 (reedic. *Revista Colombiana,* 1970).

González, Fernán, "Clientelismo y dominio de clase", *Controversia,* núms. 41-42, Bogotá, 1976.

Gutiérrez, José, *La rebeldía colombiana,* Bogotá, Tercer Mundo, 1962.

Guzmán Campos, Germán, Fals Borda, Umaña Luna, *La violencia en Colombia,* Bogotá, Tercer Mundo, 1962.

Hernández Rodríguez, Guillermo, *La alternación ante el pueblo como constituyente primario,* Bogotá, América Libre, 1962.

Jaramillo Uribe, Jaime, *Ensayos sobre historia social colombiana,* Bogotá, Universidad Nacional, 1969.

Kalmanovitz; Salomón, *La agricultura en Colombia — 1950-1972,* Seminario Dane, Bogotá; "Auge y receso del capitalismo colombiano", *Ideología y Sociedad,* No. 16, Bogotá, 1976.

Leal Buitrago, Francisco, "Política e intervención militar en Colombia", México, *Revista Mexicana de Sociología,* junio, 1970; *Análisis histórico del desarrollo político nacional — 1930-1970,* Bogotá, Tercer Mundo, 1973.

Lebret, Misión, "Economía y humanismo", *Estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia,* Bogotá, Comité Na. de Planeación, 1958.

Londoño, Carlos Mario, *Economía agraria colombiana,* Barcelona, Edit. Rialp, 1965.

López, Alejandro, *Problemas colombianos,* París, Edit. París-América, 1927; *Idearium liberal,* París, Antorcha, 1931.

López de Mesa, Luis E., *De cómo se ha formado la nación colombiana,* Bogotá, 1934.

López Michelsen, Alfonso, "Postdata a la alternación — Intervenciones políticas de 1964 a 1970", Bogotá, *Revista Colombiana,* 1970; *Cuestiones colombianas,* México, Impresiones Modernas, 1955.

López Pumarejo, Alfonso, *Mensajes del presidente López al Congreso nacional,* Bogotá, Imp. Nacional, 1939.

López Toro, A., *Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo xix,* Bogotá Universidad de los Andes, 1968.

Lleras, Alberto, "Un propósito nacional", compilación de discursos, Bogotá, Imp. Nacional, 1962.

Lleras Restrepo, Carlos, "Informe del comité especial sobre la reforma agraria de la FAO", Bogotá, Banco de la República, 1971.

Machado, C., Absalón, "El desarrollo de la economía cafetalera hasta la década de 1920", *Cuadernos Colombianos,* núm. 9, Bogotá, 1976.

Madiedo, Manuel M., *La ciencia social o el socialismo filosófico,* Bogotá, Imp. N. Ponton, 1863.

Martínez, Jorge A., *Aspectos cuantitativos de la población colombiana y sus relaciones con la disponibilidad de mano de obra,* Bogotá, Mim. SENA, 1959.
Martz, J., *Colombia: un estudio de política contemporánea,* Bogotá, Edic. Universidad Nacional, 1969.
Mc-Greevey W., Paul, *Historia económica de Colombia,* Bogotá, Tercer Mundo, 1975.
Mendoza Pérez, D., "Ensayo sobre la evolución de la propiedad en Colombia", *Revista Academia Colombiana de Jurisprudencia,* núm. 145, Bogotá, 1942.
Mesa, Darío, *Treinta años de nuestra historia,* Edic. Mim. Universidad Nacional, 1965.
Molina, Gerardo, *Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934,* Bogotá, Tercer Mundo, 1974.
Montaña Cuéllar, Diego, *Colombia, país formal y país real,* Bogotá, Edit. Latina, 1975.
Morales, Benítez, Otto, *Reforma agraria, Colombia campesina,* Bogotá, Imp. Nacional, 1962.
Musgrave, Misión, *Bases para una reforma tributaria en Colombia,* Bogotá, Banco Popular, 1964.
Nieto Arteta, Luis E., *El café en la sociedad colombiana,* Bogotá, Oveja Negra, 1962; *Economía y cultura en la historia de Colombia,* Bogotá, Tercer Mundo, 1962.
Núñez, Rafael, *Ensayos de crítica social,* Rouen, Imp. Cagniard, 1874.
OIT, *Hacia el pleno empleo,* Bogotá, Banco Popular, 1970.
Ospina Vásquez, Luis, *Industria y protección en Colombia (1810-1930),* Medellín, Oveja Negra, 1974.
Pardo Parra, Enrique, *Riqueza enajenada,* Bogotá, Tercer Mundo, 1971.
Parra Sandoval, R., *La dependencia externa y el desarrollo político de Colombia,* Bogotá, Edic. Universidad Nacional, 1970 (con Francisco Leal, Fernando Uricoechea, Álvaro Camacho).
Parsons, James, J., *Antioqueño colonization in western Colombia,* Berkeley, 1949.
Pecaut, Daniel, *Política, sindicalismo en Colombia,* Bogotá, La Carreta, 1973.
Pérez Ramírez, Gustavo, *El campesino colombiano, un problema de estructura,* Bogotá, Iqueima, 1959; *Planas: las contradicciones del capitalismo,* Bogotá, Tercer Mundo, 1971.
Poveda Ramos, Gabriel, "Antecedentes y desarrollo de la industria en Colombia", *Revista ANDI,* núm. 4, Medellín, 1967.
Pradilla, Emilio, "La política urbana del Estado colombiano", *Ideología y sociedad,* núm. 9, Bogotá, 1974.
Prebisch, Raúl, *Trasformación y desarrollo, la gran tarea de la América Latina,* México, Fondo de Cultura Económica, 1970.
Quimbaya, Anteo, *El problema de la tierra en Colombia,* Bogotá, Sur América, 1967.
Restrepo, Antonio José, "El cáncer de la usura", Bogotá, 1926.
Restrepo, José Manuel, *Historia de la revolución de la República de Colombia,* París, Americana, 1827.
Rincón, Víctor, *Historia política y social de Colombia,* Bogotá, Mundo Andino, 1973.
Samper, Armando, *Importancia del café en el comercio exterior de Colombia,* Bogotá, Federación Nacional de Cafetaleros, 1948.
Samper, Gustavo, *Breve historia constitucional y política de Colombia,* Bogotá, 1957.
Samper, José M., *Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas,* 1867, diversas ediciones en siglos XIX y XX.
Samper, Miguel, *La miseria en Bogotá,* Bogotá, Imp. Gaitán, 1867.
Santa, Eduardo, *Sociología política de Colombia,* Bogotá, Tercer Mundo, 1964; *Uribe Uribe,* Bogotá, Triángulo, 1962.

Sepúlveda, Saturnino, *Pecados de la Iglesia,* Bogotá, ABC, 1971.

Suárez Melo, Mario, *Las empresas comunitarias en Colombia,* Bogotá, ICA-CIRA, 1972.

Tirado Mejía, Álvaro, *Introducción a la historia económica de Colombia,* Bogotá, Universidad Nacional, 1971.

Torres, Camilo, *La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas,* memoria Primer Congreso Nacional de Sociología, Bogotá, 1963; *Las estructuras del subdesarrollo,* Bogotá, Mim. 1964; *Cristianismo y revolución* (obras completas), México, Era, 1970.

Torres García, Guillermo, *Historia de la moneda en Colombia,* Bogotá, Banco de la República, 1945.

Torres Giraldo, Ignacio, *Síntesis de historia política de Colombia,* Bogotá, Margen Izquierdo, 1972.

Tovar, Hermes, *El movimiento campesino en Colombia durante los siglos XIX y XX,* Bogotá, Ediciones Libres, 1975.

Umaña Luna, Eduardo, *Los derechos humanos en Colombia,* Bogotá, Crítica Jurídica, 1973.

Uricoechea, Fernando, *Modernización y desarrollo en Colombia,* Bogotá, Edic. Mim. Universidad Nacional, 1958.

Urrutia, Miguel, *Historia del sindicalismo en Colombia,* Bogotá, Universidad Los Andes, 1969.

Vaitsos, Constantine V., *Transfer or resources and preservation of monopoly rents,* Edic. Mim, Conference of Harvard University Development Advisory Service, Dubrovnik, 1970.

Vallejo, Jorge, *Política agraria: la década del 60,* Cali, Edic. Mim. Universidad del Valle.

Villegas, Aquilino, *La moneda ladrona,* Manizales, Zapata, 1932.

Villegas, Jorge, "Petróleo, Oligarquía e Imperio", Bogotá, Edic. E.S.E., 1969.

Villegas, Silvio, *No hay enemigos a la derecha,* Manizales, Cervantes, 1937.

Weis, Anita, *El papel de la Iglesia en la transición: El caso colombiano,* Bogotá, Universidad Nacional, 1970: *Estructuras de clases de Colombia,* Bogotá, Edic. Mim. Universidad Nacional, 1971 (en colaboración con Lucía Tarazona de Niño, Carmenza Gallo, Jairo Duarte y otros).

Zuleta, Estanislao, *Conferencias de historia económica colombiana,* Medellín, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de Antioquia, 1969.

BREVE HISTORIA DE MEDIO SIGLO EN CHILE

BELARMINO ELGUETA B.
ALEJANDRO CHELÉN R.

I. LA LUCHA POR LAS REFORMAS (1920-1970)

1. *El ascenso de las capas medias*

a] *En el umbral del siglo xx.* Como en todos los países de América Latina, la clase dominante vivía en Chile, al despuntar el siglo xx, en la mayor opulencia a expensas de la explotación de las masas trabajadoras y manteniendo al país en el subdesarrollo. Desde los albores de la independencia de España y en virtud de la incorporación de esta nueva nación en el mercado mundial, Inglaterra había consolidado su predominio económico mediante una coalición de hecho con aquella clase dominante, constituida por la oligarquía agraria tradicional y la burguesía vinculada a la explotación minera, al comercio de exportación y a los negocios bancarios. La dependencia de la economía chilena respecto a la nación imperialista más poderosa en esa época se expresaba en el control por parte de ésta de la industria salitrera, el comercio exterior, el trasporte marítimo y un sector importante de los ferrocarriles y del sistema bancario. La clase dirigente dominaba sin contrapeso alguno en los tres poderes del estado, mediante el fraude, el cohecho y la prevaricación, contando en todo instante con el apoyo de las fuerzas armadas, que permanecían al servicio del sistema demoburgués.

Después de la guerra civil de 1891 se habían consolidado las relaciones de dependencia externa, con el traspaso de los yacimientos salitreros al imperio financiero creado por John Thomas North, y las relaciones de dominación oligárquica, con la sustitución del régimen presidencial por el régimen parlamentario. El parlamentarismo se implantó sin que mediara una reforma constitucional, basado sólo en aquellas disposiciones de la carta fundamental que facultaban al Congreso nacional para aprobar anualmente la ley que sancionaba los gastos de la nación, autorizar al Ejecutivo para cobrar las contribuciones durante un plazo de 18 meses y permitir el mantenimiento de fuerzas armadas en las proximidades del Parlamento. El predominio de este poder en el sistema político chileno —impuesto por los vencedores en la guerra civil— se fundó, en efecto, en el uso y abuso de las mencionadas atribuciones constitucionales, prácticas que trabaron las actividades relativas a la administración del estado y convirtieron a las mayorías congresistas en árbitros de la política del gobierno.

La primera guerra mundial produjo un debilitamiento del imperialismo inglés y el auge del imperialismo norteamericano, alterándose de este modo el centro del poder capitalista mundial, lo que se hizo sentir de inmediato en América La-

tina y, particularmente, en Chile. Los Estados Unidos de Norteamérica convocaron, en mayo de 1915, a un congreso financiero a los países del continente con el objeto de agregar a la sujeción diplomática el sometimiento económico de éstos a la nueva metrópoli. El poderoso país del norte, que se había convertido de país deudor en país acreedor de las grandes potencias europeas a través del abastecimiento de sus necesidades bélicas, aparecía como el único que podía resolver también la grave crisis de los países latinoamericanos derivada de las dificultades provocadas por la conflagración mundial en la colocación de sus materias primas y alimentos en los mercados europeos y en el propio abastecimiento de los productos industriales y la mantención de sus habituales líneas de crédito internacional.

En esta época, la economía chilena experimentó trastornos muy profundos debido, precisamente, a las dificultades surgidas en el comercio internacional por las hostilidades bélicas. La paralización de parte de las actividades salitreras trajo consigo una considerable desocupación y la consiguiente reducción de los ingresos fiscales. Para enfrentar esta situación crítica el gobierno incrementó la emisión de papel moneda, disminuyó las remuneraciones de los funcionarios públicos y restringió la asistencia crediticia a las empresas que se encontraban en verdadera falencia. La producción de salitre se normalizó en el curso del conflicto mundial para adquirir de nuevo los caracteres de una crisis al término de éste, mientras las actividades extractivas de cobre pasaron a tener especial relevancia en el comercio de exportación del país. Ambas explotaciones, como asimismo las del hierro, la electricidad, los teléfonos, el trasporte urbano de Santiago y la distribución mayorista son controladas por consorcios norteamericanos.

Como resultado de la interrupción del abastecimiento de artículos manufacturados desde los países capitalistas comprometidos en la guerra mundial, la industrialización experimentó un apreciable crecimiento, particularmente en los rubros de consumo, a través de empresas privadas con capitales nacionales y extranjeros. Este proceso económico y las nuevas funciones que empezaba a desempeñar el estado impulsó a los gobernantes, a partir de 1920, a abandonar la política de libre cambio y a intervenir en la economía nacional. La agricultura experimentó también un notorio desarrollo a raíz de la incorporación al cultivo de las tierras de las provincias del sur, lo que permitió al país continuar como exportador de productos agropecuarios, a pesar de la disminución del precio de éstos en el mercado internacional.

b] *El movimiento social de 1920.* En la década de 1920, nuevos grupos sociales se hicieron presentes en la vida nacional como productos de las trasformaciones que estaba experimentando la economía, entre los cuales se destacaban los agricultores de las provincias del sur, los industriales, los comerciantes, los profesionales universitarios, los funcionarios del estado y los artesanos. Todos ellos recibieron su inspiración ideológica del positivismo y las doctrinas solidaristas provenientes de Europa y militaban fundamentalmente en el Partido Radical. El movimiento obrero, que ya había dado sus primeros pasos a fines del siglo anterior, comenzó también a adquirir personalidad propia, conquistando un lugar destacado en la política nacional. La clase obrera estaba constituida entonces por los trabajadores

salitreros, del carbón, del cobre, de los ferrocarriles y de la industria manufacturera, contingente social diferenciado que acrecentaba cada vez más su conciencia de clase y su acción dinámica.

Las ideas socialistas y anarcosindicalistas ejercieron una extraordinaria influencia en los sectores obreros y estudiantiles y bajo su estímulo se desarrolló uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia en la historia de Chile en este período, toda vez que promovió un cambio en el sistema socio-político dirigido a la democratización de las instituciones, el ascenso de las capas medias a las funciones de gobierno y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados.

Este proceso tuvo dos expresiones políticas simultáneas y, en el fondo, contradictorias. Las capas medias, representadas políticamente por la Alianza Liberal, con su candidato Arturo Alessandri, enfrentaron a la oligarquía en las elecciones presidenciales de 1920 y arrastraron tras sus banderas reformistas a la mayoría de los trabajadores, que todavía no tenían una clara conciencia de sus intereses históricos como clase y la consiguiente unidad y organización. El movimiento obrero, por su parte, luchó durante la misma época, bajo la conducción de Luis Emilio Recabarren, por organizarse en torno a una política clasista y autónoma, cuya expresión concreta en esa campaña electoral fue la propia candidatura presidencial de este líder popular.

Alessandri, dotado de una extraordinaria vocación política, fue un caudillo incansable. Su victoria significó el ocaso político transitorio de la oligarquía y el ascenso de las capas medias, como resultado de un largo proceso de lucha de los representantes económicos de las provincias, que se habían incorporado gradualmente a la actividad pública compitiendo con los usufructuarios tradicionales del poder político. El nuevo primer mandatario desafió a la oligarquía al designar un ministerio que representaba, precisamente, a dichos sectores que se habían atrevido a enfrentar a la hasta entonces clase dominante. Pero Alessandri, demagogo superdotado, frustró las esperanzas de las masas desposeídas que lo habían apoyado, incorporándose al juego político estéril del régimen parlamentario, aunque no puede desconocerse que fue el iniciador de las reformas sociales y jurídicas tan anheladas por la mayoría del país. No logró, en efecto, la cristalización de las reformas fundamentales que agitó como programa debido a la enconada oposición oligárquica del Senado, donde se empantanaron todas las iniciativas legislativas orientadas a configurar una legislación laboral avanzada.

Recabarren, obrero tipógrafo, consagró su vida a la organización y educación política de la clase obrera, labor que fue continuada por miles de trabajadores incorporados a las organizaciones sindicales y políticas generadas por ellos. En esa época, la explotación de las clases trabajadoras en la minería, en la industria naciente y en la agricultura revestía caracteres deplorables. A comienzos del presente siglo, el profesor Alejandro Venegas había publicado, bajo el seudónimo de Julio Valdés Canje, su libro *Sinceridad: Chile íntimo en 1910* en el cual describió el país que apuntaba al conmemorarse el centenario de su independencia de la dominación española, trazando con caracteres indelebles la situación social prevaleciente en los establecimientos salitreros, donde los trabajadores eran explotados tanto a través de sus condiciones salariales como a través del sistema de pulpería

y las pésimas viviendas en las cuales vegetaban. Fue un libro que produjo un gran impacto en la sociedad chilena. Los trabajadores, por su parte, acentuaron progresivamente sus luchas por mejorar su condición socio-económica, siendo cada una de sus más importantes jornadas reprimidas con la mayor violencia por el gobierno de turno.

c] *La modernización del país.* El ascenso de Arturo Alessandri al gobierno creó condiciones políticas que favorecieron el desarrollo del movimiento obrero, cuyas organizaciones sindicales actuaron de hecho, asumiendo la representación de los trabajadores, celebrando convenios colectivos de trabajo, promoviendo conflictos y huelgas por la satisfacción de sus demandas económicas. En 1921, Alessandri presentó al Congreso nacional un proyecto de código del trabajo, que sólo será aprobado en 1924 bajo la presión de la juventud militar sobre un Senado que oponía tenaz resistencia a las reformas propugnadas por ese gobierno. En esta forma se consolidó la política de intervención del estado orientada a regular las relaciones de trabajo e institucionalizar la protesta de los obreros.

Alessandri fue derrocado por una junta militar el 5 de septiembre de 1924, abandonando el país en virtud de un permiso constitucional. Esta junta militar postergó la aplicación de las leyes sociales aprobadas, instauró el estado de sitio y se propuso la restauración en el poder de los sectores reaccionarios desplazados por la elección presidencial de 1920. Poco después, la juventud militar conducida por Carlos Ibáñez y Marmaduque Grove y apoyada por los sectores alessandristas y las organizaciones obreras remplazó a la junta militar presidida por el general Luis Altamirano, el 23 de enero de 1925, por otra que patrocinó de inmediato el retorno del presidente constitucional y la promulgación de una nueva carta fundamental que pusiera término a los vicios del parlamentarismo. La presencia del entonces coronel Carlos Ibáñez en el Ministerio del Interior consolidó la ingerencia del militarismo en la decisión de los problemas políticos en Chile.

Después de su restauración en el cargo de presidente de la República, Alessandri promovió la dictación de una nueva Constitución política, la que fue elaborada por una comisión consultiva nombrada por el gobierno, sancionada por un plebiscito y, finalmente, promulgada el 18 de septiembre de 1925. Esta carta fundamental restableció el régimen presidencial, dotando al Ejecutivo de un conjunto de atribuciones que consagró la preeminencia de este poder sobre el Congreso nacional. Sin embargo, el proceso de anarquía política iniciado en Chile en esa época impidió que ella entrara en vigencia de inmediato.

En 1925 se realizaron además diversas reformas en la administración del estado como fruto de la nueva concepción sobre el papel de éste en el desarrollo económico del país, mediante la dictación de decretos leyes. Entre las más importantes, se destacan la creación del Banco Central como organismo emisor y encargado de regular el crédito, la reglamentación del funcionamiento de los bancos privados, el establecimiento de la Superintendencia de Bancos y la conversión monetaria, con cuyas medidas se perseguía el necesario control de la inflación y el saneamiento general de la economía. El ordenamiento presupuestario y de la tributación interna implicó, por otra parte, la creación del impuesto a la renta

y los servicios públicos de impuestos internos y tesorería como asimismo la dictación de la ley orgánica de presupuesto.

Durante este mismo período y en los años siguientes se crearon diversos organismos crediticios del estado —Instituto de Crédito Industrial, Caja de Crédito Minero y Caja de Fomento Carbonero— con el objeto de promover el desarrollo de las actividades productivas; se fundó la línea aérea nacional y se reservó, mediante una ley, el cabotaje a las compañías de navegación nacionales. Con los mismos fines de fomento se ejecutaron programas de obras públicas y de infraestructura, como caminos, servicios de alcantarillados, agua potable, escuelas, etc., los que se financiaron con los ingresos de las exportaciones y empréstitos. Dentro de este espíritu de modernización del país, se impulsó igualmente la educación pública, cuyo desarrollo se inició con la dictación de la ley de educación primaria obligatoria en 1919 y culminó con la reforma educacional de 1928.

Después de abandonar el gobierno Alessandri, tres meses antes del término de su mandato, fue elegido presidente de la República Emiliano Figueroa Larraín, quien representaba los intereses de la antigua clase dirigente. El nuevo gobernante se vio obligado a designar ministro del Interior al coronel Ibáñez, el que pasó a ejercer una influencia tan predominante que, al cabo de un año y medio, el presidente renunció a su cargo, asumiendo el ministro del Interior las funciones de vicepresidente de la República, para ser elegido el 27 de mayo de 1927 presidente.

Así, los militares, que habían entrado a la escena política con el golpe de estado del 5 de septiembre de 1924, consolidaron su poder ante la crisis del parlamentarismo y de los partidos políticos tradicionales que habían sido incapaces de coducir el proceso de trasformación del país, encarnando las aspiraciones reformistas de los sectores medios. Por eso, tanto la junta militar surgida del pronunciamiento del 23 de enero de 1924 como el gobierno de Ibáñez continuaron desarrollando el programa económico, social y político iniciado por Alessandri, como representante de la Alianza Liberal, y abrieron paso a la modernización de las instituciones del estado y a "la consagración violenta en el poder de la clase media y la disciplina por el terror de la clase obrera".[1]

2. *Militarismo y civilismo*

a] *La dictadura del general Ibáñez.* La dictadura del general Carlos Ibáñez, durante la cual se mantuvo la vigencia formal del régimen constitucional, no resolvió ninguno de los problemas fundamentales de Chile. Por el contrario, continuó el atraso agrario, mantuvo la entrega de la minería a los consorcios norteamericanos, obstaculizó el desarrollo industrial, persiguió a las organizaciones sindicales, disolvió los partidos políticos y convirtió a muchos de sus dirigentes en obsecuentes servidores del régimen. Quizá la única medida positiva de la dictadura fue la de reprimir también a la oligarquía, que había combatido antes al presidente Alessandri —a la cual éste llamara la "canalla dorada"— y que hasta entonces había

[1] Jorge Barría, *Chile siglo XX*, Prensa Latinoamericana S. A., 1973.

controlado el poder político para servir exclusivamente sus intereses económicos. Ibáñez continuó en este sentido el desplazamiento del aparato del estado hacia los sectores medios, los cuales pasaron a compartir el manejo de las instituciones con la antigua clase dirigente, empleando a las fuerzas armadas como contrapeso de la poderosa influencia de esta última.

En este período el imperialismo norteamericano consolidó su dominio sobre el cobre, riqueza natural que pasó a remplazar el salitre como fuente proveedora de divisas después de la crisis que experimentara la exportación de este último producto, debido a la producción del salitre sintético, la competencia de éste en los principales mercados de Europa y los cambios experimentados en la tecnología de la explotación del salitre natural, que requerían mayores inversiones económicas. Esta penetración económica había comenzado a principios del presente siglo con la instalación de la Braden Copper Co., subsidiaria de la Kennekott Copper Co., seguida más tarde por la Chile Exploration Co. y la Andes Minning Copper Co., filiales de la Anaconda. Este predominio de las grandes empresas multinacionales en la gran minería del cobre implicó, por otra parte, la liquidación de las actividades de la minería nacional y la destrucción de las fundiciones que ésta mantenía en funcionamiento.

La caída del nitrato como producto de exportación y la disminución del precio del cobre en el mercado internacional obligaron al gobierno de Chile a suspender el pago de la deuda externa, recibiendo como réplica la supresión de los empréstitos en el exterior, lo que trajo consigo a su vez una secuela de efectos económicos y sociales que perjudicaron gravemente a los trabajadores, como los despidos masivos y la reducción del poder adquisitivo de las remuneraciones. La gran depresión experimentada por el sistema capitalista en sus centros metropolitanos, extendida automáticamente en su periferia a partir de 1929, vino a agudizar aún más la crisis que agobiaba a la economía chilena.

La dictadura militar, desgastada durante cuatro años de reiterados fracasos, fue abatida el 26 de julio de 1931 por un alzamiento general del país, encabezado por los estudiantes universitarios, en un momento en el que la crisis capitalista mundial no permitía la supervivencia por más tiempo de un régimen represivo. En efecto, la dictadura se desplomó por la asfixia financiera provocada por la banca norteamericana —cuando aquélla ya no servía a sus intereses— y por la falta de apoyo de la pequeña y mediana burguesía, arrastradas por la burguesía financiera que ahora también, unida al imperialismo, tomaba partido en contra del régimen en decadencia. Los trabajadores, por su parte, intervinieron en forma destacada en esta lucha para liberarse de la superexplotación de que eran víctimas por las grandes empresas y de la política represiva del gobierno.

b] *El civilismo burla las esperanzas populares.* La oligarquía, unida a la Iglesia católica y a los partidos tradicionales, burló una vez más a las masas trabajadoras al generar, como réplica al predominio militar, un movimiento "civilista" que postuló como su candidato a la presidencia de la República a Juan Estéban Montero, miembro del Partido Radical quien carecía de todo contacto con el movimiento popular e incluso de la más elemental experiencia política. Victorioso en las urnas, el presidente Montero constituyó un gobierno que se caracterizó

por su absoluta incapacidad para resolver los problemas esenciales y los conflictos sociales cada vez más agudos que conmovían a la sociedad.

Este gobierno, ante la creciente oposición de los trabajadores, hizo uso de la represión en forma tan dura como su antecesor. Pero estas mismas masas, armadas con la doctrina socialista y la experiencia adquirida en las últimas décadas, se organizaron en sindicatos y núcleos políticos, con programas propios e iniciaron una resuelta lucha contra la clase dirigente. El divorcio existente entre las masas y el gobierno se exteriorizó en hechos luctuosos en el curso de 1931, como fueron el amotinamiento de la marinería de guerra, sofocado por el resto de las fuerzas armadas, y las matanzas de trabajadores en las ciudades de Vallenar y Copiapó conocidas como la "Pascua trágica".

La economía chilena fue afectada gravemente por la depresión mundial que experimentó el sistema capitalista al término de la década de 1920 y comienzos de la siguiente. La producción de salitre —el principal producto de exportación— descendió progresivamente de 3 233 321 toneladas en 1929 a 437 655 toneladas en 1933, lo que precipitó como consecuencia el desequilibrio irreparable de la balanza de pagos, la reducción de los ingresos fiscales y una recesión general de las actividades económicas. La carencia de divisas por el descenso de las exportaciones provocó a su vez la caída de las importaciones, debiéndose pagar algunos bienes esenciales con las reservas de oro del Banco Central, a la vez que la paralización de las obras públicas, por la bancarrota del erario público, incrementó la desocupación en términos alarmantes.

Esta crisis demostró definitivamente la vulnerabilidad de la economía chilena, por su carácter monoproductor y dependiente del mercado internacional controlado por los consorcios imperialistas. Agonizante la industria salitrera, la producción de cobre pasó a convertirse en la más importante fuente de ingresos para el país; pero al mismo tiempo empezó a acentuarse la gravitación norteamericana en el desarrollo de esta industria extractiva y, en general, en toda la economía nacional. La gravedad de los problemas derivados de la crisis hizo necesaria una intervención del estado cada vez más creciente en la economía. Esta política no respondía entonces estrictamente a la moderna tendencia hacia la planificación, sino que más bien procuraba buscar soluciones globales a aquellos problemas colectivos que la iniciativa privada era absolutamente incapaz de resolver. Pero esta intervención se fue sistematizando, con el correr de los años, hasta conformar órganos públicos de estímulo y planificación de la economía.

c] *La revolución socialista de 1932.* Desde la caída de Ibáñez en 1931 se extendió la doctrina socialista en los núcleos obreros y en los sectores ilustrados del país, surgiendo diversos grupos que enarbolaron como plataforma dichas doctrinas y realizaron una intensa propaganda en las organizaciones sindicales. Estos grupos se vincularon con el descontento que germinaba entre los militares jóvenes, desarrollando un movimiento revolucionario que estalló el 4 de junio de 1932 mediante un pronunciamiento militar que proclamó la "República socialista" encabezada por el comodoro del Aire Marmaduque Grove.

El nuevo gobierno disolvió el Congreso designado durante la dictadura de Ibáñez, que carecía de representatividad genuina, concedió amnistía a los responsa-

bles de la sublevación de la marinería en 1931, restableció la matrícula a los estudiantes universitarios expulsados y promovió el cogobierno en la Universidad de Chile, otorgó atribuciones al Banco Central para controlar el crédito, requisó el oro en poder de las casas de cambio y joyerías y dictó normas jurídicas por las cuales facultó al propio gobierno para estudiar, conceder y caducar las pertenencias mineras. Estas nuevas disposiciones legales permitían al gobierno afectar eventualmente la propiedad minera de las empresas extranjeras de la gran minería.

Entre las medidas inmediatas, la República socialista dispuso la devolución de las herramientas de trabajo depositadas como prendas en la Caja de Crédito Popular, la suspensión de los lanzamientos de los arrendatarios y la concesión de líneas de crédito a los pequeños empresarios. Pero más allá de estas medidas de carácter social dirigidas a aliviar la situación de los trabajadores, el nuevo gobierno dio a conocer un conjunto de iniciativas que atacaban el sistema capitalista. Tales fueron, entre otras, las relativas a la reforma agraria, nacionalización del salitre, creación del Banco del Estado, control del comercio exterior e interior, impuesto a las grandes fortunas, reforma educacional, pleno empleo para todos los chilenos y estructuración del estado con un sentido dinámico que permitiera el desarrollo de la economía, la reivindicación del trabajo creador y la redistribución del ingreso nacional con un espíritu de justicia social. Desde entonces, todos estos objetivos fueron incorporados en los programas del movimiento popular.

La efímera República socialista —que sólo tuvo doce días de duración— recibió el apoyo fervoroso de las masas trabajadoras, aunque grupos sectarios como el pequeño Partido Comunista de esa época hicieron presente su oposición, con una incomprensión insensata del proceso de maduración que se generaba en las entrañas mismas del pueblo chileno, lo que impulsó a éste a crear un nuevo partido que lo representara de manera más genuina. Con un sentido de clase más claro y profundo, los sectores burgueses, unidos a los consorcios extranjeros, promovieron de inmediato una conspiración dirigida a frustrar el romántico ensayo socialista acaudillado por quienes, poco después, fundarían el Partido Socialista. Un nuevo golpe militar captura el gobierno, relega a Grove y sus principales colaboradores y designa a Carlos Dávila como presidente de una nueva junta de gobierno, la que dura cien días. Derrocada ésta posteriormente, se desencadenó un período de anarquía política que culminó con la asunción provisional al cargo de primer mandatario del presidente de la Corte Suprema, para convocar a nuevas elecciones presidenciales en octubre de 1932.

El socialismo se extendió en el país en el lapso trascurrido entre 1931 y 1933, sin un movimiento obrero estructurado y sin un partido socialista poderoso, capaz de orientar y conducir a las clases trabajadoras. Proliferaron diversos grupos pequeños, sin apoyo en las masas. La revolución socialista del 4 de junio de 1932 dio un vigoroso empuje revolucionario a las multitudes desposeídas, arraigando en ellas el programa socialista. A pesar de su rápida derrota —entre otras razones, por no existir un partido fuerte de los trabajadores— fructificó espléndidamente en el movimiento socialista, posterior, organizado a partir de abril de 1933.

d] *La segunda administración de Alessandri.* Arturo Alessandri, el brioso caudillo de 1920, triunfó en las elecciones presidenciales de 1932, gobernó de conformidad

a la nueva Constitución promulgada en 1925 e hizo uso reiterado de facultades extraordinarias o de excepción, con las cuales reprimió severamente a los grupos socialistas. Éstos comprendieron entonces que su supervivencia dependía de su unidad, de acuerdo a cuyo imperativo se fundó el Partido Socialista el 19 de abril de 1933 mediante la fusión de diversos grupos que se inspiraban en esta doctrina, con cuya decisión se pretendió resolver la crisis de dirección de la clase trabajadora.

Este nuevo gobierno de Alessandri tuvo que enfrentar la declinación definitiva de la industria del salitre, creando la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo en 1934, con el objeto de atender la comercialización de este producto de conformidad a una asociación del estado con las empresas salitreras, la mayoría de las cuales eran de propiedad norteamericana. Con la nueva política, esta industria —que había constituido durante mucho tiempo la principal fuente de ingresos para el erario— dejó de tributar, destinando las utilidades de la mencionada corporación al servicio de la deuda externa.

Por otra parte, de acuerdo a la tendencia hacia la intervención del estado en la economía, el gobierno creó un mecanismo dirigido a controlar los cambios internacionales, las importaciones y remesas, con el nombre de Comisión de Control de Cambios. A través de este mecanismo, el gobierno pasó a regular la adquisición y venta de divisas, a generar ingresos para el erario y a promover el proceso económico mediante la asignación selectiva y la determinación del valor de las divisas destinadas a las importaciones de bienes esenciales para la producción y el consumo. Con el objeto de centralizar el servicio de las deudas tanto interna como externa se creó la Caja de Amortización, a la que el estado le asignó recursos para reanudar el pago de esta última que había sido suspendida durante el período más álgido de la crisis.

La agricultura, que había iniciado su estancamiento durante los años 1929-1931, continuó en declinación, convirtiéndose en el sector productivo menos dinámico como quiera que su ritmo de crecimiento llegó a ser menor que el de aumento de la población. Las causas de este atraso se encontraban en la supervivencia del latifundio, el cultivo extensivo, el ausentismo de los propietarios, la inadecuada política de precios para los productos agropecuarios y la marginación tradicional de los campesinos de la economía y de la cultura. Esta cruda realidad hizo surgir tanto en los partidos populares como en los propios trabajadores del campo la decisión de promover la reforma agraria, aspiración que se realizaría más tarde.

En el orden político, este gobierno se caracterizó por la defensa desembozada de los intereses de la burguesía, por la suspensión casi indefinida de las garantías constitucionales en virtud de la implantación reiterada del estado de sitio y la concesión de facultades extraordinarias por la mayoría del Congreso, por la persecución a los partidos de izquierda y a las organizaciones sindicales, que culminaron con nuevas masacres y exoneraciones de trabajadores a raíz de importantes huelgas producidas en este período. Para realizar esta política, Alessandri contó con el apoyo de los partidos tradicionales de la reacción oligárquica y, en los primeros años del radicalismo como asimismo con el de la "milicia republicana", cuerpo civil militarizado de las clases poseedoras creado como réplica a la dictadura de Ibáñez y al susto producido por la República socialista.

3. *Frente popular en Chile*

a] *El desarrollo industrial.* En las postrimerías de este período se constituyó el Frente Popular, nueva táctica patrocinada por el comunismo internacional con el objeto de enfrentar al fascismo en todo el mundo, que se vio favorecida en Chile por la política cada vez más represiva del gobierno de Alessandri y por el retiro del Partido Radical de las tareas del gabinete. El Partido Socialista, que al comienzo no compartía esta iniciativa política, se incorporó a la alianza juntamente con la Confederación de Trabajadores de Chile. El Frente Popular conquistó importantes victorias en las elecciones generales de parlamentarios de 1937 y con su candidato Pedro Aguirre Cerda derrotó a la derecha en las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 1938.

La crisis mundial del capitalismo, que empezó con la primera gran guerra, llegó a su clímax en los años 1929-1931 y extendió sus efectos hasta la segunda guerra mundial, trajo consigo condiciones propicias para el desarrollo de la industrialización en Chile. La necesidad imperiosa de sustituir los productos manufacturados en los grandes centros metropolitanos, que no podían ser importados por dichas crisis cíclicas y por las dificultades generadas por la última de estas conflagraciones universales, determinó un crecimiento de la industria chilena, con el consiguiente desplazamiento de importantes sectores rurales hacia las ciudades. Así, desde la década de 1930, comenzó en Chile un proceso de industrialización continuado, que recibió un poderoso impulso a partir del gobierno del Frente Popular.

La política económica se orientó, durante este período, hacia el desarrollo industrial. Los partidos de la izquierda que asumieron las funciones gubernativas dieron especial importancia a la necesidad imperiosa de remover las condiciones de atraso de la economía chilena, para asegurar mejores niveles de existencia a los trabajadores. El gobierno promovió este proceso mediante medidas proteccionistas, líneas de crédito interno y externo, avaladas por él mismo, en favor de las empresas privadas, como asimismo la intervención directa del estado dirigida a establecer la infraestructura económica necesaria para el crecimiento industrial.

Bajo la dirección de la Corporación de Fomento de la Producción, creada por este gobierno, se desarrollaron grandes actividades nacionales, como la Empresa Nacional de Electricidad con sus centrales hidroeléctricas, la Empresa Nacional de Petróleo, la Compañía de Acero del Pacífico, las fábricas de cemento, la Empresa Nacional de Minería con sus fundiciones y refinerías de cobre proveniente de la pequeña y mediana minerías, la mayoría de las cuales se organizaron como empresas estatales. A éstas habría que agregar una gran variedad de industrias livianas, como las textiles, las de artefactos para el hogar, las elaboradoras de metales, las agroindustriales, y las de la construcción, organizadas como empresas privadas.

El gobierno del Frente Popular y los que le sucedieron, dentro del ciclo hegemonizado por el Partido Radical, promovieron igualmente el desarrollo de la agricultura, procurando generar relaciones de producción capitalista en este sector de la economía en concordancia con el desarrollo industrial. En esta esfera se construyeron obras de regadío para incorporar nuevas tierras al cultivo, se incrementó la mecanización agrícola, se importó ganado fino, se inició la construcción de una

red de mataderos frigoríficos, se creó la industria azucarera nacional para procesar la remolacha, se impulsó una política de precios remunerativos, se destinaron mayores recursos financieros para la asistencia crediticia a este sector y se formuló una racionalización de la política agraria a través de un "plan agrario".

Este proceso de desarrollo económico influyó a su vez en la conformación de las fuerzas sociales y políticas que entraron a participar en las nuevas confrontaciones de clases. La burguesía industrial y comercial se desarrolló a la sombra de la política de intervención en la economía por parte del estado, el que se hizo cargo de cuantiosas inversiones en la construcción de la infraestructura y en la creación de poderosas actividades que entraron a condicionar el crecimiento económico del país. Muchas de dichas actividades fueron trasferidas posteriormente a los empresarios privados, generando un fuerte sector que se convirtió a su vez en grupo de presión sobre el estado, influyendo en la política económica del gobierno. La clase poseedora de la tierra mantuvo asimismo su poder, la que fue fortalecida por la política de fomento a la agricultura, de respeto a la estructura de tenencia de la tierra, de estímulo al espíritu de empresa y de impedimento a la organización sindical de los trabajadores del campo.

b] *Las luchas de los trabajadores.* La clase obrera experimentó una notable evolución tanto en el desarrollo de su organización como en su desplazamiento hacia las actividades políticas. Los obreros industriales generaron sus organizaciones sindicales y formularon sus demandas reivindicacionistas dentro del marco de las leyes que regulaban las relaciones laborales y del espíritu de colaboración de clases que predominaba entonces bajo la inspiración de la política del Frente Popular. Todas ellas constituyeron en 1936 la Confederación de Trabajadores de Chile —integrada por socialistas y comunistas— que apoyó a los gobiernos que se sucedieron a partir de 1938. Sin embargo, un sector de obreros de filiación anarcosindicalista mantuvo la Confederación General de Trabajadores, que comprendía a los sindicatos libres, hasta su integración a la Central Única de Trabajadores fundada en 1953.

Los empleados públicos y particulares crearon a su vez sus propias organizaciones, las que conquistaron considerables reivindicaciones, como sueldo vital, asignación familiar, indemnización por años de servicios, reajustes anuales conforme al aumento del costo de la vida, etc. Asimismo, obtuvieron el reconocimiento legal de sus organizaciones gremiales y el fuero para sus dirigentes. Así, los distintos sectores de asalariados se sometieron a la "institucionalización" de sus protestas sociales y reivindicaciones económicas, de acuerdo a las normas del código del trabajo y las leyes de seguridad social. Por la indecisión cuando no la complicidad de los partidos del Frente Popular, el campesinado quedó al margen de toda organización, ya que se impidió su sindicalización y se continuó reprimiendo su lucha por la tierra y su incorporación al proceso general de desarrollo sociopolítico del país.

La presencia de los partidos de la izquierda en el Gobierno del Frente Popular generó condiciones políticas que facilitaron las luchas de las masas trabajadoras por sus reivindicaciones económicas inmediatas. En el orden interno, este gobierno restableció el pleno ejercicio de las libertades democráticas conculcadas por su an-

tecesor y, en el orden internacional, proclamó la neutralidad de Chile en la segunda guerra mundial en septiembre de 1939 e incorporó al territorio nacional una zona de la Antártida comprendida entre 53° y 90° longitud oeste y el polo sur. Sólo en 1943, el gobierno presidido por Juan Antonio Ríos rompió sus relaciones diplomáticas y comerciales con los países fascistas y declaró la guerra a Japón. El Frente Popular experimentó una crisis mortal en 1941 como consecuencia de sus propias contradicciones internas, produciéndose su ruptura por decisión del Partido Socialista.

c] *Frente Popular: una alianza negativa.* Como balance de este período, se puede afirmar que el Frente Popular constituyó un freno para los impulsos de cambio social de las masas trabajadoras, desarmándolas ideológicamente por la acción u omisión de los propios partidos obreros. Su política permitió, en cambio, la reconstitución del Partido Radical que entonces se encontraba al borde de su desintegración. Durante ese gobierno y los que le sucedieron hasta 1952 no se intentaron siquiera las trasformaciones más urgentes en las estructuras socioeconómicas, manteniendo bajo el dominio de los consorcios norteamericanos las riquezas básicas del país e impidiendo toda posibilidad de reforma agraria y de sindicalización campesina. El programa del Frente Popular no fue otra cosa que el programa de la burguesía dependiente; de ahí sus limitaciones.

Roto el Frente Popular, los mismos partidos que lo integraron se reagruparon poco después constituyendo la Alianza Democrática, bajo cuyo patrocinio triunfó en las urnas Juan Antonio Ríos a la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda. "La Alianza Democrática logra apenas sobrevivir —dice Jorge Barría— por las pugnas de sus componentes. Las dificultades entre los mandatarios y el Partido Radical, la pugna socialista-comunista en la Central Sindical, la descomposición moral que afecta el socialismo, el auge del comunismo y la oposición tenaz de los partidos derechistas, conducen a la desintegración de la coalición frente-populista, fenómeno que se acelera con el término de la segunda guerra mundial."

El ciclo de los gobiernos radicales, que comprendió catorce años, se cerró con Gabriel González Videla, quien fue elegido con el apoyo del Partido Comunista y constituyó su primer gabinete con una fórmula de unidad nacional patrocinada por este último, como secuela de la consigna formulada en los países capitalistas por el comunismo internacional a partir de la invasión de la Unión Soviética por los ejércitos de la Alemania hitleriana. Ésta fue la primera experiencia del Partido Comunista en un gobierno de coalición de clases en Chile.

d] *Chile en la guerra fría.* Este gobierno de González Videla (1946-1952) tomó partido en la abierta pugna que se produjo en la posguerra entre los bloques dirigidos por los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética en defensa de sus respectivas áreas de influencia política, económica y estratégica. Durante este período —la guerra fría— el gobierno de Chile suscribió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro (1947), la Carta de la Organización de los Estados Americanos de Bogotá (1948) y el Pacto de Ayuda Militar (1952), ubicando indisimuladamente al país en el bloque del llamado "mundo libre", con las derivaciones políticas que se desprendían de dichos compromisos.

Chile experimentó, durante este período, los efectos de la recesión producida en la economía norteamericana, particularmente en relación con la exportación de cobre, la que posteriormente se normalizó con la guerra de Corea. En 1949 se celebraron los convenios de Washington, por los cuales el gobierno de Chile adquirió el "derecho" a comercializar una parte de la producción de cobre de la gran minería entregando un año después, mediante una ley, la comercialización total de esta producción al Banco Central de Chile.

La inflación empezó a constituir un factor de deterioro de la economía, que el gobierno no fue capaz de controlar. Un paro general escalonado de trabajadores en 1950 echó por tierra un proyecto de estabilización de sueldos y salarios patrocinado por el gobierno, obligando a éste a modificar el gabinete y su política social. La agricultura no mostró signos de progreso, continuando con su ritmo de crecimiento inferior al incremento de la población. La ley de sindicalización campesina promulgada en 1949 constituyó un nuevo impedimento para la organización de este sector de trabajadores, lo que quedó en evidencia con el hecho de que en veinte años de vigencia sólo se organizaron 20 sindicatos con un total de 2 000 socios.

Nunca antes se había aplicado una política tan reaccionaria por un gobierno elegido por fuerzas de la izquierda. La burguesía enriquecida a través del proceso de industrialización impulsado por los gobiernos anteriores, hegemonizados por el radicalismo, se asoció a la oligarquía terrateniente y a los consorcios extranjeros para desarrollar esa política, que hacía recaer sobre las masas asalariadas el peso de la capitalización de las empresas privadas, utilizando medidas represivas en virtud de las facultades de excepción y de la ley de defensa permanente de la democracia aprobadas por dóciles mayorías congresistas. Este presidente dispuso durante la mitad de su período de gobierno de facultades extraordinarias que le permitieron suspender la vigencia de las garantías constitucionales y los derechos democráticos. La "ley maldita" —así llamada por el pueblo— promulgada en 1948 ilegalizó al Partido Comunista, eliminando a sus miembros de los registros electorales, y sometió a las organizaciones sindicales al control policial, limitando sus prerrogativas en materia de negociación colectiva y derecho de huelga.

e] *El populismo ibañista.* El grosero oportunismo político del presidente Gabriel González Videla, fiel reflejo de los sectores de la burguesía industrial dependiente desarrollados a partir de la segunda guerra mundial, la grave situación de desprestigio de los partidos tradicionales y del gobierno democrático-burgués, la proscripción del Partido Comunista, el debilitamiento del movimiento obrero organizado y la división socialista pusieron en las grandes mayorías nacionales un sello de desilusión y repudio al régimen imperante, abriendo las puertas a un sentimiento apolítico, independiente de los partidos, que se personificó en la carismática figura del general Carlos Ibáñez. Este candidato presidencial, enarbolando un programa nacional y popular, obtuvo el 47% de la votación nacional gracias a la participación activa de las grandes masas marginales de la ciudad y del campo, siendo ratificado por el Congreso nacional como primer mandatario.

En los dos primeros años de esta administración —la etapa propiamente populista— se puso en marcha una política orientada a reorganizar el aparato del

estado. Para este objeto se utilizó una ley por la cual el Congreso le otorgó al gobierno facultades extraordinarias de carácter económico y administrativo, dictando diversos decretos con fuerza de ley que crearon nuevos organismos públicos —Ministerio de Minería, Banco del Estado, Instituto de Seguros del Estado, Corporación de la Vivienda, Instituto Nacional de Comercio, Empresa Nacional de Fundiciones, etc.—; se reorganizaron diversos servicios de la administración pública centralizada y descentralizada, incluido el comercio exterior, y se concedieron diversos beneficios sociales a los trabajadores, como el salario obrero agrícola reajustable anualmente, la asignación familiar obrera y la indemnización por años de servicios para esos mismos trabajadores.

Durante esta administración la economía disminuyó su ritmo de crecimiento en medio de diversos ensayos de políticas dirigidas a enfrentar los problemas derivados de esta situación, particularmente la inflación, que empezó a alcanzar índices desconocidos hasta entonces. El fracaso en el manejo de la comercialización del cobre por intermedio del Banco Central, debido a la disminución de la demanda por el término de la guerra de Corea, las manipulaciones del principal mercado de colocación de este producto —el norteamericano— y los propios errores en su aplicación determinaron la acumulación del mineral en los puertos chilenos, lo que trajo consigo graves problemas financieros al país. Esta experiencia negativa y las maniobras y presiones de las compañías norteamericanas de la gran minería obligaron al gobierno a patrocinar la ley de nuevo trato, promulgada en 1955.

Esta ley tuvo como objeto promover nuevas inversiones y aumentar la producción en esta actividad nacional, para lo cual se redujo la tributación a un solo impuesto aplicado a las utilidades del 50% y una tasa variable de un 25% según el aumento que experimentare la producción, se estableció un nuevo tipo de cambio para los costos de producción y se creó el Departamento del Cobre, encargado del control de las operaciones de estas empresas. Tal política sólo benefició a los consorcios norteamericanos, reduciendo el ingreso de divisas que percibía el país por este rubro principal de sus exportaciones, y se mantuvo hasta 1965, año en que fue remplazada por una nueva legislación dictada bajo el gobierno de Eduardo Frei.

Dentro de este mismo espíritu de concesiones al capital extranjero, se aprobó por intermedio de una ley un convenio ad referéndum celebrado entre el gobierno y las empresas salitreras, en virtud del cual el estado les otorgó a éstas diversas franquicias, como el mejoramiento del tipo de cambio de retorno, para que efectuaran las inversiones necesarias para elevar su producción. No habiendo logrado los propósitos previstos en la ley —salvo los beneficios para las empresas— este convenio fue modificado en 1968.

El movimiento generado en torno a la personalidad del general Ibáñez, con sus contradicciones y vacilaciones, constituyó con todo un nuevo desafío popular tanto a la institucionalidad vigente como a la dependencia extranjera. Tal era, al menos, el sentido profundo de los propósitos políticos del programa de este movimiento popular. En el balance general de este período, debe destacarse la unidad de la clase trabajadora a través de la fundación de la Central Única de Trabajadores en 1953, que comprendió a los obreros industriales y mineros, a los sectores

campesinos, a los empleados públicos y particulares, etc.; la derogación de la ley de defensa permanente de la democracia que puso término a diez años de represión al movimiento obrero, devolviendo al Partido Comunista a la legalidad, y la reforma del sistema electoral, estableciendo la cédula única, disponiendo el cierre de las secretarías políticas durante el día del acto eleccionario y otras medidas de saneamiento del proceso de generación de los poderes públicos. Pero el ibañismo no constituyó un movimiento orgánico capaz de proyectarse hacia el porvenir, conduciendo a las masas hacia la conquista de reales posiciones de poder. Nació con Ibáñez y desapareció con la muerte de este caudillo.

4. *Las dos caras de la reacción*

a] *La revancha reaccionaria.* Aprovechando la proliferación de candidaturas presidenciales —cinco, incluyendo la del pintoresco cura de Catapilco— las fuerzas representativas del gran capital industrial y financiero aliado con los consorcios imperialistas se tomaron la revancha en las elecciones presidenciales de 1958. A veinte años de la victoria del Frente Popular esas fuerzas reaccionarias recuperaron directamente el gobierno con Jorge Alessandri. Su política económica, de corte conservador, estuvo orientada a reforzar las grandes empresas vinculadas a la exportación —entre ellas, la Fábrica de Papeles y Cartones, dirigida por él mismo—, para lo cual procuró atraer capitales externos e internos a la inversión. La apertura de mercados externos, como se sabe, evita la ampliación del propio mercado interno, que implica trasformaciones económicas previas, como la reforma agraria que a su vez determina la redistribución del poder.

El plan de estabilización, con una rígida congelación de sueldos y salarios, no fue otra cosa que un nuevo y descarado intento de obligar a las masas trabajadoras a costear la capitalización burguesa. Su absoluto sometimiento al imperialismo lo obligó a suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Para sostener esta política regresiva la clase dominante recurrió a los tradicionales procedimientos de represión popular, provocando nuevas masacres de trabajadores, como la producida en la población José María Caro, en 1962.

La presencia de personeros de la burguesía industrial en el gobierno impulsó el desarrollo de ciertas ideas matrices que inspiraron toda su política durante este período, consistente en la convicción de que las inversiones extranjeras y la libre empresa constituían las bases del progreso económico del país. La agricultura mantuvo su estancamiento, ya que su crecimiento fue inferior al de la población. De conformidad a las orientaciones de la Alianza para el Progreso, se promulgó una ley de reforma agraria en 1963, conocida por el pueblo como la "reforma de macetero" por los precarios objetivos que perseguía. Ella promovía, en efecto, sólo la parcelación voluntaria de los grandes latifundios —lo que dio lugar a pingües negocios de los propietarios— y contemplaba la expropiación en los casos de predios abandonados y notoriamente mal explotados.

El historiador Ricardo Donoso ha descrito esta etapa de la evolución política de su país en los siguientes términos: "En los tres primeros años del nuevo gobierno han quedado en evidencia las fallas del régimen político predominante: el

absorbente predominio del Ejecutivo, la nulidad del Congreso, la omnipotencia del poder económico y la impotencia de la opinión pública. El régimen político, sin ningún respaldo popular, aparece como el botín de una minoría plutocrática, que cuenta con el apoyo decidido de las clases poseedoras (la Iglesia entre ellas), en el que las expresiones de la vida democrática apenas si encuentran resonancia. Se ha cavado así una fosa profunda entre la mayoría del electorado, de las clases asalariadas y de la burguesía, y el Ejecutivo, representación de las potencias dominantes, plutocracia e Iglesia."[2]

El gobierno de Jorge Alessandri significó, en suma, la plena restauración del capitalismo, sistema que había sido afectado por la intervención del estado en el proceso de la economía, a partir del gobierno del Frente Popular en virtud de la influencia ejercida por los partidos de la izquierda. Este presidente encarnó, en efecto, los intereses de la gran burguesía industrial, comercial y bancaria asociada a los sectores terratenientes. Por lo mismo, defendió la institucionalidad democrático-burguesa y encontró un apoyo fuerte y decidido en las organizaciones gremiales de los empresarios y en los partidos tradicionales. Como réplica a esta política, las luchas de clases adquirieron mayor dimensión, expresándose tanto a través de los conflictos del trabajo regulados por la legislación laboral, como a través de las eclosiones multitudinarias espontáneas o estimuladas por los partidos obreros. Este gobierno, con su insensibilidad social absoluta, dejó que numerosas huelgas se prolongaran durante meses, sin interesarse por encontrar ninguna solución justa.

Al término de su mandato presidencial, el fracaso estrepitoso de esta política reaccionaria derrumbó la poderosa coalición de partidos que le proporcionaba la base de sustentación política al gobierno de Alessandri —el llamado Frente Democrático—, obligando a estos últimos a dar su apoyo al candidato demócrata-cristiano Eduardo Frei en las elecciones presidenciales de 1964, quien logró la victoria con la bandera de la "revolución en libertad". La Democracia Cristiana, partido policlasista, con una importante base social pequeñoburguesa, pero dirigido por personeros de la burguesía, se convirtió en el mejor instrumento de la nueva estrategia del imperialismo, bendecida por la Iglesia católica. Esta última, desde el término de la segunda guerra mundial, había abandonado su alianza tradicional con la oligarquía terrateniente para dar su apoyo al nuevo poder que surgía con el predominio norteamericano en América Latina. Frei contó, por eso, con una base de sustentación política tan poderosa que hizo naufragar a la nueva candidatura presidencial de Salvador Allende.

b] *La revolución en libertad.* Así como en el período de entreguerra el fascismo se alzó como la barrera más brutal para detener la revolución socialista, en la posguerra de 1939-1945 el capitalismo encontró en la Democracia Cristiana la fórmula mágica para asegurar el mismo objetivo. En Europa fue el partido de la restauración capitalista; en los países periféricos y subdesarrollados surgió como un partido reformista, llegando a presentarse en Chile como promotor de una revolución en libertad. La política desarrollista impulsada por el gobierno demócrata-cristiano presidido por Frei no fue otra cosa que la nueva cara de la alianza del

[2] Ricardo Donoso, *Breve historia de Chile,* Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1970.

capital imperialista-capital nacional industrial, dirigida fundamentalmente a desplazar parte de las inversiones norteamericanas de la minería a las industrias manufactureras, de acuerdo a la tendencia manifestada por ellas, en los últimos años, a buscar las tasas de beneficios más atractivas, y a ampliar el mercado interno para los productos de las nuevas industrias mediante la reforma agraria, la organización de los campesinos y el mejoramiento del nivel de sus ingresos.

De acuerdo a una delegación de facultades del Congreso nacional, el gobierno de Frei puso en marcha su política sobre el cobre que, en su esencia, consistió en crear sociedades mixtas entre el estado y las compañías norteamericanas, mediante la compra por el primero del 51% de las acciones de las empresas subsidiarias existentes en Chile, pagándoles indemnizaciones cuantiosas. Las cifras son más elocuentes que las palabras. La Anaconda, por el 51% de las acciones en las sociedades mixtas formadas con sus subsidiarias Chile Exploration Co. y Andes Copper Co. recibió pagarés del gobierno de Chile por 175 millones de dólares. en circunstancias que el valor libro de esas empresas era sólo de 181 millones de dólares, es decir, por el 51% de las acciones se les pagó con el valor total de las inversiones. A la Kennekott Copper Co. se le canceló por el 51% de las acciones de su subsidiaria Braden Copper Co. 180 millones de dólares. aunque el valor libro era inferior a esa cifra. El gobierno avaló, además, un crédito de 125 millones de dólares y le entregó la administración de la nueva empresa mixta, a pesar de haber pasado a ser aquella compañía socio minoritario en ésta.

El gobierno de Frei convino, además, con la Anaconda una opción por parte de Chile para adquirir el 49% de las acciones dependientes, cuyo precio se determinaría en relación a las utilidades que obtuviera dicha compañía en los dos años anteriores a la compra, lo que significaría el pago de una suma muy elevada por el restante 49%. En cuanto a la Braden no se celebró convenio sobre opción, lo que le habría permitido después de los planes de expansión exigir por el 49% de las acciones un valor considerable, de haber querido comprarlas el gobierno de Chile. Los convenios contemplaban, además, los llamados planes de inversión dirigidos a incrementar la producción, cuyo financiamiento significaba compromisos o deudas para las empresas mixtas con instituciones internacionales de crédito por la suma de 704 millones de dólares.

Durante este gobierno se promulgó una nueva ley de reforma agraria que contemplaba la expropiación de los predios por exceso de superficie, por subdivisión minifundiaria, por abandono y mala explotación y por habilitación de nuevas tierras. La ley estableció que la indemnización se pagaría con una parte al contado y el saldo a 30 años de plazo, que la tierra se asignaría a los campesinos transitoriamente a través de la organización denominada asentamientos para pasar a convertirse después en propiedad cooperativa, y que el valor de ella se pagaría por los asignatarios al estado en el plazo de 30 años. Como complemento de la política de trasformación de las relaciones de producción en el campo, se promulgó una nueva ley sobre sindicalización campesina, que marcó la expansión de la organización de los trabajadores rurales. Afectada en sus intereses primordiales, la vieja oligarquía terrateniente resistió tenazmente el proceso de cambio en el campo.

La industria manufacturera tuvo un nuevo impulso mediante la inversión di-

recta del estado y la asociación de éste con empresas extranjeras, particularmente en petroquímica, celulosa y papel, electrónica, maderas, metal-mecánicas, agroindustrias, computación, telecomunicaciones, etc., proyectadas la mayoría de ellas a producir para el mercado latinoamericano en desarrollo. El crecimiento industrial mostró más claramente las tendencias a la concentración de las empresas, la desnacionalización y la baja utilización de la capacidad instalada, con lo que se configuró una nueva fase en el proceso de dominación imperialista consistente en el desplazamiento de sus inversiones hacia sectores más dinámicos de la economía chilena. El estado dispuso para estos proyectos de más recursos financieros derivados del alto precio alcanzado por el cobre en el mercado europeo, de la inversión y crédito externos y de una reforma tributaria.

En este período se desataron fuerzas sociales tanto urbanas como campesinas, hasta entonces marginadas de la vida política, que la Democracia Cristiana procuró orientar y ponerlas al servicio de su proyecto de gobierno; pero como al aprendiz de hechicero se les escaparon y no las pudo controlar. Quedaron, como saldo de este intento, las organizaciones campesinas y los organismos comunitarios en las ciudades —como las juntas de vecinos y los centros de madres— que fueron promovidos de acuerdo a los programas gubernativos de desarrollo social. Pero todos ellos, por las limitaciones de sus objetivos, no se constituyeron en formas sólidas de representación popular que eventualmente pudieran entrar en conflicto con los partidos y sindicatos.

Como un anticipo del proceso revolucionario que se inauguraría en 1970, en este período igualmente se desarrollaron luchas sociales y movilizaciones de masas que respondían a los profundos antagonismos existentes en el subsuelo de la sociedad, que fueron a su vez conformando un clima prerrevolucionario en Chile. Confluyeron en esta agudización de la lucha de clases las reivindicaciones de los obreros industriales, que precipitaron huelgas con ocupación de fábricas; el desplazamiento de una corriente constante de campesinos hacia las grandes ciudades, atraídos por el proceso de industrialización o simplemente en busca de trabajo; las tomas de terrenos por los trabajadores "sin casa" para levantar sus viviendas provisorias, y las huelgas campesinas promovidas en las zonas agrícolas más desarrolladas. Estuvo presente también en este proceso de agitación social el estudiantado que, conjuntamente con sus propias luchas enmarcadas en el movimiento de reforma universitaria, intervenía activamente en las luchas de los trabajadores.

Constituyeron expresión detonante de la convulsión que se desarrollaba en el seno de la sociedad chilena y que abarcaba todos sus estratos, hechos de tanta significación política, como la primera huelga de los magistrados de los tribunales de justicia en demanda de mejores remuneraciones, la toma de la catedral metropolitana de Santiago por un grupo de cristianos para llamar la atención sobre el divorcio existente entre la Iglesia católica y las masas trabajadoras y el acuartelamiento de un sector del ejército bajo el mando del general Roberto Viaux en el regimiento Tacna, en abierto desafío al gobierno de Frei.

II. LA INSTITUCIONALIDAD VIGENTE (1970)

1. *El capitalismo dependiente*

a] *La dependencia externa.* El economista chileno Aníbal Pinto señala, al analizar las relaciones entre la estructura económica y la organización sociopolítica en en el desarrollo de Chile, que se percibe "desde antiguo un relativo adelanto de la organización social y las formas institucionales respecto a los cambios en el nivel de la estructura económica, disociación que tiende a agudizarse en los dos últimos decenios".[3] Según este autor, la disociación se expresa, primero, en la contradicción entre una estructura económica subdesarrollada y una organización política avanzada y, segundo, en la contradicción entre aquella estructura económica y la demanda nacional, la que se resume en la fórmula acuñada por el profesor Enrique Molina en el sentido de que los chilenos "somos civilizados para consumir y primitivos para producir". En este sentido, cabe expresar que el proceso de industrialización fue más tardío en Chile que en otros países de América Latina, con todas las limitaciones de un desarrollo dependiente. Esta caracterización del desarrollo histórico del país es válida hasta el golpe militar de 1973, con el cual se produce evidentemente un retroceso en la organización sociopolítica, que hasta entonces se había caracterizado por su carácter avanzado.

Chile era al asumir el gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende un país capitalista dependiente del imperialismo norteamericano, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero. Como resultado del desarrollo del capitalismo mundial aumentó progresivamente la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo, se acentuó cada vez más su dependencia como socio menor del capital extranjero. Por eso, fue posible que las empresas trasnacionales arrancaran recursos equivalentes al doble del capital instalado en el país, acumulado a través de toda su existencia como nación. El dominio imperialista, por otra parte, no sólo alcanzaba a las riquezas naturales o básicas —cobre, hierro, salitre, etc.— sino que también se extendía a importantes ramas industriales, de servicios y del comercio exterior.

La dependencia externa revestía, en efecto, caracteres alarmantes tanto en la minería —que aportaba más del 80% del ingreso de divisas al país— como en la industria y en el aparato de circulación y comercialización. En la gran minería del cobre, la participación de capitales extranjeros pasó del 100% en 1966 al 49% en 1970 con los convenios celebrados entre el Gobierno de Eduardo Frei y las compañías norteamericanas; en la mediana y pequeña minerías del cobre esa misma participación pasó del 54% al 46% en el mismo período. No obstante, el mencionado gobierno mantuvo graciosamente en manos de sus socios minoritarios la dirección de la empresa mixta de El Teniente constituida en virtud de aquellos convenios, incluida la comercialización del producto en el exterior.

[3] Aníbal Pinto, "Desarrollo económico y relaciones sociales", *Chile hoy*, México, Siglo XXI, 1970.

En la industria manufacturera, la penetración del capital extranjero era cada vez mayor. Según cifras del año 1968, el 17% del capital de las sociedades anónimas era de procedencia foránea mientras el 13% era del estado y el 70% de inversionistas privados. Pero lo más grave consistía en que el capital extranjero estaba concentrado en manos del 1% de los accionistas en tanto que el perteneciente a los inversionistas nacionales se dispersaba en un 99.1% lo que facilitaba el control por aquél de las empresas más grandes y/o más dinámicas, como la celulosa y el papel, maquinarias, accesorios eléctricos, caucho, etc. Existía participación extranjera, en general, en más de la mitad de las 160 sociedades anónimas más grandes, en 40 de las cuales dicha participación superaba el 30%, con cuyo porcentaje controlaban estas empresas. Como complemento de esta dependencia, Chile había incrementado su endeudamiento externo de 598 millones a 2 300 millones de dólares en la década de los años 60, llevando esta cifra el gobierno de Frei a 3 200 millones de dólares, herencia que dejó a su sucesor.

Esta realidad fue el resultado de la política aplicada por los diversos gobiernos en el curso de las últimas décadas, convencidos que ella aseguraba el crecimiento económico del país. En efecto, "los teóricos del desarrollismo consideran al capital extranjero elemento consubstancial al proceso de industrialización sustitutiva. La posición de estos analistas se fundamenta en la posibilidad de impulsar un desarrollo nacional autosustentado que, rompiendo con la tradicional estructura exportadora de América Latina, permitía dar aliento a una economía enteramente asfixiada por su comercio exterior. Dentro de esta perspectiva al estado le cabe asumir un papel sumamente vital en cuanto promotor de políticas que signifiquen impulsar la industrialización".[4]

Particularmente, desde la década de los años 50, la burguesía chilena viene sosteniendo una política de "atracción" del capital extranjero con fines de capitalización, limitando las inversiones estatales a los sectores relativos a la infraestructura básica. Tal fue, al menos, la inspiración de la política seguida por los gobiernos de Jorge Alessandri y de Eduardo Frei. La cruda realidad demostró en la siguiente década que esas concepciones eran simples juegos de artificio, ya que ellas sólo condujeron, por una parte, al estancamiento económico y, por la otra, a la desnacionalización debido a la extracción de excedentes por los inversores extranjeros y la supeditación a los monopolios.

b] *La concentración capitalista.* El proceso de concentración capitalista se daba a su vez en Chile, como en los demás países de América Latina, en dos niveles: primero, la economía norteamericana trasladaba, como es sabido, la concentración a sus empresas en el exterior, controlando un número reducido de ellas la mayor parte de sus inversiones y, segundo, las empresas multinacionales tendían a asegurar el control monopólico de las subsidiarias. Los autores citados anteriormente expresan al respecto: "Este proceso de concentración monopólica de la industria chilena sobre la base de la empresa extranjera tiene profundas implicaciones en:

"i] Estructura de la producción, la que se define en función de los intereses

[4] Orlando Caputo y Roberto Pizarro. "Dependencia e inversión extranjera", *Chile hoy*, México, Siglo XXI, 1970.

de la empresa multinacional con toda una tecnología correspondiente con la estructura del sistema capitalista, pero profundamente distorsionadora de la economía interna (desocupación, creación de demanda suntuaria, etc.).

"ii] Balanza de pagos, cuyos problemas se agudizan por los pagos y consecuentes egresos de divisas que se hacen a la empresa extranjera instalada en el país, a lo que se agrega una elasticidad de demandas por importaciones cada vez más rígidas dependientes de materias primas y equipos necesarios al proceso de industrialización.

"iii] Descapitalización creciente, producto de las utilidades extras obtenidas por el monopolio extranjero y la superexplotación del trabajo (utilidades remitidas al exterior y la acumulación interna de capital).

"iv] Centro de decisión que pasa de lleno al exterior, ya que el proceso de industrialización pasa a ser regido en la práctica por la empresa extranjera."

La concentración de la propiedad y de la actividad económica se expresaba en Chile a través de cifras por demás elocuentes. En la minería, tres empresas —Chuquicamata, El Salvador y El Teniente— producían en 1969 546 700 toneladas de cobre, es decir, el 78.2% de la producción total. La mediana minería, por su parte, que aportaba el 15.8% estaba constituida por tres empresas principales. Las 2 000 empresas de la pequeña minería producían sólo 42 100 toneladas y el 6% de la producción total. En cuanto al carbón, la firma Lota-Schwager aportaba el 77.5% de la producción.

En la industria 144 empresas controlaban todas y cada una de las ramas y subramas de la actividad manufacturera, eliminando a sus competidores menores o concertando acuerdos con ellos sobre manejo conjunto del mercado. El 27.25% de las sociedades anónimas industriales comprendía el 81.83% del capital más reservas en tanto que el 72.75 % restante se repartía el 18.17%. Por otra parte, el 78% de los activos de las sociedades anónimas estaba en poder del 17% de ellas; de 35 000 empresas fabriles, el 1% de ellas entregaba más del 60% de la producción; el 1% de los establecimientos manufactureros poseían el 40% del capital fijo, y el 0.5% de las firmas distribuidoras efectuaba el 44% de las ventas totales en el comercio mayorista. Dentro de las empresas monopólicas existía una creciente concentración patrimonial que se expresaba en el control de un gran porcentaje de las acciones por un reducido grupo de accionistas.

En la agricultura, según datos estadísticos de 1965, 730 explotaciones de más de 5 000 hectáreas totalizaban 1 680 000 hectáreas, es decir, más de la mitad de la superficie cultivada total. En cambio, 123 600 explotaciones de menos de 5 hectáreas totalizaban 207 000, y 92 400 de entre 5 y 10 hectáreas sumaban 1 556 000. En otros términos, el 1.3% de las explotaciones concentraban el 72.7% de la superficie cultivable, mientras que el 85.2% retenía solamente el 5.8% de la superficie agrícola. La reforma agraria llevada a cabo por el gobierno de Frei sólo afectó un poco más de 105 de las explotaciones con más de 500 hectáreas.

Los bancos también estaban sujetos a una fuerte concentración. Según datos de 1965, 60 accionistas poseían el 19% de las acciones totales de los bancos privados y 200 accionistas el 34% de las mismas. En 1970, poco más del 2% de los accionistas controlaban cerca de las dos terceras partes de la totalidad de las acciones, sin tomar en cuenta los lazos familiares o comerciales que entre ellos existían. En

esta forma, el control de los bancos estaba en manos de un grupo de familias y al servicio de minorías, los mismos que tenían bajo su dominio otros sectores de la economía. En 1969, el 1.3% de los deudores absorbieron el 45.6% del crédito total y 66 deudores obtuvieron el 28.6% del mismo; en cambio, el 62% de los deudores obtenían el 8.2% del crédito total. Por último, de los 26 bancos privados, 5 de ellos controlaban el 57% de las colocaciones totales. Dentro del sistema financiero contribuían también a la concentración económica las compañías de seguros, principalmente mediante la inversión de sus reservas técnicas, manejadas por unos pocos consorcios.

2. *El sistema constitucional*

a] *La Constitución política de 1925.* Los ideólogos de la Revolución de 1810, guiados por un espíritu europeizante, cifraron sus esperanzas en las constituciones, convencidos de que estas cartas políticas podrían constituir el fundamento de la organización y desarrollo de cada nación una vez conquistada su independencia de España. La experiencia histórica demostró, sin embargo, que ellas eran sólo pedazos de papel que, por lo general, carecían de fuerza real. Se parecían a esas antiguas ordenanzas coloniales provenientes de la metrópoli que se burlaban pintorescamente con la fórmula sacramental conocida de "se acatan, pero no se cumplen". Las teorías políticas contenidas en aquellos textos constitucionales eran esquemas ideológicos importados desde el viejo mundo que no se conciliaban con la realidad de una nación que recién rompía las cadenas de la dependencia colonial.

No obstante, Chile exhibe una evolución política singular en el concierto de los países latinoamericanos durante el siglo XIX. Consolidada su independencia en los campos de batalla de Maipú en 1818, realizó diversos ensayos constitucionales y afrontó un período de anarquía política de 1823 a 1833. Desde entonces, bajo el imperio de la Constitución de este último año, el país tuvo un desarrollo ordenado, durante el cual se sucedieron conservadores y liberales en el gobierno, dentro del marco del régimen presidencial que contemplaba dicha carta fundamental. La guerra civil desencadenada en 1891 por la "fronda aristocrática" en contra del gobierno del presidente José Manuel Balmaceda interrumpió este proceso e introdujo de hecho el régimen parlamentario y una crónica anarquía política.

La Constitución de 1925 estableció que el estado es unitario y definió al gobierno como republicano y democrático representativo. Conjuntamente con la proclamación de los tres poderes clásicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— introdujo algunos principios que delimitaron las atribuciones de cada uno de ellos, evitando el retorno a los gobiernos autoritarios que predominaron durante la época comprendida entre 1833 y 1891, es decir, de Portales a Balmaceda.

b] *El equilibrio de poderes.* Según el texto constitucional, está a cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la República, quien administra el estado y es el jefe supremo de la nación. La elección del presidente de la República se efectúa mediante el sufragio directo, para lo cual se requiere la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. En el caso de que ningún candidato logre esta

mayoría, corresponde al Congreso pleno elegir entre los candidatos que hayan obtenido las dos primeras mayorías.

El presidente de la República tiene amplias atribuciones, entre las cuales cabe destacar su concurrencia a la formación de las leyes, el nombramiento de los ministros de estado y oficiales de sus Secretarías, a los agentes diplomáticos, intendentes y gobernadores; la designación de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y de los jueces; la supervisión de la recaudación de los ingresos públicos y su inversión con arreglo a la ley: la concesión de personalidad jurídica a las corporaciones privadas y su cancelación, y la disposición de las fuerzas armadas y su distribución según lo estime conveniente.

El Poder Legislativo es bicameral y está constituido por la Cámara de Diputados, que tiene 150 miembros y la Cámara de Senadores, integrada por 50. Aparte su función propiamente legislativa, corresponde a la Cámara de Diputados la atribución exclusiva de declarar si tienen o no lugar las acusaciones que, por lo menos, diez de sus miembros formulen en contra del presidente de la República, por actos de su administración en que haya comprometido el honor nacional o violado la Constitución y en contra de los ministros de estado por traición, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución, etc. La Cámara de Diputados tiene también la atribución de fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Senadores concurre igualmente a la formación de las leyes y, además, tiene otras atribuciones exclusivas, como la de resolver en el carácter de jurado si el presidente de la República y los ministros de estado son o no culpables de los delitos o abuso de poder de que se los acusa por la Cámara de Diputados, quedando destituidos si son declarados culpables. Corresponde también a la Cámara de Senadores las atribuciones de tomar conocimiento de las controversias de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia, y prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la República en los casos señalados por la Constitución. El Congreso nacional tiene, por último, la facultad de aprobar o rechazar anualmente el proyecto de presupuesto de gastos de la nación que debe presentar el Poder Ejecutivo.

Dentro de la concepción clásica de la separación de los poderes del estado, el Poder Judicial es independiente, conformando una estructura que tiene su base en los juzgados de letras —civiles y criminales— y su cúspide en la Corte Suprema, que ejerce sus facultades jurisdiccionales, económicas y disciplinarias sobre aquéllos, en un orden muy jerarquizado. La enseñanza tradicional y, en cierto sentido, anacrónica que imparten las escuelas de derecho, el rígido sistema de ingreso y ascenso de los jueces y la prohibición de toda otra actividad que escape a su específica función de magistrados convierte a éstos, en el curso de su carrera funcionaria, en instrumentos conscientes o inconscientes del orden tradicional de la sociedad, absolutamente impermeables al avance de los tiempos.

La adhesión irrestricta de los jueces a las ideas individualistas extremas y sus relaciones, en sus estratos superiores, con las clases dirigentes de la economía y la política burguesas impiden toda renovación en la administración de justicia y levanta las principales barreras contra la acción de cualquier gobierno progresista, a través de sus fallos rígidos que excluyen toda posibilidad de interpretación de las

viejas leyes en concordancia con el espíritu de justicia social propio de nuestro tiempo. Los jueces chilenos son, por lo general, absolutamente reaccionarios.

El sistema legal chileno contempla, además, un organismo —la Contraloría General de la República— que reviste caracteres, desde el punto de vista de sus facultades, de un cuarto poder del estado. De conformidad a la Constitución, para ser cumplidos los decretos, resoluciones y órdenes del presidente de la República y de otros funcionarios del Poder Ejecutivo se requiere que, previamente, el contralor general declare que dichos actos se ajusten a la Constitución y a la ley, según el caso. El poder de este alto funcionario es tan grande que, si se atiene a criterios tradicionales en la interpretación de las leyes, puede trabar la acción del gobierno, generando graves problemas políticos. La Contraloría General de la República, como el Poder Judicial, estaba profundamente penetrada de un espíritu conservador y reaccionario.

El régimen de equilibrio de los poderes del estado existente en Chile hasta 1970 corresponde a la concepción burguesa de una sociedad estática, cuyos sectores usufructuarios de sus desniveles de vida no desean que sea modificada. En este sentido han constituido siempre un espejismo político las mayores atribuciones con que cuenta el Poder Ejecutivo con respecto al Poder Legislativo, dentro del sistema constitucional. Es cierto que el presidente de la República puede regular el trabajo del Congreso durante la Legislatura extraordinaria —en la cual sólo pueden ser tratadas las materias que él incluye en su convocatoria— como también puede hacerlo en alguna medida importante en la Legislatura ordinaria a través del mecanismo de las peticiones de urgencias en el despacho de los proyectos de leyes. Tiene, además, el primer mandatario la exclusiva iniciativa en materia de gastos públicos y fijación de remuneraciones para los trabajadores del sector público y del sector privado. Puede impedir, mediante el veto, una legislación que contraríe su política con sólo un tercio más uno en cualesquiera de las ramas del Congreso nacional, como también hacer regir el mismo presupuesto del año anterior en el caso de que este último poder no apruebe el proyecto que el gobierno le ha enviado, para su discusión, dentro del plazo legal.

Pero todas estas facultades de poco sirven a un gobierno que se propone introducir cambios profundos en las estructuras socioeconómicas del país. Sin mayoría parlamentaria, el Poder Ejecutivo puede, de conformidad a sus atribuciones de órgano colegislador, impedir que se dicten leyes que alteren o traben su acción programática, pero no puede imponer una legislación que permita trasformar la organización económica, social y política del país. Por eso, aquellas amplias atribuciones constitucionales de que está dotado el presidente de la República sólo sirven para mantener el orden social establecido. La burguesía es muy sabia en la formulación de estos principios constitucionales, ya que ellos constituyen resguardos insuperables de sus privilegios.

c] *El régimen electoral.* De conformidad a la carta fundamental promulgada en 1925, en Chile se generan las autoridades políticas —presidente de la República, Congreso nacional y municipalidades— mediante el sufragio universal, el que rige desde el año 1874. Hasta 1973 tenían derecho a voto todos los hombres y mujeres, mayores de 18 años, sepan o no leer y escribir y que estén inscritos en los re-

gistros electorales. Las elecciones daban, en esta forma, legitimidad al traspaso del poder político de acuerdo a la voluntad mayoritaria de la nación. El presidente de la República duraba en su cargo seis años, los senadores ocho, renovándose por mitades cada cuatro, los diputados cuatros años, renovándose totalmente y los regidores tres años. Para la elección de los senadores, el país se divide en 10 agrupaciones provinciales, designándose cinco en cada una de ellas y para la elección de diputados el país se divide en 31 circunscripciones departamentales, eligiéndose uno por cada 30 000 electores y por fracciones superiores a 15 000.

La legislación electoral estableció el sistema de representación proporcional de cifra repartidora, conocido como sistema D'hont —nombre de su creador— con el objeto de asegurar la preeminencia de las grandes corrientes de opinión e impedir el multipartidismo. Este sistema permitió, en un primer período, que los poderosos partidos de derecha obtuvieran las más altas representaciones en el Congreso nacional y en los municipios, pero en seguida, debido a la distribución irregular de las fuerzas de los partidos en las diversas agrupaciones y circunscripciones electorales, se empezó a producir sobrantes de votaciones para estos mismos partidos.

Para impedir esta situación se introdujo, por intermedio de la ley, el sistema de pactos electorales o declaración de listas conjuntas de candidatos de los partidos con afinidades políticas o programáticas, lo que permitía efectuar compensaciones en las distintas circunscripciones. Esta modificación en el sistema electoral trajo consigo vicios que permitían sobrevivir a pequeños partidos y ser elegidos candidatos con escasos votos de preferencia. Durante todo este período el proceso electoral estuvo caracterizado por la presencia de la práctica del cohecho, que aseguraba la supremacía de los grandes partidos de la clase dominante.

En las postrimerías de la segunda administración del general Carlos Ibáñez y con el apoyo de los partidos de izquierda se aprobó una profunda reforma de la legislación electoral dirigida a sanear este proceso de generación de las autoridades democráticas. La nueva ley introdujo la cédula única impresa por la Dirección del Registro Electoral y entregada al elector en la propia mesa receptora de sufragios, en vez de la cédula confeccionada por los partidos y distribuida por ellos, como sucedía antes; se prohibió el funcionamiento de secretarías políticas a cargo de los partidos durante el día del acto eleccionario, y se eliminaron los pactos electorales. Esta última disposición determinó la reducción de los partidos políticos, los cuales habían alcanzado un número excesivamente alto en virtud del mecanismo de los pactos de compensación electoral. En 1962 se complementó dicha reforma electoral, estableciéndose la obligatoriedad de la inscripción en los registros electorales, para lo que se dispuso el funcionamiento permanente de las juntas inscriptoras a cargo de los registros electorales.

El sistema electoral chileno reúne, en suma, diversas características positivas, como su amplitud, ya que no discrimina respecto al sexo, edad, situación económica, cultura, etc., como sucede todavía en otros países y en el mismo Chile en el pasado reciente; su libertad, como quiera que la emisión del voto es un acto secreto, su imposibilidad de ser controlado por el uso de la cédula única oficial, en vez de la cédula distribuida por los partidos que antes daba lugar a fraudes; su desarrollo ordenado por cuanto dispone el cierre de las secretarías y el cese de la propaganda desde 48 horas antes de la elección, y su carácter representativo

derivado de la supresión de los pactos electorales. Sus defectos se refieren más bien a las formalidades que requiere la inscripción y la emisión del voto, la excesiva autonomía y arbitrariedad del tribunal calificador de elecciones, como la facultad de efectuar recuentos de votos sin la presencia de los candidatos o de sus apoderados (los acuerdos pueden ser secretos, pero el procedimiento probatorio debería ser público).

La educación popular y el desarrollo de la conciencia social de las masas unidos al perfeccionamiento de la legislación electoral han permitido una evolución del proceso electoral hasta el punto de alcanzar un alto grado de limpieza y representatividad. Vicios tradicionales, como el cohecho, el fraude, la intervención de las autoridades políticas, la presión y la violencia han sido superados. Desde 1927, la ley ha entregado la mantención del orden durante el desarrollo del acto eleccionario y la supervisión de las normas que lo regulan a las fuerzas armadas. Éstas designan jefes de plaza en cada una de las ciudades donde funcionen mesas receptoras de sufragios, quienes tienen la obligación de organizar el adecuado funcionamiento de ellas y supervigilar el cumplimiento de la ley.

3. *Los partidos políticos*

a] *El multipartidismo.* Desde los albores de la independencia, surgieron en Chile dos grandes corrientes de opinión —pelucones y pipiolos— que más tarde se convirtieron en el Partido Conservador, que gobernó de 1831 a 1861, y en el Partido Liberal, que asumió las funciones de gobierno de 1861 a 1891, fecha en que fue derrocado José Manuel Balmaceda mediante una guerra civil. Desde entonces empezó a desarrollarse el multipartidismo debido a las divisiones surgidas en los propios partidos tradicionales y a las nuevas corrientes de pensamiento impulsadas por las fuerzas sociales derivadas del desarrollo económico del país. Este fenómeno fue posible, por otra parte, en virtud de la continuidad del régimen constitucional, interrumpido por la acción de las fuerzas armadas a través de ciclos de cuarenta años aproximadamente.

Los partidos políticos chilenos presentan una clara definición tanto desde el punto de vista de su composición de clase como desde el punto de vista de sus objetivos programáticos, por lo que revisten también las características de movimientos nacionales. Hasta 1970 los partidos se alinearon en tres grupos: i] la derecha representada fundamentalmente por el Partido Nacional, ii] el centro representado por la Democracia Cristiana, y iii] la izquierda representada por la Unidad Popular. Estas agrupaciones concurrieron a las elecciones presidenciales de 1970 por intermedio de las candidaturas de Jorge Alessandri, Radomiro Tomic y Salvador Allende, en las cuales triunfó este último.

Posteriormente, entre 1970 y 1973, los partidos se reagruparon en dos grandes bloques: i] los partidos que constituían la Unidad Popular dieron su apoyo al gobierno presidido por Salvador Allende, y ii] los partidos que representaban a la oposición ofrecieron su base de sustentación al golpe militar. La alianza de los partidos de izquierda se generó a fines de 1969, sobre la base de un programa básico de gobierno, para llevar al triunfo a la candidatura presidencial de Salva-

dor Allende, en tanto que la coalición reaccionaria —constituida por el Partido Nacional, la Democracia Cristiana y los grupos escindidos del Partido Radical— se desarrolló en el curso del gobierno de la Unidad Popular.

b] *Los partidos burgueses.* El Partido Nacional surgió como resultado de la fusión del Partido Conservador y del Partido Liberal, producida después de las elecciones generales de parlamentarios de 1965, en las cuales estos partidos tradicionales de la oligarquía agraria y de la burguesía obtuvieron una representación insignificante, debido a que la Democracia Cristiana se impuso arrolladoramente bajo el peso de la influencia de la elección de Eduardo Frei como presidente de la República producida seis meses antes. Así, el apoyo de conservadores y liberales a esta candidatura presidencial en 1964 determinó el desplazamiento de la mayoría del electorado de derecha hacia el partido victorioso en esta contienda electoral. Por sus antecedentes históricos se puede decir, entonces, que el Partido Nacional es una organización política centenaria, toda vez que se deriva de los más antiguos partidos chilenos.

El Partido Conservador, proveniente de los primitivos "pelucones" y de la organización política que diera al país el ministro Diego Portales después de la revolución de 1829 y la ulterior derrota de Ramón Freire —jefe de los "pipiolos"— en la batalla de Lircay, gobernó desde 1831 a 1861, con exclusión absoluta de los "pipiolos" o liberales, de los partidarios de O'Higgins y de los federalistas. En el curso de veinte años de represión, este partido gobernante aplastó a sus adversarios, no admitiendo ninguna manifestación de resistencia u oposición. Así, Portales preservó el antiguo orden social, basado en los hábitos de respeto y obediencia a la autoridad provenientes de la época colonial y en la Constitución de 1833, que rigió durante casi un siglo, con algunas reformas introducidas en diversas ocasiones. Éste es el período de la república autocrática.

El desarrollo material del país hizo florecer un movimiento intelectual a partir de 1842, fecha de la fundación de la Universidad de Chile, en el cual tuvieron notoria influencia los exiliados extranjeros, especialmente los argentinos, la publicación de diversos periódicos y el surgimiento de escritores chilenos que, a través de sus obras, suscitaron el interés público hacia las reformas sociales y políticas. Como fruto de este despertar ideológico, nació el Partido Liberal, incorporándose a esta nueva organización política algunos de los antiguos "pipiolos". Bajo la inspiración de estas ideas se sucedieron los gobiernos liberales, de 1861 a 1891, que se caracterizaron por la defensa de la política de "libre cambio", por los profundos conflictos religiosos con los conservadores y la promoción de las llamadas "reformas teológicas", como la creación de cementerios laicos, la legalización del matrimonio civil y el establecimiento del registro civil, destinado a controlar los nacimientos, matrimonios y defunciones. Esta etapa se conoce como la república liberal.

En el curso de estas tres décadas se produjo la interrelación de conservadores y liberales, desde el punto de vista social y económico, superándose las diferencias derivadas de los conflictos religiosos. A partir de la caída del presidente Balmaceda, el Partido Liberal participó en las más encontradas coaliciones gubernativas y sufrió sucesivas escisiones. Por eso, la fusión de ambos partidos en 1965 cons-

tituyó un proceso histórico natural, y se puede afirmar que hoy el Partido Nacional reúne en su seno preferentemente a los restos de la oligarquía agraria y a los sectores tradicionales de la burguesía industrial, comercial y financiera. Este partido se opuso tenazmente a las reformas introducidas por el gobierno de Frei en el régimen de tenencia de la tierra y a la política general de promoción de las organizaciones campesinas y de los sectores llamados marginales de los grandes centros urbanos del país. El Partido Nacional representa la tendencia más reaccionaria del espectro político chileno.

La Democracia Cristiana tiene su antecedente histórico en la Falange Nacional, rama desprendida en 1938 del antiguo Partido Conservador, que se inspiró en la filosofía de Jacques Maritain y en la concepción del estado corporativo a la manera de la Falange Española creada por José Antonio Primo de Rivera, aunque más tarde evolucionó empezando a difundir la idea un tanto difusa del "comunitarismo". Como quiera que este pequeño partido reconocía como fuente de inspiración ideológica las encíclicas papales, planteó desde su nacimiento los principios programáticos de justicia social, pero a la vez repugnaba del marxismo y del liberalismo. La Falange Nacional fue constituida por sectores pequeñoburgueses, reclutados fundamentalmente en la Universidad Católica de Chile y, más tarde, atrajo a su seno a pequeños grupos de obreros desclasados influidos por las instituciones de "acción social" patrocinadas por la Iglesia católica.

De 1938 a 1957 el partido no creció, aunque contó siempre con un importante contingente de intelectuales que difundían, con entusiasmo, sus propósitos políticos. Por eso, se decía entonces que constituían un grupo de generales sin soldados. En este último año, la Falange Nacional se fusionó con otro sector desprendido del Partido Conservador que, desde 1946, venía sosteniendo también su adhesión a los principios fundamentales del cristianismo social. Posteriormente, el nuevo partido surgido de dicha fusión —la Democracia Cristiana o Partido Demócrata Cristiano— recibió el aporte de algunos grupos del movimiento político generado en torno al general Ibáñez en 1952, los cuales aparecían sin ningún destino político al término de su segunda administración. La Democracia Cristiana comenzó a nutrirse ahora de sectores de la burguesía industrial y comercial y de sectores terratenientes, que hasta entonces militaban en el Partido Conservador Social-Cristiano y en el Partido Agrario Laborista, pasando a tener sus más destacados personeros un peso decisivo en la dirección del nuevo partido.

Como partido integrante de un movimiento de raigambre internacional entró a definir, a partir de 1957, su concepción estratégica central en los mismos términos de la Democracia Cristiana europea, esto es, la conquista del gobierno para realizar una política de reformas moderadas en la empresa capitalista y en el régimen de tenencia de la tierra. Para este objeto buscó un "entendimiento" con Estados Unidos, de acuerdo al fatalismo geográfico que hace pensar a los grupos dirigentes de la burguesía latinoamericana que no es posible impulsar ningún movimiento de reforma sin el asentimiento del amo imperial. Como corolario de esta concepción, la Democracia Cristiana excluyó al Partido Comunista de sus eventuales colaboradores. Esta política diseñada a partir de 1957 constituyó un anticipo de la Alianza para el Progreso formulada por el presidente Kennedy en 1961.

La victoria de Eduardo Frei como candidato presidencial único de la derecha y el centro políticos en 1964 dio un impulso inusitado a la Democracia Cristiana, convirtiéndola en el mayor de los partidos del país, aglutinando en su seno tanto a sectores burgueses —en sus diversas gradaciones— como a sectores trabajadores, provenientes especialmente de los grupos marginales de las grandes ciudades y de la "aristocracia obrera", como asimismo de los núcleos campesinos que empezaban a incorporarse al proceso de desarrollo de la economía y de la cultura a través de la política impulsada por Frei, dirigida a extender la educación, la sindicalización campesina y la reforma agraria. Pero, por encima de su carácter policlasista, la Democracia Cristiana fue, desde su nacimiento, la principal agencia política del imperialismo en Chile. Su persistente campaña de penetración en los medios obreros fue financiada por los círculos oficiales de los países europeos gobernados por sus congéneres y por los consorcios monopolistas y la CIA de Estados Unidos. La dirección de este partido se mantuvo permanentemente en manos de instrumentos de estos intereses, excepto durante breves intervalos.

c] *Los partidos populares.* La Unidad Popular era, desde el punto de vista de su composición social, un frente de la clase obrera, de sus aliados naturales —el campesinado y demás capas explotadas— y de la pequeña burguesía y, desde el punto de vista político, constituía una alianza de seis partidos representativos de aquellas clases y sectores sociales. Por su connotación de clase y sus objetivos inmediatos e históricos, la hegemonía en esta alianza correspondía a la clase obrera y sus partidos —Socialista y Comunista—, que tenían el mayor peso político, electoral y sindical, y por el contenido de su programa, era un movimiento que perseguía la realización de las grandes tareas democráticas y antimperialistas a la vez que la iniciación de la construcción del socialismo, en un solo proceso ininterrumpido, bajo la conducción de la clase obrera.

Los partidos de la izquierda chilena nacieron del movimiento obrero y han permanecido vinculados estrechamente a las masas. Los obreros mineros y el proletariado industrial, con una larga tradición de lucha, han dado su apoyo a estos partidos. Más recientemente se han incorporado a la acción política, formando parte de estos mismos partidos, el campesinado, que hizo sus primeras armas a través de sus luchas sindicales a partir de la década de 1960, y sectores radicalizados de las capas medias, incorporados durante el proceso de la unidad de la izquierda. Todos ellos lucharon primero por sus reivindicaciones económicas y sociales, para culminar combatiendo contra el derecho absoluto de propiedad sobre los medios de producción que detenta la burguesía y por sus intereses históricos orientados a la conquista del poder para sustituir la sociedad burguesa por la sociedad socialista.

El Partido Radical es centenario, toda vez que fue fundado en 1863, bajo la influencia del racionalismo europeo cultivado en las logias masónicas. Desde sus comienzos, luchó por la libertad religiosa, por la enseñanza laica, obligatoria y gratuita, por la separación de la Iglesia del estado y por el mejoramiento de la condición legal de la mujer. Recién en la convención celebrada en 1906, con el predominio de la corriente inspirada por el pensador Valentín Letelier, incorporó a su programa las exigencias de reformas sociales en favor de la clase trabajadora.

Su desarrollo ulterior está vinculado al nacimiento de una numerosa capa media urbana, derivada primero del crecimiento de los servicios públicos y posteriormente del desarrollo de la actividad industrial. Este partido representaba también a un sector de agricultores medios del sur del país, surgidos de la inmigración y colonización alemana —algunos de los cuales introdujeron las ideas social-demócratas— a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

Hasta su convención celebrada en 1969, el Partido Radical representaba a los sectores medios relacionados con la actividad del estado, a empresarios surgidos del proceso de industrialización y a agricultores prósperos de la zona sur del país. Antes de incorporarse a la Unidad Popular se desprendió de su ala más reaccionaria, expulsándola en la convención antes mencionada. En el movimiento popular encarnaba conjuntamente con el Partido Social Demócrata —con el cual se fusionó en 1972— y la Acción Popular Independiente el pensamiento de la socialdemocracia chilena. Su tendencia representativa de la mediana burguesía se separó, retirándose del gobierno y de la Unidad Popular, constituyendo el Partido de Izquierda Radical. Así el Partido Radical quedó convertido en una organización de la pequeña burguesía.

El Partido Comunista tiene más de medio siglo de existencia. Bajo la inspiración de Luis Emilio Recabarren, el Partido Obrero Socialista, fundado por él en 1912, se convirtió en Partido Comunista, sección chilena de la Tercera Internacional en enero de 1922. En su desarrollo se distinguen cuatro etapas: i] de 1922 a 1933 adoptó posiciones marxista-leninistas intransigentes y opuestas a la colaboración con los partidos burgueses, ii] de 1933 a 1948 desarrolló la consigna de "frentes populares en todo el mundo", primero y de "unidad nacional" después, para detener al fascismo, iii] de 1948 a 1956 actuó en la ilegalidad, pasando por una de las más graves crisis puesto que la mayoría del pueblo apoyó el populismo ibañista, y iv] de 1956 en adelante inauguró una política de unidad con el Partido Socialista cristalizada en la fundación del Frente de Acción Popular.

Durante más de una década mantuvo una abierta pugna con el Partido Socialista, derivada fundamentalmente de la posición adoptada a raíz del pacto nazi-soviético celebrado en 1939 y de su viraje al extenderse la guerra a la Unión Soviética en el período 1941-1945. La guerra fría y la política de bloques, consecuencias del término de la segunda guerra mundial, desataron nuevas controversias entre ambos partidos, agravadas a raíz del triunfo de Gabriel González Videla en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1946, con el apoyo fundamental del Partido Comunista, gobernante que persiguió al movimiento obrero, después de expulsar a los comunistas del gabinete de "unidad nacional", que estos mismos habían patrocinado.

Con la constitución del Frente de Acción Popular el 29 de febrero de 1956 sobre una base clasista y revolucionaria, socialistas y comunistas inician un entendimiento, facilitado por las influencias derivadas de la explícita condenación hecha en el xx Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de las deformaciones stalinistas. El Partido Comunista representa fundamentalmente a los obreros industriales organizados, particularmente de los centros mineros, siendo menor su influencia entre los campesinos. Así este partido aparece como el intér-

prete político de los trabajadores del sector más moderno de la economía como lo era la Democracia Cristiana de los empresarios de ese mismo sector.

El Partido Socialista celebró sus cuarenta años de vida en abril de 1973. El socialismo se extendió en Chile en el lapso trascurrido entre 1931 y 1933 bajo el influjo de la revolución socialista del 4 de junio de este último año. Posteriormente, la persecución desatada por el gobierno reaccionario de Arturo Alessandri (1932-1938) hizo comprender a los pequeños núcleos socialistas existentes que su supervivencia dependía de la unidad que diera nacimiento a un partido capaz de canalizar las aspiraciones de las masas. De acuerdo a este propósito, el 19 de abril de 1933 se fundó el Partido Socialista, se aprobó su declaración de principios y se eligió su dirección nacional. Así, este nuevo partido surgió por una necesidad histórica, ya que el Partido Comunista, por su sectarismo expresado en la porfiada tendencia a aplicar esquemas ideológicos que no interpretaban la realidad nacional, no había logrado convertirse en una vanguardia revolucionaria ni mucho menos vincular la lucha de los trabajadores chilenos con la de los demás pueblos de América Latina.

Por eso, el Partido Socialista nació como una réplica a dicha política equivocada, ajena al proceso histórico latinoamericano. Desde su fundación, este nuevo partido reconoció al marxismo como método de interpretación de la realidad social, se propuso la conquista del poder para construir el socialismo, combatió al fascismo, planteó igualmente la lucha contra el imperialismo y enarboló la bandera de la integración de América Latina en un solo estado nacional. El Partido Socialista representa a los obreros de los sectores urbanos tradicionales, a los campesinos, a los sectores medios vinculados a las actividades del estado, a los trabajadores de los centros de la pequeña y mediana minerías y, en menor medida, a los obreros del sector más dinámico de la industria y de la gran minería.

El Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) es un partido nuevo, cuyo origen arranca de una escisión producida en la Democracia Cristiana en 1969 como culminación de un proceso de crítica interna a la descomposición del gobierno de Frei. En el curso de este sexenio se fueron conformando, en efecto, tres corrientes políticas en el seno del Partido Demócrata-Cristiano: i] la oficialista o freísta, con una profunda influencia de las ideas tradicionales del catolicismo, se había fortalecido a través del control de los órganos del poder, toda vez que el usufructo de la burocracia estatal le concedía la mayoría en el seno de la organización; ii] la rebelde, nacida de la juventud del partido, se pronunciaba por un socialismo comunitario no bien definido, que destacaba especialmente la autogestión o participación de los trabajadores en las empresas; y iii] la tercerista que, colocada entre ambos extremos, buscaba una suerte de retorno a los primitivos principios de la Falange Nacional.

La coalición de las dos últimas corrientes, con un programa de transición hacia el socialismo rotulado "vía no capitalista de desarrollo", fue enfrentada por el oficialismo freísta, con todo el peso del poder, derrotándola en un torneo interno por una estrecha votación. Entonces sólo la corriente rebelde abandonó el partido y constituyó el Movimiento de Acción Popular Unitario. La corriente tercerista continuó formando parte de la Democracia Cristiana, con la vana esperanza de lograr una renovación con la candidatura presidencial de Radomiro Tomic, hasta

el año 1971, fecha en que se separó y dio origen a la Izquierda Cristiana. Después de algún tiempo el MAPU se declaró marxista-leninista. Esta definición determinó la separación del sector que reconocía como fuente de inspiración la filosofía social del cristianismo, el que pasó a integrar la Izquierda Cristiana.

El movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) es un partido nuevo que apoyó en forma crítica el proceso político iniciado en 1970. Nacido en la universidad de Concepción en 1967 y producto de la fusión de varios grupos, extendió su organización al resto del país en los últimos años. Su definición es marxista-leninista. En sus orígenes se nutrió de las juventudes comunistas y socialistas, particularmente de esta última, como quiera que de ella salieron sus principales líderes, como Miguel Enríquez y Bautista van Schowen. El MIR concibe la revolución como antimperialista y anticapitalista a la vez y, por consiguiente, socialista, propugnando la destrucción de la superestructura legal burguesa y el establecimiento de un gobierno revolucionario de obreros y campesinos, que siente de inmediato las bases para la construcción del socialismo. Considera asimismo que las clases motrices de la revolución chilena son los obreros y los campesinos, pudiendo concurrir a ella los sectores provenientes de la pequeña burguesía agraria y urbana que se integren a la lucha por los intereses históricos de aquellas clases.

Bajo la influencia de la Revolución cubana y de los movimientos guerrilleros desarrollados durante los años sesenta en América Latina, el MIR planteó que la lucha de clases revestirá la forma de una guerra revolucionaria —lucha armada— sin perjuicio de utilizar todas las demás formas de lucha, legales e ilegales, aunque éstas deben subordinarse a la primera, que tiene la primacía en las distintas fases del proceso. Aunque es evidente que este nuevo movimiento no ha desarrollado propiamente la guerra revolucionaria, ha sido notoria la incorporación bajo su accionar del ingrediente de la violencia contra la institucionalidad burguesa. Este movimiento, considerado como la ultraizquierda en Chile, constituyó la conciencia crítica del proceso político, durante el período 1970-1973. No obstante, su dirección no se conformó con este papel, sino que pretendió alzarse como alternativa revolucionaria ante la Unidad Popular.

4. *Las fuerzas armadas*

a] *El mito de su prescindencia política.* La prescindencia política de las fuerzas armadas en Chile es una de las grandes mistificaciones interesadas que se ha divulgado durante mucho tiempo, a través de la literatura, la prensa y la oratoria parlamentaria, cayendo en esta trampa dolorosa, por ignorancia o por ingenuidad los propios partidos y líderes de la izquierda. A la derecha no se le puede imputar este error, porque ella ha sido la creadora de esta falsa imagen. Las fuerzas armadas han estado presentes permanentemente, sea en forma directa sea en forma indirecta, durante toda la vida independiente de Chile, de 1810 hasta ahora, justificando cada uno de sus pronunciamientos por imperativos "patrióticos" superiores, confundiendo estos imperativos con los intereses materiales de las clases poseedoras y de los consorcios extranjeros coaligados con éstas.

Las fuerzas armadas han intervenido en forma directa en las actividades polí-

ticas, interrumpiendo el desarrollo normal de los gobiernos civiles, en ciclos de una generación aproximadamente. En 1831, el general Joaquín Prieto, después de vencer a los "pipiolos" o liberales en la batalla de Lircay, inauguró los gobiernos pelucones o conservadores; en 1851, el general José María Cruz se levantó contra el gobierno civil de Manuel Montt, pero fue derrotado militarmente; en 1891, el almirante Jorge Montt, al mando de las fuerzas insurrectas, derrotó al ejército constitucionalista en las batallas de Concón y Placilla derrocando al presidente José Manuel Balmaceda, quien se suicidó en la legación argentina, cerrando el ciclo de los gobiernos liberales en el siglo XIX, y en 1924, una junta militar destituyó al presidente Arturo Alessandri y abrió un período de predominio militar en la vida política que se prolongó hasta 1933.

Entre uno y otro de dichos ciclos de intervención directa de las fuerzas armadas, éstas han gravitado permanentemente mediante conatos o conspiraciones abortadas como asimismo a través de la colaboración prestada a los gobiernos civiles en la represión del movimiento obrero. En este sentido, es posible también señalar ciclos de represión sangrienta. Para referirnos sólo a la presente centuria es necesario recordar las masacres de la Escuela Santa María en Iquique en 1907, San Gregorio en 1921, La Coruña en 1925, Vallenar en 1931, el Servicio de Seguro Social en 1938, la población José María Caro en 1962, el mineral de El Salvador en 1968 y pampa Irigoin en 1969. En todas estas matanzas, las fuerzas de represión han intervenido como el brazo armado de las clases propietarias.

Como se ha señalado anteriormente, Chile tuvo una evolución más ordenada que otros países de América Latina, que sólo se había interrumpido en el curso del presente siglo en el período 1924-1932, durante el cual los sectores castrenses participaron —de una u otra manera— en las actividades políticas. Su actuación en el gobierno acentuó la tendencia civilista, particularmente a partir de la caída de la dictadura de Ibáñez (1927-1931) —tendencia que tenía sus raíces en las luchas del siglo XIX— y trajo consigo una disposición de rechazo hacia las fuerzas armadas que, en definitiva, implicaron un menoscabo de sus recursos materiales derivado de reducciones presupuestarias y otras medidas que adoptaron los gobiernos que se sucedieron desde 1933.

Durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938) surgieron las milicias republicanas, órganos de defensa de la oligarquía civilista destinados a evitar el retorno de regímenes que, en distintas formas, representaron riesgos y dificultades para esta clase dirigente, como fueron el gobierno de Ibáñez y la República socialista dirigida por Grove, que duró sólo doce días, pero que inflamó de entusiasmo a las masas desposeídas y vinculó, por primera vez, a sectores militares con la doctrina socialista. Reconciliado Alessandri con esta oligarquía, buscó afanosamente el apoyo de las fuerzas armadas y, en la medida que se consolidó éste, dejaron de ser necesarias las milicias republicanas.

b] *La doctrina Schneider.* El rechazo a la intromisión militar en la política contingente y las consiguientes medidas gubernativas en perjuicio de las fuerzas armadas, como institución, determinaron un cambio en la mentalidad castrense en orden a separarse de la actividad política, para recuperar de este modo la confianza pública y asegurar el eficaz cumplimiento de sus funciones profesionales en la

seguridad nacional. Tal ha sido, al menos, la explicación que han dado los altos mandos sobre su prescindencia política en los últimos cuarenta años. Éste es también el fundamento de la llamada doctrina Schneider, formulada durante la campaña presidencial de 1970 y difundida, con especial énfasis, después de la muerte de éste, por su sucesor en el cargo de comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats.

Esta doctrina no advino en el vacío social, sino que surgió y se desenvolvió dentro de la sociedad burguesa, en el curso de cuatro décadas, en el cual se sucedieron gobiernos que estuvieron unidos —por encima de sus particulares motivaciones— por el compromiso esencial de preservar los valores de esta sociedad e impulsar un desarrollo capitalista dependiente del imperialismo norteamericano, que había consolidado su poderío en el país. Esta realidad fue reconocida por el propio general Carlos Prats al afirmar en carta publicada en el diario *El Mercurio,* de Santiago de Chile, del 5 de noviembre de 1972: "Esta actitud no tuvo mayor repercusión pública durante el largo período de cuatro décadas en que la vida nacional se desenvolvió dentro del esquema internacional de la segunda guerra mundial, de la guerra fría y finalmente de la convivencia pacífica bipolar."

Las fuerzas armadas tuvieron, en otros términos, un comportamiento idéntico al que han mantenido sus congéneres en todos los países civilizad[illegible] ca[illegible]miento al poder civil, para garantizar el orden establecido, incluyendo los con[illegible] internacionales derivados de la dependencia nacional del imperialismo, como [illegible] el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Pacto de Asistencia Militar y, en general, toda la maraña del sistema interamericano. La situación cambió radicalmente desde el momento en que la Unidad Popular obtuvo la victoria en las urnas y surgió la perspectiva de un gobierno que se propuso abrir paso a la construcción del socialismo.

La doctrina Schneider es la afirmación del concepto de subordinación de la fuerzas armadas al poder civil, como sucede en todos los países que tienen ur estado de derecho. Ésta es, por otra parte, una obligación que emana del precepto constitucional —artículo 22 de la Constitución política del estado— que establece que las instituciones armadas "son profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes". Con anterioridad a la reforma constitucional de enero de 1971 —en virtud del estatuto de garantías concertado entre Salvador Allende y la Democracia Cristiana— esta disposición sólo expresaba que la fuerza pública no era deliberante, pero siempre se había entendido en este concepto las otras calidades señaladas.

No obstante, esta idea debe considerarse en armonía con el texto constitucional y las leyes complementarias en esta materia, para penetrar en su verdadero sentido democrático. El presidente de la República dispone, en efecto, de autoridad en lo concerniente a la mantención del orden público interior y la seguridad exterior del estado. Para alcanzar estos objetivos está facultado para disponer de las fuerzas armadas, organizarlas, distribuirlas y mandarlas personalmente, previo acuerdo del Senado (artículos 71 y 72 de la Constitución). Por eso, tiene el carácter de generalísimo de las fuerzas armadas.

c] *El golpe militar frustrado de 1970.* Los sectores políticos más reaccionarios del país unidos a los altos mandos de las fuerzas armadas pusieron en marcha un plan conspirativo para impedir el acceso de Salvador Allende al gobierno, después de que éste conquistara la victoria en las urnas. Con tal objeto se trató de hacer imposible su proclamación por el Congreso o simplemente desencadenar el golpe directo, pero esta conspiración tuvo su mayor obstáculo en el comportamiento institucional del comandante en jefe del ejército general René Schneider. Éste había declarado, en efecto, el 7 de mayo de 1970, en plena campaña presidencial, que el ejército era "garantía de una elección normal, de que asuma la presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50 por ciento de los votos... nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución política del estado".

La burguesía coaligada con el imperialismo realizó una intensa campaña a través de todos los medios de comunicación de masas para crear el clima propicio para el golpe militar que se preparaba en secreto. Con esta campaña se procuraba atemorizar a la población con los supuestos peligros que conllevaba la instalación de un gobierno "marxista" en Chile. Las denuncias formuladas posteriormente por el periodista norteamericano Jack Anderson y la investigación efectuada por el Senado de Estados Unidos respecto a las actividades de la ITT en dicha fase de la conspiración demostró la participación de esta y otras empresas multinacionales en su desarrollo y financiamiento.

Quedó en evidencia también en esa oportunidad el papel alevoso desempeñado en aquella conspiración por el presidente de la República de entonces Eduardo Frei comoquiera que él estuvo en conocimiento —según consta en los documentos confidenciales de la ITT— de todos los pasos de esta grotesca farsa que culminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército general René Schneider. Este crimen ejecutado fríamente por los conspiradores demostró su resolución de impedir, por todos los medios, la constitución y funcionamiento del gobierno de la Unidad Popular.

El proceso judicial confirmó asimismo la participación tanto de altos personeros de los partidos reaccionarios como de jefes de las fuerzas armadas. La muerte del general Schneider se explica por su inconmovible posición constitucionalista. En pleno curso de la conspiración reiteró la doctrina formulada durante la campaña presidencial: "Dije que iba a defender ese sistema constitucional y lo voy a hacer hasta el final. Porque aquí no se trata de que sólo íbamos a defender esto si ganaba el candidato que convenía a determinado sector." Por la misma razón será asesinado su sucesor, después de renunciar al cargo de comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, por el brazo armado de los consorcios capitalistas alzados con el poder en Chile.

III. REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN (1970 - 1973)

1. *El pueblo en el gobierno*

a] *El proceso revolucionario.* En 1970 se inició en Chile una experiencia de extraordinario valor para todo el continente y, en general, para los pueblos subdesarrollados del mundo. Es el intento de promover un proceso revolucionario socialista a partir de una victoria en las urnas que permitió a una alianza de partidos populares, con hegemonía marxista, conquistar el gobierno. Esta victoria de la Unidad Popular despejó aparentemente la controversia que se venía desarrollando en torno a las vías de acceso al poder por parte de los trabajadores. Durante la última década se había discutido, en efecto, si era posible iniciar la conquista del poder por la vía electoral o sólo era posible alcanzar este objetivo por la vía armada. México en 1910 y España en 1936 constituyeron ejemplos de cómo una victoria en las urnas puede servir de punto de partida a un proceso revolucionario, considerando que el mero acceso al gobierno de las fuerzas sociales contrarias al orden burgués crea nuevas condiciones objetivas para continuar la lucha por la conquista de todo el poder. La Revolución cubana, por su parte, se alzó como ejemplo de repudio expreso del camino de las urnas, trasplantando sus seguidores la experiencia peculiar de esta isla a las demás naciones de América Latina.

El proceso revolucionario iniciado en 1970 afectó a poderosos intereses extranjeros y nacionales tanto de carácter económico como de carácter político. Es evidente en este sentido que el surgimiento de un gobierno popular que se proponía la construcción de un sistema socialista en Chile venía a alterar el equilibrio de las áreas de influencia existentes en el mundo y a la vez se convertía en un centro de contagio ideológico en el cono sur de América Latina, afectando de este modo la "tranquilidad" del continente. Por su significación estratégica, esta nueva situación política adquirió mayor importancia para Estados Unidos que la simple defensa de intereses económicos. Conviene tener presente, por otra parte, que para lograr la liberación nacional es necesario destruir toda forma de dependencia imperialista, pero para avanzar en la construcción socialista es indispensable, además, desplazar a la clase dominante en el interior del país, constituida por los latifundistas y por la burguesía industrial-financiera.

En Chile, como en los demás países de América Latina, la clase dominante se presentó como una coalición de la oligarquía —constituida por los grandes propietarios de tierras— y la burguesía comercial, en los orígenes de su vida independiente de España. Siendo su objetivo fundamental la exportación, ambas fuerzas favorecieron históricamente la política de libre cambio, oponiéndose a las medidas de protección que reclamaba la burguesía manufacturera naciente para encarar la competencia de los productos industriales más baratos que provenían del extranjero y asegurar su propio desarrollo. Este conflicto entre el imperialismo aliado a la oligarquía, por una parte, y la burguesía nacional, por la otra, consistía en una lucha por la redistribución de la plusvalía del sobreproducto social. No obstante, esta burguesía nacional sólo impulsó movimientos de reformas, cuidándose

mucho del eventual estallido de un proceso revolucionario encabezado por la clase obrera, que cada día adquiría más fuerza.

Pero aquellas estructuras políticas tradicionales sufren el embate de las alteraciones que se producen en la economía imperialista en los últimos quince años. Ante su incapacidad para afrontar la lucha por la competencia con los monopolios extranjeros, la burguesía nacional pierde su precaria autonomía y busca la asociación con ellos mediante la constitución de empresas mixtas, tendencia que es estimulada por la legislación interna. Así se desarrolla una nueva coalición entre el capital imperialista y el capital nacional industrial, que entrará en conflicto con el sector oligárquico formado por los terratenientes y exportadores como también con el capital minero tradicional. En este sentido, cuando se promueven nacionalizaciones en algunos países en el sector de producción de materias primas, se ejecutan sobre la base de generosas indemnizaciones que permiten al capital imperialista desplazar esas mismas inversiones hacia el sector industrial manufacturero. Es lo que sucedió en Chile durante el gobierno de Frei.

El gobierno de la Unidad Popular atacó decididamente estos intereses externos e internos, desarrollando los objetivos centrales de su programa. Ningún movimiento político llegó tan lejos en el conjunto de medidas revolucionarias adoptadas, excepción hecha de la Revolución cubana, en la historia de América Latina. Cumplió todas las tareas que supone la revolución democrático-burguesa. En un plazo breve, nacionalizó sus riquezas básicas, entre ellas, el cobre sin indemnización; expropió en algunos casos y requisó e intervino en otros las más importantes empresas industriales monopólicas y/o que condicionaban el desarrollo económico del país conformando un área de propiedad social predominante; expropió a la oligarquía terrateniente, constituyendo centros de reforma agraria —explotación colectiva de la tierra, sin asignación individual de su propiedad— y centros de producción o grandes haciendas estatales destinadas a cultivos que requieren una explotación extensiva; incorporó plenamente a las masas al trabajo y al consumo, mediante la absorción de la desocupación y la redistribución de la renta nacional, ampliando el mercado interno; extendió las libertades y derechos democráticos hasta límites nunca conocidos en el país, e incorporó a Chile en el grupo de naciones "no alineadas" para luchar solidariamente contra el retraso y la dependencia de hegemonías foráneas.

Protagonista de este proceso revolucionario fue la clase trabajadora chilena. Por su participación, a través de sus partidos de clase, de sus organizaciones sindicales y de los nuevos organismos generados por las masas, durante esta viva experiencia social, fue posible tal hazaña política. No pudo continuar con las tareas socialistas —contempladas en el programa básico de gobierno— porque la correlación de fuerzas sociales y militares no le permitieron desarrollar plenamente sus órganos de poder alternativos al poder burgués, que sólo alcanzaron a germinar, sin adquirir la fuerza necesaria para plantearse la conquista de todo el poder. A continuación se describen las más grandes realizaciones sociales y conquistas nacionales logradas durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular.

b] *Nacionalización de las riquezas básicas.* La nacionalización del cobre y demás riquezas básicas —hierro y salitre— constituyó la principal bandera de la Unidad

Popular, porque ella hería profundamente al imperialismo y a la vez recuperaba para Chile su más importante patrimonio minero. La minería del cobre generaba más del 80% de los ingresos de divisas del país con una productividad enorme toda vez que aproximadamente 20 mil trabajadores producían más de 1000 millones de dólares. La nacionalización constituía una medida revolucionaria siempre que se considerara como una expropiación sin compensación alguna a quienes habían obtenido utilidades abusivas, explotando la alta productividad de este sector de la economía chilena y aprovechando las alternativas naturales o manipuladas del precio internacional de este producto.

El gobierno de la Unidad Popular se propuso, en efecto, la nacionalización del cobre sin indemnización, debido a las utilidades excesivas que habían obtenido las compañías norteamericanas. Para alcanzar este objetivo histórico eligió el mecanismo de la reforma constitucional por ser éste el único procedimiento que permitía deshacer la maraña jurídico-económica derivada de la teoría colonialista de los contratos-leyes, que obligaban al estado chileno respecto a las compañías norteamericanas, y liquidar la "chilenización" o nacionalización pactada. Con esta reforma constitucional era posible también fijar el valor de libro como precio de las inversiones de las empresas, establecer plazo para pagar las eventuales indemnizaciones y, por último, deducir de éstas las utilidades excesivas.

La ley 17450, del 16 de julio de 1971, aprobó la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Salvador Allende para proceder a la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y de la Compañía Minera Andina. La norma decimoséptima transitoria de la Constitución política del estado consultada en dicha reforma otorgó al presidente de la República la facultad de disponer que el contralor general, al calcular la indemnización que debería pagarse a las empresas nacionalizadas, "deduzca el todo o parte de las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas o sus antecesoras hubieran devengado anualmente a partir de la vigencia de la ley número 11828", esto es, a contar del 5 de mayo de 1955. De acuerdo a estas facultades constitucionales, el presidente Allende dictó el decreto supremo número 92, del 28 de julio de 1971, por el que se establecieron las deducciones que, por concepto de rentabilidad excesiva, deberían efectuarse de las indemnizaciones. Para determinar la rentabilidad excesiva en estos casos se consideraron los resultados económicos de tales empresas reflejados en sus balances respectivos.

Las empresas Anaconda y Kennecott, que operaron en Chile, constituyen sociedades que actúan internacionalmente con variadas inversiones, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Si se comparan las rentabilidades de las empresas que operaron en Chile —calculadas como la razón entre las utilidades netas anuales y el valor de libro— con la rentabilidad de la matriz en el conjunto de sus operaciones internacionales, las obtenidas en Chile son mucho mayores. Este fenómeno se produce, sea que la comparación se haga con los resultados alcanzados por la respectiva sociedad en el conjunto de sus operaciones, incluidas sus filiales chilenas, sea comparando, como es más pertinente, con los logrados en el conjunto de las operaciones de las compañías antes mencionadas, excluidas sus filiales chilenas. En la decisión del gobierno se consideraron las rentabilidades obtenidas por la Anaconda y la Kennecott respecto de sus valores libres en el

conjunto de sus operaciones internacionales; la rentabilidad de otras empresas norteamericanas en Estados Unidos y Canadá; los casos límite de rentabilidad de libre disposición que el estado chileno ha fijado para inversionistas extranjeros, y otros casos de rentabilidad de inversiones en los países desarrollados y subdesarrollados.

Con los antecedentes anteriores, el presidente de la República determinó que la rentabilidad anual para las empresas nacionalizadas y sus antecesoras debía fijarse en el 10% de los respectivos valores libro y, por consiguiente, dispuso que el contralor general, al calcular la indemnización que correspondería pagar a las empresas de la gran minería del cobre afectadas por la nacionalización, debía deducir las siguientes cantidades por concepto de rentabilidades excesivas devengadas a partir del 5 de mayo de 1955 y hasta el 31 de diciembre de 1970:

i] Para la Compañía de Cobre Chuquicamata S. A., la cantidad de US$ 300 000 000 (trescientos millones de dólares).

ii] Para la Compañía de Cobre Salvador S. A., la cantidad de US$ 64 000 000 (sesenta y cuatro millones de dólares).

iii] Para la Sociedad Minera El Teniente S. A., la cantidad de US$ 410 000 000 (cuatrocientos diez millones de dólares).

Así, las grandes empresas norteamericanas explotadoras del cobre chileno fueron expropiadas sin indemnización por el gobierno de la Unidad Popular, toda vez que las deducciones por concepto de rentabilidad excesiva sobrepasaron los montos de las indemnizaciones que les correspondía según los criterios fijados por la reforma constitucional. En esta forma se puso término en Chile a tres decenios de explotación nacional por el imperialismo norteamericano.

Conjuntamente con la expropiación de las empresas de la gran minería del cobre, el gobierno de Allende traspasó a la propiedad estatal el salitre y el hierro, hasta entonces en manos de empresas norteamericanas, mediante negociación directa. A ellas se agregó el carbón, que estaba en poder de los capitales nacionales, con lo cual se completó el proceso de nacionalización o socialización de las riquezas naturales, objetivo principal del programa básico de gobierno de la Unidad Popular.

c] *Área social predominante en la economía.* El sector financiero-industrial revestía mayor importancia estratégica que el sector latifundiario, ya que sobre aquél descansó la política de desarrollo económico del gobierno de Frei. Por ser el nervio motor del capitalismo, fue este sector el que enfrentó con mayor vigor el programa del gobierno de Allende orientado a incorporar al área de propiedad social las empresas industriales monopólicas y/o aquellas que condicionan el desarrollo económico del país y el sistema financiero, entonces en manos del capital extranjero y nacional. Ésta constituía una acción indispensable para dirigir la economía conforme a los planes gubernativos y, dado el desplazamiento del capital imperialista del sector productor de materias primas al sector industrial manufacturero, esta medida tenía un sentido realmente revolucionario.

Definidas las tres áreas de la economía —área social, área privada y área

mixta— por el programa, la política económica del gobierno de Allende persiguió, desde el comienzo, la incorporación a la primera de ellas de las actividades productoras antes señaladas con el propósito de destruir las bases de sustentación del imperialismo y de la burguesía nacional, suprimiendo de inmediato —no en otra fase del proceso— la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales, como las riquezas mineras, la tierra, los establecimientos monopólicos en la industria, en la distribución y el sistema bancario y financiero. La Unidad Popular se proponía así remplazar a partir del área de propiedad social el predominio de la estructura capitalista por el predominio de relaciones socialistas de producción. Este proceso implicaba naturalmente establecer en el área de propiedad social principios de organización y de dirección socialistas e imprimirle un carácter dominante en el conjunto de la economía, sometiendo a las otras áreas a las condiciones de funcionamiento derivadas del carácter general del proceso.

La burguesía colaboró —por cierto sin querer— en la conquista de este objetivo. En efecto, en los primeros meses del nuevo gobierno, numerosos empresarios procuraron crear una situación de caos económico, recurriendo para ello a diversas maniobras dolosas, tales como reducir al mínimo sus niveles de producción, despedir trabajadores, retirar del país sus capitales e, incluso, huir ellos mismos, dejando abandonadas sus empresas. Eran los tiempos del pánico financiero desencadenado por el propio ministro de Hacienda del presidente Frei y del asesinato del comandante en jefe del ejército general René Schneider, provocados como parte de la conspiración dirigida a impedir el ascenso de Salvador Allende al gobierno. Así, apenas constituido, el nuevo gobierno tuvo que enfrentar este siniestro desafío a su propia supervivencia mediante la intervención en la gestión de las empresas, que habría de generar los mecanismos de participación que hicieron posible que muchos grandes monopolios fueran manejados por sus propios trabajadores. Algunos empresarios, viendo descubierto su juego conspirativo y conscientes de la nueva situación política que surgía en Chile, procedieron a vender sus industrias al estado.

La legislación entonces vigente permitió al gobierno el uso de los mecanismos de intervención y requisición de empresas, como paso inicial en la constitución y desarrollo del área de propiedad social, los cuales se caracterizaban por la presencia de agentes públicos cuya misión consistía en solucionar los problemas creados por los dueños o gerentes en sus respectivas empresas y que causaban perjuicio a los trabajadores de éstas y a la comunidad nacional. Por su naturaleza, estos mecanismos eran eminentemente transitorios, como quiera que duraban hasta el momento en que cesaban las causas que los ponían en acción.

Como a través de las intervenciones y requisiciones no se producía una trasferencia de la propiedad, sino que se entregaba al gobierno sólo funciones de administración, que permitían poner en marcha a las empresas, éste envió al Congreso nacional en 1971 un proyecto de ley destinado a facilitar la constitución del área social de la economía. La mayoría opositora congresista no se interesó por esta iniciativa legislativa. Por el contrario, la Democracia Cristiana presentó e hizo aprobar, con el apoyo de la derecha, un proyecto de reforma constitucional, por el cual se derogaban todas las facultades legales de que disponía el gobierno para adquirir, requisar e intervenir empresas, las que precisamente estaban permitiendo

la formación del área de propiedad social y anulaban todas las operaciones efectuadas en este sentido hasta entonces. Esta reforma constitucional, cuyo veto del presidente de la República fue rechazado por simple mayoría en vez del quórum legal de los dos tercios de los parlamentarios, habría de convertirse en 1973, al no ser promulgada por su manifiesto carácter inconstitucional, en una de las armas políticas más decisivas de la conspiración que derribó al gobierno.

d] *La participación de los trabajadores.* La teoría y la práctica habían demostrado a los trabajadores chilenos —de larga tradición de lucha— que el poder burgués descansaba en la propiedad privada sobre los medios de producción. Por consiguiente, la ampliación y el fortalecimiento del área de propiedad social venía a anular la fuente de poder que alimentaba el mercado negro y la escasez, el bloqueo económico y la supeditación de la mediana y pequeña industria. Así, este problema no podía ser considerado con un criterio estrictamente técnico o economicista, sino que pasaba a ser uno de los objetivos políticos inmediatos más importantes, que surgía del contexto de la lucha de clases y de la perspectiva de la contienda por el poder. La amplitud de esa área social de la economía pasaba a depender, en consecuencia, del grado de conciencia de clase y de la voluntad revolucionaria de los trabajadores.

En este campo de acción se registró, en efecto, el mayor desarrollo de la conciencia social y las más grandes movilizaciones de las masas trabajadoras. Cada decisión del gobierno en esta materia fue el resultado de la presión de los trabajadores comprometidos con el proceso. Por eso, la magra meta que se propuso el gobierno, con su iniciativa legislativa de incorporar 91 empresas al área de propiedad social, fue sobrepasada a partir del paro patronal de octubre de 1972, llegando a más de 300. El criterio de sólo estatizar las grandes empresas monopólicas no pudo ser respetado, por otra parte, pues cada una de éstas dependía para su marcha de otras empresas medianas o pequeñas, de propiedad privada, vinculadas al monopolio principal, que proveían a éste de materias primas, productos intermedios o repuestos, que eran indispensables para el funcionamiento de la industria. En la misma forma se comprobó que el aparato de distribución también estaba monopolizado, por lo cual nada se lograba con estatizar la fuente productiva si no se contaba también con un sistema de distribución y comercialización propios.

Como realización programática, el área social de la economía llegó a comprender, a pesar del bloqueo legislativo, más del 30% de la industria manufacturera y más de la mitad del conjunto de la producción minero-industrial, incluyendo el traspaso a esta área, además de las empresas mixtas de la gran minería del cobre, la Compañía Chilena de Electricidad, antes filial de la American & Foreing Power Co. y de la Compañía de Teléfonos de Chile, antes filial de la International Telephone and Telegraph (ITT). Asimismo, más del 90% del crédito estaba bajo el control público, por intermedio de la banca nacionalizada y el Banco Central de Chile.

La participación de los trabajadores alcanzó formas extraordinarias en el último año de gobierno. Decenas de miles de obreros, empleados y técnicos vivieron la experiencia de dirigir las empresas en que laboraban y de decidir los asuntos más importantes. Representantes directos de los sindicatos y de las federaciones par-

ticipaban también en los órganos superiores de gestión económica, como los consejos de los comités sectoriales de desarrollo para cada rama industrial, creados por la Corporación de Fomento de la Producción e, incluso, en el propio consejo de esta última entidad. Mirada con perspectiva esta experiencia, quizá el más grande logro histórico del gobierno de la Unidad Popular haya consistido en hacer sentir a miles de trabajadores lo que es una sociedad democrática dirigida por ellos mismos.

e] *Reforma drástica en el agro.* De los distintos sectores de las clases dominantes, el latifundio era el más débil, tanto del punto de vista político como del punto de vista económico, debido a que ya había sido afectado por el proceso de reforma agraria y de sindicalización campesina durante el gobierno de Frei. No obstante, la extensión y profundización drásticas de este proceso fueron necesarias, a partir de 1970, no sólo para mejorar la explotación agrícola y la situación socio-económica de los trabajadores rurales, sino también para asestarle el golpe final a este centro de poder oligárquico y eliminar toda posibilidad de que la contrarrevolución encontrara una base de sustentación en el campo.

La necesidad imperiosa de incrementar la producción agrícola quedó en evidencia al revisar las tendencias de dicha actividad, la disponibilidad de estos productos y las importaciones realizadas en los últimos años. La producción había aumentado sólo al ritmo de crecimiento de la población, durante los últimos treinta años, con fluctuaciones anuales determinadas fundamentalmente por factores climáticos. Como la disponibilidad de alimentos había aumentado más rápidamente que la producción, el país debió cubrir el déficit con importaciones adicionales.

El programa de reforma agraria del gobierno de Unidad Popular perseguía cinco objetivos principales: i] un cambio rápido en el sistema de tenencia de la tierra, eliminando los latifundios y estimulando la creación de cooperativas y otras formas socialistas de producción agrícola; ii] un cambio en las relaciones entre la agricultura y el resto de la economía, aumentando la producción y la productividad y eliminando el desempleo rural, mientras se mejoraban los ingresos agrícolas en relación a los demás sectores; iii] el estímulo a la participación democrática del campesinado a todos los niveles de toma de decisiones, mediante consejos campesinos y otras organizaciones; iv] la planificación y reorientación de la producción agrícola para utilizar mejor las ventajas económicas y naturales de las principales regiones geográficas del país, y v] la eliminación del atraso y el aislamiento de los grupos rurales más pobres, tales como los comuneros del norte chico y los mapuches.

En el mes de septiembre de 1972 se puso término al latifundio en Chile, expropiándose todos los predios superiores a 80 hectáreas de riego básico, es decir, aproximadamente 3 432 predios en sólo dos años de gobierno, comparado con 1 408 en el período de seis años de Frei. La batalla por el poder en el campo se ganó a medias, toda vez que no se conquistó a todos los campesinos beneficiados con las expropiaciones, por falta de participación y movilización. Las expropiaciones beneficiaron, más o menos, a 100 000 familias campesinas contra 25 000 en todo el período anterior, y la superficie en manos del sector reformado alcanzó a un 35% del total de la tierra agrícola.

La tarea siguiente a la expropiación fue la organización económica de los predios para establecer un nuevo sistema de trabajo y continuar la producción. Los centros de reforma agraria persiguieron la agrupación de los predios necesarios para constituir una unidad económica viable, homogeneizar la fuerza de trabajo en una sola categoría (trabajadores mayores de 16 años), limitar el cerco y el talaje a las necesidades de autoconsumo familiar para incentivar la explotación colectiva, establecer una relación entre el aporte de fuerza de trabajo y la remuneración, incorporar nueva fuerza de trabajo en función del potencial productivo del predio y captar socialmente el excedente por los consejos comunales campesinos para realizar inversiones dentro de la comuna.

En cuanto a la propiedad de la tierra, las posibilidades quedaban abiertas para ser resueltas dentro del plazo de cinco años en que los centros de reforma agraria debían desaparecer de acuerdo a la ley. Además, se crearon centros de producción o haciendas estatales en predios que, por su industrialización y producción, podían convertirse en explotaciones modelos.

f] *La política internacional.* El gobierno de la Unidad Popular se orientó, desde el comienzo, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, hacia la defensa de los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados, de igualdad jurídica entre ellos, de respeto a su soberanía y del derecho de autodeterminación. En este sentido, dirigió todos sus esfuerzos, tanto en sus relaciones bilaterales como multinacionales, hacia la consolidación de la paz y la cooperación internacional. Por eso, extendió las relaciones diplomáticas y comerciales de Chile a otros países, como Cuba, la República Popular China, la República Democrática Alemana, la República Democrática de Corea y la República Democrática de Vietnam. En el contexto latinoamericano, auspició ante la Organización de los Estados Americanos la reducción de los armamentos.

Por su lucha contra el retraso y la dependencia de hegemonías foráneas y por su comunidad de intereses con otros pueblos de Asia y África, Chile se incorporó al grupo de naciones llamadas "no alineadas", participando activamente en sus deliberaciones y acuerdos. Conforme a su concepción universalista de las Naciones Unidas, apoyó en el seno de esta organización mundial el reconocimiento de los legítimos derechos de la República Popular China y, por su respeto a la independencia de los países, condenó constantemente la guerra contra Vietnam y su extensión a Laos y Camboya.

El gobierno de Allende abrió un proceso a las relaciones de dependencia de los países latinoamericanos respecto de Estados Unidos, exponiendo la crisis insuperable del sistema interamericano y su expresión institucional —la Organización de Estados Americanos— derivada del desequilibrio de poder existente entre el imperio del norte y sus vecinos, cada vez más debilitados por su división. El estado de sumisión de América Latina no se modifica con la igualdad ficticia entre los estados, porque ella tiene una raíz más profunda, que arranca de la política norteamericana de tratar separadamente con cada uno de estos débiles países, imponiéndoles su voluntad. Por eso, Chile conjuntamente con otros países procuró asegurar la sustitución de ese repudiado mecanismo por otros nuevos que, a través

de la integración subregional, posibilitaran su armónico desarrollo común. El Pacto Andino constituyó una plausible iniciativa en ese sentido.

El presidente Allende expuso reiteradamente los fundamentos de esta política internacional, tanto en Chile como en la Asamblea de las Naciones Unidas y en los países del continente que visitó, particularmente en México y Colombia. En esas oportunidades, refiriéndose a la situación de las naciones de América Latina y, en general, del Tercer Mundo puso de relieve la lucha que se libra por ellas para sacudirse de la dependencia. En el frente interno, procuran eliminar la estructura socioeconómica de poder, que hace posible la explotación de clases y perpetúa el retraso y la pobreza y, en el frente externo, exigen trasformaciones necesarias y urgentes para terminar con la explotación de sus recursos naturales por las empresas imperialistas, según sus propios planes foráneos.

En sus discursos denunció las maniobras del colonialismo para mantener a numerosos pueblos en una situación de dependencia. De sus palabras resurgió la cruda realidad del distanciamiento, cada vez mayor, que se produce entre los países del capitalismo industrial y los países de economía periférica. Así aparece cómo algunos de los países dominantes estancan su flujo financiero, monopolizan el trasporte marítimo, mantienen barreras arancelarias y no arancelarias a los productos básicos, manufacturas y semimanufacturas, desfinancian en capitales a los países dependientes y manipulan en forma monopólica la moneda mundial. Así se explica que de América Latina hayan salido al exterior, entre 1960 y 1967, más de 14 000 millones de dólares y los servicios de las deudas superen los nuevos préstamos. Esta situación sólo podrá superarse por la revolución de los países dependientes, tarea histórica que está encarando, por encima de transitorios reveses, el pueblo chileno.

2. *El golpe de estado*

a] *Entre dos golpes militares.* El gobierno de la Unidad Popular desarrolló su programa entre dos golpes militares: el primero, como ya se ha explicado, se frustró con el asesinato del comandante en jefe del ejército general René Schneider en octubre de 1970, y el segundo derrocó de la manera más sangrienta tres años después al frágil gobierno popular, con la intervención de las mismas fuerzas sociales, económicas, políticas y militares que se movieron en el primero de ellos. En ambos golpes militares ha quedado demostrado hasta la evidencia la inspiración, el financiamiento, la ejecución de parte importante de él y, en todo caso, el asesoramiento técnico de los órganos de acción del imperialismo norteamericano, como asimismo de la institucionalidad burguesa.

No podía ser de otro modo el desarrollo de los acontecimientos, porque el programa de la Unidad Popular afectaba profundamente los intereses económicos de las empresas imperialistas existentes en Chile, cuyos tentáculos cubrían una amplia gama, que iba de la gran minería del cobre, del hierro y del salitre hasta las más variadas empresas manufactureras del país. Esta sola circunstancia justificaba, con la lógica del sórdido espíritu de lucro del capitalismo, la intervención norteamericana. Pero lo que más preocupó al gobierno de dicho país fue la rup-

tura del control político que venía ejerciendo hasta entonces sobre la política chilena. La política internacional independiente inaugurada por el gobierno de Allende constituyó un ejemplo "deplorable" como quiera que contribuyó a alterar la correlación de fuerzas en el concierto latinoamericano y en las relaciones de estos países con el imperio del norte.

La experiencia histórica ha demostrado que la política internacional de Estados Unidos no se orienta sólo por los intereses económicos de sus empresas monopólicas, sino que principalmente se guía por consideraciones estratégicas y de prestigio mundial. El escape de cualquier país de América Latina —su zona de influencia— de su control político constituye un riesgo que siempre ha procurado evitar o restablecer a su "normalidad" cuando ésta ha sido alterada. Las diversas revoluciones frustradas en América Latina son pruebas irrefutables de esta verdad. La incorporación de Cuba al campo socialista la salvó de la invasión que estuvo a punto de producirse a raíz de la crisis de los misiles en 1962, momento culminante de la historia de la humanidad en que se impuso la negociación entre las dos superpotencias, preservándose de ese modo la supervivencia de la Revolución cubana.

En Chile se aplicó un estilo de conspiración distinto al que se conocía hasta entonces. En vez de la intervención directa y brutal experimentada en Guatemala en 1954, en Cuba en 1960 y en República Dominicana en 1963, para referirnos sólo a las experiencias más recientes, se inauguró un método más sibilino que confundió, por eso, al frente interno chileno y engañó por algún tiempo a la opinión pública internacional. Los estrategas norteamericanos en la subversión aprovechan sus propias experiencias para perfeccionar sus tácticas de avasallamiento de los países dependientes, combinando la coacción con la corrupción del dinero.

La conspiración externa contra el gobierno popular se inició el mismo día de la victoria popular en las urnas —el 4 de septiembre de 1970— y se prolongó por los tres años del gobierno de la Unidad Popular. Ella se proyectó fundamentalmente en el campo económico y fue planeada y financiada por el gobierno norteamericano y las compañías multinacionales, ayudadas por la CIA. El imperialismo sabía que éste era el flanco más débil del nuevo régimen. Por eso, desde el inicio de la aplicación de su programa básico, el gobierno popular empezó a recibir las extorsiones económicas que, en principio, se manifestaron en la disminución, hasta llegar a la supresión total, de los préstamos de la Administración Internacional para el Desarrollo (AID), del EXIMBANK, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, de todas aquellas instituciones de crédito internacional que son manipuladas, de una u otra manera, por Estados Unidos.

Todas estas maniobras fueron coordinadas, sin tapujos, por una subcomisión especial del CIEP que dirigía entonces Henry Kissinger. Con el claro designio de provocar trastornos en el proceso productivo interno, las fuentes de suministros habituales de equipos e implementos industriales dificultaron hasta paralizar totalmente las entregas correspondientes, con cuyas maniobras se perjudicaron las operaciones normales de la Empresa Nacional de Petróleo, los Ferrocarriles del Estado, la Compañía de Acero del Pacífico, la línea aérea nacional, las empresas de la gran minería del cobre nacionalizadas y, en general, la industria y la agricultura. Sin perjuicio de estas acciones tan importantes, el imperialismo colaboraba

en el desarrollo de la campaña mundial dirigida a exhibir al gobierno de Salvador Allende como una dictadura "marxista":

b] *Los caminos alternativos del golpe de estado.* La contrarrevolución estuvo constituida fundamentalmente en el interior por el Partido Nacional, representativo de la oligarquía terrateniente, la Democracia Cristiana, partido policlasista, dirigido por sectores vinculados a las empresas extractivas y manufactureras asociadas al capital norteamericano, y otros partidos menores de la mediana y pequeña burguesías, como la Democracia Radical y el Partido de Izquierda Radical, ramas desprendidas del viejo tronco del radicalismo. Todos aquellos partidos, en conjunto, constituían mayoría en el Congreso nacional.

Durante un breve lapso, ellos desarrollaron su oposición dentro de los límites constitucionales, como era tradicional en Chile. Pero, al constatar los avances que iba alcanzando el gobierno popular con la aplicación de su programa, tanto en el campo económico como en el campo político, fueron pasando gradualmente de la obstrucción parlamentaria sistemática, que impidió el despacho de iniciativas legislativas importantes y desvirtuó el régimen presidencial de gobierno mediante las sucesivas acusaciones constitucionales a los ministros y su ulterior destitución, a la abierta subversión, como quedó de manifiesto con la huelga de la burguesía de octubre de 1972.

Para alcanzar sus objetivos, la contrarrevolución se propuso dos procedimientos alternativos: i] el golpe blanco o institucional, y ii] el golpe militar, trabajando en ambas direcciones. En efecto, el clima político y psicológico que se desarrollaba mediante el sabotaje, la agitación, el terrorismo, la paralización de la producción por los patrones, las campañas publicitarias de descrédito de las autoridades, los pronunciamientos de la Corte Suprema, del Congreso nacional, de la Contraloría General de la República, de los colegios profesionales, de los gremios empresariales y de los partidos de la oposición servían por igual para alcanzar indistintamente cualesquiera de los caminos antes mencionados.

El primero de los caminos señalados fue ensayado por los partidos de la burguesía a través de las elecciones generales de parlamentarios de marzo de 1973. Estimando erróneamente que el deterioro electoral de la Unidad Popular era considerable, plantearon la destitución del presidente de la República mediante una acusación constitucional, para lo cual se propusieron conquistar los dos tercios del Congreso nacional. Éste era, al menos, el designio confeso del sector más reaccionario de la oposición, pero la totalidad de ella formuló una campaña electoral con caracteres apocalípticos, presentando la política de la Unidad Popular como ruinosa para el país y reclamando, por consiguiente, "rectificaciones profundas" o la abdicación del gobierno popular.

Planteada la batalla en las urnas a través de dos bloques muy definidos —revolución y contrarrevolución— la Unidad Popular obtuvo un resultado espectacular que sorprendió a la burguesía conspiradora y que tampoco era esperado, en esa magnitud, por ella misma. Después de dos años y medio de gobierno, con una economía desarticulada por las trasformaciones estructurales y el sabotaje, con un régimen de libertad que permitía a la contrarrevolución desarrollar descaradamente su designio de derrocar al gobierno, con una campaña publicitaria de ésta

que explotaba y magnificaba con escándalo los problemas reales que encaraba el gobierno —como la inflación y el desabastecimiento— y con la prescindencia electoral del gobierno, garantizada por el ministro de Interior general Carlos Prats, las masas trabajadoras dieron un respaldo político impresionante a la Unidad Popular, que bordeó el 44% de la votación nacional.

Tal resultado de las urnas echó por tierra la vana esperanza de derrocar al gobierno popular por medio de una acusación constitucional, por un golpe blanco o institucional. Ante esta realidad de hierro se alzó de nuevo como única alternativa para los conspiradores el golpe militar. La Unidad Popular no aprovechó entretanto esta nueva coyuntura para contragolpear a sus enemigos con una ofensiva de masas. Es un hecho indiscutible que el 44% del electorado representaba, en las circunstancias antes señaladas, una fuerza social de una potencialidad revolucionaria inconmensurable, como quiera que esa cifra —dada la retracción de la clase media— implicaba un apoyo del 80% o más de los trabajadores.

En tales circunstancias, la contrarrevolución aceleró una definición de este enfrentamiento latente, que explota cada vez más seguido y amenaza convertirse en una guerra civil. Pero no sólo el presidente de la República y la Unidad Popular se oponen públicamente a la guerra civil, buscando afanosamente una "salida política" a la crisis. Tampoco la burguesía la desea por las pérdidas de vidas y bienes que implica para ella, lo que ha conducido a buscar —al revés de las fuerzas que apoyan al gobierno— una "salida militar", esto es, el golpe de estado con la sola intervención de las fuerzas armadas. Esta forma resultaba más fácil y económica para ella, ya que dejaba entregada la lucha entre esas últimas, con un enorme poder de fuego, y los trabajadores casi inermes, llegando hasta santificar este designio con la explicación piadosa de que la intervención de los militares economizaría vidas humanas porque sólo morirían proletarios, y en ningún caso, burgueses.

Así, el papel de la burguesía quedaba circunscrito a preparar el clima social y político que ofreciera una coartada histórica al golpe militar. Con este propósito, la burguesía desencadenó, a través de su comando invisible, el nuevo paro nacional de los dueños de camiones y de otros gremios empresariales y profesionales y una escalada terrorista, que provocó muchas muertes. Superados los últimos escrúpulos de la Democracia Cristiana, la burguesía cerró todas las compuertas para una "salida política", como la que buscaba el presidente de la República, apoyado por el propio cardenal Alfredo Silva Henríquez, y hace funcionar maquiavélicamente los órganos de la institucionalidad, que estaban bajo su control, para provocar la ruptura definitiva del estado de derecho tan acariciado en su propaganda mixtificadora.

c] *La institucionalidad precipita el golpe militar.* Entre el 4 de marzo de 1973, fecha de las elecciones generales de parlamentarios, y el 11 de septiembre del mismo año, fecha del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende, se desarrolló la más grotesca farsa en torno a la defensa del estado de derecho por esa institucionalidad tan ponderada por el presidente de la República y por cuya salvaguardia inmoló su vida. Como una lección para las generaciones venideras conviene consignar cada uno de sus pasos, en la esperanza de que ellas no se

dejarán cazar en sus siniestras redes en las luchas del porvenir dirigidas a retomar el hilo conductor del proceso interrumpido por la fuerza militar y consumar la revolución iniciada por la clase trabajadora chilena en 1970.

i] La Corte Suprema denuncia la "perentoria e inminente quiebra de la juridicidad del país". Con ocasión de un suceso baladí —consistente en la negativa del Intendente de la provincia de O'Higgins a autorizar la fuerza pública para el desalojo de un predio ocupado por campesinos, ordenado por el 2º juzgado del crimen de Rancagua— la Corte Suprema envió al presidente de la República un oficio el 26 de mayo de 1973, que se hizo público, destinado a crear la falsa imagen de ilegalidad del gobierno. Sólo se trataba de la suspensión de un desalojo en un proceso por usurpación basada en facultades legales —"una situación conflictiva que incide precisamente en los deberes que señala la ley de régimen interior (artículo 45)"— que muchas veces fueron usadas por gobiernos anteriores, particularmente por el de Frei.

Pero la Corte Suprema, dentro del reparto de los papeles en la conspiración, debía aprovechar estas incidencias haciendo una tempestad en un vaso de agua. En su oficio expresó, por eso, que este acto del Poder Ejecutivo era "una abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes u omisiones producen en el orden jurídico; lo que —además— significa, no ya una crisis del estado de derecho, como se le representó a S. E. en el oficio anterior, sino una perentoria e inminente quiebra de la juridicidad del país". Estos mismos magistrados son los que, producido el golpe militar, corrieron solícitos a rendirle pleitesía a quienes, precisamente, se sentaron en el "estado de derecho".

Posteriormente, por oficio de 26 de junio de 1973, en respuesta al presidente de la República, la Corte Suprema puso al desnudo su tartufismo cuando expresa solemnemente: "Este tribunal quiere enterar a V.E. de que ha entendido su oficio como un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y de las leyes. Mientras el Poder Judicial no sea borrado como tal de la carta política jamás será abrogada su independencia." Sin embargo, la usurpación del poder político por los altos mandos de las fuerzas armadas no sólo constituyó un desconocimiento de su "independencia", sino que fue borrada esa misma carta política de donde emana la existencia del Poder Judicial, el cual ha seguido funcionando sometido dócilmente al poder armado, a pesar de sus altisonantes palabras transcritas a un gobierno débil y vacilante, que estaba a punto de ser derrocado. Para estos "jueces" era más importante la "usurpación" de un predio por los campesinos centenariamente explotados que la usurpación del gobierno por los militares.

ii] La Pontificia Universidad Católica de Chile denuncia un "fraude electoral" del gobierno. Abrumada por el masivo apoyo recibido por el gobierno de la Unidad Popular en las elecciones generales de parlamentarios de marzo de 1973, la dirección de la conspiración en marcha efectuó una falsa investigación sobre un supuesto fraude electoral de la Unidad Popular. Para esta mascarada se utilizó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los investigadores llegaron a la conclusión *a priori* de que había "existido una

alteración masiva del veredicto popular. Más de 200 mil sufragios ascendente al 5%, por lo menos, de la masa total de electores es la cantidad de votos que de los datos hasta ahora verificados parecen no corresponder a un pronunciamiento legítimo de candidatos con derecho a sufragio". Para dar verosimilitud a esta afirmación no aportaron ningún antecedente serio. Por el contrario, sólo se dedicaron a juegos de artificio con los nuevos inscritos porque comparados los resultados de las mesas de votación existentes hasta 1970 con las que fueron creadas con posterioridad, las primeras dieron a los partidos confederados de la conspiración el 62% de los sufragios y al partido federado de la Unidad Popular el 38%, mientras que las últimas ofrecieron un empate entre el gobierno y la oposición. Este hecho que sólo demostraba que los nuevos inscritos habían favorecido con sus simpatías al gobierno popular sirvió de base a los conspiradores para elaborar un embuste dirigido a hacer creer al país que el Gobierno había realizado un fraude electoral.

Naturalmente no hubo fraude alguno, ni siquiera la más remota posibilidad de realizarlo, por la sencilla razón de que la Dirección del Registro Electoral, que tiene a su cargo la formación de los registros electorales, su control y depuración, como asimismo el tribunal calificador de elecciones, integrado para cada elección general por tres miembros del Poder Judicial y dos ex presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, elegidos por sorteo, estaban absolutamente dominados por los partidos de la oposición. Tan ridículo fue este infundio que la propia Dirección del Registro Electoral, cuya jefatura estaba desempeñada por el demócrata-cristiano Andrés Rillón, desechó esta denuncia por carecer de todo fundamento. Pero el documento de la "investigación del fraude electoral" fue ampliamente difundido, cumpliendo así su objetivo de incitar al golpe militar.

iii] La Contraloría rechaza la promulgación parcial de la reforma constitucional sobre las áreas de la economía. El contralor general de la República, por oficio núm. 20 782 del 2 de julio de 1973, adhiere a la tesis de la oposición golpista del Congreso nacional, en el sentido de que éste no requiere el quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio para insistir en el texto de la reforma constitucional aprobada, al considerar las observaciones o veto del presidente de la República. De acuerdo a este predicamento, sostiene que la promulgación parcial del proyecto de reforma constitucional ordenada por el decreto del Poder Ejecutivo no concuerda con las normas constitucionales a que debe sujetarse esa determinación.

El contralor termina de manera concluyente: "En efecto, el texto que se promulga no coincide con el que se inserta en el oficio del Senado núm. 15 689, del 7 de mayo de 1973, mediante el cual se comunicó al presidente de la República que el H. Congreso nacional había rechazado las observaciones formuladas al proyecto ratificado por el Congreso pleno, de modo que esta Contraloría General no puede sino abstenerse de cursarlo, por no ajustarse con lo que preceptúa, en materia de promulgación de un proyecto de reforma, el artículo núm. 9 de la Constitución política." Agrega el oficio: "en conclusión, el contralor general infrascrito se ve en la necesidad de representar la ilegitimidad de que adolece, en su opinión, el decreto promulgatorio de la presente reforma constitucional".

Así, este mismo contralor general de la república, Héctor Humeres, que había

tomado razón de decretos de promulgación parcial de proyectos de reforma constitucional, durante el gobierno de Frei, ahora rechaza éste del presidente Allende, agregando un elemento más a la cadena de supuesta ilegitimidad jurídica con que se pretende rodear al gobierno popular. El respetable jurista señor Humeres, profesor de la Universidad de Chile, continúa desempeñando el cargo de contralor después del golpe de estado, aceptando dócilmente la promulgación del fárrago de decretos-leyes de la junta militar de gobierno al margen de todo fundamento constitucional y legal.

iv] Declaración conjunta de los presidentes del senado y de la Cámara de Diputados. Éste fue el llamado más hipócrita y sibilino a la intervención de las fuerzas armadas. En su texto están las huellas digitales de Frei. Con el lenguaje apocalíptico que empleara en su reciente campaña electoral, Eduardo Frei, presidente del Senado y Luis Pareto, presidente de la Cámara de Diputados, ambos demócrata-cristianos, "denuncian" la grave crisis que afecta al país, expresada en el derrumbe de la economía, hambre, angustia, odio y violencia, injurias a los bueyes apis de la magistratura, la Contraloría y el Congreso nacional, proceso de descomposición que se habría agudizado "hasta el extremo límite" en los últimos días.

Dice Frei y suscribe Pareto: "Con motivo de una irresponsable acción reprimida por las propias fuerzas armadas y en la cual ninguno de los sectores democráticos tuvo, por supuesto, participación alguna, se ha ordenado la ocupación de fábricas y predios rurales, se ha reforzado los cordones industriales con los que se pretende cercar la ciudad y, lo que es más grave, existe la certeza de que se reparten armas, y se adoptan disposiciones estratégicas y se lanzan instructivos como si Chile estuviera al borde de una guerra interior." [5] Así aparece rechazando este golpe, después de su derrota, para aclamar el golpe victorioso del 11 de septiembre de 1973. ¡Cómo para creer en su sinceridad democrática!

Continuando con su novela de terror —en cuya creación es un virtuoso— agrega temblorosamente que los "sectores democráticos que representamos no están armados"; que confían en las fuerzas armadas y de carabineros, y en su tradición de respeto a la Constitución "nunca quebrantada"; ataca al "poder popular" por constituir un ejército paralelo, en el cual estarían interviniendo extranjeros; acusa al gobierno de estar repartiendo armas y de arrastrar al país a un enfrentamiento, y declara que no son enemigos de las trasformaciones sociales, pero rech a "que se quieran realizar fuera de la ley y por medio de la violencia". Para poner término de inmediato a "estos riesgos" exige que el gobierno se decida a normalizar la vida del país. Este nuevo Jeremías termina su blasfemia contra la verdadera democracia y el pueblo inerme: "Nos anima sólo el propósito de defender la libertad, la justicia y la paz entre los chilenos." ¿Son estos valores hoy vigentes en Chile?

v] El Colegio de Abogados declara el quiebre del ordenamiento jurídico del país. Este organismo "denuncia" también, en una declaración formulada el 8 de agosto de 1973, el "quebrantamiento del estado de derecho y del ordenamiento institucional que ha sido orgullo de los chilenos". Siguiendo la línea de conformación de un clima de justificación jurídica para el golpe militar, reitera acusaciones

[5] Se refiere al golpe militar frustrado del 29 de junio de 1973.

falsas en contra del gobierno popular sobre conflictos de éste con otros poderes o magistraturas del estado: a) desconocimiento de las facultades del Congreso nacional, la práctica de nombrar en otros cargos de igual importancia a ministros e intendentes destituidos por el Congreso, el propósito de alterar el régimen económico y social mediante decretos de insistencia; b) privación al Poder Judicial de su potestad fundamental de imperio para hacer cumplir sus resoluciones; c) desacatos frecuentes a los dictámenes de la Contraloría General de la República, incremento ilegítimo de la llamada "área social" de la economía mediante intervenciones y requisiciones. Los hechos denunciados no constituyen naturalmente alteraciones al régimen jurídico existente, como quiera que todos ellos —con excepción del decreto de promulgación parcial de la reforma constitucional sobre las áreas de la economía— se cursaron legalmente en la Contraloría.

Con un incalificable cinismo, el Colegio de Abogados —manipulado por demócrata-cristianos y nacionales— reclama también el "restablecimiento pleno de la vigencia de los derechos que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, manifiestamente conculcados en sus diversas expresiones", entre las cuales señala el despojo ilegítimo de bienes privados, las restricciones de hecho a la facultad de trasladarse de un punto a otro de la República y de salir de su territorio, las amenazas y persecuciones administrativas de que son objeto los funcionarios del sector público o controlado por el estado, los comerciantes establecidos, los trasportistas, los mineros, los profesionales, los agricultores y otros grupos ciudadanos. Exige el reconocimiento del derecho de huelga, de asociación, la libertad de expresión y sanciones —no podía faltar— para los culpables del "fraude electoral".[6]

Culmina esta requisitoria con los siguientes términos: "El imperativo moral y cívico de asegurar en Chile la vigencia del derecho reclama, en esta hora, de nuestra orden la actitud consecuente, con sus mejores tradiciones, cualesquiera que sean los sacrificios." Todos estos "cargos" eran por cierto falsos. Pero si el Colegio de Abogados quisiera probar su amor por el estado de derecho y por las libertades democráticas podría hoy, en la hora de los gorilas, exigir el restablecimiento de todos estos derechos y valores realmente conculcados por la dictadura militar.

vi] Acuerdo adoptado por la mayoría de la Cámara de Diputados incitando a un pronunciamiento a las fuerzas armadas. Como culminación de la campaña conspirativa destinada a persuadir a la opinión pública, destruir las últimas resistencias al golpe de estado en sectores de la oposición y de las fuerzas armadas y carabineros y ofrecer a los altos mandos y oficialidad golpista una coartada histórica, la mayoría de la Cámara de Diputados formada por demócrata-cristianos y nacionales, adoptó el 22 de agosto de 1973 un acuerdo en el cual se resumen todas las acusaciones falsas formuladas en contra del gobierno popular por la contrarrevolución, desde sus distintos órganos de poder. Este documento, cuyos considerandos habrían de servir posteriormente de fundamento al Bando núm. 5 de la junta militar de gobierno, del 11 de septiembre de 1973, por intermedio del cual se destituyó al presidente de la República, es un modelo de refinamiento golpista.

[6] La junta militar de gobierno pudo realizar esta investigación y poner al descubierto este fraude. Si no lo hizo es porque nunca existió.

El acuerdo en cuestión define el estado de derecho y expresa que la juridicidad del estado chileno es "patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia", y que el gobierno popular ha incurrido en violación permanente de la Constitución, "llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen gravísimo peligro para la nación; con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho".

Pasa revista en seguida a todos los supuestos atropellos del gobierno popular en lo concerniente a las atribuciones del Congreso nacional, del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República; a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Agrega que contribuyen a la quiebra del estado de derecho la formación y mantenimiento de los organismos de "poder popular", por ser inconstitucionales, la creación y desarrollo de grupos armados, en ambos casos bajo el amparo del gobierno; la utilización de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros con fines partidistas y para quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros.

De acuerdo a las consideraciones precedentes, la Cámara de Diputados acordó:

"PRIMERO: Representar al señor presidente de la República y a los señores ministros de estado, miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidas en los considerandos quinto a duodécimo precedentes;

"SEGUNDO: Representarles, asimismo, que en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

"TERCERO: Declara que si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometería gravemente el carácter nacional y profesional de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución política y grave deterioro de su prestigio institucional, y

"CUARTO: Trasmitir este acuerdo al señor presidente de la República y a los señores ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Trasportes y Tierras y Colonización." [7]

d] *Las fuerzas armadas en el poder.* La burguesía llevó a su culminación, en esta forma, la gigantesca campaña psicológica y política orientada a destruir gradual-

[7] Los cuatro ministros mencionados pertenecían a las fuerzas armadas y al cuerpo de carabineros.

mente la doctrina profesionalista, puntualizada por el comandante en jefe del ejército general René Schneider, durante el agitado período electoral de 1970 y reafirmada por su sucesor en el mencionado cargo general Carlos Prats, en el curso del gobierno popular, para defender la cohesión institucional y resistir las presiones golpistas de la oposición política ante la oficialidad. Esta presión sobre los cuarteles fue destacada e insistente en el último año del gobierno de Salvador Allende. Aprovechando la absoluta impunidad que le aseguraba el régimen de libertad mantenido por el gobierno popular, la conspiración puso en tensión su poderoso aparato de comunicación de masas —financiado por la CIA, como posteriormente fuera reconocido por el propio presidente Ford— para demoler las débiles defensas gubernativas en el seno de las fuerzas armadas.

A la acción conspirativa se agregó, entonces, una campaña pública avalada por profesores de derecho dirigida a demostrar la legitimidad de la intervención militar en los casos en que un gobierno sobrepase la Constitución, que culmina con el proyecto de acuerdo aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973. Esta campaña encontró un terreno fértil en las fuerzas armadas porque la formación idelógica de los oficiales era adversa a la Unidad Popular. En los inicios del gobierno de Allende era notoria la desconfianza de la mayoría del cuerpo de oficiales —por lo general, proveniente de las capas medias— hacia el programa de transición al socialismo, tanto por el temor de ver afectado su estatus social como por la formación, con clara influencia imperialista, que habían recibido en las academias de Estados Unidos.

Como es sabido, en efecto, desde la iniciación de la posguerra se fue introduciendo, en forma cada vez más intensa, en las fuerzas armadas chilenas la ideología capitalista, recibiendo sus oficiales en las escuelas militares norteamericanas la formación antimarxista derivada de la "guerra fría", de la concepción de la "solidaridad continental frente a la subversión comunista" interna. Así, a partir del 4 de septiembre de 1970, la doctrina profesionalista empezó a perder su eficacia, porque toda la sociedad chilena entraba en ebullición, no pudiendo escapar a este proceso las propias instituciones militares. En suma, puede decirse que la doctrina Schneider fue respecto a las fuerzas armadas lo que la democracia representativa respecto a la burguesía: funcionó en tanto no se alteró el orden capitalista.

El gobierno de Salvador Allende fue abatido el 11 de septiembre de 1973 por las instituciones del estado burgués-capitalista —Congreso nacional, Poder Judicial, Contraloría, partidos de oposición y cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas— que respetó permanentemente, conforme a su propósito de ejecutar su programa dentro de la constitución y la ley, renunciando, desde el comienzo, a desarrollar la estrategia de la conquista del poder que reclamaban insistentemente las masas trabajadoras. Con razón Gabriel García Márquez pudo expresar, refiriéndose al derrocamiento y muerte de Salvador Allende: "Fue siempre consecuente consigo mismo y esa fue su virtud más grande. Pero el destino le reservó la infrecuente y trágica grandeza de morir defendiendo, con el arma en la mano, los anacrónicos ornamentos del derecho burgués; defendiendo una Corte Suprema de Justicia que lo había repudiado pero que iba a legitimar a sus asesinos; defendiendo a un Congreso miserable que lo había declarado ilegítimo pero que luego debió inclinarse, demostrando alegría, ante la voluntad de los usurpadores: defendiendo la

libertad de los partidos de oposición que habían vendido su alma al fascismo; defendiendo toda una herencia carcomida por los mitos de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar sin disparar un solo tiro." También murió Salvador Allende luchando por el socialismo.

Después de arrasar, a sangre y fuego, la resistencia popular, la junta militar de gobierno destituyó al presidente de la República mediante el bando núm. 5, a través del cual hizo gala de esos "anacrónicos ornamentos del derecho burgués" a que se refiriera el notable escritor latinoamericano. En efecto, en doce considerandos, los militares facciosos fundamentaron su decisión de destituir al Presidente constitucional que, según este bando del 11 de septiembre de 1973, "aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante", todos los cuales son simples reproducciones de los falsos argumentos ya dados, en la preparación del clima adecuado para el golpe, por los partidos opositores, por la mayoría del Congreso nacional, por la Corte Suprema, por la Contraloría General de la República y por el Colegio de Abogados.

Por eso, se puede leer en él la misma letanía del quebrantamiento de los derechos y libertades de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general a una digna y segura subsistencia. De igual manera se exponen los cargos de haberse colocado el gobierno al margen de la Constitución; que ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del estado, "dejando sin efecto las decisiones del Congreso nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República"; que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones, en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país y, en general, todas las demás acusaciones conocidas relativas a la supuesta "ruina de la economía", "anarquía" y "asfixia de libertades", "desquiciamiento moral y económico". Todo lo anterior, por último, ponía en peligro la seguridad interna y externa del país. Estos derechos, libertades y valores estuvieron naturalmente vigentes durante el gobierno de Salvador Allende y, en cambio, fueron destruidos por la junta militar, con el beneplácito de toda la institucionalidad burguesa.

3. *La dictadura militar*

a] *La base social de apoyo.* El golpe militar puso término al proceso de cambios revolucionarios que se inició en Chile en 1970 e inauguró un período de brutal contrarrevolución. La clase dominante se desprendió de sus "ornamentos democráticos" y convirtió el estado demoburgués en un estado totalitario y dictatorial que se propone restaurar, a sangre y fuego, el sistema capitalista dependiente —en crisis desde hace décadas y afectado seriamente por la política de la Unidad Popular— con la ambición de introducir trasformaciones regresivas en la sociedad chilena, que aseguren la permanencia de este sistema de dominación por un plazo indefinido.

Las fuerzas armadas usurparon el gobierno con el apoyo de un vasto bloque social, constituido por la burguesía industrial monopólica, la burguesía agraria y

las diversas capas de la pequeña burguesía. Factor fundamental para el triunfo de la contrarrevolución fue la alianza impuesta por la gran burguesía a la pequeña burguesía, mediante una persistente campaña de persuasión, mientras el gobierno de la Unidad Popular consolidaba su influencia fundamentalmente en la clase obrera y el campesinado sin tierra. Los altos mandos de las fuerzas armadas asumieron así todo el poder, en representación de esta conjunción de clases sociales, en la cual desempeña el papel hegemónico la burguesía monopólica asociada estructuralmente a los consorcios imperialistas, pero tiene su principal apoyo de masas en la pequeña burguesía propietaria y vinculada a los servicios, que constituye un sector muy importante en el país.

En Chile, las instituciones armadas no tienen un orígen social oligárquico, como sucede en otros países de América Latina, sino que su composición de clase es principalmente pequeñoburguesa. No obstante lo anterior, la hegemonía de la gran burguesía en el proceso que hoy conducen los militares es evidente. La explicación de este fenómeno se encuentra en la conjugación de dos elementos fundamentales: primero, sólo los consorcios imperialistas y las empresas monopólicas nacionales asociadas a él podían ofrecer condiciones de viabilidad a un proyecto de restauración y desarrollo del capitalismo dependiente y, segundo, de las fuerzas sociales puestas en marcha por la contrarrevolución fueron los grupos fascistizantes de la pequeña burguesía de las fuerzas armadas los que alcanzaron mayor preeminencia. Así se produjo la conjunción de ambos sectores para proyectar históricamente, como instrumento de sus objetivos políticos —aunque sus intereses económicos no son del todo coincidentes— un tipo de estado totalitario y dictatorial.

Esta base social de apoyo a la contrarrevolución se expresó, desde el comienzo, en todas las instituciones del estado demoburgués, como el Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría y las propias fuerzas armadas; en los partidos burgueses y policlasistas, con dirección burguesa; en las organizaciones patronales de los industriales, de los agricultores, de los comerciantes, de los trasportistas, de los profesionales, etc. Los vínculos establecidos entre la gran propiedad y la pequeña propiedad gravitaron poderosamente en todas estas instituciones y órganos de poder, pero esta base social de apoyo contiene en su seno los gérmenes de su propia destrucción por las contradicciones que existen en ella. Este conflicto latente se ve agudizado por las consecuencias derivadas del proyecto económico de la dictadura que beneficia a una fracción de la burguesía —la gran burguesía monopólica asociada al capital norteamericano— en desmedro de otras fracciones de esta clase, como los propietarios de empresas capitalistas medianas y pequeñas, y del método político utilizado que ha destruido el estado de derecho instaurando, en cambio, un estado de excepción. Así como, por su inestabilidad política, la pequeña burguesía se alió a la gran burguesía en busca de seguridad y precipitó el golpe militar en 1973, ahora empieza a expresar su descontento respecto a la política de la dictadura.

b] *El proyecto económico.* La dictadura militar ha ofrecido como panacea la llamada "economía social de mercado", que se fundamenta en los viejos principios de la libre concurrencia, la libertad de precios y la libre empresa, sosteniendo que corresponde al mercado regular la asignación de los recursos de que dispone el país. Ésta es la teoría, pero la práctica persigue primordialmente la restauración

de las relaciones capitalistas de producción, mediante la superexplotación de la mano de obra y el estímulo a la inversión nacional y extranjera, condiciones sobre las cuales se plantea la modernización de la economía orientándola hacia los mercados externos. Así, este proyecto pretende superar la crisis económica interna a través de una expansión industrial generada mediante el incremento de la capitalización privada, basado en la drástica reducción del nivel de vida de las masas trabajadoras y del empleo, disminuyendo de este modo los costos de producción y, por tanto, mejorando la rentabilidad de las empresas.

Esta política conduce a la contracción del mercado interno, al orientar la producción fundamentalmente hacia el consumo de las capas sociales de altos ingresos y al mercado externo, buscando a través de la libertad de precios y la congelación de salarios equiparar sus costos a los de este último mercado, particularmente en el área subregional andina, Brasil y Argentina. La política señalada, al hacer más rentable de esta manera la explotación capitalista en la industria y el campo, pretende atraer la inversión nacional y extranjera.

El proceso económico que se ha iniciado con el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular reviste, en suma, como características más sobresalientes las que siguen:

i] Reversión del proceso de cambios estructurales desarrollados en la economía por el gobierno de la Unidad Popular. Esta política ha provocado profundas alteraciones en el proceso productivo, porque el estado había alcanzado una participación determinante en el funcionamiento de la economía, como se pasa a explicar:

a) Nacionalización de las riquezas básicas. El gobierno de la Unidad Popular orientó su acción hacia el control absoluto de la producción de los principales minerales y de las empresas de utilidad pública, entonces en manos de consorcios imperialistas. Si bien la dictadura militar no ha desnacionalizado estas empresas, ha convenido con sus antiguos propietarios compensaciones leoninas por un monto de 481.9 millones de dólares. De esta cifra se ha asignado a los consorcios del cobre 381.9 millones de dólares, pagos que son absolutamente ilegítimos porque la nacionalización se había perfeccionado, en virtud de una reforma constitucional, sin compensación alguna, excepto en los casos de Exótica y Cerro Pasco. Además, se ha dispuesto también premiar a la International Telephone & Telegraph (ITT) con una indemnización de 100 millones de dólares por su intervención en la política chilena.

b) Área de propiedad social de la economía. Este objetivo del programa de la Unidad Popular, que perseguía convertir todo el sector monopólico y estratégico de la economía privada en una forma socialista de propiedad, se alcanzó en gran medida como quiera que este sector representaba, al 11 de septiembre de 1973, más del 30% de la economía nacional. Este sector socializado fue enajenado a la burguesía por la dictadura militar. Más aún, toda la capitalización pública desarrollada en los últimos 40 años, con grandes sacrificios para la población, se está liquidando en beneficio de sectores privados, mediante ventas a precios viles de fábricas, establecimientos mineros, maquinarias, hote-

les y otros bienes de capital. Es escandalosa la trasferencia de la riqueza pública a la gran burguesía.

c) Nacionalización de la banca privada. Ésta llegó a ser completa mediante la compra de la mayoría de las acciones por intermedio de la Corporación de Fomento de la Producción. La dictadura militar determinó su desnacionalización inmediata, vendiendo paquetes de acciones de las instituciones bancarias más importantes a grupos económicos particulares y autorizando, además, la instalación de nuevos bancos extranjeros en el país.

d) Reforma agraria. La política del gobierno de la Unidad Popular en esta actividad económica había permitido eliminar el latifundio e impulsar un vasto movimiento campesino. Todo este sector reformado, que controlaba el 35% de las tierras agrícolas y que disponía del apoyo del estado —en cuyas manos estaba el 100% del crédito, el 80% de la comercialización de insumos y productos agropecuarios y el 60% del parque de maquinaria agrícola— ha sido modificado. La dictadura militar ha entregado parte de la tierra expropiada en propiedad individual y ha devuelto grandes extensiones a sus antiguos propietarios. Asimismo, la comercialización de insumos y productos agropecuarios ha pasado íntegramente a manos privadas.

ii] Acentuación de la dependencia de la economía nacional, toda vez que los planes de inversiones de la dictadura en las actividades más dinámicas de la industria, de la agricultura y de la minería, con proyección a los mercados externos, están supeditados al capital extranjero, desde el punto de vista financiero, tecnológico y comercial. La economía nacional se adapta así a las condiciones del proceso de integración monopólica internacional.

iii] Concentración progresiva de la propiedad y la producción en manos del sector monopólico y el fortalecimiento del capitalismo en la agricultura. Esta tendencia supone la máxima restricción de las posibilidades de desarrollo del sector no monopólico de la economía y su supeditación sistemática, lo que está arrastrando a la ruina a las medianas y pequeñas empresas que, por su capitalización, altos costos y baja tecnología no pueden competir con el sector monopólico.

iv] Superexplotación de los trabajadores con el fin de financiar la capitalización de las empresas privadas, orientadas a su modernización para posibilitar el aumento de la productividad a la vez que asegurar inversiones en actividades nuevas y más rentables. Esta política provoca una regresión progresiva en la distribución del ingreso, con inmensa pérdida del poder adquisitivo de la población y estimula la desocupación. La participación de los asalariados —obreros y empleados— que alcanzó al 62% en 1971, descendiendo al 60% a la fecha del golpe militar, fue revertida al 38% un año después, es decir, al 11 de septiembre de 1974. El desempleo, que el gobierno de la Unidad Popular lo había reducido, al 11 de septiembre de 1973, a un 4.73% ha llegado un año después al 19.24%, según estimación de economistas de la Universidad de Chile.

c] *El método político.* El proyecto económico que está aplicando la dictadura mi-

litar requiere para su funcionamiento y desarrollo revestir al estado burgués-capitalista de las formas más represivas. Éste es un requisito indispensable para la supervivencia del modelo de capitalización de las empresas antes mencionado. Por éso, desde el comienzo, la junta militar de gobierno abolió las libertades democráticas y los derechos humanos; clausuró el Congreso nacional, asumiendo ella misma las facultades legislativas; supeditó a su autoridad a los tribunales de justicia y a la Contraloría General de la República; intervino las universidades, cerrando escuelas y cancelándoles la matrícula a miles de estudiantes; ilegalizó los partidos populares, incautándose sus bienes y medios de comunicación de masas, y disolvió la Central Única de Trabajadores y las federaciones obreras y campesinas, suspendiendo el funcionamiento de los sindicatos.

Para que todas estas medidas adquirieran eficacia política, la dictadura organizó la represión masiva sistemática. Partiendo del exterminio físico de miles de trabajadores, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta ahora, ha continuado el aplastamiento del creciente descontento social, utilizando la delación, la tortura, los campos de concentración, los juicios militares, los fusilamientos y el toque de queda. Esta política conlleva la supresión de toda forma de expresión democrática, el desarrollo sin precedente de los órganos represivos y la expulsión del territorio nacional de más de doscientos mil hombres, mujeres y niños, acosados por la dictadura.

Así se ha puesto violento término a la democracia burguesa representativa, cuya falsa defensa sirviera de pretexto a la clase dominante para derrocar al gobierno popular y suprimir todas las conquistas de los trabajadores. El gobierno más democrático que tuviera Chile en toda su historia ha sido sustituido por una dictadura oscurantista. La burguesía chilena, que sólo ayer defendía los principios ideológicos del liberalismo político, hoy pretende poner en marcha una política totalitaria, que le sirva de baluarte en la defensa de su enriquecimiento ilícito, que trae aparejada la más inhumana superexplotación de los trabajadores.

En una época de la historia del género humano en la que se desarrolla, cada vez más, la política de distensión internacional, que supone la búsqueda de la compatibilización de los intereses económicos y políticos de las distintas naciones, esta dictadura militar enarbola la bandera del anticomunismo delirante, consigna que tuvo virtualidad en el período de la guerra fría, pero que hoy ha sido abandonada por sus propios creadores. Esta política exterior primitiva, unida a la absoluta negación de los derechos humanos, ha proyectado una imagen repugnante del gobierno castrense que a su vez determina su aislamiento, cada vez más creciente, en el concierto de las naciones civilizadas. El repudio ha sido tan generalizado e intenso que la propia dictadura trata de lavarse el rostro y las manos, con medidas seudo liberalizadoras, en un esfuerzo desesperado por recuperar el respeto de la comunidad internacional. Por esta acción torpe se ha derrumbado el alto prestigio que Chile había conquistado, durante el gobierno de la Unidad Popular, por la plena vigencia interna de los valores democráticos y por la defensa de la paz, la autodeterminación y la cooperación de los pueblos que singularizara a su política externa.

La trágica experiencia chilena interesa particularmente a los países latinoamericanos, no sólo porque Chile forma parte del continente, sino también porque lo

que ahora pasa en este país puede pasar mañana en otro. ¿Quién iba a pensar hace sólo algunos años que Jakarta se trasladaría a Santiago de Chile? El golpe de estado y la dictadura militar constituyen un modelo que puede aplicarse en cualquier lugar de la tierra. Para derrocar a la dictadura y reiniciar la lucha por el socialismo se alzan estrategias alternativas que todavía dividen a los partidos populares y cuya resolución será el resultado de su confrontación, de cara a las masas, de modo que el genio de éstas descubra cuál es la más justa.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Allende y otros, *La vía chilena al socialismo,* México, Siglo XXI, 1973.
Affonso y otros, *Movimiento campesino chileno,* Santiago, ICIRA, 1970.
Álvarez Óscar, *Chile, monografía sociológica,* México, Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM), 1965.
Arriagada, Genaro, *De la vía chilena a la vía insurreccional,* Santiago, Editorial del Pacífico S. A., 1974.
Barraclough, Solon y otros, *Chile: Reforma agraria y gobierno popular,* Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973.
Barría, Jorge, *Chile siglo XX,* Santiago, Editorial Prensa Latinoamericana, 1973.
Cademartori, José, *La economía chilena,* Santiago, Editorial Universitaria S. A., 1968.
Castillo, Jaime, *Las fuentes de la democracia cristiana,* Santiago, Editorial del Pacífico, 1968.
Chelén, Alejandro, *Trayectoria del socialismo chileno,* Buenos Aires, Editorial Astral, 1967.
Donoso, Ricardo, *Alessandri agitador y demoledor,* México, Fondo de Cultura Económica, 1952 y 1954.
Donoso, Ricardo, *Breve historia de Chile,* Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1963.
El Mercurio, "Breve Historia de la Unidad Popular", Santiago, Ediciones El Mercurio, SAP, 1973.
Farnsworth, Elizabeth y otros, *Chile: El bloqueo invisible,* Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973.
García, Pío y otros, *Las fuerzas armadas y el golpe de estado en Chile,* México, Siglo XXI, 1974.
Gil, Federico, *El sistema político de Chile,* Santiago, Editorial Andrés Bello, 1974.
———, *Los partidos políticos,* Buenos Aires, Ediciones Depalma; 1972.
Heisse, Julio, *150 años de evolución institucional, Chile 1810-1960,* Santiago, Editorial Andrés Bello, 1961.
Heller Rouassant, Claude, *Política de unidad en la izquierda chilena 1956-1970,* México, El Colegio de México, 1973.
Jobet, Julio César, *El Partido Socialista de Chile,* Santiago, Editorial Prensa Latinoamericana S. A., 1971.
———, *Recabarren y los orígenes del movimiento obrero y el socialismo chilenos,* Santiago, Prensa Latinoamericana, 1973.
Joxe, Alain, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno, Santiago,* Editorial Universitaria, 1970.
Petras, James, *Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno,* Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1971.

Petras, James, Zeitlin, Maurice (selección dirigida por), *América Latina: Reforma o revolución,* Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

Pinto, Aníbal, *Chile, una economía difícil,* México, Fondo de Cultura Económica, 1964.

Pinto, Aníbal y otros, *Chile hoy,* México, Siglo XXI, 1970.

Quimantú, *Documentos secretos de la ITT,* Santiago, Empresa Editora Nacional Quimantú Ltda., 1972.

Ramírez, Hernán, *Origen y formación del Partido Comunista de Chile.* Santiago, Editorial Austral, 1965.

———, *Historia del imperialismo en Chile,* Santiago, Editorial Universitaria S. A., 1970.

Veneroni, Horacio L., *Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina,* Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973.

Urzúa, Germán, *Los Partidos Políticos Chilenos,* Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1968.

ECUADOR: 1925-1975

AGUSTÍN CUEVA

I. PRIMERA CRISIS DEL ORDEN LIBERAL OLIGÁRQUICO Y "REVOLUCIÓN JULIANA"

Si en la historia política de Ecuador 1925 aparece como una fecha clave, marcada por la revolución pequeñoburguesa del 9 de julio ("revolución juliana"), en la historia económica uno no puede dejar de mirar hacia 1921, año en que se produce la primera gran crisis del orden liberal oligárquico, cuya vigencia ha sido en realidad efímera. Dicho orden, que en Ecuador se conoce con el nombre de régimen "plutocrático", se consolida únicamente en 1912, luego de la masacre de Eloy Alfaro y sus lugartenientes en la famosa "hoguera bárbara" de El Ejido, que reduce literalmente a cenizas a los dirigentes máximos del ala jacobina de la revolución liberal y trasfiere la hegemonía del proceso al bloque conformado por la burguesía agromercantil de Guayaquil y sus socios subordinados, los terratenientes semifeudales de la sierra. Este movimiento de consolidación de la burguesía guayaquileña en el plano político corresponde a un movimiento correlativo de consolidación económica, fácil de detectar en la curva ascendente de las exportaciones, que, de un valor de 5 millones y medio en 1895, año de la revolución liberal, se elevan al doble en 1910, para volver a duplicarse en 1920, con una cifra récord de más de 20 millones de dólares. Con ello se cierra un ciclo (1895-1920) durante el cual la burguesía local ha realizado exportaciones por un valor total de 308 millones de dólares, suma que coincide exactamente con el monto de las inversiones norteamericanas en América Latina en 1897. De esa suma, más del 70% se ha destinado a importaciones, en buena parte de bienes suntuarios, dedicándose el resto a la realización de algunas obras de modernización de Guayaquil, a la ampliación de la propiedad territorial rural y urbana de aquella burguesía, a la subvención de los gastos de los barones del cacao residentes en París y a una actividad netamente usuraria que tiene su expresión más acabada en los préstamos del Banco Comercial y Agrícola al estado ecuatoriano:

Hasta el último día del año 1924 la deuda interna de Ecuador ascendía a 39 834 541.70 sucres. De esta suma, cerca de 37 millones correspondían sólo a los bancos. Pero había uno de éstos, sobre todo, que, siendo el mayor y más poderoso emisor de billetes, era, a la vez, el mayor y más poderoso acreedor del gobierno: el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Hasta mediados de 1924, o sea, al terminarse la presidencia de José Luis Tamayo, esta institución de crédito anotaba, en contra del fisco ecuatoriano, la suma de 21 772 253.27 sucres. No era, por cierto, que todos estos millones los hubiera recibido el gobierno, de contado, en beneficio de la administración. Eran intereses compuestos —diestra e implacablemente capitalizados, al 30 de junio, y al 31 de diciembre de cada año—, lo que, de un modo principal, había engrosado fabu-

losamente la deuda; pues el verdadero monto de préstamos concedidos por el Banco Comercial y Agrícola, en diferentes épocas de crisis fiscal, apenas ascendía a un poco más de 10 millones de sucres.[1]

Hasta este momento de su historia, y aún después, la economía ecuatoriana no es en rigor una economía de "enclave", en la medida en que las plantaciones cacaoteras, fuente principal de las exportaciones, pertenecen a propietarios nacionales. Las mismas inversiones extranjeras son en Ecuador de poca monta: en 1913 las de origen inglés representan el 0.29% del total de inversiones de esa nacionalidad en América Latina y en 1914 las de origen estadounidense equivalen a 0.59% del respectivo total en el área latinoamericana. Sin embargo, la economía ecuatoriana posee ya un marcado carácter *semicolonial,* puesto que se desarrolla en la órbita de la división capitalista imperialista del trabajo; e internamente no ha superado aún su condición *semifeudal,* no se diga en la sierra, donde todo el sistema hacendario se articula en torno a la explotación de los siervos indígenas, sino incluso en la costa, donde las mismas plantaciones cacaoteras mantienen un nivel técnico extremadamente rudimentario y relaciones de producción que distan mucho de ser puramente capitalistas.

En esas condiciones el mercado se halla reducido a su mínima expresión y el excedente económico extraído a los trabajadores tiende a despilfarrarse en la esfera del consumo suntuario o a dirigirse hacia actividades improductivas como las que se vio anteriormente. En todo caso, la industrialización del país está fuera del horizonte histórico de entonces, como no sea en ciertas actividades derivadas de la economía agroexportadora (pequeñas fábricas de elaboración de chocolates, plantas piladoras de café, etc.). La producción textil se desarrolla lentamente, sobre todo en la sierra, pero a menudo como prolongación tardía de los obrajes coloniales antes que como una verdadera industria moderna. La propia burguesía de Guayaquil, que junto a la activida de exportación controla la de importación, se encarga, por lo demás, de imponer claros límites a este incipiente desarrollo.

Poderosa en términos de la atrasada formación social a la que pertenece, la burguesía agromercantil guayaquileña es sin embargo un gigante con pies de barro, que no tardarán en agrietarse bajo el peso de las contradicciones estructurales inherentes a sus propias modalidades de crecimiento:

> A mediados de 1920 se inició en Estados Unidos de Norteamérica la deflación de posguerra de carácter internacional... En el mercado de Nueva York, el precio del cacao bajó de un máximun de 26¾ centavos de dólar por libra en marzo de 1920 a 12 centavos en diciembre de ese año, y a un mínimun de 5¾ centavos en 1921. Los efectos fueron desastrosos para el Ecuador, tanto porque en los 20 años trascurridos entre 1900 y 1920 el valor declarado, FOB Guayaquil, fluctuó entre 65 y 75% del valor FOB del total de nuestras exportaciones, cuanto porque las "pestes" habían comenzado a reducir bien considerablemente la producción de cacao.[2]

Ahora bien, si la primera causa del desastre puso de manifiesto la fragilidad

[1] Óscar Efrén Reyes, *Los últimos siete años,* Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1933, pp. 31-32.

[2] Luis Alberto Carbo, *Historia monetaria y cambiaria del Ecuador,* Quito, Imp. del Banco Central, 1953, p. 104.

de una economía estructuralmente semicolonial como la ecuatoriana, la segunda causa distó mucho de ser una mera calamidad natural: las "pestes" arrasaron gran parte de las plantaciones cacaoteras porque las relaciones sociales de producción allí vigentes —basadas en una especie de aparcería que de hecho mantenía el predominio de técnicas arcaicas de cultivo— impidieron un rápido control de dichas pestes.[3] En uno de esos cortocircuitos típicos del subdesarrollo la economía ecuatoriana se desmoronaba víctima, de una parte, de su inserción en la división capitalista imperialista del trabajo, y, de otra, de su inmersión en la matriz precapitalista de su propia formación social.

El hecho es que las exportaciones, que, como ya se dijo, habían superado los 20 millones de dólares en 1920, se redujeron a un valor apenas superior a los 9 millones en 1921, recuperándose un tanto en 1922 (10 y medio millones), para volver a caer en picada al año siguiente (7 y medio millones). En suma, una disminución del orden del 60% en sólo tres años.

Poseedora del poder político, la burguesía agroexportadora intentó entonces resarcirse de las pérdidas trasfiriéndolas a los sectores populares. La moneda nacional fue rápidamente devaluada, con lo cual los precios internos se elevaron de manera vertiginosa, sobre todo en Guayaquil, donde incluso la harina y la manteca provenían del exterior. Las masas empezaron a sentir la miseria con más rigor que nunca y a reclamar un reajuste de salarios que siquiera compensase la brusca caída de su poder adquisitivo. La primera manifestación orgánica de protesta fue la de los ferroviarios de Durán, en diciembre de 1921; luego siguieron los reclamos de los trabajadores de la empresa eléctrica de Guayaquil y de los tranviarios de la misma ciudad. Insuficiente para generar una clase obrera industrial, el desarrollo oligárquico del capitalismo ecuatoriano había creado, sin embargo, núcleos proletarios ligados a los servicios modernos del puerto principal, que ahora hacían sentir, por vez primera, su presencia de clase en el escenario nacional. A ello se sumó, en el crítico contexto de 1922, la acción combativa de muchos gremios semiartesanales, articulados con aquellos núcleos a través de la Confederación Obrera de Guayas. Las manifestaciones de protesta arreciaron; "pareció —dice el historiador Óscar Efrén Reyes— que todo Guayaquil no se compusiera más que de masas proletarias".[4] Sobrevino el 15 de noviembre de 1922, la huelga general decretada por la confederación, que tuvo trágico desenlace:

> Salieron los batallones. Las masas fueron rodeadas, y los soldados realizaron una espantosa carnicería en las calles, en las plazas y dentro de casas y almacenes... Luego, en la noche, numerosos camiones y carretas se dedicaron a recoger los cadáveres y echarlos a la ría.[5]

Las "cruces sobre el agua" señalaban ahora el curso descendente del régimen surgido de la "hoguera bárbara". Incapaz de ofrecer siquiera paliativos a la crisis,

[3] Cf. al respecto. CIDA, *Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola: Ecuador,* Washington, Unión Panamericana, 1965, p. 410.

[4] *Breve historia general del Ecuador,* t. II-III, 6a. ed., Quito, Ed. Fray Jodoco Ricke, 1960, p. 727.

[5] Reyes, *ibid.,* p. 729.

el orden liberal oligárquico continuó reprimiendo a sangre y fuego las manifestaciones de rebeldía que siguieron: en 1923 fueron masacrados los campesinos de la hacienda Leyto y sofocados por la fuerza los levantamientos indígenas de Sinicay, Jadán, Pichibuela y Urcuquí. Pero ello no impidió que la situación fuera deteriorándose cada vez más y que el malestar contra la "plutocracia" se extendiera hasta sectores vastos de las capas medias, afectados también por la crisis. En el propio ejército la oficialidad joven empezó a experimentar molestia contra esta especie de costra oligárquica que el sistema había venido generando para garantizar su sobrevivencia. Como dice un texto de la época:

Continúa la vieja costumbre: sobre el oficial preparado se entroniza el militar político. Hay jefes que no saben otra cosa que chismes de politiquería. Los jóvenes que han iniciado, científica y honorablemente la carrera, encuentran casi imposibles los ascensos; pues las altas jerarquías militares son palanqueables y conquistables más bien por la aventura política o por la preeminencia social y de fortuna.[6]

El orden liberal oligárquico había acumulado demasiadas contradicciones en todos los niveles como para que pudiera prolongarse por más tiempo. Deteriorado como estaba, la oficialidad progresista no tuvo mayor dificultad en derrocarlo el 9 de julio de 1925, de manera incruenta. Signo aunque sólo fuese retórico de los nuevos tiempos, los protagonistas de la trasformación "juliana" declararon de inmediato que su revolución perseguía "la igualdad de todos y la protección del hombre proletario".

Se trataba, en realidad, de un movimiento de carácter antioligárquico, dirigido en primera instancia contra el Banco Comercial y Agrícola, institución que no sólo dominaba las finanzas nacionales sino que además se permitía el lujo de designar desde presidente de la República hasta ministros y subsecretarios. La lucha contra esta columna vertebral de la burguesía distó mucho, sin embargo, de ser radical, limitándose a establecer ciertos controles insuficientes para poner en vereda a los poderosos banqueros de Guayaquil. La reacción de éstos no se hizo esperar, con las consecuencias económicas previsibles:

Los ataques al Banco Comercial y Agrícola, el temor de que se produjera una quiebra bancaria, la desazón en que se vivía por las apresuradas reformas jurídicas, hicieron que se escondiera el dinero y el país sufriera una seria crisis de contracción del circulante. El gobierno no tuvo con qué pagar los sueldos ni a los propios militares.[7]

En vez de proceder a estatizar la banca privada, los militares prefirieron ceder ante el chantaje de ésta y hasta solicitaron al Banco Comercial y Agrícola un empréstito de doscientos mil sucres. Y, "para aliviar la situación, se dictó en el mes de septiembre un decreto reformatorio de la ley de bancos, por el cual se les autorizaba menor porcentaje de respaldo legal para sus emisiones de billetes".[8] Con esto, la suerte de la "revolución" estaba echada y la contradictoria faz

[6] Citado por Reyes en *Los últimos siete años*, pp. 48-49.
[7] Alfredo Pareja Diezcanseco, *Historia del Ecuador*, t. I, 2a. ed., Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1958, p. 382.
[8] Pareja, *ibid.*, p. 383.

del reformismo era evidente. Opuestos al poder omnímodo de la "plutocracia", pero incapaces de concebir un proyecto profundo de trasformación, los protagonistas del proceso "juliano" estaban condenados no sólo a seguir una línea zigzagueante frente a la oligarquía, sino a expresar su "protección al hombre proletario" con medidas tan ilusas que ni siquiera merecen el calificativo de "populistas":

Prohibición de pelea de gallos, ley seca en Guayaquil, persecución a las tristes mujeres "alegres" del Barrio Verde del puerto, Ligas de Salud Pública, que muy poco pudieron hacer, prohibición de entrar sin zapatos en los mercados, edificios públicos, escuelas, parques, teatros, pero ninguna reforma capaz de proporcionar al desvalido los medios para comprar la vestidura de sus pies.[9]

En medio de este cúmulo de vacilaciones e ingenuidades el gobierno seguía empeñado, sin embargo, en llevar adelante una serie de reformas tendientes a la modernización del estado ecuatoriano. Pero este mismo proyecto se enmarañó temporalmente en el problema del *regionalismo,* explotado con habilidad por la burguesía costeña, la cual, gracias a una intensiva campaña de prensa, consiguió hacer aparecer las reformas propuestas por el gobierno como un ataque a la ciudad de Guayaquil, de cuya riqueza, dizque, querían aprovecharse "los serranos", recurriendo al subterfugio de reforzar el poder central.

Y es que, a decir verdad, las cosas se presentaron desde el comienzo con cierta ambigüedad. La fuerza social que empujaba el proyecto reformista era sin duda de origen pequeñoburgués, pero eso mismo le impedía manejar el estado con una perspectiva de clase totalmente autónoma y enfrentar con éxito, por sí sola, a la poderosa burguesía agromercantil de Guayaquil. Intuyendo su debilidad, los militares "julianos" llamaron a colaborar consigo a civiles inequivocadamente identificados con la oligarquía serrana, la que por supuesto no veía del todo mal esta oportunidad de ajustar cuentas con su rival de la costa. Establecido este pacto coyuntural, las medidas ya no aparecían dirigidas contra la oligarquía del país en su conjunto, sino exclusivamente contra el grupo de Guayaquil, que desde luego era el más poderoso. El escritor Alfredo Vera llega a afirmar que:

Con la derrota de los banqueros quayaquileños se hizo trasladar a la capital el centro de la economía financiera. La banca quiteña, ligada al gamonalismo, cobró alguna fuerza y a su amparo tomaron notable desarrollo el comercio importador de la capital y algunas pequeñas industrias, principalmente la textil.[10]

Lo que sólo en parte es cierto. No creemos que este momento histórico haya significado un real traslado de hegemonía del grupo oligárquico costeño hacia el serrano, sino que se trató de una situación coyuntural harto compleja, en la que, al amparo de una correlación precaria de fuerzas, recuperó algún peso político la fracción oligárquica de la sierra. Este hecho fue sin embargo suficientemente decisivo como para imponer claros límites a la acción del gobierno reformista, que

[9] Pareja, *op. cit.*, p. 383.
[10] *Anhelo y pasión de la democracia ecuatoriana,* Guayaquil, Imp. de la Universidad, 1948, p. 64.

ni siquiera se atrevió a poner en el tapete de la discusión política la cuestión agraria andina.

Y el panorama se complicó todavía más cuando la pequeña burguesía de la costa, que dependía ante todo del comercio, manifestó su oposición a que se controlase drásticamente la actividad bancaria, por temor a una contracción que paralizara sus negocios; mientras la clase media serrana, con claras miras burocráticas, presionaba en favor de un robustecimiento del aparato estatal. En las propias filas del ejército los ideales iniciales no tardaron en decaer. El sargento mayor Ildefonso Mendoza, símbolo del ala más radicalizada y popular del movimiento, fue destituido de su cargo cuando a la cabeza de un batallón entero intentó oponerse a los ascensos que la oficialidad acababa de otorgarse. Era evidente que las capas medias concebían su "revolución" ante todo como un "acto de justicia" para consigo mismas, y no sólo en la esfera militar. Hasta antes de la trasformación "juliana" los empleos habían escaseado, mas ahora "se crearon cargos sin función, o con funciones subdivididas, para mucha gente. Se triplicaron o cuadruplicaron los sueldos de la alta burocracia. Y al olor de tan rico presupuesto, no tardaron hasta muchos de los díscolos de la víspera en allanarse a la situación, tras los cargos de la nueva banca, de los nuevos organismos administrativos y de la diplomacia".[11]

Y es que, a partir de 1926 concretamente, la "revolución" había conseguido consolidarse como simple movimiento modernizador del estado ecuatoriano. En esta perspectiva fueron suprimidos los llamados "estancos" particulares (monopolios locales o regionales), se centralizaron las rentas públicas, se crearon el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La Asamblea de 1929 sentó además algunos principios progresistas para la época, como el de la función social de la propiedad y la representación de las minorías políticas; estableció el *habeas corpus* y reconoció derechos para los hijos ilegítimos. En este período se instituyó también la Caja de Pensiones para empleados públicos, se dictó una legislación laboral sobre contratos, jornada máxima, desahucio, trabajo de mujeres y menores y se crearon las Inspectorías de Trabajo, medidas que en algo beneficiaron por lo menos a los obreros de los sectores más modernos de la economía nacional, que en realidad no eran muchos.

Mas nada de esto implicó un cambio estructural de envergadura, que modificara sustancialmente la condición de las grandes masas populares. En el mismo año de 1929, es decir, al tiempo en que se expedía una constitución de principios progresistas, el gobierno no vacilaba en reprimir sangrientamente los levantamientos indígenas de Columbe y Colta. La modernización del estado ecuatoriano, como se ve, tenía límites de clase sumamente claros.

La consolidación de la "revolución juliana" correspondió, por lo demás, a un período de convalecimiento coyuntural de la economía ecuatoriana, que las capas medias parecen recordar incluso con nostalgia. Óscar Efrén Reyes afirma que:

...comenzó a circular en gran escala el dinero. Y se advirtió, principalmente en las clases medias, alguna sensación de bienestar. Se aumentó el volumen de compras y

[11] Reyes, *Breve historia...*, p. 749.

pedidos. Y los importadores duplicaron sus solicitudes de sedas, cristalerías, champañas..., automóviles, victrolas y mueblería de metal y demás artefactos que contribuyen a embellecer la vida ecuatoriana...[12]

Dato probablemente ajustado a la realidad si se tiene en cuenta que en 1929, por ejemplo, la balanza comercial de Ecuador registró el déficit más elevado de su historia, con un saldo desfavorable de más de 4 millones de dólares, pese a que las exportaciones se habían recuperado a partir de 1925, estabilizándose en una cifra promedio anual de alrededor de 14 millones de dólares. Tal era justamente la base de esta efímera "prosperidad", que a su vez constituía el piso sobre el que se asentaba el precario equilibrio de fuerzas que volvió viable la faceta modernizante del reformismo "juliano" y hasta ese "embellecimiento" de la vida ecuatoriana que no tardó en disiparse, cual alegría de pobre, tan pronto como se hicieron sentir en el país los efectos de la gran depresión del capitalismo mundial.

II. EL IMPACTO DE LA GRAN DEPRESIÓN

En efecto, la crisis mundial desencadenada en 1929 produjo consecuencias catastróficas en Ecuador. Tanto la merma de la demanda internacional de productos agrícolas como el deterioro de sus precios determinó que el valor de las exportaciones disminuyera desde una magnitud cercana a los 15 millones de dólares en 1928, hasta una cifra apenas superior a los 4 millones en 1933; lo que a su vez motivó una brusca contracción del medio circulante —que en un 60% provenía de dichas exportaciones— y una paralización casi total de los negocios del país. En 1931 algunos bancos se vieron obligados a cerrar las puertas, las reservas de oro disminuyeron en un 60% y el estado tuvo que reducir drásticamente su presupuesto. Sólo a partir de 1934 la situación empezó a presentar ciertos síntomas de convalecencia, gracias al ligero repunte de las exportaciones; pero aún así la endeble economía del Ecuador siguió sufriendo duramente los efectos del colapso.

Tales efectos no fueron desde luego homogéneos en todo el cuerpo social, sino diferenciados según los distintos niveles estructurales de la formación ecuatoriana y de su compleja constelación de clases.

Compuesta por propietarios de plantaciones y comerciantes exportadores, era inevitable, en primer lugar, que la burguesía de la costa sufriera el impacto de la crisis de manera mucho más inmediata y directa que el otro sector de la clase dominante, articulado en torno a los terratenientes semifeudales de la sierra, cuya producción se destinaba casi por entero al consumo interno. Mas estos dos sectores no constituían compartimentos estancos, sino que se hallaban insertos en una misma formación económico-social, compitiendo en el seno de un mismo mercado nacional y disputándose, ahora con más ardor que nunca, el dominio de un solo y único estado. La propia crisis había hecho de este último asunto un problema crucial, en la medida en que el control directo del aparato estatal permitía la implantación de determinadas políticas que cada uno de los contendores considera-

[12] *Los últimos siete años*, p. 179.

ba vitales para su sobrevivencia. La burguesía agroexportadora, por ejemplo. clamó desde un comienzo por una devaluación monetaria que le permitiera trasferir el costo de la crisis a otros sectores; medida a la que naturalmente se opusieron los terratenientes serranos, cuya producción se expendería en ese caso a precios reales más bajos, sin siquiera la posibilidad de resarcirse deprimiendo drásticamente el valor de la fuerza de trabajo, dado el imperio de relaciones todavía feudales de producción en la mayor parte del agro serrano.

Aún después de obtenida tal devaluación en 1932, a raíz de la derrota armada de las huestes terratenientes a que después nos referiremos, la burguesía agroexportadora tuvo que enfrentarse al problema de encontrar un mercado, aunque sólo fuese interno, para su producción. A este respecto es interesante constatar cómo uno de los más conspicuos representantes de dicho sector, Víctor Emilio Estrada, en un informe preparado para el presidente Velasco Ibarra en 1934, reclama en tono casi patético un aumento de los salarios, con el fin de crear una mayor demanda interna de productos agrícolas que compense siquiera en parte la compresión del mercado internacional.[13] De todas maneras, la caída de los precios de los productos tradicionales de exportación en el propio mercado interno es notablemente mayor que la que también experimentan los productos agrícolas de consumo tradicionalmente doméstico.

La burguesía agroexportadora presionaba, además, por la disminución de los gravámenes fiscales a las exportaciones, que en ese entonces se elevaban a cerca de la tercera parte de su valor; demanda que difícilmente podía satisfacer el estado, so pena de agudizar más aún la tirantez con los sectores que directa o indirectamente dependían del presupuesto estatal y que, de todas maneras, fueron duramente afectados por la crisis. En la contienda librada en este nivel había pues que contar también con la presencia de un tercer actor, no carente de importancia: las capas medias.

Si como propietaria de plantaciones y detentadora del comercio exportador la burguesía de la costa fue la más afectada, cosa igual le ocurrió en su calidad de comerciante importador: al principio, porque la depresión determinó la brusca contracción del mercado interno para los artículos importados; después, porque la propia devaluación de la moneda nacional se convirtió en mecanismo protector de los productos elaborados en el país. El mismo Estrada afirma, en otro de sus informes, que hay quienes "han descubierto que el alza inmoderada del cambio actúa como elemento protector, y protector en grado máximo, para elevar los precios de la producción interna, permitiendo que ellos se regulen no por el precio de costo aumentado con una utilidad proporcionada", sino "por la enorme alza que el similar extranjero tiene en el mercado a causa de que el tipo de cambio se encarece". "Yo he sido, y continuaré siendo —incluye—, un partidario del proteccionismo, pero no podré jamás ser partidario del extorsionismo".[14]

La casi totalidad de esa producción "protegida" provenía naturalmente de las instalaciones fabriles pertenecientes a la aristocracia serrana, que en la industria

[13] Víctor Emilio Estrada. *El problema económico del Ecuador en 1934*, Guayaquil. Ecuador. Litografía La Reforma. 1934. p. 2.

[14] Exposición presentada por el ministro de Hacienda señor V. M. Estrada ante la H. Cámara de Diputados, versión taquigráfica de la sesión del 17 de septiembre de 1934.

textil, por ejemplo, poseía más del 90% de la inversión nacional total registrada en 1934. Por eso, en un artículo de la época llega a afirmarse que: "El gobierno ha negado a los productores (*sic*) de la costa el derecho de importar productos similares a los de la industria del interior, a inferiores precios (harinas, telas de algodón, etc.), obligándoles a consumir los de la sierra y dándoles, además, a los productores e industriales del interior, enorme protección aduanera y concediéndoles con gran facilidad divisas extranjeras al tipo de cambio oficial".[15]

En aquel entonces se habla incluso del "desarrollo halagador" de ciertas industrias, más la expresión debe enmarcarse en sus justas proporciones. La inversión total en la industria textil, por ejemplo, que era la más "floreciente" del país, ni siquiera llegaba a los 2 y medio millones de dólares en 1934. Pero esto es apenas un dato lateral; lo importante está en que tal industria no podía rebasar los límites estrechos de cierta "sustitución de importaciones", puesto que una ampliación del mercado interno habría requerido necesariamente una trasformación radical de las relaciones feudales de producción imperantes en el agro serrano, trasformación que mal podían impulsar esos "industriales nacionales" que no eran otra cosa que una franja de la aristocracia terrateniente (la mayor parte de las "industrias" de la época se encontraban incluso físicamente incrustadas en las haciendas). El problema de nuestro desarrollo era, pues, el de un círculo vicioso, que sólo podía ser roto mediante un proceso revolucionario (aunque sólo fuese de carácter democrático-burgués), pero para el cual las condiciones subjetivas parecían no haber madurado aún, pese a que la crisis exacerbó las contradicciones sociales de todo orden.

En efecto, hasta ahora hemos examinado el conflicto a nivel "alto", es decir, en el seno de las clases dominantes; mas es obvio que las verdaderamente azotadas por la crisis fueron las clases subordinadas, aunque entre ellas también los efectos fueron heterogéneos.

El grupo más directo e inmediatamente afectado fue, como es de suponer, el constituido por los trabajadores agrícolas de la costa, cuyo salario sufrió una merma que osciló entre el 20 y el 40%, produciéndose además en sus filas un elevado índice de desocupación. Sin embargo, ni esa desocupación ni la brusca compresión de los salarios ocasionaron tensiones de magnitud en el agro, sino que motivaron un éxodo masivo hacia Guayaquil, que entre 1929 y 1934 vio crecer su población a un ritmo anual superior al 5%. De suerte que, a la postre, el efecto social más importante en este nivel fue la conformación de un núcleo importante de subproletariado, básicamente constituido por los emigrados del campo pero también, en una proporción nada despreciable, por los sectores populares urbanos que la crisis lanzó a la desocupación.

Los campesinos de la sierra fueron menos afectados, no sólo porque la agricultura de consumo doméstico sufrió menos que la de exportación, sino también porque el sistema predominante de remuneración, en recursos naturales y en especies, los protegió en buena medida de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, no parece aventurado afirmar (sobre todo habida cuenta de los sangrientos sucesos de 1932), que una parte de esos campesinos cayó también en la desocupa-

[15] Hernán Escudero M., "Control de cambios", en *Revista de Derecho y Ciencias Sociales*, Quito, Universidad Central del Ecuador, julio de 1933, p. 210.

ción y tuvo que emigrar a la ciudad de Quito. Pese a la sobrevivencia tan marcada de relaciones feudales de producción en el agro serrano, en la época que venimos analizando el capitalismo comenzaba a implantarse lentamente y desde arriba ("vía Junker", si se quiere) en ciertas áreas donde los terratenientes contrataban ya jornaleros agrícolas ocasional o temporalmente; en las zonas aledañas a Quito, en especial, había ya un semiproletariado rural que la crisis lanzó a la desocupación.

En cuanto al proletariado de los sectores más modernos del país, esto es, de la industria y los servicios públicos, no sufrió de inmediato ni tan duramente las consecuencias de la depresión; su salario real empezó a descender más bien a partir de 1934, al producirse un alza notable del costo de la vida. En cambio la pequeña burguesía —comerciantes menores, artesanos y profesionales independientes— sintió rápidamente los efectos de la contracción general de los negocios del país.

III. LA LARGA CRISIS DE HEGEMONÍA

La depresión económica produjo, pues, una exacerbación de todas las contradicciones sociales, que se tradujo por una crisis de hegemonía de vastas proporciones. Por eso en la década de los 30 se sucedieron en el mando nada menos que 17 gobernantes, y en un sólo año, el de 1932, desfilaron por el palacio presidencial 5 mandatarios y Ecuador sufrió una cruenta guerra civil.

El primer gran efecto político de la crisis se produjo en realidad en 1931, con el derrocamiento del gobierno de Isidro Ayora, cuya caída marcó el fin del régimen emanado de la revolución de julio de 1925. Y es que la crisis no tardó en minar las bases económicas de este régimen, que finalmente se había consolidado a expensas de la burguesía de Guayaquil, es decir, gracias a los controles y gravámenes impuestos a la actividad agroexportadora y comercial-financiera en general. Deprimidas estas actividades se agrietó también el punto de apoyo político más firme del movimiento "juliano", constituido por esas capas medias cuyas demandas y aspiraciones resultaba imposible satisfacer en la coyuntura actual. Bastaron, pues, unas cuantas manifestaciones estudiantiles y populares para que la situación del gobierno de Ayora se volviese insostenible, por lo que los propios militares decidieron derrocarlo en agosto de 1931.

Hecho que desde luego no implicaba ninguna solución. Por el contrario, la deposición de Ayora no fue más que el síntoma de la agudización de la crisis política, de la que las fuerzas más reaccionarias trataron de sacar partido, alentadas tanto por el debilitamiento de la burguesía agroexportadora como por el fracaso que la fórmula reformista acababa de experimentar. En efecto, los terratenientes conservadores decidieron explotar el descontento que la crisis generaba en el pueblo y para ello constituyeron en Quito la llamada Compactación Obrera Nacional, movimiento de corte fascistoide que agrupaba a los ex campesinos y artesanos empobrecidos o caídos en la desocupación, fáciles de manipular gracias al dominio ideológico absoluto de la Iglesia católica en la sierra.

Con dicha base, los conservadores lanzaron la candidatura del hacendado Neptalí Bonifaz para presidente de la República, obteniendo una amplia victoria en las elecciones de octubre de 1931. Mas, el elegido fue descalificado por el Congreso nacional pocos meses después, aduciendo que el propio Bonifaz había declarado ser peruano en más de una ocasión. En respuesta, los conservadores movilizaron no sólo a las huestes civiles de la Compactación Obrera Nacional, sino toda la maquinaria política que habían logrado montar y que contaba con amplias ramificaciones en los cuerpos armados, especialmente a nivel de una tropa que no era, por su extracción social, otra cosa que una prolongación de los famosos "compactados". El 26 de agosto se sublevaron algunos batallones, desencadenándose así la guerra civil de "los cuatro días", que sembró de cadáveres las calles de la capital y terminó con la derrota de las fuerzas de Bonifaz, quien en ningún momento consiguió el apoyo de la oficialidad. Una de las paradojas más tristes de nuestra historia determinó, pues, que la primera reacción aparentemente "popular" a la crisis fuese de signo derechista y que la insurrección de una tropa manipulada por el clero y los terratenientes tuviera que ser aplastada a sangre y fuego por los contingentes dirigidos por la oficialidad progresista.

Este desenlace no resolvió sin embargo la crisis política, que tampoco podía ser superada con el simulacro de elecciones realizado poco después, en octubre de 1932, donde gracias a un escandaloso fraude resultó "elegido" presidente de la República el candidato de la burguesía agroexportadora, Juan de Dios Martínez Mera.

El malestar social continuó y las manifestaciones callejeras se multiplicaron, protagonizadas por los "antiguos compactados" y por "gentes del hampa", según el decir de nuestros historiadores. Se trataba en verdad de esas masas marginales conformadas a consecuencia de la crisis y que ahora ya no obedecían estrictamente a directivas conservadoras, sino que empezaban a aglutinarse en torno a un caudillo que iba a marcar hondamente el rumbo político de Ecuador: José María Velasco Ibarra.

Por eso, cuando Martínez Mera se vio forzado a renunciar en 1933, Velasco Ibarra no tuvo dificultad en triunfar en las elecciones realizadas en ese mismo año. De una parte contó con el apoyo amplio del subproletariado de Quito y también de Guayaquil; mientras que, de otra parte, ni los terratenientes conservadores ni la burguesía liberal se atrevieron a oponerle candidatos. Prefirieron ceder el paso a este personaje que se proclamaba cristiano al mismo tiempo que liberal y que en todo caso se presentaba como un mal menor dentro del crítico contexto descrito. Así que finalmente sólo contendieron con Velasco Ibarra un candidato socialista y otro comunista, a los que el caudillo derrotó con facilidad. Frente a los 42 271 votos del triunfador, el candidato comunista, por ejemplo, obtuvo apenas 474 sufragios.

A pesar de su popularidad Velasco permaneció poco tiempo en el mando. Una oposición combinada de la burguesía de Guayaquil y la clase media lo derrocó antes de cumplir el primer año de su gestión presidencial y sin que sus bases populares pudieran hacer nada para sostenerlo.

Luego del derrocamiento de Velasco la crisis política se agudizó nuevamente. Los militares encargaron el gobierno a Antonio Pons, quien renunció al poco tiem-

po aduciendo que no podía asumir la responsabilidad de convocar a nuevas elecciones, ya que ello equivaldría a entregar el mando a los conservadores. Así que prefirió devolvérselo al ejército, único grupo organizado que en esta coyuntura podía ejercer un papel "arbitral", y que creyó hacerlo nombrando jefe supremo del país a un hombre oscuro y aparentemente anodino, pero que a la postre desempeñó un papel poco grato en nuestra historia: el ingeniero Federico Páez.

Páez permaneció dos años en el poder, de 1935 a 1937, en una coyuntura caracterizada por el ascenso de las luchas obreras y el incremento de las reivindicaciones de las capas medias, a lo que el jefe supremo respondió con medidas puramente represivas que fueron deteriorando cada vez más el clima político, hasta provocar una nueva intervención del ejército, que derrocó a Páez y lo remplazó por un oficial progresista, el general Alberto Enríquez. Durante el gobierno de éste la clase obrera consiguió la expedición del código del trabajo; los sectores patrióticos del país lograron que se arbitraran medidas tendientes a abolir los privilegios más escandalosos de las compañías extranjeras —exención de impuestos, derecho a "puertos libres", etc.—; y la izquierda en general gozó de un clima de libertad, del que aprovechó para robustecerse y consolidar sus organizaciones. Eventos tan importantes como la reunión del Tercer Congreso de Trabajadores de Ecuador contaron incluso con el apoyo de dicho mandatario.

IV. REVITALIZACIÓN Y NUEVA CRISIS DE LA DOMINACIÓN OLIGÁRQUICA

Estábamos, sin embargo, entrando en una nueva coyuntura económica, caracterizada por el repunte de las exportaciones, que entre 1936 y 1937 prácticamente se duplicaron, pasando de un valor de 5 millones 700 mil dólares a una cifra cercana a los 11 millones de dólares. Este repunte de la actividad agroexportadora trajo naturalmente consigo una revitalización política de la burguesía de Guayaquil, que en 1938 logró retomar directamente el gobierno por medio de Aurelio Mosquera Narváez, a raíz de la renuncia del general Enríquez. Y es que, en realidad, aquella burguesía —unida a esos monopolios extranjeros cuyas prebendas trató Enríquez de abolir— había venido realizando una labor de zapa en las filas del propio ejército, tendiente a aislar y finalmente eliminar a la fracción progresista de éste. La renuncia de Enríquez significó ya un triunfo de la reacción, pero el asunto no terminó con eso. Cuando la Asamblea legislativa propuso el ascenso del coronel Luis Larrea Alba a general, Mosquera Narváez, que acababa de asumir el poder, se opuso terminantemente a tal ascenso, por la razón llana y simple de que se trataba de un militar progresista. Este veto del ejecutivo equivalía a una purga en el ala democrática del ejército y se inscribía dentro de un plan represivo de mayor envergadura aún. Por eso, cuando la Asamblea insistió en dicho ascenso, Mosquera aprovechó la ocasión para disolverla por la fuerza, en diciembre de 1938, con apoyo de los elementos más reaccionarios del alto mando militar. Lo cual no fue más que el inicio de una serie de atropellos que el nuevo gobierno oligárquico estaba decidido a perpetrar contra los sectores democráticos de la sociedad, cuyo nivel de organización y combatividad resultaba ya intolerable para los amos tradicionales del país.

Mosquera arguyó que el movimiento estudiantil se había politizado y que las cátedras se habían convertido en "tribuna catequista de principios disolventes", pretexto del que se sirvió para reorganizar las universidades y los colegios laicos, destituyendo a los profesores democráticos para remplazarlos con hombres de confianza del régimen. Todo esto, amparado en una disposición que el espurio Congreso extraordinario que el propio dictador constituyó en febrero de 1939 acababa de promulgar, dando por terminados los cargos de período fijo.

Tanto los alumnos como los profesores y autoridades de los centros afectados se opusieron a tales medidas, desencadenando un movimiento huelguístico que, al ser apoyado por numerosos sindicatos de trabajadores (textiles, tranviarios, choferes, electricistas, etc.) adquirió envergadura a nivel nacional. En respuesta, Mosquera clausuró unas cuantas universidades y colegios y reprimió duramente al Sindicato Nacional de Educadores, a la vez que impulsaba la creación de una organización paralela, del cuño clerical más reaccionario. Y es que, a estas alturas del proceso, la burguesía de Guayaquil actuaba ya plenamente ligada a terratenientes conservadores de la sierra, con los que había constituido un sólido frente oligárquico de dominación. En este sentido se fue tan lejos que, en octubre de 1939, la misma Junta Liberal de Pichincha consideró necesario condenar la política oficial de sus supuestos coidearios en los siguientes términos:

> El gobierno ha traicionado palpablemente los principios doctrinarios, escindiendo las filas del partido con las imposiciones de listas patrocinadas por los ministros de Defensa y Gobierno, para, por este medio vedado por la moral, otorgar el triunfo al adversario conservador a quien no deseaba vivamente tenerle en la oposición; y con esta actitud desleal, se está entregando paulatinamente el estado laico al partido reaccionario.[16]

Era verdad. Aprovechando la disposición que le facultaba a remover a los funcionarios de período fijo, Mosquera Narváez había ubicado a elementos de filiación conservadora en sitios claves de la administración e incluso había violado la tradicional autonomía municipal con el fin de establecer su control también a ese nivel.

Por su parte, el Congreso extraordinario tampoco perdió tiempo: a fin de consolidar la santa alianza con el capital extranjero, restableció la exoneración de derechos de importación para las compañías foráneas, que justamente había sido abolida durante el gobierno de Enríquez. Además, como los sectores progresistas no dejaban de protestar contra todas estas medidas y los obreros y estudiantes expresaban su indignación en manifestaciones públicas, dicho Congreso concedió a Mosquera las facultades extraordinarias, con lo que el carácter dictatorial del régimen acabó de consolidarse.

En este punto andaban las cosas cuando Aurelio Mosquera falleció repentinamente en noviembre de 1939. Pero su muerte, como es obvio, no alteró significativamente el panorama político. Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente del Congreso y conocido abogado de las compañías extranjeras, se encargó de la pre-

[16] Trascrito por Gualberto Arcos en su libro *Años de oprobio*, Quito, Imp. Fernández, 1940, p. 64.

sidencia y convocó a elecciones para enero de 1940. Como deseaba presentar su propia candidatura, renunció un mes antes de los comicios, siendo remplazado por el doctor Andrés, F. Córdova, quien se encargó de perpetrar uno de los más escandalosos fraudes de que se tenga memoria en Ecuador.

En efecto, en las elecciones de 1940 participaron tres candidatos: el mencionado Arroyo, por el Partido Liberal, Jacinto Jijón, por el Partido Conservador, y José María Velasco Ibarra, apoyado por múltiples sectores deseosos de oponerse al sector oligárquico más odiado, que era precisamente el de Arroyo. Velasco fue sin duda quien más votos obtuvo, seguido seguramente del candidato conservador; pero el resultado oficial de las elecciones arrojó resultados favorables a Arroyo del Río. Para todos el fraude fue evidente y más todavía para las masas velasquistas que no tardaron en lanzarse a las calles a protestar por los hechos; en respuesta, el gobierno hizo brutales demostraciones de fuerza, que dejaron incontables heridos en la ciudad de Guayaquil. La escalada represiva era, pues, patente, y ahora se extendía a los sectores más amplios de la población.

La situación se tornó más grave aún cuando Velasco y la plana mayor del velasquismo intentaron responder promoviendo un levantamiento militar, que el gobierno conjuró a tiempo. Velasco fue finalmente apresado y desterrado a Colombia, hecho que desde luego no marcó el fin de la escalada represiva. Un gobierno surgido en las condiciones mencionadas no podía mantenerse de otra manera que por el terror, tanto más necesario cuanto que el nivel de vida de las masas no haría más que deteriorarse en este período, pese a que la situación económica del país, considerada en abstracto, registraba condiciones favorables. En efecto, el monto de nuestras exportaciones llegó a más de 10 millones de dólares en 1942, a cerca de 23 millones en 1943 y casi a 29 millones en 1944 (estábamos, no lo olvidemos, en el momento de la segunda guerra mundial); pero ello no se tradujo más que por una inflación galopante, con el consiguiente empobrecimiento de las clases populares. Entre 1940 y 1944, los precios internos se duplicaron, mientras los salarios y otras remuneraciones permanecieron virtualmente estancados.

Y esto no fue todo lo nefasto del régimen de Arroyo. En 1941 las tropas de la oligarquía peruana invadieron nuestro territorio, colocando al gobierno arroyista ante el siguiente dilema: armar al pueblo para defender las fronteras patrias, pero corriendo el riesgo de que con las mismas armas se desencadenase luego una insurrección antioligárquica; o mantener el "orden" interno y no ofrecer ninguna resistencia de envergadura al invasor. Arroyo tomó naturalmente la segunda opción y ni siquiera se decidió a enviar los cuerpos militares mejor armados a la frontera, puesto que le eran indispensables como aparato interno de represión.

Así que en esta ocasión sufrimos el cercenamiento de casi la mitad de nuestro territorio; mas ni ello impidió que la oligarquía arroyista continuara reinando, siempre por medio del terror. Pero las contradicciones internas seguían agudizándose y subterráneamente se gestaba un movimiento popular de vastas proporciones.

Confiado en la omnipotencia de sus cuerpos represivos, Arroyo del Río declaró, en abril de 1944, que no se alejaría del gobierno antes de terminar el período para el cual había sido "elegido". Sin embargo, unos cuantos incidentes ocurridos entre el 26 y el 27 de mayo fueron la chispa que encendió la hoguera del día 28. Tanto el asesinato de una menor como un choque —al parecer accidental—

entre elementos del ejército y del cuerpo de carabineros, desencadenó en efecto un levantamiento popular que prácticamente liquidó a esa especie de guardia pretoriana de Arroyo que eran los carabineros, hecho que determinó la inmediata renuncia de éste. Entonces, la Alianza Democrática Ecuatoriana, frente patriótico formado por los partidos conservador, socialista, comunista y una fracción disidente del liberalismo, así como por los movimientos Vanguardia Revolucionaria Socialista y Frente Democrático, llamó a Velasco Ibarra para que asumiera la primera magistratura del país.

En realidad, fue la apoteosis del caudillo. Las campanas repicaron a su paso por las ciudades; inmensas muchedumbres lo vivaron por doquier; el cura y el militante comunista, el proletario y el gamonal, hombro con hombro, le dieron la bienvenida. Si onces años antes Velasco había aparecido como el salvador de los "marginados", ahora, en mayo de 1944, todos lo aclamaron como a un redentor.

El 31 de mayo Velasco fue proclamado presidente, ante una inmensa y heterogénea muchedumbre que copaba la plaza principal de la capital. "El pueblo, los estudiantes, los hombres de izquierda que... participamos en el derrocamiento de Arroyo del Río, cabeza y símbolo de la corrupta oligarquía 'liberal', tuvimos, inicialmente, la ilusoria certeza de haber realizado una auténtica revolución popular y democrática", declararía, 25 años más tarde, el dirigente comunista José María Roura,[17] quien participó en las jornadas de mayo como dirigente estudiantil.

Certeza ilusoria, en realidad, pues pronto el ímpetu democrático y popular iba a ser frenado por el propio caudillo. Éste, que en sus discursos iniciales había prometido por lo menos un saneamiento "moral" del país y un castigo "ejemplar" para los arroyistas, no tardó en reconocer que no estaba dispuesto a ir muy lejos en ese sentido:

> El capital, los negocios —dijo— son muy susceptibles, asustadizos; si bloqueamos los fondos de cuatro pícaros nos exponemos por la desconfianza y el temor a producir una depresión que cueste millones.[18]

La "revolución" comenzaba, pues, a enfrentarse con la dura realidad, mientras la escasez de los víveres y su carestía agravaban el hambre de las masas. En noviembre de 1944 Velasco ya no pudo soslayar este problema: "sufrimos por las subsistencias", admitió, "pero estamos trabajando para que esto mejore después de poco". Y reconoció que de hecho existía un profundo malestar en el país.

Pasado el primer fervor, el frente patriótico que había llevado a Velasco a la presidencia comenzó, por lo demás, a resquebrajarse. Sus contradicciones internas se hicieron patentes en enero de 1945, al producirse en Quito un choque ya frontal entre los velasquistas propiamente dichos y los sectores de izquierda que también habían integrado la Alianza Democrática. Ese turbio y agitado 16 de enero, Velasco hizo un patético llamado a la calma y la unidad, por sobre los rostros sangrantes de muchos militantes comunistas que acababan de ser agredidos por la derecha velasquista:

[17] Declaraciones para la revista *Mañana*, núm. 295, del 20 de mayo de 1969, Quito, Ecuador.

[18] Recopilación de discursos de Velasco Ibarra publicada con el título *El 28 de mayo: balance de una revolución popular*, Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1946, p. 62.

Escuchad, amigos —les dijo— escuchad: vosotros hicísteis una revolución original. Para esta revolución se unieron todos los ecuatorianos: para esta revolución se unieron el rojo con el conservador; el fraile con el soldado; la mujer y el hombre; el universitario y el obrero; todos hicieron la Revolución gloriosa de Mayo. En lugar de decir ¡abajo!, en lugar de gritar ¡vivas!, reflexionad que estáis en el momento decisivo de la patria, que si se hunde la Revolución de Mayo no nos salvaremos...[19]

La "revolución" estaba hundiéndose, en verdad, y su profeta clamaba en el desierto. El conservador y el comunista podían haber estado acordes en derrocar a Arroyo, pero ya no lo estaban, ni podían estarlo, en cuanto a emprender una trasformación del país. Y menos aún podían coexistir ahora en el mismo frente, cuando el común denominador del patriotismo herido por la derrota que nos infligiera Perú (lazo momentáneo de unión entre diferentes clases) había desaparecido, junto con el aparente hundimiento de los culpables más directos de tal derrota.

Además, el propio Velasco reconoció después que muchos se habían unido al frente patriótico con el fin de pescar a río revuelto, satisfacer rivalidades intergrupales o, simplemente, con la finalidad de enriquecerse con los fondos fiscales o a través de diferentes tipos de negociados. En efecto, en junio de 1945, Velasco se vio forzado a enviar una circular a todos los gobernadores advirtiéndoles que "la prensa del país está alarmada verdaderamente por la ola de fraudes y desfalcos que ha estallado en la República".[20]

Mientras la cúspide de la "revolución" degeneraba en esto, la izquierda hacía sus últimos empeños para por lo menos dotar al país de una Constitución progresista, la que efectivamente fue promulgada en mayo de 1945, pese a la oposición del propio Velasco, que en ese momento se apoyaba ya sin tapujos en las fuerzas de derecha, al mismo tiempo que mistificaba la realidad insistiendo en que el único problema que azotaba al país era el de orden "moral".

Pero las masas, que sentían en carne propia una miseria cada vez más acentuada, no fueron de su parecer. En diciembre de 1945 se lanzaron a las calles de Guayaquil a realizar la "marcha del hambre", que fue brutalmente reprimida por la policía. Y, como el malestar continuó expresándose a pesar de todo, Velasco no encontró mejor solución que la de proclamarse dictador, cosa que hizo en marzo de 1946. Fue el punto de partida de una represión sistemática de los obreros, los estudiantes y los partidos de izquierda, a todos los cuales se acusó de "bolcheviques" y "terroristas".

"Depurado" de esta manera el país, Velasco estimó que podía convocar a una nueva Asamblea Constituyente para que "legalizara" la situación, asamblea en la que la izquierda ya no tuvo desde luego ninguna participación. Tal Asamblea dictó una nueva Constitución, dejando de lado todos los principios progresistas establecidos en la anterior y nombró a Velasco presidente "constitucional" del país, pero en circunstancias muy particulares: ante la amenaza de las tropas controladas por oficiales leales al caudillo. Y es que, realizada por Velasco la tarea de mistificación y represión que la derecha necesitaba, ésta no veía claramente por qué razón lo mantendría mayor tiempo en el gobierno.

19 *Ibid.*, p. 309.
20 *Ibid.*, p. 413.

En los meses subsiguientes la situación no hizo más que empeorar. El costo de la vida, que en 1944 arrojaba un índice de 207 (año base: 1937), se elevó a 268 en 1945, 310 en 1946 y 355 en 1947. Además, entre enero de 1947 y mayo del mismo año, las reservas netas de divisas del Banco Central decayeron en 93 millones de sucres. En fin: "durante 1947 continuaron las agitaciones provocadas desde el gobierno y agravadas por el desorden en el manejo de las cuestiones económicas. En agosto, la situación, ya insostenible, hizo crisis. El ministro de Defensa, un oficial superior, se resolvió a dar el golpe de estado. Velasco Ibarra fue apresado, obligado a presentar su renuncia y luego expulsado otra vez del país".[21]

Ocho días después del derrocamiento de Velasco, y luego de algunas escaramuzas entre sectores del ejército, se hizo cargo del gobierno el presidente del Congreso, Mariano Suárez Veintimilla, quien convocó de inmediato a Congreso extraordinario. En septiembre del mismo año dicho Congreso nombró presidente de la República a Carlos Julio Arosemena Tola, por el tiempo que faltaba para que concluyera el mandato de Velasco; esto es, hasta agosto de 1948. Episodio con el que se cerraba un período tormentoso de nuestra historia y se abría otro, conocido como de "paz" y estabilidad política.

V. AUGE DE LA ECONOMÍA BANANERA Y ESTABILIZACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA

Constituye un lugar común entre nuestros historiadores subrayar el contraste entre el período que va de 1925 a 1948, durante el cual se suceden 23 gobiernos en igual número de años, y el período comprendido entre 1948 y 1960, en que sólo tenemos tres gobernantes, elegidos en condiciones normales (esto es, sin el tradicional fraude) y que terminan asimismo normalmente sus mandatos. Hecho tanto más insólito, cuanto que los gobernantes en cuestión representaron tendencias políticas diferenciadas entre sí, pero en principio similares a las que acababan de enfrentarse, con suerte distinta, en el caótico período anterior. Tales mandatarios fueron el liberal Galo Plaza (1948-52), el caudillo populista José María Velasco (1952-56) y el conservador Camilo Ponce (1956-60).

El período de Plaza, sobre todo, fue un lapso en el que, por vez primera y acaso única, la burguesía ecuatoriana pareció estar ya "madura" para el ejercicio de su dominación, siendo por fin capaz de imponer su hegemonía sin recurrir constantemente a la represión ni tener que ensayar por lo menos una vez al año una nueva fórmula de gobierno. Gestor de la política que hoy denominaríamos *desarrollista,* Galo Plaza es sin duda el primer mandatario burgués *moderno* de la historia ecuatoriana y quien con mayor éxito ha logrado consolidar la dominación de su clase, en estrecha vinculación con la política imperial.

Su administración tuvo, en efecto, características particulares, en la medida en que dicho mandatario comenzó por contratar misiones extranjeras para que realizaran diagnósticos del país y estudios de factibilidad; enfocó el problema econó-

[21] Alfredo Pareja Diezcanseco, *La lucha por la democracia en el Ecuador,* Quito, Ed. Rumiñahui, 1956, p. 123.

mico de Ecuador en términos de producción y no meramente monetarios, como hasta entonces se había hecho; elaboró planes de fomento de la producción y los "implementó" (como solían decir sus tecnócratas) con asistencia crediticia y técnica de fuera; planificó, en la medida en que un gobierno burgués puede hacerlo, el aprovechamiento de algunos recursos naturales (planes de colonización, sobre todo); trató, en fin, de tecnificar la administración atendiendo, aquí como en los demás campos, al asesoramiento norteamericano.

Como lo constataremos más adelante, esta "racionalización" estaba condenada al fracaso a mediano y no se diga a largo plazo, por la imposibilidad de lograr un desarrollo sostenido, armónico y sin contradicciones en una formación social capitalista y además subdesarrollada. Pero es un hecho que, gracias a la coyuntura particularmente favorable en que le tocó actuar, Plaza consiguió muchos de sus propósitos.

De hecho, todo este período de "paz" y "estabilidad" política coincidió con el gran auge de las exportaciones de banano, que crecieron a un ritmo realmente vertiginoso. Para sólo citar las cifras más significativas, recordemos que en 1948, año en que Plaza asumió la presidencia, el valor total de las exportaciones ecuatorianas alcanzó la cifra de 40 millones de dólares, cinco veces mayor que el promedio anual de la década anterior y que representaba —si se quiere otro término de comparación— el doble del valor obtenido en 1943. Entre 1948 y 1960 el valor de las exportaciones se triplicó, alcanzando la magnitud de 120 millones de dólares en este último año. Sobre esta base, la economía ecuatoriana se desarrolló a un ritmo acelerado, superior, incluso, al de la mayor parte de las economías latinoamericanas, aunque dicho ritmo comenzó a decrecer a partir de 1955.

De otra parte, el costo de la vida, que entre 1938 y 1948 prácticamente se cuadruplicó, al pasar, en términos relativos, de 100 a 396, en el período que ahora analizamos se mantuvo casi estable: entre 1948 y 1951 sólo aumentó de 100 a 111, y de 1952 a 1960 se elevó apenas en un 6% en total.

En fin, la rápida ampliación de la frontera agrícola, con la incorporación de nuevas tierras dedicadas al cultivo del banano, permitió la creación de muchas fuentes de trabajo que contribuyeron a descongestionar ciertas áreas donde la sobrepoblación relativa empezaba a constituir ya un problema crucial (algunas áreas rurales de la sierra sobre todo).

La expansión de la producción bananera en Ecuador implicó, en buena medida, un proceso de desnacionalización de nuestra economía agraria, hasta entonces controlada por propietarios locales. Sin embargo, sería exagerado tipificar esta fase como una exclusiva situación de "enclave". De hecho la burguesía ecuatoriana posee aproximadamente las tres cuartas partes de las plantaciones de banano y, aunque el circuito de comercialización no podía escapar en última instancia al control monopólico internacional, hubo una burguesía financiera nativa que se incrustó en él, en calidad de socio menor. Se trataba, en suma, de una situación de dependencia hábilmente negociada, que explica el éxito fugaz del desarrollismo placista.

Durante este período no se articuló en Ecuador un proyecto de industrialización, sino que todo el desarrollo económico del país estuvo concebido en términos de una inserción especializada y tecnificada en la división capitalista imperialista

del trabajo. Esto no obstante, pueden detectarse aquí los primeros asomos de modernización de la agricultura y la ganadería de consumo doméstico, incluyendo el procesamiento industrial de productos agropecuarios.

La estabilización política temporal del sistema no estuvo, pues, determinada de manera mecánica por el auge bananero, sino que obedeció a una constelación compleja de factores. Entre éstos, es de particular significación el hecho de que, para esta época, el modo de producción capitalista se hubiera ya extendido a un ámbito muy amplio de la formación social ecuatoriana, reduciendo al modo de producción feudal a una esfera no sólo subordinada sino además restringida, aun en la región geográfica en que tradicionalmente había imperado, es decir, en la sierra. Lo cual determinó, como es natural, la abolición del carácter antagónico de la contradicción entre liberales y conservadores, ya que el propio Partido Conservador pasó a representar intereses básicamente burgueses.

Hacendado serrano cuyas empresas agroindustriales se convirtieron en un "modelo" de explotación capitalista, Galo Plaza constituía justamente el símbolo de las trasformaciones operadas en su región. Adornado todavía con blasones, Camilo Ponce era, por su parte, una especie de "junker" en vías de modernización. ¿Qué diferencia de fondo podía entonces separar a estos dos hombres y a los sectores sociales que representaban y qué oposición sustancial podía interponerse entre ellos y la burguesía agroexportadora del litoral?

Próspera a consecuencia del repentino "boom" del banano que proporcionaba ingresos para "todos", y ya sin graves grietas en la cúspide, la clase dominante ecuatoriana en su conjunto podía darse ahora el lujo de poner en práctica y "respetar", por primera vez, las reglas del juego democrático-burgués, por lo menos mientras durase esta época de "prosperidad".

Y no era todo. Las migajas de la bonanza habían llegado incluso a las capas medias y la pequeña burguesía, que en esa coyuntura vinieron a constituirse en un firme punto de apoyo del sistema. Según un estudio realizado por el economista Reinaldo Torres por ejemplo, tales sectores representaban en 1950 el 20.7% de la población total del país y percibían el 28% del ingreso nacional; en 1956 representaban el 23.4% de la población total y percibían el 31.4% de dicho ingreso.[22]

Además, la política de Galo Plaza fue muy hábil para con estos sectores. Comprendió que aun buena parte de los que se decían socialistas era gente con la que ahora se podía contar, y los llamó a colaborar con su gobierno, cosa que el propio Partido Socialista aceptó, de manera oficial. En beneficio de la burocracia promulgó una ley de carrera administrativa destinada a garantizarle estabilidad, a la vez que con su política de fomento de la producción favorecía la consolidación de una pequeña y mediana burguesía rural en las áreas de colonización.

Los antiguos elementos "perturbadores" se convirtieron así en un factor momentáneo de estabilidad: devenida clientela liberal, la "clase media" permitió a la gran burguesía resolver la paradoja permanente de su historia, que había consistido en la imposibilidad de constituirse en la clase ideológicamente hegemónica, pese a ser ya la clase dominante en el terreno económico. Ahora, en cambio, todo

[22] *Los estratos socio-económicos del Ecuador*, Quito, Junta Nacional de Planificación, 1960. Bajo la denominación de "clase media" se incluye en este estudio tanto a las capas medias propiamente dichas como a la pequeña burguesía urbana y rural.

parecía contribuir a la consolidación de esa hegemonía: bonanza económica, superación de antagonismos en la cumbre, constitución de una clase de apoyo, idilio con el imperialismo (que llegó a nombrar a Plaza "hombre de las Américas").

Y algo más. Como la intelectualidad "socialista" había sido mal que bien la animadora, impulsora y organizadora de muchos núcleos de trabajadores, su defección no podía dejar de tener consecuencias a este nivel; de hecho, ella sembró la confusión en muchos sectores de la clase obrera, debilitando a la izquierda en su conjunto. Esto fue, además, la causa de la división ocurrida en el seno del Partido Socialista en 1960, cuando el ala derecha apoyó una nueva postulación de Plaza, lo que obligó al ala izquierda a separarse y formar otra agrupación política: el Partido Socialista Revolucionario.

Pero, pese a su aureola de paz, el período 1948-1960 no estuvo exento de tensiones sociales. Durante el mismo mandato de Plaza el subproletariado de Guayaquil —para el que la bonanza ciertamente no había llegado— expresó su descontento robusteciendo el movimiento populista denominado Concentración de Fuerzas Populares, cuya caudillo local, Carlos Guevara Moreno, llegó a dirigir la municipalidad de aquella ciudad. Fue, por lo demás, este subproletariado el que dio el triunfo a Velasco Ibarra en 1952, como una clara muestra de repudio al placismo.

El proletariado, por su parte, fue haciéndose presente en la escena política de manera cada vez más combativa, sobre todo durante el gobierno de Ponce, quien respondió con "mano dura". Era evidente que la "paz" burguesa empezaba ya a deteriorarse. Sin embargo, lo peor sólo advino en 1959, cuando las manifestaciones populares arreciaron en Guayaquil y Camilo Ponce dio la orden de tirar a matar, realizando una masacre que dejó un saldo de por lo menos un millar de muertos. La etapa "democrática" se cerraba así con broche de sangre y mostrando todas sus lacras: aun en aquel período de "prosperidad" y creación de fuentes de trabajo, la miseria y la desocupación habían ido acumulándose de manera alarmante en la principal ciudad del país, donde los "marginados" representaban más del 50% de la población.

VI. UNA NUEVA ETAPA CRÍTICA

Las ilusiones democrático-burguesas acabaron por derrumbarse junto con la deleznable base que las había engendrado, cuando el "boom" del banano entró en su definitivo ocaso. Aunque el ritmo de incremento de las exportaciones empezó a disminuir desde antes, y sus precios a declinar, el colapso brutal sólo se produjo en 1961, al bajar el volumen de las exportaciones de banano en un 5.8% y el de las de café en cerca de un 20%. Ese fatídico año el ingreso percápita disminuyó en un 1.1% y la parte del producto nacional dedicada a la remuneración de la fuerza de trabajo decreció en 1.5%. Los precios internos, por su parte, empezaron a elevarse vertiginosamente. Alarmado, el gerente del Banco Central creyó necesario advertir, en su Memoria correspondiente a 1961, que de no arbitrarse medidas adecuadas, la crisis "adquiriría una complicación tan severa que posible-

mente pueda traducirse en graves conflictos sociales con repercusiones y alcances imposibles de ser previstos en la actualidad".

Advertencia que, a estas alturas, sonaba más bien a profecía del pasado. La sociedad ecuatoriana estaba en plena efervescencia desde 1959 y ni la masacre realizada ese año consiguió aplacar la protesta de las masas, que durante todo el año siguiente permanecieron movilizadas. El proceso electoral de 1960, que llevó a Velasco Ibarra por tercera vez a la presidencia, no fue más que un pretexto para la expresión del enorme malestar acumulado. El propio caudillo lo comprendió, y por eso dio a su campaña un tinte verbalmente antioligárquico y antimperialista, aunque, al igual que en anteriores ocasiones, nada hizo desde el gobierno para remediar la situación. Así que la efervescencia continuó, acentuada no sólo por el deterioro de nuestra economía, sino además alimentada por las esperanzas que el proceso de liberación de Cuba había despertado en muchos sectores de la población. Las huelgas estudiantiles y sobre todo obreras se extendieron como un reguero de pólvora en 1961 y Velasco fue perdiendo poco a poco el control de la situación, hasta que en noviembre de ese año el ejército lo depuso. La fachada constitucionalista del sistema acababa, pues, de quebrarse, pero aun así la "tradición" acumulada desde 1948 siguió pesando lo suficiente como para que se tratara de dar a la ruptura cierto viso de legalidad. Por eso se permitió que asumiera la presidencia el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, quien trató de imprimir un sello progresista a su gobierno. Éste se caracterizó, en efecto, por un respeto a las organizaciones de izquierda en el plano interno y, en el terreno internacional, por un nacionalismo que necesariamente tomó un cariz antimperialista, dada la coyuntura política del continente (presión cada vez más fuerte de Estados Unidos para que los gobiernos latinoamericanos adoptaran una línea dura contra todo lo que, de cerca o de lejos, significara "castrismo"). Decorosa por cierto, la actitud de Arosemena fue insuficiente para imprimir un nuevo rumbo a Ecuador, aunque sí bastó para granjearle la enemistad de la clase dominante y el imperialismo.

Por lo demás, las fuerzas revolucionarias eran todavía muy débiles, pese al gran fervor que en ese campo se observaba. No olvidemos que justamente en este momento se produjeron graves escisiones en el seno del marxismo ecuatoriano, sobre todo con la fisura producida en el Partido Comunista, que aunque a la postre contó con la fidelidad casi total de su base obrera y campesina, fue sin embargo sacudido seriamente. Perdió, entre otras cosas, la dirección de URJE (Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana), que terminó adoptando una actitud "foquista", más idónea para crear una situación de "alarma" favorable al golpismo derechista, que para forjar condiciones deveras revolucionarias.

En estas circunstancias, de nada le sirvió a Arosemena formar un gobierno de "concentración nacional", en realidad centroizquierdista. Asesorada por la CIA, la reacción local comenzó a denunciar la infiltración "comunista" en el gobierno y explotar el asunto cubano. El clero se encargó de encabezar esta cruzada, organizando manifestaciones gigantescas, especies de procesiones destinadas, dizque, a desagraviar a Dios por las ofensas del "comunismo" y pedir el rompimiento de relaciones con Cuba. Aun en las ciudades grandes del país, donde el sentimiento laico parecía firmemente arraigado, se desató un fanatismo cuyos propósitos abier-

tamente políticos no escaparon a ningún observador precavido. Diarios como *El Comercio,* de Quito, identificado hasta entonces con el liberalismo anticlerical, convirtiéronse de la noche a la mañana en modelos de piedad religiosa y acérrimos defensores de la "tradición cristiana". Y apareció súbitamente la devoción de Jesús del Gran Poder, auspiciada por la alta sociedad, "sin distinción de ideología". Así la burguesía "laica" se rindió ante la evidencia de que la Iglesia seguía siendo el puntal ideológico más firme del orden establecido, rendición que fue de incalculable rentabilidad política.

Arosemena rompió relaciones con Cuba en abril de 1962, pero ni eso fue suficiente. La reacción reclamaba la represión de toda manifestación progresista y, como el presidente se negó a aceptar este "clamor general", la escalada continuó. La derecha no tuvo escrúpulos en cometer atentados terroristas, para imputárselos a la izquierda. Como se anota en una revista nacional poco sospechosa de simpatías por el marxismo, en los meses que precedieron a la caída de Arosemena "el anticomunismo se torna psicológico, y no ideológico, para de ese modo incidir sobre la opinión popular". Y, como observa la misma publicación, las fuerzas "extranacionales", es decir, Estados Unidos, actúan decisivamente a través de sus aliados locales: la prensa grande, la radio y, finalmente, los oficiales reaccionarios.[23]

Frente a la escalada de la derecha, la izquierda poco pudo hacer, ya que importantes sectores del pueblo, engañados por la coartada religiosa, fueron movilizados en favor de la reacción. A todo lo cual vinieron a sumarse ciertas imprudencias en el comportamiento personal de Arosemena, que sirvieron de pretexto inmediato para el golpe de estado del 11 de julio de 1963, fecha en que asumió el poder una junta militar de gobierno presidida por el almirante Ramón Castro Jijón.

En realidad, este golpe fue una típica medida "contrainsurreccional" acordada por el Pentágono y los monopolios en defensa de los intereses imperiales. Como la estrategia comprendía, además de las medidas específicamente represivas, ciertas acciones de carácter económico y social, se imprimió a la nueva dictadura no sólo una orientación anticomunista, sino también una tónica reformista conforme a los planes de la Alianza para el Progreso. Por ello, al mismo tiempo en que encarcelaba, desterraba o torturaba a los hombres de izquierda y clausuraba universidades y sindicatos, la junta militar anunció una serie de reformas "estructurales" que, para marcar el tono de esta tragicomedia, empezaron por la nacionalización de las altas cumbres andinas...

La junta abordó luego el problema del campo y hasta llegó a dictar una ley de reforma agraria (11 de julio de 1964), en cuya declaración de principios se manifestaba el propósito de abolir las situaciones precarias (relaciones precapitalistas de producción) y promover la creación de una capa de medianos propietarios rurales, capaz de amortiguar las contradicciones del agro. Con ello se quería preservar los intereses de los propios latifundistas; pero, tanto la tibieza de las disposiciones contenidas en la ley como la resistencia de los terratenientes hicieron fracasar la "reforma", que aun con la abolición de las situaciones llamadas precarias sólo consiguió multiplicar el minifundio y acelerar el éxodo a las ciudades.

[23] "El juego del poder en el Ecuador", en revista *Vistazo,* de Guayaquil, octubre de 1968.

Sin embargo, este tinte "reformista" de la dictadura sirvió de justificación para que un sector importante, si no mayoritario de las capas medias, apoyara al gobierno. Y ni el carácter represivo de éste fue óbice para ello: había de una parte la joven tecnoburocracia convencida de embarcarse en una empresa "técnica" y no política; de otra estaban muchos miembros de la antigua intelectualidad, entregados ahora a la defensa de un sistema que mal o bien les había permitido ascender. Ansiosos de justificar su viraje ideológico, los ex socialistas que pasaron a asesorar a la junta hablaron de una adhesión a planteamientos "modernos", acordes con nuestro tiempo.

En el fondo, las capas medias tenían intereses muy precisos que defender. Entre otras cosas, la proliferación de organismos técnicos y seudotécnicos encargados, dizque, de aplicar las reformas, fue ocasión propicia para aumentar tanto las remuneraciones de la burocracia, como su magnitud misma:

Ya desde 1964 y durante 1965 se comenzaron a crear o a reorganizar distintos organismos e instituciones [...lo que] significó, al mismo tiempo, que el presupuesto del Estado fuera incrementado en forma apreciable para el pago de sueldos y salarios.[24]

Efectivamente, la remuneración de los empleados públicos, que entre 1960 y 1962 sólo se había incrementado en un 8.1%, de 1964 a 1966 creció en un 23.5%.

Tal fue la coyuntura sociopolítica en que prosperó el gobierno de los generales, que en su primera etapa contó con el apoyo de todas las fuerzas reaccionarias nacionales y extranjeras y de las capas medias. Mas el apoyo de las primeras, otorgado, como es obvio, a cambio de la represión de toda manifestación de los movimientos populares, era suficiente para hacer fracasar el proyecto reformista. Éste, que además de la reforma agraria comprendía una reforma tributaria y otras medidas tendientes a reforzar sectores intermedios como la artesanía y la pequeña industria, no era políticamente viable por carecer de un apoyo social que mal podían brindarle los supuestos beneficiados, puesto que, o se trataba de sectores sociales por crearse, como la pequeña burguesía rural en las áreas tradicionales, o bien de grupos políticamente débiles, como los artesanos y pequeños industriales.

Descartado este apoyo y el popular, a la junta no le quedó más que elegir entre cumplir al pie de la letra los designios de la clase dominante, a fin de contar con su apoyo permanente, o bien tratar de llevar adelante los proyectos reformistas, pero con resistencia de la oligarquía y sin más contrapeso político que el apoyo de la tecnocracia, que por supuesto racionalizaba mucho mejor que la clase dominante los intereses del sistema en su conjunto.

Sin embargo, esta problemática situación no se hizo sentir con toda su fuerza en 1964, primero porque la oligarquía no podía declarar tan pronto la guerra a un gobierno forjado por ella y, segundo, porque la coyuntura económica fue favorable al mantenimiento de la junta en el gobierno. En ese año: "las condiciones adecuadas de clima y régimen de lluvias hicieron posible obtener buenas y abundantes cosechas en los principales productos de exportación y consumo in-

[24] *El desarrollo del Ecuador,* Libro primero, Quito, Junta Nacional de Planificación, 1969, p. 38.

terno", y "el aumento de las exportaciones repercutió favorablemente en todos los sectores productivos del país".[25]

Esta coyuntura comenzó a debilitarse por el lado político en 1965, cuando la derecha estimó que el "peligro comunista" estaba conjurado y, por lo tanto, no existía razón para que los militares continuaran en el gobierno y, menos aún, intentasen realizar reformas.

Aunque tibia, la reforma agraria había disgustado ya a los terratenientes más tradicionales; pero en fin, terminaron por aceptarla a regañadientes. No ocurrió lo mismo con la poderosa burguesía comercial de Guayaquil, que tan pronto vio afectados sus intereses inmediatos por la reforma del arancel de aduanas empezó a sabotear las medidas de la junta militar:

> La reforma arancelaria... dio lugar a que en Guayaquil los comerciantes no retirasen sus mercaderías de la aduana. La aduana de esa metrópoli de los negocios del país recaudaba un promedio diario de tres millones de sucres. Por el tres de mayo de 1965, la recaudación se mantenía en quinientos sucres diarios.[26]

Por su parte, los terratenientes aprovecharon la situación para exigir mayor representación de sus cámaras ante el Instituto de Reforma Agraria, y, en general, la clase dominante pasó a la oposición activa:

> A raíz de los decretos a las importaciones [hubo] una oleada de paros. Las empresas presionaron a los medios de comunicación colectiva, que aún se mostraban reacios; se decidirán cuando el gobierno militar intenta intervenir en las entidades autónomas, con influencia en la prensa, bancos, opinión popular y partidos. Después, se ataca a la prensa. Cierre de diarios. Poco a poco, se establece unidad de acción contra la junta.[27]

Esto, en el plano de la lucha política entre grupos hegemónicos. Porque en otro nivel, el movimiento popular no había renunciado a la lucha, oponiéndose radicalmente al sistema y sus actuales representantes. Pero su acción sólo adquirió verdadera eficacia desde el momento en que la alianza de fuerzas en que se apoyaba el gobierno vino a resquebrajarse.

Inquietos por el alcance actual de la lucha estudiantil, los militares ocuparon la Universidad Central el 25 de marzo de 1966. Sufrieron vejámenes y maltratos no sólo los estudiantes sino también los profesores y autoridades universitarias, incluso algunos partidarios del gobierno; hecho que precipitó la caída de la junta, al alienarse ésta el apoyo del único grupo que todavía la respaldaba: la tecnoburocracia.

Los miembros del gobierno militar abandonaron el gobierno el 29 de marzo, cuando el país se encontraba casi totalmente paralizado por una serie de manifestaciones y huelgas y estaba a punto de descubrirse que los generales, entre otras "reformas", habían llevado a cabo la de renunciar secretamente a nuestra soberanía sobre las doscientas millas marítimas, en favor del imperialismo. Además

[25] *Ibid.*, pp. 33-34.

[26] Joaquín Mena Soto, *De la dictadura militar al quinto velasquismo*, Quito, Ed. Fray Jodoco Ricke, 1969, p. 100.

[27] "El juego del poder en el Ecuador", en el número ya citado de la revista *Vistazo*.

de que en 1964 habían otorgado una concesión de un millón y medio de hectáreas a favor del consorcio petrolero Texaco-Gulf.

Ahora bien, como a pesar de contar con la participación activa de la izquierda marxista el movimiento que derrocó a la dictadura estuvo controlado por la burguesía, el gobierno volvió directamente a manos de ésta. Un cónclave de notables proclamó presidente interino al representante de las llamadas "fuerzas vivas" de Guayaquil, ClementeYerovi, quien permaneció pocos meses en el cargo: el tiempo necesario para reorientar la situación fiscal y convocar a Asamblea constituyente.

Dicha Asamblea fue turbulenta, pues tuvo que conocer las denuncias sobre arbitrariedades y hasta traiciones de la junta. Se encargó, además, de elaborar una nueva Constitución, la decimoséptima del país, y nombró presidente de la República a Otto Arosemena, otro de los representantes de la burguesía de Guayaquil, cuya elección se facilitó gracias al entendimiento de su partido (CID) con los conservadores y socialcristianos.

Por demás está decir que todos estos trastornos palaciegos no produjeron ningún cambio sustancial en la sociedad ecuatoriana. El país se liberó de un gobierno abiertamente dictatorial y la campaña anticomunista se atenuó temporalmente, en parte porque el tema se había gastado como arma psicológica y en parte porque a la burguesía exportadora le interesaba proceder ahora con mayor "liberalidad": ante la contracción de la demanda de banano en el área capitalista, érale indispensable buscar nuevos mercados en los países socialistas.

En fin, las universidades recobraron su estatuto autónomo y las fuerzas de izquierda adquirieron mayor margen de acción (dentro de las obvias limitaciones del sistema); al mismo tiempo en que los grupos políticos tradicionales se preparaban para terciar en la elección presidencial de 1968, que llevó a Velasco Ibarra por quinta ocasión al poder.

Elegido, a pesar de todo, gracias a cierto sentimiento izquierdista o por lo menos reformista, Velasco manifestó al comienzo de su quinta administración algunas veleidades en ese sentido, que se disolvieron rápidamente. Enfrentado a la realidad del poder, donde no es posible superar, como en los discursos, los antagonismos de clase, ni ignorar, para cada acción concreta, los intereses de los distintos grupos, Velasco no tardó en allanarse a los requerimientos de la clase dominante. En 1969 su gobierno adquirió una faz claramente represiva al agudizarse la crisis económica, política y social.

Para 1970, el costo de la vida se había elevado vertiginosamente; el déficit fiscal ascendía a 3 mil millones de sucres. La inquietud social aumentó (paros provinciales, manifestaciones estudiantiles, huelgas) y tanto la burguesía como los monopolios extranjeros, a los que Velasco hizo generosas concesiones petroleras, le exigieron "devolver la tranquilidad" al país.

El 21 de junio de 1970, Velasco Ibarra se proclamó finalmente dictador, con el apoyo aparentemente unánime de las fuerzas armadas y todos los sectores de la burguesía. Pero por paradójica que pueda parecer esta afirmación, su "autogolpe" no fue una expresión de fuerza política, sino más bien de debilidad. El "reinado" de Velasco tocaba ciertamente a su fin, y no sólo por agotamiento personal del líder, sino porque la sociedad misma se aprestaba a pasar de una etapa cuyo eje económico había sido la producción bananera, a una nueva que tendría como

polo el petróleo que acababa de descubrirse en el oriente amazónico. En realidad, todas las fuerzas sociopolíticas estaban conscientes de la situación y, abierta o solapadamente, se apresuraban a ganar posiciones.

Para la burguesía, que había enajenado ya el petróleo a los monopolios extranjeros, era urgente realizar una primera tarea política que consistía en aplastar toda posible oposición de izquierda por medio de un golpe de estado. Pero para ello le quedaban algunos escollos que sortear. De una parte, la gran burguesía en su conjunto temía que dicho golpe desembocara en la instauración de un régimen nacionalista y reformista al estilo "peruano", apoyado en algunos sectores de las propias fuerzas armadas, una parte de la tecnoburocracia e incluso ciertos embriones de burguesía industrial, que tímidamente trataban de articular un proyecto de desarrollo relativamente desligado del capital extranjero con miras al nuevo mercado abierto por el Pacto andino. Alternativa política en verdad poco probable, dada la debilidad de las fuerzas involucradas en el proyecto; pero que sin embargo no dejaba de rondar como un fantasma el horizonte político del país.

De otra parte, la fracción agromercantil de la burguesía, que había ocupado la posición hegemónica durante la "era del banano", temía perderla en la nueva situación. Se trataba, entonces, no sólo de reprimir a la izquierda, sino además de asegurar con el nuevo gobierno la continuidad de aquella hegemonía.

En fin, del seno de la burguesía toda emergían nuevos grupos de interés, verdaderas mafias empeñadas en participar a como dé lugar en lo que un escritor ecuatoriano denominara con justicia "el festín del petróleo". Para estos grupos, ni siquiera era cuestión de negociar en las mejores condiciones "nacionales" la nueva situación de dependencia, sino, pura y llanamente, de apresurarse a percibir las jugosas "comisiones" pagadas por el imperialismo.

En semejante coyuntura, el golpe de estado del 70 sólo podía tomar la modalidad que en realidad adoptó. Incapaz de superar sus contradicciones fraccionales y de trincas y por lo tanto de ofrecer un proyecto político coherente, susceptible de atraer el apoyo masivo y decidido de las fuerzas armadas; temerosa, inclusive, de que en el interior de éstas se impusiese la corriente reformista, a la burguesía no le quedaba otra salida que auspiciar el autogolpe de Velasco, único personaje capaz de representar fantasmalmente y "por encima" de sus fracciones la dictadura de la clase en general. Divididas internamente en varias tendencias, las propias fuerzas armadas encontraron preferible que un civil continuara por el momento a la cabeza del gobierno.

Pero una vez desarticulada la izquierda por la represión que siguió al golpe de mayo de 1970, las distintas fracciones de la burguesía pasaron a enfrentarse abiertamente, mientras sus sectores más "hábiles" se embarcaban en los más turbios negociados.

Los contendores buscaban, como es obvio, ganar las mejores posiciones dentro del Ejecutivo; pero, dada la transitoriedad de este gobierno al que incluso se le había señalado de antemano una fecha de defunción (agosto de 1972), más todavía les interesaba ganar apoyo en el interior de las fuerzas armadas. Por eso, gran parte del año 71 estuvo marcada no sólo por una política sinuosa de Velasco, que representaba la hegemonía fugaz de tal o cual fracción, sino además

por las visibles divergencias entre sectores del ejército, más o menos influidos por sendos sectores de la burguesía.

Esta constante presión burguesa sobre las fuerzas armadas era desde luego un arma de doble filo. Si bien alguna fracción parecía ganar terreno con ello, no era menos cierto que con dicha presión la clase entera ponía de manifiesto su debilidad, con lo cual acentuaba en el ejército la tentación de actuar como fuerza relativamente autónoma. Además, el juego de presiones fue percibido por muchos sectores de la oficialidad como una amenaza contra la integridad institucional de las fuerzas armadas, hecho que a mediados de 1971 determinó la caída del brazo derecho de Velasco Ibarra, su ministro de Defensa y sobrino, Jorge Acosta. Representante del ala fascistoide de la burguesía financiera, parece que este personaje siniestro llegó a organizar su propio servicio de inteligencia con el fin de vigilar a los sectores del ejército sospechosos de "infidelidad".

Y había un problema más, que vino a complicar la situación. Como ya se dijo, la dictadura de Velasco era un mandato a plazo fijo, y el mecanismo previsto para designar al sucesor consistía, en principio, en respetar el resultado de las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en junio de 1972. Sólo que, el fantasma del populismo volvió a aparecer con toda su ambigüedad. Se trataba esta vez del caudillo Asaad Bucaram, ex alcalde de Guayaquil que se perfilaba como el seguro vencedor de los futuros comicios y quien, pese a su gran arrastre entre las masas subproletarias y la pequeña burguesía, contaba con la oposición de casi todas las fuerzas políticas organizadas. La izquierda lo detestaba por sus perfiles fascistoides, pues no podía olvidar que cuando alcalde de Guayaquil había reprimido sangrientamente al movimiento estudiantil recurriendo al lumpen de los suburbios. La derecha no le perdonaba sus arranques plebeyo-moralizantes, que durante la administración municipal se habían concretado en desplantes verbales contra la oligarquía, fiscalizaciones intempestivas a tal o cual empresa y cobro riguroso de impuestos a la burguesía. En fin, la tecnoburocracia lo veía como un hombre "honesto pero rústico y desorientado", mientras que el ejército, al que ciertamente no disgustaban aquellos arranques, temía que Bucaram se convirtiera en factor de desorden, ya que de algún modo su personalidad representaba la irrupción de masas en la vida política nacional (contra la oposición de izquierda Bucaram se habría visto tentado a utilizarlas en sentido fascista y contra la derecha en sentido populista).

Así que, en tanto que un sector de la burguesía trataba de llegar a algún tipo de entendimiento con Bucaram, otro intentó deshacerse de él recurriendo a la leguleyada de que este candidato no era ecuatoriano sino árabe, tesis que Velasco hizo suya, en un desesperado esfuerzo por mantenerse en el poder y, de ser posible, prolongar su mandato. En realidad, se "veía" ya venir el golpe de estado, aunque no se sabía a ciencia cierta qué modalidad específica adoptaría. Las contradicciones de la burguesía, así como su incapacidad e inmoralidades administrativas se habían acumulado hasta tal punto, que la situación estaba "madura" para que los militares apareciesen como salvadores del país, pese a que en muchos sectores sociales aún estaba latente el recuerdo de la dictadura de 1963-66.

Velasco Ibarra fue finalmente depuesto el 15 de febrero de 1972, un día de carnaval que parecía subrayar irónicamente el desenlace de esta mascarada tra-

gicómica de cuarenta años de velasquismo. Desde su exilio en Buenos Aires el anciano caudillo aseguró haber sido derrocado por un grupo de "coronelitos inspirados en lecturas de Lenin y Mao Tse-tung", al mismo tiempo que el nuevo jefe de estado, general Guillermo Rodríguez Lara, se apresuraba a definir su gobierno como una expresión de la clase media, "nacionalista" y "revolucionario".

VII. PETRÓLEO Y NACIONALISMO EN LA FASE ACTUAL

En realidad, la posición nacionalista que cristaliza como línea política básica con el régimen del general Rodríguez Lara (febrero de 1972-enero de 1976) no adquiere significado pleno más que sobre el telón de fondo de las concesiones otorgadas a los consorcios petroleros imperialistas a partir de 1964, concesiones que según los cálculos del investigador ecuatoriano Jaime Galarza representaban, en 1972, la enajenación de más de un tercio del territorio total de Ecuador.[28] Y no se trataba sólo de un problema de extensión, elocuente de por sí, sino además de la aceptación correlativa de las condiciones más lesivas para el país que uno pueda imaginar; derechos superficiarios apenas simbólicos, regalías reducidas al mínimo, exoneración a los consorcios de todo tipo de derechos arancelarios e impuestos, mecanismos de control absolutamente ineficaces, ninguna perspectiva de intervención del estado en la producción y la comercialización. Cuadro que se "completaba" con la entrega de todo el golfo de Guayaquil a las multinacionales, para la explotación del gas, mediante turbios negociados en los que intervinieron, prepetrando múltiples delitos, los más connotados miembros de la burguesía intermediaria local.[29]

Contra este sector, que no es más que la "vanguardia" de la burguesía agromercantil que ha dominado secularmente al país y cuyo proyecto histórico se identifica con el "derecho" de enajenar a Ecuador no siquiera al mejor postor, sino al que mayores comisiones ofrezca a la fracción gobernante, emergió en nuestro escenario político la corriente nacionalista de las fuerzas armadas, que por supuesto no nació por generación espontánea en la cabeza de algunos oficiales, sino que fue el reflejo (ambiguo si se quiere, cortado a otra medida en todo caso) de una ardua lucha de la izquierda ecuatoriana que había venido expresándose con fuerza cada vez más creciente en la clase obrera, en el movimiento estudiantil, entre los intelectuales patriotas, e incluso ganando terreno (aunque desvirtuada de sus contenidos más radicales) entre sectores relativamente amplios de la tecnoburocracia. Recuérdese que ya en la crítica coyuntura de 1970, que culminó con el autogolpe de Velasco Ibarra y el consiguiente triunfo de los grupos reaccionarios, se barajó entre bastidores la carta de una "solución a la peruana", como entonces solía denominarse a la alternativa nacionalista y antioligárquica.

Es este proyecto el que finalmente se impuso en 1972, reflejándose, con ambigüedades y todo, en la *Filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y*

[28] Jaime Galarza, *El festín del petróleo*, 3a. ed., Quito, Ed. Universitaria, 1974.
[29] Cf. al respecto Jaime Galarza, *Piratas en el golfo*, Quito, Ed. Solitierra, 1973.

nacionalista del Ecuador, donde se afirma, entre otras cosas, que el nuevo gobierno "realizará una reforma agraria real y efectiva", distribuyendo la tierra "a las personas naturales que genuina y directamente la trabajan", y que "hará todos los esfuerzos que sean necesarios para eliminar la dependencia del país en los aspectos económico, político, social, cultural, militar e ideológico".

Dentro de este marco "filosófico" se concretará la política petrolera nacionalista, que sin duda constituyó el aspecto más positivo del régimen de Rodríguez Lara. En efecto, casi de inmediato fueron revisados los contratos con los consorcios petroleros y se puso en marcha una nueva orientación en la materia, que en lo sustancial se tradujo en los siguientes hechos: reversión al estado ecuatoriano de más de 4 millones de hectáreas en la región oriental; reversión de los campos hidrocarburíferos de la Anglo Ecuadorian Oil en la costa; reducción de las concesiones, de 40 a 20 años; adquisición por parte del estado del 25% de los derechos y acciones de la Texaco Gulf; rescate, también para el estado, de todas las explotaciones de gas; creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE); construcción de una refinería estatal en la provincia de Esmeraldas; impulso a la creación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE); ingreso a la OPEP (en junio de 1973).

Fue esta faceta progresista del gobierno la que concitó el apoyo de la izquierda, que no por eso dejó de señalar las limitaciones del régimen en su misma política nacionalista, ni de luchar porque el proceso alcanzara etapas más avanzadas, al mismo tiempo en que la oligarquía criolla y el imperialismo hacían todo lo posible para frenarlo.

En efecto, la oligarquía concentró sus baterías antigubernamentales en torno a dos puntos básicos, puesto que de momento le era difícil atacar frontalmente la política petrolera: a] la prometida reforma agraria, que a todo trance se trataba de remitir a las calendas griegas, y b] la llamada "estatización" de la economía, que en su aspecto sustantivo se refería al efectivo proyecto de conformar un fuerte sector capitalista de estado,[30] y en su aspecto adjetivo, a medidas tales como la simple creación de tiendas estatales (ENPROVIT) encargadas de vender artículos de primera necesidad a precios rebajados.[31] El que la clase dominante ecuatoriana haya percibido esto último como una virtual "antesala" del comunismo dice ya todo sobre su carácter retrógrado incluso como burguesía.

El imperialismo, por su parte, no vio con buenos ojos la política nacionalista del gobierno, y sobre todo la integración activa de Ecuador a la OPEP, organización a la que visiblemente buscaba quebrar en su eslabón más débil, que por razones diversas resultaba ser precisamente nuestro país. A lo que habría que añadir la firme defensa de las 200 millas de mar territorial, fuente permanente de conflicto, así como la expulsión de la misión militar norteamericana de Ecuador.

[30] Con un *área estatal* propiamente dicha que comprendía: refinamiento de petróleo, pesca, acería integrada, elaboración de amoniaco y urea; y una *área mixta* en la que se incluía: petroquímica, cemento, astilleros, complejo madera-papel, frigoríficos, plantas pasteurizadoras, nitrocelulosa, sosa cáustica, tractores de rueda, motores diesel, llaves de ajuste, insecticidas y pesticidas, tubos de acero, refilado y galvanización de cobre, alcantarillas metálicas.

[31] El diario *El Comercio,* de Quito, por ejemplo, publicó más de una nota editorial criticando esta medida.

Pese a esta oposición, los años de 1972 y 1973 se caracterizaron por el ascenso de las posiciones nacionalistas, reforzadas incluso por el desprestigio en que había caído la oligarquía, cuyas inmoralidades y acciones antipatrióticas iban revelándose día a día. Mas ninguna clase dominante se derrumba por su solo desprestigio, y menos todavía ésta que conservaba intactas las raíces de su poder, concentradas en el latifundio y las plantaciones, en el voluminoso capital comercial y bancario, en el control prácticamente omnímodo de los medios de comunicación colectiva y en la influencia que a través de todo esto ejercía sobre los sectores reaccionarios y hasta "centristas" del ejército. El proyecto nacionalista y antioligárquico distaba pues de haberse impuesto, mientras no cortase por lo menos algunas de estas raíces, aplicando una drástica reforma agraria y estatizando la banca y el comercio exterior como mínimo.

Por eso, 1974 fue un año políticamente crucial, que de un lado se caracterizó por una tentativa de avance del ala radical del gobierno, y de otro por una polarización de las fuerzas sociales, marcada tanto por el endurecimiento de la oposición oligárquico-imperialista como por la consolidación de la clase obrera en la escena política.

En efecto, durante el primer semestre de este año el sector progresista del gobierno intentó promulgar una nueva legislación agraria que, pese a las ambigüedades y vacilaciones con que la formuló el ministro de Agricultura, Guillermo Maldonado, parecía apuntar a la trasformación de, por lo menos, los aspectos más retrógrados de la estructura latifundista ecuatoriana. Pero la misma indecisión con que tal perspectiva fue delineada dio pábulo a una respuesta agresiva de la oligarquía, la cual terminó por declarar persona no grata a Maldonado, acusándolo de "traidor influido por ideologías foráneas que desvirtúan el carácter nacional del proceso". Al aceptar la renuncia de Maldonado que siguió a esta embestida, el gobierno prácticamente abandonó el punto básico de su programa antioligárquico, que de hecho fue sustituido por una política de fomento del desarrollo "desde arriba" del capitalismo en el campo. Las cifras disponibles son por demás elocuentes al respecto: durante toda la administración de Rodríguez Lara apenas se afectó el 0.73% del total de tierras cultivables,[32] hecho que constituyó un triunfo resonante de la oligarquía.

Ello no obstante, el ala progresista siguió bregando en otro terreno, encabezada por el ministro de Recursos Naturales, Gustavo Jarrín Ampudia, artífice de la política petrolera nacionalista, quien ahora propuso que Ecuador adquiriera el 51% de los derechos y acciones de la Texaco Gulf. Mas su propuesta fue rechazada y él mismo tuvo que renunciar en septiembre del 74. Fue el segundo gran triunfo de las fuerzas reaccionarias, esto es, tanto del imperialismo como de la oligarquía criolla aliada a él, que a estas alturas criticaba ya desembozadamente la política petrolera "demasiado dura" del gobierno, arguyendo que "ahuyentaba" las inversiones extranjeras.

No deja de ser significativo, por lo demás, el que estas victorias de la reacción se produjesen en un momento de innegable robustecimiento del movimiento obre-

[32] Durante el trienio 1972-74 se distribuyen 50 425 hectáreas en favor de 5 927 familias campesinas.

ro, que había realizado una respetable demostración de fuerza el primero de mayo y dado pasos fundamentales en el camino de su unidad con la derrota de los dirigentes amarillos de la CEOSL (central creada y hasta entonces manipulada por el imperialismo) y el triunfo de la corriente progresista en la CEDOC (central de origen católico derechista), que junto al sector más avanzado de la clase obrera ecuatoriana, agrupado en la CTE (de orientación marxista), conformarán en adelante un vigoroso frente.

En lugar de apoyarse en esta base social y avanzar al menos en el cumplimiento de su propio programa, el gobierno de Rodríguez Lara prefirió ceder ante las presiones oligárquico-imperialistas, con lo cual sólo consiguió debilitarse. El discreto exilio de los ex ministros Maldonado y Jarrín, quienes partieron con sendas misiones diplomáticas, a Europa, no fue sino el símbolo del exilio del ala más consecuente con la filosofía inicial del régimen, que ahora quedaba librado a una correlación de fuerzas que le sería cada vez más desfavorable.

En efecto, las concesiones que se acaban de hacer estuvieron lejos de aplacar a la reacción. Inscritas en la dialéctica de una política típicamente pequeñoburguesa, que no por haber dado tales pasos dejaba de reafirmar su vocación "nacionalista y revolucionaria", esas mismas concesiones adquirían visos (aunque falsos) de una simple retirada táctica. En todo caso, la oligarquía no cesó de esgrimir el fantasma de la "fuerte influencia comunista en el gobierno", mientras el imperialismo, consciente del debilitamiento del régimen, decidió pasar abiertamente a la ofensiva.

Poco después de la caída de Jarrín Ampudia, la Texaco Gulf inició un boicot de la producción y exportación de petróleo que durante el último semestre de 1974 causó al estado ecuatoriano una pérdida de más de 100 millones de dólares, y de una magnitud similar en el primer trimestre de 1975. Sólo en abril de este año el gobierno intentó restablecer su autoridad fijando una cuota mínima de exportación, medida a la que la Texaco respondió con una suspensión casi completa de la extracción de petróleo, que se prolongó casi dos meses, hasta que el gobierno cedió al chantaje reduciendo en 43 centavos de dólar el precio del barril de crudo. Lo menos que puede decirse es que el proceso nacionalista estaba entrando en una fase de congelamiento.

Entre tanto, la situación económica del país presentaba síntomas de evidente deterioro, especialmente en el agro, donde la contradicción entre la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas de una parte, y las arcaicas relaciones de producción de otra, se tradujo por una verdadera crisis. La producción real percápita disminuyó en cerca del 9% entre 1970 y 1973 y a ese nivel se estancó en 1974, sin que la "inyección" petrolera produjera estímulo alguno en este campo. Por el contrario, el "boom" del petróleo no hizo más que propiciar el drenaje de capital del agro hacia las urbes, donde el desarrollo de actividades como la construcción, con la que se especulaba abiertamente, no dejaba de ser atractivo.

Es cierto que el gobierno intentó resolver el problema destinando fuertes sumas al fomento agropecuario, para el que el crédito se incrementó en más del 700% al pasar de 27 millones de dólares en 1972 a 162 millones en 1975; pero ni ello fue suficiente para apuntalar la estructura en crisis. Los miles de toneladas de abonos químicos que terminaron descomponiéndose en las bodegas del Banco

de Fomento ante el desinterés de los terratenientes no fueron más que el símbolo del fracaso de una política basada en la ilusión tecnocrática de que es posible "abonar" una estructura que lo que en realidad requiere es una profunda trasformación.

Este fracaso estrepitoso de la política agraria del gobierno tuvo algunas consecuencias graves que es menester destacar.

En primer lugar, hubo que recurrir a las divisas provenientes del petróleo para importar alimentos: en 1973, por ejemplo, tales importaciones se incrementaron en un 46% en relación con el promedio del período 1970-1972.

En segundo lugar, los precios de los víveres se elevaron a un ritmo bastante acelerado, superior en todo caso a la elevación del índice general de precios al consumidor, que en el lapso de dos años, 1973 y 1974, se incrementó en cerca de un 50%.

En tercer lugar, las migraciones de campesinos a las urbes se aceleraron notablemente, contribuyendo al crecimiento de los famosos "cinturones de miseria".

Por último, los propios terratenientes aprovecharon de esta situación para hostigar al gobierno, acusándolo de todos los males por no imponer un "clima de confianza" en el agro; es decir, por no responder con una represión en gran escala al malestar creciente de los campesinos.

En las urbes, por lo demás, la situación distaba mucho de ser próspera para las grandes masas populares. La elevación del costo de la vida ya señalada, que no fue compensada por un aumento equivalente de salarios, no hizo más que depauperar a aquellas masas, del mismo modo que el éxodo de campesinos no dejó de incrementar la desocupación y el subempleo, que en la actualidad parecen situarse alrededor del 10% y el 40% respectivamente.[33]

Y la quimera del petróleo no se manifestó únicamente en este cúmulo de contradicciones, sino que además se tradujo por una delicada situación financiera, determinada no sólo por los factores ya analizados (boicot por parte de la Texaco y necesidad de dedicar fuertes sumas a la compra de alimentos en el exterior) más también por otras causas como la desmedida importación de artículos suntuarios o el incremento, igualmente desmedido, del aparato burocrático (150 000 "servidores públicos" frente a unos 60 000 obreros de industria).

El hecho es que al terminar el primer semestre de 1975 la balanza comercial de Ecuador registraba un déficit de 160 millones de dólares, cosa que no dejó de repercutir en el mismo presupuesto del estado, que en agosto de ese año estaba ya desfinanciado en más de 50 millones de dólares. Éste fue el antecedente que decidió al gobierno a promulgar el famoso decreto 738, que establecía un gravamen del 60% a las importaciones de bienes no esenciales, medida con la cual la tecnocracia esperaba, además, matar dos pájaros de un tiro: de una parte, sanear la situación fiscal; de otra, impulsar a la "burguesía nacional" hacia una rápida "sustitución de importaciones". El propio ministro de Finanzas aseguró que sus medidas constituían "un verdadero desafío para la industria, para la producción nacional y para el esfuerzo ecuatoriano".

[33] El BID afirma que para Ecuador "el desempleo se ha calculado entre el 8 y el 10% y el subempleo multiplicado varias veces esta cifra".

Sólo que, en el momento de la verdad, esa "burguesía nacional" no apareció por ningún lado, como no fuese confundida con el entero bloque oligárquico, que más que la derogatoria del decreto en cuestión pedía abiertamente la cabeza del gobierno. Y es que, fuera de la imaginación de algunos tecnócratas, lo único que existía era una burguesía industrial raquítica que, cual perro de hortelano, era tan incapaz de impulsar la industrialización del país como de resignarse a que el estado asumiera esta tarea; y que, ávida de percibir por lo menos algún dividendo en *l'affaire,* había comprometido ya, desde octubre de 1974, todo su apoyo a la SOFOFA chilena [34] para la campaña en pro de la modificación de la Decisión 24 del Pacto Andino; es decir, el apoyo para que la industria, la banca y las compañías de seguros de la región terminaran de entregarse sin restricción alguna al capital imperialista.

La expedición del decreto 738 no tuvo por lo tanto otro efecto político que el de desencadenar toda la furia oligárquica contra el gobierno, al que se achacaba desde la aplicación de una "absurda" política petrolera hasta la imposición de una "estatización" de la economía, pasando por el supuesto "ahuyentamiento" del capital extranjero y la "siembra del caos" en el campo con su secuela de encarecimiento de los víveres, etc. Para remediar lo cual la oligarquía exigía un inmediato retorno al "orden constitucional", tarea que intentó "acelerar" mediante el abortado golpe fascista del 1 de septiembre, cuya naturaleza quedó revelada con el exilio del jefe golpista en la embajada de Pinochet en Quito, y avalada con la declaración que Galo Plaza formulara pocos días después, en el sentido de que "los golpes de estado son inevitables, porque han servido para evitar el caos en que han caído nuestros pueblos".[35]

El sofocamiento de esta rebelión por parte de las fuerzas leales a Rodríguez Lara no significó sin embargo una real victoria política de las tendencias progresistas. La sola revisión del análisis realizado por la prensa de derecha sobre el gabinete conformado después del 1 de septiembre dice todo sobre la situación: el flamante ministro de Finanzas es descrito como un "hombre de la empresa privada por su formación" que "demostró capacidad en su desempeño como presidente de la junta monetaria"; "la tónica a esperar" del nuevo ministro de Recursos Naturales, dados sus antecedentes, "es divergente de la llevada por Jarrín Ampudia, arquitecto de la política petrolera actual"; y en cuanto al presidente de la junta nacional de planificación "parece probable... que le imprima una mayor eficiencia menos teñida de ideologías izquierdizantes".[36]

En efecto, la influencia del primero determinó que en los hechos se dejara sin vigencia la decisión 24 del Pacto andino, mientras el segundo estimó prudente elevar en sólo 40 centavos de dólar el precio del barril de petróleo, siendo que de acuerdo con la última resolución de la OPEP Ecuador debía aumentarlo en más de un dólar. En cuanto al decreto 738, manzana inmediata de la discordia,

[34] Cf. las declaraciones de Enrique Burgos, gerente de relaciones industriales de la SOFOFA, aparecidas en *El Mercurio,* de Santiago, 1 de noviembre de 1974.

[35] Declaraciones para el diario *Excelsior,* de México, 7 de octubre de 1975.

[36] Cf. "Los recién llegados", en revista *Vistazo,* de Guayaquil, núm. 221, octubre de 1975, p. 5.

fue prácticamente derogado mediante una sutil redefinición de los bienes "esenciales" y "no esenciales".

Mas nada de esto sirvió para amenguar la arremetida oligárquico-imperialista. El mismo juzgamiento de los implicados en el *putsch* de septiembre se convirtió en una gigantesca mascarada, en la que resultaba realmente imposible saber quién hacía de acusado y quién de juez. Para preparar adecuadamente el tinglado la revista *Vistazo,* que es la publicación más importante de la burguesía ecuatoriana, acababa de mofarse del gobierno en un editorial titulado "Militares 'reaccionarios' abrieron nuevos derroteros al porvenir del Ecuador", acompañado de una fotografía de Rodríguez Lara enmarcada entre hoces y martillos.[37]

Se venía, pues, cumpliendo al pie de la letra la advertencia que las centrales obreras hicieran al gobierno en los días de la intentona golpista, resumida, por ejemplo, en esta consideración de la CEDOC:

Cuando tomaron el poder las fuerzas armadas, definieron un programa nacionalista y antioligárquico. Sin embargo, frente a las presiones de los presuntos afectados, se comienza a dar marcha atrás, cediéndose en innumerables casos. Esta debilidad del gobierno, frente a la oligarquía y al imperialismo, en vez de fortalecerlo lo ha hecho más vulnerable. Ahora, la oligarquía, pese a todo descontenta por el énfasis dado a la actividad industrial, busca un gobierno completamente suyo, tratando de manipular para el efecto no sólo a grupos militares sino, inclusive, a sectores populares.[38]

Y es cierto que, con todas sus debilidades y vacilaciones, el régimen de Rodríguez Lara no era para la oligarquía un gobierno "completamente suyo". Pero menos aún lo era para la clase obrera. Ésta apoyaba las medidas progresistas que se habían arbitrado, en la fase inicial especialmente, que no por casualidad eran las mismas que impugnaba la clase dominante; mas con razón los trabajadores estaban ante todo celosos de su independencia frente al gobierno, al que exigían la derogación de todas las medidas antiobreras, una alza de sueldos y salarios que siquiera compensase la pauperización evidente de las masas, la aplicación real de la reforma agraria, la nacionalización total del petróleo, de la industria eléctrica, del comercio exterior y de los sistemas de distribución de los artículos de primera necesidad. En apoyo de estos puntos, que constituían el programa mínimo común de las tres centrales sindicales, se realizó la huelga general del 13 de noviembre, en la cual participaron cerca de medio millón de trabajadores, así como las marchas campesinas de diciembre, a las que el presidente fue invitado a asistir, honor que declinó para no empeorar sus relaciones con la oligarquía.[39]

"Prudencia" que de nada le sirvió. La clase dominante había hecho de Rodríguez Lara el chivo expiatorio, y su remoción se imponía para devolver una cierta "tranquilidad" al país ahora convulsionado por un paro de trasportistas que no

[37] Número cit., p. 9.
[38] Manifiesto del 3 de septiembre de 1975.
[39] Estas marchas apoyaban especialmente la aplicación del art. 25 de la ley de reforma agraria, que prescribe la afectación de los predios que no estén cultivados en por lo menos un 80% en enero de 1976. Hasta el último momento de su mandato Rodríguez Lara prometió aplicar este artículo, que en rigor afectaría a la mayor parte de los latifundios actuales.

dejaba de recordar el octubre chileno de 1972. El general Rodríguez fue depuesto el 11 de enero, hecho con el cual se cerraba, si no la etapa iniciada cuatro años antes, por lo menos un capítulo importante de ella. El triunvirato que acababa de asumir el gobierno lo hacía en todo caso en condiciones precarias; ya no como portador de un proyecto nacionalista y antioligárquico, sino más bien como encargado de preparar el retorno al "orden constitucional".

El Ecuador de 1976 no es sin embargo el Ecuador de hace un lustro. Fallida en cuanto a sus metas más radicales, la experiencia nacionalista de Rodríguez Lara deja por lo menos dos elementos nuevos, íntimamente entrelazados: una base industrial que antes no existía (sector capitalista de estado especialmente) y un estado relativamente robusto, en torno al cual se ha creado un cúmulo de intereses burocrático-militares que son los que en la cúspide sostienen, aunque ya debilitado, el proyecto nacionalista. Pese a todos los retrocesos y vacilaciones, la política petrolera que sirviera de base a tal proyecto no ha sido totalmente desmantelada, como no lo ha sido tampoco el empeño de desarrollar un capitalismo estatal.

Dentro de estas nuevas coordenadas la misma hegemonía política de la oligarquía aparece resquebrajada, como lo demuestra su propio juego indeciso en un doble terreno: el de las fuerzas armadas, a las que trata de involucrar en una vía fascista, sin hallar respuesta más allá de algunas franjas marginales; y el de la población civil, a la que intenta uncir al carro aparentemente "constitucionalista", sin encontrar tampoco ecos significativos.

Y aquí interviene un último factor, que a no dudarlo es el más importante en la coyuntura actual: la presencia del proletariado en la escena política nacional, con una envergadura, una organización, un grado de conciencia y unidad antes inexistentes.

En estas condiciones, el mismo retorno al "orden constitucional" que prometiera inicialmente el triunvirato se torna problemático. Las propias fuerzas armadas parecen indecisas, para no decir divididas, a raíz del reciente "auscultamiento" de opiniones en que se confrontaron de una parte una perspectiva oligárquica que ni siquiera llegó a presentarse como proyecto de desarrollo (obviamente no es posible formular de manera explícita un proyecto que no consiste sino en enajenar el país al capital extranjero y percibir los dividendos consiguientes) y de otra parte un programa mínimo popular que arranca de un emplazamiento a los militares para que por lo menos cumplan con los lineamientos de la "filosofía y plan de acción" que ellos mismos esbozaron en 1972.

Con lo cual el nacionalismo pequeñoburgués sigue atrapado en la red de sus propias contradicciones, que desde luego no puede irse resolviendo más que en el escenario de la lucha de clases, según la amplitud y orientación que ésta adquiera.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Albornoz, Oswaldo, *Historia de la acción clerical en el Ecuador*, Quito, Ed. Espejo, 1963.

———, *Del crimen de El Ejido a la revolución del 9 de julio de 1925,* Guayaquil, Ed. Claridad, 1969.
Arcos, Gualberto, *Años de oprobio,* Quito, Imp. Fernández, 1940.
Carbo, Luis Alberto, *Historia monetaria y cambiaria del Ecuador, Quito,* Imp. del Banco Central, 1953.
CEPAL, *El desarrollo económico del Ecuador,* 1953.
Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, *Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola: Ecuador,* Washington D. C., Unión Panamericana, 1965.
Costales Samiego, Alfredo, *Estadísticas de sangre,* revista *Panoramas,* México, noviembre-diciembre de 1965.
Cueva, Agustín, *El proceso de dominación política en el Ecuador,* México, Ed. Diógenes S. A., 1974.
El gobierno del señor Galo Plaza, Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1952.
El 28 de mayo, balance de una revolución popular. Documentos para la historia, Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1946.
Galarza, Jaime, *El festín del Petróleo,* Quito, Ed. Universitaria, 1974.
Hurtado, Oswaldo, *Ecuador: dos mundos superpuestos. Ensayo de diagnóstico de la realidad ecuatoriana,* OFFSETEC, Quito, 1969.
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, *Visión del Ecuador,* Quito, 1974.
Instituto Nacional de Estadística, *Serie estadística 1967-1972,* Quito, 1974.
Junta Nacional de Planificación y Coordinación, *El desarrollo del Ecuador,* Quito, 1969.
Llerena, José Alfredo, *Frustración política en veintidós años,* Quito, Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959.
Navarro, Guillermo, *La concentración de capitales en el Ecuador,* Quito, Ed. Escuela de Sociología, Universidad Central, 1975.
Origen, tradición y lucha del Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, revista *Teoría y acción socialistas,* Quito, enero-febrero de 1969.
Pareja Diezcanseco, Alfredo, *Historia del Ecuador,* 2a. ed., Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1958.
———, *La lucha por la democracia en el Ecuador,* Quito, Ed. Rumiñahui, 1956.
Reyes, Óscar Efrén, *Breve historia general del Ecuador,* 6a. ed., Quito, Ed. Fray Jodoco Ricke, 1960.
———, *Los últimos siete años,* Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1933.
Saad, Pedro, *La CTE y su papel histórico,* Guayaquil, Ed. Claridad, s.f.
Varios autores, *Ecuador: pasado y presente,* Quito, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, Ed. Universitaria, 1975.
Vicuña Izquierdo, Leonardo, *La clase trabajadora del Ecuador (características y condiciones de vida),* Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, 1975.

EL PARAGUAY CONTEMPORÁNEO (1925-1975)

OMAR DÍAZ DE ARCE

I. ANTECEDENTES

Intentar siquiera una interpretación de la historia contemporánea del Paraguay sin detenerse, aunque sea un instante, en los antecedentes de la época colonial, y sobre todo en la evolución del país antes e inmediatamente después de la guerra de la Triple Alianza (1865-70), es prácticamente imposible. Quizá ningún otro estado latinoamericano exhiba hoy las huellas de los grandes acontecimientos del pasado como esta dolorida y todavía misteriosa nación mediterránea del Plata.

A las peculiaridades de la sociedad colonial paraguaya vino más tarde a sumarse la excepcionalidad de su desarrollo tras la emancipación, interrumpido cuando la intervención tripartita de sus vecinos —respaldados por los intereses comerciales ingleses— cercenó la independencia política y económica del país. De ahí en adelante su historia empezó a parecerse cada vez más a la de otros países latinoamericanos —los menos afortunados, por cierto—, relegando a la patria del Doctor Francia y los López al puesto que ocupa aún entre las más atrasadas áreas dependientes de América Latina.

Pero ahí no terminan las cosas: Paraguay también sirvió de escenario a una terrible guerra fratricida azuzada por el imperialismo durante el siglo xx —el famoso conflicto del Chaco—, nuevo episodio del ya demasiado largo capítulo de rivalidades internacionales que sigue gravitando sobre su pueblo. Como si esto fuera poco, hoy en día padece la más antigua dictadura cavernaria del mundo por obra y gracia de poderosos intereses neocolonialistas.

1

El régimen colonial en Paraguay mostró desde el principio características que lo distinguirían del establecido por los españoles en México y Perú. Si la explotación del indio en las minas y la encomienda conformaba allí la estructura de la sociedad virreinal, la ausencia de metales preciosos en el Plata impulsó en otro sentido la colonización. Aun cuando las fuerzas propulsoras de la expansión ibérica, sobre todo la pequeña nobleza, determinaron el carácter feudal de las nuevas relaciones de producción —condicionadas, como se sabe, por el auge mercantil de los albores del capitalismo—, la fisonomía de las distintas colonias dependió de sus particularidades socioeconómicas y geográficas, su primitivo desarrollo demográfico y el lugar que les fue reservado dentro del sistema del colonialismo español.[1]

[1] Véase Manfred Kossok, "Konspekt über das spanische Kolonialsystem", en *Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx Universität Leipzig*, 5. Jahrgang. 1955-56, Heft 2, p. 126.

Entre otros factores, el aislamiento de Paraguay respecto al polo de crecimiento peruano, la resistencia de los indios y el reducido número de colonos, impidió el florecimiento de la gran propiedad feudal y facilitó, en cambio, la multiplicación de las chácaras, pequeñas estancias de agricultores libres, en su mayoría mestizos, temprano fruto de prolíficas uniones entre peninsulares y mujeres guaraníes. Así, junto a la encomienda —unos veinte mil indígenas de los territorios aledaños a Asunción fueron repartidos entre trescientos conquistadores—, creció un campesinado relativamente autosuficiente, dedicado al cultivo de la tierra, la cría de ganado y algunas actividades artesanales.

A los chacreros se debió un nuevo movimiento colonizador hacia el sur que, siguiendo la ruta del comercio atlántico, llevó a la erección de Santa Fe (1573) y a una segunda fundación de Buenos Aires (1580). Mientras la penetración a lo largo del Paraguay, el Paraná y el Plata, quedó limitada al poblamiento esporádico de las márgenes de los ríos, los territorios situados al sudoeste y oeste permanecieron bajo la influencia del movimiento colonizador con centro en Perú y Chile.

A principios del siglo XVII dos importantes acontecimientos afectaron la vida de la colonia: la llegada de los jesuitas y la división administrativa de la provincia del Río de la Plata (1617). Lo primero significó la creación de un verdadero estado eclesiástico semiautónomo, con jurisdicción sobre la zona más fértil y poblada en ambas márgenes del Paraná;[2] lo segundo, la mediterraneidad del Paraguay, ahora con una gobernación aparte y sometido a un control más directo, a través de la audiencia de Charcas, por el virreinato de Perú. Ambas cosas contribuyeron a perfilar la especificidad de la región y añadir nuevas contradicciones a su sociedad colonial: los antagonismos entre encomenderos, chacreros y jesuitas —quienes llegaron a controlar la gobernación de Asunción y contaban con el respaldo de Lima—, agudizados debido a la monopolización por parte de la orden de casi toda la actividad comercial y la mano de obra indígena, y la oposición Asunción-Buenos Aires, que alinearía de cierta manera a la primera junto a otras provincias del litoral frente a la hegemonía del puerto privilegiado desde fines del siglo XVIII.

Punto culminante de esta marea de contradicciones fue la rebelión comunera de principios del siglo XVIII (1719-1735), que si bien comenzó como un intento del patriciado de Asunción contra la supremacía de los misioneros, terminó en una verdadera rebelión de los chacreros, los cuales tomaron la dirección del movimiento, bajo la jefatura de Mompox, no sólo en las villas del interior, sino también en la propia cabecera de la provincia.[3]

La expulsión de los jesuitas por Carlos III y la creación del virreinato del Río

[2] Existe una abundante bibliografía sobre las misiones jesuitas, tema que ha atraído el interés no sólo de los historiadores de la Orden, sino de gran cantidad de estudiosos. A. S. J. Kobler trató de presentar el estado eclesiástico fundado por los padres como un ejemplo de comunismo cristiano, en su libro *Der ghristliche Kommunismus in den Reductionen von Paraguay* (Würzburg, 1876). Hombres como Voltaire calificaban a la "república jesuítica" de estado despótico y opresivo. De hecho, los misioneros combinaban en las reducciones los métodos de explotación feudal de tipo patriarcal con un calculado sistema de acumulación capitalista.

[3] Véase un relato de estos acontecimientos en Philip Raine, "Rebeliones de los comuneros paraguayos", artículo publicado por *Cuadernos Americanos*, México, 1950, núm. 1.

de la plata (1776) elevaron a un primer plano el problema de las relaciones con Buenos Aires, decisivo durante gran parte del siglo XIX. La liberalización del tráfico interno y con la metrópoli en la región de El Plata dio inicialmente mayores posibilidades a los comerciantes de Asunción para la exportación de yerba mate y tabaco, aunque Paraguay fue la provincia del virreinato menos favorecida por la nueva política económica y comercial de los Borbones.[4] Las restricciones impuestas por las autoridades coloniales y los intereses mercantiles porteños precipitaron el proceso que no tardaría en trasformar, a la hora de la independencia, la vieja rivalidad económica en abierto enfrentamiento político.

2

Al año siguiente de la destitución del virrey de Buenos Aires, un grupo de revolucionarios paraguayos, en su mayoría miembros de la milicia, se rebeló contra el gobernador español y en pocas horas se hizo dueño de la situación en la colonia. En aquella acción del 14 de mayo de 1811 desempeñó un destacado papel el abogado de Asunción, José Gaspar Rodríguez de Francia (1776-1840), más conocido en la historia como el Doctor Francia. Gran admirador de Rousseau y apasionado defensor de la Revolución francesa, el pequeño jacobino paraguayo fue miembro del triunvirato que asumió las funciones de gobierno provisional hasta que un Congreso nacional, celebrado en junio, nombró una junta gubernativa, de la que también formó parte. Más democrático que esta primera asamblea —o "cabildo abierto"— compuesta por 300 vecinos, el Congreso reunido el 30 de septiembre de 1813 —"de los mil"—, electo por la mayoría de los habitantes del país, y del que solamente estaban excluidos "los enemigos del sistema de la libertad", y el "segundo Congreso supremo", convocado en 1814, permitieron al Doctor Francia anular la influencia de Yegros y Caballero, jefes militares de la insurrección y ligados a los círculos aristocráticos. Tras derrotar a los llamados "españolistas" y vencer la resistencia de los "porteñistas", Francia había sido proclamado, con el apoyo de los chacreros y la mayoría de la población de las villas, "Dictador Supremo de la República". Dos años más tarde, en 1816, otra asamblea popular le otorgaba el mando vitalicio.

El gobierno de "El Supremo" adquirió desde sus inicios el carácter de una dictadura nacional revolucionaria, defensora de la independencia del Paraguay frente a los reiterados esfuerzos de Buenos Aires por subordinar el territorio a su tutela. En lo interno, promovió toda una serie de medidas radicales contra la explotación feudal, el poder de la Iglesia y alentó un igualitarismo social *sui generis*. En lo externo, mantuvo una política de neutralidad, absteniéndose de participar en los conflictos entre las provincias del Plata, y respondiendo con un "aislamiento austero" al bloqueo decretado por la oligarquía bonaerense. El Doctor Francia anulaba así, sobre la base de una correlación de fuerzas sociales favorables, las amenazas que desde afuera apuntaban contra su patria. Era un caso único en América Latina. Cuando en casi todas partes se imponían los grupos conserva-

[4] Véase Manfred Kossok, *El virreinato del Río de la Plata*, Buenos Aires, 1959, p. 60.

dores, interesados en mantener las estructuras feudales, cuando las guerras civiles dificultaban la consolidación del nuevo orden estatal y el capital comercial inglés echaba los cimientos de un nuevo tipo de dependencia, Paraguay mantenía una economía propia, un estado nacional independiente, marco e instrumento a su vez de la nacionalidad que surgía bajo la acción enérgica del Doctor Francia, y una sociedad de agricultores libres.[5]

Naturalmente, el bajo nivel de las fuerzas productivas hacía posible, a la vez que condenaba, aquella hermosa utopía roussoniana de El Supremo.[6] Sus sucesores, al fomentar las relaciones mercantiles, abrirían poco a poco la puerta de las viejas desigualdades, la recuperación del clero, el espíritu de casta en el ejército, el renacimiento de la gran propiedad y los privilegios comerciales; aunque todo sin tocar las conquistas esenciales del campesinado, fundamento de la unidad nacional.

A la muerte de Francia asumió el poder una junta militar. Hasta cierto punto, el ejército era la única fuerza organizada del país (El Supremo no se fiaba de nadie).[7] Después un triunvirato y, por último, una asamblea de quinientas personas nombró dos cónsules: el teniente Mariano Roque Alonso y el abogado Carlos Antonio López. Evidentemente, el momentáneo vacío de poder daba otra vez vigencia a fórmulas políticas ya probadas a raíz de la independencia.

López manejó la cosa pública con suma habilidad y fue elegido a los tres años presidente de la República por dos lustros. Pero lo más significativo fue la adopción de la constitución burguesa de 1844, claro indicio de que la opción de desarrollo capitalista, la única históricamente posible, se asumía conscientemente.

Así mismo, el continuador de Francia, que ya sí tenía un proyecto de desarrollo para aquella sociedad campesina, aumentó a 64 las "estancias de la patria" —organizadas por El Supremo para sostener al ejército—, construyó calles, canales, puentes; inauguró una de las primeras líneas ferrocarrileras —entre Asunción y Paraguarí— de América del Sur y un sistema de telégrafos (1861). El país progresaba: se botaba vapores, funcionaban una fundición y un arsenal. El avance técnico y manufacturero —más de doscientos ingenieros y científicos extranjeros, sobre todo ingleses, trabajaban bajo contrato en Paraguay—, aunque modesto, no tenía parangón en América.[8] Se trataba en lo fundamental de lo que hoy se denomina el sector estatal de la economía, o sea, de un atisbo de capitalismo de estado orientado, no precisamente al fomento de una clase burguesa, sino al fortalecimiento de la capacidad defensiva del país y a dotarlo de los pivotes técnico-materiales de la modernidad. El marco político lo configuraba un original régimen bonapartista —por su relativa independencia frente a los distintos sectores sociales—

[5] El mejor trabajo que conocemos sobre el gobierno y las medidas revolucionarias del Doctor Francia está escrito por Sergio Guerra Vilaboy: *El Paraguay: un caso singular de independencia política y económica en América Latina*, Dpto. de Historia de América, Universidad de la Habana, 1975.

[6] Este aspecto ha sido lúcidamente señalado por el historiador soviético M. S. Alperovich.

[7] Una recreación artística del ambiente político-social en la época de Francia está dada en la obra del conocido novelista y poeta paraguayo Augusto Roa Bastos, autor de *Yo el supremo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.

[8] Véase Óscar Creydt, *Formación histórica de la nación paraguaya*, 1953 (mimeo.).

que mantenía en manos de la familia de los López todas las palancas del poder económico.[9]

A Carlos Antonio López también se acredita una serie de reformas liberales, como la abolición de la esclavitud, de poca significación en el área, aunque bajo su gobierno el clima general tendía a hacerse cada día más conservador. Realizó una política exterior mucho más activa que la de su predecesor y debió enfrentar las primeras agresiones de importancia contra la soberanía del país, como el envío por Estados Unidos de una escuadra en 1858 bajo el pretexto de una supuesta violación paraguaya —incidente del Water Witch— de la libre navegación en los ríos.[10]

En 1862 murió Carlos Antonio y le sucedió su hijo Francisco Solano, nombrado por su padre en 1855 jefe del ejército. Por esa época los reaccionarios del Brasil y la burguesía comercial-terrateniente de Buenos Aires comenzaron a fraguar planes para destruir al pujante estado de Paraguay. Dejando a un lado sus tradicionales diferencias, y bajo la benévola protección de Inglaterra, se preparaban para repartirse la tierra guaraní, atraídos por sus potencialidades económicas y atemorizados por su incrementada capacidad militar, capaz de variar el precario equilibrio en el Plata en perjuicio de los intereses de argentinos, brasileños e ingleses.

Ante Paraguay se abrían además perspectivas —gracias a los progresos de la navegación a vapor— de comunicarse directamente con Europa, utilizando el puerto de Montevideo como base de operaciones. Para el ulterior desarrollo del país era imprescindible romper el aislamiento, comercializar los mayores excedentes de su producción, hallar nuevas fuentes de acumulación. Era la ley inexorable que obligaba a forzar una apertura y que al mismo tiempo, paradójicamente, lo sentenciaba a caer, por la correlación de fuerzas externas, bajo la dominación extranjera.

Es entonces (1865) cuando Argentina y Brasil se lanzan conjuntamente sobre Uruguay para expulsar al presidente conservador Berro, amigo de Paraguay.[11] Una petición de ayuda movió a Solano López a demandar de los brasileños respeto para la soberanía uruguaya. A la negativa de Brasil siguió la decisión paraguaya de apoderarse de una embarcación brasileña y de enviar tropas a Matto Grosso. El argentino Bartolomé Mitre prohibía, mientras tanto, el paso de las fuerzas de López por el territorio de Misiones en dirección a Río Grande del Sur, al tiempo que tropas argentinas y cariocas consumaban la intervención en Montevideo colocando al liberal Flores en la presidencia: el camino para la concertación de una alianza ofensivo-defensiva —firmada en secreto y que preveía el reparto del territorio paraguayo— de los tres países contra el gobierno de Asunción quedaba abierto.

Cuando las hostilidades se iniciaron, Paraguay poseía una relativa superioridad

[9] Como testimonio del estricto control estatal sobre la economía resulta muy interesante el relato del escritor y periodista español Idelfonso Antonio Bermejo, quien realizó una visita al Paraguay en estos años: *Rèpúblicas americanas, episodios de la vida política y social de la República del Paraguay*, Madrid, Imprenta R. Labajos, 1873.

[10] Véase el documentado libro de Pablo Max Iusfrán, *La expedición norteamericana contra el Paraguay, 1858-1859*, Asunción, Guarania, 2 t., 1954.

[11] Véase la obra de Juan I. Liviers Argana, *Con la República del mariscal, documentos de Francisco Solano López*, Asunción, 1970.

militar, en parte suprimida —tras el desastre de Uruguayana— con el arribo de la poderosa flota brasileña y numerosos contingentes de infantería de los aliados. Privado de la iniciativa, Solano López optó por la guerra de posiciones. En los grandes combates de Tuyutí, Curupatí y la tenaz defensa de Humaitá —y un sinnúmero de sangrientos encuentros—, rendido en 1868, los soldados paraguayos demostraron arrojo y valor asombrosos. Forzado el paso de Humaitá por la flota brasileña y dominado el río, la superioridad numérica y en armamento de los brasileños se impuso paulatinamente. A pesar de ello, Solano López siguió peleando al frente de sus hombres —al final más bien niños— hasta perecer en Cerró Corá junto a los últimos restos de su ejército, después de trasladar la capital cuatro veces de sitio. Era el mes de marzo de 1870. De medio millón de habitantes que tenía el país en 1865, quedaban 221 mil: 106 mil mujeres, 86 mil niños y 29 mil hombres, en su mayoría ancianos. En otras palabras, Paraguay había perdido casi toda su población masculina.[12]

3

El triunfo de la coalición permitió al Brasil y Argentina apoderarse de parte del territorio del país vencido. Con el regreso de los exiliados —muchos de ellos integrantes de la llamada "Legión paraguaya"— comenzó la lucha entre los distintos grupos por controlar el poder. La nación, o lo que quedaba de ella, fue disfrazada de república de tipo liberal y se votó una constitución (1870) que concedía a los extranjeros exención de impuestos y derecho a tener propiedades. El país se abrió al capital extranjero, sobre todo inglés, primero por la vía de los empréstitos, después otorgándole concesiones territoriales y ferrocarrileras.[13] Destruida gran parte de la producción agrícola y renacido el latifundio en gran escala, sobre todo a partir de 1885, cuando el régimen conservador legalizó las ventas masivas de los bienes nacionales para cubrir las deudas del fisco, el sector fundamental de la economía paraguaya pasó a ser el de las estancias y plantaciones orientadas a la exportación. A ello se agregó a finales de siglo la extracción del tanino de quebracho y el aprovechamiento de los bosques de maderas duras por empresas extranjeras. Hasta la yerba mate, el cultivo tradicional, quedó bajo el control de firmas inglesas, brasileñas y argentinas. La Industrial Paraguaya sería la más famosa de ellas.

Estos intereses fueron los principales responsables de la introducción del sistema de "enganche" en los yerbales, criminal modalidad de la esclavitud moderna.

La vida política del nuevo régimen se desarrolló en medio de las turbulencias conocidas antes por otros países latinoamericanos: pugnas de bandos y cliques, pronunciamientos, guerras civiles y asesinato de opositores en las calles.[14]

[12] Sobre la guerra de la Triple Alianza puede leerse la apasionante reconstrucción histórica de Manlio Cancogni e Ivan Boris, *El Napoleón del Plata*, Barcelona, Noguer, 1972.

[13] Para todo lo relacionado con el problema agrario en el Paraguay es indispensable el voluminoso y erudito trabajo de Carlos Pastore, *La lucha por la tierra en Paraguay*, Montevideo, 1972.

[14] La historiografía tradicional es incapaz de explicar este fenómeno. Véase Justo Pastor Benítez, "Historia contemporánea del Paraguay a partir de 1870", en *Historia de América*, dirigida por Ricardo Levene, t. IX, Buenos Aires, 1943, pp. 265 *ss*.

Entre 1870 y 1876 una fuerza de ocupación brasileña, instalada en Paraguay, representaba el orden traído por los aliados. Como la contienda se llevó a cabo bajo las banderas del liberalismo mitrista y la mayoría de los repatriados estaban refugiados en Argentina, los primeros gobiernos fueron presididos por "legionarios" liberales, aunque la vicepresidencia se reservaba a alguno de los antiguos colaboradores de Solano López que había preferido colocarse bajo la protección brasileña. Estos últimos, entre los que sobresalían Cándido Barreira, Cayo Miltos y Rufino Taboada, comenzaron a llamarse "colorados", en oposición a los "azules" o liberales, representados por José Segundo y Juan José Decoud, Benigno Ferreira, Facundo Machaín y Juan Silvano Godoi.

Detrás de cada uno de estos grupos lo que se dirimía era la hegemonía de Brasil o Argentina. La primacía del primero parecía asegurada a fines de 1874, después que tres insurrecciones del general lopista Bernardino Caballero y otros veteranos de la guerra terminaron imponiendo el primer gobierno "colorado". Al amparo de la figura ya legendaria de Caballero —uno de los más aguerridos oficiales de Solano López— los "colorados" se mantuvieron en el poder hasta 1904, cuando una rebelión de las dos facciones liberales, los "cívicos" y los "radicales", obligó al presidente, coronel Juan A. Escurra, a firmar el "Pacto de Pilcomayo" y retirarse del gobierno. Ya por entonces las dos tendencias principales se habían organizado en partidos políticos (1886): el Liberal, vocero de los intereses de un grupo de latifundistas y comerciantes burgueses, vinculados al capital angloargentino, y la Asociación Nacional Republicana, integrada por terratenientes y militares conservadores, de cierta manera subordinados a la influencia de la cancillería brasileña. El segundo también dividido en facciones contrapuestas: los "eguzquisistas" —de Juan Bautista Egúzquiza, presidente entre 1894 y 1898—, inclinados a colaborar con el liberalismo, y los "caballeristas", versión paraguaya del nacionalismo conservador.

Durante la primera guerra mundial Paraguay, recuperado parcialmente de la catástrofe demográfica gracias a las virtudes de la poligamia, se benefició por la demanda que alcanzaron el tanino, el algodón y la yerba mate en el mercado exterior. Pero ello no puso fin a la permanente crisis política, cuyos protagonistas más destacados pasaron a ser ahora los liberales "cívicos" y los "radicales", divididos a su vez desde 1920, bajo los efectos de la depresión y la agudización del problema agrario, en "shaeristas" y "gondristas". Despuntaban también nuevas fuerzas y sectores sociales: desde 1906, por ejemplo, se habían creado las primeras asociaciones de trabajadores inspiradas en el anarquismo, y el movimiento de protesta iniciado en la Universidad de Córdoba (1918) encontró eco duradero en el estudiantado de Asunción.

II. UNA TREGUA EN LAS LUCHAS CIVILES

En 1925 el régimen liberal parecía estabilizarse en Paraguay después de largos meses de guerra civil. El último enfrentamiento faccionalista había comenzado el 29 de octubre de 1921, cuando Manuel Gondra, invocando su habitual principis-

mo, renunció a la primera magistratura ante las exigencias del caudillo político Eduardo Schaerer, única figura del liberalismo que hasta ese momento podía vanagloriarse de haber terminado su mandato pacíficamente, a pesar de que también fue objeto de un intento de golpe de estado mientras era presidente (1912-1916).

La precaria situación financiera, el descontento de las masas campesinas y la agitación urbana, constituían el trasfondo de las nuevas pugnas entre los distintos intereses que aspiraban a la hegemonía política cuando la división del Partido Liberal en 1920 trajo al país otro turbulento período de anarquía. Esta vez se vieron involucrados todos los grupos: los "cívicos" junto a los "gondristas" y los "jaristas" al lado de los "schaeristas", tendencia que logró atraerse la colaboración de elementos del "coloradismo" y contaba con el apoyo de algunas guarniciones del interior. La participación de fuerzas militares en uno y otro bando convirtió la controversia entre los seguidores de Schaerer y el presidente provisional, Eusebio Ayala, en una verdadera contienda armada que duró catorce meses e incluyó dos ataques infructuosos de los sublevados a Asunción (9 de junio de 1922 y 9 de julio de 1923). El gobierno pudo controlar la situación tras el fracaso del segundo asalto a la capital gracias a la decidida actuación de dos hombres que en un futuro próximo desempeñarían destacados papeles: el nuevo presidente provisional, Eligio Ayala, y un mayor, José Félix Estigarribia, llamado a convertirse en la más relevante figura de la vida nacional durante la década del treinta.

Sociólogos e historiadores burgueses —como Liliana B. Mahn— atribuyen al caudillismo, al personalismo o a las imperfecciones de las instituciones democráticas paraguayas, la inestabilidad política entre 1898 y 1932. Según ellos fácilmente constatan, los partidos servían más de vehículo a los intereses particulares que a los colectivos, "debilitándose hasta no poseer la autoridad para ordenar la vida pública de su país, ni la actividad política propia", y el ejército era utilizado para derrocar al gobierno o para mantenerse en él. A este catálogo de superficialidades añaden que los progresos materiales y sociales alcanzados en esos años —avances del capital extranjero y de la legislación liberal— no fueron producto de las innumerables "revoluciones" —que como es natural nada bueno pueden traer— sino de la actividad ilustrada de algunos presidentes.[15]

Contrastando con esta mal disimulada apología de los gobiernos "estables" —como el de Stroessner—, la historiografía progresista hace tiempo ha señalado las principales causas del clima de anarquía que prevaleció durante la República liberal y cuya contrapartida es, sin duda, el inmovilismo político de los regímenes conservadores posteriores a la guerra del Chaco. Una de esas causas, ya mencionada, fue el prolongado litigio entre Argentina y Brasil por quedarse con la mejor parte del botín paraguayo tras la guerra de la Triple Alianza. Si estas contradicciones salvaron en cierto sentido al país de un total desmembramiento territorial, no lo libraron de los continuos complots que ambos bandos alentaban para asegurarse un efectivo control sobre sus asuntos internos. Basta recordar, por ejemplo, que en sólo un año, 1870-71, hubo dos golpes de estado y una asonada insurreccional.

[15] Liliana B. Mahn, *Algunos aspectos de la evolución política en el Paraguay*, Asunción, Centro paraguayo de Estudios Sociológicos, s/f.

Consolidada *manu militari* la hegemonía brasileña, la penetración pacífica de su rival en la economía paraguaya estuvo condicionada por el desplazamiento hacia el Río de la Plata del centro de gravedad de la expansión británica, que sólo veía en Paraguay un área subsidiaria del sector agroexportador argentino, en rápido crecimiento y dominado por los intereses comerciales ingleses.

Paradójicamente, los éxitos del capital angloargentino tuvieron mucho que ver con la política liquidadora del gigantesco patrimonio fiscal seguida por el régimen paraguayo emergido de las primeras luchas civiles gracias al concurso de la diplomacia brasileña. La autorización de enajenar todas las tierras públicas dictada por el gobierno de Asunción en 1885 puso en manos de los capitalistas extranjeros buena parte de las praderas, los bosques y los yerbatales. Simplificando, se puede decir que creó las premisas para vincular a Paraguay a la división internacional del trabajo en la región del Plata, trasformándolo en segmento de un sistema económico que a su vez funcionaba como apéndice de la metrópoli inglesa. No resulta difícil imaginarse las limitadas posibilidades de desarrollo estable que les fueron reservadas al país en esas condiciones.

Las repercusiones de estos procesos se dejaron sentir a corto, mediano y largo plazo: influyeron sobre la coyuntura política de fines del siglo XIX, determinaron el triunfo liberal de 1904, y dejaron su huella permanente en las estructuras de una sociedad que parecía condenada al atraso, la miseria y el caos.

La fundación de las primeras agrupaciones políticas, el Partido Liberal y el Colorado (Asociación Nacional Republicana), reflejó la división definitiva de la naciente oligarquía entre un grupo que se entendía directamente con los capitalistas extranjeros en el reparto de los recursos naturales y otro decidido a servir de intermediario y promotor más eficaz de la "reconstrucción étnica y económica del país". De aquí salieron precisamente los jefes del "campamento de Villeta" y de las distintas facciones liberales involucradas en los conflictos civiles de inicios del siglo XX. Al mismo tiempo, su ala más radical recogía las protestas de la población rural afectada por la expansión ilimitada del gran latifundio.

Desde el punto de vista estructural no está de más anotar que el enorme peso de los enclaves extranjeros establecidos en esta época dejó a los terratenientes paraguayos sin acceso a las principales fuentes de acumulación y los obligó a conformarse con la explotación de una ganadería extensiva de bajo rendimiento. En realidad, los "abogados de los inversores angloargentinos" [16] llegados al poder con el "Pacto de Pilcomayo" (1904) representaban muy imperfectamente a la fraccionada oligarquía paraguaya: de ahí la constante anarquía política. Dicho de otra forma, el país que dos veces había visto desaparecer a su "élite social" (cuando la independencia y en 1870), experimentaba de nuevo una situación que oponía graves obstáculos a la integración de las clases dominantes, ahora debido a una situación de signo inverso: no era el igualitarismo del Doctor Francia, ni el bonapartismo de Solano López, sino el síndrome de una economía de enclaves.

Aquel panorama pareció modificarse cuando Eligio Ayala asumió el mando el 15 de agosto de 1924 como presidente constitucional. Dentro de una perspectiva

[16] La frase es de Francisco Gaona, *Introducción a la historia gremial y social del Paraguay*, tomo I, Buenos Aires, 1967, p. 153.

histórico-mundial, ésta era la etapa de lo que se ha llamado estabilización relativa del capitalismo, breve respiro de recuperación de un sistema envuelto, desde la guerra mundial y la Revolución socialista de octubre, en una aguda crisis general.

La coyuntura del mercado internacional después de 1923 favoreció la reanimación de la economía paraguaya, pero en provecho fundamentalmente de las empresas extranjeras establecidas en las distintas ramas del sector primario. Para citar algunas cifras, desde 1913 sesenta y ocho compañías angloargentinas poseían 10 millones de hectáreas en el Chaco Boreal dedicadas a la explotación ganadera y maderera (incluido el quebracho) y los primeros frigoríficos funcionaban como simple prolongación de los existentes en Argentina— país que ya acaparaba el 90% del comercio exterior. Aunque las inversiones inglesas no superaban los 16 millones de dólares —3 millones las norteamericanas—, el país se encontraba en las mismas manos que dominaban en el resto del Plata.[17]

La reactivación de la economía argentina, polo alrededor del cual giraba la paraguaya, y la rápida ampliación de los cultivos de algodón en tierras de agricultores guaraníes, posibilitó al presidente Ayala sanear las finanzas del país y realizar una política de concordia nacional, que no excluyó a los "colorados". Éstos no sólo fueron apoyados en su propósito de reivindicar la memoria de Francisco Solano López en el centenario de su nacimiento (1926) —los "legionarios" lo habían declarado "traidor a la patria"— sino autorizados para integrar de nuevo el Congreso. Aparentemente, se afianzaba una tregua en medio de las luchas civiles.

III. LA COLONIZACIÓN MENNONITA Y LA DEFENSA DEL CHACO

Eligio Ayala era de un temperamento irascible y polémico. Su energía desbordada, más que su habilidad, había puesto freno a la beligerancia entre las facciones. Con el revólver y la Constitución sobre la mesa de su despacho desafiaba a sus adversarios. Como los otros caudillos liberales de su generación estuvo entre los sublevados de Villeta (1904); encabezó la resistencia al golpe del coronel Jara en 1911 y, derrotado, se pasó nueve años residiendo en Europa. Solitario y soltero, aunque no asceta —como lo demostró el episodio en que perdió la vida (1930)—, Eligio Ayala dominó el escenario de la política paraguaya durante casi toda la década del veinte.[18] Entre 1924 y 1928 se dedicó a reorganizar el aparato del estado —además de extender el sistema escolar y mejorar los caminos— de acuerdo a las normas de un liberalismo atemperado por las nuevas corrientes que postulaban la importancia de "la cuestión social". Testimonio de ello son sus trabajos inéditos sobre el "problema agrario" y el ensayo titulado *Migraciones,* publicado póstumamente (1942) por dos de sus amigos.

En vísperas del conflicto del Chaco, las inquietudes de Ayala tomaban en cuenta la realidad de un país cuya población se recuperaba demasiado lentamente después de la catástrofe de 1870, debido al continuo drenaje de sus recursos huma-

[17] Véase una estadística pormenorizada en Gaona, *op. cit.,* pp. 150-162.
[18] Véase Justo Pastor Benítez, *El solar guaraní,* Buenos Aires, 1947, pp. 157-161.

nos causado por la gravitación del latifundio ganadero y la atracción de las zonas más prósperas del litoral del Plata.

Para el autor de *Migraciones* el constante éxodo de las masas campesinas desde fines del siglo XIX se debía al desequilibrio entre la producción agrícola en pequeñas parcelas y el latifundio ganadero: "El demonio de la gran propiedad —decía— espantó a las poblaciones. Para convertir las pequeñas posesiones de cultivo en dehesas había que desalojar a sus poseedores. Los que no eran propietarios de las tierras que cultivaban, la mayor parte de los agricultores, fueron desahuciados... Los cultivadores se desvincularon del suelo y perdieron la afección a las explotaciones agrícolas... Se formó el asalariado rural, la clase flotante, movediza, errante tras quimeras, siempre descontenta del presente..." [19]

Frente a esta situación, que después de la primera guerra mundial estuvo a punto de provocar una conflagración campesina, Eligio Ayala impulsó dos proyectos ya esbozados con anterioridad: los clásicos planes de fomento de la inmigración y el más reciente de dotar de parcelas propias a una parte de la población rural desposeída. Lo primero permitió el inicio de la colonización mennonita en el Chaco, la cual servía para reafirmar los reclamos de soberanía paraguaya sobre esa región; lo segundo inspiró la denominada "Ley de creación, fomento y conservación de la pequeña propiedad agropecuaria" del 15 de junio de 1926, dirigida a facilitar la consolidación del régimen liberal ante cualquier contingencia interna o externa. Era evidente que ambas cosas, la defensa del Chaco y el problema agrario, se asociaban precozmente al renacimiento de la conciencia y el sentimiento nacional paraguayos, tan duramente vapuleados por la historia.

Con la colonización mennonita sucedió algo que arroja luz sobre otro aspecto del problema. La historiografía liberal da a entender que una solución nacionalista de la cuestión agraria en este momento hubiera comprometido la posición internacional de Paraguay. Dicho sin eufemismos, los intereses angloargentinos asentados en el país le habrían retirado todo su apoyo en la disputa con Bolivia si los planes de reforma rozaban alguno de sus privilegios. Independientemente de que la intención del ala progresista del liberalismo no era liquidar el latifundio, su extrema sensibilidad ante una segura reacción adversa del aliado virtual la llevó a extremar la tradicional benevolencia que presidía las negociaciones paraguayas con la poderosa firma de Carlos Casado Ltda., usufructuaria de enormes concesiones en el Chaco. Los emisarios del Comité Central Mennonita visitaron la zona en 1921 y escogieron para la ubicación de la colonia precisamente tierras situadas dentro de las inmensas propiedades de los Casado. Como las gestiones para el traslado del primer contingente de inmigrantes, procedente del Canadá, habían tropezado con incesantes dificultades por las reticencias de Casado en cuanto al precio y los términos de la operación, el ministro de Asunción en Washington envió en abril de 1925 un mensaje muy revelador a su gobierno. Vale la pena citarlo para comprender la naturaleza de las relaciones entre el estado paraguayo y el capital extranjero en esta época: [20]

Me he comunicado activamente —decía— con el Sindicato de Nueva York y he man-

[19] Citado por Pastore, *op. cit.*, p. 289.
[20] *Ibid.*, p. 307.

dado algunos cables a Casado sin resultados hasta ahora... Como es natural yo no debo intervenir en la negociación de las tierras y no lo he hecho, concretándome a prestar el apoyo moral para una solución satisfactoria para el país... Mi impresión es que Casado obra en este asunto con un criterio puramente comercial y no ha puesto el interés que era de esperar. También me parece que está haciendo un cálculo erróneo acerca de la situación y no se da cuenta de la dificultad que se presenta para encontrar el dinero.

A continuación, el embajador informaba que seguía buscando fondos para financiar el proyecto a través de una nueva concentración de "sectas no combatientes", capaz de llegar a un acuerdo con Casado o con otros propietarios "si éste fuera poco comprensivo", pero recomendaba insistir en aquellas negociaciones porque las tierras de Casado ya habían sido revisadas y era mejor tratar con un solo propietario.

Casado terminó aceptando las tentadoras ofertas, y ya en 1930 estaban instaladas en el Chaco 27 comunidades mennonitas, 15 procedentes del Canadá y doce de Europa oriental.

IV. DIFERENDO FRONTERIZO CON BOLIVIA

Los esfuerzos paraguayos por erigir una barrera frente a las pretensiones bolivianas fomentando la colonización del Chaco acercaron el conflicto en lugar de alejarlo.

La cuestión de la frontera común entre los dos países había surgido a fines del siglo XIX, cuando el gobierno de La Paz trató de compensar la pérdida del litoral del Pacífico con la adquisición de una franja del litoral fluvial paraguayo. Los dos primeros tratados se firmaron en 1879 y 1887, pero ninguno fue ratificado por el Congreso de Asunción. La ocupación paraguaya en 1888 de la población de Bahía Negra, fundada poco antes por los bolivianos, dio lugar a una violenta protesta del país vecino y a la proclamación de "su indiscutible derecho de propiedad a todo el territorio del Chaco", como heredero de los antiguos dominios bajo la jurisdicción de la audiencia de Charcas. El canciller paraguayo, Juan Crisóstomo Centurión, definió entonces lo que sería la posición del país ribereño en su disputa con Bolivia: el diferendo no puede basarse en una reivindicación boliviana sobre el río Paraguay, sino se reduce a la delimitación de las fronteras en los confines del Chaco.[21]

Silenciando sus reclamaciones sobre Bahía Negra, los bolivianos obtuvieron un nuevo tratado en 1894 que les cedía un sector en el alto Paraguay y la mayor parte de los actuales departamentos de Boquerón y Fuerte Olimpo, más o menos la mitad del Chaco Boreal. Pero el gobierno colorado, acosado ya por la oposición liberal, ni siquiera se atrevió a presentarlo al Congreso.

Tras el triunfo de los liberales en 1904, Bolivia adoptó una nueva estrategia

[21] Véase Efraín Cardozo, "Historia del Paraguay independiente", en *Historia de América y de los pueblos americanos*, tomo XXI, dirigida por Antonio Ballesteros, Asunción, 1969 (reproducción), p. 237.

de penetración, basada en la construcción de una serie de fuertes militares en la región (Guachalla, Ballivián), mientras Paraguay alentaba la expansión de las explotaciones quebracheras en manos del capital angloargentino. Ello motivó la intervención del gobierno de Buenos Aires. La oferta de mediación argentina hizo que se sometiera al arbitraje de ese país las zonas situadas al norte del paralelo 20° 30′ y al oeste del meridiano 61° 30′. El acuerdo preveía el mantenimiento del *statu quo* hasta que concluyeran unas negociaciones pronto interrumpidas bajo la influencia de la irreductible propaganda de los liberales radicales contra la cesión de algún tramo del litoral, y la renuncia de Figueroa Alcorta a seguir prestando sus "buenos oficios" después de un incidente argentino-boliviano.

En los años siguientes se mantuvieron los contactos directos entre los representantes de Paraguay y Bolivia, y varios protocolos, firmados en 1913, 1915, 1916, 1917 y 1918, terminaron postergando indefinidamente el arreglo definitivo.

Aprovechando la guerra civil paraguaya, desde 1923 los bolivianos comenzaron a sembrar de fortines las márgenes del Pilcomayo. Eligio Ayala no se limitó a protestar, sino decidió hacer lo mismo en varios sectores del Chaco; se iniciaba la carrera de los fortines. En 1927 los primeros incidentes graves renovaron el interés argentino por mediar entre las partes y así se llegó a las llamadas conferencias de Buenos Aires. Después de casi un año de deliberaciones (septiembre de 1927 a julio de 1928) solamente se logró una declaración boliviano-paraguaya de que "el litigio en que se hallan comprometidos sus respectivos países no será resuelto sino por medios pacíficos, salvo el caso de legítima defensa".

V. ASCENSO DEL MOVIMIENTO OBRERO

En aquella tensa atmósfera ascendió a la presidencia José P. Guggiari (15 de agosto de 1928). El país se adentraba en otro período de luchas intestinas, condimentadas ahora con dos nuevos ingredientes: la protesta nacionalista y la vigorosa movilización de los sectores urbanos preteridos, principalmente la clase obrera.

Hasta cierto punto, ambas tendencias se correspondían con la situación internacional, amén de expresar la evolución de las contradicciones internas. La impronta del factor externo no sólo provenía de la inminencia de una guerra con Bolivia, sino de las repercusiones de la crisis económica que desde 1929 afectaba al sistema capitalista. La dependencia de la región del Plata frente al imperialismo inglés magnificó en un primer momento aquel fenómeno y extendió sus efectos a toda el área dominada por los intereses angloargentinos.

Como es natural, el sector de la economía paraguaya más estrechamente vinculado al mundo exterior era el de los enclaves productores de tanino, maderas y carne, en el alto Paraguay, y de yerba mate y productos forestales, en el alto Paraná. Además, todo el trasporte marítimo y las industrias conexas, donde se concentraba el incipiente proletariado, era un complemento de las actividades agroexportadoras. Si a esto se suma la política de austeridad seguida por el estado, los gastos en equipamiento bélico, la ausencia absoluta de crédito externo y la or-

fandad legal de los trabajadores, se podrá comprender el alcance de la crisis para las masas desposeídas.

Tampoco conviene olvidar que la tradicional economía semicerrada del campesino paraguayo impidió se generalizaran los conflictos en las áreas rurales, relativamente pacificadas por los derechos reconocidos a ocupantes (70% del campesinado) y arrendatarios en la legislación agraria liberal de 1926. Así se explica que una sociedad eminentemente rural comenzara a sufrir conmociones fundamentalmente urbanas de ahí en adelante. La agitación en el campo sólo sería un componente más del descontento nacional en los períodos cuando la acumulación de contradicciones en las regiones más densamente pobladas amenazaba con romper el equilibrio social. Pero, desde que las clases dominantes descubrieron esta correlación, apelaron con mayor frecuencia a los planes de colonización de zonas marginales o de "bienestar rural", destinados a disminuir las presiones que no siempre eliminaba el secular éxodo de la población paraguaya hacia los países vecinos. Pensamos en la relativa estabilidad de los regímenes conservadores a partir de 1940.

Durante el gobierno del liberal Guggiari (1928-32) la clase obrera hizo acto de presencia en la escena nacional exhibiendo una sorprendente energía. El largo proceso de gestación de la clase y el movimiento obrero había madurado lo suficiente como para que esto ocurriera. De las organizaciones de socorros mutuos a las sociedades de resistencia en los nuevos sectores artesanal-manufactureros creados por el incipiente desarrollo capitalista, a los sindicatos obreros, había pasado algo más de un cuarto de siglo.

Desde 1901 se puede hablar de una ola de huelgas y movimientos de protesta —motivados por la vertiginosa desvalorización de la moneda— a los que se sumaban no solamente los artesanos, sino también los trabajadores de las empresas de "tranway" (tracción de sangre), el personal marítimo y portuario, y los obreros de los aserraderos de la capital.

Esta primera etapa culminó con la constitución de la Federación Obrera Regional Paraguaya, inspirada en el anarco-sindicalismo argentino y organizada por la Federación de Artes Gráficas, los Obreros Carpinteros y Anexos y la Sociedad de Resistencia de Obreros Cocheros. Poco después se adhirieron a ella los gremios de hojalateros, joyeros, plateros, relojeros y conductores de carros, más una agrupación de artesanos diversos.

La histórica reunión que dio origen a la Federación Obrero Regional Paraguaya se celebró el 22 de abril de 1906 como preludio del 1 de mayo, día escogido por los gremios más combativos para iniciar las conmemoraciones de tan señalada fecha y exigir públicamente la jornada de ocho horas de trabajo, "sin disminución de los salarios". Dos semanas más tarde, el presidente "cívico", Cecilio Báez, dijo ante una manifestación reunida ante el palacio nacional con motivo de la fiesta patria que no creía en "el pretendido conflicto entre el capital y el trabajo", ni en el "rojo guiñapo del anarquismo".

En su comentario de este incidente Francisco Gaona advierte que "la trayectoria de la llamada revolución de 1904, a lo largo de los treinta años de su permanencia en el poder del estado, fue de lealtad y consecuencia con la línea marcada en el discurso del doctor Cecilio Báez... los problemas del trabajo fueron tratados

como problemas de orden público y como tal, problemas específicamente policiales o de incumbencia policial".[22]

Con el crecimiento numérico del proletariado y la proliferación de los establecimientos donde se elaboraban los productos forestales y agrícolas, centros de pequeños núcleos de trabajadores, el movimiento obrero entró en una nueva fase. En ella nació y ensayó algunas acciones de agitación revolucionaria —sin que desapareciera la influencia anarquista— la primera organización marxista de nuevo tipo, expresión de que el impacto de la Revolución de Lenin y los éxitos de la Rusia soviética, llegaban hasta las profundidades de la mesopotamia suramericana. Esta organización publicó entre 1922 y 1923 un llamamiento contra el gobierno "que desempeña el papel de lacayo del capital yanqui e inglés".

El proletariado emergente aprovechó la distensión política en tiempos de Eligio Ayala para crear la Unión Obrera del Paraguay (1926) y sindicatos como la Asociación Ferroviaria (1927). El 19 de febrero de 1928 un grupo de obreros e intelectuales atraídos por el marxismo fundó el Partido Comunista Paraguayo. Poco después el VI Congreso de la Internacional aprobó por unanimidad su solicitud de ingreso y a renglón seguido apareció el primer número de *Los comuneros,* órgano central del PC, Sección paraguaya de la Internacional comunista.[23]

Dominado por elementos pequeñoburgueses aquel destacamento inicial se desintegró, hasta renacer en 1933 gracias a la incorporación de algunos revolucionarios ex anarquistas que dos años antes habían intentado convertir sin éxito a la villa de Encarnación en una "comuna revolucionaria", bajo la consigna de "guerra a los explotadores económicos y políticos del pueblo paraguayo". Fue también durante 1931, año pleno de convulsiones, cuando la reacción asesinó a decenas de trabajadores en Puerto Pinasco y reprimió ferozmente a los estudiantes que el 23 de octubre exigieron cambios radicales en Asunción.

La peligrosidad del movimiento comunista no emanaba de su fuerza numérica, sino del papel que empezó a desempeñar dentro y fuera del país en su calidad de gestor de los "Comités antiguerreros". Llamando al pueblo a volver las armas contra el gobierno reaccionario y a oponerse al conflicto imperialista en el Chaco, los comunistas se convertían en blanco preferido de las persecuciones oficiales. Mientras algunos de sus dirigentes eran encarcelados, como Perfecto Ibarra y Obdulio Barthe, o asesinados, como Demetrio Flores, el partido divulgaba su plataforma mínima de lucha contra la guerra y por la formación de un gobierno democrático-popular a través del folleto *Ocara Poty Cue-mí,* de su periódico *Bandera Roja* y de miles de volantes distribuidos en la capital.

La restauración definitiva de la dirección del PC por una conferencia partidaria celebrada en agosto de 1934 dio impulso a la actividad sindical. En 1935 los comunistas organizaron la poderosa Liga de Obreros Marítimos y reorganizaron el sindicato obrero del frigorífico de Zeballos Cue.

[22] Francisco Gaona, *op. cit.,* p. 194.

[23] Véase todo lo concerniente al Partido Comunista del Paraguay en Hugo Campos, *Panorama del Paraguay,* Edit. Alas, publicado por la Comisión de Prensa y propaganda del CC del PCP, 281 pp.

VI. AGITACIÓN URBANA Y ECLOSIÓN NACIONALISTA

La otra cara de la agitación popular en vísperas de la guerra en el Chaco expresaba el descontento de las capas medias, agobiadas por la crisis económica y arrastradas por una súbita pasión nacionalista. Nos referimos específicamente a la actitud asumida por un sector de la oficialidad joven y a las continuas movilizaciones del estudiantado, ambas apoyadas por la facción liberal-nacionalista que se había escindido del partido a raíz de la toma de posesión del presidente Guggiari. Un sentimiento de exacerbado chovinismo se apoderaba de la población urbana y todo lo que sucedía, en un sentido u otro, contribuía a arraigarlo. Si el gobierno reprimía a los trabajadores en nombre del interés nacional, la oposición le imputaba su debilidad a la hora de defenderlo frente a las pretensiones bolivianas.

Ya cuando el primer choque sangriento —febrero de 1927— en el Fortín Sorpresa hubo manifestaciones en La Paz y Asunción pidiendo la guerra. En los meses siguientes las acusaciones contra el gobierno paraguayo se multiplicaron y apareció la Liga Nacional Independiente (LNI) —14 de mayo de 1928— que, sin definirse como partido político, enarboló las banderas del nacionalismo burgués. Sus fundadores anunciaron un programa lleno de ambigüedades en el que demagógicamente asociaban los reclamos de reforma social a la defensa de "la potencia económica, política y militar de la nación".[24]

A la creación de la LNI debe añadirse la abstención de un sector importante del coloradismo y la oposición de la corriente liberal encabezada por el diputado Modesto Guggiari, contraria a cualquier cesión territorial. Ni corto ni perezoso, el gobierno de Guggiari invirtió el superávit acumulado por Eligio Ayala en la compra de armamentos y la contratación de una misión francesa.

El 5 de diciembre de 1928 se produjo el más grave de los incidentes ocurridos hasta ese momento: fuerzas comandadas por el mayor Rafael Franco atacaron el Fortín Vanguardia y se llevaron prisioneros a los bolivianos sobrevivientes. Entraba en escena el hombre que pronto se pondría al frente del movimiento nacionalista, demasiado débil para derribar al régimen liberal antes de la guerra del Chaco, pero suficientemente fuerte como para hacerlo caer después.

Tras la acción llevada a cabo por la tropa de Franco la ruptura de relaciones no se hizo esperar. A un breve forcejeo diplomático siguió la ocupación boliviana del Fortín Boquerón y la movilización general del ejército paraguayo (15 de diciembre). En esa peligrosa disyuntiva, una conferencia panamericana de Conciliación y Arbitraje, acabada de inaugurar en Washington, ofreció mediar en el conflicto. Paraguay aceptó en seguida la propuesta. Bolivia lo hizo más tarde. La conferencia nombró una comisión que a los pocos meses presentó un proyecto de convención en el cual se confirmaba la soberanía paraguaya sobre el territorio laudado por el presidente norteamericano Hayes a fines del siglo anterior, y se adjudicaba a Bolivia, cualquiera que fuese la decisión final, el puerto Bahía Negra. Como las partes rechazaron el arreglo, el saldo de la mediación fue otra vez un compromiso de no acudir a la guerra para zanjar la disputa.[25]

[24] Los principios programáticos de la LNI son reproducidos por Pastore, *op. cit.*, p. 311.
[25] Efraín Cardozo, *op. cit.* p. 245.

Mientras las negociaciones continuaban, la oposición nacionalista ponía sus ojos sobre el mayor Franco, quien ya no se conformaba con atacar los fortines de los bolivianos, sino planeaba amotinar al ejército contra el gobierno. En marzo de 1931 el primer intento de Franco en este sentido fracasó y en mayo Guggiari designó jefe de las fuerzas en el Chaco al teniente coronel José Félix Estigarribia. El 2 de julio sobrevino un nuevo rompimiento de las relaciones con Bolivia. Los esfuerzos de conciliación argentinos y las gestiones de la Comisión de Neutrales volvieron a frustrarse.

Aunque ambos países aceptaron reunirse en Washington para estudiar un "pacto de no agresión", los constantes trajines diplomáticos caldeaban los ánimos en lugar de enfriarlos. En Bolivia se había hecho cargo del gobierno Daniel Salamanca, conocido propulsor de la tesis de "pisar fuerte en el Chaco"; en Paraguay, el fallido ataque para recuperar un fortín cerca de Nanawa servía de detonante a la sublevación estudiantil del 23 de octubre. En esa ocasión la juventud nacionalista, respaldada por políticos de la oposición, llegó a proclamar en la universidad la constitución de un "comité revolucionario". La reacción de las autoridades fue tan brutal, que el presidente Guggiari se vio obligado a abandonar el cargo temporalmente para someterse a una parodia de enjuiciamiento congresional.[26]

La crisis del Chaco no sólo amenazaba con liquidar el orden liberal sino también ponía en tela de juicio el proyecto de la oligarquía paraguaya por copiar la más feliz, o menos desgraciada, asociación de sus congéneres argentinos y chilenos con el imperialismo inglés. El boliviano Zavaleta Mercado lo dice, a su manera, con las siguientes palabras: [27]

> Cuando no existe una clase dirigente con autonomía de pensamiento, lo que sucede en los países costeños, sucede también en los países mediterráneos, sólo que después y de un modo todavía más imperfecto. En lugar de aprender su propia historia, los liberales del Paraguay y de Bolivia se dedicaron a admirar a los países que los habían vencido, a repetirlos y envidiarlos. Tratan de imitar la asociación con el imperialismo que, con algún éxito, se cumplía por parte de la oligarquía porteña y de la chilena, anglófilas ambas, pero descuidan observar las condiciones específicas de tal juntamiento...

Las condiciones específicas a que alude Zavaleta eran las de una penetración que vinculó a Chile, y sobre todo a Argentina, en situación relativamente privilegiada al mercado mundial, induciendo cierto crecimiento, por lo demás deforme y pasajero, a la sombra de la gran expansión de las exportaciones de fines del siglo XIX y principios del XX. Pero allí también la crisis del sistema neocolonial —en Chile desde 1920— mostraría con crudeza los inconvenientes de tal juntamiento.

En el caso paraguayo-boliviano intervino una circunstancia adicional: la candente rivalidad interimperialista en el llamado Cono Sur, verdadero *substratum*, tanto del problema del petróleo, como de la guerra del Chaco. Aquel conflicto ofreció a las frustradas oligarquías liberales de La Paz y Asunción, la oportu-

[26] *Ibid.*, p. 247.

[27] René Zavaleta Mercado, *Bolivia: crecimiento de la idea nacional*, La Habana, Casa de las Américas, 1967, p. 21.

nidad de asumir por primera vez la defensa de "los intereses nacionales". Y si la zona guardaba las fabulosas riquezas que suponían, ello significaba realizarse como clases dirigentes, prósperas y no solamente cultas, como siempre pretendieron ser.

Desde otra perspectiva, la cuestión del Chaco aparece en tres niveles. La historiografía tradicional suele mencionar sólo el primero: la disputa fronteriza; la de izquierda destaca el segundo: el problema del petróleo. En nuestros días hace falta subrayar el tercero: la estrategia norteamericana por implantar, a cualquier costo, la total hegemonía de Estados Unidos en la región del Plata. Así se comprende que la Standard Oil sólo servía de punta de lanza a quienes desde entonces procuraban algo mucho más ambicioso: socavar las bases de la dominación inglesa, que, como veremos más adelante, tenía su talón de aquiles en la peculiar división del trabajo impuesta a la economía argentina, cuyo funcionamiento dependía de la capacidad británica para pagar, con las remesas de combustibles, las exportaciones de carnes y cereales.

VII. EL VERDADERO PAPEL DE LA STANDARD OIL

La forma en que la Standard Oil trasformó el viejo litigio fronterizo en un conflicto petrolero se conoce hoy *grosso modo,* aunque la índole de su intervención fue denunciada en su momento tanto en América Latina como en Estados Unidos.

Todo empezó con la entrega de una concesión petrolera a la firma norteamericana por el régimen boliviano en 1920. El área abarcaba inicialmente tres millones de hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Encontrado petróleo en Camiri, la cuestión era trasladarlo donde pudiera ser embarcado. Desconfiando de la política petrolera argentina, la Standard presionó a Bolivia para que garantizara una salida por el río Paraguay hacia los mercados del Atlántico sur. Ése pasó a ser el trasfondo de las reclamaciones bolivianas sobre Bahía Negra. También de las maniobras del Departamento de estado desde que Washington comenzó a manejar, a través de la Comisión de Neutrales, el diferendo paraguayo-boliviano.

El curso de las negociaciones de 1928 a 1932 indica que el régimen paraguayo deseaba evitar una confrontación armada y llegar a un acuerdo que le permitiera escapar indemne de la crisis interna. En eso coincidía con los capitalistas angloargentinos que lo sostenían. Bolivia, por su lado, estaba decidida a conquistar una salida a la cuenca del Plata empujada por la Standard Oil, que jugaba inescrupulosamente con la vieja aspiración del país andino. Pero la arrogancia de Salamanca reforzó la intransigencia del gobierno asunceño, simultáneamente alentada por el nacionalismo pequeñoburgués, de un lado, y los intereses antinacionales con sede en Buenos Aires y Londres, del otro.

En este contexto, las ambigüedades del gobierno porteño y las vacilaciones del paraguayo, hasta 1932, traducían las contradicciones del modelo agroexportador creado por el imperialismo inglés que, como ya se ha dicho, cubría su déficit comercial con Argentina vendiéndole carbón y petróleo. Según Puiggrós: [28]

[28] Rodolfo Puiggrós, *El irigoyenismo,* Edic. Corregidor, Buenos Aires, 1974, p. 234.

Si la Argentina se autoabastecía, por su propio esfuerzo o por intermedio de compañías extranjeras extractoras, su comercio con Gran Bretaña se desequilibraría y ésta se vería obligada a disminuir sus adquisiciones de carnes y cereales o a buscar otra forma de financiarlas. Cae de suyo que toda la economía agropecuaria exportadora argentina se hubiera trastornado en el caso de una baja importante de las compras inglesas de sus productos. Por eso convenía tanto a Gran Bretaña como a los sectores agrícola-ganaderos dominantes de la pampa húmeda que no se llegara al autoabastecimiento de petróleo.

Así las cosas, la Standard se movía en toda la región para lograr sus propósitos. Procuraba utilizar el ascendiente del gobierno uruguayo de Terra sobre el de Paraguay para hacer a éste ceder. Prometía a Brasil contribuir al desarrollo del estado de Matto Grosso con el petróleo boliviano y aprovechaba el interés de Chile por desviar la atención de Bolivia en dirección al Atlántico. Pero el verdadero objetivo del imperialismo yanqui, a largo plazo, era acabar con Yacimientos Petrolíficos Fiscales (YPF) y suplantar la dominación británica en el Plata.

A la Argentina —con importantes intereses en el Chaco— le preocupaba la posibilidad de una guerra, mas respaldaba al Paraguay buscando poner trabas a la expansión de la Standard, o en su defecto, participar en la comercialización del petróleo; y ello sólo era posible si obligaba a la compañía a construir un oleoducto a través de su territorio —una instalación clandestina de este tipo llegó a funcionar entre la zona petrolera y el norte argentino, sede de un sector de la oligarquía asociada al capital norteamericano— que desembocara en algún puerto de aguas profundas en su propio litoral. Ésa era además la solución ideal desde un punto de vista técnico.

Los paraguayos, mientras tanto, declaraban estar convencidos de que la intención boliviana era apoderarse de Puerto Pinasco y la mayor parte del Chaco, anexando los inmensos enclaves de la orilla derecha del río al emporio petrolero que Salamanca se había propuesto erigir con el concurso de la Standard. Y quizá no estaban completamente equivocados: en medio del conflicto la compañía se dedicó a adquirir casi todos los yacimientos a cambio de fuertes sumas empleadas por el gobierno boliviano en equipos militares.

En 1934, Eusebio Ayala, presidente de Paraguay a partir de 1932 y comisionado años antes por el gobierno de Eligio Ayala para que desde su cargo como plenipotenciario en Washington estudiara los problemas de la explotación petrolera, evaluaba la situación del Chaco como sigue: [29]

Entre el gobierno boliviano y la Standard Oil no existe un perfecto entendimiento respecto a la explotación. Aquél desea que se explote cuanto antes y a máximo rendimiento, con objeto de cobrar las regalías contratadas y vigorizar así las finanzas. En cambio la Standard Oil no tiene el menor interés en una pronta explotación, siendo su propósito mantener los yacimientos bolivianos como una reserva del porvenir. A las exigencias de Bolivia, la Standard Oil responde con la exposición de las dificultades insalvables para la comercialización del petróleo. Las dificultades se refieren al trasporte. Todo lo que ha conseguido es que produzca combustible para el ejército... El gobierno boliviano piensa que el oleoducto debe salir por territorio boliviano y

[29] Citado por Pastore, *op. cit.*, p. 395.

de aquí el empeño en obtener el puerto. Las razones que determinan a Bolivia nos impelen a nosotros a negarle en absoluto puerto del litoral. Nuestro país no puede vivir tranquilo con un emporio petrolífico en sus puertas, dirigido por la tornadiza e inescrupulosa política boliviana. Esto, además de razones de otro orden que son obvias.

El hombre que de esta manera escribía era sin duda un liberal pragmático, un buen conocedor de los problemas internacionales. Su mentalidad cosmopolita, el objetivismo de sus juicios y la gélida racionalidad de su conducta, no dejaban espacio al sentimiento y la sensibilidad humanas; era el estadista de la guerra, o como decía Justo Pastor Benítez, "el presidente de la victoria".[30] Durante su gobierno se desarrolló la contienda que devoró en el Chaco más de cien mil vidas de soldados bolivianos y paraguayos.

VIII. LAS HOSTILIDADES EN EL CHACO

La evolución de las hostilidades en aquella guerra fraguada a espaldas de los verdaderos intereses de Bolivia y Paraguay puede describirse así.

Rotas las relaciones entre ambos países, las acciones militares de lo que sería una absurda y prolongada carnicería comenzaron el 15 de junio de 1932 alrededor del Fortín Pititantuta. Recuperada esta posición por los paraguayos un mes después de haber sido conquistada por los bolivianos, éstos retomaron la iniciativa y capturaron los fortines Corrales, Toledo y Boquerón. En septiembre, luego de dos meses de calma, la guerra continuó con redoblada violencia y las fuerzas paraguayas, dirigidas por el coronel José Félix Estigarribia, ocuparon el fortín boliviano de Saavedra (diciembre), abandonándolo en 1933 para defender Gondra, vértice disputado durante varios meses por ambos contendientes.

El territorio donde se libraba la lucha eran los ralos bosques del Chaco Boreal, región semidesértica, salpicada de pequeños montículos de menos de 50 pies de alto, y cubierta de una capa de arena y marga que se trasforma en pantanos intransitables durante la época de lluvias debido a un lecho arcilloso casi impermeable. En la estación seca el agua desaparece de los cañadones y hay que trasportarla desde largas distancias. La posesión de un oasis o un pozo se convertía así en una cuestión de vida o muerte. De ahí que los contrincantes envenenaran sus aguas cuando eran desplazados de ellos. En esas condiciones llegaron a combatir 150 mil soldados semidesnudos, con ametralladoras, obuses y carros blindados; a pesar de que la artillería pesada y la aviación resultaban ineficaces cuando el terreno anegado paralizaba el desplazamiento de la primera o amortiguaba las explosiones de las bombas arrojadas por la segunda.

En 1933 las tropas paraguayas recurrieron a un profundo sistema de trincheras —cuyo más alto exponente fue la línea Nanawa-Gondra-Arce-Herrera-Toledo, y las bolivianas, mandadas por el general alemán, Hans Kundt, apelaron a concentradas ofensivas sobre los fuertes que la sostenían. Siguiendo los patrones de la

[30] Justo Pastor Benítez, *op. cit.*, p. 153.

guerra convencional, Kundt atacó infructuosamente Nanawa (enero), Toledo (febrero), Herrera (marzo), Gondra (abril y mayo), Herrera otra vez (junio), y a la llegada de la seca (julio) empleó todos los medios técnicos en su poder —las tropas bolivianas estaban mucho mejor equipadas que las paraguayas— contra Nanawa. Rechazados a principios de agosto, los bolivianos desviaron el grueso de sus fuerzas hacia Gondra, donde la ofensiva duró hasta el 9 de septiembre.

Nueve meses habían resistido los paraguayos las furiosas embestidas bolivianas. Asumiendo entonces la iniciativa, destrozaron al regimiento Ayacucho e hicieron rendirse, el 11 de diciembre, a dos divisiones selectas del enemigo. Estos acontecimientos y el conato de rebelión de los regimientos bolivianos Junín y Azurduy, además del que estalló en el fortín Saavedra, determinaron una petición de "alto al fuego" solicitada por el gobierno de La Paz (diciembre). Aquello era suficiente y Kundt fue relevado de su cargo por el boliviano Enrique Peñaranda. Los paraguayos, por su lado, ascendieron a Estigarribia a general.

Terminada la tregua, el año 1934 se inició con una coordinada progresión paraguaya en tres direcciones: Muñoz-Magariños, Platanillos-Cabezón, Camacho-Cañada Tarija. A pesar de los continuos contrataques bolivianos, la ofensiva, sobre todo en la zona meridional del Chaco Boreal, no pudo ser detenida. Las acciones de Ballivián, Fortín Ingaví y Cañada del Carmen, empujaron a los bolivianos hasta los contrafuertes andinos. Al reducirse el frente la lucha se hizo de nuevo difícil. Peleando en su propio territorio los soldados del país andino se crecían e infringían grandes pérdidas a los atacantes. No obstante ello, ya el 16 de enero de 1935 las tropas de Estigarribia llegaban a las márgenes del Parapetí, poniendo en peligro, no sólo Villa Montes, sino Camiri y Santa Cruz. Miles de hombres combatían y morían en la zona donde se alzaban, como testigos mudos de aquel desastre, los primeros pozos de la Standard Oil. Reaccionó entonces con energía inusitada la mediación imperialista y logró que ambas partes firmaran un armisticio el 12 de junio de 1935.[31]

Tras bambalinas primero y directamente después —desde octubre—, en la Conferencia de Paz convocada al efecto, comenzó a actuar Spruille Braden, quien, en nombre de una paz oportuna y a la vez tardía, salvó momentáneamente para Rockefeller su reducto petrolero de Bolivia. A los 70 000 soldaditos bolivianos y los 50 000 pilas paraguayos sólo los recordaba el pueblo.

IX. LA REVOLUCIÓN FEBRERISTA

Si para Bolivia la derrota en el Chaco representó una verdadera hecatombe nacional, que puso en crisis al "super-estado minero", en Paraguay, el desenlace no fue tomado

[31] Siguiendo las tradiciones de cierta literatura "académica" norteamericana, Leslie B. Rout. Jr. escribió una documentada tesis dirigida a ocultar el turbio papel del imperialismo en el conflicto del Chaco. Según él los Estados Unidos no pudieron impedir ni detener la guerra, aunque empeñaron todo su esfuerzo en arreglar la paz. En nuestro texto se pone en claro la naturaleza de estos "esfuerzos". El libro de Rout lleva por título, *Politics of the Chaco peace conference, 1935-1939*, Austin, University of Texas Press, 1970.

por los veteranos de la guerra y las masas populares precisamente como una victoria. Ya en noviembre de 1934 la revista literaria *Guaranía* (publicada en Buenos Aires) reproducía el famoso discurso del senador norteamericano Huey Long en el que éste acusaba a la Standard Oil de haber desencadenado el conflicto, tildándola de facinerosa, criminal, malhechora, conspiradora internacional y otras bellezas por el estilo. Aquellas cosas comenzaban a ser sabidas, o intuidas, por los paraguayos y un sentimiento de frustración nacional se extendió a lo largo y lo ancho del país. Un odio no disimulado contra el gobierno de lo que se comenzó a llamar reaccionaria "oligarquía legionaria" prendía en las filas de los ex combatientes.

La conciencia de la situación real de la patria guaraní, sometida a intereses ajenos, y el deseo de reanudar el curso independiente cortado por la agresión de la Triple Alianza, llevó a los oficiales nacionalistas, en trance de desmovilización, a organizar una asociación opositora, acaudillada por el Coronel Franco, popular jefe de división. Alarmado, el presidente Eusebio Ayala ordenó a Estigarribia la deportación de Franco y la supresión del movimiento. Pero ya era demasiado tarde: el 17 de febrero de 1936 las unidades de Campo Grande se sublevaron y, tras derrotar la resistencia del régimen, expulsaron del Paraguay a Ayala y al jefe del ejército. Franco creó entonces un gobierno provisional respaldado por algunas figuras civiles del Partido Colorado, como la del hijo de Bernardino Caballero, nombrado secretario de Agricultura.

Desde el poder, el jefe nacionalista trató de nuclear a sus seguidores en un nuevo partido: la Unión Nacional Revolucionaria —más conocida como "febrerista"—, ilegalizó el liberalismo y derogó la Constitución de 1870. El nuevo fervor patriótico se manifestaba también en actos solemnes: la población asunceña fue testigo de la consagración de un monumento destinado a guardar las cenizas de Solano López junto a los restos del soldado desconocido de la guerra en el Chaco.

En el orden práctico los "febreristas" se dispusieron a llevar a cabo un programa de modernización del país, satisfaciendo a la vez algunos de los más urgentes anhelos populares. El primero de ellos una reforma agraria democrática que pusiera en manos del campesinado paraguayo, empezando por los veteranos del Chaco, un lote de tierra donde trabajar y erigir su casa. La organización del crédito agrícola y la fijación de precios justos para los productos del campo completaban el plan. Se quería atraer de paso a la mayor parte de los 200 mil emigrados que el latifundio había obligado a refugiarse en las naciones vecinas.

En los primeros momentos el febrerismo reafirmó su orientación progresista decretando la jornada de ocho horas, la asistencia médica obligatoria en los centros fabriles y aumentos salariales importantes. Mientras el gobierno provisional procedía a fundar el Departamento Nacional de Trabajo, las organizaciones obreras celebraban un congreso unitario del que salió la Confederación Nacional de Trabajadores, integrada por 66 sindicatos y 55 mil miembros. La Federación de Estudiantes apoyó con entusiasmo la creación de 400 escuelas primarias. El comienzo, por lo menos, era prometedor.

Pero no todo marchaba según las apariencias. La oligarquía maquinaba junto a los sectores del ejército ligados a Estigarribia y el gobierno daba señales de vacilar ante la envergadura del proceso que había desatado, principalmente en la

aplicación de su proyecto de reforma agraria.[32] La influencia de los elementos de derecha en el seno del nuevo régimen y la ausencia de una dirección consecuentemente revolucionaria, hacían aflorar las clásicas debilidades del nacionalismo pequeñoburgués que agota sus posibilidades históricas.

El vuelco se produjo el 13 de agosto de 1937 al sublevarse los oficiales partidarios de Estigarribia. De vuelta el estratega del Chaco, la Constitución de 1870 quedó restablecida y un civil, Félix Paiva, ocupó la presidencia provisional, ocultando de momento la gravitación de los militares sobre la vida nacional, hecha explícita dos años después con la elección del jefe del ejército como candidato del liberalismo, bajo el estado de sitio y la exclusión de colorados y febreristas.

X. NACIONALISMO PEQUEÑOBURGUÉS Y REFORMA AGRARIA

La eclosión del nacionalismo y su triunfo arrollador en febrero de 1936 no son difíciles de comprender. La guerra del Chaco y su desenlace habían creado una situación revolucionaria en Paraguay —lo mismo puede decirse de Bolivia— que sirvió para unir provisionalmente en un torrente común a todas las corrientes antiliberales: desde el Partido Comunista hasta la pequeña burguesía nacionalista, sin descontar a numerosos elementos profascistas que se agrupaban en el Partido Colorado. Obligado a definirse en un sentido u otro, Franco cedió a las presiones del imperialismo —misión del coronel argentino Schüizer— y de la derecha, aliándose estrechamente con el grupo dirigido por su canciller Stefanich y desatando la represión contra los comunistas —decreto ley núm. 152. Así muchos de los que habían participado activamente en el movimiento del "17 de febrero" fueron perseguidos, detenidos o asesinados por las hordas del coronel Varela, jefe de la policía de la capital. Hasta hombres como Perfecto Ibarra, dirigente comunista que organizó en la zona de Trinidad una gran manifestación de protesta por la anunciada deportación del coronel Franco en vísperas de la acción de Campo Grande, fue a parar a la cárcel.[33]

Aunque el PC sólo disfrutó 15 días de vida legal, la constitución de la Confederación Nacional de Trabajadores constituyó un gran triunfo para el movimiento obrero. En los años siguientes el partido consolidó sus bases en las empresas tanineras y frigoríficos; entre los ferrocarrileros y marítimos, y dirigió la mayoría de los sindicatos y centrales sindicales —CPT, CNT, Comité de Defensa Sindical y Consejo Obrero del Paraguay— fundados entre 1937 y 1947.

La opción anticomunista y antidemocrática de Franco conducía al movimiento nacionalista, inevitablemente, a un callejón sin salida; lo aislaba de las masas y anulaba sin remedio su vocación antioligárquica. Esto último se puso plenamente de manifiesto durante la ejecución de los planes de reforma agraria.

Vale la pena recordar que el problema agrario en Paraguay se gestó en el período posterior a la guerra de la Triple Alianza, o más exactamente, después

[32] Véase, E. L. Nitoburg, *Paraguay*, Moscú, 1964.
[33] Hugo Campos, *op. cit.* p. 209.

que empezaron a pasar a manos privadas, sobre todo de propietarios absentistas, las mejores tierras de la región oriental. Hasta ese momento el campesinado había cultivado sus chacras protegido por un régimen paternalista que no extendió títulos u otros documentos probatorios de la posesión del suelo a los agricultores. Pero con la caída de Solano López y la legislación agraria de los gobiernos que le sucedieron, la población rural se vio de pronto en plena orfandad legal, condenada a probar sus derechos sobre unas tierras reclamadas por los beneficiarios de aquella gigantesca operación mercantil iniciada en 1885.

La causa de las masas campesinas fue al principio defendida por el ala radical del naciente movimiento liberal, representada por José de la Cruz Ayala (Alón); uno de los bachilleres del Colegio Nacional de Asunción que en 1887 fundó el Centro Democrático. Ferozmente perseguido y obligado a refugiarse en Argentina —donde a los pocos años falleció—, Alón acostumbraba a decir que de los 300 mil habitantes del Paraguay, 200 mil eran "ilotas".[34]

Si el descontento campesino dio al liberalismo la fuerza necesaria para imponerse frente a los conservadores (colorados) en 1904, el temprano predominio de los liberales "cívicos", consumó la ruina de los chacreros y el triunfo de los intereses directamente vinculados a la nueva economía de enclaves.

La recuperación de los "radicales" bajo la dirección de Manuel Gondra en la segunda década del siglo XX no cambió sustancialmente el panorama. Para estos hombres la cuestión agraria era más un problema social que económico y sus intenciones reformistas, finalmente recogidas en la llamada ley de Homestead (1918), evidenciaban la impotencia de aquellas soluciones parciales y tardías ante la omnipotencia del latifundio doméstico y extranjero.

Independientemente de las declaraciones programáticas, que hablaban de la necesidad de "crear una clase rural fuerte y próspera", la ley de 1918 era inaplicable, entre otras cosas, porque obligaba a la indemnización previa y a la intervención del poder ejecutivo "en cada caso" de expropiación. Ello anulaba por sí solo el postulado que declaraba de utilidad pública todas las tierras privadas ocupadas por más de cien campesinos adultos solicitantes, quienes sólo podían obtener un máximo de 10 y 20 hectáreas en la región oriental y el Chaco, respectivamente.

No obstante sus imperfecciones, aquella tímida legislación liberal sirvió para agitar a las masas de agricultores sin tierra propia y la sola posibilidad de su aplicación influyó en el nuevo sismo de guerra civil que sacudió al país entre 1920 y 1923.

En el acelerado despojo de la población campesina coincidían los intereses extranjeros invertidos en la explotación maderera, taninera y yerbatera, con los propósitos de los latifundistas criollos, los cuales consideraban a las pequeñas chacras un molesto obstáculo para el desarrollo de la ganadería extensiva. Los agricultores desalojados de sus pueblos iban a engrosar el ejército de peones que alimentaba, dentro y fuera del país, la insaciable voracidad de los enclaves subtropicales. Esto limpiaba las tierras de "intrusos", a la vez que liberaba fuerza de trabajo en provecho de la economía agroexportadora.

Cuando Eligio Ayala inició su período constitucional, sólo uno de cada veinte

[34] Pastore, *op. cit.*, p. 250.

paraguayos podía considerarse propietario de algún tipo de inmueble y cerca del 70% del campesinado trabajaba tierras ajenas.[35] Como ya se ha dicho, el sector progresista del liberalismo replanteaba el problema agrario en términos de la defensa de la pequeña propiedad y no de la erradicación del latifundio. El deterioro de la situación en el Chaco le hacía comprender ahora no sólo las ventajas, sino la urgencia de una política agraria que sirviera de base para la *integración de la población campesina al proyecto de la nación burguesa.* La importancia de la legislación de 1926 radicó entonces, no tanto en los planes encaminados a impulsar la colonización marginal, sino en las disposiciones que otorgaban el estatus de arrendatarios a los ocupantes "irregulares" de los predios situados en las regiones donde se aglomeraba el mayor número de campesinos sin tierra. Al frenar los desalojos y organizar algunas decenas de colonias agrícolas, distribuyendo miles de lotes entre los agricultores —se benefició la décima parte de una población total calculada en 900 mil almas—, los últimos gobiernos liberales aliviaron un poco el hambre de tierras, y sobre todo de estabilidad, sin debilitar el latifundio ganadero, ni afectar a los poderosos enclaves ubicados en el Chaco. Era, sin duda, una forma previsora de adelantarse a los acontecimientos que se avecinaban.

Sea como fuere, la participación del campesinado paraguayo en la contienda del Chaco demuestra que no se había perdido la larga tradición combativa de los chacreros, principales protagonistas de la sublevación de los comuneros en el siglo XVIII y de la asombrosa resistencia exhibida frente al invasor extranjero durante la guerra de la Triple Alianza; contienda en la que no solamente actuaron los resortes de la conciencia nacional, sino también la férrea determinación campesina de defender la tierra.

El fin del largo episodio en el Chaco puso otra vez a la orden del día el problema agrario. En primer lugar, el campesinado desposeído había hecho posible la defensa exitosa al principio y el avance impetuoso después, de las tropas paraguayas hasta los contrafuertes andinos. En segundo lugar, aquellos hombres, fogueados en el combate, no estaban dispuestos a regresar como simples ocupantes de sus tierras, sin títulos adecuados de propiedad. En tercer lugar, la oficialidad nacionalista se preguntaba cómo y a quiénes serían entregados los inmensos territorios conquistados por el ejército en el occidente del país.

Estas realidades obligaron al gobierno de Eusebio Ayala a promulgar una ley de colonización en 1935 que, a diferencia de las de 1918 y 1926, declaraba sujetas a expropiación todas las tierras aptas para cultivos por encima de las mil hectáreas e insatisfactoriamente explotadas, *se encontrasen o no ocupadas por agricultores.* Naturalmente, aquí también se estipulaba el pago por adelantado del precio exigido por el latifundista —o el Tribunal Supremo de Justicia en caso de desacuerdo— y la declaración, "en cada caso", de área colonizable por el Poder Ejecutivo. Lo suficiente para dejar inalterado el problema. Con todo, representaba algo más que el peregrino proyecto elevado un año antes al Congreso —y pronto archivado—, que ofrecía distribuir gratuitamente las tierras recuperadas a los bolivianos entre los veteranos de la guerra.

Significativamente, a los sobrevivientes de la odisea en el Chaco —poco menos

[35] *Ibid.*, p. 299.

del 50% de los movilizados—, no les interesaba quedarse allí para nada, sino volver cuanto antes junto a sus familias en la región oriental. El coronel Franco respondería de cierta manera a esos anhelos por medio del decreto ley núm. 1060 del 5 de mayo de 1936, a cuyo amparo empezó a expropiar las mejores explotaciones situadas entre los ríos Paraná y Paraguay.

Para realizar la reforma agraria los "febreristas" acogieron un proyecto elaborado por el grupo de políticos nacionalistas que en 1934 había proclamado el "nuevo ideario" colorado, agitando la consigna de "orden, justicia social y solidaridad". En este documento se denunciaba que mientras los desiertos del país estaban en poder de 25 mil propietarios (*sic*) la masa de trabajadores rurales debía pagar subidos arrendamientos por tierras que no eran suyas. Consideraciones similares hacía el decreto núm. 1060; pero su parte dispositiva, duramente criticada por Pastore, limitaba a dos millones de hectáreas la superficie sujeta a expropiación —aproximadamente el 5% del territorio paraguayo— y trasfería las funciones del Departamento de Tierras y Colonización a un ente burocrático denominado Consejo de Reforma Agraria.[36]

En la práctica, la promulgación de la ley hacía más precaria la situación de los agricultores, quienes eran desalojados violentamente —ahora con más premura— por los latifundistas temerosos, todavía dueños de los factores de poder en las zonas rurales. Mientras, quedaba intacto el delicado problema de los enclaves extranjeros en el Chaco.

Ciertamente, la solución del problema agrario en Paraguay exigía trastornar las estructuras básicas de la sociedad —léase relaciones de producción— y liberar al país de la dependencia externa. El vacilante sector nacionalista liderado por Franco tomó la iniciativa en la década del treinta —hasta ahí su mérito histórico—, sin romper las barreras estructurales que estorbaban los cambios sociales: para ello hubiera sido necesario anular la dominación del capital foráneo sobre las principales fuentes de acumulación —el carácter de enclave de las grandes explotaciones, por lo menos— y abolir radicalmente la preeminencia económica, política y social de la oligarquía doméstica.

En lugar de esto, la acción desorganizada del gobierno franquista, que tronaba contra el latifundio en la capital sin proscribirlo efectivamente en las áreas rurales, sembraba el desaliento entre la indefensa masa campesina e impulsaba las maquinaciones golpistas de la reacción. Además, las limitaciones pequeñoburguesas de su nebuloso programa agrario, que incluso establecía el pago de los lotes —al principio en un plazo de quince años, reducido a diez más tarde— por los agricultores, hicieron perder de vista aspectos tan importantes como la organización de la cooperación campesina —tradicionalmente planteada de forma espontánea en el seno de las colonias agrícolas— y, sobre todo, la imperiosa necesidad de propiciar el concurso activo de las masas en el proceso de trasformación agraria.

Incapaz de resolver el principal problema del país, el febrerismo sucumbió ante las desembozadas presiones externas y la vigorosa contraofensiva de las clases dominantes.

[36] *Ibid.*, pp. 321 *ss.*

XI. RESTAURACIÓN OLIGÁRQUICA

La restauración oligárquica a la caída de Franco tuvo que prescindir de la colaboración de Eusebio Ayala, señalado por las masas populares como uno de los responsables de la tragedia del Chaco y de otros connotados políticos liberales. Quien regresó para ser desagraviado por los jefes del ejército profesional, autores directos del golpe contra el gobierno febrerista, fue el general Félix Estigarribia, estratega de la pasada contienda. De él se podría decir que muchos dudaban de sus dotes intelectuales, pero pocos de su talento militar. Su genial conducción de la guerra logró dos cosas que parecían imposibles: detener la marcha de los bolivianos hacia el río y destrozar las grandes unidades del enemigo por medio de la guerra irregular.

Fiel servidor de los regímenes liberales durante varios lustros, el ascenso político de Estigarribia representó más bien el ocaso que la recuperación de esta desgastada corriente. Su prestigio le permitió convertirse en el árbitro de las grandes decisiones nacionales hasta el 7 de septiembre de 1940, cuando perdió la vida en un accidente de aviación. En lo inmediato, asumió la misión de representar a Paraguay en Washington, estratégica posición desde la que regresaría para decir la última palabra en las negociaciones que se llevaban a cabo en Buenos Aires con el fin de firmar la paz definitiva. Mientras tanto, el abogado Félix Paiva, presidente provisional nombrado por el ejército, encarcelaba o desterraba a centenares de oficiales de la reserva vinculados a Franco, abolía todas las medidas progresistas de su predecesor, incluidas las expropiaciones dictadas al amparo del decreto núm. 1060, y por si quedaban dudas, también las disposiciones de la ley de colonización de Eusebio Ayala.

La inconformidad de los liberales ante las facultades que se atribuían los militares no fue obstáculo para que decidieran apoyar la nueva situación, que todavía necesitó reprimir sangrientamente tres intentos de sublevación armada de los febreristas antes de estabilizarse.

Pese a los éxitos de la represión, la vida política paraguaya se agitaba aún bajo la influencia de la cuestión del Chaco. Las negociaciones de límites con Bolivia se mantenían estancadas desde la firma del armisticio y el peligro de nuevos choques crecía por días. En diciembre de 1937 la Conferencia de Paz reanudó sus labores y ya a principios de 1938 estaba claro que el gobierno de Germán Busch no insistiría en sus reclamos del litoral paraguayo. El 27 de mayo la Conferencia propuso a los cancilleres de Bolivia y Paraguay, Eduardo Díez de Medina y Cecilio Báez, una línea divisoria que, con algunas rectificaciones, sería aceptada por ambos países. El arreglo final, facilitado por la oportuna intervención de Estigarribia, concedía casi todo el Chaco Boreal al Paraguay, y un pequeño sector inservible del litoral disputado a su reciente rival, supuestamente compensado con los llamados "puertos sicológicos" y una salida a la red ferroviaria brasileña en Puerto Suárez.

La proposición que en definitiva se abrió paso, sugerida el 29 de junio por el delegado paraguayo Cardozo, fue hecha suya por el norteamericano Braden y prácticamente impuesta a los participantes en la conferencia.[37]

[37] Cardozo, *op. cit.*, p. 294.

Muchos pierden de vista el trasfondo de aquel compromiso, que dejaba a Bolivia enclaustrada y colocaba las fronteras occidentales de Paraguay exactamente al borde de los yacimientos de petróleo explorados. Un año antes la Standard Oil había recibido dos golpes demoledores en el área. Por medio de los "acuerdos de 1936 y 1937", complemento del tratado "Roca-Runciman", el presidente Justo otorgó nuevas ventajas a la Royal Dutch Shell, limitando aún más la participación de la compañía norteamericana en el suministro de gasolina al mercado argentino (se le redujo la cuota a un 14.8%). Más o menos por la misma época, el 13 de marzo de 1937, el boliviano David Toro, presionado por la oficialidad nacionalista, firmó la Resolución suprema, mediante la cual se declaraban caducas las concesiones hechas a la Standard y se disponía la intervención de todas sus propiedades por el estado.[38]

Con esos antecedentes, la estrategia del imperialismo yanqui se orientó a propiciar un arreglo que perpetuara el aislamiento boliviano, al tiempo que sentaba las bases para arrancar al Paraguay de la órbita argentina. De esa forma podía presionar también a ambos países fomentando la prospección petrolera a un lado u otro de la frontera común, según fuera la actitud de sus gobiernos hacia el capital norteamericano.[39] La historia no tardaría en demostrar lo astuto de esa política.

Concluido el asunto del Chaco, los políticos liberales se dispusieron, sin el concurso de los colorados, a revivir la ficción de democracia burguesa. El 10 de octubre de 1938 se reunió el nuevo Congreso, cuyo primer acuerdo fue ratificar a Paiva como presidente de la República. Directamente comprometido ante los militares, Paiva tuvo que incorporar a algunos de ellos a su gabinete, acrecentando el disgusto de los políticos que no comprendían el insólito papel del ejército como heredero del poder real.

La adversa coyuntura económica internacional —1938-39— se conjugaba con la reactivación de las luchas sociales. Notablemente fortalecido, el Partido Comunista impulsó en 1939 la realización del primer Congreso Obrero del Paraguay, y la Federación de Estudiantes Secundarios promovió a su directiva a destacados militantes revolucionarios —como Alfredo Alcorta. En el campo se consolidaba la Federación de los Trabajadores Cañeros y avanzaba la organización partidaria entre los campesinos guaireños.

Resurgía, asimismo, el nacionalismo pequeñoburgués, ya directamente influido, como en Bolivia, por heterodoxas concepciones fascistas. Desde las páginas de *El Tiempo* —contrapartida paraguaya de *La Calle*— se identificaba a la democracia con el liberalismo y al liberalismo con la Constitución de 1870. Había que barrer, pues, con la Constitución, los liberales y los demócratas. Se deduce que de los dos primeros problemas sólo podía encargarse el ejército, en tanto la policía y los elementos del llamado Frente de guerra, seguirían ocupándose del último. Así sucedió, por ejemplo, con Félix E. Agüero, prestigioso líder estudiantil comunista asesinado en 1937.

Llama la atención que mientras los nacionalistas bolivianos atacaban directa-

[38] Alberto Prieto, Omar Díaz de Arce y Sergio Guerra, *Crónicas latinoamericanas. La región del Plata*, La Habana, Casa de las Américas (en preparación).

[39] Véase los límites propuestos por la delegación norteamericana y el laudo arbitral final en Leslie B. Rout, *op. cit.*, pp. 195 y 206.

mente al imperialismo norteamericano y su aliada "La Rosca", los paraguayos se dedicaban a bombardear las instituciones liberales. Tal vez era una manera peculiar de manifestarse el atraso político en el país.

Cuando el enfrentamiento entre las facciones liberales y antiliberales se hacía más peligroso, surgió la figura de Estigarribia, otra vez en su calidad de mediadora. Los liberales le ofrecieron la primera magistratura y éste aceptó, siempre que se emplearan "los resortes democráticos". Elegido el 4 de marzo de 1939, el "héroe del Chaco" tomó posesión cinco meses después, rodeado de un gabinete liberal y con un militar en el Ministerio del Interior.

Las gestiones de Estigarribia para restablecer el orden constitucional fracasaron estrepitosamente. Los colorados se negaron a colaborar y la oposición pequeñoburguesa continuó exigiendo la derogación de la Carta de 1870, fetiche de una realidad todavía no encarada abiertamente: la nefasta dependencia del Paraguay frente a los intereses angloargentinos. La nueva faz del nacionalismo, de aspecto conservador, se imponía en el país. El 18 de febrero de 1940 el conflicto quedó resuelto de forma expedita: tras la disolución del Congreso. Estigarribia derogó la Constitución de 1870 y asumió plenos poderes. Pero el recién estrenado hombre fuerte, cuyo nacionalismo moderado recibía el aliento de las tendencias fascistizantes, seguía siendo políticamente un liberal, y justificó su conducta haciendo circular una proclama que decía: [40]

Los arbitrios constitucionales son impotentes para salvar la paz de la nación... La democracia individualista de 1870 ha cumplido su misión al formar el ciudadano consciente y libre que en la guerra del Chaco alcanzó la victoria. La dramática crisis que atravesamos muestra que sus preceptos reclaman una readaptación. La democracia debe dejar de ser exclusivamente política para ser también económica y social.

Estigarribia encomendó la redacción de la nueva constitución nada menos que a Cecilio Báez, anciano paladín del viejo liberalismo; lo cual confirmaba su credo político. No obstante, las discrepancias entre los partidos lo hicieron sancionar, el 10 de julio de 1940, una preparada por Justo Pastor Benítez y Pablo Max Insfrán. En ella se reflejaba, como un espejo mal pulido, la atracción del *Estado Novo* brasileño: un Consejo de estado, compuesto por los distintos "grupos económicos" —incluyendo por supuesto al clero—, le daban fisonomía corporativa a un régimen político que Estigarribia seguía obstinadamente calificando de "República democrática y representativa".

Además del Consejo de estado, asesor del reforzado Poder Ejecutivo, se creaba una cámara de representantes y un sistema electoral en el cual la abstención significaba la pérdida de la ciudadanía activa. La redefinición del papel del estado como regulador de la actividad económica trajo consigo algunas medidas proteccionistas: cierto control de cambios, el régimen de aforos y un sistema monetario centrado en el Banco del Paraguay.

Durante su corto mandato Estigarribia tuvo tiempo, gracias a lo expedito del procedimiento, para refrendar —29 de febrero— el denominado estatuto agrario, aprobado meses antes por el Congreso tras largos y sofisticados debates. Su autor,

[40] Cardozo, *op. cit.*, p. 302.

Carlos A. Pastore, concentró en él toda la ciencia liberal sobre reforma agraria. El proyecto no sólo incluía una serie de principios recogidos en códigos agrarios anteriores, sino también algunas disposiciones nuevas que muy veladamente reflejaban la inspiración nacionalista del legislador. Nos referimos al concepto del "dominio eminente del estado sobre el suelo del territorio nacional", y a la amenaza de expropiar "las tierras rurales pertenecientes a extranjeros o sociedades formadas por capitales extranjeros, cuyos propietarios o accionistas residan habitualmente fuera del país, que no sean racionalmente explotadas y que adeuden impuesto inmobiliario por cinco años".[41]

No está de más añadir dos o tres breves consideraciones sobre este estatuto, cuya estricta aplicación fue interrumpida por la inesperada muerte de Estigarribia. A diferencia de la intención revolucionaria del febrerismo, tempranamente frustrada por la filiación de clase y la desorientación ideológica de sus dirigentes, la solución del problema agrario aportada por Pastore apenas se distingue de los tradicionales proyectos de colonización marginal. Si el decreto núm. 1060 del gobierno de Franco estaba concebido para ser aplicado fundamentalmente en la región oriental, donde vive casi toda la población del país, el estatuto agrario excluía expresamente al latifundio ganadero de esa zona, pretextando que allí no se había superado la fase de explotación extensiva y "la necesidad de respetar las tierras sometidas a explotación económica como un medio de agrupar a sus propietarios en torno al programa de restituir para los habitantes de la República las fuentes de riqueza colectiva..." Dicho más claramente, para que apoyaran la recuperación de una parte de las tierras controladas en el Chaco por inversionistas y especuladores extranjeros, casi siempre absentistas. Según el propio Pastore, en 1940 catorce individuos poseían 7 millones de hectáreas en la región oriental y cinco grandes propietarios acaparaban 5 millones en el Chaco, "donde no se levanta un rancho por prohibición de sus dueños".

Con la promulgación del estatuto agrario se logró solamente, aparte de la usual legalización del estatus de los "ocupantes" —ignorada como siempre por los terratenientes—, una rápida proliferación de estancias ganaderas en el Chaco, manejadas por un nuevo sector de latifundistas criollos.

Por último, el estatuto agrario estableció, como una concesión al espíritu de la época, un plazo máximo de cinco años para el pago de los lotes que fueran expropiados y, a manera de satisfacción a los latifundistas, el Departamento de Tierras y Colonización (DTC) reanudó sus labores indemnizando a aquellos cuyas propiedades habían sido parcialmente ocupadas por agricultores en el pasado sin recibir compensación alguna.

XII. LA ERA DE MORÍNIGO Y SUS SECUELAS

Tras la desaparición de Estigarribia su ministro del Interior y sucesor, general Higinio Morínigo, dio un paso más hacia el establecimiento de una dictadura

[41] Pastore, *op. cit.*, p. 343.

militar sin compromisos políticos. Pasados unos cuantos meses desató la represión contra las organizaciones obreras, los sectores democráticos y hasta disolvió el Partido Liberal. Un año más tarde, bajo las mismas presiones que modificaron la política exterior de Brasil a comienzos de la segunda guerra mundial, Morínigo rompió sus relaciones con las potencias del Eje, aun cuando continuó alentando en lo interno —a semejanza una vez más de lo que sucedía en el Estado Novo— la corriente fascistoide ya visible en el ala reaccionaria del coloradismo y la actividad desembozada de las distintas filiales nacional-socialistas que actuaban en el seno de la importante colonia alemana.

Ello no fue óbice para que en junio de 1943, a cuatro meses de haber ocupado la presidencia "constitucional" en unos comicios sin opositores, Morínigo fuera recibido con gran oropel en Washington y doctorado *honoris causa*— a sugerencias del Departamento de Estado— por la universidad de Fordham.[42] Previamente, el dictador había visitado Río de Janeiro, donde se le prometieron privilegios de exportación en Santos y la extensión de la red ferroviaria brasileña hasta Concepción; y La Paz, ciudad en la que proyectó festivamente con Peñaranda —el más parecido de sus homólogos— la construcción de un oleoducto que llevase el petróleo boliviano hasta el río Paraguay.

A fines de 1944, cuando Morínigo creía consolidado su régimen, el país fue conmovido por el pedido del rector de la Universidad Nacional, el cual reclamaba la convocatoria de una asamblea constituyente y la libertad de organización de los partidos políticos. La destitución del rector y el encarcelamiento de sus partidarios agudizaron las tensiones sociales.

La miseria del pueblo se acentuaba dramáticamente a pesar del limitado auge de las exportaciones. Los precios de los productos eran exorbitantes en comparación con el nivel de los salarios, uno de los más bajos en todo el continente. Mientras Argentina y Brasil lograban notables avances en la esfera de la industrialización, el reducido mercado interno del Paraguay seguía dependiendo de las fuentes externas de suministros. Totalmente marginada del proceso de sustitución de importaciones, como la mayoría de los países latinoamericanos enteramente sometidos al imperialismo, la nación guaraní no escaparía, sin embargo, a la influencia de los cambios que con la inminente derrota del fascismo y el auge de los movimientos populares se dibujaban en el ámbito internacional: ya en abril de 1944 los trabajadores se lanzaban a una huelga general —en protesta contra la ley 217 de reglamentación sindical— que paralizó las actividades en la capital y sirvió para medir la combatividad de los ferroviarios y otros sectores dirigidos por el Partido Comunista.[43]

El año 1944 fue también fértil en acontecimientos de índole socioeconómica. Los beneficios legales otorgados por el estatuto agrario a los "ocupantes" de tierras ajenas quedaron anulados en junio, y en octubre la Oil Co. of California recibió una concesión exclusiva para la prospección y explotación del petróleo en el Chaco. Entre 1944 y 1949 la compañía perforó cinco pozos y canceló las operaciones sin comunicar sus resultados al gobierno paraguayo. Pero lo que mejor puso al descubierto el estado de miseria en que se encontraba el país fue el censo publicado

[42] Hubert Herring, *A history of Latin America*, Nueva York, 1964, p. 718.
[43] Hugo Campos, *op. cit.*, p. 113.

por el Servicio Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA). Un resumen de sus principales datos alcanza para conocer las deplorables condiciones sociales imperantes: [44]

Mientras el 48.5% de los lotes censados tenían menos de 5 hectáreas, el 0.2% de las propiedades cubrían el 35.8% de la superficie cultivada —546 925 hectáreas. De los 94 498 productores agrícolas, sólo 15 080 eran propietarios, 6 130 arrendatarios y 70 247 ocupantes, gran parte de los cuales calificados simplemente de "intrusos". En un país con más de 40 millones de hectáreas de extensión territorial la llamada área agrícola no sobrepasaba el 3.8% de la superficie, al tiempo que inmensos bosques casi inexplotados y vastas praderas naturales ocupaban el resto.

De una población estimada en 1 millón 191 mil habitantes, 541 mil vivían en chacras (45%) ubicadas en las jurisdicciones de los pueblos (2 748), de las compañías (63 713) y las colonias oficiales y privadas (25 547). Apenas el 6% de las casas podían considerarse verdaderas edificaciones, las demás no eran sino ranchos armados con estacas, alambres y barro, piso de tierra y techo de paja. El 75% de los campesinos varones no sabía leer ni escribir y el 40% sólo era capaz de hablar en guaraní (el 54% guaraní y español). Sus elementos de trabajo no pasaban de algunos instrumentos primitivos: machetes, hachas, rastrillos. En el 71.8% de las chacras no existían arados de hierro y el 48.6% carecía de cualquier clase de arado y carreta.

Si ésta era la situación en el medio rural, la vida en los pueblos y ciudades no se hacía más soportable. De ahí que ni el crimen político, ni los campos de concentración, bastaron para amedrentar a las fuerzas de la oposición.

En la coyuntura de 1945 Morínigo buscó el respaldo de una fracción del Partido Colorado prometiéndole una participación más activa en la vida política del país. Poco después, en junio de 1946, el aparato represivo se desplomó. El cambio se produjo cuando un grupo de jóvenes oficiales "institucionalistas" exigió el restablecimiento de las libertades conculcadas. Un nuevo gabinete formado por militares, y civiles "colorados" y "febreristas", autorizó el regreso de numerosos exiliados. El dictador se había salvado momentáneamente sacrificando a su mano derecha, el comandante Benítez Vera, presentado como único responsable de la represión fascista.

Orientados por un consejo obrero, los trabajadores y estudiantes se dedicaron a activar sus organizaciones. Paralelamente, el coronel Franco reagrupaba a sus partidarios en la llamada Concentración Revolucionaria Febrerista.

La falsa maniobra democratizadora de Morínigo incluía la convocatoria de una asamblea constituyente, que fue cancelada en cuanto se recibieron las primeras señales de la nueva estrategia de guerra fría auspiciada por el imperialismo. Sensible a los cambios de la política exterior norteamericana, el dictador eliminó a los febreristas del gabinete, reimplantó el estado de sitio y entronizó el terror (enero de 1947).

La réplica a los esfuerzos de Morínigo por liquidar el ascenso de las masas llegó dos meses después. El 7 de marzo los oficiales "institucionalistas" decidieron

[44] Pastore, *op. cit.*, pp. 403-404.

sublevarse. Encabezados por el teniente coronel Fabián Saldívar Villagra, soldados y marinos, apoyados por estudiantes y militantes de los partidos comunista, febrerista y liberal, convirtieron a la ciudad de Concepción en el centro de la rebelión. Con el respaldo de una parte del ejército, el gobierno de Asunción empujó al país a una larga guerra civil. Las vacilaciones e inútiles controversias dentro del comando rebelde permitieron a las tropas de Morínigo —asesoradas por un oficial norteamericano y sostenidas con dólares y armas desde la embajada de Estados Unidos— poner fin a la insurrección (agosto).[45] Atemorizados por la bárbara represión, una serie de líderes liberales y febreristas se acogieron a la amnistía decretada por el dictador; otros se refugiaron en Argentina abandonando a sus aliados revolucionarios. De la impronta de aquella debacle se recupera todavía el movimiento popular paraguayo.

En los meses siguientes, la dictadura se estabilizó temporalmente gracias al apoyo del sector más reaccionario del "coloradismo", el llamado "Guión Rojo", pese a que la organización había sufrido un nuevo desprendimiento en noviembre de 1947. Temerosos de que Morínigo no entregara el mando al candidato oficial, "electo" en febrero de 1948, los militares lo depusieron (3 de junio), facilitando la toma de posesión de Juan Natalicio González en la fecha prevista (15 de agosto). En el ínterin, fungió de presidente provisional Juan Manuel Frutos, magistrado del Tribunal Supremo.

El 30 de enero de 1949 el derrocamiento de González por uno de sus ministros y líder de otra facción del partido gobernante, Raimundo Rolón, puso en evidencia que Paraguay no había salido del círculo vicioso de dictadura y luchas intestinas creado por una oligarquía de familias y grupos rivales. Efectivamente, a los tres meses y medio (14 de mayo), Felipe Molas López, ministro de Educación de Rolón, lo sustituía sin tomar en cuenta los comicios celebrados en abril, hasta entregar el puesto en septiembre al único hombre capaz de conjurar la crisis política: Federico Chaves, jefe del llamado "sector democrático" del coloradismo y presidente de la Asamblea Legislativa.[46]

Las cosas cambiaron ahora de aspecto. Actuando como presidente constitucional desde agosto de 1950, Chaves se dispuso a propiciar una apertura liberando a los presos políticos —más de cuatrocientos—, los comunistas inclusive, y restableciendo las garantías individuales. Aquel mismo año realizó una visita oficial a Buenos Aires que coadyuvó a afianzar los vínculos —de por sí ya íntimos— con

[45] Véase Nitoburg, *op. cit.*

[46] El historiador Tulio Halperin Donghi resume estos acontecimientos en un breve párrafo: "Muerto Estigarribia en un accidente aéreo, su sucesor, el general Morínigo, no halló dificultad en desembarazarse de los exigentes liberales y hacerse dictador con el apoyo de los colorados, más modestos luego de atravesar casi medio siglo de incómoda oposición. Su dictadura, interrumpida en 1945 por unos meses de liberalización y amenazada en 1947 por un alzamiento militar de inspiración a la vez liberal, febrerista y comunista, concluyó en 1948: las elecciones de ese año llevaron a la presidencia a Natalicio González, ideólogo del Partido Colorado, que unía a la devoción por la tradición militar y autoritaria del Paraguay de López una simpatía marcada por corrientes como el aprismo peruano. González intentó trasformar el autoritarismo militar en dictadura de partido, creando organizaciones coloradas paralelas a la policía y al ejército. Así amenazado, éste decidió que la hora de una liberalización había llegado, y llevó al poder al jefe del ala moderada del Partido Colorado, Federico Chaves." *Historia contemporánea de América Latina,* Madrid, 1972, p. 431.

Argentina. Pacificado el país, se inició un espontáneo movimiento de repatriación de familias paraguayas —más de diez mil— y comenzaron a gestarse planes de control de los precios y salarios. Algo así como una sombra del experimento nacionalista que prosperaba en grande un poco más al sur. Si se tiene en cuenta que desde 1952 eso estuvo acompañado por el rechazo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), no fue nada excepcional la reacción adversa del imperialismo.[47]

La irritación norteamericana se convirtió en cólera cuando Perón reeditó con el Paraguay de Chaves la política seguida con el Chile de Ibáñez; coronada exitosamente en esta ocasión al suscribir ambos mandatarios un tratado de comercio y amistad, preludio de una integración económica más estrecha.

En 1953 el Departamento de Estado, bajo la égida de Foster Dulles, conspiraba contra todo lo que no se sometiera incondicionalmente a sus designios en América Latina: Arbenz, Vargas, Perón. Así se entiende que tampoco pasara por alto al paraguayo Chaves. La conjura fue urdida sin grandes complicaciones, ya que el sector fascistoide del coloradismo controlaba el estado mayor del ejército, comandado a la sazón por el nieto de un inmigrante bávaro y discípulo aventajado de los militares brasileños: el general Alfredo Stroessner Matiauda.

La aproximación entre Paraguay y Argentina, seguramente uno de los factores de la indisposición de Washington contra Chaves, no carecía de antecedentes. En 1943 Morínigo había firmado en Buenos Aires un tratado comercial y un convenio que contemplaba el establecimiento de una unión aduanera, interrumpiendo abruptamente el giro probrasileño de la política paraguaya.[48] En el plano económico, los esfuerzos expansionistas de Perón seguían respondiendo a las crecientes necesidades de la industria argentina. El Paraguay ya no representaba solamente un excelente proveedor de materias primas e insumos (maderas) para la economía de su más poderoso vecino, sino un atractivo mercado de productos manufacturados. Del lado paraguayo, la fortalecida burguesía comercializadora, surgida como clase prácticamente cuando la guerra del Chaco, propiciaba estas relaciones. El derrocamiento de Chaves no fue entonces obra del peronismo, como dicen algunos historiadores norteamericanos (Herring), sino fruto tardío de la vieja estrategia de Estados Unidos encaminada a desplazar a sus rivales en la cuenca del Plata.

XIII. PARAGUAY EN LA DÉCADA DEL CINCUENTA

A los 15 meses de su reelección (febrero de 1953), Federico Chaves fue derrocado por un golpe de estado (4 de mayo de 1954) apadrinado por la embajada norteamericana. Sería el primero entre un grupo de figuras nacionalistas condenadas por el imperialismo a desaparecer de la escena política latinoamericana en la dé-

[47] Una versión "colorada" de la gestión de Federico Chaves la ofrece Epifanio Méndez. *Sicología del colonialismo. Imperialismo yanqui-brasileño en el Paraguay*, Buenos Aires, 1971.

[48] Arthur P. Whitaker, *Las Américas y un mundo en crisis*, Lancaster, Pa., 1946, p. 170.

cada del cincuenta. Para Paraguay aquello representaba, nada más y nada menos, la restauración de una especie de moriniguismo corregido y ampliado.

Si Stroessner hubiese poseído los "méritos" que ya había acumulado un hombre como Batista en la Cuba de entonces, no habría sido necesario aleccionarlo antes de ocupar el poder. Pero ahora Washington procuraba cerciorarse, por lo que el anodino Romero Pereira se encargó de la provisionalidad, mientras el futuro dictador perpetuo viajaba a Lima para entrevistarse confidencialmente —junio— con miembros del comando estratégico norteamericano en el Caribe. Ya en la presidencia —desde el 15 de agosto— tuvo lugar una segunda reunión, esta vez en el Fortín Mariscal Estigarribia, donde se firmó un pacto secreto con altos oficiales yanquis y brasileños, bajo los auspicios del embajador de Estados Unidos en Asunción y sin la presencia de Argentina.[49]

Paraguay era en aquel momento —y sigue siéndolo— un país agrario atrasado, con un millón y medio de habitantes y una población campesina de casi novecientas mil almas. El censo agropecuario de 1956 —el de STICA en 1944 fue un censo agrícola— hablaba de un 33% de propietarios, 7% de arrendatarios y 44% de simples ocupantes (no especificaba la situación del 16% restante), aunque un análisis más cuidadoso hacía ascender la última cifra al 56%.[50]

Los resultados de este censo produjeron gran impacto en la opinión pública, conmovida ante la noticia de que 1 549 grandes propietarios aparecían como dueños del 85% de la superficie total de las explotaciones censadas. Y más aún cuando supo que sólo 25 de ellos concentraban en sus manos —de acuerdo a un estimado hecho público en 1958— el 34% de la región oriental y el 57% del Chaco.[51]

La encuesta de 1956 reflejaba, asimismo, una vieja y conocida realidad: la mejor tierra en Paraguay no se empleaba en la agricultura, sino en la cría de ganado, que proporciona jugosos beneficios con pocas inversiones. Los demás terrenos se arrendaban, o simplemente no se utilizaban.

El área nominalmente dedicada a la agricultura coincidía aproximadamente, como en el censo de 1944, con la ocupada por los campesinos en precario. Si la población había crecido en un 36% entre una y otra fecha, mientras la producción agrícola se mantenía estática, se deduce que el tamaño promedio de las chacras era cada vez más pequeño. Todo esto confirmaba la existencia de un fuerte sistema de relaciones semifeudales, más que de un amplio sector de economía mercantil simple, cuya consolidación lógicamente depende de cierta masa de productores independientes. Pero la gran mayoría de los agricultores paraguayos trabajaba sobre tierras ajenas y por el derecho a explotar dos míseras hectáreas —área promedio de las chacras en las zonas más pobladas— debía entregar entre el 15 y el 30% de la cosecha. Por los instrumentos y las semillas estaba obligado a desprenderse de una parte adicional, lo cual elevaba la renta a un 50% del producto. Si se trataba de un ocupante "irregular" corría —y corre— el riesgo de ser des-

[49] Manuel Galich, "Mapa hablado de la América Latina en el año del Moncada (II)", en *Casa de las Américas*, La Habana, Año XIV, núm. 80, septiembre-octubre, 1973, pp. 34-35.

[50] *Agricultural development in Paraguay*. Report of U. S. Department of Agriculture, Agency for International Development Survey Team, Asunción, febrero 17 de 1964, Apéndice I, tabla X.

[51] Pastore, *op. cit.*, p. 424.

alojado en cualquier momento, y si tenía a su cargo una familia numerosa no podía escapar a la necesidad de enviar a sus hijos a trabajar en las tierras del latifundio a cambio de la comida o alquilarse él mismo por un ridículo jornal. Según fuentes de las Naciones Unidas, estos campesinos sólo contaban con un promedio de 80 días al año para cultivar sus parcelas. Los peones soportaban abusos aún peores: alojados en barracas insalubres, cumplían jornadas hasta de 16 horas diarias.

Al igual que en otros países latinoamericanos, el campesino paraguayo no sólo vende su producción, sino también su fuerza de trabajo por debajo del valor real. Si cultiva productos comerciales, como el algodón, el tabaco o alguna planta de las que se extrae aceite vegetal, es víctima del inevitable intermediario, que con sus camiones colecta la materia prima en beneficio de los procesadores nativos o, en la mayoría de los casos, extranjeros. Si acude como asalariado a una plantación, una estancia o una empresa agroindustrial, se le paga menos de un dólar diario por su labor. Por eso se aferra a su chacra, que le produce cierta cuota de alimentos seguros, o emigra hacia los países vecinos atraído por salarios relativamente más altos.[52]

Además del acuciante problema agrario, siempre presente, el segundo elemento de orden estructural que amenazaba al opresivo régimen oligárquico era el desproporcionado y veloz aumento de la población en la zona central de la región oriental. Las presiones demográficas continuaban traduciéndose allí en peligrosas tensiones sociales, generadas por una poderosa capa de terratenientes que mantenía inculta la mayor parte de sus tierras.

En la década del cincuenta adquiría de nuevo actualidad el problema de la distribución de la población, concentrada en un 60% dentro de un radio de 180 kilómetros a partir de Asunción.[53]

En realidad, aquella cuestión exhibía remotos orígenes coloniales, lo cual no absuelve al latifundio contemporáneo. Siendo los ríos la principal vía de comunicación, el poblamiento de los fértiles territorios aledaños a la capital tuvo que ver tanto con el tipo feudal de colonización —era el privilegiado hábitat de una numerosa tribu de indios explotables— como con la secular relevancia de los intereses mercantiles en la región del Plata. Después de la guerra de la Triple Alianza, el paulatino crecimiento de una ancha franja dedicada a las actividades agropecuarias y la explotación forestal entre los suaves valles de la zona central y el litoral del Paraná, siguió el curso del ferrocarril que desde 1911 sirve de nexo terrestre con Argentina tras una serie de ampliaciones. Lo que sí ha hecho el latifundio es impedir la expansión "normal" de la frontera agraria —característica de la colonización burguesa—, provocando la sobrepoblación relativa de las áreas centrales al este del río Paraguay —63.3 habitantes por kilómetro cuadrado—, insólito fenómeno en "un país de hombres sin tierra y de tierra sin hombres". También ha ocasionado la hipertrofia de Asunción, ciudad carente de facilidades y

[52] Roger Bartra ha analizado este proceso profundamente en el caso mexicano, que difiere del paraguayo entre otras cosas por el peso específico del sector capitalista dentro de la agricultura azteca. No obstante, la existencia de un sector amplio de pequeños campesinos pobres en los dos países permite algunas generalizaciones. Véase: *Estructura agraria y clases sociales en México*, México, 1974, p. 87 y ss.

[53] Report of U. S. Department of Agriculture, p. 58.

oportunidades para los miles de migrantes internos que se refugian en ella. Sus efectos inmediatos se expresan, no obstante, en el mantenimiento de las formas feudales de explotación, el bajo nivel de los salarios y el libre juego de los especuladores al servicio de las firmas capitalistas.

La situación de la industria es otro índice que mide lo frágil de la estructura económica paraguaya. En 1955 existían 2 646 empresas, muchas de ellas basadas, parcial o completamente, en el trabajo doméstico-artesanal. Según reportes de 1963, alrededor de dos mil establecimientos pequeños se hallaban paralizados por la crisis que afectaba al país. Como se sabe, las instalaciones de la industria trasformadora, dedicada a la elaboración de productos agrícolas y forestales —principalmente las ramas alimenticia, textil, de cueros y madereras— se concentran en los alrededores de la capital, Coronel Oviedo, Villa Rica y Encarnación.[54]

Pero el verdadero "sector capitalista" en la esfera industrial está bajo el control de los inversionistas extranjeros y produce para la exportación. En ocasiones se trata de sencillas plantas destinadas a procesar la materia prima —como las fibras de algodón o las semillas oleaginosas— hasta el punto en que está preparada para el embarque. Otras puede ser uno de los tres frigoríficos —dos de ellos operados por compañías inglesas y norteamericanas: la Brook Bond Liebig's y la International Products Co.— que permiten a los grandes ganaderos realizar una parte de su producción en los mercados de Europa y Estados Unidos; o, quizá, alguno de los inmensos enclaves agroindustriales ubicados en el litoral del río Paraguay. Allí sobresale la varias veces mencionada firma de Carlos Casado Ltda, que desde 1941 monopoliza las exportaciones de extracto de quebracho, gracias a un acuerdo firmado con Argentina por medio del cual ésta se reservaba una participación del 80% en la satisfacción de la demanda mundial y dejaba el resto a su mejor representante en el Chaco paraguayo.

Fijados algunos parámetros esenciales para la comprensión del "modelo" paraguayo de subdesarrollo, a través de esta sumaria descripción del panorama agroindustrial en la década del cincuenta, se puede analizar mejor el papel del régimen de Stroessner, cimentado en el inmovilismo político, la aversión por las reformas de estructura y la entrega completa de los recursos naturales al interés foráneo.

XIV. ALFREDO STROESSNER: ENTREGUISMO Y DICTADURA

La política económica que Stroessner seguiría no desalentó, sino todo lo contrario, las obsoletas prácticas del capital imperialista. Bajo el pretexto de fomentar las exportaciones, el régimen nada hizo por promover la industrialización, ni siquiera aquella que descansa en la inversión extranjera, por lo demás indiferente ante las reducidas proporciones del mercado interno y las grandes facilidades otorgadas a importadores y contrabandistas, A la inversa, esto repercutió también en la conservación de los establecimientos semiartesanales y el pequeño negocio, amplio sector que representa a la economía mercantil simple en las ciudades.

[54] Omar Díaz de Arce, *Paraguay*, La Habana, Casa de las Américas, 1967, pp. 15 y ss.

La inversión extranjera siguió propendiendo a la creación de verdaderos enclaves en el sector primario, que en el caso paraguayo configuran una modalidad extrema de mecanismo "subdesarrollante". No se debe perder de vista que el magnífico sistema fluvial —el 90% del comercio exterior se realiza a través de los ríos— no obligó siquiera a construir una red ferrocarrilera o caminera —el gobierno se vanagloria ahora de haber promovido lo segundo—, si se exceptúan las modestas líneas de vía estrecha tendidas a principios de siglo en el Chaco. Las tanineras y aserraderos que allí funcionan, junto a las inmensas estancias donde se cría el ganado, apenas alteran la fisonomía de esa desértica región, ni comunican al resto del país estímulos económicos apreciables. Cuando los que compran afuera son los mismos que venden dentro, más que una circulación de capitales lo que tiene lugar es un flujo subterráneo de recursos al margen de cualquier control oficial. Prescindiendo de la normal operación de compra y venta, muchas compañías trasfieren el producto —como las que poseen inmensos rebaños y operan algún frigorífico—, pagando menguados impuestos al estado. Y como si esto fuera poco, los "expertos" norteamericanos suelen recomendar la completa supresión de los derechos de exportación, invocando las magníficas perspectivas que ello abriría al país.[55]

Apenas llegado al poder, el dictador paraguayo sancionó la ley núm. 246, de 1955, que establecía un trato aún más privilegiado para el capital extranjero. En su calidad de principales beneficiarios los capitalistas yanquis se apresuraron a demostrar las virtudes de la llamada "cooperación interamericana". Proclamadas panacea para todos los males de América Latina, las inversiones norteamericanas comenzaron a prosperar a su sombra y la "ayuda" de Estados Unidos se extendió por el país como sobre un campo de experimentación. Se estableció un curioso "toma y daca" entre los gobiernos de Asunción y Washington: los norteamericanos decían lo que se debía hacer, prestaban dinero, y Paraguay otorgaba cada día mayores concesiones.

Quince años antes, el 52% del capital extranjero invertido en tierra guarani era argentino, el 26% inglés y el 12% francés. Gracias a Stroessner los yanquis terminaron desplazando a los ingleses —superados también por la RFA— y debilitando considerablemente a los argentinos, tradicionalmente asociados a aquéllos.

Los intentos de Estados Unidos por dejar atrás a sus competidores dieron los primeros frutos alrededor de 1950. La participación de los distintos países era entonces la siguiente: Argentina 42.7%; Inglaterra 28.2%; Estados Unidos 25.3%; Brasil 2.3%. En términos absolutos, la inversión de todos ellos juntos apenas superaba la cifra de 181 millones de guaraníes —60 millones de dólares al cambio de la época. A esto hay que sumar las concesiones obtenidas por los intereses petroleros norteamericanos, que sólo procuraban asegurarse ventajas estratégicas en la región.

Al reforzamiento de la influencia norteamericana en la década del cincuenta contribuyó decisivamente una comisión conjunta creada para asesorar al gobierno paraguayo, que rápidamente se trasformó en órgano destinado a implantar el control de Estados Unidos sobre la agricultura y las finanzas del país. Como ocurre en estos casos, un "ejército" de expertos arribó a Asunción. Tanto la comisión

[55] Report of U. S. Department of Agriculture, p. 37.

como la misión operativa que la sustituyó asumieron el papel de verdaderos entes administrativos al servicio de una potencia imperialista en el territorio de una colonia.

Debido a estos acuerdos, el gobierno paraguayo se comprometió a informar a Washington detalladamente de la utilización de los créditos norteamericanos y de las propuestas de ayuda que recibiera de otros gobiernos. También colocó el sistema bancario bajo control de sus nuevos padrinos y aceptó un plan para liquidar la deuda interna propuesto por ellos.

En marzo de 1956 se inició la ejecución del plan preparado por la misión norteamericana para la llamada estabilización económica. Su "éxito" en mejorar las condiciones para la inversión extranjera le valió a Stroessner el premio de varios préstamos entre 1956 y 1958: uno oficial de 8 millones de dólares y otro privado —proporcionado por la International Products Co.— de 2.6 millones.[56]

Caducada la increíble concesión otorgada por Morínigo en 1944 a la Unión Oil of California (23 millones de hectáreas), que comprendía todo el Chaco paraguayo y autorizaba a la compañía para organizar su propia policía según las leyes de ese estado norteamericano, Stroessner entregó similares privilegios a tres firmas argentinas, salomónicamente favorecidas con 300 mil hectáreas cada una. A renglón seguido, la Pure Oil Company norteamericana obtuvo una de seis millones de hectáreas, International Products y Pegasa Petroleo Guarany S. A. (brasileña), tres y cuatro millones, respectivamente. Lo más interesante en el caso de la Pure Oil Co., fue que, una vez recibida la concesión, el subsecretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Henry Holland, renunció a su cargo y se puso al frente de la empresa.

A fines de 1958, una comisión especial del Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF) visitó Paraguay y, so pretexto de investigar el estado de las principales ramas de la economía, realizó acuciosos estudios encaminados a orientar las nuevas inversiones norteamericanas. Como resultado de su labor, el régimen logró créditos por 7.9 millones de dólares entre 1960 y 1962.[57]

En la esfera política, los primeros años de la dictadura de Stroessner trascurrieron en medio de un clima de conmociones de toda índole, creado por los esfuerzos de consolidación del régimen militar, decidido a silenciar el conjunto heterogéneo de fuerzas que se le oponían. De un lado, los propios partidos tradicionales, incluido un importante sector del coloradismo; del otro, los estudiantes y el Partido Comunista.

Para frenar las constantes pugnas intestinas en que se debatía el coloradismo, el partido convocó el llamado "reencuentro del 27 de octubre" de 1955, el cual adoptó una carta programática legalista. El 4 de marzo de 1956 los elementos comprometidos con Stroessner respondieron celebrando otra convención que aprobó la orientación entreguista y represiva del dictador.

Creyendo asegurado el frente interno, Stroessner se presentó como candidato a

[56] Véase Nitoburg, *op. cit.*

[57] El CIDA, Inter-American Committee for Agricultural Development, creado por la Alianza para el Progreso, realizó un detallado estudio de las potencialidades agrícolas del Paraguay en 1963, precisamente cuando la camarilla de Stroessner preparaba su nueva estrategia para aliviar las tensiones en las zonas rurales.

la presidencia en febrero de 1958. Se valía —siempre cuidadoso de las formas— del precepto constitucional que autorizaba la reelección, aunque por una sola vez. Los trabajadores reaccionaron ante aquel amago de tiranía perpetua paralizando la capital en los días de la toma de posesión (agosto). El malestar se generalizaba de tal manera que hasta un grupo de destacadas figuras coloradas exigió, en marzo de 1959, la renuncia del gobierno, la derogación del estado de sitio, el restablecimiento de la libertad de prensa, una amnistía para los perseguidos y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Surgía así dentro del partido oficial una corriente que en breve se organizaría bajo la denominación de Movimiento Popular Colorado (MOPOCO). Enarbolando el lema de "libertad dentro y fuera del partido", esta tendencia logró nuclear a 36 de los 57 diputados a la Cámara. Cuando en mayo nuevas demostraciones contra el alto costo de la vida y la represión se convirtieron en verdaderas batallas campales en las calles, los diputados emitieron una declaración de repudio a la violencia empleada contra los estudiantes e hicieron responsable de ella al jefe de la policía. Al día siguiente, Stroessner arrojó la máscara de legalidad: disolvió el Congreso, deportó a algunos de sus miembros y decretó otra vez el estado de sitio, poco antes levantado debido a la presión popular.

Cancelada toda perspectiva legal, y en un momento cuando la Revolución cubana irradiaba la influencia de su ejemplo a todo el continente, las fuerzas de izquierda decidieron organizar la lucha armada. Apareció el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA) y se constituyó la columna guerrillera "Yororó". De la emigración paraguaya en la Argentina brotaron nuevos grupos guerrilleros y el "Movimiento 14 de mayo". Hasta el MOPOCO emitió, el 23 de febrero de 1960, una "declaración de resistencia" al régimen.

El revés sufrido por la columna "Yororó" —52 de sus integrantes fueron masacrados— demostró a los revolucionarios que debían restructurar su movimiento y asociar aquellas acciones con las luchas reivindicativas del campesinado. La "columna Mariscal López" pudo así tomar transitoriamente la población de Eusebio Ayala, y el vecino departamento de Caaguazú fue durante cierto tiempo una zona de vigorosas movilizaciones campesinas y continuada actividad guerrillera.

El Partido Comunista había desempeñado un papel principal en todos estos acontecimientos, a pesar de que su secretario general en funciones, Oscar Creydt, intentaba dirigir la lucha impartiendo órdenes absurdas y, como se comprobó más tarde, fomentando la desconfianza recíproca, la intriga y la división.[58]

Los antecedentes de aquellas dificultades hay que buscarlos en el largo período que se inicia con la derrota de la insurrección de 1947. Los comunistas habían preparado en febrero de ese año un levantamiento de la marina, con apoyo obrero, delatado en las vísperas y frustrado por Morínigo, no obstante la heroica resistencia de los sublevados que se batieron durante varios días dentro de la zona portuaria de Asunción. En la rebelión militar y popular con centro en la ciudad de Concepción centenares de combatientes comunistas estuvieron involucrados, pero el partido fue excluido de toda participación en la dirección del movimiento, capitaneado por representantes de las agrupaciones burguesas. La indecisión de

[58] Véase Hugo Campos, *op. cit.*, p. 224.

estos hombres demoró el avance sobre la capital y dio tiempo a la dictadura para reorganizar sus efectivos, apresuradamente reforzados con nuevas armas enviadas por el imperialismo a través de los gobiernos de Argentina y Brasil. En el campo, sobre todo en el departamento de Villarrica, la reacción logró movilizar, bajo la promesa de entregarles la tierra de los participantes o simpatizantes en el alzamiento, a bandas de campesinos armados —denominados "pynandí"—; que no sólo fueron utilizados para sembrar el terror en las áreas rurales durante la guerra civil, sino también para alterar la composición de la clase obrera después de ella, por la vía de su incorporación, en calidad de agentes del Partido Colorado, a diversos establecimientos fabriles.

A mediados de la década del sesenta, la revisión cuidadosa de la trayectoria de Creydt puso en claro el carácter aventurero de su actuación de entonces, dirigida a "quemar, en acciones improvisadas, las fuerzas del partido que habían sobrevivido en medio de la ola de sangre y terror desencadenada por el yanqui-moriniguismo y el Guión Rojo".

La conferencia partidaria de octubre de 1947 tomó nota del empleo contrarrevolucionario de un sector del campesinado desposeído por el régimen de Morínigo y se propuso trabajar en aras de la unidad de las masas explotadas y de todas las fuerzas antidictatoriales. Pero recibió un nuevo golpe cuando el recién electo secretario general, Alberto Candía, cayó en manos del gobierno a su regreso al país y murió salvajemente torturado.

Tras el segundo Congreso, celebrado en agosto de 1949, el partido recobró —con Antonio Gamarra como secretario general— lentamente su influencia sobre los trabajadores. El progresivo ascenso se reflejó en las huelgas textiles de 1952 y 1953, en la manifestación del 1º de Mayo de 1955, y culminó con la huelga general de agosto de 1958. No obstante, ya en 1953 Creydt conseguía la expulsión de Gamarra y su propia elección como secretario general. A la cabeza de la organización comunista, se dedicó a torpedear iniciativas tan importantes como la de intensificar el trabajo en las áreas rurales y divulgar el proyecto de "programa de liberación nacional", aprobado por el pleno de marzo de 1956.

La ola represiva de 1958, más la política de dejar que la clase obrera se batiera sola, sin armonizar sus acciones con las protestas del estudiantado y el descontento campesino, hizo que el partido perdiera "la totalidad de sus posiciones en el movimiento sindical", a algunos de sus más valiosos cuadros, como Julio Rojas, Antonio Maidana y Alfredo Alcorta —encarcelados desde 1958—, y todas sus organizaciones de base. Era el peor percance después que en 1947 la mayor parte del Comité Central cayera en las redes de la policía.[59]

La detención de los principales dirigentes del PC y la completa desarticulación de sus núcleos se produjo cuando parecían madurar los elementos de una crisis revolucionaria en el país. En esa difícil situación Creydt, sin consultar al CC, arrastró al partido "a apuradas y costosas improvisaciones en el terreno de la lucha armada". Desenmascarado en agosto de 1965, se formó el Comité de Defensa y Reorganización del Partido, integrado por Obdulio Barthe, Centurión, Chilabert, Miguel Ángel Soler y otros. El comité publicó una extensa declaración en la edi-

[59] *Ibid.*, pp. 218 *ss.*

ción del 6 de septiembre de 1965 del diario chileno *El Siglo,* anunciando el remplazo de Óscar Creydt y la restructuración de la organización comunista. Ratificada esta línea por la Conferencia Nacional de 1967, el PC entró en una fase de recuperación que lo confirmó como el principal bastión de la lucha revolucionaria contra la dictadura.

A la valerosa actitud de los comunistas y otros sectores agrupados en el FULNA debe agregarse la oposición a Stroessner de los partidos Liberal y Febrerista, que el 21 de noviembre de 1959 suscribieron en el exilio un "Acuerdo para la libertad", y la actividad del Movimiento Social Cristiano Democrático —fundado en mayo de 1960—, el cual se lanzó a una agresiva labor social, sindical y, cuando las circunstancias eran propicias, política.

El 15 de mayo de 1961, con motivo del sesquicentenario de la independencia, el estudiantado quiso demostrar una vez más su repudio a la dictadura, y una vez más prevaleció la fuerza en que ésta se apoyaba. En aquel ambiente saturado de motines urbanos e insurgencia guerrillera, Stroessner trató de ponerse a tono (1962) con la propaganda demócrata-representativa patrocinada por la Alianza para el Progreso. Su permanente sensación de inseguridad, sin embargo, le hizo rechazar las condiciones mínimas exigidas por los partidos de la oposición burguesa —liberales, MOPOCO, febreristas— para participar en los comicios. Se buscó entonces a un viejo abogado, Ernesto Gavilán —personaje del llamado sector "radical" recién escindido del liberalismo— para que le sirviera de opositor, levantó 24 horas el estado de sitio y se dejó elegir por otro período de 5 años. Los Estados Unidos aplaudieron, naturalmente, su "gesto democrático" y él correspondió al aplauso con una nueva ola de terror. El descocado continuismo oficialista todavía encontró cierta resistencia en algunos sectores del ejército vinculados al "colorado" Epifanio Méndez, antiguo jefe colaborador de Chaves, pero el complot fue descubierto y sus organizadores arrestados.

XV. LA "SEGUNDA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL"

En vista de que la realidad del país seguía siendo peligrosa para el régimen en 1963, sobre todo en la zona central de la región oriental, donde la densidad de la población campesina y sus luchas reivindicativas eventualmente podían trasmutar las esporádicas acciones guerrilleras en chispa de una verdadera conflagración social, la camarilla de Stroessner comprendió que, a largo plazo, no bastaba con el perfeccionamiento de los mecanismos represivos. De ahí su sorprendente campaña en pro de la "Segunda reconstrucción nacional". Objetivo: disminuir las tensiones en las zonas rurales por medio de una ficción de reforma agraria. Proclamado con gran despliegue publicitario, este plan llegó a crear en pocos años 204 "colonias agrícolas" destinadas a descongestionar de campesinos pobres las áreas más pobladas.

Los grandes propietarios recibían, además, la oportunidad de realizar magníficos negocios vendiendo a buen precio algunos de sus más alejados predios incultos al Instituto de Bienestar Rural que, en lotes de 5 a 20 hectáreas, los entregaría a

los presuntos beneficiarios. Pasados los primeros momentos de euforia, los colonos se hallaban de cara a la selva, sin créditos ni otro tipo de apoyo oficial que les permitiera hacer prosperar, o por lo menos pagar —de lo contrario el título de propiedad no llegaba—, los tan ansiados lotes. Muchos, como los instalados en la colonia Yuacjhu (amor) de San Estanislao, casi murieron de hambre —el periódico *El Radical* denunció que 60 niños habían fallecido de inanición allí. Otros, más afortunados, llegaron a recolectar sus primeras cosechas de tabaco y algodón para encontrarse con que los precios de venta de estos productos no cubrían los costos de su producción. En suma, frente a los 80 mil campesinos trasladados a las colonias agrícolas e incapaces de pagar las cuotas fijadas por el IBR, 50 mil esperaban por la titulación y sólo algunos miles se beneficiaban con los créditos gubernamentales. Éstos constituían de hecho el núcleo de agricultores acomodados que como segundo objetivo se había propuesto fomentar el régimen dentro de su estrategia contrarrevolucionaria.

A diferencia de anteriores planes de colonización, la cacareada "reforma agraria" de Stroessner sí apuntaba al traslado masivo de campesinos y a la creación de una amplia capa de pequeños propietarios que consolidara la base social del régimen. Por ello combinó en su aplicación las sugerencias del "Primer seminario de reforma agraria" —que sesionó en Asunción bajo estricto control oligárquico entre el 24 de junio y el 24 de julio de 1958— con las recomendaciones de la Alianza para el Progreso destinadas a prohijar la ampliación de las relaciones capitalistas en el agro latinoamericano. Según el autorizado criterio de Pastore, todo se hacía "con miras a disminuir la presión de la población sobre los latifundios mejor ubicados y de mayor valor unitario, y a valorizar las tierras de los terratenientes para aumentar sus beneficios económicos y mantener su poder político".[60] El resultado fue un vasto programa de migraciones internas auspiciadas por el estado —utilizando a veces la fuerza— a través del titulado Instituto de Bienestar Rural.

Al lado de la gigantesca operación sociológica representada por aquel engendro de reforma agraria, Stroessner no olvidó "estimular" la participación extranjera en su proyecto de "reconstrucción nacional". Nuevas concesiones se añadieron a las antiguas en las esferas de la producción ganadera, agrícola y petrolera. La supresión en 1967 de la cláusula del estatuto agrario, que impedía la venta de tierras en zonas de frontera seca a personas o entidades extranjeras, reveló las dimensiones del inevitable proceso de absorción completa de Paraguay por los monopolios imperialistas y sus aliados brasileños.

Refiriéndose a las consecuencias de la penetración brasileña en las regiones del Alto Paraguay y la cordillera del Amambay, Eduardo Galeano relata: [61]

Llegué a la movediza frontera del nordeste de Paraguay con billetes que tenían estampado el rostro del vencido mariscal Solano López, pero allí encontré que sólo tienen valor los que lucen la efigie del victorioso emperador Pedro II. El resultado de la guerra de la Triple Alianza cobra, trascurrido un siglo, ardiente actualidad. Los

[60] Pastore, *op. cit.*, p. 441.
[61] Eduardo Galeano, *Las venas abiertas de América Latina*, La Habana, Casa de las Américas, 1971, p. 342.

guardas brasileños exigen pasaporte a los ciudadanos paraguayos para circular por su propio país; son brasileñas las banderas y las iglesias. La piratería de tierra abarca también los saltos del Guayrá, la mayor fuente potencial de energía en toda América Latina, que hoy se llaman, en portugués, Sete Quedas.

Y continúa ofreciendo lo que es una vívida imagen del Paraguay contemporáneo: [62]

...Uno descubre los últimos modelos de los más lujosos automóviles fabricados en los Estados Unidos o Europa y traídos al país de contrabando o previo pago de menguados impuestos, al mismo tiempo que se ven, por las calles, carros tirados por bueyes que acarrean lentamente los frutos al mercado: la tierra se trabaja con arados de madera y los taxímetros son impalas 70. Stroessner dice que el contrabando es "el precio de la paz": los generales se llenan los bolsillos y no conspiran. La industria, por supuesto, agoniza antes de crecer. El estado ni siquiera cumple con el decreto que manda preferir los productos de las fábricas nacionales en las adquisiciones públicas. Los únicos triunfos que el gobierno exhibe, orgulloso, en la materia, son las plantas de Coca Cola, Crush y Pepsi Cola, instaladas desde fines de 1966 como contribución norteamericana al progreso del pueblo paraguayo.

Si el entreguismo de Stroessner rompía todos los records en el terreno económico, en política exterior se le presentó ocasión de ensayar el más abyecto gesto de lacayismo de su carrera. Fue cuando la agresión de Estados Unidos a Santo Domingo en 1965. Para colaborar con los esfuerzos de la OEA dirigidos a disfrazar de "Fuerza interamericana de paz" a la soldadesca invasora, el dictador envió un batallón paraguayo a la isla antillana, que por una de esas ironías de la historia, se llamó Mariscal Solano López y actuó bajo las órdenes del general brasileño Penasco Alvim, situado pro forma al frente de las tropas de ocupación del imperialismo.

Como complemento de la ofensiva iniciada con la "Segunda reconstrucción nacional" y llamada a desarticular todo atisbo de oposición popular, el régimen aspiraba a ampliar su base de sustentación dentro de los medios urbanos controlados por los partidos tradicionales. A ello, obedeció la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente. Elegido el 7 de mayo de 1967 con el concurso del Partido Liberal Radical y un sector del febrerismo, este conclave aprobó (agosto) una nueva Constitución en remplazo de la de 1940. En ella se reforzaban aún más las atribuciones presidenciales, se autorizaba dos reelecciones a la primera magistratura, se establecía un sistema bicameral —mayor número de migajas para los elementos colaboracionistas— y se garantizaban las inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, la participación de la oposición legal en el Congreso quedaba reducida a un tercio, se mantenía en la ilegalidad al Partido Comunista y, bajo el pretexto de una titulada "reglamentación", se proscribía el derecho de los trabajadores a la huelga. Seis meses más tarde —11 de febrero de 1968— el general Stroessner era reelegido por tercera vez consecutiva.

El balance de todas estas innovaciones introducidas entre 1964 y 1968 era, sin

[62] *Ibid.*, p. 344.

embargo, desalentador. Al lado de una momentánea tregua en la política interna, el régimen sólo podía exhibir un descenso del 25% en el valor de las exportaciones, un déficit de 25 millones de dólares en la balanza de pagos y cinco millones como saldo en la reserva de divisas del Banco Central.

Aquí, sin un remedo siquiera de integración económica, ni esfuerzo oficial alguno por alentar las inversiones industriales, la crisis del sector primario seguía actuando como factor determinante en el estancamiento del país, permanentemente situado en el último escalón del subdesarrollo latinoamericano.

Frente a este panorama de miseria, despotismo y extrema dependencia, los partidos de la oposición burguesa y latifundista de cierta manera han alimentado las ilusiones de supuesta democratización de la vida nacional. La mayoría le hace el juego electoral al régimen desde la segunda mitad de la década del sesenta, viraje que coincidió con la "estabilización relativa" de la dictadura y refleja el temor de estas agrupaciones a las soluciones revolucionarias.[63]

Pero estos acontecimientos no indican que hayan sido suprimidas todas las contradicciones. Los partidos paraguayos responden a intereses de diversas clases sociales y ejercen determinada influencia sobre las masas populares; lo cual implica que no están inmunizados contra las presiones "desde abajo", y que en ellos sea posible detectar tendencias —de mayor o menor magnitud— verdaderamente democráticas y patrióticas, sobre todo en los sectores juveniles. Tampoco deben ser desestimadas las fricciones, mucho menos profundas, que de vez en cuando se manifiestan en la cúspide del partido en el poder. Como se sabe, en la propia junta directiva colorada existe cierta oposición entre los "tradicionalistas" y los "coloretes", fenómeno que explica el rechazo de una de las últimas convenciones del partido a la exigencia presentada por Stroessner en el sentido de nombrar presidente de la organización a su secretario privado, Abdo Benítez.

Mayor significación tiene la existencia del MOPOCO, que aunque controlado por elementos conservadores pronorteamericanos, también comprende la corriente denominada "Línea revolucionaria Roberto L. Petit" y un avanzado núcleo juvenil dispuesto a seguir "una política de puertas abiertas con todos los compatriotas que, impulsados por el mismo afán de salvar a la patria, sufren persecuciones, apresamientos, vejámenes y destierros".

El Partido Liberal, defensor de los intereses del gran latifundio y los monopolios extranjeros, se encuentra dividido en dos facciones igualmente oligárquicas: el Liberal Radical y el Liberal a secas (o "leviral"). A pesar de que sus más conocidos representantes suelen hablar de la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, los matices reales en su seno sólo es posible determinarlos tomando en cuenta el grado de sumisión exhibido frente a la dictadura. Mientras los incondicionales, como Enzo Doldán, José María Cáceres y Vargas Peña, favorecen la participación del radicalismo en el gabinete, los llamados "dignos" —Justo Pastor Benítez, Domingo Laino, Eladio Velázquez— quieren una "oposición constructiva". Si Efraín Cardozo, Gustavo Riart y otros, siguen una ambigua línea intermedia, muchos radicales intransigentes rechazan abiertamente toda colabora-

[63] Una mediocre apología histórico-sociológica de los partidos tradicionales puede leerse en el panfleto de José G. Gómez Fleytas; *Ubicación histórica de los partidos tradicionales en el Paraguay*, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, s/f.

ción con la camarilla de Stroessner. Ésa es también la actitud de un grupo de la juventud liberal afiliada al Club Alón.[64]

Los jefes del Partido Revolucionario Febrerista, de corte socialdemócrata, se han convertido en voceros de una parte de la minúscula burguesía nacional, dedicada fundamentalmente a la producción de jabones, fósforos, curtiembres, gráficos, etc., y afectada por los altos impuestos, el contrabando y el fantástico encarecimiento de los insumos. El febrerismo también influye sobre un sector de latifundistas medios, profesionales, estudiantes, artesanos y, además, pretende equívocamente representar los intereses de la clase obrera.

Los demócratas-cristianos cuentan con similar clientela política, aunque su fuerza principal radica en las capas medias urbanas, más vulnerables a la propaganda católica debido a su predominante carácter estamental.[65]

Si el PRF utiliza una jerga nacionalista, el Demócrata Cristiano emplea un lenguaje de fondo "desarrollista", bueno también para encubrir algunas de las duras críticas que frecuentemente dirige contra la política oficial. Su abstención en las farsas electorales y su respaldo a las campañas por la libertad de los presos políticos, le ha ganado la deportación de muchos de sus dirigentes y numerosas clausuras a sus órganos oficiosos: *Comunidad* y *Prensa Campesina*.

XVI. EL CONFLICTO CON LA IGLESIA

A partir de 1968 el firmamento político paraguayo se cubrió otra vez de nubes, ahora debido a las crecientes contradicciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno militar. Igual que en Brasil, esta situación encubría, o descubría, los agudos conflictos de una sociedad privada de todos los medios legales de expresión.

Para los círculos católicos era ya inadmisible la continua exclusión de sus organizaciones sindicales y políticas de la vida nacional. Hasta ese momento no habían sido reconocidos legalmente ni el Partido Demócrata Cristiano, ni la Central Cristiana de Trabajadores —que ya controlaba 7 sindicatos—, ni el amplio movimiento de las "Ligas agrarias", que contaba con las simpatías del Partido Comunista y operaba eficazmente en el seno de numerosas colonias agrícolas.

Tras la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Medellín (Colombia) y la tercera reelección de Stroessner, la Iglesia católica endureció su posición frente al régimen. El 27 de enero de 1969 la asamblea del episcopado paraguayo envió una carta al dictador en la cual manifestaba su preocupación por el estado de los presos políticos, mantenidos en condiciones infrahumanas. Entre el 5 y el 10 de febrero se reunió en Asunción la Conferencia Episcopal, que examinó entre otros un extenso memorándum preparado por los medios católicos

[64] Véase Hugo Campos, *op. cit.*

[65] "Las capas medias urbanas de Paraguay, muy poco numerosas por cierto, aún conservan su fisonomía estamental y el trabajo asalariado afecta a no más de 1/3 de todos los ocupados en la esfera de los servicios comerciales." Véase S. I. Semionov, "Las capas medias urbanas en la estructura social de los países latinoamericanos", en *América Latina vista por científicos soviéticos,* Moscú, 1975, p. 127.

sobre la situación de los presos políticos. No está de más reproducir un oreve fragmento de este documento, publicado en México por el CIDOC: [66]

Existen más de cien presos políticos que se encuentran distribuidos en diversas comisarías de la capital y en el batallón de seguridad (hoy día el cálculo se eleva a más de mil —NTA—). Los mismos se hallan encerrados en inmundos calabozos donde deben hacer hasta sus necesidades más elementales, guardados, como en el caso de la comisaría tercera, tras doble reja. La inmensa mayoría de ellos no han sido sometidos a proceso alguno. Unos pocos, que fueron sentenciados por la justicia ordinaria a determinadas penas hace años, han cumplido sus condenas con exceso. El trato que se les da varía según las circunstancias. En la comisaría 8a. ha llegado a límites inconcebibles, tales como el haber permanecido durante un año y medio sujetos a pesados grillos y a una barra de hierro. En la comisaría 3a. los vejámenes han llegado al extremo de que el agua para beber les fuera introducida en los mismos recipientes que habían usado para sus necesidades. Pasan meses y meses sin que se les permita salir al sol. En calabozos de dimensiones pequeñas y carentes de ventilación yacen amontonados grupos de diez, doce, quince reclusos...

Clausurada la Conferencia, los obispos sostuvieron una entrevista con Alfredo Stroessner a fin de solicitar la excarcelación de los presos políticos. Un cínico comunicado divulgado por la Subsecretaría de prensa informó de las razones invocadas por el dictador para rechazar la petición y malintencionadamente dio a entender que los dignatarios de la Iglesia habían reducido su solicitud original a una variante de la misma: "la de que sean mejor tratados". A través de este comunicado Stroessner acusó a los detenidos de "peligrosos comunistas activos", "malvados sujetos" y "verdaderas fieras". La Iglesia desmintió oficialmente la versión del gobierno por boca de monseñor Ramón Bogarín Argaña, vicepresidente en ejercicio de la CEP, y *Comunidad* se encargó de hacerlo en forma oficiosa: "El malhadado comunicado de la Subsecretaría coloca al país, sociológicamente hablando, en un estado prejurídico y revela con nitidez fotográfica una alarmente mentalidad totalitaria en las más altas esferas del gobierno nacional. 'El estado soy yo' es la divisa que flota sobre sus expresiones."

Las relaciones con la jerarquía siguieron agriándose hasta que en octubre nuevas agresiones de la policía a manifestantes inermes hicieron que el episcopado cancelara las tradicionales procesiones religiosas de Caacupé. Otra vez se elevaron solicitudes por la promulgación de una amnistía general, el levantamiento del estado de sitio —que el gobierno decía era "preventivo" y no "represivo"— y una serie de medidas democráticas.

Punto culminante en estos meses de conflictos con la Iglesia fueron las manifestaciones estudiantiles que acompañaron al movimiento de protesta contra la dictadura y por la liberación de los presos políticos. La visita de Rockefeller en junio sirvió de detonante a las mayores movilizaciones y permitió vislumbrar la dimensión antimperialista de la agitación política, que se expresaba en la toma de templos y las huelgas de hambre.

Sorda a todos los reclamos, la dictadura intensificó la represión en la capital y

[66] CIDOC, *El movimiento estudiantil, la Iglesia y el gobierno paraguayo*, Cuernavaca, DOC. 69/200.

continuó secuestrando en el campo a los dirigentes de las Ligas agrarias, cuyos cadáveres hacía luego desaparecer. Desde 1970 ese mismo tratamiento se aplicó a los campesinos descontentos de Cordillera, Coronel Oviedo y Santa Lucía.

Las perseguidas Ligas agrarias, patrocinadas por las organizaciones católicas y asesoradas por sacerdotes jóvenes —sobre todo jesuitas—, se independizaban progresivamente, como en Brasil, de la tutela eclesiástica, amenazando convertirse en el fermento agrario de la revolución social. Integradas por los campesinos más conscientes de las nuevas colonias agrícolas y defendiendo los derechos de aquellos que la penetración brasileña desalojaba de sus tierras, las Ligas agrarias ponían en entredicho los intentos del régimen por "pacificar" totalmente las áreas rurales. Su existencia y proyecciones testimoniaban que el gobierno sólo había logrado cierto desplazamiento de las contradicciones y no su eliminación.

La campaña de terror contra las Ligas agrarias ponía de manifiesto también el verdadero contenido de clase de la dictadura de Stroessner y el carácter de la represión estatal en Paraguay, que busca apuntalar tanto los viejos como los nuevos privilegios de la oligarquía terrateniente-burguesa y los intereses imperialistas a ella asociados. Si buscáramos un parecido al régimen de Stroessner no hallaríamos otro mejor que la tiranía vitalicia impuesta por los Somozas al pueblo nicaragüense, aún cuando tal vez el primero haya tenido más éxito a la hora de crearse algunas bases de apoyo entre los sectores políticamente más atrasados de la población campesina.

Como dicen los historiadores soviéticos, en Paraguay existe un criminal estado policial-militar —el 50% del presupuesto se dedica a estos fines— que utiliza métodos de opresión fascista.[67] Se combinan así los rasgos más repugnantes de las antiguas dictaduras feudales latinoamericanas —corrupción, privilegios de clique, oscurantismo feroz e inmovilismo político— con las más depuradas técnicas de tortura y persecución puestas de moda por el capitalismo contemporáneo.

XVII. AVANCES DE LA PENETRACIÓN BRASILEÑA

En septiembre de 1972 Stroessner anunció su intención de presentarse por cuarta vez consecutiva como candidato presidencial. En febrero de 1973 se celebró la nueva farsa y en abril el decano de los dictadores latinoamericanos, ya sexagenario, se entrevistó con su colega brasileño, Emilio Garrastazú Medici. Se trataba de un encuentro "histórico", decisivo dentro de la prolongada disputa entre Argentina y Brasil por controlar los recursos hidroeléctricos del Plata.

La prueba de fuerza había comenzado casi diez años antes (1964), cuando una misión brasileña visitó Asunción para gestionar un acuerdo que permitiera el aprovechamiento conjunto de los saltos del Guayrá. En junio fue firmado un esbozo de compromiso —el "Acta de las cataratas"— entre Castelo Branco y Stroessner, reunidos al efecto en Foz de Iguazú.

De las contraproposiciones argentinas había sido portador Juan Carlos Onganía,

[67] Véase, Nitoburg, *op. cit.*

quien en noviembre de 1969 trató de conquistar la aquiescencia del gobierno de Asunción para el proyecto de regular, mediante un convenio internacional, el uso de las aguas de la cuenca, sobre todo del Paraná y sus afluentes. Aunque Argentina aspiraba a construir una gran represa hidroeléctrica en los altos de Apipé-Yaciretá —zona fronteriza en condominio argentino-paraguayo—, todo quedó estancado al demandar Stroessner una rebaja de gravámenes a la importación de madera paraguaya semielaborada y la autorización para que los aviones de sus líneas aéreas aterrizaran en Buenos Aires (sólo consiguió un aumento en las compras argentinas de yerba mate).

Indudablemente, la crisis político-institucional argentina facilitó en estos años el precoz avance de la diplomacia brasileña, la cual se anotó un importante triunfo con la ratificación del tratado de Itaipú en abril de 1973. Este acuerdo sancionó la construcción de una gigantesca hidroeléctrica en el curso superior del río Paraná a un costo de 3 mil millones de dólares —ya se dice que será necesario invertir más de 8 mil millones— y un potencial previsto de once millones de kilovatios. Dos tercios de la obra —que será operada por la Empresa Binacional de Itaipú— quedaría a cargo de Brasil, mientras el resto se reservaba a inversionistas extranjeros. Paraguay, por su lado, se comprometió a reintegrar al socio mayor, bajo la forma de energía eléctrica exportada, su parte del capital básico, hasta liquidar el saldo, nada menos que dentro de 45 años.

A la sombra de estos acuerdos el Brasil acelera el establecimiento de bancos, compañías de seguros, plantas que producen materiales de construcción y planes ganaderos y forestales en Paraguay.

La sólida implantación brasileña obligó al extinto presidente argentino Juan Domingo Perón a otorgar en enero de 1974 la degravación aduanera reclamada por Stroessner. Así quedó abierta la vía para construir, paralelamente a la represa de Itaipú, la hidroeléctrica de Corpus.

La situación internacional de los últimos años repercute en forma contradictoria sobre el régimen de Asunción. Aunque el apoyo brasileño e imperialista se acrecienta, la crisis del sistema capitalista mundial agrava extraordinariamente los tradicionales problemas de la economía agroexportadora paraguaya. En 1974, por ejemplo, el ritmo de crecimiento de la inflación alcanzó casi un 30%, mientras la política oligárquica y antipopular de Stroessner nada hacía para frenar el continuo deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Reportes recientes hablan de que muchos maestros dejan sus puestos para emplearse —sin revelar su condición— como obreros en las obras de Itaipú, donde reciben salarios comparativamente más altos. Sin duda, las gigantescas inversiones que requiere el convertir a Paraguay en el plexo energético de la América del Sur, repercutirá sobre las arcaicas estructuras del país y añadirá nuevas contradicciones en la esfera de las relaciones sociales.

Actualmente, la lucha del pueblo de Paraguay se desarrolla en condiciones muy difíciles. Los principales indicadores revelan la trágica dependencia de su economía, dominada en un 80% por el capital extranjero. Según datos oficiales, desde 1971 se establecieron en el país 202 nuevas empresas y 254 ampliaron sus inversiones, bien protegidas por la ley núm. 216 que "regula" la liquidación del interés nacional al mejor postor. Entre 1971 y 1975, norteamericanos, brasileños, europeos

occidentales y japoneses, aumentaron sus capitales en un 4 800% (si se incluyen los grandes proyectos hidroeléctricos y viales). La deuda externa asciende ya a 526 millones de dólares y el desempleo se prevé superará la cifra de 150 mil en 1980.[68] No en balde Delfín Ugarte Centurión, ministro de Industria y Comercio, declaró en mayo de 1976 que Paraguay "dispone de la mano de obra de un millón de jóvenes, extensas tierras fértiles para la ganadería, la agricultura, inmensos bosques y, sobre todo, tranquilidad social y estabilidad política y monetaria".[69] Los trabajadores, naturalmente, piensan distinto que el ministro. Se ha podido saber que en los últimos meses, desafiando la ola represiva desatada desde fines de 1975, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), los obreros del frigorífico San Antonio y la Liga de Obreros Marítimos, han planteado abiertamente importantes reivindicaciones salariales y laborales, pasando por encima del quietismo de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), controlada hace tiempo por elementos colorados vendidos al dictador.

Un estudio realizado en 1975 por agencias oficiales en la ciudad de Asunción, sobre los ingresos de la población, arrojó resultados tales, que el régimen trató de mantenerlos en secreto. Cuando éstos se hicieron públicos, quedó al descubierto la miseria en que se debaten los sectores urbanos preteridos. La muestra, de 15 062 familias, reveló que el 5% de los encuestados se beneficiaban con un 33% del ingreso total, mientras el 80% sólo recibía el 40%. Y lo que llama más la atención: 82% de las familias interrogadas declaró carecer por completo de ingresos monetarios fijos, subsistiendo gracias a actividades de autoconsumo y ocupaciones eventuales.[70]

Ése es el país que abre sus puertas de par en par a la inversión extranjera y reparte concesiones que se superponen unas a otras sobre un mismo territorio. Por ejemplo, el cable acaba de anunciar el privilegio otorgado a The Anchutz Corporation para la exploración y explotación de todo tipo de minerales, incluyendo los preciosos y los estratégicos, en la región oriental. El área cedida comprende 159 828 km cuadrados.[71]

Pero es la penetración yanqui-brasileña la que está llamada a provocar los mayores efectos. Alrededor de las represas crece un proletariado numeroso —en Itaipú trabajarán 70 mil obreros—, que los brasileños pretenden encerrar dentro de un círculo de hierro a distancia prudencial de la futura hidroeléctrica. Por otro lado, los campesinos de la rivera occidental del Paraná son desplazados por colonos brasileños que llegan allí para levantar, sin saberlo, las "fronteras vivas" proyectadas por la Itimarati y los militares; preludio de la ocupación definitiva de la zona de las "siete caídas", tradicionalmente ambicionada. Indiferentes ante el peligro que se cierne sobre el país, los militares paraguayos obligan a estos campesinos a deshacerse de sus propiedades para después revenderlas diez veces más caras a los latifundistas y las firmas brasileñas que auspician la colonización. Con todo, las fértiles tierras rojas, cubiertas de riquísimos bosques, resultan dos veces más baratas del lado paraguayo.

[68] En Revista *Bohemia*, La Habana, año 68 núm. 34, agosto de 1976, p. 35.
[69] *Idem*.
[70] Véase Diario *Granma*, La Habana, 17 de agosto de 1976, p. 5.
[71] *Ibid*., 21 de agosto de 1976, p. 6.

Mientras tanto, coincidiendo con el recrudecimiento de la represión fascista en los países del Cono Sur, se intensificó la persecución de los militantes o simpatizantes del Partido Comunista en Paraguay. El gobierno que durante 22 años ha mantenido viva la llama del más cavernícola de los regímenes, la alternativa que todos suponían superada, no se podía quedar atrás. Sorpresiva y silenciosamente se proponía acabar con la vanguardia organizada de los trabajadores notablemente fortalecida en los últimos dos años. [72] Pero una vez más el PC demostró su capacidad para enfrentarse y sobrevivir al asedio de la dictadura y de la CIA, a pesar de que dos de sus más destacados dirigentes, Miguel Ángel Soler, secretario general, y Derliz Villagra, líder juvenil, cayeron en poder de la policía. Ante los reclamos de la opinión pública mundial, el régimen de Stroessner reconoció que ha apresado cerca de 150 comunistas, pero no ha confesado dónde tiene recluidos a Villagra y Soler.[73]

Hoy sólo llegan cuatro tipos de noticias sobre el Paraguay: o los dramáticos llamados de las organizaciones democráticas para que se libere a los presos políticos; o las breves crónicas que anuncian la visita de algún connotado jefe fascista al país (Pinochet, Geisel, Vorster); o los términos de alguna nueva y onerosa concesión; o las maniobras de Stroessner para preparar su próxima reelección.

Nada asegura, sin embargo, que la voz del pueblo paraguayo haya sido acallada. Ni las barreras de la desinformación, ni la terrible represión interna, ni la gravitación externa de los regímenes que a un elevadísimo costo económico y político garantizan la dominación imperialista en la región, pueden ocultar al mundo la indestructible resistencia de las masas populares ni la lucha de los patriotas por la liberación de un país que desde hace siglos sabe cantar en lengua guaraní: [74]

...He de hacer que la voz vuelva a fluir
por los huesos...
Y haré que vuelva a encarnarse el habla...
Después que se pierda este tiempo y un
nuevo tiempo amanezca...

XVIII. BIBLIOGRAFÍA

Bermejo, Ildefonso Antonio, *Repúblicas americanas. Episodios de la vida política y social de la República del Paraguay*, Madrid, Imprenta R. Labajos, 1973.
Cardozo, Efraín, *Breve historia del Paraguay*, Buenos Aires, Ed. Eudeba, 1965.
Díaz de Arce, Omar, *Paraguay*, La Habana, Casa de las Américas, 1967.
Gaona, Francisco, *Introducción a la historia gremial y social del Paraguay*, Asunción, Ed. Arandú, 1967.

[72] Esta operación fue precedida por lo que algunos han llamado "el censo de la muerte", organizado por los "Cuerpos de Paz", las seccionales del Partido Colorado y la policía. Visitando casa por casa y haciendo preguntas aparentemente inofensivas el régimen preparó este último operativo que llevó a las cárceles a varios cientos de patriotas.

[73] *Prensa Latina*, cable fechado en Buenos Aires el 18 de julio de 1976.

[74] Antiguo cántico guaraní; uno de los dos lemas del libro de Roa Bastos, *Hijo de hombre*.

Gómez Fleytas, José G., *Ubicación histórica de los partidos tradicionales en el Paraguay,* Asunción, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, s/f.
Insfran, Pablo Max, *La expedición norteamericana contra el Paraguay: 1858-1959,* Asunción, Ed. Guaranía, 1954, 2 vols.
Mahn, Liliana B., *Algunos aspectos de la evolución política en el Paraguay,* Asunción, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, s/f.
Pastor Benítez, Justo, *Formación social del pueblo paraguayo,* Asunción Distribuidora Nizza, 1967, 2a. edición.
———, "Historia contemporánea del Paraguay a partir de 1870", en *Historia de América,* dirigida por Ricardo Levene, Buenos Aires, 1943, vol. IX.
Pastore, Carlos, *La lucha por la tierra en Paraguay,* Montevideo, 1972.
Rout, Leslie B., Jr. *Politics of the Chaco peace conference, 1935-1939,* Austin, University of Texas Press, 1970.

PERÚ: ESTADO OLIGÁRQUICO Y REFORMISMO MILITAR

JULIO COTLER

I. LAS TRASFORMACIONES DE LOS AÑOS VEINTE

La década de los años veinte se caracterizó por el desarrollo de una importante trasformación de la sociedad peruana. Si bien ella no trastocó enteramente los marcos sociales dentro de los cuales había funcionado hasta entonces, redefinió el carácter de su organización, así como el de sus conflictos sociales y políticos.

Tres hechos principales singularizan dicha trasformación. En primer lugar, el afianzamiento del capital imperialista de origen norteamericano en el sector de las exportaciones primarias y de las finanzas, constituyendo una típica economía de enclave. Como es sabido, estas empresas buscaban producir materias primas a un costo más reducido del que se podían obtener en Estados Unidos, a fin de maximizar la acumulación y reproducción del capital de la casa matriz. El objetivo se alcanzaba gracias a la existencia en Perú de una generalizada área precapitalista que proveía una mano de obra —el cholo barato— y los bienes necesarios para su reproducción, a un costo muy por debajo del mercado norteamericano. A su vez, esta situación se veía reforzada por el hecho que los beneficios generados por el enclave se invertían en el país de origen del capital, impidiendo la acumulación interna y frustrando, por lo tanto, la extensión y profundización del capitalismo en Perú.

Así, la naturaleza de la formación dependiente, en la que se combinaban desigualmente los modos de producción, con la presencia dominante del que aportaba el imperialismo, vino a redefinir la heterogeneidad económico-social del país.

En segundo lugar, y en asociación con lo apuntado antes, Perú experimentó una recomposición y restructuración de sus clases sociales. En efecto, al nivel de los grandes propietarios nativos, se operó una emergencia económica y política del sector directamente asociado a las exportaciones que controlaba el enclave y, correlativamente, el desplazamiento de los que marginaba la inserción imperialista. Simultáneamente, al nivel de los terratenientes inmersos en el área precapitalista de la sociedad, una fracción pasó a asociarse con la nueva coalición dominante, que le prestó su apoyo para eliminar a la que se encontraba ligada clientelísticamente a los grandes propietarios opuestos a la nueva fórmula, restándole su base política de sustento.

De esta manera en el interior de la clase propietaria se observó una recomposición y reorientación de sus elementos centrales alrededor del enclave, que permitió, por primera vez en la historia republicana, su integración política y la centralización efectiva del estado. La eliminación o arrinconamiento de las tendencias centrífugas de las oligarquías regionales y de sus caudillos, fue posible gracias a la

construcción de un ejército que respondía a una sola voz de mando, capaz de ejercer dominio sobre la sociedad.

Pero el estado, directamente ligado a los intereses de las empresas imperialistas y de sus asociados nativos, se iniciaba marcado por el sello dependiente y oligárquico; su naturaleza francamente coercitiva ofrecía la imagen de una situación colonial.

Simultáneamente a la recomposición y reorientación que experimentaban los propietarios, en el seno de las clases medias y de los sectores populares se experimentó un fenómeno semejante que seguía la dinámica impulsada por los enclaves. La penetración del capital imperialista aparejó un doble y contradictorio proceso: de un lado dicha penetración significó la còncentración de la propiedad y la racionalización capitalista del trabajo, que se tradujo en el despojo campesino y la consiguiente proletarización de comuneros, yanaconas, arrendatarios, así como de pequeños y medianos propietarios y la eliminación de un sector de comerciantes e industriales.[1] Pero de otro lado, los terratenientes y las empresas extranjeras extendieron su dominio sobre las masas campesinas, expropiando sus tierras a fin de obligarlos a someterse a la condición servil. La "refeudalización" de amplias áreas rurales tenía por objetivo organizar la producción de alimentos bajo moldes señoriales, que luego sería mercantilizada en los centros que dinamizaba el capital imperialista. Así, se rehacía el modelo de dominación ibérica en el que relaciones sociales de producción precapitalistas permitían maximizar el sistema de apropiación capitalista.[2] Por último, en aquellos casos que las comunidades de campesinos indígenas lograron preservar sus posesiones, rápidamente fueron incorporados en el mercado capitalista, experimentándose un proceso de diferenciación interna y el inicio de la quiebra de la organización comunal.

Es decir que *prima facie* la sociedad se presentaba en términos duales: el capitalismo que dirigía el imperialismo y el "feudalismo" de los terratenientes nativos. Pero esta impresión escondía una articulación que beneficiaba el eje capitalista de la economía, con la consiguiente fractura de la sociedad.

El tercer hecho que configura la trasformación de los años veinte, es la emergencia política de los sectores de la sociedad afectados por la trasformación económica y social en curso. Es así como los trabajadores agrícolas, recientemente concentrados en las plantaciones de azúcar, algodón y arroz, los obreros mineros e industriales, la pequeña burguesía urbana y rural desplazada por los cambios que auspiciaba el capital imperialista, las comunidades que veían peligrar su existencia por el avance de los terratenientes, la fracción de los comuneros que eran expropiados por sus congéneres que se diferenciaban clasistamente de ellos, todos entraron en un proceso de movilización de distinto rango e intensidad. Esta movilización se canalizó a través de organizaciones sindicales, políticas y culturales que fueron adquiriendo connotaciones antimperialistas y antioligárquicas. El desarrollo político de las clases populares estuvo determinado, aunque con distintas proyecciones, por el pensamiento y la actividad organizativa de Víctor Raúl Haya de la Torre y de José Carlos Mariátegui.

[1] Peter Kalren, *La formación de las haciendas azucareras y los orígenes del Apra*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1970.

[2] José María Arguedas, *Yawar fiesta*.

El debate que se planteó entre ellos resume el que desde entonces se hizo presente en la "izquierda" latinoamericana. Mientras Haya de la Torre formuló la orientación nacionalista-revolucionaria, Mariátegui sentó los fundamentos teóricos y la organización para el desarrollo del socialismo en Perú. El primero fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el segundo el Partido Socialista que luego, a su muerte, sería convertido en el Partido Comunista Peruano, estrechamente ligado a las directivas de la Tercera Internacional.

En 1928 y en respuesta a las críticas del dirigente cubano Julio Antonio Mella, Haya escribió *El antimperialismo y el Apra,* donde formuló de manera orgánica su diagnóstico de Indoamérica y las prescripciones características del nacionalismo revolucionario. En términos muy esquemáticos, el autor parte de la premisa de que el desarrollo de Indoamérica no ha seguido los lineamientos que conoció Europa y que, por ello mismo, los instrumentos políticos de su trasformación así como la naturaleza de la misma deben ser originales, sin sometimiento a los cánones válidos para otros espacios históricos. Este planteo tenía por objetivo rechazar las formulaciones propuestas por la Comintern y los "comunistas criollos".

Según Haya, en América se había establecido un "feudalismo colonial" que impidió el desarrollo de la burguesía y con él de la ideología liberal. Las guerras de Independencia no significaron la erradicación del feudalismo, sino la preservación de dicho modo de producción que rápidamente se asoció con la burguesía comercial ligada al emergente capitalismo inglés. Posteriormente el capitalismo norteamericano desplazó al británico, repitiendo el modelo neocolonial. De allí que en pleno siglo XX la estructura social de Perú y en general de la región latinoamericana manifieste las características de un "museo viviente", en el que simultáneamente conviven todas las etapas de la historia humana.

Por lo tanto, el imperialismo es responsable de la introducción del capitalismo en Indoamérica; lo que lleva a Haya a concluir, parafraseando a Lenin, que si el imperialismo es la última etapa del capitalismo en Europa, constituye la primera etapa en Indoamérica. Pero este capitalismo imperialista al articularse con el feudalismo impide el desarrollo nacional. En Europa, en cambio, el desarrollo capitalista no sólo significó la eliminación de las fuerzas feudales sino el desarrollo de las capacidades nacionales. De donde el autor concluye que "no es posible separar la lucha contra el imperialismo extranjero de la lucha contra el feudalismo colonial en Indoamérica".

Ahora bien, la explotación de la coalición feudal-imperialista se realiza sobre campesinos, obreros, clases medias y también sobre la incipiente burguesía industrial. Es decir, constituye una explotación de carácter *nacional.* Así, la explotación imperialista tiene la doble connotación de ser clasista y nacional, en la que ésta tendría primacía: "La primera consecuencia del creciente dominio económico del imperialismo norteamericano en nuestros países es una consecuencia política: el problema de la *libertad nacional.*"

De allí que todos los explotados, indistintamente de su clase social, deben coaligarse para desarrollar la lucha antimperialista y antifeudal, y por la liberación nacional. Dicha lucha sólo podría ser lograda con éxito a través de la constitución de un Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, integrados en un partido único que, a semejanza del Kuomingtang, persiguiera la instauración de

un estado antimperialista. Éste, tal como lo definiera Vicente Lombardo Toledano para el caso de México, representaría los intereses nacionales, en la medida que nacionalizara los enclaves y acabara con el feudalismo agrario. El estado se abriría a las clases nacionales, estableciendo una alianza entre ellas que él coordinaría por intermedio de la representación de los intereses funcionales. Es decir, formalizando un estado corporativo.

A fin de proteger la existencia del estado antimperialista y de dinamizar la autonomía nacional, el estado constituiría un poderoso sector económico que, de acuerdo con lo que Lenin habría afirmado, sentaría los fundamentos para una futura transición al socialismo. Paralelamente al capitalismo estatal, y bajo su control, sería posible el desarrollo de una burguesía nacional y nacionalista. Así, el nuevo carácter del estado haría posible la integración y consolidación de la nación.

Pero este proyecto, al mismo tiempo, era consciente de los requerimientos de capital y tecnología de origen imperialista. De allí que Haya, de manera explícita, conviniera en aceptar "condicionalmente" la incorporación de dichos recursos a fin de apurar el desarrollo económico de Perú y de Indoamérica. Es a este diseño que llamó el antimperialismo "constructivo".

La disidencia de Haya con los postulados de la Tercera Internacional se fundaban principalmente en la naturaleza de clase del partido y de la revolución. En cuanto a lo primero, Haya desechaba la posibilidad de constituir un partido clasista, en la medida que el desarrollo histórico de Indoamérica y de Perú, en particular, había frustrado el desarrollo numérico y cualitativo del proletariado. Seguir esta consigna, apuntaba Haya, significaba en la práctica aislarse de la mayoría de la población interesada en la lucha antimperialista y verse imposibilitado de acopiar el apoyo necesario para llevar a cabo la liberación nacional.

Además, el carácter dependiente de la sociedad peruana determinaba que el objetivo fuese una revolución nacional y popular y que el Partido que dirigiera la liberación nacional debía recabar el sustento de todas las clases nacionales explotadas. La construcción y dirección de ese partido no podía ser realizada por el proletariado debido a que por su pequeñez y reciente incorporación urbana no había logrado adquirir una conciencia clasista y nacionalista. En cambio, las clases medias eran las más nacionales, capaces y beligerantes de las que constituían el frente y por ello eran las más aptas para liderar la lucha del conjunto de las clases nacionales.

También Mariátegui partió de un análisis histórico de la realidad peruana para determinar el carácter de la sociedad y de la revolución peruanas. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* se caracteriza por el rastreo del carácter de clase cambiante de la historia republicana. Y si bien Mariátegui llegó a conclusiones que en varios aspectos concordaban con las de Haya, se diferenció en aspectos claves. Mientras Haya consideraba la existencia peruana compartimentalizada en varios modos de producción, Mariátegui señaló con bastante claridad la existencia de una articulación entre feudalismo y capitalismo, que permitía el desarrollo de este último, que se definía, en primer lugar, por su impronta imperialista y, en segundo lugar, por su origen foráneo. De donde seguiría para afirmar que la liberación nacional y popular se definía por su carácter anticapitalista, *tout court.*

Dos factores confluían para hacer imposible el desarrollo capitalista "autónomo" en Perú y en América Latina. El primero de ellos era que "la época de la libre concurrencia en la economía capitalista ha terminado en todos los campos y en todos los aspectos. Estamos en la época de los monopolios, vale decir, de los imperios. Los países latinoamericanos llegan con retardo a la competencia capitalista. Los primeros puestos están ya definitivamente asignados. El destino de estos países dentro del orden capitalista es de "simples colonias". En segundo lugar, Mariátegui negaba rotundamente el carácter nacionalista de la pequeña burguesía, así como de los grandes propietarios, por su condición de enfeudamiento al capital imperialista y por la carga colonial que llevaban consigo, de desprecio y odio a las masas populares. Es decir, Mariátegui rechazaba con toda claridad la posibilidad de la constitución de una burguesía nacional, y adelantaba que de triunfar el nacionalismo revolucionario favorecería una recreación burguesa-dependiente, como lo venían demostrando México y China de los años veinte.[3]

Si bien Mariátegui colaboró con Haya en la constitución del Frente Antimperialista, se distanció de él cuando éste derivó dicho Frente en el Partido Único. Si bien Mariátegui fue claro en señalar la necesidad de llevar a cabo reformas democráticas y nacionalistas era firme en señalar que ellas sólo podrían plasmarse a cabalidad en el socialismo. En este sentido, Mariátegui reconocía que el proletariado peruano era incipiente y sin conciencia revolucionaria, sin embargo, rechazaba la posibilidad de confundir los intereses del proletariado con los del campesinado y la pequeña burguesía. El Frente tenía como objetivo el logro de las reformas democrático-populares mientras que el Partido debía asegurar el pase de dichas medidas a la revolución socialista. De lo contrario el destino del Frente sería el que tomó el Kuomingtang, a fines de los años veinte.

Es decir, que mientras Haya postulaba la colaboración de clases con supuesta vocación nacionalista, integrada en un partido único, a fin de desarrollar una lucha antimperialista y antioligárquica que haría posible forjar un estado que lograra la conciliación de clases, Mariátegui postulaba la constitución de un frente clasista para lograr la revolución democrática-popular como transición al socialismo, tarea ésta que el partido clasista debería motorizar.

II. LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA

Los cambios de los años veinte se hicieron patentes en todas sus dimensiones a raíz de la gran depresión. Esta crisis exacerbó los conflictos sociales y políticos que se habían gestado en los años precedentes, dejando traslucir en toda su desnudez la precariedad de la clase dominante y de su estado, mostrándolos incapaces de dar solución política a la situación originada fuera de sus fronteras.

Al reducirse notablemente las exportaciones y cortarse el flujo de los préstamos norteamericanos, el ingreso de los propietarios y del estado se vio mermado. Millares de trabajadores recientemente incorporados en la esfera capitalista fueron

[3] José Carlos Mariátegui, *Temas de nuestra América,* Ed. Minerva, Lima.

lanzados a la desocupación. La retracción de la demanda de alimentos, que mercantilizaban los terratenientes, así como los sectores que se enriquecían en el interior de las comunidades, derivó en que se recrudecieran las exigencias sobre los campesinos, desatando una ola de levantamientos rurales. Así, afloró violentamente una lucha de clases descarnada, sin que mediaran valores o instituciones capaces de establecer ningún consenso nacional. El carácter dependiente-oligárquico del estado, fundado en la coerción, determinaban esta situación.

En estas condiciones fue tangible la incapacidad de los propietarios y del estado para controlar la situación y dar solución a las exigencias populares. De 1930 a 1933 el país vivió una sucesión de levantamientos militares y de insurrecciones populares que hicieron patente la crisis del orden establecido por la coalición oligárquico-imperialista.

En el seno de los propietarios se recrearon los tradicionales conflictos entre la fracción que se había asociado al enclave, y que había gobernado durante la década pasada, y la que había sido desplazada por ella. Simultáneamente, salieron a relucir los ánimos hegemónicos de las varias oligarquías regionales silenciadas por la coalición dominante. Por otro lado, la población popular agrupada alrededor del Partido Comunista y del Aprista insurgió violentamente contra el orden establecido. Siguiendo las consignas de la Tercera Internacional, el PC promovió la constitución de "soviets" de obreros y soldados; el Apra dirigió varias insurrecciones, la principal de ellas en la ciudad de Trujillo que costó la vida de miles de pobladores, así como de oficiales y soldados.

El resultado final de este conflicto fue la integración del conjunto de la clase propietaria alrededor del ejército, en su lucha contra las fuerzas populares organizadas por el Apra y el PC. Este enfrentamiento sentó los fundamentos de un conflicto que tomó, simultáneamente, un carácter clasista e institucional —Apra y ejército— que definió la lucha política de las próximas décadas. En efecto, a partir de entonces la lucha de las clases básicas de la sociedad se expresó mediante el conflicto que contraponía el ejército al Apra, cada uno de ellos asociando en bloque a distintas clases; así el país pasó a dividirse en dos "partidos": el aprista y el antiaprista, comandado este último por el ejército.

Los cuadros superiores del ejército no se enfrentaron sólo por su identificación con el régimen de dominación oligárquico, sino también por razones de naturaleza institucional. En la medida que la única protección con que contaba la coalición dominante era el aparato castrense, el Apra, por muy distintos medios, procuró destruirlo. El ejército, a pesar de encontrarse profundamente infiltrado por el Apra, logró reaccionar contra los que atentaban contra su integridad y, en esa medida, protegía el régimen estatal en el que se inscribía.

La precariedad política del régimen político y la función prominente que vino a cobrar la fuerza armada sería un elemento decisivo en la historia política del país en las décadas subsiguientes. Así como el rechazo del ejército al Apra, en tanto agente movilizador de las masas populares, en la medida que su presencia atentaba contra la institución castrense. De lo contrario no se comprende que las fuerzas armadas mantuvieran la misma línea política, aun cuando el Apra y la clase dominante llegaron a un mutuo entendimiento a mediados de los años cincuenta. Es

decir, que a partir de los años treinta el ejército vino a constituirse en el elemento central del estado oligárquico.

En muy poco tiempo, el Apra logró agrupar alrededor suyo a la gran mayoría de los sectores populares y medios políticamente movilizados del país, colocando en un segundo plano de importancia al PC. Varias son las posibles explicaciones a este hecho crucial. En primer lugar, la tardía incorporación del capitalismo del tipo de enclave, frustraba el desarrollo de un proceso de diferenciación clasista y, al contrario, favorecía el mantenimiento de una generalizada orientación pequeño-burguesa. En segundo lugar, el PC sometido a los dictámenes del Comintern, que Mariátegui había sabido resistir, adoptó una orientación "obrerista", dispuesta a la toma inmediata del poder por soviets y, de acuerdo a la consigna de "clase contra clase", rechazó todo compromiso político con el Apra, acusándolo de "social-fascista", calificativo que los partidos comunistas europeos arrojaban a los partidos reformistas agrupados por la Segunda Internacional. Esta concepción organizativa contrastaba con la adoptada por Mariátegui quien favorecía la organización sindical del proletariado, pero sin descuidar a los demás sectores poblacionales y en especial el campesinado, que por constituir las cuatro quintas partes del total y encontrarse sometido a la explotación precapitalista, debía jugar un papel fundamental en la etapa democrática de la revolución hacia el socialismo. Sería esta argumentación la que le valdría la acusación de "populista" por los teóricos comunistas.

Es claro que ante el primer embate del PC contra las fuerzas oligárquico-imperialistas fue duramente golpeado, visto el carácter incipiente de la organización política de los trabajadores. Mientras, el Apra logró articularse ampliamente con los obreros agrícolas, campesinos, pequeña burguesía y miembros de la vieja aristocracia regional del norte, en tanto que la ideología nacionalista que preconizaba y la organización que estableció se adaptaban a las condiciones regionales. En efecto, era en esa región donde el enclave había promovido la más importante sacudida a la estructuración tradicional. Además, Haya de la Torre participó en la contienda electoral que vivió el país en 1931, que le permitió difundir sus ideas y procurar la organización partidaria que alcanzó un nivel organizativo totalmente insólito en el país. Si bien el Apra fue derrotado en las elecciones de 1931 por un margen muy estrecho logró consolidarse en las diferentes capas populares y medias del país, constituyéndose en una organización nacional tanto por su orientación como por su irradiación.

Es así como a raíz de la crisis de los años treinta y que determinó la caída del gobierno de Leguía (1919-1930) se desató una insospechada presencia política de naturaleza popular. Un sector de las masas populares urbanas se asoció con el nuevo jefe de estado, coronel Sánchez Cerro, quien adoptó una retórica típicamente populista. A su vez la insurgencia política de los obreros, campesinos y empleados que se orientaban por las directivas ideológicas de los nuevos partidos, creaba condiciones para una reorientación del estado, a semejanza de lo que ocurrió en otros países de la región. Pero para ello faltaba el otro término de la ecuación: un sector burgués "moderno", interesado en establecer con las clases populares una alianza, por intermedio de un estado arbitral. Esta ausencia se explica por el carácter y profundidad de la inserción imperialista, que impidió el desarrollo in-

dustrial del país y, con él, la diferenciación interna en la burguesía y la emergencia de un sector orientado al mercado interno.

Muy al contrario, la fracción de la clase dominante que se coaligó con Sánchez Cerro fue aquella desplazada por la alianza oligárquico-imperialista establecida en los años veinte y que se caracterizaba por su naturaleza profundamente precapitalista. Si en algún momento había mostrado pretensiones "nacionalistas" *avant la lettre,* se debía a su repulsión al capitalismo "fenicio" que amenazaba destruir los rasgos patrimoniales, católicos e hispánicos de la sociedad peruana. De allí que originalmente enarbolara una ideología arielista y que luego, ante la emergencia popular, se manifestara simpatizante de las fórmulas corporativas y fascistas.

La relación que esta fracción de la clase dominante perseguía establecer con las masas populares no era la de un compromiso, sino de sometimiento. Una política de conciliación con "cholos, indios y negros" estaba fuera de toda posibilidad y era impensable para estos herederos de la colonia.

Precisamente por la falta de una fracción industrial de la burguesía y, al contrario, la reemergencia política de la más tradicional, el enfrentamiento político con el Apra alcanzó ribetes de guerra civil. Por eso mismo, el Apra, o mejor las masas populares apristas, adoptaron posiciones revolucionarias. Así la guerra de clases se declaró abiertamente en Perú durante toda la década de los años treinta. Mientras el ejército y la policía ejercían una violenta represión sobre la población popular, el Apra favorecía el desarrollo de levantamientos armados que deberían permitir abrir un cauce democrático a la política peruana.

En 1939, el general Benavides, que había congregado alrededor suyo a la clase dominante en su conjunto en su lucha contra el Apra, convocó a elecciones a fin de recrear las bases institucionales de la dominación oligárquica. Desde antes y durante el gobierno de Manuel Prado se fueron modificando las orientaciones políticas del Apra y del PC. La razón fundamental de ese cambio fue la crisis internacional que llevó a Haya a concebir a Estados Unidos, en su nueva política del "buen vecino", como una fuerza democrática capaz de favorecer la implantación de regímenes análogos en Indoamérica. El PC, a su vez, y siguiendo las nuevas orientaciones "browderistas" colaboró con el gobierno en los esfuerzos bélicos contra el Eje nazi-fascista.

III. LA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA DE 1945

Los nuevos aires democráticos que corrían en América Latina con motivo de la lucha y derrota del fascismo en Europa, favorecieron el que las fuerzas populares salieran a relucir en la escena pública, preparándose para las elecciones de 1945. La clase dominante se vio en la obligación de ceder ante la presión, pero logró condicionar la participación popular a fin de que no lograran monopolizar el aparato estatal. El triunfo del Frente Democrático Nacional, patrocinado por el Apra, en el que convergían diferentes sectores y figuras "progresistas", fue abrumador, a pesar de que sólo votó alrededor del 15% de la población en edad de hacerlo, debido a las restricciones a los analfabetos. Una euforia desconocida reinaba

en el país, que trasuntaba la vocación de trasformación que animaba a las clases medias y populares.

Los cambios se hicieron patentes en todos los ámbitos de la existencia. Se multiplicaron de inmediato las organizaciones sindicales, se constituyeron federaciones estudiantiles; se abrieron nuevos medios de comunicación que trataban tópicos hasta entonces vedados por la prensa oligárquica; se observó el rápido encumbramiento de escritores y profesionales que de distintas maneras representaban los nuevos intereses que proclamaban los sectores populares, mientras se expulsaba de los centros universitarios a los más connotados profesores oligarcas. En fin, era notorio el ascenso político de las masas y el replegamiento de las fuerzas oligárquicas.

Ahora bien, el orden oligárquico-imperialista tenía como fundamento básico la exclusión de las amplias mayorías populares del producto social y la monopolización de los recursos por una muy reducida capa de propietarios en asociación con el capital imperialista. El ingreso masivo de la población popular a la escena política amenazaba claramente dicho orden. Así entre 1945 y 1948, el desarrollo político se caracterizó por las presiones para "abrir" el sistema, hacerlo más distributivo y establecer un mecanismo de conciliación clasista que estableciera las bases de un consenso democrático. La reacción de los afectados para impedir este desenvolvimiento no se hizo esperar logrando que el experimento democrático terminara lamentablemente en 1948, con el golpe que propiciaron entonces, encabezado por el general Manuel Odría.

La estrategia básica del Partido Aprista se caracterizó por asegurar el experimento democrático e impedir que la coalición dominante se viera tentada a reinstaurar una nueva fase represiva. Es decir, la primera prioridad del Partido era la de asentar el libre juego político liberal, a través del ejercicio parlamentario. Pero, simultáneamente, este objetivo de amainar los conflictos interclasistas y los odios que se habían acumulado en los últimos quince años, debía conjugarse con medidas redistributivas que satisfacieran las exigencias inmediatas que de manera más aguda reclamaban las masas populares. Exigencias que de ser satisfechas significaban, a su vez, socavar las bases del régimen de dominación. La necesidad de mantener un prudente equilibrio entre ambos objetivos, hizo que el Apra desarrollara una política ambivalente, que rápidamente redundó en contra suya.

Siguiendo este diseño político, Haya de la Torre en un famoso discurso tendió los brazos a los asistentes del Club Nacional, reducto de la oligarquía, invitándolos a aunar esfuerzos y olvidar los odios que dividían a los peruanos; es de entonces su famosa frase "el Apra no viene a quitar la riqueza a quien la tiene, sino a crearla para quien no la tiene". En este mismo sentido, el Apra no forzó la aprobación de ninguna medida radical en el Parlamento, a fin de no romper el acuerdo que buscaba concluir. En vez de reforma agraria, propuso una ley que reconociera los "derechos adquiridos" de los yanaconas; en vez de una ley electoral universal, favoreció la constitución de concejos municipales gobernados por representantes de los intereses funcionales.

Pero la presión popular de las masas apristas pasaba por encima del acomodo parlamentario que la dirección partidaria buscaba establecer. Dicha presión se manifestó a través de la sindicalización y del desarrollo de una ola de huelgas, a fin de incrementar los salarios y los sueldos. Conjuntamente con esta presión, salarial,

los trabajadores exigieron control de precios de los alimentos y en general de aquellos bienes que les permitieran mejorar su condición de existencia. Estas exigencias determinaron un súbito incremento de las importaciones y el gobierno destacó un aumento de los gastos asistenciales —educación, salud, vivienda— a fin de satisfacer los nuevos requerimientos de empleo y de consumo urbanos.

Esta tendencia se asoció con el drástico descenso de las exportaciones, con motivo de la recesión internacional causada por el fin de la contienda europea y el inicio de la reorganización de la producción y el comercio internacional. El gobierno de Prado, que había mantenido estancados los impuestos de las materias primas de exportación, "como medio de apoyar a los Aliados", determinó que el país se encontrara desprovisto de reservas. De allí que el incremento de las importaciones significó un rápido agotamiento de las divisas. Este hecho, asociado con el alza de los costos de producción y la retracción de las exportaciones, se unieron para promover una crisis fiscal y una espiral inflacionaria.

Frente al problema combinado de inflación y de crisis en las balanzas comercial y de pagos, el gobierno adoptó un par de medidas que convocaron a la lucha frontal entre las fuerzas apristas y la coalición que controlaba los recursos económicos. Estas medidas fueron la de establecer un control de cambios y la obligación de los exportadores de entregar al gobierno las divisas que obtuvieran por la venta en el exterior de azúcar, algodón, petróleo y minerales. Es claro que estas legislaciones atentaban económica y políticamente contra las bases mismas del régimen de dominación; recortaban los márgenes de beneficio y en segundo lugar promovían un intervencionismo estatal en sus dominios.

Esas decisiones estatales determinaron el realineamiento de las fuerzas oligárquico-imperialistas a fin de destruir al gobierno y a sus bases populares de sustento. Así, no sólo se trataba de reinstaurar un gobierno a la medida de los intereses económicos de la clase dominante, sino también de expulsar de las calles a la "chusma" aprista. En una palabra, la clase dominante pretendía volver al estado de cosas de los años treinta.

Después de varias décadas, las fuerzas oligárquicas fueron capaces de organizarse políticamente en la Alianza Nacional, que comenzó a difundir una ideología acorde a sus intereses. Esta ideología era la que había sentado los marcos del orden oligárquico: el gobierno debía procurar un clima de confianza para el inversionista, que así estaría en posibilidades de crear empleos y multiplicar la riqueza colectiva. Este clima de confianza significaba, para la coalición dominante, establecer el orden y quebrar las presiones populares "exageradas y demagógicas" que alentaban los políticos para hacer valer sus intereses privativos. Establecer la más absoluta e irrestricta libertad a la actividad de los capitalistas, restringiéndose el estado a hacer cumplir dichas reglas, así como a promover las inversiones privadas a través de la construcción de escuelas, hospitales y caminos, de acuerdo a sus "reales" posibilidades.

Pero la Alianza Nacional no se restringió a difundir su ideario político, sino que también organizó sus representantes políticos en el Parlamento a fin de integrar su acción en ese escenario. Esta acción se manifestó por el ausentismo en las reuniones parlamentarias, resultando así que las Cámaras Legislativas no pudieran sesionar por falta del quorum reglamentario. Y, debido a la naturaleza constitu-

cional del régimen, el presidente de la República se vio inmovilizado para actuar legalmente. De esta manera la clase dominante y su representación política perseguían doblegar las presiones políticas que atacaban sus intereses.

El deterioro político del país corría velozmente, en lo que ninguno de los contendientes demostraba su "lealtad" al juego político pluralista recientemente instaurado. No sólo porque el país no había tenido oportunidades para habituarse a dicha práctica, sino esencialmente por el hecho de que se planteaba una situación insoluble, de suma cero. De un lado el regímen de dominación oligárquico-imperialista se mantenía incólume y de otro lado las masas populares, especialmente urbanas, perseguían la redistribución de los recursos monopolizados por los propietarios. El experimento democrático buscaba conciliar ambas situaciones simultáneamente, lo que era un contrasentido. El resultado fue la intensificación de la lucha de clases que amenazaba con el desquiciamiento institucional oligárquico.

En 1947 fue muerto Antonio Graña, prominente miembro de una familia oligarca y director del diario *La Prensa,* que encabezaba la lucha antiaprista de la Alianza Nacional. El asesinato, achacado a un dirigente aprista, motivó que el juego político se envenenara definitivamente y que los aprestos golpistas, por ambas partes, se apuraran.

En el seno del Apra, las presiones de los sectores más radicalizados se dirigieron a hacer que la jefatura autorizara la organización de un movimiento revolucionario antioligárquico y en el que participarían las masas populares, la tropa y oficiales jóvenes. Pero simultáneamente a este plan, Haya de la Torre concertaba alianzas con jefes militares para que ellos se adelantaran dando un golpe de estado que, supuestamente, abriría una vía democrático-parlamentaria que institucionalizaría los cambios antioligárquicos. Así, en 1948 como durante toda la década de los treinta, las masas apristas se mostraban mucho más radicales que su jefatura, la cual, sin embargo, debido a la organización vertical del Partido, Haya de la Torre podía controlar.

No obstante las dificultades que ponía la dirección partidaria a la movilización antioligárquica, el comité revolucionario del Apra dirigió un levantamiento de la marinería que al no contar con la necesaria coordinación con las otras bases militares dispuestas a asociarse con él, ni tampoco con los millares de militantes apristas, fue rápidamente sofocado. Así, el 3 de octubre de 1948 abortó la revolución aprista por la actividad contradictoria de la dirección de ese Partido. (Veinte años más tarde, en el mismo día, las fuerzas armadas iniciaron un gobierno que barrió con las bases oligárquicas de poder y de la dominación imperialista de enclaves que subsistía en el país.)

A raíz de este fallido levantamiento, el gobierno ilegalizó al Apra, inició la persecución de sus militantes y dirigentes, así como de las organizaciones asociadas al Partido. Ahora sí la Alianza Nacional se encontraba sola en escena. Faltaba eliminar al tambaleante gobierno de Bustamante y Rivero, que había sido formado con el concurso del Apra; antes de un mes el general Odría, con los auspicios de la Alianza, dio el esperado golpe.

El nuevo gobierno presidido por Odría (1948-1956) puso en práctica todas y cada una de las exigencias oligárquicas. Derogó todas las disposiciones que de alguna manera restringían las actividades de la oligarquía y del imperialismo;

para crear el necesario "clima de confianza" persiguió descarnadamente a los movimientos antioligárquicos, en especial al Apra y al PC, así como a las organizaciones populares que se habían creado en el corto lapso democrático.

IV. LA NUEVA PENETRACIÓN IMPERIALISTA Y LAS TRASFORMACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

A partir de la instalación del gobierno de Odría se inició un nuevo proceso de desarrollo del capitalismo en Perú, motorizado por las inversiones extranjeras que no sólo ampliaron sus inversiones en los tradicionales enclaves agrarios y mineros, sino también en la manufactura y en la banca. Esta situación provocó, al igual que durante las tres primeras décadas del siglo, una nueva restructuración de las clases de la sociedad y la formación de nuevas orientaciones sociales y políticas.

Desde 1950 y al amparo del "clima de confianza" creado por Odría y de la demanda externa, las exportaciones tuvieron un crecimiento sostenido hasta aproximadamente 1965. Mientras en 1950 el valor de las exportaciones era de 180 millones de dólares, catorce años más tarde ascendieron a 590 millones, a precios constantes de 1963. Es decir, que durante ese período las exportaciones tuvieron un crecimiento del 8% anual, mientras que América Latina en su conjunto y durante el mismo período vio crecer sus exportaciones a 4.3% anual. Además, los términos del intercambio fueron favorables a Perú en la medida que el alza del precio del cobre y de la harina de pescado significó un incremento del 8% anual del valor real de las exportaciones. De esta manera Perú tuvo en el período 1950-65 un crecimiento económico del 6% anual.

Este crecimiento económico significó un cambio en la composición relativa de los distintos sectores. Mientras la agricultura bajó su participación del 22% al 17% del producto bruto, la pesca industrial vino a cubrir esa diferencia. A ello se agregó la creciente importancia de la manufactura y la minería que ganaron en conjunto del 18% al 24% su participación en el producto nacional bruto. Además, estos dos últimos sectores experimentaron un incremento anual del 8%. En cambio, la agricultura de exportación —los enclaves— no creció sino al 2.7 anual y la producción de alimentos para el consumo interno fue de 0.8% anual, muy por debajo de la tasa de crecimiento de la población.

Es decir que en la escena económica era notorio el desplazamiento relativo de los enclaves imperialistas y de los terratenientes coaligados a ellos, y en cambio la emergencia de los sectores urbanos e industriales.

Gracias a las facilidades concedidas a la inversión extranjera por el gobierno de Odría, y que no fueron restringidas hasta 1968 con la instalación del gobierno militar, la participación del capital imperialista aumentó de manera considerable, afectando de manera fundamental los cambios económicos y sociales apuntados. Entre 1950 y 1965 el incremento de la inversión directa norteamericana en la minería fue de 379% (mientras que en Chile fue de 45%). El mismo capital aumentó su participación en los sectores no mineros (pesca, industria y banca) en 180%, mientras que en el conjunto latinoamericano alcanzó el 111%. De

allí que en 1965 la participación del capital norteamericano en las exportaciones alcanzó el 47% del total, proporción semejante a la que tenía en 1929. En 1959 el gobierno de la época concedió una ley de promoción industrial, además de particulares incentivos a la industria de automóviles y química, permitiendo que la propiedad norteamericana en el sector industrial saltara de 35 millones de dólares en 1960 a 92 millones seis años más tarde. En ese período el crecimiento industrial fue de 9% anual, del que el 80% correspondió al capital norteamericano.

En asociación con el sustantivo incremento del capital extranjero en la minería y en la industria, se experimentó igual situación en el sector financiero. En 1960 el 36% de los activos bancarios se encontraba en manos del capital extranjero. Seis años más tarde esa participación había alcanzado el 62%. Este verdadero asalto del capital imperialista en el sector financiero estuvo ligado al incremento de su participación en la economía en su totalidad. Las nuevas empresas extranjeras que se instalaron en el país obtenían su capital del "ahorro" interno. Así, en 1966 el empréstito interno de las empresas extranjeras, en relación al año anterior, subió en 36% y redujo sus préstamos del exterior en 6%. De esta manera el capital extranjero no sólo expoliaba al país, sino que estrangulaba al capital nativo, imposibilitándole obtener los medios para lograr su expansión.[4]

Es decir, que a lo largo de cerca de dos décadas, entre 1950 y 1968, se repitió un proceso similar al de 1900-1930. Pero ahora la concentración de la propiedad del imperialismo no sólo era mayor, sino más diferenciada, abarcando a la industria, que iniciaba un proceso de sustitución de importaciones y de procesamiento primario de las materias primas.

Pero a diferencia de lo que había acontecido en los países de la región que habían establecido un proceso sustitutivo de importaciones en 1930, en Perú ese cambio se caracterizaba por la creciente participación del capital extranjero, tanto en términos relativos como absolutos.

Esta nueva fase del desarrollo capitalista-dependiente de Perú produjo significativas modificaciones en la estructura de la sociedad. El creciente desarrollo capitalista del país y su penetración en las áreas precapitalistas procuró la erosión de los mecanismos de dominación campesina que favoreció una oleada migracional en dirección a los asentamientos urbanos más dinámicos. Cayó relativamente la población ocupada en la agricultura y creció el contingente de subempleo en las ciudades; los sectores artesanales fueron desplazados por la producción industrial.

Las consecuencias políticas que promovieron estos rápidos cambios no tardaron en ponerse de manifiesto. En primer lugar, se hicieron evidentes las contradicciones entre el desarrollo del modo de producción capitalista y las formas precapitalistas que hasta el momento se encontraban asociadas a aquél. Si hasta 1950, aproximadamente, las condiciones del desarrollo capitalista de enclave se encontraban estrechamente relacionadas con las modalidades precapitalistas de producción centradas en la región serrana del país, a partir de esa fecha entraron abiertamente en contradicción debido al desarrollo manufacturero y urbano. Ahora, el mantenimiento de una importante proporción de la población sometida a condiciones de servidumbre resultaba un anacronismo histórico que debería ser resuelto a

[4] Shane Hunt, *The growth performance of Peru* (ms). Princeton University; Rosemary Thorp, *The expansion of foreign ownership in Peru in 1960's,* (ms.) Cambridge University.

fin de expandir el mercado interno. Es así como a partir de mediados de la década de los cincuenta comenzó a surgir un poderoso movimiento campesino dispuesto a erradicar las formas arcaicas de explotación social.

Paralelamente a él, insurgía un nuevo movimiento obrero, compuesto en forma preponderante de una población joven, recién migrada a la ciudad, que no había tenido experiencia política previa. Una nueva capa de profesionales y técnicos venía creciendo, en concordancia con la diversificación y complejización del aparato productivo, así como de la expansión del sistema educacional universitario, al que acudían los hijos de la pequeña y mediana burguesía rural en busca de nuevos canales de ascenso. Así, entraban a la escena pública nuevos actores sociales, exigiendo participar en la vida política y presionando contra el orden restrictivo que Odría había reimplantado.

Como se dijo anteriormente, el gobierno de Odría vino a servir los intereses directos de la coalición oligárquico-imperialista. Sin embargo, en el trascurso de su mandato, se propuso incorporar a nuevos sectores de propietarios en el seno de la clase dominante y de asistir a los nuevos grupos populares a fin de ampliar su base de sustentación y legitimar su posición, al mismo tiempo que socavar la influencia aprista en el seno de la población media y popular. Gracias al aumento de los ingresos estatales derivado del crecimiento de las exportaciones, Odría incrementó el gasto público destinándolo a la construcción de obras públicas. De esta manera, los propietarios desplazados por el avance capitalista podrían reincorporarse plenamente en el seno de la clase mediante la obtención de prebendas públicas, y la nueva población popular podía obtener empleo. Además la dictadura odriísta amplió relativamente la cobertura asistencial, otorgó participación a los obreros en los beneficios de las empresas y concedió el voto femenino. Por último, y siempre con la mira puesta en la tarea de socavar al Apra, el nuevo sector de la clase dominante constituido por Odría formó el Partido Restaurador, en el que se buscó incorporar, en especial, a la creciente masa de inmigrantes rurales, y con la que estableció una típica política de clientela, similar a la que existía entre patrón y siervo en los lugares de origen de esa población. Estas tareas fueron efectivas, como se vería años más tarde.

La creación de una nueva capa burguesa, asociada a la política del dictador y la política asistencialista dirigida hacia las masas "marginales", tendían a la constitución de una coalición populista, motivo por el que Odría fue comparado con Perón. Un periodista comunista hablaba del grupo odriísta como el representante de la "burguesía nacional"... Pero las restricciones para cristalizar una política populista eran demasiado grandes: el creciente dominio oligárquico-imperialista hacía imposible una reorientación del estado y la instalación de una política que buscara conciliar a las clases fundamentales de la sociedad. Sin embargo, el asistencialismo de masas de Odría le procuró un espacio político autónomo de sus originales patrocinadores.

Este hecho hizo que los oligarcas comenzaran a encontrar el comportamiento político de Odría muy "arbitrario" y demasiado autónomo. En estas condiciones el mismo grupo que favoreció el golpe de 1948 propuso, a través de *La Prensa,* el retorno al "estado de derecho". Así, se volvía a repetir la relación entre oligarcas y caudillos: debido a su incapacidad de hegemonizar la vida política, las oligar-

quías debían avalar a militares que posteriormente buscaban autonomizarse de sus patrones, promoviendo una tensión interna del grupo dominante.

La movilización que realizó el diario *La Prensa* entre las capas medias urbanas, con la aprobación tácita del clandestino Partido Aprista, obligó a Odría a convocar a una verdadera convención de "notables" en el convento de Santo Domingo, a fin de procurar la integración política de la clase dominante, que se manifestaría a través de una candidatura única. Pero era claro que para instaurar un estado de derecho, era necesario convocar a elecciones y en ese sentido era fundamental contar con los votos mayoritarios que controlaba el Partido Aprista. De allí que el resultado de la mencionada convención fuera por demás insólito: en primer lugar, la clase dominante mostró sus divisiones internas, entre una fracción que respondía a la antigua coalición de terratenientes y enclaves, y otra que representaba los intereses urbanos e industriales. Ambas fracciones buscaron ganar el apoyo del Apra. Mientras Lavalle, designado por Odría como heredero político, ofrecía a la dirigencia aprista la legalización del Partido después de recibir la investidura presidencial, Prado ofreció al Apra cogobernar con él y constituir una alianza política que pasó a llamarse la "Convivencia". Manuel Seoane, segundo hombre del Apra, escribió para entonces que la fracción que representaba Prado era la más apta para comprender los alcances apristas por constituir una burguesía nacional.

V. LA CRISIS OLIGÁRQUICA

El triunfo de Manuel Prado, con el apoyo de los votos apristas, fue considerado por el grueso de los observadores políticos como una nueva etapa de la vida del país que debía dar paso a la consolidación de un régimen institucional, democrático y pluralista, en la medida que los dos bloques políticos más importantes de la sociedad —el Apra y una importante fracción de la clase dominante— pasaban a aceptar las reglas del juego político democrático. Las reglas implícitas del nuevo juego eran que el Apra debía abandonar sus postulados y métodos radicales, constituyéndose en una "oposición leal", mientras que la fracción dominante coaligada con este Partido se comprometía a apoyar medidas redistributivas, segmentarias, a fin de ampliar los beneficios sociales a mayores sectores populares de la sociedad.

¿Cómo explicar este súbito cambio entre estos seculares enemigos? En última instancia, ambos sectores llegaron al convencimiento de que, dados los procesos de cambio que se desarrollaban en el Perú, era imposible alcanzar sus propósitos sin contar con la colaboración del opositor tradicional; en una palabra, que para existir debían encontrar la manera de coexistir de manera institucional. De lo contrario, el fantasma del comunismo podía llegar a cubrirlos a todos y hacerlos salir de escena. Para la fracción dominante que apoyaba este nuevo experimento, la creación del clima de confianza para los inversionistas, en una situación de rápida urbanización e industrialización, sólo era posible por la cooptación política de la dirigencia aprista. Así, a través de la participación "responsable" del Apra en la actividad gubernamental, éste se encontraría obligado a controlar las exigencias populares y atajar al comunismo. La amenaza tácita de recurrir al ejército y a la

persecución, en caso de que el Partido no se ajustara a las nuevas reglas, cumplía un papel de chantaje permanente. El Apra, por su lado, y en especial su jefe llegó igualmente a convencerse de la necesidad de consolidar un régimen democrático, a través del cual pudiera llegar a dirigir el estado. Ya no era posible seguir postulando que "sólo el Apra salvara al Perú" puesto que esta posición no llevaba sino a la clandestinidad y a la ineficacia política. Por otro lado, la clase dominante se hacía más moderna y las empresas norteamericanas al participar en la industria eliminaban el carácter feudal de la sociedad. Lo que cabía hacer era legislar a fin de hacer más distributivo al capitalismo, "popularizar el capitalismo". Para llevar a cabo estas reformas era necesario un entendimiento con los capitalistas —a la manera de los partidos socialdemócratas europeos— puesto que de lo contrario se alentaba el desarrollo de tendencias radicales, presentes en el mismo Partido, y del comunismo en particular.

A través de una convivencia democrática se lograría consolidar las instituciones representativas y los valores democráticos que llevarían al Apra y a su jefe a dirigir el gobierno.

Pero en el momento mismo en que se estableció el pacto entre el Apra y la clase dominante, emergieron nuevos sectores de la sociedad, gracias a las trasformaciones que venían ocurriendo en la estructura social y que rechazaban la estrategia aprista. Así se crearon varios partidos: el Demócrata-Cristiano, el Movimiento Social Progresista, resurgió el Partido Comunista y apareció un nuevo partido de masas, Acción Popular. Este último estuvo en capacidad de aglutinar en pocos meses a un sector importante de la sociedad, que en otras condiciones hubiera recogido el Apra, alrededor de la candidatura de Fernando Belaúnde, logrando obtener cerca de la tercera parte de la población electoral en las elecciones de 1956.

Además de estas nuevas organizaciones que pugnaban por canalizar la orientación antioligárquica de las clases populares y medias, entró masivamente en escena el campesinado y la población popular hacinada en las barriadas y en los tugurios de la ciudad. Con ellos la población universitaria reinició su participación política. Los trabajadores urbanos, ante la apertura democrática, reconstruyeron sus organizaciones y presionaron a fin de mejorar su participación económica. Así, se reestableció nuevamente una situación análoga a la de 1945, cuando el régimen de dominación oligárquico confrontó las presiones redistributivas de los sectores populares y medios, organizados sindical y políticamente. La tierra, la vivienda, el empleo, los salarios, la educación, la salud, pasaron a convertirse en los focos problemáticos de la nueva situación, desatándose una intensa movilización política. Nuevos partidos, nuevos sindicatos de trabajadores urbanos y rurales, organizaciones estudiantiles, con sus periódicos y revistas, rápidamente ocuparon una posición estratégica en el escenario político.

Pero a diferencia de lo que había ocurrido en 1945, cuando el Apra alentaba las movilizaciones populares, en esta oportunidad el Partido, como mediador entre las masas y el gobierno oligárquico, jugó un papel de control de importancia fundamental. Precisamente por ello, era capaz al mismo tiempo de conseguir para sus seguidores ventajas segmentarias, favoreciendo una política de clientelización entre la población popular.

La alianza entre el Apra y una fracción de la clase dominante volvió a escin-

dirla políticamente. En efecto, debido a las características del desarrollo capitalista, combinado con formas precapitalistas, así como por la creciente participación extranjera en la economía desde principios de siglo, la clase dominante desde los años veinte no logró integrarse políticamente a través de un partido, con la excepción de la Alianza Nacional. Esta no integración de la clase dominante se puso de manifiesto en toda su crudeza a través de las diferentes posiciones que adoptaron los diarios más importantes del país, *El Comercio* y *La Prensa*. Mientras este último, en el que se encontraban los organizadores de la Alianza Nacional, proclamaba la necesidad de implantar una economía de mercado, que debía llevar a Perú a experimentar un "milagro a la alemana", *El Comercio* planteaba la urgencia de llevar a cabo una política reformista, estatizante y nacionalista, al mismo tiempo que profundamente antiaprista.

De esta manera *El Comercio* se asociaba ideológicamente con los nuevos partidos políticos creados por las capas medias reformistas. Este diario, al igual que dichas organizaciones, planteaba la necesidad de llevar a cabo modificaciones estructurales que erradicaran las dos contradicciones básicas que presentaba la sociedad peruana: la persistencia del precapitalismo frente al desarrollo industrial del país y la creciente sumisión del capital nacional y del estado al gobierno y empresas norteamericanas. De acuerdo al diagnóstico de ese diario y los nuevos partidos políticos, se hacía urgente una "reforma de las estructuras" que debía procurar la nacionalización de la sociedad y el estado.

La urgencia de realizar esas reformas se debía, según *El Comercio,* a razones de seguridad nacional, que como se verá más adelante coincidían palmo a palmo con las nuevas tendencias que se desarrollaban en el seno de las fuerzas armadas. Externamente el país se enfrentaba al peligro del "comunismo internacional", pero también a la inveterada política expansionista chilena. Internamente, el descontento popular favorecía la difusión y arraigo de ideologías "extremistas".

Es decir, que sin una política redistributiva que difuminara las diferencias entre capital y trabajo, sin un estado que planificara la orientación de la economía, devolviendo a los "peruanos" el control que mantenía el capital extranjero, peligraba seriamente la existencia nacional.

Pero, simultáneamente, el carácter relativamente nacionalista y reformista de *El Comercio,* se combinaba con orientaciones políticas autoritarias. Éstas se definían concretamente por su profundo antiaprismo. El antiaprismo básicamente se definía, al igual que en el seno de las fuerzas armadas, porque dicho Partido era una organización de masas muy estructurada que desafiaba, con su sola presencia, la institucionalidad y amenazaba con que dichos cambios estructurales se hicieran a partir de la movilización política popular que arrasara a su paso las instituciones y llevara el país al caos. *El Comercio* se proclamaba en favor del cambio de estructuras pero "desde arriba". De allí que atacara ruidosamente a la "Convivencia", por su rechazo a realizar dichos cambios estructurales y por la presencia aprista en dicha coalición. Y, en cambio, dirigiera su campaña al ejército a fin de que desde el estado realizara los mencionados cambios estructurales.

Frente a esta posición de *El Comercio, La Prensa* se presentaba como el vocero técnico-político del sector de los exportadores, capaces de remediar los problemas del país. En 1956, a raíz del establecimiento de la "Convivencia" entre la fracción

urbana de la clase dominante y del Apra, el sector oligárquico de la burguesía, que por otra parte seguía siendo el de mayor importancia económica, se encontraba relativamente desplazado del gobierno. En 1957-58 y debido a la recesión económica, el país vio caer sus exportaciones lo que produjo una crisis fiscal. La campaña de *La Prensa* contra la política económica y el hecho de que en ese diario se agolparan los intereses del sector dinámico de la economía, dominado por la coalición oligárquico-imperialista, obligó al gobierno de Prado a convocar al director de *La Prensa,* Pedro Beltrán, para dirigir el gabinete ministerial.

Así, el grupo que con intervalos regía la política en el país desde la segunda década del siglo, volvió a cuidar directamente sus intereses, aplicando una rígida política liberal. La "Convivencia" se amplió y, la clase dominante en su conjunto, entabló una nueva relación con el Apra incorporándolo en la protección de sus intereses básicos. La política liberal de Beltrán coincidió con un repunte de la demanda externa de los productos primarios y de un reingreso de capitales que resolvió la crisis fiscal, otorgando a la "Convivencia" fuentes de legitimidad.

Sin embargo, una medida favorable a la International Petroleum Company (IPC) que explotaba ilegalmente los pozos petrolíferos, vino a azuzar la lucha de clases reinante en el país, a pesar de los esfuerzos apristas por controlarla. Un alza de precios de la gasolina sirvió para que en las cámaras los representantes de los nuevos partidos reformistas iniciaran un caluroso debate no sólo sobre esa medida, sino sobre el estatuto que regía a esa empresa. A las movilizaciones campesinas, y los esfuerzos de la clase obrera para autonomizarse de las directivas apristas de la Confederación de Trabajadores de Perú, se sumó un movimiento nacionalista para recuperar la soberanía sobre la explotación petrolera. El debate se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Mientras *La Prensa* tomó la defensa abierta de la empresa norteamericana y en general del capital imperialista, *El Comercio* impugnaba la legalidad de la empresa y en general de la participación indiscriminada del capital extranjero. De esta manera, los problemas relativos a la reforma agraria, que la "Convivencia" escabullía, de la vivienda, el empleo y salarios, se articularon con el de la explotación imperialista del país, difundiéndose una tendencia nacionalista que agrupaba a los nuevos partidos y que contaba con el abierto apoyo de un sector importante de la oficialidad y de la Iglesia. Así, esta orientación nacionalista y reformista venía a representar ideológicamente un proyecto de una "burguesía nacional" que en la realidad no existía. Como en otras oportunidades históricas, la pequeña burguesía radicalizada, en asociación con un fragmento de la clase dominante acechada por el imperialismo, representaba política e ideológicamente lo que podía haber sido, o bien lo que aspiraba a trasformarse

A finales de los años cincuenta el escenario político se encontraba sustantivamente modificado en relación al que existía a mediados de los cuarenta, debido a las trasformaciones sociales y políticas que el país había sufrido desde entonces. Es decir, Perú confrontaba un generalizado movimiento de naturaleza nacionalista pequeñoburgués, que procuraba la democratización de la sociedad y de la política. Estas nuevas orientaciones penetraban todos los niveles de la sociedad y de sus instituciones, generalizándose la lucha de clases a todos los ámbitos de la sociedad. La Iglesia y el ejército, los dos pilares del orden oligárquico, no fueron ajenos a esta situación.

VI. LA IGLESIA Y EL EJÉRCITO EN LA CRISIS OLIGÁRQUICA

Desde fines de los cincuenta en el seno de la Iglesia se desarrolló una corriente reformista que también proclamaba la necesidad de ejecutar "cambios estructurales", que debían mejorar las condiciones de vida de la población popular. A nivel internacional esta tendencia se vio apoyada por reuniones episcopales y luego por el Concilio Vaticano II.

Una de las principales consecuencias de esta nueva posición fue el desarrollo de nuevas formas organizacionales del sector reformista del clero. Se comenzó a observar la participación de eclesiásticos en las movilizaciones campesinas, en las organizaciones de los barrios marginales, e incluso en los sindicatos de trabajadores. Por otro lado, y a través de los cursillos de cristiandad, otro sector de la Iglesia orientó su acción especialmente entre los nuevos sectores emergentes de las clases medias: militares y profesionales "gerenciables".

Mientras en el primer caso los sacerdotes alentaban y participaban activamente en la movilización de las clases populares, los cursillos de cristiandad buscaban constituir una militancia cristiana entre los nuevos elementos tecnocráticos del país. Estos nuevos soldados de Jesús, fuertemente cohesionados en grupos cerrados, deberían prepararse para procurar cambios en la sociedad, a fin de socavar los recursos de los "anticristianos", desde las posiciones de autoridad que ocupaban, o que eventualmente deberían alcanzar. El interés de los cursillistas en implementar los cambios sociales se debía a que de esta manera se lograría limar las asperezas existentes en el seno de la sociedad peruana, procurando así un sentido comunitario a la existencia nacional. No sería por coincidencia que una década más tarde el gobierno de las fuerzas armadas y sus ideólogos insistieran sobre el carácter solidario, comunitario, de la sociedad que se procuraba crear.

En el ejército se dio, igualmente, una serie de modificaciones de carácter institucional e ideológico que favorecieron la autonomía de la corporación de los intereses de la coalición dominante y el fortalecimiento de una orientación reformista y nacionalista.

Al igual que en los restantes países de la región, después de la segunda guerra y con el inicio de la guerra fría, el ejército peruano estableció estrechos lazos con su similar norteamericano, a fin de contener "el avance del comunismo internacional". La relación técnica del ejército peruano con el norteamericano significó la renovación del instrumental, los dispositivos para su uso y del aparato logístico. Todo ello significó la intensificación de la formación profesional de los militares. La modernización de la institución acarreó un nuevo tipo de estudios estratégicos, fundamentalmente el referente al de "guerra total", y ello, claro está, suponía el análisis de la realidad concreta del país, desestimándose los planes que hasta entonces se tomaban a la letra de los textos franceses.

Fue en este contexto que nació el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). De inicio esta institución, que reunía a oficiales superiores y personal ejecutivo del sector público y privado, comenzó a analizar el "potencial" del país, en caso de plantearse una situación bélica. Estos estudios, dirigidos por técnicos de connotación reformista, dieron resultados que al ser comparados con el potencial de otros países crearon una situación de alarma. Los estudios dieron por resultado

que el Perú se encontraba en un estado de "subdesarrollo" en relación a los países vecinos. De allí nació la exigencia militar por el desarrollo y por la planificación del mismo.

El siguiente paso del CAEM fue el de detectar las causas de dicho subdesarrollo a fin de aplicar las medidas necesarias para poner remedio a esa situación. A principios de la década de los sesenta en un documento del CAEM se resumían dichas causas de la siguiente manera: "La triste y desesperante realidad es que en Perú el poder real no se encuentra en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Electoral, sino en los latifundistas, exportadores, banqueros y en las compañías norteamericanas." [5]

Así, la conclusión era que la "nacionalización" y reformulación del aparato productivo eran fundamentales para incrementar el potencial del país, asimismo que la economía debía ser planificada, aplicando las reglas de la logística, a fin de afirmar la soberanía estatal-nacional.

Simultáneamente a la acción del CAEM a fines de los cincuenta, se llevaron a cabo una serie de cambios organizacionales en el ejército a fin de procurar una mayor racionalización del aparato, acorde a su modernización instrumental y su adecuación profesional. Uno de los rasgos sobresalientes de dicha reorganización fue el fortalecimiento de la unidad de inteligencia militar que amplió sus funciones tradicionales al examen de la guerra de Argelia, de Vietnam, la Revolución cubana, la construcción del Estado de Israel y sus conflictos con los países vecinos, y, en el interior, dedicó especial atención al movimiento popular y la movilización campesina. El estudio de estas situaciones, así como la consideración "académica" de la insurgencia y la contrainsurgencia, desarrollada por Estados Unidos, llevó a la conclusión de que el problema de la defensa nacional debía encararse no sólo como un problema "externo" sino también como un problema "interno". Es decir, que la guerra total tenía dos frentes.

Mientras que el frente externo podía ser encarado, en primer lugar, por Estados Unidos en su confrontación con la Unión Soviética, el derivado de las relaciones con los países fronterizos debía ser facilitado por el desarrollo del potencial. En cambio el problema del frente interno era de exclusiva facultad del ejército: vale decir, era necesario detectar la posibilidad de que se crearan focos subversivos internos. En ese sentido el servicio de inteligencia detectó las causales de los movimientos populares por la persistencia anacrónica del precapitalismo, la pobreza, el desempleo, las barriadas y tugurios, la "incomunicación" campesina con el resto de la sociedad y la alienación social y política de los estudiantes e intelectuales al régimen estatal. En resumen, el servicio de inteligencia descubrió la falta de integración social y política de la población en un conjunto nacional. Así, no sólo el potencial se encontraba subdesarrollado para enfrentar una guerra total, sino que la población no contaba con las identidades nacionales propicias para constituirse en soldados peruanos. Como diría un oficial, Perú contaba con diez millones de habitantes, pero con muy pocos peruanos.

La conclusión era clara: se hacía necesario modificar la situación en la que vivía la mayoría de la población, lo que cortaría la posibilidad de que apoyara la

[5] Víctor Villanueva, *El Caem y la revolución de las fuerzas armadas*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1972.

creación de focos subversivos. Y, en esa misma medida, la población se identificaría nacionalmente, otorgando la legitimidad al estado.

Así, al nivel de la "superioridad" se creaba una conciencia nacionalista y reformista, muy conectada con los planteos que *El Comercio* desarrollaba, al igual que los nuevos partidos reformistas, contrario a la "Convivencia". Esta redefinición de los cuadros superiores del ejército de las funciones institucionales aparejó una creciente autonomía de las fuerzas militares de la coalición dominante-gobernante y la correspondiente tirantez entre la facción oligárquica y los sectores modernos del ejército.

Desde fines de los cincuenta, como se ha insistido, se desató un poderoso movimiento campesino que ocupaba las tierras de los latifundistas. A comienzos de los sesenta la acción encabezada por Hugo Blanco conmovió, por diferentes razones, a la clase dominante y al ejército. *La Prensa* desató una violenta campaña contra la "guerrilla" comunista, procurando así que el ejército se abocara a la tarea represiva contra el campesinado y en general contra todo el movimiento popular en proceso de autonomizarse del Apra.

Si bien el CAEM y el servicio de inteligencia tenían hasta principios de los sesenta relativamente poca influencia en el seno de la institución, en tanto ella aún seguía dominada por los elementos tradicionales, la nueva oficialidad, técnicamente preparada y doctrinariamente en proceso de resocialización, comenzó a cumplir cada vez más un papel crucial en los planes militares y políticos de la institución. El movimiento campesino fue rápida y eficazmente desorganizado, pero en el seno de la oficialidad fue el primer aviso de lo que podría generalizarse en el país en caso de no atacarse los problemas que daban origen a ese tipo de movimiento.

Así, la necesidad de ejecutar cambios estructurales resultó ser una plataforma conjunta de un sector del ejército y de la Iglesia, de *El Comercio* y de los nuevos partidos reformistas, creándose entre ellos una suerte de alianza. El conflicto de clases que azuzaba la división en el seno de la clase dominante, así como en las instituciones pilares del régimen de dominación y que aseguraban su hegemonía, se intensificaban a medida que se acercaban las elecciones de 1962.

Para estas elecciones se presentaron seis candidatos, de los cuales los tres de mayor envergadura eran Haya de la Torre, que lideraba el Apra y contaba con el apoyo de la coalición oligárquico-imperialista, el general Manuel Odría, que representaba la fracción más tradicional de los terratenientes y a la burguesía enriquecida con su gobierno y que contaba con el apoyo de un importante contingente popular urbano que había sido clientelizado por él durante su gobierno y, por último, Fernando Belaúnde, que representaba a las nuevas fuerzas reformistas que se habían desarrollado durante la década pasada, es decir, Acción Popular, un sector de la Iglesia y del ejército, interesados en las reformas progresivas que proclamaba este candidato.

La pugna electoral no sólo fue muy intensa, sino que todos los candidatos proclamaban su voluntad de realizar cambios sustantivos en la sociedad. Además, Belaúnde insistía en la necesidad de reajustar las condiciones de la incorporación del capital extranjero y en especial de la IPC. Ante la posibilidad de un triunfo de Haya de la Torre y su partido, *El Comercio* desató una campaña, destinada al ejército,

proclamando por anticipado la naturaleza fraudulenta de los comicios debido a las inmoralidades apristas. De esta manera *El Comercio* esperaba curarse en salud, impidiendo el triunfo de ese partido.

Aunque los resultados fueron muy ajustados, Haya logró obtener una estrecha mayoría de los votos. Ante este resultado, el ejército, a escasos días de que el presidente Prado entregara su mandato, lo depuso y exilió del país. Así, en 1962 se instaló en Perú el primer gobierno "institucional" de las fuerzas armadas en América Latina.

El golpe significó un claro rechazo al Apra, pero también a sus aliados de la clase dominante, que el ejército había mantenido precisamente contra los ataques de ese partido. Este divorcio informaba de la presencia de una crisis hegemónica de la burguesía oligárquica y del régimen de dominación que ella sustentaba.

El gobierno militar intentó poner en práctica las nuevas orientaciones que se habían hecho presentes en el ejército. Sin embargo, en el año que gobernó se hizo patente que ellas aún no habían madurado en la institución y que las fuerzas oligárquicas de un lado y el movimiento popular de otro mantenían su integración y fortaleza, como para impedir que esa experiencia de gobierno militar persistiera. Así éste se vio en la necesidad de convocar a nuevas elecciones para el siguiente año, después de haber realizado una reforma agraria en La Convención, centro de la movilización campesina, y de haber aprisionado a centenares de dirigentes populares y de izquierda.

Dados los resultados de 1962, los partidos reformistas se aliaron entre sí otorgándole la ventaja a Belaúnde, que resultaba ser el candidato ideal de las fuerzas armadas, de *El Comercio* y de la Iglesia: su plataforma era la de ejecutar reformas, pero llevadas a cabo técnica y gradualmente, administradas por el estado, sin que las masas populares tomaran la iniciativa.

VII. EL DESENLACE FINAL

El ajustado triunfo de Belaúnde fue recibido con una euforia insólita en el país: se repetía el fenómeno de 1945. Nuevamente las presiones populares buscaban romper con las restricciones oligárquicas. Las masas campesinas se adelantaron a la próxima reforma agraria capturando latifundios; los obreros organizados iniciaron una ola creciente de huelgas a fin de mejorar sus condiciones de vida; los estudiantes agrupados en "Cooperación Popular" salieron al campo, por millares, a fin de colaborar con los campesinos a "desarrollar la comunidad". El gobierno convocó a los técnicos y profesionales a la tarea de diseñar "la conquista de Perú por los peruanos".

Al cabo de seis meses de gobierno, Belaúnde convocó a elecciones municipales, suprimidas desde hacía 50 años, obteniendo la Alianza Acción Popular-Democracia Cristiana un avance considerable en las simpatías populares. Así, todo se presentaba favorable para realizar las añoradas esperanzas de los reformistas y que debería resultar en la incorporación de las clases populares y medias en la vida política del país.

Pero las presiones populares y los intentos reformistas se enfrentaron, muy rápidamente, a una estructura política de naturaleza oligárquica que llegó a ser un escollo insalvable. En efecto, muy pronto se vio la imposibilidad de realizar reformas antioligárquicas y nacionalistas, dentro de un marco estatal de clara factura oligárquica.

La junta militar de gobierno que había precedido al gobierno de Belaúnde había decretado una nueva ley electoral que, sin suprimir el requisito de alfabetismo con lo que la representación de los campesinos se encontraba eliminada, establecía un sistema electoral basado en la proporcionalidad de las candidaturas al legislativo. Por lo tanto, como diría un comentarista, "el futuro presidente... carecería de mayoría en el Parlamento y debería buscar apoyo en alguno de los grupos adversarios, puesto que representación proporcional significa casi indefectiblemente un gobierno plural".[6] Es claro que el ejército buscaba impedir así, la constitución de un presidente "fuerte".

Ahora bien, los resultados electorales concedieron al Apra la mayoría de sitiales en el Parlamento, siguiéndole en importancia la Alianza AP-DC y en último lugar la Unión Nacional Odriista (UNO). En estas condiciones el problema de gobernar para Belaúnde radicaba en su capacidad de coaligarse con alguno de los otros partidos, a fin de obtener el necesario apoyo parlamentario. Desde un primer momento, Manuel Seoane, segundo en el Apra, así como varios dirigentes de Acción Popular plantearon la necesidad de establecer un acuerdo entre dichas organizaciones que en conjunto representaban al 70% del electorado y que, además, participaban de un ideario semejante. A pesar de los requiebros "tácticos" del Apra, un importante contingente de líderes y sobre todo los afiliados de base del Partido, seguían sosteniendo los postulados originales.

Pero si bien las afinidades eran considerables, las dificultades internas y externas para establecer esa alianza eran mayores. Si Acción Popular aunaba sus fuerzas con los apristas, era de esperarse el rechazo del ejército y del diario *El Comercio*. Internamente, el sector radical del partido consideraba al Apra como un partido "vendido" y estaba fuera de toda discusión la posibilidad de que sus líderes tuvieran intervención directa en el gobierno. De parte del Apra existía la percepción de que Acción Popular era un competidor desleal, en tanto buscaba "robarle" sus banderas y una militancia que por "naturaleza" le correspondía. Asimismo consideraba que estaba infiltrado por comunistas que postulaban medidas radicales que hoy en día estimaba inadecuadas en su afán de reconciliarse con la clase dominante y el imperialismo. Por último, el jefe del Apra no podía reconocer a Belaúnde como líder de un movimiento de masas que él había forjado y dirigido durante 30 años.

Es así como se disolvió la posibilidad de integración política de los sectores reformistas y el establecimiento de una relación constructiva entre el ejecutivo y el legislativo. Con este fracaso se frustró igualmente un proyecto de colaboración de clases, por la acción mediadora del estado. A la división interna de la clase dominante sobrevino la de sus variados intérpretes políticos, prosiguiéndose la divi-

[6] Guillermo Hoyos Osores, *Crisis de la democracia en el Perú*, Cuadernos Americanos, México, enero-febrero, 1969.

sión que desde los años treinta experimentaba el país, aunque ahora los protagonistas ocuparan diferentes posiciones en la escena.

Ante la imposibilidad de conciliar e integrar los sectores que agrupaban a las fuerzas populares, el Apra se ligó con su enemigo de ayer: el odriísmo, controlando conjuntamente con él la mayoría parlamentaria. En 1956 cuando el Apra formó la "Convivencia", el sector radical del partido constituyó el Apra Rebelde —que luego se trasformó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria—; en 1963 la coalición Apra-UNO provocó una segunda emigración de cuadros jóvenes del Partido que pasaron a engrosar el MIR.

La conformación de la coalición Apra-UNO vino a significar en concreto un permanente bloqueo parlamentario a las proposiciones del ejecutivo. Frente a las crecientes presiones campesinas, el Apra, siguiendo los intereses de sus aliados, puso todos los obstáculos a fin de impedir la dación de una ley que hiciera efectiva la reforma agraria. La que aprobó el Parlamento se encontraba retaceada y condicionada a fin de no afectar los intereses de los exportadores. La capacidad del Parlamento de bloquear las iniciativas del ejecutivo se derivaba de los poderes concedidos en la Constitución de 1933. La preocupación de los legisladores de entonces era la de impedir una dictadura presidencialista como la que había imperado durante el gobierno de Leguía. En otras palabras, las oligarquías regionales, desplazadas por el centralismo capitalista que dirigía Leguía y los enclaves, procuraron mantener sus fueros a través de la preeminencia de su representación política en las cámaras. De allí que el Parlamento tenía la capacidad de interpelar y censurar a los ministros —acción que la coalición Apra-UNO usó y abusó durante el gobierno de Belaúnde: es así como durante sus cinco años de gobierno se vio precisado a designar a 178 ministros, de los que tuvo que cambiar a 94 y modificar íntegramente la composición de seis gabinetes. Pero a diferencia de lo que se practica en los regímenes parlamentarios, el presidente no tiene el poder constitucional para convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Además, el Parlamento tiene la potestad de aprobar la implantación de nuevos impuestos o los cambios en las tasas impositivas y por último no existe en la realidad la figura del veto presidencial.

Es decir, que en estas condiciones el presidente se encontraba atado a la voluntad de la coalición. Dadas estas relaciones, la coalición desarrolló una estrategia conducente a la rendición incondicional del ejecutivo. Éste ni podía negociar con la coalición —por las razones antes expuestas— ni tampoco podía enfrentarla directamente bajo los conductos institucionales. Un enfrentamiento no institucional suponía armar organizacionalmente a las masas y movilizarlas contra sus enemigos, provocando una situación inaceptable para el ejército, *El Comercio,* y el conjunto de la clase dominante. Además, en esas condiciones no era seguro que el mismo presidente estuviera en condiciones de controlar dicho movimiento. Por último, el carácter aristocrático-carismático de la personalidad de Belaúnde era contrario al uso de esos recursos "demagógicos".

Así se observó claramente la incapacidad del gobierno de incorporar las demandas populares en la consideración de los intereses estatales. La única solución que cabía era reprimirlas y, efectivamente, de buena o mala gana, el gobierno recurrió a la destrucción del movimiento campesino y obrero que se venía constru-

yendo fuera del aparato y control apristas. Situación que coincidió con la insurgencia de cuatro focos guerrilleros organizados por el MIR que buscaban repetir en 1965 la hazaña cubana.

El rápido fracaso belaundista y su acción represiva tuvo consecuencias de la mayor importancia para el desenvolvimiento político inmediato. De un lado significó que en el seno de Acción Popular y en general de los sectores reformistas fuera cundiendo la idea de que la vía democrática era un obstáculo para la consecución de los cambios estructurales; y que éstos únicamente podían realizarse a través de una acción revolucionaria de las masas o bien mediante la instalación de un gobierno "fuerte" que no tuviera las rémoras parlamentarias. En segundo lugar, el estallido guerrillero provocó una violenta sacudida en el seno del ejército. Las posiciones del servicio de inteligencia, relativas a la necesidad de instrumentar cambios estructurales a fin de asegurar la paz interna, pasaron a un primer plano. Pero al igual de lo que ocurría en el seno del reformismo, también en el ejército se adueñaba la creencia de que era imposible realizar esos cambios por la vía institucional.

La situación no podía ser más paradójica. El Partido Aprista, que había desarrollado la conciencia antioligárquica entre las masas, no había podido realizar sus objetivos debido a la oposición militar. Durante los años sesenta, cuando las fuerzas armadas adoptaron una posición favorable para la realización del proyecto aprista, el Partido había adoptado las posiciones que treinta años atrás había sostenido el ejército.

Así, el gobierno perdía rápidamente la legitimidad con la que se había iniciado. Era abandonado por las fuerzas sociales que lo apoyaron inicialmente: la población popular, el ejército e incluso sus propios cuadros políticos, debiendo buscar la manera de sostenerse a través de conexiones personales en el interior de la clase dominante y del ejército. La burguesía y el Apra habían logrado no sólo inmovilizar los propósitos reformistas del gobierno, sino también culparlo por su ineficacia e incompetencia, hacerle perder sus bases de apoyo y presentarse como los adalides de los intereses generales.

Mientras las exigencias inmediatas de los sectores populares que se canalizaban por la vía del ejecutivo eran saboteadas por el Parlamento, aquellas otras que pasaban por el conducto aprista rápidamente eran satisfechas. De esa manera, el Apra logró ganar con las pérdidas de Acción Popular y desarrolló un sistema de clientelismo que enajenaba cada vez más las bases originales que contaba Acción Popular.

En esta situación, los sectores oligárquicos, con el complaciente apoyo aprista, iniciaron una recia acometida contra Belaúnde a fin de que éste les entregara el gobierno efectivo, en vista de su inhabilidad y de los problemas económicos que aquejaban al país. Desde el primer año de gobierno, la política económica se había fundado en el financiamiento deficitario, en tanto que el Parlamento y el Ejecutivo, cada uno por separado, aprobaban nuevos y crecientes gastos públicos, pero sin que el primero permitiera crear nuevas fuentes de ingreso fiscal a través de la reforma tributaria. De esta manera, mientras el gasto público promediaba anualmente el 8% del producto durante el gobierno de Odría (1948-1956) y ascendió al 9% durante el gobierno de Prado (1956-62), Belaúnde y la coalición se ini-

ciaron gastando el 11.5% del producto, proporción que ascendió a 16% en 1968. Mientras en 1963 el gasto público del Perú era comparativamente de los más bajos de América Latina, en 1968 fue el más alto, con excepción de Venezuela. Pero, al mismo tiempo durante el período 1965-1967 el déficit presupuestal creció a un ritmo promedio anual-de 96%, en comparación con el de 1964.

Este crecimiento desmesurado del gasto público, en relación a sus disponibilidades, respondía a las crecientes exigencias populares. La coalición Apra-UNO apoyó sistemáticamente esta política a fin de asegurar y ampliar su base social, desatando una incorporación segmentaria de los sectores organizados, buscando satisfacer sus inmediatas aspiraciones y lograr su cooptación política. Mientras que, siguiendo el diseño político oligárquico, rehuía atender significativamente y de manera generalizada a la población rural y subempleada de las ciudades. De allí que la distribución del ingreso durante la década de los sesenta, no se modificara sino a favor del 10% superior de la pirámide.[7]

Por otro lado, el ejecutivo, en vista de la imposibilidad de realizar los cambios estructurales debido a la oposición aprista, se tuvo que satisfacer con la promoción de la construcción de la infraestructura social. Es claro que tal comportamiento hacía cada vez más patentes las contradicciones internas de la sociedad, entre lo "moderno" y lo "tradicional", favoreciendo la presencia política de nuevos sectores sociales que exigían su participación de los beneficios sociales. Las tensiones, en vez de reducirse, se incrementaban.

El alza de las exportaciones y el masivo ingreso de capitales extranjeros se paralizó a partir de 1965, reduciendo los ingresos fiscales. Sumado a ello, el déficit presupuestal determinó una sobrevaluación de la moneda incitando a una corriente de importaciones que afectaba la producción sustitutiva interna. Así, el país experimentó problemas de balanza comercial y de pagos que se resolvieron a través del endeudamiento externo con la banca privada internacional. Préstamos que eran a corto plazo y con altos intereses.

Uno de los motivos centrales de la campaña electoral en 1962 y 1963 fue, como se dijo, el estatuto de la IPC. Belaúnde prometió resolver esa situación durante los tres primeros meses de gobierno. Luego, contra todo lo esperado, el Parlamento le concedió poderes especiales para resolver esa situación. De esta manera en caso que Belaúnde llegara a un acuerdo con la Standard Oil of New Jersey, el Parlamento podría hacer suyo ese triunfo; de lo contrario, si Belaúnde fracasara, la coalición podría achacarle su incapacidad de hacer uso efectivo de los poderes que se le habían otorgado. Ante esta situación, el gobierno norteamericano decidió cortar la "ayuda" oficial a Perú —que sin embargo era considerada como una de las grandes esperanzas para la realización de los propósitos de la Alianza para el Progreso. De esta manera el gobierno peruano se vio imposibilitado de contar con los recursos que proporcionaba la AID, hasta tanto no llegara a un acuerdo que la empresa considerara ventajoso, mientras que el gobierno de Frei en Chile, recibía una considerable colaboración norteamericana —hecho que no pasó desapercibido en algunos sectores claves del ejército peruano.

[7] Richard Webb, "La distribución del ingreso en el Perú", en Webb y A. Figueroa *La distribución del ingreso*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1975.

De esta manera entre 1963 y 1967 la deuda externa del país se multiplicó de 120 millones de dólares a 700 millones. Mientras la deuda significó el 8% del valor total de las exportaciones en 1965, tres años más tarde alcanzaba al 18%.

En 1967 se hizo inevitable la devaluación del signo monetario en una proporción del 44%, a pesar de que el presidente había reiterado que no se llegaría a esa situación. El descrédito del gobierno se evidenció cuando dos meses más tarde se realizó en Lima, que contaba con la mitad de la población electoral del país, una elección para remplazar a un diputado fallecido. Los resultados favorecieron ampliamente a los opositores del gobierno. La coalición, con el apoyo de *La Prensa*, ganó la diputación con la consigna "no más impuestos", a pesar de que el gobierno no había podido ejecutar la reforma tributaria destinada a corregir la extremada regresión impositiva. El resultado electoral, que tenía un carácter plebiscitario, puso de manifiesto la precariedad del gobierno de Belaúnde, gracias a la acción de la coalición.

Pero también puso de manifiesto esa elección el proceso de constitución autónoma de las fuerzas que se reclamaban de la izquierda. Desde finales de los cincuenta, los trabajadores pugnaron por constituir una organización sindical autónoma del Apra y de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) que ese partido controla. En 1967, y a pesar de la represión gubernamental fomentada por el Apra, se constituyó la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP). Paralelamente a este esfuerzo organizativo, las varias fuerzas de izquierda se congregaron alrededor de un candidato único en las elecciones de 1967 obteniendo el 10% de los votos, que en otras oportunidades se habrían sumado a la alianza Acción Popular-Democracia Cristiana.

A partir de esos resultados electorales se comenzó a ver un movimiento de reagrupamiento de las fuerzas políticas. El sector radicalizado de Acción Popular, que controlaba el Partido, hizo saber su autonomía del ejecutivo. La Democracia Cristiana se dividió y el sector reformista se alejó de la alianza que había sostenido con el presidente. Belaúnde comenzó a favorecer una aproximación con Haya de la Torre y con Odría, a fin de encontrar una salida política al estancamiento que había llegado el gobierno. La exigencia de la oposición de incorporar al gabinete a representantes de dicho bloque fue rechazado por Belaúnde, con lo que la situación tendía a agravarse. Ante la gravedad de la situación económica, con la amenaza de una nueva devaluación, los sucesivos ministros de hacienda solicitaron de las cámaras la dación de medidas que significaran reajustes presupuestarios y un reforzamiento al financiamiento interno. Solicitudes que fueron rechazadas con las consiguientes crisis ministeriales.

En febrero de 1968 se conoció un escandaloso contrabando en el que se encontraban implicados altos funcionarios del gobierno y oficiales de las fuerzas armadas. Parecía que nadie saldría libre de la rápida desintegración política en marcha. El estado de desasosiego en el interior del ejército era muy grande en tanto se percibían todos los síntomas del escenario previo a la guerra del Pacífico: inmoralidad pública, desintegración institucional, creciente polarización de la sociedad, repunte político de las fuerzas políticas de izquierda. Sería entonces cuando un grupo muy pequeño de oficiales del ejército estratégicamente colocado en el servicio de inteligencia inició la elaboración de un plan de acción que debería

llevar a la constitución de un gobierno de las fuerzas armadas, que se encargaría de realizar los cambios estructurales que el gobierno de Belaúnde había sido incapaz de materializar.

Después de varias crisis ministeriales en junio se abrió un paréntesis, que en verdad resultó ser el último acto de este drama de desintegración del gobierno y del régimen de dominación oligárquico. El presidente, después de múltiples tentativas, constituyó un gabinete compuesto de "independientes" que previamente había contado con la aprobación de la coalición. La aproximación del presidente al Apra, sumado al temor que cundió en su dirección debido a las numerosas acusaciones lanzadas contra su conducta irresponsable, y que podía derivar en un nuevo golpe militar, determinaron un súbito cambio en el Partido aprista. Después de cinco años de "oposición desleal", el Apra otorgó al nuevo gabinete, conjuntamente con la representación de Acción Popular, "poderes extraordinarios", durante un período de sesenta días, contraviniendo las disposiciones constitucionales.

Este acuerdo entre el Apra y el ejecutivo provocó una severa restructuración de las alianzas políticas, tal como se había previsto en 1964 cuando se rechazó esta fórmula. La UNO se escindió y una de sus fracciones se adaptó al nuevo compromiso. La dirección de Acción Popular, junto con *El Comercio* y el ejército, se aunaron para rechazar ese pacto "infamante". Un sector del partido gobiernista, los llamados "carlistas", se disociaron de su dirección y pasaron a apoyar la constitución del nuevo pacto. En la medida que el nuevo gabinete comenzó a imponer las medidas que deberían rectificar el rumbo hasta entonces adoptado por el gobierno, *La Prensa* pasó a la oposición violenta, por motivos diferentes de los aducidos por *El Comercio*. Así, la fragmentación de la clase dominante y de sus expresiones políticas parecían haber llegado a su punto álgido. Pero conjuntamente con este fraccionamiento la integración del Apra, como representante del reformismo que dirigía un contingente importante de masas populares y de clases medias, conjuntamente con el carlismo, que representaba la versión más moderna de la burguesía, constituía una renovación dramática del juego político.

Los sectores populares asociados con las tendencias de izquierda percibieron con realismo este reacomodo; un último intento de restructurar una alianza de la burguesía moderna, industrial, con la pequeña burguesía, a fin de favorecer un desarrollo asociado con el imperialismo en su nueva versión, pero que debería permitir un margen de autonomía para el desarrollo "nacional".

Ante el apoyo que el nuevo gabinete había obtenido, el ministro de Economía, Manuel Ulloa, verdadero estratega de la nueva situación, estuvo en capacidad de iniciar una política de estabilización y de reformas. Logró establecer un programa para equilibrar el presupuesto, por medio de la restricción del gasto público y la creación del impuesto a la propiedad. Dispuso la conversión de las acciones al portador de manera que fueran nominativas, por lo que el gobierno podía controlar la evasión tributaria. Restringió la participación extranjera en la banca y fortaleció relativamente la participación del estado y de la burguesía nativa en las empresas de carácter estratégico para la economía nacional. Inició un proceso de estatización de la banca central, que hasta entonces era controlada por la banca privada. Todas estas medidas valieron para que *La Prensa* y los sectores oligárquicos atacaran furiosamente a Ulloa como "traidor" a su propia clase.

De otro lado, Ulloa logró refinanciar la deuda externa, asegurándose asimismo una inversión multimillonaria de capitales norteamericanos en la explotación minera que aseguraría la salud de la economía del país. Pero esta inversión se encontraba condicionada al arreglo con la IPC. En julio de 1968, sorpresivamente la compañía modificó su recalcitrante oposición a los términos propuestos cinco años atrás por el presidente. En el mensaje a la nación, Belaúnde comunicó haber resuelto el problema que Perú tenía con esa empresa y comprometió a los líderes parlamentarios y jefes militares al acto de entrega de los pozos, sin hacer públicas las condiciones de dicho arreglo. En medio de tantos fracasos, parecía iniciarse, aunque tardíamente, un proceso de realizaciones concretas y positivas del gobierno.

Sin embargo, pronto se levantaría una sucesión de escándalos políticos que ultimaron al gobierno. El compromiso firmado por el presidente consistía en que la IPC hacía entrega de los semiagotados pozos petroleros, que según Perú venía explotando ilegalmente por más de cincuenta años, y por los que adeudaba alrededor de 200 millones de dólares, según unos, y 600 millones, según otros. A cambio de esa entrega, el gobierno se comprometía a anular esas reclamaciones. Además, la refinería seguía en manos de la IPC, en el entendimiento de que la ampliaría y modernizaría las instalaciones. Asimismo, la compañía continuaba manejando monopólicamente la distribución de la gasolina por un período de 40 años, con la posibilidad de renovar esa concesión por otros 40 años, es decir, hasta 2048... Por si todo esto fuera poco, el gobierno le otorgaba una concesión de un millón de hectáreas para explorar y explotar el petróleo.

Cuando se hicieron del público conocimiento los términos del compromiso, el rechazo fue unánime. Pero además, pocos días después de firmada el "Acta de Talara", el gerente de la Empresa Petrolera Fiscal, hizo por la televisión una denuncia pública en el sentido de que "alguien" había sustraído la página once de dicho convenio, en la que se estipulaba el precio del petróleo que la IPC se comprometía a pagar a dicha empresa estatal. La noticia agotó completamente la precaria capacidad del gobierno. Acción Popular le retiró su confianza al presidente, el Apra negó toda participación en el arreglo, abandonando a su suerte al gobierno. *El Comercio* arremetió con furia y convocó en forma explícita al ejército a hacerse cargo de la situación.

En los últimos días de septiembre el gabinete se vio obligado a renunciar y el presidente, después de varios intentos, logró nombrar uno nuevo el 2 de octubre. Al día siguiente, el golpe militar en gestación desde febrero no tuvo ninguna dificultad en capturar a un presidente aislado de todo respaldo público. Así se dio fin, sin pena ni gloria, al último experimento de democratizar, por la vía institucional, al régimen oligárquico-imperialista.

El golpe militar, que parecía repetir la serie ininterrumpida de pronunciamientos en situaciones de crisis política, resultó una sorpresa. El gobierno revolucionario de las fuerzas armadas inició una serie de medidas antioligárquicas que cerraron de golpe un largo capítulo de la historia del país e inauguraron uno nuevo.

VIII. LA REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA: LA MILITARIZACIÓN DEL ESTADO

Tal como se dijo anteriormente, durante el gobierno de Belaúnde se acumularon de manera extremada las presiones de varios sectores de las clases medias y populares, especialmente de los campesinos, que por primera vez irrumpían masivamente en la escena pública. La extensión, diversificación y agudización de dichas exigencias constituyeron claras amenazas al mantenimiento de la concentración del capital y del poder político de la coalición oligárquico-imperialista.

Bajo estas nuevas condiciones, perdieron eficacia los mecanismos clientelísticos que las capas dominantes habían usado a fin de incorporar segmentaria y relativamente a los sectores urbanos estratégicamente colocados en el aparato productivo. La "masificación" de la lucha de clases y la misma naturaleza de las reivindicaciones populares —como la propiedad de la tierra— hicieron que los instrumentos políticos de dominación entraran en una franca obsolescencia, liberando a gruesos contingentes populares de los controles que hasta entonces los mantenían sujetos.

La multitudinaria movilización política de varias capas de la población planteaba de hecho la reformulación de las relaciones sociales, en términos de una redistribución masiva de los recursos sociales. Ello suponía la destrucción del latifundismo, en bancarrota, la multiplicación de oportunidades de empleo y de servicios públicos, la nacionalización de la economía; es decir, las presiones tendían al logro de un reajuste de toda la estructuración del país de modo de hacer del estado representante de los intereses "nacionales y populares".

Como se vio antes, los partidos reformistas que mediaban entre estas exigencias y los intereses dominantes se encontraron incapacitados para integrar su acción de manera positiva, acomodando las presiones con los intereses de los propietarios. Los partidos se hacían cargo de las divisiones existentes en los rangos dominantes, en donde seguían pesando políticamente los intereses tradicionales de los terratenientes y los elementos asociados con los enclaves. De allí la crisis hegemónica de la clase dominante y de su régimen de dominación.

Pero al mismo tiempo que dicha crisis se instalaba plenamente en la vida política peruana, ninguna de las clases subordinadas se encontraba en capacidad de constituirse en alternativa política de naturaleza nacional. La destrucción del movimiento campesino, el embrionario desarrollo de un sindicalismo clasista y la fragmentación organizativa de la izquierda, constituían elementos claves de dicha incapacidad política. El Apra, por su lado, había ganado un desprestigio inusitado gracias a su eficaz contribución en desbaratar la experiencia reformista.

Así, en medio de la crisis política la escena se encontraba vacía de protagonistas capaces de organizar y dirigir la actuación de cada uno y del conjunto de los sectores sociales. A excepción de las fuerzas armadas. En el seno de su dirigencia, la perspectiva general era la de una creciente amenaza al orden y a las jerarquías institucionales. Los militares especulaban sobre la posibilidad de que el conflicto político se escapara de los cauces legales y abordara al plano insurreccional, tal como había ocurrido años atrás y como se observaba en otros países, con el consiguiente peligro para la seguridad nacional. En la medida que esta amenaza era percibida como inminente, aumentaba la ansiedad entre un grupo dirigente de la institu-

ción castrense. Dadas las desastrosas experiencias de los últimos años, cada vez más era aceptada la idea de que las medidas para socavar la posibilidad insurgente sólo podían llevarse a cabo bajo un absoluto control del estado por las fuerzas armadas, lo que a través del desarrollo de un plan táctico, impediría la actualización de esa amenaza y pondría en marcha una acción militar destinada al desarrollo nacional.

Así, el golpe militar del 3 de octubre de 1968 se caracterizó por su naturaleza "preventiva". Pero dicha naturaleza no suponía "congelar" la situación, sino adelantarse a los hechos que se veían venir, poniendo en marcha las reformas que evitaran el desorden institucional. La acción militar, para tener éxito, debía realizarse eficaz y ordenadamente, puesto que de lo contrario el efecto desatado podría revertir contra sus iniciadores.

Es claro que bajo estas premisas y objetivos, el gobierno debía estar íntegramente en manos militares. No sólo su composición debía ser definida por la institución castrense, sino que la legitimidad de la actividad del gobierno debía fundarse en la que le confirieran las fuerzas armadas. De esa suerte, el título que adoptó el nuevo gobierno calzaba con los propósitos de la institución: Gobierno Revolucionario de las fuerzas armadas (GRFA). De allí que una de las características del nuevo gobierno haya sido su permanente rechazo a la participación autónoma de las distintas organizaciones populares y en general de la sociedad civil, en la acción de reformular la naturaleza del estado y la sociedad peruanas.

Así, el vacío político que dejó la crisis hegemónica de la coalición dominante y, correlativamente, la integración político-ideológica existente en el seno del ejército, dio cabida para que el GRFA emergiera con una autonomía de acción relativamente importante frente al conjunto de la sociedad.

Si el primer rasgo de la militarización del estado es que su composición, representación y legitimidad se fundan en el aparato castrense, el segundo es haber adoptado las prácticas y procedimientos organizacionales del mismo. La racionalización tecnocrática de los problemas y el procedimiento burocrático de los actos de gobierno, así como el estricto control que consuma la práctica del secreto y de la "razón de estado". Es así como los problemas pasaron a ser considerados como estrictamente técnicos; como en reiteradas ocasiones afirmaron varios jefes "no somos políticos, no tenemos intereses particulares, sino el de la patria". De esta forma, la política se convierte en un acto burocrático que debe resolverse por vía administrativa, sin considerar el planteo ni la participación autónoma de los diferentes sectores de la sociedad en la solución de sus problemas.

El estado militar *decreta* "desde arriba" los marcos de acción y los propósitos que mejor convendrían a la población que debería someterse quedamente a dichas disposiciones. De allí que toda manifestación en contra sea concebida como un acto de sabotaje, antipatriótico y por ende contrario a la marcha de la revolución militar, puesto que la oposición tiende a ser interpretada como un acto partidista que persigue la división, con lo que ello supone en términos militares. Sin embargo, la diversidad de opiniones que se desarrollan frente a cada situación debe ser canalizada internamente por la vía burocrática. Así, la política es tolerada sólo en el interior de la administración y debe traducirse en diversas fórmulas técnicas.

Pero es claro que a lo largo de los ocho años de gobierno, el grado de militarización del estado ha fluctuado en razón de la presión de los diversos sectores de la sociedad y de sus voceros en el interior del aparato gubernamental. Pero ello no ha significado una alteración de los propósitos originales de las fuerzas armadas, en cuanto a mantenerse "por encima" de la sociedad.

En la medida que el GRFA emitía sus primeras proclamas y ejecutaba las medidas antioligárquicas y nacionalistas, los cuadros profesionales que se habían desarrollado durante las dos últimas décadas, vieron la posibilidad de ejecutar los planes y proyectos que inútilmente habían confeccionado durante el gobierno de Belaúnde, sin que ahora ningún Parlamento los frenara. Pero no sólo los profesionales con vocación de convertirse en una "élite tecnocrática" se asimilaron al gobierno militar, también los intelectuales y cuadros políticos de las agrupaciones reformistas que habían visto frustrarse sus aspiraciones de cambios estructurales y, aunque en menor medida, lo mismo aconteció con dirigentes de izquierda que habían visto con desesperación que las consignas de Debray habían fracasado.

De esta combinación resultó que el GRFA se inició "como el primer gobierno de la Cepal" en América Latina. Con la colaboración de esa organización se confeccionó un esquema de desarrollo para los próximos veinte años y se sentaron las bases para un plan de desarrollo inmediato. Según las declaraciones del primer ministro, las metas del gobierno se lograrían para 1990. Conjuntamente con la tendencia desarrollista, fue adelantándose otra que insistía en los postulados nacionalistas-reformistas, que se combinó exitosamente con la primera. Es así como fue observándose una creciente integración de técnicos, políticos, militares e intelectuales en el aparato gubernamental, no sólo por las actividades que irían desarrollando conjuntamente, sino por su interrelación ideológica, con la consiguiente asimilación de prácticas y procedimientos, supeditados a las consideraciones militares. De esta manera los nuevos cuadros profesionales, ingenieros, economistas, sociólogos, conjuntamente con ex apristas, ex populistas, ex comunistas, ex miristas, ex troskistas, entraron en relación íntima con coroneles y generales, en la que estos últimos tienen la última palabra. Esta relación se fundamenta en que los profesionales y ex políticos, proponen las acciones que los militares juzgan, en su propio ámbito, la conveniencia o inconveniencia de ejecutarlas.

En estas condiciones, los profesionales y ex miembros de los partidos se integran a las filas del estado, perdiendo su autonomía y pasan a supeditarse a la acción corporativa del ejército. Eso no significa que su acción no tenga una influencia significativa; al contrario, el personal profesional fue y sigue siendo de gran importancia para proponer y promover nuevos planteos y procedimientos y para activar una importante polémica en el interior del gobierno y de los militares.

De acuerdo a los diagnósticos preparados por los militares, y basados en los escritos de los intelectuales de los años sesenta, el problema del país se fundaba en su dependencia externa y en la dominación interna que le daba viabilidad. Esto significaba en concreto, que para corregir esa situación, se debería erradicar el enclave extranjero y sus ramificaciones, eliminar el área precapitalista del agro; ambas acciones deberían depurar el carácter burgués de la clase propietaria, alentando su naturaleza nacional e industrial; por último estas medidas deberían fortalecer la capacidad empresarial del estado y establecer su carácter regulador. De

esta manera se podría promover la integración económica y social de la población alrededor del estado. En una palabra, desde y a partir del nuevo estado se podría formar la nación. Todo ello, a su vez, daría cabida a una relegitimación del ejército y a la posibilidad de que desempeñara efectivamente el papel que debía cumplir en asegurar la seguridad nacional, puesto que como dijera el general Mercado Jarrín —recordando tal vez a los Meiji— "un ejército fuerte no puede sostenerse sobre un país débil".

El fortalecimiento del estado y la consolidación nacional, combinados orgánicamente, otorgarían una mayor capacidad de negociación a Perú con las potencias hegemónicas, permitiéndole entablar con ellas un nuevo tipo de relación.

Es claro que esta perspectiva ideológica es una repetición, con cuarenta años de distancia, del proyecto original del Apra. De allí que un observador comentara que el "GRFA es un gobierno aprista, pero sin el Apra". No sólo porque ese partido no participaba en el gobierno, sino porque tampoco se encontraban presentes en él la representación de las masas populares que le dieran el sustento necesario para realizar el programa nacional y popular que suscribiera Haya en 1928.

IX. EL CARÁCTER ANTIOLIGÁRQUICO Y NACIONALISTA DEL GRFA

El mismo día del golpe, el nuevo gobierno dirigió al país un mensaje en el que contenía una declaración de intenciones, que tenía visos desarrollistas. Sin embargo, a los seis días tomó militarmente el complejo petrolero, que dominaba la IPC, y que constituía el símbolo más nefasto de la dependencia del país a una empresa extranjera. Así, se dio inicio a una serie de medidas destinadas a revolucionar la estructura social y política del país y a modificar las relaciones de Perú con el capital extranjero.

La expropiación *manu militari* fue calificada de inmediato como un caso único, en la medida que esa empresa había desafiado la legalidad y se había negado, reiteradamente a aceptarla. La afirmación del carácter singular de esa acción del GRFA, venía a propósito del justificado temor a la reacción que pudiera desatar el gobierno norteamericano, tomando como precedente el caso cubano. Al contrario de lo que se esperaba, el gobierno norteamericano respondió cautelosamente. Si bien la Standard Oil exigió el cumplimiento inmediato de la Enmienda Hickenlooper, que dictamina el corte de la cuota azucarera norteamericana a un país que no cancele de manera inmediata el valor de una empresa expropiada, las restantes compañías norteamericanas residentes en Perú presionaron ante su gobierno para que ese conflicto se encarrilara por los canales diplomáticos. Asimismo, parece que en el interior del Departamento de Estado, la experiencia cubana llevó a considerar el problema sin precipitación. Había que impedir que por las presiones norteamericanas el gobierno peruano se "cubanizara".

Así, el gobierno norteamericano consideró que Perú tenía intenciones de resolver el problema y envió a un representante personal del presidente Nixon para encontrar un arreglo a la expropiación de la IPC. Pero no acabarían allí las dificultades peruano-norteamericanas. Casi simultáneamente a plantearse el problema

de la IPC, el gobierno peruano capturó barcos pesqueros norteamericanos, que no se sujetaban a la soberanía peruana sobre las 200 millas marítimas. Ante este nuevo hecho, los intereses norteamericanos exigieron la aplicación de la Enmienda Pelly, que prohíbe la venta de armas a los países que capturen barcos de esa nacionalidad fuera de la zona de las doce millas. La puesta en vigor de esa medida motivó que el gobierno peruano exigiera el retiro de la misión militar de ese país y suspendiera la invitación a Nelson Rockefeller, enviado presidencial, que se encontraba en gira por América Latina. Es decir, se anudaba un verdadero conflicto internacional entre esos dos países, que amenazaba una ruptura final.

El GRFA inauguró sus actividades proclamando y ejerciendo la soberanía nacional y dispuesto, en el peor de los casos, a considerar una confrontación con la potencia hegemónica. Era, en verdad, una prueba de fuego de la que de salir indemne le daría al GRFA los recursos políticos para definir total y completamente la estrategia que los dirigentes de este gobierno tenían en mente. La decisión de los militares de actuar de esta manera no respondía por lo tanto a un oportunismo político sino a la convicción de que era necesario correr el riesgo, tal vez desmesurado, a partir del cual podían estar seguros de poder realizar la "segunda independencia" de Perú.

La reacción norteamericana siguió siendo de extrema cautela. Estados Unidos buscó la manera de resolver las diferencias por la vía diplomática y de alejar la posibilidad de llegar a una situación de "no retorno".

Mientras en el ambiente peruano las drásticas medidas del gobierno y las difíciles relaciones con Estados Unidos absorbían completamente la atención del insólito comportamiento de los militares, en el seno del GRFA se iniciaba una aguda polémica en torno al siguiente paso a dar. Neutralizada relativamente la hostilidad norteamericana, el gobierno estaba en condiciones de acentuar la tendencia nacionalista que debería otorgarle el respaldo necesario para un eventual enfrentamiento con el imperialismo. La decisión de considerar el problema agrario se encontraba en el primer plano. Durante meses se discutió la conveniencia de dictar una ley agraria y se comisionó en ese sentido a varios grupos de técnicos y militares para que formularan los planteos alternativos. Los resultados variaron desde los proyectos de típico corte tecnocrático y desarrollista, que dejaban sin tocar las explotaciones "eficientes" dedicadas a la exportación, hasta los de corte radical. En junio de 1969 y después de un intenso debate interno, con el triunfo de la posición reformista y la dimisión de los militares asociados con la primera posición, el GRFA decretó la reforma agraria. "Campesino: el patrón no comerá de tu pobreza", frase adjudicada a Túpac Amaru, dirigía la acción reivindicativa en favor de los trabajadores del campo.

Pocos días antes de promulgar esta legislación, en la ciudad de Huanta se desarrolló una revuelta popular contra un dispositivo que recortaba las posibilidades educacionales de la población popular. Esta situación no sólo apuró la dación de la ley de reforma agraria, sino también su naturaleza radical.

Al igual que en el caso de la expropiación de la IPC, el ejército ocupó las instalaciones azucareras, baluarte del enclave agrario y de la burguesía oligárquica. El despliegue de fuerza no sólo manifestaba la firme determinación de erradicar la presencia oligárquico-imperialista de la agricultura, sino también la de bloquear

toda resistencia política de los propietarios afectados. La imagen de una oligarquía poderosa, capaz de desbaratar este tipo de acciones se mostró, *a posteriori,* totalmente falsa. En efecto, tal como se vería a partir de ese momento, la oligarquía se desinfló, literalmente, ante el primer embate del gobierno y en lo sucesivo, fue incapaz de ejercer una oposición efectiva contra el gobierno. No sólo la economía había experimentado un proceso de diversificación que desplazaba el poder oligárquico, sino que políticamente había perdido toda base de legitimidad.

La acción contra "los barones del azúcar" iba asociada con el claro propósito militar de desbaratar el "sólido norte aprista". A través de la cooperativización de los centrales azucareros se esperaba que la población trabajadora cambiaría de la noche a la mañana su filiación política y abandonaría su participación sindical, ambas dominadas por el Apra. El mismo día de la entrada de los militares en las plantaciones azucareras proclamaron la inutilidad del sindicalismo en las cooperativas. Pero esta pretensión fue desechada por la denodada resistencia obrera que se articuló firmemente alrededor de sus órganos de clase.

La expropiación de la IPC, la resistencia al gobierno norteamericano y la reforma agraria crearon una sustantiva ampliación en las bases de legitimidad del GRFA, otorgándole, a su vez, recursos políticos para avanzar en sus programas. Por ejemplo, en el primer aniversario de proclamada la reforma agraria, el general Juan Velasco, que jefaturaba el gobierno, fue recibido de manera entusiasta en el "sólido norte" aprista por una población que superaba a la que Haya podía agrupar el día de la Fraternidad aprista. En Estados Unidos la medida fue calificada como progresista, que se acordaba con las recomendaciones de la Alianza para el Progreso. A pesar de que varias importantes propiedades norteamericanas eran afectadas, la ley no establecía ninguna diferencia en el pago de las afectaciones a nacionales y extranjeros. Este pago se haría en efectivo para las instalaciones de maquinarias, mientras que por el valor de la tierra se entregaban bonos que debían cancelarse entre los veinte y los treinta años. En caso que los propietarios estuviesen dispuestos a trasladarse al área industrial, dichos bonos serían convertidos en efectivo hasta por el 50% del total de la inversión.

Además, había un hecho que otorgaba seguridades al gobierno norteamericano y a la burguesía local. La reforma agraria se llevaría a cabo bajo la estricta conducción y vigilancia militar, pautada por cánones administrativos y técnicos que aseguraran la producción y productividad agrícola alcanzada hasta entonces. De esta forma, no sólo se aseguraba que esta trascendental restructuración no tuviera características políticas, sino que la economía del país no se vería afectada; es decir, era una reforma conducida con "seriedad".

La intención del GRFA de terminar con las contradicciones entre el precapitalismo y el capitalismo industrial del país, entre la sierra y la costa, entre lo "nacional" y lo "indígena", suponía abrir las posibilidades de ampliar significativamente el mercado interno y el enlazamiento de la agricultura con los otros sectores de la economía. Y así, paralelamente a esta integración económica, llevar a cabo la integración física y social de la población.

Los planes gubernamentales en relación al cumplimiento de la reforma agraria fueron ambiciosos. En cinco años debía terminarse con las afectaciones y simultáneamente promover la producción de alimentos a fin de cortar el drenaje de

divisas que con motivo de estas importaciones experimenta el país. Si bien hoy en día se han afectado alrededor de diez de los doce millones de hectáreas, el problema de la producción de alimentos no ha comenzado a resolverse. La reforma agraria contempla la entrega de tierras fundamentalmente a asociaciones más que a individuos, a fin de crear un orden "comunitario, solidario y cristiano", que constituyen los propósitos integrativos del régimen militar para toda la sociedad. Así, se crearon cooperativas, sociedades agrícolas de interés social, y se busca reforzar las comunidades campesinas. Paralelamente, varias instituciones estatales están interesadas en la asociación de los minifundistas en alguna forma asociativa.

Sin embargo, el carácter burocrático de la organización agraria y la naturaleza misma del nuevo ordenamiento de la propiedad y la política fiscal acarrearon rápidamente nuevos tipos de problemas. En el primer orden de cosas, el gobierno dispuso la intervención de personal técnico y militar en las empresas de mayor rentabilidad, a fin de dirigir la marcha de la producción, "reglamentando la participación" de los supuestamente beneficiarios, que provocó desde inicio un abierto enfrentamiento con la población trabajadora. En segundo lugar, la reforma agraria demostró tener serias limitaciones: al término del proceso de afectación de tierras, alrededor del 25% de la población rural se verá beneficiada, debido a que la reforma se realiza tomando en cuenta las unidades preexistentes. A su vez, la redistribución interna del sector agrario tiene un carácter profundamente segmentario: los que trabajaban anteriormente a la reforma en las plantaciones se harán beneficiarios de un excedente muy superior a los que trabajaban en las haciendas donde predominaban las relaciones precapitalistas, y ello debido a los diferentes grados de acumulación allí existentes. Así el 2% de la población agrícola, que labora en los centrales azucareros está en capacidad de recibir cerca del 34% del excedente agrícola.

Debido a que los campesinos deben pagar la deuda agraria al estado, para que éste a su vez la rembolse a los antiguos terratenientes, se produce una corriente de descapitalización del campesinado y de acumulación burguesa en los sectores modernos de la economía. Es así como la deuda agraria se calcula en alrededor de 350 millones de dólares, de los que el campesinado ha cancelado alrededor del 20%.[8] A esto debe agregarse una fuente tal vez mayor de descapitalización agraria: el control de precios de los productos alimenticios y el subsidio a los mismos artículos importados. Así, entre la deuda agraria y el control de precios los campesinos se encuentran atenazados para verse impedidos de ejecutar medidas que eleven la producción y la productividad de sus tierras.

Asegurada la relativa neutralidad norteamericana y la descomposición del frente de oposición oligárquico, conjuntamente con el creciente pero ambivalente apoyo popular, el GRFA inició, "a paso ligero", una serie de medidas a fin de realizar una "revolución burguesa, contra la voluntad de la burguesía", modificando sustancialmente el papel que hasta entonces había contado el estado, la burguesía y el capital imperialista.

Una rápida ojeada al conjunto de las trasformaciones económicas hace ver

[8] Aníbal Quijano, en Ernesto Feder, *Lucha de clases en el campo,* México, Fondo de Cultura Económica, 1976.

que, en un corto lapso, el GRFA eliminó en forma administrativa el carácter oligárquico y enclavado de la economía, abriendo canales para la constitución de nuevas formas de acumulación capitalista, que deberían crear un sistema original, "ni capitalista ni comunista", "solidario, humanista, cristiano y comunitario".

En el sector financiero, el gobierno centralizó su actividad económica alrededor del Banco de la Nación, adquirió una parte importante de la participación extranjera de la banca privada; limitó la participación extranjera al 20% de los activos bancarios y prohibió que las filiales extranjeras abrieran sucursales y captaran el ahorro interno. Organizó la Corporación Financiera de Desarrollo encargada de dinamizar el financiamiento interno y externo del estado. Constituyó una empresa centralizadora del Reaseguro; centralizó el movimiento de moneda extranjera, impuso el control de cambios y exigió la repatriación de los capitales peruanos en el exterior. De esta suerte el estado debía encontrarse en capacidad de canalizar el crédito de acuerdo a sus planes, financiar a las empresas estatales y asegurar al sector privado industrial el crédito que hasta entonces monopolizaban las empresas imperialistas. En efecto, pronto el estado se constituyó en la entidad financiera de mayor importancia del país, al controlar alrededor del 65% del capital financiero.

A raíz de la estatización de la IPC, el gobierno organizó Petróleos del Perú, que monopoliza la explotación y distribución de los hidrocarburos. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas adquirió parcialmente las empresas productoras de electricidad, exigió la reversión de las minas no explotadas por los concesionarios, adquirió el complejo minero Cerro de Pasco y en 1975 estatizó la empresa norteamericana que explotaba los yacimientos de hierro de Marcona. Se decretó la estatización del comercio exterior del cobre que pasaba a realizarlo Minero-Perú, mientras se financiaba en Japón y en Europa, la instalación de una refinería que agregara valor a la materia prima.

En el sector industrial, el GRFA decretó en 1970 la ley de industrias, en la que se estipula la exclusividad del estado en la producción de los insumos básicos: cemento, acero, química, papel, electricidad, etc., a la par que creaba la empresa Industrias del Perú, encargada de programar la instalación de empresas industriales. Simultáneamente el Ministerio de Industrias organizó la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, única encargada de las importaciones de dichas mercancías.

En el ramo de trasportes, el gobierno acordó con la ITT la adquisición del 51% del capital de la compañía de teléfonos, monto que la ITT destinó a la constitución de una empresa mixta productora de dichos artefactos y la construcción del hotel Sheraton en Lima. Debido a la falencia de los ferrocarriles y la deuda que la empresa británica tenía con el aval del gobierno, éste tomó a su cargo el sistema de trasportes. Asimismo el estado impulsó el trasporte marítimo y promovió la industria de la construcción de barcos.

En 1973 y a raíz de la ausencia de anchoveta, la industria pesquera cayó en una dramática crisis. Esta situación aparejada con el endeudamiento de la industria con el gobierno, la tomó éste a su cargo, estatizando a su vez el comercio exterior de la harina de pescado, que constituye un importante renglón de las exportaciones del país.

Es así como en pocos años el estado peruano pasó a controlar directamente una parte considerable de la economía del país, constituyendo un capitalismo de estado que rige alrededor del 50% del producto nacional. Mientras en 1968 el estado peruano era uno de los más "débiles" en el contexto latinoamericano, para 1973 se había desarrollado considerablemente.

La política exterior del GRFA se definió desde el primer momento por su naturaleza "tercermundista" y "no alineada" dirigida a acortar la dependencia "externa". En ese mismo sentido promovió la diversificación de sus mercados y de sus fuentes de financiamiento. No sólo rompió con el bloqueo norteamericano impuesto por la OEA sobre Cuba, sino que abrió relaciones con China y expandió notablemente su comercio con el bloque socialista: el año 1975 alrededor del 20% de las exportaciones peruanas se destinaban a esos países. Esta nueva política exterior peruana persigue asimismo, neutralizar el posible bloqueo norteamericano al nacionalismo peruano y especialmente con respecto al comercio de armas.

Pero, simultáneamente, Perú procura insistentemente mantener una relación formal con Estados Unidos y tener abiertos los canales de negociación con el gobierno norteamericano y los capitales imperialistas. Es así como en 1974 los dos gobiernos firmaron un convenio por el que por medio de créditos concedidos por Estados Unidos, Perú pagaba las estatizaciones que había efectuado de empresas de nacionales de dicho país, y que el gobierno norteamericano se encargaría de distribuir. Posteriormente, cuando en 1975 el general Velasco, en un acto que buscaba reivindicar su imagen, expropió inconsultamente la empresa que explotaba el hierro, mientras se negociaba su compra, estableció un nuevo foco conflictivo que ambas partes buscaron allanar, hasta que en 1976 se llegó a un acuerdo mutuo. De otro lado, el gobierno llegó a un acuerdo con un conjunto de consorcios internacionales para que realizaran la inversión más grande de la historia en un solo yacimiento. La inversión de 750 millones de dólares en la explotación del cobre de Cuajone, que conjuntamente con el de Toquepala, del que dista 40 kilómetros, constituye hoy en día la más importante concentración minera del país, y que se encuentra en manos extranjeras. La diferencia de esta explotación con relación a los enclaves, es que Minero-Perú se encargara de comercializar el cobre, que el estado lo refinara y por último, que la empresa se obliga a comprar insumos industriales en el país. Es decir, que el GRFA si bien favorece la instalación de esta multimillonaria inversión establece las bases para su "desenclavamiento".

El estado, asimismo, acordó contratos con 21 empresas para la exploración y explotación del petróleo en la selva, bajo la fórmula del "modelo peruano". Éste establece que dichas empresas pagarán a Petróleos del Perú, la mitad del petróleo que lograran explotar, mientras que la empresa estatal se encargaría de pagar los impuestos respectivos. En razón de las perspectivas petroleras del perú, Japón financió por 600 millones de dólares la construcción de un oleoducto para dar salida a la costa el petróleo *que debería encontrarse.*

Asimismo, mientras el gobierno peruano otorgó su respaldo a la política de integración subregional y al Acuerdo 24 del Pacto Andino que reglamentó el tratamiento al capital extranjero, fomentó el establecimiento de empresas mixtas con el capital extranjero, en el área metal-mecánica y química.

Es así como se dio una doble combinación de factores que favorecieron que en una coyuntura favorable de carácter internacional el país recibiera entre 1970 y 1973 cerca de 3 000 millones de dólares de préstamos de la banca internacional. El gobierno fue capaz de crear una imagen "progresista" y nacionalista, pero al mismo tiempo responsable de sus compromisos externos. En efecto, este gobierno nacionalista estaba dispuesto a recuperar su soberanía sobre sus recursos naturales, pero llegando a un acuerdo con las empresas extranjeras —cosa totalmente diferente a lo que acontecía con el gobierno de la Unidad Popular. En segundo lugar, Perú presentaba las posibilidades de convertirse en un gran exportador de cobre y petróleo, en una situación marcada por el alza de los precios de estos productos. Todo ello se daba en un contexto de un extraordinario "boom" de la banca internacional dispuesta a encontrar mercados donde colocar los excedentes creados por el extraordinario desarrollo de las empresas multinacionales durante los años de la década de los sesenta.[9]

Todas estas circunstancias se unieron para que el Club de París respaldara a Perú, haciendo posible que éste renegociara su deuda externa y lograra ese cúmulo de préstamos. El Banco Mundial y el Banco Interamericano desbloquearon los créditos al país, favoreciendo así la política de capitalismo de estado y de asociación con las empresas multinacionales.

En resumen, la reorganización del aparato productivo estaba destinado, en primer lugar, a la eliminación del carácter precapitalista del agro y su integración directa con la producción industrial. El incremento de la oferta de alimentos debería redundar en la reducción de esas importaciones y el ahorro de esas divisas en la capitalización industrial. El incremento de los ingresos de la población rural, a su vez, debería favorecer la ampliación e integración del mercado interno, contribuyendo al descenso del desempleo y del subempleo urbano. Hasta acá las ideas de Cepal. Sin embargo, esta política se vio limitada por el carácter segmentario de la redistribución agraria y por la descapitalización relativa del campo.

En segundo lugar, las reformas emprendidas persiguen erradicar el carácter oligárquico de la burguesía local, promoviendo su conversión en una capa de carácter "moderno" e industrial, a través de la expansión del mercado interno y la integración vertical y horizontal del sistema industrial, bajo la regulación y directa intervención del estado, que debería rematar en un "desarrollo autosostenido". Como veremos más tarde, la burguesía resistió esta formulación y la autonomía del estado frente a sus intereses y perspectivas.

En tercer lugar, la ampliación y profundización de las funciones empresariales del estado, mediante su emplazamiento en los sectores estratégicos, debería otorgarle capacidad de regular la economía nacional y asegurar la integración del sistema productivo, reduciendo la dependencia externa. El hecho que hoy en día el estado sea responsable de la generación del 50% del producto y del 60% de las inversiones, sería un instrumento conducente a esos fines. Conjuntamente con esta ampliación de la capacidad estatal, la renegociación de las relaciones con el impe-

[9] Emma Rothschild, "Banks: The coming crisis", en *The New York review of Books,* mayo 27 y junio 24 de 1976.

rialismo, a fin de lograr su asociación con el gobierno y/o con la burguesía local en proyectos industriales, desechando la modalidad del enclave, constituye el cuarto rasgo que califica la política del GRFA.

De esta manera el GRFA instituyó tres sectores de actividad: el estatal en el que se inscriben las formas de asociación con el capital imperialista, el privado reformado, debido a la constitución de las comunidades laborales, y el cooperativo. A todos ellos debería agregarse en el futuro el de la propiedad social que debería ser el hegemónico, a fin de consolidar la estructura comunitaria del país. De resultas de esas trasformaciones y sectorializaciones, el GRFA añadió a su dominación de cristiana, libertaria, socialista, humanista, la de pluralista. En tanto que afirmándose en su "autonomía conceptual", que definiría la originalidad del "proceso peruano", sustentaba la pluralidad de entidades productivas. De. allí que el GRFA se definiera como un sistema "no comunista y no capitalista", creador de una "democracia social de participación plena", que procuraba el establecimiento de una tercera vía autónoma, que recuerda la consigna aprista de "ni Washington ni Moscú".

En la medida que la reestructuración avanzaba, la avalancha ideológica del régimen militar crecía de manera insistente, tal vez para llenar con palabras las limitaciones de las reformas. En efecto, éstas, contrariamente a lo que esperaban los planificadores, produjeron una reconcentración de la riqueza y del ingreso [10] y paralelamente una mayor penetración de las empresas imperialistas en la economía del país. Ello resultó así debido al carácter segmentario de las reformas, que tuvo como consecuencia que el ingreso y la riqueza se redistribuyeran entre la población concentrada en el 10% superior de la pirámide. Esta ampliación de la capacidad económica de la población redundó, a su vez, en el incremento de la demanda de mercancías, como automóviles, línea blanca, etc., que sólo las empresas multinacionales podían ofrecer.

Se ha dicho anteriormente que la reforma agraria amplió a sectores muy reducidos los beneficios derivados de la producción agropecuaria, especialmente al sector dedicado a las exportaciones. El resto de la agricultura, por su carácter eminentemente precapitalista, por el pago de la deuda agraria y el control de precios estaba imposibilitada para procurar un incremento del ingreso de la población mayoritaria.

En todos los demás sectores de la economía, el gobierno creó las comunidades laborales, que, en proporciones diferentes para cada sector, debían percibir parte de los beneficios de las empresas, en efectivo y en acciones, hasta alcanzar el 50% del capital. De esta manera, los ideólogos del régimen esperaban realizar una sociedad solidaria y comunitaria. Las comunidades laborales venían a cumplir una función distribucionista y de acumulación forzosa al mismo tiempo. En cuanto a lo primero, las comunidades laborales redistribuyen dentro de cada sector y en el caso de la industria dentro de cada empresa. Así, la población situada en empresas altamente capitalizadas recibe una participación relativamente superior a la que no se encuentra en ese caso. Además, esta política supone un distanciamiento sustancial de los trabajadores agrupados en las comunidades laborales,

[10] Webb y Figueroa, *op. cit.*

es decir, alrededor del 10% de la población activa, de los subempleados urbanos y rurales.

Las limitaciones de la comunidad laboral se hicieron evidentes rápidamente. De allí que el GRFA ideara el sector de la propiedad social, consistente en un área de propiedad grupal, autogestionaria, en el que los excedentes debían redistribuirse colectivamente entre todos los trabajadores agrupados en el sector. Pero también acá se partía de un vicio que limitaba el desarrollo de este sector. Éste viene a ser que la oferta y demanda de bienes se encuentra regida por las reglas capitalistas del mercado, basado en la acumulación privada y la expropiación colectiva. En otras palabras, se encuentra condicionado por una distribución de la riqueza y de los ingresos sellado por un trazo piramidal extremadamente marcado.

Esta situación determinó que una parcela muy estrecha de la población, conectada con lo más avanzado de la producción urbana-capitalista, en especial las capas medias burocráticas en expansión, incrementaran su demanda de bienes de consumo. De allí que entre 1970-73 se experimentara una considerable expansión de la construcción de viviendas de "clase media", automóviles, línea blanca. Y que, simultáneamente, una o dos multinacionales controlaran entre el 40 y el 60% del valor de la producción bruta de cada una de las ramas industriales del país y, por último, que unas cuantas docenas de empresas absorbieran el 80% del valor de las importaciones totales del país.[11]

Tal como se ha podido observar, las reformas antioligárquicas del GRFA y la nueva política exterior procuran balancear el problema de la distribución con el de la acumulación. Las reformas antioligárquicas no sólo facilitaron una distribución segmentaria, sino que proveyeron los medios para el establecimiento de un importante capitalismo estatal. Por otro lado, las perspectivas petroleras y cupríferas del país le otorgaron los medios para sustentar, en alianza con el capital imperialista, una acumulación a largo plazo. Si la deuda externa creció entre 1963-67 en cinco veces, de 1968 a 1975 ha guardado la misma progresión: hoy, Perú tiene el triste privilegio de ocupar el cuarto puesto entre los países subdesarrollados, con la deuda externa más elevada.

X. EL CORPORATIVISMO COMO PROYECTO POLÍTICO

La "peculiaridad" de la revolución militar radica en el hecho de que el GRFA realiza las reformas antioligárquicas y nacionalistas, por las que los sectores medios y populares venían luchando políticamente por varias décadas, de manera técnica y burocrática; vale decir, rechazando la participación autónoma de las organizaciones populares. En otras palabras, que la relativa democratización social que supone el conjunto de las medidas gubernamentales se lleva a cabo de manera autoritaria dentro del marco de la militarización del estado.

Tal como se dijo antes, el objetivo final de la reorganización institucional que

[11] Jaime Gianella y Andrés González, *Análisis de la concentración en el sector industrial* (ms.).

lleva a cabo el gobierno tiene por finalidad implícita la de construir un estado comunitario, con claras filiaciones cristianas, que se expresa a través de un intento de conciliación de clases, que procura la Unidad Nacional. Así, el ejército debería contar con una retaguardia segura para el caso de un enfrentamiento con algún vecino...

En reiteradas ocasiones el general Graham, jefe del Cuerpo de Oficiales Asesores de la Presidencia, órgano legislativo del gobierno, caracterizó al Perú "prerrevolucionario" por el grado de división existente y en el que cada "conjunto" perseguía obtener beneficios particulares en desmedro de la totalidad. Esta situación la graficaba Graham en un cuadrado dividido por una alambrada. La acción del GRFA, afirmaba el general, estaba destinada a borrar dicha alambrada, que divide a los peruanos, y hacer del país un ente único, total, homogéneo. El general Velasco, por su parte, en varias ocasiones afirmaba que ahora que se habían eliminado los factores de división del país, "todos los peruanos debemos jugar por el equipo de la casaquilla bicolor". Un ex asesor de la presidencia afirmaba que las reformas abrían una tendencia a la eliminación de las clases sociales. En general, la avalancha ideológica tendía a conformar una imagen en que los antagonismos sociales habían perdido sus raíces sociales y, los que subsistían, respondían a malentendidos, dogmatismos ideológicos e intereses particulares para mantener los antiguos "derechos adquiridos". Es decir, la campaña ideológica del gobierno se dirigía a la despolitización de las fuerzas populares, borrar todo rastro de conciencia clasista y sumarlas a las fuerzas del gobierno, a fin de lograr el sueño militar: la alianza fuerzas armadas y el pueblo

A todo lo largo de los primeros seis años del GRFA se observó un contrapunteo entre las fuerzas populares dispuestas a conquistar sus derechos a través del fortalecimiento de sus organizaciones autónomas y del gobierno, interesado en encapsular dichas fuerzas en organizaciones corporativas, dependientes del gobierno. Por razones que se verán a lo largo de esta presentación, los intentos del gobierno resultaron fallidos, debido al desarrollo político popular que llevó al fracaso, la ideología y las organizaciones dependientes del estado militar.

Desde el primer momento en que se implementó la reforma agraria, fue claro el interés del GRFA en desmovilizar las organizaciones campesinas y sindicatos que se habían creado durante la década del sesenta, y en socavar las bases apristas existentes en las nuevas cooperativas agrarias. Elementos radicales pretendieron crear "comités de defensa de la revolución" que fueron prohibidos de funcionar. Estas situaciones crearon en los centros agrícolas una fuerte tensión entre los trabajadores y el personal directivo designado por el Ministerio de Agricultura y los oficiales de inteligencia —constituidos en los servicios de asesoramiento. Las huelgas que se sucedieron y las represiones del gobierno tendían a destruir los propósitos comunitarios del gobierno así como el establecimiento de la alianza entre el pueblo y la fuerza armada. Fue así como se desarrolló en el seno del gobierno una tendencia dispuesta a resolver la falta de "comunicación" entre los sectores populares y las fuerzas armadas, constituidas en gobierno, por lo que se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), bajo el supuesto de que las capas populares no estaban suficiente y debidamente organizadas. SINAMOS era el organismo llamado a incorporar a las masas en el estado, a través de un am-

plio aparato corporativo. Se dividía en sectores encargados de "apoyar" la organización y reorganización de la sociedad en términos funcionales: campesinos, trabajadores urbanos, pueblos jóvenes —término con el que se rebautizaban las barriadas urbanas—, profesionales e intelectuales, jóvenes.

El país se dividió en ocho regiones que coincidían con las regiones militares, y en las que el jefe militar de cada una de ellas es al mismo tiempo el jefe de la región de SINAMOS. Este jefe, con su respectivo estado mayor y el asesoramiento de técnicos encargados de recomendar lo necesario para mejorar los niveles de vida del sector, llevan a cabo una acción asistencialista a través de la "autoayuda" de la población. Pero el carácter "superministerial" de SINAMOS y sus actividades despertaron en la burocracia un rechazo bastante generalizado y una repulsa universal de las distintas capas de la población.

SINAMOS desde un primer momento persiguió dirigir la acción de las masas y sincronizar el extenso aparato burocrático, que podrá escapar a la vigilancia de los servicios de inteligencia; de allí la desconfianza y hostilidad que concitó en el interior de las fuerzas armadas. Además, el mismo hecho de que el cuerpo de profesionales que dirigía las acciones de SINAMOS proviniera de partidos políticos despertaba una gran sospecha en la institución castrense. Al fin y al cabo parecía que desde el mismo seno del gobierno se alentaba la creación de un movimiento popular que, aunque controlado militarmente, podía desbocarse.

El SINAMOS se ganó la repulsa de las diferentes clases de la sociedad. Las clases populares percibieron en él como un aparato de encuadramiento, como lo era realmente, que no se conjugaba con sus aspiraciones reivindicativas. El mismo carácter limitado de las reformas, como lo hemos observado anteriormente, militaban en contra de la capacidad de cooptación de SINAMOS. Por otro lado, la acción desplegada por los activistas de SINAMOS en favor de los campesinos, obreros y habitantes de las barriadas despertaban un acusado temor entre los diferentes sectores propietarios, de encontrarse frente a un movimiento en el que ellos serían los perjudicados.

En la medida que SINAMOS legitimaba las reivindicaciones populares y proclamaba la búsqueda de un socialismo "a la peruana", alentaba las presiones redistributivas de la población popular, que chocaba contra los intereses de acumulación por parte del estado y de la burguesía. Contrariamente a lo esperado, esas presiones apuraban el divorcio entre la población y el gobierno, manifiesto en el surgimiento de una ola de huelgas que duplicaba, en su número y personas afectadas, a las que había experimentado el país en el período "prerrevolucionario"

Fue en este contexto que un número de profesionales al servicio de los militares pretendieron erigir un partido del gobierno, a fin de corregir y allanar los problemas de "comunicación" que se venían acumulando y que SINAMOS no había hecho sino apurar. La discusión que se dio en el seno del gobierno a este propósito, mientras la población no tenía nada que decir, fue violenta. La tendencia "militar" tuvo que ganar: de un lado se aducía que los partidos eran instituciones sin función que cumplir en el nuevo ordenamiento social que las fuerzas armadas querían establecer para los peruanos, puesto que ellos prohijaban oligarquías que expropiaban el poder a la población, impidiendo así la constitución de una "democracia social de participación plena". Ella debía, al contrario de lo que

se perseguía con los partidos, crear grupos funcionales con acceso inmediato a las decisiones que les concernían. Como diría uno de los tantos ideólogos, la política debía convertirse en un problema inmediato de la vida cotidiana, de cada sector de la sociedad. Así, se impugnaba la "ley de hierro de la oligarquía". Otro ideólogo declaró, sin tantos tapujos, que la constitución de un partido significaría desconocer la función del verdadero partido de la revolución y vanguardia política del país: las fuerzas armadas. Después de estas discusiones se dio "la orden" de acabar esa discusión y la razón era clara. Durante cuarenta años, la fuerza armada había constituido el valladar de la movilización popular y había emergido plenamente en la vida política para institucionalizar su contención. Además, por su misma naturaleza institucional vertida en gobierno, no iba a procrear un movimiento que pudiera alentar la destrucción del carácter militar del gobierno.

Conjuntamente con la formación del SINAMOS, se decretó la disolución de la Sociedad Nacional Agraria, que congregaba a los grandes y medianos propietarios y se conformó —por ley— la Confederación Nacional Agraria, al mismo tiempo que el gobierno desconocía a los sindicatos de trabajadores agrícolas que se habían formado durante la última década en su lucha contra los latifundistas. La CNA estaría formada por ligas agrarias regionales que agruparían a todos los que tenían actividades agropecuarias, sin distingo alguno. Las ligas agrarias debían constituir correas de trasmisión entre los planes del gobierno y los intereses "campesinos", colaborando en las acciones gubernamentales. Su reconocimiento estaría condicionado al juicio de SINAMOS, pasando a depender organizacionalmente de esta entidad. Sin embargo esta creación institucional del gobierno se tuvo que enfrentar con la reorganización de la Confederación Campesina del Perú, que venía desarrollando un intenso combate para defender los intereses autónomos de los campesinos, enfrentándose a los requerimientos estatales desde el pago de la deuda agraria, la velocidad de las afectaciones de los terratenientes, hasta el precio de los productos agrícolas.

La presencia de la CCP y los conflictos de los campesinos con el estado otorgaron a la CNA, a pesar de su dependencia, un espacio propio a fin de solicitar y presionar reivindicaciones inmediatas de sus bases sociales, favoreciendo que pudiera autonomizarse relativamente del gobierno, lo que le impide a éste contar con ese organismo movilizador para obtener los recursos políticos a fin de continuar consensualmente su proyecto cristiano.

Se ha dicho que en el resto de las actividades económicas, el GRFA estatuyó las comunidades laborales. La comunidad, en la que participan todos los integrantes de la empresa es un mecanismo de participación, de redistribución y acumulación. Fue claro y explícito que el establecimiento de esa institución perseguía desalentar las reivindicaciones salariales, los movimientos de huelga y las organizaciones clasistas y, en contrapartida, estimular el incremento de la producción, la productividad y el carácter solidario entre trabajadores y capitalistas. Tal como se dijo, con el establecimiento de las comunidades los trabajadores no deberían ir contra sus "propios" intereses, realizando huelgas que descapitalizarían a la empresa y por ende a la comunidad. Al contrario, las comunidades deberían procurar el establecimiento de un espíritu "familiar, comunal" en el que desaparecerían las divisiones entre capital y trabajo.

Pero las intenciones no lograron materializarse y, muy al contrario, favorecieron la constitución de un nuevo frente de la lucha de clases. Gracias al mismo apoyo del gobierno, los trabajadores se interesaron en participar en la vida directiva de la empresa. Esta directiva estatal creó fundamentalmente dos hechos que trastocaron los planes comunitarios y corporativos del estado: de un lado los trabajadores vinieron a comprender el carácter explotador del capital, a través del examen de los libros de contabilidad. El plusvalor dejaba de ser un concepto para pasar a ser una realidad concreta. Por otro lado, esta disposición creó una feroz resistencia de la burguesía al GRFA y de paso a los trabajadores. Ello constituyó claramente un motivo más para que los trabajadores persiguieran un nuevo nivel de integración clasista. De allí que, con la oposición abierta del gobierno, los trabajadores buscaran la constitución de la Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI), mientras la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que congrega a la mayoría de las organizaciones sindicales, se consolidaba en sus posiciones.

La resistencia del gobierno a la constitución de CONACI se debía a que esta organización contrariaba sus propósitos de encapsulamiento de los trabajadores, alrededor de la comunidad laboral y facilitaba la constitución de un nuevo frente de integración clasista que amenazaba al gobierno con su autonomía. Tal como sucedió en efecto. En el acto inaugural de CONACI, los trabajadores no sólo atacaron duramente a la burguesía por la multitud de maniobras para evadir la participación de los trabajadores en el control de las empresas, sino que también atacaron a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley que sostenidamente soslayaban los problemas planteados por los comuneros. Además, exigieron el derecho de veto en las decisiones empresariales y la entrega inmediata del 50% del capital de las empresas.

Paralelamente a esta actividad, CONACI desarrolló una activa campaña de educación, que en efecto suponía una activa politización clasista de los trabajadores. Ante todas estas situaciones, el Ministerio de Industrias decretó la reorganización de CONACI. A partir de entonces se estableció una pugna sorda entre las dos instituciones y, a pesar de contar con todo el apoyo estatal, la que respondía a los designios del gobierno, nunca estuvo en capacidad de controlar a las comunidades industriales.

Simultáneamente a éstas fallidas acciones gubernamentales por capturar ideológica y organizativamente a la población trabajadora, la CGTP, que desde su reorganización centralizaba la acción de los sindicatos más importantes del país, fue llevada por sus bases, a pesar de la ambivalencia del Partido Comunista, a reivindicar los derechos de los trabajadores. De allí las intensas huelgas mineras, del magisterio, de los trabajadores bancarios, de metal-mecánica, que Perú experimentó desde 1970. A pesar de los intentos divisionistas del gobierno, en los que contaba con la colaboración del PC para eliminar a los dirigentes calificados de "ultras", es decir, aquellos que no dejaban de luchar por la autonomía ideológica y de acción de la clase popular y su desarrollo político, la CGTP se ha mantenido —mal que bien— como el órgano centralizador de las acciones de los trabajadores. A pesar de la ambivalencia del PC, de donde se recluta la burocracia dirigente de la CGTP, que pretende presentarse como colaborador y sostén de las conquistas

antimperialistas del gobierno revolucionario —a sabiendas de la profunda repulsa que los militares tienen a todo lo que huela a comunismo—, la CGTP significó un constante desafío al GRFA. De allí que desde el Ministerio del Interior se constituyó la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CRTP), dirigida por presuntos trabajadores que no eran otra cosa que funcionarios de esa dependencia oficial. La CRTP, con la ayuda estatal, debería ser capaz de ganarse a los trabajadores en favor de la causa del gobierno, el que a su vez estaría dispuesto a proveerle de toda la ayuda burocrática a fin de dividir el movimiento obrero. Sin embargo, la CRTP desde su inicio se encontró aislada y rechazada por el movimiento popular. Debido a su origen, la actividad de la CRTP se limitó a emitir comunicados de apoyo "revolucionario" al gobierno y atacar a las organizaciones clasistas, definiéndose como una "organización participacionista y no reivindicativa".

Debido a la pugnacidad de la organización magisterial, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) que congrega a la mayoría del magisterio con cerca de 120 000 miembros, se constituyó en un permanente bloqueo a las aspiraciones del GRFA de efectuar burocráticamente la reforma de la educación. El SUTEP, además, ha significado un permanente organismo de reclamación salarial, que ha creado situaciones embarazosas para el estado. Su capacidad de irradiación y de penetración, por su capacidad de comunicación con las masas populares, ha constituido un poderoso freno a la penetración ideológica de SINAMOS. A fin de neutralizar esa capacidad, el gobierno conformó una cooperativa de servicios magisteriales, esperando así derivar los intereses del gremio en el usufructo de beneficios inmediatos. Sin embargo, las sucesivas elecciones significaron un triunfo aplastante para el SUTEP. Ante esta situación y las presiones político-económicas del magisterio sindicalizado, el gobierno dejó de reconocer oficialmente a esa organización y creó el Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana (SERP), que demostró no tener el apoyo sino del 10% del magisterio en las elecciones sindicales.

Es así como la instrumentación política para reformular la organización de la sociedad alrededor de un aparato corporativo que debería congregar a la unidad nacional, bajo el comando militar, fracasó estrepitosamente, desde sus inicios. Las propias limitaciones reformistas del gobierno, aunadas a su violencia verbal en favor de las exigencias populares, determinó que la población popular derrotara en todos los frentes, las perspectivas estatales. Sin embargo, la falta de integración política de dicha población hizo imposible que esa derrota pudiera trasformarse en un triunfo político de las clases dominadas. Así, el resultado fue que se hiciera evidente la incapacidad del estado en incorporar a su seno al grueso de los peruanos.

Si en el polo popular el estado ha fracasado en su proyecto de conciliación de clases, lo mismo aconteció con la burguesía. Si bien es cierto que gracias a las reformas militares se logró una ampliación relativa del mercado interno y la tasa de ganancia de la burguesía, ésta no se alineó con el GRFA.

Las reformas que depuraron el lastre precapitalista permitieron una incorporación relativa de un segmento de la población al mercado industrial; gracias al nuevo papel empresarial del estado, éste ha propiciado de varias maneras la acumula-

ción de la gran burguesía: incrementando la demanda, revalorizando sus activos, atendiendo sus necesidades crediticias, exceptuándolo de los impuestos a la exportación y a la importación de bienes de capital y, sin embargo, la burguesía no ha dejado de manifestar su rechazo a la política del GRFA.

En términos generales, este divorcio entre el GRFA y la burguesía, a pesar de los llamados del primero para que esta clase se sume a su proyecto, se explica por el interés del nuevo estado por desarrollar voluntariamente un proyecto manteniéndose equidistante de las clases básicas de la sociedad. La burguesía fue considerada, legítimamente, como un apéndice "extranjero", sin capacidad ni voluntad de revolucionar nacionalmente la sociedad. De allí, que los militares concibieron esta revolución "burguesa" aun en contra de la voluntad de los burgueses.

Dos tipos de decisiones efectuadas por el GRFA definieron, desde 1970, el distanciamiento entre el estado y la burguesía. El primero se refiere a la constitución de las comunidades laborales y de otras formas de participación de los trabajadores, en la marcha de la empresa, como la propiedad social. En efecto, la burguesía manifestó muy claramente su rechazo a contar con los trabajadores en la marcha de "sus" propiedades y más aún, en la posibilidad de que ellos pudieran llegar a controlarlas mayoritariamente. Las comunidades laborales no sólo impiden la captura total de los excedentes a la burguesía, sino que crean el contexto que desautoriza la legitimidad del *control* de la clase dominante sobre los medios de producción. De allí que desde el primer momento la burguesía propusiera que los beneficios distribuidos por las empresas fueran de carácter individual y no colectivo; asimismo que los trabajadores, individualmente, se constituyeran en accionistas de la empresa.

El segundo tipo de decisiones que afectó a la burguesía fue el de carácter estrictamente ideológico: la reforma de la educación y la estatización de la prensa. A través de ambas medidas el GRFA creó un nuevo ámbito ideológico, que al mismo tiempo que propiciaba la formación de nuevos valores sociales, desestimaba la legitimidad del capitalismo, y favorecía relativamente las reclamaciones populares. De esta manera, entre la comunidad laboral y los nuevos contenidos ideológicos de la educación y de la prensa, los empresarios aducen que se han dislocado los principios de autoridad y jerarquía, tan caros a la institución castrense, propiciando el desquiciamiento de la producción y la motivación para invertir, dada la falta de "un clima de confianza".

De allí que el estado, hasta 1975, se encontrara entre dos fuegos, el de las clases populares y la burguesía, las que por razones diferentes, no entraban en el juego de conciliación de clases y no se incorporaron en la organización corporativa dispuesta por el estado.

Se ha dicho en el acápite anterior que la política económica del gobierno se fundaba en un redistribucionismo segmentario, complementado por los factores de acumulación que alentaban los préstamos internacionales. A este último, habría que agregar el alza de los productos de exportación, que mayormente se encontraban estatizados para 1974. A raíz de la recesión internacional, los precios de estos artículos iniciaron una baja considerable, entre ellos el cobre. Por otro lado las expectativas relativas al petróleo se esfumaron, en tanto que no se encontró el anhelado Dorado. Todo ello se sumó para crear una difícil situación fi-

nanciera que afectaba duramente la balanza comercial y de pagos. En efecto, en 1975 Perú fue uno de los cuatro países del mundo más afectados en este sentido: entre el servicio de la deuda y el déficit comercial sumaba un total equivalente al valor total de sus exportaciones anuales.

Había por lo tanto la necesidad de reajustar la marcha del "proceso" revolucionario. En primer lugar, "poner en vereda" a los trabajadores que perseguían defenderse de la caída de sus ingresos con motivo de la inflación en marcha. Pero también el GRFA experimentaba una creciente incapacidad política frente a las movilizaciones populares que escapaban a todo intento de encuadramiento corporativo. Es así como desde el gobierno se implementó el Movimiento Laboral Revolucionario (MLR) destinado a destruir el sindicalismo clasista, con el claro y abierto apoyo gubernamental. El gangsterismo sindical que propiciaban abiertamente los altos mandos militares, que contradecía abiertamente todo los sonoros compromisos populares del GRFA, convocó a una protesta generalizada, en la que se inscribieron los ideólogos reformistas que el régimen había destacado en la prensa estatizada, con el apoyo de algunos generales del ala izquierdista del gobierno.

Velasco, además, propició una tácita alianza entre el MLR y el Apra —que esperaba y alentaba pacientemente el deterioro del gobierno militar a fin de desbaratar la creciente autonomía de las clases populares y la creciente penetración de los grupos de la izquierda revolucionaria en el seno del movimiento popular. La nueva situación hizo que se repitiera el escenario del último período belaundista: los elementos radicales dentro del gobierno consideraron abiertamente que esta alianza suponía una reversión del proceso. Velasco, en un arrebato personalista, tendencia que se había venido afirmando en los últimos años, y que es intrínseco a la burocratización del poder, expropió la Marcona Mining a fin de reivindicar su figura nacionalista, trasgrediendo las negociaciones en curso. A raíz de ello, la empresa multinacional bloqueó el trasporte y la comercialización del hierro, en un momento de aguda crisis económica. Nuevamente el gobierno norteamericano propició el establecimiento de negociaciones que condujo a un acuerdo, calmando la ansiedad de los medios financieros internacionales.

A ello se sumó que en agosto de 1975, Velasco deportó, una vez más, a un conjunto de periodistas, dirigentes sindicales y abogados que criticaban duramente el apoyo gubernamental al MLR y la ola de ilegalizaciones de huelgas, así como las medidas económicas dictadas para remediar la crisis.

Así, las disidencias internas al régimen, y el enfrentamiento popular contra el gobierno, apuraban la crisis política del GRFA. Pero a ello se venía a agregar las fisuras internas en la institución castrense. Una huelga de la policía, que fue aplastada con el máximo de rigor, puso en claro las diferencias existentes en el seno de la fuerza armada, y que se habían mostrado anteriormente entre el ejército y la marina, cuando ésta rechazó la estatización de la prensa. A raíz de la huelga policial, que dejó por tres días a Lima desprovista de protección, se desató un verdadero motín popular, con el consiguiente saqueo de las casas comerciales, sin que ningún contingente "revolucionario" estuviera en condiciones de contrarrestar los actos desorbitados de un par de millares de personas. Al cabo de tres días, el ingreso del destacamento blindado localizado en la ciudad, que ametralló

a mansalva a la población de las barriadas marginales, acabó con esta manifestación popular.

Por último, durante el mes de julio y agosto, se creó una tensa situación fronteriza, con Chile y Bolivia, que obligó a los comandos militares a retomar el poder que mantenía Velasco. El 29 de agosto de 1975, en un nuevo acto institucional, los comandantes de las regiones militares desautorizaron a Velasco y lo obligaron a que renunciara. Esa tarde Velasco, como Belaúnde siete años atrás, salió de palacio solo, pasando desapercibido para la población de Lima.

En resumen, la política de conciliación de clases que procuraba establecerse a través de una organización corporativa, que debería encapsular y despolitizar a las clases populares, se vio incapaz de materializarse por la resuelta lucha de los sectores populares en tanto que sus reclamaciones redistributivas y de democratización política no se hacían efectivas. La misma tendencia organizativa e ideológica que había creado el gobierno se volvía en contra suya.

La burguesía tampoco aceptó el pacto social formulado por el gobierno militar, en tanto las reformas atentan contra su hegemonía, económica y en especial política. Sería así que Velasco giró en redondo, abriendo una vertiente "fascistoide" a través del MLR, con lo que buscaba derrotar la organización popular y ofrecer la paz social que la burguesía y el imperialismo exigían para resolver la nueva coyuntura económica en que se inscribía Perú.

Pero era demasiado tarde. Dicho giro político desató una lucha de clases que colmaba los niveles que podía tolerar políticamente el GRFA. Así las fuerzas armadas, o mejor, sus comandos, procuraron a través de la deposición del jefe "indiscutido e indiscutible de la revolución", congelar la situación y hacer los ajustes necesarios.

XI. LA SEGUNDA FASE, O "LA PRIMAVERA DE LA REVOLUCIÓN"

El cambio en la dirección del GRFA estuvo marcado, en su comienzo, por dos tendencias muy marcadas: de un lado, facilitar una política de "apertura democrática", y de otro lado, ejecutar los reajustes económicos que propiciaran el restablecimiento de la salud económica del país. Como lo proclamara un general, se entraba en una fase caracterizada por la nueva política económica —haciendo comparaciones con la NEP.

En cuanto a la "apertura democrática", el gobierno procuró distanciarse de todas las figuras que simbolizaran el primer período, o la primera fase, de la revolución. Se llevó a juicio a un sinnúmero de generales y de civiles que el rumor público acusaba de corrupción. Además, se permitió el reingreso de los deportados y la reimpresión de un gran número de revistas, que se situaban en la izquierda como a la derecha del gobierno. Desmanteló el MLR, dando paso para que se hicieran públicos los conflictos internos de la CRTP.

Asimismo, el gobierno presidido por el general Moralez Bermúdez procuró ampliar el respaldo popular al régimen, desarrollando "diálogos" con el "pueblo", que él había inaugurado a principios de año al ser nominado, por razones de

jerarquía, primer ministro y ministro de Guerra. Pero además, Morales sugirió al presidente de la CNA la necesidad de crear un frente de defensa de la revolución peruana en el que se incluirían los sectores militantes del "proceso". Pero nuevamente, las mismas razones para vetar al partido de la revolución siguieron valiendo como para que este proyecto no se hiciera realidad. El problema básico, ahora, era depurar las instituciones estatales de los "infiltrados" de izquierda, que supuestamente buscaban "torcer" el rumbo de la revolución.

Pero todas estas medidas rápidamente se vieron contraproducentes para el mantenimiento del gobierno, en la medida que no hacían sino profundizar la contienda política. En efecto, tal como se dijo, el año 1975 fue de aguda crisis económica: recesión e inflación corrían a la par, de allí que en junio se comenzara a poner las bases de una política estabilizadora que señala, mucho más que todos los discursos y promesas, la realidad de la revolución peruana. Entonces se restringieron los subsidios a los productos básicos —alimentos y combustibles— que al no ir acompañados de un proporcional reajuste salarial, provocó una nueva fuente de hostilidad popular y de las clases medias. En septiembre, el nuevo gobierno devaluó en 17% el signo monetario, lo que agudizó las tendencias inflacionarias de la economía. En estas condiciones, la lucha popular alcanzó niveles que el gobierno se encontraba incapaz de resolver sino por la represión. El gobierno rescató un viejo decreto que se había impuesto hacía cincuenta años, que limita el derecho de huelga, encarceló a dirigentes y abogados sindicales, buscando así reprimir la acción de las masas.

En enero de 1976, el ministro de Economía, el primer civil que integra el gabinete, ante la gravedad de la situación fiscal decretó un plan de reactivación económica que a pesar de su título, tenía una clara connotación estabilizadora y fondomonetarista, que golpeó más duramente aún al grueso de los trabajadores. Es claro, como dice Portocarrero, que "esta política económica tiene una orientación fundamental: proteger las ganancias del capital privado y estatal, así como los recursos del fisco, por un lado, y descargar las consecuencias de la crisis sobre los sectores populares y las capas medias asalariadas, por el otro".

A pesar de las restricciones a las huelgas, éstas tuvieron un crecimiento insólito en la vida sindical, lo que incapacitaba al gobierno para resolver su situación con los intereses internacionales y con la burguesía local. Por otro lado, la burguesía se sumó a la presión sobre el estado para que deshiciera las comunidades industriales, restringiera la autonomía de la prensa y disciplinara al movimiento obrero, a fin de contribuir al arreglo de la crisis económica. Así, el carácter conciliatorio propugnado por los militares se vio más y más recortado por el embate de las clases básicas de la sociedad.

Mientras perseguía al movimiento popular, el GRFA, en su segunda fase "primaveral", fue otorgando concesiones a la burguesía como un claro mensaje de que buscaba su acercamiento. El más importante fue la ley de la pequeña empresa, que limitaba la acción de las comunidades laborales. El segundo mensaje fue el despido de los directores de los periódicos colocando a la prensa bajo el estricto y total sometimiento del Sistema Nacional de Información.

Este continuo distanciamiento del GRFA de las aspiraciones populares y acercamiento a las exigencias de la burguesía culminaron en julio de 1976, cuando el

gobierno provocó una nueva devaluación del 44%, inaugurando posteriormente una sucesión de minidevaluaciones. Conjuntamente a ello y debido a las protestas populares, decretó el estado de sitio, el toque de queda del país, el cierre de las revistas y por último el estado de emergencia nacional, que prohíbe formalmente las huelgas y las reuniones políticas y sindicales. El mismo mes de julio, se hizo patente una división en los comandos militares-gubernamentales por el carácter de estas medidas, por lo que fueron eliminados aquellos generales reformistas que aún quedaban en el GRFA y que simbolizaban el proyecto original del 3 de octubre de 1968. Por último, en noviembre de 1976, el presidente en una reunión oficial con la burguesía anunció la reorganización de las comunidades laborales. La distribución de los beneficios y de las acciones tendría en un futuro carácter individual y las comunidades participarían sólo hasta en un 33% del capital de la empresa, en vez del 50% original.

A ello se suma que varios generales-ministros se han declarado favorables a la inversión privada y a la extranjera, que aporta capitales, tecnología y permite ampliar el mercado externo a las exportaciones peruanas, favoreciendo el reestablecimiento de la salud económica. Luego, en un siguiente momento, se podría nuevamente intentar llevar a cabo el proyecto comunitario del país. Hoy en día, el objetivo sería el de producir más, con mayor "eficiencia". Mientras tanto, la represión popular va en aumento, a pesar de las buenas intenciones de algunos cristianos.

El continuo deslizamiento del GRFA hacia una política burguesa y proimperialista, que supone el acortamiento de los derechos sociales y políticos de la población popular, vuelve a establecer la lucha política en sus justos términos, eliminando el supuesto carácter conciliatorio y autónomo del estado militar en el Perú.

XII. BIBLIOGRAFÍA

Arguedas, José María, *Formación de una cultura nacional indoamericana,* México, Siglo XXI, 1975.

Barrientos Casos, Luis Felipe, *Los tres sindicalismos,* Lima, Ed. Continental, 1958.

Basadre, Jorge, *Historia de la República del Perú, 1822-1933,* Lima, Editorial Universitaria, 1968-1969, 18 vols.

Belaúnde, Víctor Andrés, *Meditaciones peruanas,* Lima, Talleres Gráficos Villanueva, 1963.

Bourricaud, François, *Poder y sociedad en el Perú contemporáneo,* Buenos Aires, Editorial Sur, 1967.

Bourricaud, F., Bravo Bresani, J., *et al., La oligarquía en el Perú,* Lima, Instituto de Estudios Peruanos, Moncloa-Campodónico Editores, 1969.

Cáceres, José Raúl, *El pasmo de una insurgencia.* Ensayo de interpretación de la realidad política peruana, Lima, Ed. Perú, 1942.

Calderón Cockvuron, *et al., Perú, 1968-1973. Cronología política,* Lima, Editorial DESCO, 1975.

Carey, J., *Peru and the United States 1900-1962,* Notre Dame, Indiana, Notre Dame University Press, 1964.

Cotler, Julio, *Crisis política y populismo militar en el Perú,* Lima, mimeo., Instituto de Estudios Peruanos, 1969.

———, *Clases, estado y nación en el Perú,* Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1978.
Chirinos Soto, Enrique, *Perú frente a junio de 1962,* Lima, 1962.
Delgado, Carlos, *Problemas sociales en el Perú contemporáneo,* Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1972.
Haya de la Torre, Víctor Raúl, *Pensamiento aprista,* Lima, Editorial Pueblos, 1961, 5 vols.
Kapsoli, Wilfredo, *Luchas obreras en el Perú por la jornada de las ocho horas,* Lima, 1969.
Klaren, P., *La formación de las haciendas azucareras y los orígenes del APRA,* Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1970.
Malpica, Carlos, *Los dueños del Perú,* Lima, Editorial Peisa, 1975.
Mariátegui, José Carlos, *El proletariado y su organización,* México, Ed. Grijalbo, 1970.
———, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* Lima, Empresa Editora Amauta, 1968.
Martínez de la Torre, Ricardo, *Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú,* Lima, Empresa Editora Peruana, 1947-49, 4 vols.
Matos Mar, José *et al., El Perú actual: sociedad y política,* México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1970.
———, *Perú hoy,* México, Siglo XXI, 1975.
Parra V., Pedro, *Bautismo de fuego del proletariado peruano,* Lima, Ed. Horizonte, 1969.
Payne, James L., *Labor and politics in Peru,* New Haven, Yale University Press, 1965.
Pease García, Henry, *Perú 1968-1973, cronología política,* Lima, Editorial DESCO, 1975, vol. I.
Quijano Obregón, Aníbal, *Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el Perú,* Buenos Aires, Ed. Periferia, 1971.
Sánchez, Luis Alberto, *Testimonio personal. Memorias de un peruano del siglo XX,* Lima, Editorial Villasán, 1969, 3 vols.
Sharp, D., *et al., Estados Unidos y la revolución peruana,* Buenos Aires, Editorial Suramericana, 1972.
Sulmont, Denise, *Historia del movimiento obrero,* Lima, Universidad Católica de Perú, 1976.
Valderrama, Mariano, *Siete años de reforma agraria,* Lima, Universidad Católica de Perú, 1976.
Villanueva, Víctor, *El APRA en busca del poder 1930-1940,* Lima, Ed. Horizonte, 1975.
———, *El militarismo en el Perú,* Lima, Ed. T. Scheuch, 1962.
Zitor, *Historia de las principales huelgas y paros obreros habidos en el Perú,* Lima, manuscrito, 1946 (Manuscrito El 221 en la Sala de investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional del Perú. Bibliografía).

CONSOLIDACIÓN Y CRISIS DEL "CAPITALISMO DEMOCRÁTICO" EN URUGUAY

GERÓNIMO DE SIERRA

"Hace algunos meses tuve la oportunidad de viajar por Europa y de ver un poco cómo funcionan esos países. Así llegué hasta Suiza sobre la cual hemos oído hablar mucho. También hemos oído muchas veces que el Uruguay es la Suiza de América. Luego de haber visitado Suiza yo puedo asegurarles que este país puede ser considerado como el Uruguay de Europa." (Discurso pronunciado por el presidente Luis Batlle Berres en 1951, en la ciudad de Minas.)

En el panorama latinoamericano, la historia del Uruguay moderno asume características a la vez contradictorias y paradigmáticas. Contradictorias, ya que siendo un pequeño país capitalista-dependiente, con poca población y enclavado entre dos "grandes" que se disputaron su territorio desde el período de la independencia, logró sin embargo consolidar un desarrollo capitalista local bastante dinámico y prácticamente ininterrumpido, desde 1903 hasta mediados de la década del 50. Dicho desarrollo fue original no sólo porque permitió crear un relativo "estado de bienestar", sino porque se procesó mediante una intensa participación de los aparatos del estado, y a través de un régimen político con alta estabilidad y fuerte legitimación popular.

Pero decimos que este proceso tiene también un carácter paradigmático pues creemos que el mismo representa uno de los casos latinoamericanos más exitosos de desarrollo capitalista dependiente liderado por las llamadas "burguesías nacionales", al menos para países pequeños y que se incorporan al "crecimiento hacia afuera" sin la presencia en su seno de enclaves extranjeros de significación.

También es paradigmático en cuanto en los últimos lustros su crisis mostró los límites insuperables de un proyecto de ese tipo en la nueva articulación de la cadena imperialista que se consolida desde fines de la década del 50.

Cuando hasta hace pocos años la mayoría de los cientistas sociales definían al Uruguay como un país "democrático" y con predominio de las "clases medias", no hacían sino designar descriptivamente una situación que debe ser explicada analíticamente. Hoy que la "Suiza de América" ya lleva muchos años de crisis económica, de intensas luchas de clases y de "guerra abierta contra el pueblo", es más urgente que nunca aproximarse a una explicación científica de aquella singularidad y de esta culminación, anómala sólo en apariencia.

I. CONSOLIDACIÓN CAPITALISTA EN EL CAMPO Y CRISIS DE HEGEMONÍA

El último tercio del siglo XIX es un período en el cual el Uruguay va consolidando su existencia como estado independiente, aunque siempre signado por su carácter de "estado tapón" entre sus dos grandes vecinos.

Esta consolidación va de par con el proceso de consolidación definitiva del modo de producción capitalista en el conjunto de la sociedad y con su incorporación dinámica al mercado mundial, incorporación que tiene un retraso de casi dos décadas respecto a su vecino, Argentina.

En particular a partir de los años 70 en que gobierna el general Latorre, a través de una serie de medidas de política interior directamente ligadas con la situación del mercado mundial de carnes y lanas, el país se va incorporando cada vez más intensamente al mercado internacional, sobre todo a través de la exportación de dichos productos. Pero en ese momento, y debido al poco desarrollo tecnológico de la producción agraria en el país, la carne y la lana producidas por la "Provincia Oriental" aún eran de calidad relativamente baja, tanto en comparación con los niveles alcanzados en la Pampa húmeda argentina, como en relación a las exigencias de los mercados consumidores "centrales". Por otra parte, aún no se habían instalado los frigoríficos modernos y el saladero seguía siendo la etapa final de elaboración manufacturera de la carne producida.

Pero lo esencial de este retraso "técnico" está directamente determinado por el retraso en la consolidación de las relaciones de producción capitalistas en las estancias uruguayas. A comenzar por la peculiar inestabilidad de la propiedad agraria, la que siguiendo el flujo y reflujo de las endémicas guerras civiles-internacionales, cambia sucesivamente de manos entre los dirigentes civiles y militares de los bandos vencedores. Esta inestabilidad no sólo retrasa las inversiones tecnológicas disponibles en ese momento para la producción agraria (alambramiento de los campos, cruzamiento de razas, etc.), sino que tendía a reforzar las formas "precapitalistas" de relaciones laborales en el seno de la producción agraria, en particular el "caudillismo" de los grandes estancieros, tan útil y funcional para el manejo de los peones como "carne de cañón" en las endémicas guerras civiles.

Es justamente este retraso el que tiende rápidamente a desaparecer desde el período de Latorre. En efecto, impulsado por las presiones crecientes de los propietarios agrarios más avanzados en la vía capitalista, y representando sus intereses en lo fundamental, Latorre apoya una serie de medidas legislativas que tienden a hacer posible la adecuación entre la producción agraria y las exigencias del mercado externo. Dicho proceso de modernización capitalista va de par con la marginación acelerada de una parte importante de los trabajadores agrarios, dejados "disponibles" por los adelantos técnicos introducidos, particularmente por el alambramiento de los predios, al igual de lo sucedido en la Argentina. Esta masa marginal pasa así a trasformarse en un factor más de inestabilidad política: de ella sale una buena parte de los combatientes de las guerras civiles que continúan hasta 1904; ella "provoca" crecientes temores entre los hacendados y el gobierno con las consecuentes olas de represión; y además pasa a presionar en forma considerable sobre el mercado de trabajo urbano, principalmente de la ya macrocéfala capital.

Sin duda hasta bien avanzado el siglo XX permanecen formas atrasadas de capitalismo en el campo, pero al final del siglo ya puede afirmarse que las mismas están estructuralmente subordinadas al modo dominante, aunque al nivel político e ideológico aún tienen un peso considerable y son uno de los elementos causales de la inestabilidad hegemónica de las clases dominantes en ese período.

Se debe insistir en esta inestabilidad hegemónica ya que constituye un aspecto central del sistema político de dominación en este período (a diferencia de la sólida implantación para esa fecha de la llamada "oligarquía" argentina) y porque ella es uno de los componentes centrales de la situación que hará posible la implantación del modelo batllista en el primer tercio del siglo XX.

A esta inestabilidad contribuye la ya mencionada demora relativa en la consolidación de la propiedad de la tierra (la que ve cambiar una buena parte de sus titulares hasta fines de la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez). Otro elemento importante en el caso uruguayo es la gran fuerza en todo ese período de los sectores vinculados al alto comercio (local e internacional) los que lograron impedir la implantación del papel moneda como patrón monetario durante todo el período considerado, con el consiguiente deterioro relativo del poder de los ganaderos, a diferencia, una vez más, de lo sucedido en la Argentina. A ello debe agregarse la fuerte penetración del capital bancario especulativo de Argentina y Brasil, con las consecuentes crisis periódicas a ese nivel, crisis que a menudo toman el carácter de verdaderas catástrofes nacionales.

En los albores del siglo existe pues una aguda crisis en el bloque en el poder y no hay ninguna fracción, ni alianza de ellas, que logre consolidar políticamente su poder en forma estable y mucho menos crear las condiciones para la implantación de un proyecto hegemónico como por ejemplo en la Argentina el llamado "proyecto del 80". Una de sus manifestaciones claves para el sistema político es la permanente ruptura del estado de derecho, y la implantación casi permanente de diversos estados de excepción, como única forma de manejar las tensiones por el poder.

Paralelamente se fue dando el sistemático crecimiento de la población urbana (sobre todo capitalina) motivado tanto por la ya mencionada desocupación de trabajadores rurales, como por la importantísima migración de origen europeo, fruto de la crisis en las metrópolis capitalistas. Al mismo tiempo crece la pequeña industria y el comercio de Montevideo, vinculados casi exclusivamente al mercado de consumo interno, con el consecuente fortalecimiento político de dichos sectores.

Este considerable desarrollo de "lo urbano", que se combina con el tradicional peso histórico de la "ciudad-puerto", configuran otro de los elementos claves para explicar la particular articulación de fuerzas sociales y políticas que hacen posible la posterior estabilidad del "modelo batllista".

II. JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ: CRECIMIENTO CAPITALISTA Y DEMOCRACIA POLÍTICA

Frente a ese panorama de crisis política y de maduración de las condiciones para un proceso estable de desarrollo capitalista dependiente en el país (por primera

vez en muchas décadas) la elección por el colegio elector de Batlle para la presidencia de la República aparece, mirada a la distancia, no tanto como una irrupción anómala sino como una necesidad del conjunto del sistema y de los sectores predominantes de la clase dirigente.

Sin menospreciar el importante papel jugado por su fuerte personalidad, su obra (que es la obra del conjunto de los sectores dirigentes más lúcidos de las distintas fracciones burguesas de la época) representa un exitoso intento por superar la ya mencionada crisis hegemónica del conjunto de la clase dominante, permitiendo de esa manera atender a las necesidades de acumulación tanto de lo más avanzado de la burguesía agraria, como de los emergentes sectores vinculados al comercio y la industria ligados al mercado interno. Dicha tarea se ve además respaldada por las óptimas condiciones del mercado mundial de carnes y de lanas, y la importante renta diferencial que la producción local obtiene gracias a las privilegiadas condiciones naturales para ese tipo de producción.

De todos modos, es indudable que a partir de 1903, año de su primera elección como presidente, se produce una especie de ruptura con el anterior ciclo de crisis políticas casi catastróficas que amenazaban continuamente la propia existencia del estado y las posibilidades de un desarrollo de la acumulación capitalista local. En especial a partir de la victoria de las fuerzas gubernamentales (dirigidas personalmente por el propio Batlle) sobre Aparicio Saravia, cerrando el ciclo de guerras civiles manifiestas, se acelera el proceso de consolidación del conjunto de condiciones necesarias para la producción ampliada del modo de producción capitalista en el país. Se trata no sólo de las condiciones de reproducción ampliadas del capital, sino también (y en un solo movimiento) de las condiciones de reproducción ampliadas de las clases sociales en sus aspectos políticos e ideológicos, sin las cuales tampoco se reproduce el capital.

Dentro de las condicionantes rígidas impuestas por el carácter dependiente del país (aunque con ventajas diferenciales relativamente similares a las que hoy día tienen los países exportadores de petróleo), el llamado "modelo batllista" se caracteriza por haber maximizado el espacio de acumulación de la burguesía local o "interior", tanto ganadero-exportadora como industrial y comercial que produce para el mercado interno. Gracias a un intervencionismo estatal muy acentuado que luego trataremos, lo original es que se estimula el desarrollo simultáneo tanto de las exportaciones primarias (con propiedad "local" de la tierra y el ganado), como de la industria de bienes finales para el consumo interno de los sectores urbanos y de la importante capa de agricultores familiares que rodea la capital. Es este doble aspecto el que dará por largo tiempo el perfil característico de las bases de sustentación social del modelo batllista, aunque en la literatura sobre el tema se minimizó a menudo la primera de las características, haciendo en parte incomprensible el evidente pacto de "no agresión mortal" que existió en todo el primer tercio del siglo entre los sucesivos gobiernos batllistas y la burguesía agraria más avanzada y ligada al mercado mundial.* Es este mismo doble aspecto de

* Más allá de las naturales tensiones entre fracciones burguesas, y entre éstas y el estado como aparato con una gran autonomía relativa en el caso uruguayo, es claro que los sectores agroexportadores integraron durante todo el período el bloque en el poder, aunque no eran hegemónicos en el mismo. Por otra parte ese tipo de alianzas son propias a casi todos

la política económica lo que hizo posible el entrelazamiento creciente de las capas superiores de la burguesía agraria, industrial, comercial y financiera, dando lugar al grupo social y económico denominado, en el lenguaje político posterior, como "la rosca" o "las quinientas familias".

Se configura así un bloque en el poder en el cual el grupo que aún es dominante económicamente (y que tiene como nunca antes posibilidades de hacer efectivo el plusvalor ganadero) pierde sin embargo el reinado político, el que pasa a ser asumido paulatinamente por una alianza de la burguesía industrial y comercial y por la creciente "burguesía de estado". Esta característica propia del bloque es la que maximiza a su vez las posibilidades del desarrollo de la autonomía del estado como organizador necesario de ese desfasaje. Junto con el crecimiento del estado se amplían también de ese modo las condiciones para el importante papel político de la tecnoburocracia y de ciertas capas de la pequeña burguesía.

De todas maneras el papel preponderante del estado era funcional para permitir condiciones generales de acumulación local en una economía dependiente y en un espacio económico tan reducido como el uruguayo.

El papel intervencionista y organizador del estado en lo económico se manifiesta en la creación o el desarrollo de la infraestructura física, administrativa y financiera necesarias para una expansión rápida de la acumulación capitalista, infraestructura que en muchos casos pertenece al propio estado. A ello se agregó una gestión "sana" de las finanzas públicas, la incursión en varias actividades propiamente productivas, y una legislación económica y laboral que dieron un gran impulso al desarrollo y ordenamiento del mercado interior. En ese sentido la amplia legislación social del primer período batllista debe ser vista no sólo en sus connotaciones "populistas", sino también en su faz de organización *stricto sensu* del mercado de trabajo, como el propio Batlle les decía repetidamente a los sectores empresariales que protestaban por la misma.

En cuanto al nivel político-ideológico presenta también características originales respecto al panorama latinoamericano de la época y también posterior. Poco a poco se va afirmando un modelo de dominación burguesa sobre las otras clases de la sociedad, en el cual predominan netamente los aspectos de hegemonía pacífica sobre los aspectos represivos de la dominación. Correspondiendo a un período en el que como vimos era una necesidad de "toda" la burguesía (al menos de sus capas más avanzadas en la vía capitalista) el terminar con las crisis y consolidar una forma legal y pacífica de dominación, y basándose en las posibilidades sociales objetivas abiertas por la relativa complejidad ya alcanzada por la estructura social dominante (sobre todo urbana), se va afirmando el régimen de "democracia representativa", donde los partidos son el canal privilegiado de representación de las clases y capas sociales en la escena política. A ello contribuyó sin duda el hecho de que los dos partidos, abrumadoramente mayoritarios, eran partidos de larga tradición histórica y netamente policlasistas en sus bases (el Partido Colorado, con la fracción batllista en su seno, y el Partido Nacional o Blanco).

Además de la fuerte orientación civilista del grupo batllista, su propia necesidad

los países latinoamericanos y han sido ampliamente explicadas por el carácter específico del desarrollo dependiente en la región.

de afirmación electoral, siempre amenazada en las urnas, propició el recurso frecuente a las elecciones a nivel nacional y departamental. Fue este propio "electoralismo" el que aceleró la política de concesiones sociales del proyecto batllista, a la vez que iba permitiendo la consolidación política de las fracciones y sectores de clase que el batllismo aglutina y expresa en tanto partido (o fracción de partido para ser más precisos). Es esta misma política de apertura creciente del sistema político la que refuerza el papel propiamente político de la pequeña burguesía y ciertos sectores medios los que ven en ella representados muchos de sus intereses inmediatos. Esto es particularmente válido para los sectores ligados a la expansión del estado y sus diversos aparatos, los que en buena medida surgen precisamente de esas capas.

A su vez, al nivel propiamente ideológico, el discurso dominante se tiñe fuertemente de elementos pequeñoburgueses, disimulando con eficacia los lazos cada vez más sólidos que unen al "estado batllista" con el proyecto de la gran burguesía, el que cada vez más pasa a ser patrimonio de toda la nación. Se va consolidando así un proyecto hegemónico nacional-burgués viable para la etapa histórica en cuestión y que oculta "naturalmente" su carácter particularista. Dicho proyecto, liderado incuestionablemente por la fracción batllista (aunque de hecho compartido o tolerado estratégicamente por las otras fracciones políticas de peso) logra así reorganizar al conjunto del bloque dominante a nivel político. Pero además debe señalarse la gran importancia de dicho proceso en cuanto a la desorganización política e ideológica de los sectores populares, en particular de la creciente clase obrera y los demás sectores asalariados.

El fuerte acento igualitarista del batllismo. unido a la popularización de una imagen del estado como situado por encima de las clases en sentido literal (y no sólo poseyendo una importante autonomía frente a las diversas fracciones, que sí la tenía en ese período), hizo extrema la distancia entre los aspectos económicos y políticos de la lucha de clases, fenómeno central para la explicación del largo período de dominación hegemónica de la burguesía en el Uruguay. En ese período se hace enormemente difícil para las vanguardias obreras el lograr articular las importantes luchas reivindicativas de los sindicatos al nivel económico, con el aspecto de dominación política de clases que implicaba la inocultable voluntad de apertura política del gobierno, aunque la misma tomara a los actores en pugna fundamentalmente en su dimensión de "ciudadanos" y no como clases sociales antagónicas respecto al control económico y político de las fuerzas productivas en expansión y de sus frutos.

Este efecto desorganizador del proletariado sólo se revertirá en la década del 60, en la que paulatinamente van emergiendo al nivel propiamente político las contradicciones de clase, o al menos recién para ese entonces esta emergencia deja de ser el patrimonio de las vanguardias dirigentes para trasformarse en patrimonio de amplias masas.

Como ya lo sugerimos anteriormente, otro aspecto importante del modelo político es la capacidad que tuvo el bloque en el poder, en particular a través de la acción del batllismo, de captar a la pequeña burguesía en tanto clase aliada y/o apoyo según los momentos, con lo cual además de ensanchar sus bases de legiti-

midad logró aislarla por mucho tiempo de toda posibilidad de alianza con la clase obrera, lo que reforzó aún más la debilidad política de esta última.

A pesar de una serie de altibajos y de indudables crisis políticas que atraviesan todo el período, se conformó así una especie de "estado de bienestar" que pasó a ser reconocido como patrimonio propio por la gran mayoría de la población del país.

III. CRISIS MUNDIAL Y POLÍTICA DE LA BURGUESÍA EN EL URUGUAY

Es bien sabido que la crisis mundial del 29 generó un descenso brutal, no sólo en la demanda de bienes primarios, sino también en sus precios. Naturalmente que el Uruguay no escapó a los efectos de dicha situación. Pero también la crisis provocó un proceso de compartimentación en el comercio mundial, lo que presionó en el sentido de la autarquía de los espacios económicos nacionales, incluyendo a los países capitalistas periféricos como los latinoamericanos. Los efectos estimulantes para el desarrollo industrial "sustitutivo" de dicha situación han sido ampliamente estudiados y no nos detendremos aquí en su consideración.

Lo que sí nos importa señalar son las condiciones privilegiadas que tenía el Uruguay (sobre todo al nivel del bloque en poder y del sistema político), en particular su burguesía industrial, para maximizar las oportunidades de acumulación capitalista local abiertas por la crisis de la cadena imperialista.

Previamente conviene destacar los efectos acumulativos del modelo aplicado en el primer tercio del siglo, los que habían permitido que en ese momento el país no sólo contara con un sistema político "abierto" y estable, y con una importante extensión de servicios sociales y educativos, sino que además, para 1930 el producto industrial manufacturero ya representaba el 12% del producto bruto interno, cifra sólo superada en América Latina por Argentina y México. Dicha circunstancia fue un elemento de gran importancia para asegurar las condiciones de viabilidad física y económica del importante "despegue" industrial, el que luego de afirmado ya no habrá de detenerse hasta mediados de la década del 50.

En la casi totalidad de los países de América Latina se aplicaron medidas proteccionistas ante la crisis del comercio exterior. En la mayoría de los casos las mismas respondían principalmente a las presiones de la burguesía productora de materias primas y fueron acompañadas por graves crisis institucionales, intervenciones militares, y avances muy importantes de los sectores económico-políticos habitualmente designados como "oligárquicos". En el caso uruguayo dichos fenómenos se dieron pero en mucho menor grado, y creemos que ello se debe en gran parte a la originalidad del bloque burgués que ya señalamos, así como a la forma de su articulación política en el seno de un estado con alto grado de autonomía relativa frente a las diversas fracciones burguesas en presencia. En particular se deben señalar: el relativo equilibrio entre las fracciones dominantes; las sólidas posiciones que ya ocupaba la burguesía industrial en el aparato de estado; la dificultad ideológico-política de que el proyecto "oligárquico" pudiera a esa altura imponerse al conjunto de la sociedad; el factor amortiguador representado por

los numerosos sectores dependientes de los aparatos del estado; la existencia de partidos políticos tradicionales bien implantados y con un importante personal político; la despolitización de las fuerzas armadas; la ausencia de movimientos políticos populares de carácter "amenazante".

Esas circunstancias explican que entre 1929 y 1933, el Consejo Nacional de Administración (forma colegiada que tenía en ese momento una de las "cabezas" del poder ejecutivo, siendo la otra el presidente de la República), hegemonizada por la fracción batllista, llevara adelante una política económica coherente y enérgica, destinada a satisfacer las exigencias de la burguesía local creándole condiciones de superar las presiones del capital extranjero y tratando de dinamizar el mercado interno mediante la enérgica intervención económica del estado. Aplicando en cierto modo el mismo modelo de "crisis" adoptado por los países centrales, trató de estimular el mercado interno, reducir el déficit en la balanza de pagos, y sobreproteger a la producción industrial local mediante el encarecimiento de las importaciones. También encaró una serie de medidas de nacionalización de ciertos intereses extranjeros, aunque con éxito relativo. Lo importante es que dicha política haya podido aplicarse hasta 1933 a pesar de la creciente oposición de los sectores ganaderos, del comercio de importación y exportación y de las empresas extranjeras.

De esa manera, y a pesar de los efectos de la crisis, la industria manufacturera aumenta sus márgenes de rentabilidad y logra desarrollarse en nuevos rubros, paliando parcialmente los efectos recesivos y dándose las condiciones físicas y económicas para su crecimiento acelerado posterior.

Las únicas dos excepciones significativas son la industria frigorífica (ligada a las exportaciones de carne) y la industria de la construcción.

En marzo de 1933 el presidente en ejercicio, Gabriel Terra, disuelve las Cámaras y el Consejo Nacional de Administración y asume plenos poderes junto a un consejo de estado designado por él. En un país con larga tradición de "democracia representativa", y dada la intensa campaña represiva lanzada por el gobierno (sobre todo contra los activistas sindicales y los partidos de izquierda), el hecho desató una amplia ola de críticas en los sectores progresistas y en las filas del batllismo político. La dictadura fue juzgada como tal y así pasó a la historiografía nacional de décadas posteriores. En términos de régimen político la caracterización es incuestionable y nosotros la mantenemos. Sin embargo creemos necesario mostrar que en cuanto a la composición del bloque burgués en el poder, y el carácter de la política económica del estado en ese período, las modificaciones introducidas no son demasiado profundas. Ello es importante para poder explicar coherentemente la posterior evolución de la sociedad uruguaya.

Es cierto, sin duda, que la radical devaluación de la moneda realizada por el gobierno en ese período significó una inmediata traslación de ingresos hacia el sector agroexportador. Es cierto también que en ese período se toman una serie de medidas mucho más favorables para los intereses del capital extranjero y del comercio importador-exportador. En ese sentido es indudable que se produce un desplazamiento hacia dichos sectores en la correlación de fuerzas del bloque en el poder. Sin embargo dicha modificación es notoriamente menor de la acaecida en otros países de América Latina, y sobre todo no logró desplazar de sus sólidas

posiciones a la burguesía industrial. Esto al nivel estructural. Luego veremos como efectivamente la política económica global del gobierno no contradijo las líneas fundamentales que ya se venían aplicando por el Consejo Nacional de Administración, incluso a veces contradiciendo las propias declaraciones oficiales a ese respecto. Eso explica que la fracción industrial negociara sin ruptura real a nivel económico, aunque el sector que mejor la expresaba políticamente (la fracción batllista del Partido Colorado) estuviera en la oposición al nivel de la escena política por lo menos hasta la presidencia de Baldomir en 1938.

En realidad la gran modificación producida por la crisis es el relativo alejamiento de la pequeña burguesía del bloque en el poder y la guerra social abierta que se instaura contra los sectores asalariados, en particular el proletariado. La crisis capitalista general impone un paréntesis en la forma "democrática" de dominación, como condición para mantener la rentabilidad necesaria, tanto en la producción agroexportadora fuertemente deprimida, como sobre todo en el sector industrial nacional que poco a poco pasa a convertirse en el sector más dinámico del conjunto de la economía.

De esa forma, al cierre relativo de las importaciones viene a agregarse una condición fundamental: la baja de salarios impuestos por la "fuerza". A su vez a los sectores ganaderos les interesaba el desarrollo industrial, pues ello dinamizaba el mercado interno, aumentando sus posibilidades de colocación local de la producción (dada la crisis del mercado internacional).

Manteniendo lo fundamental de las medidas cambiarias y del control del comercio exterior, el gobierno de Terra elevó los niveles de protección estatal a la industria, acelerando al mismo tiempo su crecimiento y su concentración. Por lo menos hasta comienzos de la década del 40, dicho crecimiento se apoya en el mercado ya existente y que quedó desabastecido desde el exterior.

En cuanto al estado sigue desempeñando un papel fundamental en la administración de las contradicciones entre fracciones burguesas y como factor dinamizador del desarrollo capitalista local.

Pero incluso al nivel político, debe señalarse la peculiaridad de que el "golpe" fue dado por el presidente electo por el Partido Colorado, sin intervención de las fuerzas armadas y con el apoyo de la mayoría herrerista (conducida por el doctor Luis Alberto de Herrera) del Partido Nacional, y por la minoría del Partido Colorado. Además, tanto en el período de Terra, como en el interregno de Baldomir, una gran parte de la "clase" política tradicional participa activamente en la vida política y en los aparatos del estado (con la salvedad de que en un caso se abstienen los batllistas y en el otro los herreristas).

En todo caso, durante el período que va de 1933 a 1940, fracasa el intento de imponer al país un proyecto agrarista, conservador, y no sólo fracasa, sino que a partir de ese momento la burguesía industrial vuelve a ganar el terreno perdido al nivel político y pasa poco a poco a hegemonizar el bloque en el poder políticamente, a la vez que se trasforma ya claramente en el sector dominante al nivel económico. Pasa entonces a procesarse la recomposición del equilibrio anterior a la crisis, lo que desembocará en la vuelta al régimen de "democracia representativa" pleno, con un inesperado renacer de los partidos tradicionales y la posterior instauración de lo que proponemos llamar un "populismo democrático", por

contraposición a los populismos que se dieron en ese período en Argentina y Brasil, en particular.

IV. LA GUERRA MUNDIAL Y LA TRANSICIÓN HACIA EL "NEOBATLLISMO"

Las intensas luchas interimperialistas que desembocan en la guerra vuelven a crear condiciones aprovechables para un desarrollo industrial acelerado en aquellos países que reúnen al menos dos condiciones: producir materias primas necesarias para el desarrollo del conflicto y poseer en ese momento un grado de desarrollo industrial local que les permita invertir en ese sector los excedentes del comercio exterior. Era el caso del Uruguay, y más allá de las dificultades para importar insumos y bienes de capital, y de las fluctuaciones coyunturales, el equilibrio económico y político interno se vuelca cada vez más netamente hacia la maximización de dichas posibilidades. Dicha evolución tomará su máxima expresión política con el triunfo de la fracción batllista en las elecciones de 1946. Pero las condiciones económicas presionaban desde hacía tiempo en ese sentido, y la presidencia de Baldomir (1938) y de Amézaga (1942), se ven atravesadas por el intenso tironeo de las fracciones dominantes en búsqueda del nuevo equilibrio y ya se orientaban en esa dirección.

Esta evolución se vio favorecida por el hecho de que los sectores agroexportadores si bien habían visto aumentado sus ingresos por la subida de los precios internacionales, desde un punto de vista productivo estaban estancados desde 1929, y además no habían logrado imponer ideológica y políticamente su proyecto. Por otra parte las exigencias político-estratégicas de la guerra habían aislado a los sectores políticos inicialmente ligados a la dictadura de Terra, los que se habían definido a favor del Eje.

Además, desde fines de la década del 30, se había ido saturando la capacidad de compra del mercado interno. Ello presionó objetivamente hacia una paulatina redistribución del ingreso entre los asalariados, política que fue impulsada desde el gobierno cada vez con más claridad, contando para ello con el aval implícito de las distintas fracciones de la burguesía local. Como el estado había mantenido casi intactos sus importantes instrumentos de intervención económica y política (gestados durante varias décadas) ello permitió una intervención más rápida y más profunda que en otros países latinoamericanos.

Otro elemento que favoreció dicho proceso fue el fortalecimiento del sindicalismo obrero (en gran medida impulsado por el crecimiento de la industrialización), y en particular el hecho de que sus vanguardias no hubieran podido ser aniquiladas por la dictadura, como sí había sucedido en otros países. Este hecho merece un cierto desarrollo pues está ligado a una de las características básicas del "bloque histórico" uruguayo hasta que éste entra en crisis aguda durante la década del 60. La fuerte "incomunicación" ya mencionada entre los niveles económicos y políticos de la lucha de clases, impuesta por la forma específica de dominación burguesa existente en el país desde el primer batllismo, se dio de par con una alta autonomía y combatividad de las organizaciones obreras al nivel

reivindicativo. Desde principios de siglo (hasta nuestros días) fracasaron todos los intentos del estado, los partidos tradicionales y los empresarios, por dirigir o controlar orgánicamente a los sindicatos. Paralelamente los partidos y movimientos de base obrera e inspiración socialista no habían logrado impedir que la mayoría de los trabajadores se expresaran políticamente a través del voto por los partidos tradicionales, con dirección burguesa. Ambos elementos unidos hacen más viable la concreción política del nuevo equilibrio socioeconómico que se va gestando y que, como vimos, es funcional a los intereses de la burguesía. Por un lado se dice atender a los reclamos salariales del proletariado y se crean instrumentos jurídicos para canalizarlos (el principal de los cuales es la creación por el gobierno de los Consejos de salarios en 1942). Por el otro, la burguesía tiene un amplio margen de maniobra político para institucionalizar la nueva etapa en forma de "democracia representativa", pues prevé con fundamento que los partidos tradicionales lograrán una vez más heteronomizar a los sectores populares.

Esta inusitada capacidad de sobrevivencia del sistema de partidos ya existentes, no sólo está ligada a su fuerte implantación ideológico-política en el conjunto de sectores sociales del país, sino que se debe en gran parte a la invención de un complejo sistema electoral (que todos los gobiernos fueron perfeccionando) y que permite desalentar al máximo la aparición de nuevas agrupaciones autónomas de los partidos tradicionales (nos referimos al complejo sistema jurídico denominado Ley de Lemas). También contribuye en ese sentido la absorción *de facto* de los partidos tradicionales (Blanco y Colorado) por los aparatos del estado y la consolidación histórica anterior de una numerosa y fuerte "clase" política profesional.

Estos tres elementos, si bien representan elementos en principio independientes entre sí, en el caso uruguayo pasaron a configurar un conjunto interrelacionado sólidamente y con características bien propias. La existencia de una sólida y legitimada élite política (con crecientes aspectos de cooptación oligárquica en su seno) reforzó las presiones para que ambos partidos se pusieran de acuerdo y votaran leyes electorales cada vez más restrictivas, a pesar de sus apariencias de extrema pluralidad. A su vez esta legislación tuvo como contrapartida casi inevitable, en un país donde el estado posee y administra tantos bienes y servicios, que poco a poco el reparto de los votos y los cargos políticos y administrativos fuera haciendo difícil distinguir dónde termina el estado y dónde comienzan los partidos.

Se conjugaron de esa forma un conjunto de circunstancias económicas, políticas e ideológicas que posibilitaron que el nuevo y acelerado impulso al desarrollo industrial sustitutivo de la posguerra adoptara en el Uruguay, una serie de características sociales y políticas que contribuyeron a que amplios sectores populares, y la propia élite dirigente, creyera en la verosimilitud de afirmaciones tan insólitas como las que hizo Luis Batlle Berres (sobrino de José Batlle y Ordóñez) en 1954, y que pusimos como acápite de este trabajo.

V. EL "POPULISMO DEMOCRÁTICO" Y LA NUEVA HEGEMONÍA

La década 1947-1958 marca para el Uruguay un período de indudable prospe-

ridad económica, en el cual los sectores industriales locales representan el núcleo motor del conjunto del sistema, haciendo rendir al máximo las ventajas relativas adquiridas en la década anterior. El estado acentúa su tradicional función reguladora y estimulante del conjunto del sistema económico, y es una pieza clave para la afirmación de un modelo de acumulación claramente centrado en la redistribución del producto social entre las capas medias y proletarias de implantación urbana. Es un período de aumento en los salarios reales tanto en el sector manufacturero, como en el comercio y los servicios públicos y privados. A su vez se desarrolla y perfecciona el conjunto de la legislación laboral y de previsión social, la que alcanza niveles realmente excepcionales en el panorama latinoamericano.

Como en el resto del continente, la acumulación de divisas realizada durante la guerra, facilita esta política de redistribución de ingresos hacia la industria y los sectores urbanos. Pero en el caso uruguayo la implantación de esta política se ve favorecida por la particularidad de que sus exportaciones se orientan básicamente hacia Europa, en momentos en que buena parte de sus importaciones, y sobre todo sus lazos financieros, se orientan hacia Estados Unidos. Ese "cruzamiento" de los vínculos entre distintas fracciones burguesas, de distintos eslabones de la cadena imperialista, aumenta el margen de maniobra del estado, quien bajo la hegemonía del sector industrial, administra los intereses del conjunto del bloque en el poder. Es necesario señalar que, en grandes líneas, este mismo "cruzamiento" existió desde fines del siglo XIX, con idénticas ventajas para el país.

Al analizar la posterior crisis de este modelo veremos que su propia lógica interna incluía las contradicciones básicas que lo harían impracticable en el nuevo equilibrio capitalista que se consolida a fines de la década del 50. Ahora nos interesa hacer resaltar la forma particular en que dicho proyecto socioeconómico se articula con el conjunto de las instancias de la sociedad uruguaya, articulación que nos parece una de las claves de su propia viabilidad para un país dependiente que para ese entonces apenas sobrepasaba los dos millones de habitantes.

El primer elemento a señalar es que desde comienzos de siglo el bloque en el poder, si bien presenta un cierto empate entre las fracciones burguesas principales, en él la burguesía industrial predomina políticamente durante largos períodos, y como ya se dijo, el estado adquiere una importante autonomía relativa, la que juega tendencialmente a favor de la alianza entre la burguesía industrial, la pequeña burguesía agrícola y urbana de tipo productivo, y los sectores asalariados ligados al estado.

Dicha situación "estructural" se ve fuertemente reforzada por la precoz implantación de una hegemonía estable y canalizada por regímenes políticos de tipo "democrático-representativos". El necesario recurso constante a las elecciones que el mismo exigía fue creando una dinámica autosustentada por la cual los representantes políticos de la burguesía debían obtener su legitimidad mediante continuas concesiones a los sectores populares. La constante prédica ideológica en ese sentido, y el consecuente reforzamiento de los partidos como canal privilegiado de representación de las clases, facilitó la "restauración democrática" como contexto útil para la implementación del proyecto socioeconómico populista. Lo que en otros

países exigió los clásicos regímenes "nacional-populares", como forma de desbloquear los frenos "oligárquicos" a dicho proyecto, y como el recurso más apto para "canalizar" la irrupción masiva de nuevos sectores populares al sistema político, en el Uruguay objetivos similares fue posible canalizarlos mediante un resurgir del viejo modelo de hegemonía implantado por el primer batllismo.

Podría sostenerse, no sin fundamento, que en lugar de caracterizar esta etapa como de "populismo democrático", habría que hablar de un "estado de compromiso" con un amplio desarrollo del sistema político, entendido como caja de resonancia de los diversos intereses particularistas. Personalmente pensamos que dicha caracterización es más adecuada para el período 1958-1967 que para el que ahora estamos analizando.

El adjetivo "democrático" es de casi innecesaria fundamentación. Se vuelve al "libre juego" de las instituciones con la correspondiente autonomía de los "poderes". Se dan las máximas libertades públicas, incluyendo las de expresión y asociación. Se mantiene la legalidad de los partidos y movimientos de izquierda (que tienen muy poco peso en la escena política), y se respeta la autonomía organizacional de los sindicatos obreros (aunque periódicamente se reprimen con rigor ciertos conflictos laborales "duros").

En cuanto al carácter "populista" no sólo se lo atribuimos por la naturaleza estructural del proyecto socioeconómico que se impulsa. A ello se agregan una serie de elementos generalmente atribuidos al fenómeno populista:

a] una importante autonomía del estado, unida a su intensa participación en la actividad económica y en el espacio político e ideológico del conjunto de la sociedad;

b] una estatización *de facto* de los dos partidos políticos tradicionales, ambos de base policlasista y dirigidos por los sectores dominantes;

c] una alta subordinación política e ideológica de los sectores populares, los que están heteronomizados y con muy pocas posibilidades de expresión política autónoma;

d] un "frente social" policlasista, de contenido nacional-burgués, hegemonizado por la burguesía industrial y que incluye amplios sectores medios urbanos, la tecnoburocracia estatal y ciertas capas de asalariados industriales;

e] el predominio (gracias al complejo sistema electoral) de la fracción batllista del Partido Colorado, dirigida en ese período por un dirigente político con fuertes tintes carismáticos, el señor Luis Batlle Berres (presidente entre 1947-1950 y 1954-1958).

Se trata de un período en el cual culminan todas las potencialidades del desarrollo capitalista nacional de tipo dependiente, potencialidades definidas con gran claridad estratégica por el "proyecto batllista" del primer tercio de siglo. Los aspectos centrales del éxito de su instrumentación pensamos que residen en: la subordinación política precoz de la burguesía agraria y el alto comercio; el importante papel jugado por el estado; la sólida implantación de un sistema de dominación política e ideológica de tipo democrático-representativo; el privilegio dado a los canales partidarios de representación política, y su paulatina integración a los aparatos del estado; el importante peso social y político que fueron adquiriendo los sectores sociales cuya existencia dependía del empleo público (y

que fueron aliados del bloque en el poder, salvo en el interregno ya analizado).

Antes de entrar a considerar las grandes líneas del proceso de bloqueamiento del modelo y su posterior crisis general, debemos senalar que, incluso durante su período de auge, algunos elementos centrales de su estructura política y económica iban generando contradicciones que luego acelerarían su propia incapacidad de reacción y de adaptación a la nueva coyuntura mundial.

En primer lugar debe señalarse la debilidad estratégica de un desarrollo urbano-industrial de tipo liviano o intermedio, cuya dependencia creciente de los insumos y bienes de capital extranjeros, lo hace depender casi totalmente de las divisas generadas por el sector ganadero, y básicamente de las exportaciones de carne. Como este sector estaba estancado desde 1930 y los niveles de precios le eran cada vez más desfavorables, el cuello de botella que se agudiza a partir de 1955 era perfectamente previsible. Como por otra parte los propios mecanismos de rentabilidad capitalista hacían inviable una eliminación "natural" del carácter latifundista y casi monoproductor en dicho sector, la burguesía "nacional" con base industrial sólo hubiera podido enfrentar ese problema mediante una reforma agraria que tendiera a diversificar la producción y aumentar la productividad. El propio peso político de la burguesía ganadera, y la complejidad del equilibrio político que permitía la hegemonía del conjunto de la burguesía sobre el resto de la sociedad, hacían prácticamente impracticable esa solución. A ello debe agregarse que una ruptura de ese tipo en el bloque en el poder, podía amenazar seriamente todo el sistema de dominación laboriosamente construido durante varias décadas.

En segundo lugar no debe olvidarse que la carencia de recursos naturales otros que alimenticios, y la pequeñez del mercado interno, hacían previsible una gran dificultad para acceder a los niveles de competitividad cada vez más altos exigidos por el desarrollo capitalista desde el fin de la guerra. Eso dificultaba la posible conquista de mercados extranjeros; dicha dificultad se veía aumentada por las trabas crecientes que ponían los paises centrales, en particular Estados Unidos, a la política de protección estatal de la industria local, incluyendo aquella que elaboraba materias primas nacionales (el ejemplo más notorio fue el fracaso de Luis Batlle Berres en su intento por crear una importante industria exportadora de textil de lana, en todas sus etapas de elaboración). Al igual que en el período previo a la crisis de 1929, el costo de la protección estatal a la industria nacional se elevó a niveles prácticamente insostenibles, dado el equilibrio de fuerzas políticas existentes. También aquí la solución debía pasar por una ruptura neta con las condicionantes del sistema capitalista, en este caso con las exigencias de las burguesías industriales del "centro". Pero dado el grado de dependencia técnico-financiera que ya tenía el país con el polo dominante de la cadena imperialista, dicha tarea estaba claramente fuera del horizonte estratégico aceptable para la burguesía industrial uruguaya, por más "nacional" que ella fuera. El problema fue claramente percibido por los gobiernos de la época, pero su acción no pasó de un largo ejercicio de oratoria (particularmente brillante en el caso de Luis Batlle Berres).

En tercer lugar, el complejo sistema de alianzas sociales y políticas, y el fundamento ideológico que las alimentaba, fueron creando una intrincada red de favoritismos, prebendas y concesiones mutuas (cuyo centro organizador pasaba por el propio estado), que al mismo tiempo que hacían factible que el modelo alcanzara

su plenitud, privaban a las diferentes fracciones burguesas de algunos de los instrumentos políticos que le hubieran permitido adaptar "rápidamente" el sistema a las nuevas condicionantes de la cadena imperialista (como efectivamente sucedió en varios países de Latinoamérica).

Por un lado fue corrompiendo al personal político de los partidos tradicionales, y les hizo perder credibilidad ante la opinión pública. Por el otro legitimó socialmente un conjunto de expectativas, y de formas organizativas para defenderlas, que luego hicieron sumamente lento el proceso de reajuste económico y político. Además, el papel dinamizador del estado, se vio acompañado cada vez más por una función clientelística, necesaria tanto para apuntalar los apoyos sociales del gobierno, como para "subvencionar" los niveles de vida y la creación de empleos para sectores sociales cada vez más numerosos, lo que era una condición de sobrevivencia para la propia burguesía industrial, tal como se había desarrollado su producción y su mercado hasta entonces.

VI. CRISIS ECONÓMICA, CRISIS POLÍTICA Y CRISIS IDEOLÓGICA: EL COMIENZO DEL FIN

Ya desde 1955 se percibe la aparición de un fenómeno inexistente en el Uruguay desde 1870: el estancamiento de la actividad económica en todos sus rubros fundamentales. Al sector agropecuario se agregan ahora la industria y los servicios, los que entrarán en una onda recesiva prácticamente ininterrumpida hasta el día de hoy. La producción agrícola y ganadera se mantienen estacionarias. El empleo y la producción industrial apenas si crecen al 1% anual. Las inversiones descienden brutalmente. Las reservas monetarias desaparecen y la deuda externa irá creciendo sin solución de continuidad.

Las tensiones sociales y políticas no se hacen esperar. Las protestas de la clase obrera y de la pequeña burguesía se manifiestan abiertamente. Se desata una intensa lucha intraburguesa por la hegemonía interna al bloque. Las elecciones de 1958 se realizan en un clima de intensa agitación y su resultado consagra a nivel político el cambio en la correlación de fuerzas: el Partido Colorado pierde las elecciones y el poder ejecutivo pasa a manos del Partido Nacional (Blanco).

Esta victoria refuerza las posiciones del sector agroexportador y cada vez más de los sectores monopólicos directamente ligados al capital extranjero. El gobierno levanta inmediatamente un programa claramente orientado a la liquidación del papel del estado en tanto protector y dinamizador de la industria, así como en su función de principal negociador de la cuota de plusvalor a retener por la burguesía nacional frente al capital extranjero. Desde 1959 se negocian préstamos con el FMI y se abren las compuertas a la penetración de capitales extranjeros. Éstos pasan rápidamente a controlar el capital bancario y por su intermedio importantes sectores productivos.

Los capitales se orientan masivamente a los sectores especulativos y también hacia los circuitos económicos extranjeros. Los centros monopolistas internacionales se apropian porcentajes de plusvalor generado en el país en proporciones mayores a las que nunca se habían visto desde el primer período batllista. Concomi-

tantemente se reduce el considerable margen de autonomía que poseía el espacio económico interno, y con él también se reduce el margen de independencia propiamente política del estado nacional.

La inflación con recesión hace su aparición antes que el fenómeno se generalizara en el conjunto del área capitalista en los últimos años.

Esta descripción somera del cambio de rumbo y de situación económica podría hacer pensar que sus efectos fueron inmediatos sobre el conjunto de la estructura económica y social. En realidad lo que se produjo fue un fenómeno bastante más complejo y del que ya adelantáramos algunas de sus condicionantes en la sección anterior. El sistema político y de relaciones de clases tenía tal complejidad, que si bien el sentido del reajuste mantuvo su orientación, el ritmo del mismo fue extremadamente lento y hasta 1968 no logra concretarse en toda su profundidad. Sobre todo la burguesía industrial y el proletariado logran mantener buena parte de sus posiciones hasta esa fecha, cuando los nuevos sectores hegemónicos recurren a lo que fue llamada la "dictadura constitucional" de Jorge Pacheco Areco. En ese lapso los sectores más perjudicados son los asalariados con poco capacidad de organización, los numerosos jubilados y pensionistas y los pequeños productores del campo y la ciudad.

En realidad se produce un desplazamiento de sectores dominantes económicamente (con el refuerzo del capital bancario extranjero, los grandes ganaderos y una minoría de industrias monopólicas, en gran parte directamente ligadas al capital extranjero), pero que no logra traducirse en forma eficaz al nivel de la escena política. Se produce una especie de *impasse* que agrava aún más la crisis económica, y que va a desembocar en una crisis general de hegemonía y en un cambio de régimen político y del tipo de estado mismo.

El nuevo proyecto burgués de desarrollo capitalista, cada vez más integrado al nuevo esquema imperialista para la región, choca con fuerza tanto con el sistema ideológico consolidado de larga data como con los complejos mecanismos políticos en vigor. Esto provoca crecientes fricciones no solamente con el campo popular sino en el propio seno de los representantes políticos de la burguesía, así como en parte del personal de alto rango de los aparatos del estado. Más allá de toda definición ideológica, la propia lógica de los acontecimientos y de las diversas formas que toma en el período la lucha de clases, hacen evidente para amplios sectores que la "Suiza de América" tiene cada vez más dificultades para reproducirse a sí misma.

Es importante señalar que esta inadecuación creciente de los canales tradicionales de representación política de las clases para reproducir el sistema de hegemonía (en particular la crisis creciente de los partidos Blanco y Colorado) va creando un espacio propicio para la autonomización política del proletariado y de la burocracia estatal, e incluso para amplios sectores de la pequeña burguesía, los que se separan cada vez más netamente del bloque en el poder. Las crecientes expresiones de protesta y de organización reivindicativa de estos sectores van generando a su vez un mayor endurecimiento represivo por parte del gobierno.

Dentro de este proceso de estrechamiento de las bases de sustentación del sistema tradicional de dominación del bloque burgués, debe señalarse un fenómeno de gran importancia y casi único en América Latina con esas características tan masi-

vas. Nos referimos al alejamiento de los intelectuales pequeñoburgueses respecto a la ideología dominante y su paulatino tránsito, desde una actitud de neutralidad hacia los dos polos del conflicto social, hasta una actitud cada vez más comprometida con los intereses generales del campo popular. En un período de menos de diez años los sectores burgueses pierden la capacidad tradicional de cooptar sus "intelectuales tradicionales" lo que representa un *handicap* fundamental para todo sistema de dominación, y es aún mucho más grave para un sistema de dominación hegemónica, y, por lo tanto, "pacífico", como el que existía en el Uruguay.

A diferencia de lo sucedido hasta la década del 50, en este período los mejores y más renombrados intelectuales (en un país que cuenta con un gran número de intelectuales y profesionales prestigiosos en el ámbito latinoamericano) se sienten y se manifiestan independientes del *establishment,* aunque la mayoría de ellos dependen económicamente del estado, lo que hace aún más significativo el fenómeno. Por otra parte muchos de ellos se van incorporando poco a poco a la lucha propiamente política, y ello fuera de los partidos tradicionales. Por primera vez en la historia del país, las fuerzas obreras y populares ven afluir a sus filas un número considerable de "intelectuales orgánicos", fenómeno éste de indudable importancia política y que la burguesía percibe con gran claridad. La mejor prueba de ello es la represión sistemática que se desatará posteriormente sobre ellos bajo la acusación de contribuir de una u otra manera con la "subversión".

En cuanto al proletariado industrial y ciertas capas de asalariados no obreros muy numerosos en el país (personal de la enseñanza, funcionarios bancarios, funcionarios de la salud, etc.) reaccionan al plan de reajuste económico y social en forma cada vez más enérgica, unificada y cargada de contenido político (no siempre formulado explícitamente, pero claramente perceptible para la clase dominante).

A diferencia de lo sucedido en la década del 30, esta vez la crisis genera una radicalización creciente de dichos sectores, y también un proceso de unificación orgánica que culminará con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Este organismo tendrá un papel protagónico en la escena social y política, por lo menos hasta 1973, y jugará para ciertos sectores un papel supletorio de un partido con base obrera y suficiente implantación como para convertirse en alternativa real al bloque burgués en crisis.

Esta conquista de la unidad orgánica de la clase obrera y de otros asalariados reviste una gran importancia para la comprensión del curso posterior de las luchas sociales y políticas. Ella debe además ser situada en el panorama histórico de las organizaciones sindicales del país y su endémica multiplicidad para valorar mejor el impacto que ella significa en el sistema de negociaciones tradicional entre asalariados, patrones y estado. Ya dijimos que los sindicatos habían mantenido siempre una real autonomía orgánica frente a los empresarios y frente al estado (en su doble faz de empleador y de "tercero" en las negociaciones). Pero esa autonomía iba de par con una multiplicidad de centrales, al menos desde 1923, lo cual ampliaba objetivamente el margen de maniobra tanto de los empresarios como del gobierno. El hecho de que en plena crisis y frente al comienzo de la escalada represiva hayan convergido las distintas tendencias en una central que agrupaba y dirigía a la mayoría absoluta de los asalariados del país crea un factor decisivo de retardo del proyecto de cambio del modelo económico, proyecto que pasaba

por la necesaria etapa de la reducción de los salarios reales. Ello genera una situación política que ve aumentada sus tensiones de ruptura y hace aún más endeble las posibilidades de sobrevivencia del modelo político abierto y participacionista anterior.

Por orta parte, y frente al retraso político relativo de los sectores populares en el país, la unificación sindical se trasformó en un importante campo de evolución y maduración de la conciencia de clase de vastos sectores. Ello fue favorecido por el hecho de que la mencionada unificación, lejos de constituir un puro acto burocrático, se gestó y sobre todo se desarrolló en medio de intensas luchas reivindicativas, a menudo cargadas de objetivos de política general. La neta hegemonía en su seno de dirigentes de origen obrero y con militancia política en los partidos y movimientos de izquierda facilitó aún más ese proceso.

Paralelamente la década del 60 ve desarrollarse los partidos y movimientos de izquierda existentes (el Partido Comunista y el Partido Socialista nacen en 1921 y 1911, respectivamente), así como el surgimiento de otros nuevos, los que en general pasan a incidir más directamente en el sistema político, aunque su peso electoral propio sigue siendo reducido.

Una mención aparte debe hacerse del surgimiento en 1962, y su posterior desarrollo, del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros). Éste adopta desde el inicio el método de la guerrilla urbana, introduciendo de esa forma un elemento de ruptura radical con las tradiciones de lucha política imperantes en el país a lo largo del siglo XX. A pesar de ello, y como una expresión más de la crisis general del sistema político, su accionar logra tener un impacto creciente pasando a trasformarse en uno de los vectores centrales del panorama político, sobre todo a partir de 1968.

Si bien este crecimiento multifacético de las organizaciones políticas de izquierda tiene sus raíces fundamentales en la dinámica nacional de la crisis, es indudable que su emergencia fue notablemente fortalecida por la consolidación de la Revolución cubana y su enorme influencia sobre las luchas sociales en todo el continente. Ello es especialmente cierto para el caso uruguayo, donde absolutamente todos los partidos y organizaciones de izquierda dieron su apoyo a la misma, e hicieron de sus postulados generales una bandera de lucha propia, más allá de la acentuación diferente de tal o cual aspecto.

VII. LA "DICTADURA CONSTITUCIONAL" O LA PRIMERA FASE DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN: 1968-1973.

La crisis general que vive el país en esos años acelera las contradicciones en el seno de la clase dominante, entrándose poco a poco en una fase de crisis de hegemonía similar en muchos aspectos a la que reinaba en los años previos a la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez a comienzos del siglo. El requilibrio de fuerzas interno entre sus fracciones se va produciendo sin que ello se traduzca inmediatamente en trasformaciones de fondo al nivel de sus representantes políticos. De todas maneras, junto al aumento de la recurrencia a la fuerza represiva

contra los sectores asalariados, que genera críticas entre muchos políticos "tradicionales" (sobre todo del Partido Colorado que está en la oposición hasta 1967 en que retoma el poder ejecutivo), se aprueba una reforma constitucional de tipo autoritario y presidencialista que en líneas generales es aceptada con beneplácito por ambos partidos tradicionales. Mientras unos sectores aumentan sus ataques contra los "vicios" de la democracia y en particular contra los "agitadores" sindicales, otros tratan de reflotar el proyecto desarrollista y populista anterior, sin que ese intento llegue a realizarse (esos tironeos se manifiestan en rápidas crisis ministeriales antes de la muerte del presidente Gestido, colorado electo en 1966 y que asume en marzo de 1967).

Sin embargo aún no se manifiestan públicamente tendencias dispuestas a la ruptura del marco legal, y bien que todos los sectores burgueses perciben que la crisis desborda las posibilidades de negociación del sistema político, aun nadie hace doctrina de la represión necesaria o implícita en la propia lógica de los acontecimientos. Como por otra parte aún son muy fuertes los sectores industriales y comerciales ligados al mercado interno (y sus representantes políticos), ello sirve de pantalla indirecta a una liquidación brusca del nivel de vida de los asalariados y por ende a los métodos represivos que era necesario utilizar para imponerlos dada la fuerte capacidad de resistencia que ellos habían adquirido (y de presión política indirecta, a través del auge de las movilizaciones populares y de la guerrilla).

De todos modos, ante el *impasse* de las luchas intraburguesas y la creciente presión popular, el presidente Jorge Pacheco Areco * inicia, sin una oposición frontal que tenga carácter de veto, un ciclo de consolidación paulatina de una dictadura *de facto,* y va concentrando todos los poderes en manos del ejecutivo, para lo cual obtiene la tolerancia de hecho de la mayoría del Parlamento.

Desde el inicio de su mandato el presidente instaura en forma permanente las "medidas de seguridad" (equivalentes al estado de sitio en otros países) y comienza a impulsar un doble proceso político. A nivel de las fracciones burguesas acelera el avance hacia el poder político de los nuevos sectores dominantes al nivel económico, en particular de aquellos directamente ligados al capital extranjero, sobre todo norteamericano. Consciente de la descomposición de los partidos tradicionales, también intenta la constitución de un movimiento político propio, con fuertes tendencias de tipo fascista. Con ese objetivo usa a discreción los resortes del estado, incluyendo los organismos policiales y paramilitares (aunque no se apoya en las fuerzas armadas como aparato específico).

A este nivel su acción es relativamente exitosa, como lo mostró la muy importante votación que obtiene su candidato en noviembre de 1971. (Aun más votos obtuvo en esa ocasión su candidatura a la reelección, la que no se hizo efectiva por no obtener la mayoría calificada que exigía la reforma constitucional que ello implicaba).

Con respecto a los sectores populares desarrolla una durísima política de repre-

* Quien asume, a fines de 1967 en su carácter de vicepresidente, por la muerte del presidente Gestido. Pacheco no proviene de la "clase política" tradicional, aunque es de origen Colorado.

sion a los militantes políticos y sindicales. La misma incluye represiones callejeras, internamientos administrativos de miles de huelguistas, militarización de funcionarios públicos, cierre de periódicos, muertes en enfrentamientos con la policía y alejamiento del país de militantes políticos. Al mismo tiempo intensifica la represión contra la guerrilla, para lo cual cuenta con importantes asesores y equipos, tanto brasileños como americanos.

Sin embargo puede decirse que en líneas generales su acción no logra doblegar el descontento popular y las luchas de resistencia de estudiantes, obreros y asalariados en general. Lo que sí obtiene por decreto es paralizar los organismos jurídicos de negociación salarial existentes desde la época de Luis Batlle, y por ese intermedio reduce fuertemente los salarios reales, desbordados por la galopante inflación de ese período. Uno de los efectos "no esperados" de esa operación fue la necesaria politización de todos los conflictos reivindicativos, varios de los cuales se trasformaron en verdaderos desafíos al régimen, dado el carácter prácticamente innegociable de sus exigencias, y la creciente concientización de los sectores populares implicados.

Por su parte la acción guerrillera, lejos de decrecer, alcanza su mayor grado de eficacia e impacto político, logrando en este período atraer hacia sus aparatos, o por lo menos hacia sus posiciones políticas, a vastos sectores, fundamentalmente juveniles, pero no únicamente.

La situación política general en todo el período de Pacheco se presenta pues como muy compleja, y las relaciones de fuerza son sumamente cambiantes, así como las alianzas y contra-alianzas, sobre todo en el seno de los sectores burgueses.

Por un lado el grueso de la gran burguesía ve con buenos ojos la acción de un "ejecutivo fuerte", que pone un cierto freno a la movilización popular y, sobre todo, que logra en pocos meses lo que dos gobiernos Blancos no habían obtenido en 10 años: hacer descender netamente el salario real de los obreros industriales, y eliminar los Consejos de salarios y los convenciones colectivas en tanto mecanismos normales para la determinación de las remuneraciones. También se ve con buenos ojos el control relativo de la inflación, la que había llegado a límites que hacían prácticamente imposible toda previsión económica.

Sin embargo, amplios sectores de la burguesía industrial y ganadera se veían perjudicados por los amplísimos privilegios otorgados por el gobierno al capital financiero (en gran parte extranjero) y a un pequeño núcleo de empresas directamente ligadas al mismo. Cada vez era más notorio el privilegio acordado a las empresas e intereses directamente vinculados a los grupos económicos extranjeros y a ciertos monopolios nacionales, y en ese plano las tensiones fraccionales eran muy importantes, llegando a provocar la caída de varios ministros claves en un breve plazo de tiempo. A su vez los empresarios que trabajaban para el mercado interno "protegido" y que además carecían de contactos financieros internacionales (que eran la gran mayoría), se veían perjudicados directamente por la caída del nivel de consumo popular y de ciertos sectores medios. De esa forma chocaban en la coyuntura sus intereses económicos inmediatos, con su apoyo tácito a la represión política contra las fuerzas populares.

Pero además debe tenerse en cuenta que tanto el estilo de gobierno como la política concreta de Pacheco entraban en colisión con los aparatos y el personal

estable de los partidos tradicionales, los que rápidamente iban siendo desplazados a un segundo plano, salvo el pequeño círculo de incondicionales, en su gran mayoría personajes sin significación política propia. Mientras se mantuviera el régimen parlamentario, y sobre todo las elecciones populares y el régimen de representación proporcional, los "políticos democráticos" estaban obligados a denunciar el carácter arbitrario e ilegal de la política gubernamental so pena de ver minada toda su base de legitimidad en el plano electoral. Eso fue una de las causas básicas del juicio político intentado en las cámaras al presidente, el que de todas maneras no prosperó al no alcanzar los votos necesarios para su efectivización. Lo importante aquí no es tanto que se haya iniciado el juicio político cuanto que el mismo no haya prosperado. Su fracaso representó probablemente el comienzo del fin de todo el sistema institucional vigente, pues las nuevas fuerzas políticas emergentes en el campo burgués supieron desde ese momento que la mayoría de la "clase política" estaba dispuesta a dejar violar impunemente la Constitución y las leyes que ella misma había votado, incluyendo en esa mayoría a los parlamentarios del Partido Colorado y muy especialmente a los herederos orgánicos de la fracción batllista, ahora dirigidos por otro miembro de la familia, el senador Jorge Batlle Ibáñez.

Nada extraño entonces que todo este período de "dictadura constitucional" haya visto irse ampliando las pretensiones y el campo de acción de algunos aparatos represivos del estado, los que incursionan cada vez más en las esferas propiamente políticas e ideológicas de la sociedad.

Las elecciones de noviembre de 1971 se preparan entonces en un clima político sumamente enrarecido. Como vimos, la crisis política e ideológica en el bloque en el poder y entre sus representantes políticos en el Parlamento es sumamente aguda. Diez años de estancamiento económico y la ruptura del "pacto social" implícito en el modelo anterior hacen aún más difícil la sobrevivencia del "estado de compromiso" que se arrastra desde hace años. Junto a la carencia de un nuevo proyecto social global por parte de la clase dominante y la autonomización política e ideológica creciente de los sectores populares y de amplios sectores de la pequeña burguesía pauperizada y "en rebelión", se presenta la amenaza creciente de la guerrilla urbana y su impacto social en aumento.

En ese contexto, los sectores más lúcidos de la burguesía (y no por ello los menos reaccionarios) deciden jugar dos cartas simultáneamente: mantienen las medidas de seguridad y una fuerte represión contra las fuerzas políticas de izquierda, incluyendo a los sectores que se agrupan en el Frente Amplio y concurren a la campaña electoral y a las elecciones; por otro lado lanzan lo que llamaron la "escalada cívica" (como antídoto a la llamada "escalada subversiva"), lo que significaba tratar de legitimar por las urnas el giro radical que estaba tomando el sistema político y con él la política económica general, tanto de los sectores empresarios del gran capital como del propio estado.

La gran novedad en esas elecciones eran las pretensiones del Frente Amplio de romper, por primera vez en la historia del siglo, el monopolio electoral de los dos partidos tradicionales. La amenaza parecía tanto más real cuanto que este frente agrupaba no sólo a la mayoría de los partidos y grupos de izquierda (PC, PS, GAU, 26 de Marzo, etc.) sino que a él se habían integrado la Democracia Cristiana y

varios desprendimientos de los partidos tradicionales. Además el Frente tenía el apoyo público de la Central de Trabajadores y del MLN (Tupamaros), este último desde "el exterior". El carácter de su programa hacía pensar, por otra parte, en la lógica adhesión al mismo de ciertos sectores de la pequeña y mediana burguesía productiva y comerciante. A su vez el triunfo electoral no muy lejano de la Unidad Popular en Chile proyectaba sobre esta fuerza política una serie de atributos que sin duda representaban una trasposición exagerada, si se tiene en cuenta las grandes diferencias existentes entre ambos países en cuanto a la correlación de fuerzas sociales y, especialmente, en cuanto a su expresión orgánica en la escena política.

En rigor, y a pesar de las importantes modificaciones políticas e ideológicas ocurridas en el campo del pueblo en esos años, el Frente Amplio no llegó a representar un verdadero contraproyecto radical al modelo de dominación capitalista en crisis. Justamente su fuerza en la escena política provenía de que conjugaba diversos embriones de ese contraproyecto, con amplias manifestaciones de "reacción" a la crisis de la pequeña burguesía, sectores medios diversos, e incluso capas de la burguesía que ya no se sentían políticamente representadas en los viejos partidos tradicionales.

Lo cierto es que la campaña electoral de estos últimos recurrió a los métodos más duros de "maccartismo" ideológico y por supuesto a múltiples formas de represión directa a sus militantes (incluso se atentó contra la vida del general Líber Seregni, candidato a presidente por el Frente).

Finalmente, dos meses antes de las elecciones el gobierno entrega la responsabilidad directa de la represión a la guerrilla (aunque se aplicó también a los militantes sindicales y políticos) a las fuerzas armadas, en lo que constituye sin duda el primer escalón de su entrada formal a la vida política, como luego se comprobó.

VIII. LA "DICTADURA CÍVICO-MILITAR" O LA SEGUNDA FASE DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN: 1973-1975

Las elecciones son ganadas por el candidato de Pacheco, Juan María Bordaberry, un propietario rural sin base política propia y sin un programa global para encarar la crítica situación. Además el resultado es tachado de fraudulento por Wilson Ferreira Aldunate, candidato del Partido Blanco, quien paradójicamente había levantado varias de las banderas "democráticas" tradicionalmente representadas por el Partido Colorado. En cuanto al Frente Amplio obtiene casi el 20% de los votos en todo el país y el 30% en la capital, donde su candidato a presidente obtiene la mayor votación entre los presentados.

El resultado de las elecciones, en cuanto a sus efectos sobre el sistema político, tiene una serie de significados contradictorios.

Por un lado logra otorgar una prórroga (que los hechos mostrarán era de poca duración) al régimen de "democracia representativa", que como ya vimos estaba en una grave crisis y sólo funcionaba en sus aspectos formales. Aunque sospechado fuertemente de fraude, el proceso electoral inviste nuevas autoridades a través del

voto popular. Además las inviste dentro del personal político tradicional, desautorizando en apariencia tanto la prédica de los grupos armados, como del Frente Amplio.

Por otro lado el resultado electoral representa el primer golpe sólido al monopolio electoral de los dos partidos tradicionales en lo que va del siglo, lo que representa un indicador limitado pero claro de la paulatina superación de la heteronomía política de los sectores asalariados. En todo caso es evidente que las banderas de soberanía nacional, desarrollo económico y democracia política, no sólo cambian de manos, sino que son vistas por importantes sectores sociales como necesariamente unidas a las de "justicia social" y "cambios profundos" de régimen.

En cuanto a la relación de fuerzas burguesas en el Parlamento, si bien el grupo "pachequista" se fortalece dentro del Partido Colorado y aumenta transitoriamente su legitimación política, no obtiene la mayoría necesaria para imponer su política "legalmente" y sin alianzas. A ese nivel el *impasse* se mantiene incambiado, con el agravante de que la ruptura con las numerosas fuerzas de Ferreira Aldunate se ha hecho casi total.

Como paralelamente continúa en ascenso la movilización sindical y la ofensiva de la guerrilla, y la situación económica sigue siendo crítica, la capacidad de control general de la situación por el gobierno sale claramente deteriorada, generalizándose la impresión popular y en los dirigentes políticos de que "el barco se hunde".

En ese contexto de graves tensiones políticas y sociales con participación de las masas, el MLN desencadena los primeros pasos de la que él mismo definió como una ofensiva general contra el gobierno, y más específicamente contra las fuerzas armadas, siguiendo la lógica casi necesaria de la estrategia de guerrilla urbana que aplicaba. Ante ello se produce la "cristalización" del conjunto de contradicciones ya señaladas, y se desencadena una secuencia de acontecimientos político-militares que trasforman radicalmente la coyuntura, llevando a las fuerzas armadas al primer plano de la escena política, rearticulando la relación de fuerzas en presencia, y desplazando el aspecto principal de la lucha política desde el plano político-electoral al plano político-militar. Esta situación ha de durar hasta enero-febrero de 1973.

Es un momento en que el poder político se ve enfrentado a una opción prácticamente insoluble. Por un lado quiere conservar la dirección del proceso, doblegando las luchas políticas y sindicales en ascenso y poniendo fin a la acción guerrillera, pero es consciente de su incapacidad para ello.

La otra alternativa que se le ofrece es delegar en las fuerzas armadas el manejo de la situación política (lo que éstas reclaman cada vez con más fuerza), pero también es plenamente consciente de que esa solución tiene pocas oportunidades de revertirse a corto plazo. El ejecutivo y la mayoria absoluta del Parlamento optan por una solución de compromiso y que esperan sea de carácter transitorio: suspenden todas las "garantías individuales" previstas en la Constitución y votan el "estado de guerra interna" (figura jurídica inexistente en la Constitución), catapultando a las fuerzas armadas al primer plano de la escena política, hecho que no se daba en el país desde hacía 70 años.

La mayoría "burguesa" en el Parlamento viola de ese modo la Constitución

para tratar de salvar al mismo tiempo el conjunto del sistema de dominación, y si es posible los restos del "régimen republicano democrático", es decir la existencia misma del Parlamento y su propia supervivencia como élite política. Salvo el Frente Amplio, todas las fracciones políticas votan el estado de guerra interna y rápidamente los hechos mostraron que lo que habían votado era el acta de defunción de un régimen político tambaleante y de una forma de estado capitalista que ya era claramente disfuncional para resolver las contradicciones propias de la etapa.

A partir de ese momento la represión se hace más dura y sistemática, comenzando por los grupos guerrilleros a los que logra desarticular en su faz operativa y aislar de los sectores mayoritarios del movimiento de masas, y extendiéndose poco a poco a todas las formas de actividad política y sindical opositoras.

La "dictadura constitucional" se hace cada día más inconstitucional y casi toda la estructura legal es puesta entre paréntesis. Además, en nombre de la guerra "contra delincuentes que amenazan la patria", tanto las fuerzas armadas como el poder político, aún vigente formalmente, aceptan el uso de todos los métodos "sucios", generalizándose el empleo indiscriminado de la tortura física y psicológica.

Siguiendo un proceso ya clásico, que en el Uruguay se da más rápidamente en virtud de la crisis aguda del poder político civil, los aparatos represivos van extendiendo su esfera de acción a la esfera política, ideológica y administrativa, trasformando sus funciones tradicionales en la sociedad y los aparatos del estado. En ese proceso se manifiesta cada vez más públicamente la voluntad de las fuerzas armadas de asumir tareas políticas generales y una de sus fracciones comienza incluso a atacar la corrupción y el carácter "oligárquico" de ciertos sectores de la clase dominante. Poco a poco toda la "clase política" percibe que es su propia existencia la que está en juego, e intenta recuperar terreno. Incluso algunos sectores de derecha atacan públicamente la existencia de las torturas y, hacia febrero de 1973, lanzan la consigna de "retorno de los militares a los cuarteles", y critican el "militarismo inconstitucional" que ellos mismos habían entronizado con su voto. Pero ya es demasiado tarde y las fuerzas armadas realizan su primer "golpe", conocido como el de los "comunicados 4 y 7", e imponen su participación en los mecanismos de gobierno a través de la creación del Consejo de Seguridad Nacional, ante el silencio del Parlamento en tanto cuerpo y frente a una relativa pasividad y neutralidad de la mayoría de las fuerzas de izquierda. Esta actitud se explica, en parte, por el hecho de que estas últimas estaban en plena ofensiva contra el gobierno y porque en ese momento el "tono" de las declaraciones militares tomaba una relativa distancia frente a los sectores más reaccionarios del gobierno. El carácter puramente táctico (en cuanto a su propio equilibrio interno y en cuanto a su legitimación frente a la opinión pública) de estas declaraciones se hizo ver rápidamente y, como veremos, ya para el "segundo golpe" de junio las fuerzas de izquierda y la Convención de trabajadores harán una muy importante resistencia a la acción de los militares.

A partir de febrero, pues, el régimen político se ha trasformado, el centro de poder real se ha desplazado y los canales de representación política de las clases y capas sociales se han modificado en gran medida, proceso que culminará cua-

tro meses después. El régimen "democrático republicano de gobierno" sólo sobrevive en apariencia, a pesar de las declaraciones en contrario de Bordaberry y de los mandos militares. La "dictadura cívico-militar" estilo uruguayo ha comenzado su ciclo aún hoy inconcluso.

Rápidamente, y mientras aumenta la represión contra los sectores populares, las fuerzas armadas pretenden forzar al Parlamento para que quite sus fueros a un senador que ellas acusan de "sedicioso". Ante la negativa de aquél a realizar ese acto "exageradamente" ilegal, disuelven las cámaras acusándolas de colaborar con la sedición y con la destrucción del "estilo tradicional de vida" del país. Bordaberry acepta el golpe y los partidos tradicionales ofrecen una resistencia casi puramente verbal.

Por el contrario el Frente Amplio y la Central de Trabajadores organizan una intensa resistencia civil. Se declara una huelga general con amplia participación y que en sus momentos difíciles se mantiene con el impulso de los sectores más radicales de la clase obrera y la intensa colaboración de amplias capas populares. Esta resistencia dura casi dos semanas y tiene una gran importancia política pues los sectores de izquierda, apoyados fundamentalmente en la clase obrera, asumen a su cargo los tradicionales valores del sistema político uruguayo y "obligan" a que la fracción de Ferreira Aldunate del Partido Blanco se pronuncie por una acción conjunta contra la dictadura.

De todas maneras la resistencia es vencida, en parte por la correlación de fuerzas en sentido estricto, y en parte por la propia limitación de las perspectivas políticas que el movimiento de resistencia tiene en esos momentos, tanto por razones internas al movimiento popular, como por la renuencia de los sectores burgueses más liberales a asumir los compromisos que la situación exigía para su éxito en la coyuntura. No es ajena a esa renuencia el hecho de que en ese momento fuera la clase obrera, y dentro de ella los sectores con más perspectiva política, los que representaban la columna vertebral del movimiento.

A partir de ese momento la dictadura cívico-militar desmantela todos los restos del sistema político democrático que quedaban en pie; ilegaliza todos los partidos y agrupaciones políticas progresistas y congela la actividad de los restantes; disuelve la Convención Nacional de Trabajadores y reprime duramente a los sindicatos que intentan reclamos; cierra todos los órganos de prensa independientes e instaura una estricta censura para los restantes; reprime con prisión toda forma de oposición ideológica y política; interviene la Universidad y los demás órganos de enseñanza. En una palabra, la extensa y compleja sociedad civil que se había desarrollado durante setenta años va siendo penetrada por un verdadero estado policial, lo que poco a poco significa lisa y llanamente su desaparición.

Ante la desaparición de la acción legal de los partidos políticos, incluso los tradicionales, las fuerzas armadas se van trasformando en el partido del conjunto de la burguesía, sin que por ello se pueda decir que asuman la representación exclusiva de una fracción bien determinada de la misma. Este proceso se vio favorecido incluso contra la voluntad de muchos de sus cuadros superiores, por el hecho de que su irrupción en la escena política surge no solamente como remedio a una crisis interna en el seno de las clases y fracciones integrantes del bloque en el poder, sino que también vino a enfrentar una crisis de hegemonía grave del

conjunto del bloque en relación con las clases subordinadas, e incluso de algunas fracciones de las clases aliadas o apoyo.

Ante la ausencia de los partidos, las fuerzas armadas se trasforman objetivamente en el aparato privilegiado para la organización política de los diferentes sectores burgueses que aún integran el bloque en el poder.

Sin embargo la propia verticalidad intrínseca al aparato militar introduce una gran rigidez en el procesamiento de las luchas por la hegemonía entre esas fracciones, luchas que se agudizaron ante la persistencia de la crisis económica y ante la ausencia de un nuevo proyecto societal viable para la etapa. Ello hace que cada fracción de la burguesía busque congraciarse con un sector o con un dirigente de las fuerzas armadas, y éstos a su vez buscan congraciarse con sectores sociales o territoriales de la burguesía, como base de apoyo para sus propias luchas corporativas por el poder. De ahí las crisis periódicas en la cúpula del equipo cívico-militar y las dificultades para encontrarles una solución estable y legitimada ante la opinión pública.

Son, pues, las características propias a un tipo de estado de excepción como el de la dictadura cívico-militar, agravadas por la falta de perspectivas concretas de viabilidad del actual proyecto de acumulación, las que dan a esta forma de dominación burguesa al mismo tiempo su fuerza y su debilidad. La mantención ilimitada de la represión a las organizaciones políticas no hace sino expresar esa situación, a la vez que disminuye en forma creciente su legitimidad.

En el caso del Uruguay, una vez cerrado el largo ciclo histórico de acumulación capitalista dependiente, y luego de la fractura del sistema de dominación burguesa hegemónica y su sustitución por la coerción como método de dominación social y política, el nuevo régimen aparece como estructuralmente incapaz de canalizar un proyecto que pueda imponerse y ser aceptado por las capas mayoritarias del país. Por eso puede decirse que, en términos económicos, políticos e ideológicos, el capitalismo no logra encontrar un camino de reproducción ampliada en el Uruguay de hoy.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, Eduardo, *Anales históricos del Uruguay,* Montevideo, Barreiro y Ramos, 1953, 6 vols.

———, *Economía política y finanzas,* Montevideo, Universidad de la República, 1973.

Arena, Domingo, *Batlle y los problemas sociales del Uruguay,* Montevideo, Ed. Claudio García, s/f.

Barran, José Pedro, *Apogeo y crisis del Uruguay pastoril y caudillesco,* Montevideo, Ediciones La Banda Oriental, vol. IV, (Colección Historia Uruguaya).

Benvenuto, Luis Carlos, *Breve historia del Uruguay.* Economía y Sociedad, Montevideo, Editorial Arca, 1967.

Blanco Acevedo, Pablo, *El gobierno colonial del Uruguay y los orígenes del Uruguay,* Montevideo, Ed. A. Barreiro y Ramos, 1955.

Costa, Omar, *Los tupamaros,* México, Ediciones Era, 1969.

D'Elia, Germán, "El movimiento sindical", *Nuestra Tierra* núm. 4, Montevideo, 1969.

Errandonea, Alfredo, *Las clases sociales en el Uruguay actual,* Montevideo (Colección Enciclopedia Ilustrada de la Civilización Uruguaya núm. 53).

Faraone, Roque, *El Uruguay en que vivimos,* Montevideo, Ed. Arca, 1965.
Haedo, Eduardo, *El Uruguay y la política internacional del Río de La Plata,* Buenos Aires, Ed. Eudeba, 1972.
Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, *Boletines de coyuntura, I, II y III,* Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1971, 1972 y 1973, respectivamente.
———, *Curso sobre la realidad económica nacional,* Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1972.
———, *El proceso económico del Uruguay,* Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1968.
———, *La estructura industrial del Uruguay,* Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1971.
Louis, J. A., *Batlle y Ordóñez, apogeo y muerte de la democracia burguesa,* Montevideo, Ed. Nativa Libros, 1969.
Martínez, J. J., *La telaraña bancaria,* Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1969.
Methol Ferre, Alberto, *A dónde va el Uruguay,* Montevideo, Ed. Rosgal Rosillo, 1958.
Millot, J.; Silva, C. y Silva, Lindor, *El desarrollo industrial del Uruguay, de la crisis de 1929 a la posguerra,* Montevideo, Departamento de Publicaciones, Universidad de la República, 1973.
Nahum, Benjamín, *La época batllista 1905-1929,* Montevideo, Ed. La Banda Oriental, 1975 (Colección Historia Uruguaya).
Oddone, Juan Antonio, *Economía y sociedad en el Uruguay liberal,* Montevideo, Ed. Banda Oriental, 1967 (Colección Reconquista).
———, *La formación del Uruguay moderno. La inmigración y el desarrollo económico social,* Buenos Aires, Ed. Eudeba, 1966.
Pintos, Francisco R., *Historia del movimiento obrero en el Uruguay,* Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1960.
———, *Uruguay: de la liberación al afianzamiento de la burguesía,* Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1966.
Pivel Devoto, Juan E., *Historia de los partidos políticos en el Uruguay, 1811-1897,* Montevideo, Ed. Claudio García, 1942, 2 vols.
Sala de Tourón, L., Alonso, Rosa, *et al., La oligarquía oriental en la Cisplatina,* Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1970.
Sala de Tourón, L., Rodríguez, J. C., *et al., Estructura económico-social de la colonia,* Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1967.
Sierra, Gerónimo de, *Uruguay: desarrollo dependiente, democracia representativa y dictadura,* México, Siglo XXI, 1977.
Solari, Aldo E., *El desarrollo social del Uruguay en la posguerra,* Montevideo, Ed. Alfa, 1967.
Tisnes, Alberto; Astori, Danilo, *et al., Las inversiones extranjeras en el Uruguay,* Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1975.
Trías, Vivian, *Economía y política en el Uruguay contemporáneo,* Montevideo, Ed. Banda Oriental, 1968.
Vázquez Franco, Guillermo, *Ingleses, ferrocarriles y frigoríficos,* Montevideo (Colección Enciclopedia Ilustrada de la Civilización Uruguaya, núm. 25).
Veiga, Danilo y Aguirre, Rosario, "Las inversiones extranjeras en Uruguay: 1870-1930", *Cuaderno de Ciencias Sociales,* núm. 2, Montevideo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1971.
Williman, José Claudio, *Los patricios,* Montevideo, (Colección Enciclopedia Ilustrada de la Civilización Uruguaya, núm. 14).
Zum Felde, Alberto, *Proceso histórico del Uruguay,* Montevideo, Ed. Arca, 1967.

HISTORIA DE MEDIO SIGLO EN VENEZUELA: 1926-1975

D. F. MAZA ZAVALA

I. INTRODUCCIÓN

La sociedad venezolana se organiza —a través de la historia— sobre la base de la explotación de un producto originado en el sector primario de la economía. Durante la última fase de la era colonial —siglo XVIII— el cacao representó esa condición.[1] El cacao fue cultivado extensivamente en tierras bajas, cercanas a la costa, de clima cálido y húmedo; y en su producción —destinada en la casi totalidad a la exportación— se empleó principalmente fuerza de trabajo esclava, procedente de África. Después de la guerra de independencia, en las primeras décadas del siglo XIX, y hasta la tercera década del XX, el café constituyó la base económica concreta, y su cultivo —menos extensivo que el del cacao— se hizo en laderas de montaña, en clima más fresco, a la sombra de los caobos, aguacates y otros árboles frondosos, con el empleo de fuerza de trabajo de cierto modo *enfeudada*[2] y en parte libre, bajo las formas de "colonato", "aparcería" y otras, consistentes en una relación mixta de trabajo y arrendamiento entre los conuqueros-peones y los hacendados terratenientes. El café también era destinado en su mayor parte a la exportación. En la segunda década del siglo XX comenzó la explotación comercial de petróleo por compañías extranjeras, y para 1926 el valor de esta mercancía superaba al de los productos agrícolas tradicionales —café, cacao, principalmente— en la exportación. Desde entonces, el petróleo constituyó la base de sustentación de la economía venezolana y las relaciones generadas por su extracción y comercialización han formado el núcleo de la dinámica social del país. Cada etapa caracterizada por la explotación económica de un producto primario —cacao, café, petróleo— ha dejado huella en la estructura económico-social; pero no se trata de una simple yuxtaposición de residuos históricos, sino de una compleja incorporación con múltiples vinculaciones y trasformaciones, por lo que ese proceso ha venido a constituir la realidad que se ha dado en llamar *heterogeneidad estructural* de la economía. Esta heterogeneidad o complejidad, desde luego, tiene un condicionante

[1] Otros productos exportables —tabaco, cueros, añil, algodón— fueron los más importantes en los siglos XVI —último tercio— y XVII, época que podría calificarse como la "formación de la economía y la sociedad venezolana". Aun en el siglo XVIII esos productos tenían considerable significación en el comercio exterior de las provincias venezolanas.

[2] La fuerza de trabajo *enfeudada* —por similitud aproximativa al sistema feudal— era la que permanecía vinculada a las haciendas, en cuyos dominios los trabajadores de esa condición tenían sus ranchos y conucos —o pequeñas siembras de café— y mediante endeudamiento con los hacendados se convertían en verdaderos siervos que no podían abandonar los fundos sin permiso del dueño.

principal, la *relación de dependencia* del país con respecto al sistema capitalista mundial, o más propiamente, el modo de incorporación de este país a dicho sistema. Es por esto que el análisis del proceso histórico, cualquiera que sea el período o la época que se considere, tiene que hacerse tomando como centro aquella relación; especificándola, además, en el tiempo concreto al que se refiere el análisis.

II. ASPECTOS RELEVANTES DEL ANÁLISIS

El período escogido comprende de 1926 a 1975, ambos incluidos. He estimado conveniente dividirlo en subperíodos, determinados por los hechos, las modificaciones, las coyunturas y los procesos que tuvieron lugar, en lo económico, político y social, en función de su importancia para la explicación de la realidad contemporánea del país. Tales subperíodos son: 1926-35; 1936-45; 1946-57 y 1958-75. En cada subperíodo se examinan los aspectos siguientes: i] el régimen de producción en su más amplio sentido, con la profundidad conceptual que permite el desarrollo de las ciencias sociales, ii] el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad en relación con la base económica, iii] la dinámica de clases, considerando sus distintos componentes; iv] el movimiento demográfico a la luz de los factores económicos y sociales que lo influyen; v] el carácter, la composición y el desenvolvimiento del poder político en el contexto de la realidad económico-social; vi] las coyunturas económicas y políticas que dejaron huella en cada período estudiado.

La periodización es siempre un problema del estudio histórico. Los criterios generales pueden ser diferentes, y con frecuencia se hacen compromisos para establecer un conjunto ponderado y significativo de aquéllos. Por supuesto, hay que descartar la simple descripción de los hechos en la secuencia histórica; y si lo indicado es el análisis para la búsqueda de la verdad, que debe resultar en el esclarecimiento de los factores que determinaron el curso de los hechos, modificaciones, trasformaciones y cambios que hicieron época, es indispensable seleccionar criterios claves, según los cuales se ordena la data histórica para la formulación de juicios integrales. En mi opinión, el criterio fundamental es la estructura económica, y los criterios relativos a ésta, derivativos o complementarios, desempeñan las correspondientes funciones. Así, pues, la dinámica de clases y la del poder político emergen de la realidad estructural, sin que ello signifique una dependencia pura y simple, absoluta y directa, como un determinismo primario lo pudiera pretender. Existe una interacción compleja entre las relaciones básicas de la actividad económica, el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, la organización de la sociedad y el modo de gobierno —lo cual comprende, asimismo, la evolución cultural, el movimiento de la población, las ideologías, los patrones de vida, etc.—, que constituye en esencia el curso de la historia. Tal es el hilo conductor de este análisis.

III. ANTECEDENTES

Antes de analizar los hechos correspondientes al tiempo comprendido entre los años 1926 y 1975 —objeto de este estudio— conviene hacer referencia de algunos antecedentes que permiten interpretar mejor la historia del medio siglo que ahora nos ocupa. Esos antecedentes se remontan a 1830 y ponen de relieve las etapas de mayor significación de la vida venezolana del siglo XIX y comienzos del XX.

1. *La oligarquía (1830-58)*

En 1830 se separó Venezuela de la Gran Colombia —formada por Nueva Granada (hoy Colombia), Cundinamarca (hoy Ecuador) y Venezuela, en 1821— y se constituyó en república independiente. El régimen adoptado fue centralista, pero con autonomía de las provincias.[3] Predominó la oligarquía conservadora hasta 1847, cuando fue sustituida por la oligarquía liberal,[4] que a su vez fue remplazada por una breve sucesión de gobiernos provisorios, algunos de índole dictatorial, mientras se desarrollaba, a partir de 1859, el movimiento denominado "Revolución Federal" que dio origen a una enconada guerra civil, la que, luego de diferentes contingencias de triunfos y derrotas, culminó con la victoria de los "federales" en 1863. La estructura económica del país no sufrió variaciones sensibles en el tránsito de la situación colonial a la republicana. La fuerte concentración de la propiedad territorial agraria, con las características esenciales del latifundio colonial, permaneció después de la guerra de independencia, aunque la propiedad cambió parcialmente de dueños; el propio general Páez, héroe de la gesta emancipadora que en sus mocedades había sido peón llanero y llegó a ser el primer presidente de Venezuela, se hizo de la propiedad de muchas y anchas tierras, lo mismo que otros caudillos de la independencia, como los Monagas. La esclavitud continuó jurídicamente vigente hasta 1854, cuando fue decretada su abolición y el gobierno pagó indemnización a los dueños de esclavos. Un régimen parecido a la servidumbre prevaleció en el campo para buena parte de la fuerza de trabajo jurídicamente libre, pero en realidad atada a la hacienda o plantación mediante vinculaciones económicas.[5] El derecho de usura sin límites fue consagrado por ley con penas de despojo de bienes para el deudor insolvente y hasta de prisión para el fallido.[6] Los derechos políticos se reservaban a los ciudadanos que disfrutaran de bienes de fortuna o de ingresos superiores a cierto mínimo establecido.[7] La educación, por supuesto, era privilegio de minorías. Venezuela era un país disperso, con pocas vías de comunicación casi todas orientadas a los puertos, una población es-

[3] José Gil Fortoul, *Historia constitucional de Venezuela,* Caracas, Venezuela, Ministerio de Educación, 1954, t. 2º, pp. 19-20.

[4] *Ibid,* pp. 7-8.

[5] Federico Brito Figueroa, *Historia económica y social de Venezuela,* Caracas, UCV, 1966, t. I, p. 250.

[6] Ley de 10 de abril de 1834, criticada por el conservador Fermín Toro en su obra *Reflexiones sobre la ley de 10 de abril de 1834.*

[7] José Gil Fortoul, *op. cit.,* pp. 21-22.

casa que había sido diezmada por la guerra y continuaba bajo los azotes de las endemias y epidemias, la miseria y otras calamidades.[8]

Las relaciones económicas con el exterior consistían en la exportación de café, cacao, tabaco, algodón, cueros y productos menores, a cambio de manufacturas y alimentos de cierta calidad para el consumo de las clases dominantes; los mercados compradores y vendedores más importantes eran los europeos, en primer lugar Inglaterra. Había una deuda externa causada por el financiamiento de la guerra emancipadora y por empréstitos que se contrataron en nombre de la Gran Colombia, de los cuales correspondía a Venezuela amortizar una parte proporcional. Las finanzas públicas, débiles y precarias, se saneaban, sin embargo, paulatinamente.

La clase dominante fundamental era la de los terratenientes hacendados y ganaderos. Los comerciantes y prestamistas gozaban de influencia en la sociedad mediante el dominio del capital comercial y financiero. El artesanado era poco numeroso. No existían industrias de consideración. La población era en su gran mayoría rural y las ciudades eran pequeñas. Caracas, la capital, no pasaba de 50 000 habitantes en 1847. La guerra de independencia —interpretada por algunos sociólogos e historiadores venezolanos[9] como lucha de castas y de clases, más propiamente como conflicto interno que como guerra internacional— contribuyó significativamente a la disminución de la desigualdad social, entendida ésta en sentido étnico y sociológico más que en lo económico; el mestizaje se extendió y el mestizo adquirió conciencia de su existencia, de tal modo que se consideraba igual al blanco, al "mantuano", al señor, al oligarca. Este sentido de la igualdad se afirmaría y profundizaría como consecuencia de la "Revolución Federal".

En el período 1830-58, de predominio político de la oligarquía —conservadora primero, liberal después—, la lucha política tuvo lugar con creciente intensidad y violencia. El segundo presidente de la República, el médico José María Vargas, fue transitoriamente derrocado por una conspiración, pero rápidamente restablecido en el mando por la intervención militar y política del general Páez, entonces caudillo indiscutible del país. Sin embargo, poco después el doctor Vargas —incapacitado para el gobierno— renunció a la presidencia y lo sustituyeron, con carácter provisorio, el doctor Narvarte primero y el general Soublette (prócer de la independencia) después. Durante estas interinarias ocurrieron otros intentos de rebelión armada, fácilmente vencidos. El general Páez asumió por segunda vez la presidencia, constitucionalmente, durante el período 1839-43 y le sucedió Soublette en el período 1843-47, con lo cual concluyó la fase denominada "oligarquía conservadora".

La pugna entre conservadores y liberales durante el período 1830-47 no cesó prácticamente. Los últimos exigían mayores libertades públicas, el imperio efectivo de las garantías constitucionales, la elevación de la dignidad ciudadana, la igualdad democrática; pero sobre todo, lo que motivó el movimiento liberal en lo concreto, fueron dos consignas: hombres nuevos en la dirección y administración de la República y alternabilidad efectiva. En 1840 fue fundado el periódico *El Venezolano*, bajo la dirección de Antonio Leocadio Guzmán, órgano que estimuló y orientó

[8] Carlos Irazábal, *Venezuela esclava y feudal*, Caracas, Pensamiento Vivo, 1964, pp. 172-173.
[9] Laureano Vallenilla Lanz, *Cesarismo democrático*, 3a. ed., Caracas, Tipografía Garrido, 1952, pp. 1-30.

—bien que demagógicamente— una corriente de descontento popular antioligárquico y que había de encender las primeras llamas de la guerra federal. En las elecciones presidenciales de 1846 el candidato oficial —conservador, apoyado por el presidente Soublette— iba a ser el general Rafael Urdaneta, prócer de la independencia, pero murió el año anterior. Ante la confusión que ese hecho causó en las filas del Partido Conservador, el general Páez, su jefe, propició la candidatura del general José Tadeo Monagas, decisión contradictoria pues Monagas se había mostrado en diferentes ocasiones adversario del Partido Conservador; pero Páez pretendía granjearse la voluntad de aquél para lograr una conciliación que asegurara la paz de la República. Los liberales llamados "guzmancistas" tenían como candidato presidencial a Antonio Leocadio Guzmán. Con la intención de buscar una fórmula de transacción que evitara un enfrentamiento, incluso armado, entre paecistas y guzmancistas —en principio, conservadores y liberales— el general Santiago Mariño promovió una entrevista entre Páez y Guzmán, pero mientras se gestionaba la reunión algunos partidarios de Guzmán se levantaron en armas y, el propio Guzmán fue hecho preso. Entre los alzados estuvo Ezequiel Zamora —quien años después sería la figura popular más importante del movimiento federalista— y sus seguidores lo proclamaron "General del Pueblo Soberano" (título con el que pasó a la historia) al tiempo que izaban una bandera amarilla con la inscripción: "Elección popular, principio alternativo, orden, horror a la oligarquía", que luego sería la insignia del federalismo y del largo dominio que los caudillos federalistas ejercieron en el país bajo la denominación de Partido Liberal Amarillo. Guzmán fue enjuiciado y condenado a muerte; pero José T. Monagas, quien resultó electo presidente en las elecciones de 1846 —en las que el mismo Guzmán obtuvo el tercer lugar—, le conmutó la pena por la de diez años de presidio, que tampoco cumplió, pues logró escapar de la cárcel y poco después tomó servicio en el ejército regular "como si nada hubiera sucedido".[10] La acusación principal que se sostuvo durante el juicio a Guzmán fue su campaña sistemática desde el periódico *El Venezolano,* en que se incitaba a la rebelión contra el gobierno y los oligarcas "godos". Aunque Guzmán era un demagogo, hábil e inteligente, sus ideas de renovación, libertad, reformas, alternabilidad, igualdad y otras típicas del liberalismo animaron una causa popular, identificada por el odio a los "godos" —nombre aplicado a los conservadores que durante la lucha por la independencia se mostraron indiferentes cuando no abiertamente realista, sin que ello signifique que todos los conservadores merecían el calificativo de "godos" en ese sentido— y el ansia de nuevos rumbos en la política, la administración y las condiciones de vida del pueblo.

José T. Monagas, presidente electo en 1846, poco después de asumir el mando en 1847 dejó fallidas las esperanzas de los conservadores al colocar en los cargos principales del gobierno y del ejército a notables liberales y amigos suyos, por lo que los conservadores se declararon en oposición. La pugna política cobró mucha intensidad en los últimos meses de 1847, y el enfrentamiento entre conservadores y liberales amenazaba con llegar al punto de un conflicto armado. Casi al finalizar el año la diputación provincial de Caracas, dominada por los conservadores, decidió acusar al presidente Monagas ante el Congreso de la República en sus sesiones

[10] José Gil Fortoul, *op. cit.,* p. 276.

ordinarias de 1848, las que se iniciaron el 23 de enero. Apenas instalado el Congreso se decidió por mayoría el traslado de la sede a Puerto Cabello, para garantizarse seguridad, ya que se iba a ventilar el juicio de responsabilidad contra Monagas. El 24 de enero, mientras el ministro del Interior presentaba en la Cámara de Representantes el mensaje anual del presidente, una multitud congregada en una plazuela vecina, agitada por el rumor de que el ministro, liberal, estaba preso o en riesgo de muerte en el recinto legislativo, se agolpó a las puertas de éste con el intento de forzar la entrada; la guardia designada por el Congreso quiso oponerse a la turba y en el choque armado resultaron muertos y heridos, incluidos parlamentarios que se apresuraron a salir a la calle, entre ellos el ilustre hacendista Santos Michelena, honesto y brillante hombre público, que murió el 12 de marzo a consecuencia de las heridas recibidas. En la Cámara del Senado, de modo distinto, la sesión se desenvolvió sin tropiezos. Ante el hecho cumplido del ataque al Congreso, por obra de la muchedumbre aunque los conservadores culparon al presidente Monagas, éste intentó restablecer la normalidad, lo que pudo lograr sin mayores dificultades. Por una u otra razón, el Congreso, a partir del 25 de enero de 1848, se hizo propicio a los designios de Monagas, quien en esa ocasión, en tertulia de amigos y partidarios, pronunció una frase histórica: "la Constitución sirve para todo."

El 24 de enero de 1848 concluyó la etapa de la oligarquía conservadora y comenzó la de la oligarquía liberal bajo el gobierno de los Monagas. Entre las obras positivas de la oligarquía conservadora hay que mencionar: la organización de la hacienda pública, la honestidad en el manejo de los fondos del estado, la vigencia de la libertad de cultos, de expresión y otras que configuran el régimen democrático formal; se registró algún progreso material y adelanto intelectual, restringido, por supuesto, a minorías privilegiadas. Entre los hechos negativos hay que destacar: la conservación casi intacta del orden económico-social heredado de la colonia, —latifundio señorial, esclavitud, entre otros elementos—, la restricción del derecho electoral a una minoría de propietarios y receptores de altos ingresos, la omnipotencia de los usureros respaldados por la ley y la indefensión de los pequeños y medianos propietarios ante el despojo por parte de los prestamistas. No fue un período de paz pública, pues ocurrieron revueltas y levantamientos armados que consumieron más de cuatro de los diecisiete años de dominio conservador. En lo económico practicó, dentro de las limitaciones impuestas por las sobrevivencias del régimen feudal-esclavista, el liberalismo, entonces en su apogeo en los países capitalistas de mayor desarrollo.

La oligarquía liberal (1848-58) gobernó con el sello personalista de José T. Monagas y el nepotismo de los Monagas (dos veces fue presidente José Tadeo y una vez su hermano José Gregorio). El hecho más notable de este período fue la liberación de los esclavos por decisión oficial, mediante pago de indemnización a los dueños, tomada el año 1854. El monto de la indemnización fue calculado en tres millones de pesos. Algunas reformas legales progresistas fueron realizadas, entre ellas la moderación de la libertad de los contratos para proteger relativamente al deudor y la abolición parcial de la restricción del derecho electoral mediante la eliminación del requisito de posesión de patrimonio o ingreso para el ejercicio del sufragio en primer grado. En materia económica el período de la oligarquía libe-

ral se caracterizó por algunas iniciativas importantes para promover al crecimiento del país, pero en su mayoría esas iniciativas no prosperaron por la mala administración, la recurrencia de los conflictos armados y el crónico deterioro de la hacienda pública. Se dictaron algunas medidas para el favorecimiento de la industria y la agricultura, el mejoramiento de la vialidad —incluso el impulso a la construcción de ferrocarriles y a las rutas acuáticas—, y el aumento de la inmigración. En 1856 se tendió la primera línea telegráfica que hubo en el país. Sin embargo, la administración fue muy deficiente y el manejo de la hacienda pública no se hizo con la honestidad que había caracterizado la etapa de la oligarquía conservadora. Por otra parte, las condiciones de vida de la gran masa popular, específicamente el campesinado, no mejoraron, salvo la liberación de la fuerza de trabajo esclava que se convirtió en fuerza de trabajo bajo situación de servidumbre en la práctica, aunque jurídicamente libre. La estructura económica con base en la gran propiedad territorial agraria no sufrió cambios en la etapa liberal; el capital comercial y usurario siguió ejerciendo influencia en la vida económica, social y política, aunque con menos fuerza que durante la etapa conservadora. En 1856 el presidente José Tadeo Monagas hizo el intento de promover una confederación grancolombiana, que de cierto modo se aproximaría a la unidad grancolombiana creada bajo la inspiración y dirección de Bolívar en 1821; pero no tuvo éxito.

Los conservadores, aunque derrotados en la arena pública, no abandonaron sus esperanzas e intentos de retornar al poder político, y se empeñaron en varios alzamientos armados entre los cuales algunos fueron conducidos por el propio general Páez; pero fracasaron y sus dirigentes fueron castigados con cárcel y exilio. Mediante la reforma a la Constitución efectuada en 1857 el general José T. Monagas se hizo reelegir presidente para un nuevo período a comenzar en 1858; pero estalló una revuelta armada contra el continuismo y el personalismo monaguense, encabezada aparentemente por un oscuro oficial, el general Julián Castro, aunque en verdad promovida por una alianza de liberales y conservadores; el 15 de marzo Monagas presentó su renuncia, viéndose perdido sin que se disparase ni un solo tiro. Concluyó así la etapa de la oligarquía liberal y se inició un período de conmoción, revueltas y asonadas, en cuya coyuntura emergió el movimiento de la Federación.

2. *La federación*

El mes de febrero de 1859 estalló el movimiento federalista, con el pronunciamiento de la provincia de Coro. El general Ezequiel Zamora desembarcó en La Vela el 22 de ese mes junto con varios comprometidos en el alzamiento. El general Juan C. Falcón fue proclamado primer jefe del movimiento federalista nacional.[11] Zamora asumió el mando militar de la provincia y expidió una proclama de guerra el 23 de febrero de 1859, en la que declaraba el comienzo de las acciones armadas para conquistar el objetivo de la federación. El 25 de febrero de 1859

[11] Lisandro Alvarado, *Historia de la Revolución Federal en Venezuela*, Caracas, Ministerio de Educación, 1956, pp. 101-102.

se constituyó la provincia de Coro en estado según el principio organizativo federal y en esa oportunidad fueron expedidos el programa y los estatutos del movimiento, entre cuyos pronunciamientos básicos figuraban: la abolición de la pena de muerte, libertad absoluta de prensa, de tránsito, de asociación, de representación e industria; prohibición perpetua de la esclavitud, inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y los escritos privados; libertad de cultos, *inviolabilidad de la propiedad,* derecho voluntario de residencia, independencia absoluta del poder electoral, elección universal, directa y secreta, administración de justicia gratuita, abolición de la prisión por deuda, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, tratamiento oficial único de "ciudadano" y "usted".[12] Las veinte provincias que entonces formaban la República debían constituirse en otros tantos estados autónomos, unidos en un pacto federal. Zamora tuvo éxito en su campaña militar, con tácticas sorpresivas, y se convirtió en el caudillo de campesinos y llaneros, en la esperanza de los desposeídos y el terror de los oligarcas. El Concejo Municipal de Barinas en decreto de 14 de junio de 1859 le confirió el título de "Valiente Ciudadano". En el sitio de San Carlos perdió la vida Zamora, el 10 de enero de 1860, en circunstancias no bien esclarecidas aun a la fecha. Con su muerte, la causa popular dentro del movimiento de la Federación perdió a su caudillo más tenaz, decidido, consecuente y aguerrido, tanto en lo militar como en lo político e ideológico. Puede decirse que si Zamora hubiese sobrevivido a la guerra federal otro habría sido el rumbo del país en la última mitad del siglo XIX.

La guerra federal fue larga y llena de contingencias, tanto para el bando llamado oligarca ó godo como para el federal. El 24 de abril de 1863 se celebró el Tratado de Coche (nombre de una hacienda vecina a Caracas), suscrito por los señores Pedro José Rojas, en nombre del gobierno dictatorial encabezado por Páez, y Antonio Guzmán Blanco en nombre del movimiento federal encabezado por Falcón. Según el tratado, se convocaría una asamblea nacional a los 30 días después de canjeada la aprobación de aquél, en cuyo momento cesaría el gobierno de Páez y se formaría un nuevo gobierno; el general Falcón debía ser nombrado jefe del ejército de la República y debía cesar la guerra. Con algunas modificaciones el Tratado de Coche fue ratificado en mayo del mismo año. En junio se reunió la asamblea en La Victoria y nombró presidente provisional de la Federación venezolana al general Falcón, y a Guzmán Blanco vicepresidente. Páez se retiró de la jefatura del gobierno el 15 de julio. Los desaciertos, excesos y desafueros del anciano dictador no son justificables por su senilidad y empañan su figura heroica de prócer de la independencia. En 1863 se inició, por tanto, el gobierno de la Federación. El 18 de agosto de 1863 el general Falcón, ya en funciones de presidente de la República, dictó un decreto en que consagraba los derechos, garantías y libertades prometidos en el programa de la Federación y que, en general, han consagrado las constituciones de la República hasta el presente.

¿Qué aportó la Federación al desarrollo de la nación venezolana? Efectivamente poco, sobre todo si se hace cuenta de su elevado costo en vidas y recursos materiales. Los propios seguidores de la causa federal —salvo, desde luego, sus jefes o dirigentes mayores— no entendieron los objetivos institucionales de la misma. El

[12] *Ibid,* pp. 103-105.

pueblo la llamaba "federación" y la interpretaba como un movimiento reivindicador de sus derechos y necesidades, como dirigida a corregir la secular injusticia económico-social de la concentración de la riqueza y el ingreso, de la explotación y el sometimiento del campesinado sin tierras y en condición real de servidumbre, de la miseria de las mayorías frente a la abundancia disfrutada por unos pocos. Lo que prometió al pueblo el movimiento de independencia medio siglo antes, lo reprodujo en sus proclamas y programas la causa federal, y, en lo esencial, del cambio económico y social, ambos movimientos incumplieron sus promesas. Quizá mezclado con la ambición de poder trató de imponerse el afán idealista de reformas profundas en favor de los oprimidos, marginados y ofendidos, encarnado dicho afán en Ezequiel Zamora, cuya muerte —todavía bajo sospecha de asesinato— fue sin duda oportuna para oligarcas y liberales, para centralistas y federalistas en sus rangos dirigentes que temían, en verdad, la subversión popular preconizada por aquél y el ascenso del pueblo al ejercicio real y efectivo de la democracia. El poder se impuso y el orden fue restablecido sin afectar la base económica y social; todo se redujo a algunos cambios de nombres y de instituciones políticas, a la ampliación formal de los principios liberales y la modernización de códigos, leyes, procedimientos y funciones de la administración pública. La Federación era apenas, lo fue siempre, una palabra para nombrar una falsa situación. Antonio Leocadio Guzmán, a quien vimos ya como agitador liberal en la etapa de la oligarquía, lo expresó a su modo en un párrafo célebre: "No sé de dónde han sacado que el pueblo de Venezuela le tenga amor a la federación, cuando no sabe ni lo que esta palabra significa. Esa idea salió de mí y de otros que nos dijimos: supuesto que toda revolución necesita bandera, ya que la Convención de Valencia no quiso bautizar la constitución con el nombre de federal, invoquemos nosotros esa idea: *¡porque si los contrarios, señores, hubieran dicho Federación, nosotros hubiéramos dicho Centralismo.*"[13] La revolución para Antonio Leocadio, como para su hijo Antonio Guzmán Blanco, era simple cambio de nombres, de posiciones personales y camarillas de privilegiados.

La Federación, que según el principio constitucional significaba un pacto entre estados autónomos para sostener la República como unidad de hecho y de derecho, en la realidad consistió en el dominio regional y local de caudillos, émulos de los señores feudales del medioevo, propietarios de extensas tierras en las que explotaban la fuerza de trabajo de campesinos vinculados por la lealtad personal o por condiciones asimilables a la servidumbre, y amos de la política en su provincia o cantón, mientras que el poder central era ejercido por el caudillo principal directamente, o a través de un testaferro investido de la presidencia de la República. Este pacto efectivo entre caudillos, permitía asegurar la paz durante determinados lapsos, y operaba como un mecanismo militar cuando otros intereses amenazaban el equilibrio de poder sustentado por la coincidencia de los caudillos. En las palabras estaba condenada y liquidada la oligarquía tradicional, la que dominó durante los primeros 30 años de la República; Guzmán Blanco, jerarca del federalismo, amenazó a la oligarquía conservadora con extinguirla hasta como núcleo

[13] *Ibid,* p. 598. Subrayado original.

social,[14] pero en los hechos continuó existiendo y aupando a los jefes políticos que se turnaban para disfrutar del mando, sin perder sus intereses materiales ni su figuración social; el término *oligarca* se aplicó indistintamente a quienes eran enemigos del gobierno o caían en desgracia con el mandatario, así como el calificativo *liberal* servía para distinguir a los amigos y servidores fieles mientras conservasen la amistad al caudillo y la correspondiente fidelidad. La doctrina era apenas un ropaje para los intereses del poder, mientras que en el fondo de la realidad nacional permanecía la vieja estructura opresiva, represiva, discriminatoria, que garantizaba la gran propiedad agraria, los dineros mal habidos, la explotación del campesino y el llanero, la ausencia de progreso material y social, y en suma, el atraso económico, administrativo y político del país.

Todavía se registró una reacción por parte de los oligarcas tradicionales desplazados del poder político por la Federación: fue en 1868, cuando tuvo lugar la revuelta denominada de los *azules* —por el color de la bandera que izaron—, promovida y llevada a cabo por una alianza circunstancial entre conservadores y liberales tradicionales, bajo la jefatura del anciano general José T. Monagas. Los "azules" gobernaron poco más de un año y respetaron en principio la Constitución federal, pero en esencia pretendían restaurar el viejo orden conservador. Con la muerte de José T. Monagas a fines de 1868 y el ascenso a la presidencia de su hijo José Ruperto entró en rápida descomposición el movimiento "azul" y se levantaron en armas los caudillos federalistas bajo la jefatura del general Antonio Guzmán Blanco, logrando el triunfo en 1870, aunque la guerra civil continuó en diferentes lugares del país, animada por las ambiciones de algunos caudillejos locales descontentos. Comenzó así el dominio casi absoluto de Guzmán, aunque apoyado en el pacto de los caudillos, que había de durar hasta finales del siglo.

3. *La economía y la sociedad después de la guerra federal*

Con el cambio introducido por la abolición de la esclavitud las relaciones de producción sufrieron un proceso de evolución, registrada principalmente en la composición y situación de la fuerza de trabajo. Los antiguos esclavos se hicieron, en parte, pisatarios, arrendatarios o peones de los fundos, estableciéndose el régimen de tributos en especie o trabajo a los terratenientes a cambio del "derecho" de cultivar una pequeña parcela de tierra; el endeudamiento crónico de estos cultivadores con el hacendado les forzaba a permanecer atados al fundo de por vida, e incluso la deuda era trasmitida a los herederos. Otra parte de la fuerza de trabajo liberada de la esclavitud se dedicó al artesanado o a oficios domésticos. La población, calculada para 1873 en 1 784 000 habitantes, era activa en un 50% y de esta proporción un 79% dependía de la agricultura;[15] los propietarios representaban 1% y los artesanos, pequeños comerciantes, servidores domésticos, empleados y otros no propietarios el 20%. La que ahora se califica como "clase media" prácticamente no existía, o cuando más estaba representada por unos pocos miles

[14] Ramón J. Velásquez, *La caída del liberalismo amarillo,* Caracas, Ediciones de la Contraloría General de la República, 1972, p. VII.

[15] Federico Brito Figueroa, *op. cit.,* pp. 292-293.

de habitantes. Los dos polos sociales eran, por tanto, los propietarios del campo y la ciudad (incluidos los grandes comerciantes y prestamistas) y el campesinado sometido a condiciones cuasi serviles. Entre ellos un escaso grupo de artesanos, empleados, trabajadores urbanos y domésticos. La propiedad territorial agraria dominaba el cuadro económico, y se extendió considerablemente durante la segunda mitad del siglo XIX a expensas de tierras públicas y baldíos. La propiedad cambió de manos parcialmente a consecuencia de las contingencias de la guerra. Se estima que en 1873 alrededor de 980 propietarios poseían —de hecho o derecho— 8 400 leguas cuadradas de tierra de un total de 15 890 de dominio privado, en tanto que 28 222 poseían 7 490 leguas cuadradas.[16] La productividad de los fondos era, seguramente, muy baja, ya que el cultivo se efectuaba en condiciones rudimentarias, con intensiva aplicación de fuerza de trabajo y escasos medios de producción; sin embargo, la conversión de la esclavitud a la especie de servidumbre que prevaleció después de 1860 propició el incremento de los cultivos y de la producción, aunque debe tenerse en cuenta la destrucción ocasionada por la guerra. El 70% de los cultivos eran cafetales y el 15% cacaotales; el resto de la tierra aprovechada se cubría con cultivos de tabaco, algodón, maíz, yuca, coco, trigo y otros frutos menores. La ganadería estaba representada por 3 300 000 cabezas y se practicaba en potreros o sabana abierta. Las exportaciones —principal sostén económico del país— eran de café, cacao, algodón, cueros, tabaco, dividive, maderas y quina y se destinaban principalmente a Alemania, Inglaterra, Francia, y Estados Unidos. Las crisis recurrentes del capitalismo de esa época afectaron a las exportaciones venezolanas tanto en precios como en volumen, particularmente la de 1873. El mercado interno era muy estrecho y fragmentado, lo que se explica por las formas atrasadas de producción basadas en el latifundio, por lo que el desarrollo industrial era nulo (existían talleres artesanales y algunas pequeñas industrias). La población creció lentamente —y en algunos años se estancó— afectada por las guerras, las endemias y epidemias y la extrema pobreza. Para los analistas de la historia el movimiento federal sepultó el orden heredado de la colonia y levantó fermentos de subversión social en la masa popular, mientras que, por otra parte, contribuyó a la democratización formal de las instituciones y a la conciencia de igualdad entre la población, liquidadas las castas y los prejuicios raciales, pero no las clases ni la profunda desigualdad económica que, de uno u otro modo, se expresaba en desigualdad política. La sociedad que emergió de la guerra federal fue acaso más igualitaria, menos conservadora, más liberal que la existente hasta 1858; pero también fue una sociedad injusta, básicamente discriminatoria, profundamente desequilibrada y poco propensa al cambio verdadero en el sentido del progreso para beneficio de la totalidad.

4. *La autocracia guzmancista*

Antonio Guzmán Blanco —general y doctor— realizó con creces la ambición de poder que alimentó, como permanente aspiración, su padre Antonio Leocadio.[17]

[16] *Ibid*, p. 296.

[17] Ramón Díaz Sánchez, *Guzmán, elipse de una ambición de poder*, Editorial Edime, 1952. Preámbulo a la primera edición.

De una u otra manera gobernó a Venezuela entre 1870 y 1890, bien sea directamente como jefe del estado —en el período largo de 1870 a 1877 llamado el "septenio"; en el período más breve de 1879 a 1884, conocido como el "quinquenio"; y en el más breve aún, de1886-88, llamado de la "aclamación"— bien a través de partidarios suyos (Alcántara, Crespo, Rojas Paul, Andueza) que, presionados por la reacción antiguzmancista que tenía oportunidad de manifestarse cuando el jefe estaba ausente en Europa, intentaban liberarse de la tutela. Guzmán mandó, más que gobernó, como autócrata, con voluntad que pretendió ser omnímoda, como si el país fuese un feudo suyo o un reino sometido a la monarquía absoluta. Jugaba al poder aprovechándose hábilmente de los caudillos regionales y locales, de las discordias entre facciones y personajes, de los intereses contradictorios de terratenientes y comerciantes. Aparentando sostener y realizar los principios, objetivos e ideales de la Federación, practicó un centralismo autocrático, convirtiendo en mentira el pacto federal. Sin embargo, su autocracia fue empleada en tratar de modernizar al país material, institucional y culturalmente, sobre todo en el primero de sus períodos, el septenio, que registró obra positiva. Por ése se le ha calificado como el "Autócrata civilizador". Decretó, en 1870, la instrucción pública con carácter obligatorio y gratuito. Instituyó el servicio oficial de estadística y censos nacionales. Estableció el sistema monetario unificado, con una moneda nacional. Fomentó la legislación en materia civil, penal, mercantil y militar. Organizó la hacienda pública, con centralización de cuentas, separación funcional entre ingresos y gastos y regularización del crédito público. Las principales fuentes de ingreso del estado entonces eran los derechos de importación y la explotación de las salinas, con una recaudación, en 1873, de seis millones de bolívares (¡cuán pobre era la República entonces!). La agricultura prosperó. Mediante contratos muy ventajosos, realmente leoninos para los empresarios europeos, se fomentó la construcción de algunas líneas férreas. Se organizaron las aduanas y resguardos. Impresionado por París —ciudad en la que vivió parte de sus últimos años y donde murió— pretendió trasformar a Caracas, todavía con rezagos coloniales, en una pequeña ciudad-luz, con su teatro de la ópera, su Santa Capilla, sus palacios para los poderes públicos y hasta su caricatura versallesca en el vecino pueblo de Antímano. Desde luego, los empréstitos extranjeros proporcionaron los recursos extraordinarios, ya que el presupuesto no alcanzaba para tales obras ornamentales.[18]

Se enfrentó a la Iglesia católica —poder tradicional verdadero, no sólo en lo espiritual, sino también en lo económico y político— llegando a encarcelar y expulsar funcionarios eclesiásticos, disolver conventos, destruir una antigua iglesia y construir otra para complacer a su esposa y restringir el derecho de las iglesias y el clero a poseer bienes raíces. Instituyó el matrimonio civil como el único legalmente válido, y creó el registro civil, de nacimientos y defunciones, para remplazar al parroquial. Desde entonces, aunque la Iglesia ha conservado parte de su significación e influencia en la vida nacional, el poder civil tiene completa autonomía en relación al eclesiástico y el poder temporal de aquélla se redujo a su mínima expresión.

Se empeñó en dignificar las relaciones diplomáticas, obligando a los represen-

[18] *Ibid*, pp. 553-554.

tantes de gobiernos extranjeros a solicitar audiencia oportunamente y a cumplir las normas del protocolo. Negóse a reconocer una deuda a Estados Unidos por un millón de pesos, alegando que esa deuda sólo alcanzaba originalmente a 80 000. Sin embargo, estuvo siempre obsesionado por el brillo de Europa, principalmente de Francia, y su gran deseo, que cumplió, fue el de vivir permanentemente en París, en relación con la nobleza con la que logró emparentar mediante matrimonio de sus hijas. Pretendió mandar a Venezuela desde la capital francesa, como una remota hacienda a cuyo cargo dejaba un mayordomo en calidad de presidente de la República, y a la que volvía de tiempo en tiempo para supervisar y consolidar. Esta práctica no le dio el resultado apetecido, pues esos mayordomos, apoyados en los adversarios de Guzmán, intentaron una y otra vez gobernar fuera de su tutela, como ocurrió con Alcántara —que acometió un ensayo de democratización de la vida pública, por lo que fue reconocido como el "gran demócrata"—, con Crespo y Rojas Paul. No era vacía la frase que el propio Guzmán pronunció en una de esas coyunturas políticas: "Venezuela es como un cuero seco, que lo pisan por un lado y se levanta por el otro."

Se enriqueció considerablemente en el poder el autócrata civilizador. Tenía a orgullo el hecho de que su fortuna se situaba entre las mayores de América Latina en esa época, y podía emular a muchas de Europa. Poder y riqueza sirvieron de marco a su desbordada vanidad, a su megalomanía incontenible, que lo hacía disfrutar con las lisonjas, los homenajes, la erección de estatuas suyas en vida, y el uso de uniforme de mariscal francés. A diferencia de algunos de los presidentes de la etapa de la oligarquía —un Vargas, un Soublette— se complacía en su fortuna material acumulada mediante aprovechamiento del poder, y en una vida oropelesca de bailes, saraos, banquetes y recepciones.

En la era guzmancista se registró algún progreso material y cultural. La producción y la exportación de café, cacao y otros frutos señalaron niveles crecientes. La ganadería se recuperó, luego de las pérdidas sufridas durante la guerra federal. La construcción urbana, principalmente en Caracas, aumentó considerablemente. El comercio interior y el de importación se expandieron. Tuvo lugar una corriente apreciable de inversión extranjera en minería, ferrocarriles, comercio y empréstitos al estado. Para el período 1871-90, se estima que la inversión extranjera totalizó 127 millones de bolívares, lo que indica un promedio anual de Bs., 6.3 millones.[19] La población, que al comienzo del período alcanzaba a 1 784 000 habitantes, ascendía en 1891 a 2 324 000. Ese período correspondió a la etapa de la transición del capitalismo aproximadamente liberal al monopolista simple; también fue la época en que Estados Unidos —superada la crisis de la guerra de secesión— consolidó su proceso de industrialización y su desarrollo capitalista, y alcanzó las condiciones necesarias y suficientes para llevar a cabo una expansión imperialista.

Cabe plantearse la cuestión siguiente: ¿Intentó Guzmán Blanco acometer la realización del programa de la Federación en sus elementos más significativos para la trasformación nacional? La respuesta tiene que ser particularista y no genérica. Algunas de las reformas impulsadas por Guzmán en el campo institucional y administrativo correspondieron al programa federalista. En el terreno económico sin

[19] Federico Brito Figueroa, *op. cit.* p. 304.

embargo, no ocurrió ningún cambio, aunque hubo progreso cuantitativo. Específicamente la cuestión agraria —capítulo fundamental del movimiento federalista en la interpretación popular— quedó sin resolver; la propiedad fue concentrándose más en ese período y las condiciones de trabajo y de vida de la masa campesina no mejoraron. La sociedad estaba compuesta por tres sectores —podría decirse clases, afinando el concepto—: los terratenientes, los grandes comerciantes y los campesinos sin propiedad. Entre ellas, una incipiente, casi inexistente clase media, de los artesanos, empleados, pequeños comerciantes, profesionales en ejercicio, maestros. Las contradicciones tenían lugar entre los terratenientes y los campesinos —contradicción fundamental—, y entre los terratenientes y los grandes comerciantes. El poder político resultaba del equilibrio entre terratenientes y comerciantes —estos últimos también desempeñaban la función de banqueros y poseían propiedad raíz urbana y se implementaba a través de los caudillos regionales y locales. El instrumento en concreto era el llamado Partido Liberal Amarillo.

5. *La caída del liberalismo amarillo* [20]

La última década del siglo XIX fue el marco temporal de la definitiva decadencia del movimiento liberal amarillo, heredero espureo de las banderas y consignas de la Federación. Los antiguos guzmancistas se esforzaron en enterrar al guzmancismo. El presidente de turno, Juan Rojas Paul, imaginó un procedimiento artificioso para continuar al frente del gobierno, mediante una falsa renuncia ante el Congreso y un recurso aclamacionista amañado, de los que utilizaba el propio Guzmán. La maniobra resultó como había sido planeada y se prolongó el mandato de Rojas Paul; pero poco después enfermó —Alcántara había muerto sospechosamente una década antes, poco más o menos, cuando se procuraba la continuación de su gobierno— y se planteó el problema de la sucesión. La reacción contra Guzmán era ya definitiva. El nuevo presidente fue el doctor Raimundo Andueza Palacio, con lo cual aparentemente ganaba el civilismo al caudillismo. Andueza reaccionó frente a Rojas, como éste lo había hecho con Guzmán. ¿Era la búsqueda de la independencia del poder civil, o simplemente el fruto de la ambición personal, o la imposición de los caudillos según la correlación de fuerzas? Esta reacción tuvo nombre, la "Rehabilitación Nacional", como tendrían nombre las posteriores reacciones de los que maniobran contra sus antiguos caudillos y los remplazan en el mando. Las pretensiones de gobierno prolongado de Andueza fueron, a su turno, cuestionadas por el general Joaquín Crespo, quien se levantó en nombre de la causa liberal y se autoproclamó "legalista". Cuando Crespo con su gente armada estaba a las puertas de Caracas, el doctor Andueza fue echado de la Casa Ama-

[20] "Hasta el gobierno del general Ignacio Andrade (1898-1899) actúan como figuras fundamentales en la política y gobierno de la República, los hombres que cuarenta años atrás habían sido actores principales o secundarios en el gran movimiento social y militar de la Federación. Bajo los nombres sucesivos de federalistas, guzmancistas, reivindicadores, rehabilitadores o legalistas, o bajo la denominación común de liberales amarillos, son siempre los mismos y forman el grupo dominante y excluyente en la escena del poder", Ramón J. Velásquez, *op. cit.*, p. VII.

rilla (sede presidencial) por los caudillos que hasta ese momento lo habían sostenido, y un triunvirato le sucedió en el mando, aunque para llenar la formalidad fue designado presidente provisional el doctor Guillermo Tell Villegas. El nuevo grupo en el poder propuso una tregua a Crespo en base a la reunión del Congreso y la designación por éste de presidente de la República. Crespo no aceptó la proposición y las hostilidades se reanudaron con fortuna adversa para Crespo, pero luego éste recuperó la iniciativa y logró la victoria y el mando. El nuevo gobierno decidió enjuiciar por responsabilidad civil y administrativa a los gobernantes caídos —procedimiento que se repetirá más tarde en nombre de la democracia—, pero poco después se extendió sobre ellos el manto del perdón. Crespo formalizó su presidencia mediante unas elecciones en que logró la unanimidad. Durante su gobierno la situación económica del país empeoró y los sectores de menores ingresos sufrieron mil calamidades. El gobierno no hizo sino cometer desatinos. La culpa la cargaban los ministros del gobierno —cabezas de turco— y el presidente los destituía a medida que perdían el favor público. A esta práctica de la responsabilidad ministerial y la intangibilidad del presidente la llamará el escritor César Zumeta "cesarismo plebiscitario" (práctica que se repetirá en la historia contemporánea de Venezuela hasta nuestros días). En las elecciones de 1897 triunfó (¡por supuesto!) la candidatura presidencial del general Ignacio Andrade, postulado por Crespo (cada presidente escogía a su sucesor, como fue práctica en el pasado y lo será en la etapa contemporánea). Sin embargo, en las propias filas del partido liberal —oficialista— hubo disensiones y protestas, llegándose incluso a sembrar dudas sobre la nacionalidad del candidato (decían que había nacido en la ciudad colombiana de Cúcuta). Un candidato de oposición realmente notable fue el general José Manuel Hernández, que liderizó un movimiento llamado liberal nacionalista y logró la simpatía popular, pero sin éxito político concreto. Hernández recorrió al país de pueblo en pueblo realizando una campaña electoral de tipo moderno.[21] En todo caso las elecciones fueron amañadas en favor de Andrade. La respuesta de la oposición liberal nacionalista fue la guerra, que se declaró en marzo de 1898. El jefe de la insurrección fue el general Hernández y a combatirlo salió el propio Crespo, pero en la Mata Carmelera fue herido de muerte. Este hecho modificó considerablemente el curso de la rebelión, que fracasó. Andrade tomó posesión de su breve presidencia y con él concluyó la etapa del liberalismo amarillo y de toda clase de liberalismo tradicional en Venezuela.

6. *La causa restauradora*

El 23 de mayo de 1899 el general Cipriano Castro al frente de 60 hombres —entre quienes se encontraban Juan Vicente Gomez, dictador de Venezuela durante 27 años, y Eleazar López Contreras presidente de la República por cinco años después de la muerte de Gómez— de los Andes venezolanos inició un levantamiento armado que en breve tiempo lo llevó a la jefatura del estado. La historia del triunfo de Castro y su movimiento andino parece increíble: en sólo cinco meses de una

[21] Ramón J. Velásquez, *op. cit.*, p. 165.

sorpresiva y curiosa campaña militar y de negociaciones políticas se apoderó del gobierno y estableció lo que se ha dado en llamar la era de "los andinos en el poder". Un ejército improvisado, deficientemente armado, que crecía con los prisioneros tomados al enemigo y con las traiciones en el campo contrario, se impuso al ejército oficial, supuestamente mejor organizado, disciplinado y armado, y dirigido por militares de experiencia. No se trató, desde luego, de un milagro militar debido al genio de Castro; fue simplemente la conjunción de circunstancias emergentes de la situación económica, política y social de la época que permitió y favoreció la aventura de Castro. Muerto Joaquín Crespo el liberalismo amarillo se quedó sin jefe; por otra parte, un proceso de descomposición, impulsada por las contradicciones de los caudillos, lo conducía a su definitiva decadencia. El otro liberalismo, el nacionalista del general José Manuel Hernández, se disolvía en pequeñas guerrillas dispersas en la mayor parte del país y sembraba la inquietud entre los terratenientes, ya que los campesinos se incorporaban al movimiento —como otras veces en el pasado— motivados por una presunta disposición del jefe liberal nacionalista a repartir las tierras entre los agricultores carentes de ellas. Esta y otras presunciones sobre el liberalismo hernandista —por otra parte, muy contradictorio, pues también concitó a su favor corrientes conservadoras y de una muy incipiente burguesía emprendedora que oteaba el horizonte de la modernización del país, en el umbral de un nuevo siglo— que le comunicaban un carácter renovador y progresista, provocaron una reacción de los intereses supuestamente amenazados y para los cuales el presidente Andrade no ofrecía confianza. La situación económica del país no era buena. La deuda pública, incluidos intereses no pagados, se aproximaba a los 200 millones de bolívares, suma equivalente a cuatro veces el presupuesto de ingresos y gastos públicos nacionales del año 1898-99. Aunque la balanza comercial presentaba en los años finales del siglo XIX moderados superávit, las exportaciones disminuían, afectadas parcialmente por la depresión cíclica del sistema capitalista internacional. Venezuela vivía principalmente del café y accesoriamente del cacao, el ganado y otros productos primarios; pero los rendimientos de esos cultivos y negocios se repartían muy desigualmente: los salarios eran muy bajos, el procedimiento semifeudal de la renta-trabajo y la renta-especie como gravamen al campesino sin tierra absorbía las energías y los magros haberes de los conuqueros, condenándolos a una miseria crónica. Los beneficios se distribuían entre los hacendados y los grandes comerciantes exportadores, que hacían de financiadores de las cosechas. El régimen político, sin embargo, no ofrecía ninguna posibilidad de cambio de ese estado de cosas, y todo se limitaba a las ambiciones de los caudillos, las artimañas de los dirigentes civiles y el precario sostenimiento de un hombre sin estatura de líder en la presidencia de la República.

En ese cuadro de contradicciones, de menudas rivalidades personales y de grupos, de ausencia de altos objetivos de trasformación nacional, una aventura temeraria y extraordinaria como la de Castro podía tener éxito, y en efecto lo obtuvo, tanto por la indudable habilidad de conductor de aquél como por la escasa voluntad con que los combatían las fuerzas del gobierno y la confabulación de intereses y propósitos de quienes detentaban el poder económico para favorecer la asonada, con la esperanza de, una vez derribado Andrade, colocar al nuevo hombre bajo su influencia y resolver así dos problemas simultáneamente: el de las rivalidades

de los caudillos por la sucesión del gobierno y el de la amenaza emergente del campo liberal nacionalista. Puede decirse, por tanto, que de derrota en derrota, de traición en traición en el lado oficialista, el flamante "ejército restaurador" de Cipriano entró a Caracas, mientras el presidente Andrade se fugaba al exterior. El 23 de septiembre de 1899 comenzó la etapa de los "andinos en el poder".

Castro denominó a su movimiento *la Restauración* y le dio un contenido programático genéricamente liberal, producto de una mezcla de liberalismo hernandista y de liberalismo colombiano decimonónico, pero con un sello personalista mesiánico. La consigna: nuevos hombres, nuevos procedimientos, nuevos ideales, no era la primera vez que servía de pretexto a un movimiento orientado a la captura del poder político, y recordaba algo la campaña liberal guzmancista de 1840-46. Lo de nuevos hombres se hizo en verdad en gran parte, pues entraron a ocupar posiciones y cargos significativos en el nuevo régimen, tanto en lo militar como en lo administrativo, gente venida de los Andes, principalmente del Táchira, que hasta entonces había participado poco en las esferas del mando nacional. Los andinos tenían, y tienen características diferenciadas entre las poblaciones regionales que componen a Venezuela. El Táchira, más que provincia de emigración lo era de inmigración, tanto del lado venezolano como del colombiano, y en realidad era una confluencia de pueblos y actividades. Los nuevos procedimientos no fueron tan nuevos, pues la práctica del mando continuó, como en el pasado, con corruptelas más avanzadas y represión más a fondo de los opositores. Los nuevos ideales probablemente bullían en la mente de Castro y de algunos de sus seguidores, deseosos de una renovación del acontecer nacional, de la liquidación del viejo caudillismo, del fracasado federalismo, y de una mayor apertura al progreso económico y social pero la política concreta, la menuda red de los intereses dominantes que se tendió en torno al nuevo jefe del estado, el doble juego del halago y la amenaza, hicieron lo suyo para dejar esos ideales en el cesto de los desperdicios. El juego incorporaba, además, las contradicciones entre la burguesía mercantil y usuraria, dueña del capital mobiliario y monetario, y la clase terrateniente explotadora del campesinado, nutrida durante el último tercio del siglo XIX con los caudillos federalistas cuyo apetito de tierras era superior a su afán guerrerista. Según cálculos de la época la población venezolana, cifrada en 2 400 000 habitantes, se componía de un 85% rural y un 15% urbana; de aquélla, alrededor de 2 millones de personas no poseían tierras y eran víctimas del latifundio.[22]

Una definición del contenido socioeconómico del movimiento primigenio liderizado por Castro lo identifica con los intereses de los campesinos y terratenientes medianos y prósperos de los Andes —donde la propiedad territorial no podía ser efectivamente vasta como en otras regiones del país y donde los cultivos tienen que ser más intensivos por unidad de superficie— y la pequeña burguesía de esa misma región (pequeños comerciantes, artesanos, empleados, maestros, estudiantes). El crecimiento económico de los Andes, basado en el café y el ganado, era superior al del resto del país; pero sus pobladores permanecían como aislados, sin participación apreciable en el manejo de la cosa pública nacional. De cierto modo el movimiento de Castro tendía a reivindicar una aspiración regional de integra-

[22] Juan Bautista Fuenmayor, *Historia de la Venezuela política contemporánea, 1899-1969*, Caracas, 1975, t. I, pp. 32-33.

ción al país, pero en posición prevaleciente. Esta aspiración proyectaría sus aspectos negativos en más de cuatro décadas de la vida venezolana.

El gobierno de Cipriano Castro (1899-1908) fue dictatorial. El pueblo no se benefició del cambio político. La administración fue lamentable, corrompida, para disfrute de las clases dominantes y de "los andinos en el poder". La "dorada" sociedad del centro del país —Caracas, La Victoria, Valencia— se prosternó ante el dictador, se prostituyó más de lo que ya estaba y prostituyó al propio movimiento de Castro. El peculado, la malversación de fondos y el tráfico de influencias dominaron el panorama de la cosa pública. El decadente liberalismo amarillo pretendió "restaurarse" con el régimen de Castro; pero éste rompió poco después con sus exponentes y caudillos. La reacción del liberalismo amarillo tomó cuerpo en la llamada "revolución libertadora" de M. A. Matos —banquero y general—, en la cual se congregaron en su mayoría los caudillos tradicionales. Pero más interesantes son dos hechos que muestran una faz distinta de la política de Castro y que permiten calificarlo, de cierto modo, como nacionalista. Estos hechos fueron: el bloqueo de puertos venezolanos por una escuadra de potencias europeas, en 1902, con la pretensión de cobrar a cañonazos y mediante la ocupación de puertos y aduanas la deuda exterior de la República, aumentada a la medida del afán de despojo imperialista mediante manipulaciones contables y financieras; y el enfrentamiento a los intereses mineros norteamericanos representados por la compañía New York and Bermúdez Co. El 9 de diciembre de 1902 una flota anglogermana atacó en el puerto de La Guaira a unos pequeños, viejos y casi inservibles buques venezolanos, incapaces de defenderse frente a los acorazados enemigos; la infantería de marina de la flota agresora desembarcó en el puerto con ánimo de conquista. Poco después Italia declaró su alianza con Inglaterra y Alemania para agredir a Venezuela. El 13 del mes citado el ataque fue contra Puerto Cabello. El 17 de enero de 1903 un buque de guerra alemán intentó forzar la barra del lago de Maracaibo y atacó el castillo de San Carlos, que la defendió a cañonazos contra el invasor. El presidente Castro lanzó una proclama a la nación condenando el hecho y haciendo una llamada a la conciencia nacional para resistir la agresión, que comenzaba con las famosas palabras: "la planta insolente del extranjero ha profanado el suelo sagrado de la patria". Una reacción patriótica muy viva originó la acción imperialista. Reclamaban los acreedores no sólo la deuda financiera sino también daños y reparaciones de intereses y personas alemanes, ingleses e italianos relacionados con las contingencias de nuestras guerras internas. La solidaridad popular latinoamericana se manifestó sin tardanza; no así la de los gobiernos. La única excepción fue la Argentina, cuyo canciller Luis M. Drago expresó ante el gobierno de Washington, en nota diplomática trascendente, una doctrina que en esencia condenaba la intervención armada extranjera como medio coactivo para el arreglo de deudas originadas en contrataciones civiles o mercantiles y no en tratados internacionales. El gobierno de Estados Unidos, desde luego, intervino, bajo la advocación de la doctrina Monroe, como mediador en el conflicto. El embajador norteamericano en Caracas, Bowen, fue de hecho designado por Castro, con el apoyo de la oligarquía caraqueña, mediador entre los agresores y el agredido. Desde luego, el problema fue resuelto en favor de las grandes potencias, actuando Estados Unidos como árbitro y bajo su garantía. El bloqueo fue levan-

tado. El otro conflicto fue directamente con el capital imperialista norteamericano, representado por la New York and Bermúdez Co. que aspiraba a mantener su dominio sobre un lago de asfalto venezolano. La compañía norteamericana había conspirado contra el gobierno de Castro, llegando a financiar una llamada "revolución libertadora" acaudillada por el banquero oligarca Manuel Matos y que fracasó en vísperas de la agresión imperialista europea a Venezuela, de la cual se ha hecho mención. Un proceso de juicios, reclamaciones, amenazas de invasión norteamericana a Venezuela, campaña mundial imperialista contra el gobierno de Castro y conspiración para derribarlo, culminó, primero, con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela en junio de 1908, y poco después, en diciembre de ese mismo año, con la caída del gobierno de Castro y su remplazo por Juan Vicente Gómez.

7. *La causa rehabilitadora*

Resultado notable del régimen de Castro fue la liquidación del caudillismo tradicional y de los residuos de los viejos partidos. Fue una empresa política y militar en la que colaboraron el general J. V. Gómez y el proceso histórico. El entierro formal del caudillismo ocurrió durante la dictadura de este último. Con motivo de una grave enfermedad el general Castro viajó a Europa en noviembre de 1908, para no regresar jamás a Venezuela. Poco después, el 19 de diciembre, una conspiración con ribetes histriónicos —armada en confabulación de intereses imperialistas europeos y norteamericanos y los de la oligarquía interna— elevó a J. V. Gómez a la posición de dictador de Venezuela, bajo un nuevo nombre: la Causa Rehabilitadora, que habría de perdurar hasta 1935, año de la muerte física del dictador. En una primera etapa, de transicion, hasta 1914, Gómez aparentó rodearse de los viejos caudillos liberales —prácticamente liquidados en su poder— reuniéndolos en un Consejo de gobierno que tenía funciones de asesoramiento, pero que en verdad fue una entelequia. Mientras tanto, Gómez consolidaba sus posiciones, liquidaba todo resto de libertades públicas y se apoyaba cada vez en una alianza entre los intereses imperialistas en expansión en el país —tras el nuevo señuelo del petróleo— y las clases dominantes: los dueños de la tierra y la burguesía mercantil y usuraria. Esta última adquirirá cada vez más poder, dependiente del imperialismo, con el crecimiento del negocio petrolero. El primer acto de Gómez fue, en diciembre de 1908, pedir la intervención —o "protección"— militar norteamericana para el sostén de su gobierno. El 13 de febrero de 1909 el nuevo dictador reconoció todas las exigencias hechas a Castro por el gobierno de EU y prometió abrir enteramente las puertas al capital extranjero. A partir de 1913 la dictadura se hizo absoluta.

IV. PERÍODO 1926-1935

1. *Cuadro histórico general*

La causa restauradora, de Cipriano Castro, fue sucedida por la causa rehabilitadora, de Juan Vicente Gómez, que se prolonga hasta 1935 año de la muerte del dictador. El 19 de diciembre de 1908 asumió Gómez la jefatura del gobierno como resultado de un golpe de palacio con visos de opereta, aprovechando la ausencia del país de Castro que había ido a Europa en procura de salud. No fue más que "una evolución dentro de la misma causa", como la calificó el propio Gómez.[23] Sin embargo, el régimen gomecista se diferenció considerablemente del anterior, no sólo por el estilo personal del dictador sino también —lo que es más importante— por la conducta ante el capital extranjero. Castro fue el último gobernante de un país agroexportador, fragmentado por el dominio de los caudillos, endeudado con el exterior, pobre en recursos fiscales, financieros y monetarios, conmovido aún por los aletazos agónicos de las guerras intestinas. Gómez fue el primer gobernante de un país petrolero, con predominio del capital extranjero, sin el fiero "caudillaje" tradicional, sin los partidos "históricos" (diferentes matices de conservatismo y de liberalismo), con un creciente potencial fiscal, financiero y monetario, de solvencia restablecida en cuanto a la deuda pública y de relativa paz pública bajo la consigna de "unión, paz y trabajo". No se diferenciaron, desde luego, en los métodos represivos, en la supresión efectiva de libertades, derechos y garantías de los ciudadanos, en la práctica del enriquecimiento ilícito y el predominio de los intereses privados poderosos sobre el interés nacional.

La caída de Castro fue preparada, impulsada y apoyada abiertamente por los intereses imperialistas norteamericanos y europeos en alianza con las clases dominantes del país. Desde el famoso litigio de la nación contra la compañía norteamericana del asfalto, el gobierno y el gran capital de Estados Unidos no se dieron tregua ni reposo en la tarea de derrocar a Castro y sustituirlo por un dictador complaciente con aquéllos. En esa tarea recibieron la colaboración de gobiernos e intereses de las potencias imperialistas europeas —Inglaterra, Francia, Holanda, etc.— y de representantes políticos del latifundismo y la burguesía comercial. El propio Gómez solicitó la intervención armada de Estados Unidos para proteger al nuevo gobierno, iniciándose éste, por tanto, con un acto de traición nacional. El 13 de febrero de 1909, poco después del golpe de palacio que derribó a Castro, se firmaron en Caracas los protocolos llamados Buchanan-Gómez, por los cuales se reconocían todas las exigencias hechas por el gobierno de Estados Unidos al de Venezuela, incluida la anulación de la indemnización a que fue condenada por un alto tribunal venezolano la New York and Bermúdez Co. por daños y perjuicios causados a la nación por dicha compañía.[24] Cuando Castro intentó regresar a Venezuela para recuperar el mando, en abril de 1909, el gobierno de Estados Unidos movilizó su influencia y sus buques de guerra para impedir la entrada del exdictador no sólo a Venezuela sino a cualquier país americano.[25] Castro lograría

[23] Ramón J. Velásquez, *op. cit.*, p. xv.
[24] Juan Bautista Fuenmayor, *op. cit.*, p. 183.
[25] *Ibid.*, pp. 185-186.

después residencia en Puerto Rico, colonia de Estados Unidos, donde vivió permanentemente vigilado hasta su muerte en 1925.

Es indispensable plantear la cuestión de los móviles del imperialismo y de las clases dominantes venezolanas para propiciar el derrocamiento de Castro. Éste, en verdad, no era un peligroso revolucionario anticapitalista, antimperialista o prosocialista; ni siquiera acometió durante su gobierno reformas progresistas en favor del pueblo. El régimen agrario injusto, semifeudal, que había prevalecido desde la colonia, no sufrió modificaciones durante el período 1899-1908. La burguesía comercial y usuraria también gozó de privilegios, aunque algunas veces fue víctima de los caprichos y arbitrariedades del dictador. Si bien el movimiento andino de 1899 había correspondido, de cierto modo, a intereses de clase media y de campesinado próspero, no se propuso en los hechos políticos y administrativos llevar a cabo una revolución democrático-burguesa. Sin embargo, Castro, en lo personal, en su turbulento estado de conciencia, era un nacionalista con un aprecio primario por la soberanía nacional; su confusa intuición de la antinomia imperialismo-autonomía fue significativamente iluminada por el hecho de que el capital extranjero expansionista, representado por el consorcio norteamericano del asfalto ya citado, financió la campaña del caudillo banquero Matos contra su gobierno, con resultado fallido; y más iluminada aún por la agresión armada de las potencias colonialistas europeas contra Venezuela bajo el pretexto de cobrar por la fuerza deudas abusivamente infladas. La reacción nacionalista de Castro y su temperamento temerario y poco sumiso no le granjearon el apoyo de los terratenientes ni de los grandes comerciantes y prestamistas. Igualmente hay que señalar que sus procedimientos dictatoriales, represivos, personalistas, su falta de vinculación con el pueblo, sus hábitos de disipación y la ausencia de frenos morales en lo individual, le enajenaron el respaldo popular, y así muy pocos sintieron la caída de Castro y muchos saludaron el ascenso de Gómez como un alivio. Para el capital extranjero era la franquicia en su afán de apoderarse de los recursos petroleros de Venezuela, como en efecto se apoderó durante el régimen gomecista.

En los primeros años Gómez desarrolló una política para estabilizar y consolidar su gobierno. El regreso al país o a la libertad de los caudillos derrotados y disminuidos durante la presidencia de Castro fue aprovechado transitoriamente por Gómez para incorporarlos formalmente en los cuadros públicos, bien como miembros de un decorativo consejo de gobierno, bien como presidentes de estado o como senadores al Congreso nacional sin representación efectiva. En esas funciones languidecieron los antiguos caudillos liberales, o se fastidiaron, o se fueron a rumiar su pasivo descontento a sus haciendas o al extranjero. El caudillismo estaba definitivamente liquidado en este país. En esos primeros años, hasta 1913, se permitió algún ejercicio —muy restringido y tímido— de libertades públicas. Mientras tanto, el nuevo gobernante maniobraba para desplazar y anular los residuos del castrismo, y para controlar con sus amigos y seguidores todo el aparato del estado, el ejército y la administración. En ese proceso de estabilización y consolidación, Gómez se vio favorecido por la situación económica, ya que, desde 1909, los precios de las exportaciones se recuperaron y el volumen de los artículos exportados se amplió, lo que hizo aumentar los ingresos de divisas, las importaciones y los ingresos del Tesoro con los consiguientes efectos positivos en la economía

privada. Fueron abolidos los impuestos a la exportación de café, cacao y cueros y se regularizó el servicio de la deuda pública de acuerdo con lo prometido a las potencias acreedoras, lo cual, por supuesto, le dio mayor "credibilidad" ante los ojos del imperialismo y de la burguesía comercial. Simultáneamente se dedicó a fortalecer, modernizar y regularizar el ejército, que será su instrumento eficaz de poder y cuya jefatura siempre se reservó aun en los períodos en que —por su propio designio— no ejerció directamente la presidencia de la República. Paralelamente al ejército regular funcionó un cuerpo paramilitar denominado "La Sagrada", compuesto por andinos (principalmente del Táchira), de absoluta confianza del dictador y su equipo.

J. V. Gómez fue designado por el Congreso para la presidencia de la República durante el período 1909-13. En 1913, último año del período, debían efectuarse elecciones para nuevo presidente; pero el dictador maniobró para perpetuar su mandato, primero colocando en los cargos más importantes a sus amigos y servidores más fieles e incondicionales, y luego inventando conspiraciones supuestamente orientadas no sólo a derribarlo sino también a eliminarlo físicamente, lo que le permitió encarcelar o expulsar del país a sus presuntos adversarios o sospechosos de infidelidad, suspender las formales garantías constitucionales y crear de este modo una emergencia cuya solución fue una reforma del régimen constitucional, la captura de todo el poder político para el gomecismo y la imposibilidad de que cualquier candidato no adicto a Gómez fuera postulado a la presidencia de la República. Fue así como se frustró la candidatura del doctor Félix Montes, lanzada por el periodista Rafael Arévalo González en su diario *El Pregonero* el 11 de julio de 1913. El resultado fue que el periodista fue a la cárcel y el candidato al exilio. Por esos mismos tiempos tuvo lugar un movimiento de aclamación a Gómez por parte de representantes de las clases dominantes del país y de los agentes y testaferros del imperialismo. Telegramas, cartas y manifiestos fueron enviados desde todo el país al dictador, rindiéndole homenaje y expresándole reconocimiento por las bondades que había prodigado a la República. Nombres conocidos, apellidos tradicionales, casi todo lo que en Venezuela componía las "fuerzas vivas", aclamaron a Gómez en 1913 —como antes habían aclamado a Castro, y mucho antes a Crespo y a Guzmán—, y virtualmente lo instaron a perpetuarse en el poder y le dieron el espaldarazo al absolutismo que Gómez pretendía y que preparaba cuidadosamente desde el momento de su golpe contra Castro. La aclamación, por supuesto, correspondía a una política de dominación sostenida por las clases propietarias en complicidad con los intereses imperialistas extranjeros, para asegurar la continuidad de un régimen en que confiaban para su favorecimiento, para explotar con tranquilidad y abuso la fuerza de trabajo y los recursos naturales del país, unos en los campos petroleros, otros en los de cultivo y pastoreo. Gracias a ese apoyo, a la eficacia del ejército y de la policía, a la brutal represión que caracterizó al régimen hasta su desaparición, Gómez pudo mandar en forma absoluta —por supuesto, como sirviente de los intereses ya mencionados—, guardando las apariencias constitucionales mediante la fórmula cínica de un presidente provisorio, en falso ejercicio del mando, y un presidente electo —siempre Gómez— encargado de la jefatura del ejército y quien realmente gobernaba desde Maracay, ciudad relativamente cercana a Caracas en la cual se concentraba la mayor fuerza

militar. Así, ocuparon la presidencia, con carácter interino y provisorio, José Gil Fortoul, Victorino Márquez Bustillos y Juan Bautista Pérez, dando la impresión de mando civil cuando en realidad era una dictadura absolutista, terrorista, militar-policial, proimperialista y prolatifundista.

El sustentador principal de Gómez fue, sin duda, el imperialismo petrolero. La economía tradicional agroexportadora, fundada en los cultivos de café, cacao y otros frutos y en la ganadería, con escasa actividad minera, artesanal e industrial, dependía de factores internos y externos y estaba repartida —harto injustamente, desde luego— entre grandes, medianos y pequeños propietarios de diversas regiones del país; para la conservación de esos cultivos y pies de cría, para la recolección y movilización de las cosechas y para la ampliación de plantaciones y rebaños se requerían contingentes numerosos de fuerza de trabajo, generalmente vinculados a las haciendas y hatos no sólo en lo económico sino también en lo personal, de adhesión al propietario cuando éste, en trajines de guerra, los tomaba como reclutas de su grupo armado. Las casas exportadoras, representantes de capital extranjero, financiaban los cultivos en términos leoninos y monopolizaban las ventas al exterior; pero la mayoría de esas casas, cuyos administradores y socios se residenciaron en el país, se venezolanizaron en el correr del tiempo y sus propietarios fundaron familias en Venezuela que hoy figuran entre las más activas e importantes de la burguesía. Los precios internacionales del café y el cacao, en correspondencia con las fluctuaciones de la demanda y la oferta, al variar en uno u otro sentido ocasionaban altibajos en la situación económica básica del país y en las propias finanzas del gobierno. Aquella economía, en aquella época —entre la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX—, funcionaba en relación con un sistema capitalista mundial en expansión y en tránsito de su forma liberal a su forma de concentración monopolista creciente. Esa economía tradicional sufrió varias crisis, pero la mayor, la que señaló su decadencia definitiva, fue la ocurrida durante la primera guerra mundial y en relación con sus contingencias. El bloqueo de los canales mercantiles internacionales durante ese conflicto determinó la caída del volumen de exportaciones y de las importaciones, así como una baja de la renta aduanera, principal rubro fiscal de entonces,[26] lo que obligó al gobierno a reducir en el año fiscal 1915-16 los egresos en un 25%; meses más tarde, en noviembre de 1915, el propio presupuesto de ingresos fue rectificado para concordarlo con la realidad.[27] Los efectos negativos de la guerra mundial de 1914-18 se dejarían sentir con particular intensidad, y serían reforzados, durante el quinquenio 1920-25, en que los precios medios de exportación descendieron de un nivel de 100 en 1920 a uno de 52 en 1922, recuperándose parcialmente hasta 99 en 1925; el nivel de 1920 no fue recuperado jamás y después de 1929 la crisis capitalista mundial sepultó en Venezuela la agricultura de exportación, que desde entonces vegeta entre la inanición y la moderada reanimación.

La actividad petrolera comenzó en Venezuela, en la fase de exploración, y de una explotación primitiva, casi artesanal, con la Compañía Petrolera del Táchira,

[26] *Mensajes presidenciales*, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1971, t. IV, p. 70.
[27] Juan Bautista Fuenmayor, *op. cit.*, p. 280.

en 1878, constituida por intereses venezolanos, y que operó en la perforación, producción, trasporte, refinación y venta de productos de petróleo en la región de los Andes, en cantidades muy pequeñas.[28] Las concesiones para explorar y explotar petróleo, asfalto y demás sustancias minerales combustibles fueron otorgadas a ciudadanos residenciados en el país durante los gobiernos de Guzmán Blanco, Crespo, Castro y Gómez, que luego las traspasaron a compañías extranjeras (inglesas, norteamericanas y holandesas). Durante el gobierno de Castro, en 1907, fueron otorgadas concesiones petroleras por un total de 4 millones de hectáreas, las cuales fueron traspasadas posteriormente, estando Gómez en el poder, a las compañías extranjeras.[29] La gran danza de las concesiones se desarrolló sobre todo durante las dos primeras décadas del régimen gomecista; en diciembre de 1909 se otorgaron a un agente británico concesiones por 27 millones de hectáreas, poco menos de un tercio de la tierra firme del país, que las endosó a una compañía de su nacionalidad; afortunadamente esa compañía no tuvo éxito en sus exploraciones y devolvió el bloque de concesiones en 1911. Desde 1909 no cesó el tráfico de concesiones en gran escala, sirviendo como testaferros ciudadanos venezolanos; en ese tráfico la competencia interimperialista se puso de manifiesto agudamente. Los ingleses llegaron antes que los norteamericanos al reparto petrolero de Venezuela; pero los norteamericanos, con el afianzamiento de Gómez en el poder, utilizaron toda clase de recursos y medios —sin fronteras institucionales, ni morales— para recuperar el tiempo perdido y ganar la delantera a los ingleses, como en efecto lo lograron, después de la primera guerra mundial. El período 1913-18 fue de intensa exploración del subsuelo por las compañías británico-holandesas, principalmente el consorcio Royal Dutch Shell. Para 1918 las concesiones alcanzaban a más de 30 millones de hectáreas y las exploraciones habían dado resultados moderadamente satisfactorios. La explotación comercial se inició en 1917, pero el petróleo no ocupó el primer puesto en la exportación venezolana hasta 1926. El propio Gómez, a través de interpuestas personas, participó en el tráfico de concesiones, fundando para ello una compañía petrolera en 1923. La producción de petróleo, iniciada en 1917 con un promedio diario de 332 barriles, alcanzó en 1923 a 10 000 barriles diarios. El 14 de diciembre de ese año reventó con violencia el pozo perforado en el área La Rosa, del campo costanero del distrito Bolívar del estado Zulia, señalado como Los Barrosos-2, y fluyó petróleo del subsuelo a la rata diaria de 16 000 metros cúbicos; el flujo se detuvo por sí mismo el 23 de diciembre y la producción total durante el reventón se estimó en 150 000 metros cúbicos.[30] Este acontecimiento conmovió al mundo petrolero internacional y las ambiciones de los consorcios petroleros se desbordaron sobre Venezuela con mayor ímpetu que hasta entonces. En 1926 el valor de la exportación de petróleo, asfalto y sus derivados alcanzó a 247 millones de bolívares, en comparación con los 149 millones a que alcanzó el valor de las otras exportaciones; desde ese año hasta el presente, los hidrocarburos han significado el primer rubro de la exportación venezolana.

[28] Pedro Esteban Mejía Alarcón, *La industria del petróleo en Venezuela*, UCV, Caracas, 1971, pp. 82-83.

[29] *Ibid.*, pp. 96-99.

[30] Aníbal R. Martínez, *Cronología del petróleo venezolano*, Caracas, Edición Librería Historia, 1970, p. 58.

Para 1935, año de la muerte de Gómez, el valor de la exportación de hidrocarburos se situó en 649 millones de bolívares, en tanto que las otras exportaciones apenas llegaron a 62 millones.

La lucha interimperialista por el dominio de los recursos petrolíferos venezolanos fue particularmente intensa en las dos primeras décadas del régimen gomecista; sin embargo, en los casos de interés común a las compañías extranjeras de petróleo —verbigracia, la modificación de la legislación sobre hidrocarburos— éstas hacían causa única para lograr las mayores ventajas y para minimizar tanto la intervención oficial en el negocio como los impuestos, tasas y contribuciones relativos al mismo. Hay que citar al respecto las actuaciones del ministro de Fomento doctor Gumersindo Torres. En 1920 el honesto y capaz funcionario preparó un proyecto de ley de hidrocarburos que fue aprobado por el Congreso, mediante el cual se aumentaron apreciablemente los impuestos, se redujeron el área máxima de las concesiones y el área total de concesiones que una compañía podía tener para ser exploradas en un lapso de tres años y se abrevió el término de las concesiones de 50 a 30 años. Esa ley fue adversada por las empresas petroleras, que se valieron de toda clase de medios para lograr su reforma, lo que ocurrió en 1922, cuando el Congreso aprobó una nueva ley redactada por los abogados de las petroleras, y el ministro Torres salió del despacho de Fomento. En 1930, otra vez al frente del Ministerio el doctor Torres, éste elaboró un reglamento de la ley de hidrocarburos, por el cual se hacía más rigurosa la fiscalización de las operaciones petroleras, en beneficio de los intereses nacionales; por supuesto, las compañías objetaron el reglamento y pidieron su derogación. Al responder el ministro a las objeciones de los consorcios petroleros, expresó la realidad de la contribución de la actividad petrolera a la nación en los términos siguientes: "...el monto de las exoneraciones (de los derechos de importación, MZ) asciende en 10 años a la cantidad de bolívares 233 359 462.06 y los impuestos recaudados en igual período (impuesto superficial y de explotación, MZ) montan a la cantidad de bolívares 171 952 126.10. De la comparación de estos guarismos resulta el cálculo desconsolador de que habría sido preferible no cobrar impuesto alguno de explotación en cambio del pago de los derechos de aduana exonerados".[31] Por supuesto, una vez más, el ministro Torres salió del despacho y el reglamento fue dejado sin efecto.

La importación de bienes y servicios aumentó sustancialmente con el impulso petrolero; además de la importación de las compañías petroleras para sus operaciones en el país, crecieron las compras al exterior del gobierno y del sector privado, en su mayor parte de bienes de consumo que no se producían internamente. Las divisas petroleras comenzaron a afluir al mercado venezolano desde los primeros años del despotismo gomecista, pero esa afluencia se ensanchó después de 1922 con el auge del negocio petrolero, de tal modo que el precio del dólar bajó y la inclinación a importar —de las clases favorecidas— se acentuó. El negocio de importación prosperó y fue remplazando progresivamente al viejo negocio de exportación agropecuaria, de tal modo que la burguesía comercial se amplió y fortaleció. El financiamiento del negocio importador —más diversificado que el

[31] Corporación Venezolana de Petróleo, *Material de lectura sobre política petrolera y CVP*, Caracas, 1966, pp. 1-3.

exportador— dio lugar al establecimiento de nuevos bancos comerciales y la expansión de los ya establecidos, de modo que un nuevo estrato de la burguesía, el de los banqueros, fue aumentando su influencia en la vida económica, social y política. Un prominente banquero, a la par que notable intelectual, el doctor Vicente Lecuna, presidente del mayor banco del país, fue consejero de Gómez en economía y finanzas. En buen número de casos, los intereses de la burguesía comercial y de la financiera se mezclaron.

Los grandes terratenientes, aunque continuaron participando del poder económico durante el régimen gomecista, perdieron significación dominante. Gómez y sus acólitos se apoderaron, de uno u otro modo, de los mejores fundos del centro del país y de otras regiones, llegando a ser los mayores propietarios. En buena parte las fincas de los viejos caudillos pregomecistas pasaron a la propiedad del dictador, sus familiares y servidores. Las crisis sufridas por la economía del café y el cacao, aceleradas y profundizadas por el surgimiento de la economía petrolera, determinaron la ruina de muchos hacendados, cuyos fundos fueron rematados para atender las obligaciones que pesaban sobre ellos. La emigración campesina a las zonas petroleras y urbanas, en busca de mejores remuneraciones y condiciones de vida, ocasionó una escasez de trabajadores en el medio rural, lo que contribuyó al malestar de la agricultura. Por otra parte, en las zonas de actividad petrolera, extensas tierras de propiedad privada fueron incorporados al nuevo uso o sujetas a servidumbre en beneficio de la explotación de hidrocarburos. El latifundio persistió, pero el poder de la clase terrateniente pasó a segundo plano. El campesinado sin tierras continuó siendo la clase más numerosa, la más explotada y la más sometida a la miseria. En las ciudades medraba la pequeña burguesía, y comenzaba a formarse el proletariado industrial, de construcción y de servicios. En los campos petroleros crecía un proletariado de importancia singular en las futuras luchas sociales y políticas, dada su relación directa con el gran capital extranjero en la rama de producción que pasaba a ser básica en la economía venezolana: el proletariado petrolero. En 1923 el número de trabajadores de esta rama era de 5 158; en 1935 alcanzó a 12 333.

No todo fue paz bajo la dictadura gomecista. Varios intentos armados y conspiraciones fueron dominados en distintas épocas. En 1914, por ejemplo, se alzó Emilio Arévalo Cedeño al frente de una guerrilla y fue derrotado. Arévalo fue un guerrillero persistente durante la dictadura gomecista, no obstante sus fracasos. En el mismo año 1914 invadió por el oriente Horacio Ducharne, antiguo partidario del general Hernández (liberal nacionalista) y tampoco tuvo éxito, cayendo finalmente prisionero y después asesinado. Otro alzamiento en 1914 fue el del general José Rafael Gabaldón —consecuente luchador nacionalista y demócrata—, también derrotado. En Trujillo, en 1914 y 1915, se efectuaron otros intentos armados, pero todos fracasaron. La maquinaria militar, policial y política de Gómez demostraba su eficacia con implacable consistencia. En 1918 invadió a través de la frontera con Colombia, por el Táchira, el general Juan Pablo Peñaloza, integrante del Consejo de gobierno en 1913, y el resultado fue la derrota y el asesinato de un grupo de prisioneros por el sanguinario Eustoquio Gómez, primo del dictador y entonces presidente del estado Táchira. Por cierto el Táchira, de donde partió en 1899 el movimiento de Cipriano Castro, cuna de éste y de Gómez, no

escapó a los atropellos y crímenes del gomecismo, personificado en Eustoquio, de instintos monstruosos que saciaba sin frenos ni medida. En 1919 tuvieron lugar manifestaciones estudiantiles antigomecistas, vinculadas a una conspiración militar en marcha encabezada por el capitán Luis Rafael Pimentel, que fue descubierta y sus cabecillas encarcelados y torturados; varios de ellos murieron en La Rotunda (cárcel gomecista tétrica situada en Caracas, demolida en 1936). Los líderes estudiantiles del movimiento fueron, entre otros, Gustavo Machado, Salvador de la Plaza y Pedro Zuloaga, los dos primeros abrazaron posteriormente la causa marxista, los tres, miembros de familias de la oligarquía tradicional. Viejos generales de antes de Gómez —Matías Peñuela, Constantino Pérez, Jesús Matamoros, Francisco Linares Alcántara, Ortega Martínez, entre otros— intentaron entre 1919 y 1921 acciones armadas contra la dictadura. Infiltraciones en las fuerzas armadas oficiales fueron descubiertas. La Universidad Central (Caracas) fue clausurada varias veces para sancionar protestas estudiantiles. Acciones de obreros y artesanos también se realizaron; en 1921 estalló una huelga de trabajadores de la Compañía Británica de Tranvías de Caracas, con manifestación en las calles y respaldo de los estudiantes, muchos de los cuales fueron detenidos, entre ellos jóvenes de familias pudientes e incluso hijos de prominentes servidores gomecistas, lo que dio lugar a una especie de protesta de notables personeros de la burguesía caraqueña; desde luego los estudiantes fueron puestos en libertad, pero la universidad fue clausurada hasta 1925.

En 1923 el gobierno de México rompió relaciones con la dictadura gomecista, como culminación de un proceso de creciente tensión política entre ambos gobiernos, debido a que numerosos venezolanos enemigos de la dictadura encontraron refugio en el hermano país y a que tanto el presidente de éste, Álvaro Obregón, como su ministro de educación, José Vasconcelos, no ocultaban su repudio a la tiranía gomecista. Entre 1923 y 1927 ejerció el cargo de ministro de Relaciones Interiores el doctor Francisco Baptista Galindo, que se empeñó en moderar el carácter represivo y tiránico del régimen gomecista, hasta el punto de que en 1927 se puso en libertad a todos los presos políticos y se clausuraron las cárceles llamadas La Rotunda (en Caracas), Castillo Libertador (en Puerto Cabello) y Castillo de San Carlos (en el lago de Maracaibo), que habían sido —y más adelante seguirían siendo— mazmorras de terror donde la muerte de los presos era hecho frecuente.[32] También se permitió el regreso de numerosos exiliados. Probablemente esa moderación en la conducta represiva del gomecismo se debió, por una parte, a la benéfica influencia del ministro Baptista, y por la otra a la presión internacional, pues en varios países extranjeros, incluso en Estados Unidos, se había denunciado reiteradamente la salvaje represión del gobierno de Gómez, y éste, a pesar de todo, era sensible a esa campaña adversa. Lamentablemente el doctor Baptista murió el mismo año 1927, de manera que se estimó sospechosa aunque nunca se pudo comprobar la comisión de un asesinato.

El nepotismo de Gómez sufrió graves reveses en la década de los veintes. Se habló de la existencia de un "clan Gómez" compuesto por el dictador, su her-

[32] Juan Bautista Fuenmayor, *Historia de la Venezuela política contemporánea*, segunda parte, Caracas, 1976, p. 61.

mano Juan Crisóstomo, sus primos Eustoquio Gómez y Santos Matute Gómez, su tío José Rosario García (colombiano) y sus hijos José Vicente y otros. El hermano, Juan C. Gómez (llamado don Juancho), desempeñó los cargos del primer vicepresidente de la República y gobernador del Distrito Federal (Caracas) hasta su muerte por asesinato en 1923, en lo que se presumió fue una intriga familiar complicada con una intriga política de sucesión. En 1925 cayeron en desgracia Eustoquio Gómez y Santos Matute Gómez, probablemente debido a la influencia de José Vicente Gómez hijo del dictador y aspirante a la sucesión. Este último también caería en desgracia con su padre, debido a sus reiteradas ambiciones presidenciales contando con el respaldo de jóvenes oficiales del ejército y de un sector del gomecismo —en el trasfondo también se movían intereses extranjeros ligados al petróleo, ya que las pugnas interimperialistas proseguían, principalmente entre ingleses y norteamericanos—, y a una supuesta participación del delfín en el movimiento subversivo de 1928, todo lo cual lo condujo al exilio del que no regresó, pues murió en Europa tiempo después. En cuanto a José Rosario García, especie de consejero de Gómez, cayó en desgracia en 1931 con motivo de un "consejo" sobre sucesión presidencial en favor de su pariente José María García. A la muerte de J. V. Gómez ocupó la jefatura del gobierno el general Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, que no era pariente del dictador, aunque sí uno de los 60 que invadieron con Castro desde el Táchira en 1899.

En 1927 fue reconstituida la Federación de Estudiantes de Venezuela, después de la prolongada clausura de la Universidad Central que duró hasta 1925. En febrero de 1928 se organizaron unos festejos histórico-literarios para recabar fondos con el objeto de fundar una Casa del Estudiante. Se eligió una reina de los estudiantes con el nombre de Beatriz I, quien fue coronada en el Teatro Municipal de Caracas en acto famoso durante el cual el estudiante poeta Pío Tamayo recitó versos en honor de la soberana, pero con intención de exaltar la libertad contra la opresión. Las jornadas de la Semana del Estudiante se convirtieron en movimiento de protesta contra el régimen gomecista, iniciándose ésta con una manifestación desde la Universidad al panteón nacional, donde el líder juvenil Jóvito Villalba —dirigente político de primer rango en la historia posgomecista— pronunció un discurso ardoroso, virtualmente antigomecista y antimperialista. Concluidas las jornadas fueron detenidos, entre otros, Pío Tamayo, Antonio Arráiz —notable novelista, poeta y periodista, después— Rómulo Betancourt (que ocuparía dos veces la presidencia de la República), Jóvito Villalba y Guillermo Prince Lara, dirigentes estudiantiles entonces. La Federación de Estudiantes protestó las detenciones y otros muchos estudiantes fueron encarcelados. Un movimiento popular, espontáneo, de respaldo a los estudiantes se efectuó en Caracas y otras ciudades; hubo huelgas y otros hechos contra la dictadura. El descontento incorporó, de uno u otro modo, activo o pasivo, a víctimas y resentidos: terratenientes arruinados o despojados, artesanos, obreros, pequeña burguesía y algunos personeros de la incipiente burguesía industrial. Los estudiantes fueron puestos en libertad. El movimiento de 1928 proporcionó marco histórico a la que se llamó "generación del 28", de influencia determinante en la historia venezolana de los últimos 40 años, en el campo político, cultural y hasta económico. Ese movimiento obtuvo incluso la simpatía, encubierta por supuesto, de algunos grupos gomecistas,

notablemente José Vicente Gómez, hijo del dictador, y oficiales del ejército. Poco tiempo después —el 7 de abril de 1928— tuvo lugar un conato de rebelión militar, apoyado por civiles, que fracasó por una delación y la intervención del general López Contreras, jefe militar de Caracas. Nunca antes ni después, estuvo Gómez tan cerca del derrocamiento como entonces. La consecuencia, desde luego, fue el recrudecimiento de la represión con numerosos encarcelados, exiliados y condenados a trabajos forzados en las carreteras. Puede decirse que 1928 fue el antecedente más claro de 1936, en cuanto a la lucha política, popular, con incorporación de la clase media, de estratos progresistas de la burguesía y de los obreros, y el intento de canalizar el movimiento hacia la organización en partidos.

En 1929 tuvieron lugar dos hechos dignos de mención: una fracasada invasión armada contra Gómez, en las costas orientales de Sucre, encabezada por el general Román Delgado Chalbaud, y el asalto a la isla de Curazao (vecina a Venezuela) por un grupo de venezolanos dirigido por Gustavo Machado, líder comunista de proyección histórica. El asalto a Curazao tenía por objeto hacerse de armamento para invadir a Venezuela por el occidente; pero el objetivo fracasó pues el armamento no existía. Todavía un hecho más: en diciembre de 1930 una manifestación popular pro libertad de los presos políticos fue disuelta a tiros de fusil con saldo de muertos y heridos. Luego proseguiría la larga noche de la dictadura, cuyo silencio era apenas perturbado por las fugaces aventuras guerrilleras de Arévalo Cedeño, pero más allá de ese silencio se gestaba el desarrollo político e ideológico, el nacimiento de partidos, de organizaciones sindicales y campesinas, la maduración de la conciencia de la necesidad de una democracia efectiva, de un cambio para colocar a Venezuela en el siglo XX, pues las dictaduras de Castro y de Gómez impidieron en grado casi total que las corrientes de trasformación del mundo contemporáneo se hicieran presentes en el país, y algunas de ellas sólo vivieron subterráneamente en la mente, la actitud y la lucha de unos pocos adelantados que habían tenido la fortuna de conocer otras realidades.

2. *El régimen de producción*

La propiedad privada fundamental durante el período considerado era la tierra, cuya elevada concentración en pocas manos era la característica más notable. Grandes extensiones territoriales, de potencialidad agrícola (vegetal o pecuaria) y/o forestal, eran poseídas por un pequeño número de personas, mientras que la inmensa mayoría de la población rural carecía de suelo propio para su cultivo, y tenía que depender de la relación de trabajo y/o arrendamiento en precario de una parcela a los terratenientes. La renta-trabajo y la renta-especie eran modalidades comunes en el régimen agrario de producción y significaban formas primitivas de explotación de la fuerza de trabajo campesina en provecho de una minoría de propietarios, frecuentemente absentistas. Juan Vicente Gómez,[33] jefe del gobier-

[33] "No necesitó, en Venezuela, el imperialismo propiciar golpes de estado, organizar sangrientas revueltas ni desembarcar su marinería, porque contaba con un gobierno de traición nacional, en síntesis con una dictadura petrolera que funcionaba como una alianza

no, era el mayor propietario a título personal de la época.[34] Sus familiares y amigos eran también grandes propietarios. Las mejores tierras de la parte norcentral del país eran de Gómez, sus parientes y acólitos. Otros grandes propietarios eran los descendientes de las antiguas familias de la aristocracia criolla, de los caudillos y de los que, de una u otra manera, formaban parte de la oligarquía tradicional. El latifundio predominaba entonces.

La actividad petrolera emergente influyó en cuanto a darle movilidad relativa a la propiedad agraria, y también como causa coadyuvante de la decadencia de esa forma de propiedad en el cuadro de las relaciones económicas del país.[35] Las compañías petroleras adquirieron el dominio de enormes extensiones de tierra, bajo la figura de la *concesión*. Su demanda de fuerza de trabajo en determinadas zonas del país —Monagas y Anzoátegui, en el oriente; Zulia, en el occidente, principalmente— determinó en parte un éxodo campesino hacia los campos petroleros y sus vecindades, que provocó una escasez de peones en las haciendas colocándolas en dificultades de producción. El éxodo campesino también obedeció al empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida en el medio rural y a la atracción que las actividades periféricas en los campos petroleros —servicios improductivos, concretamente— ejercían en las capas depauperadas de la población agrícola. Sin embargo, propietarios de algunas fincas rurales, enclavadas en el área de prospección petrolera, se beneficiaron de la actividad de las compañías mediante la fórmula de la regalía, mientras propietarios de otras que fueron afectadas desfavorablemente en su potencial productivo recibieron una compensación económica que resultó sustancialmente insuficiente. En todo caso, la estructura agraria no se modificó en lo esencial; la concesión petrolera no quebrantó el régimen de latifundio, sino que, en cierto sentido, lo fortaleció y complementó. Una parte considerable del sector agrícola estaba ocupada en la economía de subsistencia, bajo la forma de "conuco", es decir, de cultivos rudimentarios generalmente mezclados en muy pequeñas superficies de tierra cuya propiedad, con frecuencia, no era del campesino, y cuya producción apenas alcanzaba para la alimentación pobre de la familia. Para complementar sus medios de vida el conuquero tenía que emplearse temporalmente como "peón" en las haciendas. El pago del salario no se efectuaba en dinero por lo general, sino en "fichas" sólo utilizables para comprar en la tienda de abarrotes del hacendado, donde los precios eran arbitrariamente fijados y siempre muy superiores a los del mercado; de allí que el peón resultara permanentemente endeudado con el hacendado y obligado a trabajar para él de por vida. Así pues, en el campo coexistían dos polos: el latifundio con la economía de subsistencia y la explotación

de clases dominantes nativas y los monopolios norteamericanos." Federico Brito Figueroa, *Historia económica y social de Venezuela*, t. II, Caracas, 1966, UCV, p. 373.

[34] "En términos individuales, Juan Vicente Gómez, el primer latifundista del país, conjuntamente con sus áulicos, se apoderó, utilizando la fuerza del estado, de las fincas representativas de la riqueza agropecuaria de Venezuela en las tres primeras décadas de la era petrolera." Federico Brito Figueroa, *op. cit.*, p. 387.

[35] "En Venezuela, en las primeras décadas del siglo XX, el petróleo constituye un factor de movilidad de la propiedad territorial agraria, porque influye en la incorporación de extensas áreas del dominio público —ejidos, tierras nacionales y municipales— al patrimonio de las petroleras y de los caudillos militares del gobierno". Federico Brito Figueroa, *Ibid.*, p. 389.

primaria de la fuerza de trabajo en condiciones aproximadamente feudales. Si se hace referencia al hecho de que el 85% de la población vivía en el medio rural y dependía de éste, se apreciará el carácter determinante de las relaciones agrarias de producción así tipificadas. Por vía de ilustración mencionaré que de un ingreso nacional estimado en 1 000 millones de bolívares al año, como promedio, en el período 1916-25, un 50% aproximadamente se originaba en la agricultura y la mitad de la producción agrícola se destinaba a la exportación.[36]

En el área urbana predominaban la pequeña producción mercantil, el comercio y los servicios. El artesanado tenía alguna importancia y su contribución al producto nacional se estimaba en un 15%. El comercio, el trasporte y los servicios privados aportaban un 20% de dicho producto y la actividad gubernamental un 10%. La industria manufacturera, cuyas dimensiones técnico-económicas variaban entre la pequeña y la mediana, significaban un 2%. El petróleo, no obstante su creciente peso en la exportación, aportaba un 3% del producto, lo que, en todo caso, puede señalarse como una subestimación; las indicaciones citadas adolecen, desde luego, de una base estadística insuficiente, ya que para los años considerados la información económica era muy rudimentaria.

El comercio se ocupaba en la exportación, la importación y la circulación mercantil interna. Se exportaban principalmente productos agropecuarios (el petróleo era exportado directamente por las compañías concesionarias) y se importaban bienes industriales, alimentos elaborados o en proceso de elaboración, maquinaria, equipo, medios de trasporte y algunos insumos para la agricultura, la minería, la construcción y la industria; las compañías petroleras importaban directamente los artículos que les eran indispensables, exonerados de derechos aduaneros. En 1926 el valor de la exportación agrícola alcanzó a 150 millones de bolívares y el de la exportación de asfalto, petróleo y derivados 247 millones, cifras que indican que fue ése el primer año que los hidrocarburos se colocaron a la cabeza del comercio exterior venezolano, posición que ocupan hasta el presente. En 1926 la importación se situó en 412 millones de bolívares, cantidad que incluye las adquisiciones de las compañías petroleras en el exterior, determinándose un moderado déficit de la balanza de mercancías. Ese déficit debe ser analizado a la luz de los componentes del comercio exterior: del lado de la exportación hay que tener en cuenta que la efectuada por las compañías petroleras no tenía como contrapartida un ingreso de divisas al país por un monto equivalente, sino por uno sustancialmente menor correspondiente al "valor retornado", es decir, la parte del valor de la exportación que realmente constituía ingreso nacional (remuneraciones del trabajo venezolano e impuestos percibidos por el fisco nacional); del lado de la importación, por tanto, también hay que discriminar entre la efectuada por las petroleras —pagadas de sus propios recursos externos— y las del resto de la economía. De modo que presumiblemente el déficit comercial debió ser, en todo caso, diferente del registrado por la estadística. El gobierno obtenía su principal ingreso de los derechos aduaneros y recauda-

[36] "Una estimación del ingreso nacional y su composición para el período 1916-25 nos daría aproximadamente como promedio anual (en millones de bolívares): agricultura 480; artesanía e industria 200; comercio, trasporte y servicios 200; gobierno 120; total 1 000; petróleo 25." Francisco Mieres, "Los efectos de la explotación petrolera sobre la agricultura en Venezuela", apéndice de la obra de Héctor Malavé Mata intitulada *Petróleo y desarrollo económico de Venezuela*, UCV, Caracas, 1962.

ciones menores en concepto de impuestos internos sobre la circulación y el consumo. El petróleo no aportaba más de un 20%, por término medio, del ingreso público nacional en el período considerado.

El proletariado estaba en proceso de formación. Consistía en pequeños grupos obreros en las fábricas, el trasporte, la construcción y algunos servicios. La actividad petrolera en crecimiento determinaba la formación de un nuevo tipo de proletariado, cualitativamente diferenciado, vinculado a una explotación primaria y en relaciones de producción con el capital monopolista internacional. La inversión extranjera en el país para 1929 se estima en 260 millones de dólares la mayor parte aplicada al negocio petrolero y otra parte a los servicios, la banca y el comercio. Las inversiones de Estados Unidos ascendían a 162 millones de dólares y las de Inglaterra y Holanda, conjuntamente, 82 millones. También existía alguna inversión extranjera en actividades relacionadas con el mercado interno, notablemente la electrificación, el trasporte y algunas industrias. Comenzaba a perfilarse en ese período, por tanto, una estructura económica heterogénea, compleja en un grado mayor que en la época prepetrolera, y que se componía de los elementos siguientes: agricultura de exportación, agricultura de subsistencia, pequeña producción mercantil, incipiente industria manufacturera, construcción, comercio y servicios; como un enclave en expansión se situaba la actividad petrolera bajo el control directo de los monopolios internacionales. Desde luego, el modo de producción era capitalista, ya que predominaban los elementos correspondientes al mismo, pero era un capitalismo periférico, dependiente, carente de integración interna y cuya dinámica se subordinaba enteramente a la coyuntura capitalista mundial como un proceso reflejo y distorsionado.

3. *Las fuerzas productivas*

La base material de sustentación de la sociedad venezolana de la época era la explotación de recursos naturales de índole agrícola y petrolera, con aplicación intensiva de fuerza de trabajo y tecnología heterogénea (desde la rudimentaria en haciendas y hatos hasta la más avanzada en los campos petroleros). Grandes deficiencias e insuficiencias de infraestructura frenaban la expansión agrícola, además, por supuesto, de la regresiva distribución de la propiedad agraria. Las vías de comunicación, escasas, se orientaban en función de las necesidades de una economía "de puerto" (exportadora-importadora); los medios de trasporte prevalecientes en el medio rural eran los de tracción animal; funcionaban algunos ferrocarriles de corto trayecto; se carecía casi completamente de silos, centros de acopio y procesamiento de frutos, salvo los cultivos de café y cacao. La actividad petrolera se realizaba con los procedimientos, técnicas y medios más adelantados de su género, para la época, y la combinación productiva era de índole capitalista, con una mediana intensidad de capital y absorción considerable de fuerza de trabajo. El artesanado ofrecía muy limitadas posibilidades de evolución tecnológica y de incorporación de trabajadores dependientes. La industria manufacturera no era propicia a la renovación dinámica de equipos y procedimientos de fabricación. La construcción se efectuaba en base de la incorporación relativamente numerosa de

fuerza de trabajo. El sector primario de la producción ocupaba el primer lugar en cuanto a la generación del producto, el sector secundario estaba en situación incipiente y el sector de los servicios tenía una expansión desmedida con respecto a la base material de la producción.

4. *La dinámica de clases*

Antes de la incorporación de la actividad petrolera a la economía venezolana pocos cambios se habían realizado en la estructura social con referencia a la existente por ejemplo, al iniciarse el movimiento federal (1859). La gran masa de la población era campesina y vivía en la pobreza y en situación precaria, porque el campo no le proporcionaba medios de subsistencia suficientes. Bajo la denominación de "campesinado" pueden incluirse los grupos siguientes: conuqueros (microparceleros), peones-conuqueros adscritos de hecho a las haciendas y peones-jornaleros. Los campesinos, por lo general, no eran propietarios territoriales y se veían forzados a cultivar en baldíos o pagar renta en trabajo, especie o dinero a los terratenientes. El conuco (microparcela) era cultivado por el propio campesino y su familia, principalmente con propósito de subsistencia. Existían algunas comunidades indígenas, dispersas en el país, que trabajaban la tierra en común y poseían en común los medios de producción y el producto. También existían grupos reducidos de pequeños y medianos productores rurales, terratenientes, que operaban en una escala apreciable de producción para el mercado y obtenían ingresos superiores a los de los conuqueros, mediante la aplicación de procedimientos, medios y métodos menos rudimentarios de cultivo y la comercialización de los productos. El grupo de los grandes terratenientes (latifundistas) —que probablemente no excedía de los 6 000 en el período considerado— monopolizaba alrededor del 80% de las tierras privadas y llevaba su dominio hasta los bosques, fuentes de agua y otros recursos naturales. Los mayores propietarios eran el dictador Gómez y sus favorecidos así como los descendientes de las antiguas familias "mantuanas" (aristocracia criolla de la colonia) y de los beneficiarios de las guerras de Independencia y de Federación. Los terratenientes residían, por lo general, en las ciudades o pasaban en ellas la mayor parte del tiempo; algunos residían en Europa o hacían prolongados viajes a ese continente. En la población urbana podían distinguirse los estratos socioeconómicos siguientes: artesanos, pequeños comerciantes, empleados públicos y privados, maestros de escuela, pequeños grupos de profesionales independientes, estudiantes e intelectuales que formaban una pequeña burguesía relativamente numerosa; la burguesía, de escaso desarrollo, estaba formada por medianos y grandes comerciantes, algunos industriales, banqueros, prestamistas no institucionales, empresarios de la construcción y de servicios, de cuya clase procedían, por lo general, los altos empleados gubernamentales; en el otro extremo se encontraban los grupos incipientes del proletariado urbano (industria manufacturera, construcción, trasporte, servicios) y del *subproletariado* (trabajadores domésticos, buhoneros, subocupados, marginales, lumpen, etc.).[37] En las zonas pe-

[37] Puede definirse el "subproletariado" como una masa heterogénea de trabajadores im-

troleras —Zulia en el occidente, Anzoátegui y Monagas en el oriente— se formaba rápidamente un proletariado en condiciones singularmente dinámicas, ya que vendía su fuerza de trabajo directamente a los consorcios imperialistas internacionales, y que procedía —en 1930, su número era de alrededor de 21 000— del campesinado, y de los grupos de trabajadores pesqueros de Falcón, Anzoátegui, Sucre y Margarita, principalmente. La burguesía se ampliaba con los funcionarios públicos enriquecidos ilícitamente y con la conversión —entonces muy limitada— de latifundistas en propietarios urbanos y empresarios.

Este período podría caracterizarse por el surgimiento de nuevas capas sociales y la modificación de otras en virtud de la influencia de la actividad petrolera, tanto en forma directa —a través de la propia inversión extranjera y la ocupación de fuerza de trabajo— como en forma indirecta (mediante los efectos del gasto público financiado con ingresos petroleros en la distribución del ingreso). En tal sentido, cabe señalar el ascenso de una nueva capa de la burguesía, la comercial importadora, y la relativa decadencia de la clase terrateniente agraria. Nuevas formas de excedente hicieron su aparición: la adquisición de bienes durables de consumo por las capas privilegiadas de la sociedad y la construcción de obras públicas y la expansión del capital comercial y financiero, todo lo cual fue estimulado por el gasto público, de tal modo orientado que sus beneficios quedaban recluidos tanto en sectores restringidos de la población como en regiones determinadas del país (principalmente la región norcentral). Mientras ello ocurría las masas campesinas eran golpeadas más rudamente por la miseria, el desalojo, las ínfimas condiciones de vida, y la pequeña burguesía era agobiada por la sustancial insuficiencia de sus ingresos y las muy escasas oportunidades de mejoramiento de sus condiciones. El proletariado, desde luego, era víctima de la más cruda explotación, sin derechos sociales ni amparo en la acción del gobierno.

5. *El movimiento demográfico*

En 1926 el censo de población registró la cantidad de 3 026 878 habitantes. En 1936 el censo alcanzó a 3 491 159 habitantes; el crecimiento intercensal, por tanto, en un período de diez años aproximadamente, fue de 464 281 habitantes en cifras absolutas y de 15.3% en términos relativos, lo que permite determinar un promedio anual de crecimiento demográfico de 1.5%, considerablemente bajo en comparación con otros países latinoamericanos para la misma época. Al efecto es conveniente señalar que la población venezolana tuvo un crecimiento lento, y a veces regresivo, durante la época anterior a 1920, obstaculizado por las guerras internas, las epidemias y endemias, la desnutrición y la falta de asistencia médico-sanitaria. El 85% de la población vivía en el medio rural. En la década 1920-30 la esperanza de vida al nacer era de 40 años, más baja en el campo que en la ciudad. La ocupación principal de la población activa era la agricultura, en segundo lugar los servicios, en tercer lugar el artesanado y la industria y por último la explotación petrolero-minera. El 80% de la población residía en la zona costero-

productivos, que obtienen ingresos eventuales, no asimilables al salario, o están enteramente desempleados, pero sin disposición de concurrir en solicitud de empleo.

montañosa (una estrecha faja del país que se extiende desde los Andes en la frontera con Colombia hasta la península de Paria en el extremo oriental, cubierta en su mayor parte por los sistemas montañosos de los Andes y la costa) en la cual se localizaba la agricultura en proporción determinante, así como la mayoría de las ciudades más importantes incluida la capital de la República (Caracas); también en esta zona se concentraba la mayor parte del comercio, la incipiente industria y los puertos habilitados al comercio exterior; el otro 20% de la población residía en las regiones de Zulia (alrededor del lago de Maracaibo), los llanos (donde predominaba la actividad ganadera) y las mesas orientales, asiento de actividades petroleras lo mismo que el Zulia.

6. *El poder político*

La dictadura férrea y altamente represiva de Juan Vicente Gómez dominó políticamente al país de 1908 a 1935, año en que murió el dictador y se inició una nueva etapa en la vida venezolana. Gómez logró someter a los caudillos regionales —eliminando físicamente a varios de ellos en las cárceles—, canceló la época de los alzamientos armados locales, unificó el poder político, lo dotó de medios represivos organizados (ejército, policía) y gobernó de manera personalista y despótica, aunque con el cumplimiento falaz de aparentes formalidades institucionales siempre adaptadas a sus requerimientos. La base económico-social de sustentación de ese régimen fue una alianza entre las clases dominantes internas —burguesía comercial y bancaria, latifundistas favorecidos por el régimen— y los monopolios extranjeros que controlaron la explotación de petróleo. Gozó del beneplácito y el apoyo efectivo de las potencias capitalistas (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, etc.). Los ingresos del petróleo le permitieron establecer un aparato oficial administrativo, militar-policial, institucional, con alguna coherencia y eficacia —si se le compara con lo que existía anteriormente—, así como también construir una infraestructura física elemental (vialidad, telecomunicaciones, instalaciones de servicios, edificaciones, etc.). La hacienda pública —muy simple, con la única complicación que significó el ingreso fiscal petrolero— fue reorganizada bajo la dirección de un notable ministro de nombre Román Cárdenas. Es de notar que Gómez escogió como miembros de su equipo gubernamental a profesionales capaces e intelectuales de renombre, junto con otros de cualidades contrapuestas, y así destacan, además de Cárdenas, los nombres de Gumersindo Torres, José Gil Fortoul, César Zumeta, Rubén González, Pedro M. Arcaya y Eleazar López Contreras, entre otros. Los mecanismos administrativos de fiscalización petrolera fueron establecidos bajo la dirección idónea y nacionalista —lo que sorprende, dada la índole del régimen al que sirvió— de Gumersindo Torres en el Ministerio de Fomento, muy combatido por las compañías petroleras que lograron dos veces su destitución. Fueron creados, en 1928, los dos primeros institutos "autónomos" oficiales, uno para impulsar programas agropecuarios (Banco Agrícola y Pecuario) y otro para la vivienda popular (Banco Obrero). En comparación con los gobiernos anteriores, el de Gómez pareció ordenado, eficaz, "progresista" en lo material, lo que de ningún modo significó bienestar para el pueblo, sino enriquecimiento

de minorías y concentración de privilegios, además de entrega incondicional al capital extranjero. En 1930, en plena depresión económica del mundo capitalista, canceló la deuda externa. No permitió incurrir en déficit de presupuesto, aunque, por supuesto, a costa de mantener en niveles mínimos los gastos en educación, salud y otros de necesidad social, así como de los sueldos bajísimos de los empleados administrativos subalternos. Se apoderó, por otra parte, de una gran parte de las fincas rurales a través de la coacción e hizo trabajar en ellas a los campesinos reclutados como soldados. La fortuna de J. V. Gómez al morir se estimó en 127 millones de bolívares (40 millones de dólares al cambio de la época).

Desde luego, Gómez tuvo oposición política durante todo su tiempo de gobierno. En el período que examino la orientación, las características y los protagonistas de la oposición fueron algo diferentes a los de antes de 1925. En la nueva oposición participaron gentes de las nuevas generaciones, pertrechados de ideas políticas y sociales diversas, de inspiración liberal democrática algunos, socialista otros, los más notables pertenecientes a la llamada "generación de 1928".[38] En ese año tuvieron lugar acciones de calle contra la dictadura, como se ha citado, y en la asonada participaron estudiantes —hijos de la burguesía, de los latifundistas, de la pequeña burguesía—, intelectuales profesionales, oficiales de las fuerzas armadas, artesanos y obreros. Años antes, en 1926, se había fundado en México el Partido Revolucionario Venezolano, cuya organización obedeció principalmente a la necesidad de tratar con el gobierno mexicano una ayuda material para combatir por la vía armada a la dictadura gomecista, la que obtuvieron aunque en proporciones modestas. Ese partido propició el asalto a Curazao, encabezado por Gustavo Machado (líder marxista) y del que se dio cuenta en párrafo anterior, y también una invasión por las costas de Falcón, acciones que no alcanzaron sus metas; en la invasión por Falcón participaron voluntarios mexicanos. El PRV tuvo como fundadores a Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, Eduardo Machado, Miguel Zúñiga C., Julio Martínez, Pedro Brito, J. A. Silva, entre otros. El PRV tuvo un programa democrático liberal y de modernización del país, con ciertos aspectos de control económico por el estado y de regulación del capital extranjero. Por supuesto, esa organización política tuvo breve vida y se consumió en las intentonas armadas contra Gómez. En julio de 1929 se constituyó en París la llamada Junta de Liberación de Venezuela, que se encargaría provisionalmente del poder una vez derrocada la dictadura y mientras se realizaran elecciones; en esa junta figuraron: Santos Dominici, Alberto Smith, Rufino Blanco Fombona, José Rafael Pocaterra, Néstor Luis Pérez, Atilano Carmevali y Pedro Elías Aristeguieta, entre otros. Otra junta se había formado al mismo tiempo en Caracas para organizar el apoyo popular una vez que el movimiento armado que se proyectaba se iniciara, entre cuyos integrantes se encontraban figuras de la burguesía como Nicomedes Zuloaga, Guillermo López y Ramón Parpacén. La junta de París organizó y llevó

[38] "La generación del 28 trae elementos nuevos a la política nacional. Su aparición misma marca algo distinto en las aguas inmóviles del gomecismo. Los desfiles con banderas, las boinas y los gritos. Nadie ha visto hasta entonces signos tan originales y atractivos. Cuando avanzan con la bandera nacional en las jornadas de la Semana del Estudiante, los ojos, casi ausentes de los venezolanos, cobran brillo que produce lo inusitado." Domingo Alberto Rangel, *Los andinos en el poder*, edición del autor, 1964, p. 236.

a cabo la expedición armada que atacó a las fuerzas gomecistas en Cumaná, y que fracasó. Esas acciones, aun con la participación de luchadores políticos e intelectuales de ideas progresistas, no contaban con la participación efectiva del pueblo, indispensable para su éxito, y de cierto modo significaban la repetición de las acciones armadas de los viejos caudillos; ambiciones personales de poder, rencores igualmente personales, aventurerismo y romanticismo se mezclaban en las motivaciones de los participantes, carentes de una orientación consistente con la necesidad de trasformación del país y de una interpretación justa del momento histórico que se vivía. Nuevas circunstancias económicas, sociales y políticas modificaban la realidad venezolana de la época, así como el contexto internacional profundamente conmovido por el triunfo del socialismo marxista en Rusia y por el ascenso a la hegemonía del sistema capitalista mundial de Estados Unidos. Poco después, hacia fines de 1929, estallaría la gran crisis económica capitalista que habría de proyectarse en la grave depresión prolongada hasta 1934, y emergería en Europa el nazifascismo como fase críticamente agresiva del imperialismo. En 1931 fue creada la primera célula del Partido Comunista de Venezuela (PCV), organizada por Aurelio y Mariano Fortoul, Francisco J. Delgado, Juan B. Fuenmayor, Víctor García Maldonado, Raúl Osorio, José Antonio Mayobre y otros. Posteriormente se incorporaron a la incipiente organización los estudiantes Rodolfo Quintero, Fernando Key Sanches, Ángel J. Márquez, Víctor Lara, así como los obreros Felipe Escobar, Pedro Rodríguez, Horacio Mena, Manuel Simoza, Lilia Medina, Pedro Cadamo, Tomás Torres y Ramón Abad.[30]

Los movimientos de 1928 y 1929 revelaron que la conciencia popular no estaba dormida. El pueblo, desde luego, carecía de orientación y de organización política y su protesta fue como un desbordamiento transitorio del rechazo a la dictadura que permaneció latente durante casi toda la existencia de ésta. Por otra parte, en esos movimientos participaron o de algún modo manifestaron su simpatía miembros de clases o estamentos en proceso de formación: proletariado urbano, burguesía industrial, así como también miembros de estamentos afectados desfavorablemente por el régimen gomecista y las compañías petroleras: medianos y pequeños propietarios rurales, cultivadores de café y cacao. Coincidencia significativa fue que en 1928 adquirió Venezuela la posición de segundo productor de petróleo del mundo —primero Estados Unidos— y de primer exportador del producto, confirmándose así la conversión de país agrícola en país petrolero que todavía mantiene. Sin embargo, esa preminencia no se correspondía con los escasos ingresos fiscales y del trabajo percibidos por Venezuela, lo que mostraba el alto grado de explotación por el capital extranjero y su apropiación prácticamente absoluta del excedente generado en la actividad petrolera.

El poder político absoluto del régimen gomecista se asentaba instrumentalmente en el dominio del ejército y la policía y económicamente en los intereses del capital monopolista extranjero principalmente establecido en el negocio petrolero, de la burguesía comercial-financiera y de los grandes latifundistas favorecidos por el estado de cosas reinante. La gran mayoría de la población permanecía marginada del disfrute de los medios económicos, de la atención del estado y de cualquier opor-

[30] Juan Bautista Fuenmayor, *op. cit.* pp. 165-167.

tunidad de mejoramiento. El descontento, pues, se acumulaba, se extendía y se agudizaba. En la fecha centenaria de la muerte del Libertador —el 17 de diciembre de 1930— se efectuó una manifestación popular por las calles de Caracas en demanda de la libertad de los presos políticos, que fue disuelta a balazos frente a los muros de La Rotunda (tétrica cárcel gomecista) con saldo de muertos y heridos. Ésta fue la última acción de calle de las masas populares durante el régimen de terror que concluyó en 1935.

El contenido programático del primer manifiesto producido por el PCV se identificaba en buena parte con objetivos y metas del proceso democrático-burgués, tales como: reforma agraria profunda, el principio de salario igual para trabajo igual, sin discriminación, descanso pre y posnatal, salario completo y asistencia médica a las madres trabajadoras, una especie de seguro social de desempleo, enfermedad, invalidez y vejez, reducción de la jornada de trabajo, etc; sin embargo, en mezcla no ordenada también se incluyeron objetivos de una revolución socialista como la toma de las grandes empresas, fábricas, minas y trasporte para su nacionalización bajo un gobierno obrero y campesino, supresión de arriendos y alquileres, etc. La ausencia de un análisis científico de la realidad venezolana permite explicar en ese documento inicial la confusión de objetivos y metas. Para un país sometido a relaciones de producción agraria de índole latifundista y dominado por el capital monopolista extranjero a través de una dictadura semibárbara, lo indicado era un proceso antimperialista y antilatifundista, de democratización liberal burguesa, aunque con un grado significativamente necesario de intervención del estado. Desde luego, para un partido comunista era indispensable la referencia a los objetivos revolucionarios de su lucha, pero claramente distinguidos de los objetivos intermediarios entonces preferentes, dadas las condiciones históricas concretas de Venezuela. Por supuesto, el PCV fue perseguido implacablemente por la dictadura, y sus fundadores y militantes sufrieron las contingencias de la cárcel, la clandestinidad o el exilio. En todo caso, estaba sembrada la raíz del movimiento marxista-leninista en Venezuela, que luego sufriría divisiones y disidencias, las más importantes de las cuales han estado signadas por la búsqueda de un sentido nacional.

En 1931 también se formó en Barranquilla (Colombia), por varios luchadores políticos exiliados, la Asociación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), germen de lo que sería años después el movimiento liderizado por Rómulo Betancourt y que tomó formas sucesivas en el partido Organización Venezolana (ORVE) en 1936, el Partido Democrático Nacional (PDN) en 1937 y Acción Democrática (AD) en 1941 El referido grupo de exiliados —entre quienes se encontraban Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Valmore Rodríguez, Ricardo Montilla, Simón Betancourt y otros— produjo un documento analítico-programático denominado "Plan Barranquilla", de orientación antimperialista y antilatifundista, nacional-revolucionaria, con algunos toques marxistas, a la manera del APRA y su líder Haya de la Torre. El documento puso de relieve algunos aspectos importantes de la realidad venezolana de la época, en primer lugar la alianza entre el capital extranjero y la "casta" latifundista-caudillista criolla,[40] como base de sustentación del gomecismo, y la necesidad

[40] *Libro rojo 1936*, Servicio Secreto de Investigaciones, pp. 286 *ss.* Las comillas son mías (MZ).

de convertir la lucha contra la dictadura gomecista en una lucha por la trasformación del país. En la parte programática el "Plan de Barranquilla" contempla dos instancias: una mínima, de liquidación de la dictadura, castigo de sus responsables, restitución a la República de los haberes ilícitamente obtenidos por aquéllos, vigencia de las libertades, derechos y garantías civiles y políticos, mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros y campesinos, la autonomía universitaria, la modernización de la enseñanza, la revisión de los contratos y concesiones al capital extranjero y la convocatoria a una Constituyente; la instancia máxima consistía en trasformaciones más profundas de la estructura económico-social que conducirían a la larga al socialismo. Al parecer, las diferencias entre el PCV y ARDI, eran de orden táctico, ya que ambos se proponían, como objetivo trascendente, el socialismo; sin embargo, como el desenvolvimiento histórico lo ha demostrado, las diferencias eran más que de táctica, o incluso de estrategia, de concepción de la lucha ideológica y política. El movimiento liderizado por Betancourt ha puesto todo empeño en negar cualquier identificación, o aproximación, al marxismo y considera, según todos los indicios, la democracia burguesa populista como la estación final de la historia. ARDI —y Betancourt en primer término —no dejaron entonces, entre sus amigos y simpatizantes, de proclamar su credo socialista, pero sujeto a la "realidad" y más bien como "carta última bajo la manga" que como objetivo explícito y expreso. En la mente de esos jóvenes se bosquejaba la idea de un frente policlasista con participación de los obreros, los campesinos, los pequeños y medianos propietarios, industriales, comerciantes, empleados, profesionales, intelectuales, estudiantes, maestros, etc., para la democratización nacional y el desarrollo del país; pero, desde luego, sin liderazgo de la clase obrera, lo que en la práctica ha venido a significar el liderazgo de la pequeña burguesía o, más ampliamente, de lo que se ha dado en llamar la "clase media". El problema sigue siendo: ¿quién conduce la revolución?, tanto o más importante que el de los caminos de la revolución.

El período 1926-35 fue la última etapa del régimen gomecista. En el seno de la vieja sociedad anterior al petróleo fueron formándose nuevos componentes, tanto de las clases dominantes como de las dominadas. Ese proceso, impulsado por las nuevas relaciones generadas por la explotación de petróleo, se aceleró después de 1925 y aún más después de 1930. El régimen económico-social basado en el latifundio, en la explotación de la fuerza de trabajo campesina, en la exportación de productos agrícolas, hizo crisis. Surgió el proletariado petrolero y el urbano. Los campesinos emigraron a las zonas petroleras y a las ciudades trasformándose en proletarios o subproletarios. Se formaron y crecieron nuevas capas, incipientes, de la burguesía; cobraron fuerza: el comercio importador, la banca comercial, la construcción urbana, el trasporte automotor, ciertos servicios estimulados por el gasto del excedente petrolero retenido en el país, lo mismo que algunas industrias manufactureras de proporciones moderadas. También creció la pequeña burguesía. Los nuevos componentes de la sociedad requerirían instituciones más modernas, reglas de juego más flexibles, participación en el poder político, en suma una evolución del estado y del gobierno, una nueva visión de la realidad social, horizontes más amplios para la actividad económica, una democratización de las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo. El movimiento de 1928 dejó una secuela

que fue formando conciencia de la necesidad de un cambio. Los gremios de trabajadores —fundados según las modalidades de asociaciones de artesanos y obreros, de mutuo auxilio bajo patronatos religiosos— fueron los embriones de los sindicatos y en ellos, por lo general, se gestaron las luchas obreras. El régimen gomecista estaba destinado a desaparecer, aun sin la muerte física del dictador ocurrida en 1935, la que fue sólo un incidente que facilitó la transición a una nueva situación política. Gómez no era, en verdad, el "amo del poder", sino el instrumento y el siervo del poder real; pero este poder debía adaptarse a las modificaciones del proceso histórico.

7. *Las coyunturas notables*

En lo económico, como mencioné, el año 1926 tuvo significación por el hecho de que durante el mismo la exportación de hidrocarburos desplazó a la de productos agrícolas en el primer lugar de la exportación. Desde entonces, el comercio exterior venezolano —y la economía interior más dinámica— giró alrededor del petróleo y estuvo incorporado más firmemente, bajo nuevas modalidades, al sistema capitalista mundial. El tipo de cambio del bolívar comenzó a depender de la entrada de divisas petroleras más que de las procedentes de la exportación agrícola. La baja del cambio por efecto de la afluencia de las divisas petroleras fue parcialmente contrarrestada por el aumento de la demanda de importaciones y otros gastos en el exterior. La capacidad para importar se amplió y una importación más variada y rica permitió la sofisticación del patrón de consumo de las clases dominantes, con alguna difusión restringida a la pequeña burguesía y al proletariado petrolero. El deterioro de la economía exportadora tradicional se acentuó y aceleró desde 1929, en concordancia con la fuerte y prolongada depresión de la economía capitalista desarrollada. El índice de precios de exportación (sin petróleo) descendió (base 1920 igual a 100) de 99 en 1925 a 90 en 1929 y a 30 en 1935,[41] mientras que el índice de volumen de dicha exportación (con la misma base citada) fluctuó ampliamente a través de la década de los veintes, alcanzando un máximo de 208 en 1929 para bajar en los años siguientes hasta 83 en 1935. El café recibió con mayor fuerza el efecto de la caída de los precios, de tal manera que la carga de 200 libras que se cotizaba a 320 bolívares en 1928 llegó a valer apenas 32 en 1933.[42] Los hacendados —buena parte de ellos— no pudieron pagar sus deudas durante la crisis y sus propiedades fueron ejecutadas en favor de los acreedores: bancos, casas comerciales y usureros. El valor de la propiedad agrícola decayó verticalmente. Mayor miseria azotó a los peones de las haciendas y a los pequeños productores rurales. En las ciudades se dejó sentir también agudamente la crisis económica: descendió sustancialmente el valor de la propiedad urbana, los bancos

[41] Ramón Veloz en su obra *Economía y finanzas de Venezuela desde 1830 hasta 1944* (edición de la III Conferencia Interamericana de Agricultura), Caracas, 1945, presenta una serie de índices de precios de los productos de exportación, sin petróleo, de los años 1920 a 1935.
[42] Domingo Alberto Rangel, *op. cit.*, p. 259.

restringieron drásticamente los créditos, los deudores hipotecarios morosos fueron desposeídos de sus inmuebles, el desempleo aumentó y, por supuesto, la miseria de los sectores populares se hizo más drástica.

El gobierno no diseñó ni puso en práctica ninguna política para combatir la depresión, salvo algunas medidas aisladas, casuísticas y contradictorias, entre las cuales cabe citar un subsidio por una sola vez nominalmente a favor de los cultivadores de café y cacao, pero realmente apropiado en su mayor parte por los exportadores comerciales, los usureros y favorecidos del régimen. Alberto Adriani [43] en mayo de 1935, al examinar la crisis del café, se pronunciaba por una prima a la exportación. El fisco nacional no reflejaba la crisis económica, paradoja explicable por dos circunstancias: la "austeridad" del gasto público, ya que no se asignaban recursos presupuestarios apreciables a educación, salud, vivienda, servicios públicos u otras necesidades sociales, y los sueldos eran muy bajos; y el ingreso proveniente del petróleo que, durante la depresión, mostró un comportamiento singular, al cual me referiré luego. Es así como las reservas del Tesoro aumentaron de 53 millones de bolívares en 1931 a 61 millones en 1932; al cerrar el año fiscal 1934-35 las reservas del Tesoro montaban a 111 millones de bolívares. La política de Gómez durante la depresión fue, por tanto, de acumulación de fondos mediante la abstención del gasto.

He señalado que la actividad petrolera tuvo un comportamiento singular durante la depresión, por lo que se refiere a Venezuela. Desde luego la exportación de petróleo sufrió un descenso en esa coyuntura y seguramente los precios de realización se debilitaron; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en Venezuela esa actividad estaba entonces en proceso de crecimiento, caracterizado más que por el ritmo de corto plazo de la producción, por las inversiones básicas que se aplicaban a exploración e instalaciones. Debido a ello, la actividad como un todo registró con menor intensidad el efecto de la depresión que en el supuesto de que hubiese estado en una etapa de baja inversión de crecimiento. No hay que olvidar tampoco que en 1928, en vísperas de la crisis capitalista mundial, los monopolios petroleros mayores celebraron un pacto que probablemente les permitió sortear con algún éxito los escollos más agudos de la depresión.

En 1934 tuvo lugar la devaluación del dólar estadounidense en una proporción de 40%. Automáticamente el tipo de cambio bolívar-dólar bajó de 5.20 bolívares a 3.06, de acuerdo a la paridad oro, ya que no se dictó de inmediato ninguna medida para reajustar la paridad del bolívar a la nueva situación monetaria internacional.[44] La revaluación automática del signo monetario venezolano en una proporción tan alta afectó los intereses de las compañías petroleras, ya que debieron negociar más dólares para cubrir sus pagos en bolívares en el país; también golpeó, desde luego, a la ya postrada economía exportadora tradicional. Aparentemente para fortalecer la posición de esta última, aunque en realidad para conciliar con los intereses y reclamos de las petroleras, se estableció un nuevo régimen cambiario, bajo la forma de un convenio entre el gobierno y el Banco de Venezuela (privado, auxiliar del Tesoro) que recibió el nombre de Convenio Tinoco, por su gestor el doctor Pedro R. Tinoco, ministro de Gómez y servidor de las

[43] *Labor venezolanista*, 2a. ed., Caracas, 1946, p. 318.
[44] Ramón Veloz, *op. cit.*

compañías petroleras y del capital extranjero. En virtud de ese convenio el Banco de Venezuela se comprometió a adquirir divisas petroleras al tipo de bolívares 3.90 por un dólar hasta cubrir la demanda de cambio por parte del mercado venezolano; el excedente lo adquiriría al tipo de importación del oro, o sea bolívares 3.03; el tipo de venta se fijó en bolívares. 3.93. Éste fue el primer sistema cambiario de base petrolera que existió en Venezuela, según la modalidad de cambios diferenciales. Aparentemente se favoreció a la agricultura, pero en realidad el favorecido fue el negocio petrolero extranjero. No se interpretó entonces de esta manera el convenio cambiario, ya que voces distinguidas clamaban por un reajuste en provecho de la exportación agrícola, golpeada por la desvalorización del dólar; entre esas voces cabe citar la de Alberto Adriani que afirmó que "el factor principal de esta agravación de nuestra crisis es la desvalorización del dólar americano".[45] Todavía en nuestros días se afirma que la causa de la ruina agrícola de aquella época fue la baja cotización del dólar.[46] Por supuesto, estoy en desacuerdo con esta explicación monetarista de la crisis agrícola venezolana y prefiero mencionar, ya que no hay lugar para el análisis en este trabajo, causas de índole estructural, entre las cuales destaca el monopolio de la propiedad territorial agraria en condiciones semifeudales de explotación.

V. PERÍODO 1936-1945

1. *Cuadro histórico general*

El 17 de diciembre de 1935[47] murió Juan Vicente Gómez en ejercicio del poder. La pugna interna entre corrientes gomecistas —la que pretendía la continuidad inalterable del régimen y la que entendía la necesidad de una liberalización del mismo, aunque sin reformas esenciales— se resolvió formalmente mediante la designación del general Eleazar López Contreras como presidente de la República para concluir el período constitucional que se extendía hasta el 19 de abril de 1936. López era en el momento de la muerte de Gómez el ministro de Guerra y Marina; era, además, uno de los 60 tachirenses que, con Cipriano Castro a la cabeza, iniciaron el movimiento armado que abrió el camino del poder a los andinos. López llegó a adquirir una cultura general apreciable y una formación militar mediante la autodisciplina. Tenía ascendiente en el ejército y en sectores importantes del gomecismo, lo que le permitió —junto con su habilidad para conducirse en situaciones difíciles— dominar la crisis de poder surgida con la desaparición del dictador. Sin embargo, la secuela de la crisis se manifestó durante tiempo considerable en el mandato de López, caracterizado por una oscilación persistente entre

[45] Alberto Adriani, *op. cit.*, p. 351.
[46] Juan B. Fuenmayor, *op. cit.*, p. 158.
[47] Ésta es la fecha oficial del fallecimiento del dictador; sin embargo, surgieron dudas, persistentes, sobre la hora exacta del hecho: la oficial fue las 11.45 p.m. Se presumió, por algunos, que pudo haber sido el día 16 o el 18 en las primeras horas. Lo del 17 fue coincidencia con la muerte del Libertador Bolívar.

la reforma democrático-liberal y los procedimientos represivos, aunque estos últimos nunca comparables con el terror gomecista. El movimiento popular, con su flujo y reflujo alternativos, fue un factor importante de esa coyuntura de transición entre el crudo gomecismo y las formas democráticas de gobierno que tuvo lugar en el período que ahora se estudia.

En verdad López Contreras, aunque fiel a Gómez como jefe militar y de gobierno, no era un gomecista en su modo de pensar sobre el país. Tampoco era, como se demostró en los hechos, un reformador profundo ni avanzado en lo político, económico y social. Era un hombre de transición, de compromiso, entre una situación de fuerza prácticamente absoluta y una salida progresiva a la democracia liberal burguesa moderna. En este sentido interpretó su función histórica, aunque fue restrictivo en los alcances de su acción y no estimuló la lucha popular que hubiese facilitado y abreviado la transición. Debe tenerse en cuenta que López cuando asumió la jefatura del gobierno no tenía experiencia de mando político. Tampoco había en el país experiencia significativa del movimiento de masas ni de la lucha política pacífica, ya que habían trascurrido (en 1936) casi cuatro décadas de dictadura y eventuales aventuras armadas de tipo tradicional. La restringida participación del pueblo en la vida política fue la característica de este período que se extiende desde la muerte de Gómez a la caída del gobierno de Medina Angarita.

Objetivamente no era posible la continuidad estática del gomecismo. No fueron las inclinaciones personales de López y sus colaboradores ni las circunstancias fortuitas, las que determinaron el rumbo de los acontecimientos. Ya se ha dicho que en el seno de la sociedad regida por la dictadura nacieron y comenzaron a crecer nuevas fuerzas, nuevos componentes que iban adquiriendo una difusa y confusa noción de su existencia, posición y posibilidad en el país. El proletariado, la pequeña burguesía, estamentos de la burguesía representaban intereses en expansión que no podían desenvolverse dentro del círculo de hierro de la dictadura, la que no permitía nuevas reglas de juego que pudieran favorecer el crecimiento de las fuerzas productivas y el alivio de las tensiones sociales. De una u otra manera esos intereses encontraban correspondencia en ideas de renovación liberal, de ejercicio democrático, de modernización del estado y de estímulo a la economía. Los grupos más evolucionados y alertas de esos sectores de la sociedad —en contacto con las diferentes corrientes de pensamiento político, social y económico entonces de actualidad en el mundo— tenían la convicción de la necesidad y la posibilidad de un cambio en la vida nacional, y algunos de ellos habían plasmado en definiciones programáticas o simples enunciados sus reflexiones y actitudes al respecto. Por otra parte, la situación económico-social de la mayoría del pueblo era desesperante, signada por la falta de oportunidades de trabajo, los bajísimos ingresos, el acoso de las endemias, la escasez grave de facilidades de educación, la ausencia de protección, derechos y garantías en el trabajo y otras calamidades. Algunas luchas obreras, incipientes, habían tenido lugar en los últimos años del gomecismo, y las reivindicaciones de los trabajadores permanecían brutalmente reprimidas por la dictadura en connivencia con el capital extranjero y las fuerzas más reaccionarias del país. La agricultura estaba en ruina y este hecho afectaba agudamente a pequeños y medianos productores rurales, Gómez y sus acólitos ha-

bían establecido monopolios sobre casi toda actividad lucrativa y exaccionaban a productores y consumidores. La industria no podía crecer sin la ampliación y fortalecimiento del mercado interno, lo que estaba obstaculizado por la represión económica y social mantenida por la dictadura. Existían, por tanto, condiciones objetivas para una reacción de todos los sectores progresistas contra la continuación de la dictadura.

Embriones de organizaciones políticas habían surgido en la clandestinidad y en el exilio. En vísperas de la muerte de Gómez las tendencias dominantes se orientaban a la unidad democrática, en un frente amplio antigomecista, antirreaccionario, antimperialista, y por la liberalización de la vida política y civil. El régimen gomecista englobaba con el calificativo de "comunista" toda idea o intento de renovación democrática, de mejoramiento de los trabajadores y de progreso nacional. En esto lo acompañaba —o lo aleccionaba, mejor dicho— el imperialismo. Cuando López Contreras asumió la jefatura del gobierno ordenó la liberación de los presos políticos y la libre entrada al país de los exiliados, con excepción de los "comunistas"; los que de éstos regresaron fueron encarcelados. La represión anticomunista fue el mascarón de proa del gobierno de López, que interpretaba como comunismo todo movimiento político que pretendiera ir más allá de las reformas parciales, aisladas, moderadas al extremo, permitidas o propiciadas por López. Éste permitió al comienzo algunos movimientos de masas y hasta acciones populares contra propiedades de los gomecistas más odiados, que le ayudaron a desembarazarse de la fracción más recalcitrante, criminal y burdamente ambiciosa del gomecismo; pero tan pronto como se sintió menos inseguro en el mando —con el apoyo del ejército, de la policía, del aparato civil y de las clases dominantes reaccionarias— reprimió incluso brutalmente las manifestaciones populares. Su objetivo era la transición lenta, pausada, con "calma y cordura" como fue el lema de su gobierno, burocrático, formal, sin contenido de masas, sin participación colectiva; todo debía ser ordenado y conducido por el poder. En razón de esa estrategia fue remplazando —en el gobierno y en los cuerpos represivos— a los gomecistas que no le ofrecían confianza por gomecistas de su afecto y por no gomecistas o antigomecistas insospechables de radicalismo hacia la izquierda. Al mismo tiempo aprovechó todo descenso, o debilitamiento, de la acción popular para reprimir severamente los adelantos de las fuerzas democráticas activas y las luchas obreras y campesinas. Fue así como el 5 de enero de 1936 el presidente López dictó un decreto de suspensión de las garantías constitucionales —las que, por otra parte, nunca tuvieron vigencia hasta entonces— alegando un pretendido estado de subversión pública contra la paz, el orden, la propiedad privada, las personas y las actividades y, por supuesto, bajo la evocación del peligro comunista. Con tales pretextos, el gobierno recién establecido perseguía la implantación de una dictadura legalizada —o, mejor dicho, la restauración de la dictadura sin Gómez y con procedimientos menos burdos que los del fallecido. La respuesta a esas medidas, que tendían a cercenar todo movimiento democrático y a paralizar al pueblo, fue la concentración popular del 14 de febrero del año citado, en la plaza Bolívar de Caracas, frente a la Gobernación, que fue disuelta a balazos por fuerzas represivas gubernamentales con saldo de muertos y heridos. Este hecho determinó una reacción colectiva de impresionantes proporciones y ese mismo día en la tarde una manifestación multitudinaria, calcu-

lada entre 30 000 y 40 000 personas; encabezada por los más representativos de todos los sectores progresistas de la ciudad, desde profesores universitarios hasta obreros, llegó hasta el palacio presidencial de Miraflores, donde Jóvito Villalba y otros líderes exigieron a López el restablecimiento de las garantías, el castigo de los culpables de la masacre, la erradicación de gomecistas del aparato del estado y la democratización efectiva de la vida pública. Ante esta fuerza popular López prometió rectificar y, en efecto, pocos días después fueron restablecidas las garantías, se enjuició al general Galavís, gobernador de Caracas, como responsable de la masacre, se hicieron cambios progresistas en el gabinete y en las gobernaciones regionales y el presidente de la República expuso ante el país un programa de gobierno muy ambicioso en lo material, que se denominó "Programa de Febrero", nunca realizado, y que ha quedado como símbolo y muestra de demagogia gubernamental para endulzar momentos críticos.

La dirección del movimiento político del pueblo corrió a cargo, en los primeros momentos, de la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), bajo la presidencia de Jóvito Villalba. Esta organización, nucleada alrededor del estudiantado de la Universidad Central (Caracas), fue unitaria hasta el momento en que un grupo se separó (el 6 de mayo de 1936) para fundar la Unión Nacional Estudiantil (UNE) bajo el liderazgo de Rafael Caldera. La UNE fue el antecedente juvenil del partido socialcristiano COPEI, creado en 1947 y que en el presente es uno de los dos partidos que se alternan en el gobierno y se califican como de centro-izquierda. La UNE en su origen se identificó como un movimiento conservador al que se le imputaron incluso simpatías por la rebelión franquista que entonces tenía lugar en España con el apoyo del nazifascismo. La UNE, en todo caso, sirvió a las fuerzas reaccionarias para golpear al movimiento popular y como adalid del anticomunismo, bajo cuya bandera se intentaba justificar todo ataque y represión a las ideas y acciones progresistas. La UNE era, por otra parte, expresión militante del catolicismo tradicional, conservador de los supuestos derechos "naturales" de propiedad, de empresa privada y de coexistencia pacífica de la riqueza y la pobreza. La FEV correspondió a corrientes democráticas, sin ser necesariamente marxistas y ni siquiera radicales dentro del sistema; en ella lucharon, entre otros, quienes después militaron en el PDN y AD,, partidos liderizados por Rómulo Betancourt, de orientación democrática populista, no marxistas; también en la FEV lucharon marxistas y demócratas liberales.

En el trascurso del año 1936 fueron creados diversos partidos políticos, de vida fugaz, aunque algunas de sus corrientes ideológicas se proyectaron en la vida política con posterioridad a dicho año. Entre los organizados en esa primera fase de la lucha por la democracia cabe mencionar: Organización Venezolana (ORVE), correspondiente al grupo ARDI, ya referido, y en principio inspirado por el llamado "Plan de Barranquilla", cuyo líder principal era Rómulo Betancourt; el Partido Republicano Progresista (PRP), de orientación marxista, aunque su definición programática, era formalmente liberal, democrática, antigomecista, antimperialista y antifeudal, en parte para cumplir los requerimientos de legalización y en parte para situarse dialécticamente en la coyuntura de lucha por la trasformación democrática burguesa de la sociedad, entre cuyos dirigentes estaban Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, Rodolfo Quintero, Ángel J. Márquez, Ernesto Silva Tellería y otros que

se identificaban como marxistas-leninistas; el Bloque Nacional Democrático (BND), de alcance regional, en el Zulia, de inspiración marxista, dentro de la corriente representada por el PRP, aunque en su seno militaban, incluso a nivel de dirigentes, personas que no profesaban ideas marxistas y más bien se inclinaban a la línea de ORVE, y su definición programática lo ubicaba como un partido pequeñoburgués democrático; en el Zulia también se desarrolló en esa época una acción organizativa del Partido Comunista de Venezuela (PCV) bajo la dirección de Juan Bautista Fuenmayor, Francisco J. Delgado, Elio Montiel, Manuel Taborda, Olga Luzardo, Max García, José Martínez Pozo y otros;[48] Unión Nacional Republicana (UNR), cronológicamente el primer partido político fundado en 1936, de orientación democrática liberal tradicional, antigomecista, formado por miembros de la burguesía, que pudiera calificarse de progresista para la época, entre cuyos dirigentes figuraron los doctores Nicomedes Zuloaga, Óscar Augusto Machado, Carlos Mendoza, Pedro Vallenilla, Raimundo Aristeguieta y otros de la más conspicua burguesía caraqueña; en Caracas, paralelamente a la organización de partidos de perfil democrático burgués, se desarrollaba otra acción organizativa clandestina del PCV, con la participación, principalmente, de quienes orientaban y dirigían el PRP.

Los sectores más conservadores y tradicionalistas de las clases dominantes intentaron organizarse políticamente en partidos en esa misma época. Fueron creados así: el Partido Liberal, como réplica contemporánea del que existió y tuvo influencia determinante en la vida pública durante la segunda mitad del siglo XIX; el Partido Liberal Amarillo Histórico, también como réplica del pasado político, de viejas banderas que nada decían a las nuevas generaciones de venezolanos; la Liga de Defensa Nacional, a instancias del propio López Contreras, como expresión de las fuerzas derechistas en contraposición a las democráticas progresistas, incluso en contraposición a la burguesía liberal modernizante, que ya fue referida en su organización de la UNR; la Liga de Defensa Nacional se arropó con la bandera del anticomunismo, de la defensa del orden tradicional y de los privilegios más agresivos de las clases dominantes, se identificó de inmediato con la causa del franquismo fascista que asolaba a España; el Partido Nacionalista (PAR-NAC), otro de la reminiscencia histórica, con intento de rememorar la causa del general José Manuel Hernández que entre fines del siglo pasado y principios del actual despertó entusiasmo en el pueblo venezolano, pero que fracasó siempre y se enterró en el olvido, sin ningún mensaje para la Venezuela posgomecista; el PAR-NAC también pretendía representar un movimiento de apoyo al régimen lopecista frente al ascenso de las fuerzas populares. Afortunadamente todos estos partidos conservadores, tradicionalistas, reaccionarios, desaparecieron en corto tiempo del panorama político y no dejaron huellas como tales en el desenvolvimiento de la vida nacional; sin embargo, las fuerzas antipopulares actuaron diligentemente, al margen de partido, para sepultar las aspiraciones de democratización efectiva del país y para perpetuar, bajo la cubierta institucional y legalista, el orden represivo heredado de Gómez en lo político, económico y social, con variado éxito, pues si bien el quinquenio lopecista (1936-41) propició una transición a una democracia restringida, con algunas libertades y garantías, con escasa participación popular es-

[48] Juan Bautista Fuenmayor, *op. cit.*, pp. 293-297.

porádica y moderados progresos en la vida económica y en las condiciones de las clases trabajadoras, también minimizó la acción trasformadora y liberadora, frenó el desarrollo político y social, dejó prácticamente intacta la base del poder tradicional y utilizó activamente los instrumentos represivos contra las masas populares.

A pesar de que López no auspició directamente desde el gobierno la formación de ninguna organización política militante para apoyar su gestión, aparecieron en varias localidades del país las llamadas "Agrupaciones Cívicas Bolivarianas", inspiradas en el supuesto pensamiento lopecista que pretendía ser una interpretación del ideario bolivariano. El culto a Bolívar fue elevado por López a la significación de un fundamento político. Desde luego, en Venezuela el pensamiento bolivariano ha sido adaptado en diferentes épocas por diferentes personajes para diferentes fines y aún sigue siendo fuente de interpretaciones acomodadas al interés del gobernante o el político de oposición. En el quinquenio lopecista este recurso fue aprovechado con singular habilidad y constancia.

Un primer esfuerzo por la unidad de las fuerzas democráticas lo encarnó el llamado "Bloque de Abril", integrado por los partidos PRP, UNR y ORVE, representativo de tres corrientes definidas del frente progresista: la promarxista (PRP), la liberal populista (ORVE) y la moderada liberal burguesa (UNR). El objetivo principal del "Bloque de Abril" era la disolución del Congreso de origen gomecista, que debía reunirse precisamente en abril, entre otros objetos, para designar en propiedad al presidente de la República para el período 1936-41. Sin embargo, mientras se lograba ese objetivo, que tendría que producirse por decisión de las propias cámaras, el Congreso nacional debía enmendar la Constitución para permitir la convocatoria a elecciones generales, en las que serían escogidos los miembros del nuevo Congreso para el resto del período legislativo en curso; el nuevo Congreso se encargaría de la reforma constitucional exigida por la nueva situación de la República; por otra parte, las leyes regionales de censo electoral y elecciones debían ser modificadas para garantizar la pureza y efectividad del ejercicio del sufragio mediante el cual debían ser renovados enteramente los concejos municipales y las legislaturas. Tal era el programa básico del "Bloque de Abril". Como puede observarse, el frente no tenía reserva en reconocer los órganos legislativos heredados intactos del régimen gomecista y propendía a asegurar, de este modo, la continuidad del "hilo constitucional". En esencia, significaba que no había ruptura con el pasado inmediato; apenas unos pocos recalcitrantes gomecistas habían sido o serían eliminados de la cosa pública y los propios cauces institucionales gomecistas debían servir para trasformar democráticamente el régimen constitucional. Aunque se tenía plena conciencia de que se estaba garantizando el funcionamiento del aparato supuestamente legal creado por Gómez, se había llegado a la conclusión, en el seno del Bloque, de aceptar la reunión del Congreso gomecista "con el pañuelo en la nariz", según frase acuñada por Rómulo Betancourt, principal autor intelectual de la componenda.

El Congreso, por supuesto, ratificó a López Contreras como presidente de la República; por otra parte no aprobó la enmienda constitucional proyectada, según la cual se convocaría a elecciones para un nuevo Congreso, con el carácter de constituyente, que se instalaría el próximo 19 de abril de 1937; ello significaba que el Congreso de origen gomecista perduraría hasta el término del período legisla-

tivo. Las fuerzas reaccionarias estaban, por tanto, a la ofensiva. Sin embargo, el movimiento democrático, inclusive de la burguesía liberal, realizó diferentes actos de protesta, y la actitud del Congreso, respaldada por López, determinó una crisis de gabinete, manifestación concreta de una crisis política. López la superó transitoriamente designando un nuevo gabinete, cuya composición política y clasista —como expresión de la burguesía liberal, en parte, y de sectores reaccionarios de las clases dominantes, en otra— era sustancialmente idéntica a la del anterior. El gabinete, en su conjunto, podía calificarse como liberal progresista.

Otro esfuerzo para la integración de un frente democrático popular fue la constitución del Partido Democrático Nacional (PDN), entre agosto y octubre de 1936, con la concurrencia de los partidos PRP y ORVE, fundamentalmente, pero sin el PCV que continuaba organizándose y operando en la clandestinidad. El gobierno negó la inscripción legal del PDN bajo el pretexto de que todos sus dirigentes eran comunistas. En verdad, del cuadro directivo sólo siete eran marxistas de un total de veinticinco. Entonces, el movimiento popular estaba en descenso y no se realizó una política de masas para hacer modificar la decisión gubernamental.

Un balance general del desarrollo político del año 1936 hasta el momento en que se declaró la huelga petrolera (14 de diciembre) puede presentarse como sigue: Existía una lucha entre las fuerzas gomecistas —apoyadas en el imperialismo petrolero, en el latifundio, en los sectores más retrógrados de la burguesía— y las de la renovación democrática liberal: clases trabajadoras, pequeña burguesía progresista, burguesía liberal (principalmente la que trataba de impulsar nuevas actividades en la industria, los servicios y la agricultura); el gobierno, particularmente López Contreras, trató de realizar una política de centro, de renovación pausada, de liberalización progresiva, apoyándose alternativamente en la derecha o en la izquierda, según la fuerza relativa de cada una en cada momento; las clases dominantes no lograron organizar un movimiento político, ni tenían confianza en la eficacia de tal instrumento para sus intereses, pero la acción de clase se dejó sentir en esa coyuntura para imponer el freno a la lucha popular, a la lucha sindical, al progreso político y social por supuesto, para la conservación de su dominio económico; las clases progresistas, incluso ciertos estamentos nuevos de la burguesía, pudieron organizar partidos políticos e intentaron unificarlos para la acción común, pero fracasaron en el intento; es atribuible el fracaso, entre otras causas, a la ausencia de una concepción clara de la coyuntura que se vivía en el país y en el mundo, y que obligaba, por una parte, a deponer los sectarismos, y por la otra a apoyar tácticamente las inclinaciones progresistas del gobierno de López para hacerlo avanzar al ritmo y con la amplitud posible; en todo caso, la política debió ser de impulso sostenido y de organización del pueblo, sobre la base de un análisis objetivo de la composición y la dinámica de clases; en este sentido fueron cometidos muchos y graves errores, que desorientaron y desalentaron al pueblo y sembraron la división o la dispersión en las fuerzas progresistas. 1936 fue desde luego, el año crucial de la transición y lo peor del gomecismo fue derrotado. Algunos progresos institucionales fueron logrados, entre ellos una legislación laboral moderna —prácticamente revolucionaria en relación con lo que existía hasta la muerte de Gómez—, que estableció la jornada de 8 horas, vacaciones anuales remuneradas, descanso semanal remunerado, participación de los trabajadores en las

utilidades de las empresas, derechos sindicales y de huelga, preaviso para el despido injustificado y otras reivindicaciones importantes. También se ordenó legalmente la confiscación de los bienes de quienes tuvieron funciones públicas hasta 1935 y se hubiesen enriquecido ilícitamente, lo que permitió ampliar el acervo patrimonial de la nación. Se prohibió constitucionalmente la reelección presidencial. Como contrapartida se amplió la prohibición de la doctrina comunista, incorporando la anarquista, declarando traidores a la patria a quienes las proclamaran, propagaran o practicaran. El régimen electoral continuaba restringido para las mayorías, de tal modo que la elección de senadores y diputados al Congreso Nacional y presidente de la República era de segundo grado, y en la elección de concejales municipales y diputados a las legislaturas regionales sólo podían participar los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Poco había progresado la República en un siglo de vida independiente.

Acciones huelguísticas de gran vigor y repercusión tuvieron lugar en 1936, las dos primeras de carácter genuinamente político, en mayo y junio respectivamente, para oponerse a proyectos de leyes represivas, uno de los cuales se hizo ley —ley para garantizar el orden público y el ejercicio de los derechos individuales—, conocida comúnmente como "Ley Lara" por el apellido del ministro proyectista; la última de índole sindical, reivindicativa de aspiraciones socioeconómicas de los trabajadores petroleros, que comenzó el 14 de diciembre de 1936 y concluyó el 22 de enero del año siguiente. La Ley Lara formalizó las tendencias represivas del régimen, dotándolo de atribuciones realmente dictatoriales en el orden político. Su promulgación y aplicación, en el contexto de la composición del gobierno y de sus medidas frente al movimiento popular, permiten calificar al régimen lopecista como dictadura derechista legalizada, aunque sin las prácticas terroristas del gomecismo y probablemente sin el inescrupuloso saqueo del tesoro público y de la economía nacional que caracterizó a su antecesor. La huelga petrolera sostenida durante 37 días con extraordinaria combatividad obrera y apoyo de todos los sectores progresistas y nacionalistas, en prosecución de conquistas elementales relativas a la vida y al trabajo en la industria petrolera (salario mínimo, aumento de salarios, mejoramiento de la vivienda, eliminación de las alambradas que cercaban los campamentos de trabajadores, libre tránsito por las carreteras y los caminos construidos por las compañías petroleras, prestación de asistencia médica, seguridad industrial, agua potable, cumplimiento de la legislación del trabajo, reconocimiento de los sindicatos, etc.) fue terminada por decreto ejecutivo que ordenaba el regreso al trabajo y el aumento de un bolívar diario en los salarios más bajos, nada más. Este decreto consagraba objetivamente el carácter proimperialista, servil al capital extranjero y antiobrero del régimen lopecista. A partir de la terminación de la huelga —primera acción sindical importante en Venezuela— se recrudeció la represión contra el movimiento popular, sindical y democrático, que se manifestó, entre otras medidas y acciones, en los hechos siguientes: detención masiva de dirigentes políticos democráticos y sindicales, cancelación de la legalidad a los partidos políticos populares, la Federación de Estudiantes, y la Confederación Venezolana del Trabajo; detención de periodistas y clausura de periódicos democráticos, todo lo cual culminó con la expulsión del país de 48 dirigentes políticos y sindicales (13 de marzo de 1937) entre quienes se encontraban dos futuros presidentes de

Venezuela (Betancourt y Leoni) y la mayoría de los líderes de actuación pública destacada en los últimos cuatro decenios de la vida venezolana. Como un episodio trágico y significativo de la escalada represiva de entonces hay que mencionar el asalto policial a la Universidad Central el 10 de febrero de 1937 con el saldo de un estudiante muerto: el recordado Eutimio Rivas. Otra crisis ministerial se produjo y salieron del gabinete casi todas las figuras progresistas, siendo remplazadas por figuras reaccionarias, representativas de la clases dominantes y de los intereses petroleros extranjeros. Paralelamente las compañías petroleras se lanzaron a la ofensiva abierta contra el movimiento obrero frente a la pasividad o la complicidad de los poderes públicos. 1937 fue el año de enfrentamiento crítico entre la clase obrera venezolana y el capital monopolista internacional, fortalecido particularmente en la rama del petróleo merced a los avances de la política monopolista, que logró la consolidación de los intereses angloholandeses y norteamericanos para una más eficaz y profunda explotación de los trabajadores y apoderamiento de los recursos naturales de Venezuela y otros países ricos en petróleo. Los trabajadores petroleros, como vanguardia de la clase obrera venezolana entonces incipiente, asimilaron la lección y se empeñaron en fortalecer sus organizaciones sindicales y madurar su conciencia ideológica y política para nuevas luchas.

Dos partidos políticos actuaron en la clandestinidad: el Comunista (PCV), que había sido clandestino desde su fundación en 1931, y el Partido Democrático Nacional (PDN) en el cual trataron Betancourt y sus colaboradores de reunir los cuadros menos radicales —realmente los no marxistas— de los disueltos partidos ORVE y PRP; desde entonces se desarrollaron dos concepciones políticas diversas del proceso histórico venezolano y, en consecuencia, dos estrategias distintas y en buena parte contradictorias: la marxista-leninista, según la cual la revolución democrático-burguesa debe efectuarse como fase previa a la revolución socialista y bajo la dirección política de la clase obrera, aunque con la participación de las otras clases progresistas de la sociedad; y la pequeñoburguesa reformista y populista, según la cual la revolución democrático-burguesa puede hacerse bajo la dirección de la pequeña burguesía y mediante una alianza de clases progresistas, sin el objetivo de una revolución socialista. Aunque en su origen ambas corrientes no estuvieron bien definidas —sobre todo la del PDN— y se trató en los primeros tiempos de llegar a la unificación, pero siempre en base de la absorción por el PDN de los marxistas, ya para 1938 la diferenciación se impuso y de parte y parte hubo empeño en la misma.

La burguesía progresista y sectores de la pequeña burguesía hicieron esfuerzos en los años 1937 y 1938 por constituir partidos que respondieran a sus intereses y posiciones de orden económico y político. Así fue creado el Partido Agrario Nacional (PAN), entre cuyos objetivos programáticos estaban: la modernización del estado y de la economía, la democratización de la vida política, en especial la modernización y democratización de las relaciones agrarias y el impulso a la agricultura. Profesionales universitarios, funcionarios públicos, intelectuales distinguidos, hombres de negocios, entre otros, formaron en las filas del PAN, entre cuyos dirigentes había ministros del gabinete y presidentes de entidades autónomas del estado. El PAN tuvo breve vida y escasa influencia en la lucha política, y más que un partido era un club político sin contenido realmente popular. También hubo

otro intento personificado por el general José Rafael Gabaldón, consecuente luchador antigomecista y nacionalista, de fundar el Partido Democrático Venezolano (PDV), llegando hasta la celebración de su asamblea constitutiva; entre sus directivos, además de Gabaldón, se encontraban notables figuras políticas democráticas, algunas vinculadas a la corriente de R. Betancourt y otros sin actividad política después de la muerte de Gómez. Sin embargo, el gobierno negó la inscripción legal al PDV, con el pretexto de que formaban parte de la nueva organización quienes habían formado filas en diversas agrupaciones políticas recientetemente disueltas por su propaganda y práctica de ideologías prohibidas por la Constitución. Así, pues, cualquier empeño de fundar un partido democrático progresista durante el quinquenio lopecista, a partir de 1937, estaba condenado al fracaso. La reacción y el imperialismo estaban a la ofensiva, mientras que el movimiento popular estaba en retroceso.

López Contreras cumplió su mandato de cinco años en abril de 1941. La sucesión presidencial no fue un problema particularmente difícil. La elección del presidente de la República la hacía el Congreso nacional por mayoría absoluta; la composición del Congreso del año 1941 era ampliamente favorable a la corriente gobernante. Las formalidades se llenaban mediante el expediente simple de que un grupo de ciudadanos postulaba un candidato y otro grupo de ciudadanos otro candidato. Rómulo Gallegos, eminente novelista, maestro de ejemplar honestidad, fue postulado a la presidencia por un grupo de ciudadanos no vinculados al oficialismo; y el general Isaías Medina Angarita, ministro de Guerra y Marina, fue postulado por otro grupo de ciudadanos. En las sesiones ordinarias del Congreso en abril de 1941 fue celebrada la elección presidencial con el resultado previsto: 120 votos para el general Isaías Medina, candidato oficial, apoyado por López; 13 votos por Rómulo Gallegos, candidato de la oposición, apoyado por las izquierdas y liberales progresistas. Medina fue proclamado presidente de la República para el período 1941-46 y tomó posesión el 5 de mayo de 1941 ante el Congreso. El acto no dejó de tener trascendencia, pues se trataba de una trasmisión constitucional del mando presidencial en virtud del principio de la alternabilidad, aunque el nuevo presidente fuese impuesto por su antecesor y prometiese continuar su orientación. En Medina se veía simplemente el continuador de López, el militar en funciones de gobierno, el andino formado en las entrañas del gomecismo. Era escasamente conocido en el ambiente político y se le tenía más bien como reaccionario y militarista. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por su liberalidad, por su progreso democrático y social, por la brillantez de las reformas institucionales y administrativas, por una firme evolución política y económica, en suma. Durante su gobierno —truncado al final por un golpe militar— fue derogado el inciso sexto de la Constitución nacional que prohibía la difusión de las doctrinas comunista y anarquista y, desde luego, la lucha por su implantación, y fue legalizado, en consecuencia, el Partido Comunista; fue legalizado también el partido Acción Democrática, liderizado por Rómulo Betancourt y presidido por Rómulo Gallegos, que correspondió a la corriente que en la clandestinidad se había incorporado en el PDN; los expulsados del país pudieron regresar y actuar políticamente; los presos políticos fueron liberados y la prisión por motivos políticos prácticamente no existió durante ese período. A fines de 1941 fueron rotas las relaciones diplomáti-

cas con Alemania, Italia y Japón —el gobierno anterior, al estallar las hostilidades en 1939, se había declarado neutral—, países del eje nazifascista; en febrero de 1942 submarinos alemanes hundieron en aguas venezolanas petroleros con tripulación del país, y poco tiempo después el gobierno de Medina dispuso la incautación de buques bajo bandera de las potencias del Eje que se encontraban surtos en puertos venezolanos; la política internacional de Medina se distinguió por una posición claramente antifascista. En 1943 fue promulgada una nueva ley de hidrocarburos, mediante la cual se uniformó el régimen de concesiones estableciendo su duración en 40 años, se sistematizaron las normas de fiscalización y supervisión de la actividad petrolera en el país por parte del estado, se fijó el derecho de explotación o regalía en un sexto de la producción y se establecieron otras normas reguladoras del negocio petrolero. En correspondencia con la ley de hidrocarburos se promulgó la ley de impuesto sobre la renta —primera de su índole en Venezuela— en la cual se fijaron tributos directos a las compañías petroleras (también a las otras actividades que se desarrollaran en el país), que es la base del sistema vigente de impuestos. Fue promulgada (en 1945) la ley agraria, en la cual se pautaban procedimientos para la reforma de la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra, para la dotación de la misma a los campesinos y la modernización de las relaciones de producción en el campo. Esa ley no tuvo oportunidad de ser aplicada, porque inmediatamente después de su promulgación fue derrocado el gobierno de Medina.

Un movimiento político se organizó para apoyar e impulsar la gestión de gobierno del general Medina. Ese movimiento nació bajo la denominación de Partidarios de la Política del Gobierno (PPG) y luego se modificó en Partido Democrático Venezolano (PDV). El gobierno tuvo el apoyo de la burguesía progresista, de sectores considerables de la pequeña burguesía y de las clases obrera y campesina. No está claramente establecido —en la objetividad histórica— que tuviese el apoyo de las clases dominantes tradicionales (la latifundista, la burguesía importadora y financiera) y menos claro aún que gozase de la anuencia del imperialismo petrolero. La evolución marcadamente progresista del gobierno de Medina no estimuló, seguramente, la confianza del poder económico tradicional; su política económica tendió a favorecer nuevas actividades, principalmente la industria manufacturera y la agricultura moderna, la construcción y determinados servicios; su política de control de importaciones, de divisas y de abastecimiento de artículos esenciales no era como para granjearle la simpatía del comercio importador y bancario. Los acuerdos electorales del PDV (oficialista) con Unión Popular Venezolana (UPV) de orientación marxista-leninista —prácticamente la versión legal del PCV hasta su legalización— en elecciones municipales seguramente despertaron los más profundos recelos de la reacción. La ley agraria estaba orientada a la liquidación del latifundio y la democratización del régimen de producción en el campo, y no podía menos que concitar la oposición de la clase terrateniente que en buena parte monopolizaba la propiedad del suelo cultivable. La nueva legislación de hidrocarburos y de impuesto sobre la renta —no obstante las acusaciones del partido Acción Democrática, de que las nuevas normas y disposiciones sobre estas materias habían sido convenidas con las compañías petroleras para su beneficio y dejaban en situación deficiente el interés nacional— modificaba considerablemente

las relaciones de la República con las petroleras, en sentido nacionalista, de tal modo que el negocio dejaba de ser el campo realengo de captura de superganancias para las empresas extranjeras, para ser sometido a un grado elevado de intervención del estado, con una participación —si bien todavía sustancialmente injusta— apreciablemente mayor que la lograda hasta esa fecha (año 1943); esta modificación no podía ser del agrado y la complacencia del consorcio petrolero internacional. Todos estos factores contribuyen a explicar, aunque no enteramente, el derrocamiento de Medina en 1945.

No obstante lo anterior, debe señalarse un pasivo considerable en el balance del régimen medinista. Era, sin duda, heredero de la virtual continuidad gomecista, que se había constitucionalizado y liberalizado a través de diez años de evolución político-institucional accidentada, pero con graves limitaciones al movimiento y la participación del pueblo, y con persistencia de muchas prácticas y disposiciones represivas y retrógradas del pasado gomecista. Destacados servidores de Gómez seguían figurando en cargos públicos importantes y disfrutando de prebendas y medios de fortuna. Los cargos de mayor jerarquía dentro de las fuerzas armadas estaban vedados, por lo general, a las nuevas promociones de oficiales, y la situación socioeconómica de oficiales, clases y soldados era motivo de descontento en el seno de la institución. Por otra parte, el poder electoral no estaba en manos del pueblo, cuya participación se reducía a los sufragios de primer grado para concejales y diputados a las legislaturas regionales, pero no para diputados y senadores al Congreso nacional ni para presidente de la República, cuyas elecciones eran de segundo y tercer grado, respectivamente. Las fuerzas represivas continuaban operando, en parte, en el poder judicial, y así fueron encarcelados por decisión de jueces reaccionarios algunos periodistas y dirigentes políticos. El movimiento sindical, que pudo fortalecerse y ampliarse notablemente durante los primeros años del gobierno medinista, recibió un duro golpe en marzo de 1944 cuando por resolución ejecutiva fueron disueltas la Convención Nacional de Trabajadores, entonces reunida, y la mayoría de los sindicatos existentes en el país, bajo la aplicación de la ley Lara, de pura estirpe dictatorial entonces vigente; desde luego, fue posible reconstituir en corto tiempo, a efectos legales, las organizaciones disueltas.

La sucesión presidencial se convirtió en un asunto crítico en el curso del año 1945. El candidato oficial considerado en primer término, doctor Diógenes Escalante, sin ser un demócrata avanzado, al parecer despertaba la confianza de todos los sectores, incluso del partido AD que se dispuso a celebrar un convenio —informal y confidencial, por supuesto— con el postulado; infortunadamente, el doctor Escalante enfermó seriamente y ello lo inhabilitó para la función, planteándose entonces un problema político difícil. Partidarios del expresidente López Contreras presentaron su candidatura, que fue vista con profunda inquietud por los sectores democráticos. El PDV —partido de gobierno— postuló al doctor Ángel Biaggini, ministro de Agricultura y Cría, con el cual se habría roto, formalmente, la tradición militarista en el cargo de jefe del estado. Acción Democrática, en comunicación al PDV con fecha 13 de octubre de 1945, hecha extensiva a las demás organizaciones políticas, expuso su opinión sobre el problema de la sucesión presidencial e invitó a un debate sobre el mismo; objetaba AD esencialmente el procedimiento para escoger y designar al presidente de la República, con ausencia popular, y

proponía que el Congreso escogiera un presidente provisional, mientras se reformaba el sistema electoral y constitucional para permitir en su oportunidad la elección directa del jefe del estado, así como de los miembros del Congreso. En su respuesta, el PDV negó la proposición de AD y se atuvo al "hilo constitucional de 1936". El 17 de octubre efectuó AD un mitin en Caracas, con asistencia de 20 000 personas.[49] El día anterior había tenido lugar el mitin de presentación legal del Partido Comunista, con una asistencia de 8 000 personas,[50] y en cuyo "presidium", al lado de las efigies de Marx, Lenin, Stalin, Bolívar y Zamora estaba la de Isaías Medina, presidente de la República.[51] Algunos interpretaron que en el mitin de AD se sugirió la inminencia de un golpe contra el gobierno "para evitar la farsa de la sucesión presidencial".

El 18 de octubre estalló una rebelión militar en Caracas, Maracay y otras plazas contra el gobierno. Tres días después el golpe estaba consumado y Medina, su gabinete y principales colaboradores y partidarios en la cárcel. Casi no ofrecieron resistencia las fuerzas oficiales adictas al régimen, salvo unas pocas guarniciones y la policía de Caracas. Grupos de civiles intentaron acciones de apoyo a Medina. Medina, se dijo, quiso evitar mayores derramamientos de sangre y prefirió entregarse. Fue designada una junta revolucionaria de gobierno integrada por siete miembros, cinco civiles y dos militares, presidida por Rómulo Betancourt, secretario general de AD; cuatro de los civiles miembros de la junta eran dirigentes de AD y uno independiente pro-AD. El partido AD desde el primer momento apoyó el movimiento militar y se convirtió en su soporte político, razón por la cual se dió a dicho movimiento el carácter de cívico-militar. Considerables sectores del pueblo celebraron en las calles el triunfo del golpe de octubre, al que, desde el primer momento, se le calificó de "revolución". En verdad se trataba de una ruptura del "hilo constitucional de 1936" y de la secuela gomecista, y de una emergencia del pueblo al ejercicio de los derechos políticos y sindicales, especialmente el derecho de sufragio mediante el voto universal, directo y secreto para cuerpos deliberantes representativos y presidente de la República; se trataba, esencialmente, de una liquidación política del gomecismo —de sus residuos y herencias—, aunque no de una liquidación de las viejas estructuras de poder económico. Indudablemente, en el trienio posterior a 1945, se realizó mucho más que una acelerada evolución de la vida política, un cambio de la situación, pero sin incidencia en las bases de la economía y la sociedad. Por ello no fue una revolución ni siquiera en el marco de la concepción democrático-burguesa. En la perspectiva de largo plazo, considerando la reacción encarnada en la dictadura militar-policial encabezada por Pérez Jiménez a partir de 1949, cabe plantearse si la alternativa representada por el movimiento de octubre de 1945 fue la mejor salida para las restricciones e insatisfacciones del viejo régimen, o si era preferible la evolución del mismo hacia formas cada vez más amplias de democracia representativa directa.

No está bien establecida la intervención de fuerzas económico-sociales internas y externas en el derrocamiento de Medina. He señalado el descontento de algunas

[49] Diario *El País* —órgano oficioso de Acción Democrática—, edición del 18 de octubre de 1945.

[50] Diario *El Nacional*, de Caracas, edición del 17 de octubre de 1945.

[51] *Ibid.*

clases —y/o estamentos de clases— con la orientación del gobierno en cuanto a sus intereses y lo político. También he dejado constancia de la reticencia de las compañías petroleras ante la nueva legislación. Estos factores quizá operaron en la creación de condiciones objetivas para la generación del hecho de fuerza. Tampoco puede ser subestimada la coyuntura política específica, de la sucesión presidencial, como circunstancia propicia, ni la aspiración de nuevas promociones militares de asumir un papel en la vida pública con una orientación progresista. El balance de ese proceso, en todo caso, debe hacerse a la luz del desenvolvimiento posterior.

2. *Régimen de producción*

Durante el período 1936-45 no se alteró la estructura económica fundamental, aunque ocurrieron algunas modificaciones dentro de la misma que es útil señalar. En virtud de la reivindicación por parte de la nación de una porción considerable de los bienes apropiados por Juan Vicente Gómez, sus familiares y acólitos, el estado venezolano amplió su patrimonio, por lo que llegó a ser gran propietario de tierras, fincas agropecuarias, inmuebles urbanos y empresas industriales. Si a esto se agrega la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, gas natural, minerales y de otros recursos naturales que, según el régimen jurídico vigente en la República, le corresponde, puede apreciarse la magnitud y significación del dominio territorial y económico del estado, en relación con la riqueza privada que, no obstante su elevada concentración, no alcanzaba para la época cifras muy altas. La forma principal de propiedad siguió siendo la agraria —de la actividad agrícola derivaba aun sus medios de vida la proporción determinante de la población—; pero aumentó en el decenio que se examina la importancia de otras formas de propiedad: la inmobiliaria urbana, la comercial, la financiera, la industrial. En el campo, las relaciones de producción continuaron siendo regresivas con predominio del latifundio y de la explotación precapitalista de la fuerza de trabajo campesina mediante las diferentes modalidades de cesión temporal del uso de la tierra: aparcería, colonato, obligación de dejar la parcela sembrada de café, cacao, pastos u otras vegetaciones, etc; sin embargo, el número de medianos y pequeños propietarios rurales era relativamente grande,[52] aunque en conjunto la proporción de tierra poseída por ellos era minoritaria con respecto al total de la tierra apropiada. La gran masa campesina carecía de tierra y de medios para cultivarla, estaba sumida en la miseria y era objeto de una despiadada explotación.[53] En otras actividades económicas —la industria petrolera, la manufacturera, la construcción, los servicios— se registraron algunos progresos en la modernización de las relaciones de

[52] En los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Trujillo, Táchira y el Distrito Federal, 2 341 902 hectáreas eran propiedad particular, de las cuales 1 829 628 pertenecían solamente a 1 320 propietarios de más de 150 hectáreas, es decir, que el 78% de la tierra estaba controlada en la relación de un propietario de 150 hectáreas por cada 1 000 habitantes. Las 512 274 hectáreas restantes estaban controladas por 34 570 medianos y pequeños propietarios. Salvador de la Plaza, *El problema de la tierra en Venezuela*, México, 1947, pp. 19-20.
[53] Federico Brito Figueroa, *op. cit.*, p. 495.

producción; en 1937 se promulgó la ley del trabajo, instrumento progresista para la época, aunque considerablemente incumplida en la práctica. El mercado de trabajo se amplió y evolucionó en sentido capitalista. En determinadas zonas del campo se establecieron explotaciones de tipo empresarial, con régimen de salarios y condiciones contractuales menos atrasadas que en el sector latifundista. El régimen económico prevaleciente en la economía era el de libre empresa e iniciativa privada, aunque el estado asumió algunas funciones reguladoras de la actividad —en parte por iniciativa de nuevas corrientes de la burguesía y de la pequeña burguesía representadas en el gobierno, en parte por presión de las contingencias ocasionadas por el conflicto bélico que comenzó en 1939 y se prolongó hasta 1945—; sin embargo, no había restricciones al capital extranjero, cuya incorporación más importante tuvo lugar en la explotación de hidrocarburos. En síntesis: coexistían modos de producción distintos, desde la economía natural de simple subsistencia y autoconsumo hasta la explotación capitalista avanzada en la actividad petrolera, pasando por el latifundio —con suficientes características propias para identificarlo como un modo específico de producción—, la pequeña producción mercantil y la producción capitalista para el mercado interno. Desde luego, el capitalismo era el modo de producción predominante.

3. *Las fuerzas productivas*

El crecimiento capitalista alcanzó niveles mayores en este período. El factor más influyente fue la actividad petrolera, propicia al adelanto de la productividad mediante la aplicación de procedimientos tecnológicos cada vez más eficaces y el continuo entrenamiento de la fuerza de trabajo. La mayoría de la población activa, sin embargo, continuaba vinculada al sector agropecuario, que proporcionaba el 23% del producto nacional. En ese sector se estaban incorporando medios de producción y métodos de cultivo más modernos, y podía advertirse la existencia de algunos brotes de explotaciones empresariales en el campo. El gobierno impulsó la colonización de nuevas tierras, la organización de colonias agrícolas en tierras ya trabajadas y la inmigración de trabajadores de cierta calificación, principalmente para labores agrícolas, aunque muchos de ellos se quedaron en las ciudades o fueron a los campos petroleros. El gobierno también realizó obras de infraestructura física, algunas de las cuales correspondieron a necesidades directas de la actividad productiva y de distribución de bienes. Aumentó el número de empresas industriales y se diversificaron más los ramos de la manufactura, notándose en ello los efectos de la guerra que, al obstaculizar las importaciones, actuó virtualmente como una barrera proteccionista y como un estimulante de la sustitución de importaciones. Igualmente fue favorecida la actividad de construcción. Los servicios de reparaciones, mantenimiento y reacondicionamiento de equipos, medios de trasporte y bienes durables de consumo recibieron estímulos para su expansión en esa situación de emergencia. El producto nacional fue estimado en 1936 en 1 500 millones de bolívares;[54] para 1945 puede estimarse en 2 300 millones de bolívares a precios de 1936.

[54] Banco Central de Venezuela, *Ingreso Nacional de Venezuela,* Caracas 1949, pp. 166 *ss.*

4. *La dinámica de clases*

El moderado crecimiento de la burguesía —se amplió la burguesía comercial, bancaria y de servicios, se incrementaron particularmente la burguesía industrial y la agraria— y el más acentuado de la pequeña burguesía y del proletariado caracterizaron la dinámica de clases de la época. Al terminar el período pudo apreciarse un perfil de sociedad capitalista relativamente moderna, con límites y cualidades clasistas definidos: perduraba una clase de grandes propietarios territoriales, con dominio sobre una proporción elevada de las tierras privadas, perceptores de renta en dinero, especie o trabajo y también de beneficios por la producción de sus fundos realizada mediante la explotación masiva de fuerza de trabajo, pagada con salarios de simple subsistencia; existía un campesinado pobre, de pobreza rayana en la miseria, muy numeroso, obligado a pagar renta en especie, trabajo o dinero, a cultivar en situación precaria y mediante procedimientos rudimentarios, y forzado a emigrar, en parte, en busca de mejores condiciones de vida y trabajo; una burguesía agraria poco desarrollada, de medianos propietarios que aplicaban procedimientos de cultivo menos rutinarios que los latifundistas y compraban fuerza de trabajo; la burguesía comercial estaba bastante desarrollada y se ocupaba en gran parte de la importación de bienes y su circulación interna; en situación incipiente o de escaso desarrollo existía la burguesía manufacturera, de construcción, financiera y de servicios; la pequeña burguesía era relativamente numerosa y tendía a crecer en los centros urbanos; el proletariado estaba en proceso de crecimiento, con núcleos bien diferenciados y dinámicos como el petrolero y el que se formaba en la industria manufacturera, la construcción y el trasporte; existían ciertas capas marginales, "subproletarias", aluvionales, en su mayor parte originadas en el éxodo campesino a las ciudades.[55] Las clases dominantes eran: los terratenientes latifundistas y la burguesía (principalmente la comercial y la bancaria). El capital monopolista extranjero, representado principalmente por las compañías petroleras, tenía aliados o puntos de apoyo en las clases dominantes y conjuntamente constituían el poder económico. Las clases dominantes proveían de altos funcionarios al gobierno, mientras que la pequeña burguesía proporcionaba los cuadros medios y subalternos de la administración.

5. *El movimiento demográfico*

En 1936 la población censada alcanzó a 3 491 159 habitantes; en 1941, según el censo, había aumentado a 3 850 771 habitantes, lo que indica una tasa de crecimiento interanual durante el período de 2% en promedio. La población rural significaba el 76% y la urbana el 24% del total. El 79% de la población residía en la zona costero-montañosa del país, mientras que más de un tercio del territorio —Guayana— estaba prácticamente despoblado. La esperanza de vida al nacer

[55] "Al estudiar el origen de la población residenciada en el área de ranchos de la zona metropolitana (de Caracas, MZ) se observa que el 10% emigró en 1926-35, el 15% en 1936-45, el 20% en 1945-55, el 50% a partir de 1956 y solamente el 5% corresponde a familias cuyos jefes nacieron en Caracas." Federico Brito Figueroa, *op. cit.*, p. 559.

era de 45 años. En 1936 la población activa era de 1 083 992 habitantes; en 1941 había aumentado a 1 240 682, equivalente a un 32% de la población total. La ocupación en la agricultura y la cría se estimaba en 650 000 personas, lo que representaba más del 50% de la ocupación total. En la actividad petrolera el empleo ascendía a 14 000 personas, poco menos del 2% del total. En la industria manufacturera estaban ocupadas 148 000 personas, un 12% del total. La construcción absorbía 30 000 personas, el gobierno 60 000, el servicio doméstico 110 000, el comercio 65 000 y otros servicios 40 000 personas.[56] Los salarios medios más altos se pagaban en la industria petrolera y los más bajos en la agricultura y el servicio doméstico.[57] El desempleo abierto o forzoso no debía sobrepasar el 5% de la población activa.

6. *El poder político*

Los gobiernos de López y Medina fueron sustentados —el último, como fue señalado, perdió ese apoyo en sus dos últimos años, a raíz de la reforma petrolera y de la ley agraria— por una constelación de fuerzas dominantes, entre las cuales se identificaban y destacaban claramente la clase latifundista, la burguesía comercial y el capital monopolista petrolero. Ambos gobiernos intentaron apoyarse, por razones de equilibrio político, en estamentos progresistas de la burguesía (industrial, agraria), la pequeña burguesía, el proletariado y los campesinos; esta política fue más firme y consecuentemente seguida por Medina que por López. El acercamiento del gobierno a los sectores progresistas —y de éstos al gobierno— fue mucho mayor durante el lapso 1941-45 que en el anterior. La represión política y sindical fue acentuada y frecuente durante el gobierno de López, esporádica y moderada durante el de Medina. Durante el decenio se efectuaron reformas importantes en la administración pública, se ejerció en grado significativo la intervención del estado en la economía y se impulsó el crecimiento económico. Fue establecido un régimen de cambios diferenciales para proteger la exportación agrícola y fortalecer la posición frente al negocio petrolero. Se organizó y practicó un control de importaciones y de precios. Se modernizó la hacienda pública y el sistema bancario y monetario, notablemente con la creación del Banco Central de Venezuela con monopolio de emisión y centralización de las reservas monetarias. La educación recibió mayores estímulos y recursos, incorporándose innovaciones al sistema educativo, ampliándose las facilidades de ingreso de alumnos y mejorándose la situación del magisterio. La inmigración fue promovida con cierta intensidad. El movimiento sindical y campesino se fortaleció y amplió. El instrumento principal de poder eran las fuerzas armadas, pero éstas no habían dejado de asimilar el proceso de evolución que se operó en la vida nacional, y así, los antiguos oficiales iban siendo remplazados por profesionales formados en los institutos militares, algunos de ellos con cursos avanzados en el exterior y cierta formación política, con aspiraciones a los cargos de dirección y jefatura. El régimen político durante el decenio se caracterizó por la evolución más o menos lenta hacia la democracia

[56] Banco Central de Venezuela, *op. cit.*
[57] Salvador de la Plaza, *La reforma agraria*, Pensamiento Vivo, Caracas 1959, p. 40.

representativa, dentro de un orden jurídico-político restringido, que tendía a conservar el dominio del poder mediante un sistema de imposición virtual del sucesor en la presidencia —de Gómez a López, de López a Medina, de Medina a Biaggini (frustrado por el golpe de octubre de 1945) con exclusión real de la voluntad popular. Ese proceso de democratización progresiva estaba sujeto a un entrabamiento en cualquier momento o circunstancia, en virtud de la persistencia efectiva de ciertas fuerzas y secuelas gomecistas en el cuadro gobernante, subyacentes o superpuestas a las nuevas fuerzas empeñadas en la aceleración del proceso democrático. El movimiento de octubre tuvo como efecto indudable la liquidación definitiva del gomecismo y el ensanchamiento de los cauces políticos a la corriente popular.

7. *Las coyunturas notables*

El proceso más significativo fue el tránsito del régimen gomecista absoluto enteramente represivo a uno que, sin dejar de ser esencialmente gomecista, permitió cierto margen de libertad, de lucha política y sindical, y facilitó la progresiva elevación de la conciencia política del pueblo venezolano. Otro proceso digno de nota fue el aumento del grado de intervención del estado en la economía, circunstancialmente en relación con las contingencias derivadas de la segunda guerra mundial. La reforma petrolera y fiscal de 1943 marcó una etapa en el desarrollo de la actividad petrolera en el país. Por último cabe mencionar el hecho de la promulgación de una ley agraria progresista, que levantó la expectativa en las masas campesinas y les dio un instrumento de lucha.

VI. PERÍODO 1946-1957

1. *Cuadro histórico general*

Dos etapas pueden distinguirse en el período considerado: i] la de 1946 a 1948, de auge del ejercicio político, de expansión económica y elevada dinámica social; ii] la de 1949 a 1957, de dictadura militar-policial, de crecimiento económico y de contención social. En la primera etapa deben señalarse dos situaciones: la surgida del golpe militar de octubre de 1945 y la del brevísimo gobierno constitucional de Rómulo Gallegos. Puede decirse que ambas etapas fueron consecuencia de lo acontecido en octubre de 1945. A través del período creció el capitalismo dependiente en el país y penetró considerablemente el capital extranjero en diferentes sectores de la economía. Las expectativas de mejoramiento socioeconómico de las clases dominadas, creadas por el movimiento de octubre, fueron brutalmente canceladas por la dictadura y durante los nueve años de ésta la concentración del ingreso y la riqueza alcanzó índices máximos. La situación de la clase obrera y del campesinado empeoró después de 1949 y las ganancias de los monopolios internacionales e internos llegaron a sus mayores niveles. Sin embargo, hubo progreso mate-

rial y se sentaron las bases para la estructuración de un sector público de la economía que en la actualidad está en proceso de expansión acelerada.

Durante la primera etapa que ha sido señalada el movimiento de octubre cumplió en lo político sus metas. El sistema electoral fue reformado para democratizar enteramente el ejercicio del sufragio en dos dimensiones: por una parte, el derecho de voto fue acordado a toda la población mayor de 18 años, sin diferencia de sexo ni de ningún otro género; por la otra, el voto fue extendido a la elección de miembros del Congreso nacional y de presidente de la República. La Constitución nacional fue reformada por la Asamblea constituyente instalada en diciembre de 1946, cuyos integrantes fueron elegidos por votación popular en octubre de ese mismo año, con el resultado de una mayoría de Acción Democrática, partido cogobernante. Un año después, en diciembre de 1947, tuvieron lugar las elecciones generales para los organismos deliberantes representativos y presidente de la República, en las que, una vez más, resultó victorioso el partido AD, con su candidato presidencial Rómulo Gallegos; los otros candidatos presidenciales fueron Rafael Caldera (socialcristiano) y Gustavo Machado (comunista). Salvo algunos incidentes de poca significación, el proceso electoral, en ambas oportunidades, se caracterizó por la ejemplar conducta del pueblo. Nuevos partidos políticos fueron organizados y legalizados: Unión Republicana Democrática (URD), dirigido por Jóvito Villalba, opositor desde el primer momento al régimen gobernante, encarcelado varias veces y acusado de conspirador; en URD militaron algunos de los miembros del disuelto PDV (partido de gobierno del régimen derrocado); el COPEI (socialcristiano), dirigido por Rafael Caldera, en el cual se incorporaron los antiguos dirigentes de la UNE (organización estudiantil de derecha); el Partido Socialista Venezolano (PSV), dirigido por el médico José Rojas Contreras, de tendencia liberal pequeñoburguesa con algunos rasgos socializantes no marxistas. El cuadro político organizado se completaba con AD (en el gobierno), Unión Popular Venezolana (UPV) promarxista y el Partido Comunista (PCV). Sin embargo, las libertades, derechos y garantías fueron restringidos, de hecho o de derecho, a través de los años 1946 y 1947, dirigentes políticos y sindicales de izquierda fueron encarcelados, periódicos de orientación democrática, no adictos al gobierno, fueron clausurados, fueron amenazados de detención policial quienes de uno u otro modo defendieran al gobierno depuesto, se practicaron algunas torturas a detenidos políticos, los funcionarios y colaboradores más destacados del gobierno de Medina fueron encarcelados y desterrados, incluso el presidente derrocado; también fue encarcelado y exiliado el ex presidente López Contreras. Un numeroso grupo de personas, real o supuestamente vinculadas a los gobiernos anteriores, fueron sometidas a juicio de responsabilidad civil y administrativa y muchos fueron sancionados con la pérdida de sus bienes, notándose casos de injusticia y retaliación política o personal. Los ex gobernantes y ex funcionarios fueron escarnecidos y vilipendiados.

Pocos días después del derrocamiento de Medina tuvieron lugar manifestaciones de apoyo, absoluto o condicional, de diferentes corrientes políticas y de fuerzas económicas. La UNE (estudiantil) y la tendencia socialcristiana figuraron entre los primeros manifestantes de apoyo, aunque poco tiempo después, en el fragor de la lucha electoral, el respaldo fue retirado; también expresaron apoyo, aunque con

reservas y limitaciones, los marxistas organizados en la UPV, profesores de la Universidad Central, organizaciones sindicales y organismos del comercio y la producción representados en Fedecámaras. Un cable procedente de Washington.[58] dio cuenta de la anuencia entusiasta de las compañías petroleras al nuevo orden de cosas. En entrevista de representantes de los organismos económicos con Rómulo Betancourt, presidente de la junta de gobierno, éste les anunció la disposición oficial a la armonía en las relaciones entre el capital y los trabajadores y la creación del Consejo Nacional de Economía, con mayoría de representantes empresariales y de la propiedad, como órgano consultor del gobierno. Betancourt se entrevistó inmediatamente después del triunfo del movimiento militar con los directivos petroleros para asegurarles el respeto del nuevo régimen al sistema de concesiones y la vigencia plena de la legislación de hidrocarburos (objetada dos años antes por AD en el Congreso nacional por deficiente en cuanto al interés nacional). En lo internacional la política se caracterizó por el rechazo a las tiranías, y en consecuencia fueron rotas las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Franco (España) y de Trujillo (Santo Domingo). Las relaciones con la URSS fueron mantenidas.

El movimiento sindical se fortaleció en el lapso 1946-48 y la situación socioeconómica de los trabajadores mejoró considerablemente; no obstante, algunas huelgas orientadas por dirigentes sindicales no adictos a la corriente del gobierno fueron prohibidas o reprimidas, ocasionándose pugnas internas en los sindicatos entre los oficialistas y los opositores que en algunos casos llegaron a hechos de violencia física. El sectarismo de los adeístas amenazó frecuentemente con la división del movimiento sindical.

La ley agraria de 1945, promulgada en vísperas del derrocamiento de Medina, fue derogada y sustituida por un decreto sobre desalojo campesino y predios rústicos, que pretendía restablecer la alterada paz en el medio agrario —los campesinos habían abrigado esperanzas de redención con la ley agraria de 1945 y llevaron a la práctica en algunos casos sus tentativas de toma de posesión de la tierra—, pero sin cambio fundamental en las relaciones de propiedad, tenencia y explotación imperantes en la agricultura. En 1948, en vísperas del derrocamiento de Gallegos —rara coincidencia, por lo demás— fue promulgada una nueva ley agraria, inferior en muchos aspectos importantes a la de 1945, pero que no tuvo oportunidad de ser aplicada. Así pues, la realidad latifundista del campo permaneció esencialmente inalterada durante el lapso 1946-48, aunque se practicaron algunas formas de parcelamiento rural y de colonización agrícola en tierras del estado, que de ninguna manera incidieron en la raíz del problema agrario vigente desde el siglo XIX.[59]

Algunas medidas tendientes a mejorar la situación económica de los sectores de menores ingresos fueron tomadas por el gobierno provisorio. Entre ellas hay que mencionar: el decreto sobre reducción de alquileres en el área metropolitana de

[58] *Historia gráfica de Venezuela*, compilación de José Rivas Rivas, tomo 3, Centro Editor, Caracas, 1972, p. 34.

[59] En el lapso 1945-47 fueron distribuidas 73 770 hectáreas entre 6 000 familias campesinas; estas tierras eran de propiedad nacional. A fines de 1947 había nueve colonias agrícolas con una extensión de 45 000 hectáreas, a razón de 5 000 hectáreas por colonia y de 10 hectáreas por familia. Cf. Federico Brito Figueroa, *op. cit.* pp., 501-502.

Caracas, el aumento de la oferta de alimentos controlada por el gobierno y la construcción en cantidades considerables de viviendas populares. La acción sindical logró alzas de salarios en diferentes actividades. El empleo aumentó en las zonas urbanas. El presupuesto del estado para el ejercicio 1946-47 alcanzó a 787 millones de bolívares, el más elevado hasta ese tiempo y en buena parte fue consecuencia de la reforma petrolera de 1943 y el establecimiento del impuesto sobre la renta ese mismo año. El gobierno provisorio acordó dos modificaciones importantes: la imposición de un tributo directo extraordinario, por una sola vez, con vigencia el año 1946, sobre los ingresos superiores a 800 000 bolívares y según una escala progresiva, con tope de 15% para ingresos superiores a 2 millones de bolívares anuales; fue reformada la ley de impuesto sobre la renta para aumentar las tasas, la mayor de las cuales, de 26%, se fijó sobre ingresos superiores a 28 millones de bolívares prácticamente limitada a las compañías petroleras.

El gobierno provisorio gozó de algunas facilidades económicas que no tuvo el gobierno depuesto. Además de la expansión fiscal, existieron circunstancias más favorables en cuanto al abastecimiento del mercado nacional por la vía de las importaciones, una vez finalizada la guerra, ya que la economía norteamericana se convirtió rápidamente a la producción para la paz; las reservas de divisas acumuladas durante el conflicto permitieron hacer frente a la mayor demanda de importaciones en los años 1946 a 1948 y las dificultades derivadas de la escasez se aliviaron. Por otra parte, sin embargo, el paulatino regreso a la normalidad del mercado internacional creó problemas de competencia insostenible a la producción nacional que había podido establecerse durante los tiempos de la guerra, sobre todo porque existía un *modus vivendi* con Estados Unidos, celebrado en 1938, que favorecía una amplia gama de mercancías procedentes de ese país. En esa coyuntura, el capital norteamericano mostró interés —creciente desde entonces hasta hoy— por inversiones fuera del área petrolera, y específicamente en la producción y distribución de bienes de consumo. Una misión norteamericana de negocios, encabezada por Nelson Rockefeller, visitó a Venezuela en junio de 1947, realizó entrevistas con gobernantes, funcionarios y empresarios y logró ciertos acuerdos para efectuar inversiones en los campos mencionados, con alguna participación de capital venezolano. Las compañías petroleras participaron como accionistas minoritarios en las empresas creadas. Se abrieron así nuevas oportunidades de expansión y penetración para el capital extranjero. El gobierno provisorio no otorgó nuevas concesiones petroleras, pero sí lo hizo en cuanto al mineral de hierro, en beneficio de consorcios norteamericanos del acero.

El novelista Rómulo Gallegos, electo en los comicios de diciembre de 1947, tomó posesión de la presidencia de la República el 15 de febrero de 1948. El gabinete designado por Gallegos estuvo compuesto en su casi totalidad por militantes del partido Acción Democrática; los que no lo eran, habían demostrado sus simpatías por el partido. Gallegos hizo una visita a Estados Unidos durante su breve tiempo en la presidencia. El régimen impositivo petrolero fue modificado para incorporar la fórmula conocida como "mitad y mitad", es decir, el excedente de explotación en la industria petrolera debía distribuirse en proporciones iguales entre el estado —bajo la forma de impuestos, contribuciones y tasas— y las empresas. Estudiosos de la cuestión petrolera opinaron que con esa fórmula el estado no alcan-

zaba el 50% del excedente de explotación.[60] Más grave aún debe considerarse la acusación según la cual el gobierno de entonces adquirió un compromiso, en nombre del estado, de que no se modificaría en lo sucesivo el régimen impositivo petrolero sin el previo acuerdo de las compañías del ramo. Una alusión tácita o implícita a ese presunto acuerdo la haría años después, en 1958, el señor Proudfit, presidente de la Creole Petroleum Corporation, al protestar la reforma del impuesto sobre la renta decretada por el gobierno provisorio de 1958, sin la consulta previa a las petroleras. El gobierno de Gallegos fue derrocado el 24 de noviembre de 1948, nueve meses después de su toma de posesión, por un movimiento militar encabezado por los comandantes Carlos Delgado Chalbaud —ministro de Defensa de Gallegos—, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, todos participantes notables del movimiento de octubre de 1945.

Tuvo antecedentes el golpe militar de noviembre de 1948. Desde 1946 se efectuaron intentos de conspiración por parte de militares y civiles, reconocidos en el documento de justificación de su alzamiento por los triunfantes de 1948. En ese documento se acusa a AD de sectarismo, de ventajismo electoral, de preparación para el ejercicio abusivo del poder, de intentos para sembrar la división en el seno de las fuerzas armadas. El presidente de la junta militar de gobierno, Carlos Delgado Chalbaud, en declaraciones oficiales a la prensa el día 26 de noviembre de 1948, afirmó categóricamente que el movimiento no se orientaba hacia una dictadura militar y que se llamaría a una consulta electoral en "igualdad de condiciones". El presidente depuesto, Rómulo Gallegos, en palabras dirigidas al pueblo al abandonar el país, exiliado en Cuba, reconoció que el golpe de noviembre de 1948 fue la culminación de un proceso que comenzó la misma noche del 19 de octubre de 1945, cuando se organizó la junta de gobierno con mayoría de hombres de Acción Democrática.[61] El mismo Gallegos, en el documento de referencia, señala como sospechoso de la incitación al golpe a "poderosas fuerzas económicas, las del capital venezolano sin sensibilidad social y acaso también las del extranjero explotador de la riqueza de nuestro subsuelo".[62] Más adelante, en el documento mencionado, se pregunta "¿Qué significa la presencia constatada por personas que me merecen fe absoluta, de un agregado militar de embajada de potencia extranjera (todos coinciden en que Gallegos quiso indicar a Estados Unidos, MZ) en ajetreos de cooperador y consejero en uno de los cuarteles de Caracas mientras se estaba desarrollando la insurrección militar contra el gobierno constitucional y de puro y legítimo origen popular que yo presidía?".[63] Una vez más surge la duda razonable: si el capital extranjero, principalmente norteamericano, no recibió mal trato durante el gobierno provisorio ni tampoco durante el constitucional de 1948, ¿por qué su participación de una u otra forma en el alzamiento? Probablemente las clases dominantes internas abrigaron temores por la continuación de un régimen de libertades políticas y sindicales, de ascenso de masas, de orientación populista, que

[60] Cf. Salvador de la Plaza, "La economía minera y petrolera de Venezuela", en *Perfiles de la economía venezolana* (vol. colectivo), UCV, Caracas, 1963.

[61] *Venezuela bajo el signo del terror* (libro negro de la dictadura), ed. facsimilar (original Editorial Centauro, México), José Agustín Catalá editor, Caracas, 1974, p. 35.

[62] *Ibid*, p. 37.

[63] *Ibid*, p. 37.

seguramente tendría en su gestión regular que afectar desfavorablemente los privilegios e intereses más injustos, las posiciones más extremas de concentración de riqueza, ingreso y bienestar y propiciar una apertura al mejoramiento socioeconómico de la mayoría. Desde luego, para el capital extranjero —en todo caso— tendría que ser más confiable y deseable un régimen militar de derecha, como el que se originó en el golpe de 1948, que uno constitucional democrático, sin ser radical, ni siquiera reformista avanzado. Los perseguidos, atropellados, despojados o sancionados por el régimen provisorio seguramente no cesaron en buscar la oportunidad de la revancha, sin que esta observación implique a todos los que sufrieron tales circunstancias. Tampoco puede marginarse el factor de la ambición de las camarillas militares y las personales de los jefes del movimiento que al fin lograron imponerse a los otros, que siempre abrigaron propósitos de renovación nacional en sus actuaciones de 1945. En todo caso, en 1948, como observó Gallegos en su mensaje de desterrado, tuvo lugar, una vez más en la historia venezolana, el enfrentamiento entre el poder civil y el militar, entre el derecho y la fuerza.

En la etapa de la dictadura militar es posible diferenciar dos fases: la que culminó con las elecciones de 1952 y la que se extendió desde entonces hasta la caída del régimen en enero de 1958. En la primera algunos partidos políticos tuvieron actividad legal: el PCV durante corto tiempo; URD y COPEI hasta las elecciones. Acción Democrática fue obligado de inmediato a la clandestinidad, y llevó a cabo una lucha valerosa, sostenida, aunque en aspectos importantes equivocada en su táctica, al no esforzarse en la unidad de la resistencia al régimen y tomar en algunos casos el atajo del terrorismo y la asonada cuartelaria aislada. En el seno del gobierno militar —de las fuerzas armadas en su conjunto— pugnaban dos corrientes: la que propiciaba una salida electoral y pretendía mantener un mínimo de juego político y sindical, y la que perseguía directamente la dictadura absoluta. Posiblemente Carlos Delgado Chalbaud, presidente de la junta, impulsaba la primera, y fue asesinado el 13 de noviembre de 1950 en un atentado que muchos atribuyeron a Marcos Pérez Jiménez, cabecilla visible de la otra corriente militar. La represión, en esta primera fase, fue acentuada, pero menos brutal —relativamente— que la efectuada a partir de 1952. Las elecciones se realizaron —con toda la amenaza y el uso de todos los recursos del poder— el 30 de noviembre de 1952 y en ellas triunfó por abrumadora mayoría el partido URD, de Jóvito Villalba, por cuyos candidatos sufragaron todas las fuerzas antidictatoriales, con excepción de COPEI que lanzó sus propios candidatos. El FEI —mascarón electoral del gobierno— fue derrotado completamente en todo el país. El 2 de diciembre el gobierno militar desconoció la victoria popular y el coronel Marcos Pérez Jiménez fue designado presidente. Se inició en esa fecha la segunda fase que ha sido señalada, caracterizada por la supresión total de todos los derechos políticos, las garantías ciudadanas y las libertades democráticas, la represión brutal de toda oposición, la tortura en todas sus formas a los detenidos, la negación de todos los derechos humanos, el enriquecimiento descarado de los gobernantes funcionarios altos y validos del régimen, la explotación sin frenos de la clase obrera y el marginamiento de las aspiraciones populares. Por otra parte, se desarrolló la lucha contra la dictadura en la que participaron los cuadros más combativos, resueltos y valientes del pue-

blo, hasta culminar en una acción unitaria que, en coordinación con un movimiento militar, derrotó a las fuerzas represivas el 23 de enero de 1958.

La dictadura militar-policial se empeñó en la ejecución de obras de infraestructura física, en buena parte suntuarias, que cumplían tres objetivos: mostrar la eficacia del régimen, impulsar el empleo y facilitar el enriquecimiento de la camarilla gobernante y de ciertas capas de las clases dominantes. La especulación en terrenos llegó a su clímax. La fiebre de construcción y de urbanización se apoderó de los emprendedores. Caracas se convirtió en pocos años en una ciudad moderna al estilo norteamericano. El negocio bancario y financiero creció desordenadamente, en la vorágine del lucro fácil, desenfrenado y contingencial. La industria manufacturera registró algún progreso, pero en forma desequilibrada, enteramente sujeta a los suministros extranjeros de equipos, productos intermedios y patentes de fabricación; se amplió de modo particularmente desproporcionado el rubro de materiales de construcción. El capital extranjero encontró puerta franca en esa época y participó o dominó en diferentes sectores económicos.[64] La expansión petrolera y minera proporcionó, en lo sustancial, los recursos fiscales y de divisas para ese artificioso auge de negocios. En los dos últimos años de la dictadura —1956 y 1957— fueron otorgadas nuevas concesiones petroleras en extensiones totales considerables lo que reforzó el control de los recursos naturales del país por parte de los monopolios extranjeros y causó ingresos fiscales extraordinarios requeridos para fortalecer la comprometida capacidad financiera del gobierno.[65]

La dictadura acometió la ejecución de proyectos importantes en industrias básicas: la planta siderúrgica del Orinoco, el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní en Guayana, el complejo petroquímico de Morón (en el (centro); la construcción de una red ferroviaria también figuró en sus planes y al efecto fue ejecutado un ramal. Cuando cayó el régimen esos proyectos estaban en vías de ejecución. Este aspecto de la gestión de la dictadura es significativo, sobre todo el empeño en mantener esas actividades bajo control del estado, ya que grupos privados poderosos —seguramente en acuerdo con capital extranjero— intentaron, específicamente en el caso de la siderúrgica, promover proyectos de esa índole y el gobierno los frustró. No es convincente el argumento, que se ha utilizado algunas veces, de que tales proyectos de envergadura sirvieron, o pudieron servir, para el enriquecimiento ilícito, pues probablemente éste hubiera sido más fácil y rápido mediante otras obras. Es evidente que se trataba de sentar las bases de un capitalismo de estado, que permitiera una ampliación del poder político y militar en el campo económico. Contradictorias ideas nacionalistas probablemente bullían en la mente de los jefes militares y/o de sus colaboradores, ya que, por una parte, permitían la penetración del capital extranjero y le facilitaban un mayor dominio del petróleo, mientras que por la otra impedían a ese

[64] Si se hace igual a 100 la inversión bruta extranjera acumulada al 31/12/1950, puede indicarse que para el 31/12/57 dicha inversión había aumentado a 212.73, o sea, que había superado en más de dos veces la de 1950. Cf. *Memoria del Banco Central de Venezuela, año 1958*, p. 188.

[65] Con posterioridad a la caída de la dictadura —ocurrida el 23/1/58— se reveló la existencia de una deuda del gobierno, adquirida fuera de las normas legales, montante a más de 4 000 millones de bolívares.

capital, en principio, el acceso a proyectos industriales importantes, como los citados. La burguesía industrial en crecimiento no era entonces un factor real de poder ni la animaba una conciencia nacionalista en el sentido indicado, como para inspirar, directa o indirectamente, una política de autonomía en industrias básicas. Esa burguesía industrial estaba bastante comprometida con el capital extranjero —salvo algunos grupos de menor significación dentro del sector—, pues se dio en el proceso de industrialización por la llamada "vía de sustitución de importaciones" el fenómeno de que la burguesía importadora se dobló en industrial y sostuvo su vinculación con los proveedores, en buena parte, a través de arreglos que permitían una industrialización periférica, dependiente, importadora. Por tanto, hay que encontrar la explicación de los propósitos de la dictadura, al acometer el establecimiento de industrias básicas bajo su control, en la existencia de un proyecto de capitalismo de estado, que pudiera asimilarse al que se han propuesto, por ejemplo, los militares brasileños, y que en este caso sería más bien un antecedente venezolano.

2. *Régimen de producción*

Durante este período el capitalismo progresó considerablemente en el país. Los consorcios petroleros extranjeros consolidaron y ampliaron su control sobre los recursos naturales básicos. En 1945 las inversiones extranjeras brutas alcanzaron a 938 millones de dólares; en 1956 ascendieron a 3 710 millones, de los cuales un 70% era de propiedad norteamericana y un 30% de ingleses y holandeses. El gran capital extranjero se extendió a la explotación de mineral de hierro para exportación, cuya actividad se inició comercialmente en 1951. Capitalistas venezolanos impulsaron la industria manufacturera, según el proceso que se ha dado en llamar "sustitución de importaciones", bajo dependencia externa en diferentes formas: asociación con capital extranjero, uso de patentes, marcas y denominaciones comerciales o industriales, con participación en los beneficios y el control de la gerencia técnica por parte del cedente extranjero; suministro de equipos, maquinarias y otros medios de producción, así como bienes intermedios para procesar finalmente en el país y otras modalidades de esta índole. En otros casos, el capital extranjero estableció directamente filiales o subsidiarias en el país, bajo su exclusivo control. El gobierno favoreció ese modo de industrialización —dependiente, subordinada al capital internacional monopolista, tributaria— mediante exoneración de derechos arancelarios sobre materias primas, bienes intermedios y de producción, fijación de aranceles protectores, cupos y contingentes, para limitar la competencia externa; concesión de créditos a través de institutos oficiales, y otros medios e incentivos en favor de los empresarios. El capitalismo penetró en el campo y se concentró en renglones productivos de amplio y creciente mercado: materias primas para la industria y alimentos básicos. La renovación parcial —o modernización— del sector agropecuario tomó también la forma de la incorporación de profesionales del agro (ingenieros agrónomos, veterinarios, peritos agropecuarios, etc.) en afanes empresariales, apoyados por institutos del estado que les proporcionaron financiamiento, garantía de compra de cosechas a precios remunerativos,

y asistencia técnico-administrativa. Sin embargo, la gran propiedad agraria tradicional, precapitalista, latifundista, permaneció en lo sustancial; nuevos grandes propietarios se agregaron a los existentes o los remplazaron funcionarios y favorecidos del régimen posterior a 1948, que se enriquecieron ilícitamente en sumas considerables. Ciertos ensayos de reforma agraria limitada se practicaron en los primeros años del período (entre 1946 y 1948), especialmente bajo la forma de "comunidades agrarias".[66] Desaparecieron —con raras excepciones— las modalidades semifeudales en las relaciones de trabajo entre hacendados y campesinos, y la figura del jornalero asalariado sustituyó a la del campesino que pagaba renta en trabajo y permanecía vinculado de por vida a la hacienda; pero numerosas masas campesinas continuaron sometidas a la mayor pobreza, sin tierras de cultivo, disponiendo sólo de instrumentos primitivos de trabajo y logrando una producción precaria, apenas suficiente para la subsistencia familiar. El capital aplicado a operaciones comerciales y financieras aumentó considerablemente, el primero sobre todo en importaciones y el último en negocios usurarios y especulativos, en la compra-venta de inmuebles urbanos y el crédito al consumo. La construcción urbana se convirtió en una actividad altamente lucrativa. En suma, las relaciones de producción tendieron a generalizarse al modo capitalista, aunque la represión al movimiento sindical y la contención de las reivindicaciones obreras por parte del gobierno posterior a 1948 impidió el juego contractual moderno entre sindicatos y patronos, que ha caracterizado al capitalismo contemporáneo desarrollado. Las formas predominantes de la riqueza durante el período considerado fueron: la mobiliaria (comercio, finanzas, industria) y la inmobiliaria urbana. El estado intervenía en la vida económica como regulador de relaciones, protector del crecimiento industrial y agropecuario, oferente de créditos, constructor de viviendas y fundador de industrias básicas (siderúrgica y petroquímica en los últimos años del período). El estado, además, continuaba siendo gran propietario territorial y de empresas de diferentes actividades.

3. *Las fuerzas productivas*

El crecimiento capitalista contribuyó considerablemente durante el período al desarrollo de las fuerzas productivas del país. La importación de tecnología moderna y de bienes de producción de factura superior impulsó cierta diversificación del aparato productivo, la ampliación de su capacidad y el entrenamiento de la fuerza de trabajo en tareas correspondientes a un cuadro técnico más exigente. Desde luego, ese tipo de crecimiento dependía en grado prácticamente absoluto de las facilidades de importación, de tal manera que no tenía un soporte interno en cuanto a los suministros esenciales. La explotación petrolera y minera, no obstante

[66] "En realidad debe aparecer una categoría de posesiones condicionales en manos de individuos o de núcleos de población, y en ella deben convertirse tanto los actuales ejidos como las tierras de comunidades indígenas. Esta nueva categoría podría recibir el nombre de *comunidades agrarias*, entre las cuales podrían haber colectivas y parceladas, procurando fomentar las primeras." Ramón Fernández y Fernández, *Reforma agraria en Venezuela*, Librería y Editorial "Las Novedades", Caracas, 1948, p. 49 (subrayado original).

su escasa interrelación con otros sectores y ramas de la economía venezolana, influyó en la modernización de las actividades productivas, por vía del "efecto de demostración" y de alguna movilidad de la fuerza de trabajo. La penetración capitalista en el campo, estimulada por la política oficial, propició la introducción de procedimientos de cultivo y de cría de ganado más avanzados que los existentes en épocas precedentes, y se extendió el uso de la maquinaria agrícola, con lo cual se obtuvo un aumento de la productividad. El gobierno ejecutó obras de infraestructura (vialidad, presas de riego, telecomunicaciones, electrificación, habilitación de zonas industriales, construcción e instalaciones diversas) que facilitaron las actividades productivas. La fuerza de trabajo cobró mayor movilidad espacial y funcional, intensificándose el éxodo rural hacia las zonas urbanas y de explotación petrolera y minera. El sector secundario de la economía se expandió y adquirió una mayor proporción de las fuerzas productivas totales, en comparación con el período anterior. El producto territorial bruto (PTB) aumentó entre 1950 y 1959 a una tasa promedio anual de 7%; específicamente el sector secundario creció a una tasa media anual de 9%, mientras que el sector primario lo hizo a razón de 7% y el terciario a 6.7%.[67] La inversión bruta fija entre 1950 y 1959 se realizó a un ritmo promedio anual de 5%. La tasa de inversión —o sea, la relación entre inversión bruta fija y PTB— fluctuó entre 25.6% en 1950 y 24.9% en 1958, pasando por 26.7% en 1955. El capital existente, calculado a precios de 1957, se elevó de 26 523 millones de bolívares en 1950 a 47 485 millones en 1957. La densidad de capital —relación entre el capital existente y la población ocupada— varió de 16 578 bolívares por persona en 1950 a 22 528 en 1957.[68] Las reservas probadas de petróleo se ampliaron de 7 296 millones de barriles en 1947 a 15 592 millones de barriles en 1957. La capacidad de refinación de petróleo en el país ascendió de 107 000 barriles diarios en 1946 a 673 000 barriles diarios en 1957. Las reservas de mineral de hierro alcanzaban a 2 000 millones de toneladas métricas en 1957. La superficie agrícola vegetal se ensanchó de 1 043 000 hectáreas en 1946 a 1 156 000 hectáreas en 1957 y la superficie de pastos cultivados de 1 477 000 hectáreas en 1946 a 2 206 000 en 1957. Como puede apreciarse, el período que se examina fue de acentuado crecimiento económico, lo que no implica juicio alguno sobre la calidad de ese crecimiento, desde el punto de vista de la concepción integral del desarrollo. Sin embargo, como ha sido indicado en un párrafo anterior, el hecho de que el estado hubiese acometido, durante el lapso 1950-57, la instalación de importantes empresas de industrias básicas bajo su control permite calificar la orientación de ese crecimiento, desde el punto de vista de la gestión pública, como un intento de crear una economía con mejor integración interna que la que podía determinarse por la vía conocida como de simple sustitución de importaciones de bienes de consumo. Es interesante destacar en este sentido que los gobiernos posteriores a 1958 prosiguieron, aunque con relativa lentitud, la instalación de industrias básicas, pero con la tendencia, por lo menos para algunas de ellas, de compartir la gestión con la empresa privada, incluso con capital extranjero.

[67] Banco Central de Venezuela, *La economía venezolana en los últimos veinticinco años*, Caracas, 1966, pp. 19-23.
[68] *Ibid*, p. 154.

4. *La dinámica de clases*

El crecimiento capitalista dependiente, que tuvo lugar durante el período en observación como ha sido expuesto, imprimió su impulso a la evolución social. La burguesía adquirió caracteres de clase más definidos y una mayor conciencia de su existencia, poder y amplitud como factor económico y social. Surgió la burguesía industrial con cierta fuerza, aunque en situación todavía incipiente, y subordinada al capital extranjero. Característica notable de esta evolución fue —y esto se reafirmó en la época siguiente— que en buena parte la burguesía industrial se formó en vinculación con la burguesía comercial, ya que los importadores tomaron la iniciativa —en buen número de casos en acuerdo con los suplidores extranjeros de los productos en que operaban— de sustituir la importación de artículos acabados por la de artículos en proceso de fabricación para terminarlos en el país. La burguesía financiera creció más aún. Comenzó a formarse una burguesía agraria —si cabe la denominación— y se fortaleció, comparativamente, la comercial e inmobiliaria. Funcionarios y agentes enriquecidos del régimen posterior a 1948 se agregaron a la burguesía y vincularon con ella sus intereses. El grado de concentración de la riqueza y el ingreso no sólo se mantuvo elevado, sino que aumentó. La pequeña burguesía se amplió considerablemente, aunque con intereses muy dispersos, así como con diferentes concepciones sobre el orden político e institucional y sobre la evolución económica y cultural. El proletariado creció numéricamente —y tuvo cierto desarrollo como clase en sí— en las ciudades, zonas petroleras y mineras y campos, pudiendo distinguirse: el proletariado urbano (industrial, de la construcción, del trasporte y los servicios), petrolero-minero y rural. A pesar de la represión gubernamental el movimiento obrero fue adquiriendo fuerza y consistencia, manifestándose esporádicamente en conflictos con los patronos y en acciones políticas contra la dictadura. La clase de los grandes terratenientes rurales permaneció, aunque la significación de su riqueza y su poder clasista decayeron sustancialmente, pasando a una posición subordinada a la burguesía. En el campo se intensificó la formación de una pequeña burguesía, sustentada en las explotaciones agropecuarias medianas y pequeñas, vinculadas al mercado y dependientes del suministro y el financiamiento proporcionados, en su mayor parte, por la burguesía. La clase de los campesinos muy pobres, sin tierras, aunque reducida en proporción con respecto a la población total, continuó representando una realidad social crítica, potencialmente explosiva, frustradas crónicamente sus reivindicaciones por la ausencia de la reforma agraria. En las zonas urbanas y suburbanas crecía la franja marginal de la sociedad —el subproletariado— originada en buena parte por el éxodo campesino, no incorporados en su calidad de fuerza de trabajo a la producción material ni a los servicios organizados, y sometidos a condiciones de vida muy precarias, enteramente insuficientes. En Caracas, capital de la República, por ejemplo, casi podía distinguirse, hacia fines del período, la ubicación en sectores de vivienda correspondientes a la división socioeconómica: la oligarquía tradicional y parte de la alta burguesía en el recinto exclusivista denominado "Country Club", la burguesía de nueva formación en las urbanizaciones elegantes del este de la ciudad, la pequeña burguesía en el viejo casco urbano y en urbanizaciones modestas del sudeste y el oeste; el proletariado

en bloques multifamiliares, barrios obreros y barrios tradicionales pobres, y el subproletariado, los "marginales", en ranchos sobre los cerros circundantes.

5. *El movimiento demográfico*

La población ascendía el 26 de noviembre de 1950 a 5 035 000 habitantes, según el censo levantado en esa fecha. Para 1957 se estimó una población de 6 635 942 habitantes. De acuerdo con esas cifras, la tasa media anual de crecimiento durante el período 1950-57 fue de 4.2%, realmente elevada. En 1950 el 54% de la población era urbana y el 46% rural. En 1957 se estimó un 56% urbana y un 44% rural. En 1950 un 78% residía en la zona costero-montañosa; en 1957 residía en esa zona un 77%. La tasa de natalidad en 1946 era de 39 por mil y la de mortalidad era de 15 por mil, de modo que el crecimiento vegetativo era de 24 por mil; para 1957 la tasa de natalidad había subido a 43 por mil, la de mortalidad había bajado a 9 por mil y la de crecimiento vegetativo ascendía a 34 por mil. La esperanza de vida al nacer en 1950 era de 59 años y para 1957 había subido a 62 años. La población de menos de 20 años representaba un 50% del total en 1950 y un 54% en 1957. La población económicamente activa significaba un 34% del total en 1950 y un 33% en 1957. La tasa de desempleo era de 6.3% en 1950 y de 8.2% en 1957. El 47% de la población ocupada dependía del sector primario en 1950 y el 38% en 1957; del sector secundario dependía en 1950 un 17% y en 1957 un 19%; del terciario, 34% y 43%, respectivamente. El saldo migratorio de extranjeros durante el período considerado fue de 390 000 personas con signo positivo. El impacto de este aporte humano en la vida económica, social y cultural del país fue singularmente fuerte, y sin duda constituye uno de los factores influyentes en la realidad actual venezolana.

6. *El poder político*

Durante la etapa 1946-48 el movimiento democrático liberal estuvo en franco y acelerado ascenso. El pueblo ejerció el derecho de sufragio en dos oportunidades, —en las cuales eligió por primera vez, en lo que había trascurrido de siglo, miembros de cuerpos deliberantes nacionales y presidente de la República— y concurrió masivamente a las urnas. Fueron organizados nuevos partidos políticos, además de los existentes AD y PCV: Unión Republicana Democrática (URD), dirigido por Jóvito Villalba, el orador político más notable de la generación de 1928; COPEI (social-cristiano), dirigido por Rafael Caldera, brillante jurista y profesor universitario. El movimiento sindical obrero se fortaleció y desarrolló considerablemente, logrando importantes victorias y reivindicaciones. Se generaron grandes expectativas de emancipación popular, en lo económico, social, político y cultural. Acción Democrática se desarrolló rápidamente como partido de masas —con amplia base campesina, obrera y pequeñoburguesa— en la etapa 1946-48; participó del gobierno como soporte civil del movimiento militar de octubre de 1945, y como partido victorioso en las elecciones de 1947; esta última gestión de gobierno,

bajo su exclusiva responsabilidad política, duró apenas nueve meses, hasta el derrocamiento del presidente Gallegos en noviembre de 1948. La oposición fue sostenida durante todo el período por URD y el PCV, y desde 1947 por COPEI, partido que se formó para participar en las elecciones y que ha permanecido con las mismas siglas de índole transitoria, hasta el presente. Con la excepción del Comunista todos los partidos limitaban su horizonte doctrinario por los alcances de la democracia burguesa representativa, y debe señalarse que entre ellos AD tenía la posición más avanzada, tanto por su programa como por su composición. En el COPEI se organizaron algunos sectores politizados de las clases dominantes y de la pequeña burguesía y el campesinado influidos por la Iglesia católica tradicional. En URD se agruparon personalidades de la burguesía progresista, ex colaboradores y simpatizantes del gobierno de Medina y sectores de la pequeña burguesía.

Durante el lapso 1946-48 tuvieron lugar varios alzamientos armados y conspiraciones para derribar al gobierno, que fracasaron. Las fuerzas armadas sostuvieron al gobierno provisorio y luego al constitucional (a este último por breve tiempo). La represión política fue frecuente durante el gobierno provisorio. Los colaboradores y sostenedores de los regímenes anteriores fueron, en buena parte, sometidos a juicios de responsabilidad civil y penal, con sentencias condenatorias en numerosos casos, confiscación de bienes (reintegro al patrimonio del estado) y penas de exilio. En algunos casos esas sentencias fueron injustas o excesivas; por otra parte, muchos presuntos culpables no fueron sometidos a juicio.

La política económica y social del gobierno provisorio se caracterizó por una activa modernización del estado y la incorporación de órganos, medios e instrumentos para el fomento económico. Fue creada, en 1947, la Corporación Venezolana de Fomento —en verdad, se trató del desarrollo organizativo de la Junta de Fomento de la Producción creada durante el gobierno de Medina—, entidad de financiamiento de la empresa privada, de promoción económica y estímulo a la producción. Fueron reguladas las actividades y operaciones usurarias. Los ingresos fiscales nacionales se elevaron de 660 millones de bolívares en 1945 a 1 776 millones en 1948 y los gastos aumentaron de 510 millones de bolívares 1 644 millones entre los mismos años. Específicamente el impuesto sobre la renta petrolera —establecido durante el gobierno de Medina— produjo en 1946 cerca de 150 millones de bolívares en 1948 —en virtud del aumento de la producción y de las modificaciones al impuesto 300 millones, 80% del total de ingresos fiscales. Para aliviar la escasez de algunos artículos de primera necesidad el gobierno realizó importaciones; el mercado interno estuvo mejor abastecido en esa época, en lo que influyó la progresiva normalización de los canales internacionales de comercio.

La política petrolera del gobierno en el lapso de la provisionalidad se caracterizó por el respeto al estado de las relaciones con las concesionarias establecido por la ley de hidrocarburos de 1943 —impugnada por AD en su etapa de proyecto—, con algunas modificaciones en cuanto al régimen impositivo, como ha sido mencionado. La política de "no más concesiones" fue proclamada, aunque no se consagró en ningún texto legal. Como hecho importante hay que citar la percepción en especie y venta por el gobierno de la regalía correspondiente al estado en su carácter de titular de los recursos petroleros (un sexto de la producción), ya que ello significaba la posibilidad concreta de comercialización directa de los hidro-

carburos por el gobierno, lo que permitía conocer la situación del mercado internacional y romper el tabú de la inaccesibilidad a éste. Sin embargo, probablemente las propias compañías petroleras —a través de otros mecanismos— comprarían el petróleo de la regalía o gran parte del mismo.

Puede decirse que el poder político en la etapa de 1945-48 fue sustentado por una alianza transitoria entre sectores progresistas de la burguesía y de la pequeña burguesía socialdemócrata, con apoyo de los trabajadores, de parte del campesinado y de la mayoría de la oficialidad joven de las fuerzas armadas. Aunque AD se proclamaba antimperialista y antifeudal no realizó reformas apreciables del régimen de explotación petrolera —principal dominio del capital extranjero—, otorgó algunas concesiones a las compañías de mineral de hierro norteamericanas y propició la entrada de nuevo capital extranjero a otras actividades (comercio, agricultura, servicios). En cuanto al régimen agrario, fue derogada la ley agraria de 1945, de carácter progresista, y se promulgó una nueva ley esencialmente inferior a la derogada; en consecuencia, la reforma agraria, una vez más, fue frustrada.

La etapa 1949-57 se caracterizó por el ejercicio de una dictadura militar-policial muy represiva, cuya cabeza visible fue el oficial Marcos Pérez Jiménez. Iniciada por una junta militar presidida por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, ministro de Defensa del gobierno de Gallegos, continuó con una junta de gobierno presidida por el abogado Germán Suárez Flamerich —de antecedentes democráticos— al morir asesinado Delgado Chalbaud, y luego bajo la sola jefatura de Pérez Jiménez, en calidad de presidente de la República por "voluntad" de las fuerzas armadas, una vez consumado el desconocimiento oficial de los resultados de las elecciones de 1952 —para cuerpos deliberantes— en las cuales triunfó la oposición manifestada a través de URD. En los primeros tiempos después del golpe de noviembre de 1948 los partidos COPEI y URD expresaron beneplácito al nuevo régimen, hostigados como fueron —sobre todo URD— por AD prevalida del gobierno. AD fue declarado ilegal —"disuelto"— y decretada la disolución de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). El gobierno decretó la devolución de los bienes confiscados a quienes recibieron sentencias condenatorias en los juicios de responsabilidad civil y administrativa instaurados en la etapa anterior. En 1950 el Partido Comunista fue "ilegalizado". En abril de 1951 fue decretado un estatuto electoral elaborado por una comisión de juristas designada por el gobierno. En octubre de 1951 fue declarada la Universidad Central de Venezuela en proceso de reforma por el gobierno, lo que significaba la anulación de la autonomía, hecho que originó la protesta pública de la mayoría del profesorado y del estudiantado, a consecuencia de lo cual numerosos profesores y estudiantes fueron excluidos de la universidad y un grupo de ellos expulsado del país. El 30 de noviembre de 1952 se efectuaron las elecciones para la Asamblea nacional constituyente —en cumplimiento formal de una promesa hecha por la junta militar al tomar el gobierno— resultando vencedor absoluto URD, partido en el cual se encarnaba la protesta popular al régimen y la lucha por el retorno a la vida democrática, ilegalizados como estaban AD y el PCV. El gobierno desconoció de inmediato esos resultados y Pérez Jiménez se proclamó presidente de la República. Éste fue un golpe dentro del golpe de 1948. En 1952 se inició una nueva fase de recrudecimiento de

la represión, de sombría dictadura, que habría de prolongarse hasta el 23 de enero de 1958 cuando fue derrocada por un movimiento cívico-militar.

La lucha clandestina no cesó durante el lapso 1949-57, sostenida principalmente por los partidos AD y Comunista, con elevado sacrificio de vidas, libertad personal y seguridad familiar. Oficiales de las fuerzas armadas participaron en la lucha, algunos fueron asesinados, otros encarcelados o exiliados. La represión más brutal estuvo a cargo de un cuerpo llamado Seguridad Nacional, compuesto por esbirros, desviados mentales y criminales natos. El movimiento sindical, el campesino, el estudiantil, el cultural, fueron reprimidos. La prensa fue sometida a censura. El régimen gobernante estrechó los lazos de amistad con todas las dictaduras de América y con la de Franco en España, mientras que rompió relaciones con la URSS.

La expansión petrolera fue acentuada durante esta etapa. El capital extranjero aumentó de 1 168 millones de dólares en 1948 a 3 710 millones en 1956; ese capital, además de petróleo y minería, se aplicó en la industria manufacturera, la construcción, las finanzas, la agricultura y los servicios. En 1952 se celebró un tratado comercial con Estados Unidos (modificación del *modus vivendi* de 1938) en virtud del cual se comprometió esencialmente la soberanía arancelaria de la República y se puso un freno a la industrialización en numerosos renglones. En este orden de hechos el período examinado fue de creciente dominio extranjero de la economía, y sólo surgió como circunstancia contradictoria la iniciativa oficial de establecer industrias básicas bajo el control exclusivo del estado, a la que ya me he referido.

No puede decirse que el régimen dictatorial fuera sostenido únicamente por las fuerzas armadas ni que éstas en su totalidad estuvieran de acuerdo con la dictadura en todos sus aspectos. El capital extranjero —el poder internacional del gran capitalismo— contribuyó por su parte a la estabilidad del régimen favorecido como estuvo por éste. Casuísticamente nacionalista, la dictadura significó una circunstancia propicia a la mayor penetración del capital extranjero en la economía venezolana. Para Foster Dulles —entonces secretario de Estado de Estados Unidos— el régimen de Pérez Jiménez era el más conveniente a los intereses norteamericanos. También la burguesía venezolana se favoreció con la dictadura y las principales fortunas prosperaron durante su mandato. Entre 1950 y 1957 la participación de las remuneraciones del trabajo en el ingreso nacional se redujo de 59.8% a 52.4%, mientras que la del capital aumentó de 40.2% a 47.6%. En términos absolutos los beneficios del capital se elevaron de 3 460 millones de bolívares a 8 000 millones entre los años citados, es decir, más del doble, mientras que las remuneraciones del trabajo subieron de 5 147 millones de bolívares a 8 786 millones, sólo 70%.[60] No cabe duda, pues, que el capital extranjero y la burguesía constituyeron los soportes del poder económico del régimen dictatorial. Sufrieron en su situación socioeconómica las clases obrera y campesina. La pequeña burguesía se compartía entre el apoyo, la resistencia y la indiferencia.

[60] *Ibid*, p. 21.

7. *Las coyunturas notables*

Aunque 1949 fue un año de moderada recesión de la economía norteamericana, ese fenómeno, no fue sensible en Venezuela y no afectó de ninguna manera al naciente régimen dictatorial. En 1956-57 el gobierno otorgó nuevas concesiones petroleras, lo que proporcionó al fisco 2 188 millones de bolívares de ingresos adicionales y dio lugar a entradas extraordinarias de divisas, con cuyos aportes se mitigaron los efectos de una situación fiscal en deterioro, como se puso de manifiesto después de la caída de la dictadura, al revelarse una deuda irregular de más de 4 000 millones de bolívares, contraída al margen de toda norma legal y que afectaba sin duda la solvencia del estado. Esa deuda se descontaba a tasas escandalosamente elevadas en los mercados de dinero internos y externos, y la insolvencia reiterada ocasionó fuerte y creciente malestar en los medios económicos, que fue uno de los motivos concretos del derrocamiento de Pérez Jiménez.

VII. PERÍODO 1958-1975

1. *Cuadro histórico general*

En Venezuela, las dictaduras interponen una aparente penumbra en el proceso de la lucha política y la formación ideológica. En realidad, por contradicción, por antítesis, dan lugar a la génesis de nuevas actitudes, de nuevas fuerzas promotoras del desarrollo político que insurgen como negadoras del pasado, en la ruptura de lo que propendió a establecerse como evolución y quedó deshecho en alguna instancia del acontecer histórico. Así fue en la dictadura gomecista, que liquidó la secuela del siglo XIX venezolano, y generó —por contraposición— los factores que impulsaron la coyuntura de 1936. También fue así la dictadura perezjimenista, que significó la separación histórica entre el posgomecismo (1945-48) y la nueva dinámica de la nación. Sin embargo, factores y fuerzas del pasado se empeñan en sobrevivir y surge el conflicto con las nuevas tendencias —virtualmente nacidas de la lucha más profunda y consciente contra la dictadura, que fue también lucha contra el pasado— que se proyectará en el período posdictatorial con signos trascendentes.

En el seno de los partidos políticos la dialéctica ideológica, en la confrontación de los hechos de la transición, se resolvió en divisiones sucesivas: Acción Democrática (AD) sufrió tres procesos críticos, que dieron existencia al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de orientación marxista, al Partido Revolucionario Nacionalista (PRN) reivindicador de la ortodoxia socialdemócrata si cabe la expresión, y al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) de orientación socialista heterodoxa. El Partido Comunista (PCV) sufrió también tres divisiones: la primera, en la etapa crítica de la lucha armada, que dio origen al Frente de Liberación Nacional (FLN) y su brazo armado las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) persistente en esta línea de actividad política; la segunda, en la etapa de la pacificación y el retorno a las formas convencionales de actividad, de la cual

nació el Movimiento al Socialismo (MAS), cuya evolución se orienta al socialismo flexible de contenido nacional; y la última, en la etapa de la coyuntura electoral, bajo el nombre de Vanguardia Comunista (VC), inscrita también en el campo de la autocrítica estratégica y táctica de los movimientos marxistas-leninistas. Estas divisiones señalaron momentos y contingencias importantes en el proceso político venezolano de los últimos quince años y sus expresiones ideológicas y organizativas, con pocas excepciones, tienen vigorosa vigencia en la actualidad nacional. El partido Unión Republicana Democrática (URD) progresista, de centro-izquierda, tampoco escapó a la dinámica de las confrontaciones y de su seno salieron grupos calificados de dirigentes, algunos orientados a soluciones socialistas y otros a formas democrático-burguesas, pero sin constituir movimientos organizados. El partido socialcristiano COPEI no ha sufrido divisiones, aunque en su seno coexisten diferentes variantes de una posición principal, no marxista, inspirada en la doctrina social del catolicismo. No debe extrañar que los dos partidos que estuvieron en la primera línea contra la dictadura —AD y PCV— fueran los más profundamente conmovidos por la dialéctica ideológica y la confrontación pragmática en la época posperezjimenista.

El sistema de poder se implementa cada vez más en la llamada "bipolaridad" de partidos elegibles como alternativas de gobierno: AD y COPEI. Ya en el Pacto de Nueva York (diciembre 1957), que ha sido mencionado, se perfila el mecanismo, con la exclusión del PCV, factor esencial de la unidad contra la dictadura y de la transición, en 1958, a la democracia representativa burguesa. Luego, con Betancourt en la jefatura de gobierno, el mecanismo se perfecciona, al ser marginado —y en esto seguramente hubo un propósito deliberado de RB— el partido de Jóvito Villalba (URD), quedando combinados los dos partidos de referencia, bajo la denominación de "ancha base". No existió pacto para alternarse rigurosamente en el gobierno esos dos partidos y ello permitió dar a la contienda política, y específicamente a la fórmula electoral, un sentido de amplitud, de liberalidad, de concurrencia popular, deseable para el sistema. Para la estabilidad del mecanismo bipolar era menester excluir, del seno de AD donde se radicaba el fenómeno, los factores aleatorios, incontrolables, de discrepancia ideológica, y el proceso se cumplió en diez años aproximadamente. En apariencia, AD no ofrece riesgos al sistema de poder, atribuibles a nuevos brotes de índole ideológica disidente. Es, por tanto, al cerrar el período, un partido fundamental del mecanismo de poder. El otro, con menor fuerza popular y organizativa, es COPEI.

El pacto de Nueva York implicaba el fortalecimiento de la burguesía venezolana como clase dominante y su relación definida con el poder político. La burguesía, como tal, colaboró tácticamente, en los últimos momentos, en el derrocamiento de la dictadura, y estableció con impresionante decisión y precisión sus objetivos y metas en la etapa de transición que se inició en 1958. Sus personeros participaron en el gobierno provisorio, en proporción determinante no tanto por el número sino por las posiciones y la entidad de los participantes, y desde allí impusieron, en esencia, los intereses dominantes de clase. La política de unidad nacional —contra la secuela de la dictadura y por la democracia— practicada con ejemplar consecuencia por la izquierda, permitió a la burguesía su consolidación en el poder, ya con sentido político de clase. Las masas populares en las calles de

Caracas —los desempleados, los subempleados, los marginados, los estudiantes, los campesinos recién llegados, grupos del proletariado— no fueron movilizadas en ningún momento contra la burguesía, ni contra el capital petrolero, sino contra el peligro de regresión a la dictadura. Sólo un momento tuvo la masa popular la autonomía de la acción por un motivo distinto: la protesta contra la visita de Nixon (mayo de 1958), que era el repudio a la política de poder de Estados Unidos, tan mimética, que aupaba poco tiempo antes la dictadura y luego, en ese momento, la vuelta a la democracia. Ese repudio, tan viva y justamente manifestado, estuvo a punto de provocar una agresión armada norteamericana contra Venezuela. Fue un momento en que la burguesía llegó a temblar.

Betancourt dirigió lo más objetivo de su mensaje a la burguesía y al capital petrolero, en su trajín de candidato presidencial. Otro mensaje significativo fue dirigido a las fuerzas armadas. Su gestión de gobierno no se quedó en mensaje, sino que se concretó en medidas de estímulo y apoyo a la burguesía y al capital petrolero, de impulso al crecimiento capitalista dependiente y de freno a las reivindicaciones populares, obreras y campesinas. La recesión económica —1960 a 1963, los años más crudos—, que había sido facilitada por el festín de pagos indiscriminados de la deuda de la dictadura —bajo la presión de la burguesía y el capital extranjero—y por la maniobra artera de los consorcios petroleros en represalia por el aumento de la tasa de impuesto sobre la renta a fines de 1958 —acto soberano de gobierno, que honra a Edgar Sanabria que lo ordenó, y a los ministros que lo suscribieron—, fue cargada en gran parte a la cuenta popular: reducción de salarios, desempleo, alza de precios, restricciones en servicios públicos, entre otros aspectos. La industrialización sustitutiva de importaciones fue acelerada, con el auxilio de medidas aduaneras protectoras, exoneraciones fiscales, créditos de entidades oficiales, subsidios y compras masivas de bienes por el sector público, además de la contención de los salarios reales, como se ha mencionado. Se expandió el capitalismo en el campo, mientras la reforma agraria, con ley promulgada en 1960, se ejecutaba en forma dispersa, pausada, burocrática, con reconocimiento de altos precios de los fundos expropiados. Fue integrado virtualmente el estado en su acepción funcional amplia, como sistema de poder supuestamente balanceado: Estado burgués-burocrático-desarrollista-populista, con participación implícita de Fedecámaras (organismo coordinador de los empresarios), Confederación de Trabajadores de Venezuela (organismo coordinador de los sindicatos obreros y campesinos) y partidos del establecimiento, e implementado por la burocracia técnico-administrativa, las fuerzas armadas y las de represión política. Como artificios de una política formalmente nacionalista, pero en verdad conciliadora con el imperialismo, fue declarada la decisión de no otorgar más concesiones petroleras —en su lugar se ofrecerían los "contratos de servicios" a los consorcios internacionales, modalidad corregida de las concesiones— y fue creada la Corporación Venezolana de Petróleo, supuestamente encomendada del desarrollo de una industria petrolera nacional, pero en realidad para servir de puente a los contratos de servicios.[70] En 1960 fue creada la OPEP con participación de Venezuela, pero su

[70] "La Corporación Venezolana de Petróleo ha nacido sobre bases sanas; está dirigida por gente responsable; no pretendemos convertirla en un competidor de las compañías petro-

eficacia sólo se pondría de manifiesto después de 1970, en virtud de la causa árabe frente a Israel y con oportunidad de ese conflicto y la llamada crisis energética. Entre tanto, los consorcios petroleros, ante la pasividad gubernamental, desarrollaron una táctica de deterioro persistente, sistemático, de la posición petrolera de Venezuela (desinversión neta, envilecimiento de los precios, alza artificiosa de los costos para reducir el margen de renta gravable, reducción de las operaciones exploratorias, explotación intensiva de yacimientos existentes hasta límites de exhaustividad, etc), con fines de intimidación y de mediatización de la política petrolera del gobierno.

El objetivo manifiesto de Betancourt era cumplir el período constitucional como presidente y trasmitir el mando al sucesor elegido. Al cumplimiento de este objetivo subordinó toda la gestión de gobierno. Simultáneamente se propuso impulsar el auge de la burguesía y sostener un equilibrio de las relaciones obrero-patronales que fundamentara el juego político de poder. Para ello era indispensable obtener el control de los sindicatos a través del partido AD y regular las acciones de masas por la misma vía del control partidista (con la cooperación de COPEI, partido cogobernante). Por tanto, la táctica consistía en destruir la influencia de la izquierda en el frente sindical y en el movimiento popular: segregar y aislar, golpear y acorralar, reprimir, provocar para justificar la represión. Aun antes de que se iniciara la lucha armada de la izquierda, Betancourt se presentaba como el anti-Fidel Castro, como campeón del anticomunismo en nombre de la democracia. La lucha armada, en ese orden de hechos, no fue simplemente una réplica de la Revolución cubana, ni un atajo ilusorio para quemar etapas; en su determinación actuaron factores internos y externos y la política del gobierno de Betancourt no fue el menos importante de ellos.

A lo largo del período que se examina la expansión de la burguesía fue una constante. Crecieron los estamentos industrial, agrario y financiero de la burguesía. La acumulación de capital —en función del excedente petrolero fiscal, de la contención relativa de los salarios y del curso favorable de la sustitución de importaciones— se efectuó en mayor proporción en el sector industrial y en el financiero, que dominaron la dinámica de crecimiento capitalista en este tiempo. Desde luego, ese mismo proceso expansivo impulsó el crecimiento del proletariado, en las zonas industriales y en el campo penetrado por el capitalismo, y afirmó sus características dentro de la compleja estructura socioeconómica del país. También ese proceso fomentó la marginalidad y acentuó la desigualdad de la distribución del ingreso.[71] La acción del estado, centrada en la administración del excedente petrolero nacional, orientó sus correctivos a los campos de la salud y la educación, de la vivienda y los subsidios al consumo de algunos artículos esenciales. Sin em-

leras para desarticular sus mercados. A través de la Corporación Venezolana de Petróleo podrán otorgarse contratos de servicios, y ya no más concesiones, que es una palabra de inconfundible sabor colonial", Rómulo Betancourt, *Tres años de gobierno democrático, 1959-1962*, Caracas, 1962, t. II, p. 55.

[71] En 1957 correspondió a los perceptores de salarios y sueldos el 72% del ingreso nacional; en 1974 esa participación se redujo al 59%. En ambos casos se dedujo a los efectos del cálculo el ingreso fiscal petrolero. Cf. *Memoria del Banco Central de Venezuela*, 1958 e *Informe Económico*, 1974, del mismo instituto.

bargo, la multiplicación de las expectativas populares bien pronto se manifestó en mayores desequilibrios sociales, por la insuficiencia de los recursos aplicados a su satisfacción y las graves deficiencias de la política en los campos indicados. Este desenvolvimiento prosiguió con mayor fuerza durante los gobiernos de Raúl Leoni y Rafael Caldera, con variantes adjetivas y formales, pero sin modificaciones de fondo.

La lucha armada entró en decadencia durante el gobierno de Leoni, por las razones y circunstancias que se indicarán más adelante, y se practicó una política de "pacificación" con bastante éxito. La represión, sin embargo, no desapareció, y en algunos momentos adquirió caracteres graves, negadores de la supuesta bonhomía de los gobernantes de turno. Hacia finales del mandato de Leoni, con la división que dio origen al MEP, se completó el proceso de derechización y burocratización del partido AD, que perdió el gobierno en el quinquenio siguiente (1969-74), pero se preparó —dentro de los mecanismos del poder) para recuperarlo en el lapso posterior.

El gobierno de Caldera propició una mayor democratización de la vida pública, sin dejar de ser represivo al servicio del poder. La política general se encuadró en la calificación de "nacionalismo democrático" con proyección internacional. La actitud ante Estados Unidos fue sobria y digna. Se propició un acercamiento al gobierno revolucionario de Cuba, antecedente para el restablecimiento de relaciones que tuvo lugar después, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se dieron pasos importantes en el camino a la nacionalización petrolera, favorecidos sin duda por la coyuntura internacional centrada en la crisis energética y el fortalecimiento de la OPEP. No disfrutó enteramente el gobierno de Caldera del extraordinario auge fiscal petrolero iniciado en 1973 y sustancialmente acentuado en 1974; pero auspició las condiciones para ese auge, que disfrutaría su sucesor. Se hicieron más fuertes las presiones inflacionarias, siempre subyacentes en el funcionamiento estructural de la economía venezolana, en virtud de la acumulación de factores internos emergentes de la industrialización sustitutiva de importaciones, del crecimiento desigual de la agricultura y del desequilibrio de fondo en la distribución del ingreso; las presiones inflacionarias fueron estimuladas, además, por la coyuntura externa, de incidencia alcista en los mercados centrales del sistema capitalista. Dificultades —algunas artificiosas— en el abastecimiento de productos básicos de consumo y una aguda sensibilidad popular ante el aumento notable del costo de vida, favorecieron en las elecciones presidenciales de 1973 al candidato de AD, Carlos Andrés Pérez.

El nuevo gobierno (1974-79) se inició con la ventaja de una mayoría absoluta en el Congreso de la República y la disponibilidad de enormes recursos fiscales. Gracias a ello obtuvo del legislativo autorización para el ejercicio de poderes extraordinarios, de emergencia, en el campo económico y social. Una especie de "bonapartismo" impulsó la gestión de Carlos Andrés Pérez en los primeros tiempos de su mandato. Dio la impresión de querer sujetar a regulación múltiple el crecimiento capitalista del país y de incorporar a los sectores de menores ingresos al disfrute del auge petrolero. Bonapartismo populista, si cabe la expresión, que pronto se orientó al fortalecimiento de lo que se ha dado en llamar la "economía mixta" y que en esencia es capitalismo monopolista de estado. El sistema de po-

der, que he calificado anteriormente como estado amplio, se ha hecho más sólido y evidente. El desarrollismo y el populismo son las dos caras de la moneda de la dominación. El capital financiero y el industrial adquieren niveles más elevados de concentración y expansión, con cierta proyección internacional, sobre todo en países más pequeños y pobres del "tercer mundo americano". El formidable excedente petrolero sirve en buena parte para el enriquecimiento de la burguesía y de capas burocráticas en relación con el poder. El grado de corrupción administrativa en diferentes niveles del estado crece considerablemente, en relación con la abundancia fiscal y la multiplicidad de los negocios públicos. Es evidente la paradoja de un estado, el venezolano, perceptor y administrador de un ingreso periódico de gran magnitud, que no se origina en el contribuyente, sino en la explotación de un recurso natural irrenovable —patrimonio común de la nación—, y que, por ello, debería estar en la mejor posición para dirigir con autonomía el rumbo económico y social del país, subordinando a sus objetivos el interés privado; y, sin embargo, en realidad este estado se subordina al poder económico privado, sirve a su fortalecimiento y discrimina contra la mayoría. La inflación, junto con la orientación clasista del gasto público, se ha convertido en mecanismo de redistribución regresiva del ingreso y de dependencia. La nacionalización petrolera, circunscrita al área extractiva del negocio, en lugar de significar un factor de difusión equilibrada de los beneficios nacionales, se ha constituido en un nuevo y formidable punto de apoyo para el desarrollo dependiente del capitalismo. Nuevamente se intenta, en las esferas del partido de gobierno, colocar en primer plano el anticomunismo, la segregación política de la izquierda y el bipolarismo excluyente como estabilizador del poder formalmente democrático. La izquierda, sin embargo, orienta sus luchas a la consolidación del juego democrático y la posibilidad de profundizar las conquistas sociales, económicas y políticas del pueblo.

2. *Régimen de producción*

Dentro del marco conceptual que ha sido definido como "estructura heterogénea" [72] el modo capitalista de producción —en su variante específica, históricamente determinada, que se realiza en los países dependientes cuyas economías son intervenidas esencialmente por el capital extranjero en su fase de expansión monopólica— se afirmó considerablemente en este período y su crecimiento se efectuó a ritmo acelerado, profundizándose sus características y extendiéndose a nuevas áreas de la actividad productiva. La explotación de hidrocarburos con destino principal a la exportación continuó siendo la base de sustentación de la economía, bajo el dominio de los consorcios internacionales en forma directa hasta 1975. Sin embargo, el capital extranjero —en su acepción más amplia, que incluye, además de la inversión real o financiera, la que puede calificarse como intangible, consistente en prestaciones tecnológicas y del activo cuasimonopólico bajo la forma de mar-

[72] La "heterogeneidad estructural" es definida por Armando Córdova, en su obra *Inversiones extranjeras y subdesarrollo* (v. bibliografía), como aquella correspondiente a determinado lugar y momento, compuesta por relaciones de producción pertenecientes a distintos sistemas económicos (históricos y menores).

cas, denominaciones comerciales e industriales, patentes publicitarias y similares— se aplicó en magnitudes apreciables a otros sectores económicos en expansión: la industria manufacturera, la construcción, las finanzas, los servicios, en los cuales logró tasas de beneficio bastante altas. Ya he señalado, en el examen del período precedente, que la extracción y exportación de mineral de hierro, iniciada a escala comercial en 1951, significó otro coto de ganancias del capital extranjero, hasta 1974 inclusive (en 1975 esa actividad fue sometida al dominio del estado venezolano). Desde luego, la propiedad de medios de producción constituyó la base de la riqueza privada. Las relaciones capitalistas de trabajo y distribución se extendieron y consolidaron prácticamente en casi todo el ámbito de la economía. Persisten, en la actualidad, formas precapitalistas de trabajo y distribución en el medio agrario, en algunas actividades artesanales y de servicios. El capitalismo de estado —bajo la forma del establecimiento y expansión del sector público de la economía, más allá de la tradicional intervención oficial en la vida de los negocios privados—, que algunas veces se conoce con el nombre poco feliz, a mi juicio, de "economía mixta", adquirió mayor significación, sobre todo en los últimos años del período merced a la multiplicación extraordinaria de los recursos fiscales provenientes del petróleo. La circulación mercantil prevalece en casi todas las actividades económicas, salvo en algunas zonas donde se ha refugiado la economía de subsistencia. Aunque todavía existe, presumiblemente en un 10 o 15% del total, la modalidad de percepciones de ingreso en especie, las formas monetarias características del capitalismo están generalizadas. El trabajo cooperativo constituye la forma de organización de la producción en una parte de la agricultura y de los servicios, pero la proporción que representa con respecto a la economía total es bastante pequeña.[73] La gran propiedad territorial agraria tiene una significación sustancial, principalmente en los llanos; ha ocurrido que muchos latifundios tradicionales se han convertido en grandes explotaciones de índole capitalista y otros han sido incorporados a las zonas urbanas o suburbanas. La concentración de la propiedad agraria continúa siendo característica, no obstante que han trascurrido quince años de la promulgación de la Ley de reforma agraria.

3. *Las fuerzas productivas*

El período que se examina fue uno de crecimiento sin precedentes de las potencialidades productivas del país, no obstante que los impulsos expansivos estuvieron sujetos a fluctuaciones acentuadas, en razón de la incidencia de coyunturas externas e internas. La superficie agrícola cosechada (vegetal) se ensanchó de 1 156 000 hectáreas en 1957 a 1 792 773 hectáreas en 1974. La existencia de ganado bovino aumentó de 6 183 000 cabezas en 1957 a 10 300 000 en 1974. El capital existente se elevó de 47 485 millones de bolívares en 1957 a 105 400 millones en 1974. La población activa creció de 2 407 000 personas en 1961 a 3 340 000

[73] Estimaciones hechas oficiosamente por el Ministerio del Trabajo, del cual depende administrativamente el ramo de cooperativas, permiten apreciar una aportación de 2% al PTB.

en 1974. La proporción de desempleo absoluto se estima en fuentes oficiales[74] entre 7 y 8% en comparación con 14% en 1958; sin embargo, la proporción de subempleo o desempleo encubierto supera el 20%. En 1957 el sector primario de producción contribuyó con el 39% al producto territorial bruto (PTB); en 1974 contribuyó con el 21%; el sector secundario aumentó su contribución al PTB de 19% en 1957 a 24% en 1974; entre los mismos años el sector terciario modificó su aportación de 42% a 55%. Estas variaciones relativas indican una ampliación de las actividades dinámicas de trasformación de bienes —el sector secundario—, por medio de las cuales se agrega mayor valor por unidad de producto que en otros sectores. En el sector primario, la agricultura significó en 1973 un 7% del PTB total, con ligeras modificaciones con respecto a 1957; de la misma manera, la minería representó el 1% y la actividad de extracción de petróleo un 13%. La composición del producto —y, en relación con ella, la asignación de recursos entre las actividades productivas— correspondía todavía al cierre del período a un estado de subdesarrollo de las fuerzas productivas del país; pero es evidente que estas fuerzas han crecido considerablemente en los últimos 18 años y que se ha cumplido una evolución importante a través del tiempo, la cual se aceleró durante el período en observación. Es de notar que ese crecimiento, en el orden cuantitativo, no ha sido convenientemente equilibrado como lo exige la integración interna de la economía ni ha creado bases y condiciones adecuadas para una reducción de la dependencia, por lo que puede y debe señalarse que no ha generado desarrollo en concordancia con las potencialidades del proceso y las necesidades y expectativas de la nación. Por otra parte, existe el problema de la insuficiente utilización de las fuerzas productivas disponibles: ya se ha mencionado una tasa de desempleo objetivamente alta, lo mismo que una inquietante proporción de subempleo; el uso del capital fijo instalado era también incompleto (en encuestas de actividad industrial realizadas por la Oficina de Planificación del gobierno en 1960 y 1965 se registró un índice de utilización del potencial industrial de 60% en el primero de los años citados y de 70% en el último; estimaciones más recientes, sin embargo, permiten señalar que el grado de utilización ha subido sensiblemente, en lo cual ha incidido como factor primordial la expansión de la demanda interna en el lapso posterior a 1970). La aplicación indiscriminada de tecnologías intensivas en capital fijo —importadas enteramente de los países capitalistas más desarrollados—, que por lo general exigen escalas de producción muy amplias, es una de las explicaciones de esa situación. Esas tecnologías obligan a emplear fuerza de trabajo de entrenamiento avanzado en proporción elevada y, por tanto, hacen redundante la fuerza de trabajo no calificada o de bajos niveles de calificación. La subutilización de la tierra en las labores agropecuarias ha sido un hecho que, si bien se ha reducido en los últimos tiempos, todavía incide negativamente en los rendimientos globales. Distinta es la consideración que debe hacerse en cuanto a los índices de extracción de hidrocarburos, ya que por razones imperativas de conservación de ese recurso escaso y cada vez más valioso, el interés nacional requiere la moderación razonable del ritmo de explotación. En este mismo campo

[74] Cf. *Encuesta de hogares por muestreo* (agosto de 1970), Ministerio de Fomento (Dirección Gral. de Estadística y Censos Nacionales), Caracas, 1971, p. 17.

de actividad hay que mencionar el descenso sufrido en las reservas probadas de petróleo durante el lapso 1958-73, por la reducción sustancial de las operaciones exploratorias atribuible a una política antinacional de los consorcios extranjeros, lesiva al patrimonio de la nación venezolana; en 1974 se efectuó una revaluación de las reservas y se elevó su cuantía de 13 812 millones de barriles a 18 567 millones. De la misma manera debe notarse que la acumulación neta de capital en la industria petrolera sufrió una contracción en el lapso 1959-70, y que en el lapso 1970-74 el nivel de esa acumulación se mantuvo prácticamente constante, variando apenas de 7 461 millones de bolívares a 7 425 millones, lo que significa que los consorcios extranjeros apenas reponían los desgastes o deterioros del equipo existente en el país y no realizaron expansiones efectivas en las diferentes fases del complejo productivo petrolero. Por supuesto, esa política de estancamiento de las inversiones de desarrollo obedecía a la perspectiva —no estimulante para los consorcios— relacionada con la caducidad de las concesiones a partir de 1983.

4. *La dinámica de clases*

En el período que se observa el proceso de clasificación de la sociedad venezolana bajo condición de dependencia capitalista y de heterogeneidad estructural —desarrollo desigual y combinado— se aceleró y adquirió características mejor definidas. Al caracterizar el proceso como capitalista, en sentido global y dominante, estoy indicando que las clases más dinámicas e importantes de la sociedad llegaron a ser el proletariado y la burguesía. El fenómeno de proletarización ha sido continuo e intenso en los últimos 30 años de la vida venezolana, polarizado en los núcleos emergentes de la explotación petrolera y minera y la urbanización. Ese fenómeno adquirió mayor dinamismo y caracteres más precisos en los últimos 15 años, en relación con el proceso de industrialización, concentrado en la región nortecentral del país y específicamente en el área metropolitana de Caracas. En verdad, hay que mencionar también la formación de un núcleo industrial en la parte nordeste de la región de Guayana, caracterizado por la concurrencia de la explotación de mineral de hierro, el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos fluviales de la zona y el establecimiento de industrias pesadas metalúrgicas; ese núcleo, en proceso de crecimiento, proporciona ocupación a un numeroso contingente de trabajadores calificados, aunque su nivel de remuneraciones dista considerablemente del correspondiente a la actividad petrolera. Por otra parte, la expansión del capitalismo en el campo —que, como en el caso de la industria, registró un ritmo más acelerado en el período que se analiza— ha determinado la proletarización de considerables sectores del campesinado, así como también la radicación en áreas campesinas de trabajadores antes residenciados en las ciudades. En todo caso, la fuente principal de crecimiento del proletariado —además del propio aumento vegetativo de la población obrera— ha sido el campesinado pobre, que emigra a las zonas urbanas e industriales. Una fuente complementaria ha sido la proletarización de capas muy pobres de la pequeña burguesía. La mayor proporción de trabajadores dependientes se inscribe en el sector terciario de la economía, siguiéndole en orden de magnitud el proletariado industrial. El proletariado petrole-

ro, de modo distinto, ha sufrido una reducción numérica en el trascurso del tiempo, como consecuencia del incremento de productividad y del aumento de la relación entre el capital fijo y el variable en el marco de una tecnología ahorradora de fuerza de trabajo; además, la contracción de las actividades exploratorias, que absorben contingentes numerosos de trabajadores, determinada por la política depresiva de los consorcios extranjéros, hizo redundante alguna cantidad de fuerza de trabajo. Debe señalarse que los desincorporados de la industria petrolera generalmente se retiran del mercado de trabajo o se dedican a otras actividades, por lo que no puede hablarse propiamente de un "ejército industrial de reserva" en este caso.[75] El crecimiento vegetativo de la población y el éxodo campesino —en relación con las oportunidades restringidas de empleo en el sector productivo de la economía— contribuyeron a engrosar las filas del subproletariado, expresión concreta del fenómeno de la marginalidad socioeconómica. La burguesía se consolidó, aumentó su dominio económico y político y evolucionó en cuanto a la división interna (dentro de la clase) de funciones: el estrato industrial, el agrario, el de la construcción, el comercial, el financiero y el de servicios, con predominio de los estratos financiero e industrial, de intereses generalmente combinados. De manera simultánea con el proceso general de concentración de la riqueza y el ingreso[76] ha ocurrido una concentración específica creciente, en el seno de la burguesía, por lo que unos pocos grupos combinados absorben una proporción elevada de los activos reales y financieros de propiedad privada existentes en el país. Correlativamente se ha ampliado la periferia subordinada, dependiente, que, aun incorporada a la clase dominante, permanecía sometida al grupo de poder recibiendo tasas más bajas de beneficio. Hay que distinguir una categoría, la de los ejecutivos y gerentes de altas posiciones, que sin ser propietarios del capital cumplen una función importante en el cuadro de las relaciones del capital y reciben, conjuntamente con elevadas remuneraciones fijas, complementos sustanciales por diversos conceptos y participación en los beneficios; tales funcionarios han estado en el sector privado y en el público, pasando con relativa movilidad de uno a otro; a esta categoría se le ha denominado "clase gerencial", aunque evidentemente no puede ser considerada como clase, sino como una categoría subalterna de la clase dominante, la cual ha evolucionado considerablemente durante el período observado. La clase de los grandes terratenientes rurales persistió durante el período, aun con rasgos precapitalistas, pero su significación sufrió descenso; en algunos casos los terratenientes han facilitado, en asociación con empresarios capitalistas, la trasformación de sus fincas en explotaciones modernas; en otros casos, tales propiedades han sido afectadas por la ejecución de la reforma agraria. La pequeña burguesía se hizo aún más numerosa y su influencia "de masas" en los asuntos públicos aumentó sensiblemente, a través de su peso específico en las organizaciones políticas, profesionales y culturales.

[75] Al respecto debe mencionarse igualmente que uno de los problemas graves que confronta la industria petrolera venezolana en la actualidad es la sustitución de los trabajadores calificados en distintos niveles, que optan a la jubilación o se retiran por cualquier causa, en razón de la escasez de trabajadores en esa actividad.

[76] Cf. Domingo A. Rangel, *La oligarquía del dinero,* Caracas, Ed. Fuentes, 1971, cuadro inserto en la página 127.

No obstante la democratización formal de las instituciones jurídico-políticas y del ejercicio del poder público, la desigualdad socioeconómica que se expresa objetivamente en la apropiación de sustanciales porciones del excedente [77] por las clases dominantes se hizo más acentuada, ampliándose las brechas entre los componentes clasistas de la sociedad. En Venezuela destaca la singularidad de que una proporción elevada del excedente nacional [78] es administrada por el estado mediante la percepción del ingreso público petrolero y el gasto subsecuente, de tal manera que la política económica, financiera y social del gobierno orienta el proceso central de la distribución y redistribución del ingreso. Al efecto se ha observado que esa política, tanto en el régimen de la dictadura como en el de la democracia representativa, ha tendido a favorecer, en esencia, a la burguesía, fortaleciéndola como clase dominante y ensanchando los cauces de su enriquecimiento, mientras que han crecido los índices de proletarización y de marginalidad, conjuntamente interpretados como mediciones de la pobreza relativa. Bien es cierto que los niveles nominales de remuneraciones de la fuerza de trabajo han aumentado, pero también lo es que ese aumento se ha rezagado con respecto al de la productividad. La política social ha subrayado la suavización "concertada" de las contradicciones y los antagonismos de clase (e intraclases), bajo la advocación de la "paz social" y la estabilidad democrática, en cuyo empeño —que oculta una estrategia de poder— han sido implicados dirigentes sindicales, que han atendido más los intereses coyunturales de sus partidos políticos que los estructurales de la clase obrera. Así, los conflictos han sido minimizados, las treguas en el enfrentamiento capital-trabajo han sido generalizadas y prolongadas, y las contrataciones colectivas que regulan los grupos más calificados de fuerza de trabajo en sus relaciones con las empresas, han consistido, por lo general, en operativos transaccionales entre las burocracias sindicales y patronales. En estas condiciones, el período que se examina ha sido propicio en alto grado para la acumulación de capital privado y para la contención de las reivindicaciones obreras y de empleados.

5. *El movimiento demográfico*

Dos fenómenos notables deben señalarse en la dinámica poblacional durante el período en estudio: i] la elevada tasa de crecimiento de la población, cifrada en 3.4% interanual; ii] la concentración acelerada de la población en las áreas urbanas, de tal manera que para 1975 se estima como urbana alrededor de un 75%. El censo de 1961 registró 7 523 999 habitantes, el de 1971 permitió apreciar un aumento sustancial ya que presentó un registro de 10 721 522 habitantes. La tasa de aumento de la población urbana en el lapso intercensal fue de 5.3%, en comparación con 6.8% en el lapso 1950-61. La población rural, por su parte, creció a razón de 0.8% interanual durante el lapso 1950-71. El índice de urbanización correspondiente al año 1971 era de 58%.[79] El cambio de gobierno —de dic-

[77] El excedente, en mi concepto, es la diferencia cuantitativa entre el valor del producto creado y el costo real de la fuerza de trabajo empleada en su creación, en sentido lato.

[78] El excedente nacional es la diferencia entre el valor del producto *nacional* y el costo real de la fuerza de trabajo.

[79] Cf. "Migración interna en Venezuela, factores determinantes y características", por la

tadura a democracia— en cuanto significó una modificación progresiva de la política económica y social, contribuyó al proceso de urbanización, imprimiéndole mayor velocidad. La atención médico-sanitaria —y en general el mejoramiento de las condiciones de vida y salud— determinó un descenso de la tasa de mortalidad, mientras que la de natalidad se mantuvo relativamente alta.[80] La esperanza de vida al nacer subió de 66 años en 1961 a 70 años en 1971. Aproximadamente un 50% de la población era mayor de 15 años en 1971, lo que indica la extrema juventud de la misma. La población activa— poco más de un tercio del total— se distribuía en 1970 de la forma siguiente: agricultura, 26%; petróleo y minería, 2%; industria y construcción, 16%; servicios y gobierno, 56%. Estas cifras revelan, con respecto a 1961, un descenso de la participación agrícola en la ocupación total, un moderado incremento de la participación del sector secundario y un aumento considerable de la participación del sector terciario. La baja productividad del empleo en la agricultura se aprecia al comparar la contribución de esta actividad al PTB (un 7%) con la proporción de fuerza de trabajo que absorbe (un 26%).

6. *El poder político*

La acción más sostenida para derrocar la dictadura fue la de los partidos AD y Comunista. La tesis de la unidad de acción logró convertirse en práctica durante los años 1956 y 1957 —tesis justamente planteada por el PCV— y contribuyó notablemente a la caída del aquel régimen. Sin embargo, la participación de los factores de poder en la combinación política fue decisiva para alcanzar el objetivo. Los mismos factores de poder que habían respaldado a la dictadura facilitaron su derrocamiento y/o colaboraron para este fin. Probablemente la única excepción fue el capital petrolero. Debe recordarse que durante el régimen dictatorial los beneficios de ese capital alcanzaron índices máximos; también hay que mencionar la ampliación de su dominio sobre los recursos naturales de petróleo, mediante el otorgamiento de nuevas concesiones en 1956 y 1957. No tenía razones, por tanto, dicho capital internacional para procurar la caída del régimen ni para dar su anuencia a ese empeño. Tampoco hay evidencias, sin embargo, de que intentara oponerse —si tuvo la oportunidad— al movimiento que condujo al remplazo de aquel gobierno. Es lógico suponer que si cayó en cuenta de que los factores internos de poder —la burguesía, el ejército, las fuerzas políticas, la Iglesia católica— le habían retirado su respaldo al régimen en los últimos meses de 1957 y vanguardias de esos factores o fuerzas actuaban para precipitar el cambio, la experiencia del capital internacional en estas coyunturas le aconsejaría, por lo menos, la neutralidad y la expectativa bajo la aparente rutina de sus relaciones con el gobierno

socióloga Zulay Alvares de Girón, en *Estadística Venezolana*, revista del Ministerio de Fomento (Dirección Gral. de Estadística y Censos Nacionales), núm. 4, Caracas, julio de 1975, p. 42.

[80] En 1972 la tasa de natalidad era de 42 por mil y la de mortalidad de 7 por mil. Cf. *Boletín Trimestral de Estadísticas Demográficas y Sociales*, núm. 48, Ministerio de Fomento (DGE y CN).

y el poder. De modo distinto, fue ostensible la víspera de la caída de la dictadura la beligerancia de la burguesía en la oposición al régimen y su entendimiento con las fuerzas políticas, elementos de las fuerzas armadas y personeros de la Iglesia para la acción de desplazamiento. El llamado Pacto de Nueva York —en diciembre de 1957— entre Rómulo Betancourt (AD), Rafael Caldera (COPEI) y Jóvito Villalba (URD) fue respaldado virtualmente por Eugenio Mendoza, el más caracterizado representante de la burguesía venezolana. Presumiblemente ese pacto —orientado concretamente al derrocamiento del dictador— gozó del visto bueno del Departamento de Estado de Estados Unidos, para el cual Pérez Jiménez no ofrecía en ese momento seguridades óptimas de estabilidad para los intereses estratégicos de la potencia norteamericana en Venezuela.[81] Por razones similares a las que posiblemente se formularon los monopolistas del petróleo, el Departamento de Estado preveía el curso de los acontecimientos y quiso garantizarse, en lo posible, un encauzamiento controlable de lo que iba a suceder, ya que debió pasearse por la eventualidad de un desbordamiento popular de curso aleatorio, una vez ocurrido el desenlace de la acción derrocadora. Así, pues, el gobierno dictatorial estaba destinado a desaparecer en virtud de esa confabulación del poder. Las fuerzas económicas —la burguesía en concreto—, que se beneficiaron durante el prolongado período dictatorial, encontraron en 1957 entrabados los mecanismos de la expansión por la deteriorada situación fiscal, específicamente manifestada en la existencia de una cuantiosa deuda irregular que afectaba considerablemente las facilidades financieras de las empresas, por la insolvencia de las entidades oficiales y la necesidad de descontar a tasas muy elevadas los documentos probatorios de las acreencias; por otra parte, la voracidad de enriquecimiento ilícito de los personeros del gobierno y los favoritos del dictador restaba posibilidades a la apropiación de excedente por los receptáculos del capital privado; por último, estaba ya en vías de hecho una contracción de los negocios, vinculada a la coyuntura capitalista internacional, con incidencia en el auge petrolero que culminó en la crisis del canal de Suez. Es indispensable, además, anotar que el proceso industrialista del país requería entonces una política de mayor decisión y amplitud por parte del gobierno y la burguesía industrial no se sentía asistida con suficiente empeño en sus afanes expansivos. El malestar de la pequeña burguesía y de las clases trabajadoras era bastante acentuado, y ello afectaba también a determinada oficialidad de las fuerzas armadas que no disfrutaban de las jugosas prebendas del poder dictatorial. La Iglesia, sensible en las instancias críticas, auscultó con claridad la emergencia y puso de su parte en la transición. Nada podía, pues, detener el curso de la historia que tuvo su momento álgido el 23 de enero de 1958 con la caída del gobierno y la fuga del dictador.

La junta de gobierno que ejerció el poder político en 1958 hasta la normalización constitucional del régimen democrático representativo combinó la representación de las fuerzas armadas y de la burguesía, pero tuvo que sustentarse en la

[81] Pérez Jiménez había propuesto, en una conferencia de jefes de estado en Panamá, la creación de un Fondo de Desarrollo Latinoamericano, sin la participación de Estados Unidos. En 1957, ante las restricciones petroleras que comenzaban a implantarse en Estados Unidos, Pérez Jiménez amenazó con fijar restricciones a la exportación del mineral de hierro venezolano.

masa popular para lograr una precaria estabilidad. La burguesía obtuvo posiciones claves en el gobierno y la administración y se benefició realmente de la transición: fue la clase que actuó con mayor consistencia y claridad estratégica y táctica en ese proceso de transición de la dictadura a la democracia formal, demostración fehaciente de su evolución como fuerza dominante interna. Las jornadas populares, paradójicamente, facilitaron esa consolidación del poder, y lo que eventualmente pudo trasformarse en una verdadera reorganización del poder político y una reforma profunda de la base económica de la sociedad venezolana, se limitó a facilitar una liberalización de las formas de gobierno, bajo el apremio de impedir un regreso a la dictadura represiva y antipopular. Hay quienes sustentan la opinión de que en 1958 —sobre todo en los primeros meses después del 23 de enero— existieron condiciones y circunstancias propicias a una insurgencia revolucionaria, y que la falta de una conducción política con perspectiva histórica contribuyó a la frustración de esa posibilidad. Sin dejar de anotar que existió la posibilidad de lograr —mediante la lucha popular— progresos considerables en lo político, económico y social, dentro de un proceso democrático burgués con participación efectiva de las clases trabajadoras en el ejercicio del poder político, debe señalarse que objetivamente no existían condiciones necesarias y suficientes para una revolución. El poder económico estaba alerta y activo en la preservación y fortalecimiento de su dominio; las fuerzas armadas, lejos de comprometerse en un movimiento revolucionario, estaban decididas a moderar excesos en uno u otro sentido; los partidos políticos con influencia de masas, incluido el PCV, tenían por meta inmediata una normalización institucional a partir de la realización de elecciones generales. Intentos de modificar el curso de los acontecimientos —no precisamente en el sentido de una profundización revolucionaria— tuvieron lugar en dos oportunidades en 1958: una en julio y otra en septiembre, con participación de grupos importantes de militares. Por otra parte, el Pacto de Nueva York, que se convirtió en Pacto de Punto Fijo en víspera de las elecciones de diciembre de 1958, estaba vigente. Las concesiones a la masa popular consistieron en subsidios al desempleo —bajo la forma de un plan de emergencia supuestamente implementado con la ejecución de obras y servicios públicos—, aumentos de salarios y sueldos, reparto de algunas tierras a campesinos y cierta amplitud del juego sindical. Como contrapartida, la burguesía se hizo pagar las acreencias adquiridas durante la dictadura cuyos importes —considerables en su totalidad— fueron convertidos en buena parte en divisas extranjeras, merced a una sorprendente pasividad del gobierno en todo lo relacionado con el régimen monetario y cambiario.

En 1959 se inició la etapa de los gobiernos democráticos representativos y formalmente alternativos, con la toma de posesión de la presidencia de la República por Rómulo Betancourt, jefe del partido Acción Democrática. El objetivo prioritario de Betancourt fue sostenerse en el gobierno durante el período constitucional respectivo (1959-64) y trasmitirle el mando al sucesor elegido en su oportunidad. El objetivo fue alcanzado. Para lograrlo, Betancourt se empeñó sistemáticamente en obtener el respaldo, o en todo caso la neutralidad, de los factores e instrumentos de poder. El Pacto de Punto Fijo —entre AD, COPEI y URD— le ayudó en los primeros tiempos de su mandato; URD se separó en 1960 y más tarde COPEI adoptó una política dual, de autonomía de acción estando en el gobierno como

partícipe, con críticas a determinados aspectos de la gestión gubernamental bajo la directa responsabilidad de AD. La gestión de Betancourt se caracterizó por su servicio a los intereses dominantes, el freno a las necesidades y aspiraciones de los sectores populares, una campaña persistente contra los partidos de la izquierda —el Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que tuvo su origen en una disidencia de un considerable y valioso sector de AD y se orientó al marxismo, y más tarde URD, ya separada de la coalición gubernamental—, contra la Revolución cubana dirigida por Fidel Castro y el Movimiento Comunista Mundial. Betancourt —y el ala derechista de su partido AD— se propuso a todo evento conquistar la confianza del poder económico (interno e internacional), ejercitando una política de centro (más bien inclinada a la derecha), permitiendo y estimulando el mayor enriquecimiento de la burguesía, rearfirmando las garantías efectivas al capital extranjero, propiciando la conciliación entre los organismos empresariales y sindicales, procurando aislar y segregar toda orientación radicalizante en su partido y exaltando los valores normativos y operativos de la democracia convencional burguesa. Esta política clara y definida de Betancourt, perfilada desde el primer momento de su gobierno, suscitó la oposición activa de la izquierda. La primera división de AD, que dio origen al MIR, cuyo movimiento adoptó al comienzo el nombre de Acción Democrática de Izquierda (ADI), fortaleció considerablemente la lucha popular contra la política de Betancourt. Los éxitos de los partidos de izquierda en la opinión pública, en el frente sindical y campesino, en la masa estudiantil y sectores amplios de la pequeña burguesía, indujeron una reacción violenta por parte de AD y el gobierno, hasta el punto de que manifestaciones populares fueron disueltas policialmente, locales sindicales de organizaciones donde triunfaba la oposición fueron atacados por militantes oficialistas y en ocasiones hubo choques personales con saldo de heridos y muertos. Las posibilidades de lucha democrática se fueron restringiendo para el movimiento revolucionario. La victoria del Movimiento Cubano de Liberación, en enero de 1959, precisamente cuando Betancourt se disponía a iniciar su mandato, influyó profundamente en la dinámica política venezolana: por una parte, en la medida que el proceso cubano se radicalizaba, la campaña de Betancourt y la "vieja guardia" de AD contra ese proceso se hacía más dura; de otra parte, la acción opositora de la izquierda se tornó más radical, tomando auge la idea de la posibilidad de acelerar y precipitar el advenimiento de una situación revolucionaria a través de diversas formas de lucha. Sobrevinieron alzamientos militares (uno en Carúpano y otro en Puerto Cabello) de inspiración izquierdista, que fueron dominados rápidamente. De cierto modo, puede asumirse que la actividad de la izquierda después de 1958 —ya en el gobierno Betancourt— fue en buena parte como una réplica diferida al acontecer político de 1958; durante la transición, como se dijo, el Partido Comunista, específicamente, estuvo empeñado en sostener la unidad que tan exitosa había sido en el derrocamiento de Pérez Jiménez, y subordinó a esta política toda meta de profundización del proceso democrático; más aún, ya en el gobierno Betancourt y no obstante su proclamada y practicada política de aislamiento y restricción de la izquierda y del auge de masas, el PCV intentó proseguir una política de convivencia y de oposición "civilizada"; sin embargo, la creciente represión oficial, los reiterados golpes a las aspiraciones populares de

mejoramiento socioeconómico y democracia efectiva, la cerrada campaña anticomunista de RB, su abierta entrega a los intereses dominantes, cancelaron toda oportunidad de alcanzar durante el mandato de aquél los supuestos ideales del 23 de enero de 1958. La lucha de masas ofrecía, sin embargo, ingentes posibilidades, aun enfrentando la represión gubernamental. La combatividad de 1958 no se había apagado en el pueblo. El ejemplo de la Revolución cubana actuaba como un gran catalizador de energías y voluntades en la contienda política. El desprendimiento de un sector de AD —que luego tomó el nombre de MIR— con fuerza de masas y factor de expectativas de renovación para densos grupos progresistas del país, había debilitado y puesto en situación difícil al partido de gobierno y al propio gobierno. En el mundo se desenvolvía un proceso ascendente de lucha por la liberación, contra el colonialismo y el imperialismo. Los partidos populares venezolanos entonces —en el lapso 1959-61— hasta cierto punto fueron víctimas de la táctica de Betancourt de hacerlos caer en provocaciones y celadas para marginarlos paulatina, pero seguramente, de la legalidad formalmente democrática. El recurso del alzamiento militar, de inspiración marxista, permitió al gobierno liquidar prácticamente una vigorosa penetración ideológica avanzada en las fuerzas armadas, sin ningún beneficio para el movimiento popular, sino todo lo contrario. La llamada "amplia base" —AD y COPEI— garantizaba el soporte político del sistema, mientras que la política económica y social del gobierno servía para obtener y conservar el apoyo de las clases dominantes. La burocracia sindical, campesina, magisterial y gremial de los partidos del "establecimiento" —utilizando todos los recursos, incluidos los de la violencia física— cumplía su tarea de frenar la lucha popular en sus manifestaciones críticas. La acción combinada —en los hechos, por supuesto— de la represión oficialista, en su más amplio sentido, y de la impaciencia revolucionaria por "quemar etapas" para alcanzar una trasformación de la sociedad venezolana —visto el fenómeno cubano y no tan reciente, pero vivo aún, el triunfo de la lucha china—, condujo, desde 1962, a la guerra de guerrillas, en los campos y ciudades, convencidas las fuerzas combatientes de la eficacia de las tácticas del "foquismo" entonces en boga. La lucha armada cobró impulso en ese tiempo comprendido entre 1962 y 1967, vigorosa en los primeros años, golpeada por los reveses múltiples y la ausencia de perspectiva clara en los últimos, combatida sin descanso por el ejército cuyos recursos antiguerrilleros se hicieron cada vez más eficaces, y carcomida después internamente por las divergencias y discrepancias que surgieron dentro de las fuerzas políticas coordinadoras de la lucha armada. No existió nunca una base campesina de sustentación de los frentes guerrilleros. Venezuela se convirtió durante la década de los 60 en un país eminentemente "no rural" y, por tanto, la lucha de masas debía desarrollarse principalmente en las zonas urbanas. Ya para 1969, cuando tomó la presidencia de la República Rafael Caldera, dirigente de COPEI (socialcristiano) la llamada pacificación —en el sentido de reducción al mínimo inoperante de la lucha armada— era un hecho y los partidos de izquierda estaban ya convencidos de la necesidad de orientar sus actividades en la vía de la legalidad democrática condicionada por el sistema.

En las elecciones generales de fines de 1963 —ante cuyo proceso fracasó enteramente el propósito de frustrarlas violentamente, previo un llamado a la absten-

ción, por parte de los grupos revolucionarios en armas— resultó victorioso una vez más el partido AD, con su candidato presidencial Raúl Leoni, no obstante que poco antes había sufrido una segunda división, de la cual surgió el partido AD-Oposición, que luego sería denominado Partido Revolucionario Nacionalista (PRN), dirigido por Raúl Ramos Giménez, cuya orientación ideológica no era marxista y estaba encuadrada en la doctrina primigenia de AD. Esta división fue causada por el descontento de un calificado y numeroso grupo de dirigentes, con influencia relativa en la militancia, frente a la gestión político-administrativa del gobierno de Betancourt, por considerarla derechizante y subordinada a la oligarquía. El PRN se unió posteriormente a otro grupo político progresista —de orientación marxista— desprendido a su vez del partido URD, para formar lo que se denominó el Partido Revolucionario de Integración Nacionalista (PRIN), de vida breve, por las discrepancias internas, de tal modo que el grupo más radical se separó y el grupo restante reconstituyó el PRN, disuelto más tarde por propia decisión.

El gobierno de Leoni (1964-69) intentó distinguirse del anterior por una gestión más popular, menos subordinada a las clases dominantes y al capital extranjero, más flexible y hasta estimulante ante las reivindicaciones obreras y campesinas, pero sin dejar de ser una gestión inscrita en el sistema, obediente en lo esencial a los intereses del poder económico. La confrontación más notable, hasta cierto punto indicativa de un esfuerzo de independencia política ante el poder, tuvo lugar en 1966, cuando el gobierno presentó a la consideración del Congreso nacional un proyecto de reforma tributaria progresiva, tendiente a gravar más fuertemente al beneficio petrolero y minero y a los sectores de altos y medianos ingresos. Ese proyecto fracasó en su forma original ante un ataque a fondo de los factores y medios de poder, principalmente las compañías petroleras a través de interpuestas personas sumisas a sus intereses, con el pretexto hábilmente aprovechado de que la reforma incidiría negativamente en la situación de la "clase media". El gobierno cedió y la reforma finalmente aprobada fue de índole conciliatoria. Por otra parte, el gobierno de Leoni asestó los últimos golpes a la lucha armada y puso en práctica la política llamada de pacificación para brindar una especie de amnistía a quienes decidiesen acogerse a la legalidad. También empleó la represión a fondo contra el movimiento revolucionario, fue allanada la Universidad de Caracas, por fuerzas militares y detenidos numerosos estudiantes y activistas políticos. La policía secreta cometió numerosos asesinatos, entre los cuales el del dirigente comunista Alberto Lovera estremeció al país por la forma despiadada como fue cometido. Se puso entonces en vigencia la figura de la "desaparición" de los detenidos políticos, que consistió en la negativa por parte de los diversos cuerpos policiales de admitir la detención practicada en un ciudadano, cuando se tenía la convicción, y hasta la prueba, de que la detención había sido hecha; el detenido "desaparecía", de tal modo que el calificativo de "muerte civil" era más apropiado, y algunas veces la desaparición culminaba en el hallazgo del cadáver terriblemente maltratado. No fue, por tanto, un lapso de gobierno en que los derechos humanos se respetasen. En verdad, después de 1958 el respeto a los derechos humanos, consagrados expresamente en la Constitución nacional, ha sido quebrantado con dolorosa frecuencia.

En las elecciones generales de 1968 triunfó por muy estrecho margen el can-

didato presidencial socialcristiano (COPEI) Rafael Caldera, quien en tres oportunidades anteriores había sido derrotado. COPEI representaba una alternativa de gobierno dentro del sistema de poder, confiable para los intereses dominantes, dada la índole conservadora del partido, su proclamada diferenciación del marxismo y su calificación como expresión político-ideológica de la doctrina social de la Iglesia católica. Sin embargo, la derrota de AD se debió circunstancialmente a su tercera división, ocurrida en 1967, bajo la dirección de Luis Beltrán Prieto, uno de los más eminentes fundadores de AD, con gran prestigio como educador y considerable influencia en la militancia adeísta. Esta división dio origen al partido denominado Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) que participó en las elecciones con candidato propio, Luis Beltrán Prieto. Al respecto debe señalarse que la división —producida por divergencias con respecto a la orientación del gobierno y la democratización de la vida pública y la economía— partió del hecho específico de que a Prieto —precandidato presidencial de AD con fuerza mayoritaria en el seno del partido— se le urdió una maniobra —atribuida a Rómulo Betancourt— para desplazarlo como candidato presidencial, en beneficio de Gonzalo Barrios. Prieto, como candidato del MEP, obtuvo una voluminosa votación, la que sumada a la de AD habría sido suficiente para el triunfo de ese partido por amplio margen. El gobierno de Caldera —con minoría en el Congreso en relación con otras fuerzas políticas— se autoproclamó como "nacionalista democrático", con mayor apertura al diálogo político, con menor actividad represiva —la lucha armada estaba reducida al mínimo, con muy escasa y esporádica acción— y mayor auge de masas que en el lapso anterior. Caldera intentó mostrar cierta independencia ante el poder económico, y en los últimos tiempos de su mandato tuvo enfrentamientos formales con los organismos representativos de ese poder; pero en realidad, la gestión no difirió de la precedente en lo económico y social, deben mencionarse, sin embargo, dos aspectos importantes de esa gestión: el aumento considerable de la participación fiscal nacional en el ingreso petrolero, sobre todo a partir de 1972, así como la adopción de medidas de rescate progresivo de fases del negocio petrolero para el estado,[82] y el freno a las presiones inflacionarias, que entonces comenzaban a emerger a la superficie del mercado, utilizando para ello la regulación de los precios de bienes esenciales y los subsidios. No obstante, el alza del costo de vida —y la escasez de algunos productos alimenticios— fue el centro de la campaña electoral del candidato de AD —Carlos Andrés Pérez— en 1973.

El gobierno socialcristiano fue sustituido por uno de AD —por tercera vez después de 1958— en virtud de las elecciones de 1973. El candidato victorioso —Carlos Andrés Pérez— obtuvo una inmensa mayoría de votos sobre su principal opositor Lorenzo Fernández, de COPEI. En esas elecciones participó por primera vez el partido Movimiento al Socialismo (MAS), originado en una división del Partido Comunista, por razones ideológicas, estratégicas y tácticas. El MAS, con su candidato José Vicente Rangel, también apoyado por el MIR que retornó a la legalidad después de un largo tiempo de lucha clandestina incluso armada, obtuvo una votación considerable, a pesar de la feroz compaña que le hicieron los factores de poder que apreciaban en ese movimiento un riesgo para la estabilidad del

[82] En el lapso 1970-73 fueron promulgadas las leyes siguientes: Ley de Reserva al Estado del Gas Natural y Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones Petroleras.

sistema, y a pesar también de la incidencia negativa de la caída de Allende (septiembre de 1973, víspera de las elecciones) muy aprovechada por los medios de poder. Carlos Andrés Pérez fue beneficiado con una imagen publicitaria electoral de dirigente enérgico, pero demócrata, con gran capacidad de trabajo y vigor físico y mental para un gobierno muy dinámico, en lucha contra la inflación, la escasez de alimentos, el desempleo, la mala distribución del ingreso, el subdesarrollo y la pobreza. Su toma de posesión de la presidencia de la República en marzo de 1974 estuvo asistida de una gran expectativa de todos los sectores. Tuvo la fortuna de que su gobierno se inició con un auge fiscal sin precedentes en la historia del país, gracias al aumento sustancial de los valores del petróleo, de modo que ha gozado de dos grandes apoyos para una gestión exitosa: mayoría decisiva en el Congreso y bonanza fiscal extraordinaria. Desde luego, este gobierno, como los anteriores, está subordinado a la realidad del poder económico y en buena medida su gestión ha favorecido al desarrollo capitalista dependiente, con un ritmo más elevado de acumulación privada. Sin embargo, en 1975 fue decidida la nacionalización de la industria de hidrocarburos, fundamental para el país.

7. *Las coyunturas notables*

En diciembre de 1958 fue decretada una reforma importante de la ley de impuesto sobre la renta, por la cual las empresas petroleras debían pagar, con efecto el mismo año 1958, una tasa de 45% sobre sus beneficios netos, en lugar de 26% que era hasta ese momento. Esta medida ocasionó una fuerte reacción negativa en los consorcios petroleros, habituados a negociar previamente con el gobierno cualquier modificación del régimen impositivo que les afectara. En esa oportunidad el gobierno tomó la decisión sin consulta a las petroleras, en goce pleno de soberanía política. Las represalias de los consorcios no se dejó esperar, ya que a partir de 1959 se desenvolvió una coyuntura de baja persistente de precios del petróleo, de desinversión y deterioro de la posición fiscal del estado venezolano, en gran parte inducida por las manipulaciones arteras de las propias compañías, que se extendió hasta 1970. Este proceso, aunado a la evasión de capital que comenzó en 1958 y se prolongó en los dos años siguientes, al descenso sustancial de la industria de construcción y otros aspectos de malestar económico, condujo a una recesión severa, particularmente sentida en 1961 cuando el gobierno decretó un conjunto de medidas económicas de emergencia, entre las cuales destacó una rebaja de 10% en las remuneraciones del personal del sector público (lo que se llamó popularmente la "ley del hambre"). En 1964 fue devaluado el bolívar en una proporción de 36% con respecto a la paridad sostenida invariable durante más de 20 años. Esa devaluación favoreció a las compañías petroleras al revalorizar virtualmente sus activos reales en el país. En 1970 el Congreso dictó una reforma de la ley de impuesto sobre la renta por la cual el ejecutivo adquirió la facultad de fijar por propia decisión —según indicadores de la situación petrolera— los valores mínimos de exportación de los hidrocarburos a efectos de liquidación de dicho impuesto. Ése fue un importante punto de partida para el rescate

progresivo de la industria petrolera pôr el estado, que culminó con la nacionalización en 1975, efectiva a partir de 1976.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Acosta Hermoso, Eduardo, *Análisis histórico de la OPEP*, Universidad de los Andes, Mérida (Venezuela), 1969.

Álvarez Chacin, Francisco, *Secretos petroleros contra Venezuela*, Caracas, 1970.

Araujo, Orlando, *Situación industrial de Venezuela*, UCV, Caracas, 1969

Araujo, Orlando, *Venezuela violenta*, Ediciones Espéridas, Caracas, 1968.

Arellano Moreno, Antonio, *Mirador de historia política de Venezuela*, Ediciones Edime, Caracas-Madrid, 1968.

Asociación Pro-Venezuela, *Un programa para Venezuela*, Caracas, 1971.

Banco Central de Venezuela, *Memoria e Informe económico*, varios años, Caracas.

Banco Central de Venezuela, *La economía venezolana en los últimos veinticinco años*, Caracas, 1966.

Betancourt, Rómulo, *Venezuela, política y petróleo*, FCE, México.

Betancourt, Rómulo, *Tres años de gobierno democrático 1959-62*, Caracas, 1962.

Brito Figueroa, Federico, *Historia económica y social de Venezuela*, 2 ts., UCV, Caracas, 1966.

Carrera Damas, Germán, *Crítica histórica*, Caracas, 1960.

Carrillo Batalla, Tomás E. y otros, *Evaluación de la inversión del ingreso petrolero en Venezuela*, UCV, Caracas, 1968.

Comisión de Reforma Agraria, *La reforma agraria en Venezuela*, Edición MAC, Caracas, 1959.

Córdova, Armando, *Inversiones extranjeras y subdesarrollo*, UCV, Caracas, 1973.

Croes, Henmy, *El movimiento obrero venezolano (Elementos para su historia)*, Ediciones Movimiento Obrero, Caracas, 1973.

De la Plaza, Salvador, *El problema de la tierra*, Ed. Fondo Cultural, México, 1947.

De la Plaza, Salvador, *El petróleo en la vida venezolana*, UCV, Caracas 1974.

De la Plaza, Salvador, *La formación de las clases sociales en Venezuela*, Ediciones Rocinante, s/f, Caracas.

Díaz Rangel, Eleazar, *Cómo se dividió el PCV*, Ed. Domingo Fuentes, Caracas, 1971.

Díaz Sánchez, Ramón, *Guzmán (Elipse de una ambición de poder)*, Edime, Madrid-Caracas, 1952, (2a. ed.).

Escovar Salom, Ramón, *Evolución política de Venezuela*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1972.

FALN, *Por qué luchamos*, Caracas, 1963.

Fernández y Fernández, Ramón, *Reforma agraria en Venezuela*, Caracas, 1948.

Fuenmayor, Juan Bautista, 1928-1948, *Veinte años de política*, Caracas s/f.

Fuenmayor, Juan Bautista, *Historia de la Venezuela política contemporánea*, 1899-1969, 2 ts., Caracas, 1975.

Gil Fortoul, José, *Historia Constitucional de Venezuela*, 3 vols., Caracas, 1954.

Irazábal, Carlos, *Hacia la democracia*, Ed. Pensamiento Vivo, Caracas, 1961.

Irazábal, Carlos, *Venezuela esclava y feudal*, Ed. Pensamiento Vivo, Caracas, 1964.

Machado, Gustavo, *En el camino del honor*, Caracas, 1966.

Malavé Mata, Héctor, *Petróleo y desarrollo económico de Venezuela*, UCV, Caracas, 1962.

Malavé Mata, Héctor, *Formación histórica del antidesarrollo en Venezuela,* Fondo Editorial Salvador de la Plaza, Caracas, 1974.
Márquez, Pompeyo, *Imperialismo, dependencia, latifundismo,* Ed. La Muralla, Caracas, 1968.
Maza Zavala, D. F., *El tratado de reciprocidad comercial entre Venezuela y los Estados Unidos,* Ed. Venezuela Económica, Caracas, 1952.
———, *Paradojas venezolanas (Crónicas de economía y angustia social),* Caracas, 1959.
Mejía Alarcón, Pedro, *La industria del petróleo en Venezuela,* UCV, Caracas 1971.
Mijares, Augusto, *Interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana,* Madrid, 1952.
Misión Fox, *Venezuela vista por ojos extranjeros* (Informe al gobierno de Venezuela), Caracas, 1942.
Mieres, Francisco, *El petróleo y la problemática estructural venezolana,* UCV, Caracas, 1969.
Morón, Guillermo, *Historia de Venezuela,* 2 ts., Caracas, 1958
Parra León, Miguel, *El problema agrario en Venezuela,* Editorial Suma, Caracas, 1959.
Partido Comunista de Venezuela, *Los comunistas y la situación política actual,* Caracas, 1973.
Pocaterra, José Rafael, *Memorias de un venezolano de la decadencia,* Editorial Élite, Caracas, 1936.
Polanco Martínez, Tomás, *Historia económica de Venezuela,* 2 vols., Madrid, 1960.
Quintero, Rodolfo, *El petróleo en nuestra sociedad,* UCV, Caracas, 1970.
Rangel, Domingo Alberto, *Los andinos en el poder,* Caracas, 1964.
Rangel, Domingo Alberto, *La oligarquía del dinero,* Editorial Fuentes, Caracas, 1971.
Rangel, José Vicente, *Expediente negro (El caso Lovera),* La Muralla, Caracas, 1969.
Rivas Rivas, José, *Historia gráfica de Venezuela* (varios volúmenes), Caracas.
Partido AD, *Venezuela bajo el signo del terror 1948-1952 (Libro negro de una dictadura),* Editorial Centauro, México. (Facsimilar, 1974, José Agustín Catalá, editor).
Rondón Márquez, R. A., *El autócrata civilizador,* Madrid, 1952.
Sáder Pérez, Rubén, *Cartas petroleras,* Ed. Arte, Caracas, 1969.
Salcedo Bastardo, J. L., *Historia fundamental de Venezuela,* Caracas, 1975.
Siso, Carlos, *Formación del pueblo venezolano,* Madrid, 1953
Siso Martínez, J. M., *Historia de Venezuela,* Ed. Yocoima, México, 1956.
Universidad Central de Venezuela, *Estudio de Caracas,* vol. IV, Caracas, 1970.
Vallenilla Lanz, Laureano, *Cesarismo democrático,* Ed. Garrido, Caracas, 1952.
Vallenilla Lanz (h), Laureano, *Escrito de memoria,* Versalles, 1961.
Varios, *Nacionalización petrolera en Venezuela,* Monte Ávila Editores, Caracas, 1971.
Velásquez, Ramón J., *La caída del liberalismo amarillo,* Ed. Contraloría de la República, Caracas, 1972.
Venezuela (Estados Unidos de), Servicio Secreto de Investigaciones, *La verdad de las actividades comunistas en Venezuela,* Caracas, 1936.
Veloz, Ramón, *Economía y finanzas de Venezuela,* Caracas, 1945.

ÍNDICE DE NOMBRES



impreso en offset marvi, s. a.
calle leiria 72 - méxico 13, d. f.
seis mil ejemplares y sobrantes para reposición
30 de enero de 1979

Aunque América Latina tenga un pasado parecido y muchos rasgos comunes de lengua, religión, sistemas de dominación social y nacional, aunque todos los países que la integran hayan luchado contra enemigos comunes desde el colonialismo ibérico hasta el imperialismo norteamericano, la estructura de la sociedad y el estado en cada país presenta características y especificidades que justifican plenamente el análisis histórico de cada uno de ellos. Incluso en regiones relativamente más homogéneas, como el "cono sur" o el "Caribe" se advierten, de un país a otro, diferencias significativas en la configuración del estado y la sociedad. Estas diferencias son las que precisamente dificultan la realización de un proyecto latinoamericano conjunto en la lucha por la liberación.

En todo caso, afinidades y diferencias exigen un estudio a la vez general y específico de las características de cada estado. Las variedades de América Latina no sólo cuentan para comprender y actuar en la escena política de cada país. Constituyen la base de una historia que siendo nacional, conforme se desarrolle será, cada vez más, latinoamericana e internacional.

La obra que hoy publicamos parte de la necesidad de conocer la historia de cada país para actuar en cada país. Y une a todos los países en un esfuerzo conjunto con la certeza de que en medio de sus diferencias más significativas nuestros pueblos encontrarán los rasgos comunes que les permitan actuar en forma cada vez más unitaria.

COORDINADOR: PABLO GONZALEZ CASANOVA

COLABORADORES:

VOLUMEN 1
ARGENTINA: MARCOS KAPLAN
BOLIVIA: RENÉ ZAVALETA MERCADO
BRASIL: VANIA BAMBIRRA Y THEOTONIO DOS SANTOS
COLOMBIA: ANTONIO GARCÍA
CHILE: BELARMINO ELGUETA B. Y ALEJANDRO CHELÉN R.
ECUADOR: AGUSTÍN CUEVA
PARAGUAY: OMAR DÍAZ DE ARCE
PERÚ: JULIO COTLER
URUGUAY: GERÓNIMO DE SIERRA
VENEZUELA: D. F. MAZA ZAVALA





MÉXICO
ESPAÑA
ARGENTINA
COLOMBIA